

Tiene 678 páginas. Empieza en 2003 y termina en septiembre de 2019.

## **REVISIÓN PROCESO: ZETAS**

### **2003**

Ricardo Ravelo, “Narco S. A.”, *Proceso*, número 1391, 29 de junio de 2003, pp. 28-30.

#### **“Narco S. A.”**

Contenido / Resumen.

Los tiempos de las organizaciones verticales o piramidales de narcotraficantes, como las que encabezaron Amado Carrillo o Juan García Ábrego, ya pasaron. Ahora, por sobrevivencia, los cárteles tienden a crear asociaciones criminales, fusiones, alianzas y convenios, tal y como lo hacen las firmas empresariales o los grandes corporativos, explica José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO).

Los narcos entendieron el riesgo de las estructuras verticales: cuando se corta la cabeza, como ocurrió con esas dos organizaciones, las células empiezan a actuar por su cuenta, pero en forma desorganizada, en parte por la falta de dinero, ya que los responsables del trasiego de droga no conocen al que lava el dinero ni éstos a aquéllos, lo que acelera su período de crisis.

Con base en la información de que dispone, Vasconcelos explica que los crímenes entre grupos del cártel de Juárez y del Golfo surgieron a raíz de que Osiel Cárdenas alcanzó mayor poder y pretendió invadir el estado de Coahuila, controlado por Vicente Carrillo.

Carrillo Fuentes, de acuerdo con Vasconcelos, ordenó a Arturo González Hernández, El Chaky, asesinar a Osiel Cárdenas: “Mediante escuchas telefónicas —cuenta— nos enteramos de que González Hernández andaba buscando a Cárdenas para matarlo. Para su localización, El Chaky había montado un centro de espionaje telefónico en Gómez Palacio, operado por Domingo Silva, enlazado con otro centro en la Ciudad de México y en Coahuila, por donde recibían información de la PGR y del Ejército, pues en ambas instituciones tenían espías”.

En abierta actividad se mantiene el brazo armado que cuidaba a Osiel Cárdenas, integrado por 31 desertores del Ejército identificados como Los Zetas; se trata de un grupo formado por tenientes y subtenientes que pertenecían al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFFE), que en 1999 colaboró con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) en varios operativos antidrogas.

Durante su paso por la FEADS, los militares desaparecieron y luego fueron descubiertos cuando ya formaban parte del grupo de protección de Cárdenas Guillén.

El cártel de Juárez y las células que operan en el Golfo tienen lazos con la organización más fuerte que actualmente existe en México: el cártel de Los Valencia o del Milenio. Asentados en Michoacán, los

primos hermanos Armando y Luis Valencia extendieron sus dominios hacia Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Baja California, donde trafican droga sin pagar derecho de piso.

La PGR tiene identificados a las cabezas de esa organización —Luis y Armando Valencia—, pero también investiga en Michoacán a una gran cantidad de familias que se apellidan Valencia, presuntamente ligadas al narcotráfico. Los Valencia también firmaron un pacto de no agresión con el cártel de Juárez. Según los informes de la PGR, el vínculo se tejió a través de Sandra Ávila Beltrán, ex amante de Espinoza Ramírez, El Tigre.

Según Vasconcelos, los hermanos Arellano Félix también establecieron alianzas con los Valencia. La razón: sobrevivir en el negocio de las drogas y sortear la crisis que los golpeó tras la muerte de Ramón y la detención de Benjamín. Otras bajas fueron Jesús Chuy Labra e Ivonne Soto Vega, La Pantera —cerebros financieros—; de Gino Brunetti —el abastecedor— Humberto Rodríguez Bañuelos, La Rana, e Ismael Higuera, el principal pasador de droga.

Cuenta Vasconcelos que después de la aprehensión de Osiel Cárdenas, la prioridad del gobierno es lograr detener a tres narcos de peso completo: Vicente Carrillo Fuentes, Juan José Esparragoza e Ismael Zambada García, cabezas del cártel de Juárez. Respecto de Carrillo Fuentes, dice que el FBI está interesado en capturarlo desde que en El Paso, Texas, se encontró una credencial firmada por Diego Valadés, procurador general de la República en 1994, que habilitaba a Carrillo Fuentes como agente federal.

Ricardo Ravelo, “Tamaulipas: Descomposición”, *Proceso*, número 1397, 10 de agosto de 2003, pp. 18-19.

### **“Tamaulipas: Descomposición”**

Contenido / Resumen.

A casi dos años de haber entrado en operación con nuevos integrantes, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), brazo operativo de la Procuraduría General de la República (PGR), ya muestra signos de descomposición: decenas de agentes están encarcelados o bajo investigación por servir a las organizaciones criminales.

“Ya no confiamos en los agentes de la AFI. Desde que llegaron a Nuevo Laredo, se incrementaron las desapariciones y los asesinatos”, dice Raymundo Ramos, consejero del Comité de Derechos Humanos Grupo 5 de Febrero, AC, y puntualiza: “Ahora sabemos que un agente de la AFI protegía a los narcotraficantes que participaron en el tiroteo, y puede estar implicado en más delitos”.

Genaro García Luna, quien como director de la AFI fue otro impulsor del proyecto policiaco, también está sometido a una investigación de la PGR: según las averiguaciones previas DGMPE/C/III-1/087/2001 y DGMPE/C/III-V/0136/2002, García Luna está acusado del delito de uso indebido de atribuciones y facultades (probable desvío de fondos para investigaciones), en el cual habría incurrido durante su paso por la Coordinación General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva.

Sin embargo, la nueva generación de policías federales empieza a contaminarse con los viejos vicios: decenas de agentes de la AFI están implicados en robos, secuestros, narcotráfico y protección de grupos criminales en toda la República.

En Tamaulipas, plaza que pretende ocupar el cártel de Juárez, se tejen historias criminales —traiciones, asesinatos, desapariciones y complicidades con narcotraficantes— protagonizadas por agentes de la AFI en contubernio con policías municipales y ministeriales...

En enero de este año, cuando se disponían a realizar una investigación para ubicar a Osiel Cárdenas, jefe del cártel del Golfo, y varias de sus propiedades, desaparecieron los agentes de la AFI Gustavo Garza Martínez, Juan Remi Ortega Arellano, Norma Elsa Castillo Piñales y Eduardo Díaz Reyes. Siete meses más tarde, la PGR no los encuentra, aunque sigue pistas que robustecen la hipótesis de que otros agentes de la misma corporación, pero ligados al cártel del Golfo, “les pusieron el dedo” para interceptarlos.

El más reciente golpe contra la AFI ocurrió el viernes 1 de agosto, cuando el coordinador de Agentes del Ministerio Público Federal de Nuevo Laredo, Juan Manuel Muñoz Morales, fue detenido por el Ejército luego de una balacera en pleno centro que duró 45 minutos y paralizó a toda la ciudad. Según la averiguación previa 244/2003-III y la reconstrucción de los hechos, a cargo de la PGR y de las autoridades locales, alrededor de las 2:00 de la madrugada se iniciaron los disparos y luego se repitieron en diversas avenidas del centro de Nuevo Laredo.

Se trataba de un comando vestido con uniformes negros que tenían las siglas de la AFI Perseguía a un grupo de policías municipales y, según la indagatoria, pretendía ajustar cuentas. Las investigaciones identifican al comando agresor como Los Negros, brazo armado de Joaquín El Chapo Guzmán, que era apoyado por otro grupo conocido como Los Chachos —operadores terrestres del cártel de Juárez. Pretendían eliminar a varios policías municipales.

Por lo menos dos comandantes, un supervisor y varios expolicías de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Nuevo Laredo —quienes presuntamente brindaban protección e información al cártel del Golfo— aparecen registrados en una “narconómina” encontrada por agentes federales al realizar un cateo en una casa de seguridad, la cual fue habilitada por el grupo de exmilitares conocido como Los Zetas.

En la lista se hallan registrados 101 nombres con pagos que van de los 300 a los mil 500 dólares semanales, así como las firmas de los “trabajadores”. De acuerdo con la nómina, el sueldo más alto —mil 500 dólares por semana— lo recibían José Castillo Pérez y José Carmona Pérez, relevantes jefes policiacos.

El supervisor de la Policía Municipal, José Luis Reyes Cisneros, tenía asignados mil dólares a la semana, al igual que Rogelio de la Cruz Álvarez; los comandantes de esa corporación Arnulfo Álvarez Ramos y José Bernardino de la Cruz recibían 600 dólares. La mayoría de los policías de tropa, que servían como informantes de sus jefes superiores, percibían 300 dólares a la semana. Con base en esa lista, la PGR solicitó al alcalde de Nuevo Laredo, José Manuel Suárez López, poner a disposición del Ministerio Público Federal a 198 policías municipales.

En el oficio 1464/2003-III, firmado por César Alejandro Dávila, se explica que existen sospechas de que los policías pueden estar relacionados con los delitos de cohecho, intervención de telecomunicaciones privadas y delincuencia organizada.

**2005**

Gabriela Hernández, “Los narcos infiltran Garza García”, *Proceso*, número 1470, 2 de enero de 2005, pp. 20-22.

### **“Los narcos infiltran Garza García”**

Contenido / Resumen.

Conocido como un municipio “modelo”, y calificado por la ONU como el segundo con mayor índice de desarrollo humano del país, el municipio de San Pedro Garza García —bastión y fuente de orgullo del panismo que lo gobierna— empieza a resentir los males de la opulencia.

De acuerdo con un informe presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con relación al estudio denominado Índice de Desarrollo Humano —el cual se efectuó en 2 mil 426 municipios del país—, después de la delegación Benito Juárez, San Pedro es el municipio con el mayor grado de desarrollo en México en términos de esperanza de vida de sus habitantes, educación e ingresos per cápita, y en este sentido su nivel es comparable al de países como Alemania y Nueva Zelanda.

Aunque los gobiernos anteriores habían sido renuentes a aceptar la invasión del narcotráfico, el propio alcalde panista de San Pedro, Alejandro Páez Aragón, reconoce en entrevista que los capos de la mafia han elegido esta zona privilegiada de Nuevo León como un “dormitorio” para sus familias. Recuerda también que el 16 de agosto de 2001, la familia Mendivil Gastélum fue detenida en posesión de 6 millones 785 mil 910 dólares en efectivo, así como de un lote de joyas valuado en 55 millones de pesos.

El hecho es que ahora, en exclusivos colegios de este municipio -como el Irlandés y el Americano-, es común que los niños acudan acompañados por “escoltas” que permanecen armados a las afueras de los planteles.

El periodista Gilberto Marcos, dirigente de la Federación de Colonias (Fedeco), que agrupa a representantes vecinales, comenta que ésta es otra de las ventajas de este municipio para los capos: “Si aquí ves a alguien con escoltas, puedes pensar que es el hijo de un empresario, y no necesariamente el de un narcotraficante”.

Para el exdiputado federal Arturo B de la Garza, en San Pedro se conjugan múltiples factores que lo hacen atractivo para los narcotraficantes, no sólo como lugar de residencia, sino como punto clave de mercado. “Nuevo León —explica— es un estado financiero, industrial, donde hay inversión, donde se mueven los capitales con mucha facilidad; y su cercanía con la frontera lo convierte en una ruta de fácil entrada y salida al país”.

Y una de las ventajas de los narcos en San Pedro es que pueden llegar y hacerse pasar por empresarios de lotes de carros, de casas de empeño o de compañías de constructoras, además de invertir su dinero en la adquisición de casas con alta plusvalía sin despertar sospechas.

“No podemos negar -prosigue De la Garza- que existe narcotráfico en San Pedro, luego de las balaceras y escándalos que se han suscitado”. El pasado 17 de marzo, Julio Santoscoy, narcotraficante buscado por la DEA e identificado como líder de Los Zetas —gatilleros del Cártel del Golfo— en Piedras Negras, fue detenido con otras seis personas al salir de un bar del Centrito Valle.

Aunque la policía municipal de San Pedro ha sido calificada como la más preparada y comprometida del país, las exclusivas y sobre vigiladas colonias han sido últimamente blanco de bandas de asaltantes de cajeros automáticos, de secuestradores exprés y de especialistas en cajas de seguridad.

Con un presupuesto de 728 millones de pesos, ejercidos en 2004 para tan sólo 126 mil habitantes, San Pedro destinó más de 86 millones al área de seguridad pública y vialidad, pero hasta octubre el índice de robos en casas-habitación se había incrementado en más de 60%.

El crecimiento de la delincuencia común y la falta de actualización de la policía sampetrina complican el problema, pero el fondo de éste se localiza en los contrastes sociales del área metropolitana de Monterrey, donde zonas de alta marginación tienen frente a sí las áreas opulentas de San Pedro.

Jenaro Villamil, “Asesinados por informar”, *Proceso*, número 1470, 2 de enero de 2005, pp. 23-25.

### **“Asesinados por informar”**

Contenido / Resumen.

En 2004, México fue el país de América Latina donde más periodistas fueron asesinados. Los crímenes involucran el poder del narcotráfico o de las autoridades corruptas, ya que coincidentemente las víctimas o las publicaciones en que trabajaban solían exhibir sus acciones. Otro sello común es el cúmulo de irregularidades con que se ensucia o se demoran las investigaciones.

Las rutas del narcopoder corren paralelas a los caminos del periodismo. Los asesinatos de Roberto Mora García, director editorial de *El Mañana de Nuevo Laredo*; Francisco Javier Ortiz Franco, editor del semanario tijuanaense *Zeta*; Francisco Arratia Saldierna, columnista de varios periódicos de Tamaulipas; y Gregorio Rodríguez Hernández, fotógrafo de *El Debate* de Sinaloa, tienen en común la mezcla de corrupción y crimen organizado en el entorno político, la falta de credibilidad en las investigaciones y la creación de chivos expiatorios o la pretensión de reducir los homicidios a “crímenes pasionales”.

Según la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex), han sido 11 los informadores asesinados desde febrero de 2000 hasta el 30 de noviembre de 2004.

A partir del asesinato de Roberto Mora se formó la comisión En Memoria, integrada por las organizaciones Libertad de Información México (Limac), Pen Club, Reporteros sin Fronteras, Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, y el Centro de Periodismo y Ética Pública.

Dos de los casos más espinosos son los de Roberto Mora García, director editorial de *El Mañana* y Francisco Arratia, colaborador de varios medios de comunicación, en especial de la página WEB EnLíneaDirectainfo, en la cual publicó que los movimientos al frente de la policía estatal beneficiaban al narcotráfico.

Trabajadores del periódico han sido presionados y las autoridades insisten en que la muerte de Mora se debe a un “crimen entre homosexuales”, para evadir las otras líneas de investigación. Se distribuyeron supuestas cartas íntimas del director de *El Mañana* para apoyar sus versiones de que no se trató de un “atentado contra la libertad de expresión”.

Cinco meses después de la muerte de Roberto Mora, se encontró el cuerpo de Francisco Arratia Saldierna, quien colaboraba con su columna Portavoz para los periódicos *El Regional*, *PM*, *La Extra*, *El Fronterizo*, *El Mercurio*, *El Cinco* y para la página WEB EnLíneaDirectainfo. Un mes antes de su asesinato, publicó columnas en las que informaba sobre el llamado cártel del Milenio y sus sicarios, Los Chachos, vinculados a Joaquín El Chapo Guzmán. Días antes del crimen acusó al excomandante Adolfo Velazco Ramírez de haber “lanzado el gato a retozar” en un negocio de “alto contenido en dólares” con un agente del Ministerio Público, Arratia anunció que daría a conocer más detalles en una segunda colaboración, que no alcanzó a publicar.

En su edición posterior al asesinato, Zeta publicó en portada a sus tres principales sospechosos: “Tres miembros del grupo Los Zetas”, “un equipo de Barrio Logan” y “Jorge Hank Rhon”.

Según información de la Procuraduría General de la República (PGR) entregada a la comisión En Memoria, entre los principales responsables del crimen se encuentran tres integrantes del cártel de Tijuana (Jorge Alberto Briceño El Cholo, Eduardo Ronquillo El Niño y Artemio Villarreal Albarrán El Nalgón), así como los exagentes ministeriales Hernando Villegas Delgado y José Luis Molina.

De acuerdo con investigaciones de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR, el móvil del crimen habría sido la publicación de las fotografías de alrededor de 40 integrantes del cártel de los Arellano Félix.

Gabriela Hernández y Alejandro Gutiérrez, “La invasión de los sicarios”, *Proceso*, número 1474, 30 de enero de 2005, pp. 20-21.

### **“La invasión de los sicarios”**

Contenido / Resumen.

La madrugada del 15 de enero, en cuestión de minutos, el ejido Las Enramadas fue invadido por más de 30 pistoleros del cártel del Golfo, encapuchados y vestidos de negro, que amagaron a la gente con fusiles de asalto AK-47 y se llevaron a 23 vecinos, a quienes acusaron de haberles robado un cargamento de cocaína. Fueron horas de terror: gritos, súplicas y llanto. A golpes e insultos sacaron a todos de sus casas. Los que alcanzaron a esconderse tuvieron que salir cuando los hampones tomaron como rehenes a sus hijos.

Cuando los sicarios aterrorizaron el lugar preguntaban por Hilario Herrera, excomandante de la Policía Ministerial del Estado que estuvo preso por matar a uno de sus compañeros de corporación. También buscaban a Nereyda Herrera Herrera y a su hermano Jacinto, un jefe de grupo en la propia Ministerial que actualmente está comisionado en el municipio de Jaumave.

De acuerdo con fuentes policiacas, los sicarios serían parte del grupo armado del mencionado cártel conocido como Los Zetas y buscaban un cargamento de cocaína que sus “contactos” arrojaron al mar unos días antes de su irrupción en la costa de la Laguna Madre.

Buscaban identificar a quienes se habían apropiado del cargamento para castigarlos y escarmentar así al resto de los pobladores.

Tras amenazar a la gente con volver si los denunciaba, los sicarios se llevaron a Nereyda y a 22 hombres. Los “levantados” fueron golpeados con tablas mojadas.

La mañana del lunes 17 de enero se localizaron los cadáveres del exalcalde de Soto La Marina, Teodoro Herrera Sosa y de sus hijos Teodoro y Jaime Herrera Ramírez. Los tres presentaban varios tiros en la cabeza. Los pistoleros llevaron los cuerpos desde el poblado de San Fernando hasta el kilómetro 64 de la nueva carretera Victoria-Soto la Marina.

Lugareños revelaron que los comandantes en San Fernando suelen convivir con los sicarios, lo que hace pensar que los protegen. El hecho de que los sicarios llegaran preguntando por Jacinto Herrera y que él continúe en la Policía Ministerial profundiza las sospechas.

Según algunos sobrevivientes del 15 de enero, el comando de sicarios pudo llevar a los pescadores por carretera durante más de 125 kilómetros sin ser detectado por ninguna corporación policiaca, hasta unas bodegas ubicadas en San Fernando, cuyos pobladores denunciaron ante los medios de comunicación que una célula de Los Zetas está asentada ahí desde hace tres años.

Según fuentes consultadas en la Procuraduría de Justicia del estado y en la PGR, los sicarios del cártel del Golfo estarían vigilando la llegada de cargamentos de droga por mar y aire a la costa tamaulipeca, de donde la transportan por tierra a Estados Unidos. Se considera que la misma ruta siguen los traficantes de autos robados en ese país y que luego se venden en México y Centroamérica, también habitantes de Soto la Marina revelaron que ya se instaló ahí otro grupo de pistoleros del mismo cártel, que además de exigirles “cuota” a los negocios establecidos e incluso a los pescadores, han secuestrado a rancheros de la región.

Alejandro Gutiérrez, “El SOS que Fox no escuchó...”, *Proceso*, número 1474, 30 de enero de 2005, pp. 18-23.

### **“El SOS que Fox no escuchó...”**

Contenido / Resumen.

La afirmación de que los narcotraficantes controlan varias ciudades fronterizas y mantienen aterrorizados a sus pobladores, no es una exageración. Es una realidad y, además, cotidiana, palpable. En la ciudad de Matamoros, ante los frecuentes “levantamientos”, ejecuciones y amenazas perpetrados por

sicarios de los cárteles de la droga, autoridades y líderes políticos habían solicitado auxilio, desde hacía tiempo, al gobierno de Vicente Fox, pero el presidente no escuchó.

Matamoros, Tamps- El 16 de diciembre pasado, un comando de exterminio “levantó” a varias personas que un mes antes —el 14 de noviembre, día de la elección estatal— habían participado como oradoras en una manifestación de protesta en el municipio de Río Bravo debido a las evidencias, señalaron, del fraude electoral que se maquinó para beneficiar al priista y actual alcalde, Juan de Dios Cavazos Cárdenas.

Las víctimas eran miembros de la coalición “Unidos por Tamaulipas”, formada por el PT y el PRD, y en dicho mitin acusaron al gobernador, entonces Tomás Yarrington, de financiar las campañas priistas con dinero proveniente del narcotráfico. Entre los desaparecidos en ese poblado, estaba Trinidad Villela García, candidato a regidor suplente, a quien los sicarios le rompieron la nariz y las costillas al golpearlo con tablas de madera. Le advirtieron a él y a otra víctima que “levantarían” en total a 15 participantes en dicho mitin, amenazaron de muerte a ambos y les advirtieron: “Eso te pasa por hablar mal del jefe”. Los torturadores nunca precisaron a quién se referían con su jefe. En el mitin, los manifestantes habían aludido directamente a Yarrington.

Otro hecho, ocurrido en la Ciudad de México coincidentemente el 16 diciembre, cuando eran agredidos los pobladores de Río Bravo, un grupo de 30 personas provenientes de varias ciudades de Tamaulipas se presentaron en las oficinas de la PGR. Pidieron audiencia con el titular, Rafael Macedo de la Concha, a quien pedían su intervención, ya que son víctimas de la misma organización de Osiel Cárdenas Guillén y del grupo armado Los Zetas. Una comisión de siete personas logró entrevistarse con un funcionario de la PGR, a quien le entregaron un tabulador de la “cuota” que Los Zetas cobran para quienes realizan actividades lícitas, entre ellos empresarios y vendedores de autos seminuevos, contrabandistas, traficantes de indocumentados, delincuentes y hasta vendedores ambulantes. Se trata de una práctica que han impuesto los narcos en Tamaulipas y que ha provocado el éxodo de algunos empresarios.

La gestión del priista Eugenio Hernández como gobernador de Tamaulipas —1 de enero— coincide con el recrudecimiento de la violencia del narco en la entidad, principalmente a partir de la guerra Osiel Cárdenas y Joaquín El Chapo Guzmán.

La razón de esta violencia explica un funcionario de los servicios de inteligencia antidrogas, se puede explicar a partir de varios hechos: La lucha Osiel-Chapo; el conflicto en el interior del penal La Palma y la acción de gobierno para frenar el control que estaba teniendo Osiel ahí; y un tercer ingrediente son “las designaciones en el gabinete de Eugenio Hernández, que molestaron al grupo de Osiel Cárdenas”.

El inicio del gobierno de Hernández está marcado por la ejecución de 26 personas, la desaparición de 9 más y el “levantamiento” de otras 100. La lista de los ejecutados incluye a expresidentes municipales, Teodoro Herrera Sosa, exalcalde de Soto la Marina, cuyo cuerpo fue encontrado esposado y con el tiro de gracia, al igual que sus hijos. También, la lista incluye a policías, como René Izaguirre, quien fungiría como subdirector operativo de Seguridad Pública de Reynosa. Un funcionario de inteligencia explica al reportero que la ejecución de Izaguirre se debió a que acordó con la organización de El Chapo Guzmán para que, a cambio de cifras millonarias en dólares, permitiera “la entrada” a la facción que encabeza el primo Arturo Beltrán, alias El Barba, desde Monterrey, Nuevo León.

En otro caso, ocurrido el 7 de enero, un comando armado irrumpió en el hotel Ritz, que se ubica a dos calles de la presidencia municipal de Matamoros, y “levantó” a 60 huéspedes.

Fue hasta el 23 de enero último cuando el gobierno de Vicente Fox reaccionó, luego de que el jueves 20 se hizo el hallazgo de seis trabajadores del Centro Federal de Máxima Seguridad de Matamoros que fueron torturados y ejecutados, y cuyos cuerpos fueron abandonados en una camioneta en las inmediaciones del penal. Este homicidio múltiple, de acuerdo con un funcionario de PGR, fue ordenado por Gregorio El Caramuela Saucedo, miembro de la cúpula dirigente de la organización Cárdenas Guillén en la zona de Reynosa.

A pesar de que las evidencias involucran al grupo de Osiel Cárdenas, el martes 25 se conoció la versión de que la múltiple ejecución era atribuible a El Chapo Guzmán. Un oficial federal consultado expresamente aclaró que esta especie fue promovida por gente de Cárdenas que “no ha salido del estado”. También que, como en este caso, el brazo armado de la organización del cártel del Golfo “genera influencia en los medios de comunicación, a base de infundir terror. Cuando no les gusta lo que se publica, Los Zetas levantan a los directivos de periódicos y a los mismos reporteros; incluso, algunos periodistas fungen como orejas de ellos”.

El oficial de inteligencia consultado en la Ciudad de México sostiene que la organización de Cárdenas Guillén cuenta con alrededor de 2 mil miembros sólo en la franja fronteriza de Matamoros a Reynosa, sin contar Nuevo Laredo.

La organización, dice el mismo oficial federal, está compuesta por la cúpula, que incluye a Los Zetas. Adicionalmente, señala, cuenta con varios cientos de ayudantes, a los que llaman Los Zetillas, a los cuales les proporciona armas y les ordena algunos de los trabajos violentos; y hay cientos de jóvenes que fungen como “guardias”, quienes monitorean los movimientos en la zona militar, PGR, estaciones de policía, alcaldías, centrales camioneras, aeropuertos y en las carreteras de acceso a las principales ciudades.

Alejandro Gutiérrez, “El ‘protegido’ de la PGR”, *Proceso*, número 1476, 13 de febrero de 2005, pp. 12-14.

### **“El ‘protegido’ de la PGR”**

Contenido / Resumen.

Para José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es “evidente” que la Procuraduría General de la República brinda protección al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien encabeza ahora un “megacártel” formado a partir de alianzas con otras organizaciones criminales. Según Ortega y exagentes de inteligencia, esa protección le ha permitido a El Chapo eludir varios operativos policiacos desplegados para detenerlo.

Las redes de protección de El Chapo, explica un exfuncionario de inteligencia antidrogas consultado, “están tan a buen nivel del gobierno mexicano, principalmente en las áreas militares, de la PGR y con redes en los estados, que le permite evadirse del penal, tener la capacidad para agrupar diversas organizaciones, pese a mantener tantos frentes abiertos, y no ser capturado”.

Desde el seno de la residencia oficial de Los Pinos, el jefe de Giras Presidenciales, Nahum Acosta Lugo, les proporcionaba información a los hermanos Beltrán Leyva. En un cateo a una residencia de Arturo Beltrán, se encontró documentación en la que aparecía el nombre de Acosta Lugo. Y la DEA advirtió a la PGR que el funcionario federal habría recibido una llamada de Héctor Beltrán Leyva, operador en Sonora. Hoy el funcionario está arraigado. Además, la SIEDO e inteligencia militar buscan al comandante Domingo González Díaz, jefe de la AFI, al descubrirse que recibió 1 millón y medio de dólares para proteger a esa organización. El funcionario prófugo capturó y después liberó a Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, su lugarteniente en Nuevo Laredo y quien encabeza la ofensiva contra Los Zetas, el brazo armado de Osiel Cárdenas. El funcionario dependía de Francisco J García Palacios, director de Operaciones Especiales de la AFI y del titular Genaro García Luna.

Una amplia declaración enviada al procurador general de la República, con fecha 3 de octubre de 2001, del excomandante de la PJF, Fulvio Jiménez Turegano —certificada ante el notario Benjamín Cervantes Cardiel— da detalles sobre la protección que El Chapo recibía en los noventa. Copia de dicha declaración, en poder de este semanario, señala como protectores del capo al entonces director de la PJF, Rodolfo León Aragón; al coordinador general de Narcóticos de la PGR, general Jorge Carrillo Olea; al director operativo de la PJF, Jorge Núñez Mora, así como a ministerios públicos y comandantes.

Ortega Sánchez, relata que “las pesquisas arrojaron que el avión militar en el que iba El Chapo, al que se refiere Jiménez Turegano, se desvió a Chiapas, donde el capo fue resguardado en un rancho y después pasa a Guatemala.

“En Guatemala —agrega— lo captura el ejército, le quitan 1 millón y medio de dólares, lo golpean y lo entregó -sin proceso de deportación o extradición- al Ejército Mexicano, al entonces coronel Jorge Carrillo Olea, quien lo lleva en un avión militar de Chiapas a Toluca y ahí es ingresado al penal de máxima seguridad de La Palma”.

—¿Quién iba en ese avión militar, de Chiapas a Toluca? —se le pregunta

—Iban, entre otros, Carrillo Olea y Alejandro Alegre, funcionario del Cisen (a la postre director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional). Ahí El Chapo hace una declaración y, de acuerdo con quienes iban en ese avión, describe la red de altos funcionarios que le protegían. Evidentemente que la declaración que se levantó contiene muy poco de lo que dijo en el avión y, curiosamente, cuando fueron interrogados los pasajeros, nadie se acordó de lo que el capo había dicho.

Ortega Sánchez recuerda que, tiempo después, el general Jesús Gutiérrez Rebollo le advirtió que “cuando descubra la identidad del alto funcionario de la PGR con el que se iba a reunir El Chapo Guzmán en Puerto Vallarta, el día del homicidio del cardenal Posadas Ocampo, vas a entender quién orquestó ese homicidio. Aunque Gutiérrez Rebollo no me dio nombres, me dio pistas: general, exgobernador y encargado de aparatos de inteligencia en México”.

Guzmán fue enviado al penal de Puente Grande, del que escapó el 19 de enero de 2001. Al menos dos miembros de la comunidad de inteligencia mexicana aseguran que el capo huyó de la zona del penal que administra la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en “una aeronave oficial”, dicen. Y añaden: “Después festejó su salida con El Mayo, El Azul y Vicente Carrillo”.

Ortega Sánchez recuerda que el narco duranguense Pablo Tostado Félix, exlugarteniente de El Azul Esparragoza, aseguró en una declaración ministerial que “El Chapo encabezaba un megacártel”, aseguró que el “megacártel” lo integran Guzmán Loera, Julio Beltrán Quintero, Juan José Esparragoza, Ignacio Coronel Villarreal (Nacho Coronel), Manuel Beltrán Arredondo y Adolfo Beltrán Quintero (este último ya ejecutado).

Diversos testimonios obtenidos por este semanario en relación con la supuesta ubicación de El Chapo indican que lo mismo visita Guadalupe y Calvo, Chihuahua, que Badiraguato, Sinaloa, ambos municipios ubicados en el “triángulo dorado del narcotráfico”, o que se le ha visto en el aeropuerto de Ciudad Victoria. También se le ha ubicado en Tuxtla Gutiérrez, y ha sido visto reunido con El Azul Esparragoza en un tradicional hotel de Paseo de la Reforma, en la capital del país.

J. Jesús Esquivel, “Redes del narco mexicano en EU”, *Proceso*, número 1476, 13 de febrero de 2005, pp. 14-15.

### **“Redes del narco mexicano en EU”**

Contenido / Resumen.

El gobierno de Estados Unidos admite que “el mercado de narcóticos al menudeo” dentro de su territorio es uno de los principales obstáculos para acabar con el tráfico, la producción y el consumo de enervantes.

“Los narcotraficantes mexicanos se han asociado con los pandilleros de Estados Unidos, y eso se ha traducido en enormes ganancias y en más efectividad para seguir vendiendo y metiendo la droga”, subraya el portavoz del Departamento de Justicia.

“La situación ha empeorado: pandillas criminales como la Barrio Azteca, que antes estaba asociada solamente con el cártel de Juárez de Vicente Carrillo Fuentes, ahora se ha metido con narcotraficantes independientes y asesinos a sueldo; nada más y nada menos que con Los Zetas”, sostiene en entrevista telefónica Javier Sambrano, director de la División de Pandillas y vocero del Departamento de Policía de El Paso.

Un análisis de la PGR -cuya copia posee Proceso- detalla cómo las pandillas estadounidenses son ahora el brazo fuerte del narco mexicano en el mercado de la droga, y operan no sólo en las calles, sino también dentro de las prisiones.

En el punto “B” de este análisis, la PGR pone como ejemplo de operación de los cárteles el caso de los 12 cuerpos enterrados en una casa de Ciudad Juárez, a raíz de lo cual 13 policías mexicanos fueron arrestados.

La PGR señala que el caso “desde sus inicios fue conocido por agentes federales de Estados Unidos, e incluso auspiciaron y pagaron a un informante (Humberto Santillán Tabares, exmiembro de la Policía Federal de Caminos de México) que, todos lo saben y a eso se dirige el juicio federal en su contra, asusta y aterrera a las agencias estadounidenses, ya que participó en la confabulación para las muertes y todo indica que fue autor material de cuando menos dos” de ellas.

Según el informe, las organizaciones mexicanas más estrechamente relacionadas con las pandillas estadounidenses, a las cuales usan como distribuidoras, son la de los hermanos Arellano Félix, la de Vicente Carrillo Fuentes y la de Osiel Cárdenas Guillén. Sin embargo, se observa, la organización de Ismael El Mayo Zambada García debe ser considerada como una de las más poderosas de México y tiene, así mismo, fuertes lazos con los pandilleros.

Originalmente surgidas de la asociación de delincuentes dentro de las cárceles de Estados Unidos, las pandillas pasaron de ser grupos étnicos de protección mutua a complejas organizaciones delictivas. “Los cárteles del narcotráfico mexicano usan a las pandillas de la calle y de las prisiones para el contrabando y transporte de drogas y de (inmigrantes) indocumentados”, concluye la PGR.

Sobre el caso de los 27 ciudadanos estadounidenses desaparecidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el análisis de la PGR establece que “muchos de ellos deben ser parte del sistema de ajuste de cuentas entre las pandillas, y en otros casos puede ser que estén en otros lugares de México y el mundo. Esa fue la experiencia que tuvimos cuando se buscó a un gran número de las desaparecidas en Ciudad Juárez. Muchas se fueron simplemente de ahí y, pese a que se decía que estaban muertas, sencillamente se fueron de ahí cuando se acabó el trabajo, se embarazaron o se regresaron a sus lugares de origen”.

Francisco Castellanos, Alejandro Gutiérrez, Gabriela Hernández y Arturo Salinas, “¿La justicia somos nosotros!”, *Proceso*, número 1491, 29 de mayo de 2005, pp. 30-34.

### “¿La justicia somos nosotros!”

Contenido / Resumen.

En materia de narcotráfico, México vive un escenario inédito: un comando paramilitar levanta y asesina operadores financieros de los Arellano Félix en Tijuana; en su nerviosismo, policías federales preventivos en Reynosa abren fuego y asesinan a universitarios a quienes confundieron con narcos del cártel del Golfo; comandos armados limpian de rivales Michoacán; en un restaurante del sector más exclusivo de Monterrey, las cámaras de seguridad registran el arribo de dos sicarios que ultiman a dos operadores que robaron una carga de droga. No se trata de la colombianización del país, sino de la mexicanización de la violencia.

“Es un error ver el fenómeno de la violencia actual sólo como la falta de capacidad del Estado para regular y mediar el narcotráfico; es una relación de dos polos, el otro es la carente capacidad de las grandes organizaciones del tráfico de droga para mediar y llegar a acuerdos entre sí, porque existe una lucha entre ellos por la hegemonía en el mercado”, dice en entrevista con *Proceso* el académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Luis Astorga.

Para Astorga, el principal problema es que en México no hay quien pueda mediar en la actualidad, “lo cual quiere decir que no hay un grupo reconocido capaz de imponer una cierta paz intermafiosa. No obstante, creo que existe un límite para el uso de la violencia extrema de estos grupos, pero no se percibe dónde esté hoy ese límite”. Además, tampoco existe una entidad del gobierno que esté mediando con el crimen organizado, como ha sucedido en el pasado, o si alguien lo ha hecho ha fracasado. Incluso,

dice, instancias como las Fuerzas Armadas han dado muestra de molestia por el papel que tienen que jugar en áreas donde los civiles han sido ineficientes.

El 18 de abril, Gustavo Inzunza Inzunza, El Macho Prieto, lugarteniente de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, al frente de un grupo de jóvenes pistoleros, bajó de uno de sus vehículos con una bazuca, chaleco antibalas e infinidad de cargadores, para retar a un grupo de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) que los habían cercado en las inmediaciones de la colonia Los Pinos de la capital sinaloense. “¡Aquí el gobierno y la justicia somos nosotros!”, les gritó Inzunza a los policías, quienes le abrieron paso para que siguiera su camino.

El lunes 16 de mayo, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) Saúl Rubio Ayala y su secretario particular, Omar Alberto Ruelas García, fueron acibillados por tres hombres que portaban armas de grueso calibre, quienes los siguieron unos 200 metros, mientras una camioneta les cerraba el paso, cerca de la comunidad El Terihuete, en el municipio de Guasave.

A Saúl Rubio, popular líder social de la zona serrana, “lo mataron como matan los narcos. De carro a carro, alcance, AK-47, AR-15, decenas de disparos”, publicó el semanario Río Doce de Sinaloa.

El pasado 8 de febrero, los hermanos Delfino y Omar Pérez Benítez, el soldado estadounidense Alejandro Muñoz Pérez y su primo, el también texano Omar Chávez Díaz, fueron reportados como desaparecidos luego de salir de la comunidad de El Sáuz, con rumbo a Tacámbaro. Diez días después fueron encontrados los cuerpos de los cuatro, con signos de tortura, heridas provocadas por armas de alto poder y con el tiro de gracia en la nuca. La PGR atrajo las investigaciones debido a la posible participación de Los Zetas, el grupo armado del cártel del Golfo.

El 9 de enero, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal localizaron, semioculto en un paraje, una camioneta con vidrios polarizados, donde había cuatro hombres asesinados con el tiro de gracia en la nuca.

En los tres años de gobierno de Lázaro Cárdenas Batel se han perpetrado unas 175 ejecuciones, 75 en lo que va de 2005, según la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE); pero organismos de derechos humanos contabilizan 86 ejecuciones.

El semanario Zeta señaló en su edición 1617 que había arribado el denominado Comando Negro, integrado por policías del Estado de México o el Distrito Federal, cuya orden es “matar delincuentes”, llamado “por el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Santillana, con autorización del alcalde Jorge Hank Rohn”.

A este grupo se atribuye el secuestro y posterior ejecución de Iván Escobosa quien fue encontrado asesinado con una bolsa en la cabeza y huellas de haber sido torturado y amarrado. El corresponsal de Proceso, Arturo Salinas, obtuvo testimonios de miembros de las corporaciones que adjudican al Comando Negro estas acciones contra miembros del narcotráfico.

En Tamaulipas, en lo que va del año se han registrado 135 homicidios, de los cuales más de 60 estuvieron relacionados con el crimen organizado.

Nuevo Laredo es la ciudad con mayor índice de violencia, pues se han registrado 57 ejecuciones, cinco de policías, y más de 60 desaparecidos en lo que va de 2005.

En Monterrey, Nuevo León, la violencia también alcanzó una de las zonas más exclusivas, San Pedro Garza García, un municipio considerado modelo en el país.

Incluso en el Distrito Federal se han registrado varios asesinatos, incluido el del colombiano Omar Gallegos Castaño, quien fue torturado y murió por estrangulamiento.

Gloria Leticia Díaz, “Osiel contra ‘El Chapo’, a muerte”, *Proceso*, número 1502, 14 de agosto de 2005, pp. 16-18.

### **“Osiel contra ‘El Chapo’, a muerte”**

Contenido / Resumen.

El asesinato del subdirector operativo de la Policía Ministerial de Guerrero, Julio Carlos López Soto, y el posterior mensaje enviado presuntamente por Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén a la gente de Joaquín El Chapo Guzmán que opera en este puerto, alertaron sobre el enfrentamiento que desde hace por lo menos año y medio libran los cárteles del Golfo y de Sinaloa en territorio guerrerense.

Los pistoleros de una y otra organización criminal, Los Pelones y Los Zetas, respectivamente, son los protagonistas de esta guerra, que ha dejado por lo menos 40 muertos en lo que va del año en los sitios turísticos más importantes de la entidad, Acapulco y Zihuatanejo, además del reporte de unos 27 tamaulipecos “levantados”, por sicarios del narco.

Los antecedentes acerca de los grupos de sicarios que pelean la plaza de Acapulco se remontan a 2001, cuando capos locales fueron desplazados a raíz de la muerte de Abel Arizmendi, cabeza del cártel del 30, quien fue torturado y ejecutado junto con su hijo del mismo nombre. Fue entonces cuando llegaron a Guerrero células del cártel de Juárez, primero, y después del de Sinaloa en calidad de aliadas.

En junio de 2003, la revista local *Controversia* dio a conocer la presencia de Los Pelones, grupo de gatilleros formado por exmilitares al servicio de los Beltrán y que se encargaban de controlar la plaza mediante la eliminación de narcos locales.

Un año después empezaron ocurrir hechos violentos, que las autoridades locales dieron como sucesos aislados pero que salían de los parámetros de la violencia común en Guerrero, estado donde se registran dos asesinatos diarios, en promedio. Los casos más relevantes por la saña utilizada están los asesinatos de los colombianos Gustavo Adolfo Escobar Escobar y Diego Radilla Hoyos, cuyos cadáveres presentaban huellas de tortura, así como el hallazgo de cuatro hombres originarios de Tamaulipas, quienes fueron enterrados vivos y sus cuerpos encontrados en Coyuca de Benítez.

La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió la averiguación previa TAB/3/TUR/1/AM/98/2005, mediante la que se investigan 27 “levantones” de tamaulipecos en Acapulco.

La presencia de Los Zetas se detectó en Acapulco en noviembre de 2004, cuando por accidente policías preventivos municipales encontraron en la cajuela de un taxi colectivo un arsenal: “cuernos de chivo”, fusiles AR-15, pistolas MP-5K, calibre 9 milímetros y otra más de 40 milímetros, granadas de fragmentación y más de mil cartuchos útiles de diferentes calibres.

Meses después, granadas del mismo lote de las que fueron encontradas a Takej Tiul —L/2/82, de fabricación estadounidense— estallaron en destacamentos policiacos en Acapulco y Zihuatanejo el 5 de febrero, los días 18 y 19 de junio, así como en una serie de atentados contra policías municipales.

Ricardo Ravelo, “El narco manda”, *Proceso*, número 1519, 11 de diciembre de 2005, pp. 8-12.

### “El narco manda”

Contenido / Resumen.

Las indagatorias de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en torno de los zetas secuestrados y torturados —y a cuyo expediente accedió Proceso— abundan en hallazgos que, más bien, parecen confirmaciones: La primera, que la estructura de la Procuraduría General de la República está al servicio de los cárteles de la droga. La segunda: que quienes incurrieron en esos hechos son, en efecto, integrantes de la Agencia Federal de Investigación.

El secuestro y tortura de cuatro miembros del grupo armado Los Zetas —uno de ellos ejecutado—, perpetrado presuntamente por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), puso al descubierto el entramado de protección que desde la Procuraduría General de la República (PGR) se brinda al narcotraficante Arturo Beltrán Leyva y, en particular, el supuesto apoyo que el capo recibe del director de la AFI, Genaro García Luna.

De acuerdo con el expediente sobre el secuestro de Los Zetas —averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, cuya copia obra en poder de Proceso—, al menos cinco delegaciones de la PGR estarían implicadas en la protección al cártel de Sinaloa, en especial a la célula que comandan los hermanos Beltrán Leyva.

El gatillero principal de la banda, Édgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, se encarga de reclutar a agentes federales en varias delegaciones de la PGR para que protejan sus rutas de trasiego de drogas, a cambio de fuertes cantidades de dólares.

Luego de que el periódico estadounidense *The Dallas Morning News* difundiera el video en el que se observa la ejecución de Juan Manuel Vizcarra Cruz —se presume que también fueron asesinados los otros tres zetas secuestrados en mayo en Acapulco—, el titular de la SIEDO declaró que los responsables del plagio habían sido agentes de la AFI adscritos al puerto. Sin embargo, un día después, el procurador Daniel Cabeza de Vaca desmintió la versión y negó, ante José Luis Santiago y Genaro García, que los agentes federales hubieran estado implicados en la captura y entrega de los zetas al grupo encabezado por los Beltrán Leyva.

Con base en las investigaciones del caso —iniciadas gracias a la denuncia que presentó Norma Elizabeth Olguín Servín, concubina de Juan Manuel Vizcarra—, se supo que el comando que secuestró a Vizcarra estaba integrado por personas vestidas de negro, en cuyo uniforme eran visibles las siglas de la AFI.

En la foja 100 de la averiguación previa se identifica a los agentes presuntamente implicados en el plagio de los zetas que aparecen en el video. De acuerdo con el subprocurador Santiago Vasconcelos, esos elementos protegen las operaciones del cártel de Sinaloa en el estado de Guerrero.

Los supuestos responsables son el subcomandante Salvador García Ortiz, el jefe regional José Carreto Ortega y los agentes Martín González Fernández, Jorge Edmundo Guillermo Vázquez, Alejandro Hernández Ciriaco, Rafael Hernández Juárez, José Rodolfo Hernández Montes, José Vidal Avendaño Barrón, Marcos César Canseco García, Hugo Antonio Cedano Filipini, José Colín Maya y Víctor Rodolfo García Medel.

Miguel Vizcarra Cruz quien había desertado del Ejército Mexicano, fue secuestrado cuando caminaban, varias camionetas con vidrios polarizados alcanzaron a él y su pareja. De los vehículos descendieron varios hombres armados que llevaban las siglas de la AFI en el antebrazo.

En lugar de llevarlos a la delegación de la PGR, los comandos condujeron a los detenidos a una casa de seguridad de dos plantas Vizcarra fue encerrado en una recámara del piso superior.

Lo empezaron a torturar Le golpearon el estómago con un tubo y lo cachetearon, al tiempo que otro presunto agente le hablaba por radio a Édgar Valdez Villarreal, conocido como La Barbie, El Tigrillo o El Güero y representante de Beltrán Leyva en Acapulco, para informarle que ya tenían a las personas en el lugar convenido. Vizcarra fue uno de los cinco zetas que, según las cartas anónimas enviadas por el cártel del Golfo a la PGR, fueron secuestrados por los agentes federales en Acapulco.

La noche del 15 de mayo fue agónica para Vizcarra, pues fue torturado de nuevo antes de ser trasladado a otra casa donde se encontraban los demás zetas secuestrados. En el video, por lo menos una de las voces que se escuchan es la de Valdez Villarreal, el subalterno de los Beltrán Leyva.

Según las investigaciones de la SIEDO, en el secuestro de los zetas participaron 23 personas: 11 agentes de la AFI y 12 civiles. Y a siete meses de ocurridos los hechos, aún faltan por cumplirse 10 órdenes de aprehensión, tres de ellas contra agentes de la AFI. En el expediente de la SIEDO se establece que en los secuestros y desapariciones no sólo estarían involucradas policías de Guerrero, sino de otras entidades, como Sinaloa, Chiapas, Baja California y Tamaulipas.

Este texto, junto con un correo electrónico enviado de manera anónima el 28 de abril de este año, sirvió de base para ahondar en las indagatorias

El email dice:

Que el delegado y el subdelegado de la Institución, junto con elementos de la Agencia Federal de Investigaciones brindan protección a los Beltrán, quienes son narcotraficantes, a cambio de dinero.

Entre los servidores públicos están los licenciados Albelardo Camacho Reyes, Jorge Frías Vázquez, el comandante de la Agencia Federal de Investigación, José Luis Sánchez Báez, quien manda gente a servir a Héctor y Arturo Beltrán como guardaespaldas.

Tras varios meses de procesos legales, la mayoría de los agentes implicados en el secuestro de los zetas están libres. Según la SIEDO, aún faltan por ejecutarse 10 órdenes de aprehensión, tres de ellas contra igual número de agentes federales. En el Reclusorio Oriente sólo permanecen presos tres agentes de la

AFI: Uriel Martínez Madero, José Rodolfo Hernández y Daniel Zúñiga. Ocho de los 11 agentes de la AFI obtuvieron su libertad el 5 de septiembre por falta de pruebas, pues lograron demostrar que el día de los secuestros —15 de mayo— no estaban en Acapulco.

Redacción, “Misterios del narcovideo”, *Proceso*, número 1519, 11 de diciembre de 2005, pp. 10-11.

### **“Misterios del narcovideo”**

Contenido / Resumen.

Por lo menos desde junio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) tuvo conocimiento del contenido del video en el que aparecen cuatro miembros del grupo armado Los Zetas —dos militares y dos civiles— que lanzaron amenazas en contra del entonces procurador Rafael Macedo de la Concha y del expresidente de la Cámara Nacional de Comercio que, por unas cuantas horas, sería director de Seguridad Pública Municipal de Nuevo Laredo, Alejandro Domínguez Coello.

Contra este segundo las amenazas se cumplieron sin que la PGR tomara en cuenta que había órdenes de ejecutarlo: fue asesinado el 8 de junio de este año, durante su primer día de trabajo como responsable de la seguridad de Nuevo Laredo, uno de los territorios más disputados por los cárteles del narcotráfico.

Según datos consultados por *Proceso* ante varias fuentes y en documentos del expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, la PGR habría obtenido el video poco después del secuestro de los cuatro miembros de Los Zetas en Acapulco, Guerrero, al ejecutar varios cateos en diversas casas de seguridad que utilizaba la célula del cártel de Sinaloa en ese puerto, que encabezan Arturo Beltrán Leyva y Édgar Valdez Villarreal, La Barbie.

Sin embargo, debido a que el video contiene información reveladora sobre presuntos arreglos del general Macedo de la Concha con el cártel del Golfo, y ante la constante deserción de tropas de élite del Ejército que se han incorporado a esa organización criminal, el subprocurador general de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, habría decidido guardar la información.

Después de que estallaron el escándalo y las confrontaciones internas en la PGR, la investigación del video -que debe determinar si la filmación es real y aclarar qué pasó con los tres zetas que se observan vivos en la cinta, así como el origen de ésta, entre otros aspectos- ya no está en manos de la SIEDO: Extrañamente, el caso pasó a la Visitaduría de la PGR, de la que hace menos de un mes fue nombrado como titular Ismael Vera, un militar que fue subordinado de Rafael Macedo de la Concha en la Procuraduría Militar.

J. Jesús Esquivel, “Entrenados... para delinquir”, *Proceso*, número 1520, 18 de diciembre de 2005, pp. 19-20.

### **“Entrenados... para delinquir”**

Contenido / Resumen.

El teniente Jeff Gordon, vocero del Pentágono, confirmó a *Proceso* que en el Capitolio se encuentran enojadísimos por la supuesta presencia de zetas en territorio estadounidense. Nos han pedido aclarar la situación y nosotros le solicitamos al gobierno de México que nos apoye en esto. El Pentágono no tiene la autoridad ni los mecanismos para saber quiénes son Los Zetas ni dónde operan. El gobierno de México todavía no nos ha contestado, pero confiamos en que lo hará, anota.

El Comité de las Fuerzas Armadas del Senado solicitó a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, que identificara a los militares o exmilitares mexicanos presuntamente miembros de Los Zetas que recibieron adiestramiento del Pentágono.

En la lista del Congreso, cuya copia está en poder de *Proceso*, aparecen 18 nombres: Flavio Méndez Santiago, Raúl Alberto Trejo Benavides, Luis Alberto Guerrero Reyes, Heriberto Lazcano Lazcano y Galindo Mellado Cruz. También se encuentran Jesús Enrique Rejón Aguilar, Ernesto Zatarin Beliz, Mateo Díaz López, Miguel Ángel Soto Parra, Rogelio Guerra Ramírez, Óscar Guerrero Silva, José Luis Santillán Casillas, Jesús Magaña Arrequín, Luis Ángel Sánchez Cuevas, Jaime Morales Navarro, Víctor Manuel Hernández Barrón, Antonio Treviño Bautista y José Luis Galván Alvarado. Respecto de esta lista, el teniente Gordon dice: Es información confidencial que no podemos dar a conocer a la prensa porque se trata de (presuntos) miembros de las Fuerzas Armadas de México.

En el caso específico del entrenamiento de militares mexicanos por estrategias del Pentágono, las estadísticas del Departamento de Defensa durante los últimos cinco años reflejan el cambio en las prioridades. Anteriormente se consideraba fundamental la lucha antinarcóticos, mientras que actualmente lo es la antiterrorista. En 1999, el Pentágono entrenó a 622 soldados mexicanos; 857 en 2001; 600 en 2002; 520 en 2003; y 876 en 2004.

Según el agente del FBI, en 2004 hubo algunos policías mexicanos que recibieron adiestramiento militar del Pentágono. El problema con los militares o policías mexicanos que se asocian con el narcotráfico ya sea a través de Los Zetas o directamente como miembros de los cárteles, no es que se conviertan en criminales por sus conocimientos de táctica militar; lo hacen por el dinero que ganan, aun a costa de perder su vida. Es la corrupción, y ése es el principal problema que hay en México.

Ricardo Ravelo, “Año de ejecuciones”, *Proceso*, número 1521, 25 de diciembre de 2005.

### **“Año de ejecuciones”**

Contenido / Resumen.

Los cárteles mexicanos de la droga han batido este año récords de violencia al extender los levantones, secuestros y ejecuciones a todo el territorio nacional. Pero, a diferencia de otros tiempos, ahora se asocian con diversas bandas criminales para el control geográfico y la consumación de vendettas. Con

este propósito contratan a pistoleros cuyo entrenamiento corre a cargo del erario: policías federales, estatales y municipales que persiguen y entregan en manos de los narcotraficantes a integrantes de grupos rivales o a sujetos que tienen cuentas pendientes con ellos.

Aferradas al poder y a la conquista de nuevos territorios, nueve organizaciones criminales —algunas de ellas asociadas entre sí— han desatado este año la más cruenta guerra que se recuerde en busca de la hegemonía en el narcotráfico, que opera ya sin ningún control de las autoridades federales.

Las bandas criminales —como el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo— han multiplicado los levantones, secuestros, desapariciones y ejecuciones en todo el territorio, con la frecuente participación de los cuerpos policiacos estatales en operativos de localización, detención y entrega de los rivales que los grupos de narcotraficantes pretenden eliminar.

Desafiantes, los grupos criminales también han amenazado de muerte a altos funcionarios del gobierno federal, como en el supuesto plan de asesinar al general Rafael Macedo de la Concha, presuntamente por no haber cumplido los arreglos establecidos con el cártel del Golfo. Y con ese mismo tipo de sucesos se ha relacionado el accidente aéreo en el que, en septiembre último, perdieron la vida el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta; el tercer visitador de la CNDH, José Antonio Bernal Guerrero, y otros funcionarios federales.

Tan sólo la guerra que libran los cárteles de Sinaloa y del Golfo -ambos fortalecidos con nuevas alianzas- ha extendido la violencia a todo el territorio, y los estados de Michoacán y Tamaulipas tienen el primer lugar en ejecuciones. Según datos oficiales, Michoacán es la entidad más violenta, con mil 716 ejecuciones en este año, por encima de Nuevo León, Tamaulipas, Baja California y Sinaloa. En 2001, hubo mil 80 ejecutados; en 2002, mil 230; en 2003, mil 290; en 2004, mil 304, y este año la cifra se disparó hasta mil 716, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia del Estado.

La entidad, donde en los años ochenta fue asesinado el agente de la DEA Enrique Camarena, no ha dejado de ser refugio de narcos, y ahora se afirma que la región conocida como La Tupitina —en la costa— es uno de los principales refugios de Los Zetas y de grupos armados similares a éstos, a los que se conoce como Los Zetillas. A este grupo se atribuye la mayoría de los crímenes locales.

Pese al programa México Seguro, puesto en marcha el 11 de junio en Nuevo Laredo, se rompieron los récords de levantones en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, donde se han denunciado 230 casos. Hay, además, 50 desaparecidos y 32 mujeres asesinadas. E incluso fueron ejecutados 24 agentes policiacos y siete custodios en penales del estado, presuntamente ligados al narco. La ciudad más violenta de la entidad es Nuevo Laredo, donde la guerra de los cárteles de Sinaloa y del Golfo ha causado 139 crímenes, pese a la presencia de más de mil elementos de la AFI, reforzados con policías de la PFP y Gafes del Ejército.

Según cifras de las procuradurías de los estados, Sinaloa lleva ya este año 418 ejecuciones; Durango, 74; Chihuahua, 60, y 55 Nuevo León, que se ha convertido en el principal centro de operaciones del cártel de Sinaloa para lanzar su ofensiva contra el cártel del Golfo. Al respecto, el subprocurador general de la SIEDO, José Luis Santiago Vasconcelos, manifestó: La violencia se ha desatado en el territorio nacional por la situación geográfica que tiene México entre los países de producción y el de consumo más grande del mundo, lo que nos ha convertido en víctimas de hechos de violencia exagerados, de fenómenos de

corrupción y de obstrucción de la justicia. Por ello, se puede decir que la violencia va más allá de un problema de narcotráfico.

## 2006

J. Jesús Esquivel, “Confusión en la frontera”, *Proceso*, número 1526, 29 de enero de 2006, pp. 40-42.

### “Confusión en la frontera”

Contenido / Resumen.

El jefe de Inteligencia de la DEA, Anthony P Placido, asegura que la incursión de personas uniformadas como miembros del ejército; protegen cargamentos de droga. Por otro lado, se niega categóricamente que el Gobierno mexicano o el Ejército colabore con el narco de manera institucional, sino a través de altos funcionarios: “Se han dado incidentes en los que se ha visto a gente que viste el uniforme militar, que llegan a la orilla de la frontera norte de México en vehículos de la clase Humvee o en Jeeps color verde, pero esto, insisto, no implica que sean en realidad miembros de las Fuerzas Armadas mexicanas, sino narcotraficantes disfrazados de militares o, en todo caso, militares que de forma personal están trabajando para el narcotráfico”.

El detonante fue el incidente ocurrido el 23 de enero en un condado de El Paso, Texas, en el cual militares mexicanos resguardaron a narcotraficantes mexicanos al intentar introducir marihuana a Estados Unidos por medio de vehículos todo terreno.

Se vincula a José Luis Santiago Vasconcelos (subprocurador de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada de México) de proteger al cártel del Golfo con un grupo pequeño de unos 100 miembros aproximadamente.

Se relacionan las tácticas de los zetas, el uso de uniforme militar, o el viajar en grupos a bordo de camionetas Suburban; provocan que otros grupos delictivos adopten las mismas tácticas militares. El asesinato de policías y miembros de bandas rivales no se les atribuye directamente a los Zetas, sino más bien a sus operadores que en su mayoría son expolicías y exmilitares (conocedores de las actividades paramilitares y antinarcóticos). Anónimamente agentes de la DEA y el FBI declararon que la organización Los Zetas también está bajo las órdenes de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Por otro lado, el Congreso estadounidense tiene una lista con 18 nombres de militares mexicanos activos y desertores, los cuales pudieron recibir entrenamiento en el Pentágono y que ahora pertenecen a la organización criminal Los Zetas.

Ricardo Ravelo, “La batalla de Acapulco”, *Proceso*, número 1527, 5 de febrero de 2006, pp. 30-33.

### “La batalla de Acapulco”

Contenido / Resumen.

En el puerto de Acapulco cada vez es más común el enfrentamiento por el control de la plaza entre el cártel sinaloense encabezado por los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, y Los Zetas.

De la misma manera, han incrementado las balaceras, levantones y los ajustes de cuenta, todas esto posible gracias a la protección policiaca que reciben los bandos delictivos (presuntos agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) adscritos al estado).

Es señalado que las facilidades para conseguir droga en el puerto se han diversificado de manera considerable, existe un número aproximado a las mil tienditas alrededor de la zona turística y todas ellas bajo protección policiaca.

Alejandro Gutiérrez, “Periodistas en el terror”, *Proceso*, número 1527, 5 de febrero de 2006, pp. 40-42.

### **“Periodistas en el terror”**

Contenido / Resumen.

En Nuevo Laredo, el narcotráfico además de intimidar y agredir a periodistas; ahora también controlan la información mediante la corrupción o intimidación.

No hace falta una ardua investigación sobre el narcotráfico, basta con tan sólo publicar una columna o un pequeño artículo sobre el tema para que periodistas en la frontera tamaulipeca sean levantados o amenazados por estas células delictivas: “Me interceptaron cuando estaba a punto de subir a mi carro. No puedo dar detalles, sólo te digo que me llevaron a un lugar, me bajaron los pantalones y me golpearon con unas tablas Desde entonces, cuida cada línea, cada palabra, cada nombre que escribo, porque temo que, a la otra, ya no la cuento”.

Desde Matamoros hasta Nuevo Laredo difícilmente se señalan a los actores del narco por su nombre a pesar de saber quién o quiénes están detrás de los delitos cometidos.

El pasado 18 de enero fue acribillado Eleazar Treviño Morales, hermano del jefe de la plaza de Nuevo Laredo, se sospecha que el asesinato lo cometieron integrantes del cártel de Sinaloa. Inmediatamente a medios escritos y electrónicos les llegó la orden de no publicar nada al respecto, y efectivamente eso sucedió. Lo anterior es un ejemplo del cómo el narco controla a la prensa en aquel lugar: “No recuerdo cuándo fue que publicamos la última nota local y que mencionamos a Los Zetas. Ridículamente, en cualquier parte del país vas a encontrar notas que hablan de ellos, menos aquí, donde operan tan seguido”. Testimonio del jefe de redacción.

Ricardo Ravelo, “En estado de guerra”, *Proceso*, número 1539, 30 de abril de 2006, pp. 30-34.

### **“En estado de guerra”**

Contenido / Resumen.

En Acapulco, el jefe de la Policía Preventiva, Genaro García; tiene un grupo especial para su protección denominado Comando Táctico de Operaciones Especiales. Lo curioso de este caso no es que tenga un grupo de protección a su mando, sino que dentro de ese grupo figuran dos personajes, que según la PGR pertenecen al escudo del cártel del Golfo, Los Zetas.

Se les conoce como Los Rojas, mismos que no están en la nómina de la policía Preventiva de Acapulco, así como tampoco las armas, dinero, equipo de radiocomunicación y los autos que utilizan. No se sabe hasta ahora el cómo entraron al círculo de confianza del jefe policiaco.

“Con base en las investigaciones de la PGR, dicho Comando Táctico de Operaciones Especiales podría estar relacionado con la ola de secuestros, ejecuciones y “levantones” en Acapulco, como parte de la guerra que libran los dos grupos criminales que operan el narcotráfico en todo el estado”.

Ambos hermanos (Rojas Ramón) han creado un escudo protector para repeler acciones en su contra, sus operaciones se concentran en particular a los integrantes del grupo Los Pelones, brazo armado de los hermanos Beltrán Leyva, cártel de Sinaloa. La orden es eliminar a miembros del cártel rival y evitar que se asiente la hegemonía del Chapo Guzmán en aquella zona del país.

Por otro lado, el alcalde Félix Salgado Macedonio se declaró incompetente para afrontar el narcotráfico en todos sus niveles: “Me declaro incompetente para afrontar el narcotráfico con todas sus cabezas y cárteles”.

Alejandro Gutiérrez, “Protectores del crimen”, *Proceso*, número 1543, 28 de mayo de 2006, pp. 40-43.

### **“Protectores del crimen”**

Contenido / Resumen.

El pasado 8 de abril se logró la captura de una banda encabezada por el suboficial de la Policía Federal Preventiva (PFP), Armando Espinoza Zerón, alias El Perro. La detención se dio gracias a la denuncia de una víctima y al operativo que se puso en marcha por parte de la policía de la Ciudad de México y la PFP.

Según investigaciones policiacas, el cabecilla de la banda estuvo vinculado al cártel del Golfo, luego de que se supiera que les brindaba protección institucional a integrantes de Los Zetas; después de haber sido asignado en Matamoros.

Espinoza Zerón tiene un largo historial de incidencias tanto institucionales como fuera de.

“En uno de los reportes incluido en el diagnóstico referido (fechado el 3 de febrero de 2003), se relata que los suboficiales de la PFP. Arturo Narváez Fuentes y Crisóstomo Aguilar Damián -del equipo de Espinoza Zerón-, totalmente alcoholizados, se enfrentaron con sus armas de fuego y el segundo resultó lesionado con un tiro calibre 40. Narváez fue detenido y pretendió extorsionar a las autoridades ministeriales

En otra ocasión, el mismo Narváez y Espinoza Zerón protagonizaron una riña; borrachos, se amenazaron de muerte en un restaurante. El Perro amenazó al director de Tráfico y Contrabando, que trató de impedir el pleito”.

Pero no sólo él sino también integrantes de su banda como por ejemplo su brazo derecho, el suboficial Kriss Odín Esquivel Vázquez, a quien le fue levantada un acta administrativa luego de golpearse con un policía bancario en instalaciones estratégicas.

“Otro integrante de la banda es el agente Miguel Ángel Ramírez Madrigal, asignado al aeropuerto de Tijuana, quien tiene un reporte por amagar con arma de fuego a unos vecinos del Ajusco Igualmente, ha participado con el suboficial Sinué Silva Flores en cobrar dinero en La Palma para hacer favores a los internos Este último -actualmente jefe de la Base de Inteligencia Territorial en Cancún- fue acusado en abril de 2005 ante Asuntos Internos por tres oficiales, uno de ellos del área de Terrorismo, por extorsión, abuso de autoridad y cohecho, así como de permitir daños en propiedad pública”.

Ricardo Ravelo, “‘Narcokaibiles’ en la república”, *Proceso*, número 1546, 18 de junio de 2006, pp. 34-36.

### **“‘Narcokaibiles’ en la república”**

Contenido / Resumen.

Según un informe de inteligencia de la PGR, existe un grupo de exmilitares guatemaltecos que se han integrado a las filas de Los Zetas. Los llamados Kaibiles es un grupo de desertores de las fuerzas armadas del país centroamericano y que el escudo del Cártel del Golfo, Los Zetas han reclutado con la finalidad de hacerle frente al Cártel de Sinaloa y ganar terreo frente a Joaquín El Chapo Guzmán.

Debido al debilitamiento que Los Zetas han venido sufriendo desde la década de los noventa, a partir del 2005 comenzaron a reclutar a exmilitares guatemaltecos; cuya violencia ya se vio reflejada en Guerrero donde la disputa con el cártel de Sinaloa es cada vez más dura.

“Los primeros informes sobre la inclusión de kaibiles en las filas de Los Zetas fueron conocidos por autoridades guatemaltecas en septiembre de 2005, luego de la detención, en Chiapas, de cuatro exmilitares de elite de ese país. Sus nombres son los siguientes: José Armando León Hernández, experto en explosivos, quien desertó del ejército guatemalteco el 19 de octubre de 2004; Selvín Camposeco Montejo, de quien se afirma fungió como jefe de equipo y desertó el 6 de junio de 2000; José Aragón Stwolinsky, piloto que abandonó el ejército el 14 de febrero de 2004, y José Ortega, experto en explosivos, quien solicitó su baja de las fuerzas castrenses el 29 de diciembre de 1997”.

Algunos informes de seguridad estadounidenses señalan que un grupo de aproximadamente 30 exmilitares guatemaltecos están entrenando a miembro de Los Zetas en un rancho al sur de McAllen: “Los Zetas son un grupo formidable y representan una grave amenaza Si esta información resulta fidedigna, la presencia de kaibiles rebeldes sólo puede empeorar el riesgo. Nuevos reclutas han

incrementado las filas de Los Zetas en los últimos 18 meses Se asegura que son más violentos que sus líderes y que podrían estar detrás de buena parte de la violencia en la frontera”.

Ricardo Ravelo, “La PGR, corrompida y pobre”, *Proceso*, número 1553, 6 de agosto de 2006, pp. 40-41.

### **“La PGR, corrompida y pobre”**

Contenido / Resumen.

El procurador Daniel Cabeza de Vaca vincula la falta de recursos económicos y materiales con la incompetencia de la misma PGR frente a la ola delictiva. No basta con los programas gubernamentales en materia de seguridad como México Seguro o el despliegue de soldados por las calles, se puede ver como la disputa entre el cártel del Golfo y el de Sinaloa se ha extendido por todo el país y ante esto ni la PGR ni la AFI se muestran competentes y calificados para erradicar la violencia.

Cabeza de Vaca ha incurrido en ciertas contradicciones un ejemplo fue cuando declaró que los narcos-laboratorios productores de metanfetaminas se encuentran en cinco estados de la república, aunque sólo mencionó tres: Baja California, Jalisco y Colima.

“El 28 de abril de 2005, luego de que el Senado de la República ratificó a Cabeza de Vaca como procurador, la dependencia enfrentaba la más dura crisis de credibilidad por su entreguismo al Ejecutivo durante el fallido proceso de desafuero de Andrés Manuel López Obrador. El hecho derivó en la destitución de Rafael Macedo de la Concha, protagonista de esa maniobra política y quien durante su gestión en la PGR fue cuestionado varias veces; se le relacionó incluso con la presunta protección a Los Zetas”.

Arturo Rodríguez García, “Violencia sin tregua”, *Proceso*, número 1554, 13 de agosto de 2006, pp. 40-41.

### **“Violencia sin tregua”**

Contenido / Resumen.

En Monterrey Nuevo León la ola de violencia va en incremento, en el último trimestre ha sucedido 40 ejecuciones donde al menos la mitad se le han atribuido al crimen organizado. Debido a esto se ha implementado toque de queda en este y municipios conurbados.

Un suceso de alta relevancia sucedió el pasado 23 de julio cuando un grupo de zetas atacó a la fiscal federal Verónica Palacios; cuando ésta iba circulando en su camioneta, pero en compañía de Efraín, Roberto y Tomás López de la Cruz, integrantes del cártel de Sinaloa. En el tiroteo resultó muerta una mujer hasta ahora sólo identificada como Cesy. Ante esto la fiscal fue arraigada para ser investigada por la PGR debido a que dentro de su camioneta se encontraron armas largas con cartuchos útiles.

Al otro día se encontró el cuerpo decapitado de un joven de 17 años en el municipio de Apodaca, el cuerpo identificado como Julio César de León Carrizales resultó ser primo de los hermanos de la Cruz,

había desaparecido un día antes. De la misma manera, Jorge Pérez Hernández (exmilitar) fue levantado y asesinado por un grupo de zetas, su cuerpo apareció cercenado en seis partes.

“El mismo lunes, Marcelo Garza y Garza, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), así como Alfredo Becerril Almazán, delegado de la PGR en la entidad, participaron en una conferencia de prensa conjunta, en la que informaron sobre dos mensajes encontrados cerca del cuerpo decapitado:

Esto es para los que andan haciendo los homicidios en Nuevo Laredo y la plaza de Guadalajara bajo el mando del Efraín, El Beto y El Pipo, gente de El Chapo, dice el primero, el segundo alude al jefe de sicarios y reclutadores del cártel de Sinaloa, bajo las órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán: La matazón se va a terminar cuando el gobierno agarre a La Barbie, Arturo Beltrán y su gran protegido El Chapo”.

Ante todo, esto, los reclamos hacia Garza García se han intensificado de tal manera que lo vinculan con personajes del narcotráfico, por su parte la Coparmex en esta ciudad manifestó su rechazo ante la militarización que en la zona se ha implementado y exigen un mejor desempeño por parte de los cuerpos policiacos, mismos que se han visto rebasados por la criminalidad.

Armando Guzmán, “La ofensiva de ‘Los Zetas’”, *Proceso*, número 1554, 13 de agosto de 2006, pp. 48-51.

### **“La ofensiva de ‘Los Zetas’”**

Contenido / Resumen.

Hace más de dos años que la disputa por el territorio en Tabasco cada vez es más grave, pero, los ataques en contra de instalaciones policiacas pueden indicar que Los Zetas le han ganado la batalla al cártel de Juárez. Todo esto pese a que el brazo armado del cártel del Golfo (Los Zetas) ha sufrido la captura de importantes cabecillas.

La lucha por el territorio en Tabasco arreció desde 2004 cuando un comando armado llegó al rancho San Francisco y ejecutó a seis personas, incluido un miembro de la banda los michoacanos. En octubre de 2005 en el municipio de Emiliano Zapata fue ejecutado un transportista de nombre Martín Flores Torruco, alias El Gordo. La policía logró capturar a cuatro de los responsables, entre ellos Jorge Santiago de 23 años y desertor de los kaibiles. Los sicarios confesaron que fueron pagados por sinaloenses quienes les brindaron armas, fotografías y el domicilio de la víctima.

Un mes después de que retornara el comandante Mateo (10 de junio), apareció muerto el ganadero Ponciano Vázquez, El Pony. El cuerpo apareció con el de cuatro de sus trabajadores en una camioneta Dodge Durango, en Tabasco y los límites con Veracruz. Al reclamar el cuerpo en la procuraduría, el hermano del Pony, el cacique del sur, Cirilo Vázquez, responsabilizó de los asesinatos al gobierno Federal.

Al respecto con el comandante Mateo, éste figuraba en la lista de los más buscados de la PGR, por ser pieza clave del cártel del Golfo y uno de los fundadores de Los Zetas. Según la SIEDO, era responsable del cártel del Golfo en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Alejandro Gutiérrez y Francisco Castellanos, “Michoacán: Asolado por ‘Los Zetas’”, *Proceso*, número 1557, 3 de septiembre de 2006, pp. 48-50.

### **“Michoacán: Asolado por ‘Los Zetas’”**

Contenido / Resumen.

En una entrevista concedida a *Proceso*, Uriel Farías, alias El Paisa; comenta que decidió unirse a pobladores de Tepalcatepec, Michoacán para hacerle frente a los grupos delictivos que han sido culpables de amenazas y ejecuciones, principalmente Los Zetas. Asegura que por culpa de esta organización delictiva: tenían dos opciones, irse del pueblo o tomar las armas y enfrentarlos.

Por otro lado, el gobierno de Lázaro Cárdenas y la AFI, aseguran que El Paisa está vinculado al cártel de Luis Valencia, mismo que ha sido aliado con el cártel de Joaquín El Chapo Guzmán. Como en la mayoría de los casos de disputa que suceden en todo el país, en la zona está la disputa entre el cártel del Golfo y el de Sinaloa. A esto se le agregan grupos locales y regionales.

Uriel Farías relata que la defensa ciudadana comenzó en octubre del año pasado; luego de que el grupo delictivo los Zetas, comandado por un individuo de alias La Chata, comenzara a extorsionar y después a ejecutar a quienes no pagaran la cuota.

“El grupo de La Chata empezó a aparecerse aquí, para cobrar cuota o piso a la gente de Tepalcatepec, con la supuesta promesa de dar protección a comerciantes, empresarios y cualquier ciudadano, pero era una vil extorsión, como sucedió con un conocido que les tuvo que entregar un carro Jetta seminuevo por cuatro meses de protección, pues de lo contrario lo ejecutarían”, dice

Continúa: “Esta gente no amenaza, éstos llegan a levantar a la gente y a ejecutarla”.

Como este caso existen más por todo Michoacán, es evidente que cada vez más el grupo delictivo Los Zetas de apoderan del estado.

Velia Jaramillo, “Kaibiles: Leyenda negra”, *Proceso*, número 1560, 24 de septiembre de 2006, pp. 44-45.

### **“Kaibiles: Leyenda negra”**

Contenido / Resumen.

Víctor Manuel López, un chico guatemalteco del poblado: el caserío Madronales, su familia vive consternada por la noticia de que fue detenido en el municipio de la Aguililla, Michoacán. Víctor estuvo dos años siete meses realizando su servicio militar se retiró del ejército, inició el curso Kaibil pero no pudo concluirlo. Después de estar en el ejército, Manuel López regresó a su poblado como jornalero, debido a la tormenta Stan se vio obligado, como muchas otras personas, a emigrar a México, por falta de ingresos económicos.

A finales del mes de agosto y a principios de septiembre cerca de mil miembros de la policía Nacional Civil y miembros del Ejército guatemalteco; realizaron un gran operativo en distintos municipios guatemaltecos donde se destruyeron, según informes de la policía, cerca de 20 millones de matas de amapola.

“Fuentes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de México declararon a reporteros de El Periódico que en esta región operan los cárteles de Juárez, de Sinaloa y del Golfo. Al servicio de este último se encuentran Los Zetas, organización que a su vez recluta kaibiles guatemaltecos.

Junto con Víctor, otros dos guatemaltecos fueron detenidos en Michoacán. El ejército de Guatemala informó que uno de ellos, Luis Hernán Castillo Hernández, no aparece en sus registros. El otro, Baudilio Jiménez Ordóñez, es originario del departamento de Escuintla, prestó servicio militar durante siete meses en la zona militar de Quetzaltenango y causó baja en noviembre de 1999”.

Ricardo Ravelo, “Reedición del fracaso”, *Proceso*, número 1573, 24 de diciembre de 2006, pp. 23-25.

### **“Reedición del fracaso”**

Contenido / Resumen.

El nuevo titular de la PGR, Eduardo Medina Mora; recibe de su antecesor una institución infiltrada y plagada de corrupción y miembros del narcotráfico, mismos que se integraron a la dependencia en la administración de Cabeza de Vaca. El propósito de Medina Mora es desmantelar todas las redes delictivas dentro de la institución, sin embargo, su esquema se asemeja al fallido programa México Seguro.

“A pesar de los esfuerzos de sus antecesores Rafael Macedo de la Concha y Daniel Cabeza de Vaca por terminar con la corrupción y las fallas que imperan en la PGR, ambos exfuncionarios fueron exhibidos por sus yerros. A Macedo de la Concha, por ejemplo, se le atribuyeron supuestos tratos con Los Zetas. En la averiguación previa AP/PGR/GRO/ACAAMA/413/2005 se recogen las declaraciones de los cuatro integrantes de ese grupo paramilitar al servicio del cártel del Golfo que fueron ejecutados en Acapulco, Guerrero, en mayo de 2005, por presuntos sicarios del cártel de Sinaloa. Uno de los zetas ejecutados, Miguel Vizcarra Cruz, declaró que Macedo de la Concha les brindaba protección.

Cabeza de Vaca, quien estuvo al frente de la PGR durante los últimos 20 meses de la administración foxista, tuvo el desatino de declarar en una entrevista con *Excélsior*, publicada el 21 de noviembre pasado, que un grupo de agentes estuvo a punto de aprehender a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Pero el entonces procurador no pudo explicar por qué el llamado “capo del sexenio” foxista logró huir. Sólo dijo: “Tan cerca estuvimos de él, que en el lugar donde se encontraba encontramos una taza de café todavía caliente”.

La red de corrupción que enfrentará Medina Mora está liderada por altos mandos militares, mismos que designó Cabeza de Vaca. Los embates serán más cada vez más violentos ya que ahora son seis los cárteles de la droga quienes se disputan las rutas de trasiego y el control del mercado de la droga.

## 2007

Alejandro Gutiérrez, “La ineficacia...”, *Proceso* 1580, 11 de febrero de 2007, pp. 12-16.

### “La ineficacia...”

Contenido / Resumen.

Las siete ejecuciones ocurridas el pasado martes 6 en Acapulco, según especialistas, han reflejado que los operativos militares implementados por el gobierno de Felipe Calderón además de ser espectaculares son ineficaces.

Luego de extraditar a 15 delincuentes de alto peso y desplegar mega operativos militares en distintas partes del país, el crimen organizado ha respondido de la peor manera, el pasado 6 por la mañana un comando armado de los Zetas; asesinaron a siete elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Cabe mencionar que los sicarios iban vestidos con uniformes militares utilizados por las Fuerzas Especiales de Alto Mando.

“El gobierno federal intentó minimizar los hechos a través de la Procuraduría General de la República (PGR), que los consideró como “un ajuste de cuentas del crimen organizado ante las acciones emprendidas por el gobierno, a través de los operativos conjuntos en las distintas regiones del país””.

Ricardo Ravelo, “Intacta la mafia aduanera”, *Proceso* número 1583, 4 de marzo de 2007, pp. 42-46.2”

### “Intacta la mafia aduanera”

Contenido / Resumen.

El buen deseo y las ganas de luchar contra la corrupción en las 48 aduanas del país es el principal objetivo del nuevo administrador de las aduanas: Juan José Bravo Moisés.

A poco más de dos meses de esas promesas los buenos deseos del funcionario, este se ha topado con un gran obstáculo: José Guzmán Montalvo, su antecesor en el cargo. El exfuncionario tiene peso aun dentro de la organización debido a su red de incondicionales, quienes operan dentro de las aduanas.

Debido al clima de violencia; el hostigamiento no se ha hecho esperar. Varios inspectores adscritos a la zona fronteriza han denunciado amenazas por parte de narcotraficantes, en especial de los Zetas. Debido a esto han solicitado su cambio de plaza por el temor a represalias.

“La semana pasada se encendieron los focos rojos ahí El 23 de febrero, luego de concluir sus labores, el tercer inspector del área de Inspección Fiscal y Aduanera, Jorge Iván Santillán Aguirre, fue asesinado Diez días antes había asegurado un tráiler repleto de armamento de alto poder De acuerdo con la indagatoria a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), las armas pudieron haber sido

adquiridas por el cártel del Golfo, organización que libra una fuerte batalla con su rival de Sinaloa por el control del tráfico de estupefacientes”.

Ricardo Ravelo, “Se llaman los Zetas y aquí están”, *Proceso* número 1595, 27 de mayo de 2007, pp. 6-9.

### **“Se llaman los Zetas y aquí están”**

Según información de la Procuraduría General de la República, la incorporación de militares bien entrenados a las filas del narcotráfico se inició al final de los años noventa. A esa época, que coincide con el principio de la militarización de la lucha contra el narco, se remonta el origen del grupo armado más temible de los cárteles de la droga: Los Zetas, quienes ya convirtieron al país en su campo de batalla.

Lo llaman el “ejército del narco” y cada vez ocupa mayores territorios del país.

Con nuevos refuerzos, dotados de un armamento sofisticado y cada vez más violentos, Los Zetas –de acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Seguridad Pública– están en todas partes: en los aeropuertos, aduanas, puertos, el campo...

Mantienen bajo amenaza, además, a presidentes municipales, empresarios y autoridades ejidales de diversos estados.

Estas eran sólo versiones periodísticas hasta el jueves 24 pasado, cuando Eduardo Medina Mora, titular de la PGR, las confirmó en una reunión con diputados federales. Reconoció que existen zonas de la República en donde el gobierno ha perdido el control y están bajo el dominio del narcotráfico.

Medina Mora se refería a municipios y demarcaciones de estados del norte, como Nuevo León y Tamaulipas, entre otros. Ahí, Los Zetas y grupos rivales del cártel de Sinaloa han impuesto su poder en amplios territorios. Lo mismo secuestran a empresarios que extorsionan a comerciantes, dueños de prostíbulos, bares, cantinas y otros “giros negros”.

El procurador federal fue claro al reconocer el avasallante dominio del narco en buena parte del país: “Hay cierta pérdida de elementos centrales de la potestad del Estado” en algunas zonas, donde las organizaciones criminales realizan “una toma de control de cuerpos policiacos, a quienes corrompen” y con ello, dijo, “nos arrebatan a nuestros policías”.

Ante la evidente infiltración de los cuerpos policiacos, Medina Mora justificó la presencia del Ejército en tareas de patrullaje y control. Es prioridad del gobierno, expresó, usar todos los elementos a su alcance para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos y constituir paralelamente a la policía federal “como una instancia realmente nacional en términos de su despliegue, y reconstruir a las policías o a los cuerpos de seguridad que están afectados por esta competencia o sustracción en el monopolio del uso de la fuerza que hacen las organizaciones criminales”.

En otro momento, Medina Mora expuso un planteamiento similar al del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quien soltó –sin medir el impacto social– que “habrá más muertos”, en clara referencia a la violencia desatada por el narcotráfico, pues dijo que la batalla “apenas empieza y será por seis años”. En ese tono, Medina Mora les dijo a los diputados que habrá más droga en México: “La

droga va a estar ahí, frente (a nuestros hijos), y eso no sólo se evita con valores –subrayó– sino con una estrategia de autodefensa”.

El procurador también les aseguró a los diputados que el despliegue del Ejército sería temporal, pero ese mismo día, desde Gómez Palacio, Durango, el presidente Felipe Calderón lo contradijo sin miramientos: anunció que las tropas combatirán al narco de manera permanente.

### **Militares contra militares**

La historia de Los Zetas comenzó entre 1997 y 1999, cuando el presidente Ernesto Zedillo echó mano de las Fuerzas Armadas para reforzar la lucha contra el narcotráfico. El encarcelamiento del general Jesús Gutiérrez Rebollo –cómplice de Amado Carrillo Fuentes– y el escándalo de la presunta negociación del cártel de Juárez con el gobierno y con el Ejército pusieron en evidencia el grado de penetración del narco en la cúpula del poder.

El gobierno federal puso en marcha el Sistema Nacional de Seguridad Pública, reforzó a las corporaciones policiacas con militares y la PGR afianzó momentáneamente zonas estratégicas, sobre todo en las fronteras, con militares de alto rango que salieron de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y se incorporaron a las delegaciones de la PGR. Así empezaba la militarización de las tareas policiacas.

Paralelamente, el capo Osiel Cárdenas Guillén urdía en Tamaulipas –principal asiento del cártel del Golfo– un plan criminal que más tarde se convertiría en la pesadilla sexenal: el reclutamiento de militares para servir al narco.

–Quiero a los mejores hombres, a los mejores... –le dijo Osiel Cárdenas a Arturo Guzmán Decenas, Z1, uno de los fundadores del grupo armado– cuando el capo terminaba de construir su obra criminal: el cártel del Golfo.

–¿Qué tipo de gente necesitas? –inquirió Guzmán

–A lo mejores hombres armados...

–Esos sólo están en el Ejército –respondió el Z1

–Los quiero –ordenó Cárdenas Guillén

Lo anterior es parte de la película que, con el paso de los años, ha ido armando la PGR sobre la forma como el cártel del Golfo reclutó a la primera generación de zetas –la mayoría exmiembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE– cuando el Ejército Mexicano fue enviado a dar su apoyo a la lucha contra el narcotráfico.

Según los antecedentes históricos registrados por la PGR, una buena cantidad de Gafes, entrenados al más alto nivel del Ejército, pasaron a formar parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), creada después de que el general Gutiérrez Rebollo fue encarcelado por servir al cártel de Juárez.

Entre 1997 y 1999 la PGR, entonces encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar, comenzó a colocar a generales y coroneles como delegados de la PGR en las zonas fronterizas. Tiempo después, y como parte

de la militarización de las tareas policiacas, el Ejército envió a los Gafes, uno de sus grupos más dotados y mejor preparados, para apoyar la lucha contra el narcotráfico. Aquel equipo especial se incorporó a la FEADS.

Como parte del plan de incorporar a sus filas el paramilitarismo, el cártel del Golfo comenzó a “cortear” al grupo de militares, quienes poco a poco comenzaron a desertar de las filas del Ejército. Durante algún tiempo, muchos de esos soldados se perdieron en el anonimato, aunque más tarde salieron a la luz pública con el nombre de Los Zetas, convertidos en el escudo protector del cártel del Golfo y de su líder Osiel Cárdenas.

Según los informes de la PGR, los primeros contactos del capo para coptar a los militares fueron los tenientes Antonio Quevedo –exmiembro del 21 Regimiento de Caballería de Nuevo Laredo, Tamaulipas–; Arturo Guzmán Decenas, El Z1, quien fue asesinado el 21 de noviembre de 2002; y Óscar Guerrero Silva, El Winnie Pooh, exmiembro del Agrupamiento de Servicios Generales del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, asesinado el 1 de febrero de 2001 en Nuevo León.

Ya involucrados en el cártel, estos personajes comenzaron a reclutar, uno por uno, al equipo que la Sedena había enviado a la FEADS para reforzar la lucha contra el narcotráfico. Mediante ese frío cálculo y los “cañonazos” de miles de dólares, decenas de militares empezaron a abandonar las filas del Ejército: algunos simplemente desertaron y desaparecieron, en tanto que otros se incorporaron, como fieles soldados, al servicio del narcotráfico.

Al cabo de poco tiempo, alrededor de 40 militares de todas las jerarquías –tenientes y capitanes, entre ellos– pasaron a formar parte de las filas del cártel, su nueva empresa. Protegido por ese cinturón de seguridad, Osiel Cárdenas se erigió como amo y señor del narcotráfico en el Golfo de México. Aquel selecto equipo le brindaba protección y, adicionalmente, lo mantenía informado de los movimientos de las tropas del Ejército.

En el campo de batalla empezaron a enfrentarse militares contra militares.

En 2003, cuando Los Zetas ya se hacían presentes por sus actividades violentas, la PGR difundió la lista de sus integrantes. Algunos nombres: Mateo Díaz López, El Comandante Mateo; Sergio Enrique Ruiz Tlapanco, Tlapa; Lucio Hernández Lechuga, Lucky; Braulio Arellano Domínguez, El Gonzo; Isidro Lara Flores, El Colchón; Ismael Flotes Téllez; Fernando López Trejo; Ismael Marino Ortega Galicia; Carlos Vera Calva; Ramón Ulises Carvajal Reyes, El Piojo; Alejandro Pérez Mancilla; Rubén Alejandro Valenzuela Zúñiga; Armando Flores Arreola; Arturo Muro González; Ernesto Zataráin Beliz, El Traca; José Ramón Dávila Cano, El Cholo, y Prisciliano Ibarra Yépez.

Actualmente muchos miembros de la vieja guardia de Los Zetas han muerto o están encarcelados. Pero el grupo no está exterminado, aunque el exprocurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, se refirió a este ejército como una organización extinta. Incluso desestimó el poder de Los Zetas. En octubre de 2006, por ejemplo, dijo: “La capacidad de fuego de Los Zetas no es tanta... El problema es cuando se potencian con la complicidad de las autoridades locales. Lo que los hace fuertes es la protección de los grupos policiacos, no en sí la capacidad de fuego”, aseveró, aunque luego reconoció que contaban incluso con bazucas.

No sólo eso: durante un foro organizado en el periódico *El Universal*, el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, minimizó el poderío de Los Zetas, a los que calificó como un puñado de ignorantes e iletrados. Esta posición no coincide con lo que apenas en enero de 2006 asumía respecto de ellos la PGR: que el cuerpo protector del cártel del Golfo se había reforzado aún más con la incorporación de kaibiles, en su mayoría desertores del ejército de Guatemala, quienes pusieron de moda la decapitación de los rivales.

La PGR considera que, aunque Los Zetas han perdido a muchos de sus integrantes, aún tienen mucho poder. Según los informes consultados, le siguen la pista al menos a 27 de sus cabecillas, entre otros a su líder, Heriberto Lazcano, conocido como Lazca o Verdugo (clave Z-3).

El exgafe Lazcano, según la PGR, disputa el liderazgo del cártel del Golfo con Eduardo Costilla, El Cos. Ambos desean dominar las plazas de Veracruz y zonas del sureste. El vacío de poder de Los Zetas, al menos en ese territorio, fue evidente tras la captura de Mateo Díaz López, El Comandante Mateo. Según José Patiño Arias, subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública, la rivalidad que surgió tras esa captura es la causa de la mayoría de las ejecuciones en esa zona de la República.

A pesar de la extradición de Osiel Cárdenas a Estados Unidos y otras bajas importantes, el cártel del Golfo mantiene un gran poder. En su estructura siguen Ceferino Peña Cuéllar, Don Cefe; Rafael Cárdenas Vela, El Junior (sobrino de Osiel) y Javier Solís Garduza, El Loro Huasteco.

En su lista más reciente, de mayo de este año, la PGR establece que las fuerzas federales rastrean a otros zetas: Juan Carlos de la Cruz Reyna, El JC Tango (clave Z-36), quien también es buscado –de acuerdo con la información oficial– por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En el listado de la PGR también figuran Carlos Vera Calva, El Vera (clave Z-7); Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito (clave Z-8); Cruz Galindo Mellado, El Mellado (clave Z-9); Luis Reyes Enríquez, El Rey, Rex o King (clave Z-12); Gustavo López Castro (clave Z-13); Raúl Lucio Hernández Lechuga, Luki (clave Z-16); Gonzalo Geresano Escribano, El Cuije (clave Z-18); Braulio Arellano Domínguez, El Gonzo (clave Z-20), y Javier Almazán Baldera, El Javi (clave Z-24).

En abril pasado, la PGR detuvo a tres miembros del cártel del Golfo afincados en varios estados, entre ellos Nuevo León. Se trata de Eleazar Medina Rojas, El Chelelo; Nabor Vargas García, El Débora, y Juan Carlos Garza Azuara, El Barbas.

Según informes de la PGR, Los Zetas tienen bajo dominio la mayor parte del territorio de Tamaulipas y Nuevo León. En la primera entidad, su ley se impone en Valle Hermoso, Matamoros, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Laredo y Ciudad Mier.

En Nuevo León –plaza que disputan con el cártel de Sinaloa– dominan Montemorelos (en donde tienen casas de seguridad), Cadereyta, China, Los Herrera, Linares, Cerralvo, Sabina, Villa Aldama, Lampazos y Anáhuac.

Según datos de inteligencia, en estos pueblos es común ver cómo Los Zetas cobran derechos de piso a sus rivales, secuestran y extorsionan a empresarios y exigen cuotas a los que regentean giros negros, como burdeles y bares. También ejercen su poder sobre las autoridades municipales y tienen el apoyo de

sus más fieles aliados: las corporaciones policiacas, lo que los convierte en una fuerza potenciada con una poderosa capacidad de fuego.

### **Deserción militar**

La grave situación económica que enfrentan –bajos sueldos, pobres prestaciones y falta de estímulos– es la principal causa de que el Ejército Mexicano enfrente una crisis interna que se refleja en la constante deserción de sus efectivos Según datos oficiales, de 2001 a noviembre de 1996 desertaron del Ejército 99 mil 767 militares, es decir, unos 46 elementos abandonaron la milicia cada día.

Hasta enero de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional sólo disponía de 66 mil 549 plazas para soldados, con un sueldo de 3 mil 865 pesos al mes Según datos extraoficiales, en seis años el Ejército renovó buena parte de su plantilla en dos ocasiones.

En una entrevista publicada por el periódico Reforma el 29 de enero pasado, el general de División retirado Luis Garfías dijo que el problema de las deserciones en el Ejército es grave desde hace varios años, pues “hubo un tiempo en que el Ejército se reconstituía hasta tres veces (en sus tropas) porque toda la gente se iba” Según Garfías, “el problema es que habiendo cifras tan altas sobre deserción y siendo un delito, no hay nadie en las prisiones por eso”.

La Sedena atribuye las renunciaciones de los militares a la desobediencia o a una vocación desviada Lo cierto es que, hasta ahora, no se cuenta con datos precisos de adónde van los soldados que desertan del Ejército.

En las páginas que publican bolsas de trabajo en periódicos de provincia –sobre todo en el norte del país– es frecuente ver avisos, no siempre destacados, como este: “¿Necesitas trabajo? ¿Eres exmilitar? Llama a este número telefónico” Al poco tiempo, los anuncios desaparecen Las autoridades federales sospechan que esta podría ser una forma en que Los Zetas u otros grupos del crimen organizado reclutan a exmilitares para incorporarlos al narcotráfico.

Ricardo Ravelo, “Las aduanas, en poder de los “zetas””, *Proceso* número 1596, 3 de junio de 2007, pp. 18-20.

### **“Las aduanas, en poder de los “zetas””**

Contenido / Resumen.

Poco a poco el narco ha penetrado las aduanas, primero comprando a los altos mandos de estas dependencias para después colocar a sus personeros en puestos clave para las operaciones.

En especial Los Zetas controlan ya el trasiego de drogas, así como también la introducción de armas de fuego al país, mismas que utilizan para combatir a los cárteles rivales.

En un acto público ocurrido el pasado 30 de mayo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, admitió que las drogas entran y salen por las aduanas: “Una parte muy importante del problema de la seguridad en México es que sale y entra droga, y es un problema importante que implica la modernización de las aduanas”, puntualizó.

Ricardo Ravelo, “Bajo la amenaza del pacto”, *Proceso* número 1606, 12 de agosto de 2007, pp. 6-9.

### **“Bajo la amenaza del pacto”**

Contenido / Resumen.

Fuentes de la PGR asegura que fueron 7 las reuniones que sostuvieron miembros del cártel del Golfo y el de Sinaloa para llegar a un acuerdo y cesar los ataques entre ambos cárteles rivales.

Estas reuniones sucedieron entre mayo y junio y los resultados fueron mínimamente dos: frenar la violencia entre ambos cárteles y trazar un mapa territorial del narcotráfico con la asignación oficial de territorios para cada uno de los cárteles.

Un funcionario de la PGR anónimamente asegura que este pacto preocupa demasiado a la presidencia y a la Secretaría de la Defensa Nacional; por lo que señala están preparando una contraofensiva particularmente en contra de Los Zetas, organización a la que se hace responsable por los últimos asesinatos, levantones, secuestros y extorciones.

“El narcopacto y el plan del gobierno federal para arremeter contra el brazo armado del cártel del Golfo se dan en vísperas de que el presidente Felipe Calderón firme un acuerdo con Estados Unidos para que se aplique en México una réplica del llamado Plan Colombia El proyecto del gobierno federal incluye apoyo financiero, armamento, equipo aéreo con tecnología de punta, así como entrenamiento por parte de las corporaciones estadounidenses para “eficientar” el trabajo de las policías mexicanas encargadas del combate del tráfico de drogas”.

Lo preocupante del asunto es que la guerra ya no es entre cárteles como le convendría al gobierno de Felipe Calderón sino ahora la guerra es entre el Gobierno Federal y el crimen organizado.

J. Jesús Esquivel, “Washington prepara el “gran golpe” contra “los zetas””, *Proceso* número 1606, 12 de agosto de 2007, pp. 10-15.

### **“Washington prepara el “gran golpe” contra “los zetas””**

Contenido / Resumen.

En una operación de inteligencia multijurisdiccional y multiagencial, en donde participaran la DEA, el FBI, la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA, se pretende dar un fuerte golpe a los integrantes del brazo armado del cártel del Golfo, Los Zetas.

El poder que Los Zetas manejan en operaciones relacionadas al narcotráfico obligó a la CIA a utilizar servicios de espionaje con el objetivo de diseñar estrategias para desarticular a este grupo que ya opera en los Estados Unidos.

Un informe confidencial estadounidense describe que Los Zetas están divididos en cinco subgrupos:

Los Halcones: sus operadores se dedican a recolectar información de actividades relacionadas con grupos enemigos y en especial del ejército mexicano.

La Maña: este subgrupo se especializa en secuestro y extorción, se ubican en Matamoros y Nuevo León y se dedican a recibir armas de alto calibre como bazucas y lanzagranadas, está encabezado por los hermanos Héctor y Gregorio Gamboa.

Las Ventanas: este subgrupo está integrado por jóvenes de entre 14 y 16 años de edad quienes se encargan de llevar información sobre movimientos poco usuales en territorios pertenecientes al cártel del Golfo.

\*Sin nombre: subgrupo aún no clasificado que está conformado por unas 20 personas encargadas de realizar actividades de contraespionaje dedicadas a interceptar todo tipo de comunicación electrónica que pueda servirle al cártel.

Los Leopardos: este subgrupo está conformada exclusivamente por mujeres empleadas por Los Zetas, se hacen cargo de table dance y bares que son utilizados como casas de seguridad.

“Un funcionario del gobierno estadounidense, quien habló bajo la absoluta condición de que no se divulgara su identidad, aseguró a Proceso que “muy pronto” se dará un golpe muy duro a las estructuras de operación de Los Zetas y del cártel del Golfo”.

Ricardo Ravelo, “En el noroeste complicidad policiaca”, *Proceso* número 1609, 2 de septiembre de 2007, pp. 12-16.

### **“En el noroeste complicidad policiaca”**

Contenido / Resumen.

La irá del Cártel de Golfo ha salido a flote luego de que en el mes de abril se capturaron a siete miembros de los Zetas en una discoteca en Reynosa Tamaulipas. Debido a lo sucedido; los sicarios decidieron cobrar venganza y levantaron a cuatro de los 26 agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Para que esto fuera posible el cártel pidió ayuda a policías del municipio de Guadalupe en Nuevo León.

Desde el 14 de abril agentes de la AFI fueron comisionados para realizar una tarea delicada y peligrosa: detener a siete integrantes de los Zetas quienes asistirían el día 17 a una discoteca en Reynosa Tamaulipas conocida como el Cincuenta y Siete.

El día del operativo (17) los agentes se encontraban concentrados en el campo Militar de Reynosa a la espera de recibir órdenes, el objetivo era detener a siete Zetas y a algunos halcones. El grupo de apoyo estaba integrado por policías ministeriales tanto de Reynosa como también de Nuevo León.

Aturdidos por el volumen de la música, los asistentes no se percataron de la entrada de los agentes, de esta manera se logró catear la discoteca y así detener a 10 personas mismas que se confirmaron eran integrantes de los Zetas; estos fueron llevados al campo militar donde fueron severamente interrogados.

Una vez detenidos los sicarios, estos fueron llevados a la Ciudad de México para su presentación ministerial. La mayoría de los afís estaban adscritos de igual manera a la ciudad de México, cuatro

decidieron quedarse un día más e ir de compras: Guimel Raúl Aponte, Oscar Alberto Vértiz, Luis Solís Solís y Víctor Omar Nolasco. Los cuatro agentes iban circulando en un vehículo Neon blanco.

Al mismo tiempo el cártel de Golfo comenzó a rastrear a los policías federales implicados en el operativo y detención de los Zetas. La organización criminal hizo uso de sus redes de comunicación y solicitó apoyo a policías ministeriales de Reynosa Tamaulipas y de Guadalupe Nuevo León. Un sujeto identificado como Zeta Lima pidió el apoyo de unos 20 policías ministeriales de Guadalupe Nuevo León.

Aproximadamente a las cinco de la tarde dos camionetas interceptaron en automóvil de los policías, comenzó el intercambio verbal en el cual los policías aseguraban que sólo estaban en la entidad por que habían entregado una documentación, razón que los sicarios no creyeron y los levantaron.

Fueron golpeados, torturados e interrogados en una casa de seguridad, además que les hicieron beber tequila y fumar marihuana para después declarar. Según las investigaciones y el testimonio de uno de los policías, en las acciones participó el líder del cártel del Golfo en Tamaulipas: Jaime González Durán, El Hummer.

Tiempo después fueron trasladados a un segundo sitio donde los vería otro líder Zeta. Uno de los policías logró ocultar entre su ropa interior un celular, que, según su declaración, sus plagiarios no pudieron identificar.

De esta manera se puso en contacto con el campamento para que los militares comenzaran a rastrearlos. El testimonio del agente señala que los sicarios se comunicaban en claves con policías ministeriales (presumiblemente de Guadalupe) en el que les ordenaron colocar el retén en dónde se les había dicho que: “el jefe (de los Zetas) llegaría ahí con los afis”.

Al llegar al punto los afis pudieron ver a lo lejos a seis o siete a varios uniformados y encapuchados de Seguridad Pública que simplemente los observaban. La persona que los traían en la camioneta les dieron de patadas y les ordenaron a los policías ministeriales que se los llevaran que ya sabían que hacer.

Al llegar al retén y ver que contaban con la presencia de militares; los policías nuevoleonenses aseguraron que habían detenido a los afis por sospechosos.

Después de una investigación realizada por la PGR se concluyó con la detención de 21 policías ministeriales de Nuevo León, mismos que se detectó su vínculo y participación con el cártel del Golfo.

Ricardo Ravelo, “El azote de los empresarios”, *Proceso* número 1610, 9 de septiembre de 2007, pp. 8-12.

### **“El azote de los empresarios”**

Contenido / Resumen.

El poderío de Los Zetas se ha extendido en toda la república, esto en su afán de alcanzar la supremacía en el tráfico de drogas.

Su emporio abraza desde Tijuana hasta Quintana Roo; pero ahora han dejado de concentrarse en la lucha contra y ejecuciones contra enemigos para dedicarse al secuestro de empresarios. A pesar de que se han aplicado grandes operativos en diferentes zonas del país, esto ha servido de poco.

Los Zetas se han afianzado principalmente en Torreón, donde pretenden quitarles la plaza a sus rivales. Debido a esto, es precisamente en la Comarca Lagunera (Coahuila y Durango) donde los secuestros y desapariciones han aumentado.

Los Zetas también han golpeado fuertemente a Baja California, Nuevo León, Campeche y Veracruz.

Marco Appel, “Condena formal contra México”, *Proceso* número 1615, 14 de octubre de 2007, pp. 54-55.

### **“Condena formal contra México”**

Contenido / Resumen.

El padre de Pancho León ha recurrido a todas las instancias legales, así como amigos e investigadores privados para poder dar con el paradero de su hijo, quien hasta antes de su desaparición se desempeñaba como socio de los hijos de Martha Sahagún en negocios de Pemex.

Existen varias versiones que han confundido más a los familiares, una habla del entramado con la política y otra lo atribuye al narcotráfico que impera en la Laguna.

Esta investigación se ha convertido en un dilema para autoridades de Coahuila y autoridades federales ya que a 10 meses de su desaparición aún no se sabe si fue levantado por el narco, si fueron los Zetas o por un asunto político.

“Cuando desapareció, Francisco León García vivía un momento de esplendor: explotaba con éxito una mina de mármol de 100 hectáreas, la cual le dejaba ganancias por más de 2 millones de pesos mensuales; de acuerdo con su padre, don Francisco León López, Pancho León estaba asociado con los hermanos Bribiesca Sahagún en múltiples negocios, los más importantes los tenían –dice él– en Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

Ricardo Ravelo, “El Cártel del Golfo intacto”, *Proceso* número 1616, 21 de octubre de 2007, pp. 26-28.

### **“El Cártel del Golfo intacto”**

Contenido / Resumen.

El Cártel del Golfo es la segunda organización criminal más poderosa del país y al mismo tiempo ha sido la más golpeada en los últimos sexenios. Según la PGR, gracias a los embates realizados por esta institución, el cártel del Golfo ha estado en importantes crisis por falta de liderazgo.

La última vez que esto ocurrió fue en 2003 cuando la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) capturó a Osiel Cárdenas Guillén, y con él un buen número de Zetas, en ese momento se vaticinó la desaparición del cártel.

“Sin embargo, golpes van y vienen; las bajas en sus filas son numerosas, lo mismo que las detenciones de zetas, que a la fecha suman más de 50 en todo el país y desde que inició la persecución en su contra, a principios de esta década

Los desaparecidos por secuestros y levantones son incalculables Por si fuera poco, se reforzaron las acometidas militares y policiacas en Tamaulipas, sede del grupo criminal, con lo que aumentaron el acoso y las persecuciones A pesar de ello, el cártel del Golfo muestra la fortaleza de su cimentación y su bonanza en todas las regiones que domina De hecho, su poder abarca una veintena de estados”.

Según un análisis realizado por la Secretaría de Seguridad Pública, con la detención de Osiel, la organización se reestructuró en bloques cada uno con representantes en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Estado de México y Coahuila.

Álvaro Rodríguez, “La otra guerra”, *Proceso* número 1617, 28 de octubre de 2007, pp. 16-19.

### **“La otra guerra”**

Contenido / Resumen.

Cerca de Ciudad Victoria, elementos de inteligencia militar encontraron un campamento de adiestramiento para Los Zetas, debido a esto, el brazo armado del cártel del Golfo inició una campaña mediática en contra de los elementos del ejército. Con esto dejan en claro que su poderío no sólo es en cuestión de armas sino también en cuestión del apoderamiento y la manipulación de los medios de información.

““(Las tropas) han sido sujetas a constantes campañas de desprestigio de carácter mediático por medio de movilizaciones sociales, pagadas por narcotraficantes del grupo del cártel del Golfo, basándose en argumentos falsos de supuestos maltratos y abusos del personal militar, con la intención de lograr el retiro o disminución de tropas desplegadas, inhibir el ímpetu de trabajo de mandos y tropas y sembrar en la ciudadanía la duda sobre la conveniencia del Ejército en labores de seguridad pública””.

El sometimiento de los medios de comunicación por parte del cártel del Golfo no se ha limitado a los levantamientos o a las amenazas hacia reporteros, quienes ante estas medidas han dejado de investigar ejecuciones o actividades ilícitas del narcotráfico, sino que además estos grupos delictivos llaman directamente a la redacción para obligar a los medios a difundir información que les interesa o que les conviene.

Ricardo Ravelo, “‘Soy un ‘treinta y cinco’...’”, *Proceso* número 1619, 11 de noviembre de 2007, pp. 10-15.

### “‘Soy un ‘treinta y cinco’...’”

Contenido / Resumen.

Un desertor de los Zetas de manera anónima explica cómo fue que, por órdenes del hasta entonces líder Heriberto Lazcano, El lazca, les ordenó soltar las armas por unos momentos.

Por medio de claves y vía radiofónica se les ordenó a los “treinta y cinco” (como se le conoce internamente a la tropa de los Zetas) además de sus jefes; se tenían que concentrar urgentemente en Matamoros Tamaulipas.

Integrantes del cártel del Golfo e integrantes del cártel de Sinaloa, grupos totalmente antagónicos viajaban a Matamoros para que históricamente se sentaran para sellar un pacto que acabaría con la guerra entre ambos. Además de repartirse el territorio y las rutas de trasiego para el contrabando de droga.

Este sujeto afirma haber sido parte de los Zetas, se escapó de una casa de seguridad, donde se encontraba recluido, para evitar ser víctima de las pugnas internas de la organización. Asegura que el Cártel del Golfo y el de Sinaloa ya se arreglaron y que además tanto la PGR así como el Ejército mexicano lo saben y ambas instituciones están cooperando para que tanto los del Golfo como los de Sinaloa no fracasen ya que si esto sucede el país puede estallar en violencia.

Ricardo Ravelo, “El Z-14”, *Proceso* número 1620, 18 de noviembre de 2007, pp. 36-39.

### “El Z-14”

Contenido / Resumen.

“Las encarnizadas batallas de los narcotraficantes, que en el gobierno de Felipe Calderón suman ya casi 2 mil ejecuciones, son descritas en el libro *Crónicas de sangre / Cinco historias de Los Zetas* El autor escudriña allí los hilos regionales de poder político y económico, así como los escudos policiacos que mueven los cárteles de Sinaloa y del Golfo; relata cómo éste, por medio de Los Zetas, se apodera del territorio de La Laguna y atenta contra el cacique de Gómez Palacio, Carlos Herrera Araluce, causando una estampida de empresarios –sometidos a levantones y amenazas–, mientras que sus rivales incursionan en Veracruz aplicándoles su propia “medicina” Con autorización de la editorial Random House Mondadori, que en estos días pondrá el libro en circulación, se reproducen fragmentos del capítulo sobre la ejecución del Z-14 durante una de las carreras de caballos que le aportaban millones de dólares en apuestas”.

### “Auto de formal prisión, a siete presuntos ‘zetas’”

**Redacción**

**Proceso**

**23 agosto 2007**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/210636/auto-de-formal-prision-a-siete-presuntos-zetas>

Campeche, Camp , 22 de agosto (apro)- La Procuraduría General de la República (PGR) informó hoy que el juez cuarto de Distrito en materia de procesos penales federales, con sede en el estado de México, dictó auto de formal prisión contra siete personas involucradas en los delitos de tráfico de indocumentados, contra la salud y secuestro, cometidos en esta entidad, entre quienes figura Onasis Magaña Medina, un reportero de nota roja.

En un comunicado, la PGR dijo que, como parte de las pruebas aportadas por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), se comprobó que los indiciados pertenecían a la organización delictiva encabezada por uno de los fundadores de “Los Zetas”, Nabor Vargas García, “El Z 20” o “El Débora”, quien, en medio de un tiroteo, fue detenido junto con 21 personas en Ciudad del Carmen, en abril pasado.

Añadió que se les aseguraron 38 armas de fuego; dos mil 175 cartuchos de diversos calibres; 113 cargadores del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; 40 chalecos tácticos; una granada de mano, y 30 insignias de la AFI.

De la aprehensión de ese primer grupo, derivó la captura, en esta ciudad, de José Luis Báez Aguilar, Vladimiro Francisco Magaña Medina “El Pancho Magaña”; Onasis del Carmen Magaña Medina, Rosendo Antonio Treviño Aranda, Carlos Augusto Cruz Luria, Andrés Alejo Jiménez, “El Cachetón”, y Héctor Jesús Ortiz Jiménez o Regino Plata Martínez, “El judicial” o “El ingeniero”, todos presuntos responsables de los delitos de delincuencia organizada, en la modalidad de tráfico de indocumentados y contra la salud.

Este último es presunto responsable del delito de privación ilegal de la libertad.

La decisión del juez quedó asentada en la causa penal número 32/2007, donde se relaciona a éstas personas con el grupo de “Los Zetas”.

Salvo el caso de Onasis Magaña Medina, detenido el pasado 5 de junio en el Palacio de Gobierno, los demás inculpados fueron detenidos en mayo de este año durante tres cateos realizados en Campeche.

Onasis Magaña había sido informante, primero, de la Policía Judicial del estado, corporación a la que posteriormente se incorporó como agente. Poco después ingresó al medio periodístico como reportero de la fuente policiaca en medios locales y por un breve lapso en un rotativo de Sinaloa, dedicado a la nota roja.

La PGR señaló que, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Siedo, los hoy procesados formaban parte de la célula comandada por Nabor Vargas García, quien fue detenido en abril de este año, en compañía de 21 personas pertenecientes al cártel del Golfo, quienes se dedicaban principalmente a cometer secuestros en el estado de Campeche.

**“Crónicas de sangre / Cinco historias de Los Zetas”**

**Redacción**

**Proceso****21 noviembre 2007****Consultada 4 diciembre 2019**<https://www.proceso.com.mx/87752/87752-chronicas-de-sangre-cinco-historias-de-los-zetas>**El Z-14**

Las encarnizadas batallas de los narcotraficantes, que en el gobierno de Felipe Calderón suman ya casi 2 mil ejecuciones, son descritas en el libro *Crónicas de sangre / Cinco historias de Los Zetas*. El autor escudriña allí los hilos regionales de poder político y económico, así como los escudos policíacos que mueven los cárteles de Sinaloa y del Golfo; relata cómo éste, por medio de Los Zetas, se apodera del territorio de La Laguna y atenta contra el cacique de Gómez Palacio, Carlos Herrera Araluce, causando una estampida de empresarios –sometidos a levantones y amenazas–, mientras que sus rivales incursionan en Veracruz aplicándoles su propia “medicina” Con autorización de la editorial Random House Mondadori, que en estos días pondrá el libro en circulación, se reproducen fragmentos del capítulo sobre la ejecución del Z-14 durante una de las carreras de caballos que le aportaban millones de dólares en apuestas.

A la distancia parecían espejos en movimiento deslumbrando al sol...

Sólo quienes, entre la tupida vegetación, podían sortear el camino y acercarse a la explanada, disolvían el espejismo: así resplandecían los medallones y parabrisas de más de 200 vehículos de lujo, entre los que, orondas, prepotentes, destacaban las “cuatro por cuatro” de llantas enormes –Ranger, Yukon, Avalanche, Lobo– estacionadas desordenadamente, aquella tarde del 3 de marzo de 2007, en un paraje de Villarín.

A la entrada de esa comunidad veracruzana de unos 300 habitantes, que recientemente había saltado a la fama por celebrar carreras de caballos de acaudalados ganaderos y poderosos narcotraficantes, se avistaban ya las trocas verde olivo o negro metálico de formidables defensas y se percibía una mezcla del olor a barbacoa, carnitas y carne asada de venado que, a la sombra de la arboleda, consumían algunos de los asistentes pendientes de sus Hummers, las camionetas más codiciadas por los narcotraficantes de todos los pelajes que habían llegado procedentes de Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas, el Distrito Federal y McAllen, Texas Su propósito: Poner a competir finos caballos pura sangre y apostar cantidades que podrían sumar millones de dólares.

(...) La pobreza de Villarín, donde se mantienen en pie apenas unas 150 casas, no alcanza a imaginar el poder económico de los empresarios y ganaderos que cada fin de semana llegan ansiosos de calar a sus mimados corceles Se calcula que cada uno de éstos cuesta por lo menos 35 millones de dólares, y todo el mundo sabe que los hombres que han bajado de los vehículos de vidrios polarizados van a apostar una bolsa de por lo menos 25 millones de dólares en cada justa.

Antes de este próspero y animado período que el 3 de marzo culminaría en tragedia, la tranquilidad de Villarín bordeaba el aburrimiento (...) El principal problema de Villarín, solían decir sus habitantes, es que no había problemas Y, como si los hubieran invocado, en junio de 2006 comenzaron a llegar.

Todo empezó cuando Efraín Teodoro Torres, miembro del grupo armado conocido como Los Zetas, irrumpió en la comunidad invitado por Marciano Nayen y su hijo Arturo, quienes lo conocieron tiempo

atrás en el puerto de Tuxpan atraídos por su debilidad compartida: los certámenes equinos Perseguido por sus rivales del cártel de Sinaloa, Torres buscaba un sitio tranquilo para apaciguar su vida de tráfuga, de fugitivo, de matón Más aún cuando, por aquellas fechas, ya era representante del escudo armado del cártel del Golfo en tierras veracruzanas.

El Efra, como también le decían, contaba que un día decidió cambiar su vida de jodido por la fortuna y el poder del narcotráfico Resuelto a ser temido y respetado a cualquier costo, simplemente dijo:

–La miseria ya me hartó Mi vida no tiene ya sentido Me voy.

Incorporado poco después en las filas del cártel del Golfo, pronto destacó en el manejo de la droga y las confrontaciones a balazos Esto, con su plus de adrenalina, lo volvió, en efecto, tan temido y respetado que el mando supremo de dicho cártel consideró que no había nadie más capacitado que él para encargarse del estratégico estado de Veracruz.

Sin embargo, provisto ya de fama, poder y dinero, muchísimo dinero, Teodoro Torres se percató de que necesitaba, además, esparcimiento y seguridad Era perseguido en todas partes y resultaba imperativo relajar sus nervios Se hizo entonces de una cuadrilla de caballos y, con apoyo de funcionarios de Veracruz y de la Secretaría de Gobernación –reguladora de estas justas–, consiguió carriles profesionales para organizar competencias internacionales sin que nadie perturbara su clandestinidad.

Pero como aún le faltaba el paradisiaco refugio de sus más recientes sueños, decidió visitar a los Nayan, y éstos, encantados, le brindaron el lugar Allí tendría no sólo seguridad y tranquilidad, sino también profesionales cuidadores de caballos y espacio para realizar las competencias e hincharse de dinero.

Con el respaldo oficial –no podía ser de otra manera–, Villarín se convirtió, de la noche a la mañana, en una de las cuatro plazas más importantes del país que celebran carreras ecuestres ilegales Comparte el honor con Cintalapa (Chiapas), Guadalajara y el Estado de México La localidad empezó a ganar celebridad tan pronto como se apersonaron grandes ganaderos y empresarios de historia nebulosa que veían en ella el sitio ideal para dar rienda suelta a sus pasiones.

() Los malos signos, barruntos ya del fatídico 3 de marzo, se presentaron desde entonces La primera cuadrilla alojada en Villarín no se aclimató Acarreados de lugares altos y fríos, los animales resintieron de inmediato el clima cálido-húmedo y disminuyeron su rendimiento Algunos bajaron de peso en unos cuantos días a consecuencia del calor, en tanto que otros sufrieron una merma preocupante en la velocidad cronometrada Su propietario no tuvo entonces más remedio que llevarlos de regreso a las alturas, y sí, el clima frío les devolvió la prestancia.

La siguiente cuadrilla la conformaban seis animales de los más finos que, a diferencia de los anteriores, presto se adaptaron Para cuidarlos (), el Z-14 tenía por lo menos 10 empleados, tres de los cuales eran miembros de una familia afincada en el lugar Aparte de su chofer, los más importantes de sus colaboradores eran expertos concentrados en atender los caballos del “patrón”, como todo el mundo le decía Los cuidadores no tenían sueldo, pero estaban tan bien estimulados que funcionaban bajo un jugoso trato: les pagaban 15% de la bolsa obtenida en una carrera estelar Por ejemplo, si el Z-14 ganaba 1 millón de pesos, el cuidador del caballo se llevaba 150 mil, libres de polvo y paja.

() Además, el intenso calor, que suele debilitar a los equinos, tenía su remedio: del techo de cada pesebre pendía un potente ventilador para refrescarlos durante el día y, si era necesario, por las noches. Así vivía Cuadritos, el preferido del Z-14 Imponente, brioso, de prestancia elástica y alerta, el cuerpo estético de Cuadritos lucía ancas soberbias, fuertes metacarpos y ágiles falanges Cuadritos, cuyo valor se calculaba en unos 350 mil dólares, dejaba con la boca abierta a cualquier entrenador. Era uno de los caballos más veloces del país. Cuando lo ponían a prueba, desplegaba toda su energía y alcanzaba una marca que decían insuperable: 105 segundos en 200 varas ()

Ya eran casi las 2:00 de la tarde cuando aquel 3 de marzo, agujoneados por el alcohol, varios concurrentes procuraban acercarse a los carriles centrales. Todo el mundo quería estar en primera fila, cerca de la pista, para no perder ningún movimiento de los animales y, en particular, del prodigioso favorito: El Alexander.

Antes del disparo de salida –la primera competencia arrancararía a las 3:30 de la tarde– habían llegado unas 750 personas que, a la sombra de los árboles y bajo las palapas, disfrutaban de las neveras repletas de hielo y cervezas que sudaban, así como de las botellas de tequila, ron y brandy pasadas de mano en mano. Todo el pueblo estaba enfiestado: lanzaba cohetes y escuchaba la música al máximo volumen, sin importar que en las caballerizas los “cuarto de milla” y los pura sangre se pusieran nerviosos.

Los espectadores de la región se confundían con los narcotraficantes llegados de lejos, y el único indicio de peligro eran las personas armadas que miraban en todas direcciones mientras en los alrededores, recostados o alertas al pie de los árboles, acechaban varios policías municipales. Extrañamente, vigilaban una narcocarrera que carecía de todos los permisos. E inclusive después de lo ocurrido ese día, ni las dependencias municipales ni las estatales reconocieron haber mandado guardias al lugar.

–La autoridad reguladora de esos eventos es Gobernación –declararía más tarde Reynaldo Hernández Escobar, secretario de Gobierno del estado, quien dijo, además, no haberse enterado de que allí se habían reunido algunos personajes buscados por la justicia y amigos del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

() Oficialmente, los organizadores habían programado cinco carreras En la última, la estelar, correrían. El Huachinango, El Huracán y El Alexander, tres de los caballos más rápidos de México, según rezaba la propaganda que circulaba por el pueblo. El tercero era propiedad de Efraín Teodoro Torres, quien se decía oriundo de Coatzintla. En las apuestas, la mayor parte de los presentes se volcarían en apoyo del portentoso corcel del Z-14.

() Aunque las primeras cuatro lizas cerraron sin contratiempos –los ganadores estaban contentos, los perdedores no tanto–, al hallarse próxima la quinta menudeaban los rostros irritados que espetaban insolencias.

Eran ya cerca de las seis de la tarde cuando se pusieron en la línea El Huachinango, originario de Cintalapa, Chiapas; El Huracán, de Tuxpan, y El Alexander, programados para correr a cuatro mecates (Cada mecate representa 100 varas, y cada vara equivale aquí a 119 metros) La bolsa: 10 millones de pesos.

Los efectos del alcohol no podían ya ocultarse. Con la voz descompuesta y la mirada extraviada, varios de los asistentes prorrumpián en improperios, entre los que sobresalían las mentadas de madre y los retos de revancha.

() Los elementos de la Policía Municipal, bajo el mando del comandante Gerardo Gutiérrez Monraga, no perdían de vista a su cliente, el Z-14, a quien brindaban protección.

El Huachinango, El Huracán y El Alexander fueron conducidos ceremoniosamente, garbosos, elegantes, al punto de partida El Z-14 y su séquito se situaron cerca del carril, pegados a la meta, donde el cronometrista, nervioso, preparaba el reloj.

En medio de un creciente murmullo, resonó el disparo de salida.

Los tres arrancaron nerviosos El Huachinango tomó ventaja de inmediato La gente gritaba: “¡Apriétalo, apriétalo!”, pero a las primeras de cambio perdió velocidad y fue alcanzado por El Alexander.

Los partidarios del favorito aplaudían y daban taconazos en la tierra; sus contrincantes sacudían los puños y rechinaban los dientes Al aproximarse a la meta, los espectadores se desgañitaban: El Huachinango y El Alexander iban parejos.

De pronto, mientras los cuerpos de los presentes se retorcían, se oyó gritar a uno, con voz grave y al parecer inapelable: “¡Ganó El Huachinango!”, “¡Ganó El Huachinango!”, a lo que el vecino respondió: “¡Ganó El Alexander, ganó El Alexander!”.

A ambos se sumaron, divididos, los demás espectadores, empezando por los dueños: había dos caballos “ganadores”... Y, al punto, entre los rostros enardecidos o asombrados brotó la discusión:

–¡Te gané por media cabeza! –soltó el Z-14 en medio de la confusión

–¡Me ganaste madres, págame! –reclamó el propietario de El Huachinango, con los ojos inyectados y la piel enrojecida

Las disputas prosiguieron con el apoyo convencido de cada uno de los bandos, hasta que brotaron ciertas dudas:

–Esto está muy apretado –dijo el fotógrafo contratado para el evento Denme media hora, voy ampliar las gráficas originales y regreso para que se decida.

Apenas pasaban de las 6:00 de la tarde cuando el fotógrafo partió rumbo al puerto de Veracruz.

Mientras tanto, la discusión subía de tono y, de repente, surgieron los disparos. Pero no provenían de los bandos rivales por la carrera, sino que, de acuerdo con testigos, los primeros balazos salieron del graderío. El autor de aquellas detonaciones era un sujeto de estatura mediana, piel morena, al parecer centroamericano, con dos armas a la vista: un rifle AK-47 y una pistola de 09 milímetros.

Su cuerpo se cimbraba con las deflagraciones.

De acuerdo con los testimonios, su probable y único objetivo era asesinar al Z-14 por una vieja deuda En torno a éste y por todas partes, la gente había emprendido la estampida; se escondía detrás de las

neveras, las camionetas, los matorrales, mientras los gatilleros de Teodoro y otros al servicio de los narcos disparaban hacia la multitud con la esperanza de parar a aquel “cabrón”.

Las balas zumbaban y los presentes, aterrorizados, veían caer un cuerpo y otro y otro, hasta que, incrédulos, observaron cómo el invencible Z-14 manoteaba y se derrumbaba con la vista perdida en medio de una polvareda.

Aún recuerdan esa imagen como una pesadilla. Afirman que varios de los concurrentes fueron muertos en la refriega y que muchos otros gritaban de dolor por las heridas. Calculan que el tiroteo duró una media hora. Los policías que brindaban protección al Z-14 tomaron partido y, junto con algunos sicarios, arremetieron contra el pistolero, que salió del graderío, y contra quienes parecían secundarlo. No cesaron de dispararle hasta que aquella masa humana se desplomó ensangrentada.

() En el momento en que partían a toda velocidad los coches, trocas y camionetones, los guaruras del Z-14 levantaban a su jefe resollando todavía. Cuando lo transportaban al hospital Milenio, del puerto de Veracruz, falleció en el camino: había recibido siete balazos.

El gobierno de Veracruz aseguró que en el enfrentamiento sólo hubo dos muertos: Efraín Teodoro Torres, el Z-14 –a quien se identificaría también como Roberto Carlos Carmona Casperín–, y el sujeto que desató la balacera y cuya identidad se desconoce. Pero en el pueblo la gente asevera que sobre los carriles había como 10 muertos, que fueron subidos a los vehículos por familiares y amigos que los arrastraban como fardos.

Tras la batalla, Villarín lucía desolado. Unas cuantas personas que permanecieron en la comunidad estaban como pasmadas. Nadie quería recordar la carrera ni la balacera, pero observaron que la Policía Intermunicipal tardó dos horas en llegar, cuando el escenario del enfrentamiento había sido “limpiado”. Los gendarmes sólo encontraron un reguero de vasos, platos, botellas de licor, manchas de sangre y cientos de casquillos de todos los calibres ().

---

El cuerpo del Z-14 fue trasladado al Servicio Médico Forense de Boca del Río, con tan mala fortuna todavía que, sobre una plancha de concreto, quedó a un lado del cadáver de su asesino. El hombre que había iniciado los disparos en Villarín lucía, tatuadas en el pecho, las figuras estilizadas de un dragón y una mujer. Como no había imágenes ni registros de él en los archivos, fue mantenido allí varios días en espera de que algún amigo o familiar llegara por el cuerpo. En virtud de que nadie lo reclamó, vencido el plazo legal fue arrojado a la fosa común en calidad de desconocido.

En cuanto al Z-14, tardó un par de días en ser reconocido por presuntos familiares. La prensa veracruzana, alimentada por rumores, había complicado aún más su identificación. Aseguraban que se trataba del mismísimo Heriberto Lazcano Lazcano, el Z-3, máximo jefe del grupo armado Los Zetas, quien había desertado del Ejército a finales de los años noventa para llegar hasta la cumbre del círculo protector del cártel del Golfo. Como era uno de los hombres más buscados por la justicia mexicana, la propia PGR investigó si, en efecto, aquél era el cadáver de Lazcano. El dato resultó falso “Heriberto Lazcano está vivo” –concluyó la PGR– y sigue siendo el jefe supremo de Los Zetas.

En vez de ayudar, las autoridades veracruzanas multiplicaron las dudas, no sólo por los datos que filtraban a la prensa, sino por la displicencia mostrada para deshacerse del “bulto”. Resulta que, dos días después de que el cadáver del Z-14 fue alojado en el Semefo de Veracruz, llegó una mujer que se identificó como Julia Casperín Zapata.

–Quiero que me entreguen a mi hijo Yo soy su madre –dijo la mujer, blandiendo su credencial de elector.

() Sea cual fuere la verdadera identidad del Z-14, Efraín Teodoro Torres o Roberto Carlos Carmona Casperín –la PGR lo identificó con ambos nombres, mientras que el Servicio Médico Forense lo entregó bajo el segundo– (), la eficiente estructura administrativa del alto mando de Los Zetas dispuso de inmediato su reemplazo en Veracruz:

El nuevo jefe de Los Zetas en el estado se llama Miguel Treviño Morales, alias El Z-40, quien probablemente sepa más que las autoridades veracruzanas sobre las andanzas del cadáver de su antecesor, que aún no puede descansar en paz.

## 2008

Arturo Rodríguez García, “Las batallas por Tamaulipas”, *Proceso*, número 1628, 13 de enero de 2008, pp. 26-29.

### “Las batallas por Tamaulipas”

Contenido / Resumen.

Por un lado, la PGR asegura que los Zetas están acabados; por otro, Felipe Calderón insiste en que continúa la lucha contra los cárteles. “Pero lo cierto es que en las ciudades fronterizas de Tamaulipas los sicarios se pasean sin disimulo por las ciudades de Matamoros, Reynosa y Río Bravo, en donde incluso enfrentan a los soldados y policías federales. [...] Esas escenas son cotidianas en la región, dicen los lugareños”.

Un altercado ocurrido en Matamoros el lunes 7 de enero terminó con la detención de Víctor Ibarra Santana, Ricardo Zamora López, Braulio Hinojosa Cisneros, Víctor Hugo Hinojosa Rodríguez, José Raúl González Sánchez, Raúl Treviño Solís, Esteban Valdez de los Santos, José Eduardo Treviño Solís, Diego Alberto Hernández Vázquez y Manuel Obregón Jasso; así lo dieron a conocer los medios de comunicación. Se les acusó de “los delitos de homicidio, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, lesiones y los que resulten”.

“El miércoles 9, el periódico El Norte informó sobre la llegada de 25 camionetas de la Policía Federal a la zona, con lo que ahora son 3 mil 800 los efectivos concentrados en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, entre militares y policías federales. Diariamente improvisan retenes intermitentes sobre las

carreteras, patrullan algunos sectores de Reynosa, Río Bravo y Nuevo Progreso y desfilan por las principales avenidas.

Se desconoce aún si realizan cateos, detenciones o aseguramientos. Lo que sí se sabe es que hay psicosis entre los habitantes de esos municipios”, tanto así que han suspendido clases en varias escuelas debido a amenazas de bombas o secuestros a los hijos de militares que estudian en dichos planteles. En Río Bravo, la población se encuentra desconcertada ya que los retenes no duran. Por otro lado, la labor periodística alrededor de estos conflictos se ve sumamente limitada debido a la casi nula información de la PFP.

Según el periódico El Norte, Calderón aseguró que lo que se pretende será atacar directamente a los cabecillas de los cárteles como una nueva estrategia; mientras que el titular de la SIEDO, Noé Ramírez Mandujano, “declaró en un foro académico que los Zetas son una organización en agonía”. Pero la realidad es otra: “Seis semanas antes del tiroteo del lunes 7, el 29 de noviembre, también en Río Bravo, el político del Partido del Trabajo y empresario Juan Antonio Guajardo Anzaldúa fue ejecutado por un comando que se movilizó en tres camionetas. [...] El operativo fue planeado con precisión, sin prisas. El saldo: cinco muertos, entre los que se encontraban colaboradores de Guajardo Anzaldúa y elementos de la AFI asignados a la custodia personal del político. [...] Hasta la fecha no hay ningún detenido por aquel múltiple homicidio”.

Arturo Rodríguez García, “Entre ‘Los Zetas’ y Migración”, *Proceso*, número 1629, 20 de enero de 2008, pp. 32-34.

### **“Entre ‘Los Zetas’ y Migración”**

Contenido / Resumen.

Marta, de 29 años; Mariza, de 25, y Ramón Antonio, de 23, llegaron lesionados el 3 de diciembre de 2007 a Belén, la Posada del Migrante, un albergue coordinado por el sacerdote Pedro Pantoja Arreola, quien preside la Pastoral Social de la Diócesis de Saltillo. Los indocumentados centroamericanos se escaparon de una casa de seguridad en la que varios sujetos “que dijeron pertenecer a los Zetas los mantuvieron secuestrados”. Ellos tres, junto con otros cinco indocumentados, durante su secuestro “fueron torturados para que llamaran a sus familiares en Estados Unidos, a quienes debían pedirles que enviaran dinero. Como los rehenes no tenían forma de hacerlo, sus captores violaron a las dos mujeres. [...] Aprovechando una ausencia de los captores, Marta, Mariza y Ramón Antonio consiguieron salir de la residencia y esconderse en una casa cercana, cuyos habitantes los llevaron al refugio Belén”.

De los sujetos que dijeron pertenecer a los Zetas, algunos portaban el uniforme del Instituto Nacional de Migración. Jesús Torres Charles, procurador de justicia estatal, aseguró que se realizará una investigación; mientras que Pantoja se limita a desear que las autoridades hagan su trabajo. Asimismo, comenta que “cuenta con testimonios de migrantes detenidos por la Border Patrol, que en lugar de considerarlos como indocumentados los retiene como testigos en investigaciones de narcotráfico. Esto se debe a que los traficantes los hacen transportar drogas. [...] El pasado 5 de diciembre, los directores de refugios migratorios de la frontera norte se reunieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y advirtieron que en los ataques contra migrantes participan bandas de polleros, que los secuestran a fin de exigir

dinero a sus familiares radicados en Estados Unidos”; en la reunión también se acordó la desaparición de las estaciones migratorias que no cuenten con medidas elementales de respeto a la dignidad de las personas. Sobre esta línea, la CNDH “emitió una recomendación al gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, y a la directora del INM, Cecilia Romero Castillo, por la vejación a los indocumentados en las estaciones migratorias de la entidad. De acuerdo con el documento, en la estación migratoria de Saltillo la Secretaría de Salud estatal practica exámenes sanitarios que la CNDH considera contrarios a la dignidad de las personas. La queja ante la comisión fue interpuesta por 17 migrantes de origen hondureño, salvadoreño y guatemalteco, a quienes en noviembre de 2006 se les ordenó introducirse en el ano un hisopo de 20 centímetros para una prueba de cólera, o se quedarían encerrados más tiempo”; la CNDH exhorta al gobernador para que en esa casa migratoria esa práctica se limite a personas sospechosas de enfermedades específicas, como el cólera, muy a pesar de las autoridades sanitarias.

Gloria Leticia Díaz, “Territorio del miedo”, *Proceso*, número 1630, 27 de enero de 2008, pp. 20-24.

### **“Territorio del miedo”**

Contenido / Resumen.

El estado de Zacatecas ha perdido la tranquilidad de la que antes gozaba, su población vive atemorizada de la guerra que libran los cárteles de la droga, ya que “grupos de sicarios recorren la entidad cometiendo secuestros y extorsiones sin que nadie los detenga”. Amalia García Medina, gobernadora de la entidad “recibió el reporte de que integrantes de Los Zetas, el brazo armado del cártel del Golfo (y que han ido desplazando a los grupos del cártel de Sinaloa en la zona), operaban en el estado”; instruyó a sus colaboradores para que estuvieran pendientes de “grupos extraños” y al mismo tiempo de estar al tanto de no alertar a la población, pero ostenta una actitud desentendida ante esa situación. “Durante los dos últimos años los diarios de Zacatecas, cautos en el tratamiento de asuntos relacionados con el narco, han informado de por lo menos 32 asesinatos con las características del crimen organizado; 11 de las víctimas eran policías”. En la población, son frecuentes las extorsiones telefónicas donde los delincuentes se identifican como Zetas, con la intención de alimentar el miedo y la paranoia (por ejemplo, “un ganadero que estuvo secuestrado casi un mes refiere a una reportera parte de su experiencia. Se muestra inquieto y mira para todos lados, pues supone que la conversación está siendo grabada desde algún sitio. Está convencido de que el lugar de la cita con la reportera está rodeado por ‘esos señores’. Afirma que no acudió a la procuraduría estatal ‘porque no quería arriesgar a su gente’, y que a pesar de que pagó su rescate no se siente seguro. Sigue recibiendo llamadas telefónicas para decirle que él y su familia son vigilados”), lo cual orilla a las familias a irse a EU.

“Hace varias décadas se consideraba que por Zacatecas pasaba el trasiego de enervantes, pero ahora sus habitantes también son consumidores con niveles por encima de la media nacional”, y uno de sus principales centros de distribución es el penal de Cieneguillas, cuyo jefe de seguridad, Carlos Abraham Osorio, es acusado de proteger a una banda de reos.

J. Jesús Esquivel, “‘Los Zetas’ y los ‘Gatekeepers’, aliados fronterizos”, *Proceso*, número 1634, 24 de febrero de 2008, pp. 8-9.

### **“Los Zetas’ y los ‘Gatekeepers’, aliados fronterizos”**

Contenido / Resumen.

A la DEA le preocupa que los Zetas se muevan con facilidad en la frontera norte de México, ya que luego entran de manera clandestina a EU para cometer ejecuciones y secuestros en ciudades como El Paso, Houston y Dallas, afirma John Riley, jefe de la división de esta agencia: “hemos detectado que están involucrados aquí en Estados Unidos en secuestros de personas que después son llevadas a México”, comenta. Entre las víctimas hay colaboradores de cárteles rivales, como el de Juárez y el de Sinaloa. “El secuestro es la actividad delictiva que está dando más fortaleza a Los Zetas sobre el resto de las organizaciones criminales”. Como ejemplo de los grupos criminales, Riley señala a los Gatekeepers (Guardianes) que operan en la frontera. “Se trata de una organización delictiva tan importante como los propios cárteles; de hecho se dedica a pasar droga a Estados Unidos de manera independiente y a distribuirla entre estos grupos. [...] El problema con ellos es que cambian con mucha frecuencia sus métodos de operación. [...] Lo que están haciendo es contratar a gente que haga las labores de pasaje de droga o dinero, personas que ni siquiera se conocen entre ellas, para evitar que dejen más evidencias”. Lo que se sospecha es que los gatekeepers ya están colaborando con los Zetas, complicando así el trabajo de las autoridades de ambos lados de la frontera para contener el paso de droga a EU, las ejecuciones y los secuestros. “Riley afirma que la DEA ha detectado una asociación delictiva entre Los Guardianes y elementos del Ejército Mexicano. [...] ‘Muchos de sus miembros son exmilitares y expolicías o tienen contactos con ambas fuerzas, esto les facilita un cruce rápido de la frontera sin que nadie los detecte’”.

Arturo Rodríguez García, “La batalla de Torreón”, *Proceso*, número 1634, 24 de febrero de 2008, pp. 12-14.

### **“La batalla de Torreón”**

Contenido / Resumen.

Hay una crisis de seguridad en la Comarca Lagunera. Según *Proceso*, en lo que va del año “se han cometido 23 homicidios vinculados a la delincuencia organizada, y mientras los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Juárez pelean por lograr la hegemonía, los cuerpos policiacos y el Ejército exhiben falta de coordinación”. Esto se evidenció tras un enfrentamiento entre militares y miembros de los Zetas en Torreón el pasado 19 de febrero, donde “la incomunicación entre los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno y el Ejército se tradujo en diferentes y hasta contradictorias versiones de los hechos”.

J. Jesús Esquivel, “De las pistolas a las armas de asalto”, *Proceso*, número 1634, 24 de febrero de 2008, pp. 15-17.

### **“De las pistolas a las armas de asalto”**

Contenido / Resumen.

Está presente la necesidad de que el gobierno mexicano mejore la vigilancia en la frontera norte y el rastreo de armamento, puesto que las flexibles leyes de EU para controlar el tráfico de armas facilitan que pasen a México municiones y equipo de alto poder, cuyos principales importadores son los cárteles del narcotráfico. La creciente demanda de armamento “forzó a los proveedores a robar este tipo de equipo bélico a ejércitos de Centroamérica y Sudamérica, asegura Dewey Webb, jefe de la ATF, encargado de combatir el contrabando de armamento en Houston, McAllen, Laredo y otros puntos fronterizos”. Webb tiene la certeza de que hay armas militares que llegan a México a través de otros países, centro y sudamericanos, principalmente, aunque también de su país, no lo niega. “De acuerdo con el ATF, el equipo bélico favorito de los narcotraficantes mexicanos son los rifles de asalto AK-47, la pistola FM 57 (bautizada por los criminales mexicanos como la ‘matapolicías’), el lanzacohetes RPG-22, el lanzagranadas M72-A3, los morteros de 40 milímetros y las subametralladoras P-90”. Resulta evidente el cambio de uso de armas, “que ha sido de armas pequeñas a las de tipo militar” (armas de asalto). Los Zetas es uno de los principales grupos que más demanda armas.

Ricardo Ravelo, “La toma de Cancún”, *Proceso*, número 1640, 6 de abril de 2008, pp. 12-14.

### **“La toma de Cancún”**

Contenido / Resumen.

Diversos expedientes y testimonios de testigos protegidos revelan que la plaza más codiciada por los ocho cárteles del país, Cancún, originalmente en manos del cártel de Sinaloa, fue tomada en 2004 por Los Zetas con el apoyo de funcionarios y agentes de la PGR. Los propios documentos indican que el titular de esta dependencia, Rafael Macedo de la Concha, obligado a hacer frente a la violencia, concentró su atención en acusaciones prefabricadas contra el personal de la delegación de Quintana Roo, sin frenar aquella cruenta ocupación de exmilitares mexicanos y exkaibiles contratados al efecto.

Tras dominar el estado de Tamaulipas [...] Los Zetas concibieron su plan de llegar a Quintana Roo, dominado por el cártel de Juárez [...] Para lograr sus objetivos, Jorge Briceño López, El Cholo, dispuso que otros dos miembros de Los Zetas, [...] se desplazaran de Tamaulipas a Cancún con una misión: entrar en contacto con la policía para obtener protección y posteriormente efectuar “levantones”, secuestros y asesinatos de personas dedicadas a la venta de droga. [...] de septiembre a noviembre de 2004, Cancún y buena parte de la Península de Yucatán ya estaba plagada de Zetas y exkaibiles. [...] A pesar de que los expedientes revelan que eran Zetas, exkaibiles y exmilitares mexicanos desertores del ejército los causantes de las ejecuciones de “afis” y de otras personas protectoras de unos mil expendios de cocaína, el procurador Macedo de la Concha sólo ordenó a José Luis Santiago Vasconcelos integrar a la averiguación para consignar a todos los funcionarios de la delegación de la PGR en Quintana Roo [...] 2005 un juzgado federal ejerció acción penal contra 27 agentes y altos funcionarios de la PGR en Quintana Roo, [...] A tres años de estos hechos solo 10 personas han recobrado su libertad al

desmoronarse la investigación por inconsistente. Los otros 17 detenidos esperan sentencia [...] a pesar de que la mayoría de los testigos protegidos utilizados por la PGR para reforzar la investigación han reconocido que nada de lo que declararon inicialmente les consta y que todo fue parte de un ardid fraguado dentro de la SIEDO. [...] Lo que la PGR no investigó [...] es cómo el grupo armado del cártel del Golfo (la mayoría de ellos son exmilitares) planearon la ocupación de la plaza de Cancún. En el auto de término constitucional 10/2006, el presunto narcotraficante guatemalteco William Mendoza González [...] refiere en su declaración ministerial [...] que se retiró del ejército de Guatemala y aguardó en su casa el momento de ser llamado por Los Zetas para operar en México. [...] Los Zetas, según el expediente de este caso, apoyados por exkaibiles, ejecutaron las matanzas que mantienen en la cárcel a más de 20 altos funcionarios de la PGR, [...] el procurador Rafael Macedo de la Concha omitió investigar a Los Zetas y exmilitares mexicanos que penetraron en la plaza de Cancún y arremetió legalmente contra altos funcionarios de la PGR [...]

Velia Jaramillo, “Guatemala, ‘bodega’ del narco mexicano”, *Proceso*, número 1643, 27 de abril de 2008, pp. 18-19.

### **“Guatemala, ‘bodega’ del narco mexicano”**

Contenido / Resumen.

A las 2:00 de la tarde del 25 de marzo, cuando los habitantes del municipio de Río Hondo, departamento de Zacapa, lidiaban con el sopor, varios hombres armados llegaron en sus vehículos al estacionamiento del balneario La Laguna.

Desde el exterior, un bando rival abrió fuego y empezó una batalla feroz con fusiles A-15, AK-47, pistolas 9 milímetros y granadas de fragmentación Durante 25 minutos se dispararon 400 ojivas y dos de los vehículos fueron incendiados [...] murieron 11 narcotraficantes

Uno de ellos, que había llegado al lugar en una camioneta blindada, Juan León Ardón, alias Juancho, fue reconocido como un aliado del cártel del Golfo [...] La primera hipótesis de la policía apuntó a que el autor del ataque había sido el cártel del Golfo, de Osiel Cárdenas Guillén, para el que Juancho trabajó durante años antes de empezar a conseguir su independencia en las actividades del narcotráfico

Otra señalaba que Juancho había entrado en disputa con el cártel de Sinaloa y El Chapo Guzmán por el control del trasiego de drogas [...] Los dos cárteles mexicanos más afianzados en territorio guatemalteco, declaró a *Proceso* el exsecretario de Análisis Estratégico, Édgar Gutiérrez, son los de Sinaloa y del Golfo [...] la ruta norte, que comprende los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Petén, Quiché y Huehuetenango, está controlada por el cártel local de los Mendoza, que opera desde Izabal, y el de los Lorenzana, dirigido por Walter Lorenzana, que lo hace desde Zacapa, ambos aliados al cártel del Golfo

En la costa sur y occidente participan cárteles emergentes, más pequeños, como los de Chamalé, Luciano y Serceño, cercanos al cártel de Sinaloa, dirigido por El Chapo Guzmán el cártel del Golfo, ha consistido en reclutar a exmilitares guatemaltecos, principalmente kaibiles, en su grupo armado Los Zetas, [...] Los cárteles guatemaltecos se encargan “de la recepción, embodegamiento y traslado” de la droga proveniente de Colombia con destino a México y Estados Unidos “No podemos negar que Guatemala es la gran bodega de los mexicanos Acá se embodega el producto y se manda al norte”, [...] Hasta ahora, distintos cárteles guatemaltecos que trabajan para organizaciones mexicanas rivales habían compartido rutas y territorios sin entrar en conflicto, en una especie de pacto [...] Por regla general, observó Gutiérrez, el control de las rutas locales del narco depende directamente de los cárteles mexicanos Los narcotraficantes guatemaltecos fungen como intermediarios, y cuando han tratado de ganar independencia, han sido ejecutados o aprehendidos[...]

Ismael Bojórquez, “República de la violencia”, *Proceso*, número 1645, 11 de mayo de 2008, pp. 7-10.

### **“República de la violencia”**

Contenido / Resumen.

Cada vez queda más claro que la violencia asociada al narcotráfico en México no puede ser contenida con nada y por nadie –ni por la federación ni por los estados ni por fuerzas policiacas o militares ni por la combinación de ambas [...] corroe prácticamente todo en la República entera la banda de sicarios se enfrentó a un grupo de policías federales que recibieron apoyo de la Policía Ministerial El resultado fue de cinco muertos –tres delincuentes y dos policías locales–, 13 gatilleros arrestados, así como el decomiso de armas y de 370 mil dólares [...] el coordinador general de Seguridad Regional de la Policía Federal, Édgar Eusebio Millán Gómez, organizó una conferencia de prensa en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva [...] los funcionarios informaron sobre el enfrentamiento del día anterior [...] Millán Gómez una semana después de su visita, fue ejecutado en el Distrito Federal [...] los detenidos fueron trasladados en un avión a la Ciudad de México Sólo pudo averiguarse que éstos pertenecen a la organización de los hermanos Beltrán Leyva, encabezada por Marcos (Arturo) viernes 2 se desató la violencia En varios hechos ocurridos casi de manera simultánea, cuatro agentes de la PFP murieron acribillados cuando patrullaban el centro de la ciudad a bordo de dos unidades; en la sindicatura de Imala, a 15 kilómetros de Culiacán, dos policías municipales fueron ejecutados; hubo balaceras en diferentes colonias de la ciudad en las que dos sicarios resultaron muertos, y una persona fue ejecutada a un costado del estadio de Los Dorados de Sinaloa [...] varios agentes confiaron a este reportero que el cártel de los hermanos Carrillo Fuentes había establecido una alianza con Los Zetas para atacar a la organización de Joaquín El Chapo Guzmán [...] otra versión, recogida por Proceso en las oficinas de gobierno, indica que los hermanos Beltrán Leyva entraron en conflicto con El Chapo e Ismael El Mayo

Zambada [...] El domingo 4 Culiacán despertó con una novedad: las narcomantas. En tres puntos de la ciudad aparecieron mantas presuntamente firmadas por Arturo [...] septiembre de 2006, un grupo de gatilleros levantó a Enrique Parra Torres que supuestamente había proporcionado información al Ejército que le sirvió para la captura de Luis Alberto Cano Zepeda, un sobrino de El Chapo Guzmán [...] El día 18 de ese mes depositaron el cuerpo en la puerta de la Novena Zona Militar con dos mensajes dirigidos a un militar al que sólo identificaron como [...] 2 de diciembre de 2006, pardeaba la tarde cuando una avioneta dejó caer cuatro cuerpos cerca de pueblo de Imala En uno de éstos había un recado escrito a tres pisos en letra de molde: “Bola de pendejos, maricas, Chaputo [...] septiembre de 2007, los narcos arremetieron de nueva cuenta contra el general Eddy, ya retirado del Ejército En esa ocasión dejaron perros destazados en tres puntos de Culiacán, [...] Las tres mantas del domingo 4 ubican a Marcos (Arturo) Beltrán Leyva en el centro de la narcoguerra emprendida por el gobierno calderonista; lo mismo hacen las otras tres aparecidas el lunes [...] martes 6, la Comisión Permanente del Congreso estatal llamar a una alianza nacional y estatal contra el crimen organizado [...] miércoles 7, un grupo de sicarios atacó a policías estatales y municipales. El saldo fue de cuatro agentes heridos [...] fue asesinado Édgar Guzmán López, un hijo de El Chapo Guzmán. Fue acribillado en el estacionamiento del centro comercial City Club [...]

Ricardo Ravelo, “En la Ciudad de México, ataque frontal...”, *Proceso*, número 1645, 11 de mayo de 2008, pp. 8-9.

### **“En la Ciudad de México, ataque frontal...”**

Contenido / Resumen.

[...] el crimen organizado arremete con más fuerza contra altos mandos de la Policía Federal Preventiva (PFP) encargados de los operativos antidrogas [...] En tan sólo una semana tres de ellos cayeron abatidos a tiros en la Ciudad de México, la cual hasta hace unos meses se mantenía ajena a los embates del narcotráfico [...] Uno de los funcionarios en ser amenazados de muerte [...] fue José Luis Santiago Vasconcelos, titular de la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos Internacionales de la PGR [...] en una esquina cercana a su domicilio, intentaron ejecutarlo [...] Los sicarios fueron detenidos Y al rendir su declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) negaron pertenecer al cártel de Sinaloa, como lo aseguró Vasconcelos; en cambio, reconocieron que sirven al cártel del Golfo y que están relacionados con Los Zetas [...] jueves 1, Roberto Velasco Bravo, identificado como policía de la Agencia Federal de Investigación (AFI), fue baleado frente a su domicilio, [...] Velasco Bravo se desempeñaba como director de Crimen Organizado en la Dirección de Análisis Táctico de la AFI [...] el viernes 2, otro policía federal fue ejecutado Su nombre: José Aristeo Gómez Martínez, quien trabajaba en la dirección de asuntos administrativos del Estado Mayor de la PFP [...] sábado 3 el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, dijo que Gómez Martínez había muerto víctima de la delincuencia, a diferencia de lo que dijo respecto de los demás elementos, quienes, aseguró, cayeron en cumplimiento de su deber [...] 6 de enero, Juan Ramón Gómez Bolaños, de 53 años de edad, fue “cazado” por un grupo de sicarios [...] fungía como subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Policía Bancaria e Industrial [...] Édgar Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, ejecutado la madrugada del

jueves 8 de nueve balazos [...] pudo haber sido víctima de algún cártel poderoso: de Sinaloa o del Golfo, pues había dado golpes importantes a las dos organizaciones [...] Millán Gómez sólo disponía de dos escoltas [...] la PGR [...] no ha explicado cómo fue posible que el grupo de sicarios haya tenido acceso a su domicilio particular a su agenda y las rutas de tránsito por las que habitualmente solía circular el agente federal [...]

Patricia Dávila, “Dos semanas de terror”, *Proceso*, número 1649, 8 de junio de 2008, pp. 14-16.

### “Dos semanas de terror”

Contenido / Resumen.

En su afán por quedarse con esta plaza controlada hasta hoy por Joaquín El Chapo Guzmán, sicarios de Los Zetas y del grupo que comandan los hermanos Beltrán Leyva desataron una ola de terror en este estado en el cual las ejecuciones y los cercenamientos de cabezas se han vuelto cotidianos. [...] En las últimas dos semanas [...] hubo cuatro levantones; 25 ejecutados, 10 de los cuales fueron decapitados, y varios narcomensajes [...] apareció un mensaje en internet: “El ataque es inminente, la ciudad de Durango se teñirá de rojo con la sangre de sus hijos, cientos de cabezas van a rodar. ¡Ahora sí nos van a temer! [...] se atribuyó a Los Zetas [...] se advertía a los padres de familia que no dejaran salir a sus hijos los días 5, 6 y 7 de junio. En algunos municipios el mensaje incluso se imprimió y se repartieron miles de copias por las calles; las escuelas suspendieron las clases [...] la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó sobre el levantón de dos elementos de esta corporación [...] familiares de Ricardo López Pescador, dirigente estatal del PRI [...] fueron interceptados por varios vehículos, [...] (un) comando armado que empezó a dispararles en Poanas [...] dos vehículos que circulaban por la secundaria Niños Héroes [...] comenzaron a disparar [...] Murió Raúl Carrera Rivera y su hermano Antonio resultó herido [...] Los hermanos Carrera Rivera pertenecen a la red de distribución de droga del cártel de Sinaloa [...], 19 de mayo [...] hubo otro enfrentamiento que se prolongó durante cuatro horas [...] fallecieron Luis Enrique Díaz Sandoval [...] Alfredo Hernández Vázquez y Manuel Trejo Martínez [...] Floriberto López Méndez y José Arturo Mares [...] Marcelo Flores Renovado y José Noé Ravoden García [...] Silvino Zaldívar Olivas resultó herido [...] el gobernador del estado [...] aseguró que el enfrentamiento fue producto del crimen organizado 23 de mayo [...] llamada telefónica anónima [...] presencia de cuatro hieleras en cuyo interior había cabezas humanas con un mensaje [...] 23 de mayo [...] se localizaron dos cabezas más [...] Al día siguiente se encontraba una hielera con una cabeza [...] frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República se encontraba un cuerpo decapitado; en su lugar tenía colocada una cabeza de cerdo sostenida con una varilla [...] fueron encontradas dos cabezas más, así como dos ejecutados [...] los agentes Gilberto Luna Olivas, Martín Hernández Hernández y la comandante Gisela Ramírez de la O, de la DEI, fueron ejecutados por un comando armado [...] Un funcionario estatal [...] asegura que el objetivo de Los Zetas es amedrentar a la sociedad, intimidar a los cuerpos policiacos y mandar los narcomensajes [...] en Durango Los Zetas van ganando la batalla [...] Durango [...] no tiene capacidad para responder las agresiones ni en equipo ni en número; menos “en estrategia y en inteligencia [...] presidente de la Coparmex [...] asegura: “Este problema está rebasando no sólo a los gobernadores, sino a todo el país. [...] jueves 5 aparecieron cinco lonas [...] Una decía: “Sr. gobernador, 17 agentes de la DEI, 38 desaparecidos y un sinfín de amenazas

telefónicas del grupo denominado Los Zetas. ¿No es suficiente para las fuerzas especiales?” Firma: grupo por el bien de Durango.

Otra: “Sr. Gobernador, los chicos, medianos y pequeños empresarios recibimos extorsiones telefónicas por el grupo de Los Zetas. No es justo. ¡Nombre gober!, ¿qué te falta para actuar?” Firma: Jóvenes empresarios. [...]

Ricardo Ravelo, “Nuevos feudos para el narco”, *Proceso*, número 1650, 15 de junio de 2008, pp. 28-32.

### “Nuevos feudos para el narco”

Contenido / Resumen.

El pleito entre los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, modificó la configuración de los cárteles del narcotráfico [...] Lejos de acabar con uno de los negocios más rentables del mundo [...] el gobierno mexicano se enfrenta a la violencia cada vez más avasallante del narco [...] pero también a otro flagelo: los feudos creados por éstas [...] los grupos de narcotraficantes realizan una especie de feudalización en varias regiones del país donde la fuerza del Estado no puede revertir la falta de credibilidad que arrastra [...] en México el gobierno mantiene su política de contención mediante la fuerza militar [...] el narco avanza en sus planes de expansión: financia campañas de presidentes municipales, diputados locales, legisladores federales, gobernadores [...] Una de las graves fallas de México es que su política criminal camina sobre una rueda: la represión militar y policiaca [...] combaten a la delincuencia organizada sólo golpeando selectivamente a las cúpulas y a los brazos armados [...] sin dismantelar los vínculos financieros y patrimoniales de los grupos criminales con el ámbito empresarial “lícito”, la clase política, los anillos de corrupción y de protección política [...] los estados que históricamente han sido asiento de cárteles, como Sinaloa y Chihuahua [...] pasaron a ser tierra de nadie [...] (Sinaloa) ocupa el primer lugar en violencia: entre abril y mayo fueron ejecutadas 191 personas, 71 en el primer mes y 120 en el segundo [...] en un año y siete meses de la administración de Felipe Calderón han caído 550 militares, marinos y policías federales [...] (Existe una) reconfiguración que impulsan algunos cárteles de la droga, como la alianza de los hermanos Beltrán Leyva con Los Zetas, quienes comenzaron a reunirse a mediados de 2006 [...] Arturo Beltrán Leyva y Vicente Carrillo Fuentes sellaron su alianza.

[...] los cárteles de la droga muestran un pragmatismo sorprendente para mantenerse impunes: ahora que los Beltrán están fuera del cártel de Sinaloa, Los Zetas [...] se aliaron con ellos y aparentemente también con Vicente Carrillo, [...] con el respaldo de un buen número de policías estatales, Los Zetas siembran terror en varias regiones del país [...] desde Tierra Blanca hasta Boca del Río— se han perpetrado 12 secuestros y varios “levantones” [...] El fortalecimiento de Los Zetas, que cuentan con unos 700 miembros, ha permitido su desplazamiento a un mayor número de estados donde hasta hace poco no tenían presencia, [...] Además de enfrentarse entre sí, Los Zetas, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa libran contra el gobierno una guerra que no parece tener fin [...] el narcotráfico dispone de armamento de mayor poder que el de los policías. [...]

Ricardo Ravelo, “Cocina estilo ‘zeta’”, *Proceso*, número 1650, 15 de junio de 2008, p. 30.

### “Cocina estilo ‘zeta’”

Contenido / Resumen.

El mundo criminal de Los Zetas no tiene límites. Para ellos no basta con asesinar a sus rivales, sino degradarlos más allá de la muerte, [...] Los Zetas han recrudecido su sadismo desde 2004, cuando comenzaron a publicitar las imágenes de sus ejecuciones: cuerpos decapitados, descuartizados y hasta quemados [...] el testimonio ministerial de un zeta y se incorporó al programa de testigos protegidos de la PGR Cuenta que en una ocasión [...] “Lo levantamos y lo llevamos a un rancho conocido como La Huicha, donde después de estarlo torturando, Miguel Treviño lo mató y lo entregó ahí mismo en el rancho a los cocineros para que lo cocinaran” [...] se refiere a “meter (el cuerpo) en un tanque metálico de 200 litros y después rociarlo con diesel, prenderlo y constantemente rociarle diesel para que continúe el fuego” [...] Hay que utilizar una pala en forma de cuadro, con mango largo, para estar destrozando el cuerpo [...] (Los Zetas) con sus múltiples contactos policiacos, se enteran con rapidez cuando personas extrañas andan preguntando por ellos levantamos a una persona de procedencia extranjera [...] Lo levantamos y después de hacerle varios interrogatorios –donde procedió Mario Alberto a golpearlo y a preguntarle por Los Zetas y quién era y para quién jalaba–, lo soltamos cerca del puente internacional número dos de Nuevo Laredo No lo matamos, no lo cocinamos porque vimos que procedió a cruzar al otro lado [...] Otra de las prácticas socorridas por Los Zetas es la decapitación [...]

### 2009

Jorge Carrasco Araizaga, “El enemigo, de la misma familia”, *Proceso* número 1685, 15 febrero 2009, pp. 28-31.

### “El enemigo, de la misma familia”

Contenido / Resumen.

Los asesinatos de los miembros de seguridad del Estado han sido perpetrados en general por el crimen organizado; pero en lo particular por los mismo ex compañeros de armas.

De mediados de octubre pasado a comienzos de este mes (febrero) más de 21 militares, incluido un general en retiro han sido ejecutados a manos del crimen organizado, como por ejemplo la célula Los Zetas, surgida del mismo ejército o la de los hermanos Beltrán Leyva; asociada con militares en función.

Muertes:

- 1 acuchillamiento.
- 8 decapitación.
- 2 tortura.

Estas víctimas han sido levantadas o acorraladas en presencia de numerosos testigos.

Bajas, según Sedena, desde el comienzo de los operativos en contra del narco en 2006:

- 61

Estados donde mayormente ocurrieron:

- Guerrero.
- Nuevo León.
- Michoacán.
- Sinaloa.
- Sonora.
- Tamaulipas.

Las dos bajas más recientes ocurrieron en Cancún, la del general en retiro Tello Quiñones y su asistente el teniente de infantería Getulio César Román. Ambos fueron torturados y asesinados por un grupo denominado por Sedena como Los Zetas, con participación de ex miembros del ejército.

Arturo Rodríguez García, “Coahuila. Laguna de sangre”, *Proceso* número 1686, 22 febrero 2009, pp. 14-15.

### **“Coahuila. Laguna de sangre”**

Contenido / Resumen.

En menos de dos meses en la Laguna han perdido la vida cerca de 40 personas debido a los enfrentamientos violentos entre cárteles de la droga y estos contra el ejército. Esta es la peor ola de violencia en toda su historia.

El pasado 9 de febrero custodios facilitaron la ejecución de tres reos del Centro de Readaptación Social de Torreón, sus cadáveres fueron quemados con diésel, los tres eran acusados del secuestro y homicidio del empresario Rodolfo Javier Alanís, mismo al que asesinaron a tiros y su cuerpo fue quemado y arrojado en la autopista Torreón-Saltillo en el 2008.

“Luego de dar muerte a los secuestradores, considerados desertores del grupo de Los Zetas, nueve reos federales que habitaban el Módulo 35, donde se ubican los miembros del cártel del Golfo, se evadieron con la complicidad de sus custodios”.

El pasado 17 en Gómez Palacio una base de operaciones militares fue blanco de un ataque con granadas, los militares respondieron de la misma manera, dos soldados cayeron y un civil que iba pasando también.

Alberto Najar, Marcela Turati, “Amar a Dios en tierra de narcos...”, *Proceso* número 1692, 5 abril 2009, pp. 12-15.

### **“Amar a Dios en tierra de narcos...”**

Contenido / Resumen.

Hoy en día, a sacerdotes y obispos les piden ayuda debido a amenazas por el narcotráfico en México. Debido a esto el fray Blas Alvarado, director de la Casa del Migrante en Tenosique, Tabasco, ha recibido amenazas por parte de Los Zetas.

Los Zetas en esa zona controlan las vías ferrocarrileras, cobran derecho de piso a coyotes y reclutan jóvenes para vigilar cargamentos de droga.

El fray ya ha denunciado el contubernio entre este grupo delictivo y algunos diputados federales.

En Oaxaca, el responsable de la Pastoral de Movilidad Social, Alejandro Solalinde, está amenazado de muerte desde 2007, ya que desde ese año denunció que unos inmigrantes hallaron un cargamento de droga en el mismo tren en donde viajaba.

Ricardo Ravelo, “Entre los Zetas y la SIEDO...”, *Proceso* número 1694, 19 abril 2009, pp. 16-18.

### **“Entre los Zetas y la SIEDO...”**

Contenido / Resumen.

Marta Reyes Martínez fue secuestrada en 2008 en Nuevo Laredo por miembros de Los Zetas.

Asegura que este grupo criminal estaba protegido por la Policía Ministerial Local y que además al presentar su denuncia en la Siedo (en la Ciudad de México), funcionarios de esta dependencia le ofrecieron comprar su silencio para no seguir con las investigaciones.

Marta se disponía a esperar a personas provenientes del Paso para que estos le surtieran perfumes y mercancía para comerciar, fue ahí cuando policías ministeriales la secuestraron, asegura, estaban coludidos con los Zetas.

Al estar en una casa de seguridad, se encontraba en una habitación oscura junto a otras personas, Marta intentó comunicarse con un amigo por medio de un celular que había guardado, un centinela de los Zetas, al percatarse de esto la amenazó con “tablearla” si intentaba algo parecido nuevamente.

“¿Qué le daban de comer?”

–La mitad de un sándwich y un vaso de agua Nada más me daban permiso de ir una vez al baño, por eso prefería no comer y beber poco líquido Un día me interrogaron Fue terrible Me quitaron la venda del rostro y sólo me dejaron una playera negra sobre la cabeza, pero se me ocurrió levantar la cara y les ví el

rostro a dos o tres de mis secuestradores Se molestaron mucho y uno de ellos dijo: “Dale un pinche plomazo” “¿Qué me ve?” –gritaba “No lo vi, joven”, le dije

Al verla en crisis, sus captores le preguntaron qué medicamentos tomaba, “porque les dije que yo estaba enferma, que padezco de cirrosis hepática Me llevaron unas pastillas y comencé a tranquilizarme”.

Ese mismo día los Zetas asesinaron a un hombre de unos 27 años que se encontraba privado de su libertad: “entre tres zetas lo ahorcaron Fue espantoso Yo pensé que me harían lo mismo Luego arrastraron el cuerpo y ya no supe qué pasó”.

Una vez liberada fue amenazada con matarla y además le exigieron retirar la denuncia que su esposo había realizado: “cuando me aventaron a un zacatal me dijeron que a temprana hora fuera yo a la Ministerial a retirar la denuncia que había puesto mi esposo Caminé por ese terreno hasta que me encontré a unos señores y me llevaron a mi casa Eran las siete de la mañana y sólo pensaba en regresar a la Ciudad de México”.

Una vez estando en su domicilio, agentes ministeriales la visitaron para llevarla a retirar la denuncia, les recomendaron retirarla y olvidar el caso, así como irse a vivir a la Ciudad de México.

Arturo Rodríguez García, “Narcopolítica panista”, *Proceso* número 1704, 28 junio 2009, pp. 16-17.

### **“Narcopolítica panista”**

Contenido / Resumen.

En Monterrey Nuevo León, familiares de víctimas acusan a patrulleros, así como también a funcionarios públicos de participar en levantones, ejecuciones, tiroteos y secuestros.

En San Pedro, de acuerdo con expresiones del candidato Mauricio Fernández Garza, la seguridad corre a cargo de gente de los hermanos Beltrán Leyva.

La presencia de los Zetas en la entidad se ha reflejado en la detención que se llevó a cabo el pasado 4 cuando 15 oficiales de San Nicolás, Escobedo y Apodaca; resultaron cómplices del cártel del Golfo ya que ayudaron a un capo de dicho cártel a escapar en un enfrentamiento:

“Identificado sólo como El Comandante Colosio o El Coloso, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que ese capo es el encargado regional de Los Zetas y que, hallándose herido, fue rescatado en medio del tiroteo por varios agentes uniformados y luego trasladado en una patrulla municipal que tripulaba José Carlos Treviño Carreón”.

Jorge Carrasco Araizaga, “La Familia”, el cártel del sexenio”, *Proceso* número 1707, 19 julio 2009, pp. 14-19.

### **“La Familia”, el cártel del sexenio”**

Contenido / Resumen.

La Familia Michoacana es el mayor desafío hasta este momento para la estrategia anti narco del gobierno Federal.

Durante 5 días (del 11 al 15 de julio) de ataque en contra de instalaciones de la Policía Federal y matando a una veintena de miembros, es el claro ejemplo de que este grupo delictivo no les teme a las fuerzas Federales.

La Familia Michoacana es contemporánea de la administración de Fox, apenas una semana después de que éste comenzara sus actividades; el grupo delictivo de dio a conocer por medio de desplegados en la prensa, teniendo como principal estrategia la propaganda y la contra propaganda.

“La Familia aprendió de Los Zetas no sólo las técnicas en el uso de armas y artefactos de uso individual, sino también el valor de la explotación del terror y la idea de contar con una base social, explica Carlos Flores, cuya tesis de doctorado en ciencias políticas y sociales trata sobre la protección política del narcotráfico en Colombia y México”.

Esta célula delictiva se independizó y compitió contra su antiguo jefe, el Cártel del Golfo.

La Tuta llamó a la empresa local CB Televisión para decir que su organización respeta al Ejército, pero que su conflicto es con Genaro García Luna, secretario federal de Seguridad Pública, y con el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora.

J. Jesús Esquivel, “Z-40 “el más sanguinario””, *Proceso* número 1708, 26 julio 2009, pp. 8-9.

### **“Z-40 “el más sanguinario””**

Contenido / Resumen.

El Departamento de Justicia estadounidense abrió dos causas judiciales en contra del que consideran es el líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, L-40 y Toño, acusado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades delictivas. A Treviño Morales se le imputan 11 cargos. Además de éste, 18 miembros más de la célula delictiva están acusados de delitos asociados al tráfico de enervantes y el lavado de dinero.

La justicia estadounidense reconoce a los Zetas como sicarios al servicio del cártel de Golfo y además como un cártel independiente. El gobierno de ese país ofrece hasta 5 millones por la cabeza de Treviño Morales, Cárdenas Guillén, Heriberto Lazcano Lazcano y por la de Jorge Costilla Sánchez.

Juan Balboa, “Torturados en Cancún”, *Proceso* número 1724, 15 noviembre 2009, pp. 58-59.

### **“Torturados en Cancún”**

Contenido / Resumen.

El pasado 1 de septiembre, 14 cubanos salieron de La Habana con destino a los Estados Unidos, pero llegando a Cancún, fueron secuestrados y torturados, militares los rescataron el 13 de septiembre, 10 días después.

Una vez liberados, 10 de ellos decidieron ir a la frontera con Estados Unidos y aplicar la ley del Ajuste Cubano, el resto del grupo decidió voluntariamente regresar a la isla.

Los llevaron en lancha a Cancún, declarando que tenían los 10 mil dólares para pasar, llegando Cancún los llevaron a una casa y ahí comenzó todo: les pidieron un número telefónico, no les daban de comer y declaraciones de un testimonio, le pegaron toques eléctricos; además de puñetazos en todo el cuerpo.

Después comenzó la tortura psicológica: los amenazaban con entregarlos a Los Zetas o que ellos mismos los picarían, los harían chachitos y los echarían en bolsas negras para que nadie los reconociera. Dormían en el suelo en colchonetas muy delgadas además de que siempre los tenían en ropa interior.

Lograron escapar gracias a que hicieron notas de auxilio y las aventaron al patio de al lado.

### **“Chapos contra Zetas: la disputa por Torreón”**

**Redacción**

**Proceso**

**30 junio, 2009**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/116539/chapos-contra-zetas-la-disputa-por-torreon>

TORREON, COAH – De entre las norteñas, Torreón parecía una ciudad relativamente pacífica. Los narcos “de casa”, los del cártel de Sinaloa, eran vistos como parte del paisaje local. Hasta principios de 2007, que fue cuando Los Zetas salieron del clóset.

Hace poco más de dos años, el 31 de marzo de 2007, unos policías detuvieron una camioneta sospechosa y, como respuesta, fueron acribillados por sus tripulantes. Después se supo que ese grupo armado había llegado a disputarle el territorio a El Chapo. Esta lucha esporádicamente fue dejando muertos regados.

La narcoviolencia se descaró el 13 de mayo de ese año, cuando un comando armado atacó al poderoso empresario y exalcalde de Gómez Palacio, Carlos Herrera, quien apenas sobrevivió al ametrallamiento. Al día siguiente, otro comando de supuestos federales levantó al jefe de grupo antisequestros, Enrique Ruiz Arévalo. A finales de mes inició el Operativo Laguna, pero “los de aquí” y “los otros” no respetaron ni a los militares: el 18 de diciembre mataron a cuatro oficiales del Ejército que hacían compras navideñas en pleno centro de Torreón.

En 2008, cada tanto aparecían cuerpos de viejos distribuidores de droga que controlaban la venta en las colonias; algunos calcinados. También se empezó a hablar de la colusión de la policía municipal con criminales. En septiembre hubo un enfrentamiento entre policías federales y municipales con saldo de muertos y encarcelados.

Para entonces, la disputa por los cerros del poniente ya se había descarado Sus pobladores pasaron la Nochebuena pecho tierra y bajo fuego Varios policías salieron heridos al intentar contener la refriega “El poniente es el único bastión de El Chapo Si pierden el poniente, pierden Torreón, pierden el control; sería su Waterloo”, explica un policía enterado.

En febrero de 2009, un presunto comando de zetas entró a la cárcel de Torreón; ató, amordazó, golpeó y prendió fuego a tres reos —entre ellos un teniente de inteligencia militar involucrado en secuestros—, y liberó a nueve presos, varios de los cuales fueron baleados tres meses después en un enfrentamiento.

Una semana después, dos grupos robaron explosivos a empresas de Lerdo y Gómez Palacio En respuesta, los soldados esculcaron La Durangueña, donde encontraron muchas casas abandonadas y varias conectadas entre sí a través de boquetes. Aunque la gente les pidió que ya no se fueran, en cuanto recuperaron la pólvora robada abandonaron la zona. Y “los otros” y “los de aquí” volvieron a ocupar sus posiciones.

El reguero de muertos acumulados crece exponencialmente: si en 2007 hubo 37 homicidios en Torreón (10, sólo en diciembre), en 2008 hubo 89, y a junio de este año ya iban 96 contabilizados El comportamiento es parecido en toda la Laguna: si el año pasado mataron a 100, éste suma ya 111 La décima parte de los muertos eran inocentes que iban pasando, como los niños Litzzy, como Alexis Adán o Daniel Alejandro.

Una encuesta publicada recientemente estableció que 70% de los ciudadanos no denuncia por desconfianza a las autoridades En ese mar de impunidad, los delitos se dispararon en todos los ámbitos: si el récord de asaltos bancarios era de cuatro en un año, sólo de enero a abril ocurrieron 13 Uno de los asaltabancos capturado confesó que lo hizo porque se sentía estrangulado por el desempleo que hace de Coahuila uno de los punteros nacionales en pérdida de trabajo.

### **Desconfianza generalizada**

Un ama de casa de la zona del poniente dice que durante las primeras balaceras ella telefoneaba a la policía para pedir ayuda, pero siempre respondían que no podían intervenir Tampoco acudieron “la vez que hubo granadazos en la cancha”, cuando las balas destrozaron los vidrios de los autos, perforaron paredes y hubo gente herida dentro de su casa.

“Por el momento no se aparece la policía y si llega les va igual”, dice resignada Los policías también se sienten desamparados Desde hace un mes, cerca de 300 hacen guardia afuera de la oficina de Asuntos Internos, pasean afuera como leones enjaulados, se reportan constantemente, reclaman, amenazan.

Son los policías cesados en mayo por “pérdida de confianza”: no pasaron la prueba del polígrafo o acumularon faltas administrativas en su expediente, como robo, destrozo de patrullas, falta al examen de antidoping Todos dicen que se cometió una injusticia con ellos.

“El 13 de febrero andaba vigilando en La Polvorera y nos emboscó un grupo armado, nos salieron en una calle de subida, nos balearon Yo tuve el pulmón ponchado y me reconstruyeron los intestinos A una compañera le dieron en el hombro, estuvo grave El 17 de marzo, en el periférico, una camioneta se nos

cerró y nos impactamos; tuve fractura del calcáneo y costillas rotas ¡Hemos arriesgado la vida para que nos quieran pagar con esto!”, dice un policía lisiado que fue cesado.

“Ahí siguen trabajando muchos que tienen cola peor que les pisen”, dice un enojado joven policía. Mientras tanto, en el resguardado edificio de la corporación, el subinspector federal Karlo Castillo, director de la policía municipal desde hace ocho meses, señala que con el cese de 37% de sus integrantes (algunos por secuestro, robo a mano armada o lesiones graves) la ciudadanía tiene que sentirse más tranquila.

“Es mejor tenerlos sin charolas, armas, equipo, patrullas y asaltando, ya ahora ellos tendrán que usar sus propias armas, vehículos y dinero”, dice:

Castillo presume que desde que llegó bajaron los delitos. Se ríe de ser uno de los favoritos de las amenazas en las narcomantas, dice que ya perdió la cuenta de las veces que lo han amenazado “Llevaré unas 16 pancartas, unas veintitantas llamadas telefónicas”.

Explica también por qué la pelea por la Laguna: “El sector poniente es la joya preciada que queda de Torreón. Es un lugar estratégico que tiene dominio panorámico de toda la ciudad; por ahí ven si vienen las autoridades de Matamoros o Gómez Palacio, es una trincherita. En Torreón convergen dos caminos que dan a la frontera, a Juárez y a Laredo, y tienen una vía a los estados de Durango y Sinaloa, a donde pueden llegar inmediatamente. Es paso obligado del norte”.

### **“Los Zetas: el ejército de Osiel\*\*”**

**Ricardo Ravelo**

**Proceso**

**13 septiembre 2009**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/85281/85281-los-zetas-el-ejercito-de-osiel>

Como él ansía todo el poder, un día de julio de 1998 analiza el affaire de su seguridad y concluye que debe crear un grupo de protección tan poderoso y efectivo que ni el propio Ejército pueda abatirlo. Así, inmerso en una atmósfera convulsa, surge el grupo armado. Los Zetas, bien llamado el ejército del narco, para nutrir al engendro mafioso que es Osiel.

El momento que vive el país no puede ser más propicio para el surgimiento de Los Zetas. Quizá sin propónselo —o bien como parte de un proyecto maquinado desde el poder, eso tal vez nunca se sepa—, el gobierno federal pone la primera piedra para que el cártel del Golfo cree su propio cerco de protección con hombres entrenados en la milicia (...)

El dique de contención, las estructuras policiacas, estalla, perforado por el dinero sucio. El panorama parece tan complicado como irreversible. Es tan oscuro este México de finales de los noventa que el presidente Ernesto Zedillo toma la decisión de echar mano del Ejército para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, no advierte que su determinación derivará en una pesadilla (...).

Al darse cuenta de la debilidad del Estado, al ver ante sus ojos un verdadero regalo del gobierno y que lo puede tomar con sólo extender sus manos, Arturo Guzmán Decena —expolicía federal, cómplice del

capo— pone en marcha la estrategia que ha maquinado después de una conversación con Osiel. Con ofrecimientos millonarios —y privilegios que un militar jamás podría obtener en el Ejército, donde una élite acapara los beneficios y canonjías— los efectivos del Ejército son convencidos de algo que las propias autoridades tardaron en entender: que el narco paga mejor que el gobierno. Dura realidad, pero esa es la razón por la que muchos soldados desertan para engancharse en la aventura del narcotráfico.

Poco a poco, como hormigas que abandonan el agujero, decenas de soldados empiezan a desaparecer. De un día para otro ya no asisten a sus áreas de trabajo. El pase de lista obligado está plagado de silencios. Nadie responde al llamado del alto mando. La preocupación cunde por doquier ¿Dónde están?, se preguntan una y otra vez los jefes castrenses. Por varios meses se piensa que fueron secuestrados o asesinados por la mafia. Las respuestas no llegan y la desesperación paraliza a los altos mandos de la Sedena, que deben rendir cuentas sobre el paradero de los soldados.

Con todos los conocimientos adquiridos en el Ejército, Guzmán Decena estructura otra milicia. El nombre de Los Zetas surge porque varios de los primeros militares que se incorporaron al cártel del Golfo estuvieron adscritos, en calidad de policías, a la base Zeta de Miguel Alemán, Tamaulipas. Otra versión establece que el nombre deriva de las claves que los integrantes de este grupo paramilitar utilizan para comunicarse y no ser detectados.

(...) Así, el capo se convierte en el delincuente más protegido. Antes de que alguien intente tocarle un pelo o decida encajarlo, debe derribar primero a esa poderosa muralla humana. A partir de este momento el cártel del Golfo ya no puede seguir considerándose como una organización más, que rueda con sus ejes engrasados alrededor del tráfico de drogas. Los Zetas permiten que el cártel del Golfo se posicione en la geografía mexicana con los instrumentos más cortantes: la violencia y el miedo. Ningún otro cártel dispone de una valla como ésta y nadie le puede competir a Osiel en el campo del narcotráfico.

Nadie sabe si en el origen de Los Zetas el propósito consistió en implicar de lleno al Ejército en el narcotráfico como un proyecto articulado por el Estado, de manera que sólo la Presidencia de la República manejara los hilos del narco. Lo cierto es que el proyecto de Ernesto Zedillo de involucrar a los militares en la lucha antidrogas da pie a ese paramilitarismo asociado con el narcotráfico y con la más tortuosa pesadilla que jamás haya vivido el país, cuya democracia flaquea porque sigue atada a una vieja dictadura: la del narco.

Pero a Osiel no parece importarle tanto el desgajamiento del país. Él quiere seguir perforando las estructuras del poder político para mantenerse impune. El caos es su mejor elemento para vivir. Con el cerco protector en su máximo esplendor puede moverse a sus anchas. Sabe que antes de que una mano criminal lo toque, el muro de protección atacará primero, se anticipará al plan asesino en su defensa. El monstruo criminal crecerá y sembrará terror. Su evolución es tremenda. Este grupo armado que despliega saña es el reflejo de la demencia de Osiel Cárdenas.

Los primeros miembros de Los Zetas no rebasan los 60 hombres de todas las estaturas y rangos militares. Casi todos tienen un rasgo en común: el rostro endurecido, en el semblante las grietas que provoca el castigo y el rigor de la milicia. En otros, brota de sus ojos el rencor, la frustración, y no pocos transpiran venganza, el vapor del odio que los quema por dentro.

(...) Con el paso de los años, Los Zetas dejan de ser militares puros –algunos de ellos son asesinados, otros son detenidos– pero aún hoy conservan algo de su linaje castrense, que no se perdió ni con el crimen de su fundador, Arturo Guzmán Decena, el Z-1, perpetrado el 21 de noviembre de 2002 cuando departía desarmado en un restaurante de la calle Herrera y Nueve, de Matamoros.

Su lugar no puede ser ocupado por un improvisado. Por eso el trabajo se le encomienda a un militar de igual o mejor perfil que el propio Guzmán Decena. Su posición la toma entonces Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o Z-3, metal forjado con las más altas temperaturas de la milicia, otro desertor del GAFE que también fue entrenado en diversas disciplinas y que hasta la fecha es inamovible como jefe de Los Zetas.

Durante su evolución Los Zetas llegan a tener cerca de 750 miembros. Con el paso del tiempo refuerzan su estructura con la incrustación de kaibiles, desertores del ejército de Guatemala que se suman al cártel del Golfo para imponer sus más sanguinarias prácticas de muerte: la tortura, la decapitación y el descuartizamiento. Amantes de la guerra, afinan tan bien su estrategia bélica, que logran infundir miedo, un paralizante miedo en todo el país y en particular entre sus rivales, quienes no tienen más opción que responder con la misma saña y con el mismo horror.

(...) Con la incorporación de kaibiles no sólo se refuerzan los cimientos y las columnas que sostienen a Los Zetas, sino que también cambian las formas de asesinar en México. La ejecución tradicional realizada hasta entonces por un francotirador se vuelve práctica obsoleta. Los sicarios del cártel del Golfo que no son de extracción militar deben ahora decidir su futuro: incorporarse a otro cártel mostrando sus mejores credenciales como asesinos, quedarse desempleados o entrenarse para aprender a matar con mayor saña, como lo exigen las reglas de Los Zetas, quienes imponen el baño de sangre, lo mismo que la decapitación y el despedazamiento de personas. Cuando esta suerte de engendro bélico decide matar, las cabezas humanas ruedan por doquier. Entre algunos miembros de Los Zetas se cuenta que decapitan cuando las personas aún están con vida y –sólo las víctimas saben lo que ocurre en ese último segundo de su existencia– pueden tener conciencia de verse en ese estado.

Cortar cabezas se vuelve una fiebre que se extiende de Baja California a Quintana Roo. No hay una franja del territorio nacional donde no se cuente la historia de un decapitado. Cuando se trata de muertes violentas, como las del narco, los médicos forenses dejan de practicar las tradicionales necropsias para trabajar ahora con mayores dosis de horror: armar cuerpos con los despojos de que disponen. En el peor de los casos entregan a sus deudos cadáveres incompletos, sin extremidades superiores o inferiores; sin lengua si el difunto fue un soplón; sin manos si tomó algo indebido; sin ojos si miró lo que le prohibieron ver; sin pene si rebasó límites por el impulso afiebrado del deseo l.

### **“Los Zetas” y la Ndrangheta La conexión”**

**HOMERO CAMPA**

**Proceso**

**15 noviembre 2009**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/84019/los-zetas-y-la-ndrangheta-la-conexion>

Presionadas por deudas, la familia italiana Schirripa contactó a distribuidores de droga mexicanos que operaban en Nueva York para enviar cocaína a la región italiana de Calabria. Así comenzó la alianza entre dos poderosas organizaciones del crimen organizado: el cártel del Golfo y la ‘Ndrangheta. A partir de entrevistas, expedientes judiciales, informes policíacos y la transcripción de llamadas telefónicas, la periodista mexicana Cynthia Rodríguez, corresponsal de Proceso en Roma, reconstruye la historia de esta colusión en el libro *Contacto en Italia*, que la editorial Debate pondrá en circulación en México a partir de esta semana.

Giulio Schirripa, italiano de 37 años residente en Nueva York, estaba desesperado: adeudaba miles de dólares y nadie le otorgaba crédito para financiar el envío de cocaína a su tierra de origen: Marina di Gioiosa Ionica, un pueblo de 6 mil 500 habitantes en las orillas del mar Jónico, en la región de Reggio Calabria, Italia.

Pese a ser el menor de los Schirripa, Giulio era el principal operador del negocio familiar: él y su hermano Vincenzo compraban la droga en Nueva York a 28 mil dólares el kilo; su novia Stacey Minlionica se encargaba de la logística para enviarla a Italia en paquetes no mayores de 10 kilos; su madre, Teresa Roccisano, y su hermana Anna María se encargaban de transmitir los mensajes entre los miembros del clan y negociaban encuentros con compradores y financistas; y su padre, Pascuale Schirripa, se encargaba de distribuir la cocaína en distintas localidades de Calabria: Siderno, Locri, Bovalino, Gioiosa Ionica, Polistena, Gioia Tauro, Palmi...

Entre los acreedores de los Schirripa en Calabria se encontraban Giuseppe Sansotta y Pascuale Pugliese, vinculados con la red de clanes que forman la poderosa mafia de la región: la ‘Ndrangheta.

Pero el negocio se había atascado por las deudas de Giulio: debía 50 mil dólares a los sicilianos de la Cosa Nostra asentados en Nueva York y tenía que pagarles 2 mil 500 dólares semanales sólo de los intereses. Además, le urgía tener 100 mil dólares para pagar cinco kilos de coca que había encargado a uno de sus distribuidores habituales, el ecuatoriano Luis Calderón, El Tío, quien trabajaba para cárteles colombianos.

El 17 de febrero de 2008, los Schirripa encontraron la aparente salvación: dos nuevos distribuidores de droga. Se trataba del paraguayo Javier Guerrero y del ítalo-estadunidense Christopher Anthony Chris Castellano, dueño de un club nocturno en Grand Island. Giulio los había contactado en el barrio Corona, de Queens, y –sin mayores condiciones– le entregaron tres paquetes de cocaína para enviarlos a Italia.

Había una novedad: Javier Guerrero y Chris no trabajaban con los colombianos, sino para una célula del cártel del Golfo que operaba en Nueva York.

Así empezó el contacto entre dos organizaciones del crimen organizado que operan a nivel internacional: la ‘Ndrangheta italiana y el cártel del Golfo de México.

Cynthia Rodríguez –periodista mexicana residente en Italia– reconstruye la historia de esta asociación entre células de ambos grupos delictivos. Lo hace a partir de entrevistas, expedientes judiciales e informes policíacos, así como de las transcripciones de 5 mil llamadas telefónicas que la policía italiana interceptó a los miembros de la familia Schirripa, uno de los clanes de la ‘Ndrangheta. La historia aparece en el libro *Contacto en Italia*, escrito por Rodríguez, que empezará a circular en México esta semana bajo el sello de Debate.

## Las deudas de Giulio

Rodríguez explica que desde febrero de 2008 la DEA estadounidense y el Departamento de Operaciones Especiales de Italia (ROS, por sus siglas en italiano) vigilaban los movimientos de la familia Schirripa y monitorearon sus llamadas telefónicas.

De hecho, la DEA comunicó a los agentes italianos que Javier Guerrero, uno de los contactos de Giulio, “trabajaba para el mexicano José Cerda, un miembro del cártel del Golfo involucrado en un operativo en el que se incautaron casi 650 kilos de mariguana Junto con Cerda, en Nueva York colaboraban Santiago Maldonado y Mario Velásquez, quienes, en marzo de 2008, y por intermedio de Christopher Castellano, se habían reunido con los hermanos Schirripa para negociar la compraventa de cocaína”.

El 1 de abril de ese año, Giulio viajó a Calabria Una semana después, el 7 de abril, la droga negociada con los mexicanos llegó al pueblo de Marina de Gioiosa Ionica: 10 kilos de coca divididos en tres paquetes iguales El servicio exprés de correos de Italia los entregó en la casa de María Argiro, amiga de Teresa Roccisano, la madre de Giulio.

En principio, esa cantidad de droga parecía suficiente para que la familia Schirripa saldara sus deudas y reinvirtiera en el negocio. Pero algo salió mal: el 9 de abril, uno de los “clientes” llegó al domicilio de los Schirripa en un vehículo blanco y regresó uno de los paquetes de droga. De ello se percató el Escuadrón de Cazadores de los Carabineros que vigilaba la casa de los Schirripa desde una distancia de dos kilómetros.

El “cliente” que devolvió la droga no era cualquiera Se trataba de Aldo Carmelo Bombarderi, quien tenía nexos de amistad y familiares con uno de los clanes más poderosos de la ‘Ndrangheta: los Aquino-Coluccio, algunos de cuyos miembros están acusados de los delitos de asociación mafiosa, portación indebida de armas, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.

¿Qué había pasado? La cocaína de ese paquete era de pésima calidad “Ese tipo, el amigo de aquél (Javier Guerrero), nos dio un puño”, le dijo en clave Giulio a su mujer Stacey durante una conversación telefónica.

De nuevo, Giulio estaba en problemas: en Calabria no le querían comprar esa droga y en Nueva York los miembros de la célula del cártel del Golfo presionaban a su mujer Stacey, a su hermano Vincenzo y a su socio Chris para que les pagara el costo de la cocaína.

Es reveladora la llamada que Giulio y Chris iniciaron a las 19:13 horas del 10 de abril de 2008:

Giulio: Esta mierda, que he rebajado hasta 20 o 25 (en referencia al precio), nada, ninguno la quiere (...) Escucha, aquí estos malditos la cocinan (en referencia al modo en que en Calabria se prueba la calidad de la droga) una por una, cero, nada, ni siquiera uno solo.

Chris: Esta bien, pero ¿qué hacemos con estas personas (del cártel del Golfo)? Ellos no quieren escuchar estas pendejadas Sabes que una vez que la agarramos, es nuestra (...) Si dejas esa cosa (la droga) allá (en Calabria) pensarán que nos los chingamos Te lo digo en serio.

Giulio: Pero no puedo, no

Chris: Regrésala bro, regrésala Escucha, escucha: no estarán felices de tenerla de nuevo, pero al menos así pueden estar seguros de que la tenemos nosotros y que no se las robamos ¿qué nos queda?

En la conversación, Giulio insiste en que la droga de uno de los paquetes es de pésima calidad “Al ojo parece buena. Le han metido algo para hacerla parecer buena y bonita, pero cuando se cocina, porque es lo que hacen aquí, pues viene nada”, le dice a Chris.

Éste, por su parte, le dice que deben “continuar trabajando” con los mexicanos “porque tienen mucho de esta cosa”.

“Podemos aclarar las cosas con ellos, pero ellos también tienen que trabajar con nosotros porque no podemos agarrar toda la responsabilidad de los 120 kilos enteros”, insiste Chris.

El 11 de abril, Giulio enterró el paquete con droga que no podía vender en una zona boscosa ubicada a unos 100 metros detrás de su casa Los carabinieri lo tenían vigilado Esa misma noche, los agentes desenterraron la droga sin que los Schirripa se dieran cuenta y la llevaron a la oficina del Escuadrón de Cazadores de Calabria El análisis dio positivo a la cocaína.

“Así –narra Cynthia Rodríguez– los lazos entre la familia Schirripa, Pascuale Pugliese, Giuseppe Sansotta, María Argiro y la ‘ndrina (clan) Aquino-Coluccio –plenamente identificada con la ‘Ndrangheta a través de Aldo Carmelo Bombarderi y con el cártel del Golfo a través de Christopher Castellano y Javier Guerrero– dejaron de ser una simple sospecha La indagación que había iniciado en febrero de 2008 tenía muchos elementos que fortalecían el evidente nexos”.

### **Pánico**

El 19 de abril, los Schirripa encontraron a una persona que estaba dispuesta a financiar su deuda con los mexicanos del cártel de Golfo: Diego Lamanna, con antecedentes penales por tráfico de estupefacientes en su natal Polistena, en Calabria, y a quien la policía identificó como cercano a otro clan de la ‘Ndrangheta: los Longo-Versace.

Giulio y Pascuale Pugliese viajaron a Nueva York el 20 y 21 de abril, respectivamente. El 1 de mayo, Pugliese regresó a Calabria. Llevaba 2 kilos de cocaína La DEA y el ROS avisaron a los sistemas de aduanas para que lo dejaran pasar con la droga. Pero Giulio le comentó a Pugliese que “los mexicanos insistían en el pago pendiente o, en su caso, viajar a Italia para inspeccionar la droga que no habían podido vender”.

Fue entonces que los Schirripa se dieron cuenta que la droga no estaba donde la habían enterrado. Entraron en pánico Sobre todo porque los mexicanos empezaron con las amenazas. A Chris le “pusieron una pistola en la cabeza”, por ejemplo.

El 21 de mayo, Giulio envió de Nueva York a Calabria 2 kilos más de cocaína a través del servicio postal El paquete terminó en manos de Lamanna para venderlo y con ello pagarle a los mexicanos. Pero Lamanna demoraba los pagos. Desesperado, Giulio viajó a Calabria el 29 de mayo para “acelerar los trámites”. Un primo de Giulio, Luigi Albanese, volaría a Nueva York con el dinero para la célula del cártel del Golfo, pero “tuvo problemas con su pasaporte” y no pudo viajar.

La noche del 1 de junio, Lamanna le avisó a Pugliese que el dinero no lo tendría “antes del martes” Inmediatamente Pugliese contestó con otro mensaje: “Estás loco” Esperó más de 10 minutos y, al no obtener respuesta, a las 21:15 envió uno más: “Me has abandonado” Tres minutos después, Lamanna replicó: “Te he abandonado, los güevos... Para el martes”.

“De esta manera, los agentes se dieron cuenta de que, además del problema con el pasaporte de quien haría el papel de correo, no había liquidez en el grupo, probablemente porque Lamanna, a su vez, estaba en espera del pago de la droga que él mismo había distribuido”, escribe Rodríguez en su libro.

El enojo de los mexicanos se refleja en una conversación telefónica que sostuvieron el 5 de junio Luigi Albanece, primo de Giulio, e Ignacio Díaz, alias Nacho o El Español, de la célula del cártel del Golfo en Nueva York.

Nacho: No me vengas a decir que el domingo porque a mí me habían dicho “para mañana” y esa gente (del cártel del Golfo) me ha dicho que, si mañana no estás aquí, ellos se van, se van ya. Me dijeron así: “mira, si nosotros venimos, ‘pam’” Y de 10 días que ellos llevan aquí esperándote... ¡10 días esperándote!

Luigi: Sí, sí...

Nacho: Hablamos como dos hombres ¿sí o no?

Luigi: Sí, sí...

Nacho: Con respeto, por lo tanto, me has faltado el respeto hasta el fondo Me habían dicho que el domingo estaría aquí

Luigi: Sí, sí, sí, ¡no, no!, pero tuve un problema con el pasaporte, con el boleto

Nacho: ¡No me llamaste!

Luigi: No, porque Giulio me dio el número de teléfono ahorita... porque antes no tenía el número para llamarte, ¿me explico?

Nacho: Estás jugando conmigo, loco Soy un hombre y no se juega con esto Tú sabes que con esto no se juega (...) Me habías dicho que estarías aquí, esa gente vino de México, ¡y ha estado aquí todos estos días! ¿Sabes cuánto debo pagar al que está aquí?: 2 mil 500 dólares

Luigi: No, no, tienes ahí los 60 y 93 (miles de dólares)

Nacho: Escucha, debes pagarme los cuatro (kilos) (...) y ahorita me tienen que pagar los tres, cada uno cuesta 31 (miles de dólares)

Luigi: Ahora, del otro no sabía, él (Giulio) me explicó que debía darte su parte

Nacho: ¿Su parte? Te estoy pidiendo lo que es mío

Luigi: Sí

Nacho: Este es un problema y sabes lo que puede suceder, un problema muy gordo que después se puede lamentar y llorar

Finalmente, los Schirripa liquidaron la deuda con los mexicanos el 4 de julio de 2008. Para ese momento las entregas de droga se empezaron a regularizar y a crecer: el próximo envío sería de al menos 20 kilos Y, según Rodríguez, las autoridades italianas consideraban que el cártel del Golfo estaba probando una nueva ruta para el tráfico de drogas hacia Europa y que por ello inició con cantidades de droga relativamente pequeñas. Pero antes de que la ruta se estableciera, en septiembre el ROS y la Fiscalía Nacional Antimafia llevaron a cabo el operativo Solare y detuvieron al clan de los Schirripa y sus socios de la ‘Ndrangheta.

De hecho, este caso forma parte de las investigaciones que de manera paralela realizaron la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y la Fiscalía Nacional Antimafia y el ROS de Italia, que concluyeron en los operativos Project Reckoning y Solare realizados en septiembre de 2008, que significaron un duro golpe para el cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas.

Rodríguez cita a Michael B Mukasey, abogado general de la DEA, quien el 17 de septiembre de 2008 expuso los resultados del operativo Project Reckoning realizado en varias ciudades de Estados Unidos: el decomiso de 601 millones de dólares en efectivo, 176 armas, 16 mil 711 kilos de cocaína, 23 mil 250 kilos de marihuana, 4712 kilos de metanfetaminas y 861 kilos de heroína, así como la captura de 175 narcotraficantes de diversas nacionalidades: mexicanos, guatemaltecos, panameños, colombianos e italianos.

Ese mismo día, en Italia, Pietro Grasso, fiscal nacional Antimafia, declaró: “La novedad en este operativo internacional (llamado Solare en Italia) es el papel que ha adquirido México como punto de partida del narco, sustituyendo a Colombia y convirtiéndose en el mayor distribuidor de drogas en el mundo”.

### **“Detienen a pistolero de “Los Zetas” en NL”**

#### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**28 diciembre 2009**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/121577/detienen-a-pistolero-de-los-zetas-en-nl>

MÉXICO, D.F., 28 de diciembre (apro).- Elementos del Ejército Mexicano detuvieron la tarde de ayer a cuatro presuntos sicarios de Los Zetas, entre ellos a Julio César Barrera Jáuregui El Sapo, presunto pistolero de Los Zetas y distribuidor de droga en varios municipios de la zona norte de Nuevo León.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que los sicarios fueron aprehendidos luego de un enfrentamiento en el poblado de Cerralvo, municipio de General Treviño, Nuevo León.

Junto con *El Sapo*, fueron detenidos Adrián Hinojosa Villanueva, *El Nicho*; Guillermo Jaime Molina, *El Flaco*; y Filiberto Rolando Espinoza Pérez, *El Fierro*, quien resultó herido y se encuentra internado en el Hospital Universitario.

Los soldados aseguraron a los delincuentes una camioneta Silverado, un fusil AR-15, 84 dosis de cocaína en polvo, 210 dosis de cocaína en piedra y 6 kilos de marihuana.

De acuerdo con la Sedena, *El Sapo* y varios de sus cómplices se encontraban en la feria de General Treviño, hasta donde llegaron los militares alertados por un residente del lugar, mediante una llamada anónima. Cuando el convoy militar arribó al poblado, los presuntos pistoleros y narcodistribuidores huyeron en distintas direcciones a bordo de varias camionetas de modelo reciente.

### **Capturan en Colima a presunto “pollero”**

Por otra parte, en el estado de Colima, agentes de Seguridad Pública del municipio de Tecomán detuvieron a un presunto traficante de indocumentados que era buscado por las autoridades de Baja California, informó la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ).

La captura del presunto “pollero”, identificado como Gabriel Gonzalo Rosales Soto, fue circunstancial, ya que inicialmente fue detenido para una revisión de rutina, pero al verificar su nombre en la Plataforma México se detectó que existía un mandamiento judicial en su contra.

El juez quinto de Distrito de Tijuana, Baja California, reclama la captura de Rosales Soto, relacionada con el expediente 122/2008 por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada en su modalidad de tráfico de indocumentados.

## **2010**

Jorge Carrasco Araizaga. “Remitente: “Los Zetas”...”. *Proceso*, número 1737, 14 febrero 2010. pp 12-13. <https://www.proceso.com.mx/82861/remitente-los-zetas>

### **“Remitente: “Los Zetas”...”**

En su batida contra el narcotráfico, el gobierno federal ha dado algunos golpes que difunde con espectacularidad. Sin embargo, mueve a suspicacia el hecho de que las bandas combatidas sean precisamente enemigas y competidoras de El Chapo Guzmán, “el capo del sexenio”. En los nueve años de gobierno panista no se ha realizado ninguna acción significativa en contra de los intereses de este narcotraficante y la organización que encabeza.

Desde que se fugó del penal de Puente Grande, en Jalisco, el 19 de enero de 2001, el narcotraficante sinaloense transita a sus anchas por el país, al amparo de un gran aparato de protección. Es el prófugo más famoso de las presidencias panistas.

En cuanto burló la cárcel, El Chapo se fue a la playa, en la costa de Michoacán. Habitantes del municipio de Aquila lo vieron en La Privada, un exclusivo club residencial localizado en una bahía de la costa central del Pacífico. En este lugar también buscaron refugio, en su momento, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, y Javier Arellano Félix, El Tigrillo.

“Cuando estaba la noticia en la televisión (sobre la fuga de El Chapo), por acá había una presencia inusual de militares y de policías en los alrededores”, relataron habitantes de la región a *Proceso* (Edición Especial No. 25, El México narco, segunda parte).

En esa zona de la costa michoacana se localiza El Tamarindillo, otra privilegiada bahía de la que el expresidente Vicente Fox y su esposa, Marta Sahagún, pretenden adueñarse y que no ha sido ajena al trasiego de cocaína (Proceso 1694).

emanas después de que Fox asumió la Presidencia, El Chapo se le fugó al responsable de los penales de máxima seguridad, el entonces subsecretario de seguridad Pública, Jorge Tello Peón, actual secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde el inicio de su gestión, Calderón tuvo a Tello como su asesor externo y a partir de 2008 lo incorporó formalmente en la Presidencia. Desde marzo de 2009 lo integró a su gabinete.

Identificado como “el capo del panismo”, El Chapo no sólo se mueve en lugares públicos, sino que aparece en el sitio 701 en la lista anual en la que la revista estadounidense Forbes enumera a los hombres más ricos del mundo.

En su edición del 7 de enero pasado, el semanario británico The Economist atribuye a un alto funcionario mexicano declaraciones en las que explica por qué las acciones contra el cártel de Sinaloa no han resultado eficaces. El declarante, cuyo nombre omite la publicación, aseguró que a diferencia de otros grupos criminales que se limitan al narcotráfico y a las luchas por plazas y territorios, El Chapo lidera una organización que opera a escala transnacional.

Además, según la fuente, Guzmán Loera controla en México un territorio de más de 24 mil kilómetros cuadrados, por lo que, precisó, para desarticular a su cártel se requeriría de una fuerza superior a los 100 mil soldados.

La fama y visibilidad de El Chapo la han utilizado en su contra sus enemigos en el mundo del narcotráfico. El jueves 11, por ejemplo, en despliegue perfectamente coordinado, Los Zetas colocaron 44 mantas en 26 ciudades de siete estados del país en las que reclaman al gobierno de Calderón su protección al jefe del cártel de Sinaloa.

Este grupo paramilitar, integrado por desertores de cuerpos de élite del Ejército y que desde finales de 2008 se escindió del cártel del Golfo, colocó las mantas en entidades donde tiene presencia: Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Los mensajes responsabilizan a El Chapo de las recientes matanzas de jóvenes en Torreón, Coahuila, y Ciudad Juárez, Chihuahua.

A diferencia de la narcopropaganda dirigida a autoridades o a cárteles enemigos, en esta ocasión las mantas se presentaron como “una carta a la ciudadanía”.

Según Los Zetas, las órdenes de las masacres salieron de Durango y Culiacán. Además, acusan al gobierno de Calderón de arremeter sólo contra los narcotraficantes enemigos del capo sinaloense.

Textual, el mensaje dice:

“Esta carta es para la ciudadanía Para: que se den cuenta o para los que ya tienen conocimiento. El gobierno federal protege al Chapo Guzmán y su gente, que son los culpables de la masacre de gente inocente que hicieron en torreón.

“Para el gobierno federal sólo hay Z en el país y cárteles que son enemigos del Chapo, que es el... protegido de los panistas desde que Vicente Fox entró al poder, y lo soltó y todavía sigue el compromiso hasta la fecha, a pesar de las masacres... que hacen con gente inocente.

“¡que es eso de matar gente inocente! en las... discotecas ¿la pregunta es porque lo hacen? porque no se pueden defender. Por que... no pelean con nosotros, de frente a frente invitamos al gobierno federal que atake a todos los carteles por igual hasta su protegido y que matan.

“Gobierno en Durango y Culiacán que es de donde vienen las ordenes para hacer esas barbaridades como sucedió en Cd Juarez y Torreón.”

Las mantas aparecieron en diversos municipios de Nuevo León. Una de ellas fue colocada en una de las bardas de la catedral de Monterrey. Otras en camellones y puentes peatonales de Guadalupe, Escobedo, Santa Catarina, San Nicolás y Cadereyta.

En Sinaloa, territorio natural de El Chapo, se informó de 11 mantas en Mazatlán y Los Mochis, incluso en los periódicos de ambas ciudades.

En Tamaulipas, zona del cártel del Golfo, se encontraron ocho narcomantas en puentes de importantes cruces de Reynosa, Nuevo Laredo y Valle Hermoso. Una más fue localizada en Torreón, Coahuila.

En Veracruz, nueve, en la zona del puerto y Boca del Río; en Tabasco, cinco en avenidas de Villahermosa, Balancán, Tenosique, Comalcalco y Emiliano Zapata, y en Quintana Roo, cuatro en Cancún y Playa del Carmen.

La PGR anunció la apertura de actas circunstanciadas por la colocación de la nacopropaganda.

Redacción. “Estado de sitio”. *Proceso* número 1739, 28 febrero 2010. pp 16, 17,19, 20.

<https://www.proceso.com.mx/82035/estado-de-sitio>

### “Estado de sitio”

El escenario es de guerra. El terror es de tiempo completo y se vive la sensación del desgobierno y el desamparo social. Tamaulipas, hoy, es sicosis, amagos de estado de sitio, desinformación que a través de internet las redes sociales intentan subsanar. Ciudades como Victoria, Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo se agazapan en su propio miedo, mientras decenas de ostentosas camionetas, típicas de los narcos, se apoderan de calles y carreteras. La batalla entre cárteles se libra plaza por plaza y siembra la entidad de cadáveres, ante el silencio oficial y la autocensura de los medios de comunicación locales.

REYNOSA, TAMPS. - Informes de inteligencia militar atribuyen el recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas a un acuerdo entre los líderes del cártel del Golfo, Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, y Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, con Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa, para exterminar a Los Zetas, en tanto que algunas versiones aseguran que en esa alianza participa también La Familia michoacana.

Luego de cinco meses de fuertes enfrentamientos, Los Zetas se mofaron de sus rivales con una serie de mantas colocadas el pasado martes 23 en varias ciudades aún bajo su control, y calificaron a sus rivales como “una vergüenza”.

De hecho, el cártel del Golfo y Los Zetas pelean por Reynosa desde finales de 2008, cuando Héctor Manuel Saucedo Gamboa, El Karis, líder del cártel del Golfo, tomó el control de la ciudad, luego de que el Ejército detuvo a los cabecillas de Los Zetas Antonio Galarza Coronado, El Amarillo, y Jaime Durán González, El Hummer. Poco le duró el gusto. El 17 de febrero de 2009, un grupo de zetas, supuestamente comandados por su líder, Heriberto Lazcano, El Lazca, llegó a disputar la plaza. El Karis murió en la refriega.

Ese día, Los Zetas dieron una de las primeras muestras de su capacidad: mediante barricadas en entradas y salidas de carreteras y en calles estratégicas, prácticamente secuestraron la ciudad durante casi cuatro horas de enfrentamientos con sus rivales, en los que también participó el Ejército.

Desde entonces no han cesado los combates en Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, principalmente, así como en una decena de poblados.

Las balaceras en Reynosa son casi cotidianas. Las más fuertes se reportaron al servicio de llamadas de emergencia del gobierno del Estado el 20 de septiembre, el 20 de octubre, el 7 noviembre y el 7 de diciembre del año pasado, pero en los medios de comunicación no se publicó nada y las autoridades no emitieron ningún reporte.

Ante el silencio de todos, decenas de audios y videos del retumbar de metralletas, bazucas y granadas fueron subidos a Youtube por cibernautas que reclamaron: “Las balaceras en Reynosa están a la orden del día y nadie dice nada”.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Ives Soberón Tijerina, reconoció que en los últimos meses han sido constantes los reportes de enfrentamientos armados entre grupos criminales, así como con elementos del Ejército. “En diciembre llegamos a tener más de tres balaceras cada semana”, declaró.

En Matamoros y Nuevo Laredo, Los Zetas y el cártel del Golfo cooptan a jóvenes de entre 16 y 25 años, a los que lanzan al combate. “Por cada uno que pierden, pueden reclutar a 10 más, de entre los muchos desempleados que hay en cualquier colonia marginada de estas ciudades”, comenta un funcionario de gobierno estatal. La improvisación en el manejo de armas la suplen con más violencia, dice.

Soberón Tijerina declaró que la mayor parte de las víctimas en estas balaceras son muy jóvenes, como lo ilustran los cuatro cadáveres encontrados el 23 de febrero en una casa del puerto de Tampico: tenían entre 16 y 22 años de edad.

Fuentes militares señalan que la escalada de violencia entre ambos grupos se detonó a raíz del asesinato de Víctor Peña Mendoza, El Cóncord 3, uno de los hombres más cercanos a Miguel Treviño Morales, El Z-40, el pasado 18 de enero. La ejecución fue atribuida a Samuel Flores Borrego, El Metro 3.

En represalia, Los Zetas habrían levantado a más de 10 integrantes del cártel del Golfo en esta frontera. Heriberto Lazcano, El Lazca, dio un ultimátum a Eduardo Costilla Sánchez, El Coss: a finales de enero debía entregar al Cóncord 3, antes de que “se agravaran las cosas”.

La respuesta de El Coss fue la alianza con El Chapo, quien envió refuerzos para iniciar el “exterminio” de Los Zetas, a los que acusan de ser los autores de la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, el pasado 31 de enero.

La noche del sábado 6, los habitantes de Reynosa supieron que la situación se agravaría. Por varias calles de esta ciudad circularon caravanas de ambos bandos: eran decenas de camionetas rotuladas con las siglas “CDG” (cártel del Golfo) y “XXX M3” (Metro 3), tripuladas por hombres que exhibían sus armas de alto poder.

“No es sicosis lo que tenemos, como lo dicen las autoridades y los medios; es terror, pánico, porque la situación es real. Vemos esas camionetas por las calles a toda hora, escuchamos balazos, sabemos que estamos viviendo en medio de una guerra en la que no hay cuartel y el campo de batalla son las calles”, dice un comerciante de esta ciudad. “Si antes ya salíamos con temor todos los días, habrá que imaginarse lo que es ahora”.

El despliegue de fuerzas de los narcotraficantes anunciaba el enfrentamiento que ocurrió la madrugada del 8 de febrero, entre las 12:40 y 1:15 de la mañana, en las colonias Puertas del Sur y Jarachinas. La balacera se escuchó a varios kilómetros a la redonda, “como los estruendos que salen en la tele de la guerra de Irak”. Las versiones de “decenas” de muertos son consistentes.

Al día siguiente, como ya es común en Tamaulipas, ningún medio de comunicación publicó nada. El hecho se conoció gracias a denuncias de usuarios de Twitter y Facebook, así como por los videos subidos a Youtube.

El uso de redes sociales para llenar el vacío informativo se inició en Matamoros el 4 de septiembre del año pasado, cuando habitantes aseguraron haber visto en las calles a decenas de muertos tras un enfrentamiento entre militares y sicarios del que la prensa local no reportó nada.

La autocensura de los medios y el silencio oficial han alimentado los rumores. Abundan las alertas en redes sociales, aunque muchas resultan ser falsas. Según el secretario de Seguridad, muchos de estos mensajes “son emitidos por los mismos grupos delincuenciales para generar terror entre la población, para dar a entender que no hay resultados de los operativos de combate en su contra”.

El vacío informativo dejado por las autoridades ha sido llenado por el cártel del Golfo. Recién instalados en la plaza, “invitaron” a la ciudadanía a seguir con sus actividades:

“Reynosa es una ciudad segura. No pasa nada ni pasará nada. Sigán su vida normal. Nosotros somos parte de Tamaulipas y no nos metemos con los ciudadanos civiles. Atte: C.D.G.”

### **Temor ciudadano**

El jueves 18, Reynosa vivió una jornada de sicosis, luego de que se esparció el rumor de una amenaza directa a la población: “Si no se van los marinos, empieza el secuestro de niños”, decían mantas supuestamente colocadas en Libramiento a Monterrey y la avenida Tecnológico.

La especie cobró fuerza cuando un grupo de hombres armados y encapuchados entró a las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la UAT de Reynosa para “levantar” a tres estudiantes y cerró varias calles que conducen a esa institución, a media mañana.

Padres de familia corrieron a sacar a sus hijos de las escuelas, las redes de comunicación se saturaron y el caos se armó en las calles. Para cuando cayó la tarde, la ciudad quedó prácticamente desierta.

A partir de ese día, la ciudad vive como en toque de queda permanente: pocos salen de noche, las escuelas registran un elevado ausentismo, y algunos comercios y negocios han optado por suspender actividades.

“Se trata de una recuperación de la plaza. El cártel del Golfo está recorriendo todos los puntos donde Los Zetas tenían sus negocios de tienditas, de protección, de lo que sea. La diferencia ahora es que están matando a todos los que identifican con Los Zetas, los están exterminando”, explica una fuente estatal.

Algunos zetas se han refugiado en Monterrey, “huyendo de los enfrentamientos en Reynosa”. Pero tampoco están a salvo allá: el pasado miércoles 24, cuatro supuestos integrantes de Los Zetas, identificados como Juan José Hinojosa del Monte y los hermanos David, Raúl y Gamaliel Segovia Plata, fueron detenidos en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Los bandos buscan refuerzos donde sea. Según la versión de un empleado del penal de Reynosa, un comando armado entró a ese reclusorio la noche del jueves 25 para liberar a 10 presos, entre ellos a “un brujo”.

La noche del viernes 19, el cártel del Golfo y Los Zetas libraron otra batalla, ahora en Nuevo Laredo. Aunque el alcalde Ramón Garza Barrios aseguró que se trató de un encontronazo entre el Ejército y un grupo delincuencia, reportes policíacos señalan que el choque fue entre los dos grupos de narcotraficantes. Los militares, indican otras versiones, llegaron al lugar en plena refriega.

El obispo de esa ciudad, Gustavo Rodríguez Vega, se unió a los reclamos y exigió una explicación: “Estamos tan confundidos como toda la población; no hay noticias, no hay comunicados oficiales sobre lo que ha pasado. El viernes (19 de febrero) por la noche, cerca de las 22:00 horas, hubo una persecución, supuestamente de militares contra miembros del crimen organizado, que iban por las calles bajando a la gente de sus automóviles para utilizarlos como barricadas. Por toda la ciudad se oían balazos”.

La semana pasada, el martes 23, un convoy de sicarios entró a las poblaciones fronterizas de Mier y Miguel Alemán. En ambas poblaciones se dirigieron directamente a la Presidencia Municipal y a las oficinas de la Policía Preventiva y de Tránsito para llevarse con ellos a elementos de esas corporaciones. Oficialmente, el procurador de Justicia de Tamaulipas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, informó que cuatro policías y un elemento de tránsito están desaparecidos. En la población de Río Bravo se reporta la desaparición de al menos otros ocho policías municipales.

El miércoles 24, el despliegue del narco fue abrumador: más de 100 unidades llegaron a la ciudad fronteriza de Valle Hermoso, colindante con Matamoros, considerada por fuentes militares como refugio de zetas. Hasta el viernes 26, la ciudad seguía prácticamente sitiada por los sicarios. La población estaba refugiada en sus casas, atemorizada por los enfrentamientos en los que se utilizan metralletas, bazucas y granadas.

Habitantes de Valle Hermoso, entrevistados vía telefónica, aseguraron que integrantes del cártel del Golfo habían colgado en una plaza los cuerpos de supuestos zetas. La información no fue confirmada por ninguna autoridad.

“Nadie quiere salir. A muchos nos hace falta surtir alimentos, pero tenemos mucho miedo, y no vemos en la calle ninguna autoridad que nos ofrezca protección. Desde el miércoles que los del Ejército desaparecieron, no están en las calles; parece ser que dejaron solos a los malos para que armaran su guerra y a nosotros nos abandonaron a nuestra suerte”, comenta un ciudadano.

Al mediodía del viernes 26 seguían llegando caravanas de camionetas rotuladas con las siglas de ambos bandos. “Son como 100”, dijo un habitante por mensaje de celular.

Una fuente gubernamental declaró que en esa ciudad la situación era grave. Se especulaba que al menos 500 integrantes zetas habían salido de Coahuila para llegar a reforzar a Lazcano.

En Ciudad Victoria, la mañana del jueves 25, la psicosis recorrió las calles en forma de “rumores” que alguien ordenó correr, aseguró el secretario de Seguridad Pública, Ives Soberón.

La única certeza que reina en la capital del estado es que, tarde o temprano, padecerán la misma violencia que en Reynosa y las otras poblaciones que son escenario de la guerra del cártel del Golfo para erradicar “plaza por plaza” a Los Zetas.

Las mantas colocadas la madrugada del martes 23 por Los Zetas en esa ciudad establecieron el mapa de los escenarios de esta guerra en Tamaulipas: Soto la Marina, San Fernando, Hidalgo y Ciudad Victoria.

El viernes 26, un comunicado oficial de la Procuraduría estatal y del Ejército señaló que en la última semana se habían registrado 34 muertos.

El informe sólo incluye las bajas en enfrentamientos con militares, pero la mayoría de las balaceras que se registran ahora en Tamaulipas son entre grupos contrarios de la delincuencia. Según testigos, los muertos suman centenares.

Ricardo Ravelo. “Hidalgo: La red “zeta” de alto nivel”. *Proceso* número 1745, 11 abril 2010. pp 25-27. <https://www.proceso.com.mx/82453/hidalgo-la-red-zeta-de-alto-nivel>

### **“Hidalgo: La red “zeta” de alto nivel”**

Hace unas cuantas semanas, tras recibir una denuncia de hechos que revela los presuntos nexos de la clase política hidalguense con Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, la PGR inició una averiguación previa. La indagatoria incluye al exprocurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, al gobernador Miguel Osorio Chong y a su delfín Francisco Olvera Ruiz, así como al procurador de Justicia del estado, José Alberto Rodríguez Calderón. La lista es todavía más larga...

Financiamiento de campañas políticas, protección oficial a Los Zetas, ligas entre grupos priistas y tráfico de drogas, así como una amplia rotación de funcionarios públicos (en su mayoría policías, agentes del Ministerio Público y delegados de la Procuraduría General de la República en varias entidades) “para favorecer los intereses del narcotráfico en el estado de Hidalgo”, son algunas de las acusaciones

contenidas en una denuncia de hechos presentada el 11 de marzo pasado ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) para que lleve a cabo una investigación federal.

El documento, de 61 páginas, involucra al exprocurador Rafael Macedo de la Concha; al gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong; al precandidato priista a la gubernatura de esa entidad, Francisco Olvera Ruiz, así como a decenas de funcionarios y exfuncionarios estatales y federales, en la protección de Los Zetas y de su jefe, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien por cierto es hidalguense.

Proceso tiene una copia de la denuncia, que fue elaborada por el llamado Grupo Ciudadano Hidalguense. En la PGR pudo confirmarse que el signatario es Raúl Miguel Olvera Rodríguez y que el documento llegó a la SIEDO a través de un servicio de mensajería.

Desde dos días antes, el 9 de marzo, empleados de la SIEDO, cuyos nombres se mantienen en reserva, ya esperaban la denuncia. En cuanto la recibieron, la turnaron a la oficina de Irving Barrios Mójica, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR.

Además de señalar al gobernador Osorio Chong, la denuncia consigna presuntas relaciones con el narcotráfico, lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, en contubernio con Los Zetas, del hermano del mandatario, Eduardo Osorio; del procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; del secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y del presidente municipal de Pachuca con licencia, José Francisco Olvera Ruiz, quien, según el documento, recibió más de 30 millones de pesos del narco en 2008 para su campaña por la alcaldía.

Olvera Ruiz es el favorito del gobernador Osorio Chong para sucederlo. Apenas el 30 de marzo solicitó licencia para separarse del cargo de presidente municipal y se registró como precandidato del PRI a la gubernatura el martes 6.

Después de analizar la denuncia, la SIEDO determinó que sí existen elementos constitutivos de delitos federales en contra de Osorio Chong, de Olvera Ruiz y de una veintena de funcionarios más, por lo que procedió a integrar formalmente la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010. Los delitos: delincuencia organizada y lavado de dinero.

El documento establece que el objetivo de poner en manos del Ministerio Público Federal presuntos hechos constitutivos de delitos es que se investigue “la dicotomía poder político-narcotráfico en el estado de Hidalgo y que se conozca toda la información con la que contamos respecto a la situación de la narcopolítica”, y dice confiar en que, con los datos que se aportan, la PGR podrá complementar, sistematizar y contextualizar la información obtenida en indagatorias y le permitirá cerrar sus círculos de investigación.

El Grupo Ciudadano Hidalguense señala que el exprocurador Rafael Macedo y el líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, “se identifican y (tejen) un acercamiento debido, entre otras razones, a que ambos son originarios del estado de Hidalgo”.

A partir de ese acercamiento –agrega el documento– comenzaron a moverse las piezas en varias entidades del país para proteger a Los Zetas. Se cita como ejemplo el hecho de que, cuando Alfonso

Navarrete Prida (exprocurador de Justicia del Estado de México y actual diputado federal por el PRI) fue investigado en la PGR por la presunta venta de plazas en esa dependencia para favorecer al cártel de Juárez, el personaje clave para su exoneración fue Jorge Frías Vázquez, quien le dio una salida decorosa.

Frías Vázquez es actualmente secretario particular de José Alberto Rodríguez Calderón, procurador de Justicia de Hidalgo y presunto protector de Los Zetas en esa entidad, asienta la denuncia.

Y se añade otro dato: “Frías Vázquez cumple con una función toral en la protección institucional en el estado de Hidalgo a las actividades de narcotráfico que la organización criminal de Los Zetas desarrolla. El vínculo de Jorge Frías con este grupo delictivo se estableció en el estado de Guerrero cuando se desempeñaba como subdelegado de la PGR, bajo el mando del entonces delegado José Alberto Rodríguez Calderón”, el actual procurador de Hidalgo.

En la lista de policías que la denuncia señala al servicio del narcotráfico en Hidalgo resalta Raúl Batres, nombrado por la PGR delegado regional de la AFI en Hidalgo “a petición del cártel del Golfo”. El objetivo, según la denuncia, era claro: “proteger a Los Zetas”.

Batres y Miguel Osorio Chong coincidieron en el estado de Sinaloa en 2004: el primero era delegado de la PGR, el hoy mandatario era funcionario del IMSS. Quien los presentó fue Federico Vera, “hombre de confianza” de José Francisco Olvera Ruiz, el precandidato priista a la gubernatura del estado.

Narra la denuncia: Raúl Batres se incorporó a la comandancia regional de Hidalgo en el mejor de los ambientes. Con José Francisco Olvera Ruiz en la secretaría general de Gobierno (cargo que desempeñó antes de ser alcalde de Pachuca), con José Alberto Rodríguez Calderón al frente de la Procuraduría General de Justicia Estatal, y con Marcos Manuel Souberville González como secretario de seguridad pública (ejecutado en 2009 presuntamente por el narcotráfico).

A través de Raúl Batres en la AFI “se establecieron los pactos con la organización criminal de Los Zetas y todo se concretó a través de la interacción de esas dependencias”, dice la denuncia de hechos.

Otra pieza importante en la protección de Los Zetas en Hidalgo, según el documento, es el procurador de Justicia José Alberto Rodríguez Calderón, “nombramiento que le debe a Eduardo Osorio, hermano del gobernador”.

Rodríguez Calderón es señalado como “aliado del exprocurador Rafael Macedo”: fue delegado de la PGR en Guerrero en 2003, donde se relacionó con los hermanos Beltrán Leyva, en ese momento aliados del cártel de Sinaloa que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Desde entonces, según la denuncia, “cumple a cabalidad con la encomienda de proteger y apoyar a Los Zetas”. El documento añade: “Ahora lo haría, para beneplácito de El Lazca, desde la procuraduría del estado de Hidalgo”.

Las ligas de funcionarios públicos con el crimen organizado ha estado marcada por la muerte entre paisanos hidalguenses en posiciones encontradas: unos como aliados del narco, otros como investigadores de la PGR.

Un ejemplo es el secuestro, tortura y asesinato del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la SIEDO, Gustavo Flores Delgado, en mayo de 2005, en Acapulco, Guerrero, cuando investigaba al cártel de los hermanos Beltrán Leyva, quienes controlaban la plaza.

Flores Delgado estaba bajo las órdenes de su paisano José Alberto Rodríguez Calderón, con quien “convino los términos de la operación en Acapulco”. Sin embargo, se habría enterado de que se pretendía favorecer al cártel del Golfo y su fuerte aliado en aquel tiempo, Los Zetas.

Un grupo secuestró a Gustavo Flores y lo torturó “brutalmente”. La denuncia que obra en poder de SIEDO narra lo que sucedió después:

El entonces subdelegado de la PGR en Guerrero, Jorge Frías, no consiguió la confianza de Los Zetas. En 2006 fue nombrado subdelegado de procedimientos Penales de la PGR en Tamaulipas, donde sufrió un atentado junto con Rocío Vega, agente del Ministerio Público Federal. Según el documento en poder de Proceso, Frías salvó la vida por intermediación de Rodríguez Calderón, pero ambos debieron pagar el precio:

Los Zetas han perdonado a Frías Vázquez. Para que no hubiera duda de la incondicionalidad de Jorge Frías con la organización criminal Los Zetas, el jueves 22 de octubre de 2009, el procurador general de Justicia de Hidalgo, José Alberto Rodríguez Calderón, con la anuencia del gobernador Osorio Chong y de su hermano Eduardo, contando con el acuerdo de quien se cree será el nuevo gobernador del estado, José Francisco Olvera Ruiz, nombró como su secretario particular a Jorge Frías.

A la fecha, no ha habido queja del grupo delictivo Los Zetas respecto del ‘trabajo’ del nuevo secretario particular. El atentado que sufrió Jorge Frías fue un gran ejemplo para que Rodríguez Calderón corrigiera el camino jurando lealtad a un solo grupo delictivo, a Los Zetas. Y es que José Alberto Rodríguez había estado acostumbrado a pactar con unos y con otros. Así ocurrió, igualmente, durante su estancia como delegado de la PGR en el estado de Durango, situación que originó, como era de esperarse, en disputas entre diversos grupos dedicados al narcotráfico por el control de la plaza.

De esta forma se involucró con los capos del narcotráfico más importantes como Ignacio Nacho Coronel, del cártel de Juárez, que resultó beneficiado con la protección institucional que le brindaban Rodríguez Calderón y José Campos Murillo, exprocurador de justicia de Durango y exsubprocurador general de la República durante la gestión de Rafael Macedo de la Concha.

Los denunciante establecen vínculos entre la política electoral y el narcotráfico, en los que nuevamente participa Rodríguez Calderón:

En su paso por Durango, Rodríguez Calderón entabló relación cercana y de amistad con otro personaje que sirve a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, pero desde la trinchera electoral: Hugo García Cornejo, quien curiosamente se ha desempeñado como vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en los estados priistas de Puebla, Durango, Hidalgo y Veracruz.

La realidad es que no fue casual que Rodríguez Calderón y él coincidieran en los estados de Durango e Hidalgo. José Alberto como delegado de la PGR y como procurador local, así como García Cornejo en el IFE, forman parte de un equipo político-criminal con el que Los Zetas se instalan en el estado de Hidalgo.

## **El posicionamiento**

El control que ejercen Los Zetas en Hidalgo no ha mantenido a la entidad alejada de la violencia. Aunque con presunto apoyo oficial Los Zetas lograron sortear los embates del cártel de Sinaloa, su más fuerte competidor, dentro del gabinete de Osorio Chong habrían surgido presuntos desarreglos financieros.

Ejemplo de ello es el asesinato, en 2009, de Marcos Souberville, secretario de Seguridad Pública del estado, poco después de una ola de crímenes y secuestros en el estado:

La presión social hizo que, en su momento, para justificar su inacción, el secretario de Seguridad Pública, Marcos Souberville, dispusiera la creación de un grupo especial antisequestros que en realidad no resolvería pero que, en el terreno, haría perder el control directo de esa actividad a sus colegas funcionarios relacionados con el tema de seguridad y, lo más importante, los haría perder presencia ante Los Zetas para él posicionarse mejor ante la organización.

De inmediato Eduardo Osorio Chong, hermano del gobernador, acuerda con Francisco Olvera Ruiz, entonces secretario general de Gobierno, instruya a José Alberto Rodríguez Calderón para que se pongan las cosas en orden. Rodríguez Calderón les pide al director de la Policía Ministerial y al comandante antisequestros, Jesús Garcés, El Garocho, la eliminación de Marcos Souberville.

Ambos planean la ejecución con la intervención de Los Zetas. El día de los hechos, Rafael, secretario particular de Souberville, informa telefónicamente a Esteban Reyes y a El Jarocho que ese día por la tarde su jefe iría solo a Huasca. Conforme al plan, Esteban y El Jarocho se comunican con El Cepillo (detenido en Tepic, Nayarit) y con otro grupo de Los Zetas, quienes harían el trabajo.

De toda la operación, de principio a fin, mantuvo informado a Eduardo Osorio, hermano del gobernador. Los Zetas arman el operativo pues era hora, además, de cobrar venganza contra Souberville por el “gane” de varios millones de dólares cuando en Atotonilco la policía detuvo a varios Zetas.

El comando fue dirigido por El Pahua. Lo acompañaron El Peluche, El Bien Peinado y El Gato. Se formó un convoy con una camioneta Chevrolet Tahoe y una Blazer blanca. Los tripulantes fueron El Cepillo y El Luis, comandantes de Los Zetas en Huejutla, Hidalgo, por acuerdo de Omar Zerón Flores, cercano colaborador y operador de Eugenio Imaz, alto funcionario del gobierno del estado y hombre de confianza del gobernador Miguel Osorio.

El comando se dirigió a las inmediaciones de Huasca de Ocampo, Hidalgo. A las 17:30 horas del miércoles 19 de septiembre de 2007, el secretario de Seguridad Pública, Marcos Souberville, fue ejecutado.

El funcionario iba acompañado, según la denuncia, por un sujeto llamado Marcos Covarrubias, quien sobrevivió al ataque “extrañamente”.

Ricardo Ravelo. “En Hidalgo, la megaestructura “zeta””. *Proceso* número 1748, 2 mayo 2010. pp 12-15. <https://www.proceso.com.mx/82659/en-hidalgo-la-megaestructura-zeta>

**“En Hidalgo, la megaestructura “zeta””**

Declaraciones de testigos protegidos contenidas en por lo menos dos averiguaciones previas detallan los presuntos vínculos de la clase política de Hidalgo con la estructura criminal de Los Zetas, que se avinieron en esa entidad desde 2001, cuando Manuel Ángel Núñez Soto estaba al frente del gobierno. De entonces a la fecha la llamada “compañía” se expandió por los 84 municipios hidalguenses y formó un entorno que prácticamente incluye a los principales jefes policiacos, al procurador estatal, al gobernador Miguel Ángel Osorio Chong y a Francisco Olvera, quien se perfila como su sucesor...

Fue en 2001, durante los primeros meses de la gestión de Manuel Ángel Núñez Soto, cuando Los Zetas llegaron a Hidalgo, donde establecieron su centro de operaciones. Desde ahí, al amparo de policías, militares y autoridades estatales y municipales, ampliaron sus actividades para el trasiego de droga en las entidades circundantes, alternadas con secuestros, extorsiones, asesinatos y levantones, que se han agudizado incluso durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.

Con amplias conexiones hacia Puebla, Veracruz, el Estado de México y el Distrito Federal, los integrantes de esa organización crearon en Hidalgo una megaestructura criminal. Hoy incluso disponen de células en cada uno de los 84 municipios y tejieron una red de espionaje a través de los llamados Halcones.

Los Zetas manejan una nómina de más de 150 personas distribuidas a lo largo del territorio hidalguense, y hasta cuentan con cementerios privados y lugares secretos en los que sepultan a sus víctimas; pero, sobre todo, se desenvuelven con soltura entre las autoridades para que éstas “no investiguen sus crímenes”, según se desprende de un amplio expediente obtenido por Proceso.

De acuerdo con las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIS/150/2009 y PGR/SIEDO/UEIS/099/2009, varios testigos protegidos y no protegidos (en su mayoría policías estatales y municipales acusados de servir al narco) detallan la forma en que Los Zetas arribaron a Hidalgo y cómo iniciaron su expansión de “la compañía” en la zona.

Rufino, uno de los testigos que fue miembro del cártel del Golfo, asegura que el proyecto de Los Zetas para apropiarse de la plaza de Hidalgo data de 2001, cuando el gobierno de la entidad era encabezado por Manuel Ángel Núñez Soto (1999-2005).

En esa época, Osiel Cárdenas Guillén, líder de dicha organización criminal, ordenó al jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, establecerse en tierras hidalguenses como avanzada para posicionarse en otras entidades de la República, sobre todo Puebla y el Estado de México, sostiene Rufino.

En el año 2001 Osiel Cárdenas Guillén le ordenó a Heriberto Lazcano que tomara la plaza de Pachuca, Hidalgo, en donde tuvimos dos casas de seguridad, una que habitaba Osiel Cárdenas y otra que habitaba el grupo Los Zetas, o sea, la escolta personal de Osiel, ya que de ese estado (Hidalgo) es originario Heriberto Lazcano, pues él junto con su familia tienen su domicilio cerca del Campo Militar de la ciudad de Pachuca... Así fue como Lazcano fue tomando el control de dicha ciudad y del estado y (por ello) señalo al gobernador actual (Miguel Ángel Osorio Chong) por su negligencia y omisión, y lo señalo porque no hacer nada por el bienestar de su estado es colaborar con el cártel de Los Zetas, el cual es comandado por Heriberto Lazcano, afirmó el testigo en su declaración del 26 de junio de 2009.

## **La demanda**

Desde el mes pasado, la PGR investiga al gobernador Osorio Chong, a su hermano Eduardo, así como a varios políticos hidalguenses por sus presuntas ligas con el narcotráfico, así como por la presunción de los delitos de lavado de dinero y otras modalidades del crimen organizado, según la denuncia de hechos presentada ante la Subprocuraduría General de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el pasado 11 de marzo. A partir de esa querrela se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDORPIFAM/185/2010.

En esa denuncia, interpuesta por el Grupo Ciudadano Hidalguense, se menciona también al procurador estatal, José Alberto Rodríguez Calderón; al secretario de Agricultura, Manuel Sánchez, y al expresidente municipal de Pachuca José Francisco Olvera Ruiz, candidato del PRI al gobierno de Hidalgo. A él se le acusa de haber recibido 30 millones de pesos de Los Zetas para el financiamiento de su campaña por la alcaldía de la capital hidalguense (Proceso 1745).

El documento, cuya copia tiene este semanario, precisa que el grupo armado se posicionó en la ciudad de Pachuca a partir de la gestión de Omar Fayad Meneses (2006-2009), quien antes había sido administrador general de Aduanas durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Antes de que el Grupo Ciudadano Hidalguense presentara su denuncia, la SIEDO ya tenía conocimiento de la protección institucional que reciben Los Zetas en la entidad. Testigos protegidos, como José Manuel Escobedo Delgadillo, El Oso, así como Pitufu y Caleb, refieren que desde hace varios años Los Zetas han gozado de la protección oficial.

Según los testigos, uno de sus nexos en la administración de Pachuca es el director de Seguridad Pública, Roberto Terán Contreras, uno de los colaboradores de Francisco Olvera durante los meses que éste encabezó el ayuntamiento pachuqueño.

En su declaración del 14 de junio del año pasado, El Oso relató que se desempeñó como policía municipal en Pachuca de 2004 a 2009 y que en ese periodo se “enganchó” con Los Zetas. Llegó a ser incluso, dijo, el responsable del pago de la nómina de esa organización, que creó una sólida infraestructura para operar el tráfico de drogas, los secuestros y asesinatos en todo el estado de Hidalgo y defender la plaza de sus rivales de La Familia michoacana.

Una de sus primeras funciones, comentó en esa ocasión, fue reclutar a policías municipales para Los Zetas: Todos los policías de Seguridad Pública Municipal de Pachuca, Hidalgo, realizaban las mismas funciones, también las de revisar vehículos sospechosos con un pago de 10 mil pesos al mes. Yo les estuve pagando (la nómina) aproximadamente por seis meses, ya que posteriormente les comenzó a pagar el comandante Terán, quien es el secretario de Seguridad Pública Municipal.

Él les hacía llegar los sobres con dinero y a su vez los repartía, aclarando que dentro de la organización de Los Zetas se encuentran implicados la Policía Ministerial del estado de Hidalgo y su director Ahuizotl Hideroa. Él es el que da órdenes de dar carpetazo a los asuntos de secuestros, homicidios, cubriendo a miembros de la organización de Los Zetas.

También está relacionado con Los Zetas el comandante de la Policía Ministerial Antisecuestros de nombre Jesús Garcés Jiménez, alias Soler o Jarocho, a quien tengo un año y medio de conocerlo y su función era la de secuestrar, quitar las órdenes de aprehensión que perjudicaran a Los Zetas. Por esa protección le pagan 50 mil pesos al mes.

Además de Garcés Jiménez, la red de protección a Los Zetas la conformaban, según El Oso, Guillermo Lugo Ávila, quien era el titular de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN). También menciona que personal de la SIEDO le proporciona información a Los Zetas y que uno de los enlaces era un individuo al que apodaban El Cepillo.

El Cepillo cobraba una cuota a los vendedores de cuetes de pirotecnia y otra de las instrucciones que me daba, para que a su vez yo se las diera a los Halcones, era la de checar que no hubiera mirones cerca de Tiro de Mina, que está en el primer cuadro de la ciudad de Pachuca, ya que en ese lugar mandaban a tirar a la gente que secuestraban y mataban, ya que es muy profunda y hay gases tóxicos.

### **El organigrama**

De acuerdo con la causa penal 464/2009, el organigrama de Los Zetas en el estado de Hidalgo creció a pasos agigantados durante el actual gobierno, encabezado por Miguel Ángel Osorio Chong, algunos de cuyos colaboradores presuntamente dan protección a ese grupo criminal.

El 16 de junio de 2009, en una ampliación de su testimonio, El Oso relacionó a decenas de funcionarios con presuntas ligas con el narcotráfico y Los Zetas. Entre ellos a Damián Canales Mena, secretario de Seguridad Pública del estado, responsable, dijo, de todos los operativos en la entidad para brindar protección a las actividades delictivas de ese grupo criminal.

El testigo aseguró: (La estrategia de Canales Mena consiste) en poner los puntos fijos en las salidas y entradas de Pachuca, asignaban patrullas para vigilar y estar informados sobre el movimiento de las autoridades policiacas que entraban al estado.

La estructura policiaca creada para proteger a Los Zetas en Hidalgo incorporó a policías de todos los niveles, pues cada uno realiza una función específica, de acuerdo con los detalles que menciona el testigo. Y como parte de esa red policiaca menciona a Froylán Chote, alias Relámpago, quien funge como comandante de motociclistas; Rubén Sampayo, director de Tránsito y Vialidad municipal en Pachuca, y Alejandro Caballero, El Canas, un policía preventivo, entre otros.

La función de esas personas –expuso El Oso– es vigilar los movimientos del Ejército, de los agentes federales y de los operadores de otros cárteles. La información recabada se la pasaban a un personaje al que el declarante sólo identifica por su mote: Masca Fierro.

En otra parte de su testimonio ampliado, El Oso desmenuza la forma en que actúan Los Zetas en los municipios hidalguenses que forman parte de sus territorios para el trasiego de droga, los secuestros y las extorsiones:

En la organización criminal denominada Los Zetas una de sus estructuras son las estacas, siendo un vehículo con las funciones de patrullaje conformado por tres elementos operativos. En la ciudad de Pachuca operan entre tres y cuatro vehículos, siendo uno de ellos el que trae El Masca Fierro o G1. Como apoyo para sus tareas se les asigna un grupo de halcones.

Los integrantes de este grupo son los espías que, según las investigaciones de la PGR, trabajan de día y de noche. Según El Oso, el comandante de Los Zetas en Hidalgo se llama Roberto Benítez, conocido con la clave Rayo y Verde dentro de “la compañía”. Y lo describió: Es de aproximadamente 1.60 metros

de estatura, tez blanca, complexión delgada, pelo negro medio largo y se transporta en un Mercedes Benz color verde botella.

Junto con Rayo y Verde, agregó el testigo, hay dos personas que son operativos; es decir, levantan a las personas, las matan y las queman. Una de esas personas la conozco como El Lobo. El segundo comandante operativo que conozco le apodan El Mexicano, tiene su domicilio en Villas de Pachuca... está encargado de una estaca conformada por otras dos personas: Eduardo Mendoza, El Moroco, y al otro le dicen El Box y es tío del comandante Rayo y Verde.

Esos sujetos, “todos ellos conocidos”, relató El Oso, le comentaron en el último encuentro que habían conseguido –no detalló si fue un permiso oficial– tres panteones fuera de Pachuca que utilizaban para “las carnitas”; es decir, para descuartizar los cuerpos de sus víctimas.

Además de la capital hidalguense, Los Zetas tienen una estructura operativa en Actopan. En ese municipio la cabeza es un comandante a quien El Oso sólo identificó como El Chiuas. En Ciudad Sahagún el representante de la organización criminal es el comandante Sapo, quien, como los demás, “se dedica a distribuir droga, cobrar derecho de piso a narcos de otros estados, así como a comerciantes, a vendedores de discos pirata y a los ambulantes”.

En Omitlán de Juárez, Epazoyucán, Villas de Tezontepec, Tolcayuca, Tulancingo, Zapotlán de Juárez, así como en 70 demarcaciones más la estructura de Los Zetas es similar, incluida la nómina, en la que hay policías, y que manejan los contadores de “la compañía”, uno de los cuales era el propio Oso.

El pago de los policías, mandos altos y funcionarios estatales lo definen los contadores de Los Zetas, sin que yo los conozca, ya que el declarante solamente transcribía los listados y se los entregaba a Roberto Benítez, El Rayo y Verde, y éste le entregaba las listas a los contadores para que pagaran en sobres (de color) manila o de color amarillo la cantidad estipulada en la nómina.

Al declarante la pagaban 20 mil pesos, asimismo le entregaba a Julio César Sánchez Amador, director de la Policía Municipal de Mineral de la Reforma, conocido como El Pachuquillas, la cantidad de 50 mil pesos; al subdirector de esa corporación le pagaban 30 mil, a cada comandante se le pagaban 10 mil pesos, a los oficiales 5 mil, deseando aclarar que, además de hacer la nómina, la función del declarante era la de halconear, es decir, parar los vehículos que me indicaban para verificar si no se trataba de alguna autoridad federal, o que fuera alguna autoridad de otra dependencia y, en caso de ser positivo, otros halcones daban seguimiento permanente, deseando añadir que la única vez que el declarante no pudo detener un vehículo se llevó como 10 mil tablazos como sanción o castigo por no hacer su trabajo para el que lo contrataron.

Por su parte, el testigo protegido con clave Caleb señaló que Los Zetas recibían protección de la SIEDO y que a través de personal militar le entregaban información a los jefes de las estacas sobre operativos federales, y que éstos se encargaban de verificar si miembros de otros cárteles querían entrar a la plaza.

El destino de estos intrusos los determinaba el jefe de la plaza. En la causa penal 464/2009 Caleb refirió que cuando se detenía a personas en la venta de droga se verificaba si eran miembros de la compañía; de no ser así, el jefe de la plaza decidía si los entregaba a las autoridades estatales para que cumplieran con su trabajo o bien le daban piso (muerte).

Que para detectar a estos intrusos contaban con el apoyo de policías federales; uno de ellos, dijo, era el federal de caminos Javier García Mariscal. Su función: dar la seguridad a Los Zetas en las carreteras para que no detuvieran los vehículos de los sicarios, los tráileres robados y tráileres y camionetas con anfetaminas que le llegaban a la compañía por la carretera México-Laredo.

Otra de sus funciones era la de liberar a los halcones y sicarios que estuvieran involucrados en algún accidente y dar información cuando veían un convoy de federales del Distrito Federal hacia Hidalgo. Ahuitzol Hideroa, Esteban Reyes y Jesús Garcés Jiménez, director, subdirector y comandante de la Policía Ministerial de Hidalgo, protegían a Los Zetas. Su apoyo consistía en dar protección a los sicarios que llegasen a ser detenidos y consignados a separos de la Policía Ministerial, así como proteger los lugares donde se vendía droga.

Si los detenidos eran de la compañía, estos mandos oficiales informaban al jefe de la plaza que ya tenían la investigación de dichas personas, y del lugar, aconsejando cambiar el lugar de venta y a los tenderos y sugiriendo su cambio para protegerlos...

Ricardo Ravelo. “Desde las entrañas del Ejército...”. *Proceso* número 1750, 16 mayo 2010. pp 6-9.

<https://www.proceso.com.mx/81516/desde-las-entranas-del-ejercito>

### **“Desde las entrañas del Ejército...”**

Luego de siete años en el Ejército, un cabo de infantería llamado Heriberto Lazcano decidió cambiar de camiseta y canalizar sus ambiciones en el terreno del crimen organizado. Creció a la sombra del jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, y tuvo como maestro al fundador de Los Zetas: Arturo Guzmán Decenas. Convertido en El Lazca, con fama de sanguinario, este exmilitar logró encumbrar a su grupo de sicarios a la categoría de cártel...

El 5 de junio de 1991, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, se alistó en las filas del Ejército con el afán de convertirse en una figura dentro de las filas castrenses. Su ambición de alcanzar una posición destacada en la milicia duró siete años. Como cientos de militares más que terminaron enganchados en el negocio de las drogas, el actual jefe máximo de Los Zetas decidió abrirse sitio en el mundo del narco. Ahora es uno de los capos más buscados dentro y fuera de México.

El 27 de marzo de 1998, según registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Lazcano causó baja del Ejército cuando había alcanzado el rango de cabo de infantería. Cañonazos de dólares y el poder ilimitado ofrecido por el narcotráfico lo sedujeron cuando tenía 24 años: poco después de su desertión se incorporó al cártel del Golfo, organización criminal que entonces recobraba su poder con el liderazgo de una nueva figura: Osiel Cárdenas Guillén, El Mata Amigos.

Según declaraciones ministeriales de los testigos protegidos Rufino y Geraldin, Lazcano fue llevado al cártel del Golfo por otro exmilitar que llegó a ser tan poderoso como actualmente es El Lazca: Arturo Guzmán Decenas, El Z-1, a quien tanto la PGR como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal le atribuyen la fundación de Los Zetas, el llamado “ejército del narco”.

Geraldin, cuyo nombre es Alejandro Lucio Morales Betancourt, fue parte de ese “ejército”, donde se le conocía como Z-2. El 17 de noviembre de 2001 fue capturado y poco después se acogió al programa de

testigos protegidos. En la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/111/2003 declara que el objetivo que se persiguió con la creación de Los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo fue eliminar a todos los enemigos de Cárdenas Guillén.

La historia de Los Zetas confirma la versión de Geraldin, pues a finales de 1997 –cuando Cárdenas emergió de las filas de la extinta Policía Judicial Federal y se aprestó a tomar el control del cártel del Golfo– apareció Guzmán Decenas, personaje que sería clave para los planes de expansión de la organización criminal al eliminar a los rivales de Osiel; entre otros, a su principal opositor: Salvador Gómez Herrera, El Chava.

Guzmán Decenas nació el 13 de enero de 1976 en el estado de Puebla y se formó en el Ejército, donde, bajo el rigor castrense, estudió la secundaria y la preparatoria. Después ingresó al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), cuerpo que se constituyó con vocación contrainsurgente y de combate al crimen organizado.

Antecesor de Heriberto Lazcano en la jefatura de Los Zetas, Guzmán Decenas fue uno de los tantos militares que a mediados de los noventa pasó a la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) –desaparecida en 2003 debido a que estaba infiltrada por el narco– para reforzar la lucha antidrogas. Cuando fungía como mando policiaco en Miguel Alemán, Tamaulipas, fue “enganchado” por Cárdenas Guillén.

Según el testigo Rufino –cuyo nombre es Francisco Vázquez y quien se desempeñó como asistente personal de Osiel–, Guzmán Decenas planeó junto con el capo la creación de un grupo de protección, pues aquél temía ser asesinado por El Chava Gómez.

Antes de que Gómez Herrera eliminara a Cárdenas y la plaza de Tamaulipas quedara bajo su absoluto control, Osiel –según el testigo– decidió asesinarlo. El brazo ejecutor fue, dice Rufino, Guzmán Decenas, jefe y maestro de Heriberto Lazcano.

En un apartado de la averiguación previa, Rufino narra cómo fue asesinado Gómez Herrera: Osiel se encontraba en Tomatlán, Jalisco, en un rancho que se llama La Trementina, el cual Osiel utilizaba como refugio. Lo acompañan Eduardo Costilla, El Coss; Víctor Manuel Vázquez Mireles, Arturo Guzmán Decenas y el declarante... Por fechas está programado el bautizo de una hija que Osiel Cárdenas procreó con la señora Liliana Dávila. La ceremonia se celebraría en Tuxpan, Veracruz, y el padrino era Salvador Gómez Herrera.

Cómodamente sentado en un sofá, Osiel Cárdenas le habló por teléfono a El Chava Gómez y le dijo que no podría asistir al bautizo porque había sido operado de emergencia de la vesícula. Osiel mintió. En realidad (Cárdenas) aprovechó sus días de descanso para someterse a una cirugía plástica y a una liposucción.

El Chava Gómez comprendió el imprevisto y le deseó pronta recuperación. Pasaron los días sin ninguna novedad, hasta que Osiel fue a verlo tan pronto como se sintió recuperado de sus intervenciones estéticas. Acordaron verse en el puerto El Mezquital, en Tamaulipas. Salvador Gómez Herrera decidió quedarse refugiado en Tuxpan y días después viajó por lancha, pues temía que lo detuvieran después de haberse fugado de una casa de arraigo de la PGR junto con Osiel.

Osiel Cárdenas se desplazó desde Tomatlán en una camioneta Durango. Lo acompañaban en ese trayecto Arturo Guzmán Decenas y Víctor Manuel Vázquez Mireles, El Meme Cabezón. Después recogieron a Gómez Herrera en el puerto El Mezquital. Acababa de bajar de una lancha de su propiedad, utilizada para transportar droga desde Veracruz hasta Tamaulipas.

Después de saludarse, El Chava Gómez abordó la camioneta y se acomodó en el asiento del copiloto. Charlaron unos minutos entre risas y bromas. Cuando El Chava Gómez se reía a carcajadas, y esto lo sé porque me lo comentó Vázquez Mireles, Arturo Guzmán, que iba en el asiento trasero, sacó la pistola y se la vació al Chava en la cabeza. Luego sacaron el cuerpo y lo aventaron al monte, donde los animales le carcomieron toda la panza.

Guzmán Decenas terminó de conformar a Los Zetas, pero en noviembre de 2002 fue ejecutado en un restaurante de Matamoros, Tamaulipas. Durante su sepelio salieron a relucir las coronas. En una de ellas se leía, en letras grandes y doradas: “Te llevamos en el corazón. De tu familia: Los Zetas”.

### **La toma del poder**

Después de la muerte de Guzmán, el liderazgo de Los Zetas fue asumido por Heriberto Lazcano, nacido en Apan, Hidalgo, en 1974. A sus 36 años, El Lazca o El Verdugo no sólo ha sabido mantenerse en el poder a sangre y fuego, sino que ha logrado expandir el radio de acción del grupo que encabeza, a grado tal que ya está afincado en 25 estados del país.

No es todo: de acuerdo con investigaciones ministeriales e informes de la Drug Enforcement Administration (DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos), Lazcano diversificó las actividades criminales de Los Zetas.

Primero operaban como grupo paramilitar dedicado a la protección de Cárdenas Guillén. Tras la captura del capo en 2003 –un día después de la celebración del cumpleaños de su hija, Celia Marlén Cárdenas Salinas–, Los Zetas cobraron mayor auge en el tráfico de drogas y tiempo después se convirtieron en un cártel bien organizado.

Según el informe Radiografía de los cárteles mexicanos, elaborado por la SSP, Los Zetas están estructurados en pequeñas células llamadas “estacas”, cuentan con expertos en contabilidad y administración de empresas y tienen el control de las policías estatales y municipales en una veintena de estados.

La SSP y la DEA coinciden en que Los Zetas ahora también venden protección, además de perpetrar secuestros, extorsiones y tráfico de personas, así como acciones de piratería y cobro de derechos de piso a comerciantes y a narcotraficantes que pretenden cruzar droga por los territorios que dominan.

A diferencia de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul –negociador de pura cepa–, Heriberto Lazcano es proclive a la violencia y a la traición, según se destaca en un breve perfil criminal elaborado por la PGR con base en testimonios de personas que lo conocen.

El testigo Geraldin declara que el jefe de Los Zetas siempre ha separado sus relaciones personales de los negocios, en tanto que investigaciones de la PGR, así como fichas policiacas, afirman que recurre a métodos de tortura para doblegar a sus rivales, e incluso a los propios zetas que violan la disciplina interna.

Una de esas fichas dice que a quienes lo desobedecen o engañan, los ejecuta o los apanda. Si decide verlos morir poco a poco, ordena que les supriman la comida y el agua, hasta que perecen de inanición o deshidratados.

Una breve historia tomada de las declaraciones de otro testigo protegido, Karem, da cuenta del explosivo carácter de Lazcano cuando alguien no cumple su palabra. Narra que un día Alfredo Rangel Buendía, El Chicles –considerado en su momento uno de los hombres de mayor confianza del Lazca–, le pidió dinero prestado: “Quiero comprar fayuca, ayúdame con un préstamo, te lo devuelvo en un mes”, le dijo. Pero no cumplió. Y esto fue lo que siguió, según Karem:

Lazcano nos ordenó a todos los (sicarios) del cártel del Golfo que matáramos al Chicles, por lo que Iván Velásquez Caballero (a quien llaman El Talibán y tiene la clave L-50) le dijo que se acercara a un punto de la colonia Madero, de Nuevo Laredo, por lo que cuando llega El Chicles lo enganchamos, o sea, lo agarramos y lo íbamos a matar.

Rangel Buendía no fue asesinado y Karem explica la razón: “El Talibán habló con Lazcano y le dijo que él le iba a recuperar el dinero y que nada más lo castigara. Enseguida recibimos la orden de que lo mantuviéramos amarrado un mes. Nos autorizó (Lazcano) a que le diéramos agua y de comer una vez al día, para que no estuviera yendo seguido al baño”.

A Osiel Cárdenas le simpatizó el comportamiento sanguinario del Lazca, relata el exsubteniente Alejandro Lucio Morales Betancourt, quien actualmente es el testigo protegido Geraldin, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/111/2003.

Recuerda que, en 1999, cuando Lazcano se acababa de incorporar al cártel del Golfo, Cárdenas citó a Guzmán Decenas en una casa de seguridad en Reynosa, Tamaulipas, y le pidió juntar a 20 pistoleros para asesinar a Rolando López Salinas, El Roly, quien era amigo de Osiel.

Así sucede este asesinato, según Geraldin: Llegaron a una casa (situada) en Miguel Alemán, que está sobre la calle Décima. Solamente entraron al inmueble Arturo Guzmán y Lazcano, realizando disparos, pero fueron recibidos a balazos por la gente que se encontraba en ese lugar.

Lazcano disparó a un tanque de gas provocando su explosión y ante ello salimos corriendo de dicho lugar, en esa ocasión hubo muertos en esa casa, pero la Policía Ministerial se encargó de ocultarlos y de que no se supiera nada.

Otra historia que delinea el lado sanguinario de Heriberto Lazcano, también contenida en la indagación, ocurrió en marzo de 2002, cuando Guzmán y El Lazca torturaron y acribillaron a cuatro agentes de la Policía Ministerial de Nuevo Laredo que desobedecieron órdenes suyas, pues, según Rufino, “las policías pertenecen al cártel del Golfo, son empleados del narcotráfico, ellos obedecen y quien no hacía caso, pues simplemente le partían su madre o reventaban (ejecutaban) a la familia completa”.

Añade el testigo: En esa ocasión, esos agentes siguieron los vehículos de Arturo Guzmán y de Lazcano. Al ver que los seguían, se pararon y detuvieron a los policías. Lo peor es que los torturaron y a punta de madrazos los hicieron confesar que trabajaban para un grupo rival, el que encabezaba Dionisio Román García, El Chacho, operador de Joaquín El Chapo Guzmán. Luego los mataron y los quemaron en llantas. No quedaron ni los huesitos. A otros policías traidores también los incineraron en unos tambos de 200 litros de gasolina; se consumieron toditos. Luego mataron a El Chacho, a quien ejecutaron el 13 de mayo de 2002.

### **La era de las alianzas**

Con sus métodos despiadados y su capacidad de fuego, Heriberto Lazcano convirtió a Los Zetas en el grupo paramilitar del narcotráfico más poderoso en América Latina, con ramificaciones en Estados Unidos y Europa. Aunque la mayoría de sus miembros están muertos o encarcelados, Lazcano se mantiene con la disciplina castrense como la más férrea, la que rige el comportamiento, el entrenamiento y las operaciones del grupo.

Si bien es cierto que Los Zetas han tenido bajas importantes, Lazcano nunca ha dejado de reclutar a jóvenes soldados para el grupo criminal, según narra el testigo David en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/125/2007: Hasta el 24 de junio de 2007 Ezequiel Cárdenas Guillén, El Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas, y Heriberto Lazcano viajaron al sureste del país para reclutar a más militares. Tormenta y Lazcano se habían vuelto a juntar y estaban reclutando a muchos soldados de diferentes lugares, reagrupándose en Coatzacoalcos, Boca del Río y Cardel, Veracruz, así como en Campeche, para luego entrar a la Ciudad de México.

En 2007 comenzaron las rencillas entre el grupo del Golfo y Los Zetas. La causa de esas fisuras fue que Eduardo Costilla, El Coss, líder de la organización, y todo el corporativo criminal comenzaron a negociar con el cártel de Sinaloa el fin de su histórico enfrentamiento.

En un campo deportivo de Matamoros, Lazcano reunió a todos Los Zetas para preguntarles si estaban de acuerdo o no en sumarse a la organización del Chapo Guzmán.

Ataviados con ropa deportiva, los cerca de 400 miembros de Los Zetas reunidos tomaban agua y escuchaban hablar a su jefe, quien pidió que levantaran la mano quienes estuvieran de acuerdo en aliarse con los de Sinaloa. La mayoría rechazó la alianza. Y entonces decidieron romper relaciones con el cártel del Golfo, lo que derivó en enfrentamientos y asesinatos.

Lazcano y sus hombres no se cruzaron de brazos y vieron la oportunidad de asociarse. Entraron así al mundo de las alianzas y de las estrategias empresariales: trabaron relaciones con los Beltrán Leyva y con los cárteles de Tijuana y de Juárez, a raíz de lo cual se convirtieron en el llamado “cártel de los exmilitares”. El Lazca dejó de ser el cabecilla de un grupo armado y ahora se erige como líder máximo del cártel de Los Zetas.

### **El mito, la realidad...**

Como a todos los capos, a Lazcano también lo rodea el misterio. En varias ocasiones ha intentado ocultarse tras las cortinas de su falsa muerte. En 2007 se dijo que había sido asesinado durante una carrera de caballos celebrada en Villarín, Veracruz.

El rumor corrió varios días hasta que, finalmente, las autoridades federales aclararon que quien había sido ejecutado era un personaje identificado como Roberto Carlos Carmona Gasperín. En otra ocasión, luego de un enfrentamiento entre soldados y zetas en Tampico, la abogada Silvia Raquenel Villanueva dijo que tenía conocimiento de que en ese tiroteo había sido asesinado Heriberto Lazcano. Ninguna autoridad confirmó el dato.

Lo cierto es que, de acuerdo con Rufino, Heriberto Lazcano vive junto con su familia en Pachuca, Hidalgo, donde presuntamente el Ejército lo protege.

Así lo dice el testigo: En el año 2001 Osiel Cárdenas Guillén le ordenó a Heriberto Lazcano, alias El Laz, Lazcano o El Pornográfico, tomar la plaza de Pachuca, Hidalgo... Heriberto Lazcano es originario del estado de Hidalgo; él, junto con su familia, tiene su domicilio cerca del Campo Militar de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y en esa ciudad que he referido reclutaron a la mayoría de todos los integrantes del grupo de Los Zetas.

Ricardo Ravelo. "...El noveno cártel". *Proceso* número 1750, 16 mayo 2010. Pp 9, 11, 12, 13.  
<https://www.proceso.com.mx/81517/el-noveno-cartel>

### **"...El noveno cártel"**

En sólo 13 años, Los Zetas, grupo al que se integraron exmilitares y desertores del Ejército, pasó de ser un apéndice del cártel del Golfo a convertirse en una organización autónoma. Según la DEA, desde enero pasado puede considerársele como el noveno cártel. Ahora, esa organización, dirigida por el hidalguense Heriberto Lazcano, es la mejor armada y tiene influencia en 20 estados del país.

Hacia finales de 1997, el grupo armado de Los Zetas irrumpió en la escena pública como escudo protector del cártel del Golfo y de su líder, Osiel Cárdenas Guillén. Trece años después, con nuevos refuerzos y una diversificación de sus actividades criminales, el llamado "Ejército del Narco" es ya un cártel que lucha con denuedo por el control de una veintena de entidades federativas.

La mayoría de los integrantes de esa organización provenían del Ejército, en particular del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes). En el 97, muchos de ellos habían ingresado a la Procuraduría General de la República (PGR) como refuerzos en la lucha que emprendió el gobierno federal contra el narcotráfico. Pero muy pronto se engancharon en el negocio de las drogas.

Para 2003, año en que fue capturado Osiel Cárdenas, Los Zetas modificaron su esquema de operación, luego de una aguda crisis interna por el control del cártel del Golfo. Superadas las rencillas, las traiciones y el desorden en las operaciones, Eduardo Costilla, El Coss, se convirtió en el nuevo líder, en tanto que el grupo armado empezó a conformar su propia estructura criminal.

Durante los siguientes dos años, El Coss tuvo dos encuentros con Ignacio Nacho Coronel e Ismael El Mayo Zambada, representantes del cártel de Sinaloa. El propósito: sellar una alianza para controlar el tráfico de drogas y conformar un megaconsorcio criminal que pusiera fin a las matanzas al menos en los

territorios dominados por ambos grupos criminales, según las averiguaciones previas PGR/SIEDO/UEIDCS/147/2007 y PGR/SIEDO/UEIDCS/082/2009.

Y aun cuando ese proyecto nunca fue abandonado por el cártel del Golfo –la segunda organización más poderosa después de la de Sinaloa–, en enero pasado la Drug Enforcement Administration (DEA) confirmó que Los Zetas se habían convertido en un nuevo cártel, bien estructurado y con amplio dominio tanto en el Pacífico como en el Golfo de México.

Los informes de inteligencia de la DEA indican que la separación de Los Zetas se debió a sus diferencias con la cúpula del cártel del Golfo por el acercamiento de éste al grupo rival de Sinaloa, así como por sus alianzas con La Familia michoacana y con los jefes del cártel del Milenio, los hermanos Valencia Cornelio, cuyo asiento es el estado de Michoacán.

Hill Glaspy, responsable de la DEA en McAllen, Texas, se refirió al convenio de los capos del Golfo y de Sinaloa en estos términos: “Está bien documentado que el cártel del Golfo ha formado alianzas con el cártel de Sinaloa y La Familia michoacana para emprender una guerra contra Los Zetas”.

Los Zetas rompieron con la cúpula del cártel del Golfo el 8 de enero último, lo que confirma la tesis de la DEA: que los vínculos entre ambas organizaciones criminales estaban sustentados en débiles acuerdos, declaró Glaspy.

Tres meses después del anuncio de la DEA, el 13 de abril, Ramón Pequeño García, jefe de la División Antidrogas de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), confirmó que los cárteles del Golfo y La Familia habían reanudado una vieja alianza. El colaborador de Genaro García Luna no se refirió en ningún momento a la organización de Sinaloa como principal socio del cártel que dirige El Coss.

Un funcionario de la SSP, quien solicitó el anonimato, comenta que la alianza estratégica de la organización del Coss es con la tríada de La Familia, el cártel del Milenio y el de Sinaloa; eso significa, añadió, que “estos grupos sumarán fuerzas para contrarrestar a Los Zetas”.

Esta nueva sociedad motivó que Los Zetas abandonaran Tamaulipas, su histórica base de operaciones, y se afincaran en Nuevo León. Hoy, en ese territorio se agudizaron las ejecuciones debido a las disputas de Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, hermano de Osiel Cárdenas, y El Coss, jefes emblemáticos del cártel del Golfo, con Heriberto Lazcano, El Lazca, jefe de Los Zetas, y su lugarteniente Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.

### **La separación**

La investigación de la Procuraduría General de la República sobre el cártel del Golfo – PGR/SIEDO/UEIDCS/082/2009– asienta que en 2005 Los Zetas adquirieron armas de alto poder como ningún otro grupo lo había hecho. Por esas fechas, añade el documento, dicha organización buscaba su independencia, al tiempo que enfrentaba a sus rivales, incluyendo a los miembros del cártel del Golfo.

Como parte de su estrategia, Los Zetas incorporaron a elementos del Ejército, muchos de ellos desempleados o desertores, y reclutaron en Guatemala a exintegrantes de las tropas de élite de las fuerzas armadas de ese país centroamericano, los ex Kaibiles, como consta en documentos obtenidos por Proceso.

Con vistas a convertirse en el noveno cártel que opera en el territorio nacional (los otros son: el de Tijuana, el de Colima, el de Juárez, el de Sinaloa, el de los hermanos Arellano Félix, el del Golfo, el de Pedro Díaz Parada –cuyo ámbito de influencia está en Oaxaca– y el del Milenio), Los Zetas diversificaron su abanico criminal y ahora obtienen millonarias ganancias no sólo por el trasiego de drogas, sino también por las extorsiones, pues convirtieron el secuestro en gran industria.

Hoy controlan, asimismo, el mercado de la piratería y el tráfico de personas, y cobran “derecho de piso” a comerciantes y a dueños de bares, cantinas y prostíbulos en varias regiones del país.

En marzo de 2009, luego de que la Policía Federal (PF) desarticuló una célula de Los Zetas en Pachuca, Hidalgo, dedicada al secuestro, se comprobó que en las actividades delictivas de ese grupo armado participan incluso mujeres y niños.

Proceso pidió al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) (solicitud 0002200084508) datos para conocer el número de miembros del cártel de Los Zetas y cuáles de ellos provienen del Ejército. Y aunque respondió que no podía atender la petición por considerar que era materia de seguridad nacional, el instituto aportó elementos que permiten entender la evolución de esa organización.

Para el IFAI, el rescate de criminales en los penales de Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, así como el ataque reciente a comandancias de las policías estatal y federal en Coahuila, Tabasco y Sonora deja en claro que “Los Zetas cuentan con la información, logística e infraestructura, independientemente del armamento de alto poder y tecnología de punta de que disponen, para organizar operativos de rescate y ataques de esa magnitud”.

Los Zetas enfrentan a los cuerpos de seguridad sin temor, e incluso han roto los cercos de seguridad en varias ocasiones y han ejecutado “a más de un elemento de seguridad”, dice el IFAI. A esto hay que agregar que los sicarios obtienen información de los expedientes relacionados con el cártel del Golfo, por lo que conocen los nombres de los funcionarios que participan en esas pesquisas.

Y, en alusión a Los Zetas, entre otros, añade el IFAI: “Debemos reconocer que los grupos de delincuencia organizada se encuentran mejor coordinados que en el pasado y que su poder trasciende hasta las más altas esferas del gobierno...”.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/242/2008 indica que Heriberto Lazcano nunca ha dejado de reclutar personal militar y civil para el cártel de Los Zetas. Para el testigo Karem, citado en el documento, El Lazca es todo un capo:

A Lazcano se le vio hace poco tiempo por el rumbo de Ramos Arizpe, Coahuila, muy cerca de Saltillo, donde tiene varios caballos pura sangre que le costaron, cada uno, varios miles de dólares. Le gustan las carreras de caballos. Los asistentes a una carrera que se celebró en esa región fueron testigos de la muerte de uno de sus caballos preferidos, porque le habían dado de tragar mucha cocaína.

Desde que Lazcano se convirtió en el jefe de Los Zetas cambiaron las reglas y las estrategias de operación, según se desprende de la declaración rendida por Mateo Díaz López, El Comandante Mateo, contenida en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/122/2006.

Díaz López declaró que, tras la captura de Osiel, El Lazca comenzó a reclutar a desertores del ejército de Guatemala (ex Kaibiles) para capitalizar los secuestros, los homicidios y las extorsiones:

(Luego de) la detención de Osiel hubo muchos problemas dentro de la organización, ya que sus principales líderes, como Eduardo Costilla y Gregorio Saucedo, se desorientaron y querían esconderse, por lo que Lazcano, con clave Z-30, retomó la organización y los calmó.

Para poder sostener una organización con diversos giros, Lazcano generó una nueva estructura, dividida en células regionales especializadas por delitos, denominadas “estacas”, que son grupos de siete personas que operan a nivel municipal; se crearon los halcones o vigías, y se contrataron auditores a todos los miembros de la organización.

También cambiaron las reglas, y así Los Zetas comenzaron a consolidarse como cártel, según El Comandante Mateo:

El número Nextel de Lazcano lo grabé con las letras Md, pero cada vez que detienen a algún miembro de la organización, todos tiramos los teléfonos a la basura y compramos nuevos teléfonos y radios. Junto con la coerción también había incentivos.

Las reuniones de fin de año las realizó (El Lazca) para que todos los que trabajaban para la organización de Los Zetas se conocieran entre ellos; en esas reuniones se pagaban sus aguinaldos, participaban en rifas de casas y automóviles. En ese tipo de reuniones era cuando Heriberto Lazcano designaba al personal que se iba a ir con ellos a las diferentes plazas que tenían a su mando, entre ellas México, D.F., la cual está a cargo de El Rex.

Lo mismo sucedió con la forma de operar del cártel de Los Zetas, según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/014 /2007, que contiene las declaraciones ministeriales de los testigos protegidos identificados como Rufino, Rafael, Gabriel y Geraldin, las cuales permiten conocer que se hace al interior de la organización.

Ellos dijeron que el jefe máximo es Heriberto Lazcano, en una estructura que detallan así:

En el nivel más bajo están quienes son denominados como Halcones, que son los “ojos de la ciudad” o vigilantes; en el siguiente nivel están los encargados de las tiendas o puntos (venta de droga), los de la productividad.

Les siguen los L o Cobras –ayudantes o encargados de dar seguridad a Los Zetas–, quienes andan equipados con un arma larga y una corta. El siguiente nivel, declararon los testigos, es el de Los Zetas Nuevos, exmilitares guatemaltecos que tuvieron entrenamiento especial y que siempre portan las mejores armas largas y cortas, además de granadas, chalecos antibalas y cascos.

Rufino comentó: Son los encargados de entrar a las casas, de revisarlas y de llevar el mando en los operativos. También se encargan de ejecutar a la gente porque suponen que eso les da más fuerza y hace honor a su categoría de nuevos zetas.

Además, según los testimonios, hay reglas establecidas. En caso de presentarse un enfrentamiento, los L o Cobras, por ejemplo, tienen orden de disparar sólo si lo ordenan Los Zetas Nuevos; en el caso de detenciones o levantones, los L son los encargados de esposar a los sujetos y de subirlos a los vehículos, mientras Los Zetas Nuevos dirigen el operativo.

Junto con los ex Kaibiles guatemaltecos, en ese nivel se encuentran algunos miembros del desaparecido Gafes, los más antiguos en esa organización, comentaron los testigos, y aclararon que, si bien los Cobras o L son considerados “gente de confianza”, carecen de formación militar, por lo que sólo pueden llegar a ser comandantes. Es el caso de Miguel Treviño, El 40, quien opera en los estados de Nuevo León y Coahuila.

A esta categoría pertenecen también El Comandante Mateo, El Mamito, El Hummer, El Rex, El Caprice, El Tatanka y El Cholo, entre otros. Varios de estos zetas originales están presos o han muerto; los que aún viven se hacen llamar los licenciados, los maestros o los ingenieros, para evitar que se les identifique, declararon los testigos.

### **Los eslabones**

Además de los diferentes niveles y categorías, el encargado (o comandante) de cada plaza cuenta con informantes, un contador y sus sicarios, quienes se encargan de la seguridad personal del comandante.

Por lo que atañe a los informantes, por lo general son personas con conocimientos del lugar donde operan y tiene relaciones con personas del entorno; además, están disponibles las 24 horas del día y dependen directamente del comandante de la plaza.

El contador, por su parte, es el responsable de las finanzas de la organización; es él quien paga los sueldos a los integrantes de la estructura, así como a los servidores públicos que están en contubernio con la organización. Al principal contador del cártel se le conoce como El Comandante Sol, según los testigos Rufino y Karem.

Las actividades criminales de Los Zetas se han diversificado, de acuerdo con el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/147/2009. Hoy, este cártel domina el tráfico de drogas en 20 estados del país y tiene una alianza con la organización de los hermanos Beltrán Leyva y con el cártel de Tijuana. Sus ingresos provienen también de los secuestros, así como del robo de combustibles de la paraestatal Petróleos Mexicanos, empresa en la que altos funcionarios les ayudan para que realicen sus hurtos.

La indagatoria indica que otra de sus actividades es: ...el robo condensado a Pemex, la invasión de terrenos para instalar bombas de robo de gasolina, el robo de autotransportes y la cooptación de funcionarios que trabajan en las aduanas.

Y los testigos agregan:

También se utilizan panteones abandonados para desaparecer a las personas que son asesinadas. Una vez que están muertas las llevamos a uno de esos panteones y las metemos a las tumbas que tienen en las lápidas otros nombres, de esa manera nunca las encuentran.

Luciano Campos Garza. “Nuevo León: Los nuevos santuarios de Los Zetas”. *Proceso* número 1750, 16 mayo 2010. pp 10-11. <https://www.proceso.com.mx/106378/nuevo-leon-los-nuevos-santuarios-de-los-zetas>

**“Nuevo León: Los nuevos santuarios de Los Zetas”**

MONTERREY, NL., 18 de mayo (Proceso).- – El blindaje anunciado por el gobierno de Nuevo León para contener a los grupos del crimen organizado que salieron en desbandada de Tamaulipas y buscaron refugio aquí fue un fracaso: por los porosos límites de ambas entidades transitan tanto miembros de Los Zetas como del cártel del Golfo.

En la zona norte de Nuevo León, caracterizada por sus rancherías, llanuras, áridas planicies y páramos deshabitados, las fuerzas federales han detectado varios narcocampamentos con funciones de refugio y entrenamiento.

En lo que va del año, el Ejército y la Marina han desmantelado por lo menos cuatro de esos santuarios, en los que han sido decomisados poderosos arsenales y centenares de miles de cartuchos.

Una fuente del gobierno estatal que pidió no ser identificada manifestó que es imposible contener a los criminales que utilizan las carreteras y autopistas federales, así como las brechas, donde son todavía más indetectables y elusivos.

Y es que, en la basta geografía nuevoleonense de 51 municipios, no hay polos de desarrollo. El 90% de los 4.3 millones de habitantes de la entidad se concentran en Monterrey y en los 11 municipios de su zona metropolitana; los demás se localizan en zonas rurales, viviendo en las cabeceras municipales o en dispersas rancherías.

Es fácil pasar inadvertido en las praderas despobladas donde los narcos han establecido sus centros de entrenamiento, sobre todo cerca de los corredores que conectan a Monterrey con las ciudades tamaulipecas de Reynosa y Nuevo Laredo.

La guerra declarada es entre ellos, pero el Ejército y la Marina han tomado algunos de sus centros de adiestramiento, campos de tiro y casas de seguridad, luego de que, el 4 de marzo, el gobernador priista Rodrigo Medina alertó a la ciudadanía sobre la disputa entre los cárteles y anunció que se reforzaría la vigilancia policiaca estatal en los límites con Tamaulipas.

Pero una evidencia de que dicha estrategia no funcionó es que las fuerzas federales han debido incrementar su presencia ante la intensa actividad de ambas mafias.

### **Operativos y enfrentamientos**

En un operativo por aire y tierra, a las cuatro de la tarde del domingo 14 de marzo, la Marina Armada de México tomó un rancho ubicado en el municipio de Bustamante, a 150 kilómetros al norte de Monterrey.

En el lugar fueron abatidos ocho sicarios, informó un comunicado de la Secretaría de Marina, que reportó a 60 hombres armados “pertenecientes a Los Zetas, mismos que se encontraban reorganizándose para sus actividades delictivas”.

La mayoría alcanzó a escapar, alertada por el ruido de los helicópteros y los vehículos que trataban de cercarlos. La fuente informó que, en el lugar, los pistoleros hacían prácticas de tiro y adiestraban a sus elementos.

La investigación posterior reveló que Los Zetas habían ocupado desde dos meses antes el rancho La Lagunilla, a un costado de la carretera a Colombia, y lo convirtieron en una base de operaciones. Al

arribar, desalojaron al velador de la propiedad, que huyó sin avisar al dueño de la misma. Éste se enteró del uso que se daba a su inmueble cuando –de acuerdo con una fuente de la Procuraduría Estatal– fue publicada la información de la balacera que se desató en el área.

En el lugar fueron asegurados cinco vehículos, nueve armas largas y dos cortas, 35 cargadores, 717 cartuchos y diversos equipos de comunicación.

La casa principal del rancho, de ladrillo rojo, tuvo lustre en otro tiempo; ahora estaba descuidada y sucia, pero conservaba una cantina, una mesa de billar y cocina integral con acabados de madera. Aparte de muebles rústicos, había recámaras con varios colchones y clósets abiertos con ropa revuelta.

Cinco cabezas de venado pendían sobre la chimenea, además de un armadillo y un coyote disecados. Afuera, a los costados de la entrada principal, podía verse a un gran oso negro y a un puma atacando a una gacela.

En el patio se habían construido algunos cuartos que parecían destinados a los vigilantes, con techos cubiertos por cartones y con pisos que acumulaban abundante basura.

Cuatro días después, el 18 de marzo, El Ejército Mexicano dio otro golpe en un rancho del municipio de El Carmen, a 100 kilómetros de Monterrey, donde se encontraron 100 mil cartuchos calibre 9 milímetros, 5 mil cargadores –sobre todo de armas largas–, 22 granadas para fusil y cuatro armas largas y tres cintas metálicas para ametralladora antiaérea calibre 50.

El hallazgo, efectuado luego de una denuncia anónima, ocurrió a las 16:00 horas en una granja porcina que parecía abandonada en el camino al parque Aqua-Splash-Cortijo Los Villarreales, al oriente de la carretera a Monclova.

Casi un mes más tarde, el 14 de abril, el Ejército enfrentó a una caravana de sicarios en el municipio de Doctor Coss, Nuevo León. Según el parte oficial, los pistoleros pasaron de largo un puesto de revisión y fueron perseguidos por los militares hasta el poblado Comales, Camargo, ya en el estado de Tamaulipas.

En ese lugar, los delincuentes entraron al rancho Los Martínez, desde donde abrieron fuego.

En la refriega perecieron dos soldados y dos delincuentes. El poblado fue rodeado por los militares. Ahí se halló una bodega utilizada como campamento que, al parecer, fue abandonada antes de la irrupción militar.

En ese sitio había 19 camionetas –algunas con la letra “Z” pintada en los cristales–, 10 mil cartuchos de diversos calibres, 338 cargadores, nueve armas largas –la mayoría fusiles AR-15–, una subametralladora calibre .556 y tres pistolas.

También se reportaron 52 equipos de radio, 22 aparatos Nextel, seis tablas de tortura y 2.5 kilos de marihuana. En el interior de una pick up se encontraron dos cadáveres.

Los soldados ejecutaron otro operativo el 26 de abril, en el municipio de General Bravo, vecino nuevoleonés de Reynosa. En el rancho El Puerto se produjo un enfrentamiento en el que murieron tres pistoleros. Luego, en la zona se localizaron dos cadáveres de personas que habían perecido antes de la refriega.

Según el boletín de la Sedena, los militares liberaron a siete personas que estaban secuestradas. Hubo cuatro detenidos.

El aseguramiento fue de 40 armas largas, seis armas cortas, 10 mil cartuchos de diferentes calibres, 311 cargadores, cuatro granadas de fragmentación y 12 vehículos, uno de ellos blindado.

Al día siguiente, el Ejército reportó otro enclave en Sabinas Hidalgo, 80 kilómetros al norte de la capital, en donde fueron rescatadas 16 personas, entre ellas una mujer con un bebé de un año y cuatro meses de edad.

Una cantidad no determinada de pistoleros atacó a los soldados y se dispersó. Dos de los vigilantes de la casa murieron durante el enfrentamiento. Allí fueron halladas dos toneladas de marihuana, tres armas largas y seis cortas, un lanzagranadas y dos vehículos.

El más reciente golpe a la delincuencia organizada ocurrió la mañana del 11 de mayo, cuando elementos de la Séptima Zona Militar, apoyados por cuatro helicópteros, allanaron un campo de prácticas en el municipio de Higuera, a menos de media hora en coche de Monterrey. En el lugar murió un delincuente que hizo frente a los militares.

Ese sitio, ubicado en el camino a La Laguna, a un kilómetro de la carretera Marín-Higuera, es una huerta con cobertizos donde pernoctaban los ocupantes.

En su comunicado, la Sedena no precisó cuántas personas alcanzaron a escapar, aunque reportes de prensa calculan que eran unos 25 individuos que se perdieron entre los matorrales.

El decomiso fue mayor: 124 armas largas y 15 cortas, 29 granadas calibre 40 milímetros, 32 granadas de mano, tres cohetes antitanque, mil 375 cargadores para diferentes armas, cuatro bazucas, 5 mil cartuchos de diferentes calibres y 12 vehículos.

También había dos fusiles Barret calibre 50, usados como batería antiaérea, y dos cohetes útiles para atacar vehículos blindados.

En el lugar se recogieron chamarras, playeras, maletas, cachuchas y boinas con el escudo emblemático de Los Zetas.

Gerardo Albarrán de Alba, Gabriela Hernández. “Votar entre zetas”. *Proceso* número 1756, 27 junio 2010. pp 18-19. <https://www.proceso.com.mx/81209/votar-entre-zetas>

### **“Votar entre zetas”**

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. - Confiado en una singular combinación de ingeniería electoral, mercadotecnia y viejas prácticas de cooptación, el PRI se considera inmune al costo político de la violencia que ha ejercido el narco a lo largo del sexenio de Eugenio Hernández Flores. Si las encuestas están en lo cierto va a ganar las elecciones por tres a uno. Enfrente sólo tiene a un candidato del PAN abandonado por su partido y a un PRD desdibujado; el resto de los partidos se conforma con participar. Sin embargo, en esta entidad la verdadera lucha por el poder es con el narcotráfico.

Paralelo al proceso constitucional, el cártel del Golfo y Los Zetas libran una guerra abierta por el control del estado que desplaza a las autoridades y arrincona a la población. Los propios partidos políticos han resentido las amenazas de los operadores del narco, que han forzado a varios candidatos a renunciar a sus postulaciones. Uno de ellos, el panista Manuel Guajardo, fue asesinado el 13 de mayo, en vísperas de que registrara su candidatura para alcalde de Valle Hermoso. En el atentado murieron también su hijo de 21 años y un empleado.

Al margen del conflicto, el PRI es el único partido que registró candidatos a todos los puestos en disputa este 4 de julio, cuando se elegirán gobernador, 36 diputados (22 de mayoría, 14 de representación proporcional) y 43 presidentes municipales en planillas que incluyen a 55 síndicos y 265 regidores. “Quiero el tráiler completo”, se ufana el presidente del Comité Directivo Estatal priista, Ricardo Gamundi Rosas.

El candidato panista a la gubernatura, el senador con licencia José Julián Sacramento, no cree en pronósticos. Él ganó su escaño en 2006 con 11 puntos de ventaja, pese a ir 18 abajo en los sondeos. “Vamos por la mitad de los municipios”, y para la gubernatura “voy a quedar cabeza con cabeza” con el contrincante priista, Rodolfo Torre Cantú, exsecretario local de Salud.

Aparte de Sacramento, el candidato del PRI no tiene de quién preocuparse: PRD, PT y Convergencia van cada uno por su lado, desarticulada la coalición de 2006 que captó un buen número de votos en el estado. Los petistas postularon a Armando Vera García y Convergencia a Alfonso de León Perales, que no pintan.

Sacramento no ha contado con su partido más allá de la formalidad. Hasta el cierre de edición, el presidente nacional del PAN, César Nava, sólo había pisado el estado para asistir al funeral de Manuel Guajardo; de sus compañeros del Senado sólo ha recibido la visita de Santiago Creel. “Me dejaron solo”, lamenta. En contraste, la abrumadora campaña del priista Torre Cantú tiene el apoyo abierto del PRI nacional y de los senadores Manlio Fabio Beltrones y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto.

Ni siquiera las veladas acusaciones de corrupción por los innumerables negocios que les atribuyen al gobernador Hernández Flores y sus allegados durante el sexenio parecen influir en la intención de los votantes.

Toda posibilidad de protesta es desarticulada gracias a la obsesión del gobernador por controlarlo todo y someter a todos, partidos y sociedad, y por supuesto al Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), en el que habría impuesto al presidente Jorge Luis Navarro Cantú, consejero desde 2006, cuyo único objetivo declarado es alcanzar la votación “más copiosa” en la historia del estado.

Hernández Flores metió las manos en las dirigencias de algunos partidos y palomeó candidatos, como en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presidido por su amigo René Castillo de la Cruz, al que también hizo candidato a diputado local, según observadores que piden reservar sus nombres. PRI y verdes forman la coalición Todos Tamaulipas, junto con el Partido Nueva Alianza.

El gobernador también intervino en las disputas internas en el PRD. Un grupo de perredistas ofreció la candidatura a Lino Korrodi, quien habría tenido algunos acercamientos con el dirigente nacional Jesús Ortega; pero se frustró. De acuerdo con el expresidente local del PRD, Rafael Rodríguez Segura, la

Secretaría General de Gobierno pagó esquirolas para espantar al examigo de Fox. Al final, el candidato de la izquierda es el empresario panista Julio Almanza Armas, otro buen amigo del gobernador.

En el extremo, panistas como el exdiputado federal Luis Alonso Mejía achacan al gobernador Hernández Flores y sus operadores políticos haber influido en la candidatura de Sacramento para cerrarle el paso al otro precandidato del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, diputado local y exalcalde de Reynosa.

“Se ve que el presidente del Ietam está trabajando para ellos; el candidato del PRD trae lana del gobierno del estado, no de su partido; igual pasa con los demás partidos”, se queja el panista Sacramento.

“El problema del PAN es que tiene una fisura interna muy fuerte por el poder. Y no tiene base, por eso nos pide prestados candidatos”, replica el dirigente estatal del PRI Ricardo Gamundi Rosas, en alusión a los priistas postulados por el PAN para alcaldes de Tampico y Altamira.

La oposición asegura que el gobierno de Hernández Flores y su partido han pactado con el narco. Por eso son los únicos en campaña en todo el estado.

“No es cierto y te lo digo a los ojos”, responde el principal operador político del gobernador, quien rechaza el mote de “mapache mayor” y se acredita como ingeniero electoral.

### **Narcoelección**

A sólo 47 kilómetros de Matamoros y a 35 de la frontera con Roma, Texas, Valle Hermoso se ha convertido en “dormidero” de narcos y hasta hay quien dice que ahí vivía Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, líder de Los Zetas que tenía bajo su control esta ciudad hasta que fue desplazado por el cártel del Golfo hace poco más de cuatro meses.

El asesinato ahí de Mario Guajardo, de 54 años, marcó un antes y un después de los comicios del próximo domingo y exhibió la penetración del narcotráfico en la vida política del estado, pero el fenómeno no es nuevo: en las elecciones locales de 2007 asesinaron a Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, exdiputado federal por el PRD y candidato del PT a la presidencia municipal de Río Bravo, forzaron la renuncia de varios candidatos de oposición y el mismo día de los comicios intimidaron con armas a los votantes frente a las casillas.

Todas las fuentes consultadas por Proceso coinciden en que tanto el cártel del Golfo como Los Zetas pretenden imponer comandantes de las corporaciones policiacas municipales.

“La inseguridad en Tamaulipas es resultado de la complicidad de la mayoría de las policías estatales y municipales con la delincuencia organizada; muchos de los comandantes trabajan para ellos, eso está a la vista de todos”, sostiene José Julián Sacramento. El problema existe en todos los municipios tamaulipecos, comenta.

Los narcos no imprimen boletas ni instalan urnas. Nadie regula sus campañas. La propaganda es sorda. Los contendientes son fantasmas de los que se sabe sólo de boca en boca por los enfrentamientos y masacres que desbordan la censura. Reparten despensas y otorgan favores. Los cobran caro.

En el fuego cruzado mucha gente empieza a tomar partido: unos por el cártel del Golfo, otros por Los Zetas. Ambos intentan mostrarse como el mal menor. Mediante volantes y boletines cada facción pide el apoyo de la ciudadanía para eliminar, al contrario. Los dos grupos criminales aseguran que los secuestros, asaltos y asesinatos son responsabilidad de sus enemigos. El discurso es el mismo: cualquiera que gane traerá de nuevo la paz. Los políticos intentan matizar.

El PRI asegura que no compite con los narcos. “A la gente le decimos: el enemigo es el PAN o el PRD. Lo nuestro es político. A la hora de gobernar, la cosa cambia”, concede Gamundi Rosas.

Para Sacramento, el candidato del PRI Rodolfo Torre Cantú “está esposado, no tendrá la libertad de cortar de tajo los vicios de seguridad, la complicidad y la corrupción” que heredaría del gobierno de Hernández Flores. “Yo sí tengo esa libertad porque nunca he pactado ni pactaré con el crimen organizado. Por supuesto que yo sí puedo meterle mano a las corporaciones policiacas de Tamaulipas para su depuración; ellos no”.

El candidato panista a la gubernatura dice que se apoyará en el Ejército, con el que presume una buena relación construida como secretario de la Comisión de Defensa Nacional en la LIX Legislatura, en la que fue diputado, y hasta hace poco como integrante de la Comisión de Defensa y Marina en el Senado. “Yo sí sé cuando vienen operativos, yo sí sé cuando vienen refuerzos de las fuerzas armadas; el gobernador no sabe, porque no hay confianza”.

Sacramento se desespera al evaluar las condiciones en que recibiría el estado en caso de ganar. La violencia e inseguridad lo copan todo y la administración de Felipe Calderón no da visos de poder con el problema.

“Siento que el gobierno federal tiene argumentos de peso para venir por algún funcionario del actual gobierno o del sexenio anterior ligados con la delincuencia organizada y no lo han hecho. Han sido muy complacientes. Yo sé que tienen información y no han actuado. Aquí está en juego no solamente el poder político”.

Repetidamente, el senador con licencia le ha planteado a Calderón la crisis en que vive el estado, pero siempre en reuniones con otros legisladores. “Nunca de manera personal”. No ha tenido respuesta.

“Sabén contra quién deben actuar y cuándo, pero siento que no ha habido la voluntad de hacerlo. No sé si por cálculos políticos en otra elección o a cambio de votos priistas en el Congreso, o porque no están contando con Tamaulipas. Qué güeva me daría que fuera esa la razón, pero si fuera por complicidad sería peor... Información hay. No entiendo por qué no hacen nada.”

Ricardo Ravelo. “El noreste: zona roja”. *Proceso* número 1757, 4 julio 2010. pp 24, 25, 27, 28.

<https://www.proceso.com.mx/81297/81297-el-noreste-zona-roja>

### **“El noreste: zona roja”**

El asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, tiene tintes ominosos. No sólo por la saña y la exhibición de poder que implica un homicidio así, sino por la naturaleza política de ese golpe del narco y porque ocurre en la “zona roja”, como ya se le conoce al

corredor Nuevo León-Tamaulipas, donde los mayores cárteles del país, el del Golfo y el de Sinaloa, se enfrentan a uno de los más sanguinarios: Los Zetas. Y ahí sí, ni la PGR le entra. Aunque en este caso sí lo hará.

El asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, perpetrado el lunes 28, ocurrió en el momento más álgido de la pugna que en esa entidad libran el cártel del Golfo y Los Zetas, grupo armado que según la DEA y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) ya es considerado un cártel bien establecido en el corredor Tamaulipas-Nuevo León y que sigue integrando a exmilitares mexicanos y guatemaltecos en su estructura.

A pesar de sus fisuras internas y del encono que priva desde 2003 por la detención de Osiel Cárdenas Guillén, su reconstructor, el cártel del Golfo es el segundo grupo criminal más poderoso del país, después del cártel de Sinaloa, que domina en todo el litoral mexicano del Pacífico.

El asesinato del candidato del PRI se presenta en un escenario trastocado por la falta de control militar, los desatinos de la política anticrimen del gobierno federal, la corrupción imperante en las filas policiacas y los choques armados que protagonizan el cártel del Golfo y Los Zetas, bandas que tras más de 12 años de alianza se están disputando los principales territorios del Golfo de México.

Luego del escándalo ocasionado por el asesinato de Torre Cantú, el presidente Felipe Calderón hizo un llamado más a la unidad y pidió a la sociedad sumar fuerzas contra el crimen organizado, pero fue poco enfático al referirse al candidato priista, a pesar de la saña con la que fue ejecutado.

Es más, ni el escenario de violencia que vive Tamaulipas ni el uso de armas de alto poder en este crimen –por citar algunos elementos trascendentes– fueron suficientes para que el caso fuera atraído e investigado en el ámbito federal por la Procuraduría General de la República (PGR), que pintó su raya al erigirse sólo como autoridad coadyuvante de la indagatoria. Sin embargo, el viernes 2 por la noche la dependencia informó que atraería el caso al considerar que las pruebas desahogadas hasta entonces así lo ameritaban, abriendo la AP PGR/DGCAP/ZC/-IV/093/2010

La misma tarde del crimen, la PGR informó a través de una tarjeta informativa que había enviado a Tamaulipas a varios agentes del Ministerio Público federal y peritos para colaborar en la investigación que lleva a cabo la procuraduría estatal.

### **La nueva alianza**

La creciente violencia que enfrenta el noreste del país no es ignorada por la PGR, institución responsable de investigar los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Desde febrero de este año, la DEA –agencia antidrogas estadounidense– dio a conocer que la alianza pactada por el cártel del Golfo con el de Sinaloa fracturó la relación del primero con Los Zetas, que por más de una década estuvieron aliados en los negocios de las drogas, el secuestro, la extorsión y otra veintena de delitos graves. También advirtió que dicha ruptura traería como consecuencia una mayor división de las policías, de por sí pulverizadas por la corrupción, debido a las pugnas por la protección de sus intereses criminales.

La advertencia de la DEA se cumplió: ahora Tamaulipas y Nuevo León tienen a sus policías “completamente cartelizadas”. Poco después de que la agencia de Estados Unidos adelantó el escenario

de violencia en ese corredor, la SSP federal confirmó a través de sus órganos de inteligencia que, en efecto, la ruptura de Los Zetas con el cártel del Golfo era un hecho, lo que traería como consecuencia la disputa de ese territorio entre esas organizaciones, que desde 1997 eran aliadas en el tráfico de drogas.

De acuerdo con una ficha informativa elaborada por la PGR, la descomposición que se advierte en el corredor Tamaulipas-Nuevo León obedece a la nueva configuración de los cárteles de la droga, producto de los reacomodos entre las dos más importantes organizaciones que operan en México: el cártel del Golfo y el de Sinaloa.

Con base en información de la DEA, la PGR sostiene en la ficha referida que en Tamaulipas no sólo se confirmó la ruptura entre Los Zetas y el cártel del Golfo, sino que en éste privan los desacuerdos por el control entre Eduardo Costilla, El Coss, y Ezequiel Cárdenas Guillén.

Para la DEA, el antagonismo interno del cártel del Golfo parece irreconciliable y por lo tanto “es una fuente generadora de violencia e inestabilidad”. Como dice la agencia estadounidense en un informe sobre el reacomodo de los cárteles: “Los vínculos entre los personajes históricos del cártel del Golfo, Eduardo Costilla y Ezequiel Cárdenas, se han resquebrajado con quienes dirigen a Los Zetas, entre ellos con Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y Miguel Treviño Morales, El Z-40”.

Continúa: “Los vínculos entre estas bandas dedicadas al tráfico de enervantes sólo estaban sustentados en débiles acuerdos”, y añade que la endeble relación se fracturó desde enero pasado debido al asesinato de una persona clave de Los Zetas: Víctor Peña Mendoza, El Cóncord 3, identificado por la DEA como brazo operador de Treviño Morales.

Debido a la separación de Los Zetas de la organización que los vio nacer entre 1996 y 1997, un nuevo reacomodo de cárteles se presentó en el país, lo que derivó en nuevas alianzas y también en batallas por el control territorial. A esas causas se atribuye la ola de asesinatos y levantones que a diario se viven en Tamaulipas y Nuevo León, que según el secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, ya rebasó a los gobernadores de todos los estados, pues afirma que éstos carecen de instrumentos para combatir al crimen organizado.

Según el director de inteligencia de la DEA, Anthony Placido, los estallidos de violencia que padecen ambas entidades constituyen un nuevo episodio. Él atribuye las confrontaciones a la independencia de Los Zetas, a los que imputa la intención de controlar la frontera con Estados Unidos.

“Tengo entendido que hay una guerra nueva entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, que anteriormente eran una misma organización y ahora están separados... Entendemos que están luchando por el control de la plaza”, dice Placido.

—¿Es una amenaza relevante para Estados Unidos la confrontación de los cárteles del Golfo y Los Zetas?  
—pregunta el reportero.

—México es un foco de preocupación. Es muy pronto para conocer las consecuencias, fuera de México, de esos dos grupos rivales. Es difícil colocar un orden porque no estamos comparando manzanas con manzanas, pero mi atención está puesta en México porque por ese país llegan tres de las cuatro drogas más importantes usadas en Estados Unidos, y ello se debe a su proximidad geográfica.

Según la SSP y la PGR, que sustentan su versión en los informes de la DEA, la presunta causa de la escisión entre Los Zetas y el cártel del Golfo tiene su origen en los acercamientos que sostuvieron miembros del cártel de Sinaloa con Eduardo Costilla a fin de establecer una posible alianza.

Cuando surgieron los primeros datos sobre una eventual asociación entre ambos cárteles saltaron las dudas, debido principalmente a que en más de 50 años de existencia esos grupos fueron rivales. Sin embargo, desde Washington la DEA confirmó la alianza Golfo-Sinaloa y adelantó lo que más tarde confirmaría la SSP: que había nuevos enroques en las estructuras del narcotráfico mexicano.

En efecto, en un intento de fortalecer su liderazgo dentro y fuera del Golfo de México, Los Zetas se aliaron con la organización Carrillo Fuentes, los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Tijuana.

Por su parte, el cártel del Golfo perdió su brazo armado (Los Zetas), pero estableció una alianza con el cártel de Sinaloa, los hermanos Valencia afincados en Michoacán y La Familia michoacana, organización esta última que se expande desde hace tres años y que, según la SSP, domina 10 entidades del país con el apoyo de las policías locales.

Desde que se consolidó la alianza de los cárteles del Golfo y de Sinaloa no han cesado los choques entre ambos grupos y Los Zetas. En marzo de este año, por ejemplo, el área de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que en el municipio de Camargo, Tamaulipas, Los Zetas habían habilitado un centro de adiestramiento para sicarios.

Eso fue confirmado debido a que ese lugar presuntamente fue atacado a balazos por gatilleros del cártel del Golfo. Según los reportes oficiales, el enfrentamiento duró un par de horas y en él murieron dos personas. De acuerdo con un video publicado en la página electrónica YouTube, la balacera fue parte de la guerra que sostienen Los Zetas y el cártel del Golfo.

Otro epicentro de la ola de asesinatos es el estado de Nuevo León, feudo de Los Zetas. Ahí las matanzas son tan frecuentes que al corredor formado por esta entidad con Tamaulipas ya se le conoce como “la zona roja”. Tampoco la policía nuevoleonesa puede contener la violencia, ya que toda la estructura policiaca está infiltrada por el narcotráfico, según reconoce la SSP.

### **Bienvenidos a “Los Zetas”**

Aun cuando ha sufrido bajas por detenciones y asesinatos, el cártel del Golfo mantiene casi intacta su estructura, de acuerdo con un informe de la SSP elaborado por su área de inteligencia y titulado Radiografía de las organizaciones de narcotraficantes.

Con base en ese informe, cuya copia tiene Proceso, puede establecerse que los personajes que reconfiguraron el cártel del Golfo bajo el liderazgo de Osiel Cárdenas Guillén son los mismos que han ejercido el poder criminal desde 1997 a la fecha.

Con excepción de Osiel Cárdenas, detenido en 2003 y extraditado a Estados Unidos, el resto de los cabecillas del cártel sigue operando:

Sobre Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, el informe de la SSP apunta: “Es uno de los integrantes (del cártel del Golfo) más violentos y formó parte del Ejército mexicano”. Ezequiel Cárdenas Guillén es hermano de Osiel. Eduardo Costilla Sánchez (El Coss) es identificado por la PGR y la SSP como cabeza

de la organización; junto con él operan Héctor y Gregorio Saucedo Gamboa, Zeferino Peña Cuéllar (Don Zefe), Carlos Landín Martínez (El Puma) y Alfonso Lam Liu.

Por su parte, el cártel de Los Zetas es encabezado por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y de acuerdo con el informe federal citado, su segundo de a bordo es Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.

Los Zetas no han dejado de reclutar a militares mexicanos para suplir sus bajas y reforzar sus filas. De igual forma, tienen una importante cantera criminal en el ejército de Guatemala, cuyos desertores son incorporados al cártel, según consta en la causa penal 19/2006, en la que el declarante guatemalteco William Mendoza González, conocido como El Dandy, refiere cómo fue “enganchado” por Los Zetas.

Cuenta en su testimonio ministerial que luego de salirse del ejército guatemalteco permaneció como un mes en su casa, al cabo de ese tiempo, un amigo (guatemalteco), también exkaibil y al que había conocido en el Primer Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Guatemala, Eduardo Morales Valdez, le dijo que si quería ir a trabajar a México como encargado de dar seguridad a un empresario, sin explicar más que recibiría tres mil pesos quincenales y luego de algunos meses de trabajo le aumentarían el sueldo.

Como me pareció atractivo el ofrecimiento dijo que sí (sic), contestándole su amigo que él le avisaría cuándo partirían (a México) y que mientras le confirmaba la fecha iba a buscar a más exmilitares guatemaltecos porque así se lo había pedido el empresario al que le iba a dar seguridad.

Que aproximadamente dos días después, Eduardo Morales Valdez acudió al domicilio de su amigo, en Santa Amelia, para decirle que en ese momento quería que fuera a la casa de un sujeto al que conocía como El Ponchado, al parecer de apellido Stwinlisky, para ver lo del trabajo en México. Haciéndole así, se dirigieron al domicilio de El Ponchado, ubicado en el barrio de Santa Fe, municipio de Poptún, departamento de Petén, Guatemala.

En ese domicilio se encontraban doce exkaibiles, quienes se incorporaron al grupo Los Zetas el doce de mayo del 2009. Para llegar a México partieron de Petén, Guatemala, hasta llegar a la frontera con Tenosique, Tabasco, en México; al llegar a la garita donde está la aduana de México, las autoridades aduanales nos dieron permiso por setenta y dos horas para pasar a México, como normalmente ocurre con la gente que desea conocer o comprar ropa. Luego un sujeto pasó por nosotros para llevarnos al puerto de Veracruz, donde permanecieron varios días.

Luego nos llevaron a Tampico, Tamaulipas, donde fuimos recibidos en una fiesta en la que nos dieron la bienvenida con una gran manta que decía “Bienvenidos a Los Zetas”. Nos dijeron que querían probar nuestra disciplina militar y más tarde nos dijeron que el negocio se trataba de trabajar con droga, matar a narcotraficantes rivales y mantener el poder a cualquier costo...

Arturo Rodríguez García. “La Laguna: las huellas de la indefensión”. *Proceso* número 1760, 25 julio 2010. pp 16-18. <https://www.proceso.com.mx/104176/la-laguna-las-huellas-de-la-indefension-2>

**“La Laguna: las huellas de la indefensión”**

En La Laguna, la sociedad, el gobierno y la clase empresarial se quejan porque, dicen, el presidente Felipe Calderón dejó fuera de su estrategia contra el crimen organizado a ese territorio que hoy se disputan Los Zetas y el cártel de Sinaloa. En lo que va del año, 600 civiles han caído a causa de la violencia en Torreón y su zona conurbada. Hoy, los ataques dejaron de ser selectivos y se desatan incluso en fiestas privadas, como el del domingo 18, donde murieron 17 personas.

TORREÓN, COAH.- La guerra del presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado no llegó a la comarca lagunera... Aun cuando esta región se halla desbordada por la delincuencia y la violencia asociada al narcotráfico, está al margen de la estrategia del gobierno federal contra el crimen organizado.

Inútiles han resultado las súplicas que, desde hace meses, la ciudadanía, los gobernadores de Durango y Coahuila, así como los presidentes municipales de las dos entidades, legisladores y el empresariado lagunero hacen al gobierno federal para detener las muertes de civiles que ya sobrepasan los 600 en lo que va del año. Ellos exigen la presencia de las llamadas Fuerzas Armadas Permanentes (FAP) para que pongan orden en la zona.

El domingo 18, alrededor de la una de la madrugada, tres vehículos llegaron a la Quinta Italia Inn, en la periferia de Torreón, donde Carlos Antonio Mota Méndez celebraba su cumpleaños 31 en compañía de varios amigos.

Cinco hombres armados descendieron de las unidades y comenzaron a disparar a los asistentes, incluidos los músicos de la banda Ríos que amenizaban el convivio. El saldo fue de 17 muertos, incluidos el festejado y su hermano Héctor José; otros tantos quedaron heridos. Minutos después los agresores huyeron hacia Gómez Palacio, Durango.

Arturo Rodríguez García. “Las narcofosas ya son rutina”. *Proceso* número 1761, 1 agosto 2010. pp 24-26. <https://www.proceso.com.mx/80943/80943-las-narcofosas-ya-son-rutina>

### **“Las narcofosas ya son rutina”**

El número de cadáveres hallados en las narcofosas neoleonesas de la Hacienda Calderón sólo ha sido superado por los encontrados en Taxco, Guerrero. Decenas de cuerpos descuartizados, mutilados o incinerados constituyen el saldo de las enconadas batallas entre el cártel del Golfo y Los Zetas.

MONTERREY, NL- Cuerpos calcinados, acribillados, asfixiados o molidos a golpes que yacen en parajes o narcofosas son hallados en Nuevo León cada vez con más frecuencia desde que el cártel del Golfo y Los Zetas enconaron su confrontación.

En un año y medio, integrantes de las Fuerzas Armadas han localizado siete de esos sitios con restos humanos en Nuevo León y uno en Coahuila. En cuatro de esos lugares había 87 cuerpos, mientras que en los otros sólo se encontraron restos óseos cuyo grado de descomposición impidió determinar tanto el número de víctimas como su identidad.

De manera que aquí a nadie parece insólito que el 22 de julio un convoy del Ejército Mexicano haya localizado nueve pozos que, en un paraje conocido como Hacienda Calderón, aledaño al

fraccionamiento Las Águilas, del municipio de Juárez, contenían cinco decenas de cuerpos humanos despidiendo olores fétidos.

Durante dos días, los peritos de la Procuraduría de Justicia del estado cavaron hasta recuperar los cadáveres, que no cupieron en la morgue. Con un camión-refrigerador, un número indeterminado de cuerpos permanecieron en el exterior, en lo que se abría espacio y se practicaba la autopsia a los primeros.

Y es que, a diferencia de otras fosas semejantes descubiertas en la región, que en lugar de cuerpos contenían restos óseos carbonizados o muy descompuestos, estos cadáveres son recientes y, por su estado, aún resultan identificables.

Sin embargo, el número de cuerpos localizados en las fosas de la Hacienda Calderón sólo ha sido superado por los 55 cadáveres que, depositados en una mina de Taxco, Guerrero, fueron descubiertos a finales de mayo pasado.

Aunque oficialmente las autoridades no han identificado a los creadores del macabro sitio en Nuevo León, policías federales afirman que tales crímenes habrían sido efectuados por sicarios del cártel del Golfo en su lucha contra Los Zetas.

Y calculan que en ese tipo de lugares de la región han sido arrojados casi un centenar de personas que en su mayoría no han sido registradas por las autoridades como desaparecidas.

### **La Hacienda Calderón**

A través de brechas de terracería, en un laberinto flanqueado por espesa vegetación, se llegó a la zona del hallazgo tres días después del levantamiento de los cuerpos.

En el fondo de la fosa principal, de unos 100 metros de diámetro y 10 de profundidad, aún con un intenso olor a muerte, había prendas de vestir consumidas por la humedad y el tiempo que pertenecieron a quienes allí perecieron ejecutados: pantalones, camisas, zapatos y hasta una funda quemada de teléfono celular...

En el predio, nueve fosas contuvieron los cadáveres de 51 personas, entre ellas seis mujeres.

Aunque se sabe que algunos restos estaban carbonizados, los cuerpos fueron sometidos a un procedimiento forense que logró determinar sexo, evidencias de tortura y causas de muerte.

Información obtenida por Proceso revela que apenas nueve víctimas murieron por impacto de bala, en tanto que las otras 42 sufrieron una agonía lenta, pues perdieron la vida a causa de golpes o por asfixia.

Hasta el cierre de esta edición se había identificado apenas a 10% de los cuerpos, pero las causas de los decesos estaban ya establecidas: 18 murieron por contusión profunda de tórax; cinco, por golpes en tórax y abdomen; tres, por contusión de cráneo; uno, por golpes en cráneo y tórax, además de que 15 fallecieron por asfixia y nueve por lesiones de arma de fuego.

Desde el hallazgo, familias de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han acudido en busca de algún pariente desaparecido. El viernes 30 de julio habían sido identificados siete cuerpos, cinco de los cuales

fueron reconocidos por sus familiares, en tanto que la identidad de otros dos se conoció por sus huellas dactilares.

Todos ellos son originarios de la zona metropolitana de Nuevo León.

Entre los identificados están Raymundo Javier Muñoz Guerra y Vidal de Jesús Domínguez Flores, quienes tenían antecedentes penales por el delito de robo en la entidad. La libertad de Muñoz Guerra apenas duró unas semanas, pues había salido del penal de Apodaca en mayo y su muerte ocurrió a finales de junio.

Pero en el caso de Sonia Clara Villalobos Zurita, una joven de 18 años, vecina de Guadalupe, Nuevo León, no hay antecedentes penales ni se ha logrado determinar algún vínculo de ella con la delincuencia organizada.

Ahora se sabe que, el 30 de junio, Sonia Clara habló por teléfono con su madre, a quien dijo que había tenido un percance vial en la avenida Constitución. De repente la comunicación se cortó y la familia jamás volvió a saber de la joven hasta el jueves 29 de julio, cuando la reconocieron en el Servicio Médico Forense.

Como ella, las personas ahí sepultadas habrían muerto entre junio y julio de este año.

### **Las narcofosas**

Atribuidas a Los Zetas y al cártel del Golfo –aunque no de manera oficial–, varias narcofosas localizadas a partir de febrero de 2009 en los límites de Nuevo León y Coahuila han presentado cuerpos mutilados o restos óseos que en ocasiones han sido desintegrados.

El 10 de febrero de 2009, en un paraje serrano de Arteaga, Coahuila, zona limítrofe con el sur de Nuevo León, una patrulla militar, “en un recorrido de rutina”, localizó fosas con los restos de 19 personas.

En ese paraje, conocido como San José de la Roja, sobre las fosas con cadáveres había tambos de 200 litros con residuos de diesel. De acuerdo con un informe forense obtenido por Proceso, los cuerpos fueron descuartizados empleando machetes y zapapicos.

En total, los forenses obtuvieron 514 trozos de cuerpos humanos levantados del sitio serrano, e identificaron un solo mecanismo de descuartizamiento: se producía un corte que separaba en un solo segmento cráneo, cuello y la mitad superior del tórax; otro incluía la región abdominal, la lumbar y la pelvis, además de que brazos y piernas eran desarticulados para después fracturar los huesos largos mediante el empleo de un zapapico y machetes.

Luego, en los toneles metálicos de 200 litros, a los que se hicieron orificios con el zapapico, se introdujeron los fragmentos corpóreos y se rociaron con diesel. Los orificios hechos en el tambor generan aire para la combustión y producen un efecto semejante al de un soplete.

Una vez sometidos al fuego, los restos que no lograron incinerarse fueron sepultados. Coincidentemente, como ocurrió en las narcofosas de la Hacienda Calderón, en ese lugar se localizaron nueve sitios con restos humanos.

Sólo fue posible identificar los cuerpos de cinco de las víctimas. Cuatro eran de Nuevo León, y uno, estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo, pero originario de Oaxaca. En 14 cuerpos, después de cinco meses de procedimientos forenses, se logró identificar la secuencia de ADN, pero nadie los reclamó. Una víctima más, por su descomposición, no conservó ni su código genético.

Tras el hallazgo de la Sierra de Arteaga, esos cementerios del narco han dejado muestras de procedimientos semejantes a lo largo de un año y medio.

En la mayoría de los lugares se han encontrado casquillos percutidos, pero al someter los cuerpos a procesos forenses, los peritos han determinado, como en las víctimas sepultadas en la Hacienda Calderón, que las muertes por arma de fuego son las menos.

El 14 de agosto de 2009, la Policía Ministerial de Nuevo León localizó una cueva en Santa Catarina donde también había restos humanos y tambos. Por la descomposición de los cuerpos, no hubo identificaciones ni datos más precisos sobre la cantidad de víctimas.

El 5 de febrero de este año, en el municipio de Galeana, el Ejército, “en un recorrido de rutina”, localizó los restos de un indeterminado número de víctimas. También en ese lugar había tambos de 200 litros.

Pero hasta el momento el municipio que acumula más cadáveres es Juárez, Nuevo León, pues además de las fosas de la Hacienda Calderón, elementos del Ejército y peritos de la Procuraduría de Justicia lograron la recuperación, el pasado 30 de junio, de 12 cuerpos sepultados en una fosa de la Quinta Los Leones, ubicada en las faldas del Cerro de la Silla, en la comunidad de Santa Ana, a unos 30 kilómetros de Monterrey.

Días después, el 14 de julio, en un yonque de Guadalupe, Nuevo León, que anteriormente servía como corralón al ayuntamiento, se localizaron al menos nueve cuerpos. Fueron también los militares quienes, “gracias a una llamada anónima”, ubicaron el sitio y, ya con los forenses ahí, encontraron los restos humanos en tambos y diferentes fosas.

Luego vino el hallazgo de la Hacienda Calderón, al que le siguió otro el miércoles 28 de julio, cuando se halló un cuerpo, plenamente identificable, sepultado en el sector conocido como Hacienda Real, también en Juárez.

Y un día más tarde, el jueves 29 de julio, otro sitio igual fue descubierto en el municipio de El Carmen, Nuevo León, donde había restos humanos calcinados y seis tambos con residuos de diesel consumido, además de que a unos 200 metros de allí se recogieron por la brecha prendas y casquillos de bala.

### **Los desaparecidos**

Con la localización de las fosas clandestinas, el número de muertos de Nuevo León en el contexto de “la guerra” contra el narcotráfico ascendió a casi 400 en lo que va de 2010.

En tanto, la cifra de desapariciones en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se mantiene en la opacidad, pues familiares de las víctimas prefieren en muchos casos evitar las denuncias por temor a represalias. E inclusive aquellos que se animan sufren intimidaciones, amenazas o desdén de las autoridades, según han denunciado el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, que preside el obispo Raúl Vera

López en Coahuila, y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., de Nuevo León (CADHAC), que coordina la religiosa Consuelo Morales Elizondo.

Sin embargo, aunque no se conoce el número de desapariciones, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio se ha convertido en un lugar de oración para familiares de personas desaparecidas en la entidad.

Ese ritual comenzó el 22 de octubre del año pasado, con una misa a la que asistieron 10 familias. La siguiente reunión fue un mes después, el 19 de noviembre, y, entonces sí, la iglesia lució repleta: decenas de personas acudieron a orar por sus desaparecidos. Y desde entonces lo hacen el tercer viernes de cada mes.

En la parroquia confluyen decenas de historias de violencia que no forman parte de las estadísticas oficiales.

“A una la amenazan las autoridades, y ni cómo hacerle. Nomás nos queda el rezo”, dice una de las madres de un desaparecido, entrevistada fuera del templo.

La coordinadora de CADHAC, Consuelo Morales Elizondo, afirma que las familias que han mantenido abiertamente su exigencia de que se den a conocer los resultados de las investigaciones reciben en general “un trato amable y cordial de las autoridades”, pero eso no ha servido para que se esclarezcan los casos de desapariciones.

“Lo que vemos es una política gubernamental que se niega a hacer investigaciones por los casos que pueden estar vinculados con la delincuencia organizada, pero, involucrados o no con el narco, los desaparecidos permanecen así, sin que se haga una investigación elemental para esclarecer los crímenes”, concluye.

S/A. “Narcoterror mediático”. *Proceso* número 1767, 12 septiembre 2010. pp 16-17.

<https://www.proceso.com.mx/101319/101319-narcoterror-mediatico>

### **“Narcoterror mediático”**

MÉXICO, D.F., 14 de septiembre (Proceso).- En su guerra declarada, el cártel del Golfo (CDG) y Los Zetas recurren cada vez más a la propaganda y a la utilización de los medios de comunicación no sólo para buscar adeptos, sino también para atizar el odio contra sus enemigos y justificar sus acciones violentas.

Hasta hace varios meses ambas organizaciones recurrían a las narcomantas o videos en internet para enviar sus mensajes, pero en las últimas semanas combinan esas acciones con el envío de boletines a los medios de comunicación, particularmente a los de Tamaulipas.

Una fuente de la PGR sostiene que el cártel del Golfo es cada vez más proclive a subir menajes y videos al sitio youtube.com en los que reivindica sus acciones, amedrenta a sus rivales y a los cuerpos policiacos tamaulipecos y aprovecha para reclutar gente.

Luego del hallazgo de los cuerpos de los migrantes centro y sudamericanos en San Fernando el pasado 24 de agosto, el usuario “Verdugo811” subió el siguiente mensaje electrónico que, según la PGR y fuentes del gobierno de Tamaulipas, fue elaborado por algún sicario del CDG:

“Al pueblo de Tamaulipas. Los 72 asesinados serán vengados... La policía rural de Tamaulipas en un retén con Los Zetas detuvieron al camión donde iban los indocumentados... Estamos persiguiendo a los policías zetas, a tránsitos zetas, a periodistas y comunicadores zetas”.

Los días posteriores se registraron diversos ataques contra agentes municipales y estatales en Ciudad Victoria, Mante, Hidalgo, Padilla y Llera, ubicados en el centro de la entidad.

“Verdugo811” concluye su “comunicado” con una amenaza al gobernador Eugenio Hernández Flores y los trabajadores de los medios de comunicación de la entidad:

“Al gobernador que no gobierna, llamado por ellos Zeta-1, de nombre Eugenio Hernández, le decimos que ordene a sus criminales zetas, que vienen de pueblos remotos, que abandonen nuestro estado; de lo contrario, nuestra lucha arreciará más y serán ejecutados. Hasta en McAllen te alcanzaremos, Geño. Reivindicamos este segundo mensaje en la capital de nuestro estado. Comunicar la verdad es obligación, o negarla o tergiversarla por miedo o billetes, es traición. Sabedlo comunicadores.

“La Patria es primero. Brigada Cd. Reynosa, Tamaulipas”.

Y así como el CDG atribuye la matanza de los indocumentados a Los Zetas, se atribuye, entre otros, la ejecución del alcalde del municipio rural de Hidalgo, Marco Antonio Leal García, ocurrida el pasado 29 de agosto; el atentado con coche-bomba a las instalaciones del Complejo Estatal de Seguridad Pública de Ciudad Victoria, y la muerte de policías rurales. Aunque arguye que se trató de actos de venganza.

En uno de los comunicados del CDG enviado a los medios tamaulipecos y difundido el 29 de agosto, expone: “Ha sido ajusticiado el Z-1 de Hidalgo, Tamaulipas, el presidente municipal Marco Antonio Leal García, por traicionar la confianza de su pueblo. Por ser el actor (sic) intelectual del secuestro del ingeniero Israel Cuéllar (dirigente del Comité de Lucha Social de ese municipio) y por convertirse en el principal operador del grupo de asesinos y secuestradores llamados Los Zetas”.

### **Las nuevas herramientas**

En la mayoría de los mensajes que los sicarios del CDG suben a youtube.com se enaltece a las fuerzas federales, en particular al Ejército y a los marinos, mientras que a las autoridades y a las corporaciones policiacas estatales y municipales las acusa de complicidad con Los Zetas.

En Tamaulipas, sobre todo en las ciudades fronterizas, la mayoría de la población asegura que las fuerzas federales apoyan al CDG. La premisa es, dicen varios de los ciudadanos consultados por Proceso, exterminar a Los Zetas, cuyos integrantes son quienes atacan a la sociedad civil y generan una mayor violencia.

“Reconocemos el esfuerzo y eroísmo (sic) de soldados y marinos en el combate a la inseguridad y en defensa del pueblo, repeliendo el ataque de la basura delincencial estaremos a salvo”, dice en uno de los ocho mensajes de “Verdugo811”.

Pero cuando los mensajes van dirigidos a los policías locales, el tono es diferente: “El castigo para aquellos policías que sirven de apoyo a Los Zetas apenas empieza, ya están identificados cada uno de ellos. Sabemos quienes son y donde viven”, señala un comunicado generado el 5 de agosto último.

Los integrantes del CDG también suelen distribuir panfletos en distintas poblaciones de Tamaulipas, como si se tratara de campañas de reclutamiento. En ellos convocan “al pueblo de Tamaulipas” a unirse en la lucha contra Los Zetas. Uno de esos mensajes llegó a la redacción de este semanario por correo tradicional.

El cártel convoca a la población a “defender la familia, la vida y el patrimonio de nuestro pueblo”; es, insiste, una “obligación moral de todo ciudadano. Nadie estará a salvo si no tomamos las armas”.

La organización utiliza también como bandera el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre. “Que su sacrificio no sea en vano”, dice el mensaje; también expone que cuenta con 34 coches-bomba para estacionarlos frente a las casas de los policías al servicio de sus enemigos.

El propósito es capitalizar el descontento generado entre la población por las acciones del grupo armado de Los Zetas, antiguos aliados del cártel del Golfo.

Los Zetas se defienden también con las mismas herramientas: “A nosotros nos tachan de secuestradores, extorsionadores, asesinos y demás, pero les recuerdo que antes que iniciara todo esto estábamos a las órdenes del cártel del Golfo y recibíamos órdenes.

“Nosotros no necesitamos andar diciendo a la gente que nos apoyen ni mucho menos reclutando alumnos de secundarias, como ellos lo hacen; nosotros somos gente preparada para el combate, no necesitamos gente que no sabe ni manejar un arma.

“Al final saldrá victorioso quien tenga más poder y más estrategia para realizar su trabajo. Estamos conscientes que perderemos gente, pero ellos perderán todo”, sostiene el comunicado firmado por la “Compañía Zeta”.

Verónica Espinosa. “Tras el feudo de “El Lazca””. *Proceso* número 1782, 26 diciembre 2010. pp 18-22. <https://www.proceso.com.mx/259641/259641-tras-el-feudo-de-el-lazca>

### **“Tras el feudo de “El Lazca””**

Los frecuentes operativos militares en San Luis Potosí, la incautación de drogas y la detención de cabecillas locales de Los Zetas, por el momento ponen al estado en el centro de la lucha contra el narcotráfico y pueden marcar el fin del reinado de Heriberto Lazcano, El Lazca, en esta plaza...

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. - Controlada hasta sus entrañas por Los Zetas, hoy esta plaza permanece disponible al mejor postor de los grupos del narcotráfico y todo indica que éste ya no es Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, quien se perfila como el siguiente objetivo prioritario del gobierno federal en su cacería de los rivales de Joaquín El Chapo Guzmán.

En las últimas semanas los bloqueos de vialidades, las ejecuciones masivas, balaceras y persecuciones han mantenido a los habitantes de municipios de la Huasteca y de esta capital en una angustiante alerta, mientras el Ejército despliega una frenética actividad.

Información obtenida por Proceso da cuenta de cómo en los últimos meses, ante una total omisión, o sumisión, tanto del gobierno del panista Marcelo de los Santos como de su sucesor, el priista Fernando Toranzo, los emisarios de El Lazca han buscado calentar la plaza para evitar el arribo de su rival: el cártel de Sinaloa, que desde Guadalajara pretende dominar el espectro delictivo en esta entidad.

Los movimientos del Ejército, a partir de la XII Zona Militar o con destacamentos enviados directamente desde la Ciudad de México –como ocurrió con el operativo efectuado el viernes 3 en pleno bulevard Venustiano Carranza–, son congruentes con esta posibilidad, pues sobre todo en las últimas semanas se han encaminado a dismantelar células de zetas y llegaron hasta personajes cercanos a los líderes del grupo.

En los mismos operativos se ha detenido a numerosos narcomenudistas en carreteras y ciudades, lo que es inusual en esta entidad donde “nunca pasa nada y nunca se dice nada”, según afirman los propios potosinos.

En recientes operativos desplegados en la capital del estado, los militares detuvieron a dos operadores regionales de El Lazca y de Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, este último uno de los fundadores del grupo como brazo armado del cártel del Golfo y quien se desenvuelve sin problemas en los círculos sociales y empresariales de la entidad.

Además, en el grupo de detenidos apareció también un expolicía estatal y federal con un historial de represor durante los anteriores gobiernos priistas: Julio Alfredo Ceballos, tío del actual secretario de Seguridad, Enrique Galindo Ceballos.

El impresionante currículum de Julio Ceballos incluye las detenciones de los “narcosatánicos” en Tamaulipas, en 1989; del asesino serial Bricio Vázquez, El Tigre de Chiapas, en 1998; del multihomicida, asaltante y narco Miguel Ángel Beltrán Lugo, El Ceja Güera, y hasta del multihomicida y narcotraficante del cártel de Sinaloa Juan José Quintero Payán, El Juanjo, en 2002. Pero en San Luis es ingratamente recordado porque como policía estatal encabezó una golpiza a ciudadanos del movimiento cívico que hace 25 años denunciaban un fraude electoral cometido por el PRI en la alcaldía de la capital.

En sus comunicados, la Sedena no mencionó al tío del secretario de Seguridad (a quien el gobernador ha respaldado asegurando que nadie escoge a su familia), pero sí ventiló supuestas declaraciones de los detenidos que señalan como encargado de la plaza a Jesús Campos Mar, El Cachorro.

Éste es otro expolicía que formó parte de un grupo de élite formado hace años en Nuevo León, y se supone que fue enviado expresamente por El Lazca a principios del año pasado para impedir que su territorio fuera invadido por los de Sinaloa. Un expolicía especial más, apodado El Chunco, pudo ser asignado por El Lazca a esta zona con el mismo propósito.

Apenas se oyó la voz del gobernador Fernando Toranzo Fernández cuando pidió “más presencia del Ejército y la Policía Federal” a principios de septiembre, cuando fue acribillado por zetas el alcalde

priista de El Naranjo, Alexander López García. Pero ningún integrante del gabinete de seguridad del estado asoma la cabeza.

### **Control armado**

Comercios, bares, empresas, centros nocturnos, penales y municipios son víctimas del lucrativo negocio de la extorsión. Actualmente Los Zetas cobran entre 2 mil y 50 mil pesos mensuales por “derecho de piso”, según se trate de un bar pequeño o un table-dance de prestigio.

El negocio es tan suculento que el grupo impone una férrea disciplina: periódicamente El Lazca envía contadores a distintos puntos de control para “auditar” las plazas. Una revisión puede llevar hasta un par de meses.

De acuerdo con un testimonio obtenido por Proceso, El Cachorro es sutil en estos asuntos: se presenta con los empresarios, comerciantes o dueños de antros y les informa “en qué consiste el trato”: se paga o se paga. Se mueve con discreción, sin los convoyes que utilizan otros jefes.

A mediados de 2009 aparecieron en estos rumbos dos personajes a los que se daba por muertos: Tiburón, supuestamente acribillado en Durango y ahora apodado El Cubanito, e Israel Nava Cortez, El Ostión, quien según la PGR murió en un enfrentamiento con agentes a principios de abril en Fresnillo, pero que en realidad vive, es conocido ahora como El 50 y en mayo de ese año fue un operador de la fuga de 53 internos del Cereso de Cieneguillas, en Zacatecas (Proceso 1764), quienes fueron trasladados a San Luis Potosí y luego comisionados a la defensa de distintas plazas, entre ellas Guanajuato.

En este marco, los operativos del Ejército en San Luis se están acercando a operadores y jefes de Los Zetas, a la vez que “peinan” entre narcomenudistas y distribuidores para buscar formas de llegar al capo. Así ocurrió en las primeras horas del viernes 3, cuando un grupo de militares irrumpió en las suites Tame (1680 del bulevar Carranza, la avenida principal de la capital), cercó la zona y extendió la operación a otras colonias.

Los medios de comunicación locales describieron el miedo que padecieron sobre todo los empleados de los numerosos comercios de la zona y los escolares. En las redes virtuales se compartió la sicosis, mientras en su cuenta de Twitter la Secretaría de Seguridad Estatal pedía a la población que “continuara con sus actividades normales”.

El operativo comenzó alrededor de las 5:00 horas y concluyó después de las 10:00. Algunos medios alcanzaron a informar sobre el lugar preciso del cateo y los vehículos ahí asegurados, entre los cuales hay camionetas de lujo que presuntamente se sustrajeron de un lote de autos semanas atrás.

Tras el silencio inicial, el Ejército informó el sábado 4: “La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la 12/a Zona Militar, informa que en el marco de la campaña permanente contra el narcotráfico y la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, siendo las 05:30 horas del actual, personal militar llevó a cabo intervenciones en la colonia Tequisquiapan, municipio de San Luis Potosí, SLP, deteniendo a siete individuos, a quienes se les aseguró lo siguiente:

“Droga: tres kilos de polvo blanco (con características de cocaína); armamento: tres armas cortas de diversos calibres; vehículos: ocho automotores de diferentes características; inmuebles: ocho inmuebles;

numerario: \$2,000,000.00 M.N., \$100,000.00 U.S.D.; objetos y equipo diverso: equipo de comunicación, cómputo y documentación diversa.”

Este comunicado fue entregado personalmente a los reporteros de la fuente, a quienes se les pidió que fueran al cuartel y se identificaran.

El domingo 5, la Zona Militar emitió el segundo comunicado sobre el mismo operativo, aunque éste fue electrónico e indica que se llevó a cabo el viernes 3, como efectivamente ocurrió y así lo consignan varios medios de comunicación locales, y no el día 4, como se dijo en el comunicado anterior.

Ahí ya se precisa que se aseguraron 2 millones 287 mil 450 pesos y 115 mil 239 dólares estadounidenses a los detenidos, y que con la cocaína incautada (tres kilos) se hubieran obtenido aproximadamente 9 mil dosis, “que se comercializan al menudeo a un precio de 171 pesos por dosis, lo que hace un total de 1’539,000.00 (M.N.)”.

Y el martes 8, rompiendo su usual hermetismo, la XII Zona Militar divulgó un tercer comunicado, en el que nuevamente sostiene que el operativo en cuestión se realizó el sábado 4, y asegura que los detenidos son “ocho presuntos integrantes de una célula del grupo criminal Los Zetas, encargados de las actividades delictivas de dicho grupo en la entidad”.

Según el documento, los detenidos dijeron que el responsable “de las actividades de narcotráfico y secuestro en esta ciudad de San Luis Potosí” es Jesús Campos Mar, El Cachorro.

No menciona los nombres de los presuntos zetas, el comunicado cita a Felipe Ramos Cárdenas, El Tuzo, a quien se señala como “encargado de las actividades administrativas y la contabilidad del citado grupo criminal”, y a Javier Robledo Hernández, El Compu, del cual “se tiene conocimiento que es asistente de Jesús Enrique Rejón Aguilar, Mamito, lugarteniente relevante de la citada organización delictiva”.

Desertor del Ejército en 1999, seis años después de enrolarse, el veracruzano Rejón Aguilar forma parte del círculo fundador de Los Zetas como brazo armado del cártel del Golfo y dirigió al grupo a principios de la década, pues en noviembre de 2002 el líder Arturo Guzmán (Z-1) fue acribillado. Posteriormente El Lazca, pupilo de Guzmán, quedó al mando (Proceso 1750) y El Mamito se encargó del adiestramiento paramilitar de los sicarios.

En 2007, Rejón Aguilar era ubicado como cabeza de la plaza de Nuevo Laredo, estratégica para Los Zetas, según el testimonio que un desertor de esta organización dio al reportero Ricardo Ravelo (Proceso 1619). Se le ubica como responsable del envío de mariguana y cocaína a Estados Unidos, por lo que figura en la lista de los narcotraficantes más buscados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde julio de 2009, el gobierno de Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por su captura o información sobre su paradero (Proceso 1771) y, en marzo de este año, el Departamento del Tesoro lo incluyó en una lista de 54 jefes y operadores del cártel del Golfo y Los Zetas a quienes se prohíbe efectuar operaciones financieras o comerciales en ese país, por lo que sus activos fueron congelados.

En el tercer y último de sus comunicados, la XII Zona Militar informa del aseguramiento de 84 mil 220 kilos de cocaína encontrados en un tráiler, que no fue incluido en los dos comunicados anteriores. La explicación es que, si bien los soldados sabían que la droga venía en el contenedor, tardaron en localizar

el escondite. “Costó trabajo dar con ella”, comentó un militar a la reportera. Esa cocaína habría bastado para elaborar 252 mil 660 dosis, con un valor aproximado de 43.2 millones de pesos.

Fue en otro comunicado, fechado el miércoles 8 y emitido por la PGR, donde se informó que un juez federal ordenó el arraigo por 40 días de los siete detenidos, a petición del fiscal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. Ahí sí aparecieron todos los nombres:

Javier Robledo Hernández, El Compu; el expolicía Julio Alfredo Ceballos Alonso; Israel Santana Galván, El Coto; Luis Manuel Ramos Cárdenas, El Luisito; Felipe Ramos Cárdenas, Conta o El Tuzo; Esteban Cortés Mascorro y Adán Vázquez Martínez, El Botija, todos acusados de delincuencia organizada, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, “y lo que resulte”.

Aunque el Ejército sigue realizando operativos, la violencia no tiene freno: el viernes 17, a las 9:45 de la mañana, en Ciudad del Maíz –municipio de la Huasteca colindante con Ciudad Valles–, seis sicarios se tomaron su tiempo para recorrer en dos camionetas varios negocios de las calles principales: una carnicería, una refaccionaria, una tienda de materiales y hasta las instalaciones de la Cruz Roja, disparando con armas largas y arrojando granadas. Murieron siete personas: seis civiles y el comandante de Tránsito, Carlos Aguilar Méndez. Por lo menos cinco más quedaron heridas.

## 2011

Verónica Espinosa. ““Los Zetas” muestran el músculo”. *Proceso* número 1788, 6 febrero 2011. pp 15-17. <https://www.proceso.com.mx/262543/los-zetas-muestran-el-musculo-no-1788>

### ““Los Zetas” muestran el músculo”

En Zacatecas, un ataque de Los Zetas, para reafirmar su primacía ante el nuevo grupo del narco que se hace llamar Cárteles Unidos, contó el martes 1 con el escenario idóneo: la policía de los municipios está inerte y el gobierno priista del estado se la pasa quejándose del caos que le heredó Amalia García. Y el trabajo del Ejército y de las corporaciones federales es como la vida social de la capital zacatecana: ya no se ve.

ZACATECAS, ZAC.- El despliegue táctico que exhibió el crimen organizado la noche del martes 1 en la zona conurbada de la capital y el municipio de Guadalupe fue inédito en el estado: rebasó a las corporaciones policiacas y al Ejército, y dejó a los zacatecanos inmersos en la psicosis.

Durante casi cinco horas, entre las 20:00 del martes y la 1:00 del miércoles, grupos armados recorrieron la ciudad a bordo de vehículos, y a su paso fueron bloqueando la circulación para salir después por el camino a Cieneguillas, que pasa a un costado del centro penitenciario de igual nombre, del que se fugaron 53 reos con ayuda de Los Zetas en mayo de 2009.

El primer grupo se enfrentó con policías estatales en una plaza comercial que está a unos metros de la residencia del gobernador, Miguel Alonso Reyes, en el fraccionamiento Bonaterra, de acceso restringido por un enorme enrejado y por vigilantes.

A las puertas de la casa de Alonso Reyes –que andaba de gira oficial en Japón– hay una guardia permanente de dos patrullas con cuatro agentes policiacos. Éstos fueron los primeros que vieron el vehículo estacionado con hombres armados a un costado del acceso a la privada. Se desató la balacera.

De acuerdo con una versión extraoficial obtenida por Proceso, se trató de una demostración de fuerza de Los Zetas ante los retos que desde finales de diciembre de 2010 lanzó, mediante narcomensajes colocados en varios municipios, la nueva organización que se hace llamar Cárteles Unidos, que pretende desplazarlos del estado. En todo caso, los autores de los ataques siguieron tácticas similares a los narcobloqueos y atentados prácticamente simultáneos en Guadalajara y Monterrey.

Este efecto de la guerra federal contra el narcotráfico –la lucha de los grupos entre ellos– desató desde hace unas semanas, en los municipios del sur del estado, una ola de balaceras, secuestros, ejecuciones y levantones de policías municipales, que provocaron miedo y ahuyentaron a los trabajadores migrantes. El martes 1, el impacto llegó hasta la capital zacatecana y su zona conurbada.

Los mensajes atribuidos a Cárteles Unidos no dejan dudas: se dirigen a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca. Así se leyó en una narcomanta colocada el jueves 3 en Juchipila, municipio de la ahora peligrosa región de Los Cañones, en los límites con Aguascalientes y Jalisco:

Ustedes ya fueron testigos de la muerte y masacre de gente inocente que hicieron los Zetas. La guerra es con nosotros, Lazcano, no con las familias ni gente inocente. Pelea como los hombres. Atentamente cárteles unidos.

### **Inermes ante el narco**

El 23 de diciembre se realizó una posada en un galerón del municipio de Calera, con capacidad para 2 mil personas. Participaron habitantes de ese municipio al norte de la capital, así como de Jerez, Morelos, Pánuco y Fresnillo. El anfitrión: Heriberto Lazcano en persona.

La invitación corrió de boca en boca y el lugar se llenó. Los accesos a la ciudad fueron controlados por la organización de El Lazca y él repartió aguinaldos y regalos antes de retirarse con su gente.

El último día del año fueron colocadas varias mantas en localidades de Zacatecas y Nuevo León. En las de aquí se anunció la incursión de los Cárteles Unidos o Nueva Federación, cuyos integrantes, supuestamente decepcionados por “el comportamiento e ideologías” de la alianza anterior, conformada por los cárteles de Sinaloa y del Golfo con La Familia Michoacana, decidió encargarse de erradicar a Los Zetas de la entidad.

El 14 de enero, justo el día que se abatió una intensa balacera cerca de una clínica en la cabecera de Jalpa, en la fachada del Palacio Municipal fue colgada otra manta con una especie de manifiesto:

Comunicado a toda la ciudadanía:

No nos confundan con Zetas, nosotros no matamos niños, familias ni gente inocente, tampoco cobramos cuotas ni secuestramos, mucho menos venimos a pelear con el Gobierno, venimos a regresarle al Estado la paz y tranquilidad. Dénos la oportunidad de demostrarles que queremos cuidar la ciudadanía, venimos por Los Zetas, no por gente inocente. Ya estamos en todo el Estado... Ya basta de injusticias.

En entrevista con *Proceso*, el procurador Arturo Nahle García explica que la nueva organización delictiva ha dado muestras claras de su presencia en la región conocida como Los Cañones, que abarca ocho municipios del sur y sus colindancias con Jalisco y Aguascalientes, por lo que los gobiernos de las tres entidades decidieron convocar a sus equipos de seguridad a dos reuniones de coordinación, que se efectuaron el martes 1 y el jueves 3 en Guadalajara y en la capital aguascalentense.

En las últimas dos semanas fue levantado un número aún indeterminado de policías municipales de esta zona; algunos siguen desaparecidos, otros optaron por renunciar, dado que se sienten inermes ante la imparable expansión del crimen organizado.

El alcalde de la capital, el empresario priista Arnulfo Rodríguez Reyes, enfatiza la vocación preventiva de las policías municipales –“porque así nos lo marca la ley”– y confirma su situación: “No hay con qué enfrentar a esos criminales”.

En el operativo del martes 1, la policía de la capital zacatecana se limitó a patrullar algunos puntos y mantenerse comunicada con la policía estatal, la Federal Preventiva y el Ejército. En el vecino municipio de Guadalupe ni siquiera eso: los preventivos del turno y el director se encerraron, según contó un funcionario del estado a la reportera.

El presidente municipal Arnulfo Rodríguez exhibe las carencias que encontró en septiembre del año pasado, cuando asumió el cargo: se encontró con que sólo había ocho patrullas, de las cuales cuatro eran rentadas por la administración anterior (del PAN) y debieron entregarse. Además, dice, “no había balas, (sólo) unas pocas armas largas, sin patrullas. Y encontramos al municipio en quiebra, endeudado”.

Apenas se está adquiriendo equipo y capacitación. Pero ante el planteamiento que el gobierno del estado ya hizo para conformar el mando único de la policía, el alcalde expresa sus dudas: “No tenemos toda la información, no se han acercado a explicar los detalles; y si nos van a quitar el mando y tendremos que seguir pagando, pues eso sería violatorio de nuestra soberanía. Tenemos muchas dudas”.

Por otra parte, él también insiste –igual que el secretario de Gobierno, Esaú Hernández Herrera, y el procurador Nahle, entrevistados aparte– en que sin la ayuda federal no se puede: “Coordinación es la palabra clave”.

Rodríguez Reyes vivió en carne propia una persecución a su familia en 2009, cuando era diputado local y se enfrentó desde la tribuna con el gobierno de Amalia García al cuestionar su intención de darle un fin distinto al impuesto sobre la nómina que recaudaría el estado.

“En esos momentos, mi familia viajaba a Aguascalientes a un evento y comenzaron a perseguirla; llamaban a mi esposa y le decían que habían secuestrado a mi hijo. Afortunadamente, al entrar a Aguascalientes el gobernador nos apoyó y les dieron protección”, cuenta el alcalde.

Incluso tuvo que enviar a su esposa e hijos a Estados Unidos un tiempo. En el Congreso local señaló a la gobernadora como responsable en caso de que algo le sucediera a él o a su familia. Aquella presión, dice, “fue porque yo apretaba en tribuna al gobierno de Amalia García, y ellos actuaban de esa forma conmigo”.

Ahora, como presidente municipal, expresa su preocupación por la capacidad de reacción necesaria ante los grupos del narco y también por los problemas que implican para la imagen de la ciudad los bloqueos

y las balaceras de aquel martes. “Espero que las cosas cambien. Zacatecas ha sido siempre un estado tranquilo, (aunque) tenemos estos eventos que debemos de empezar a cambiar... Yo digo que no todo está perdido, algo se puede rescatar”.

No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Inseguridad, la percepción de la violencia por los zacatecanos se incrementó en ocho puntos entre marzo de 2009 y agosto de 2010. Los hechos difícilmente la desmentirán:

El jueves 3, en Jalpa y Juchipila, aparecieron nuevas mantas de Cárteles Unidos retando a Heriberto Lazcano. También se supo que el martes de los narcobloqueos fue secuestrado uno de los más importantes empresarios chileros de Fresnillo, Juan Carlos Guardado, quien fue alcalde interino en sustitución de David Monreal Ávila e integrante de su clan.

### **Desolación**

En la supuesta “exhibición” del crimen organizado el martes 1 en Zacatecas falleció un teniente coronel retirado que laboraba en la policía estatal y fueron heridos cinco agentes y dos civiles, entre éstos un menor de edad.

El único sospechoso detenido por estos ataques fue entregado a la delegación de la Procuraduría General de la República en el estado, cuya titular guardó el acostumbrado silencio. Al día siguiente, un sicario fue herido en el enfrentamiento junto a la casa del gobernador y murió al día siguiente.

En esta zona se ubican un edificio de consultorios médicos, una ludoteca y guardería infantil, oficinas de mensajería y otros establecimientos. En el pavimento quedaron manchas de sangre, parabrisas en añicos, casquillos y algunas armas largas; en las paredes, puertas y ventanas de los negocios, perforaciones de bala.

A lo largo de la avenida García Salinas, la vialidad principal que comunica a la capital zacatecana con el municipio de Guadalupe, esa primera noche de febrero, los automovilistas se fueron encontrando camionetas y autos compactos que fueron arrebatados a sus dueños para obstruir el paso a los vehículos de la policía estatal y del Ejército.

Para cualquiera que circulara por la avenida en esa hora pico –en la cual muchas personas que trabajan o estudian en la capital regresan a sus hogares en Guadalupe– era imposible evitar los bloqueos. En esa vialidad los comercios, las tiendas departamentales y los cines de un centro comercial alojaban aún a cientos de clientes, que estaban tirados en el piso, aterrorizados.

Al siguiente día, los habitantes de las dos ciudades se encerraron a piedra y lodo, no fueron a trabajar ni llevaron a sus hijos a la escuela. Si acaso, algunos acudieron a las oficinas unas pocas horas, hasta media tarde, cuando el pánico generalizado –que encontró su desahogo en redes virtuales como Facebook y Twitter– obligó a sus jefes y patrones a darles la salida.

El miércoles 2 no pasaban de las 15:00 horas cuando hasta el tradicional café Acrópolis, núcleo de la clase política en Zacatecas, había cerrado sus puertas, lo mismo que las tiendas Oxxo y Extra. Fue una tarde absolutamente desolada. “Es el grado mayor del miedo”, explicaba un psicólogo en la mañana del jueves 3, entrevistado en la radio local.

El gobierno estatal, con el gobernador Alonso Reyes ausente, no pudo atajar este efecto y quedó rebasado. No sólo le faltaron elementos e infraestructura para enfrentar al crimen organizado, sino que, sumido en la crisis que dice haber heredado de la administración anterior, también se vio abrumado por la superioridad informativa de las redes sociales en internet.

Apenas una semana atrás se había anunciado el arribo de efectivos de la Policía Federal Preventiva, a petición del gobernador Alonso Reyes, para vigilar las carreteras federales que atraviesan el territorio zacatecano, donde se dispararon los robos al autotransporte y los levantones.

Un avión de la PFP llegó, en efecto, al aeropuerto local, pero en vez de los 250 agentes de los que informaron los medios locales, el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, sólo envió a 70.

“Claro que no son suficientes. Es un primer acuerdo y vendrán más”, aseguró el secretario de gobierno, Esaú Hernández, entrevistado el martes 1, una hora antes de que se desencadenara la violencia en la capital y su zona conurbada.

En esos momentos se percibía tensión porque al mediodía se supo de la aparición de dos cartulinas con la advertencia de que la población se quedara en casa por la tarde. La existencia de estos mensajes siempre se negó oficialmente, pero en la conversación el secretario de Gobierno admitió la gravedad del problema:

“La presencia evidente de la delincuencia organizada en el estado, como se sabe, se constata a partir de 2006. Entonces debieron instrumentarse una serie de medidas que no se pudieron realizar o no se quisieron realizar. Y cuando se toma el gobierno en septiembre, era evidente que existía un problema que era necesario reconocer y atacar, con base en la prevención, los sistemas de inteligencia y la contención”, dijo el funcionario.

“Lo estamos reconociendo y estamos haciendo nuestra chamba”, agregó, aunque “partiendo de cero”, pues no se encontró un programa de seguridad estatal elaborado por el gobierno de Amalia García, y sí una policía estatal “con mecanismos de selección dudosos, insuficientes elementos, ineficaz para tener una red efectiva en el estado”.

A cambio, el secretario aceptó lo que horas más tarde quedaría plenamente corroborado: el gobierno va rezagado incluso respecto de la sociedad, que se avisa de las balaceras a través del Twitter y difunde sus versiones, ciertas o no.

“En la capital, todos los días recibimos llamadas con amenazas de bomba, todos los días. Sólo una vez encontramos un tubo con algo de material explosivo... y en la zona de Los Cañones sé de algunas localidades donde la gente procura recogerse a sus casas temprano, pero no es una recomendación gubernamental, sino la percepción de la ciudadanía.”

En una conferencia de prensa, el miércoles 2, el vocero gubernamental, Mario Caballero, acusó a un exfuncionario de la administración de Amalia García de hacer circular rumores en las redes sociales.

“Esto sí nos parte el queso”, le comentó a Proceso el procurador Arturo Nahle García el mismo miércoles. Después esta conferencia de prensa trató de frenar el brote de pánico que suscitó entre los zacatecanos la información compartida en las redes virtuales. Nahle se quejó de que había una “campaña

perversa” para generar psicosis, y aunque aseguró que no quería minimizar lo ocurrido, pidió: “Tampoco hay que magnificarlo”.

En el noticiario vespertino de la cadena radiofónica local *Stereo Plata* le llovieron reclamos de radioescuchas. “¿Usted me garantiza que puedo llevar a mi hijo a la escuela y no pasará nada? ¿Me lo garantiza?”, le preguntaron al funcionario.

El resto de la semana varias escuelas siguieron registrando un elevado ausentismo y algunas instituciones educativas privadas de plano acordaron con los padres de familia la suspensión de actividades, pese a que la Secretaría de Educación del estado amenazó sancionar a los planteles que incurrieran en ello.

Qué decir de la otrora dinámica vida nocturna en la capital estatal: de 2008 a la fecha, cuando se consolidó el dominio de Los Zetas, se fue reduciendo paulatinamente hasta quedar en su mínima expresión: cero.

Jesusa Cervantes. “Solución viable: “unificación pactada””. *Proceso* número 1791, 27 febrero 2011. pp 6-10. <https://www.proceso.com.mx/264105/solucion-viable-unificacion-pactada>

### **“Solución viable: “unificación pactada””**

Un reporte confidencial que el secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, leyó ante diputados y cuya copia tiene *Proceso*, revela que el narcotráfico ha infestado a todo México y que sólo es poco notorio en los estados donde cuenta con apoyo de las autoridades; anuncia una mayor narcoviencia contra funcionarios, policías y militares, y advierte que ésta puede disminuir si varios cárteles se unen para eliminar a Los Zetas, o bien si el gobierno mexicano obliga a los grupos criminales a una “unificación pactada”... Por vía de mientras, la disminución de las acciones criminales de los cárteles no se ve cercana.

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, “es previsible” que la “presión permanente” del Estado mexicano contra los cárteles de la droga no solamente podría ocasionar más violencia contra funcionarios, cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas, sino que los grupos criminales también podrían incrementar sus acciones de “cooptación” de las autoridades.

“Tras un repunte en la violencia —manifestó—, es factible que ésta disminuya considerablemente si la unión de los cárteles del Pacífico, del Golfo y La Familia Michoacana se consolida para eliminar al grupo de Los Zetas.”

Es igualmente viable, señaló Galván Galván, que la intensidad de la acción gubernamental obligue a la “unificación pactada” de los grupos criminales y que realicen sus actividades como antes, “sin violencia, en forma soterrada”.

Sin embargo, advirtió a los legisladores:

“Con base en la información que procesamos, resultaría temerario establecer una fecha en la que sea perceptible el punto de inflexión de las acciones criminales.”

De acuerdo con esta expresión, estaría lejano el momento en que las actividades criminales empiecen a disminuir.

Tales son algunos de los aspectos del análisis de la Secretaría de la Defensa Nacional que, bajo el título de Reporte confidencial (una copia del cual tiene Proceso), expuso el general Galván ante diputados federales en la segunda semana de septiembre del año pasado, luego de haber realizado con ellos otros dos encuentros para analizar la situación del crimen organizado.

A diputados de todos los partidos políticos (PRI, PAN, PRD, PVEM, PT, Convergencia y Panal) les pidió aprobar la Ley de Seguridad Nacional y les explicó cuáles son los grupos del crimen organizado en México, describió su perfil y expuso las alianzas y pugnas que existen entre ellos.

### **Perfiles**

Los encuentros del secretario de la Defensa Nacional con los diputados se han realizado desde 2009: el primero fue con integrantes de la legislatura pasada, el segundo se efectuó el 7 de abril de 2010 en las instalaciones de la Sedena, y el tercero tuvo lugar en septiembre pasado en el Heroico Colegio Militar.

Las dos últimas reuniones del general Galván con los miembros de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados se realizaron cuando ésta era presidida por Ardelio Vargas Fosado, actual secretario de Seguridad Pública de Puebla. (A partir del jueves 24 el presidente de dicha comisión es el también priista Rogelio Cerda.)

Fue justamente en el tercer encuentro con los legisladores cuando el general Galván les explicó que en la actualidad operan en México siete grandes organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico: los Arellano Félix, los Beltrán Leyva, los Carrillo Fuentes, Los Zetas, La Familia Michoacana y los cárteles del Golfo y del Pacífico.

Además, han surgido otros grupos de “carácter local” producto de las escisiones, reacomodos y alianzas de miembros de diferentes cárteles: Milenio, Pacífico Sur, Díaz Parada, Unidos de Jalisco o Los Torcidos, La Resistencia y La Sierra de Guerrero.

El secretario de la Defensa no sólo detalló las zonas del país donde opera cada grupo, sino que también destacó que mientras el cártel del Pacífico (conocido más como el cártel de Sinaloa), que dirige Joaquín El Chapo Guzmán, cuenta con una estructura bien definida y se dedica únicamente al negocio de la droga, Los Zetas van mucho más allá y emprenden cualquier negocio ilícito, como el secuestro y el cobro de piso, además de que son los más violentos y tienen presencia en todo el territorio nacional.

Antes de definir cada perfil de las organizaciones, el general Galván hizo una breve introducción para que los diputados entendieran cómo evolucionaron las bandas del narcotráfico en los últimos años y cómo se conectaron con las FARC, guerrilla colombiana, hasta extenderse por cuatro países centroamericanos y de Sudamérica.

“A finales de los noventa, tras el debilitamiento de las grandes organizaciones de narcotraficantes colombianas, las FARC asumieron el papel de ‘gran cártel colombiano’, continuando hasta la fecha con la coordinación para el tráfico de cocaína entre organizaciones mexicanas”, les dijo.

Y continuó: “Desde el año 2003, los cárteles mexicanos redimensionaron su rol en el contexto regional, fortaleciendo su participación e influencia en países de Centro y Sudamérica, revirtiendo los papeles de ‘subordinación’ al de ‘dirección’”.

Por lo menos así lo confirma “su presencia en áreas de producción de cocaína en Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Centroamérica para coordinar y controlar el transporte del estupefaciente”, precisó.

Lo que diferencia a cada uno de los siete cárteles “nacionales” –por llamarlos de alguna manera– y a los seis locales está en función de los “objetivos y la ambición de sus líderes por expandir sus áreas de influencia, inclusive aceptando alianzas de conveniencia”, planteó el general Galván.

Durante el encuentro, el secretario de la Defensa se apoyó en gráficas y mapas que mostraban las zonas de influencia de cada grupo, y expresó a los legisladores:

“La heterogeneidad de intereses y la superposición de espacios en que operan propicia desacuerdos entre sus principales integrantes, originando índices de violencia que han rebasado el ámbito de la seguridad pública, generando afectaciones serias a la seguridad interior.”

En este punto, el secretario de la Defensa emprendió ante los legisladores la lectura de una parte del Reporte confidencial que se refiere a los liderazgos y a las características de los grandes cárteles. Lo hizo en los siguientes términos:

#### **“Cártel del Pacífico**

“Líderes: Ismael Zambada García (a) El Mayo, Juan José Esparragoza Moreno (a) El Azul y Joaquín Guzmán Loera (a) El Chapo Guzmán.

“Única organización que cuenta con un liderazgo lineal, regionalizado y estructura de mando abiertamente identificada de corte tradicional.

“No realiza actividades de extorsión y secuestro.

“Por sistema evita la confrontación con las Fuerzas Armadas.

“Se inserta en la sociedad como benefactor, generando la llamada narco cultura.

#### **“Los Zetas**

“Líderes: Heriberto Lazcano Lazcano (a) El Lazca y Miguel Ángel Treviño Morales (a) El 40.

“Esta organización delictiva se ha convertido en el mayor riesgo a la seguridad interior por la radicalidad y alcance de las acciones que ha implementado contra las instituciones del Estado que no le son afines y por la falta de respeto a la vida de las personas.

“Es el cártel con mayor presencia en el territorio nacional y el responsable del mayor número de hechos violentos y de gran impacto social.

“De 805 agresiones registradas contra personal militar, 264 han sido por parte de sicarios de este grupo delictivo, lo cual representa el 33%.

“El despliegue de sus principales integrantes como jefes de plaza le permite mantener presencia en gran parte del país, teniendo como objetivo la expansión en todo el territorio nacional, donde controlan toda actividad ilícita que les reditúa recursos económicos.

“Cuenta con una organización tipo militar que hace respetar la disciplina a su interior por la violencia. Constantemente somete a sus integrantes a periodos de adiestramiento básico, los dota de armamento de gran poder y volumen de fuego.

#### **“Beltrán Leyva**

“Líderes: Héctor Beltrán Leyva (a) El H y Édgar Valdez Villarreal (a) La Barbie (detenido el 30 de agosto de 2010).

“Organización carente de una estructura sólida de liderazgo.

“Sus lugartenientes recurren a la violencia extrema para conservar su disciplina interna.

“Como medio alternativo de financiamiento realizan actividades de secuestro, extorsión y robo.

#### **“Carrillo Fuentes**

“Líder: Vicente Carrillo Fuentes (a) El Viceroy, de personalidad extremadamente violenta e intransigente y escasa capacidad de negociación.

“Utiliza como sicarios en Ciudad Juárez, además de miembros de su organización, pandillas locales a las que proporciona armamento, numerario y vehículos.

“La personalidad de su líder se caracteriza por su extrema violencia, tanto para imponer disciplina al interior de la organización como para amedrentar a sus enemigos.

#### **“Cártel del Golfo**

“Líderes: Jorge Eduardo Costilla Sánchez (a) El Cos y Ezequiel Cárdenas Guillén (a) Tony Tormenta (muerto por las Fuerzas Armadas, el 5 de noviembre de 2010).

“Organización de corte tradicional que mantiene el control del estado de Tamaulipas.

“Para identificarse entre ellos emplean distintivos de carácter militar en su persona y medios de transporte.

“Evitan enfrentarse en lo general con las Fuerzas Armadas.

#### **“Familia Michoacana**

“Líderes: Nazario Moreno González (a) El Chayo (muerto el 9 de diciembre de 2010 por las Fuerzas Armadas) y Jesús Méndez Vargas (a) El Chango.

“Organización de corte radical, fundamentalista; emplea el factor religioso para reclutar y adoctrinar a sus miembros.

“En varios municipios ha logrado desplazar a la autoridad legalmente constituida, estableciendo cuotas por los supuestos servicios que brinda a la colectividad.

“Se ha convertido en la principal empresa productora de drogas sintéticas.

**“Arellano Félix**

“Líder: Fernando Sánchez Arellano (a) El Ingeniero.

“Estructura empresarial familiar; parte de su fuente de financiamiento es producto de recursos provenientes por cobro de derecho de piso.

“De las siete organizaciones criminales se considera la más débil.”

Mientras el general Galván iba detallando las características de los grupos, se apoyaba en mapas que establecían su área de penetración y luego puntualizó las rivalidades entre ellos:

–El cártel del Pacífico se enfrenta con los Carrillo Fuentes y los Beltrán Leyva (en la escisión que encabeza Héctor Beltrán Leyva.)

–La Familia Michoacana mantiene una lucha contra el cártel Beltrán Leyva (escisión que tenía a la cabeza a Édgar Valdez Villarreal).

–Los Zetas están confrontados con el cártel del Golfo y el del Pacífico.

–El cártel de Beltrán Leyva (escisión La Barbie) tenía pleito con la escisión que representaba Héctor Beltrán Leyva.

Finalmente, el general Galván dijo que los Arellano Félix no están permanentemente confrontados con ningún grupo.

**Las alianzas**

Respecto de las alianzas, el secretario de la Defensa manifestó a los legisladores que el cártel del Pacífico y los Arellano Félix tienen un acuerdo con el cártel del Golfo, en tanto que el grupo de Carrillo Fuentes está aliado con los Beltrán Leyva y Los Zetas.

Y para “ilustrar” la afirmación de que las acciones violentas afectan ya la seguridad interior del país, el general Galván dijo que, por lo que se refiere a la autoridad civil, estos grupos criminales han cometido ataques contra tres funcionarios federales, 18 estatales, 18 alcaldes y otros 26 ediles, además de realizar dos agresiones contra instalaciones diplomáticas (Monterrey y Nuevo Laredo) y otras dos contra personal consular de Estados Unidos. (Esto, antes de que se registrara el ataque a dos oficiales de Aduanas de Estados Unidos en San Luis Potosí, en donde Jaime Zapata murió y Víctor Ávila resultó herido.)

El general Galván precisó también que hasta septiembre de 2010 se habían producido mil 343 ataques contra personal de seguridad pública, con un saldo de mil 481 muertos y mil 46 heridos.

En cuanto al personal militar, el general mencionó 805 agresiones, principalmente en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. El resultado:

81 militares muertos y 370 heridos, contra 870 muertos y 190 heridos de los cárteles, además de 25 mil 279 detenidos y 66 mil 72 armas aseguradas.

En su exposición, el titular de la Sedena externó algo que fue considerado “terrible” por los legisladores: “Actualmente no existe una entidad de la República Mexicana exenta de manifestaciones delictivas derivadas del narcotráfico”.

Les explicó que el control del territorio se convirtió en el primer gran objetivo de los cárteles para mantener la hegemonía en áreas de producción, almacenamiento, distribución y rutas de trasiego hacia centros de consumo de México y otros países.

La disputa por el territorio y la negativa a pagar derecho de piso o a subordinarse entre ellos “fue el detonador de la actual violencia”, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Durango, Guerrero, Morelos y Michoacán, les dijo el general.

“Existen estados como Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, que no son escenarios de un escalamiento de actos violentos”, lo que se debe a que en tales estados “tiene pleno dominio una sola organización delictiva, reflejando una falsa imagen de estabilidad, toda vez que es donde la sociedad soporta en silencio las exigencias y la presencia de los narcos con la complicidad de la autoridad.”

El secretario sostuvo que, ante las acciones del Estado, los cárteles “recurrieron a la penetración de las estructuras política, económica, de seguridad y a un manejo activo o pasivo de los medios de comunicación, mediante sobornos o amenazas”.

En la sección analítica de su diagnóstico, bajo el título de “Prospectiva”, el documento del secretario de la Defensa expone:

“Ante la aplicación de la presión permanente que ejerce el Estado sobre las estructuras operativa y logística de la delincuencia organizada, es previsible que ésta incremente gradualmente acciones de:

“Cooptación a miembros de instituciones de seguridad pública.

“Violencia contra funcionarios gubernamentales de seguridad locales, federales y fuerzas armadas.

“Posicionamiento de áreas donde existe una reducida presencia de autoridades federales en búsqueda de libertad para continuar sus actividades ilícitas.

“Tras un repunte de la violencia, es factible que ésta disminuya considerablemente si la unión de los cárteles del Pacífico, el Golfo y La Familia Michoacana se consolida para eliminar al grupo de Los Zetas.

“De igual manera podría resultar viable que la intensidad de la acción gubernamental obligue a su unificación pactada y que realicen sus actividades sin violencia, en forma soterrada.

“Con base en la información que procesamos resultaría temerario establecer una fecha en la que sea perceptible el punto de inflexión de las acciones criminales.”

El documento señala que tal circunstancia podría producirse en el mediano plazo sólo si se establece una serie de medidas y proyectos, como las reformas a la ley de seguridad nacional, la ley contra el terrorismo y el lavado de dinero, la iniciativa de policía única, entre otros.

Esto, además de concretar y poner en práctica el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y Legalidad que se firmó el 21 de agosto de 2008.

Ricardo Ravelo. “Los cárteles, más fuertes que nunca”. *Proceso* número 1791, 27 febrero 2011. pp 10-13. <https://www.proceso.com.mx/264106/los-carteles-mas-fuertes-que-nunca>

### **“Los cárteles, más fuertes que nunca”**

Compatible con el diagnóstico que presentó la Sedena ante los diputados, el mapa del narcotráfico se reconfigura con el cártel de Sinaloa a la cabeza. Pese a los embates de las fuerzas federales, los cárteles de la droga que operan en México parecen estar más fuertes que nunca, según otros documentos oficiales consultados por Proceso. Hoy, cuatro años después de que el presidente Felipe Calderón emprendió la guerra contra el crimen organizado, han irrumpido en la escena organizaciones que antes eran de bajo perfil, como La Familia Michoacana, que tiene presencia en 12 entidades del país, además de Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

La guerra contra el narcotráfico iniciada por la administración calderonista hace poco más de cuatro años sólo ha servido para que los cárteles mexicanos refuercen sus estructuras y tejan alianzas, pero sobre todo para que extiendan sus dominios en todo el territorio nacional. Hoy, las propias autoridades admiten que han fracasado en su intento por frenar la escalada de violencia.

A 22 meses de que concluya la presente administración, inmersa en la guerra contra el narcotráfico, los cárteles controlan ya 71% de los municipios del país, según el estudio realizado por el Senado a finales de 2010 (Proceso 1773).

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, quien lleva 10 años al frente de las tareas de seguridad, reconoció el martes 1 de febrero, ante los integrantes de la Primera Comisión de la Cámara de Diputados, que el gobierno federal no ha podido consolidar una política de Estado para combatir el crimen organizado.

Las declaraciones del funcionario contrastan con las del propio Calderón, quien poco antes negó que los cárteles estén operando al amparo de la protección de funcionarios municipales, estatales y aun federales. Según García Luna, el gobierno realiza una revisión en las corporaciones policiacas para combatir a los llamados “infiltrados en el Estado”, aunque se abstuvo de mencionar nombres.

### **Las mil cabezas del narco**

El despliegue del Ejército y de la Policía Federal a lo largo del país para combatir el crimen organizado ha sido infructuoso, pues la violencia no cesa. Además, el tráfico de drogas no sólo permanece intacto, sino que los cárteles se han fortalecido mediante alianzas estratégicas.

Estudios oficiales, como Información sobre el fenómeno delictivo en México, patrocinado por la Presidencia de la República y aún no divulgado, y Radiografía de los cárteles mexicanos, de la SSP,

consultados por este semanario, dan cuenta de la expansión de los grupos criminales dentro y fuera del territorio nacional.

Y aun cuando el gobierno ha descabezado a varias organizaciones, ninguna de ellas ha sido exterminada. Las cabezas cortadas fueron reemplazadas de inmediato. No sólo eso, en los últimos años surgieron nuevas organizaciones: el cártel del Pacífico Sur, La Resistencia y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La primera surgió en diciembre de 2009 tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes. Según la SSP, ese cártel actúa en Guerrero, Morelos, Michoacán y Jalisco, zonas que durante años dominaron los hermanos Beltrán Leyva. Sus primeros ajustes de cuentas en Guerrero y Morelos fueron publicitados por medio de narcomantas y carteles, que adherían a los cuerpos de sus víctimas.

En cuanto a La Resistencia –también llamada la Triple Alianza–, las autoridades federales sostienen que se trata de un grupo ligado al cártel de Sinaloa y que reúne a miembros de La Familia Michoacana, del cártel del Golfo y de los restos de la organización de los hermanos Valencia Cornelio.

El CJNG, que irrumpió recién el año pasado, se sabe que está formado por los operadores de Ignacio Nacho Coronel, ejecutado por marinos en julio pasado durante un operativo en Zapopan, Jalisco. Desde la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, en la entidad no había una organización que controlara el trasiego de drogas.

Este cártel y La Resistencia pelean por apropiarse de este territorio, al que llegan grandes cantidades de precursores químicos que después son trasladadas a laboratorios de Michoacán, Guerrero, Estado de México y Distrito Federal para la elaboración de drogas sintéticas.

Ambas organizaciones surgieron en el complejo turístico Paradise Village de Puerto Vallarta a principios de 2010, luego de la ejecución de Alejandro Coronel, hijo de Nacho Coronel, quien operaba para el cártel de Sinaloa, a manos de presuntos sicarios de Los Zetas.

Desde antes del asesinato de Alejandro, la posición de su padre comenzó a debilitarse. No era bien visto por los integrantes del cártel de Sinaloa por su cercanía con otros grupos, como el cártel del Golfo. Al ser abatido por los marinos, la plaza de Jalisco se quedó sin jefe. De inmediato irrumpieron La Resistencia y el CJNG, que ahora pugnan por dominar no sólo Jalisco, sino también Nayarit y Colima.

Según informes de inteligencia, el CJNG es dirigido por narcos de Durango, Sinaloa, Tamaulipas y Estado de México, cuyas edades oscilan entre 25 y 35 años y poseen mansiones en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Juanacatlán y El Salto. Son ellos los que enfrentan a las células de La Resistencia, que provienen de los cárteles de Sinaloa, La Familia Michoacana, el cártel del Golfo y lo que queda de la organización de los hermanos Valencia Cornelio.

“Son extremadamente violentos, se conoce que utilizan tácticas terroristas para infundir miedo. Manejan todo tipo de drogas y cuentan con armamento de alto poder, lo que los hace sumamente peligrosos”, según el perfil elaborado por la SSP.

### **Una “Familia” robusta**

Diversas fuentes dan cuenta de que en Michoacán, Morelos, Jalisco y Guerrero otro cártel da muestras de expansión y fortaleza: La Familia Michoacana.

Esta organización surgió en Michoacán entre 2005 y 2006, tras las divisiones entre el cártel del Golfo y Los Zetas, liderada por Nazario Moreno González, conocido como El Chayo, El Doctor o El Más Loco, quien, según las autoridades, murió en diciembre último durante un enfrentamiento con el Ejército.

En esa ocasión, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, declaró: “Es un hecho el debilitamiento y repliegue de esa organización delictiva, y por las acciones emprendidas seguirán cayendo otros de sus líderes y operadores financieros, ya que ese es el compromiso de las autoridades con los michoacanos”.

Sin embargo, declaraciones de testigos contenidas en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/018/2010 dan cuenta de la expansión de ese cártel dentro y fuera de México. Tras la presunta muerte de Nazario Moreno, por ejemplo, La Familia Michoacana dio muestras de su dinamismo. Por principio, Jesús Méndez Vargas, El Chango, asumió el liderazgo y fueron reemplazados los mandos caídos o asesinados.

El documento contiene los testimonios de los testigos protegidos Carlos y Emilio, quienes afirman que La Familia Michoacana amplió sus operaciones criminales en los últimos cuatro años y que hoy está bien posicionada en por lo menos 12 estados.

La tierra natal de Nazario Moreno, Apatzingán, sigue siendo la base de operaciones del grupo y en la actualidad tiene presencia en Guerrero, Colima, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas, Sonora y Baja California.

El año pasado, al ser capturado Arnoldo Rueda Medina, La Minsa, su principal operador, la organización tuvo que reestructurarse. Servando Gómez Martínez, La Tuta, comenzó a tomar el control, hasta convertirse en el coordinador de todas las plazas donde está afincada La Familia Michoacana, según declaró Emilio.

El testigo protegido refiere que cuando algún miembro del cártel muere o es detenido, el más cercano a esa posición cubre la vacante. Así sucedió tras el arresto de La Minsa. Su lugar fue ocupado por La Tuta, quien estaba al frente de las plazas de Lázaro Cárdenas y Arteaga y había tomado decisiones importantes.

El organigrama de La Familia Michoacana permite conocer su nivel de organización y el crecimiento que ha mostrado en los últimos cinco años. Debajo de La Tuta está Enrique Plancarte, El Kike, quien se encarga de la contabilidad y administración de los bienes de la empresa criminal; además, es él quien adquiere la cocaína directamente a los narcos colombianos.

Según el testimonio de Emilio, las tareas del Kike no terminan ahí. Él coordina también a los contadores del cártel y es el responsable de operar los embarques de droga a Estados Unidos. El declarante asegura que La Familia Michoacana trafica cocaína, crystal, ice, heroína, mariguana y toda la variedad de drogas sintéticas.

Otra de las piezas clave de la organización es Juan Reza Sánchez, Juanito, considerado brazo derecho de El Chango Méndez. Es reconocido como consejero y artífice de las operaciones logísticas, y se hace acompañar de un gatillero conocido como El Alacrán.

Aunque el gobierno sostiene que La Familia Michoacana está debilitada, lo cierto es que aún tiene jefes en todas las plazas del estado. En Lázaro Cárdenas el encargado es un hombre a quien llaman El Chamuco. En Carácuaro está al frente Jorge Fuentes Maldonado, El Rojo; en Caleta de Ocampo, El Moreno es el líder.

Hilario López Morales, El Gato, coordina Zitácuaro, Benito Juárez, Tuxpan, Jungapeo y Susupuato. En Lombardía e Infiernillo la cabeza es un sujeto apodado El Chivas, familiar de El Chango Méndez; mientras que Aguililla y Nueva Italia están en manos de La Estrella.

Uruapan está bajo control de un empresario aguacatero de apellido Ortega; Tuzantla es el feudo de Horacio Morales; Nocupétaro es dominio del H-10; en Ciudad Hidalgo, Maravatío, Aporo, Tlapojahuac y Epitacio Huerta es Omar Tafoya, El Gori, quien domina el territorio.

Fuera de Michoacán La Familia también tiene representantes: en Guanajuato el jefe es Ramón Moreno Madrigal, El Llaverero; en Guerrero era Rogaciano Alba, Don Roga, quien antes de su detención operaba con apoyo militar; en Sonora, el jefe de plaza es El Tinaco Morales, aunque en esa entidad La Familia Michoacana trabaja en alianza con el cártel de Sinaloa.

Otro sujeto conocido como El Conta es jefe de plaza en el Estado de México, donde, según los datos confirmados por Proceso, operan unas 80 personas de esa organización criminal; en Querétaro, el representante es El Rivas.

Los dominios de La Familia Michoacana también se extienden a Guatemala. En ese país centroamericano el jefe es un guerrerense conocido como El Paisano. Según su ficha criminal, él es responsable de enviar droga hasta la frontera con Chiapas, desde donde se mueve con protección policiaca.

### **La repartición del mapa**

Pese a la movilidad militar y policiaca y al empeño de Felipe Calderón de mantener la lucha contra el crimen como principal eje de su gobierno, los cárteles se mantienen firmes, no obstante las bajas de los últimos meses.

El del Golfo, por ejemplo, sigue funcionando en 10 estados pese a la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, abatido en Tamaulipas en noviembre pasado por efectivos de la Marina. El grupo opera bajo las órdenes de Eduardo Costilla Sánchez, El Cos, quien entró en negociaciones con La Familia Michoacana desde que la encabezaba Nazario Moreno.

El Chayo era un viejo conocido de Costilla Sánchez. De hecho, Moreno entró al negocio del narcotráfico por medio de Carlos Rosales, Carlitos, un operador del cártel del Golfo en Michoacán que hoy se encuentra preso, e inició su carrera en Tamaulipas.

Tras sellarse la alianza entre los cárteles del Golfo y La Familia, ésta comenzó a operar el tráfico de drogas a través de Tamaulipas, lo que enojó a Los Zetas y a su líder, Heriberto Lazcano, El Lazca, quienes terminaron por romper con el cártel del Golfo y consolidaron su propia organización.

Los Zetas son tan fuertes que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) los considera una amenaza para la seguridad nacional de su país, pues han detectado su presencia en todo el Valle de Texas.

En México ese grupo tiene presencia en 10 estados, entre ellos Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Según el mapa del narcotráfico mexicano, el cual está reforzado con información de la SSP, la principal organización que opera en México es el cártel de Sinaloa, cuya fuerza creció al aliarse con el cártel del Golfo, La Familia Michoacana y La Resistencia. Otro bloque lo integran Los Zetas, el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez y el cártel del Pacífico Sur. Hasta el momento, el CJNG trabaja de manera independiente.

Llama la atención el poder creciente del cártel de Sinaloa pese a los embates del gobierno. La organización que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, es vista por la firma estadounidense Stratfor como un grupo criminal que pronto podría dominar el negocio del narcotráfico en el mundo.

Para la principal consultora estadounidense en temas de seguridad, el cártel de Sinaloa “puede convertirse en la entidad dominante del crimen organizado. Pese a tener muchos enemigos, como Los Zetas, tiene una ventaja: cada una de sus piezas controla una ruta diferente”.

Ese grupo criminal está presente en gran parte de la frontera con Estados Unidos, desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, en una franja que limita con California, Arizona, Nuevo México y Texas.

En el crimen organizado hay una máxima: el que controla la frontera domina el negocio. En esa lógica, el cártel de Sinaloa no parece tener enemigos.

Verónica Espinosa. “La extraña emboscada en la carretera 57”. **Proceso** número 1791, 27 febrero 2011. pp 14-17. <https://www.proceso.com.mx/264107/la-extrana-emboscada-en-la-carretera-57>

### “La extraña emboscada en la carretera 57”

Algo extraño sucedió el lunes 14 en un tramo carretero de San Luis Potosí: se reportó un tiroteo con heridos, pero los policías que acudieron sólo hallaron un auto incendiado... Justo en ese lugar, parte de la carretera 57, fueron emboscados al día siguiente los agentes estadounidenses Víctor Ávila y Jaime Zapata, presuntamente por una célula de Los Zetas. Aún más insólito: ahí donde ni las corporaciones federales ni las estatales pueden contener la creciente ola de violencia que ya cobró decenas de muertos, los presuntos asesinos de los agentes fueron detenidos y presentados en menos de una semana.

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. - El Ejército Mexicano y la Policía Federal atendieron de inmediato los reclamos del gobierno de Estados Unidos por el ataque a dos agentes de su servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ambas corporaciones han sido incapaces de parar la ola de violencia que desató la guerra de los cárteles en San Luis Potosí, pero en cinco días dieron con los presuntos responsables de la emboscada del martes 15 en la carretera 57.

En San Luis Potosí se enfrentan Los Zetas, que actualmente controlan el territorio, y los cárteles de Sinaloa y del Golfo, aliados bajo la denominación de “cárteles unidos” (Proceso 1782). Las tres

organizaciones delictivas multiplican desde finales del año pasado ejecuciones, levantones, secuestros y ataques a policías municipales y federales, desde la Huasteca hasta la capital y los límites con Zacatecas.

En este agitado escenario se suscitó la supuesta confusión por la cual una célula de Los Zetas, encabezada por Julián Zapata Espinoza, El Piolín, atacó a los agentes aduanales estadounidenses Jaime Zapata y Víctor Ávila, matando al primero, según la versión que cinco días después de los hechos ofrecieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) al presentar a los detenidos.

Todo cuadró en la investigación, que duró menos de una semana: al autor del ataque se le vinculó con Jesús Rejón Aguilar, El Mamito, alto mando de Los Zetas que estuvo a punto de ser capturado en un operativo militar en las Suites Tame del bulevar Carranza de la capital potosina, a principios de diciembre pasado (Proceso 1782), donde cayó preso uno de sus allegados: Javier Robledo Hernández, El Compu.

Rejón Aguilar fue señalado por los “cárteles unidos” como responsable de la emboscada a los agentes del ICE, en un mensaje que llegó a las redacciones de algunos diarios texanos y a páginas electrónicas dedicadas a difundir las actividades del narco.

Cuando fue informado del ataque, el gobernador Fernando Toranzo viajó de urgencia a la Ciudad de México para responsabilizar a las mafias del narcotráfico y protestó débilmente por la alerta de seguridad emitida en el Consulado de Estados Unidos en Monterrey.

Enseguida volvió a su mutismo normal. De hecho, la agenda del gobernador ya no es pública desde hace tiempo y por lo tanto no se distribuye a los medios. Además, incrementó su dispositivo de seguridad: nunca sale sin su camioneta blindada, acompañado de unos 15 escoltas en tres camionetas y una patrulla de la Policía Estatal.

El lunes 14, unas 24 horas antes del ataque a los agentes estadounidenses, llegó a la Secretaría de Seguridad estatal el reporte de que afuera de un restaurante llamado JL había un tiroteo, heridos y un auto incendiado. El negocio está en la carretera 57, cerca de la entrada a Santa María del Río, a unos 45 kilómetros de la capital potosina.

Los policías que acudieron ahí encontraron el vehículo, que tenía reporte de robo. Ni cuerpos ni balas.

Al día siguiente, alrededor de las 14:00 horas, en el mismo punto se había consumado ya la emboscada, en un presunto retén de hombres uniformados como policías federales. Ahí quedó la camioneta blindada con numerosos disparos: Adentro estaban heridos los agentes Ávila y Zapata.

Primero se creyó que el objetivo del atentado era el cónsul estadounidense en Monterrey, Nace Crawford, quien días antes visitó la entidad con representantes de la Asociación de Estados Americanos con oficinas en México (Asom) para una reunión de trabajo con empresarios potosinos y con el gobernador Fernando Toranzo.

Reporteros de la fuente y funcionarios estatales pensaron que la víctima era el coordinador de la Policía Federal Preventiva en San Luis Potosí, Manelich Castilla Craviotto, quien utiliza una camioneta idéntica a la que llevaban los agentes estadounidenses.

Casi de inmediato la Policía Federal cercó la escena del crimen hasta entrada la noche, e impidió acercarse a fotógrafos y camarógrafos, con los cuales hubo altercados. Una fuente del gobierno estatal confirmó que durante ese periodo el hijo del presidente municipal de Santa María del Río chocó contra varias de las patrullas que permanecían en el lugar.

Jaime Zapata murió en el Hospital de la Salud, adonde llegó con un paro cardiorrespiratorio. Llevaba cinco disparos en el abdomen y extremidades inferiores, según dijo el doctor Félix Hernández, director del nosocomio. Ávila sufrió heridas de bala en la pierna derecha y la parte baja del abdomen.

La captura de los zetas se produjo con gran rapidez, luego de que la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, dijo que los responsables del ataque “enfrentarían la justicia” y que las autoridades mexicanas tendrían el apoyo del FBI.

El ataque a los agentes caló hondo, tanto, que agencias estadounidenses como la DEA, la ATF, el ICE y el FBI llevaron a cabo una serie de redadas en varias ciudades de Estados Unidos entre el miércoles 23 y el viernes 25, que culminó con la detención de cientos de “operadores de cárteles mexicanos”. En el primer golpe se habló de 500 capturados, cifra que fue aumentando en los días siguientes. La DEA aclaró que esta gran operación era una “respuesta al asesinato en México del agente Jaime Zapata”, y el ICE denominó a su operativo Héroe Caído.

En contraste, los mandos de las corporaciones estatales fueron los últimos en enterarse de lo ocurrido y después se quedaron al margen del traslado de los agentes al sanatorio local y al Hospital de la Salud, para luego ser trasladados en un pequeño helicóptero policiaco federal a la Ciudad de México.

Nada supieron tampoco sobre el arribo del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, para hacerse cargo de las primeras pesquisas y de recibir a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, y mucho menos de la vertiginosa investigación y los supuestos operativos que culminaron con la detención de los presuntos responsables.

Incluso enmudecieron las redes sociales, cuyos usuarios suelen detallar cualquier movilización policiaca. Una vez que se anunció la detención de los inculpados, aparecieron las normales expresiones de incredulidad y de burla.

Únicamente los vecinos de colonias de la capital potosina, como Sarabia y Bulevar Río Española, se percataron de los cateos que efectuaron militares el martes 22 y miércoles 23 en por lo menos cinco domicilios, durante los cuales las autoridades dicen haber detenido a El Piolín y sus cómplices, incluyendo a su esposa, quienes fueron presentados con evidentes huellas de una golpiza.

El Piolín ya había sido detenido por delincuencia organizada en diciembre de 2009. Fue liberado por un juez de distrito, quien responsabilizó al Ministerio Público federal por no aportar suficientes elementos para procesarlo. En aquella ocasión, en Río Verde, a ese individuo se le encontró con otras personas en posesión de vehículos blindados, armamento y uniformes de la Agencia Federal de Investigación y de la Policía Federal. Justo la vestimenta que, se ha difundido, utilizaban los atacantes de los agentes del ICE.

En la presentación de los supuestos asesinos se indicó que El Piolín era el cabecilla de la célula y colaborador directo de El Tato, conocido en estos rumbos como El Caballo Loco y quien controla esta plaza desde que Heriberto Lazcano Lazcano le quitó el cargo al Cachorro, a principios de este año.

Información allegada a Proceso por fuentes que no autorizaron revelar su identidad detalla que en realidad Zapata Espinoza, de 29 años y originario de San Luis, se encargaba de la nómina de funcionarios y policías estatales que colaboran con Los Zetas, por lo que es bienconocido entre ellos.

El Piolín vivía en Charcas, municipio del noroeste del estado, y antes de ser consignado ante la PGR en 2009 estuvo involucrado en otra averiguación del fuero común por lesiones.

### **Desconfianza**

A finales del año pasado, el comandante de la XII Zona Militar, el general Arturo Gutiérrez, se reunió con un grupo de líderes empresariales para exponerles sin rodeos el panorama de inseguridad en el estado, ya que no podía pasar inadvertida la feroz lucha de cárteles.

“Quién sabe cómo terminará esto”, dijo el general, y ofreció una lista de recomendaciones para que sus oyentes las aplicaran en su rutina diaria, como cambiar de vehículos y bajar su perfil público. Otro consejo llamó la atención de los empresarios: “No confíen en nadie que no sea de las corporaciones federales”. Recientemente, personal de la Zona Militar había comenzado a impartir entrenamiento táctico a un reducido grupo de la Secretaría de Seguridad del estado a fin de crear un cuerpo especial denominado Grupo Confianza, cualidad que hace falta en esa dependencia, según los datos de la Zona Militar.

Después se supo que algunos de esos policías con entrenamiento especial estaban entre los 14 que fueron detenidos por la Policía Federal y el Ejército el martes 22, en la capital potosina, acusados de ejercicio indebido de la función pública y deslealtad, este último delito tipificado como grave en una reforma recientemente aprobada por el Congreso del estado.

Para el jueves 24 sólo seis de esos 14 agentes estatales permanecían detenidos. El procurador del estado, Cándido Ochoa, detalló que esos policías interceptaron un vehículo con reporte de robo y, después de hacer una llamada telefónica (a alguien cuyo nombre no reveló), dejaron ir a los tripulantes en el auto. Esto quedó registrado en cámaras de vigilancia. “Los que se quedan detenidos (es porque) son informantes; nosotros ya terminamos la investigación, ahora son procesados por deslealtad”, dijo el procurador.

En diciembre pasado, el presidente municipal de Cerritos, Erasmo Galván Prieto, admitió en una conversación telefónica con la reportera de Proceso que varios de sus policías “seguramente están en las nóminas de ellos” (los narcos). “Hemos cambiado a varios policías; algunos por extorsión... pero no es mucho lo que podemos hacer. Llegan nuevos elementos y de inmediato les dirán que le entran o le entran. Es el cuento de nunca acabar, yo creo que no hay municipio que se escape”.

Este mes se desencadenó en la Huasteca potosina –la “mini Tamaulipas”, como la calificó un reportero local– una arremetida contra los policías municipales, en lo que se interpreta como una represalia del cártel del Golfo por los compromisos de estas corporaciones con Los Zetas.

En Ciudad del Maíz, municipio de la Huasteca colindante con Tamaulipas, el 17 de diciembre pasado un comando recorrió las calles de la cabecera municipal disparando contra varios negocios y acabó acribillando las instalaciones de la Cruz Roja para impedir cualquier posibilidad de atención a los heridos que dejaba a su paso (Proceso 1782)

Posteriormente, varias comandancias de la zona fueron atacadas, unas con cientos de disparos y otras a granadazos. Fueron los casos de Ébano, Tamuín y San Vicente Tancualayab, en la frontera con Tamaulipas y Veracruz, así como el de Tamasopo, en el sureste del estado. Al menos en dos ocasiones los atacantes arrojaron cadáveres de personas a las que habían levantado en la misma zona.

A partir de esos acontecimientos se confirmó que varios alcaldes de la Huasteca ya no despachan en las oficinas y eliminaron su agenda pública: no aparecen en inauguraciones o ceremonias de ningún tipo. Otros despachan sólo unos días de la semana o lo hacen en domicilios particulares. Algunos de plano dejaron de residir en el municipio que gobiernan.

Por esos días Manuel Alvear, presidente municipal de Ébano, dijo a los reporteros que se mudó a la capital del estado y que sus policías no utilizan armas porque no tienen el permiso federal necesario, situación que prevalece desde hace dos trienios.

El miércoles 2, unos días antes de la emboscada a los dos agentes del ICE, la región cañera de Ciudad Valles y sus alrededores se conmocionaron al enterarse del secuestro de Federico Safi Chagnón, de 70 años. El reconocido dirigente empresarial (y primo hermano del presidente del Consejo Mundial de Boxeo, José Sulaimán) fue sacado violentamente de su residencia, en la céntrica colonia Mirador, por hombres armados.

De inmediato se vinculó este secuestro con la sistemática extorsión que Los Zetas cometen con los cañeros de la zona, pues Chagnón era propietario de unas 5 mil hectáreas de ese cultivo. Su cuerpo apareció en una fosa cercana al río Valles, en Ciudad Valles, el martes 14, justo el día de la emboscada a los agentes estadounidenses.

La identidad del empresario fue confirmada el viernes 18 por el procurador Ochoa y el gobernador Toranzo, después de la Reunión Regional de Gobernadores en la capital potosina. El domingo 20, en el periódico El Universal, José Sulaimán publicó una nota sobre la muerte de su primo:

“Las familias Safi Chagnón y Sulaimán pasan por momentos de profunda tristeza, consternación e indignación. Federico Safi Chagnón era un buen hombre, conocido por su corazón compasivo y siempre sirviendo con gusto a los demás, un ciudadano muy respetado en su tierra natal, Ciudad Valles, San Luis Potosí, en donde siempre estudió, trabajó, triunfó y vivió todo el tiempo con modestia y cariño a la Huasteca potosina y a su querida patria México.

“Algunos vinieron a desposeerlo de lo que ganó durante toda una vida de arduo trabajo, honestidad, y se llevaron también su vida... Somos gente de bien, de paz, que no hacemos mal a nadie, dedicados al trabajo honrado, de permanentes esfuerzos y de servicio a los demás para pagarle a México lo que nuestro país hizo por nuestros queridos padres... por ello, es nuestra consternación.”

El viernes 4, horas después de que el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, llegó a la capital de San Luis para reunirse con el Consejo Estatal de Seguridad, en el centro de la ciudad culminó una persecución a tiros entre agentes de la Policía Federal y sicarios, que había comenzado en la carretera a Matehuala.

Decenas de automovilistas que circulaban por la carretera 57 para regresar a sus hogares apenas alcanzaron a tirarse al piso para protegerse mientras pasaban las camionetas de los gatilleros y las patrullas federales. El enfrentamiento ocurrió finalmente a la altura del bulevar Valentín Amador.

En la plaza Fundadores, el gobernador Toranzo encabezaba la inauguración de la edición anual del Festival del Café, que fue apresurada por su equipo de seguridad en cuanto se enteró de que la movilización se dirigía a calles aledañas a este sitio y a la Plaza de Armas, donde se ubican el Palacio de Gobierno y la sede del Congreso.

Toranzo fue retirado por sus escoltas en unos minutos, junto con un representante del gobierno cubano. Detrás de él, los expositores cerraron sus carpas y reaparecieron hasta el día siguiente.

Este operativo terminó con la incursión de militares en una bodega (presuntamente a cargo del grupo que era perseguido) localizada en el mercado República, también en la zona centro de la ciudad. Para las 20:00 horas, el tránsito vehicular estaba abierto nuevamente en el primer cuadro, pero ya nadie se animó a salir, sobre todo cuando la Policía Estatal recorrió las plazas con altavoces y recomendó cerrar los negocios para irse a casa.

Ese día surgió en internet un nuevo portal potosino: “Histórica balacera en SLP”.

Oscar Martínez. ““Los Zetas” en Guatemala: bienvenidos”. *Proceso* número 1798, 17 abril 2011, pp 30-33. <https://www.proceso.com.mx/267473/los-zetas-en-guatemala-bienvenidos>

### **““Los Zetas” en Guatemala: bienvenidos”**

Hubo un tiempo en que el narcotráfico en Guatemala estaba controlado por familias que mantenían un pacto de respeto mutuo. Sólo contadas ovejas negras lo violaban, y para castigar a una de ellas, en 2008, los jefes tradicionales contrataron a Los Zetas mexicanos por su fama de sanguinarios. La temible organización pronto invadió el país y aprovechó las rutas de la droga establecidas en operaciones de la CIA... Entramado que el reportero Óscar Martínez, del diario digital salvadoreño *elfaro.net*, reconstruye basado en informes de militares, policías y fuentes del narco.

Si se asume la sonada frase de que, en tema de drogas, México es el patio trasero de Estados Unidos, bien se podría asumir que Centroamérica lo es de México. Un patio sucio y descuidado, conectado a México por una única puerta trasera. La frontera con Guatemala sería lo más parecido a esa puerta.

Con costa en los océanos Atlántico y Pacífico y más de 950 kilómetros de línea fronteriza con México, más que una puerta, esa frontera es un portalón.

Eso lo saben los narcotraficantes desde hace décadas. Al contrario de lo que ocurre en El Salvador, por ejemplo, donde esta década ha sido la del descubrimiento de narcos locales de renombre, en Guatemala hay familias consolidadas desde la década de los setenta, cuando los tambores de guerra civil sonaban por toda Centroamérica.

Para comprender qué es lo que Los Zetas han venido a trastocar hace falta remontarse a esa época, y Édgar Gutiérrez resultará un gran guía. Este economista y matemático de 50 años fundó organizaciones dedicadas a atender el retorno de refugiados guatemaltecos, a luchar contra la impunidad o a recuperar la

memoria histórica. Gutiérrez también ha participado del otro lado de la línea: de 2000 a 2002 fue secretario de Análisis Estratégico, o sea jefe de la inteligencia guatemalteca, y desde ese año hasta 2004 fue ministro de Relaciones Exteriores. Ahora asesora a distintas organizaciones y gobiernos de Latinoamérica y Europa, sobre todo en temas de seguridad.

–El narcotráfico no era lo que hoy día en términos de volúmenes de la cocaína que trasiega por acá y el tamaño del mercado. Hablo de los años sesenta y mitad de los setenta. En ese momento ocurrió una emigración de cubanos a Miami y de Miami a Guatemala, que llegaron atraídos por políticas fiscales. Estos cubanos sirven de puente a los colombianos y encubren las operaciones mediante sus actividades comerciales, exportaciones de camarón principalmente. Iban a Miami y en los paquetes escondían la droga. Algo ocurre en los setenta que esa gente decide abandonar el narcotráfico y se dedica solo a sus negocios lícitos, y ahí han seguido.

Documentar esta etapa inicial suele ser complicado. Gutiérrez se basa en testimonios de gente que estuvo vinculada y que él conoció.

La segunda etapa, en cambio, tuvo pompa internacional y filtraciones de documentos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos.

–Se trata del esfuerzo de la administración de Ronald Reagan por derrotar a los sandinistas en Nicaragua –dice Gutiérrez–. Recordarás el escándalo Irán-Contras... En ese momento, inicios de los ochenta, Estados Unidos realizaba los primeros esfuerzos serios por reprimir a los narcos colombianos, pero la CIA decide que la cocaína y heroína que pase por Centroamérica sea administrada por los ejércitos. Involucran al salvadoreño, guatemalteco y hondureño, para que parte de esas ganancias se destine a financiar a los Contras. Hay testimonios en el Senado y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos donde asesores militares argentinos que formaron parte de la trama dan montos de plata: hablan de 2 millones de dólares a la semana.

Entre 1985 y 1986 se desató el Irangate. Todo empezó por el descubrimiento, luego aceptado por la administración Reagan, de que Estados Unidos vendió de forma ilícita más de 40 millones de dólares en armas a Irán durante la guerra que libraba contra Irak. El intrincado asunto no terminó ahí: el presidente Reagan, en conferencia de prensa, aceptó que cerca de 12 millones de la venta de armas se destinaron a la Contra.

A raíz del escándalo, el flujo de ingresos quedó bloqueado. Entonces surgió la segunda parte de la trama, mucho menos esclarecida a pesar del paso del tiempo. En 1996, el San José Mercury News publicó un reportaje que vinculaba a traficantes de cocaína y crack de finales de los ochenta en Los Ángeles con el financiamiento de la Contra y el beneplácito de la CIA. El material causó tanto escándalo que incluso el Senado abrió investigaciones. Según esa información, algunos militares centroamericanos participaban en el traslado como encargados de almacenamiento y transporte de la droga por el istmo. Ese vínculo permitió que llegaran algunos capos con olfato al saber de la privilegiada puerta que abrió la omnipotente CIA.

–Esta actitud permisiva de los Estados Unidos facilita en los noventa la llegada de colombianos a Centroamérica, sobre todo a Guatemala. Los primeros padrinos aquí son colombianos que se mudan con sus equipos administrativos, sus financieros, sus contadores. Lo que hacen cuando deciden que es una

plaza importante para contactarse con México es acudir a viejos agentes del Estado, del Ejército. Los que se involucran son exagentes de aduanas, excomisionados militares, exespecialistas del Ejército.

—¿Por qué a ellos?

—Porque ellos están en el terreno y conocen la frontera. Están dejando su pertenencia activa en las fuerzas de seguridad del Estado, pero mantienen contactos. Usan las ganancias de la droga para comprar tierras, abrir líneas de transporte, gasolineras, negocios que sirven para blanquear pero que posteriormente se estabilizan. Ahí vienen los Mendoza, cuyo nicho es Izabal. De ahí salen también los Lorenzana, de Zacapa. Waldemar Lorenzana era un agente de aduanas y luego cuatrero, muy exitoso en los negocios.

### **De empleados a amos**

El 19 de diciembre de 2010, el gobierno del presidente Álvaro Colom decretó estado de sitio en Alta Verapaz. Un estado de sitio, como establece la Ley de Orden Público, es el paso previo al estado de guerra: limita la libre circulación y permite cateos sin orden judicial.

Al menos a varias de mis fuentes, entre ellas un exministro de Defensa, un exjefe de inteligencia militar, un coronel, un general y el excanciller, les pareció que la declaratoria tenía más de publicidad que de realidad. En Cobán, coinciden todos ellos, lo que se vivió fue un estado de prevención, el más leve en el listado que termina con la guerra abierta, y que apenas supone más policías, más militares, más retenes, más fiscales y, por tanto, más órdenes judiciales y más decomisos. En Cobán, dicen categóricos, los militares nunca tuvieron el control, sino que estuvieron bajo las órdenes del Ministerio Público. Al menos dos de ellos utilizaron la palabra show. Sin embargo, para evitar confusiones, lo llamaremos como al presidente le dio por bautizarlo.

A finales de 2008, Los Zetas eligieron Alta Verapaz como base de operaciones para Guatemala y, dicen algunos, para toda Centroamérica. No hacía falta ser un genio para escoger ese departamento. Alta Verapaz es el cuello de botella de Petén, un departamento que casi duplica en extensión a El Salvador, que acapara la mayor extensión de la frontera con México y que tradicionalmente ha sido punto de trasiego de armas y drogas. Para llegar a Petén, Alta Verapaz es un paso casi obligado y ofrece la ventaja de que se encuentra a tres horas en carro de Ciudad de Guatemala.

El Ejército, el Ministerio Público y la Policía se desplazaron aquí por orden presidencial cuando la situación era humillante. Las noticias que bajaban de la neblinosa Cobán parecían llegar de algún pueblito de narcos de la frontera entre México y Estados Unidos: narcos violando a mujeres indígenas en aldeas otrora pacíficas, jefes narcos poniendo perímetro alrededor de un McDonalds para comerse un combo, hombres borrachos en las plazas que ejercían de halcones con sus AK-47 a la vista.

### **El boquete del RPG-7**

Tengo enfrente a un agente de inteligencia militar que estuvo en Cobán en diciembre, cuando se inició el dudoso estado de sitio. La escena que me reconstruye es la de los patriarcas de las familias viendo cómo su invitado les desbarata la casa. Juan Chamalé, en la frontera del contrabando y los migrantes con México; Waldemar Lorenzana, en las fronteras con El Salvador y Honduras; Walter Overdick, en Alta Verapaz; y Los Mendoza, en Petén, frontera selvática con México, y en las costas cercanas al golfo de

Honduras. Todos buscados por Estados Unidos. Todos preocupados ahora al ver cómo el terrible invitado recorre la casa.

Hablamos en el restaurante del hotelito donde me hospedo en Ciudad de Guatemala. La conversación con este militar dicharachero y directo tiene dos objetivos: saber si la inteligencia militar da por hecho que fue el asesinato de un narco, Juancho León, la carta de entrada de Los Zetas al país, y saber qué tanto de show tiene un operativo como el realizado en Alta Verapaz.

Respecto al primer punto, la conversación es corta. La respuesta es un rotundo sí.

En marzo de 2008, tras un enfrentamiento armado de media hora entre dos grupos de al menos 15 hombres, quedaron tendidos varios cadáveres en el balneario La Laguna, en el departamento de Zacapa, fronterizo con Honduras. Uno de esos cadáveres era el de Juan José Juancho León, un importante narcotraficante guatemalteco de 42 años, líder de la familia León, que operaba en Izabal.

Édgar Gutiérrez, el exjefe de inteligencia, me había contado que Juancho León, quien durante algún tiempo fue lugarteniente y yerno del patriarca de los Lorenzana, empezó a tener demasiado poder, a expandir sus actividades y, sobre todo, a pasarse de bocón.

–Representaba una amenaza porque fanfarroneaba –me dijo Gutiérrez en una de mis primeras entrevistas–: yo puse a tal presidente, yo puse a tal... Y los otros grupos empezaron a decir: este tiene actitud monopólica y rompe el equilibrio, está tomando contactos en sur y norte.

Cuando le explico la teoría, el agente de inteligencia militar asiente con fuerza con los ojos cerrados y sonríe mientras mantiene el dedo índice levantado en este agradable patio del hotelito colonial muy bien conservado en el centro de la capital.

–Eso es cierto, pero falta un elemento en esa ecuación: Juancho fue el que puso de moda los tumbes. Gran parte de su poder económico vino de toda la droga que se robó.

Los famosos tumbes, la rapiña entre narcos, en la práctica no son más que robos de cargamentos de droga. En el fondo son una muestra de cómo el pacto entre familias había estado pegado con saliva, incluso antes de la entrada de Los Zetas.

Juancho León, como otros narcotraficantes e incluso jefes policiales, realizaba labores de inteligencia para saber dónde, cuándo y qué cantidad de droga iba a ser transportada por, pongamos un ejemplo, la familia Lorenzana. La droga entraba por algún punto ciego de la frontera con Honduras, y los hombres de León la esperaban más adelante, cuando a través de Alta Verapaz pretendía trepar hacia México. La robaban y luego la vendían a otra familia que la introducía por otro punto de la frontera. Ingenuo sería pensar que los agraviados no se enterarían de quién robó su cargamento.

Según el militar que ahora toma café en el patio del hotel, la gota que rebalsó el vaso fue un tumbes de droga que Juancho León realizó a los Lorenzana a principios de 2008, cuando transportaban un cargamento de cocaína para el cártel de Sinaloa, el más poderoso del continente. Eso, sumado a su boconería, su preocupante expansión de territorios y su prontuario de tumbes, derivó en un pacto entre los Mendoza y los Lorenzana: era necesario matar a Juancho León, pero el hombre tenía un ejército a su disposición, se movía bien custodiado y, desde que en 2003 fue asesinado su hermano, Mario León, había aumentado su cautela.

Era necesario recurrir a unos expertos que ya antes habían venido a Guatemala a dar protección a cargamentos especiales, a entrenar a sicarios de los Mendoza o a reclutar kaibiles, esos soldados entrenados en la selva bajo el lema de avanzar, matar y destruir. Fue justo ahí cuando las dos grandes familias abrieron las puertas de par en par al terrible invitado mexicano.

A Juancho León lo citaron en el balneario aquel día de marzo de 2008. La excusa fue negociar la entrada por su territorio de un cargamento de cocaína. Entonces lo atacaron con fusiles AK-47 e incluso con RPG-7, un lanzacohetes antitanque de fabricación rusa. Luego de la batalla, fueron detenidos tres mexicanos originarios del estado de Tamaulipas, en el norte mexicano, la sede desde donde Los Zetas controlan todas sus operaciones.

Las familias invitaron a Los Zetas sin tener en cuenta ningún otro factor que su capacidad para matar. No reflexionaron en que, justo a finales de 2007, ese grupo liderado por exmilitares de élite se había escindido de su cártel padre, el del Golfo, que estaban huérfanos y en búsqueda de nichos de control y actividades delictivas para suplir su falta de contactos en Sudamérica. Sólo vieron su capacidad de matar y atemorizar, y aún la siguen viendo.

El estado de sitio en Cobán fue la primera jugada fuerte del Estado guatemalteco para tratar de imponer reglas al huésped incómodo. Un aviso de que esta es casa ajena, un regaño por el descaro. Y nada más. Los Zetas especularon con que el show del Estado terminaría pronto y decidieron no plantar cara.

### **De vuelta a la “normalidad”**

Es 1 de marzo y me encuentro en una cena rodeado de jefes policiales, militares y asesores en seguridad. Hacemos pronósticos sobre lo que se viene en Guatemala, sobre cómo reaccionarán Los Zetas. Entre todos ellos distingo a uno de mis informantes de Cobán. Lo saludo y con la mano le hago un gesto para que nos alejemos del restaurante del hotel. Me dice que en un ratito, que allá en la esquina del patio. Pasa el ratito y se acerca con una pregunta por saludo.

—¿Qué, ya publicaste el artículo?

—No, aún no, lo estoy por terminar.

—¿Ya viste que terminó el supuesto estado de sitio?

—Sí, el viernes 18 de febrero. ¿Y qué ha pasado en Alta Verapaz?

—Pues que han regresado Los Zetas, ahí andan, siempre armados en las calles, más cautelosos, pero siempre a la vista en sus grandes camionetas.

El 25 de febrero en la madrugada, siete días después de que el presidente Álvaro Cólom viajara a Cobán para dar por finalizado el estado de sitio, un comando armado ingresó a un autolote, incendió tres carros y lanzó ráfagas de AK-47 contra otros tantos. Mi fuente asegura que eran Los Zetas que, poco a poco, inician sus venganzas. Esta vez fueron carros, pero mi informante augura que pronto serán personas. Ahora que terminó el estado de sitio, ahora que Cobán retorna a su normalidad, mi informante plantea su propia pregunta retórica.

—¿Y qué más iba a pasar?

Jorge Carrasco Araizaga, J. Jesús Esquivel. ““Los Zetas”, al ataque”. *Proceso* número 1805, 5 junio 2011. <https://www.proceso.com.mx/271372/271372-los-zetas-al-ataque>

### **““Los Zetas”, al ataque”**

Al igual que su principal enemigo, El Chapo Guzmán, el jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano, El Z 1 o El Lazca, suele dirigir personalmente las operaciones de sus sicarios en Guatemala, donde domina vastas regiones y busca consolidarse con crímenes brutales como la decapitación de 27 campesinos en El Petén, a mediados de mayo. Además de aliarse con grupos locales, el capo está entrenando sicarios de los dos países a fin de que el narco guatemalteco “hable en mexicano”...

COBÁN, GUATEMALA. - La reciente masacre de 27 campesinos en El Petén demostró el dominio territorial que tiene la organización delictiva Los Zetas en Guatemala luego de cuatro años de imponer el terror entre la población y los narcotraficantes locales, aprovechando la debilidad institucional del país centroamericano.

Enclavada en el corazón de la zona maya, la ciudad de Cobán es hoy el cuartel general de Los Zetas en Guatemala, hasta donde incluso se ha trasladado su jefe máximo, Heriberto Lazcano, El Lazca, para dirigir personalmente operaciones de contrabando de droga, ejecuciones, secuestros, extorsiones y hasta financiamiento de campañas políticas.

Ricardo Ravelo. “El poder y la estructura de “Los Zetas”, intocados”. *Proceso* número 1811, 17 julio 2011. pp 12-16. <https://www.proceso.com.mx/276112/el-poder-y-la-estructura-de-e2-80-9d-intocados>

### **“El poder y la estructura de “Los Zetas”, intocados”**

Paradoja que lastima al Ejército Mexicano, su obsesiva guerra contra Los Zetas es, en esencia, una confrontación con él mismo; es decir, contra los orígenes de este grupo criminal, pues se formó precisamente con desertores del instituto armado; una afrenta que irrita todavía más al alto mando castrense porque si bien ha logrado causarle importantes bajas a Los Zetas, éstos no sólo se han fortalecido: se convirtieron en uno de los cárteles más poderosos de México, con sólidas ramificaciones en un gran número de países.

Primero los entrenó el Ejército Mexicano. Después, fundaron el grupo armado al servicio del cártel del Golfo. Y ahora, convertidos en una de las más poderosas organizaciones delictivas del país, con ramificaciones en varios países, ni el mismo Ejército del que surgieron ha podido derrotarlos.

Aunque su líder actual, Heriberto Lazcano Lazcano, ha sido perseguido por todo el territorio nacional, permanece intocado. Jefe de Los Zetas, El Lazca lo mismo se refugia en su natal Hidalgo que en Zacatecas o San Luis Potosí, donde opera bajo la protección de autoridades estatales. En los dos últimos años, en varias ocasiones se le ha dado por muerto. El más reciente rumor sobre su fallecimiento trascendió hace tres semanas, luego de un enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas, entre zetas y sicarios del cártel del Golfo, pero ninguna autoridad confirmó su muerte.

¿En qué radica el misterio de una organización cuyos fundadores fueron aniquilados originalmente por el Ejército y, sin embargo, resurgen con un poderío multiplicado?

“En el caso de Los Zetas hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta”, afirma Erubiel Tirado, experto en temas castrenses, titular del posgrado sobre seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana y maestro en derecho por la London School of Economics.

“Empezaría por preguntar por qué el Ejército y la Procuraduría General de la República dijeron en su momento que Los Zetas no existían, pese a la multiplicidad de ejemplos respecto de sus manifestaciones criminales en el país. Ahora se empeñan en combatirlos más que a ningún otro cártel, pero nos ocultan la realidad sobre lo que realmente pasó a finales de los noventa, cuando esos militares desertaron del Ejército y se incorporaron al crimen organizado.”

Añade:

“Creo que fue irresponsable decir que no existían y que ahora se les combata. Seguimos sin saber qué pasó con el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (unidad de élite del Ejército a la que pertenecían los fundadores de Los Zetas). El Congreso, irresponsablemente, no ha llamado al secretario de la Defensa para que le explique a la sociedad qué fue lo que falló al interior del Ejército, qué controles se rompieron y por qué esos militares de élite terminaron enganchados con el narco.”

Erubiel Tirado, quien conoce al Ejército por dentro y ha estudiado sus funciones, no cree que los fundadores de Los Zetas hayan desertado de la milicia por dinero.

“Pienso que el argumento de que desertaron porque el narcotráfico les pagó más que el Ejército no alcanza a explicar el meollo del fenómeno. Esos gafes estaban bien pagados, eran de lo mejor que se formó en el Ejército a petición de Estados Unidos. Fue un grupo especializado para combatir al narcotráfico.

“Por desgracia –prosigue– seguimos sin respuesta sobre cómo los reclutaron los hombres del cártel del Golfo y es un tema que al gobierno de la guerra ya no le importa explicar. No tarda el señor (Alejandro) Poiré en anunciar que el gobierno ha acabado con Los Zetas. Lo que hay que decir es que pueden exterminarlos, pero queda su escuela y un cártel renovado que sigue las mismas reglas que sus fundadores.”

Las bajas, la resurrección...

Desde finales de los noventa el Ejército Mexicano enderezó su fuerza en contra de Los Zetas a fin de exterminarlos, máxime que cargaban el estigma de la traición que dio origen al llamado “cártel de los exmilitares”, toda vez que provenían del GAFE.

Los golpes han sido tan contundentes que la mayoría de los sicarios emblemáticos que conformaron originalmente a ese grupo armado –como Arturo Guzmán Decenas, su fundador, entre otros– están detenidos o muertos.

Pero en la “cacería” de zetas también ha tomado parte la Policía Federal y la Secretaría de Marina, instituciones que han orquestado operativos en busca de los hombres que en 1997 desertaron de las filas castrenses para incorporarse al cerco protector del entonces jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas.

En un principio, Los Zetas eran para el gobierno un mito. La Sedena y la PGR negaban su existencia y la Secretaría de Seguridad Pública informó, en 2007, que en sus archivos no había información sobre ellos, a pesar de que en sus boletines daba cuenta de matanzas y secuestros perpetrados por sus miembros.

A mediados de los noventa, el gobierno de Estados Unidos urgió al de México, entonces encabezado por el presidente Ernesto Zedillo, a otorgarle mayor participación al Ejército en el combate al narcotráfico. En ese sexenio, la crisis de las policías ya era preocupante por la infiltración del narcotráfico, cuyas redes alcanzaron a la misma Presidencia de la República.

Ante la urgencia que enfrentaba el país, la Secretaría de la Defensa Nacional giró la instrucción de formar un grupo de élite que, según se dijo en aquel tiempo, sería utilizado para reprimir a los grupos insurgentes. No fue así. El propósito era, según el plan, combatir a los cárteles de la droga.

De esta forma, al menos 35 elementos del GAFE fueron enviados a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), que, bajo la titularidad de Mariano Herrán Salvatti, enfrentaba serios problemas de infiltración y corrupción.

Hacia 1997 –un año después de la detención y deportación del capo Juan García Ábrego–, Osiel Cárdenas Guillén, un soplón formado en las filas de la Policía Judicial Federal, sentaba las bases para encabezar el cártel del Golfo. Su principal jefe de seguridad era Arturo Guzmán Decenas, quien creó Los Zetas a petición de Osiel, ya que éste temía ser asesinado por sus rivales, según se asienta en múltiples declaraciones ministeriales.

Así, Guzmán Decenas, conocido en sus años de esplendor como Z-1, comenzó a reclutar a sus colegas militares, quienes estaban operando en la FEADS. Tiempo después, ese grupo formó el más férreo cerco protector en torno a Cárdenas Guillén, quien irrumpió en el mundo del narcotráfico con una nueva modalidad: el paramilitarismo incorporado al tráfico de drogas, fenómeno inusitado en México y que con el paso de los años desplazó al sicario tradicional.

Hacia finales de 1997, Los Zetas no eran –ni lo son ahora– un grupo menor: se trataba del brazo armado más preparado que haya tenido cualquier capo a su servicio en la historia del narcotráfico en México. Distinguidos por su pragmatismo, su capacidad operativa y la espectacularidad de sus acciones, sus integrantes lo mismo repelían un ataque militar que penetraban un reclusorio para liberar a sus cómplices.

Los Zetas aparecieron en el escenario nacional en 1997, pero el gobierno federal tardó seis años en dar a conocer la lista de sus integrantes. En 2003, la PGR difundió los nombres de los fundadores del grupo, el más sanguinario en los anales del crimen organizado en el país.

Detenidos o asesinados en distintos años, estos son algunos nombres: Mateo Díaz López (comandante Mateo), Sergio Enrique Ruiz Tlapanco (El Tlapa), Lucio Hernández Lechuga (El Lucky), Braulio Arellano Domínguez (El Gonso), Isidro Lara Flores (El Colchón), Ramón Ulises Carvajal Reyes (El Piojo), Ernesto Zataráin Beliz (El Traca), José Ramón Dávila Cano (El Cholo), Óscar Guerrero Silva (El Winnie Pooh), entre otros.

El 21 de mayo de 2007 (Proceso 1600), este semanario solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la PGR y a la Sedena información básica sobre Los Zetas. Para ello se formularon varias preguntas:

quiénes formaban el grupo, los nombres reales y apodos; su estructura, sus centros de operación y, entre otros datos, el número de ejecutados relacionados con ellos.

La SSP respondió: “Le comunicamos la inexistencia de la información solicitada, toda vez que en los archivos del sector central de esta Dependencia no existe documento que contenga dicha información...”.

Los detalles sobre su estructura, modus operandi y los territorios que controlan los dio a conocer Proceso en su edición 1619: en entrevista, un exmiembro de Los Zetas habló del número de hombres y mujeres que conformaban al grupo armado en 2007 –unos 500 hombres y 30 mujeres–, y dio pormenores de la saña con la que actúan.

Expuso que tras la detención de Osiel, Los Zetas y el cártel del Golfo se separaron, aunque dijo que había comunicación entre ellos; pero tales contactos –reveló– se terminaron cuando este último decidió aliarse con el cártel de Sinaloa.

“Esto molestó mucho a Heriberto Lazcano, quien dijo que la decisión de Los Zetas para sumarse o no al cártel de Sinaloa debía ser llevada a votación”. Y así se hizo.

A mediados de 2007, El Lazca convocó a una concentración de zetas en un campo deportivo de Reynosa, Tamaulipas. El exmiembro de ese grupo armado, cuyo nombre se omitió, narró lo siguiente:

“A bordo de una camioneta blindada llegó custodiado Heriberto Lazcano. Vestía pantalón de mezclilla y camisa blanca. Se le veía muy tranquilo. Al entrar al campo, se desplazó hacia un palco e hizo que los líderes de las células lo saludáramos de mano.

“Después, pidió un micrófono y nos dirigió un mensaje en el que llamó al grupo a respetar las reglas: no matar, no levantar ni desaparecer a más personas, de la necesidad de paz en el país y de la conveniencia del pacto con Sinaloa, lo cual se debía someter a votación... La votación fue en contra y Los Zetas nos separamos del cártel del Golfo.”

### **Hacia la independencia**

En 2006, tras tomar posesión como presidente de la República, Felipe Calderón emprendió su guerra contra el narcotráfico. De entonces a la fecha todos los cárteles han sido golpeados, pero el Ejército y la Policía Federal se enfocaron con mayor intensidad a Los Zetas, quienes comenzaron a dominar cada vez más territorios fuera de Tamaulipas, su feudo.

En 2008, la Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia antidrogas de Estados Unidos, dio a conocer que entre el cártel del Golfo y Los Zetas había fuertes diferencias. Pronto éstas acabaron en ruptura, que se convirtió a su vez en una crisis mayor luego de que los cárteles del Golfo y de Sinaloa, según la DEA, lograron establecer un acuerdo para frenar la violencia entre ellos.

La confrontación se agudizó cuando Los Zetas se independizaron y comenzaron a operar el tráfico de drogas por su cuenta. Fue entonces cuando Tamaulipas y todo el corredor Monterrey-Coahuila-Durango se volvieron zona en disputa. Los enfrentamientos se extendieron por todo el Golfo de México, pues ambos cárteles ajustaban sus cuentas en Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla y otras 15 entidades más.

Ante tal confrontación, el Ejército y la Policía Federal (que en 2007 aseguraba que Los Zetas no existían) comenzaron a combatirlos. Sufrieron varias bajas, entre otras las de Julián Zapata, El Piolín, jefe de una célula que operaba en San Luis Potosí.

Antes había sido abatido en un operativo Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, a quien le dejaron un mensaje: “¿Dónde están tus amigos los militares? Te dejaron solo hijo de puta”.

Recientemente fue capturado en San Luis Potosí –importante feudo de Los Zetas– Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, exmilitar que encabezaba otra célula del grupo criminal.

En marzo de este año fue capturado por agentes federales Mario Jiménez Pérez, El Mayito, quien en mancuerna con El Piolín operaba en Coahuila junto con Luis Miguel Rojo, El Oso Rojo, y Sergio Antonio Mora, El Toto.

En abril último, la Policía Federal también detuvo a Leonardo Vázquez, El Pachis, presunto jefe de plaza de la organización en Poza Rica, Veracruz, donde ésta ha perpetrado secuestros, matanzas y extorsiones contra empresarios y ganaderos.

Este personaje también operaba en la Cuenca del Papaloapan, Veracruz, región donde Los Zetas han secuestrado desde acaudalados empresarios hasta abarroteros. En esta zona, de acuerdo con denuncias obtenidas por Proceso, la gente que va a vender una casa ya no la anuncia, pues tan pronto aparece el cartelón con la leyenda “se vende” Los Zetas secuestran al dueño del inmueble para despojarlo de su dinero.

La Secretaría de Marina también ha llevado a cabo acciones en contra de Los Zetas: el 16 de abril de este año fue capturado Omar Martín Estrada Luna, El Kilo, quien presuntamente planeó las dos masacres cometidas en San Fernando, Tamaulipas, que dejaron un saldo de 217 muertos, todos enterrados en fosas clandestinas.

En 2008, en una carrera de caballos celebrada en la comunidad de Villarín, Veracruz, a donde se dieron cita prominentes políticos y empresarios de la entidad, fue abatido a tiros Efraín Teodoro Torres, Z-14, uno de los fundadores del grupo criminal.

Antes de independizarse del cártel del Golfo, Los Zetas ya habían diversificado sus actividades criminales: no sólo traficaban con drogas, sino que incursionaron en las extorsiones, la venta de protección, la trata y tráfico de personas, la piratería, el despojo de propiedades, y el cobro de cuotas a bares, cantinas, burdeles y otros negocios relacionados con los giros negros.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/115/2010, nutrida con declaraciones de varios zetas detenidos, este cártel domina los estados de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Estado de México, Chihuahua, Chiapas, Quintana Roo, Distrito Federal, Tamaulipas y Guerrero.

Los golpes asestados a Los Zetas no los han debilitado; por el contrario, el cártel estiró sus tentáculos hacia Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica, y de acuerdo con informes de la Policía Nacional de Colombia, también están presentes, aunque con menor fuerza que Joaquín El Chapo Guzmán, en ese país sudamericano.

El investigador Erubiel Tirado considera que no basta con que el Ejército pretenda exterminar a Los Zetas, pues el cártel aún es muy poderoso y está activo dentro y fuera de México, sino que debe explicar por qué desertaron de la milicia sus fundadores y qué pasó al interior del Ejército para que se produjera este fenómeno tan oprobioso.

—¿Cuál es su explicación? ¿Por qué se crearon Los Zetas si sus miembros fueron capacitados para combatir el narcotráfico?

—Hubo una falla estratégica dentro del Ejército, pero al gobierno de la guerra no le importa explicarla. No hay autocrítica: el presidente Felipe Calderón está envuelto en la arrogancia y en la cerrazón.

—¿Los golpes asestados a Los Zetas los extermina?

—Si el Ejército realmente extermina a los zetas fundadores todo sigue igual, pues queda su escuela y su enseñanza.

Verónica Espinosa. “A sangre y fuego, territorio narco”. *Proceso* número 1811, 17 julio 2011. pp 14-15. <https://www.proceso.com.mx/276113/a-sangre-y-fuego-territorio-narco>

### “A sangre y fuego, territorio narco”

ZACATECAS, ZAC.- Asentados a sus anchas en el corredor San Luis Potosí-Zacatecas, Los Zetas se placean ante los contingentes de la Marina Armada de México y del Ejército enviados por el gobierno federal con el pretexto de atender las urgentes peticiones de los gobernadores de ambas entidades, con sus policías locales rebasadas o cooptadas.

Tras varias semanas de incursión, marinos y soldados lograron exterminar a un buen número de presuntos miembros de la organización delictiva, particularmente en Zacatecas, pero la estadística oficial no aclara que la mayoría de ellos son halcones y sicarios, jóvenes de los más bajos niveles de la estructura criminal.

Mientras tanto, Heriberto Lazcano, El 50, El Diamante y otros cabecillas se desplazan entre Fresnillo, su principal feudo zacatecano, y la capital potosina. Quienes han visto a Lazcano lo describen actualmente como “más robusto” de lo que aparece en los promocionales de televisión, por medio de los cuales el gobierno federal anunció su captura erróneamente.

Estos jefes zetas le aseguran a su gente que su presencia en 18 estados es más fuerte que nunca, y que cotizarán muy caro este corredor entre sur y norte del país en caso de que se negocie con los otros cárteles que lo ambicionan: el de Sinaloa y el del Golfo.

De acuerdo con una fuente allegada a la XII Zona Militar, Los Zetas ya están operando en la Huasteca potosina, desde Tamuín, en la frontera con Tamaulipas, hasta Rioverde.

El lunes 4 de julio, la alcaldesa de Ciudad Valles, Socorro Herrera Orta, estaba en su despacho cuando se descubrió en la plaza principal una advertencia dirigida a ella en una hielera: “Este es el último

mensaje COCO para que te comuniquen, en la próxima vendrán las cabezas de toda tu familia, y va para todos los que apoyan al Golfo. Atte Los Zetas” (Sic).

Al día siguiente otro mensaje fue encontrado en pleno centro de San Luis dentro de una caja de pollos: “Ya llegamos putos Zetas. Atte negros cártel del Golfo”.

Aunque al parecer los han desplazado a sangre y fuego de la Huasteca, Los Zetas han conseguido el dominio total de Zacatecas. Aunque tienen un frente abierto con el cártel de Sinaloa (Cárteles Unidos) en el sur de la entidad, en los límites con Jalisco y Aguascalientes, nada les estorba en el corredor entre San Luis Potosí, el norte de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, que en un análisis del despacho estadounidense Stratford y la revista *The Economist* se identifica como una ruta principal del tráfico de efedrina.

Dos fuentes allegadas a la inteligencia militar en San Luis Potosí y en Zacatecas, que pidieron reservar su identidad, aseguran que la detención del líder zeta Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, no ocurrió en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, como informó la Secretaría de Seguridad Pública federal el lunes 4 (al día siguiente del triunfo del PRI en la elección de gobernador), sino que en realidad fue capturado en Fresnillo, importante enclave del grupo criminal.

A Rejón Aguilar, uno de los fundadores de Los Zetas, se le vincula con el ataque a dos agentes migratorios de Estados Unidos cometido el 14 de febrero en la carretera Querétaro-San Luis Potosí. El vocero federal Alejandro Poiré alardeó de su captura y de que “ya sólo falta la captura de Heriberto Lazcano Lazcano, principal cabeza de la organización”.

No obstante, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicados por el diario local NTR revelan que en 2010 se conocieron en Zacatecas 105 casos de privación ilegal de la libertad –sólo 13 de ellos denunciados formalmente–, mientras que San Luis Potosí se ubicó entre las ocho entidades del país con mayor incidencia de homicidios dolosos.

Aunque se ha reportado que la revisión de control de confianza a los mandos policiacos avanza con relativa eficacia, ninguna de las dos entidades cuenta con centros de control certificados: en Zacatecas está en proceso y en San Luis apenas se perfila el modelo de certificación. Por lo pronto, la depuración de mandos medios y de los efectivos estatales no llega a la mitad, y en el caso de los municipales ni a 25%.

Un informe del Sistema Nacional de Seguridad establece que, en las actuales condiciones, San Luis Potosí carece de capacidad instalada para realizar evaluaciones integrales y que Zacatecas tardaría más de dos años en aplicarlas totalmente a sus policías.

De acuerdo con el comercio organizado, en los meses recientes los distribuidores “macro” (de marcas como Sabritas, Bimbo y Coca-Cola) se han encontrado con que en las comunidades zacatecanas casi la mitad de las tiendas cerraron con tal de no vender drogas o por miedo a los asaltos.

La Asociación de Gasolineros dio cuenta en una reunión con el procurador cómo Los Zetas no sólo exigen el combustible bajo amenazas, sino que también “castigan” a aquellas bandas que se hacen pasar por miembros de la organización delictiva para extorsionar. Mencionan incluso un video que muestra a dos ladrones rociados de combustible y quemados vivos “por andar diciendo que son zetas”.

## Confrontación

Tal como a finales de mayo el gobernador zacatecano, Fernando Toranzo, pidió ayuda extraordinaria al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, su homólogo potosino, Miguel Alonso, solicitó el retorno de los policías federales que arribaron en enero para vigilar las carreteras de su estado. Este contingente sólo permaneció ahí dos semanas y se fue comisionado de manera urgente a Chihuahua.

A mediados de junio, el comandante de la XII Zona Militar, Federico Reynaldos del Pozo, informó que 400 efectivos del 45 Batallón de Infantería se unieron a otros 500 que ya operaban en la Huasteca potosina. Al mismo tiempo arribaron a Zacatecas 110 elementos de la Marina Armada de México en unidades Ram y camiones Mercedes.

Los dos declararon que trabajan “en coordinación” y que participan en “operativos conjuntos”, pero sus corporaciones de seguridad permanecen ajenas a la estrategia militar del presidente Felipe Calderón por la sospecha de que están infiltradas. También influye el hecho de que hay municipios donde no se ve ni un solo preventivo en la calle.

Días después de que los soldados de Infantería se instalaron en San Luis Potosí e iniciaron operaciones en la Huasteca, Rodolfo Saucedo renunció como director de la Policía Ministerial del estado y circuló la versión de que lo mismo haría el procurador, Cándido Ochoa Rojas.

En Fresnillo, la Policía Federal, no la estatal, aprehendió a Édgar Huerta Montiel, El Wache, presunto cabecilla zeta en San Fernando, Tamaulipas, donde se han encontrado fosas clandestinas con cientos de cadáveres. Huerta, de 22 años, estaba en un hotel que Los Zetas ocupaban desde dos meses antes, como lo hacen en esta región con otros negocios, como gasolineras y antros.

Y en el operativo del 1 de julio en la comunidad San José de Lourdes, Fresnillo, donde los militares abatieron a un grupo de zetas, no participó ningún elemento estatal o municipal. Por el contrario, fueron mantenidos “a raya” mientras los marinos cercaban Fresnillo, instalaban varios retenes y penetraron el poblado, cuyos 5 mil habitantes vivieron cinco horas de tiroteo.

En esa refriega algunas estaciones locales de radio alcanzaron a transmitir llamadas de presuntos sicarios encerrados en una casa de seguridad, en las que pedían la presencia de los periodistas “para que vieran lo que estaban haciendo los marinos” y porque se querían entregar frente a la prensa. El saldo oficial quedó en 15 muertos y varios heridos, entre ellos algunos marinos, aunque fuentes allegadas a corporaciones del estado refieren que se contaron decenas de cadáveres.

Varios automovilistas que circulaban por la autopista de Fresnillo dieron testimonio a un proceso de que en los retenes de la Marina había personal cubierto con capucha y uniformes tácticos, que sólo hablaba inglés.

Los policías estatales y municipales no pueden ocultar su molestia con los marinos, no sólo porque los excluyen de las estrategias de inteligencia y de los operativos, sino porque aplican revisiones sorpresivas a las policías municipales.

El miércoles 13, policías preventivos de la capital zacatecana estuvieron a punto de tirotarse con marinos en el cruce de las avenidas Jesús Reyes Heróles y Prolongación La Encantada, colonia

Bellavista. No habían pasado más de 24 horas de la visita del presidente Calderón; eran las 14:30 horas cuando seis agentes municipales en dos patrullas les cerraron el paso a tres vehículos de la Marina con 24 efectivos que supuestamente iban a la Dirección de Seguridad Pública municipal a realizar una “revisión de rutina”.

Inmediatamente los marinos saltaron de sus unidades Ram y apuntaron a los municipales ante centenares de transeúntes y automovilistas, narró a Proceso un testigo.

A gritos los cuestionó un policía que se identificó como el “comandante Juárez”: “¿Ustedes qué chingan aquí? No se metan con mi gente, aquí no estamos en Fresnillo ¿Quién viene al mando? ¿Traes una orden de aprehensión? No, cuál revisión de rutina. Aquí tengo los papeles del armamento de mis agentes. Revisalo, pero con mis hombres no te metas”.

El incidente duró más de 25 minutos. Muchos civiles dejaron sus autos en la calle y buscaron protegerse del tiroteo que creyeron inminente.

Además de los policías que les cerraron el paso, a los marinos les apuntaba con armas largas otra decena de agentes desde el muro perimetral de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Cuando llegó un contingente de policías estatales, se limitaron a desviar el tránsito hasta que los marinos accedieron a retirarse. Saliendo rumbo al municipio conurbado de Guadalupe. Ninguna autoridad local o federal comentó el incidente.

En la visita que Calderón hizo la semana a su estado, el gobernador potosino Miguel Alonso le pidió al presidente que esta vez no retirara a las fuerzas federales del estado y que, al contrario, enviara más refuerzos.

Pero Calderón charlaba con el secretario de Economía, Bruno Ferrari. Parecía distraído y ausente, como escribieron algunos columnistas en los diarios locales. Alonso alzó un poco la voz en el micrófono, pero el presidente se fue sin responderle.

Arturo Rodríguez García. “Laguna de sangre”. *Proceso* número 1812, 24 julio 2011. pp 21-23.  
<https://www.proceso.com.mx/277312/laguna-de-sangre-2>

### “Laguna de sangre”

La sociedad coahuilense ya no puede más con la violencia que se asentó en La Laguna desde que dos grupos del narcotráfico se disputan la plaza: Los Zetas y los sicarios del Chapo Guzmán. El crecimiento de los índices criminales ya era alarmante, pero desde que el gobierno federal aplicó su solución de mando unificado policiaco-militar las estadísticas asustan: casi cada mes se duplica el número de homicidios –incluso los no relacionados con el crimen organizado– y también crecen los asaltos y robos de autos...

TORREÓN, COAH. (Proceso).- Desde hace cuatro años, la Comarca Lagunera –en particular Torreón– es campo de batalla entre mafias y está agobiada por la delincuencia y sus crímenes de alto impacto, y también por la impunidad que permea hasta los asesinatos no relacionados con el narcotráfico, situación que ningún operativo ni plan gubernamental han podido solucionar.

Al contrario. La creación, en mayo pasado, de un “mando único” policiaco-militar coincidió con el aumento de los asesinatos relacionados con el hampa: el número de éstos se duplicó en un mes.

El mando único propuesto y acordado por el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, es la más reciente de las acciones emprendidas por el gobierno federal como respuesta a la exigencia de seguridad del empresariado lagunero hartado de la violencia, en especial luego del asesinato de Carlos Ignacio Valdés Berlanga, ganadero y accionista de Grupo Lala.

El pasado 24 de abril, Torreón sumó 11 crímenes a su estadística de ejecuciones; entre ellos, el de Valdés Berlanga, asesinado de 15 tiros.

El empresario y dirigente de la Unión de Crédito Rural y Agropecuario de la Laguna desayunaba en su casa cuando notó que dos extraños habían entrado. Con cautela salió de su domicilio, pero en la acera lo esperaban dos sicarios que lo acribillaron.

El crimen conmocionó a la clase empresarial, pues los hermanos Carlos Ignacio y Mario –este último, exdirigente priista local y líder de la Unión Ganadera Regional de La Laguna– pertenecen a una familia de productores de leche en una región cuya actividad económica depende en buena medida de los lácteos. En junio de 2010, Carlos Ignacio recibió la medalla presidencial al Mérito Ganadero.

Al velorio de Valdés Berlanga acudió la élite empresarial y política de la región. Pero les salió caro: nueve de las camionetas en las que llegaron a la capilla de velación –cerca de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal y de la delegación de la Fiscalía General del Estado (FGE)– fueron robadas y otras 14, desvalijadas.

### **Desprotegidos**

El 26 de abril, Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo Lala, se reunió con Felipe Calderón, según consejeros del corporativo lechero consultados por Proceso, quienes agregaron que al regresar de la capital el empresario convocó a una reunión a los socios de la empresa y les soltó: “Sólo me queda decirles que tomen sus precauciones, que se cuiden. Ya no tengo nada más que hacer”. Según las mismas fuentes esa semana la familia Tricio salió del país y se estableció en una ciudad texana.

Para entonces seis secuestros habían impactado a la élite lagunera, dos de ellos a accionistas del Grupo Lala. Las familias Yacamán, Tricio y Espada, además de dos reconocidos médicos, sufrieron secuestros aunque no los denunciaron ante las autoridades y las negociaciones quedaron a cargo de especialistas privados.

La versión de que el homicidio de Valdés Berlanga tenía como móvil el secuestro hizo que el 25 de abril el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada lanzara un ultimátum a las autoridades: les dio 72 horas para aclarar el crimen y exigió una reunión con los tres órdenes de gobierno en menos de una semana. “Nadie se siente a salvo, hemos llegado al límite”, declaró Óscar Soto, de la Coparmex local, al diario El Siglo de Torreón.

Pocos días después quedó asentado que el asesinato del ganadero obedeció a un problema familiar. La FGE presentó como autor intelectual al exyerno del empresario, Pablo Armendáriz Vela, quien habría contratado a los sicarios, entre ellos a Luis Antonio Jáquez Castañeda. El presunto ejecutor material fue internado en el penal de Torreón la mañana del 21 de junio... y horas después apareció colgado en su celda.

Los empresarios amagaron con dejar de pagar impuestos por lo que Blake Mora, el gobernador, Jorge Torres López, y el alcalde de Torreón, Eduardo Olmos Castro se reunieron de urgencia el pasado 3 de mayo. Acordaron establecer el mando único coordinado por la XI Región Militar.

No fue la primera vez que Blake –y antes Fernando Gómez Mont– se reunía con empresarios para prometerles seguridad.

El 14 de mayo de 2010, Gómez Mont incluso minimizó el problema de inseguridad en La Laguna y retiró a policías federales y soldados de la región, porque en Ciudad Juárez hacían más falta. Horas después de la salida de los uniformados un comando acribilló a ocho jóvenes en la inauguración del bar Juanas VIP.

En sus ediciones 1751 y 1760 Proceso dio cuenta de las súplicas de apoyo ante la violencia imparable. El 18 de julio de 2010 un ataque en la Quinta Italia Inn cobró la vida de 17 personas civiles inocentes.

Blake Mora incluso ofreció enviar refuerzos, pero sólo si las autoridades hacían una petición formal. Días después, el comisionado de la Policía Federal (PF), Facundo Rosas, anunció la llegada de 200 de sus agentes a Coahuila.

La Comarca Lagunera abarca cinco municipios de Coahuila y 13 de Durango. El establecimiento de un mando que englobe esa región era una vieja exigencia de las autoridades locales, empresarios y la sociedad civil, pues el lado coahuilense corresponde a la XI Región Militar, en tanto La Laguna duranguense, a la III.

Con la visita de Blake, además de reforzar la vigilancia, el mando único quedó en las instalaciones de la XI Región Militar, con sede en Torreón, pero los resultados no fueron los esperados.

### **Estadísticas rojas**

Convertida en una de las urbes más violentas del país, desde febrero de 2010 fue considerada por el Departamento de Estado norteamericano una de las zonas a las que recomienda a sus connacionales no viajar; en un día pueden ocurrir hasta 15 ejecuciones, como ocurrió el pasado 7 de junio.

Ante los hechos violentos que mantienen postrada a la región desde hace años, una serie de acuerdos entre instancias gubernamentales produjeron el programa Operación Laguna I-2011, que entre otras medidas apostó en torno al lecho del Nazas tres bases de operación ocupadas por militares y estableció retenes en distintos puntos.

Sin embargo, la puesta en marcha del operativo coincidió con la multiplicación de las ejecuciones.

La estadística de la FGE señala que en enero de este año Torreón tuvo 29 asesinatos; en febrero, 28; en marzo, 27; en abril, 28; en mayo; 32, y en junio, 59. Es decir que la primera mitad de 2011 sumó 203 asesinatos.

La situación también es alarmante respecto a la violencia social, pues de los 203 homicidios 163 corresponden a acciones relacionadas con la delincuencia organizada; el resto fue entre civiles. En el mismo periodo de 2009 eran 77 los homicidios y un año después, 149.

El incremento en los indicadores abarca otros delitos, como el robo de autos: en 2009 fueron 572; en 2010, mil 182 y en lo que va de 2011, mil 223 vehículos hurtados, 341 de ellos con violencia.

Lo mismo ocurre con el robo a transeúntes: en 2009 hubo mil 323 casos; en 2010, mil 424 y en lo que va de 2011, mil 625.

### “M’s” y “Zetas”

El sábado 9, una pick-up estacionada en el periférico Raúl López Sánchez llamó la atención de policías que realizaban un patrullaje de rutina. Decidieron inspeccionarla. Había 10 decapitados en la caja de carga y en el parabrisas, una cabeza de mujer.

Las cabezas de esos cuerpos fueron halladas pocas horas después: tres en el cruce de Valdez Carrillo y bulevar Independencia, otras tres en el camino a Santa Rita y las tres restantes en el cruce de Salvador Creel y Río Nazas.

A cada uno de los cuerpos de la pick-up les habían cortado, además, un pie. Una cartulina lanzaba una advertencia para “los traidores”. Los Zetas reivindicaban el multihomicidio y los forenses asumen que el mensaje fue para quienes “brincaron” de Los Zetas a Los M’s.

Fuentes policiacas consultadas por este semanario indicaron que Los Zetas fueron replegados a los municipios de Matamoros y San Pedro de las Colonias desde donde enfrentan a Los M’s, los sicarios del cártel de Sinaloa que ha impuesto su hegemonía en La Laguna duranguense, que sin embargo tiene índices delictivos inferiores a los de Torreón, donde tiene lugar su guerra.

Autoridades federales y estatales han ubicado la base de operaciones de Los M’s en la violenta colonia La Duranguña, de Torreón e identifican como su líder local a un personaje apodado El Danny. A Los Zetas los dirigen localmente El Andy, El Pinky y El Junior. Entre sus líderes estaba también El Güero Loco, abatido recientemente por el Ejército en San Pedro de las Colonias.

En su disputa territorial Los M’s y Los Zetas han convertido en blanco de sus ataques a funcionarios del área de seguridad y a policías.

El 8 de abril, la subdelegada de la PGR para La Laguna de Durango, Claudia Ávila Yáñez –con apenas una semana en el cargo–, y otro funcionario identificado como Gilberto Barajas Raygoza fueron levantados. Un día después aparecieron sus cadáveres en Lerdo, Durango. Durante el levantón murió acribillado el fiscal federal Gustavo Armando García Silva.

Por el triple homicidio se abrió la averiguación previa AP/PGR/DGO/GP/1-INV/058/2011. Antes de que se ubicara a los responsables, el 8 de junio, los agentes federales Juan Antonio García Cruz y Juan Antonio Martínez Padilla fueron atacados por un grupo armado.

El 26 de junio, la PF detuvo a nueve presuntos integrantes de Los M’s a quienes atribuye el asesinato de la subdelegada y los otros dos funcionarios así como el ataque a los policías federales de principios de junio.

A un ritmo de 3.5 ejecuciones diarias, 10% de los muertos pertenecen a algún cuerpo de seguridad o instancia relacionada con el combate a la delincuencia. Ni siquiera los convoyes de varios vehículos escapan al poder de fuego de los grupos armados en La Laguna, como ocurrió el martes 19.

La averiguación previa AP/PGR/COAH/TORR/AGI-I/363/DD/2011, abierta por el ataque al convoy establece que cuando regresaba de realizar el traslado de un detenido al penal de Gómez Palacio, Durango, fue interceptado por dos camionetas cuyos tripulantes les dispararon en varias ocasiones. El saldo fue de dos policías heridos. Como suele ocurrir, no hubo detenidos.

La sociedad coahuilense ya no puede más con la violencia que se asentó en La Laguna desde que dos grupos del narcotráfico se disputan la plaza: Los Zetas y los sicarios del Chapo Guzmán. El crecimiento de los índices criminales ya era alarmante, pero desde que el gobierno federal.

José Gil Olmos. “Los nuevos “esclavos” de los cárteles”. *Proceso* número 1812, 24 julio 2011. pp 25-27. <https://www.proceso.com.mx/277056/los-nuevos-esclavos-de-los-carteles-2>

### **“Los nuevos “esclavos” de los cárteles”**

El cáncer de la violencia por narcotráfico lleva aparejados muchos otros, pero las autoridades no pueden con ninguno de ellos. En los últimos cuatro años, por ejemplo, los secuestros se dispararon en el país, con la diferencia de que ahora grupos criminales, como Los Zetas, plagian de manera indiscriminada a todo tipo de jóvenes y los “reclutan” para su causa. Lo grave es que los convierten en sus esclavos, sostiene el sacerdote Alejandro Solalinde. Es por ello que el religioso participa en la organización de la segunda caravana internacional Paso a Paso Hacia la Paz, cuyo cometido es alzar la voz por los migrantes indocumentados que padecen lo indecible durante su trayecto a Estados Unidos.

MÉXICO, D.F. (Proceso). - El secuestro de migrantes centroamericanos y mexicanos es ya un gran negocio para el crimen organizado. Y aun cuando las autoridades han firmado acuerdos, pactos y tratados, nada frena ese delito que, de acuerdo con cifras conservadoras de agrupaciones nacionales y extranjeras, deja ganancias de por lo menos 50 millones de dólares al año a los grupos delincuenciales.

Un informe reciente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que desde 2008 se han registrado alrededor de 20 mil secuestros anuales. Durante su trayecto a Estados Unidos, los indocumentados son objeto de innumerables vejaciones de organizaciones criminales.

Alejandro Solalinde, quien dirige el albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, advierte que Los Zetas suelen secuestrar a hombres y mujeres y los obligan a trabajar para ellos como halcones. Asegura que él ha recibido testimonios de los plagiados, según los cuales los sicarios los adiestran y los convierten en su ejército de reserva.

En entrevista telefónica la víspera de la marcha contra los secuestros y violaciones a los derechos de los migrantes, que se inició el sábado 23 de manera simultánea en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y culminará en México el domingo 31, Solalinde manifiesta que se trata de una nueva versión de la leva en la que los migrantes centroamericanos y mexicanos son tomados como “desechables”.

### **El infierno**

Los plagios de migrantes por parte de zetas comenzaron a denunciarse hace dos años. Al principio los sicarios no pedían rescate a los familiares, más bien obligaban a sus víctimas a trabajar para ellos.

Según los testimonios reunidos por Solalinde, luego de llevar tiempo desaparecidos, algunos jóvenes llamaban por teléfono a sus familiares para decirles que no dijeran nada al Ejército o la policía ni intentaran buscarlos; les comentaban que estaban trabajando para Los Zetas y que mejor se olvidaran de ellos porque nunca los iban a soltar.

Los migrantes, insiste el entrevistado, “están atrapados. Los sicarios primero los entrenan y luego los ponen a trabajar en las plazas nacionales que controlan, o incluso fuera del país.

“No se pueden salir del entorno al que los confinan porque los matan. Tuvimos información de que un par de jóvenes de Veracruz fueron obligados a participar en una matanza en Guatemala. (Los Zetas) se los llevaron para allá y los forzaron a matar a la gente. ¡Imagínese lo que estarán haciendo en otros lados del país.”

Encargado del área pastoral de migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del albergue Hermanos en el Camino, Solalinde comenta que lo mejor que les podría pasar a esos “nuevos esclavos” del crimen organizado es que los metieran a la cárcel porque, aunque les den una sentencia larga, por lo menos se zafarían del poder de los narcotraficantes.

Tras mencionar las entidades en las que ocurre este fenómeno, insiste en que es Veracruz el territorio donde es mayor el reclutamiento forzado. Y advierte que ahora los criminales están secuestrando a los adolescentes de los pueblos y ciudades veracruzanas.

“Esto lo sabe el gobernador Javier Duarte. Él es consciente de lo que está pasando en Veracruz. Le hemos dicho que ya se están llevando a los jóvenes de su estado a otros lados para que trabajen para Los Zetas, pero no ha hecho nada, pese a las denuncias presentadas en las que incluso están involucradas autoridades locales”, relata Solalinde.

–Usted ha hablado de que en Veracruz hay fosas clandestinas y que incluso otros sacerdotes le han comentado sobre ese tema –se le pregunta.

–Sí. A los que no aceptan (trabajar para las organizaciones criminales) los matan y los desaparecen; son desechables, pues los sustituyen por otros. Así pasó con los migrantes de San Fernando (Tamaulipas). Algunos sobrevivientes dijeron que los habían matado (a sus compañeros) por negarse a trabajar para ellos. Los matan y los entierran en fosas. Seguramente eso está pasando en Veracruz, pero también en el Estado de México.

Señala que han tenido información de que en territorio mexiquense Los Zetas también plagian a los migrantes para reclutarlos en sus filas. Y, al igual que lo hacen con los jóvenes de Veracruz, los llevan a otras entidades como carne de cañón.

### **Foro de denuncia**

Alejandro Solalinde adelanta que la delegación de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA – integrada por el expresidente español Felipe González; el secretario ejecutivo del organismo internacional, Santiago A. Cantón, y el abogado especialista de dicha relatoría, Álvaro Botero– analizará la denigrante situación que viven los migrantes.

“Todo ha empeorado. Hoy, las extorsiones, secuestros y reclutamiento no sólo afectan a los jóvenes migrantes, también a hombres de cualquier edad y a mujeres. Es una nueva esclavitud, es una catástrofe. Creo que lo único que nos queda es presionar en foros internacionales porque aquí nadie hace caso (a las denuncias)”, advierte.

El Informe alternativo sobre protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y presentado a la ONU a finales del año pasado, sostiene que el reclutamiento de menores para el crimen organizado se incrementó de 25 mil a 35 mil en los últimos cuatro años.

De acuerdo con el análisis, hace una década la edad de los reclutados oscilaba entre 20 y 35 años. Ahora, los jóvenes de entre 12 y 15 años ingresan a las filas de la delincuencia organizada.

El documento señala que de diciembre de 2006 a octubre de 2010, entre mil 60 y mil 200 menores fueron víctimas de la guerra del gobierno federal contra el crimen organizado. Además, se incrementó en 34% el número de arrestos de adolescentes acusados de tener vínculos con organizaciones delincuenciales, portación de armas y delitos contra la salud.

El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, también ha denunciado el reclutamiento forzado de niños de 12 años en Coahuila por parte de zetas “para entrenarlos y utilizarlos posteriormente como halcones”.

El miércoles 13, al terminar la peregrinación de la diócesis de Saltillo a la Basílica de Guadalupe, el obispo Vera dijo que algunos de los niños reclutados reciben hasta mil 500 pesos como pago cada semana.

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, perteneciente al obispado de la diócesis de Saltillo, tiene registradas 185 desapariciones forzadas en Coahuila, en tanto que las autoridades estatales aseguran que han recibido 219 denuncias de desaparición de personas.

El mes pasado, Vera declaró que el crimen organizado obtiene 50 millones de dólares al año por el secuestro de migrantes que atraviesan territorio nacional. El día 14, en Saltillo, al concluir el taller internacional por el “Derecho a emigrar sin violencia”, el obispo manifestó la urgencia de “remover este espantoso calvario que están padeciendo nuestros hermanos migrantes”.

Comentó también que en diversos países hay preocupación por la grave situación por la que atraviesan los migrantes indocumentados en territorio nacional durante su itinerario hacia Estados Unidos, aun cuando el gobierno federal les otorgue un estatus migratorio regular durante su estancia en el país; eso puede lograrse si ellos consiguen una visa o se da un acuerdo de supresión de visas entre México y sus países de origen, sobre todo los de Centroamérica, expuso Vera.

Los participantes exigieron que se garantice la seguridad de los migrantes; que se reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a los indocumentados, así como a la casa del migrante y a personas defensoras de derechos humanos; asimismo, poner fin a la impunidad de las autoridades y perseguir, consignar y sancionar a los autores de secuestros, masacres, violencia sexual y otros abusos contra los migrantes.

Además, dijeron que, para enfrentar la ineficiencia de instituciones de procuración de justicia a niveles estatal y federal, debe crearse una instancia especializada para investigar los delitos conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y que esté en contacto permanente con las organizaciones sociales defensoras de los migrantes.

## **La nueva caravana**

Para denunciar las violaciones, secuestros, extorsiones y reclutamiento forzado de jóvenes, Solalinde organizó dos movilizaciones en los últimos meses.

La primera, llamada Paso a Paso hacia la Paz, fue la del 8 de enero pasado en la ciudad de Arriaga, Chiapas, y culminó en el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca. Durante el trayecto, en la población de Chahuites, los organizadores se entrevistaron con el gobernador Gabino Cué.

En la segunda, realizada el 8 de mayo, los migrantes centroamericanos cargaron cruces de madera para escenificar el suplicio que significa su paso por México; incluso se unieron a la Marcha por la Paz que encabezó el escritor Javier Sicilia desde Cuernavaca y que terminó en el Zócalo de la Ciudad de México.

En esta nueva caravana Paso a Paso Hacia la Paz, que desde el sábado 23 avanza hacia México, Solalinde y organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., Nuestros Lazos de Sangre, Familia Latina Unida, Alianza Braceros del Norte, y la Red Migrante y Cultura Migrante congregaron a migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala.

El objetivo es llegar a Ixtepec, Oaxaca, el jueves 28 y realizar ahí varios eventos. Luego, los participantes marcharán a Coatzacoalcos, Veracruz, donde tendrán un encuentro con los integrantes de la relatoría de la CIDH, que realizan su segunda visita a México –la primera fue en 2002–, para discutir con ellos sobre los derechos humanos de los migrantes ilegales.

En un comunicado difundido a principios de junio, cuando anunciaron la segunda caravana Paso a Paso Hacia la Paz, los organizadores señalan que el origen de los secuestros de migrantes en México está vinculado con los territorios controlados por el crimen organizado.

Dicen, por ejemplo, que ese delito se observa particularmente en Tamaulipas, Tabasco y Veracruz, donde la delincuencia organizada cuenta con la complicidad de autoridades locales, estatales y federales.

“Lamentablemente, en esos estados la justicia es una quimera remota, una ambición atrincherada, el espejismo de una democracia fallida. Es en esas tierras en las que ocurren los secuestros masivos en contra de la población migrante, siempre bajo la opacidad de una autoridad omisa, insensible y sin vocación ni preparación para enfrentar al crimen organizado.”

En su documento señalan que el estado “pionero” de esta situación es Veracruz, que se ha convertido en lugar de referencia en cuanto a secuestros y agresiones cometidas en contra del flujo migratorio en tránsito por sus localidades.

También denuncian que la población civil de ese estado se encuentra paralizada por la impunidad pues las autoridades dejaron de lado su tarea de velar por el bienestar social y la procuración de justicia. “El simple hecho de pronunciar la palabra zeta puede ser motivo de persecución, extorsión e incluso la muerte”, advierten.

Los Zetas, exponen, obtienen ganancias millonarias mediante el secuestro masivo de los migrantes cuya penuria los obliga a viajar en trenes de carga; lo que se traduce en la multiplicación de cementerios escondidos, fosas resguardadas en el olvido y cadáveres sepultados en la deshonra del gobierno mexicano.

“La masacre de nuestros hermanos centroamericanos es evidente. Por los más de 10 mil secuestros cada seis meses, las familias residentes en Estados Unidos y Centroamérica han pagado el precio de la incompetencia gubernamental y la cotidiana corrupción que abrumba al país.”

Exponen que la segunda caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un esfuerzo por frenar y difundir a nivel internacional la innegable realidad de los secuestros de migrantes en tránsito por México, e insisten en que el gobierno de Veracruz no hace nada por frenar los secuestros y el reclutamiento forzado de migrantes y población juvenil.

Por ello, advierten, ese tramo de la caravana Paso a Paso Hacia la Paz constituye un riesgo necesario porque el gobierno de Veracruz ha negado sistemáticamente los secuestros:

“No hay información sobre servidores públicos que hayan sido procesados por sus nexos con el crimen organizado –dicen–, salvo un agente municipal y algunos centroamericanos. Sin embargo, nunca se han levantado cargos contra los líderes de la delincuencia organizada ni contra los funcionarios de gobierno que, por comisión y omisión, han permitido el secuestro.”

Jorge Carrasco Araizaga, Regina Martínez. “Veracruz, zona de terror”. *Proceso* número 1821, 25 septiembre 2011. pp 6-12. <https://www.proceso.com.mx/282300/veracruz-zona-de-terror>

### **“Veracruz, zona de terror”**

Rota la tranquilidad en territorio veracruzano por los reacomodos de los cárteles de la droga –no obstante la presencia masiva de elementos de la Marina en todo el estado–, la violencia se ha recrudecido en el último año, lo que convierte a Veracruz en la entidad más inestable por las balaceras y las constantes ejecuciones, sobre todo de zetas, quienes dominaron el entorno en la administración de Fidel Herrera. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció su llegada, es el que comienza a tomar posición. A ellos se les atribuye el medio centenar de violentas ejecuciones de la semana pasada en Boca del Río y el puerto jarocho.

XALAPA, VER. - La búsqueda de nuevos liderazgos entre la delincuencia organizada ha hecho de 2011 –el de la llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno estatal– uno de los peores años en la historia del estado de Veracruz, donde suman cientos los muertos y desaparecidos y el temor crece entre la población por las balaceras indiscriminadas en los principales centros urbanos y aun en esta capital.

La tortura y ejecución de 35 personas cuyos cuerpos fueron arrojados la tarde del martes 20 al pie del Monumento a los Voladores de Papantla y frente a una de las principales áreas comerciales de Boca del Río –la zona conurbada del puerto de Veracruz– constituye el hecho más sangriento de la violencia que escaló alarmantemente desde el anterior gobierno, el de Fidel Herrera Beltrán.

A pesar de la conmoción causada por esa demostración de fuerza y del despliegue de un millar de efectivos del Ejército, la Marina y la policía estatal para proteger el Decimoprimer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia el jueves 22 y viernes 23 en el hotel Fiesta Americana de Boca del Río, el día 22 aparecieron 14 cadáveres más en distintos puntos de esta ciudad y en barrios del puerto jarocho.

La tarde del martes 20, apenas tres horas después de que fueron tirados los primeros 35 cuerpos en Boca del Río, el procurador estatal, Reynaldo Escobar Pérez, declaró que varios de ellos eran miembros de la delincuencia organizada recién evadidos de tres penales locales.

Testigo de la penetración del narco en el estado desde los cargos públicos que ha ocupado durante una década, Escobar dijo haber echado mano de Plataforma México –la base de datos del gobierno federal sobre la actividad delictiva en el país– para determinar que entre las víctimas había delincuentes dedicados al secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo y otros ilícitos.

Con ello dio por válidos los mensajes inscritos en las mantas dejadas junto con los cadáveres y el “comunicado de prensa” enviado en forma anónima a las redacciones de los medios locales, que sólo publicó el periódico porteño Notiver, especializado en nota roja.

Aunque ninguna organización reivindicó la autoría, los escritos indicaban que los asesinados pertenecían a Los Zetas, el cártel que durante el gobierno de Herrera comenzó a tener el control delictivo en el estado a través de la organización conocida como La Compañía.

Según esa versión, el propósito es “sacar a Los Zetas” de territorio veracruzano, por lo que las autoridades temen más ejecuciones entre sicarios, colaboradores y aun agentes ministeriales y policías municipales y estatales.

Las primeras informaciones extraoficiales adjudicaron los crímenes a los matazetas, al cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció, en el portal de internet YouTube, su “llegada” a la entidad, luego de que, según el procurador, Los Zetas asesinaron en el puerto jarocho a los periodistas de Notiver Miguel Ángel López Velasco (en julio) y Yolanda Ordaz de la Cruz (en agosto).

El grupo, que en el video mostró a una treintena de paramilitares, es una escisión del cártel de Sinaloa y mantiene una disputa con La Resistencia, organización escindida de La Familia Michoacana y que durante la administración de Herrera se asentó en el sur de Veracruz.

Hoy, ante cada hecho relevante de violencia, el gobierno de Duarte suele enviar mensajes antizetas desde su cuenta de Twitter para asegurar que “en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”; incluso elude hablar de los reacomodos de Los Zetas provocados por el surgimiento de nuevos liderazgos de la propia organización en el estado, todo ello pese a que el cártel domina las actividades de delincuencia organizada en territorio veracruzano.

### **Los reacomodos**

Durante el gobierno anterior La Compañía se organizó en la entidad como “consejo de gobierno” o “triumvirato”. Lo integraban Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss o el Doble X, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado, según una investigación judicial abierta en Estados Unidos en noviembre de 2007, a la mitad del gobierno de Herrera Beltrán.

De acuerdo con la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), La Compañía operó en todos los estados mexicanos que lindan con el Golfo entre 2006 y 2008 para traficar droga a Estados Unidos. En Veracruz se pudo establecer gracias al apoyo y control de autoridades municipales y estatales (Proceso 1736).

La Compañía fue integrada por los jefes del cártel del Golfo y su entonces brazo armado, Los Zetas, que estaba formado por desertores del Ejército. Pero tras su separación, a finales de 2008, la organización de exmilitares comenzó a dominar Veracruz, aun cuando había presencia de células del cártel del Golfo.

Varios de los integrantes de La Compañía ya han sido detenidos. Uno de ellos, Aurelio Cano Flores, incluso fue entregado el mes pasado en extradición a Estados Unidos, donde es juzgado en la corte federal para el distrito de Columbia por tráfico de cocaína y marihuana, junto con otros 18 miembros de esa organización.

La crisis de inseguridad se desató desde marzo de 2007, con una balacera en una carrera de caballos en el rancho Villarín, propiedad de Marciano Nayen Arriola, en la congregación Santa Fe, municipio de Veracruz. Nayen se dedica a la actividad hotelera y restaurantera precisamente en Boca del Río.

La prensa local informó que el objetivo había sido Efraín Teodoro Torres, Z-14, aunque refirió también la presencia no confirmada de Tony Tormenta en la carrera donde se cruzaban apuestas millonarias. La violencia no se detiene desde entonces.

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de 2009, dado a conocer en febrero de este año, detalla que la incidencia delictiva en Veracruz se incrementó 39.1% entre 2008 y 2009, al pasar de 4 mil 400 delitos por cada 100 mil habitantes a 6 mil 120.

Al realizar una auditoría de desempeño de la Policía Federal (PF), la Auditoría Superior de la Federación encontró que esas cifras colocaron a la entidad entre una de las más violentas en las que esa fuerza federal coordinó operativos conjuntos.

El control inicial de La Compañía y el posterior dominio de Los Zetas se trastocó con el cambio de gobierno. La llegada de Duarte, el 1 de diciembre pasado, agudizó la crisis de inseguridad. A finales de la administración de Herrera Beltrán la violencia se concentraba en los municipios del norte de la entidad, limítrofes con Tamaulipas, como Pánuco y Poza Rica. A inicios de 2011 el crimen organizado avanzó hacia plazas de mayor importancia, como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y la propia capital estatal.

## **Psicosis**

El primer año de gobierno de Duarte ya quedó marcado como el más violento en el estado. Tan sólo en agosto y septiembre se registraron más de 200 muertos en trifulcas protagonizadas por sicarios y entre éstos y fuerzas federales, principalmente en zonas urbanas y a cualquier hora del día. Las balaceras han provocado psicosis entre la población. Cifras conservadoras mencionan que han caído 300 personas en esos encuentros.

A diferencia de su antecesor, Duarte se plegó a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón “contra el narcotráfico” y permitió que la Infantería de Marina sustituyera al Ejército en los principales operativos.

La confrontación política entre Herrera y Calderón limitó la presencia del gobierno federal en Veracruz en la política contra la delincuencia organizada entre 2007 y 2010, si bien Herrera dejó que la Secretaría de la Defensa designara a los secretarios de Seguridad Pública y entregó a la Marina el control del C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).

Durante la gestión de Herrera los operativos del Ejército se concentraron en zonas rurales, mientras que la PF sólo participó en acciones conjuntas, sin que éstas tuvieran mayor incidencia en los ataques a la delincuencia organizada.

Desbordado por la violencia, desde el inicio de su gestión, Duarte prácticamente dejó la seguridad del estado en manos de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, aunque el Ejército sigue participando en operativos tanto en zonas urbanas como rurales.

Apenas se dio el cambio de gobierno, el jefe de la Armada, el almirante Francisco Saynez Mendoza, oriundo de la entidad, acudió el 19 de enero de este año a la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, para advertir: “Veracruz es mi tierra, se va a limpiar”.

La Marina hizo entonces del puerto de Veracruz su principal centro de operaciones contra el narcotráfico, con más de 2 mil efectivos de Infantería y Fuerzas Especiales, desplegadas al inicio de agosto pasado, según reveló el diario La Jornada el 23 de ese mes.

El objetivo militar son Los Zetas, por lo que la fuerza naval especializada en operaciones continentales se envió directamente al propio puerto y a Xalapa, pues según la explicación oficial los integrantes de ese cártel se trasladaron de Tamaulipas hacia el sur en abril pasado, como reacción a los operativos militares en ese estado tras el descubrimiento de las fosas clandestinas en el municipio de San Fernando.

El despliegue ha incrementado los enfrentamientos en la entidad y ha tenido severos costos en ambos bandos. La Marina ha sufrido el secuestro, tortura y desaparición de algunos de sus miembros, lo que ha obligado a los marinos a cambiar de rutinas cuando están francos, lo mismo que las actividades de sus familiares. Los mandos les han sugerido incluso que modifiquen su apariencia y modo de caminar.

La Marina ha presentado a varios zetas como supuestos responsables de los agravios sufridos. Además, apenas el 9 de septiembre pasado, en una demostración de que ha trasladado su principal centro de operaciones al puerto, allí anunció el desmantelamiento de una red de “comunicación táctica” de Los Zetas en el estado.

Informó también que en operativos realizados entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre aseguró antenas, radios y unidades de telecomunicaciones en Poza Rica, Cofre de Perote, Naranjos, Tepetzintla, Veracruz, Orizaba, Tantoyuca y Xalapa. Además, dio cuenta de la detención de 80 personas, de las cuales 30% son mujeres.

Según el vocero de la Secretaría de Marina, el contralmirante José Luis Vergara, el cártel de origen castrense controlaba la información sobre los operativos de las Fuerzas Armadas, los puestos de control vehicular y la llegada de convoyes de organizaciones enemigas.

Las demostraciones de la semana pasada, avaladas por el gobierno de Duarte como acciones antizetas, coinciden con los operativos del gobierno federal contra la organización delictiva que dirige El Lazca, pero también demuestran la facilidad con la que operan los grupos delictivos que junto con las acciones militares han aterrorizado al estado.

### **Cuota roja**

Los 35 cadáveres fueron arrojados el martes 20 a plena luz del día sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en Boca del Río, abajo del paso a desnivel Los Voladores de Papantla, frente al centro comercial Plaza Américas, una de las zonas comerciales más importantes de esa conurbación.

Pese a que se trataba de una hora hábil, las autoridades no se percataron cuando al lugar llegaron dos camiones de redilas para arrojar sobre el pavimento los cadáveres de hombres y mujeres semidesnudos, maniatados y con huellas de tortura.

Ante el cerco informativo impuesto por el gobierno y los propios grupos delictivos, la noticia empezó a difundirse de inmediato en las redes sociales, perseguidas penalmente por las propias autoridades estatales. El hecho pronto se volvió noticia internacional y el procurador quiso salir al paso, pero a tropezones. Pronto resolvió que se trataba de delincuentes.

Dos horas después de que se conociera lo que hasta ahora ha sido la principal ostentación de la violencia en el estado, el procurador Reynaldo Escobar Pérez, quien en el gobierno de Herrera fue secretario general de Gobierno –cargo al que llegó luego de pasar por la presidencia municipal de Xalapa–, ya había abierto la averiguación previa 843/2011.

El hecho ocurrió un día después de la fuga simultánea de 32 reos de los penales Duport Ostión en Coahuila, La Toma en Amatlán de los Reyes y el de Cosamaloapan, que provocó la renuncia del director general de Prevención y Readaptación Social, Víctor Hernández, y la detención de seis directivos de esos reclusorios.

En su edición del miércoles 21, Notiver difundió un mensaje que, asegura, fue colocado junto a los cadáveres y donde se habla de 50 ejecutados y no de 35, como sostienen el procurador y el gobernador. La cifra, sin embargo, llegó el jueves 22 por la noche a 49, con los 14 cuerpos encontrados ese día en distintos puntos de la zona conurbada del puerto y en la capital estatal, en condiciones similares a las primeras víctimas.

Según el rotativo, el comunicado fue enviado a todas las redacciones de periódicos, televisoras y estaciones de radio del estado. Sin embargo, sólo fue publicado en Notiver, cuyos directivos no explicaron cómo llegó a su redacción, aunque aseguran que el mensaje “lo vieron muchas personas que pasaban caminando y otras que iban en sus vehículos”.

El contenido dice: “Este día 20 de septiembre, aproximadamente a la 5 PM, aparecieron cincuenta cadáveres de hombres y mujeres ejecutados, pertenecientes a integrantes del cartel de Los ZETAZ (sic), tirados en el bulevar Ruiz Cortines, abajo del puente de Los Voladores de Papantla, frente a la Plaza Américas, todos con huellas de tortura.

“Estaban amarrados de manos y pies con cinchos, tenían pintadas unas Zetas en la espalda y con la leyenda ‘Por Z’, unos cuerpos estaban tirados en el suelo y tapaban la circulación de los autos que circulaban de Mocambo a Veracruz y otros estaban dentro de las redilas de dos camionetas Nissan.

“Fueron dejados con dos mantas con mensajes que alcanzaban a leerse: ‘No más extorsiones, no más muertes de gente inocente. Fuera ZETAZ (sic) del estado de Veracruz, aun faltan más ministerios públicos. Comandante Marcelo Castillo Torres. Zetas así acabaron o como los que hemos matado’.”

Al final, hacen un llamado: “Al pueblo veracruzano, no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas, si lo hace es porque quieren”.

La violencia se ha incrementado en casi todo el territorio veracruzano. Incluso se han registrado sucesos jamás vistos en la entidad, como la explosión de bombas en lugares públicos como los ocurridos en el puerto de Tuxpan, donde la mañana del 2 de agosto un comando lanzó un artefacto que explotó en la plaza cívica, muy cerca del Palacio Municipal, dejando a tres personas heridas.

Otro hecho que causó estupor e indignación, el mayor atentado perpetrado hasta ahora contra la sociedad veracruzana fue la explosión de un artefacto lanzado por desconocidos en el bulevar Manuel Ávila Camacho del puerto de Veracruz, cerca del Acuario, donde murió una persona y tres resultaron gravemente heridas, entre ellas dos menores de edad de una familia del Estado de México que se encontraba de vacaciones.

Al comienzo del gobierno de Duarte, el 15 de enero pasado, la sociedad jalapeña se escandalizó por una balacera en la colonia Lomas de Casa Blanca, una de las más populares de la zona, entre tropas del Ejército y un supuesto grupo criminal. El enfrentamiento duró más de 12 horas y dejó 14 muertos, entre ellos dos militares. “No hubo víctimas de civiles”, según el reporte oficial.

Después de la balacera los familiares de las víctimas reclamaron los cuerpos de Lorenzo García, ingeniero en sistemas de 44 años, y de Miguel Ángel Sánchez Torres, un empleado de seguridad. Ambos eran originarios de Nuevo León y habían sido reportados como desaparecidos.

Sus deudos aseguraron que no eran delincuentes sino víctimas del grupo criminal que se enfrentó con las fuerzas federales, ya que los habían secuestrado cuando llegaron a esta ciudad el 10 de enero en misión de trabajo, para luego exigir un rescate. Sin embargo, “nos los entregaron muertos”, acusó la esposa de una de las víctimas.

Hoy la tranquilidad que caracterizaba a esta ciudad, famosa por su actividad cultural y artística, ha sido rota por las constantes balaceras, enfrentamientos y presencia de las fuerzas castrenses. Hoy, es cotidiano ver a efectivos encapuchados y fuertemente armados rondando las calles de esta capital en unidades artilladas.

Ricardo Ravelo. “La multiplicación de los “paras””. *Proceso* número 1822, 2 de octubre 2011. Pp 10, 11, 12, 15. 16. <https://www.proceso.com.mx/282968/la-multiplicacion-de-los-e2-80-9cparas-e2-80-9d>

### **“La multiplicación de los “paras””**

La incapacidad del aparato de seguridad del Estado sigue dando frutos: es el caso de la formación de cuerpos paramilitares, como los autodenominados Matazetas, quienes se atribuyeron la masacre de 35 personas en Boca del Río, Veracruz. Aunque el gobierno de Felipe Calderón niega que existan grupos de este tipo, el experto Edgardo Buscaglia asegura que en México operan 167 de ellos. Se trata, dice, de sicarios formados en la milicia o en las policías y que no sólo trabajan para los cárteles, sino para gobiernos estatales o empresarios.

El vacío de poder que priva en México, la simulación electoral, el financiamiento de las campañas políticas por el narcotráfico y la acelerada pérdida de los controles territoriales por parte del Estado son “el caldo de cultivo más eficaz para la proliferación de los grupos paramilitares en el país”, plantea Edgardo Buscaglia, asesor de las Naciones Unidas, director del Centro de Desarrollo Económico y Derecho Internacional de la Universidad de Virginia y profesor de derecho internacional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Señala que mientras el presidente Felipe Calderón continúe combatiendo al crimen organizado “de manera sesgada”, sin golpear “el nervio financiero de la mafia”, poderes como el paramilitarismo seguirán arrancando “pedazos del Estado” hasta que México se precipite al abismo, como pasó en Afganistán, Kosovo y, en los años ochenta y noventa, en Colombia, país donde esos grupos se popularizaron con el nombre de “paras”.

A Buscaglia no le sorprende la aparición del grupo paramilitar autodenominado Los Matazetas, que irrumpió en el escenario nacional tras la matanza de 35 presuntos integrantes del cártel de Los Zetas en el puerto de Veracruz, pues afirma que aunque el gobierno federal niegue la presencia de paramilitares en México, este fenómeno existe desde hace mucho tiempo.

Según el experto, en México operan 167 grupos paramilitares que son financiados por empresarios empeñados en proteger “vida y propiedad”, garantías que ya no puede otorgar el Estado mexicano, y en otros casos –asegura– son pagados por los propios gobernadores, quienes ante la incapacidad de otorgar seguridad a la gente, pagan a estos grupos armados para limpiar territorios y salvar los mercados de la droga que hoy ve amenazados el cártel de Sinaloa, la organización criminal que el propio gobierno federal pretende consolidar en el territorio mexicano.

Explica: “Los grupos paramilitares en México existen desde hace mucho tiempo. Los Zetas, por ejemplo, son una expresión del paramilitarismo ligado a un grupo criminal, en este caso al cártel del Golfo. Los Zetas y todo lo que se desprende de ellos –policías, mercenarios y otros grupos – llevan a cabo tácticas militares de protección, control territorial y de mercados, y su función primordial es limpiar los territorios en beneficio de los grupos que les pagan.

“Lo que hoy preocupa, y mucho, es la proliferación de estos grupos paramilitares, que el gobierno quiere ocultar porque ya refleja una fragmentación cada vez mayor de la estructura del Estado. Existen porciones del Estado que han sido compradas al por mayor por grupos empresariales oligopólicos y monopolísticos; otros pedazos del Estado están en manos de grupos ilegales desde hace 10 años, cuando inició la caótica transición política que viene conduciendo al país no a una democracia participativa, sino a lo que yo llamo una mafocratización”.

De acuerdo con Buscaglia –también profesor de Economía y Derecho del Crimen e investigador de la Universidad de Stanford–, el proceso de fragmentación del Estado ha derivado en un rompecabezas en el cual “cada trozo le pertenece a un cártel. Por ello, el gobierno de Calderón no puede proteger vida y propiedad, y ese vacío que deja el Estado es aprovechado por los grupos paramilitares”.

–¿Cómo surgen los grupos paramilitares en México? ¿De dónde vienen? –se le pregunta.

–Muchos son mexicanos, provienen de las propias policías o del Ejército. En otros casos son traídos del extranjero y contratados por los empresarios o algunos gobiernos estatales.

“El caso de las policías municipales que controlan el mercado de migrantes en una determinada región y la práctica de entregarlos a Los Zetas para asesinarlos son ejemplos claros de táctica paramilitar. Su tarea es controlar un mercado y así favorecer a los grupos que les pagan. En México hay una mezcla de grupos paramilitares: los pagados por empresarios, y los tradicionales, que pertenecen a los cárteles de la droga, como fue el caso de Los Zetas del cártel del Golfo”.

Negociador de las Naciones Unidas en países como Afganistán y Nigeria, Buscaglia sostiene que la desarticulación del gobierno y el desorden que priva en todo el país aumenta la percepción de inseguridad entre la gente y en la clase empresarial, a la que hoy ve paralizada y sumida en su interés de proteger sus negocios:

“El escenario de México es hartamente complicado. Estamos más cerca del abismo que antes, y este proceso está sujeto a un efecto multiplicador, pues cuanto más percepción de inseguridad tienen los empresarios, más están dispuestos a pagar a compañías privadas estadounidenses para que les provean de cinco a 10 mercenarios que protejan su patrimonio y su vida, lo que genera más paramilitarización.”

Según Buscaglia, varios factores favorecen la proliferación de los grupos paramilitares: “El gobierno federal no puede controlar la embestida criminal debido a que su estrategia para enfrentar la tragedia social y política que vive México es mediática. Además, es claro que el presidente Calderón está muy mal asesorado, pues sus asesores extranjeros y nacionales tienden a negar lo que todo mundo ve, y esta postura miope refleja el temor a que se desate un potencial bloqueo del flujo de inversiones extranjeras, con lo cual se les caería el modelo político-empresarial mafioso que prevalece en México desde los años ochenta.

“Y es que hay grandes inversiones en determinados sectores protegidos de la economía que han sido protegidos por el partido en turno, llámese PRI, PAN o PRD, aquí no hay ideología, porque en México la simulación electoral es un deporte nacional, pues los candidatos de todos los partidos están manejados por los mismos focos de poder.

“A mí me han dicho que la simulación electoral es una falacia, porque en México se celebran elecciones. Ante esto yo digo que, en efecto, los candidatos van a elecciones, pero están previamente pridigitados por esos factores de poder que están tras bambalinas, y esos factores de poder son los que han generado la fragmentación del Estado, que es responsable de la paramilitarización que estamos viviendo.”

–En Colombia y otros países de Latinoamérica hay grupos paramilitares desde hace décadas. ¿Qué otras causas dan origen a ese fenómeno desestabilizador?

–En Colombia el paramilitarismo fue auspiciado por el propio Estado; era una paramilitarización centralizada. En México la paramilitarización es un síntoma del Estado débil y fallido, y se prohija por el vacío de poder y la falta de legitimidad del gobierno federal.

“Yo no encuentro palabras para expresar lo que se vive en México. Pienso en casos como el de Rusia, donde hay una delincuencia organizada consolidada y gestionada por el Estado. En ese país, si alguien es víctima de un delito y por causalidad le corresponde al grupo criminal protegido, al agraviado se le puede procesar con una causa penal por denunciar. Ese no es el futuro que se quiere en México, aunque por desgracia la estrategia del gobierno federal, por acción u omisión, conduce al país a una situación similar a la de Rusia.”

## **Fenómeno de la descomposición**

La aparición en Veracruz del grupo paramilitar Los Matazetas causó revuelo en el país y fuera de él, pero no es el único que opera en el territorio mexicano. Desde 2005, la descomposición de las corporaciones policiacas estatales y federales, así como la disputa territorial de los cárteles, han propiciado la formación de los llamados comandos de la muerte o núcleos paramilitares al servicio del narcotráfico.

En 1996, tras desertar del Ejército por razones hasta ahora desconocidas, surgió la organización armada Los Zetas, una de las expresiones más acabadas del paramilitarismo en México. Agrupados en torno del entonces jefe del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, este grupo comenzó a sembrar violencia.

Pronto dio muestras de su poder: levantones, secuestros, matanzas y extorsiones fueron las modalidades criminales que pusieron en práctica y que hasta hoy los caracterizan, pues fue el núcleo armado ligado al narcotráfico que mejor diversificó sus actividades ilegales. Actualmente son reconocidos por la DEA como un cártel independiente y con presencia en una veintena de entidades.

En 2005 surgió en Guerrero otro núcleo llamado El Comando Negro, liderado por agentes de la Agencia Federal de Investigación (la AFI que encabezaba Genaro García Luna, en aquel tiempo la corporación policiaca “modelo” del sexenio de Vicente Fox). Esos agentes federales estaban adscritos a la delegación de la PGR en Acapulco. Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/2005, los policías, que actuaban como secuestradores y sicarios en sus tiempos libres, estaban al servicio del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

De acuerdo con la indagatoria citada, los agentes federales participaron en el secuestro de un grupo de zetas que fueron entregados a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, quien junto con otros pistoleros los interrogó en una casa de seguridad mientras los grababan. En el video, que fue entregado a la PGR y después difundido por internet, se observa cómo alguien encañona a uno de los presuntos zetas y le dispara en la cabeza. Todos fueron asesinados de la misma forma.

Por aquellos años, el cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín Guzmán Loera, creó su propio grupo paramilitar: Los Pelones. Era un equipo armado que se enfrentó a Los Zetas para expulsarlos del estado de Guerrero y así ocupar esa codiciada plaza. En ese estado era común ver a grupos ligados a los cárteles de la droga desatando balaceras y matanzas sin que ninguna autoridad les pusiera freno. Hasta la fecha ocurre.

En 2008 surgió el grupo denominado La Policía del Calendario, cuyos integrantes presuntamente tienen formación militar y están al servicio exclusivo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los pilares del cártel de Sinaloa.

Esos paramilitares no aparecieron en video como Los Matazetas. Están mencionados en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/256/2008, integrada por la PGR en contra del presunto narco colombiano Ever Villafañe Martínez o Marco Antonio Espinoza Tovali. La compañera sentimental de éste, Altigracia Espinoza Aguilar, refiere ahí que tanto ella como su novio fueron secuestrados por La Policía del Calendario el 30 de julio de 2008, cuando circulaban por la carretera libre a Cuernavaca, Morelos.

Ella declara que los sicarios al servicio de El Mayo la torturaron al tiempo que le mostraban fotografías de Arturo Beltrán Leyva, capo que presuntamente estaba relacionado con Villafañe y a quien Zambada pretendía eliminar.

Además, a principios del presente año, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que en Chiapas operan grupos paramilitares que tienen asoladas a poblaciones como Las Perlas, en el municipio de Altamirano, y El Carrizal, comunidad de Ocosingo.

En un comunicado, ese frente denunció que los paramilitares están encabezados por Humberto Castellanos y acusaron al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, de auspiciar el surgimiento de este tipo de organizaciones en todo el estado “para acallar a los grupos de campesinos disidentes”.

El 23 de septiembre, dos días después de que fueron arrojados 35 cadáveres de presuntos zetas en plena zona turística de Veracruz-Boca del Río, apareció en el portal conocido como El Blog del Narco un video en el que cinco personas encapuchadas, desarmadas y totalmente vestidas de negro hablan sobre ese hecho y hacen pública la existencia de su nueva organización: Los Matazetas.

También dijeron ser miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación, un brazo del cártel de Sinaloa que, según las autoridades, proviene de la célula que encabezó Nacho Coronel, muerto el 29 de julio de 2010 durante un enfrentamiento con el Ejército en el municipio jalisciense de Zapopan.

La aparición de este grupo paramilitar que dice tener la misión de limpiar al estado de Veracruz de los grupos que extorsionan y secuestran –además de “respetar a los poderes ejecutivos” tanto federal como estatal y comprender que las Fuerzas Armadas no puedan actuar al margen de la ley–, causó temor porque aviva la sospecha de que los grupos paramilitares empiezan a suplantar al Estado en tareas de esta naturaleza.

Los Matazetas ofrecieron una “disculpa” al pueblo veracruzano por la violencia que se ha desatado, al tiempo de que se adjudicaron la muerte de los 35 presuntos zetas. Sin embargo, el gobierno de Veracruz niega la existencia del grupo paramilitar y de manera conjunta con la PGR investiga la masacre.

Por su parte, el gobierno federal reconoció la existencia del grupo, pero tuvo el cuidado de no referirse directamente a él como Matazetas. El 27 de septiembre, sin entrar en detalles, el secretario de Gobernación, José Francisco Blake, leyó un comunicado en el que expuso que el gobierno federal es el que encabeza la lucha contra el crimen organizado con fundamento en la ley y a través de las instituciones formalmente constituidas para ello.

Sin nombrar a los Matazetas, cuyo video han visto más de 65 mil personas en internet, Blake Mora añadió: “Cualquier otra expresión al margen de la ley que pretenda erigirse en combatiente del crimen carece de legitimidad necesaria y, con independencia de la causa o motivación, enfrentará la fuerza del Estado”.

Un día después, el 28 de septiembre, Alejandra Sota Mirafuentes, vocera del gobierno federal, negó que en el país operen paramilitares, y se refirió implícitamente a Los Matazetas al reiterar: “Todo grupo que actúa al margen de la ley, que pone en riesgo la tranquilidad, la seguridad y la dignidad de las personas, será perseguido y llevado ante la justicia.

“Veracruz no será la excepción. La ubicación geográfica de Veracruz lo convierte en un punto estratégico para redes criminales. Su infraestructura portuaria y su colindancia con Tabasco y Chiapas, estados fronterizos con Guatemala, y por el otro lado con Tamaulipas, la frontera con el mayor intercambio comercial con Estados Unidos, hacen de la entidad un paso codiciado para el trasiego de drogas hacia el centro y norte del país.”

Edgardo Buscaglia cuestiona que el gobierno federal no reconozca directamente a los grupos paramilitares, pues señala que en varias entidades del país ya suplantaron al propio Estado:

“Hay diversos grupos paramilitares que ofrecen resolver homicidios, cobrar una deuda o investigar casos de desapariciones. Esto es evidente en Guerrero, en Durango y en Sinaloa, bolsones territoriales donde ya es claro el Estado fallido. De seguir esa orgía de corrupción y de financiamiento electoral por parte del narco, y en este caos institucional, no veo para México otro fin que precipitarse a un abismo como el que vive Afganistán.”

—¿Qué pasa con las clases empresarial y política? ¿Están dormida?

—Tratan de proteger sus propios intereses pero no se dan cuenta de que colectivamente están perdiendo todo. Eso en teoría de los juegos se llama “el dilema del prisionero”. La reacción de los empresarios vendrá cuando el narco les penetre sus círculos sociales, les derribe sus aviones o les haga estallar bombas en sus casas o empresas, como pasó en Colombia.

“La clase empresarial actuará cuando sienta tanto dolor y sufrimiento como los padres o las madres de Ciudad Juárez que han perdido a sus seres queridos, y vivan el calvario de no encontrarlos.”

S/A. “Los “justicieros” de Nuevo León”. *Proceso* número 1822, 2 octubre 2011. pp 18-20.

<https://www.proceso.com.mx/282971/los-e2-80-9cjusticieros-e2-80-9d-de-nuevo-leon>

### **“Los “justicieros” de Nuevo León”**

Grupos paramilitares de matazetas, como el que irrumpió hace dos semanas en Veracruz, operan desde el año pasado en Monterrey y están conformados por cárteles rivales, aunque también destaca el caso de los Rudos de San Pedro Garza García, quienes se propusieron preservar la pureza del municipio más rico del país. Pero las acciones de estos “justicieros” no han hecho más que impulsar la espiral de violencia en la capital de Nuevo León.

MONTERREY, NL. - La formación de comandos que se ostentan como matazetas no constituye un fenómeno reciente. Al menos en el caso de Monterrey y su zona metropolitana, actúan de hecho desde marzo de 2010. Se trata de grupos que presuntamente pertenecen a los cárteles del Golfo y de Sinaloa, así como a La Familia Michoacana.

Distintas versiones sostienen además que en San Pedro Garza García, Nuevo León, el municipio de mayor ingreso per cápita de México, grupos paramilitares privados se dedican a eliminar a los delincuentes de cualquier cártel.

El pasado 20 de julio, alrededor de las siete de la noche, dos menores de edad se bajaron de un vehículo en la Rotonda de los Duendes, en dicha localidad. Portaban armas largas. Ahí se hallaba estacionada una

patrulla conducida por el agente de tránsito José Antonio Coronado Ábrego, quien fue acribillado por los jóvenes. Después de asesinar al oficial metieron un papel en una bolsa de su pantalón con un texto dirigido al alcalde y a los jefes policiacos municipales:

“Saludos a los nuevos jefes aquí estamos. Juanito y Chuyito ponganse al tiro porque nos van a conocer. Mauri vamos a jalar parejas que no? Atte. Comandante Azero.”

A las 13:15 del día siguiente Romel Alán Treviño Villarreal, El Comandante Azero, conducía por la calzada San Pedro, a pocos metros de donde fue acribillado el agente de tránsito. Un auto le cerró el paso y desde otra camioneta accionaron fusiles de asalto contra el conductor y su acompañante, Jonathán Velasco Mendoza, quien quedó herido y fue trasladado a un hospital.

“El chiste le duró al señor 12 horas, porque ni siquiera tuvo oportunidad, al final de cuentas, ni de asentarse. Alguien lo mató y pasó a mejor vida”, dijo Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro al confirmar que Romel Alán era El Comandante Azero.

Fernández aseguró que “según sus fuentes”, Treviño Villarreal había llegado a San Pedro procedente de Durango e intentaba quedarse con la plaza. “Después de su muerte volvió todo a la tranquilidad”, enfatizó el alcalde, famoso desde antes de tomar posesión al anunciar que formaría un “grupo rudo” para sacar a los narcotraficantes y secuestradores de su municipio.

En San Pedro Garza García, parte de la zona metropolitana de Monterrey, habitan los ejecutivos de algunas de las mayores empresas del país: Cemex, Alfa, Vitro, Femsa, Gruma-Banorte, Villacero-Afirme, entre otras.

Estos ejecutivos colaboran con el alcalde Mauricio Fernández –miembro de la familia que controla la mayoría de las acciones del Grupo Alfa– para invertir 2 mil millones de pesos a fin de blindar y aislar a San Pedro de la violencia que aqueja a la vecina Monterrey. Parte de esa inversión se destinará a colocar más de 2 mil cámaras de alta tecnología para cubrir todos los puntos del municipio.

### **El cable del cónsul**

El Grupo de los Diez, los empresarios más importantes de Monterrey, está preocupado por el aumento de los secuestros y para prevenirlos ahora trabaja con consultores estadounidenses e incluso capacita a fuerzas estatales en sus academias privadas para evitar que la inseguridad se extienda a San Pedro, según algunos de los cables del Departamento Estado difundidos por WikiLeaks.

Un cable confidencial, elaborado el 28 de enero de 2010 por Bruce Williamson, cónsul de Estados Unidos en Monterrey, describe esas acciones:

“El director ejecutivo de la Caintra, una de las más importantes asociaciones de la industria de Monterrey, dijo a funcionarios del consulado que la comunidad empresarial está dispuesta a ofrecer toda la ayuda que se necesita. Mientras tanto, Mauricio Ramos, un experto de una respetada empresa de seguridad que trabaja con la industria privada, financia una organización antisequestros, Planificación Consultores (con sede en Monterrey), y ha ofrecido todo su apoyo.

“Ramos encabeza el esfuerzo del Grupo de los Diez (las empresas élite de la ciudad) dirigido a fortalecer las capacidades de la unidad antisequestros del estado, presionando por cambios en el Código Penal que rige en la entidad”, especificó Williamson, experto en cuestiones de seguridad.

Mauricio Ramos se ha desempeñado también como asesor de Femsa y ha colaborado en la “academia” que tiene esa empresa para capacitar a escoltas privados y donde incluso se han entrenado jefes policiacos del estado.

“La prevención del secuestro es la razón principal para que los jefes de algunas de las compañías más influyentes de Monterrey fundaran la empresa Consultores de Planificación de Ramos. El sector empresarial continúa ofreciendo su apoyo cuando sea necesario. Por ejemplo, ante la ausencia de una moderna Academia de Policía en el estado, la empresa Femsa –una de las empresas más exitosas de la ciudad– está ofreciendo facilidades para formar en técnicas de seguridad a personal estatal”, agrega el cónsul.

Cabe mencionar que los escoltas capacitados en la academia de Femsa no han salido bien librados cuando se han enfrentado con sicarios: El 20 de agosto de 2010, hacia las 14:30, escoltas de Femsa que patrullaban las inmediaciones del Colegio Americano, en el municipio metropolitano de Santa Catarina, se toparon con un convoy de delincuentes armados.

Éstos confundieron a los escoltas con miembros de un grupo rival, por lo que se desató un tiroteo que duró varios minutos y causó pánico entre los alumnos del Colegio Americano, donde estudian hijos de los directivos de empresas y de diplomáticos del consulado de Estados Unidos en Monterrey.

Al término del intercambio de tiros, dos escoltas estaban muertos y sus cuerpos fueron recogidos por los delincuentes; cuatro más fueron levantados.

Horas después, la empresa emitió un comunicado en el que informó que “la Agencia Estatal de Investigaciones fue notificada por parte de Femsa sobre la muerte de los dos escoltas y la liberación de los cuatro que fueron plagiados”, quienes fueron abandonados en un auto afuera de la empresa.

El incidente, que primero se reportó como el intento de secuestro del hijo de un “prominente empresario”, hizo que el Departamento de Estado estadounidense ordenara sacar de Monterrey a todos los hijos de su personal diplomático.

El decreto del Departamento de Estado terminó por agudizar la crisis de inseguridad que priva en la capital de Nuevo León, que comenzó en marzo de 2010 cuando en la ciudad aparecieron numerosas mantas anunciando una alianza entre el cártel del Golfo, el de Sinaloa y La Familia Michoacana contra Los Zetas.

La “narcoguerra” que encabezó el cártel del Golfo contra su antiguo brazo armado provocó que el número de asesinatos violentos creciera exponencialmente en la zona metropolitana de Monterrey, de 4.6 millones de habitantes.

Según la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León en 2009, los crímenes relacionados con la delincuencia organizada apenas eran 267; el siguiente año se dispararon a 828 y en lo que va de 2011 ya son más de mil 400.

El cártel del Golfo envió a varios comandos para limpiar de zetas Nuevo León. Uno lo encabezaba Yahir Pérez López, quien se concentró en eliminar a los policías que colaboraban con el grupo rival. La caída del Yahir comenzó el pasado 4 de febrero cuando agentes de la Policía Federal (PF) le marcaron el alto a una camioneta:

“Una vez detenida la marcha del vehículo, los elementos de la Policía Federal realizaron una revisión minuciosa de la unidad, en la que encontraron un compartimento oculto entre la barra del chasis y el piso, donde estaban escondidas una gran cantidad de cartuchos y armas”, precisó un comunicado de la PF.

El conductor se identificó como Roberto Pérez Mayorga, El Mayorga, de 38 años, “quien refirió que pertenece a la organización delictiva cártel del Golfo, y que el cargamento lo llevaba a una casa de seguridad ubicada en el municipio de Guadalupe, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey”.

Horas después, la PF realizó un operativo en la colonia Bosques del Country, en Guadalupe, donde capturaron a Yahir Pérez y 14 cómplices, entre ellas un menor de edad, a quienes les decomisaron 11 armas largas.

Yahir “ha confesado, junto con alguno de sus integrantes de la banda, más de 21 homicidios, de los cuales se derivan muchos de los actos de violencia que el estado ha venido recibiendo desde el pasado mes de octubre”, informó en su momento Jorge Domene, portavoz del Consejo de Seguridad estatal. Entre otros asesinatos que cometió están los de 10 policías, agentes de tránsito y celadores.

También confesó haber ordenado el lanzamiento de dos granadas al cuartel de la Zona Norte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y una serie de ataques con granadas contra el penal de Topo Chico así como atentados con explosivos contra cuarteles de la policía estatal y corporaciones municipales.

### **“Grupo Rudo”**

En el caso de los paramilitares, el Grupo Rudo creado por el alcalde de San Pedro –y aparentemente ya desmantelado– es el mejor ejemplo de los esfuerzos privados por evitar que la delincuencia organizada opere en ese municipio.

Curiosamente los “rudos” estuvieron encabezados por Alberto Mendoza Contreras, El Chico Malo, quien después fue miembro del cártel de los Beltrán Leyva y fue capturado por la Marina el 18 de marzo de 2010.

“Resultado de las operaciones de inteligencia naval fue asegurado Mendoza Contreras así como Hugo López Reyes, junto con dos vehículos, 322 mil pesos en efectivo, 14 teléfonos celulares, dos computadoras, cinco armas largas y equipo de espionaje de alta tecnología”, precisó un comunicado de la Armada después de su captura.

La Marina aseguró que Mendoza Contreras operaba en la plaza de San Pedro Garza García desde finales de 2009 además de trabajar para los hermanos Beltrán Leyva también realizaba operaciones de espionaje para los jefes de otros cárteles, como Nacho Coronel y Juan José Esparragoza, El Azul.

Supuestamente otro de los integrantes del Grupo Rudo era Francisco Martínez Cárdenas, hijo del exgobernador Alfonso Martínez Domínguez, quien también fue detenido por la Armada.

Francisco Martínez fue señalado como uno de los tres pilares de los rudos, junto al exsecretario de Seguridad Municipal Luis Cortés Ochoa y El Chico Malo. Se encargaba de “pasarles la charola” a los empresarios dueños de antros de San Pedro para financiar al grupo.

El Grupo Rudo fue el que ubicó a Héctor El Negro Saldaña, otro exmiembro del cártel de Arturo Beltrán Leyva, quien abandonó esa banda para dedicarse a secuestrar jóvenes que salían de los exclusivos antros y exigir pagos millonarios a sus familias. Además, extorsionaba a los bares, antros y discotecas del municipio exigiendo entre 100 mil y 250 mil pesos mensuales.

El Negro Saldaña, quien se paseaba por San Pedro en un Lamborghini sin placas, había puesto precio a la cabeza de Mauricio Fernández. Sin embargo, otros sicarios lo ubicaron primero y lo ejecutaron; su cuerpo y los de su hermano y dos personas más fueron hallados en una camioneta en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal en octubre de 2009.

Sus asesinos dejaron dos cartulinas con sendos mensajes: “Por secuestrador” y “Job 38:15”, un versículo bíblico que dice “Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado”. Un raro mensaje para el tradicional sicario que opera en México.

Jenaro Villamil. “El arma: Las redes sociales”. *Proceso* número 1827, 6 noviembre 2011. pp 6-10.  
<https://www.proceso.com.mx/287278/el-armas-redes-sociales>

### **“El arma: Las redes sociales”**

Las redes sociales forman parte de una realidad inocultable. El intercambio de mensajes virtuales entre el cártel de Los Zetas y la organización internacional Anonymous es uno más de la serie de episodios de una guerra cuyo resultado se ignora, pero que se desarrolla en forma paralela a la que produce muertos, heridos y desaparecidos en las calles. Aun representantes de Google y Facebook se muestran inciertos del futuro al respecto. Como antecedente, con repercusiones internacionales, ya quedó el amenazante video con la inquietante máscara de Anonymous...

A la par que se incrementa la violencia por el enfrentamiento entre cárteles de la droga y grupos militares, paramilitares y policiacos, usuarios y activistas de las redes sociales irrumpen en México como generadores de contrainformación. Algunos incluso convocan a movilizaciones como la de los Indignados en Ciudad Juárez y en el Distrito Federal; otros, como Anonymous –organización de inspiración anarquista que carece de líder o dirigentes visibles y utiliza como símbolo una máscara de Guy Fawkes, un líder católico inglés envuelto en una conspiración para atacar el Parlamento británico el 5 de noviembre de 1605– incluso desafían de manera abierta al cártel de Los Zetas.

El video que Anonymous subió a YouTube desde el 6 de octubre para anunciar la operación cártel es una de las primeras acciones encaminadas en ese sentido.

“Estamos cansados del grupo delictivo de Los Zetas que se han dedicado a secuestrar, robar, extorsionar”, afirmó un portavoz de Anonymous en ese video. Y advirtió que si no liberaban a uno de

sus integrantes secuestrado durante la Operación Paperstrom, realizada entre el 20 y 29 de agosto en Veracruz, ellos revelarían información que vincula a políticos, empresarios, policías y militares con esa organización que surgió como brazo armado del cártel del Golfo.

Para el 31 de octubre, Anonymous emitió mensajes contradictorios: primero avisó que suspendía la operación a causa de los “altísimos riesgos”; horas después, reculó y expuso que operación cártel continuaría.

A través de su blog Anonymous Iberoamérica, informó que esa operación no iba dirigida sólo contra Los Zetas, sino contra quienes “se dedican al narcotráfico y sus relaciones con los gobiernos”, especialmente el de México y otras agencias antidrogas de Estados Unidos.

“Ahora esto es internacional. Es global. Pueden intentar detener a los Anónimos en México, Centroamérica y tal vez en Estados Unidos, pero no pueden detener a Anonymous como una idea mundial, como un espíritu global al que no le pueden disparar ni pueden quemar en ácido”, reiteró en un comunicado del martes 1.

Tres días después, el jueves 4, poco antes de que iniciara la operación, informó a través de sus cuentas en redes sociales que su compañero había sido liberado y que el plan de divulgar información secreta sobre los vínculos de Los Zetas se suspendía.

Según ellos, su compañero les comunicó que si Anonymous revelaba algún nombre relacionado con el cártel, su familia “sufrirá las consecuencias”, pues “por cada nombre del cártel revelado, 10 personas serán ajusticiadas”.

El desafío de Anonymous, el mismo grupo que promovió la operación Independencia el 15 de septiembre último para saturar páginas web de secretarías de Estado federales, prendió esta vez los focos rojos en el ámbito internacional, mientras la prensa mexicana optó por minimizar e ignorar su aviso.

Las cadenas televisivas BBC de Gran Bretaña y CNN de Estados Unidos, así como el sitio electrónico [www.stratfor.com](http://www.stratfor.com) y The New York Times, entre otros medios extranjeros, publicaron varias notas en las que advertían que Anonymous entraba de lleno en la guerra contra el narco en México. Coincidieron también en que el incremento de la violencia en Veracruz, Torreón y Monterrey ha dado un nuevo giro al papel de las redes sociales.

“Hay que recordar que Anonymous no es una organización. No tiene jerarquía. Básicamente es un colectivo de personas que se autoidentifican”, advirtió Scout Stewart, vicepresidente de Inteligencia de la firma Stratfor, que el miércoles 2 publicó un extenso reporte sobre la operación cártel.

En él, Stewart comenta que aun cuando algunos activistas la consideraron “una broma”, otros advirtieron que la campaña puede ser riesgosa y unos más insistieron en que debía continuar. “La naturaleza colectiva de Anonymous permite que cada activista elija en qué acciones quiere participar, incluyendo operación cártel”, precisó el especialista.

Para el senador Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, la operación de Anonymous constituye “un reto del poder virtual a otro poder fáctico, como el narcotráfico”.

“No habíamos visto que la guerra contra el narco comenzara a derivar en una guerra en el ámbito virtual. Estamos en un mundo fascinante, donde a veces no puedes separar la realidad de la ficción. Lo que Anonymous quiere demostrar es su capacidad de poder, su capacidad de jugar con ese otro poder que es el narcotráfico”, abunda en entrevista con Proceso.

–¿Obedece a alguna otra agenda internacional? –se le pregunta.

–No obedecen a ninguna agenda ni terrorista ni gubernamental. Lo único que quieren demostrar es que es posible violar cualquier código de seguridad. Ellos son hackers. Se han convertido en un grupo de sumo cuidado, a diferencia de WikiLeaks, que se convirtió en otra cosa. WikiLeaks no conseguía los documentos a través de hackers; los compraba o patrocinaba.

Lo más similar a la operación cártel fue lo que hizo Anonymous el 28 de octubre, cuando sus integrantes intervinieron la página electrónica del exprocurador de Tabasco Gustavo Rosario Torres.

Ese día el sitio del exfuncionario amaneció con una gran leyenda: “Gustavo Rosario es zeta”. Además, en YouTube los hackers subieron un video a las 7:19 de la mañana, en el que reivindicaban el ataque.

En el portal de noticias [www.sdpnoticias.com](http://www.sdpnoticias.com), la cuenta AnonHispano reiteró:

“Esto es sólo el principio. Tenemos información sensible. Pueblo de México, donde otros han fallado y se han quedado en medio del camino en el lodo de la corrupción, o desisten por miedo, Anonymous no les dejará solos. Sabemos los riesgos que es esto, pero no daremos marcha atrás. Somos legión.”

### **Violencia contra usuarios**

Y así como en los últimos meses se incrementó la ola de violencia contra usuarios de las redes sociales, los gobiernos estatales optaron por criminalizar a todos los que divulgaran “rumores” o información no controlada por las autoridades.

“Las respuestas de las autoridades han sido cada vez más feroces. Lo sucedido en Veracruz y en Ciudad Juárez va en la misma línea. Si lo seguimos permitiendo nos acercamos a un momento dictatorial”, advierte Castellón Fonseca, quien impulsó en el Senado el voto contra el acuerdo antifalsificación (ACTA) promovido por Estados Unidos que implicaba restricciones al libre uso de internet.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 13 de septiembre pasado aparecieron dos cuerpos con signos de tortura. Ambos tenían un mensaje intimidante de Los Zetas: los asesinaron por haber postado información sobre este cártel a través de sus blogs especializados, decía.

El 26 de septiembre fue decapitada la periodista Marisol Macías Castañeda por la presunta divulgación de “información delicada” que vinculaba a cuerpos policiacos con el narcotráfico en su blog y en cuenta de Twitter. Los Zetas se atribuyeron la ejecución.

En Veracruz, el gobierno de Javier Duarte alcanzó notoriedad internacional, aunque no por sus logros contra el crimen organizado, sino por encarcelar, el 26 de agosto último, a Gilberto Martínez Vera y a María de Jesús Bravo Carranza, Marichú, por haber subido mensajes a Twitter y Facebook, las dos redes sociales más utilizadas en México, sobre enfrentamientos armados y presuntos secuestros en escuelas públicas del puerto jarocho.

El secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, acusó a los tuiteros de divulgar rumores que, dijo, “causaron histeria”; ambos fueron encarcelados bajo el cargo de ser “promotores de terrorismo”. La ola represiva llegó a los congresos de Veracruz y Tabasco, cuyos legisladores aprobaron en septiembre reformas a los códigos penales para tipificar como delito punible los avisos falsos o rumores difundidos a través de las redes sociales.

La detención de Martínez Vera y Bravo Carranza generó una ola de protestas en Twitter, Facebook y en los blogs. Duarte fue acusado de represor. La cadena televisiva británica BBC habló incluso de una “cruzada oficial contra tuiteros en México” y vinculó esta represión con la reacción del gobierno federal frente al atentado al casino Royale, en Monterrey, donde murieron 52 personas.

En un evento organizado por el Senado, Marichú Bravo relató la forma en que fue maltratada y golpeada por elementos policiacos antes de trasladarla al penal de Pacho Viejo, Veracruz: “Me obligaron a firmar un acta en la que me comprometía a no usar más nunca una red social”, relató.

En Torreón, Coahuila, los usuarios de las redes sociales también han exhibido la corrupción, la incapacidad y la autocensura del gobierno, de los cuerpos policiacos y aun de una televisora nacional: TV Azteca.

El 20 de agosto, los nombres del estadio Corona, el club de fútbol Santos y de Torreón, dieron la vuelta al mundo en Twitter y Facebook luego de una balacera que provocó que el encuentro Santos-Morelia y su transmisión televisiva se interrumpieran de manera abrupta.

Los 18 minutos de pánico que generó la balacera en torno al estadio sepultaron los spots gubernamentales en vísperas del V informe de gobierno de Felipe Calderón. A su vez, en YouTube, Google y Twitter hicieron circular fotografías que mostraban los impactos de bala en el interior del estadio; contrastaban con la versión de las autoridades, que insistían en que los enfrentamientos habían ocurrido fuera del estadio. En Google, la frase “balacera en Torreón” tuvo 207 mil ligas.

Otra muestra reciente del impacto de las redes sociales es la del martes 1: diez minutos después de que 150 elementos policiacos reprimieran una manifestación de Indignados en Ciudad Juárez ese día, en YouTube circuló un video, que se replicó en varias redes sociales, en el que se documentaba la brutalidad de los elementos comandados por el teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, jefe de la Policía Municipal juarense. Fueron miles los mensajes que circularon en la red para exigir la liberación de los 29 detenidos.

Tres días después, el viernes 4, la bancada del PRD en el Senado promovió un punto de acuerdo en el que exigía al gobernador César Duarte y al alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía Lardizábal, la liberación de los jóvenes; también les exigieron garantías para ejercer la libertad de expresión, de manifestación y de protesta.

Meses antes de la represión del martes 1, en Ciudad Juárez se dio uno de los primeros intentos por bloquear sitios electrónicos y las redes sociales que contradecían las versiones oficiales sobre la guerra contra el narcotráfico.

El 14 de marzo de 2010, la empresa Cablemás, filial de Televisa y proveedora del servicio de internet en esa ciudad, bloqueó decenas de portales de noticias: la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez,

www.monitorpacj.com; los blogs www.arrobajuarez.com, www.lapuertanoticias.com, www.lavozdejuárez.com, www.pulsopolítico.com y www.plataformafinanciera.com, entre otros.

### **Facebook y Google: libertad en entredicho**

Marne Levine, vicepresidenta de Política Pública Global de Facebook, afirmó que esta red social cuenta ya con “más de 30 millones de usuarios” en el país y “es un buen mecanismo para la libertad de expresión”.

Consultada por Proceso durante una sesión privada en el Senado de la República el viernes 4, Levine admitió que la apertura en redes sociales “conlleva algunos riesgos”, aunque insistió en que la institución para la que labora siempre estará a favor de la libertad de expresión.

Levine recordó que en Medio Oriente, en medio de las protestas de grupos sociales, sucedió un fenómeno contradictorio: “el gobierno estaba a favor de la apertura, pero otros grupos no estaban de acuerdo. Nosotros estuvimos siempre a favor de esa apertura”.

Frente a las constantes críticas y riesgos que conlleva la apertura, Levine advirtió que Facebook ha creado “algunas herramientas” para conocer el entorno político en el que suceden algunas protestas nacionales con el propósito de identificarlos.

También dijo que se han instrumentado nuevos protocolos informáticos de seguridad para impedir el uso de la información privada de los usuarios (una de las críticas más reiteradas que se le han hecho a esta red social), así como establecer “ligas activas de comunicación en los sitios”.

“Nuestro equipo monitorea las veinticuatro horas lo que se publica en la red. Si vemos que hay algún problema, intentamos averiguar qué está sucediendo y pararlo. Nosotros intervenimos”, advirtió Levine, quien trabajó en la administración de Barack Obama como jefa de la Oficina del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca.

“Esta es la forma que tenemos de trabajar no sólo con los gobiernos, sino también con los legisladores y con los ciudadanos”, aclaró Levine.

México es el quinto país con mayor número de usuarios de esta red social que ya rebasó los 800 millones de usuarios en todo el mundo. Tan sólo en el último año su crecimiento fue de 62% en número de usuarios, según datos de la consultoría Com Socore.

Mozelle W. Thompson, asesor legal y político de Facebook, reiteró que el internet se ha convertido en una plataforma a favor de la libre información y “es muy bueno que Facebook pueda ser utilizado para defender la libertad de expresión”.

A su vez, el representante de Asuntos Gubernamentales, Política Pública y Responsabilidad Social de Google, Manuel Tamez, advirtió que “no es internet el que genera la violencia, sino que es el reflejo de lo que sucede en la sociedad”.

Los participantes del foro titulado “El papel de internet en un contexto de violencia en México”, realizado a finales de octubre, insistieron en que los intentos de censura o de control en las redes sociales sólo reflejan el desconocimiento de las autoridades frente a la dinámica de estos medios interactivos, autogeneradores de contenidos.

Castellón Fonseca, quien participó en ese encuentro, advirtió que ante la situación de violencia que vive el país “en muchos estados las redes sociales o el internet se convirtieron también en una forma de comunicación y de protección entre las propias comunidades”.

“Eso hace también que los signos de violencia, incluida aquella que usa el Estado para poder contener a los delincuentes o los mismos delincuentes para poder evadir al Estado o combatir a sus adversarios, comiencen a usar estas mismas tácticas contra las redes sociales”, abundó el legislador perredista.

### **Occupy México y Occupy Televisa**

Precisamente, a través de Google, Facebook y Twitter –las tres redes sociales más consultadas en México– se ha expandido al país el movimiento iniciado hace tres meses en Estados Unidos, conocido como Occupy Wall Street. Tan sólo en Google, la relación de movimientos de “ocupas” o “indignados” alcanza ya los 173 millones de vínculos.

En el caso nacional, el movimiento Occupy México tiene 20 mil vínculos en Google y 848 seguidores en Facebook, quienes organizaron una página comunitaria en la cual lanzan sus convocatorias: desde la protesta a las puertas de la Bolsa Mexicana de Valores, en avenida Reforma, hasta el evento del sábado 5 de noviembre frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec.

Occupy Televisa surgió a través de decenas de usuarios en Twitter, desde finales de octubre. Entre las propuestas que surgieron están las de bloquear las entradas de la empresa para impedir el acceso a sus “comunicadores” por un día, hasta impulsar un “apagón” de los canales de esta televisora.

En Facebook, Occupy Televisa alcanzó los 895 seguidores en menos de una semana. Anonymous también se sumó a la protesta, al señalar en un video subido a YouTube que “Televisa es la rabia”.

El exsocio de Emilio Azcárraga Jean, Simón Charaf, dueño del Bar-Bar e impulsor del nuevo blog [www.televisaleaks.com](http://www.televisaleaks.com), dedicado a denunciar los 100 abusos de Televisa, también se sumó al movimiento. Su argumento fue que la empresa mediática tiene “secuestradas” a las cúpulas de los partidos políticos “por utilizar el espectro del que somos dueños, sin responsabilidad ni profesionalismo”.

El mismo sábado 5 se difundió otra iniciativa en las redes sociales en la que se convocó a una manifestación en las instalaciones del Faro de Playas de Tijuana para “promover la conciencia social, equitativa y sin discriminación, a través de talleres y círculos educativos”.

De esta manera, el contagio del movimiento de los Indignados, surgido en mayo último en decenas de ciudades españolas, no sólo cruzó el Atlántico para tener su propia versión en Estados Unidos, sino que ya irrumpió en las redes sociales mexicanas.

Arturo Rodríguez García. “Modalidad narca: tecnosequestrados”. *Proceso* número 1827, 6 noviembre 2011. pp 12-16. <https://www.proceso.com.mx/287434/modalidad-narca-tecnosequestrados-2>

**“Modalidad narca: tecnosequestrados”**

Inquietan los indicios de que Los Zetas utilizan alta tecnología de telecomunicaciones para coordinarse. Indignan los recientes plagios de empleados especializados en telecomunicaciones. Lo que de plano asusta es la indolencia, la conducta errática y la probable complicidad de autoridades estatales y federales, así como la falta de compromiso de las empresas hacia su personal y las familias.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El pasado 8 de septiembre, el contralmirante José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina (Semar), informó del desmantelamiento de 12 antenas instaladas en 10 municipios de Veracruz que permitían la operación de avanzados equipos para hacer indetectables las comunicaciones de telefonía móvil y fija del cártel de Los Zetas.

A decir de Vergara, el desmantelamiento de la red implicó “la pérdida de la línea de mando y conducción táctica” de esa organización criminal en Veracruz. De norte a sur, el sistema cubría los municipios de Pánuco, Naranjos, Tepetzintla, Tantoyuca, Poza Rica, Cofre de Perote, Orizaba, Córdoba, Xalapa y el Puerto de Veracruz.

Con el hallazgo se confirmaron las versiones que desde hace años se reproducen en los territorios controlados por Los Zetas sobre su capacidad de comunicarse de manera indetectable y aun para realizar intervenciones telefónicas. Además de las antenas, los marinos aseguraron escáneres electrónicos, decodificadores y hasta paneles de celdas solares.

La noticia despertó la esperanza de la señora Marina Armenta de la Rosa y otros familiares de nueve técnicos de Nextel que desaparecieron en Nuevo Laredo hace dos años. De inmediato se pusieron en contacto con los responsables de conocer su caso en la Procuraduría General de la República (PGR), pero no había más información... sólo el tendido de redes y los equipos fueron desmantelados.

Durante 2009 y 2010, expertos en tecnologías de comunicación que trabajaban para diferentes compañías desaparecieron en la zona fronteriza de Tamaulipas, sobre todo en Nuevo Laredo, sin que hasta el momento se tenga noticia de su paradero, salvo que los restos de unos técnicos al servicio de una petrolera trasnacional fueron localizados en la entidad.

Ante la errática conducta de las autoridades y de los cuerpos de seguridad estatal y federales, las personas que buscan a familiares desaparecidos sospechan que existe encubrimiento o de plano complicidad entre mandos gubernamentales y quienes se los llevaron, pues afirman que con intimidaciones, revisiones fuera de protocolo y amenazas han intentado inhibir su búsqueda y las demandas de justicia.

### **Presas selectas**

El 20 de junio de 2009 arribaron a Nuevo Laredo nueve técnicos de Nextel provenientes de Guasave, Sinaloa, que se dedicaban a instalar antenas y tendido de redes de la empresa.

Semanas antes compañeros suyos les habían recomendado que no fueran a la ciudad tamaulipeca, debido al clima de violencia y a su origen sinaloense. Pero estaban contratados por seis meses y los enviaron allá.

Los trabajadores Ricardo Peña Mejía, Carlos Peña Mejía, Hugo Camacho Priego, Víctor Romero, Constantino García, Roberto Gutiérrez, Marcelino Moreno, Julio César Ochoa y el ingeniero a cargo,

Eduardo Toyota Espinoza, se instalaron en la calle Chihuahua número 1701 de la colonia Guerrero, a unos 500 metros del río Bravo.

De acuerdo con testimonios que sus familiares recogieron entre vecinos y otros testigos –versiones ya integradas en la averiguación previa 0483/2009 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET)–, alrededor de las 22:30 horas de ese 20 de junio, un grupo de encapuchados vestidos de negro irrumpió en el domicilio, derribó puertas y ventanas y se llevó a los nueve trabajadores.

El comando regresó al día siguiente para llevarse los vehículos de sus víctimas, así como sus computadoras, teléfonos celulares y demás pertenencias. La denuncia se interpuso hasta el 23 de junio, cuando los familiares de los empleados acudieron a averiguar qué había ocurrido, hasta ahora sin resultados.

Meses después, en diciembre de 2009, los ingenieros Filiberto Guzmán Morales y Arturo Navarro Hernández, empleados de la empresa de origen británico Networkers, desaparecieron en forma parecida.

Guzmán y Navarro se dedicaban a supervisar cómo funcionaban equipos de microondas y antenas ya instalados. Originarios del Distrito Federal, llevaban sólo unos días hospedados en una posada céntrica de Nuevo Laredo, igual que otros trabajadores foráneos.

Versiones recogidas por las familias entre el resto de los huéspedes indican que, alrededor de las dos de la madrugada del 15 de diciembre, llegó a la posada un grupo de encapuchados que portaban armas largas, quienes recibieron por radio la indicación de entrar al cuarto de los ingenieros y se los llevaron con violencia.

Esos testimonios no fueron recogidos por agentes ministeriales ni integrados en la averiguación previa 0761/2009 de la PGJET, que hasta el momento no ha hecho más diligencias para incrementar la información contenida en la denuncia.

El 11 de abril de 2010, otros expertos en comunicaciones, los ingenieros Sergio Alberto Salinas de la Riva y Alberto Leónides Rodríguez González desaparecieron en algún punto entre Reynosa y Nuevo Laredo.

Ambos eran empleados de la trasnacional Tecpetrol, integrante del italoargentino Grupo Techint, que opera como contratista en la Cuenca de Burgos. Tenían la instrucción de acudir a las oficinas de Tecpetrol, cerca de Díaz Ordaz, Tamaulipas, para irse a una comunidad rural a reparar una antena. Nunca llegaron.

Proceso confirmó que, a diferencia de los trabajadores de Nextel y Networkers, los de Tecpetrol fueron localizados a finales de 2010 sin que en las investigaciones exista el menor indicio de qué ocurrió.

### **Mentiras oficiales**

Familiares de los desaparecidos dicen que las autoridades han sido omisas en las investigaciones, sin el menor cuidado en los aspectos periciales, y que los agentes del Ministerio Público locales, igual que los soldados y policías federales, los han intimidado, les robaron pertenencias y les dieron informes falsos.

Este comportamiento de las autoridades inició el día de la denuncia. Cuando las familias de los trabajadores de Nextel fueron a recoger sus pertenencias, el 23 de junio de 2009, tres días después de la desaparición de la cuadrilla, un convoy federal rodeó el hotel donde se hospedaban, los agentes entraron a las habitaciones, revisaron sus cosas y sustrajeron fotografías de los desaparecidos.

Los familiares iban escoltados por agentes ministeriales de Tamaulipas. Después de lo ocurrido en el modesto hotel, la entonces subdelegada de la PGJET, Elizabeth Hernández Arredondo, les ofreció alojarlos “por seguridad” en un lujoso hotel de la zona y se comprometió a avisarles de los avances, pero nunca hubo tales.

De cientos de casos que documenta el frente Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de México (Fundem), el de los empleados de Nextel es el único que registra extraños contactos de las autoridades federales, que avisan en falso haber rescatado a los desaparecidos con vida.

A finales de 2010, el entonces director general adjunto de Asuntos Especiales de la PGR, Ignacio Peralta Ortega –que por entonces tomaba conocimiento de casos de desaparición–, les explicó que ya los tenían ubicados pero que esperaban la captura de un “pez gordo” para rescatarlos.

Meses después llamó a las familias de los sinaloenses para decirles que los habían encontrado y que estaban bien de salud. Los invitó a ir por ellos a la Ciudad de México, así que consiguieron que el gobierno estatal pusiera a su disposición vehículos para viajar a la capital del país.

“Llegamos emocionadas. Creímos que nuestro calvario había terminado, pero cuando llegamos a la PGR no sabían de qué estábamos hablando. Nos dijeron que Ignacio Peralta ya no trabajaba en esa área y que no entendían el motivo de su llamada”, dice Marina Armenta.

En febrero de 2011, Amalia Armenta, esposa de Roberto Gutiérrez e hijastra de Constantino García, recibió otra llamada, esta vez de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), para avisar que tenían a sus familiares en las instalaciones de la corporación. Viajaron de nuevo a la Ciudad de México, pero nuevamente, al llegar, les dijeron que fue un error.

Un contacto más. El celular de Roberto Gutiérrez siguió sonando hasta febrero de 2011, por lo que su esposa se acercó a mandos militares que, afirmaron, lo podían rastrear. Finalmente no obtuvieron resultados y después de la promesa de localización, la línea fue desactivada. “Ahora en la PGR ya ni nos quieren atender y en Nuevo Laredo nos dicen que los siguen buscando”, dice Marina Armenta.

La activista Blanca Martínez, de Fundem, afirma que es el primer caso de información oficial contradictoria, lo cual arroja dudas sobre la actuación de las autoridades y abre una inevitable línea de investigación por la posible omisión o incluso el encubrimiento en el que podrían estar implicados funcionarios de diferentes niveles.

### **Solos ante el delito**

Además de la forma en que fueron sustraídos de sus alojamientos, los casos de los trabajadores de Nextel y de Networkers tienen otras similitudes.

De acuerdo con familiares de los ingenieros Arturo Navarro y Filiberto Guzmán, el 17 de diciembre de 2009, cuando interpusieron la denuncia, se dividieron en dos grupos para buscar a los desaparecidos y

encontraron sus vehículos en la posada, pero durante cerca de dos horas el agente del Ministerio Público local se negó a acudir.

Los familiares y algunos empleados de Networkers que los acompañaban empezaron a tener miedo. Lujosas camionetas daban vueltas por la calle mientras jóvenes con radios de comunicación se apostaban en las esquinas aledañas, observando los movimientos del grupo de visitantes. De la policía, nada.

Cuando finalmente se hizo la diligencia, el domicilio fue rodeado por militares, que después ingresaron. En el parte se asentó que la habitación se encontró hecha un desastre, pero los familiares aseguran que los soldados destruyeron todo; también se reportó que no se encontraron los teléfonos celulares, las computadoras ni los instrumentos técnicos de los ingenieros.

Finalmente, el agente de la Sexta Agencia del Ministerio Público de la PGJET, de Nuevo Laredo, les dijo a los parientes y amigos de los desaparecidos que debían irse porque corrían peligro. Lo hicieron el 18 de diciembre.

En enero de 2010, cuando regresaron a recoger las pertenencias y los vehículos, comprobaron que no había avances en la investigación. Aunque las tarjetas de nómina de los ingenieros habían sido utilizadas, el Ministerio Público no pidió videos de seguridad a los bancos; tampoco hizo el rastreo de líneas de celular. En cambio, les volvió a “recomendar” que salieran inmediatamente de Nuevo Laredo, porque estaban en riesgo.

Tanto en el caso de los trabajadores de Nextel como los de Networkers, las víctimas se alojaron en posadas para estancias de corto plazo. La cuadrilla de Nextel se registró en una que era propiedad de un auxiliar del entonces gobernador Eugenio Hernández, en tanto que los ingenieros de Networkers fueron a caer en el establecimiento de un sujeto que también posee bares en la zona de tolerancia. El funcionario nunca fue llamado a declarar, en tanto que el “empresario” incurrió en contradicciones que fueron obviadas por el Ministerio Público.

En ambos casos los familiares conservan la esperanza de que los mantengan con vida, que sólo les interesen sus conocimientos técnicos y que en algún momento regresen a sus hogares.

Por si fuera poco, en la larga cadena de victimización a la que han sido sometidas las familias mencionadas, ninguna de las tres empresas trasnacionales se hizo responsable de sus empleados ni les reconoció prestación alguna.

Redacción. “La ofensiva “zeta””. *Proceso* número 1830, 27 noviembre 2011. pp. 6.

<https://www.proceso.com.mx/289339/la-ofensiva-zeta>

### **“La ofensiva “zeta””**

Las masacres perpetradas en Culiacán y Guadalajara la semana pasada indican que Los Zetas han lanzado una ofensiva a gran escala contra sus enemigos, en particular el cártel de Sinaloa. Sus acciones, sin embargo, rebasan lo que podría llamarse una venganza. En el trasfondo yacen asuntos de envergadura binacional: la incapacidad del gobierno mexicano para sacar adelante su guerra contra el

narcotráfico y las crecientes sospechas acerca de la protección y colaboración que parece recibir el cártel de Sinaloa por parte de autoridades de Washington, incluida la escandalosa entrega de armamento de alto poder a través de la operación Rápido y furioso. No en balde el proceso contra el hijo del Mayo Zambada, en Chicago, ha sido declarado un asunto de “seguridad nacional”.

Alejandro Sicairos Riodoce. “Sacuden la fortaleza de “El Chapo””. *Proceso* número 1830, 27 noviembre 2011. pp 7-11. <https://www.proceso.com.mx/289340/sacuden-la-fortaleza-de-el-chapo>

### **“Sacuden la fortaleza de “El Chapo””**

El gobernador Mario López Valdez decía que en materia de seguridad él podía solo... El hallazgo de 16 cuerpos calcinados el miércoles 23 en Sinaloa lo obligó a retractarse: tuvo que enviar al grupo estatal de élite adonde no quería, Culiacán, y dejar que las fuerzas federales le invadieran el territorio, pues hay indicios de que la masacre sólo es el principio de una batalla mayor. La información acerca del “calentamiento” de esa entidad a raíz de la presunta incursión de grupos de zetas es publicada en la edición de este domingo 27 de Ríodoce. Proceso la reproduce con autorización del semanario sinaloense.

CULIACÁN, Sin. - Tuvo que ocurrir la siniestra incineración de 16 cuerpos, el miércoles 23, y hubo de llegarle información al gobierno de Sinaloa de que un grupo criminal ajeno penetró la capital del estado –antes fortaleza del cártel de Sinaloa–, para que el gobernador, Mario López Valdez, decidiera retirarle el veto policiaco a Culiacán y ordenara la incursión de 120 elementos del Grupo Élite.

Este municipio, gobernado por un alcalde (Héctor Melesio Cuen Ojeda) que no es del mismo grupo político que llevó al poder a López Valdez, había padecido durante ocho meses la ausencia de la policía estatal especial creada para combatir al crimen organizado.

Hasta que en la primera semana de este mes, vía Inteligencia Militar, llegaron informes al despacho de Malova en el sentido de que células delictivas que no habían cobrado fuerza en el centro del estado lograron introducir numerosos comandos de sicarios al territorio controlado por la organización liderada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada.

De acuerdo con la información que tiene el gobierno estatal, se trata del grupo Los Zetas, que desde mediados del año lucha por violentar la plaza en alianza con los Beltrán Leyva, que han establecido sus centros operativos en Ahome y Guasave, y los Carrillo Fuentes, que operaran parcialmente en Navolato, Angostura y Salvador Alvarado.

Algunas células de Los Zetas, por su parte, habían tomado como foco de operaciones el sur de Sinaloa y su aparente presencia se especuló en Culiacán el 2 de julio de 2011, cuando los restos de dos cuerpos decapitados fueron arrojados en la escalinata poniente de palacio de gobierno.

La sospecha del Ejército respecto “a la presencia en Culiacán de un numeroso grupo de zetas” fue sustentada a raíz de que el pasado 4 de noviembre un comando del narco asesinó a ocho personas en una cancha de volibol en la colonia Pemex.

Aunque no especifica cuántos son ni en qué zonas de Culiacán operan, la Novena Zona Militar, en coordinación con el Grupo Élite y las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas, instrumentó desde inicios de noviembre un cerco en las zonas limítrofes de la capital del estado tendente a contener la entrada de más zetas. Sin embargo, el casco urbano de la capital no fue cubierto.

El jueves 24, en reacción por los 24 homicidios dolosos ocurridos un día antes, entre éstos los 16 cadáveres calcinados, el gobernador confirmó que “todos sabemos que aquí opera el cártel del Pacífico y que hay otros cárteles o células locales que están aliadas con algo de zetas, los Beltrán Leyva, los Carrillo, que están en la disputa... Se trata de grupos, mensajes que se mandan, que nadie es lo suficiente fuerte o blindado como para no sufrir penetraciones”, expresó.

### **Sinaloa en alerta**

Bastó también la psicosis de terror que impuso la quema de 16 cadáveres –12 en la colonia Antonio Rosales y cuatro en el Desarrollo Urbano Tres Ríos– para que el mandatario diera la orden de que el Grupo Élite, concentrado en Mazatlán y Los Mochis, entrara a Culiacán.

En la misma mañana de ese miércoles negro, horas después de sacudirse ante la peor embestida delictiva sufrida en el primer año del sexenio, Malova ordenó al secretario de Seguridad Pública, Francisco Manuel Córdova Celaya, el despliegue de más policías en la zona urbana y rural de Culiacán.

El gabinete de seguridad se declaró en alerta y dispuso que los 18 alcaldes estuvieran atentos en sus municipios para detectar cualquier situación que signifique riesgos para la población. Deberán avisar de inmediato a la SSP para proceder a la coordinación de operativos.

En Culiacán, ciudad desdeñada anteriormente en acciones de seguridad pública implementadas por policías estatales y federales, se procedió a movilizar a alrededor de 300 soldados que desde la tarde del mismo miércoles 23 patrullan las zonas consideradas más conflictivas e instalan puntos de control en lugares estratégicos.

En algunos casos, como en las sindicaturas de los municipios de Angostura, Salvador Alvarado y Guasave se “aconsejó” a los presidentes municipales que recomendaran a la población extremar precauciones. Una de las sugerencias es que eviten andar en las calles, carreteras y caminos más allá de las ocho de la noche.

Trascendió que en la comunidad de Palmitas, municipio de Angostura, el comando que el lunes por la madrugada levantó ahí a tres policías preventivos, mismos que aparecieron incinerados en Culiacán al amanecer del miércoles, dejó un mensaje amenazando a los pobladores de correr la misma suerte si los encontraban por las noches fuera de sus casas.

La sacudida violenta de ese día puso a temblar a los sinaloenses. Incluso al gobierno porque el martes 22, a raíz de que el periódico El Debate publicó que una hija de Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, había sido trasladada de Culiacán a Los Mochis en el helicóptero gubernamental, el gobernador dio a conocer que la delincuencia acecha a los funcionarios de su gabinete y los pone en situación vulnerable.

Mario López Valdez reveló que sus hijos se han ido de Sinaloa, “no están aquí, tienen rato fuera”, agregó. Luego afirmó que “hay señales, informaciones, conversaciones de que cuando se detiene a alguien importante, tratan de atentar contra representantes del Poder Ejecutivo del estado”.

Enseguida el secretario Vargas Landeros declaró que también envió a sus hijos fuera de Sinaloa debido a que él y su familia han sido amenazados y que se han registrado intentos de extorsión en su contra: “Cuando hemos detenido a gente importante para ellos (los delincuentes) han tratado de intercambiar a nuestros hijos por las gentes que estamos encarcelando”.

En esa atmósfera de zozobra, los dirigentes de sectores productivos y de organismos ciudadanos alzaron la voz en demanda de medidas más enérgicas del gobierno de López Valdez. Mercedes Murillo de Esquer, presidenta del Frente Cívico Sinaloense, deploró de nuevo que los criminales se paseen por la ciudad sin que nadie los vea, haciendo lo que quieren y sometan a la gente a estados de terror.

En el mismo ambiente de miedo, el jueves 24 se ordenó en diferentes escuelas públicas que reforzaran labores de seguridad interna con tal de prevenir la presencia de delincuentes que buscarían atacar a grupos numerosos de personas para “calentar la plaza” en Culiacán.

### **Capital vulnerada**

Pese a ser la ciudad que tiene mayor índice delictivo en Sinaloa –aquí se ha cometido 40% de los mil 755 homicidios dolosos registrados en todo el estado del 1 de enero al 24 de noviembre de 2011–, la presencia de agentes estatales y federales reporta un repliegue, a diferencia de urbes como Mazatlán, Los Mochis y Guasave, que desde marzo de 2011 han tenido el despliegue de elementos del Grupo Élite, la Policía Federal y el Ejército.

De acuerdo con la información que la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado entregó al Congreso local, en Mazatlán, donde el Grupo Élite fue destacado desde su creación, el robo de vehículo bajó 40% de 2010 a 2011, el homicidio doloso se abatió 21%, el robo a casa habitación se redujo 31% y el robo bancario descendió 83%.

En Ahome, que también ha recibido atención especial del gobierno de Malova, el informe de la SSP resalta que el índice delictivo ha bajado 26%.

En cambio en Culiacán, adonde el Grupo Élite no había entrado sino que lo hizo a partir del “miércoles negro”, la dependencia estatal reporta que los delitos de alto impacto han aumentado 44%, el robo en comercios creció 138% y el robo de vehículos subió 38%.

Aun cuando la capital sinaloense vive en las semanas recientes una situación de violencia extrema, tampoco López Valdez ha solicitado la intervención del gobierno federal para que efectúe operativos como los que realiza en Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Nuevo León. Ha dicho que puede solo con el problema.

–Cuando ustedes dicen que pueden solos con el problema de la delincuencia, sobre todo los delitos de alto impacto, ¿a qué se refieren? –se le preguntó a Gerardo Vargas Landeros (entrevista publicada en la edición 460 de Ríodoce).

–Lo que pasa es que se ha dicho que por qué no se declara a Sinaloa como un Sinaloa Seguro con el programa federal, es decir, que vengan e invadan las fuerzas federales al estado, y nosotros decimos que no, no consideramos todavía que estamos rebasados por la delincuencia –respondió.

En el seno de la LX Legislatura local también el gobierno del estado había sido cuestionado por la postura de Malova, insistente en que puede solo contra los grupos del crimen organizado. El 7 de noviembre, el diputado Miguel Calderón Quevedo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, preguntó a Francisco Manuel Córdova Celaya, secretario de Seguridad Pública: “¿En realidad podemos solos? ¿En realidad, si es así la premisa de que los sinaloenses podemos solos, eso quiere decir entonces que Ahome puede solo, que Mazatlán puede solo?”.

Córdova Celaya le respondió que “el comentario del señor gobernador ha ido en el sentido de que no vamos a esperar a que la federación actúe... en las administraciones pasadas vimos que le echábamos la culpa a la federación, decíamos, es una guerra entre capos grandes, guerra entre grupos grandes, y el estado no puede con el paquete y el estado no puede sacar adelante esto, que venga el Ejército, que venga la Marina, que venga la PFP, que venga la PGR y que limpien casas... ya vimos que no han llegado... entonces no nos podemos dar el lujo de decir, sabes qué, vamos esperando a que llegue la federación, tenemos que actuar como estado, como municipios y sacar adelante esta tarea, la gente no quiere saber que es un problema federal, la gente sabe que le está afectando la calidad de vida y ya están hartos, como lo estamos todos, yo pienso que podemos solos si nos agarramos de la mano sociedad y gobierno.

“Aquí hay de dos sopas: seguir lamentándonos, diciendo estamos superados y es problema de la federación, o agarrar el toro por los cuernos y buscar los mejores hombres y mujeres que defiendan a Sinaloa. Los sinaloenses van a tener que defender Sinaloa, la federación no lo va hacer, la federación se va a ir a donde ellos estén viendo que es la necesidad apremiante del momento, encuentran muertos acá, se arrancan para allá...”, remató Córdova.

Sin embargo, las circunstancias dieron un vuelco inesperado. El Grupo Élite, el Ejército y la Policía Federal recibieron la orden de concentrarse en Culiacán al contarse con información castrense que alertaba sobre el “calentamiento” de una plaza que durante 10 meses no ameritó la atención del gobierno.

El gobierno de Mario López Valdez ya no pudo solo.

Juan Alberto Cedillo. “La ley militar contra la ley zeta”. *Proceso* número 1830, 27 noviembre 2011. pp. 30-31. <https://www.proceso.com.mx/289364/la-ley-militar-contr-la-ley-zeta>

### **“La ley militar contra la ley zeta”**

En pocos meses el pueblo tamaulipeco de San Fernando pasó de ser gobernado por Los Zetas a estar completamente militarizado; tanto que los soldados dirigen hasta el tránsito. Pese a ello sus habitantes no se sienten seguros: siguen viviendo con mucho miedo, no salen de sus casas y no quieren hablar. Sólo susurran: “Aún faltan fosas clandestinas por descubrir; pero si uno habla, todo se escucha”.

SAN FERNANDO, TAMPS. - En agosto de 2010 el nombre de este pueblo saltó a los principales medios del mundo al conocerse la matanza de 72 migrantes centroamericanos perpetrada por el crimen organizado. Pero ese asesinato múltiple no fue el único que cometieron Los Zetas: aún falta revelar muchas de sus atrocidades.

La importancia de San Fernando para los cárteles del narcotráfico la resume el general Miguel Ángel González, comandante de la VIII Zona Militar con sede en Reynosa: “Es un nudo donde confluyen varias carreteras” estratégicas para el trasiego de drogas que ahora se realiza desde Centroamérica.

“Hay una que viene por el Golfo desde Chiapas y Veracruz y pasa por Tampico y Soto la Marina. Es una ruta muy importante hacia la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos. Son casi 400 kilómetros de una porosa línea fronteriza que ellos quieren controlar para el trasiego de la droga, el tráfico de personas y, a la inversa, el contrabando de armas hacia México, así como una gran cantidad de mercancías”, precisa el general González.

A pesar de su ubicación privilegiada, la de San Fernando es una región en crisis y desatendida: está afectada por continuas sequías que han mermado su actividad agropecuaria, no tiene empresas que generen empleos y, para colmo, su comercio ha sido afectado por la violencia, al grado de que los negocios se han ido del pueblo.

“La falta de oportunidades obligó a los jóvenes de la región a involucrarse con la delincuencia organizada”, enfatiza un hombre maduro, uno de los pocos que aceptan hablar con Proceso bajo la condición del anonimato.

Los cárteles representaron la única opción para decenas de hombres y mujeres jóvenes, incluso para muchas adolescentes, a quienes ofrecieron trabajo como “guardias”, en sus “maquilas” –donde confeccionan sus uniformes– o en las “fábricas” donde modifican vehículos para blindarlos artesanalmente y convertirlos en los “monstruos” que vigilan el traslado de narcóticos en las carreteras, brechas y caminos vecinales.

Hasta el pasado octubre, el Ejército había asegurado en este municipio 543 piezas de uniforme y seis “monstruos” blindados, pocos para el total de los que se modifican en Tamaulipas.

“En San Fernando era mínima la elaboración de los ‘monstruos’. Donde se detectaron más fue en los municipios de Miguel Alemán y Camargo. Ahí se han decomisado 33, y los más importantes son seis. Unos verdaderos monstruos con capacidad para transportar a 12 tiradores. Usan esos vehículos para cuidar sus rutas del trasiego de drogas: las de China, Méndez, Miguel Alemán y hacia Matamoros, que es una ciudad controlada por el cártel del Golfo”, precisa González.

### **Extorsión masiva**

La precaria situación económica de San Fernando ayudó a que los cárteles reclutaran a población de todos los niveles, especialmente a las mujeres. Fuentes de la alcaldía calculan que unos 6 mil habitantes del pueblo tienen un familiar relacionado o involucrado con alguno de los dos grupos de la delincuencia organizada que se disputan la plaza: El cártel del Golfo y Los Zetas.

“Eso fue lo que hizo que en la región se recrudecieran los enfrentamientos y se viera afectada la población... los cárteles cobran piso y se vieron afectadas áreas de la producción y cerraron negocios.

En San Fernando hay producción pesquera por la zona de La Carbonera y a los pescadores también les cobraban piso. También se vio afectada la producción de sorgo, del que Tamaulipas es uno de los principales productores en el país”, enfatiza el general González.

“En esa época (cuando se dio el rompimiento entre el cártel del Golfo y Los Zetas) todos conocimos, escuchamos o sabíamos de personas levantadas”, señala una joven mujer después de vencer su miedo a hablar. “En una semana desaparecían siete u ocho”.

La narcoguerra provocó que el pueblo se dividiera. Los vecinos, amigos e incluso familiares se denunciaban mutuamente... pero las acusaciones no se hacían ante las autoridades, sino ante el cártel rival, aseguran habitantes del pueblo.

Los grupos marcaban su territorio e imponían controles. En las principales carreteras que pasan por San Fernando se colocaron retenes. “Incluso clonaban uniformes militares”, así que no se podía confiar ni en los tradicionales puestos de revisión del Ejército.

“Las autoridades nunca se preocuparon por el crimen organizado”, dice una mujer que voltea para asegurarse de que nadie más la escucha, pese a que habla en su propia casa. Agrega que varios funcionarios estaban implicados con alguno de los grupos criminales.

Al final Los Zetas tomaron el control del pueblo e impusieron sus reglas. Los jefes del grupo, Heriberto Lazcano, El Lazca, y Miguel Treviño Morales, el Z-40, nombraron a Salvador Alfonso Martínez Escobedo, La Ardilla, jefe de la región.

La Ardilla designó al exmilitar Édgar Huerta Montiel, El Wache, lugarteniente para San Fernando junto con Martín Omar Estrada Luna, El Kilo, pistolero formado en las pandillas de Estados Unidos y quien en los hechos era el verdadero jefe de la plaza.

El Kilo se dejaba ver armado en todos los rincones del pueblo. Se bajaba de su vehículo con su arma a comprar en las tiendas de la plaza principal, donde está la Presidencia Municipal. Tenía en su nómina a 20 de los 34 policías municipales de San Fernando. Entre otras medidas impuso un toque de queda que obligaba a la población a meterse a sus casas a las nueve de la noche.

También formó un ejército de jovencitas que se desempeñaban como “guardias”, como se llama aquí a quienes espían para la delincuencia organizada. En otras localidades se conocen como “halcones”, excepto en Miguel Alemán, donde también son mujeres jóvenes las que vigilan los movimientos militares y ahí les dicen “panteras”.

“Se podían ver jovencitas paradas frente a la Presidencia con su celular. Estaban por todos lados y reportaban todo lo que escuchaban”, comenta la mujer en voz baja.

La estricta vigilancia y los controles eran para que los golfos no retomaran la plaza. Los Zetas sabían que desde marzo de 2010 el cártel del Golfo había acordado una alianza con La Familia Michoacana y con los de Sinaloa para eliminarlos.

El estricto control impuesto por El Kilo incluyó que todos los autobuses que llegaran desde el sur fueran revisados, principalmente los de ADO, Ómnibus de México, Transpaís y Futura. Tenía reportes de que

sicarios de los grupos rivales estaban llegando a la región para matar zetas y arrebatárles sus dos principales bastiones: Tamaulipas y Nuevo León.

“Todos los días llegaba un autobús (del sur) y los investigaban por el lugar de procedencia. Se les revisaban los mensajes de los celulares. A la gente que no estaba relacionada se le dejaba ir. A los otros los matábamos”, contó El Wache durante su interrogatorio ante la Policía Federal.

Desde su paranoica visión, todos los jóvenes que se dirigían a la frontera podrían ser reclutados por el cártel rival. Huerta Montiel confesó que mataron a los 72 migrantes centroamericanos porque “iban para el Metro 3”, el jefe del cártel del Golfo en Reynosa.

Después de revisar durante semanas una decena de autobuses ya tenían capturados a 193 jóvenes de varios estados. Los que venían de Michoacán o Sinaloa eran asesinados de inmediato, estuvieran o no relacionados con la delincuencia organizada.

A mediados de 2010 mataron a los 193. Con una retroexcavadora abrieron los pozos para enterrarlos, cerca del ejido La Joya. Los 72 migrantes que asesinaron fueron abandonados en el rancho San Fernando, en las afueras del municipio.

“Los que tenían el control de San Fernando eran Los Zetas cuando ocurrió la masacre de los migrantes y luego cuando aparecieron las fosas clandestinas”, recuerda el comandante de la VIII Zona Militar.

En agosto de ese año la Marina descubrió los 72 cuerpos de los migrantes, la mayoría centroamericanos, y se lanzaron a la captura de La Ardilla, El Wache y El Kilo. Este último fue ubicado por la DEA en Ciudad Victoria.

José Luis Vergara, vocero de la Secretaría de Marina, anunció en abril de 2011 la captura de Estrada Luna junto con 11 jóvenes, cinco mujeres y seis hombres, cuyas edades iban de 18 a 25 años. “Intercambio de información de agencias nacionales y extranjeras llevaron a la ubicación y aseguramiento de El Kilo en la capital de dicho estado”, precisó en la conferencia de prensa. Después capturaron a más de sus cómplices y comenzaron a llegar a San Fernando alrededor de mil 500 efectivos del Ejército.

Veinte policías municipales fueron detenidos por colaborar con la delincuencia organizada; sólo quedaron 14, que luego renunciaron.

El secretario de Seguridad Pública estatal firmó un convenio con las fuerzas federales para integrar una policía que está formada por 100 militares quienes patrullan la ciudad desde junio pasado; incluso hacen el papel de agentes de tránsito.

Durante el periodo de la narcoguerra (es decir, el enfrentamiento entre zetas y el cártel del Golfo), afirma el alcalde Tomás Gloria, 10% de la población de San Fernando emigró además de que se cerraron muchos negocios, especialmente las agencias automotrices. “También huyeron muchos empresarios”. Las grandes líneas de autobuses suspendieron sus corridas; unas cuantas siguieron funcionando, pero sólo durante el día.

Los hombres y mujeres que hablaron con Proceso aseguran que los narcos no se han ido, “sólo se replegaron”. Ahora operan en los pueblos de las zonas aledañas. Un soldado originario de Veracruz

comenta que recientemente han tenido tres enfrentamientos con jóvenes armados que llegan en camionetas.

Lo que aún falta por saber, dicen los entrevistados, es dónde quedaron los cuerpos de decenas de personas levantadas durante la narcoguerra. Quizá no estén todos en una fosa común pues, como confesó El Wache, “fueron enterrados en todos lados”.

### **“Los Zetas” buscan armas en El Salvador”**

**Redacción**

**Proceso**

**21 junio 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/273393/e2-80-9clos-zetas-e2-80-9d-buscan-armas-en-el-salvador>

MÉXICO, D.F., (apro).- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, aseguró que el cártel de Los Zetas ha hecho contactos en su país para reclutar a elementos del ejército y la policía, con el claro objetivo de obtener armas.

De acuerdo con el mandatario, El Salvador resulta atractivo para el grupo criminal, únicamente para conseguir las armas que aún no han sido legalizadas tras 12 años de guerra civil, pero no para operar como lo hace en México y Guatemala.

“Sabemos que han hecho exploraciones, que han hecho contacto, que buscan reclutar elementos de la policía y fuerza armada, pero con el propósito de obtener armas”, dijo.

Entrevistado en el marco de su visita a México, luego de reunirse con el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), Funes afirmó que el tráfico de armas es “impresionante” en su país, y es muy probable que el cártel encabezado por Heriberto Lazcano, El Lazca, busque obtenerlas.

El mandatario salvadoreño descartó que Los Zetas o cualquier otro grupo criminal operen en su país, debido a que El Salvador siempre ha sido punto de paso de la droga. No obstante, reconoció que el narcomenudeo ya toma fuerza entre las pandillas.

Durante su reunión con empresarios salvadoreños y mexicanos, Funes destacó que el combate a la inseguridad es el principal reto para Centroamérica, por lo que pidió apoyar la lucha emprendida por los gobiernos de México y Colombia, aunque también solicitó la participación de Estados Unidos.

### **“Caen 11 ‘halcones’ de Los Zetas y aseguran a 42 migrantes en Tamaulipas y NL”**

**Redacción**

**Proceso**

**7 julio 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/275214/caen-11-e2-80-98halcones-e2-80-99-de-los-zetas-y-aseguran-a-42-migrantes-en-tamaulipas-y-nl>

MÉXICO, D.F. (apro).- En acciones por separado, agentes de la Policía Federal (PF) localizaron a 42 indocumentados y a un presunto traficante de inmigrantes en los estados de Tamaulipas y Nuevo León.

En esta última entidad fueron capturados 11 presuntos informantes al servicio de Los Zetas. Entre los detenidos se encuentran nueve elementos activos de la Policía Municipal de Sabinas Hidalgo.

Los indocumentados centroamericanos fueron detenidos en el kilómetro 15+500 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, durante una revisión de rutina en el interior de un ómnibus.

El grupo señaló a uno de los pasajeros como presunto responsable del traslado ilegal de inmigrantes a Estados Unidos, de nombre Santiago del Carmen Ramírez Toga, de 24 años, originario del estado de Campeche.

Los agentes federales detuvieron Ramírez Toga y al conductor de la unidad, Manuel Santoyo Rodríguez, quienes fueron trasladados a las instalaciones del Ministerio Público de la Federación. Los 22 inmigrantes, 21 de los cuales son originarios de Guatemala y una de Honduras, fueron remitidos al Instituto Nacional de Migración (INM).

En otra acción distinta en San Roberto, Nuevo León, elementos de la PF aseguraron a otros 20 inmigrantes indocumentados, de los cuales 16 son hondureños y cuatro ecuatorianos. Fueron trasladados al INM en Saltillo, Coahuila.

Por otra parte, derivado de una orden de localización y presentación girada por el Ministerio Público de la Federación, elementos de la PF aseguraron a 11 sujetos presuntamente relacionados con la organización delictiva Los Zetas, quienes operaban en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Los federales implementaron un operativo en dicha localidad mediante el cual fue ubicado Ricardo Francisco Monsiváis Tovar, de 25 años, comandante en activo de la Policía Municipal de Sabinas Hidalgo.

Junto con Monsiváis Tovar fueron detenidos ocho policías municipales en activo: Gerardo Isaías Quiroz Sosa, Tercero Quiroz, de 28 años; José Castulito Granados Salazar, Castulito, de 30 años; Roque Antonio Buentello López, Roca, de 25 años; Juan René Alemán Camacho, de 38 años; Carlos Adrián Medina Cantú, de 29 años; Daniel López Ábrego, de 22; Heraclio Ruiz Treviño, de 25; y Juan Antonio Sánchez García, de 39 años de edad.

La SSP informó a través de un comunicado que los detenidos brindaban información a “Los Zetas” sobre la ubicación de autoridades e integrantes de grupos antagónicos.

En esta acción también fueron detenidos José Guadalupe Bautista Medina, de 26 años, y José Luis González Guardián, El Wicho, de 45 años, este último identificado por autoridades estadounidenses como presunto traficante de droga hacia el estado de Texas.

Los 11 sujetos detenidos están relacionados con el homicidio de dos policías federales el pasado 1 de julio de 2011 en Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Durante esta acción, en la que se dio cumplimiento a la orden de localización y presentación número SIEDO/UEIS/18188/2011, se logró el aseguramiento de una patrulla de la Policía Municipal de Sabinas Hidalgo con placas de circulación PY98755, un automóvil marca Cadillac Escalade modelo 2007, color

arena, con placas de circulación TXC 787 de Texas; una camioneta Ford pickup F-150 Custom color blanco, con placas de circulación WJ 87808 del estado de Tamaulipas; tres pistolas de distintos calibres y 160 cartuchos calibre .223, además de 100 envoltorios de marihuana, cuatro equipos de telefonía móvil y cinco equipos de radiocomunicación.

### **“Con narcomantas, se desligan Los Zetas de ataque a bar en Monterrey”**

#### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**10 julio 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/275524/con-narcomantas-se-deslindan-los-zetas-de-ataque-a-bar-en-monterrey>

MÉXICO, D.F. (apro).- Una serie de narcomantas aparentemente firmadas por Los Zetas aparecieron hoy en cinco entidades del país, en las que esa organización delictiva se deslinda del ataque a un bar en Monterrey que dejó 19 víctimas mortales, el viernes pasado.

“Grupo Zeta se deslinda de los atentados a la población civil que ocurrieron en la fecha 9 de julio en Monterrey, Nuevo León, así mismo responsabiliza al cártel del Golfo de esos atentados”, decían los mensajes.

En Nuevo León aparecieron al menos seis mantas, la mayoría de ellas en la capital. Dos fueron observadas en el bulevar Díaz Ordaz, en Santa Catarina; otra en el cruce de Madero y Artículo 123; una más en Gonzalitos y Dr. Francisco A. Rocha; la quinta en la calle Río Aguanaval y otra sobre avenida Revolución.

En Ciudad Juárez se hallaron dos mantas, una en la avenida Tecnológico y Ejército Nacional y otra en el perimetral Carlos Amaya.

La intención es “calentar las plazas y desviar la atención de los operativos que están en Reynosa M. y Díaz Ordaz, que es lo último que tienen. Los invitamos a pelear de frente y no metiéndonos con la población”, señalaban los mensajes.

Asimismo, en San Luis Potosí aparecieron dos narcomantas durante la madrugada con mensajes similares. Una fue colocada en un puente peatonal y la segunda en la carretera a Rioverde. También se reportó la aparición de mantas en Zacatecas y Querétaro.

## **“El corredor de Los Zetas: San Luis-Zacatecas”**

**Verónica Espinosa**

**Proceso**

**19 julio 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/276340/el-corredor-de-los-zetas-san-luis-zacatecas>

ZACATECAS, ZAC.(Proceso).- Asentados a sus anchas en el corredor San Luis Potosí-Zacatecas, Los Zetas se placean ante los contingentes de la Marina Armada de México y del Ejército enviados por el gobierno federal con el pretexto de atender las urgentes peticiones de los gobernadores de ambas entidades, con sus policías locales rebasadas o cooptadas.

Tras varias semanas de incursión, marinos y soldados lograron exterminar a un buen número de presuntos miembros de la organización delictiva, particularmente en Zacatecas, pero la estadística oficial no aclara que la mayoría de ellos son halcones y sicarios, jóvenes de los más bajos niveles de la estructura criminal.

Mientras tanto, Heriberto Lazcano, El 50, El Diamante y otros cabecillas se desplazan entre Fresnillo, su principal feudo zacatecano, y la capital potosina. Quienes han visto a Lazcano lo describen actualmente como “más robusto” de lo que aparece en los promocionales de televisión, por medio de los cuales el gobierno federal anunció su captura erróneamente.

Estos jefes zetas le aseguran a su gente que su presencia en 18 estados es más fuerte que nunca, y que cotizarán muy caro este corredor entre sur y norte del país en caso de que se negocie con los otros cárteles que lo ambicionan: el de Sinaloa y el del Golfo.

De acuerdo con una fuente allegada a la XII Zona Militar, Los Zetas ya están operando en la Huasteca potosina, desde Tamuín, en la frontera con Tamaulipas, hasta Rioverde.

El lunes 4 de julio, la alcaldesa de Ciudad Valles, Socorro Herrera Orta, estaba en su despacho cuando se descubrió en la plaza principal una advertencia dirigida a ella en una hielera: “Este es el último mensaje COCO para que te comuniquen, en la próxima vendrán las cabezas de toda tu familia, y va para todos los que apoyan al Golfo. Atte Los Zetas” (Sic).

Al día siguiente otro mensaje fue encontrado en pleno centro de San Luis dentro de una caja de pollos: “Ya llegamos putos Zetas. Atte negros cártel del Golfo”.

Aunque al parecer los han desplazado a sangre y fuego de la Huasteca, Los Zetas han conseguido el dominio total de Zacatecas. Aunque tienen un frente abierto con el cártel de Sinaloa (Cárteles Unidos) en el sur de la entidad, en los límites con Jalisco y Aguascalientes, nada les estorba en el corredor entre San Luis Potosí, el norte de Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas, que en un análisis del despacho estadounidense Stratford y la revista The Economist se identifica como una ruta principal del tráfico de efedrina.

Dos fuentes allegadas a la inteligencia militar en San Luis Potosí y en Zacatecas, que pidieron reservar su identidad, aseguran que la detención del líder zeta Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, no

ocurrió en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, como informó la Secretaría de Seguridad Pública federal el lunes 4 (al día siguiente del triunfo del PRI en la elección de gobernador), sino que en realidad fue capturado en Fresnillo, importante enclave del grupo criminal.

A Rejón Aguilar, uno de los fundadores de Los Zetas, se le vincula con el ataque a dos agentes migratorios de Estados Unidos cometido el 14 de febrero en la carretera Querétaro-San Luis Potosí. El vocero federal Alejandro Poiré alardeó de su captura y de que “ya sólo falta la captura de Heriberto Lazcano Lazcano, principal cabeza de la organización”.

No obstante, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicados por el diario local NTR revelan que en 2010 se conocieron en Zacatecas 105 casos de privación ilegal de la libertad –sólo 13 de ellos denunciados formalmente–, mientras que San Luis Potosí se ubicó entre las ocho entidades del país con mayor incidencia de homicidios dolosos.

Aunque se ha reportado que la revisión de control de confianza a los mandos policiacos avanza con relativa eficacia, ninguna de las dos entidades cuenta con centros de control certificados: en Zacatecas está en proceso y en San Luis apenas se perfila el modelo de certificación. Por lo pronto, la depuración de mandos medios y de los efectivos estatales no llega a la mitad, y en el caso de los municipales ni a 25%.

Un informe del Sistema Nacional de Seguridad establece que, en las actuales condiciones, San Luis Potosí carece de capacidad instalada para realizar evaluaciones integrales y que Zacatecas tardaría más de dos años en aplicarlas totalmente a sus policías.

De acuerdo con el comercio organizado, en los meses recientes los distribuidores “macro” (de marcas como Sabritas, Bimbo y Coca-Cola) se han encontrado con que en las comunidades zacatecanas casi la mitad de las tiendas cerraron con tal de no vender drogas o por miedo a los asaltos.

La Asociación de Gasolineros dio cuenta en una reunión con el procurador cómo Los Zetas no sólo exigen el combustible bajo amenazas, sino que también “castigan” a aquéllas bandas que se hacen pasar por miembros de la organización delictiva para extorsionar. Mencionan incluso un video que muestra a dos ladrones rociados de combustible y quemados vivos “por andar diciendo que son zetas”.

## **Confrontación**

Tal como a finales de mayo el gobernador zacatecano, Miguel Alonso, pidió ayuda extraordinaria al secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, su homólogo potosino, Fernando Toranzo, solicitó el retorno de los policías federales que arribaron en enero para vigilar las carreteras de su estado. Este contingente sólo permaneció ahí dos semanas y se fue comisionado de manera urgente a Chihuahua.

A mediados de junio, el comandante de la XII Zona Militar, Federico Reynaldos del Pozo, informó que 400 efectivos del 45 Batallón de Infantería se unieron a otros 500 que ya operaban en la Huasteca potosina. Al mismo tiempo arribaron a Zacatecas 110 elementos de la Marina Armada de México en unidades Ram y camiones Mercedes.

Los dos declararon que trabajan “en coordinación” y que participan en “operativos conjuntos”, pero sus corporaciones de seguridad permanecen ajenas a la estrategia militar del presidente Felipe Calderón por

la sospecha de que están infiltradas. También influye el hecho de que hay municipios donde no se ve ni un solo preventivo en la calle.

Días después de que los soldados de Infantería se instalaron en San Luis Potosí e iniciaron operaciones en la Huasteca, Rodolfo Saucedo renunció como director de la Policía Ministerial del estado y circuló la versión de que lo mismo haría el procurador, Cándido Ochoa Rojas.

En Fresnillo, la Policía Federal, no la estatal, aprehendió a Édgar Huerta Montiel, El Wache, presunto cabecilla zeta en San Fernando, Tamaulipas, donde se han encontrado fosas clandestinas con cientos de cadáveres. Huerta, de 22 años, estaba en un hotel que Los Zetas ocupaban desde dos meses antes, como lo hacen en esta región con otros negocios, como gasolineras y antros.

Y en el operativo del 1 de julio en la comunidad San José de Lourdes, Fresnillo, donde los militares abatieron a un grupo de zetas, no participó ningún elemento estatal o municipal. Por el contrario, fueron mantenidos “a raya” mientras los marinos cercaban Fresnillo, instalaban varios retenes y penetraron el poblado, cuyos 5 mil habitantes vivieron cinco horas de tiroteo.

En esa refriega algunas estaciones locales de radio alcanzaron a transmitir llamadas de presuntos sicarios encerrados en una casa de seguridad, en las que pedían la presencia de los periodistas “para que vieran lo que estaban haciendo los marinos” y porque se querían entregar frente a la prensa. El saldo oficial quedó en 15 muertos y varios heridos, entre ellos algunos marinos, aunque fuentes allegadas a corporaciones del estado refieren que se contaron decenas de cadáveres.

Varios automovilistas que circulaban por la autopista de Fresnillo dieron testimonio a Proceso de que en los retenes de la Marina había personal cubierto con capucha y uniformes tácticos, que sólo hablaba inglés.

Los policías estatales y municipales no pueden ocultar su molestia con los marinos, no sólo porque los excluyen de las estrategias de inteligencia y de los operativos, sino porque aplican revisiones sorpresivas a las policías municipales.

El miércoles 13, policías preventivos de la capital zacatecana estuvieron a punto de tirotarse con marinos en el cruce de las avenidas Jesús Reyes Heróles y Prolongación La Encantada, colonia Bellavista. No habían pasado más de 24 horas de la visita del presidente Calderón; eran las 14:30 horas cuando seis agentes municipales en dos patrullas les cerraron el paso a tres vehículos de la Marina con 24 efectivos que supuestamente iban a la Dirección de Seguridad Pública municipal a realizar una “revisión de rutina”.

Inmediatamente los marinos saltaron de sus unidades Ram y apuntaron a los municipales ante centenares de transeúntes y automovilistas, narró a Proceso un testigo.

A gritos los cuestionó un policía que se identificó como el “comandante Juárez”: “¿Ustedes qué chingan aquí? No se metan con mi gente, aquí no estamos en Fresnillo ¿Quién viene al mando? ¿Traes una orden de aprehensión? No, cuál revisión de rutina. Aquí tengo los papeles del armamento de mis agentes. Revísalo, pero con mis hombres no te metas”.

El incidente duró más de 25 minutos. Muchos civiles dejaron sus autos en la calle y buscaron protegerse del tiroteo que creyeron inminente.

Además de los policías que les cerraron el paso, a los marinos les apuntaba con armas largas otra decena de agentes desde el muro perimetral de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Cuando llegó un contingente de policías estatales, se limitaron a desviar el tránsito hasta que los marinos accedieron a retirarse. Saliendo rumbo al municipio conurbado de Guadalupe. Ninguna autoridad local o federal comentó el incidente.

En la visita que Calderón hizo la semana a su estado, el gobernador potosino Fernando Toranzo le pidió al presidente que esta vez no retirara a las fuerzas federales del estado y que, al contrario, enviara más refuerzos.

Pero Calderón charlaba con el secretario de Economía, Bruno Ferrari. Parecía distraído y ausente, como escribieron algunos columnistas en los diarios locales. Toranzo alzó un poco la voz en el micrófono, pero el presidente se fue sin responderle.

### **“Los Zetas crean “ejército de reserva” con migrantes: Solalinde”**

**JOSÉ GIL OLMOS**

**Proceso**

**25 julio 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/277041/los-zetas-crean-ejercito-de-reserva-con-migrantes-solalinde>

MÉXICO, D.F. (apro).- El grupo criminal de Los Zetas secuestra hombres y mujeres migrantes, los adiestra y los convierte en su “ejército de reserva”, afirmó el sacerdote Alejandro Solalinde, que dirige el albergue “Hermanos en el camino”, ubicado en Ixtepec, Oaxaca.

Testigo de los múltiples agravios que sufren los indocumentados centroamericanos en su paso por México para llegar a Estados Unidos, Solalinde, también organizador de la caravana “Paso a paso hacia la paz” sostuvo que ahora los migrantes son tomados como “desechables” por el grupo criminal.

Entrevistado por una estación radiofónica de Tabasco, el activista defensor de los derechos de los migrantes, recordó que los plagios por parte de Los Zetas empezaron a denunciarse hace dos años, pero entonces no pedían rescate a los familiares, sólo obligaban a sus víctimas a trabajar para ellos.

“Los migrantes están atrapados. Los sicarios primero los entrenan y luego los ponen a trabajar en las plazas nacionales que controlan o incluso fuera del país. No se pueden salir del entorno al que los confinan porque los matan”, relató.

Solalinde contó que en una ocasión recibió información de que dos jóvenes de Veracruz fueron obligados a participar en una matanza en Guatemala.

También relató que algunos jóvenes que llevaban tiempo desaparecidos, lograban comunicarse con su familia sólo para decirles que estaban trabajando para Los Zetas y que mejor se olvidaran de ellos porque jamás los iban a soltar.

Solalinde fue entrevistado en el marco de la caravana “Paso a paso hacia la paz” que recorrerá el mismo trayecto que la llamada ruta de muerte que realizan los migrantes desde Tenosique Tabasco, hacia Orizaba, Veracruz.

Afirmó que en Veracruz se da con mayor intensidad el reclutamiento forzado y ahora los criminales han centrado su atención en los adolescentes de los pueblos y ciudades veracruzanas.

El sacerdote Alejandro Solalinde, encargado del área pastoral de migrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano sostuvo que lo mejor que les podría pasar a los “nuevos esclavos” del crimen organizado es que los metan a la cárcel. De esa manera, dijo, aunque les den una sentencia larga se liberarían del poder de los narcotraficantes.

La movilización contra de los secuestros y violaciones a los derechos de los migrantes inició el pasado sábado 23 de manera simultánea en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, y culminará en México el domingo 31 de julio.

### “Capturan en Guatemala a socio de Los Zetas”

#### REDACCIÓN

#### Proceso

28 julio 2011

Consultada 4 diciembre 2019

<https://www.proceso.com.mx/277265/capturan-en-guatemala-a-socio-de-los-zetas>

MÉXICO, D.F., (apro).- El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, dio a conocer la detención de Oscar Tiul, *Comandante Cherry*, a quien se vincula con el asesinato del fiscal del departamento de Alta Verapaz, Allan Stowlinsky, registrado el pasado 25 de mayo.

En un comunicado, el gobierno guatemalteco detalló que Tiul fue capturado junto con su pareja sentimental, Andrea Morales.

“Es una importante captura”, celebró Colom durante su estancia en México.

Según autoridades del país centroamericano, el *Comandante Cherry*, de 32 años de edad, está vinculado también con Los Zetas. Y es que sospechan que él se encargó de organizar, el pasado 10 de julio, una narcofiesta en el departamento de Quiché, que finalmente no se llevó a cabo porque la policía frustró el evento al detener a 11 presuntos zetas.

El Ministerio Público informó que la captura de Tiul ocurrió tras un allanamiento en una casa localizada en Ciudad de Guatemala, donde descansaba junto con su compañera Andrea Morales. Ambos fueron remitidos a un tribunal, acusados del delito de asociación ilícita.

En la vivienda se localizó dinero en moneda local, equivalente a mil 500 dólares, así como un arma de fuego calibre .9 milímetros y teléfonos celulares en los que se detectó un intercambio de mensajes con otros miembros de la “estructura criminal”, informó el MP.

La Policía Nacional Civil señaló que presumiblemente Tiul tenía entre sus tareas abastecer de drogas, bebidas alcohólicas y mujeres a los miembros de Los Zetas durante sus reuniones.

Y señaló que a la fecha suman 13 los presuntos miembros de esa organización criminal capturados en los últimos 17 días por las fuerzas de seguridad, vinculados a la narcofiesta que se realizaría en Quiché.

**“Pide perdón Solalinde a “Los Zetas”; también son víctimas, aclara”**

**PEDRO MATÍAS Y REGINA MARTÍNEZ**

**Proceso**

**29 julio 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/277375/pide-perdon-solalinde-a-miembros-del-crimen-organizado>

COATZACOALCOS, Ver. (apro).- De rodillas y ante un altar improvisado, de manera inesperada el padre Alejandro Solalinde Guerra pidió “perdón a Los Zetas, a todos los delincuentes y a todos los hermanos que les hemos fallado, que son víctimas de una sociedad enferma que no supo darles apoyo, que no supo darles valores”.

Los criminales, dijo Solalinde Guerra al recorrer esta ciudad junto con 600 familiares de centroamericanos desaparecidos en México, son “las primeras víctimas de un gobierno corrupto, capitalista, neoliberal, enfermizo y fallido”.

En una liturgia celebrada bajo el puente de la Avenida 1, donde los indocumentados aguardan el paso de *La Bestia*, el religioso envió mensajes directos a las autoridades gubernamentales, eclesiásticas, educativas y a los propios victimarios de los migrantes.

Flanqueado por fray Tomás González Castillo y del coordinador de la Movilidad Humana de la diócesis de Coatzacoalcos, David Hernández Tovilla, Solalinde se hizo eco de la angustia de los familiares de los migrantes.

En su reflexión, pidió “perdón a nombre de esa escuela a la que quizás no tuvieron acceso o no supieron educarlos y solamente los instruyeron”.

La jerarquía católica no escapó a los cuestionamientos del religioso, quien también pidió perdón “por esas iglesias cristianas, evangélicas o católicas que les dieron una embarrada de religión y de valores y que no supimos formarlos en los valores de Jesucristo; al contrario, contribuyeron a la idolatría y a la adoración del dinero”.

Rodeado de madres, hermanos e hijos que en sus manos portaban los retratos de sus seres queridos, de los que desconocen su paradero desde hace 10, 15 ó 20 años, Solalinde volvió a pedir perdón por políticos que no supieron estar “a la altura de su responsabilidad histórica, no supieron responder a formar personas, en fin, por todo esto, hermanos Zetas, hermanos que han participado en la delincuencia organizada y que han contribuido en el dolor de estas familias que están aquí, por ellos les pido perdón de todo corazón”.

El franciscano González Castillo secundó las denuncias que de manera sistemática viene realizando el padre Solalinde, al reafirmar que Veracruz, junto con Tabasco y Tamaulipas, constituye la zona más peligrosa del país en la ruta de los migrantes para llegar a buscar trabajo en Estados Unidos.

Luego, con ironía, destacó que “extrañamente en esta travesía hoy no pasó nada. Todo estuvo tranquilo, cuando de todos es sabido que en la ruta te pueden robar, extorsionar, secuestrar y, lo peor que les puede pasar, es ser asesinados o mutilados por el tren”.

El sacerdote denunció el calvario que pasan las familias de los migrantes para recuperar los cuerpos de sus muertos que terminan en la fosa común.

Hizo hincapié en que “tan sólo en Tenosique tenemos una fosa común donde van a dar los migrantes mutilados o las personas encontradas en las vías del tren o las personas que son asaltadas y las matan”.

Lamentó que “todavía después de muertos, no tengan el derecho a retornar a sus lugares de origen”.

También trajo a colación la postura del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Felipe González, quien calificó este fenómeno de una tragedia humanitaria, como lo confirma el informe de la CNDH, que documentó sólo en 2010 unos 20 mil casos de desaparecidos, secuestrados y muertos en todo el país.

## “Cae jefa de ‘Los Zetas’ en San Nicolás de los Garza”

### REDACCIÓN

#### Proceso

11 septiembre 2011

Consultada 4 diciembre 2019

<https://www.proceso.com.mx/281163/cae-jefa-de-e2-80-98los-zetas-e2-80-99-en-san-nicolas-de-los-garza>

MÉXICO, D.F. (apro).- La jefa de la plaza de “Los Zetas” en San Nicolás de los Garza, Nuevo León fue detenida por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en la colonia Santa Fe Oriente.

La Semar informó en un comunicado de prensa sobre la detención de Verónica Mireya Carreón, alias *La Vero* y *La Flaka*, sin que se dieran más generales de ella.

Junto con *La Vero* fue arrestado José de Jesús Molina, *El Chuy*, o *Mr. Chip*. Ambos viajaban en un vehículo con reporte de robo por calles de la colonia Santa Fe Oriente, en San Nicolás.

Vecinos del sector habían reportado a las autoridades la presencia de personas sospechosas en un auto, por lo que elementos de la policía acudieron al lugar y encontraron el vehículo en que viajaban los ahora detenidos.

*La Vero*, según el comunicado, ocupó el lugar de Raúl García Rodríguez, *El Sureño*, quien era el jefe de plaza en San Nicolás para “Los Zetas”, detenido en agosto por las autoridades.

En el caso de José de Jesús Molina, él trabajaba con *El Sureño*, y era el encargado de proveer de equipos de comunicación a las personas que estaban trabajando con el grupo delictivo que operaba en esa parte del área metropolitana.

En la revisión que se hizo al vehículo, las autoridades decomisaron un revólver calibre .38 especial, 100 dosis de cocaína, 50 dosis de piedra, dos paquetes de marihuana, y seis teléfonos celulares.

### **“Anonymous retoma “operación cártel” contra Los Zetas”**

**MARÍA LUISA VIVAS**

**Proceso**

**1 noviembre 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/286902/anonymous-retoma-operacion-cartel-contra-los-zetas>

**MÉXICO, D.F. (apro).- La organización de hackers “Anonymous Iberoamérica” anunció que, a petición expresa de la gente, retomará la Operación Cártel (#OpCartel), que consiste en la revelación de “datos sensibles” acerca de organizaciones criminales y en específico de Los Zetas.**

A través de su blog oficial Anonymous Iberoamérica, el grupo de hackers que había dado marcha atrás en su intención de revelar este tipo de información, por el “altísimo riesgo” que representaba para sus miembros, publicó dos nuevas entradas en las que anuncia la reactivación de la operación con la que pretende dar a conocer información de organizaciones criminales.

“Particularmente aquellas que se dedican al narcotráfico y sus relaciones con los gobiernos, especialmente el gobierno de México y otros países, y las agencias antidrogas de la Unión Americana”, señala en una entrada publicada el 31 de octubre.

Si bien los hackers admiten que es una operación polémica y que ya habían optado por no intervenir, señalan que recibieron muchas muestras de apoyo y solidaridad y peticiones del pueblo “clamando por ayuda”.

Además, afirman, “debemos tener presente que estamos del lado del pueblo, y que no podemos dejar al pueblo de lado, sobre todo en momentos críticos como el que se vive actualmente”.

En otra entrada, publicada este martes, centran el mensaje en el grupo criminal Los Zetas, en el pueblo mexicano y en el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Al grupo criminal liderado por Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, le dicen: “Ahora esto es internacional. Es global. Pueden intentar detener a los Anónimos en México, Centroamérica y tal vez en Estados Unidos, pero no pueden detener a Anonymous como una idea mundial, como un espíritu global al que no le pueden disparar, al que no pueden quemar en ácido.

“Terminen con su régimen de terror. Sabemos que estamos arriesgando nuestras vidas, pero preferimos morir de pie a vivir una vida arrodillados. No sabemos quién o qué está en realidad detrás de ustedes. Pero créanos, lo sabremos. Casi nunca fallamos”, advierten.

El segundo párrafo lo dedican a los ciudadanos, en especial al pueblo de México, al que le dicen que tienen en sus manos la oportunidad de mostrar al mundo lo corrupto que es su gobierno, que ha sido incapaz de proporcionarle seguridad y que, además, es un aliado de las organizaciones delictivas que amenazan todos los aspectos de su vida.

“¿No estás cansado? ¿No estás harto de todas esas muertes? Esta es la oportunidad de mostrar a los criminales y al gobierno que estás realmente a cargo. Pueblos del mundo, este es un llamado a la revolución mundial. Ahora es el momento. La información es el arma. La resistencia es su motivación”, sostienen en su comunicado.

Al gobierno mexicano le señalan que han visto con paciencia cómo algunos de sus miembros han hecho acuerdos abiertamente con los grupos criminales en lugar de perseguirlos y cómo ha estado mintiendo a su pueblo, manteniendo una guerra contra las drogas, actuando como si realmente estuviera interesado en la salud pública.

Acusan al presidente Felipe Calderón de haber dado a los cárteles más poder del que el extinto narcotraficante colombiano Pablo Escobar pudo haber soñado.

“Este es el momento en el que deberían limpiar la casa. Debe dejar de mentirle a la gente, o de otra manera sus mentiras serán expuestas de la forma más deshonrosa. Señor Felipe Calderón, por favor reconsidere su guerra contra las drogas. No ataque los síntomas, ataque la causa”, le piden al primer mandatario.

Anonymous lanzó un video a principios de octubre, en el que denunciaba el secuestro de uno de sus miembros durante una protesta callejera denominada “Operation Paperstorm”, perpetrado por Los Zetas.

Entonces la organización de hackers amenazó con hacer pública información sobre políticos, empresarios, policías y taxistas que están coludidos con ellos.

La consultora de seguridad estadounidense, Stratfor, advirtió que la difusión de esa información era peligrosa, pues podría desatar una ola de asesinatos.

Piden a hackers tomar precauciones

Al retomar la #OpCartel, Anonymous advirtió a quienes no confíen lo suficiente en sus habilidades como hackers, que se abstengan de participar en esta operación.

“Exhortamos a todo aquel que no esté correctamente protegido a deslindarse inmediatamente de esta operación, y hacerlo público, ya que es una operación extremadamente riesgosa en la que existe un peligro inminente y verosímil de pérdida de vidas humanas en cantidad.

“Nadie les tachará de cobardes, ni les acusará de abandonar a sus hermanos anónimos en lo más cruento de la batalla. Sabemos que muchos están deseosos de participar, pero les pedimos que lo reconsideren.

“¿Tenemos miedo? Claro. ¿Tememos por nuestras vidas? Evidentemente. No obstante, creemos que es tiempo de decir alto y basta a la terrible situación provocada por la falsedad de los gobiernos y la falta de escrúpulos de personas a las que no les importa el bienestar de sus congéneres y han provocado una deplorable situación de ruina y desencanto en lugares como México, un país que se encuentra al borde del colapso, a sólo pasos de una aniquilación total, por la necedad del gobierno en atacar los síntomas

del problema y no sus causas, en aras de una situación de oligarquía de la que la gente se encuentra fastidiada”, argumenta Anonymous.

Y advierte:

“Nosotros seguiremos adelante con la operación, ya que así se nos ha solicitado. Para este fin, conformaremos una fuerza de tarea especial dedicada a este asunto”.

Luego enlista los requisitos para participar en la Operación Cártel:

- Si no estás correctamente protegido, abstente de participar, por muy emocionante que pienses que sea. ESTO NO ES UN VIDEOJUEGO. ES UNA OPERACIÓN RIESGOSA EN LA QUE PELIGRA TU VIDA Y LA DE LOS TUYOS.
- No te identifiques como Anónimo. Nunca debes hacerlo, pero en este momento menos. No uses fotos de perfil de Guy Fawkes ni portes la máscara en lugares públicos o de forma que se te pueda identificar.
- No adquieras máscaras de V por el momento, especialmente por correo.
- No asistas a demostraciones públicas con máscara de Anonymous ni hables de Anonymous a nadie.
- Hasta nuevo aviso, todos los Paperstorms y Citystorms quedan suspendidos.
- No te comprometas. Toda información relativa al narcotráfico háznosla llegar de forma anónima. Para este fin, hemos habilitado un widget para llevarlo a cabo. Envía tu denuncia y nuestro equipo especializado se encargará de ello, así como de darle difusión. No trates de hacerte el héroe.
- No existe forma de solicitar el ingreso a la fuerza de tarea especializada, así que no insistas. Únicamente existe por invitación.

De acuerdo con The New York Times, Anonymous podría tener en su poder información de alrededor de 100 de los principales socios del cártel de Los Zetas.

En el primer mensaje transmitido a principios de octubre, el grupo de hackers afirmó que el próximo sábado 5 será “un día para recordar”.

### **“Planean ‘Los Zetas’ una cacería de hackers: Stratfor”**

**MARÍA LUISA VIVAS**

**Proceso**

**3 noviembre 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/287080/planean-los-zetas-una-caceria-de-hackers-stratfor>

**MÉXICO, D.F. (apro).- Scott Stewart, vicepresidente de inteligencia táctica de la consultora de seguridad estadounidense Stratfor, afirmó que *Los Zetas* se han tomado en serio la amenaza del grupo de ciberactivistas Anonymous, por lo que “estaría planeando una cacería de hackers”.**

El pasado martes 1, luego de recibir el apoyo y la petición del pueblo “clamando ayuda”, el colectivo de *hackers* anunció la reanudación de la Operación Cártel (#OpCartel), con lo que revelaría “datos sensibles” acerca de organizaciones criminales y en específico de *Los Zetas*, a más tardar el próximo sábado 5.

En un informe publicado este jueves por la consultora Stratfor, Stewart afirma que debido a que cada uno de los integrantes del colectivo de *hackers* puede decidir si participa o no en una operación, en virtud de los riesgos que eso implica, algunos de ellos desistieron y borraron sus cuentas de usuarios en línea, anteriormente asociadas con la campaña.

No obstante, otros activistas se hicieron más estridentes e instaron a que la campaña continúe. Incluso, señala el vicepresidente de inteligencia táctica de la consultora, “sólo se requeriría un individuo dedicado a continuar con la operación”.

Y anticipa que si bien algunos activistas de Anonymous continuarán la campaña, “también creemos que *Los Zetas* van a responder”.

Afirma que “al igual que otros cárteles mexicanos, *Los Zetas* no toman una afrenta a la ligera. Incluso, si Anonymous no puede proporcionar información que dañe las operaciones de contrabando de *Los Zetas*, el hecho de que el colectivo haya decidido desafiarlos públicamente se traducirá en algún tipo de respuesta.

“La gran pregunta es si *Los Zetas* poseen la capacidad de rastrear a los organizadores de la acción anónima”, arguye Stewart.

*Los Zetas*, señala el especialista, “parecen poseer al menos cierta capacidad rudimentaria para rastrear la actividad *online* de las personas en el mundo real. Ellos son conocidos por emplear su propio equipo de expertos y tener fuentes dentro del gobierno mexicano”.

Pero además de la inteligencia técnica, advierte, el grupo criminal puede utilizar la “antigua inteligencia humana” para localizar a sus enemigos virtuales, pues a veces la gente revela su identidad en línea con familiares y amigos, y “esa información puede ser escuchada y pasar a *Los Zetas* a cambio de dinero”.

No es gratuito, dice Stewart, que en su video del 31 de octubre Anonymous haya instado a los participantes en esta campaña a no hablar de sus actividades con nadie.

El funcionario de Stratfor advierte que uno de los problemas a que se enfrentaría el grupo criminal liderado por Heriberto Lazcano Lazcano, *El Lazca*, en el seguimiento de una entidad como Anonymous, es que es “intencionalmente amorfo”.

Al igual que internet, dice, es transnacional “y sería sorprendente si muchos de los elegidos para participar en la operación contra *Los Zetas* se encuentran en Estados Unidos, Europa y otras áreas que están fuera del alcance inmediato” del grupo criminal.

Sin embargo, esa naturaleza anónima también podría desencadenar otras consecuencias.

“Si *Los Zetas* secuestran y ejecutan patronos al azar en un café internet o decapitan a personas con máscaras de Guy Fawkes en la cabeza, será muy difícil probar que no se asociaron con Anonymous”, advierte Stewart.

También podrían ejecutar a personas al azar y afirmar que habían proporcionado información anónima con el fin de intimidar a la gente que realmente coopere con Anonymous. “Como señaló Anonymous en su video del 31 de octubre, esto es un negocio peligroso”, subraya Stewart.

En el pasado, agrega el funcionario de Stratfor, Anonymous ha *hackeado* grandes corporaciones transnacionales y gobiernos, pero las repercusiones de la participación en estas operaciones nunca fueron tan graves para los activistas en líneas como lo son en este caso.

“Ser identificado y detenido por Scotland Yard o el FBI es una situación muy diferente a ser identificados y detenidos por *Los Zetas*”, concluye.

Anonymous suspende #OpCartel por amenazas de muerte

El colectivo de *hackers* informó esta tarde que el compañero supuestamente secuestrado por *Los Zetas* a principios de octubre en Veracruz, durante una protesta callejera denominada “Operation Paperstorm”, fue liberado este jueves, a dos días de que se cumpla el plazo para divulgar la información sobre el grupo criminal y anunció la suspensión de la operación por amenazas de muerte al sujeto liberado.

A través de las cuentas de *Twitter* @anonohispano y @iberoanon, el colectivo aseguró que establecieron contacto con su compañero, del que no dan más detalles por motivos de seguridad.

“NOTICIA URGENTE #OpCartel – La persona secuestrada ha sido liberada, hemos establecido contacto con ella, pronto más detalles”, escribió el colectivo a través de la cuenta @anonohispano por la tarde.

Informó que la persona “fue soltada con indicaciones muy precisas de darnos un mensaje” e informó que más tarde publicarían en su *blog* oficial el texto explicativo sobre el tema.

No obstante, advirtió: “Comprenderás que no podemos dar mucho. Pero está vivo, que es lo importante”.

En otro mensaje le dicen a su compañero: “Hermano, nuestros mejores deseos a ti y a tu familia. Gracias por darnos el mensaje y qué bueno tenerte de vuelta”.

Por la noche, también a través de la cuenta de @iberoanon, la organización dio a conocer que suspenden la operación ante la posibilidad de que mueran personas inocentes.

Dice el mensaje publicado en el *blog* oficial:

“En el día de hoy, nuestro compañero anonymous retenido por el cártel de los zetas ha sido liberado.

“Hemos prestado sumo cuidado en verificar su identidad mediante contactos con sus compañeros y amigos y podemos decir que aunque magullado, está sano y salvo.

“Nos ha hecho llegar un mensaje, si Anonymous desvela algún nombre relacionado con el cártel, la familia del anónimo retenido sufrirá las consecuencias, por cada nombre del cártel revelado, diez personas serán ajusticiadas.

“No está en nuestro ánimo que la lucha diaria que llevamos a cabo por la libertad en el mundo conlleve que personas inocentes sean víctimas de la violencia y la barbarie que diariamente azotan a los mexicanos por parte de los cárteles de la droga.

“El colectivo de Anonymous ha decidido por consenso que la información de la que disponemos no sea desvelada por el momento, ya que entendemos que no podemos obviar las amenazas que involucran a personas civiles inocentes que nada tienen que ver con nuestras acciones.

El Conocimiento es Libre

Somos Anónimos.

Somos Legión.

No Perdonamos.

No Olvidamos.

Esperándonos”, concluye el breve comunicado.

Fue a partir del plagio de su compañero que Anonymous amenazó a *Los Zetas* con hacer pública información sobre policías, políticos, empresarios y taxistas coludidos con la banda, a través de la puesta en marcha de la Operación Cartel #OpCartel.

A finales del mes se desistió por el “altísimo riesgo” que representaba la operación para sus miembros, pero casi de inmediato anunció que la retomaban a petición del pueblo.

“Estamos del lado del pueblo... y no podemos dejar al pueblo de lado, sobre todo en momentos tan críticos como el que se vive actualmente”, argumentaron en una entrada de su blog oficial el 31 de octubre.

Entre sus publicaciones de este día, en el blog también aparece un breve texto con una imagen adjunta de la cuenta de Twitter de @pinkie1995, que se hace llamar “heriberto Lazcano”.

La entrada publicada por Anonymous Iberoamérica dice:

“Amenazas a Anonymous Iberoamerica #OpCartel.

BREAKING: Nos ha llegado este aviso a la cuenta de @iberoanon (una de nuestras cuentas oficiales)- No sabemos cómo pretenden rastrear esta IP (usamos VPN y varias capas de seguridad, idiotas, les tomará días saber que esa IP es de Polonia redirigida desde Bielorrusia en un momento dado), pero lo dejamos como constancia de hechos”.

La imagen adjunta con la cuenta de *Twitter*, que se ve es de reciente creación, porque solo cuenta con tres seguidores, tiene tres mensajes en los que se lee:

“tu sentencia está escrita apenas acabe tu tiempo te va a llevar la chingada a ti y a tu familia atte: el lazca”, señala el primer mensaje.

Otro señala: “te has metido con nuestra organización, solo queremos decirte, que con nosotros los zetas no se juega”.

Y el tercero remata: “@iberoanon estamos astreando (sic) tu ip y en cualquier momento te iremos a visitar”.

## **“Cae contador de “Los Zetas” en la Comarca Lagunera”**

**Miguel Cabildo**

**Proceso**

**11 noviembre 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/287840/cae-contador-de-los-zetas-en-la-comarca-lagunera>

MÉXICO, D.F. (apro).- Elementos del Ejército dieron un fuerte golpe a la organización delictiva “Los Zetas” en la Comarca Lagunera, luego de capturar al contador de esa organización delictiva, Sotero Aguilar Armendáriz, El Tomy, junto con una mujer identificada como Claudia Gabriela Pérez Guerra.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló que los militares realizaron una operación sorpresiva el jueves 11 en la región lagunera, con la misión de interceptar a El Tomy.

El detenido realizaba actividades administrativas y contables y era el encargado de hacer el pago a los integrantes de la organización delictiva en la región lagunera.

Sotero Aguilar, de 48 años, operaba en la ciudad de Torreón, Coahuila, bajo las órdenes de Juan Carlos Tarabay Castillo, El Veinte, actualmente subordinado a un hombre identificado como El Pinky, presunto jefe de la plaza de “Los Zetas” en la capital coahuilense.

La Sedena destacó que los efectivos castrenses llevaron a cabo una operación limpia, sin hacer un solo disparo.

La intención era capturar con vida a El Tomy, junto con Pérez Guerra, quien fungía como su asistente del contador de “Los Zetas”.

Los militares aseguraron 18 mil 561 pesos, 134 dólares americanos, equipo de cómputo y 20 memorias electrónicas con información contable.

De inmediato, los detenidos fueron puestos a la disposición del Ministerio Público Federal adscrito a la Procuraduría General de República (PGR) en Coahuila, instancia que en las próximas horas resolverá la situación jurídica de los presuntos delincuentes.

## **“Cárteles de Sinaloa y “Los Zetas” disparan la violencia en Centroamérica: Stratfor”**

**REDACCIÓN**

**Proceso**

**17 noviembre 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/288463/carteles-de-sinaloa-y-los-zetas-disparan-la-violencia-en-centroamerica-stratfor>

MÉXICO, D.F., (apro).- El avance de *Los Zetas* y del cártel de Sinaloa hacia Centroamérica ha disparado la violencia en el llamado “Triángulo del Norte”, sobre todo en Guatemala, donde la

organización criminal liderada por Heriberto Lazcano, *El Lazca*, está dispuesta a aplicar la misma violencia que en México para ganar terreno en ese país, reveló Stratfor

En su último informe sobre los cárteles de las drogas, titulado “La amenaza de los cárteles mexicanos en América Central”, la consultora de seguridad con sede en Texas refiere que el incremento en los niveles de delincuencia y el aumento de la competencia entre los cárteles mexicanos hace suponer que Centroamérica necesitará ayuda de Estados Unidos.

“La debilidad institucional y las vulnerabilidades de seguridad de Guatemala y otros países de América Central, significa que la lucha contra estas tendencias (de violencia) requiere una ayuda importante, lo más probable de Estados Unidos”, apunta Stratfor.

De acuerdo con el estudio, América Central, y en específico Guatemala, Honduras y El Salvador, que conforman el “Triángulo del Norte”, se ha convertido en un intermediario “cada vez más importante” para los proveedores estadounidenses y los compradores mexicanos de contrabando.

Honduras, por ejemplo, es ahora un “un importante destino” para los aviones de Venezuela cargados de cocaína. Una vez descargadas esas aeronaves, los narcotraficantes transportan libremente la droga a través de Honduras y Guatemala y de ahí a México, casi siempre a través del despoblado municipio de Petén.

Debido que el tráfico de drogas ha aumentado, la violencia ha seguido el mismo curso. Según Stratfor, la tasa de homicidios en Honduras se ha incrementado 6% entre 2005 y 2010, de manera que hay 66 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En Guatemala, el aumento es de 13%, esto es 50 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Honduras la tasa creció 108% al registrarse 77 homicidios por cada 100 mil habitantes entre 2005 y 2010.

En el caso de México, señala Stratfor, “cifras conservadoras” ubican en 50 mil el número de muertos, derivados de la lucha contra el narco, con un aumento de 64%, lo que quiere decir que hubo entre 11 y 18 asesinatos por cada 100 mil habitantes entre 2005 y 2010.

Stratfor señala que son bien conocidas las relaciones de los cárteles de Sinaloa y *Los Zetas* con Guatemala, aunque las líneas de comunicación y sus acuerdos exactos “no están claros”.

Lo que sí está claro, señala la consultora, es que *Los Zetas*, cuyo líder es *El Lazca*, “están dispuestos a utilizar los mismos niveles de violencia en Guatemala para obligar a la lealtad, como lo ha hecho en México.

Aunque ambos, el cártel de Sinaloa y *Los Zetas*, siguen necesitando grupos guatemaltecos para acceder a conexiones de alto nivel político de Guatemala, los segundos han tomado un rumbo muy agresivo en la búsqueda de un control directo sobre más territorio en el país centroamericano, afirma la consultora.

Fue Mario Waltehr Overdick, ligado al crimen organizado en Guatemala, quien facilitó la entrada a ese país a *Los Zetas*, en el año 2007, y su primera incursión violenta fue en 2008, cuando el cártel mexicano se enfrentó con el de la *Familia León*, de Guatemala, y acribilló al jefe de la banda, Juan León Ardón, *El Juancho*, un hermano de éste y nueve socios.

Esa lucha debilitó a la *Familia León* y benefició a la organización *Overdick* y, por ende, a *Los Zetas* que protagonizaron su ataque más violento en Guatemala en mayo de este año, cuando masacraron a 27 campesinos en el norte del país, como “mensaje” para un narcotraficante local ligado con la *Familia León*.

Otro dato preocupante en el avance de los cárteles de Sinaloa y *Los Zetas*, además de sus relaciones con “los poderosos actores políticos, criminales y económicos”, son las que han establecido ahora con pandillas callejeras, en particular la Mara Salvatrucha (MS-13) y Calle 18.

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hay 36 mil miembros de pandillas en Honduras, 14 mil en Guatemala y 10 mil 500 en El Salvador, mientras que en Estados Unidos ambas pandillas tienen presencia en 42 estados.

Stratfor afirma que la competencia dentro y entre estas pandillas es responsable de gran parte de la violencia en el “Triángulo del Norte”.

No obstante, la consultora señala que a nivel estratégico, América Central está “lo suficientemente lejos de Estados Unidos (gracias a que es amortiguado por México) e integrada por pequeños países como para no representar una amenaza directa” al país del norte.

Añade que América Central “no tiene escapatoria” a corto plazo de ser el centro geográfico del tráfico de drogas y la violencia asociada, a menos que las tecnologías cambien y permitan que las drogas fluyan directamente del productor al consumidor por vía marítima o aérea.

### ““Los Zetas” actúan libremente en Durango y Zacatecas: arzobispo González”

**LUIS LOZANO**

**Proceso**

**23 noviembre 2011**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/289026/los-zetas-actuan-libremente-en-durango-y-zacatecas-arzobispo-gonzalez>

DURANGO, Dgo. (apro).- El arzobispo de la entidad, Héctor González Martínez, denunció que integrantes del cártel de Los Zetas actúan libremente en varios municipios de los estados Durango y Zacatecas, sin que las autoridades hagan algo por impedirlo.

En conferencia de prensa, el jerarca católico detalló que Los Zetas operan en los municipios de Miguel Auza, Juan Aldama y Río Grande, Zacatecas, donde se han registrado al menos tres asaltos a sacerdotes en lo que va de 2011.

“Yo he predicado, por ejemplo, en Miguel Auza y en Río Grande, que tengan cuidado con Los Zetas, que tengan cuidado con los cárteles. En Miguel Auza, en Río Grande, en Juan Aldama, ahí andan por la calle, en sus camionetas, tranquilamente, y nadie les pone mano”, declaró.

En Durango, agregó, municipios como Tepehuanaes, Santiago Papasquiario y San Juan del Río tienen alta presencia delictiva. En la última localidad, subrayó, el pasado fin de semana se detectó una fosa clandestina, de la cual fueron exhumados los cadáveres de nueve personas.

Cuestionado sobre las razones por las cuales la autoridad no actúa, el prelado dijo que más bien permea la complacencia “y también otra cosa”, refiriéndose al miedo a la venganza por parte de los delincuentes.

## 2012

Juan Alberto Cedillo. “La batalla por la Huasteca”. *Proceso* número 1835, 1 enero 2012. pp 14-19.  
<https://www.proceso.com.mx/293081/la-batalla-por-la-huasteca>

### “La batalla por la Huasteca”

Pese a la presencia masiva de soldados y marinos, la zona limítrofe de Tamaulipas y Veracruz, a uno y otro lado del río Pánuco, es un campo de batalla entre las huestes del cártel del Golfo y Los Zetas, donde la consigna parece ser: la matanza y la venganza. Pequeños poblados del norte veracruzano y las zonas conurbadas de Tampico, ahuyentado el turismo, han visto modificada su forma de vida. Las matanzas durante diciembre, según los lugareños, no auguran sino que 2012 traerá más violencia, más muertos, más secuestros...

TAMPICO, TAMPS. - Durante diciembre, la temperatura en el pueblo de Tampico Alto, Veracruz, ronda los 25 grados al mediodía. Aun en invierno, la exuberante vegetación conserva sus diversos tonos de verde, a los que ahora se suman el color olivo de los uniformes y patrullas de los militares que vigilan esta región, donde en los últimos días de 2011 se registraron tres masacres cuyo saldo fue de 39 personas muertas.

Fronchosos árboles y grandes palmeras enmarcan el sinuoso camino que conduce a la zona turística del municipio ubicado en la Riviera de la Laguna de Tamiahua, donde hoy los meseros y propietarios de una docena de restaurantes especializados en pescados y mariscos extrañan a los otrora asiduos visitantes.

“La clientela se redujo por lo menos 50% en el último año”, cuenta con tristeza un hombre que por 100 pesos se dedica a pasear en lancha a los turistas por la enorme laguna, poblada de pelícanos.

El suceso más reciente, que terminó por espantar a los visitantes que saturaban el lugar los fines de semana, ocurrió el viernes 23 de diciembre. Diez cuerpos decapitados de presuntos zetas con un narcomensaje fueron abandonados sobre la carretera que cruza Tampico Alto. Según los lugareños, habían sido levantados la víspera en la región norte de Veracruz y posteriormente asesinados por sus rivales del cártel del Golfo.

Ubicado a no más de 12 kilómetros al sureste del puerto de Tampico, el poblado cuenta con 26 mil habitantes. Algunos de ellos dicen que comenzó a perder su atractivo el 12 de febrero de 2011, cuando un grupo de sicarios disparó ráfagas de fusiles de asalto contra el edificio de la Presidencia, la Comandancia de la Policía, la Biblioteca Municipal y el vehículo oficial del alcalde Saturnino Valdés Llanos.

" "

Su mala fama creció 11 días más tarde: el munícipe desapareció mientras viajaba a Ciudad Madero, Tamaulipas. Hoy, los arcos del edificio del ayuntamiento están “adornados” con grandes pilas de sacos de arena con fundas de color verde, detrás de los cuales se parapetan los policías municipales encargados de la vigilancia.

La huida del turismo terminó por sumir a sus habitantes en la tristeza. “Los malos sólo usan el pueblo para hacer su show, pero no radican aquí”, comenta un comerciante, en un intento por refutar el estigma que envuelve a Tampico Alto.

La región del norte de Veracruz registra desde hace dos años una situación de inseguridad y violencia que se hizo más visible en la última semana. La decapitación de los 10 presuntos zetas desencadenó una nueva matanza: dos días después aparecieron 13 cuerpos más con una manta en la que se les calificaba de “golfas”.

Los cadáveres fueron abandonados en el interior de un camión de doble rodada sobre la calle principal de Moralillo Chico, Tamaulipas, en la zona metropolitana de Tampico, a pesar de que en la ciudad pululan cientos de militares en vehículos artillados y camionetas policiacas municipales, y de que es sobrevolada continuamente por helicópteros bélicos.

Las dos matanzas son el episodio más reciente de la disputa que desde hace dos años mantienen los sicarios del cártel del Golfo y sus antiguos aliados de Los Zetas por la codiciada plaza de Tampico.

Hoy son los integrantes del cártel del Golfo los que controlan esa área, luego de sacar a sus rivales del puerto. Derrotados, Los Zetas sólo cruzaron el río Pánuco y se refugiaron en el norte de Veracruz, estado que controlan desde el pasado sexenio de Fidel Herrera Beltrán.

Heriberto Lazcano Lazcano, alias El Lazca o El Z14, fue el responsable de consolidar al grupo de la “última letra” en Veracruz, luego de comprar a jefes y agentes policiacos, corromper corporaciones completas y al ganar una serie de batallas a los del cártel Gente Nueva.

La zona que controlan Los Zetas abarca, entre otros, los municipios de Pánuco, Tempoal, El Higo y Tantoyuca. Forma parte de la Huasteca que comprende regiones de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo. Además de su vegetación tropical, se caracteriza por la marginación y el olvido en que viven los lugareños.

Sus decenas de apartadas rancherías, ejidos y comunidades, que en algunos casos apenas llegan a 100 habitantes, son conectados por la estrecha y en algunos tramos inhóspita carretera 105 que recorren autobuses de las líneas Frontera, Estrella Blanca y ADO, los cuales realizan constantes paradas para recoger pasaje.

Tantoyuca está separado de Tampico por 90 kilómetros, pero el recorrido en auto se cubre en aproximadamente dos horas debido al mal estado de la carretera. En el pequeño municipio de Tempoal, decenas de pobladores acechan insistentemente a los automovilistas que se detienen en la gasolinera local e intentan venderles sus artesanías, pero se retiran con una mueca de desconfianza y miedo cuando se les pregunta sobre los recientes acontecimientos ocurridos en las zonas aledañas.

## **Dominio “zeta”**

En la entrada y salida de Pánuco, el municipio más grande, se pueden sentir las miradas de decenas de jóvenes que circulan en motocicletas. Son los llamados “halcones” y, según los lugareños, trabajan para Los Zetas. Y sobre la carretera continuamente aparecen retenes con camionetas bloqueándola. Pistoleros vestidos con uniformes tipo militar suelen asaltar a los conductores y en algunos casos secuestran a quienes se cruzan por su ruta.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocan a Tampico en el lugar número tres de la lista de los municipios con más plagios, sólo detrás de Ciudad Juárez y Michoacán. “Las carreteras del norte de Veracruz ahora están muy complicadas”, dice a Proceso Víctor Fuentes Salazar, vocero de la alcaldía del puerto de Tampico.

Debido a esa situación, funcionarios de los estados de Veracruz y Tamaulipas suelen advertir a los viajeros que no transiten de noche por las autopistas. Consultados al respecto, algunos de ellos comentan, bajo la condición del anonimato, que muchos asaltos, crímenes y secuestros que ocurren en esos caminos no se reportan.

Sostienen incluso que las masacres de Tampico Alto y El Moralillo Chico se derivaron de otra que sucedió entre la noche del 21 de diciembre y la madrugada del día siguiente, cuando un grupo de presuntos zetas comenzó a consumir alcohol y drogas y provocó un escándalo en las inmediaciones del poblado El Higo.

Según funcionarios consultados, eran al menos ocho hombres provistos de armas de alto poder. Se desplazaban en tres vehículos sobre la carretera Pánuco-Tempoal. Ya en la madrugada del 22 de diciembre comenzaron a disparar contra tres hombres que cargaban verduras en una camioneta.

“En otro punto de la población lanzaron una granada, provocando la muerte de una persona más”, precisó un comunicado de la VI Región Militar con sede en Veracruz.

Más tarde, los pistoleros colocaron un retén en la intersección que conecta a El Higo con la carretera Pánuco-Tempoal, en la zona conocida como “Y griega”, justo en una parada de autobús. Cuando llegó la primera unidad, los pasajeros fueron obligados a descender; dos de ellos intentaron huir pero los sicarios los acribillaron.

Kilómetros más adelante, sobre la misma carretera a la altura del poblado llamado Los Catorce, donde hay pocas viviendas, detuvieron a balazos a un segundo autobús proveniente de Nuevo León. Las ráfagas mataron a cuatro pasajeros, según el boletín de la IV Región Militar.

Originarias de Hidalgo, entre las seis víctimas había una mujer de 39 años que radicaba en Houston, Texas. Había venido a su pueblo acompañada por sus dos hijas para pasar la temporada navideña con sus familiares.

El conductor de un tercer autobús que observó el ataque se bajó para indagar qué estaba pasando. Los sicarios le dispararon también.

Los vecinos del lugar comenzaron a llamar por teléfono a las autoridades para denunciar que un grupo de hombres armados estaban asaltando autobuses. Aproximadamente a las 6:30 horas arribaron a la zona

elementos del Ejército y de la Marina y se enfrentaron a los delincuentes. La refriega duró alrededor de una hora y en ella cayeron cinco de los agresores.

Ante las tres masacres de diciembre, los gobiernos de Tamaulipas, Veracruz y el federal decidieron reforzar aún más la seguridad en el norte de esta última entidad. La región lleva meses militarizada; los desplazamientos de soldados son cotidianos, algunos vigilan incluso desde las patrullas de los policías municipales, quienes reciben 2 mil pesos extras de compensaciones que les otorgan los gobiernos estatales.

La concentración de fuerzas federales en Veracruz y Tamaulipas convirtió a las dos entidades en la región con el mayor número de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina Armada de México.

### **Zona de muerte**

El consulado de Estados Unidos en Matamoros también reaccionó y emitió una alerta de emergencia para advertir a sus ciudadanos abstenerse de circular de noche por la región.

Después de las masacres, la carretera 105 comenzó a ser recorrida por convoyes de hasta 10 camionetas artilladas de la Marina. Los conductores de autobuses de pasajeros se sienten seguros porque, dicen, algunas veces quedan en medio de los vehículos de los marinos.

A esos patrullajes se suman los de los militares de la IV Región; además, en territorio veracruzano, el poblado de Moralillo Grande, dividido de su vecino Moralillo Chico por el río Pánuco, se apostó un grupo de soldados. Asimismo, el 28 de diciembre, el gobierno federal envió un contingente de 700 efectivos del Ejército a Tamaulipas y decenas de camiones blindados.

Aun cuando esa medida ha demostrado su ineficacia en otras ciudades del noreste, como Monterrey, Torreón, Reynosa y algunas de Tamaulipas, donde los niveles de violencia e inseguridad no disminuyen, en el norte de Veracruz la tarea de las tropas se complicarán aún más. El motivo: En esta zona hay decenas de “guardias” y “halcones” conformadas por adolescentes que desde sus motocicletas, un medio de transporte muy popular en la región, y sus celulares en mano, vigilan las entradas y salidas de los municipios grandes. Son ellos los que informan a los sicarios de Los Zetas sobre los movimientos de los vehículos verde olivo y sus soldados, así como sobre Los Popeyes, los grises vehículos que conducen los marinos.

Por lo anterior, los lugareños consideran difícil que las pugnas entre Los Zetas y el cártel del Golfo disminuyan en ambos lados del Pánuco. Dicen que a los sicarios no los intimida la presencia de los soldados ni de los marinos. Y ponen como ejemplo Monterrey, ciudad en la que, afirman, pese a estar vigilada por tierra y aire, nadie pudo detener a la decena de zetas que a bordo de cuatro camionetas incendiaron el pasado 25 de agosto el Casino Royale.

Ricardo Ravelo. “Los cárteles, vivos y fortalecidos”. *Proceso* número 1841, 12 febrero 2012. pp 26-30. <https://www.proceso.com.mx/298096/los-carteles-vivos-y-fortalecidos-2>

**“Los cárteles, vivos y fortalecidos”**

Pese a la guerra contra el narco desatada por el gobierno calderonista, los cárteles de la droga gozan de cabal salud. Un mapa de la criminalidad elaborado por la Policía Federal muestra cómo las organizaciones delictivas se reorganizan y establecen nuevas alianzas. En ese contexto son preocupantes las insólitas declaraciones del titular de la Sedena, quien reconoció –después de cinco años de guerra y alrededor de 50,000 muertos que “el crimen organizado ya puso en grave riesgo la seguridad interna del país”

Los cárteles de la droga siguen ejerciendo su dominio en todo el país pese a la guerra emprendida por Felipe Calderón para desarticularlos y no obstante que la presencia militar y policiaca se ha multiplicado.

A poco más de cinco años de que el Ejecutivo federal ordenó la militarización del país, las redes criminales de cinco cárteles –Los Zetas, La Familia Michoacana y los de Sinaloa, Juárez y el Golfo– ya dominan más de la mitad del territorio nacional. Tal expansión se ha dado pese a las bajas que esas organizaciones han sufrido por detenciones o muertes de sus líderes.

Un mapa delictivo elaborado por la División de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal (PF), así como un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y de la consultora estadounidense Stratfor dan cuenta de un reacomodo de cárteles en el último año. Ahí sobresale el creciente dominio de Los Zetas en 21 entidades, seguido por el Cártel de Sinaloa, afincado en 19 estados, algunos de los cuales viven baños de sangre por la pugna territorial entre ambas organizaciones.

Según el análisis de la SSP, ambas organizaciones “cuentan con apoyo político y policiaco” que les permite ejercer controles en la vida pública y comercial de regiones y municipios.

El segundo bloque de cárteles lo forman La Familia Michoacana –que controla 10 estados–, el de Juárez –encabezado por Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, y que domina 19 entidades– y el del Golfo, que tiene fuerte presencia en cinco estados más.

El mapa criminal elaborado por la PF muestra las zonas de mayor conflicto, como los estados de Veracruz, Durango y Guerrero, donde tienen fuerte presencia hasta tres cárteles. De ahí se derivan los enfrentamientos por el control no sólo de las plazas y el trasiego de drogas, sino de las operaciones paralelas al narcotráfico: extorsiones, secuestros y el cobro de piso a los dueños de restaurantes, bares, prostíbulos y centros de apuestas.

El informe sostiene que Los Zetas –que apenas hace tres años alcanzaron el rango de cártel– dominan más estados que el Cártel de Sinaloa, aunque la organización encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán es la que más ha crecido fuera de México: su presencia se extiende a 52 países y su jefe es considerado por la agencia antidrogas estadounidense (DEA) como el capo con más poder en el planeta.

En la información sobre el reparto territorial –que Proceso pudo conocer– se indica que el narcotráfico ya ejerce un dominio absoluto en todo el país y no hay ningún territorio libre de la presencia de sus células, que ocasionan violencia e inestabilidad social.

Los datos coinciden con las declaraciones del jueves 9 hechas por el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, al afirmar que en muchas latitudes del país el espacio de la seguridad está totalmente rebasado por el crimen organizado, cuyas

redes mantienen bajo control a algunas instituciones del Estado y han colocado en grave riesgo la seguridad interna del país.

En el informe de la PF también se observa que hay entidades como Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Campeche y Quintana Roo –por citar sólo algunas– donde operan hasta tres cárteles con la protección de las corporaciones policiacas y las autoridades municipales y estatales, lo que ha generado altos niveles de violencia debido a las luchas de poder.

### **Geografía criminal**

El mapa criminal detallado por la PF y los datos de la SSP detallan la manera en que se extienden las redes de los cárteles en la geografía nacional. También identifican a los grupos que ejercen mayor dominio en las entidades consideradas clave para el trasiego nacional e internacional de drogas: destacan Chihuahua, Michoacán, Chiapas y Yucatán.

De igual forma queda claro en la información de la SSP que las muertes y detenciones de narcotraficantes y sicarios no han sido suficientes –por más que el gobierno pregone lo contrario en cientos de spots publicitarios– para detener el crecimiento de los cárteles en todo el país. Estos son los datos duros del informe gubernamental:

Los Zetas están presentes en Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El Cártel de Sinaloa –que agrupa a tres organizaciones más: La Resistencia, el Cártel Guadalajara Nueva Generación y Los Matazetas– ocupa el segundo lugar en cuanto a dominio territorial. Está presente en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Sinaloa y Quintana Roo.

La Familia Michoacana –quizás el cártel que más ha crecido de 2005 a la fecha y que el gobierno federal ha declarado extinguido en dos ocasiones– está más que viva, de acuerdo con el diagnóstico de la SSP. Con amplias redes de sicarios y testaferros controla Chiapas, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Tamaulipas.

El Cártel de Juárez, uno de los más viejos del país y cuya fundación se remonta a los setenta –lo fundó Pablo Acosta Villarreal en Ojinaga, Chihuahua– tampoco ha sido mermado a pesar de la guerra que enfrenta con el Cártel de Sinaloa, el Ejército y la Marina. Bajo el liderazgo de El Viceroy, quien suele pasearse a la luz del día por la Comarca Lagunera, también opera en Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Coahuila, Quintana Roo, Oaxaca y Zacatecas.

El crecimiento de estas organizaciones criminales ha sido vertiginoso, a pesar de que cientos de sus operadores han caído prisioneros o muertos en enfrentamientos con el Ejército, la Marina o grupos rivales. Pese a ello, su capacidad de reemplazar a sus piezas “es sorprendente”, de acuerdo con el informe de la SSP, pues logran reposicionarse rápidamente.

En esta dinámica sobresalen Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Creados en 1997 con desertores del Ejército, Los Zetas comenzaron a operar como escudo protector del capo Osiel Cárdenas. En 2009 la

DEA los reconoció como un cártel bien organizado, violento y uno de los que mejor diversificó sus tareas criminales. La SSP estima que desde su fundación y a la fecha este grupo ha perdido a unos mil 600 miembros, pero se mantiene actualmente como el más numeroso en el país.

Por su parte el Cártel de Sinaloa ha recibido fuertes golpes en su estructura. El gobierno ha festinado la caída de varios de sus operadores y cerebros financieros tanto en México como en Sudamérica. Pese a ello la organización domina el trasiego de droga desde Colombia, Perú y Venezuela hacia México y Estados Unidos.

En medio de la guerra contra el crimen organizado y en particular el narcotráfico, su expresión más violenta, sobresale la búsqueda del personaje más publicitado por la DEA: El Chapo Guzmán. Según la agencia estadounidense existe un plan de acción para ubicar su paradero, aunque lo que llama notablemente la atención es que mientras más se le persigue, mayor es el crecimiento de su cártel.

Para la DEA, el de Sinaloa es el cártel más poderoso no sólo de México sino del mundo, en tanto que para la PF y la SSP la organización de Los Zetas es la que más territorio domina en el país.

### **Alianzas**

La disputa territorial de los cárteles –y el incremento imparable de la violencia– no es el único problema que enfrenta el gobierno calderonista en su último año. Otro elemento que pone en entredicho la efectividad de la estrategia gubernamental de seguridad es que los cárteles han podido sellar alianzas estratégicas aun en medio del combate que las autoridades libran contra ellos.

No es todo: también han logrado extenderse más allá del territorio nacional, particularmente a Colombia, Perú, Costa Rica, Venezuela y Panamá, entre otros países, donde han tendido sus redes criminales para garantizar el suministro de drogas y para lavar sus ganancias.

En cuanto a las llamadas narcoalianzas, el más reciente informe de la consultora estadounidense Stratfor establece que otros seis cárteles se han aliado a los grupos que actualmente dominan el mercado de las drogas en México.

Stratfor destaca que el Cártel de Sinaloa se alió con el del Golfo, con la Familia Michoacana y mantiene negociaciones muy avanzadas para sumar a Los Caballeros Templarios.

Otra alianza poderosa –y a eso se debe su espectacular presencia en la geografía nacional– es la que lograron Los Zetas con los cárteles de Juárez, Tijuana, Pacífico Sur y el Independiente de Acapulco.

Al respecto, la consultora Stratfor indica: “El Cártel del Golfo se ha mantenido con el control de Matamoros, aunque pelea la ciudad contra sus antiguos aliados, Los Zetas. Con ayuda del Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo ha repelido las ofensivas de Los Zetas en Matamoros y Reynosa, pero no ha tenido la fuerza necesaria para sacar a sus rivales de otras ciudades, como Monterrey.

“Por su parte Los Zetas, con la pérdida de 11 mandos medios y altos en diferentes plazas, continúan su pelea principal con el Cártel del Golfo, mientras se preocupan por entrenar y ayudar a sus aliados, los cárteles de Juárez, de Tijuana y el Independiente de Acapulco.”

Incluso con las alianzas que han establecido, algunos cárteles han perdido dominio territorial conforme otro grupo adquiere mayor poder mediante la protección oficial, destaca la consultora estadounidense.

Ejemplo de lo anterior es el Cártel de Juárez –el más poderoso de México en los noventa–, que se ha mantenido firme en la región fronteriza de Chihuahua pese a los embates del grupo encabezado por El Chapo Guzmán.

Según Stratfor, debido a fuertes disputas con rivales y a las divisiones internas el Cártel de Juárez ha perdido muchos territorios en el país. En ese sentido “es evidente que el bloqueo ejercido por el Cártel de Sinaloa ha sido efectivo para asfixiar a la organización de Carrillo Fuentes”.

Golpeado en su cimentación y en buena parte de su estructura, el Cártel de Tijuana ya domina muy poco territorio y, de acuerdo con el estudio de referencia, “parece empezar a subordinarse al Cártel de Sinaloa a cambio de poder traficar por la frontera con el estado de California, a pesar de que mantiene una alianza con Los Zetas, rivales del de Sinaloa”.

De reciente aparición, los cárteles del Pacífico Sur y el Independiente de Acapulco –ambos formados con exmiembros de la organización de los Beltrán Leyva– luchan por el control de Acapulco y la zona turística de Zihuatanejo.

### **Graves riesgos**

La Familia Michoacana, indica el documento de la consultora estadounidense, no está debilitada ni mucho menos extinguida, como ha informado el gobierno federal. Buena parte de los miembros de este cártel –uno de los más sanguinarios– se transformó en lo que ahora se conoce como Los Caballeros Templarios, quienes han dado muestras de ser tan violentos como Los Zetas.

El análisis de la consultora abunda: “Después de lo que parecía la muerte repentina de La Familia Michoacana en enero del año pasado (2011), ahora aparece una fracción de ese cártel que se ha renombrado Los Caballeros Templarios, los cuales aparecieron a la luz pública a mediados de marzo. Otras partes de La Familia siguen operando con el mismo nombre. Esta división es muy reciente y aún no se sabe cuántos son, qué relación tienen con sus excompañeros de La Familia Michoacana y qué relación, si es que la hay, guardan con el Cártel de Sinaloa. Cabe destacar que previo a estos sucesos, La Familia parecía ser un cártel cercano al sinaloense”.

De acuerdo con el diagnóstico de Stratfor y los datos del área de inteligencia de la SSP, el Cártel Independiente de Acapulco podría desaparecer completamente en los próximos seis meses debido a que su estructura está en riesgo de dividirse. Por otro lado, el Cártel de Sinaloa pretende ocupar Guerrero y convertirse en la principal organización del Pacífico mexicano.

Y es que, de acuerdo con el estudio, el Cártel de Sinaloa “podría tomar la delantera” en la pelea por Acapulco y Durango, donde se pronostica una espiral de violencia más intensa que la sufrida en la actualidad por esas entidades.

Respecto de Los Zetas, Stratfor pronostica: “Mantendrán el control de Nuevo León en los próximos meses y su crecimiento será aún mayor en el Golfo de México, si resisten los embates del gobierno y de los cárteles del Golfo y de Sinaloa”.

Después de que el epicentro de la violencia se estableció en el norte del país, sobre todo en Nuevo León, Chihuahua y Durango, ahora la guerra entre los cárteles se trasladó hacia la zona Caribe-Golfo de

México, donde cinco organizaciones criminales buscan reacomodo en el corredor Quintana Roo-Campeche-Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

En Veracruz la pugna es entre Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Pese a que esta entidad está bajo el control de la Marina, el narco sigue intocado y activo, pues apenas el martes 7 fue descubierta una fosa clandestina con al menos 15 cadáveres en el municipio de Acayucan.

Cuando faltan poco más de 10 meses para que concluya el sexenio calderonista, el gobierno federal ha empezado a reconocer su fracaso en la lucha contra el crimen organizado.

El jueves 9 el secretario de la Defensa admitió que el crimen organizado ya puso en grave riesgo la seguridad interna del país, pues en muchas latitudes del territorio nacional la seguridad pública está totalmente ausente.

“En algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado, y en ese apoderamiento diversificó sus poderosas actividades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generando un clima de violencia inusitado”, dijo el general Galván.

Arturo Rodríguez García. “Toda la estructura de seguridad, infiltrada por Los Zetas”. *Proceso* número 1843, 26 febrero 2012. pp 6-10. <https://www.proceso.com.mx/299373/toda-la-estructura-de-seguridad-infiltrada-por-el-narco>

### **“Toda la estructura de seguridad, infiltrada por Los Zetas”**

La presencia del narco en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, que no pueden ocultar ni en sus discursos el presidente Felipe Calderón y la procuradora general Marisela Morales, es algo más que infiltración. En el caso de Los Zetas, es una toma por asalto de las estructuras de mando, de las que disponen a su antojo los capos de ese cártel. Así lo muestra un expediente judicial en el que se describe –con detalles, nombres y montos de sobornos– cómo los mandos federales y locales de las policías y el Ejército no sólo protegen a los narcos sino que trabajan para ellos como escoltas, halcones, informantes, pagadores y hasta como sicarios.

La detención de cuatro integrantes de la organización criminal de Los Zetas puso al descubierto que operaciones suyas son ejecutadas, y no sólo solapadas, por elementos del Ejército Mexicano, la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Policía Federal (PF), así como por las policías estatales y municipales, tanto de Coahuila como de Nuevo León.

A cinco años de iniciada la guerra de Felipe Calderón contra el narco, que ya acumuló más de 50 mil muertos y una cantidad similar de desaparecidos, los cuerpos de seguridad federales no escaparon a la corrupción que el presidente atribuye insistentemente a policías e instituciones locales.

De acuerdo con la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, integrada apenas el pasado 8 de febrero, soldados de la Sexta Zona Militar ejecutaban a ciudadanos que denunciaban a criminales, y desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR cargamentos de droga.

La indagatoria añade que lo mismo hacían agentes de la PF, quienes asimismo identificaban y enfrentaban a los adversarios de Los Zetas, colocaban puestos de vigilancia donde éstos les indicaban y custodiaban cargamentos. Además, establecían las nóminas de las Fuerzas Federales de Apoyo (FFA) que envía el gobierno de manera temporal a combatir al narco.

Por su parte, otros efectivos de la PGR y la AFI, con sobornos a todos niveles, se encargaban de consignar con cargos débiles a los miembros de Los Zetas, liberar a los que estaban detenidos e informar a los jefes sobre todo tipo de denuncias, incluidas las anónimas.

En el caso de las corporaciones de Nuevo León, Los Zetas presenciaban el pago de la narconómina a los policías estatales o municipales y tenían un enlace con el gobierno estatal para mantener a salvo su estructura.

En Coahuila, el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, quien se desempeñó como titular de la Policía Estatal Operativa y protegió a Los Zetas, era recomendado del secretario de Defensa, Guillermo Galván Galván.

La corrupción en la Fiscalía General del Estado (FGE, que concentra la anterior Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública coahuilenses) era conocida desde hace años por Felipe Calderón, cuyo gobierno no actuó hasta la segunda quincena de febrero.

La mañana del 15 de ese mes, en las instalaciones de la FGE los federales detuvieron al comandante ministerial Sergio Tobías Salas, Tobogán, y al policía estatal Julio César Ruiz Esquivel, Chicho, quienes también se encargaron de ejecutar y desaparecer personas. Horas después cayó la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López, quien fue llevada a la Ciudad de México. Los tres, como Cícero, están acusados de colaborar con Los Zetas y el jueves 23 se les dictó formal prisión.

El jueves 16, la procuradora general Marisela Morales dijo: “Estamos dando un combate frontal a toda la corrupción que se pueda dar en todos los niveles en nuestra propia dependencia. Somos los primeros en poner el ejemplo y tenemos (acciones) sin precedente en el combate que estamos dando contra los agentes federales de investigación, contra los ministerios públicos, contra quien sea en cualquier nivel (que sean corruptos)”.

Morales adelantó que hay más implicados, pero aclaró que no pertenecen a su corporación. Sin embargo, el mismo expediente que permitió la consignación de los elementos ya mencionados también implica a otros integrantes de la PGR.

En cuanto a la corrupción militar, el domingo 19, durante la conmemoración del Día del Ejército, Calderón encomió a los soldados pero admitió: “Es cierto que se han dado casos excepcionales de algunos malos elementos que se apartan de los valores que ennoblecen al instituto armado, que con ello traicionan su uniforme y la confianza en ellos depositada”.

Esos “casos excepcionales” ocurrieron en dos de las entidades que registran mayor violencia: Coahuila y Chihuahua, que conforman la XI Región Militar. Los casos documentados hasta ahora son las

desapariciones y ejecuciones presuntamente ordenadas por el general Manuel de Jesús Moreno Aviña, jefe de la guarnición de Ojinaga, así como la implicación en ejecuciones del 39 Batallón de Infantería, de Nuevo Casas Grandes y, ahora, el caso del 69 Batallón de Infantería, radicado en Saltillo.

### **Poder corruptor**

Las declaraciones incriminatorias de los soldados y oficiales detenidos en marzo de 2011 revelaron cómo el poder corruptor de Los Zetas escaló por toda la estructura de la Sexta Zona Militar, con sede en Saltillo, hasta llegar al general Juan Manuel Vallejo Malibrán, quien se desempeñaba como jefe del Estado Mayor en la zona y luego fue enviado a Guanajuato.

Así, el miércoles 8 de febrero la PGR inició la averiguación previa 041/2012, acumulando testimoniales y probanzas de las averiguaciones 197/2011 y 101/2011, esta última integrada tras la detención, el 12 marzo de 2011, de Pedro Toga Lara, El Guacho, y Gerardo Hernández Sánchez, El Gerry, identificados como mandos de Los Zetas.

Los dos son ahora testigos protegidos de la PGR. A Toga Lara se le asignó la clave confidencial Escorpión y a Hernández Sánchez la de Sagitario. En la averiguación mencionada se identifica a otro testigo protegido como Sarpico, y de las declaraciones de los tres se desprendió lo que en la PGR se juzgó “información veraz y confiable, por haber sido de utilidad para la captura de otros integrantes de Los Zetas”.

En su declaración del 4 de mayo de 2011, Sagitario incriminó, con todo y sus narcosueldos, a los tenientes Javier Rodríguez Aburto, Sócrates Humberto López González y Julián Castilla Flores, que “ganaban” 50 mil pesos, y a Marcos Augusto Pérez Cisneros, que sólo obtenía 30 mil porque “era muy flojo”.

Los Zetas les pagaban 30 mil pesos a los subtenientes Alexis Ríos Cruz, Francisco Javier Soto Núñez, Carlos Miguel Gallardo Ibarra, Édgar Sánchez Ruiz, Édgar Valencia Cárdenas y Evencio Castillo Castro.

Al sargento José Luis Cerecedo Cruz, al cabo Pedro Montes Vázquez y al soldado Omar Alejandro Martínez Rivera les entregaban 20 mil. La función de Montes consistía en operar las comunicaciones para transmitir las órdenes de Los Zetas.

Otro sargento, Sergio Treviño Ríos, conocido por Los Zetas con la clave Tauro, fue quien presuntamente vinculó a todos los integrantes del 69 Batallón de Infantería con la organización criminal y se encargaba de pagar la narconómina.

Los soldados detenidos se acusaron mutuamente, con lo que salieron a flote varios delitos, como el asesinato de un teniente de apellido Hoyos.

A la lista de implicados se incorporaron así los tenientes Julio César Montiel Rumbo y Jesús Alberto Córdoba Ríos, el subteniente Francisco Javier Beltrán Luna, los sargentos Guillermo Flores Arrazate y Cecilio Ambros Anteale, el cabo Salomé Juárez Cuéllar, los soldados Eleaquin Rubio Bautista y otro de apellido Vinalay. La lista sigue.

En el caso del teniente Soto Núñez, al ser detenido se le aseguraron 300 mil pesos en efectivo y armas que no eran de cargo. Según las declaraciones del sargento Treviño Ríos asentadas en el expediente, Soto pertenecía al equipo de Montiel Rumbo, comandante del batallón.

“Junto con otros tenientes y tropa, de los cuales no sé el nombre, (Montiel Rumbo) se encargaba de levantar y desaparecer a personas contrarias a la organización de Los Zetas, ignorando lo que hacía con las personas levantadas, y estos jales los hacía en Saltillo, Monclova y Torreón”, declaró Treviño.

Añadió: “Tengo conocimiento de que el Rumbo y su gente, hace aproximadamente tres meses (es decir, en enero de 2011), levantaron a tres personas que eran maestros o ingenieros, gente con algún tipo de profesión, en la ciudad de Monclova, porque le habían puesto el dedo a Los Zetas”.

El martes 21, el diario Reforma publicó otras revelaciones de Treviño, asentadas en la causa penal militar 279/2011, en las que afirma que el general Vallejo Malibrán está relacionado con Los Zetas, que no daba parte a la PGR de droga decomisada y portaba un radio de comunicación Kenwood que le entregaron los narcos.

Respecto al teniente Hoyos, quien fue asesinado, Treviño dijo que aseguró armas, dinero y celulares, pero le reclamó al general Vallejo que reportara menos objetos y montos a la PGR, por lo que el general ordenó matarlo.

### **Narcosueldos**

Las declaraciones de Escorpión, Sagitario y Sarpico coincidieron con las de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia, detenido el pasado 11 de enero en los límites de Coahuila y Nuevo León.

Ante el Ministerio Público Sarabia narró su carrera delictiva, iniciada en 2005 como encargado de las tienditas en Nuevo Laredo. Es compadre de Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, quien al contratarlo le asignó la clave L-44. A finales de 2007 se integró a “la operativa”, es decir, a la escolta de L-40 y de su hermano Omar Treviño Morales ( L-42) mientras se escondían en las ciudades de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, cuando el Cártel del Golfo, aún unido con Los Zetas, luchaba por el control de Nuevo Laredo contra el ahora preso Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, asesinado en Cuernavaca.

En 2007 Sarabia fue enviado a Piedras Negras con L-42 para fungir como “tranca” o encargado de las comunicaciones de la organización en la ciudad. En 2008, L-40 lo convirtió en jefe de plaza de Monclova y, en 2009, Heriberto Lazcano lo envió a Saltillo también como jefe de plaza, pero para entonces “ya formaba parte de la polla”, es decir, invertía dinero y se le daba una ganancia de unos 100 mil dólares mensuales. Según el testigo, la clave L seguida de un número se asigna a quienes responden al mando de Nuevo Laredo.

En su declaración, Sarabia confirmó la corrupción en la PGR y la AFI. También Sarpico asentó que, en la AFI, en Coahuila, un comandante obtenía un narcosueldo de 100 mil pesos mensuales; un comandante segundo, 70 mil pesos; y los ministerios públicos federales 30 mil. Además, se les regalaban costosos vehículos.

Para identificar a los miembros de la AFI, Los Zetas utilizaron la clave “tres letras”. Además de tener bajo su control a los mandos y policías, pagaban a la subdelegada de la PGR en Saltillo, Claudia González López.

Cuenta Sarabia que un día El Gerry (el testigo Sagitario) llegó al bar Carlos'n Charlie's –que el primero utilizaba para sus reuniones– con la subdelegada, a quien le daban 100 mil pesos mensuales, y las agentes del ministerio público federal Blanca Isabel Dueñas Beltrán (con pagos de 25 mil pesos) y Gladis Feliciano Leyva Quintero (50 mil). En total eran cinco agentes del ministerio público y la subdelegada.

En febrero de 2010 la subdelegada González López y la MP Leyva Quintero se encontraron con Sarabia y El Gerry en la agencia Chevrolet de Saltillo para comprarle un carro a la funcionaria de la PGR. Ella salió de ahí a bordo de una pick up azul de doble cabina.

Los vehículos que se obsequiaron a los AFI, y en ocasiones también la narconomina, se entregaban en la parte posterior del edificio de la subdelegación de la PGR en Saltillo, en la colonia Topochico.

Y contra la afirmación de la procuradora general Marisela Morales de que no está implicado más personal de la PGR, los testigos y el indiciado revelaron que pagaban 50 mil pesos al agente de la AFI José Guadalupe Ballesteros Huescas, a quien conocían desde 2009. Señalaron por lo mismo a David Corral Huerta y a Enrique González Nava, este último responsable estatal de la AFI, radicado en Torreón y quien recibía 600 mil pesos mensuales para repartirlos entre los policías asignados a Coahuila. Según Sarabia, así los jefes de su grupo delictivo andaban por el estado sin ser molestados.

Además, los elementos de la PGR y la AFI debían liberar mercancías vehículos y armas aseguradas en operativos, o bien consignar mal y quitarles cargos a los zetas detenidos, informar sobre todas las denuncias formales o anónimas contra sus miembros, y compartir la información enviada o solicitada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR.

En enero de 2011 se les retuvo el pago debido a que las FFA detuvieron en Saltillo a El Risas, que desde mayo de 2010 era el “cocinero” o encargado de calcinar cuerpos para dejarlos inidentificables. El L-40 ordenó liberar a El Risas, quien junto con Sarabia y otros zetas eran sus escoltas personales en los años de la guerra contra los Beltrán Leyva por la plaza de Nuevo Laredo. No fue posible liberar a El Risas porque las FFA ya habían dado aviso al mando en la Ciudad de México. La subdelegada González López tuvo que explicar personalmente lo ocurrido y liberar el soborno retenido.

### **El capitán Valbuena**

Los cuatro zetas detenidos coinciden en señalar como uno de sus operadores al capitán Jorge Luis Valbuena Flores, mando de la PF en Coahuila y antes en Nuevo León. De acuerdo con Sérpico, el capitán estaba a cargo de la PF en Nuevo León cuando lo conoció y empezó a entregarle la nómina a través del Comandante Lino, subalterno de Sérpico y abatido por el Ejército el 25 de enero de 2011 en Monterrey.

Escorpión afirma que conoció a Valbuena en 2008 y que en Nuevo León recogía también la nómina para Coahuila, entidad a la que fue enviado en 2010 como mando de la PF.

El mismo testigo señala que Valbuena llevó con Los Zetas al comandante Enrique González Nava, de la AFI; Azulejo, el comandante de las FFA que llegaron a Saltillo en enero de 2011, y al jefe de inteligencia regional. En esa reunión los mandos zetas le entregaron 2 millones de pesos a Azulejo y acordaron el monto que les darían a los oficiales durante su estancia en los dos estados.

Según esta declaración integrada en el expediente, Valbuena facilitó la corrupción de ministerios públicos locales en Arteaga, Coahuila, para liberar a delincuentes detenidos, pero también encabezó acciones directas para Los Zetas. Incluso señalan que Valbuena dirigió la búsqueda de Pepito Sarabia en Nuevo León, donde escapó, haciéndose pasar por muerto, tras una balacera contra militares en 2010.

El capitán de la PF recibió órdenes del grupo armado para colocar los filtros de vigilancia de la PF en la entrada a Saltillo procedente de Monterrey, así como en la caseta de la autopista 57 Saltillo-México y en las inmediaciones de la carretera libre a Torreón, a la altura de General Cepeda, todo con el fin de identificar a comandos rivales o sus cargamentos, y asegurarse el libre tránsito.

Valbuena proporcionaba información sobre operativos que se planeaban en la Ciudad de México, de la PF y de otras corporaciones (“estaba muy bien conectado en el Distrito Federal”). Según el testigo, el oficial daba indicaciones sobre los vehículos, vuelos, horarios y cantidad de personas, así como del objetivo de los operativos federales en la zona.

El capitán también “resolvía los problemas que llegaba a tener la Compañía en las carreteras. En esa ocasión, cuando le pagué, a principios de enero de 2011, 70 mil pesos para él, y para la tropa se le entregó más de 1 millón de pesos, ya que toda la corporación se encuentra comprometida con Los Zetas”, señala Escorpión.

Agrega que a Valbuena se le entregaban entre 800 mil y 1 millón de pesos en sobres rotulados con los nombres de los beneficiarios. El testigo Sagitario le atribuye al capitán el robo de cinco camionetas blindadas en la carretera libre Saltillo-Torreón, en abril de 2009, tras lo cual desapareció a los choferes y le entregó los vehículos a quien identifica como el Comandante Chabelo.

La misma fuente declaró que el capitán de la PF escoltaba cargamentos de droga, armas y vehículos blindados hacia las ciudades de Miguel Alemán, Reynosa y Nuevo Laredo, así como tráileres con “cargas chinas”, nombre que dan Los Zetas a la fayuca que tiene como destino el Distrito Federal.

Según Sagitario, el capitán se encarga asimismo del transporte de la mercancía de contrabando mediante la empresa Senda y del paso de la misma a San Luis Potosí por un proveedor independiente. De igual forma, el mando federal ha participado en la ordeña de ductos de Pemex, pues además de brindar protección a la extracción de gasolinas en Hipólito, Coahuila, Valbuena tiene gasolineras en Monterrey y le entregaba al ahora testigo protegido una pipa grande de tres ejes al mes.

### **Los Torres Charles**

Por la información de los testigos mencionados se conoció también que en Nuevo León operaba El Cabrito, quien repartía la nómina a policías ministeriales, estatales y municipales en presencia de representantes de Los Zetas. Uno de los individuos que así recibía su soborno era el “Licencia do Muñoz”, enlace con el gobierno estatal.

En Coahuila el peón de Los Zetas era el teniente coronel retirado Manuel de Jesús Cícero Salazar, Viejo Loco. Formaba parte del llamado Modelo Coahuila y a mediados de 2008 fue designado titular de Seguridad Pública en Ramos Arizpe, municipio conurbado de Saltillo.

El Modelo Coahuila fue un programa coordinado por la periodista Isabel Arvide, que consistía en la designación de 11 generales, cinco coroneles, nueve mayores y otros oficiales que sumaban casi 200, todos en retiro, a quienes se les entregaron todas las jefaturas de seguridad pública municipales.

Arvide lo describió así en Torreón, el 17 de febrero de 2010: “Todos los jefes militares, dentro de este modelo, vienen comisionados, después de pasar pruebas de confianza, por la Secretaría de la Defensa Nacional. La mayoría han sido compañeros generacionales del general Galván, han servido bajo sus órdenes o han coincidido con su mando en diversas comisiones”.

Las policías estatales, los penales y las jefaturas de los municipios se llenaron de militares que operaron con total libertad y gozaron de vehículos blindados, armas de alto poder, viáticos, seguros y sobresueldos que nunca se transparentaron. Su “jefe moral” era el entonces comandante de la región militar general Mario Marco Antonio González Barrera, hoy inspector y contralor general de la Sedena.

Arvide terminó su relación laboral con el gobierno de Coahuila en mayo de 2010, tras acusar al entonces fiscal del estado, Jesús Torres Charles, de estar coludido con el hampa. Algunos de los militares que llevó a Coahuila reaparecieron tiempo después en otras entidades, como Tamaulipas y Quintana Roo. Fue el caso de Cícero, quien fue designado subsecretario de Seguridad Pública, pero dejó el cargo tras un escándalo callejero en Cancún.

Cícero se hizo notar en Coahuila a raíz de un tiroteo que, ahora se sabe, fue contra la escolta del L-40. Los medios locales lo apodaban El Rambo y vivía en las instalaciones de la Policía Municipal porque tenía amenazas de muerte. Sin embargo, de las declaraciones de los testigos protegidos se desprende que Pepito Sarabia le entregaba 500 mil pesos mensuales (200 mil de esos para otra persona cuyo nombre no se menciona), además de regalarle una camioneta Cherokee.

Otro implicado era Emanuel Almaguer, comandante de la Policía Municipal de Saltillo, quien pagaba la nómina y recibía apoyos para gastos de las patrullas. Fue ejecutado el 5 de diciembre con su hijo de 12 años.

Los testigos y Sarabia coincidieron en señalar a Humberto Torres Charles (hermano del exfiscal general del estado), a quien apodan Glenda y que fue subprocurador en los años noventa, bajo el mando del procurador Humberto Medina Ainsley, padre del actual gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz.

Humberto Torres era director jurídico de la Secretaría de Salud estatal. Hoy está prófugo. Los declarantes sostienen que le entregaron sobornos altísimos (el primero por 100 mil dólares) y le regalaron un automóvil BMW y un Mustang.

El lunes 20 la periodista Isabel Arvide dijo al periódico Vanguardia de Saltillo que la corrupción del exfiscal Jesús Torres fue advertida personalmente por Felipe Calderón a Humberto Moreira, quien lo ignoró y mantuvo al funcionario en el cargo desde 2010.

Pese a estos antecedentes y a las confesiones e imputaciones hechas por los detenidos, que llevan casi un año en poder de la PGR, esta dependencia no ha integrado ninguna indagatoria contra el exfiscal Torres Charles ni ha resuelto caso alguno de desaparición forzada de personas, aunque el propio presidente Felipe Calderón se comprometió desde mediados de 2011 a acelerar las investigaciones y dar respuesta a las familias que exigen justicia.

Arturo Rodríguez García. “Historias de sangre”. *Proceso* número 1843, 26 febrero 2012. pp 10, 11, 13. <https://www.proceso.com.mx/299594/historias-de-sangre-2>

### “Historias de sangre”

La guerra entre cárteles del narcotráfico produce personajes que siempre están en medio de los enfrentamientos más violentos, entre disparos, sangre y muerte. Uno de ellos es el Comandante Pepito, un zeta recientemente aprehendido que en su declaración ante la PGR da detalles, entre otros, de dos sonados episodios: el tiroteo durante una carrera de caballos en el que murió un jefe de su organización y el asesinato del agente estadounidense Zapata, del ICE, hace un año.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las declaraciones de Luis Jesús Sarabia Ramón, Pepito Sarabia o Comandante Pepito, explican algunos hechos de violencia de los últimos años en regiones del norte del país; esto por su cercanía con Miguel Ángel Treviño Morales, L-40, su compadre, así como por su ascenso en la organización criminal de Los Zetas, de la que llegó a convertirse en asociado.

Detenido el pasado 11 de enero en un operativo incruento, Sarabia está en calidad de indiciado según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012, en la que se asienta que hasta marzo de 2011 fue mando regional de Los Zetas, con influencia en San Luis Potosí, Zacatecas, Jalisco y Coahuila.

A lo largo de su declaración, Sarabia da cuenta de operaciones en las que participó directamente o de las que tuvo conocimiento al formar parte de la también llamada Compañía, operaciones que en su momento se convirtieron en noticias de repercusión internacional.

Uno de esos casos es el ataque a dos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 15 de febrero de 2011.

Ese día los agentes Jaime Zapata y Víctor Ávila fueron tiroteados en un paraje de la autopista federal número 57, en San Luis Potosí. Zapata murió.

El 23 de febrero de ese año la investigación a integrantes de Los Zetas derivó en la detención de Julián Zapata Espinoza, El Piolín, quien según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era el mando de la organización delictiva en la zona.

Ricardo Treviño, vocero de la Sedena, aseguró aquel 23 de febrero que el ataque se debió a una confusión, pues por el tipo de vehículo en el que viajaban los agentes del ICE, los sicarios asumieron que se trataba de miembros de un cártel rival.

El 28 de febrero de 2011 el gobierno presentó a Sergio Mora Cortés, El Toto, detenido por la Marina. A El Toto se le atribuyó estar a las órdenes de El Piolín. Con inusual premura los zetas implicados iban cayendo.

Durante un año nadie mencionó que los agentes del ICE iban armados, hasta que el pasado miércoles 15 The Washington Post dio a conocer otros pormenores del ataque. Por ejemplo que la camioneta en la que viajaban era blindada y hubiera podido resistir los disparos de AK-47 y la detonación de granadas, pero el vehículo tenía una falla técnica: al poner la palanca en “parking” se levantaban los seguros de las puertas.

Los agentes del ICE no pudieron responder la agresión, pues eran superados en armamento.

Con las declaraciones de Sarabia la información complementa lo que ya se había asentado en la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/051/2011, integrada a partir de la detención de El Toto y El Piolín, ya que explica cómo se vivió la tensión por lo ocurrido en las horas que siguieron al homicidio de Zapata.

Sarabia, indiciado ahora por diferentes delitos federales, explicó que El Toto era el contador de la plaza y se había quedado a cargo aquella semana cuando atacaron a los agentes del ICE.

La averiguación 051/2011 establece que Sarabia pidió a El Toto que explicara lo ocurrido y le ordenó reunir a El Piolín con su “estaca (comando) para darle piso (matarlo) o montarlo” (entregarlo a las autoridades).

Esto último fue lo que ocurrió, por lo que la Sedena y la Marina pudieron tener detenidos rápidamente y no por los trabajos de inteligencia presumidos por Felipe Calderón, a quien inclusive felicitó Barack Obama tras las detenciones.

Sarabia estaba en Monclova, a donde lo había convocado Heriberto Lazcano para que se encargara de organizar una protesta contra la construcción de un penal federal que se realiza en esa ciudad, según se establece en la averiguación 041/2012.

El asunto había hecho crisis. La noche del 15 de febrero de 2011, horas después del asesinato del agente Zapata, L-40 y El Lazca convocaron a Sarabia para pedirle una explicación, por ser el mando principal de esa región. El primero en llegar fue L-40.

De la declaración de Sarabia: “Mi compadre 40 me pregunta qué fue lo que pasó en San Luis Potosí, que quién se había chingado a los de Migración, refiriéndose a los güeros del ICE, porque yo era el encargado, a lo que yo le dije que no sabía cómo estaba el pedo, ya que se había quedado encargado El Toto”.

El Piolín y otro sicario mencionado sólo como El Tarta han sido identificados por las autoridades mexicanas como los ejecutores del ataque. De la declaración de Sarabia se desprende que eso es cierto.

“Toto me dijo que había mandado a Piolín y a Tarta a robarse trocas a la carretera de San Luis a México, y al parecer había valido madre porque era gente del otro lado, es decir de los güeros. Después de eso, mi compadre 40 le habló a Lazcano para que checaran qué iban a hacer conmigo. Una vez que llega Lazcano le explicamos cómo están las cosas y Lazcano explica que él me había mandado llamar a Monclova para lo de las pancartas, por lo que queda mi compadre 40 conforme con lo dicho y me dejan seguir haciendo lo de las pancartas.”

Días después, a principios de marzo, L-40 lo cambia de asignación y entonces Sarabia opta por desertar de Los Zetas.

“(L-40) me dejó dicho con El Abuelo (jefe de plaza en Monclova) que le migre para la guerra (llaman así al enfrentamiento contra el Cártel del Golfo en la frontera tamaulipeca), que ya no regrese a San Luis Potosí y me ponga a las órdenes de El Gallo y La Papa (ambos ejecutados y calcinados en la carretera Laredo-Monterrey), pero no obedecí y a finales de marzo de 2011 dejo de formar parte de la organización de Los Zetas.”

### **Carreras en Fresnillo**

Unos meses antes de su detención, Sarabia empezó a tener problemas dentro de la organización criminal, según dice en su declaración.

El 15 de diciembre de 2010 hubo carreras y fiesta entre zetas. Se reunieron en un hipódromo en las inmediaciones del penal de Fresnillo los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño, L-40 y L-42, respectivamente; Iván Velásquez Caballero, El Talibán o Comandante 50; El Diamante, operador de Zacatecas; otro sujeto conocido como El Gordo, quien se hace cargo de los caballos de la organización, y La Ardilla, jefe de plaza en Zacatecas.

El Talibán le preguntó a Sarabia si le había hecho algo a su compadre L-40, porque andaba muy enojado y le quería montar “a aquel hombre”, refiriéndose a Lazcano.

“Yo lo único que le dije fue que estaba enojado porque me había visto con una muchacha que yo traía y que era de Veracruz, era una teibolera, pero al parecer le había gustado a mi compadre Miguel (L-40)”, explicó Sarabia.

No hubo reclamo, porque de repente recibieron reportes de la presencia de militares en la zona y se acabó la fiesta.

El Ejército reventó la carrera, pero todos los zetas lograron escapar y enfrentaron a los militares a lo largo de la carretera estatal Jerez-Fresnillo. Sólo murió un pistolero. L-40, L-42, Lazcano y La Ardilla volaron en aviones privados a Monclova. Sarabia huyó por tierra y se fue a esconder a Saltillo.

La información oficial sólo dio cuenta de que un grupo de hombres armados había enfrentado un convoy militar que los repelió, dejando como saldo un sicario muerto.

### **Villarín y Cañada Park**

El gusto por las carreras de caballos de Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño ha sido ampliamente referido, sobre todo porque en diferentes ocasiones se han visto atacados o cercados por el Ejército al ser espectadores de justas ecuestres.

Una de las primeras menciones sobre esa afición ocurrió en El Villarín, Veracruz, cuando un desencuentro entre los apostadores terminó en balacera. Aquella vez se especuló con que uno de los muertos podría ser Heriberto Lazcano, pero en realidad se trataba de Efraín Teodoro Torres, Comandante 14 o Z-14.

Villarín es un rancho cuya carretera reducida apenas está pavimentada. Al transitar por ahí es frecuente que salgan al paso gallinas o cerdos, antes de penetrar el breve y paupérrimo caserío. Sin embargo, en ese lugar se instaló un hipódromo abatible, con capacidad para unas 10 mil personas y que entre sus curiosidades contaba con arrancaderos profesionales.

La bolsa era de unos 9 millones de pesos, pero al final de la carrera los apostadores no quedaron conformes con el resultado. De ahí surgió la balacera en la que murió el Z-14.

Dos años después, en el Futurity 2009 del Cañada Park, en Ramos Arizpe, Coahuila, asesinaron a balazos a Javier Urióstegui Román, El Gato Urióstegui, un tahúr profesional originario de Morelos.

Dos días después, en una finca de Allende, Nuevo León, donde lo velaban, un comando acribilló a los dolientes. Ahí murió su hermano José Carmelo, además de que otros familiares y amigos del apostador – procedentes de Teloloapan, Guerrero– resultaron heridos.

En su huída del Cañada Park, un convoy encabezado por el teniente coronel Manuel de Jesús Cícero Salazar, entonces director de Seguridad Pública de Ramos Arizpe, se encontró con los delincuentes. Su vehículo iba equipado con cámara y grabó el enfrentamiento. Bajo el fuego se escuchan las desesperadas peticiones de apoyo por radio a otras corporaciones. La ayuda no llegó.

De acuerdo con las declaraciones de Sarabia, fue El Gato Urióstegui quien mató al Z-14 o al menos así lo entendía L-40.

“Conocí a esta persona (Cícero) el 30 de agosto de 2009 ya que hubo una balacera entre la escolta de Cícero en contra de la gente de la Compañía, entre los que nos encontrábamos mi estaca (comando) y yo.

“Fue en la carretera Los Pinos, ya que ese día hubo carreras de caballos a las que fue El Comandante 40, porque sabía que en ese lugar iba a estar un apostador que un año antes (en realidad dos años antes), había matado en unas carreras de caballos que se hicieron en Villarín, Veracruz, al Comandante 14.”

Sarabia estaba estacionado en las inmediaciones de un convento ubicado por la carretera a Los González, en Saltillo, cuando recibió la orden de acercarse al Cañada Park, pero en el trayecto se dio cuenta de que había patrullas esperando el convoy de L-40 que ya había ejecutado a El Gato Urióstegui y venía de regreso. Sarabia fue quien hizo la custodia del convoy de L-40, haciendo frente a los policías y resultando herido.

Luciano Campos Garza. “Testimonios desde el infierno”. *Proceso* número 1843, 26 febrero 2012. pp 14-16. <https://www.proceso.com.mx/299301/testimonios-desde-el-infierno>

### **“Testimonios desde el infierno”**

Deshecha por la pena, una pareja de Monterrey relata la estremecedora historia de su hijo, quien fue encerrado a la mala por federales en el penal de Apodaca, donde recibió maltratos y extorsiones permanentes. Su familia sostiene que no pertenecía a Los Zetas ni al Cártel del Golfo. Aun así, el joven fue masacrado junto con otros 43 reos en el ambulatorio Delta. Los padres describen el poder que los capos del narco ejercen en las cárceles donde deberían purgar sus condenas.

MONTERREY, NL. - En el penal de Apodaca las llaves de las celdas y los accesos eran controladas por los malos. Uno de ellos estaba en cada puerta, tomando apuntes de quién entraba y salía. El comandante en el interior no era un guardia, sino un interno designado por los líderes de los presos. Los locutorios eran territorio tomado, con espías que reportaban lo que se decía en cada visita personal.

Todo eso lo supieron Sofía y Arturo a partir de lo que les contaba su hijo Mario Humberto Ramírez Calderón, asesinado la madrugada del 19 de febrero junto con otros 43 internos.

Arturo había solicitado el 29 de julio de 2011 que trasladaran a su hijo de 19 años al penal de Cadereyta porque estaba en peligro. Le envió una carta a Ernesto García Guerrero, entonces comisario general de Administración Penitenciaria, en la que le decía que quería el cambio “por motivo de soborno y golpes que me le dan. (...) Tiene mucho miedo mi hijo, ya que el día que estamos con él todo parece bien, y nomás nos vamos retirando del penal lo golpean y le preguntan todo, si habló mal del penal. Por favor, ayúdenos con el traslado”.

El 1 de agosto le contestaron con un oficio firmado por José Anastacio Fuentes Rojas, comisario de apoyo, dirigido al director del penal, maestro Gerónimo Miguel Andrés Martínez, que dice: “Le solicito realice las acciones necesarias para su debida atención y remita a la brevedad informe escrito de lo consumado. Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración”.

Los padres dicen que nada se hizo para proteger a su hijo. Hablaron con el director para que acelerara el traslado, pero les respondió –dice Sofía– “que era un buen chavo, que para qué lo trasladaban, que estaba bien, que no tenían problemas... y que él (el director) no mandaba adentro; que él sólo mandaba a los azules, a los uniformados. No nos dijo nombres de organizaciones ni de personas, no nos dijo ni zetas ni del Golfo ni alguna otra organización que esté adentro. Nomás nos dijo que mandaban los que estaban adentro”.

Pero lo seguían golpeando y por eso decidieron “ya no moverle”, porque podrían desencadenar más agresiones hacia el muchacho. Cada vez que iban a visitarlo había una persona sentada a su lado para escuchar lo que platicaban. Por eso Mario Humberto tenía que hablar con sus padres en susurros o con señas; les decía que se la pasaba bien, pero tenía en la nuca moretones que su madre veía al abrazarlo.

“Contaba que se había golpeado porque se caía –dice Arturo–. Uno lo conoce. Yo le decía: ‘A ver, si estás bien, descójate’. Pero contestaba que no podía”. Él piensa que, en caso de levantarse, el oreja lo hubiera reportado a sus jefes y la consecuencia sería una golpiza peor que las habituales.

Mario Humberto, a quien le decían El Gavilán, fue detenido el 16 de junio de 2011. Vivía con sus padres en la colonia La Estanzuela, en el sur de Monterrey. Estaba separado y tenía una hija de dos años. Había dejado trunca la escuela mecánica para trabajar.

En la versión de sus padres, aquel 16 de junio, a las 14:00 horas, el joven salió del taller automotriz donde trabajaba para ir a comer. Frente al local de alimentos vivía un amigo ocasional con el que Mario Humberto intercambiaba películas y, cuando fue a entregarle algunas, lo detuvieron policías federales.

Según la familia, bastó que al Gavilán le sembraran un cargador de ametralladora para que lo procesaran por portación de arma de uso exclusivo del Ejército y le dieran siete años de prisión. También lo acusaron a él y a su amigo de tener secuestrado a un Luis Maldonado Méndez, pero esto se estaba desahogando en una averiguación previa por privación ilegal de la libertad en su modalidad de “secuestro a un no servidor público” (sic).

Sus padres afirman que él es inocente. No tenía antecedentes penales y se dedicaba a trabajar, pero de pronto lo encarcelaron y afirmaba que su estancia en prisión eran los ocho meses más horribles que había vivido. “Decía que había recibido más golpes ahí que en toda su vida”, cuenta su madre.

El día de la masacre, que primero se difundió como “un motín”, el gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina estaba a unos cuantos metros del penal de Apodaca, brindando con los soldados en el campo militar. “Lo vi en las noticias levantándose el cuello, sentado ahí, diciendo que los penales son seguros”, añade Sofía.

### **“Los narcos mandan”**

Sofía y Arturo son nombres falsos. Sus identidades han sido alteradas por seguridad. Ella es empleada en un centro comercial y él mecánico automotriz que hace trabajos ocasionales. Durante la entrevista tienen con ellos las cenizas de su hijo, que les entregaron el miércoles 22 por la mañana.

“Mario me decía que cuando saliera, nada nos iba a separar. Por eso pedí que me lo cremaran y que me dieran las cenizas. Así cumplimos lo que habíamos dicho, que cuando saliéramos nadie nos iba a separar. Ahora siempre va a estar conmigo”, dice Sofía con la mirada fija en la urna.

Toda la información de los padres sobre las condiciones que prevalecían en el penal de Apodaca procede de Mario Humberto, que vivía atemorizado. Dicen que tan pronto ingresó al presidio le ofrecieron jalar con los malos, adentro y cuando saliera.

Los padres declinan precisar quién es el grupo que manda adentro del penal, Los Zetas o el Cártel del Golfo. Sin embargo, fue el gobernador Medina quien precisó que Los Zetas controlan la cárcel y que habían cooptado a los mandos (incluido el director) y a los celadores con dinero.

Para Sofía, Mario Humberto rechazó la orden de unírseles y por eso lo golpeaban: “Fue muy hombre, el canijo, y les dijo que no. Por eso buscábamos el traslado, mi esposo escribió esa hoja. Fuimos con el director y nos dijo que si no tenían problemas con él no había por qué trasladarlo; que sí trasladaban a los reos problemáticos”.

Cuando llegó al reclusorio, el muchacho fue asignado al ambulatorio Delta. Preguntó por qué, y las autoridades penitenciarias respondieron que se debía a que él era de La Estanzuela y que esa era una zona dominada por el Cártel del Golfo, así que él pertenecía a éste. Así sellaron su suerte.

“Teníamos ocho meses de estar peleando su inocencia. Todos nos decían que teníamos todo para sacarlo, pero que había que esperar un proceso y eso tardaba un año, lo que él tenía que estar para que los jueces dijeran que podía salir”, dice ella entre suspiros.

Ni siquiera pudieron trasladarlo y sólo les quedó un recurso para aliviar la situación de su hijo: “Pagábamos para que lo golpearan menos. Dimos una vez 3 mil pesos. Luego nos pidieron unos tenis de 2 mil 600, de los Nike Choice, que ni conocíamos. Luego 500 por semana. Se los dábamos a él. Los otros, lógico, no iban a dar la cara”, expone Sofía.

“Lo amarraban para golpearlo. Lo sacaban a un campo los mismos malos. Por eso digo que no es cierto que los custodios tenían las llaves adentro, las tenían los malos.”

Secunda Arturo: “Si mi muchacho quería ver a un amigo, tenía que pedirle permiso al comandante, pero no al de la justicia, sino al de la injusticia. Ese daba la orden y hablaba por teléfono”.

El 20 de diciembre del año pasado fue asesinado Ramón Gumaro Garza, un reo conocido en la localidad e implicado en el maxiproceso contra Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo. Llevaba encerrado 15 años, de una condena de 40, cuando fue asesinado con una puntilla por otro interno.

Los papás dicen que, inexplicablemente, tras ese crimen recluyeron a Mario Humberto en su celda, bajo llave, y lo dejaban salir nada más cuando ellos lo visitaban. El resto del tiempo lo pasaba encerrado y no veía el sol durante días.

En las visitas siempre tenían vigilancia, dice Arturo, “por eso queríamos trasladarlo a Cadereyta, porque se supone que ahí no es territorio de nadie. En Apodaca, en cada acceso había una persona sentada con una libreta y una pluma, anotando los movimientos: a dónde van, quién es, qué hace, cuántos son. No eran celadores, sino internos”.

Y cuestiona lo que todos: ¿por qué le han permitido tanta libertad a personas que están purgando penas? Los pandilleros pueden inconformarse cuando quieren, queman colchones, se amotinan y asesinan.

En su afán de salvar a su hijo de la violencia del penal, la pareja cayó en manos del abogado Gonzalo Reséndiz, que les pidió 35 mil pesos en varias entregas, con la promesa de que conseguiría la preliberación del Gavilán.

Ansiosos de ver a su hijo libre o por lo menos trasladado a un penal donde no lo acosaran, Arturo y Sofía estaban dispuestos a mudarse a cualquier estado para seguir demostrando su inocencia. Pero después de la última entrega de dinero el abogado ya no les contestó el teléfono.

### **“Querían destazarlos”**

En el ambulatorio Delta, los internos hacían rondas de vigilancia durante las 24 horas. Cubrían las ventanas de sus dormitorios con cartones para prevenir ataques con bombas molotov. El propio Mario Humberto dormía de día para estar alerta durante la noche, por eso sus padres suponen que estaba despierto cuando ocurrió la masacre.

Ellos acostumbraban visitarlo los lunes, pero el de esa semana iba a tener un careo como parte de uno de los procesos que enfrentaba, así que anticiparon el encuentro para el domingo 19.

Precisamente esa mañana los noticiarios matutinos de televisión informaron del asesinato masivo de reos en el penal de Apodaca. A las 9:00 horas Sofía y Arturo ya estaban afuera del penal. Era un caos de aglutinamiento, desesperación y exigencias de información.

Un empleado del gobierno de Nuevo León salió a decirles que pronto revelaría listas de fallecidos. Luego salió y dijo que había 40 muertos, todos del ambulatorio Delta, y que no había otros lesionados.

Entraban y salían elementos de la Fuerza Civil y federales.

A las 14:00 horas la pareja no tenía información concreta sobre su hijo. Sofía, igual que los demás familiares, exigía nombres, pero la información llegaba con exasperante lentitud.

Mientras esperaban, una persona que dijo trabajar en derechos humanos la cuestionó: ¿por qué no había denunciado lo que ocurría adentro del penal? “Yo le dije que, cuando detuvieron a mi hijo, le di una carta al propio gobernador en su mano para que checara el caso de mi hijo y viera que era inocente, y hasta ahorita no me han hablado de su parte. Por eso no me digas ahora que no hablé: lo hice y nadie escuchó”.

Los familiares de los internos, desesperados, apedreaban los coches que entraban o salían de la prisión. A Sofía le tocó una pedrada en la pierna.

A las 16:30 horas tenían claro que en el penal no les darían dato alguno y se trasladaron al Hospital Universitario, en Monterrey. Ahí se encuentra el Servicio Médico Forense, adonde se enviaban los muertos y lugar en que el gobierno estatal instaló una mesa de orientación.

A las 19:00 horas tuvieron que ver fotografías de los cadáveres deshechos. Vieron 36 antes de encontrar a Mario Humberto. A decir de Arturo, reconocieron el tatuaje de un dragón que tenía en el brazo izquierdo y los dibujos dérmicos de una mano. La cabeza y el rostro eran irreconocibles.

“Nos mostraron las fotos y sí eran los tatuajes –relata Sofía–, pero por lo que nos mostraron no se podía reconocer. Lo quería abrazar, verlo, pero el ataúd estuvo sellado y no se pudo abrir. Sus amigos querían verlo en el velorio. ‘Ábralo, doña’, me decían, pero yo no quería que lo vieran. No lo iban a conocer. ‘Quédense con el recuerdo de la foto, porque lo que hay adentro no es su cara’, les dije.”

Arturo exigió ver el cadáver completo. “Hasta ahorita no se me hace que sea su rostro, no se me hace que es él... Pero sí eran su cuerpo y sus tatuajes. Su cabeza estaba unida por una parte, pero estaba casi cortada. Sí era la de él. Pero al principio yo les decía (a los empleados del Semefo) que no era su cabeza, porque es mi hijo y lo conozco”.

Se lo habían advertido: “Es muy duro lo que usted va a ver”. Pero él les contestó que “quería saber qué me estaban entregando. Lo descubieron y sí estaba unida la cabeza, pero definitivamente no era la persona que yo conocía. Lo vi un día, y cuatro después me lo dejaron muy diferente. Y así estaban los cuerpos de todos los que nos enseñaron”.

Sofía se hace una idea de lo que sufrió Mario Humberto: “Me imaginaba a unos perros que les avientas un trozo de carne. Como que decían: ‘Ten, golpéalo tú. ¿Ya te cansaste? Ahora golpéalo tú’”.

Arturo piensa lo mismo: “No era cuestión de matarlos, sino de destazarlos. Tuvieron tiempo para soltárselo a 15, pienso. Y háganle lo que quieran, y otros 15 agárrense a otro. Porque tuvieron el tiempo”.

Unos trabajadores del DIF de Nuevo León que la atendieron afuera del Semefo aun se atrevieron a decirle a Sofía que el gobernador estaba de su lado. “Le dije que al gobernador le entregué una carta en su mano y no me escuchó –recuerda ella–; por eso no me digas que ahora el gobernador está conmigo. Aunque me digas que está de mi lado, cuando lo ocupé no estaba ahí”.

Les entregaron el cuerpo el lunes 20 y lo velaron en la casa de la madre de Sofía. Recibieron el ataúd sellado a las 7:00 horas y la funeraria quería llevárselo esa tarde, pero los padres pidieron más tiempo. Finalmente se llevaron el cuerpo 24 horas después. Ese martes lo cremaron.

Ahora piden que el nombre de su hijo sea reivindicado, que se castigue la corrupción de las autoridades penitenciarias estatales y federales, y que el gobierno de Nuevo León contribuya a la manutención de la hija de Mario Humberto.

Arturo y Sofía deben cuidar lo que les queda de familia. Otro de sus hijos, Ramón Martín, desapareció el 13 de agosto de 2010. Salió a comprar unas salchichas a la tienda, allá en La Estanzuela, y ya no apareció. Les queda otro de 12 años, al que se proponen educar para que sea “un buen muchacho”.

Luciano Campos Garza. “Los Zetas y el CDG siguen dueños del penal de Apodaca”. *Proceso* número 1843, 26 febrero 2012. pp 17-19. <https://www.proceso.com.mx/299374/los-zetas-y-el-cdg-siguen-duenos-del-penal-de-apodaca>

### **“Los Zetas y el CDG siguen dueños del penal de Apodaca”**

Partidos políticos, la clase empresarial de Nuevo León, activistas locales y la propia ombudsman estatal, Minerva Margarita Martínez, reprueban al gobernador Rodrigo Medina por su torpeza política, su frivolidad y su falta de previsión y de eficacia para enfrentar a la delincuencia en el estado. Una prueba de esta incapacidad es la matanza y fuga multitudinaria de sicarios de Los Zetas del penal de Apodaca, donde son los grupos criminales los que imponen su ley. Medina culpa de estos hechos a la federación, y el PAN le pide que renuncie.

MONTERREY, NL. - El lunes 20, al día siguiente de la masacre en la que murieron 44 reos y una treintena más se fugó, un grupo de visitantes de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León visitó el penal de Apodaca para comprobar las condiciones de los internos.

Un funcionario del gobierno estatal que presenció la visita asegura que los celadores advirtieron a los visitantes que no podían ingresar a todas las áreas debido al alto grado de peligrosidad prevaleciente, sobre todo en las que el autogobierno impuesto por Los Zetas y por los internos del Cártel del Golfo (CDG) anula toda autoridad, aun la del gobierno estatal.

Luego del ataque al Casino Royale el 25 de agosto último, a raíz del cual perecieron 52 personas, la ejecución tumultuaria en Apodaca es el segundo ataque más oprobioso del crimen organizado.

El mismo lunes 20, pasmado aún por los acontecimientos, el gobernador Rodrigo Medina declaró a los medios que la culpa era de las autoridades federales “por retacar los reclusorios estatales”, si bien es cierto que su administración ha hecho muy poco para remediar el hacinamiento y el autogobierno en ese centro penitenciario y en el de Topo Chico.

Y aun cuando el vocero de seguridad del estado, Jorge Domene Zambrano, intentó limpiar la imagen del gobierno de Nuevo León, las declaraciones de Medina detonaron las inconformidades. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Minerva Margarita Martínez, aliada del gobernador, pidió a las autoridades locales trabajar en serio para “tener el verdadero control de las penitenciarías”.

El alcalde de García, Jaime Rodríguez, fue más allá. Dijo que los penales son centros de consumo de droga; incluso comentó que a Medina le ha faltado carácter para enfrentar al presidente Felipe Calderón y solicitarle que sea el gobierno federal el que se encargue de los reos federales.

## **Riña, fuga y confusión**

La madrugada del domingo 19 el guardia de la torre 6 del penal de Apodaca reportó a dos custodios que se sentía enfermo. Cuando acudieron a auxiliarlo, fueron sometidos por varios internos. Hasta ahora se desconoce si el celador estaba amenazado o fue presionado por ellos.

Así empezó la trifulca en este penal, ubicado a 20 kilómetros al norte de Monterrey. Poco después, a las 1:13 horas, el acceso a la torre, próxima al ambulatorio Coca, fue abierto. Por ahí salieron los 30 presos, 25 del fuero federal y cinco del común, todos ellos pertenecientes a Los Zetas, quienes tienen el control del penal.

Uno de ellos es Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, operador de esa organización en la entidad, quien purgaba una condena por su participación en la muerte del general retirado Juan Arturo Esparza García, secretario de Seguridad Pública del municipio de García, y de cinco escoltas el 4 de noviembre de 2009. De acuerdo con las versiones recabadas por el reportero entre autoridades y familiares de los reclusos, éstos subieron al puesto de vigilancia y se deslizaron por medio de sogas hacia el exterior, donde abordaron varios autos que los estaban esperando.

Aproximadamente a las dos de la madrugada, armados con objetos contundentes y punzocortantes, los del ambulatorio Coca enfrentaron a los del Delta. Según los testimonios, no hubo una confrontación abierta; al parecer las víctimas ya habían sido seleccionadas.

Domene Zambrano declaró que los muertos eran del CDG. Los cuerpos mutilados fueron colocados en un rincón que servía de criadero de cabras. Una hora más tarde, cuando había concluido la matanza, alguien dio la voz de alerta. Los primeros en llegar fueron los agentes de la Fuerza Civil del estado y los de la Policía Federal. Para las nueve de la mañana del domingo 19, familiares de los internos acudieron al penal a pedir información acerca del amotinamiento; algunos lanzaron piedras contra los uniformados, sobre todo contra los de la Fuerza Civil, que custodiaban el enrejado de la entrada.

En medio del caos, el gobierno de Nuevo León instaló una mesa única de orientación a los familiares en el Servicio Médico Forense, ubicado en el Hospital Universitario de Monterrey, donde fueron trasladados los cuerpos.

Al día siguiente, Medina organizó una conferencia de prensa en la que se dedicó más a exaltar los logros de su gobierno. Dijo que de 2009 a la fecha en la entidad se ha consignado a 8 mil 500 delincuentes, la mayoría por delitos federales, y culpó a la federación de los males que le ocurren a Nuevo León, en particular por el sobrecupo de internos federales que, expuso, fue lo que causó el homicidio masivo.

Medina afirmó que la evasión fue producto de una traición del personal interno, pues su administración había comprobado que Los Zetas controlaban el penal tras haber comprado con cuotas a directivos y a los custodios.

Incluso cesó a Ernesto García Guerrero, comisario de la Agencia de Planeación Penitenciaria; mientras que Gerónimo Miguel Andrés Martínez, director del penal, así como el subdirector, Juan Hernández Hernández, y el jefe de Seguridad, Óscar Deveze Laureano, permanecerán arraigados en tanto se investiga su presunta participación en los hechos. El mandatario anunció que 26 de los 70 custodios también serán interrogados.

Los reporteros le preguntaron por qué había contratado a Andrés Martínez, toda vez que en 2009 fue destituido como titular del penal de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal, por corrupción. Medina respondió que lo hizo porque “aprobó las pruebas de confianza”.

La tensión aumentó. El martes 21 en el penal de Topo Chico fueron asesinados con armas blancas los reclusos Alán Josué González Rojas, de 24 años; Jorge Eduardo González Salas, de 32, y Dewin Vianey Rojas Martínez, una mujer de 28 años; todos ellos relacionados con el CDG. Habían ingresado al penal el día anterior.

El martes 21 por la noche el traslado de tres internos federales vinculados a Los Zetas –Marcos de León Quiroga, alias El Chabelo; Mario Andrés Alcorta Ríos, El Junior, y José Francisco Gámiz Vega, El Extraño– provocó nuevos disturbios dentro y fuera del centro penitenciario de Apodaca. En el incidente cuatro internos fueron lesionados; uno de bala y los demás con armas punzocortantes.

Al día siguiente el gobernador tuvo dos actos públicos. En el del Centro Internacional de Negocios (Cintermex) dijo a los reporteros que los sistemas de seguridad de los penales de Topo Chico, ubicado al norte de Monterrey y con una población de 4 mil 500 internos, así como el de Cadereyta, 40 kilómetros al oriente de esta capital y ocupado por mil 100 prisioneros, se habían reforzado.

También declaró que el estado cuenta con mil 100 celadores y que el déficit para los tres centros de reinserción social es de 4 mil. Consultado al respecto, un funcionario que pidió omitir su nombre dice que sólo 20% de los trabajadores penitenciarios han sido sometidos a exámenes de confianza.

El diputado local priista Héctor Gutiérrez de la Garza hace sus propios cálculos y responsabiliza al gobierno federal de la sobrepoblación penitenciaria en la entidad. Dice que son ya 8 mil 862 los internos en los tres centros, si bien la capacidad es para 6 mil 108; de ellos, asegura, 2 mil 254 son federales.

De acuerdo con el legislador, el estado resolvería su problema de internamiento de prisioneros del fuero común si se construye un penal en Mina, 50 kilómetros al oriente de la capital, que podría tener un cupo para 2 mil 300 personas.

Su correligionario Raymundo Flores presentó recientemente un punto de acuerdo en el Congreso local para pedir a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) que se haga cargo de los presos que le corresponden, o que convierta el de Apodaca en un penal federal. Su moción fue aprobada por el pleno.

Luis Farías, presidente del partido local Cruzada Ciudadana, se sumó a los reclamos contra la federación y señaló que es tiempo de que se haga cargo de todas las penitenciarias del país, porque es la única instancia con poder para solucionar esta emergencia nacional. El miércoles 22, el titular de la SSP, Genaro García Luna, respondió al gobernador en una entrevista radiofónica que el problema de las fugas masivas en los estados se debe a la corrupción, no a la sobrepoblación, como alega el nuevoleonés. Recordó incluso que cinco entidades –Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Baja California y Sonora– concentran casi 50% de los internos estatales y federales.

“Ahí no ha habido ningún incidente de este tipo –expuso García Luna–. Es decir, no corresponde que la variable donde hay fugas sea por la perspectiva de la sobrepoblación. En todas las fugas no ha sido porque tiren una pared o entre un comando por ellos, sino porque siempre hay alguien que los libera.”

El viernes 24 por la tarde García Luna anunció que el general retirado Javier del Real Magallanes, quien hasta 2010 fue comandante de la Cuarta Región Militar con sede en Escobedo, sustituirá al también general Jaime Castañeda Bravo como titular de Seguridad Pública en Nuevo León. Presión a Medina.

Desde que inició la gestión de Medina, los medios locales lo han criticado por su frivolidad e insensibilidad política. El 4 de octubre último, por ejemplo, se le vio con su familia en las instalaciones de Disney World, en Orlando, Florida, cuando debía estar trabajando.

Meses atrás, el 23 de enero de 2011, el mandatario voló a Chicago para presenciar el juego de fútbol americano entre Osos y Empacadores, aun cuando la entidad estaba inmersa en una “crisis de seguridad”. Y en estos días, mientras se define quiénes serán los candidatos del PRI a diputados locales y federales, el PAN estatal se lanzó contra él.

En un boletín difundido el lunes 20, Acción Nacional calificó al gobierno de Medina de ser institucionalmente frágil y débil: “Ante su incapacidad, insensibilidad y superficialidad públicamente demostrada en numerosos ejemplos, queremos exhortarlo a que nos conteste a los ciudadanos una simple pregunta: ¿Puede o no puede con el manejo del estado? Estos son tiempos de sumar, señor gobernador: si de verdad en algún momento le importó Nuevo León, es hora de que conteste esta pregunta.”

El alcalde de García, el priista Jaime Rodríguez Calderón, ha sobrevivido a dos atentados. Cuando tenía cuatro días en el cargo Óscar Manuel Bernal Soriano, alias La Araña, quien se fugó de Apodaca el domingo 19, ejecutó a su secretario de Seguridad y a sus escoltas.

Consultado sobre la matanza, dice que todo indica que Nuevo León no puede con los criminales: “La autoridad tiene que atreverse a quitar a todos los que manejan; es lo que yo haría si fuera gobernador. Los penales son centros de consumo de droga muy grandes, son productores de delincuentes. Hay que rediseñar todo esto”.

—¿Hay un autogobierno en los penales? —se le pregunta.

—Ya lo vimos. El problema de los penales aquí es el dinero. La federación no ha dado suficientes fondos; lo que urge es que ambas instancias —la federal y la estatal— se pongan de acuerdo en ese tema.

Aldo Fasci Zuazua, exsecretario de Seguridad estatal y ahora candidato a diputado federal por la alianza PRI-PVEM, asegura que la crisis en el penal de Apodaca se originó porque no está diseñado para alojar presos de alta peligrosidad.

Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadha), considera que la crisis en los penales es resultado de la impunidad con que se manejan los internos y los celadores. Dice que le llegan reportes de personas que se quejan de cobros constantes ahí. “Hasta por dormir cobran adentro, pero las autoridades no sancionan a los culpables”, dice.

Morales Elizondo confía en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigará los acontecimientos del reclusorio apodaquense, tal como lo anunció el organismo, y dice que es mejor que eso lo haga el ombudsman nacional y no el estatal, porque tiene capacidad técnica y mayor libertad para hacerlo.

El miércoles 22, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al Estado mexicano a “adoptar las medidas pertinentes para evitar la repetición de hechos similares”, y le pidió “investigar y sancionar a los responsables”.

Al día siguiente, la clase empresarial arreció sus críticas contra el gobierno de Medina en rueda de prensa. Sus dirigentes locales señalaron que los niveles de inseguridad son alarmantes y exigieron al mandatario atender con rigor los problemas de la entidad. José Mario Garza Benavides, director de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex); Eugenio Clariond Rangel y Guillermo Dillon, presidente y director de la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), y Víctor Zorrilla y Miguel Treviño, presidente y director del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), estuvieron en ese acto.

Garza Benavides expuso: “Al gobernador Rodrigo Medina le manifestamos que debe quedar muy claro que la prioridad es Nuevo León, no los procesos partidistas. Le exigimos ocuparse en el trabajo que la ciudadanía le asignó, además de comprometerse de manera que responda a la gravedad del problema que enfrentamos”.

Lo secundó Clariond Rangel: “Hoy estamos encendiendo el foco de alerta y la última llamada al gobierno del estado. El tema de la seguridad no se deslinda a secretarios ni se delega a voceros. Queremos ver al gobernador liderando y resolviendo los grandes problemas que enfrentamos, en lugar de solamente aparecer en eventos de otra índole”.

Horas antes, en la asamblea de accionistas, el presidente de Cemex, Lorenzo Zambrano, dijo que en Nuevo León la seguridad es mediocre:

“Hay mucha mediocridad en el área de seguridad en el estado y se manifiesta de esta manera; es increíble y me lastima. En general yo diría que falta muchísimo en la capacidad (...) Tenemos mucho por hacer todavía y mientras no haya personas claramente capaces y responsables de las áreas de seguridad en Nuevo León no vamos a avanzar con la rapidez que debíamos.”

La noche del jueves 23 el gobernador convocó a una conferencia de prensa en la que dijo que ya fueron identificados 10 de los agresores en la riña del penal de Apodaca.

Ricardo Ravelo. “Narcopanteón privado”. *Proceso* número 1843, 26 febrero 2012. pp 20-22.

<https://www.proceso.com.mx/299303/narcopanteon-privado-narcopanteon-privado>

### **“Narcopanteón privado”**

Los primeros días de este mes se descubrieron varias fosas con los restos de al menos 14 personas asesinadas por Los Zetas en un predio de Acayucan, Veracruz. Capturado poco antes del hallazgo, el jefe de los sicarios en esa sureña región de la entidad, El Pollo H, confesó los crímenes sin empacho; pero resulta que el predio donde estaban las fosas clandestinas tiene un dueño, al menos nominalmente: un ganadero que se vio forzado a abandonar la finca para salvar su vida y la de su familia, y sobre el que ahora se ciernen las sospechas.

ACAYUCAN, VER.- “Yo soy gente de trabajo y me sigo preguntando por qué me pasó esto tan horrible. Se robaron mi tranquilidad y temo que un día vengan y me maten. Esta gente ya no respeta nada. Hoy les pagas y al rato vienen y masacran a toda tu familia. Así no puede uno vivir tranquilo.”

Habla René Reyes Ramírez, ganadero y dueño del rancho La Poma Rosa, a dos kilómetros de esta cabecera municipal. Sicarios del cártel de Los Zetas lo secuestraron y luego lo despojaron de su propiedad para usarla como cementerio clandestino.

En entrevista con Proceso, René Reyes narra lo que padeció hace un año y medio, cuando lo secuestró “un grupo de encapuchados” que, según se supo después, eran sicarios al servicio de Los Zetas afincados en el corredor petrolero Coatzacoalcos-Acayucan, en el sur de Veracruz.

Cuenta que lo plagiaron en pleno centro de esta ciudad. “Ese día”, recuerda, “tomé mi camioneta y fui al pueblo a dar una vuelta, como siempre lo hacía; de pronto me interceptaron esas personas y me llevaron a la fuerza”.

—¿Qué le dijeron? —se le pregunta.

—¿Qué me van a decir? Lo que le dicen a la gente que secuestran. Que cooperara o me mataban. Me llevaron a dar vueltas y más vueltas. No sabía ni dónde estaba porque me vendaron los ojos y me golpearon. Luego me llevaron a una casa y ahí estuve tres días. Querían que les diera dinero, que le dijera a mi esposa que llevara una cantidad y se las entregara para que me dejaran libre.

—¿Cuánto le pidieron?

—No quiero hablar de ese tema.

—En otros casos han exigido hasta 5 millones de pesos...

—Fue menos. Pero perdí lo más importante de mi vida: mi tranquilidad. Ya nada es igual.

En medio de la constante amenaza de muerte, siempre encañonado, los plagiarios le exigían el dinero para dejarlo libre. Pero había un problema: su esposa no tenía acceso a su cuenta bancaria. Reyes negoció con Los Zetas: les pidió que lo liberaran y se comprometió a liquidar el pago tan pronto reuniera el dinero. Sus plagiarios aceptaron pero le advirtieron que si no pagaba, los matarían a él y a toda su familia.

Una vez liberado le contó lo ocurrido sólo a su esposa. Luego vendió unas vacas, pidió prestado, dispuso de lo que tenía en una cuenta bancaria y finalmente pagó. Pero la pesadilla no terminó ahí. Los Zetas le exigieron que les entregara el rancho, localizado a un kilómetro y medio de su casa. No se pudo negar.

—Sólo te pedimos que no vuelvas al rancho, que no te pares por ese lugar —le dijeron.

Reyes accedió.

—¿Por qué no denunció el secuestro y el despojo del rancho? —le pregunta el reportero.

—¿Para qué? Aquí no hay justicia para nadie. Más iba a tardar en denunciar que ellos en saberlo y mi vida vale más que lo que tengo. Les di el rancho porque pensé que así podía vivir tranquilo con mi

familia. Es un ranchito de 10 hectáreas donde tengo un ganadito, ya no mucho porque todo se ha ido acabando; pero yo sólo pensaba en mí, en mis hijos y mi esposa, y lo demás no me importó.

—¿Desconfiaba de las autoridades?

—Sí. Aquí ya no sabe uno quiénes son los buenos y quiénes los malos. Sólo Dios sabe y a él me encomiendo todos los días.

Reyes cuenta que al paso de los días comenzó a observar que de día o de noche vehículos con gente armada y encapuchada entraban y salían del rancho que, supone, les servía de refugio. Ahí sólo vivía un matrimonio, dice el ganadero, que cuidaba la propiedad; pero no aguantaron las presiones, se asustaron y se fueron.

“A veces pasaban seguido por aquí y en ocasiones tardaban varias semanas en regresar. Desde mi casa yo veía que pasaban y pasaban vehículos y suponía que eran ellos. Yo no me quise enterar de nada y hasta la fecha no me he parado por el rancho.”

—¿Qué suponía usted que hacían ahí?

—Que se escondían. No me quise enterar porque durante todo un año y medio no se metieron conmigo y así vivía tranquilo.

—¿De verdad vivía tranquilo?

—Bueno... más o menos tranquilo; no se puede vivir tranquilo en medio de todo esto. Uno nunca sabe cuándo van a venir a matarlo a uno, pero pensaba que ya no se iban a meter conmigo y yo, la verdad, me desentendí del rancho y me olvidé del predio.

Asegura a este semanario que no denunció los hechos ni piensa denunciarlos ante las autoridades porque no tiene confianza en la justicia.

Se autodefine como una “persona de trabajo que suele ayudar a la gente” y niega estar ligado al crimen organizado, aunque reconoce que después de su secuestro ya carga con la mala fama de estar metido en el narco y todo esto ha surgido —reconoce— sólo “porque a veces ayudo a la gente, le regalo un poco de carne”.

Reyes es propietario de varias carnicerías en Acayucan. Cada fin de año y cada 10 de mayo suele matar unas 15 vacas para vender el kilo de carne a 20 pesos o regalar alimentos a la gente que lo necesita.

“Esto lo he hecho porque me siento bien dándole alimento a la gente pobre, pero esta decisión me ha acarreado muchos problemas. Un día me vinieron a ver los marinos y me llevaron a un cuartel. Me preguntaron si yo era narco. Les dije que no, que sólo ayudo a la gente que lo necesita. Y me dijeron que eso que yo hacía también lo hacían los narcos.

“Y por hacer un bien salí hasta perjudicado, porque mucha gente ahora piensa mal de mí, aunque aquí en el pueblo también hay muchas personas que me estiman. Soy muy conocido aquí porque patrocino equipos de fútbol, beisbol y, la verdad, son buenos equipos.

“Como le digo, yo no tenía problemas. Aquí se vivía muy bien. Todo eso de los secuestros y matanzas sólo lo veía en la televisión y en los periódicos, pero jamás pensé que esta pesadilla fuera a llegar hasta

acá. Hoy ya no se puede hacer nada. Aquí no hay seguridad más que la que Dios le da a uno y para eso hay que pedirle todos los días, porque uno se puede acostar tranquilo pero no sabe si va a amanecer vivo.

—¿Conoce usted otros casos como el suyo en la zona?

—Se oye hablar mucho de eso por aquí y no sé ahora. Eso ya tiene un buen rato, como año y medio o dos años que se descompuso la cosa, y feo. Pero nada más se oye el ruido, yo no sé de nadie en particular. Ahora parece que se está medio componiendo esto con la llegada de los marinos, que andan por todos lados; vamos a ver cómo termina todo esto porque, no se crea, está muy mal.

### **“Cocinados” y calcinados**

René Reyes pensaba que con la entrega del rancho La Poma Rosa los sustos y las sorpresas habían llegado a su fin. Pero se equivocó. En realidad Los Zetas que lo plagiaron no sólo usaban el predio como casa de seguridad, sino como cementerio.

En ese sitio fue enterrado un número aún no precisado de personas, hasta ahora no identificadas, presuntamente policías municipales de Acayucan, sicarios que traicionaron a la organización delictiva o víctimas que no pagaron su rescate.

El tema de los entierros clandestinos salió a la luz entre el domingo 5 y el martes 7 de febrero cuando fue detenido Juan Francisco Alvarado Martagón, El Pollo H, identificado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz como líder de Los Zetas en el sur del estado.

Según las autoridades, este hombre era el artífice de muertes y secuestros en esa región ganadera, y su detención ocurrió cuando a bordo de un vehículo sin placas intentó evadir un retén a la entrada de Acayucan.

El Pollo H fue llevado a la Agencia Segunda del Fuero Común de la PGJ con sede en Acayucan, donde se integró la averiguación previa ACA/1/123/2012.

En el interrogatorio confesó ser miembro de Los Zetas y jefe de Los Halcones en la zona sur del estado. También dijo que en el rancho La Poma Rosa habían enterrado a 15 personas.

Con base en estas declaraciones las autoridades estatales y un equipo de peritos acudieron al predio, aún propiedad de René Reyes Ramírez, donde El Pollo H señaló los lugares en los que estaban enterrados los cuerpos. Los peritos excavaron y comenzaron a extraer restos humanos en descomposición.

Se hicieron 20 excavaciones de donde extrajeron los restos casi completos de 14 personas, aunque el número de enterrados clandestinamente podría ser mayor: en el fondo de las fosas excavadas se observó una sustancia blanca que hizo sospechar a los peritos de la procuraduría que los sicarios cocinaban a sus víctimas; es decir, las deshacían con ácido o sosa cáustica. Había también restos de cadáveres quemados.

Los peritos no han podido identificar a nadie hasta ahora, pero trascendió que entre los 14 cuerpos que extrajeron están los que presuntamente corresponden a tres policías municipales —María del Carmen Domínguez Cadena, Ceferino Santiago Jiménez y uno más apodado El Palillo. Los dos primeros desaparecieron en junio de 2010 luego de participar en un operativo para recuperar un taxi robado.

También se cree –aunque las autoridades estatales no han podido confirmarlo– que ahí podrían estar los restos de Gabriel Manuel Fonseca Hernández, Cuco, de 17 años, reportero del diario local El Mañanero y desaparecido en este municipio desde el 17 de septiembre de 2011.

Los despojos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Minatitlán, donde aún está en curso el proceso de identificación.

### **Bajo sospecha**

–¿Qué pensó cuando supo que su rancho servía de cementerio de Los Zetas? –se le pregunta a René Reyes.

–No lo podía creer.

–¿Usted sabía de esos entierros clandestinos?

–¡Para nada! Ni he ido al rancho desde que me lo quitaron. A mí me dijeron: “No te pares por el rancho”. Y no he ido ni iré hasta que un sacerdote venga a hacer una misa. Ese lugar está perdido. Creo que con todo lo que pasó ni lo podré vender. ¿Usted cree que alguien pueda vivir tranquilo ahí?

–¿Lo interrogó la PGR sobre lo ocurrido? ¿Le notificaron que su rancho podría quedar asegurado?

–A mí no me vino a ver nadie. Los marinos vinieron a verme dos o tres veces, me llevaron a un cuartel y me interrogaron. Les conté todo lo que me pasó y cómo me pasó y eso fue todo. No me han dicho que el rancho está asegurado ni nada.

“Yo ya no quiero problemas, todo esto me ha perjudicado mucho y lo que deseo es vivir tranquilo con mi familia. Y aquí la voy pasando, vivo el día como Dios me lo presenta y eso es todo.”

–¿Ha pensado irse del pueblo?

–¿A dónde voy a ir? Sólo sé trabajar la tierra y criar ganado. Aquí me voy a quedar. No tengo por qué ir a otro lado a dar lástima. Sé que estamos viviendo una dura crisis, tengo 48 años y siento que me quedan muchas fuerzas para seguir trabajando y salir adelante.

“Esto fue como una maldición, y créame usted que no se lo deseo a nadie. Le roban a uno la tranquilidad, el sueño, la vida. Después de lo que viví ya no se puede vivir en paz.”

–¿A qué le teme?

–A la muerte. Tengo mucho miedo de que esas gentes (Los Zetas) vengan otra vez y me maten con mi familia.

–¿Ha pedido apoyo a las autoridades para que le den seguridad?

–No.

–¿Por qué?

–No confío en nadie. Así está mejor.

J. Jesús Esquivel. “Un gobierno paralelo, objetivo de los zetas”. *Proceso* número 1848, 1 abril 2012. pp 6, 7, 8, 9, 10, 13. <https://www.proceso.com.mx/302954/302954-un-gobierno-paralelo-objetivo-de-los-zetas>

### **“Un gobierno paralelo, objetivo de los zetas”**

Como nunca en la historia reciente del país, la contienda electoral que arrancó formalmente el viernes 30 de marzo estará permeada no sólo por la tensión política, sino por el activismo inédito de los grupos criminales. Dos prestigiados académicos estadounidenses, George W. Grayson y Samuel Logan, advierten –en *El verdugo de hombres*, libro de publicación inminente acerca del fracaso de la guerra calderonista contra el narcotráfico y alertan sobre el actual propósito del más violento de esos grupos, Los Zetas: establecer un “gobierno paralelo” en México, lo que de hecho ya lograron en varias regiones.

WASHINGTON.- Los sanguinarios métodos de operación del cártel de Los Zetas reflejan el fracaso de la lucha militarizada de Felipe Calderón contra el narcotráfico y amenazan al estado de derecho en México.

“No tiene precedentes ni forma ni razón el reguero de sangre que hay en México, pero afecta directamente el panorama político”, sostienen los analistas estadounidenses George W. Grayson y Samuel Logan en su libro *El verdugo de hombres*, que saldrá a la venta en Estados Unidos en los próximos días bajo el sello editorial Transaction Publishers, cuando en México estén en pleno desarrollo las campañas electorales más profusas de los últimos tiempos.

La obra es resultado de una amplia y minuciosa investigación sobre el origen y comportamiento de la organización criminal mexicana más violenta y peligrosa en la historia del trasiego de drogas, personas y armas en México y otros países.

Según los académicos Grayson y Logan, ni “Los Zetas ni ningún otro cártel desean el fracaso del estado de derecho en México. Al contrario, están ansiosos de llevar a cabo sus actividades con total impunidad; esto es, establecer un gobierno paralelo junto con rutas clave para el trasiego de drogas”.

Es más: los autores afirman que “dicha soberanía compartida ya existe en regiones como Tierra Caliente y el Triángulo Dorado (conformado por Chihuahua, Sinaloa y Durango), en Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, así como en sectores del norte del país como Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo”.

A Los Zetas les atribuyen gran parte de los secuestros y otros delitos que ocurren en los territorios donde operan, así como actividades de lavado de dinero. Hoy, subrayan, los sicarios y dirigentes de ese cártel son los más temidos del hemisferio. “Es difícil persuadir a cualquier persona en México, Estados Unidos o Centroamérica para que hable sobre Los Zetas de manera abierta y franca”.

En 257 páginas Grayson y Logan no sólo indagan sobre la “zetanización de México”; también hacen un balance de la estrategia de Calderón para combatir a ese grupo y a sus organizaciones rivales: los cárteles del Golfo, de Sinaloa, Los Caballeros Templarios y La Familia Michoacana, e incluso rastrean su expansión a otros países, incluido Estados Unidos.

Los académicos ubican 1999 como el año en que se conformó ese grupo como brazo armado de Cártel del Golfo, liderado entonces por Osiel Cárdenas Guillén. Temerario y desconfiado, el capo contrató a

Arturo Guzmán Decena (Z-1), un exmilitar mexicano de élite, para crear un escuadrón de sicarios que garantizara su seguridad personal y eliminara o neutralizara a sus enemigos en Tamaulipas.

En El verdugo de hombres, Grayson quien imparte la materia de gobierno en la Universidad de William and Mary, en el estado de Virginia, y Logan, un investigador especializado en temas de seguridad y crimen organizado, ofrecen un panorama aterrador del ambiente de inseguridad que priva en México. Ambos observan que la violencia generada por el trasiego de las drogas se exacerbó a raíz de la guerra militarizada que desató Calderón contra los grupos del narcotráfico, y también por la disputa entre las bandas criminales por el dominio de rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

### **Los reacomodos**

Para su investigación, Grayson y Logan consultaron reportajes publicados en medios de comunicación mexicanos, incluido Proceso, estadounidenses y centroamericanos, así como análisis gubernamentales y expedientes de testigos protegidos, para conocer la pirámide de poder del cártel y los nombres de sus dirigentes.

Según la edición que Transaction Publishers adelantó a Proceso, tras la muerte del Z-1 el 21 de noviembre de 2002, la dirigencia se concentró en Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Verdugo, y Miguel Ángel Treviño Morales, El 40. Luego vienen 16 integrantes más, algunos identificados sólo por sus apodos. Ellos son los jefes de plaza.

La región norte, concentrada en Monterrey y Saltillo, es controlada por Francisco El Quemado Medina Mejía y Omar Treviño Morales, El 42, hermano de El 40. Piedras Negras y Nogales son custodiados por Raúl El Lucky Hernández Lechuga. La región del noroeste, en Tamaulipas, es territorio de Salvador Alfonso Martínez Escobar, La Ardilla; de Jorge López, El Chuta; de Gustavo González Castro, El Erótico, y de Alberto José González Xalate, El Paisa.

En Durango el lugarteniente de El Lazca y El 40 es José Luis Sarabia, El Pepito 1; en Zacatecas el líder zeta es Iván Velázquez Caballero, El Talibán; en San Luis Potosí, una persona identificada como Alemán; en el Estado de México, Emilio Chamorro Almazán, El TJ o El Tejón”; en Guerrero, Víctor Nazario Castrejón Pena; en Chiapas, El Comandante Lobo, y en Guatemala, El Z-200y Carlos Guízar.

Dicen Grayson y Logan: Los continuos cambios en la estructura original de la organización sobre la asignación de operaciones impiden a las autoridades “identificar a los criminales que están a cargo de una plaza, ciudad o estado, lo que complica los planes para rastrear, emboscar y capturar a jefes de medio pelo”.

En México, la ola de crímenes que se asocian o atribuyen a Los Zetas no necesariamente los cometen sus sicarios. Muchos corren a cargo de simples delincuentes que se hacen pasar por integrantes de ese cártel para infundir miedo a la población.

“Algunos zetas que son jefes de plaza dejan en paz a las familias después de que cooperan o pagan el monto del rescate o de la extorsión que han exigido por la libertad de secuestrados. En contraste, los zetas falsos repiten la extorsión contra la familia o negocio afectado”, escriben los autores.

Y acotan a renglón seguido: “Los Zetas genuinos llevan a cabo venganzas muy rápidas contra sus imitadores”.

La presunta alianza entre los cárteles del Golfo, Sinaloa y La Familia Michoacana para eliminar a Los Zetas, que desde 2010 se transformó en organismo independiente, es tema recurrente a lo largo de los 12 capítulos de *El verdugo de hombres*.

“Los Zetas es el único cártel del narcotráfico mexicano que tiene un importante componente femenino: Las Panteras, cuya estructura se concentra en el estado de Nuevo León, aunque tienen representación en otras áreas del país,

“Las Panteras son mujeres habilidosas que se encargan de negociar los acuerdos con los policías, políticos y oficiales militares u otros que pueden apoyar a Los Zetas en sus objetivos. Si no resulta el acuerdo, una pantera puede matar a su interlocutor”, indican Grayson y Logan.

Dicen también que, como toda organización criminal, Los Zetas tienen personal dedicado al manejo del dinero que les deja la diversidad de sus actividades criminales, en particular el trasiego y venta de droga en Estados Unidos.

“El encargado de las finanzas de Los Zetas es El Comandante Sol, de quien se desconoce su verdadera identidad. Él es quien maneja los fondos de Los Zetas y se reporta directamente con El 40 y con su hermano Omar”, acota el libro.

### **Proyección hemisférica**

La organización del Lazca y El 40 se distingue también por su apoyo irrestricto a quienes se muestran identificados con ellos, pues nunca abandonan a sus compañeros caídos.

Los familiares de zetas asesinados o encarcelados reciben mil dólares cada dos semanas, señalan Grayson y Logan. Por lo que respecta a los desertores, añaden, los sicarios los persiguen hasta aniquilarlos, al tiempo que hostigan a sus familiares.

Para ingresar a las filas de Los Zetas, los aspirantes son sometidos a rigurosos entrenamientos en centros que incluso El Verdugo y El 40 han instalado en Estados Unidos.

“Presuntamente Los Zetas dirigen cursos de adiestramiento que usualmente duran seis meses. Los entrenamientos se realizan en campos ubicados al suroeste de Matamoros, frente a la ciudad fronteriza de Brownsville; al norte del aeropuerto de Nuevo Laredo, cerca de Abasolo, entre Matamoros y Ciudad Victoria; y en el rancho Las Amarillas, en las orillas del pueblo de China, cerca de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas”, destaca el libro.

También consigna que “el FBI reportó que una célula de Los Zetas tenía un rancho en un condado aislado en el estado de Texas donde entrenaba a su personal y neutralizaba a la competencia (por medio del asesinato y tortura)”. Entre los “instructores” se encuentran Luis Alberto, Z-5, y el teniente Carlos Hau Castañeda, según el relato de un testigo protegido que se incluye en el libro de Grayson y Logan.

Dos de esos centros de adiestramiento zetas ubicados en Tamaulipas tienen incluso pistas de aterrizaje, anotan los autores de *El verdugo de hombres*, y explican que los ingresos por actividades ilícitas son divididos porcentualmente.

Analistas que hablaron off the record para la integración del trabajo, Grayson y Logan indican que el tráfico de cocaína constituye 50% de los ingresos de Los Zetas; de 10 a 15%, el tráfico de

metanfetaminas y heroína; otro tanto las extorsiones; 5% el tráfico de indocumentados y contrabando, y entre 10 y 15%, otras actividades.

Los dos investigadores dedican un importante espacio de su obra a destacar la presencia y dominio de Los Zetas en Honduras, El Salvador y Guatemala. Revelan también una alianza trasatlántica de El Verdugo y El 40, según los reportes de diversos medios de comunicación de México y América Central.

“Nicola Gratteri, el jefe de las operaciones antinarcóticos del gobierno de Italia sostiene que en los últimos dos años Los Zetas han colaborado con la mafia de Calabria, con la ‘N’drangheta’.

“Esta relación se estableció en razón del bajo costo de la cocaína que ofrecen Los Zetas y el Cártel del Golfo a los consumidores de Italia. Los narcotraficantes mexicanos venden el kilo a 25 mil dólares y los italianos la venden a sus clientes europeos a 45 mil dólares el kilo”, casi al doble, explica el libro.

Las operaciones de tráfico de droga y de inmigrantes, secuestros y piratería de Los Zetas se sustentan en la compra de funcionarios públicos locales, según se desprende de El verdugo de hombres.

Con base en las declaraciones de un testigo protegido, Grayson y Logan afirman que “un presidente municipal que trabaja para La Familia Michoacana y al mismo tiempo pasa información a Los Zetas recibe un salario mensual de unos 15 mil dólares”.

También afirman que integrantes de esa organización son especialmente sádicos, y describen sus métodos para levantar, torturar, asesinar y eliminar los cuerpos de sus víctimas.

### **Dentro de Estados Unidos.**

En Estados Unidos, Los Zetas cuentan con una red de colaboradores. Grayson y Logan aluden al proceso judicial de James Bostic, un narcotraficante confeso que compró cocaína a Los Zetas de 2005 al 2 de febrero de 2010 para traficar. En su declaración, Bostic aseguró haber pagado 589 mil dólares a un distribuidor de drogas de Los Zetas en un hotel en White Marsh, Maryland.

Desde mediados de 2007, investigadores federales admitieron que los narcos de esa organización tenían actividad en Tennessee y Oklahoma, donde también realizaban secuestros y extorsionaban a los ciudadanos. En Atlanta incluso negociaron con el grupo de Los Tolles para operar en esa ciudad y tener a su disposición las rutas del trasiego de narcóticos que llega a Chicago.

Al año siguiente llegaron a Memphis y dominaban los corredores de droga que cruzan Texas, en particular las ciudades de Dallas y Houston. En octubre de 2008 el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) emitió un boletín de inteligencia en el cual asentó que el alcance y presencia de Los Zetas se había extendido al suroeste y medioeste de Estados Unidos.

Asimismo, dicen Grayson y Logan, por medio de informantes y de un integrante de la pandilla Pistoleros Latinos, agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza confirmaron que Los Zetas contrataron a pandilleros locales para que protegieran los cargamentos de droga en territorio estadounidense y perpetraran asesinatos o secuestros.

Las conclusiones de Grayson y Logan sobre el problema que representan Los Zetas para México y la región son alarmantes. Y su dictamen en torno de la estrategia militarizada de Calderón para contener al narcotráfico es devastador:

“El gobierno de México asesta golpes solamente contra individuos del crimen organizado o grupos pequeños, pero tiende a concentrarse en atrapar a uno por uno de los capos. Esta estrategia hace que aumente la violencia porque los subalternos, quienes son menos habilidosos que sus jefes destronados, buscan remplazar al capo y otros cárteles sacan provecho del grupo decapitado. “(...) Su relación con la organización de los Beltrán Leyva permitió la expansión de Los Zetas en Monterrey y Zacatecas, y posiblemente los relaciona con La Línea –el grupo de sicarios del Cártel de Juárez– que les abrió las puertas de esa ciudad”.

Advierten también que, de acuerdo con reportes de inteligencia, La Línea se encarga de las operaciones del debilitado Cártel de Juárez. Ante el posible retiro de Vicente Carrillo Fuentes y el arresto de sus socios, puntualizan, esta despiadada pandilla podría unirse a la causa común de Los Zetas por medio del intercambio de tácticas de apoyo y permitiendo que tengan acceso al lucrativo corredor de Juárez.

“Si se materializa su supuesta alianza con La Línea –insisten–, Los Zetas se beneficiarán de los servicios y experiencia de expolicías en la región Ciudad Juárez-El Paso, en lugar de depender de las labores de criminales neófitos.”

Juan Alberto Cedillo. “Migrantes, los más vulnerables”. *Proceso* número 1855, 20 mayo 2012. pp 33-34.

### **“Migrantes, los más vulnerables”**

Los responsables de los refugios católicos de la frontera norte de México alertan sobre la posibilidad de que los migrantes de Centroamérica, “la población más vulnerable”, sigan siendo víctimas de los cárteles de la droga. El encargado de un albergue de la capital de Coahuila señala que hay indicios de que entre los 49 ejecutados en Cadereyta el domingo 13 haya indocumentados de esa región.

SALTILLO, COAH. -“¡Un cuerpo pa’ cá, pa’ la lona!”, gritaba mientras grababa la escena la madrugada del domingo 13 en el kilómetro 47 de la carretera libre Monterrey-Reynosa. “¡Ahí mero, ahí mero...!”, ordenaba.

En la negrura de la noche apenas se distinguía el camión de carga. Un grupo de presuntos zetas comenzó a bajar los cuerpos mutilados a la voz de su jefe. Tenían los zapatos cubiertos con bolsas de plástico y empujaban los cadáveres con un azadón para tirarlos a la entrada del ejido San Juan de Cadereyta, municipio considerado la “cuna del beisbol”.

“Los demás en filita, en filita todos... No se ve muy bien el video... No hay pedo, no hay pedo. No se está grabando bien; está muy oscuro”, repetía el hombre. Días después el video fue subido a YouTube, donde sólo estuvo algunas horas. Las suficientes para que los usuarios de internet observaran los 49 cadáveres mutilados, entre ellos los de seis mujeres. Sus ejecutores les habían cortado la cabeza, los brazos y las piernas, así como el pedazo de piel donde tenían tatuados su nombre o apellido para ocultar

su identidad. Once tenían tatuajes de la Santa Muerte; uno, de la Virgen de Guadalupe, otros, sólo dibujos.

Poco antes de terminar su faena, los presuntos zetas colocaron una manta con un mensaje: “Esto les va a pasar a todos los Golfos, Chapos, Marinos, Huachos y Gobiernos. Nadie nos va a poder hacer nada, se la van a pelar.

Atte: Loco, Z40 y Comandante Lazcano”.

Luego pintaron en uno de los pedestales del arco que anuncia la entrada al ejido San Juan: “Z 100%”.

Al informar sobre las ejecuciones, Jorge Domene Zambrano, portavoz del Consejo de Seguridad de Nuevo León, dijo que los asesinos hicieron todo lo posible “para complicar la identificación de todas esas personas”. Ese hecho despertó la sospecha entre las autoridades, quienes incluso manejaron la hipótesis de que pudiera tratarse de migrantes.

Los indocumentados que transitan a lo largo de la República Mexicana “son las víctimas más vulnerables”, aseguran sacerdotes que albergan a ciudadanos centroamericanos en los refugios ubicados a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

“Estamos muy preocupados, ya que tenemos la presunción de que entre las víctimas de Cadereyta podría haber migrantes. Estamos recibiendo muchas llamadas de El Salvador y de Honduras que preguntan sobre sus familiares desaparecidos”, dice a Proceso el jesuita Pedro Pantoja Arreola, quien dirige la posada del migrante Belén en esta capital.

Recién galardonado con el premio internacional de derechos humanos Letelier-Moffitt del Institute for Policy Studies de Washington D.C., por su trabajo en defensa de los centroamericanos, Pantoja dice tener indicios sobre una ejecución en Nuevo Laredo por sicarios de Los Zetas que pretendieron hacer pasar a la víctima como miembro de un cártel rival. Habla también de las nueve personas que aparecieron colgadas en un puente de la misma ciudad fronteriza el viernes 4 de mayo: “Tenemos la firme sospecha de que uno de los cuerpos era el de un migrante que pasó por nuestra casa. Era de raza negra”. Y subraya: “Quizá se involucró con la delincuencia organizada”.

### **Dudas e indicios**

Los forenses lograron reconstruir el apellido Pavón en el cuerpo de uno de los 49 ejecutados en Cadereyta, muy común en Honduras. “Esto quiere decir que estos acontecimientos (los multihomicidios) se pueden reproducir contra los compañeros migrantes”, asegura Pedro Pantoja.

Su colega Gianantonio Baggio, responsable del refugio Nazaret de Nuevo Laredo, asegura que recibe de tres a cuatro llamadas de familiares de personas desaparecidas cada. El religioso de origen italiano comenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documenta por lo menos 306 migrantes reportados por sus familiares como desaparecidos: 262 hondureños, 33 guatemaltecos, siete ecuatorianos, dos salvadoreños, un nicaragüense y un colombiano.

“Algunos de esos migrantes ahora son miembros de la delincuencia organizada”, admite Baggio, cuyo refugio atiende en promedio a 80 centroamericanos por día. Aclara también que en los últimos meses ha sido invadido por indocumentados mexicanos deportados.

“Tenemos reportes de que algunos que han pasado por nuestro refugio han sido vistos trabajando para la delincuencia organizada como halcones. Los sicarios los presionan, amenazan o los convencen ofreciéndoles mucho dinero o pasarlos a Estados Unidos. Muchos de los que han logrado introducirse de manera ilegal a territorio estadounidense ahora están metidos en el trasiego de drogas”, dice el entrevistado. Algunos de ellos podrían estar entre los muertos de Cadereyta.

Por lo que atañe a Reynosa y Matamoros, la cuna del Cártel del Golfo, la migra estadounidense escoge un mes específico para deportar a cientos de mexicanos ilegales, quienes inundan el albergue local, lo que obligó a sus responsables a multiplicar sus recursos para darles techo, comida, e incluso pagarles el boleto para que regresen a sus ciudades de origen y evitar que sean reclutados por el crimen organizado. Suplen con ello una actividad que, por ley, corresponde a las instituciones locales, municipales y federales. Y lo hacen, según Francisco Gallardo, el religioso que dirige el albergue matamorenses, porque “el secuestro de migrantes es muy fuerte”. Dice que sólo la semana pasada denunció ante la CNDH que hombres armados bajaron a dos migrantes del tren que va de Reynosa a Matamoros.

La disputa de los cárteles de Sinaloa y del Golfo contra Los Zetas se agudizó desde principios de abril. Hoy, los enfrentamientos entre sicarios se dan lo mismo en Choix, Sinaloa, que en territorio de Jalisco y en la región lagunera. El 17 de abril fueron abandonados 14 cuerpos en una camioneta. Estaban desmembrados y los cubría una manta con la leyenda: “El Chapo Guzmán anuncia su llegada para limpiar de zetas Nuevo Laredo”. El viernes 4, los aludidos respondieron colgando a cinco hombres y cuatro mujeres que denominaron “golfas”. Por la tarde, El Chapo abandonó otros 14 cuerpos con un mensaje dirigido al alcalde Benjamín Galván Gómez.

Los ajustes continuaron el miércoles 9 en Jalisco, donde sicarios de Los Zetas abandonaron 18 cuerpos descuartizados en dos vehículos en Ixtlahuacán de los Membrillos. Y el domingo 13 aparecieron los 49 cuerpos en Cadereyta, acción perpetrada por supuestos zetas, quienes días después colocaron mantas en San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León para deslindarse.

Los pistoleros de esa organización sólo admitieron su autoría en el caso Jalisco, donde incluso ya hay por lo menos seis detenidos implicados en el multihomicidio; también dijeron que hicieron pasar a estudiantes y a ciudadanos como miembros de un cártel rival.

### **El peligro que viene**

Pedro Pantoja, responsable de la posada Belén, con sede en la capital coahuilense, teme que las ejecuciones de migrantes se eleven, sobre todo porque en fechas recientes el flujo de indocumentados se disparó notablemente a causa de la explotación, abandono y pobreza en Centroamérica. Es posible que las bandas criminales intenten presentarlos como miembros de algún cártel, advierte el religioso, cuyo refugio registra entre 200 y 250 personas por día. Desde agosto de 2010, cuando se descubrieron los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, el número de migrantes en los refugios controlados por religiosos católicos se había reducido a lo sumo a 80 por día.

“Nunca habíamos tenido un flujo tan abundante. Una de las cosas que nos comentan los mismos compañeros migrantes, aunque ellos no manejan una visión política, es que continúan las dolorosas secuelas del pasado golpe de Estado en Honduras”, comenta Pantoja.

En ese país centroamericano la violencia provoca que mujeres y gays opten por trasladarse a Estados Unidos, algunos de ellos han llegado a nuestros refugios, dice: “Se ha incrementado la violencia y por consecuencia se agudizó la pobreza. Esa situación se está reflejando en la migración y ahora son muchas mujeres las que están saliendo. En nuestras casas teníamos en promedio una o dos mujeres por mes; ahora nos llegan 10 en un solo día”.

Pantoja y los demás religiosos entrevistados aclaran que no todos los migrantes pasan por sus refugios, lo que es todavía más grave, pues muchos se valen de sus propios recursos y son incluso más vulnerables. Lo único cierto, resume Pantoja, es que “todo el noreste está lleno de cuerpos de migrantes”.

Jorge Carrasco Araizaga. “Los amigos de Los Zetas en Veracruz”. *Proceso* número 1859, 17 junio 2012. pp 20-24. <https://www.proceso.com.mx/311142/los-amigos-de-los-zetas-en-veracruz>

### **“Los amigos de Los Zetas en Veracruz”**

La detención, la semana pasada, de una red de operadores de Los Zetas en Estados Unidos, entre ellos Francisco Antonio Colorado Cessa, puso al descubierto los tentáculos del cártel en Veracruz, donde se asentó durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán y corrompió a políticos de todo signo. Las primeras indagatorias implican no sólo al exmandatario priista por su cercanía con Pancho Colorado, sino también al PAN y aun al PRD. De acuerdo con declaraciones de funcionarios federales a Proceso, Los Zetas tienen entre 2 mil y 3 mil miembros en ese estado.

La desarticulación de una red de lavado de dinero del cártel de Los Zetas en Estados Unidos vino a constatar que la delgada línea entre política y narcotráfico en Veracruz alcanza lo mismo al PRI que al PAN.

Las investigaciones de la justicia estadounidense contra el número dos de esa organización delictiva y jefe del grupo en el estado, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, afectaron en un primer momento al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, pero pronto alcanzaron al PAN y a su candidata presidencial, Josefina Vázquez Mota.

La justicia estadounidense tiene encausadas en diferentes cortes federales a 35 personas que han sido investigadas desde que Herrera Beltrán era gobernador por la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Federal Bureau of Investigation (FBI) por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero entre Veracruz, Tamaulipas y Estados Unidos.

La detención el martes 13, en Oklahoma, del hermano del Z40, José Treviño Morales, colocó de nueva cuenta al exgobernador en el centro de atención. Ese día, la justicia estadounidense hizo pública la acusación contra 15 personas como presuntas responsables de lavar dinero para Los Zetas mediante empresas dedicadas a la crianza de caballos pura sangre y las apuestas en carreras de caballos.

Entre los inculpados, como intermediario en la compra de caballos, está el contratista de Pemex de la zona de Tuxpan Francisco Antonio Colorado Cessa, quien ha sido beneficiario tanto por el PRI como por las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón.

La acusación apenas se formalizó el pasado 30 de mayo ante la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, en la ciudad de Austin, mientras que, el lunes 11, el FBI declaró ante la Corte Federal del Distrito Norte del mismo estado, en la ciudad de Balch Springs, del condado de Dallas, para detallar la manera en que operó esa red de zetas para blanquear por lo menos 20 millones de dólares a través de la compra de ranchos en Oklahoma y unos 400 ejemplares de caballos.

Los otros 20 implicados aparecen en la primera acusación del Departamento de Justicia ante una Corte Federal. En septiembre de 2009, la fiscalía federal se presentó ante la Corte del Distrito de Columbia para acusar al Z40 y a otras 19 personas de traficar cocaína y dinero entre México y Estados Unidos a través de una organización que se llamó La Compañía (Proceso 1736).

Ese grupo delictivo estuvo integrado por gente de Los Zetas y del Cártel del Golfo, y operó en Tamaulipas y Veracruz entre 2006 y ese año, gobernados entonces por Eugenio Hernández Flores y Fidel Herrera Beltrán, ambos del PRI.

La investigación más reciente, dada a conocer por el diario The New York Times en su edición del martes 12, reabrió varios episodios en los que políticos del PRI y del PAN de Veracruz aparecen vinculados a Los Zetas, grupo que se asentó en el estado cuando aún formaba parte del Cártel del Golfo y que, de acuerdo con declaraciones de funcionarios federales a Proceso, tiene entre 2 mil y 3 mil miembros en el estado.

Al dar a conocer la desarticulación de la célula del lavado de dinero en Estados Unidos, el periódico Reforma publicó el miércoles 13 una foto en la que Fidel Herrera y Francisco Colorado Cessa aparecen montados a caballo en una cabalgata en Ozuluama realizada en 2006, cuando el primero era gobernador.

El excandidato del PAN a gobernador de Veracruz y director del ISSSTE al inicio del gobierno de Felipe Calderón, Miguel Ángel Yunes Linares, salió de inmediato a reiterar sus acusaciones sobre el incremento del narcotráfico bajo el gobierno de Fidel Herrera.

Pero soslayó que, junto con Josefina Vázquez Mota y representantes del panismo estatal y federal, él mismo fue activo promotor de la candidatura del hermano de Pancho Colorado: Miguel Ángel Colorado Cessa, como diputado federal por el distrito V de Veracruz en las elecciones de 2009 y que en 2007 había contendido por la presidencia municipal de Poza Rica como candidato del PRD.

#### Los promotores de Ángel Colorado

En 2009, en plena campaña electoral intermedia para renovar la Cámara de Diputados, Vázquez Mota viajó a Poza Rica para apoyar al hermano del ahora contratista detenido en Houston.

Candidata ella misma en ese entonces al Congreso federal, Vázquez Mota participó en concentraciones y entrevistas para favorecer esa postulación. “Miguel Colorado será un diputado porque el presidente lo necesita en el Congreso para luchar juntos contra el narcotráfico y contra la delincuencia”, dijo la panista en una concentración en el municipio de Tihuatlán, ubicado entre Tuxpan y Poza Rica.

En el mitin estuvieron el entonces secretario general del PAN en Veracruz, Hermann Ortega, actual candidato a diputado federal de representación proporcional, el entonces diputado federal Antonio del Valle y su suplente y exdiputado local Daniel Vázquez García, quien ahora trabaja en el equipo de la candidata presidencial de Vázquez Mota.

Asistió además el ahora senador y también candidato a diputado plurinominal Juan Bueno Torio, director general de Pemex Refinación entre 2003 y 2006, en la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox. Durante ese periodo, la empresa de Pancho Colorado ADT Petroservicios firmó dos contratos con Pemex Refinación por 231 millones de pesos.

Fue el comienzo de una fructífera relación de ADT Petroservicios con Pemex y de paso con el gobierno de Veracruz. Juntos, entre 2005 y 2011 le adjudicaron de forma directa contratos por 2 mil 312 millones de pesos, de acuerdo con información oficial publicada en la página de Compranet, de Pemex y del gobierno del estado.

El interés del PAN por tener a Colorado Cessa en su bancada de San Lázaro era más que manifiesto. Otro de sus promotores fue el exalcalde del puerto de Veracruz, funcionario de Calderón en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y actual candidato a senador, Julen Rementería del Puerto.

El mitin de Tihuatlán no fue el único acto de Vázquez Mota a favor de Colorado. En una entrevista en el Canal 12 de Poza Rica, para el programa Zona Crítica de la periodista Evelyn Hernández, la candidata insistió: “Me trae (a Poza Rica) un hombre del que estamos muy orgullosos en Acción Nacional y a quien queremos que venga al Congreso de la Unión a apoyar al presidente Felipe Calderón... (Es) un candidato de origen ciudadano, trabajador, honesto, con una familia a la que también le agradecemos su esfuerzo...”.

Y agregó en alusión a la actividad de Miguel Ángel Colorado como Notario Público: “Tenemos la certeza de que nuestro candidato no solamente tiene una trayectoria de honorabilidad y trabajo, sino que ejerce una de las posiciones de mayor credibilidad y confianza para los ciudadanos en el país”.

La patente de notario le fue expedida por Fidel Herrera al inicio de su gobierno, en septiembre de 2005. La notaría está adscrita a la séptima demarcación notarial con sede en Poza Rica y su anuncio en la Gaceta Oficial se publicó el 5 de octubre de ese año. La atención del gobierno no le valió que se quedara en el PRI.

Una deferencia más del gobierno de Herrera con Miguel Ángel Colorado fue la incorporación de su esposa, Maribel Palomares, al patronato del DIF que presidía la esposa del entonces gobernador, Rosa Borunda.

Yunes, enemigo declarado de Fidel Herrera y frustrado candidato del PAN al gobierno de Veracruz en 2010, también fue un entusiasta promotor de Miguel Ángel Colorado: “Si yo viviera en Poza Rica, votaría por Miguel Colorado y Daniel Vázquez”, dijo el exdirector del ISSSTE en un acto proselitista realizado en esa ciudad el 7 de junio de 2009.

Tres semanas después, 30 de junio, en varios puentes peatonales de Poza Rica aparecieron narcomantas a favor del candidato panista dirigidas a Calderón. Una de ellas decía: “Sr Narco presidente Felipe Calderón, nosotros también tenemos derecho a participar en la política al igual que La Familia Michoacana. Nosotros hemos apoyado a los candidatos de su partido, en memoria de Efraín Teodoro Torres 14, apoyamos con todo a Miguel Colorado Cessa. Priistas del distrito, absténgase de votar contra el candidato del pueblo o lo pagarán”.

Efraín Teodoro Torres, el Z14 murió en un enfrentamiento en Villarín, en las afueras del puerto de Veracruz, en marzo 2007 durante una carrera de caballos cuarto de milla, el mismo tipo de ejemplares

con el que Los Zetas lavaban dinero en Oklahoma. En esa carrera, de acuerdo con Yunes Linares, estaba Pancho Colorado. Fue el inicio de la violencia desatada en Veracruz.

Además de las narcomantas contra el hermano del ahora detenido en Houston, Texas, se distribuyeron fotos con fondo azul y blanco con una fotografía del propio Miguel Ángel Colorado junto con imágenes de viejos narcotraficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan García Ábrego y Héctor El Güero Palma.

Además, el entonces dirigente del PRI en Veracruz, Jorge Carvalho Delfín, también lo acusó de estar vinculado con la delincuencia organizada.

### **Los vínculos**

La relación de la ahora candidata presidencial del PAN con los hermanos Colorado Cessa no acabó ahí, pese a la derrota del candidato a diputado federal, que ocurrió con todo y el anuncio de la propia Vázquez Mota de que las encuestas lo señalaban como ganador. Ya como diputada federal, utilizó al menos en dos ocasiones aviones propiedad de Pancho Colorado.

El vocero de la aspirante presidencial, Juan Ignacio Zavala, salió al paso del señalamiento del presidente del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, sobre la utilización de aviones de Pancho Colorado por parte de Vázquez Mota. En conferencia de prensa, el cuñado de Calderón aseguró que se trataba “de información del año 2010”.

Precisó: “Fueron traslados gestionados no por la oficina de la entonces diputada Vázquez Mota, sino por un diputado de Veracruz, Miguel Martín, que incluso renunció a la diputación del PAN hace unos meses para incorporarse al gobierno de Javier Duarte”.

Miguel Martín López, en efecto, llegó a la actual LXI Legislatura como diputado federal del PAN por el Distrito III de Tuxpan. Apenas en abril pasado, solicitó licencia para incorporarse al gobierno de Duarte a la Dirección General de Organizaciones y Partidos Políticos. Su jefe en la secretaría de Gobierno es el expanista Gerardo Buganza Salmerón.

El nombre de Erick Lagos Hernández, actual presidente del PRI en el estado, también ha salido en las investigaciones en torno a los vínculos de la política con la delincuencia organizada. Exdiputado local, secretario particular de Herrera Beltrán y primer subsecretario de Gobierno de Duarte, fue mencionado luego de que el periódico Reforma publicó el pasado 20 de mayo parte de las declaraciones de Raúl Lucio Hernández, El Lucky.

Jefe de Los Zetas en Córdoba, El Lucky fue detenido en diciembre pasado por la Marina. En su declaración ante efectivos de la Armada aseguró que un alto funcionario de Veracruz “de apellido Lagos” apoyaba a la organización delictiva en el estado para el robo de hidrocarburos.

Erick Lagos, quien enero pasado renunció a la subsecretaría de Gobierno, negó mediante un desplegado cualquier relación de ese tipo.

“Son supuestos hechos que me son ajenos y en los que niego categóricamente cualquier participación. Se menciona mi nombre en el marco de un testimonio, en los que niego cualquier participación”, aseveró Lagos en su escrito publicado el 21 de mayo.

Otro vínculo de los hermanos Colorado con la clase política de Veracruz es a través de uno de los hombres más cercanos al gobernador Javier Duarte: el presidente municipal de Tuxpan, Alberto Silva Ramos. Su hermano Francisco es apoderado legal de ADT, según publicó este semanario en su edición 1814 de agosto pasado.

En los contratos con Pemex Refinación aparece como representante legal de la empresa. El primer contrato que tuvo con la paraestatal durante la gestión de Bueno Torio está fechado el 29 de mayo de 2005, para la limpieza y recuperación de material en los márgenes del río Coatzacoalcos en el municipio veracruzano de Nanchital, porque en esa zona se habían vertido 5 mil barriles de crudo. El segundo contrato fue para tapar tuberías en el municipio de Ixtaczoquitlán.

En 2006, cuando Fidel Herrera estaba en su segundo año de gobierno, la compañía ganó cuatro licitaciones con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca de Veracruz (Sedarpa) por 3.2 millones de pesos para perforación de pozos profundos para uso agrícola.

La cantidad más jugosa de licitaciones las ganó con la Región Norte de Pemex Exploración y Producción (PEP), que entre 2007 y 2011 le adjudicó 13 licitaciones por un total de 2 mil 77 millones de pesos por obras en el Activo Integral Poza Rica-Altamira.

Los contratos y los fallos de las licitaciones de estas obras aparecieron firmados por Noé Zuarth Corzo en calidad de subgerente de Recursos Materiales de la Región Norte de PEP.

Los últimos cuatro fallos de licitaciones por 327.8 millones, obtenidos en menos de un mes entre julio y agosto del año pasado, quedaron bajo la inhabilitación que impuso el 19 de agosto de 2011 la Secretaría de la Función Pública a ADT Petroservicios por haber presentado información falsa en el contrato de 2005 para limpieza del río Coatzacoalcos.

La sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública fue de un año y seis meses, que vencerá el 20 de febrero de 2013, más una multa por 448 mil 780 pesos. La empresa promovió un amparo contra la inhabilitación, pero en febrero de este año le fue negado.

En total, entre 2005 y 2011 la empresa ganó licitaciones o le fueron adjudicados directamente contratos con el gobierno federal y veracruzano por 2 mil 312 millones de pesos.

Mucho antes de que el New York Times diera a conocer la investigación de la justicia estadounidense en contra de Los Zetas que operan en Veracruz y Tamaulipas, se habían registrado en el estado asesinatos y detenciones de políticos del PAN. En noviembre de 2010 fue asesinado Gregorio Barradas Miravete, presidente municipal electo de Juan Rodríguez Clara, al sur del estado en la frontera con Oaxaca, y quien había sido diputado federal en la LX Legislatura.

En abril pasado, el Ejército detuvo en un enfrentamiento con una célula de Los Zetas a Martín Padua Zúñiga, presidente municipal de Chinameca, y que según el PAN había ganado la elección como “candidato ciudadano”.

El 31 de mayo pasado, el Congreso de Veracruz aprobó la revocación de mandato del alcalde panista de Las Minas, Mauricio Herrera Fernández, detenido el pasado 12 de marzo en la carretera federal Puebla-Veracruz, en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y de psicotrópicos.

Eduardo Guerrero Gutiérrez. “El nuevo cuarto poder”. *Proceso* número 1866, 5 agosto 2012. pp 26-27. <https://www.proceso.com.mx/316072/el-nuevo-cuarto-poder>

### “El nuevo cuarto poder”

En julio aumentaron los ataques a instalaciones de medios de comunicación en Monterrey. El diario El Norte fue objeto de tres ataques y otra víctima fue Dipsa (la empresa que distribuye, entre otras, la revista Proceso). Estos eventos ocurren en un contexto de agresiones contra los principales medios impresos del noreste del país: El Norte ya había sido blanco de agresiones en por lo menos tres ocasiones desde 2010; El Mañana de Nuevo Laredo ha sido atacado en dos ocasiones durante este año, y en noviembre de 2011 la fachada de El Siglo de Torreón fue rafagueada e incendiada la de El Buen Tono, en Veracruz. Otro dato relevante: de las 12 ejecuciones de periodistas que se registraron durante el último año, ocho fueron en Veracruz. Un rasgo común de la geografía de esas agresiones es que han ocurrido en lugares donde Los Zetas tienen una presencia preponderante.

¿Por qué Los Zetas habrían de emprender una campaña de agresión sistemática contra los medios de comunicación? Durante el último año Los Zetas han enfrentado una serie de presiones externas. El gobierno federal ha realizado operativos dirigidos a reducir su capacidad operativa, lo que ha propiciado la captura o muerte de al menos 13 de sus líderes. El Cártel de Sinaloa ha capitalizado la vulnerabilidad que generan esos operativos y ha llevado a cabo incursiones con el propósito de extender su presencia a espacios donde operan Los Zetas. Además, el pasado 11 de junio fue aprehendido en Estados Unidos José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel, El Z-40, así como otros miembros de la organización.

Estas presiones han generado tensiones y propiciado una crisis de confianza al interior de la cúpula zeta. Incluso existen rumores sobre su escisión. En esta coyuntura es prioritario para Los Zetas evitar la divulgación de información que tenga uno o más de los siguientes tres efectos: debilite la percepción pública de que son una organización unida y poderosa; exacerbe su reputación de grupo armado proclive a la violencia extrema e indiscriminada (aspecto explotado hábilmente por el Cártel de Sinaloa), o revele los nexos que mantiene con extensas redes de funcionarios gubernamentales para dar vida a redituables giros ilícitos. Sobre este último punto, Los Zetas son particularmente vulnerables a la divulgación de información sobre sus operaciones. A diferencia del Cártel de Sinaloa –que se enfoca en mayor medida al tráfico transnacional de drogas–, Los Zetas obtienen una parte sustancial de sus rentas de delitos en el ámbito doméstico, como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible, actividades que requieren en mayor medida la colusión de autoridades y de otros actores en sectores formales de la economía.

De aquí que las recientes agresiones en contra de El Norte y del distribuidor de Proceso en Monterrey formen parte de una estrategia para evitar que se difunda información contraria a los intereses de la organización. Los diarios de Grupo Reforma fueron los únicos en difundir la traducción de una nota que publicó el 13 de junio The New York Times, en la que se revelaban detalles sobre la extensa red de lavado de dinero que uno de sus líderes operaba en Estados Unidos. El Norte también reveló el 9 de julio pasado la existencia de una red de tráfico de placas vehiculares en Nuevo León (que presumiblemente generaba ganancias sustanciales a Los Zetas), y este mismo diario publica cotidianamente información puntual sobre incidencia delictiva y violencia en Monterrey. Por su parte, Proceso publicó el 19 de julio un artículo extenso sobre la presunta división de Los Zetas que reproduce las principales acusaciones de

traición contra uno de sus líderes principales. Además, el semanario publicó en mayo y junio una edición especial en dos volúmenes que reúne 44 artículos de fondo sobre Los Zetas.

En suma, mediante sus acciones violentas e intimidatorias, Los Zetas son (o están por convertirse en) el nuevo cuarto poder en varios estados del país.

Redacción. “La quema de *Proceso*”. *Proceso* número 1866, 5 agosto 2012. pp 28-29.

<https://www.proceso.com.mx/316075/316075-la-quema-de-proceso>

Entre los numerosos ataques incendiarios que han aquejado en días recientes a Monterrey hubo uno con una clara dedicatoria: en una distribuidora de publicaciones impresas los delincuentes quemaron un número especial de *Proceso* dedicado a Los Zetas. Mientras tanto, en las principales ciudades fronterizas de Tamaulipas, se aplicó la ya recurrente operación de compra masiva de ejemplares, para impedir que la revista llegue a sus lectores.

MONTERREY, NL. - Tres hombres que portaban armas largas se bajaron de una camioneta que estacionaron en la esquina de Arteaga y Serafín Peña, del primer cuadro de esta ciudad. La escena comenzó a ser grabada por cámaras de vigilancia. Uno más permaneció en el vehículo, que era escoltado desde otro auto que se detuvo a pocos metros. Eran casi las 10:30 del martes 31 de julio cuando llegaron a la empresa Distribuidora de Publicaciones (Dipsa).

“¡Tírense al suelo!”, fue el grito de advertencia a los casi 10 empleados que estaban ahí en ese momento y a quienes les quitaron relojes, celulares y carteras. Dos de los delincuentes se quedaron vigilándolos desde la entrada mientras uno más corrió al fondo de la bodega para preguntarle a otro trabajador dónde estaba “la caja registradora”. Se enojó al saber que ese negocio no maneja efectivo.

Posteriormente recogieron de la camioneta un garrafón con gasolina y la rociaron sobre un paquete con el número especial de *Proceso* titulado *Con Zeta de muerte*.

También echaron gasolina sobre paquetes y bultos de otras revistas. La primera llamarada los hizo salir corriendo. Antes de subir al vehículo uno de los delincuentes pintarrajeó la fachada del negocio. Todo quedó registrado por una cámara de seguridad en un video que ya fue entregado a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.

Este atentado se sumó a los ocurridos en días recientes contra empresas y medios de Monterrey. El domingo 29 de julio hubo un ataque a la edición (sucursal) Sierra Madre del periódico *El Norte* en el municipio de San Pedro Garza García, el de mayor ingreso per cápita de América Latina.

A las 18:04 horas hombres armados que viajaban en al menos cuatro vehículos rociaron de gasolina la recepción y le prendieron fuego, sin saber que en el fondo del lugar estaban trabajando unos 15 empleados.

Era el tercer ataque en menos de un mes contra sedes periféricas del diario del Grupo Reforma.

Alejandro Junco de la Vega González, director de *El Norte*, comentó a la cadena CNN que el periódico estaba amenazado y atribuyó los atentados a sus publicaciones donde se pone atención a los casinos y a las acciones de la delincuencia organizada.

Un día antes del atentado contra Dipsa, personal de esa distribuidora recibió una llamada de una empresa del mismo giro de Tamaulipas solicitándole los ejemplares del número 1865 de la revista *Proceso*, ya que un cliente suyo deseaba comprar todo el lote disponible. Los ejemplares del número cuyo titular principal era Fondos del PRI: la trama internacional, fueron comprados en su totalidad antes de su distribución en Nuevo Laredo y Reynosa. En Ciudad Victoria, Tampico y Matamoros esa edición circuló de manera normal.

En el mismo número también se publicó un reportaje sobre la situación de Tamaulipas: Desplazados de guerra y autodefensa. El texto describe los últimos acontecimientos en el municipio de Güémez, donde los constantes enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y Los Zetas orillaron a muchos de los pobladores a abandonar el lugar.

Debido a que pocos medios y agencias informan los constantes acontecimientos de violencia en el estado, las redes sociales reproducen por todos sus medios disponibles en internet los reportajes de *Proceso*.

Las redes ciudadanas también exigen al gobierno federal y al Congreso de la Unión que destituyan a todos los políticos corruptos y nombren una “junta militar” al frente del gobierno de Tamaulipas, para que regresen la seguridad y la paz.

Luciano Campos Garza, “Sicarios de prepa”. *Proceso* número 1871, 9 septiembre 2012. pp 40-42.  
<https://www.proceso.com.mx/319266/sicarios-de-prepa>

### **“Sicarios de prepa”**

Nuevo León prendió los focos rojos debido al aumento constante del número de menores de edad que prestan servicios al crimen organizado. Los Zetas y el Cártel del Golfo reclutan adolescentes para que cumplan funciones de vigilantes, vendedores, ladrones y hasta asesinos. Un especialista sostiene que las mafias han aprovechado la reforma al artículo 18 constitucional, que volvió inimputables a los muchachos, a fin de utilizarlos para sus actividades ilícitas.

MONTERREY, NL. - La Procuraduría General de Justicia de Nuevo León presentó el pasado 6 de agosto a un grupo de 20 halcones presuntamente al servicio de Los Zetas en el municipio de Sabinas Hidalgo; los lideraba un joven de 17 años identificado como Jesús Alejandro, El Sapo.

Junto a él fueron presentados Alan Guadalupe, de 16 años; Brayan Juninho, de 14 y Ricardo, de 17, capturados el 27 de julio.

No es el único caso reciente de menores de edad aprehendidos por actos delincuenciales o por estar al servicio del crimen organizado: Néstor Iván, El Capi, de 15 años, fue detenido el 1 de febrero de 2011 por comandar una banda que cometió por lo menos 20 robos a mano armada en el sur de la capital nuevoleonense.

Poco antes se presentó un hecho que implicaba a menores: un boletín de la Policía Federal informó el 4 de febrero de ese año que habían sido detenidos en la colonia Bosques del Country, en el municipio

conurbado de Guadalupe, los integrantes de una célula del crimen organizado que incluía a un niño de 15 años llamado Luis José y apodado Julio.

A escala nacional el caso que más impactó a la sociedad fue el de Édgar Jiménez Lugo, El Ponchis, de 14 años, arrestado en Cuernavaca y asesino confeso de al menos cuatro personas.

En entrevista con este corresponsal, Federico Requesens Ordaz, director de Atención Integral del Menor y la Familia del DIF de Nuevo León, considera que los menores se involucran en acciones delictivas en gran medida porque son invitados por mayores que saben que la nueva legislación los protege y los exime de castigos.

### **Cada día más**

La Procuraduría de Nuevo León ha desarticulado este año 89 bandas; de ellas 60 estaban relacionadas con la delincuencia organizada. Se encuentran presos 590 de sus integrantes, de los cuales 68 son menores de edad. De las otras 29 bandas han sido detenidos 163 miembros; 17 son menores.

En la entidad es larga la lista de casos delictivos en los que están implicados muchachos.

Un día antes de las elecciones del pasado 1 de julio fue asesinado el regidor del municipio de Benito Juárez, Tomás Betancourt Gaytán, coordinador local de la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

El 24 de julio el procurador general de Justicia del estado, Adrián de la Garza Santos, informó que había cinco detenidos por ese homicidio; pertenecen a Los Zetas y entre ellos hay un menor al que identificaron como Milton Gabino, El Poncho, de 17 años.

El 27 de junio la Agencia Estatal de Investigación (AEI) presentó a una banda de cuatro zetas dedicados al secuestro en la zona citrícola del sur de Monterrey. Entre ellos estaba José Manuel, de 16 años. Todos, según el vocero estatal de seguridad, Jorge Domene, eran sicarios.

El 13 de junio Domene había informado de la detención de 52 halcones que daban a la delincuencia organizada información sobre las acciones de las autoridades estatales y federales. Entre ellos había cinco menores de edad. Algunos trabajaban para Los Zetas; otros, para el Cártel del Golfo.

Tres jóvenes fueron detenidos por los asaltos a siete restaurantes en Monterrey y Guadalupe entre mayo y junio de este año; Domene aclaró que no estaban relacionados con la delincuencia organizada. Los muchachos fueron identificados como Juan Carlos, El Vagueta, de 15 años; Jassiel, de 16 y José Daniel, El Dany, de 17.

Siete jóvenes fueron capturados por el asalto a la preparatoria Centro de Estudios Regiomontanos el pasado 16 de mayo en Guadalupe. Ese día, a las 10:30 horas, asaltantes enmascarados sometieron a estudiantes y directivos del plantel y se llevaron dinero en efectivo y equipo de cómputo de la escuela.

Domene informó que entre los jóvenes estaban los hermanos Giovanni de Jesús, de 17 años, y Gerardo Gabriel, de 15, estudiantes de esa institución, que quedaron a disposición de la justicia para adolescentes de Nuevo León.

El 8 de mayo la AEI presentó un grupo de detenidos dedicados al narcomenudeo en Benito Juárez. Entre ellos había tres menores pertenecientes a Los Zetas.

El pasado 18 de abril la Agencia Estatal de Investigación había informado de la captura de una banda de 13 personas relacionadas con 21 homicidios y acusadas además de secuestro, robo de automóviles y narcomenudeo.

Siete de los detenidos son identificados como Morgan Jesús, Texas, de 17 años; Marco Antonio, El Guachillo, de 17; Juan Carlos, Pavalín, de 16; Karen Yanneth, La China, de 16, Esmeralda Samahid, Esme, de 16; Liliana, Emma, de 17 y Yaresy Lisset, La Chabela.

Entre el 16 y el 17 de febrero de este año el Ejército detuvo a 17 presuntos delincuentes en operativos de la Operación Noreste; entre los aprehendidos había cinco menores.

En Cadereyta fueron apresados cinco presuntos delincuentes, dos de ellos de 17 años: viajaban en un jeep robado y tenían dos paquetes de marihuana. En Salinas Victoria, 50 kilómetros al norte de Monterrey, se detuvo a tres halcones. Uno tiene 17 años.

### **Mayores perversos**

Federico Requenes considera que el aumento del número de niños y adolescentes en actividades delictivas corresponde a la perversión de criminales adultos que saben que los menores no son punibles según lo establecen modificaciones a la ley hechas en 2006.

“Hemos visto cómo el crimen organizado recluta más jovencitos y mucho tiene que ver esto en el sentido de la ley que cambió en cuestión de justicia de menores adolescentes, que ahora es garantista y ya no tutelar, como en el pasado. Gente perversa pudo aprovechar esta situación”, señala.

Una fuente de la Agencia del Ministerio Público de Justicia para Adolescentes, de la Procuraduría local, explica que en 2005 fue presentada una iniciativa para reformar el artículo 18 de la Constitución de la república, que fue aprobada en marzo de 2006.

La enmienda ordena a los estados crear instituciones especializadas de atención a adolescentes para sustituir los consejos tutelares. Entre sus lineamientos consideró que los menores serían sometidos al sistema penal acusatorio, conocido también como juicio oral.

A partir del 12 de septiembre de 2006 todas las entidades federativas están obligadas a acatar esa disposición, que tiene efecto sólo entre personas de entre 12 y 18 años. Algunas han incumplido hasta ahora, pero Nuevo León la tuvo lista a tiempo.

La fuente explica que el sistema anterior era tutelarista y el estado se hacía cargo de los menores.

Con esa norma la pena máxima para quienes incurrieran en delitos graves era de cinco años de internamiento en el entonces llamado Consejo Tutelar para Menores. Con la nueva ley los niños de entre 12 y 14 años son procesados pero sin confinamiento. Los de 14 a 16 años pueden sufrir confinamiento máximo de seis años, y los de 16 a 18, de ocho años. Los menores de 12 son impunes.

Requenes afirma que cuando se cambió la ley ya se anticipaba esta situación, pero la justicia internacional así lo dictaba y México tenía que estar “a tono”.

“Esto se preveía cuando había cambios legislativos, pero era una tendencia mundial que teníamos que seguir. (Los que se aprovechan de la ley) saben que los menores no son castigados y un niño es fácil de manipular; hemos tratado de trabajar más con la familia sobre este punto”, señala.

Agrega que en los municipios rurales a veces la policía detiene a menores infractores, pero como la ley los protege, muchas veces son puestos en libertad sin canalizarlos al área adecuada.

Los policías conocen los procedimientos, aclara Requenes, y los siguen, pero hay muchos casos en que sólo los menores son liberados, lo que ofrece al DIF un área de oportunidad en la que ya se trabaja.

Actualmente, apunta, se necesita más coordinación entre el DIF estatal con los municipios para conocer la información sobre los menores que son detenidos, aunque darle seguimiento a los adolescentes es tarea de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Dice que en el transcurso del año les han canalizado unos 50 menores de edad, de los cuales tres estaban implicados directamente en el crimen organizado. El tratamiento hacia ellos, agrega, es integral, e involucra en su rehabilitación a toda la familia.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal no respondió a una solicitud de entrevista de este semanario que tenía como propósito conocer de qué manera da seguimiento a los menores que cumplen sentencias en sus casas.

Redacción. “La bienvenida a Peña Nieto”. *Proceso* número 1872, 16 septiembre 2012. pp 8-10.  
<https://www.proceso.com.mx/319888/la-bienvenida-a-pena-nieto>

### **“La bienvenida a Peña Nieto”**

MATAMOROS, TAMPS. - La captura de los dos líderes que se disputaban la dirección del Cártel del Golfo (CDG), Mario Cárdenas Guillén, El Gordo, y José Eduardo Costilla, El Coss, significa la debacle de la organización, pero también es factible que los dos cárteles más importantes de México —el de Sinaloa y Los Zetas— se fortalezcan, pronostica la doctora Guadalupe Correa Contreras, de la Universidad de Texas en Brownsville.

El Coss fue detenido cerca de las 18:15 horas del miércoles 12 en un operativo de Infantería de Marina en Tampico: El Gordo cayó una semana antes junto con Juan Gabriel Montes Sermeño, El Sierra. Según Correa Contreras, autora de varios estudios sobre el crimen organizado de Tamaulipas, se puede prever una nueva ola de violencia “que le dará la bienvenida a la administración de Enrique Peña Nieto”.

Los orígenes del CDG datan de la década de los treinta del siglo pasado, cuando Juan Nepomuceno Guerra comenzó a introducir mercancías de manera ilegal a territorio estadounidense. Lustros después su sobrino, Juan García Ábrego, quien actualmente purga una condena en Estados Unidos, amplió el negocio y comenzó a traficar drogas. El cártel se consolidó cuando Tomás Yarrington era alcalde de Matamoros.

Osiel Cárdenas Guillén se quedó al frente de la organización tras la captura de García Ábrego, en enero de 1996. Fue él quien la convirtió en la segunda más importante del país, al incluir en sus filas a

militares de élite y al baño de sangre que sembró. En 2003, aun cuando fue detenido, Osiel siguió controlando el cártel desde la prisión, hasta que fue extraditado a Estados Unidos en 2007.

El capo negoció con la justicia estadounidense y se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y del asesinato en grado de tentativa de varios agentes federales mexicanos, por lo cual fue sentenciado a sólo 25 años. Incluso entregó a un juez los números de sus cuentas bancarias y bienes con valor de 50 millones de dólares acumulados a lo largo de una década.

Tras su extradición, Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta, uno de sus hermanos, quedó al frente del CDG, junto con El Coss. En noviembre de 2010, cuando Ezequiel cayó en un enfrentamiento con marinos en una vivienda del centro de esta ciudad, el grupo se dividió: por un lado El Gordo y varios sobrinos de la familia Cárdenas Guillén; por el otro, el grupo del Coss.

“El descabezamiento de los dos grupos que se disputaban la dirección del Cártel del Golfo significa su debacle”, insiste Correa Contreras. Dice que el CDG siempre fue “muy vertical”, a diferencia de Los Zetas, cuya estructura es horizontal y está conformada por células autónomas que no se conocen entre sí.

“En el caso del CDG –dice la investigadora– sí funciona la estrategia del gobierno de descabezar a los cárteles”. No obstante, acota, por la alianza que mantenía El Coss con el Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán podría quedarse con los grupos que disputan actualmente las plazas de Tamaulipas a Los Zetas.

Correa Contreras insiste en que la violencia se puede recrudecer en Tamaulipas y otras regiones del país, ya que el cártel que lidera El Chapo considera a Los Zetas secuestradores y extorsionadores, pues, según esa organización, sólo se dedican al robo y al narcomenudeo, lo que desprestigia a los verdaderos narcotraficantes que venden la droga fuera del país.

### **Las alianzas**

La doctora Guadalupe Correa Contreras sostiene que la “nueva” etapa de la narcoguerra comenzó hace dos meses en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. “Es verdad lo del calentamiento de plazas, especialmente ahora con el reacomodo del poder político en la frontera noreste”, dice.

“Se sabe que el CDG opera de la mano con el Cártel de Sinaloa, pero en esta guerra todo es muy confuso y hay muchos intereses que operan de manera muy peculiar”, agrega.

En la Secretaría de la Defensa varios altos mandos piensan de manera similar. El general Noé Salvador Alcázar, por ejemplo, comenta que habrá un aumento de la violencia en varias ciudades tamaulipecas “por el control del territorio”.

Comandante de la IV Región Militar que comprende San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, el general insiste en que “se han incrementado en Tamaulipas las agresiones entre sicarios de Los Zetas, del Cártel del Pacífico y del CDG. Nosotros los estamos combatiendo por igual”.

La narcoguerra se recrudece en las ciudades más importantes del noreste. En el caso de Matamoros, donde residen aproximadamente 700 mil personas, el control lo tienen Los Golfos. Sus sicarios vigilan de manera permanente las principales carreteras y algunas veces instalan retenes en ellas.

Los Zetas se han propuesto calentarle la plaza con incursiones desde Valle Hermoso. Durante los dos últimos meses se incrementaron los ataques, en los que incluso se utilizaron explosivos.

Ante las refriegas, el consulado de Estados Unidos en Matamoros alertó en siete ocasiones a sus connacionales sobre los enfrentamientos y narcobloqueos en la red social Twitter. Las alertas se hicieron tres días seguidos, del 7 al 9 de agosto, con el siguiente mensaje: los estadounidenses debían “permanecer en casa”.

De acuerdo con la Base de Datos sobre Fallecimientos por Presunta Rivalidad de Delincuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), en Matamoros se registraron 72 asesinatos de enero a septiembre de 2011, mientras que en Valle Hermoso fueron 95. La historia se repite en otras ciudades fronterizas, como Reynosa y Nuevo Laredo, así como en Ciudad Victoria.

Sin embargo, por el control que ejercen los grupos de la delincuencia organizada sobre los medios locales, los enfrentamientos entre bandas rivales no se conocen, pues sólo trascienden algunos en redes sociales.

Nuevo Laredo, bajo el dominio de Los Zetas, es una ciudad estratégica pues por esa zona cruza 75% del comercio terrestre entre México y los Estados Unidos. En fechas recientes las huestes del Cártel de Sinaloa incursionaron en esta ciudad fronteriza, por lo que se “calentó la plaza”. Hubo dos atentados con coches bomba en la alcaldía y en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como una serie masacres que incluyó varios decapitados atribuidos al Chapo Guzmán.

De acuerdo con la base de datos de la PGR, por los enfrentamientos entre los cárteles, en Nuevo Laredo se registraron 144 muertes entre enero y septiembre del año pasado. En Reynosa, con casi 1 millón de habitantes, el CDG mantiene la hegemonía, pero Los Zetas están presentes en algunas colonias marginadas de la ciudad.

San Fernando, con alrededor de 70 mil habitantes, sigue siendo el municipio más violento de la entidad, pese a la presencia masiva de militares y fuerzas federales. Las estadísticas de la PGR registran 292 crímenes violentos en el periodo de referencia. La plaza es controlada por Los Zetas, mientras el CDG realiza constantes incursiones desde Matamoros y Tampico.

La plaza de Ciudad Victoria, con apenas 300 mil habitantes, es “propiedad de Los Zetas”. Aunque en los últimos meses el CDG comenzó a incursionar en la zona rural de Güémez y Padilla. Los últimos atentados incluyeron coches bomba contra el periódico Expreso y el domicilio del secretario de Seguridad estatal.

De acuerdo con la PGR, en la capital tamaulipeca hubo 47 muertes violentas debido a los enfrentamientos entre los grupos, entre enero y septiembre de 2011.

La zona metropolitana de Tampico-Madero-Altamira se la disputan el CDG y Los Zetas; estos últimos incursionan desde el norte de Veracruz. Hoy, el puerto es el tercero con mayor número de secuestros del país. Según las cifras de la PGR sumaron 106 los crímenes violentos en las fechas de referencia.

### **Violencia exacerbada**

En Coahuila, Torreón es el municipio más violento de México, después de Ciudad Juárez. En el periodo mencionado, la PGR contabilizó 476 decesos. La plaza es controlada por Los Zetas, mientras que los sicarios de Sinaloa los enfrentan desde Gómez Palacio y Lerdo.

Una de las últimas masacres registradas en Torreón, cuya población es cercana a los 600 mil habitantes, es del Centro de Rehabilitación Tu Vida en la Roca donde en junio pasado murieron 11 jóvenes. Anteriormente hubo tres masacres en bares donde murieron 35 personas.

La plaza de Saltillo, también bajo control zeta, “se está calentando” por las incursiones del CDG. En los últimos meses hubo constantes enfrentamientos entre los grupos rivales. Las estadísticas de la PGR mencionan 50 fallecimientos.

La zona Metropolitana de Monterrey, donde habitan más de 4.5 millones, es propiedad de Los Zetas. Antes del atentado el casino Royale era controlado por cuatro “comandantes” de esa organización.

Según las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, durante 2011 se cometieron 2003 asesinatos violentos. Y durante los primeros siete meses de este año fueron 945 los crímenes.

En los dos últimos meses, el CDG incrementó sus acciones para calentar la plaza, entre ellas destacan los atentados al diario El Norte. Además, los sicarios de ese grupo se han centrado en atacar los centros nocturnos que controlaban Los Zetas. El último fue el Bar Matehuala, donde los pistoleros de El Diablo cazaron a cinco empleados del local y a cuatro clientes.

“Los crímenes han sido contra delincuentes, ya que han ocurrido en carros robados, en otros se han dejado carteles con amenazas y en algunos casos han sido personas con antecedentes penales”, justificó Jorge Domene, vocero del Consejo de Seguridad de Nuevo León.

Para la especialista Guadalupe Correa Contreras, el calentamiento de las plazas continuará hasta que los grupos tengan claro cuál será la estrategia de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad; pero sobre todo cuando sepan cómo quedarán acomodados los grupos políticos tamaulipecos, que, dice, son sus subordinados.

Redacción. “Las fugas: reposición de zetas”. *Proceso* número 1873, 23 septiembre 2012. pp 16-18.

<https://www.proceso.com.mx/320778/320778-las-fugas-reposicion-de-zetas>

### **“Las fugas: reposición de zetas”**

Además de formar una de las organizaciones más violentas y de consolidar cada vez más su dominio a lo largo del territorio nacional, en los últimos años Los Zetas han impuesto su ley en la mayoría de los penales del norte del país. En esos lugares cooptan a directivos y custodios e incluso organizan fugas masivas, como la del lunes 17 en el Cereso de Piedras Negras, para liberar a sus miembros y simpatizantes y reponer a los cuadros que pierden en su guerra contra el Cártel del Golfo y en el combate con las fuerzas militares y policiacas del gobierno.

SALTILLO, COAH. (Proceso). - Los Zetas controlan la mayoría de los penales del norte del país y durante los últimos cuatro años –en complicidad con sus directivos– han organizado fugas masivas en

Tamaulipas, Nuevo León, Zacatecas y Coahuila. En la más reciente, el lunes 17, fueron 131 los reos que salieron del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras por la puerta principal.

En ese lapso el grupo criminal organizó la evasión de 546 sicarios o simpatizantes, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que le permitió reponer a sus miembros caídos.

En la fuga del Cereso de Piedras Negras los internos salieron a la calle, donde los esperaban dos autobuses para trasladarlos, admitieron el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, y el titular de Seguridad Pública local, Jorge Luis Morán Delgado. Según ellos el túnel que cavaron sólo fue una pantalla para “encubrir a los funcionarios” penitenciarios que facilitaron la evasión.

El ardid no funcionó, por lo que un juez de Río Grande otorgó una orden de arraigo por 40 días contra 16 personas señaladas como probables responsables del delito de evasión de reos, entre ellos el director del Cereso, José Miguel Pérez Reséndiz; el jefe y el subdirector de Seguridad y Custodia, Héctor Miguel Anguiano Rosales y Saúl Francisco Ambriz Jacques, respectivamente, además de varios custodios.

De acuerdo con las autoridades estatales, varios de los internos fueron trasladados a Tamaulipas y a otras entidades para reforzar a Los Zetas en su guerra contra el Cártel del Golfo (CDG).

La penúltima fuga fue la de la madrugada del pasado 19 de febrero en el Cereso de Apodaca, Nuevo León. En esa ocasión 37 reos subieron a la torre seis desde donde se deslizaron, usando cuerdas, a la calle, donde ya los esperaban hombres armados a bordo de varias camionetas.

Previamente habían sacado del ambulatorio Delta a 44 miembros del CDG para matarlos a golpes en el patio de la prisión, mientras los guardias les brindaban protección.

El gobernador nuevoleonés Rodrigo Medina Cruz declaró al día siguiente que los custodios de la torre seis estaban siendo interrogados. Poco después fueron arraigados los directivos de la prisión y 29 custodios, quienes confesaron que recibían dinero de Los Zetas para permitirles tener celdas de lujo, vender droga, extorsionar a internos y tener fiestas amenizadas con mariachis y mujeres.

Jorge Domene, vocero de seguridad de Nuevo León, informó que el director del penal, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, recibía sobornos de la organización criminal por alrededor de 35 mil pesos cada mes, mientras que los jefes de guardia obtenían entre 20 mil y 25 mil, los jefes de turno 10 mil y los custodios de 4 mil a 6 mil.

Los prófugos fueron trasladados por Los Zetas a un rancho en el municipio de Anáhuac, en el norte del estado. Entre ellos había tres capos, quienes fueron reasignados como jefes de zona; otros formaron células en la zona metropolitana de Monterrey y en municipios rurales del estado.

Entre los líderes estaban Óscar Manuel Bernal Soriano, El Spider; Rogelio Chacha Quintanilla, El Yeyo, y José Ricardo Barajas López, El Bocinas. Hasta la fecha han sido recapturados 17, entre ellos El Yeyo, y dos cayeron muertos en enfrentamientos con militares.

El Bocinas sigue prófugo pero altos mandos del Ejército lo señalan como el coordinador de la ejecución de 49 personas cuyos cuerpos fueron abandonados en Cadereyta en mayo pasado. Dicen que incluso

grabó la ejecución con su celular y posteriormente subió el video al portal de Youtube, donde sólo estuvo algunas horas.

La mayor fuga masiva organizada por Los Zetas ocurrió la madrugada del 17 de diciembre de 2010 en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En esa ocasión llegaron al menos dos vehículos –una camioneta y un autobús escolar– para recoger a 151 reos.

Días después el gobernador Eugenio Hernández Flores aseguró que el escape se realizó en complicidad con los custodios: “Fue una traición a la confianza que se depositó en ellos”, declaró.

Informó que el director de los reclusorios del estado, Horacio Sepúlveda –el séptimo que ocupó ese cargo en su administración–, y el director del Cedes, Efraín Hernández, con sólo dos meses en el cargo, estaban desaparecidos. La Procuraduría General de la República consignó a 41 custodios por su presunta complicidad en la fuga.

El 19 de mayo de 2009 hubo otro rescate de presos en el penal de Cieneguillas, Zacatecas. Esa vez huyeron 53. El operativo quedó documentado en un video en el que se observa la facilidad con que Los Zetas tienen acceso a las prisiones para sacar a sus cómplices.

Las cámaras del exterior y de la recepción grabaron el momento en el que 10 camionetas llegaron al estacionamiento de servicios sin mostrar ningún documento; los guardias del acceso principal tampoco alertaron por la radio a sus superiores sobre la llegada del convoy.

El video muestra la entrada de un grupo de sicarios, quienes encerraron a los custodios. Minutos después se ve que salen corriendo todos los presos. Suben a las camionetas y abandonan la prisión.

El entonces secretario de Gobierno, Carlos Pinto Núñez, relató a Proceso que los guardias facilitaron el escape: “Los custodios no oponen resistencia y se dejan encerrar... Desde el principio supusimos que había complicidad, ni siquiera estaban bien encerrados, pues podían abrir y cerrar la celda”.

### **Sistema de reclutamiento**

Un coronel que dirige las operaciones de “fuerzas especial” en el noreste del país describe a Proceso, a condición de omitir su identidad, el crecimiento exponencial de Los Zetas desde la administración de Vicente Fox.

Al principio, asegura, el grupo se consolidó en Nuevo Laredo, donde fueron enviados en 2001 por Osiel Cárdenas para defender la plaza e impedir que los sicarios de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, del Cártel de Sinaloa, se asentaran en la zona.

De ahí se expandió rápidamente a las principales ciudades de la entidad y de Nuevo León. Comenzó a reclutar miembros entre las corporaciones policiacas municipales, quienes se encargaban de cuidar las narcotienditas “que en ese momento se reproducían como hongos”, dice.

Durante la administración de Fox la disputa Zetas-CDG contra sus rivales del Cártel de Sinaloa y otros grupos menores provocó 10 mil muertes, incluidos jefes policiacos y uniformados. “En esa etapa –expone la fuente– Los Zetas tuvieron a su alcance a cientos de sicarios adiestrados en las corporaciones policiacas municipales y estatales”.

Menciona que en algunos municipios de la zona metropolitana de Monterrey “cártel” era sinónimo de “corporación policiaca”.

Comenzó la purga en las policías de Nuevo León: en el municipio de García, 99% fueron despedidos; en Escobedo, 90%; en Guadalupe, más de 70%, y en Santa Catarina y Monterrey, más de 60%.

Los Zetas cambiaron su método y comenzaron a reclutar sicarios, halcones y estacas entre las miles de pandillas de las zonas marginadas. Ahí encontraron una veta interminable de “carne de cañón”, pero sin experiencia en el manejo de armas de fuego, añade el coronel.

Además, dice, organizan fugas masivas en los penales que controlan para reponer a sus miembros caídos.

### **Control de penales**

La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos –fundada el 23 de abril de 1993 entre las comunidades eclesiales de base de Ciudad Guadalupe, Nuevo León– trabajó varios años con los internos en penales de la entidad.

Su directora, Consuelo Morales, cuenta a *Proceso* que la asociación abandonó ese trabajo pues los penales están controlados por la delincuencia organizada. Todos saben, dice, que las autoridades penitenciarias trabajan para el CDG o Los Zetas, ya sea por amenazas o por sobornos.

Quienes mandan en el interior son capos. Ellos controlan desde el tráfico de droga, que se cotiza a precios carísimos, hasta los espacios del suelo para dormir. Ellos han impuesto un sistema de terror al grado que familiares de los reos deben pagarles cotidianamente para que no los golpeen.

En penales como Topo Chico Los Zetas obtienen hasta 15 millones de pesos cada mes por sus actividades ilícitas, comenta el coronel.

La diócesis de Saltillo, representada por el obispo Raúl Vera López, también cuenta con una pastoral que realiza trabajo en los penales, pero en los últimos meses su labor ha sido obstaculizada por la mafia.

“Sabemos que los penales de nuestra región están en poder del crimen organizado. A nadie se nos olvida lo que ha pasado en otros reclusorios donde ha habido fugas como ésta” (la del lunes 17 en Piedras Negras), declaró Vera López a los medios locales el miércoles 19.

“Las cárceles tienen leyes y gobiernos propios, impuestos por la delincuencia organizada, lo que hace sufrir a los reos comunes. Ya no hay orden de legalidad y de justicia, mucho menos un estado de derecho en el que podamos confiar”, destacó.

Para modificar esa situación, dijo, se requiere honestidad en la administración de los penales desde las más altas esferas. Y concluyó: “Es lamentable el grado de desorden al que hemos llegado y parece que las cosas podrían seguir peor, ya que no se ve que con el cambio de régimen la corrupción se vaya a acabar”.

Verónica Espinosa. “Epistolarios de la muerte”. *Proceso* número 1873, 23 septiembre 2012. pp 18-19.  
<https://www.proceso.com.mx/320523/epistolarios-de-la-muerte>

### “Epistolarios de la muerte”

SAN LUIS POTOSÍ, SLP. - Entre el lunes 17 y el jueves 20, las principales ciudades potosinas y zacatecanas, así como sus capitales, fueron escenario de un intercambio de narcomantas con acusaciones de traición, amenazas y nuevas alianzas. El fenómeno exhibió la guerra intestina de Los Zetas en su afán por controlar el corredor San Luis-Zacatecas-Coahuila.

En su pleito contra Miguel Ángel Treviño, alias EL Z-40, el capo Iván Velázquez Caballero, El Talibán o Z-50, se presenta ahora como parte de una tríada delictiva –presuntamente integrada por Los Caballeros Templarios, El Cártel del Golfo y los llamados Cárteles Unidos– que ofrece frenar la ola de ejecuciones, secuestros y robos que le adjudica a Treviño, a quien también acusa de traidor.

El Z-40, por su parte, sostiene que sus detractores son “una banda de ladrones” que tarde o temprano se traicionarán entre sí, como ya lo han demostrado en otras ocasiones. Uno de los largos mensajes atribuido a él y que apareció en esta capital y en la de Zacatecas el jueves 20 señala: “Yo soy fiel a la letra y al Comandante Lazcano”, y parece ser una respuesta a los colocados días antes a nombre del Talibán.

En esta ocasión, el Cártel del Golfo (CDG) entró de lleno a una plaza medular para Los Zetas, la de Fresnillo, donde esa organización colocó mensajes en los que aseguran que esa localidad, considerada una de las bases de operación estratégicas para el Z-50, es suya.

Durante la semana pasada, en este municipio zacatecano, así como los de Jerez, Zacatecas, Guadalupe, Pinos, Villa Hidalgo, Villanueva, y los de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez –los dos últimos en esta entidad– arribaron innumerables vehículos durante varios días, por la mañana. De ellos descendían personas que, sin reparar en los pobladores, colgaron mantas en las cuales denostaban a la organización rival.

Ni los cientos de federales asignados en los últimos meses a las dos entidades ni los soldados ni los policías estatales ni los miembros de la Armada, que han intensificado su presencia en la región, han impedido el intercambio de mensajes y mantas, que han sido colocadas en puentes peatonales, vialidades y edificios.

La multiplicación de esos “epistolarios de muerte”, literalmente clavados sobre los cuerpos de sicarios, narcomenudistas o civiles inocentes ejecutados, dispararon la sicosis entre potosinos y zacatecanos. Muchos de ellos viven hoy una situación similar a la que sus vecinos de Tamaulipas y Nuevo León experimentaron hace tiempo. Sólo que ahora todo apunta a que son los propios mandos zetas los que están divididos (Proceso 1863).

Esta situación obligó al gobierno federal a establecer el sábado 1 una Base de la Operación Noreste, esquema mixto de seguridad e inteligencia que hasta antes de esa fecha combatió a Los Zetas y al CDG en Tamaulipas y Nuevo León (Proceso 1639).

Consultado por la reportera, un agente de la PGR que ha participado en las movilizaciones oficiales del Operativo Noreste admite que la instalación de la base en San Luis obedece a las exacerbadas pugnas entre los liderazgos zetas y los sangrientos efectos que provocan en varias localidades del estado, sobre todo en la capital.

## Los mensajes del “Talibán”

El martes 18 por la noche apareció un mensaje que implica a las autoridades potosinas. Fue colocado sobre tres cuerpos abandonados en las inmediaciones de la comunidad Enrique Estrada, en la carretera 57 a Matehuala; todos mostraban huellas de tortura y tenían tiro de gracia.

“Esto es para los que apoyan al grupo zeta, faltan tigre y guacho”, decía la manta que cubría los tres cadáveres, uno de los cuales era el del comandante Fernando Longoria Fuerte, un exdirector de la Policía Ministerial del estado y cercano al secretario de Gobierno, Cándido Ochoa Rojas.

Agentes de Seguridad Pública consultados por la reportera comentan que el mensaje alude al jefe operativo de la Policía Ministerial, Juan Antonio Varela, involucrado en recomendaciones de derechos humanos por tortura, y a un exministerial llamado Francisco Gustavo Rivera Olivares, quien fue despedido por no aprobar los exámenes antidoping aplicados en la corporación.

El lunes 17, un día antes de que fueran encontrados los cuerpos de Longoria Fuerte y los otros dos hombres, en Zacatecas y San Luis Potosí comenzó el “despliegue informativo” firmado por El Talibán, que se prolongó hasta el miércoles 19. Las mantas plastificadas aparecieron en puentes peatonales, avenidas y jardines principales de Zacatecas, Calera, Jerez, Guadalupe y Fresnillo.

“Las mantas contienen el mismo mensaje de las que aparecieron ayer lunes en los municipios de Pinos y Villa Hidalgo, en las que se indica la presencia en esa zona del CDG... La colocación de las mantas pudo ser observada por algunas personas que transitaban temprano por los lugares”, registró el portal electrónico Zacatecas on line.

Algunos mensajes tenían la leyenda: “Territorio del Cártel del Golfo”, acompañada con unas franjas verde, blanca y roja. En San Luis los medios locales contabilizaron entre 14 y 16.

El jueves 20 por la mañana se inició el bombardeo de mantas atribuidas al Z-40. Aparecieron lo mismo en el Jardín Independencia, en el Centro Histórico de esta capital que en avenida Héroes de Chapultepec, donde se ubican los dos hoteles en los cuales se hospedan los agentes federales que participan en los operativos en la entidad desde hace meses.

En Jerez, la manta atribuida al Z-40 fue colocada en las inmediaciones de una escuela secundaria técnica; en Fresnillo, muy cerca de la Central de Abastos y de una tienda Soriana.

Según los reportes de las autoridades de ambas entidades nadie fue detenido por la colocación de las mantas.

Jorge Carrasco Araizaga, Juan Alberto Cedillo. “La caída y la sucesión”. *Proceso* número 1876, 14 octubre 2012. pp 6, 7, 8, 10,11. <https://www.proceso.com.mx/322527/la-caida-y-la-sucesion>

### “La caída y la sucesión”

Ahora que se da como un hecho oficial la muerte de Heriberto Lazcano, El Lazca, la jefatura de Los Zetas recaerá en Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, siempre que éste pueda controlar a los grupos que lo consideran un traidor. Aparentemente las dificultades para él ya comenzaron: Matamoros –nido

zeta– fue un caos de combates y bloqueos el fin de semana, señal de posibles reacomodos. Por otra parte, el desaseo de la Marina en torno a las circunstancias en las que presuntamente fue abatido el líder histórico del grupo mafioso, así como el vergonzoso robo del cadáver, son tan burdos que muchos especialistas –y la sociedad– dudan que en verdad El Lazca haya muerto.

SALTILLO, COAH./MÉXICO, DF.- Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, oficialmente ya no existe.

Su anunciado sucesor, Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, tendrá que sumar a los seguidores que quedan de aquél o acabar con ellos para redefinir a la organización delictiva. Los expertos dudan que pueda cumplir alguna de esas dos misiones. La única certeza que tienen es que la reestructuración traerá más violencia, como ha ocurrido tras la caída de otros capos.

Treviño carece de la formación militar del Lazca. Comenzó robando vehículos y autopartes en Estados Unidos; aun así, único civil entre los fundadores de Los Zetas, ascendió al liderazgo sólo por estar cerca de Lazcano.

Si al Lazca lo apodaban también El Verdugo por sus métodos violentos, Treviño lo supera en estas lides. Y su hermano Omar, El Z-42, más.

“En esa relación Lazcano era el estratega”, dice una fuente oficial de seguridad. La permanencia del Z-40 en Los Zetas le ha permitido conocer la estructura y operación de distintas organizaciones, principalmente del Cártel del Golfo (CDG) y de La Familia Michoacana. Formó parte del brazo armado de aquélla y a la segunda le dio entrenamiento.

Fue uno de los consolidadores de Los Zetas como cártel con presencia más allá de México. Estados Unidos lo tiene como uno de sus objetivos a encarcelar. En tribunales federales de Texas y Washington se le siguen juicios por tráfico de cocaína y mariguana y por lavado de dinero, igual que al Z-42. Otro de sus hermanos, José, fue detenido en junio pasado en Oklahoma, acusado de lavar dinero con la compra de ranchos y caballos de carreras.

La justicia estadounidense tiene el historial del Z-40 como operador en el tráfico de droga y de lavado de dinero y además como responsable de la compra de autoridades federales y estatales, civiles y militares de México (Proceso 1736 y 1840).

Entre las relaciones que se le atribuyen destaca la de jefes y oficiales de la Marina con quienes supuestamente coordinó detenciones de hombres de confianza del Lazca, del que al parecer ya estaba distanciado.

Una de las fuentes consultadas por Proceso describe a Treviño como un hombre grueso, de bigote y cabello corto y que suele vestir camisetas tipo polo, pantalones de mezclilla y tenis. Uno de sus refugios es la casa de su abuela en Piedras Negras, Coahuila.

Un teniente coronel retirado –quien combatió al narcotráfico desde la Operación Cóndor en los setenta– considera que en los próximos días se definirá si el grupo se divide o si El Z-40 mantiene el control. “Se verá si las facciones zetas de San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León se someterán a las órdenes de Treviño”, dice.

Lo que confirmaría esta eventualidad sería la aparición de “narcomantas” acusando al Z-40 de haber traicionado a Salvador Alfonso Martínez Escobedo o Carlos García, La Ardilla –uno de los hombres más cercanos al Lazca y quien fue detenido un día antes de la muerte oficial de su jefe– para quedarse al frente del cártel.

Por lo pronto Los Caballeros Templarios, escisión de La Familia Michoacana ya le declaró la guerra en mantas que colocó en Michoacán, Guanajuato, Guerrero y el Estado de México después de la anunciada muerte del Lazca. Días antes ya habían advertido que llegarían hasta Nuevo León, zona zeta, para enfrentar a Treviño.

Otro posible derrotero para Los Zetas es que la captura de La Ardilla, Iván Velázquez Caballero, El Talibán y la muerte del Lazcano dejara muchas células sueltas y que éstas “se vayan por la libre”, como ocurrió en Monterrey después del atentado al Casino Royale.

Las células sueltas de Monterrey pronto se convirtieron en grupos autónomos y como consecuencia se redujeron en esa ciudad los delitos de alto impacto, las matanzas y los enfrentamientos, pero se dispararon los secuestros y las extorsiones.

Hace cinco años Nuevo León tenía en promedio uno o dos secuestros por año. Ahora, según las estadísticas del Consejo de Seguridad, hay al menos 25 plagios y levantones al mes. En el último año el ejército y la Agencia Estatal de Investigaciones han desarticulado 165 bandas de secuestradores y detenido a unos 12 mil delincuentes, muchos de ellos exmiembros de Los Zetas y del CDG.

### **El caos**

Por lo pronto hay indicios de que las fuerzas se están reacomodando en los feudos que fueron del Lazca. El pasado fin de semana efectivos militares tuvieron enfrentamientos contra hombres armados –sin que hasta el momento se sepa si se trata de zetas o de integrantes del CDG– en poblados y zonas del poniente de la ciudad tamaulipeca de Matamoros, choques que a su vez desataron bloqueos.

La policía local reportó que los tiroteos comenzaron antes del mediodía del viernes 12 en pueblos sobre la vía libre Matamoros-Reynosa. Las escaramuzas se extendieron a diversos sectores de la frontera Matamoros y luego ocurrieron los bloqueos en diversas vialidades.

Los enfrentamientos del viernes 12 aparentemente fueron consecuencia del operativo federal y estatal del día anterior en la colonia Modelo, que permaneció más de seis horas sitiada para asegurar una residencia.

La situación se tornó tan violenta en Matamoros que el mismo viernes 12 el consulado de Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos. Aunque las autoridades locales no han informado nada al respecto, la legación atribuyó la escalada de violencia a la detención de familiares de un presunto “líder criminal” y habló de posibles represalias contra estadounidenses “tras la detención de integrantes de la Organización Transnacional Criminal”.

Hasta la noche del viernes 13 los enfrentamientos continuaban, ahora en ejidos de la carretera Matamoros-Playa Bagdad.

### **Cadáver ausente**

La presunta eliminación de Lazcano, líder histórico de Los Zetas, sintetizó el sexenio de Felipe Calderón: mucha bala, poca inteligencia. Lo que las autoridades federales quieren presentar como el mayor golpe al narco en México en más de una década –a dos meses y medio de que concluya el gobierno panista– acabó en el vergonzoso robo del supuesto cadáver del capo.

Ni los servicios de seguridad e inteligencia civiles y militares ni los propios infantes de marina protagonistas de la caída de renombrados jefes del narcotráfico en años recientes estaban preparados para el fin de Lazcano. Las inconsistencias de la Marina y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Coahuila lo demuestran.

La Semar dio una versión simple, rayana en la candidez tratándose de uno de los jefes más importantes del narcotráfico internacional. Como en la mayoría de sus acciones, en un comunicado de prensa contó que el domingo 7 “en atención de diversas denuncias ciudadanas” supo que “personas armadas integrantes del crimen organizado se encontraban en el área de Progreso, Coahuila, procediendo a efectuar un patrullaje por el área a fin de verificar la información”.

Sin precisar el lugar, que resultó el campo de beisbol de la comunidad, dijo que cuando llegó el personal de la Marina fue agredido con armas de fuego por los delincuentes. Los marinos respondieron y mataron a dos delincuentes a los que les aseguraron dos armas largas, un tubo lanzagranadas con 12 granadas útiles, un tubo lanzacohetes con dos cohetes, cargadores y cartuchos de diversos calibres.

Deliberadamente vaga la Marina añadió: “Se obtuvo información de que una vez que se realizaron las pruebas forenses correspondientes, se alcanzaron indicios que señalan que uno de los cuerpos es de Heriberto Lazcano Lazcano (a) El Lazca, líder principal de la organización delictiva de Los Zetas”.

Un día después dijo que había confirmado la identidad del narcotraficante “al cotejar en las bases de datos dactilares las huellas de los dedos pulgar, índice y medio, tomadas de la mano derecha de uno de los criminales abatidos”. Ahí comenzaron las inconsistencias.

La Marina lo describió como un hombre de 1.60 metros, mientras la ficha de la DEA lo registra 20 centímetros más alto. La información de un hombre alto coincide más con la que dio al reportero Rodrigo Vera un excompañero de Lazcano en el Ejército.

El vocero de la Marina, José Luis Vergara, se enredó para explicar que la diferencia se debía que la ficha de México correspondía a su ingreso al Ejército, a los 17 años, por lo que después pudo crecer 20 centímetros.

No acabaron ahí los aprietos del vocero, que después tuvo que admitir “el robo” del cadáver por un comando armado, como había informado la PGJE.

Ante la crisis de credibilidad Vergara tuvo que hacer un carrusel de entrevistas en radio, televisión y prensa escrita. Dio más detalles, pero cada vez más inconsistentes, como la existencia de un tercer delincuente que escapó y la supuesta carrera de 300 metros del Lazca para intentar salvarse.

### **Dudas razonables**

La Marina prefirió pasar como incompetente. En su propia versión dijo que no sabía que había matado al Lazca, por lo que no custodió el cuerpo. Culpó de la pérdida a los peritos de la PGJE que después de la autopsia decidieron enviar el cuerpo a una funeraria. Pero la procuraduría también se deslindó.

Funcionarios de seguridad y exmiembros de las Fuerzas Armadas que han participado en acciones contra el narcotráfico derrumban la versión de la Marina. Explican que ésta utiliza fusiles M-16 cuyas balas alcanzan una velocidad de 960 metros por segundo, por lo que es imposible que el narcotraficante hubiera podido correr 100 o 300 metros.

Pero sobre todo, por tratarse del máximo jefe de una de las organizaciones más peligrosas, no podía estar sólo con dos hombres de guardia, como dice la versión oficial.

“Su seguridad ha estado muy bien organizada. Su escolta está integrada por estacas, grupos de 10 a 15 hombres, además de que a su alrededor tiene cinturones de seguridad a los que llaman La Guardia, que no dejan que se acerque nadie. Son quienes provocan los enfrentamientos para que logre escapar”, explican los entrevistados.

Cuestionan incluso la identidad del cadáver pues sostienen que los datos de las huellas dactilares pudieron ser manipulados por la PGJE, que fue la que oficialmente realizó la primera identificación del cadáver y que después le pasó la información a la Semar y a la PGR, a la que Marina no le entregó el cadáver a pesar de que en el enfrentamiento del domingo 7 se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército.

Consideran también la eventualidad de que El Lazca no estuviera en Coahuila pues en los dos meses pasados esta entidad se ha vuelto el centro de la crisis del narcotráfico en México, a pesar de que en agosto pasado el gobernador Rubén Moreira aseguró que gracias a operativos de su gobierno con el de Calderón había logrado sacar del estado al jefe de Los Zetas.

Al hacer esas declaraciones, a mediados de agosto, en Saltillo, Torreón y la región de Piedras Negras se registraban cotidianos enfrentamientos y matanzas que terminaron por desplazaron a Nuevo León y Tamaulipas de los primeros lugares en la violencia criminal.

La crisis se agudizó el 17 de septiembre con la fuga masiva de 131 reos del Cereso de Piedras Negras, municipio controlado por Los Zetas. Primero se dijo que habían huido por un túnel que se cavó desde el taller de carpintería. Las investigaciones arrojaron que la realidad fue que los internos salieron por la puerta principal con la complicidad de custodios y autoridades carcelarias.

La fuga desencadenó una cacería de reos en la que participaron todos los cuerpos de seguridad. Las autoridades estatales ofrecieron una recompensa de 200 mil pesos por cada interno recapturado, oferta que se hizo extensiva a los policías estatales que así se aplicaron en su trabajo.

La cacería derivó en varios enfrentamientos. El miércoles 3 los policías estatales abatieron a cuatro sicarios, entre los que se encontraba Alejandro Treviño Chávez, sobrino del Z-40.

Tras la muerte de Treviño Chávez comenzaron las amenazas contra la familia del gobernador Moreira. Al siguiente día fue localizado en una brecha de Ciudad Acuña José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo mayor del exmandatario Humberto Moreira, ejecutado con tres tiros en la cabeza.

Versiones no confirmadas mencionan que junto al cadáver del joven había un letrero: “Familia X familia”.

Si el asesinato de José Eduardo Moreira parecía la cúspide de una cadena de hechos violentos en el estado, la muerte oficial del Lazca aún puede generar más derramamiento de sangre.

Patricia Dávila. “El cadáver exhibido “no es del Lazca”. *Proceso* número 1876, 14 octubre de 2012. pp 8-10. <https://www.proceso.com.mx/322633/322633-el-cadaver-exhibido-no-es-del-lazca>

### “El cadáver exhibido “no es del Lazca””

De acuerdo con expertos en criminalística y ciencias forenses que laboran en el ámbito judicial consideran falso que el cadáver presentado por la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) y el gobierno de Coahuila como el de Heriberto Lazcano Lazcano corresponda realmente al del líder de Los Zetas.

A petición de Proceso, especialistas de varias instituciones que pidieron el anonimato realizaron una identificación criminal empleando fotografías del cadáver exhibidas por la Semar, así como las imágenes en que el jefe de Los Zetas aparece en vida. Este ejercicio lo realizaron con base en el dictamen médico legal de la necropsia difundido por la prensa el viernes 12.

“El día 7 de octubre de 2012, en el anfiteatro de la Funeraria García, de Sabinas, Coahuila –señala el documento–, el perito médico forense de la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado) realizó la necropsia de ley al cadáver de una persona que se tenía como no nombre (nn), emitiendo el dictamen médico legal de necropsia en los términos siguientes:

Examen traumatológico: “Herida (ocasionada) por proyectil de arma de fuego de grueso calibre con orificio de entrada en región occipital, alojando el proyectil en la base del cráneo, en la parte anterior izquierda, con trayectoria de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha”.

Una segunda herida “por proyectil de arma de fuego de grueso calibre con orificio de entrada en la parte posterior de la región parietal izquierda y orificio de salida en región parietal derecha, que fracturó el hueso occipital”, además de otras cuatro heridas, también por proyectil de arma de fuego, que en opinión de los especialistas no son causa de fallecimiento: una en el glúteo derecho, otra en el glúteo izquierdo, la quinta en la región pectoral derecha –debajo de la tetilla– y la sexta en el codo derecho.

–¿En la herida número uno encontró incongruencias

–se le pregunta a uno de los especialistas.

–Sí. Porque, ¿cómo es posible que una bala de grueso calibre se aloje en la base del cráneo?

Normalmente, cuando son proyectiles de esta dimensión entran y salen, la atraviesan completamente porque el poder de destrucción es muy alto. Es el mismo efecto que los humanos tenemos cuando nos disparan en la cabeza, salvo en calibres pequeños: las paredes del cráneo pueden resistir esos impactos. Sin embargo, la Semar dice que los marinos dispararon a una distancia de 30 metros. ¡Imagínese el poder de fuego que tiene el arma para disparar de esa distancia y darle a la cabeza a alguien! No es común. No es normal que el rostro del cadáver esté completamente limpio.

–En la población de Progreso, donde, según las autoridades, fue abatido El Lazca, una testigo declaró al periódico Excélsior que a uno de los ejecutados lo obligaron a hincarse y luego le dispararon...

–Como no tenemos acceso al resto de la información –sobre todo a los indicios que nos permitirían reconstruir el hecho o por lo menos acercarnos al mismo a través de las fotografías y el rastreo pericial que levantan–, no sabremos si efectivamente se realizaron estas maniobras en este lugar.

–Si fue como ella dice, ¿su versión se ajusta a las características de algunas de las heridas?

–Coincide con la herida número uno. Lo tienen boca abajo y tirado en el piso; bien podría concordar. Pero, repito: tendríamos que tener acceso a más documentación para buscar otros indicios, como rastros de pólvora o quemaduras, porque el cadáver, o al menos la parte que nos muestran de él, no tiene quemaduras.

### **Imágenes manipuladas**

Otro de los peritos consultados se refiere a la herida dos:

“La necropsia dice que entra (una bala de grueso calibre) en la parte posterior de la región parietal izquierda y sale por la derecha –esta región es el hueso que tenemos por arriba de la oreja–, y que el orificio de salida en la región parietal derecha fractura el hueso occipital. Si uno se toca atrás de la cabeza, sentirá una protuberancia, como una bolita, ese es el hueso occipital; o sea que la bala penetra y rompe todo el cráneo y fractura este hueso. Y si nos fijamos en las fotografías donde el muerto aparece acostado y se le ve la oreja derecha, no aparece ningún orificio de salida”.

Incluso muestra imágenes que circulan en internet: “Fíjese –dice– cómo el cadáver está en posición de tres cuartos y se le ve claramente la oreja del lado derecho. Y por arriba de ella está el hueso occipital por donde supuestamente salió la bala... No se ve ningún orificio”.

–¿Esto qué quiere decir?

–Que las imágenes presentadas al público están manipuladas y fueron hechas especialmente para aparentar que la víctima es El Lazca. Sin embargo, el protocolo de necropsia y lo que nos muestran los medios no es lo que sucedió. Científicamente no es posible comprobar la identidad de este sujeto por lo que nos están diciendo. Científicamente, las fotografías que nos presentan no concuerdan con las que conocemos de él. ¡Imagínese! Se ha difundido que la Marina utilizó armas de 2.23 mm. Con su poder destructivo, le hubiera volado la cabeza. Es sencillo: no concuerdan las armas utilizadas con las lesiones que presenta el sujeto fallecido.

–¿Y en cuanto a la herida tres?

–El resto de las lesiones no son importantes para un uso criminalístico mortal porque no causan la muerte. Las importantes son las de la cabeza.

–¿Estas son las dos heridas que, al comparar los cuerpos en fotografía, nos hacen estar seguros de que no se trata de la misma persona?

–Sí. Si usted observa las imágenes del sujeto, verá que las regiones en las cuales deben aparecer heridas, no tiene lesión alguna.

–El médico forense de Coahuila declaró que no eran seis, sino cinco las heridas, y también dijo que había señales de cirugía plástica en las orejas. ¿Es lógico que alguien se opere las orejas y no el resto de la cara?

–Es ilógico. Ahora que ya no tienen el cuerpo, cómo es posible que salga un doctor a decir que tenía una cirugía plástica en las orejas, cuando lo debieron haber dicho desde un principio; y ahora retiran las fotografías de internet para que no se vea la comparación. El certificado debió incluir las cicatrices y las heridas encontradas en el sujeto.

–En algunos sitios de internet circula una fotografía del cuerpo donde aparece con la frente y parte de la nariz deshechas, además de una herida en el labio. ¿A cuál de las heridas de la necropsia corresponde?

–Tendría que ser a la primera, porque cuando el proyectil disparado por arma de fuego entra en la región occipital, es decir en la nuca, de arriba hacia abajo, la bala pega en el hueso contrario, que es el hueso frontal. Pero el sujeto que nos presentan no tiene ninguna herida. O nos hicieron un photoshop o un gran teatro.

### **Escenarios inverosímiles**

Los peritos consultados aceptaron realizar el análisis de manera no oficial, sólo por “inquietud” forense, para saber si las cosas están bien o mal hechas.

–¿Y cómo están? –se le pregunta a un tercer experto.

–Estaban mal hechas. Ahora, sobre la marcha, tratan de recomponer la situación.

–¿Puede ser que Lazcano Lazcano no esté muerto?

–Hasta no tener las pruebas de ello, afirmarlo sería faltar a una ética profesional.

Algunos peritos realizaron una explanometría facial, tanto al rostro del cadáver como a una fotografía tomada a Lazcano cuando aún vivía.

–¿Qué indican las mediciones? –se les pregunta a los peritos.

–No concuerdan. El estudio denominado explanometría facial consiste en realizar ciertas mediciones en el rostro de las personas para tratar de identificar esas pequeñas características que son únicas y que a pesar de que se practique cualquier operación, no variarán. Son perennes –dice uno de ellos.

Explica que estas características son la comisura de los labios, el tamaño de las orejas y de los huesos de los pómulos, así como las “entradas” entre el cabello.

–¿Qué resultados obtuvieron?

–Lo que nos provoca dudas es la posición de las orejas. Dicen que se las operó, pero aun así no concuerdan, porque una cosa es operarse las orejas y otra es cambiarlas de lugar. Las orejas están en diferente lugar. En la foto del vivo la altura de la oreja está sobre la elevación del ojo, mientras que en la foto del muerto está aún más arriba que la oreja del vivo.

En cuanto a la comisura de los labios, se realizaron superposiciones en las que se acomodan de manera muy evidente; sin embargo, en la foto del sujeto cuando estaba vivo están más pequeñas que en el fallecido.

En cuanto al tamaño de los huesos del pómulo, estos son más prominentes en el vivo que en el muerto, “a menos que un doctor le haya recomendado rebajarse los huesos; pero es una operación que aquí en México no se lleva a cabo, y sinceramente no creo que se la haya practicado”, afirma.

Por lo que respecta a las “entradas”, si bien son similares, en las fotos del sujeto vivo, están más cerca de la ceja, mientras que en el muerto están más alejadas. Sé que se pueden quitar, pero como es un rasgo genético, las entradas de pelo regresan a su lugar.

–Decía usted que estos rasgos genéticos no cambian. ¿No se modifican cuando la persona muere?

–No. Salvo que el cuerpo esté putrefacto.

–¿Cuál es la conclusión a la que llegan ustedes?

–Que el sujeto que nos están presentando como Heriberto Lazcano no es él. Salvo que tengamos más elementos, más indicios y acceso al expediente, podríamos cambiar de opinión. Hasta ahora, con el conocimiento científico que poseemos podemos determinar que no son la misma persona.

–¿Qué genera este tipo de posibles errores forenses?

–Que la mayoría de la gente no nos crea. Hay casos en la opinión pública que han sido muy sonados – como el de la niña Paulette, en el Estado de México–. No es posible perder años de experiencia y de estudio por el mal manejo que se hace de estas informaciones. A los expertos forenses nos están destruyendo. Son situaciones que desprestigian a los forenses que realmente estudiamos y que tenemos el interés de que esto se resuelva de manera imparcial.

“Espero que los expertos forenses tengamos un lugar preponderante en este tipo de situaciones y que el gobierno mexicano voltee la vista a la ciencia. Dejarse de hacer lucubraciones, cuentos y engañarse a sí mismo. Y que la ciencia permee las investigaciones criminales como se hace en todo el mundo, menos en México”, concluye el último de los entrevistados.

Diego Enrique Osorno. “¿Muerto, vivo? Simplemente, un desaparecido más”. *Proceso* número 1876, 14 octubre 2012. pp 12-16. <https://www.proceso.com.mx/322541/muerto-vivo-simplemente-un-desaparecido-mas>

### **“¿Muerto, vivo? Simplemente, un desaparecido más”**

De traspíe en traspíe, las autoridades del municipio de Progreso, Coahuila, y de la Secretaría de Marina no atinan a desentrañar los entresijos de la operación fortuita del domingo 7 en la que presuntamente fue abatido el líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, en un campo de beisbol llanero que ni siquiera tiene nombre. Menos aún saben explicar cómo desapareció el cadáver de una funeraria de la localidad coahuilense de Sabinas, donde lo raro suele ser lo normal. Y en el colmo de las paradojas, lo único que

prueban las versiones sobre la muerte y desaparición de Lazcano es que si no encuentran el cuerpo, él seguirá vivo.

PROGRESO, COAH. - La carroza de la funeraria García es seguida de madrugada por un convoy de camionetas con hombres armados. Adentro van los restos de otro muerto de la guerra de Calderón. Pero no es un muerto más: es el supuesto cadáver de uno de los Señores de la Guerra, el de Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas abatido 12 horas antes frente a un campo de beisbol de este perdido pueblo coahuilense.

Desaparecer es un verbo que se volvió común en esta región del país en los años recientes: Desaparecen por completo los cuerpos policiacos locales (como en este municipio), desaparece la última letra del abecedario de los titulares de los periódicos y desaparecen personas cada semana. ¿Por qué sería raro que desapareciera también un cadáver, si aquí desapareció ya el asombro ante lo anormal?

En el noreste de México las historias de matanzas y miedo son de sobra conocidas. Y se tiene la certeza de que aún no se conoce todavía lo peor. No se han descubierto todos los cementerios secretos a los que son arrojados cuerpos acribillados de todos los bandos. En Coahuila oficialmente hay mil 700 desapariciones forzadas. Mil 700 probables cadáveres perdidos a los que habrá de sumarse ahora el de un cabo de infantería desertor cuyo apodo menos conocido era El Pagua. Pagua, que significa aguacate grande y desabrido.

Durante los días siguientes a la confirmación oficial de la supuesta muerte de Heriberto Lazcano, en el árido norte de Coahuila se veían más infantes de Marina que en las ciudades costeras del Golfo de México. Pese a que habría protagonizado el golpe más importante del último tramo del gobierno de Felipe Calderón, la tropa destacada aquí no daba muestras de júbilo. Al contrario, se percibía aflicción, la sensación de que la batalla ganada alrededor de un campo llanero fue algo en vano.

Perder el cadáver de quien las autoridades federales tienen como el líder de Los Zetas no es el primer traspie oficial en el que se ve involucrada la Secretaría de la Marina: semanas antes de la reciente elección presidencial presumió la captura del hijo de El Chapo Guzmán, pero resultó ser un vendedor de autos usados en Guadalajara, cuyo padre era un agricultor de Durango.

En comparación con otras fuerzas de seguridad, son pocos los yerros que, por ahora, se le conocen a la Marina. Sin embargo, por mucho, son los más notorios y significativos de todo el sexenio.

¿El error se debió a que la muerte de Lazcano fue un asunto fortuito? ¿De verdad murió el líder de Los Zetas?

En estos pueblos coahuilenses circulan versiones de todo tipo. Unas más estrafalarias que otras. Está la de que el cadáver que aparece en las fotografías difundidas es en realidad el de un escolta de Lazcano, de apodo El Coyote, o bien la de que el líder de Los Zetas estaba malherido y fue sometido con vida, sólo para luego ser liquidado de un balazo en la cabeza por los marinos enardecidos porque uno de ellos habría sido herido durante la refriega.

Especulaciones. Versiones que lo único que prueban es que si no aparece nunca su cadáver, Lazcano seguirá vivo. Vivo como leyenda. Como una leyenda negra más.

Lo que no resultó nada azaroso fue el arribo de cientos de marinos después de los pasados comicios presidenciales. Algunas de las misiones especiales de ese Operativo de Alto Impacto, puesto en marcha a lo largo de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, derivaron en detenciones de mandos de Los Zetas y del CDG (Cártel del Golfo), las dos principales máquinas de guerra operando aquí.

Ante el ataque gubernamental sorpresa, al interior de la banda de la última letra, cuentan reporteros locales, se declaró una alerta máxima. Así, entre otras medidas extremas, 132 reos del Cereso de Piedras Negras fueron liberados el mes pasado para engrosar con urgencia las filas zetas y resistir la incursión marina de fin de sexenio. Y en medio de la tensión generada por esta guerra de baja intensidad, ocurrió el asesinato de un miembro de la familia Moreira, la cual ha gobernado los últimos siete años en Coahuila.

Desde agosto pasado arribaron a este desierto del noreste mexicano marinos de los batallones de infantería números 26 (Huatulco, Oaxaca), 12 (Mazatlán, Sinaloa) y 29 (Coyoacán, Distrito Federal). También llegaron fusileros paracaidistas y por lo menos un comando de las Fuerzas Especiales del Golfo, antes llamadas Batallón Aerotransportado de la Marina.

La presencia de los soldados de la Sexta Zona Militar del Ejército fue opacada por la de los marinos, a quienes desde 2009 el gobierno de Felipe Calderón ha utilizado al límite de su capacidad anfibia para realizar operaciones en tierra, lejos de los mares bajo su jurisdicción.

Asimismo –como muestra del respaldo del gobierno priista de Rubén Moreira a la cruzada marina–, un escuadrón policiaco estatal llamado Grupo de Armas y Tácticas Especiales de Coahuila incrementó sus actividades en las semanas recientes. Una de ellas consistió en matar en un tiroteo a Alejandro Treviño Chávez, sobrino del nuevo líder zeta Miguel Ángel Treviño, según el reporte gubernamental. Horas después de esa muerte, ocurrió el asesinato del sobrino del mandatario estatal. “Familia por familia”, decía el texto de una manta colocada en Piedras Negras.

---

Los pueblos y ciudades de esta región no se convirtieron de un día para otro en un teatro de guerra. Una masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; 49 torsos humanos tirados en Cadereyta, Nuevo León, y así hasta las decenas de fosas clandestinas halladas y el desplazamiento forzado de decenas de pueblos dieron sentido real entre los pobladores a lo que siempre ha significado la palabra “guerra”: muerte, destrucción, huérfanos, sangre, dolor...

Durante los años recientes, en medio de la disyuntiva de una vida narca o una vida militar, las libertades civiles se han ido reduciendo a su expresión más elemental: tal ha sido la suerte de la libertad de prensa, de la libertad de comercio y de la libertad de tránsito, entre otras. En estas mañanas de otoño algunos de los caminos se llenan de neblina, de donde brotan convoyes de camionetas con hombres armados que pueden ser representantes de la ley, o no.

Hubo un tiempo en que las únicas patrullas que se veían por aquí eran objetos decorativos: se trataba de anuncios de la Policía Federal de Caminos colocados a las orillas para “intimidar” a los conductores veloces. Después de la muerte de Lazcano y la desaparición de su cadáver, en la entrada del pueblo de Mina, Nuevo León, cercano a Monclova, Coahuila, había dos solitarios hombres armados hasta los dientes, vestidos con ropa de camuflaje y cubiertos del rostro con una máscara negra. Parecían militares,

pero se trataba de policías locales. Mina es uno de los pueblos donde los cuerpos policiacos están adquiriendo ya una fisonomía castrense. E inclusive la alcaldesa electa de Monterrey, la panista Margarita Arellanes Cervantes, acaba de anunciar que sus mandos policiacos serán marinos.

Unos cuantos kilómetros adelante de la entrada a Mina, en la desviación hacia el desierto de Icamole, está otro retén. Este sí conformado por infantes de Marina.

Algunos kilómetros adelante, en Castaños, Coahuila, se ubica uno de los lugares estratégicos de esta guerra de desgaste. Allí se instaló un puesto naval de seguridad en el que, además de revisar a la mayoría de los vehículos que van rumbo a Monclova y Sabinas, se comandan las operaciones de la zona. Entre las carpas en las que se prepara la comida y se duerme por las noches, uno de los infantes de Marina –que está recién bañado y emana olor a talco– se resiste a responder una broma que se le hace sobre la desaparición del cadáver de Lazcano. Dice que no hay desánimo entre él ni entre sus compañeros. Ni siquiera porque la mayoría de ellos llevan varias semanas lejos de sus mares y sus familias.

Un infante de Marina gana entre 10 mil y 12 mil pesos libres al mes. Más un bono especial por “operatividad”, si es enviado a un Operativo de Alto Impacto, como el que ocurre actualmente en el noreste del país. El monto de dicho bono se conoce cuando concluye el operativo, en función de los resultados. Después de lo que sucedió con el supuesto Lazcano, nadie tiene idea de cuál será el balance final.

Mientras tanto, la búsqueda del cadáver extraviado continúa. La “ganancia” es que, antes de venir a Coahuila, a los marinos destacados en Castaños se les avisó que entraría en vigor la figura de ascenso de grado posmortem, y que se entregarían becas de estudios profesionales a los huérfanos de los caídos.

La tensión que se vive aquí, sobre el terreno del desierto que puede ser tan solitario e imprevisible como el mar, es diferente a la que experimentan los marinos de asfalto que están en la Ciudad de México, quienes en los últimos meses hasta han tenido que salir a dar entrevistas a la televisión. “Digamos que estamos a final de semestre y tenemos que entregar todos los trabajos que nos encargó el profesor, porque si no, nos pueden reprobar”, explica, a la distancia, una fuente de la Secretaría de Marina.

¿Por qué la Marina inclusive decoró y exhibió con billetes y joyas el cadáver de Arturo Beltrán Leyva, mientras que al supuesto cuerpo de Heriberto Lazcano lo abandonó a su suerte en una modesta funeraria de Sabinas?

La respuesta que se da es que en el caso de Beltrán Leyva se trataba de una operación especial (llamada internamente “Cuerno III”) en la cual la Marina actuó empleando información que le había sido suministrada por la DEA. En cambio, lo de Lazcano fue fortuito. Los marinos que acudieron a Progreso no sabían a quién mataron. Les parecía uno más de la cuenta nacional que a finales de 2012 probablemente ronde los 100 mil muertos.

Sin embargo, Lazcano y sus acompañantes traían consigo, entre otras armas, una R-15 adaptada con un dispositivo de lanzagranadas, así como un lanzacohetes con dos proyectiles hábiles. Resulta extraño que eso no pareciera anormal a los marinos y que abandonaran sus cuerpos sin custodia alguna en la funeraria García.

El caso Lazcano sintetiza el drama por el uso brutal de la violencia que se ha denunciado en esta guerra: primero se mata y luego se investiga quién era el muerto. El uso de la fuerza sin inteligencia termina en fracaso. En Ciudad Mier, Tamaulipas, cuando se preguntó a un poblador de rostro acuchillado por el sol cuál era su opinión sobre la guerra que se libraba en la región, respondió: “¿Cuál guerra? Esto es una matazón”.

---

Monclova es considerada por la Marina como “uno de los nidos de zetas”, mientras que un oficial del Ejército prefiere usar el término “hormiguero de zetas”. De Monclova a Sabinas hay 101 kilómetros de distancia que, por ahora, se recorren entre más retenes militares y tiendas de campos menonitas en las que se ofrece queso fresco a los viajeros. A mitad de camino existe una desviación hacia Progreso, a través de una carretera angosta, pero sin duda la mejor asfaltada de toda la zona. Son 24 kilómetros que parecen haber sido remodelados hace poco para un pueblo apartado que no le hace honor a su nombre.

Antes del arco que da la bienvenida al poblado, del lado derecho, está el campo de beisbol donde supuestamente se encontraba el líder de Los Zetas cuando fue abatido por elementos de la Marina. Lazcano presenciaba un partido llanero entre estudiantes de Progreso y de Santa Rita, ejido perteneciente al municipio contiguo de Juárez. Los beisbolistas eran adolescentes preparatorianos que dos semanas antes habían sido agasajados con un guiso de pollo, pelotas y bats nuevos, por parte de Alejandro Garza, líder municipal del PRI, el partido que siempre ha gobernado este ayuntamiento, cuya cabecera cuenta con apenas 770 habitantes.

El campo no tiene nombre alguno, y en él no sólo se juega beisbol. Es un espacio usado también en ocasiones para lazar becerros y jugar partidos de fut. Cerca está un canal de agua que va hacia las pocas tierras de labor del poblado, en su mayoría de pastizales, aunque en una que otra se siembra sandía y maíz.

Tres meses atrás, los pobladores estaban preocupados por su economía, ya que fueron cerrados los rústicos pozos de explotación de carbón de los que han vivido siempre, debido a una racha de tres accidentes en la región que mató a cerca de una veintena de mineros. Sin embargo, a la par del cierre de los llamados “pocitos”, Pemex anunció la construcción en Progreso de una subestación como parte del proyecto de la Cuenca de Burgos, esa rica veta de gas natural casi virgen debajo de la cual se libra esta guerra.

Funcionarios locales y pobladores reiteran que el supuesto Lazcano y su acompañante no eran personas conocidas en la localidad. Que la Ford Ranger blanca doble cabina en la que viajaban nunca la habían visto. Que lo que les preocupa es que ya no regrese la tranquilidad con la que siempre se ha vivido aquí, y por ello, al día siguiente de la muerte de Lazcano organizaron en la plaza principal el concierto de un acordeonista que tocó polkas y tangos casi en solitario. Como casi en solitario estuvieron las escuelas, adonde solamente acudieron, en preescolar, tres niños de 60; en primaria, 10 de 100, y en secundaria, 20 de 28.

Otra cosa que hizo el ayuntamiento fue reimpulsar una exhibición itinerante de aves que llegó hace días al teatro Manuel Acuña. Tecolotes, periltas, codornices, capulíneros, correcaminos y otras especies

disecadas son mostradas dentro de un cristal para que los niños las aprecien de cerca y las pinten sobre unos diminutos caballetes que también forman parte de la muestra.

Dos días después de confirmarse la muerte de Lazcano, que puso al perdido Progreso en la mira nacional e internacional, las autoridades locales consiguieron que la exhibición se quede hasta el jueves 18 de octubre.

Por ahora, a nadie se le ocurre organizar partidos de beisbol en la cancha de la entrada, que está tan sola que se oyen los zumbidos de los insectos de los matorrales cercanos.

Por la avenida Miguel Hidalgo, la principal (y la única) de Progreso, un empleado municipal conduce una pick-up pequeña y perifonea invitando a los progresenses a conocer el museo de aves. En algún momento se topa con un convoy de hombres armados. Son seis camionetas llenas de infantes de Marina que regresan al lugar donde presuntamente murió Heriberto Lazcano, el líder de Los Zetas que fue visto por última vez en una carroza fúnebre de estas tierras del noreste de México, donde lo raro es lo normal.

Anabel Hernández. “La historia secreta de “El Lazca””. *Proceso* número 1876, 14 octubre 2012. pp 18-20. <https://www.proceso.com.mx/322635/la-historia-secreta-de-el-lazca>

### **“La historia secreta de “El Lazca””**

El gobierno federal no necesita de la DEA para ofrecer datos contradictorios sobre Heriberto Lazcano, el ultimado líder de Los Zetas, ya que los propios archivos militares, policiales y del Cisen ofrecen versiones distintas. Sin embargo, una ficha realizada por este centro de espionaje controlado por Gobernación, que abarca hasta 2007, contiene datos inéditos sobre la trayectoria del capo, historia que hasta ahora se mantenía en secreto.

MÉXICO, D.F. (Proceso). - Heriberto Lazcano Lazcano se convirtió en un dolor de cabeza para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde el 18 de febrero de 1998, cuando fue detenido por primera vez en Reynosa, Tamaulipas, en una camioneta Chevrolet Silverado con 325 kilogramos de marihuana. Y todo indica que lo seguirá siendo, aun después de que el gobierno federal lo ha declarado muerto.

En ese momento El Lazca o Z-3, como también se le conoce, ya había cruzado la línea que separaba su trabajo como policía judicial federal adscrito a Tamaulipas y la ilegalidad. Trabajaba ya para el crimen organizado, al que perteneció hasta el domingo 7, cuando fue presuntamente acribillado por la Marina. Su carrera criminal dejó una estela de muerte, violencia e impunidad.

Proceso accedió a una ficha elaborada en 2007 por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y que concentra información recabada durante años por esta oficina de inteligencia.

La ficha dibuja claramente la trayectoria del cabo de infantería que se convirtió en uno de los criminales más violentos y poderosos en la historia de México, cuya organización –bautizada como Los Zetas– importó tácticas, disciplina y usos y costumbres del Ejército para el servicio del crimen organizado, lo que aumentó su eficacia y peligrosidad.

Dicha información contiene datos hasta ahora desconocidos y revela un punto de quiebre, cuando el buscado narcotraficante y líder del grupo paramilitar decidió dejar las filas del gobierno para trabajar de lleno en las del narcotráfico. Ésta es la historia secreta de El Lazca.

### **Nació en Navidad... tal vez**

Heriberto Lazcano Lazcano, también conocido como El Verdugo, nació en la Navidad de 1974 en Pachuca de Soto, Hidalgo, se afirma en la ficha del Cisen. Esta información coincide con aquella que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) difundía en su página electrónica ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares por el líder de Los Zetas. Aunque la ficha también señala que “en los registros de Estados Unidos aparece como fecha de nacimiento el 1 de enero de 1970”.

Llama la atención que la fecha de nacimiento registrada por el Cisen no coincide con la del banco de datos del gobierno federal –hasta ahora desconocido–, en el cual presuntamente se consultaron las huellas dactilares del cadáver que el gobierno identifica como el de Lazcano. De acuerdo con ese archivo, el capo nació en 1975. Que haya una discrepancia entre el gobierno de EU y México no es extraordinario, pero una discrepancia entre los registros del propio gobierno federal sí llama la atención.

Al padre de El Lazca se le menciona como Gregorio Lazcano García y a su madre como Amelia Lazcano Pérez. A Verónica Abigaíl Flores Rodríguez se le ubicaba como una de sus parejas sentimentales.

Información de la Sedena obtenida por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que Heriberto Lazcano se dio de alta en el Ejército el 5 de junio de 1991, a los 17 años. Ingresó como uno más de la tropa, con la matrícula B-9223601, y en 1993 ascendió a cabo de infantería, el primer escalón de la jerarquía militar. En ese puesto, reconoce la Sedena, aprendió el manejo de “armamento especial” y a “comandar escuadras”.

Según la mencionada ficha del Cisen, Lazcano fue integrante del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFFE), cuerpo de élite creado, irónicamente, para combatir al narcotráfico.

### **De “gafe” a “judas”**

Según la información del Cisen, a los 23 años Lazcano causó alta en la Procuraduría General de la República (PGR) como policía judicial federal y fue destacado en Tamaulipas, tierra del Cártel del Golfo cuyo líder, Juan García Ábrego, fue detenido y extraditado en 1996. Cuando Lazcano llegó al estado, el nuevo capo era Osiel Cárdenas Guillén, apenas siete años mayor que él.

De acuerdo con información recabada por fuentes militares, en 1997, cuando Enrique Cervantes Aguirre era secretario de la Defensa, comisionó a cientos de soldados para reforzar las operaciones de la ya muy corrompida Policía Judicial Federal que dirigía el general Guillermo Álvarez Nahara. Fue uno de los primeros experimentos serios del gobierno federal de sacar a miembros del Ejército de sus cuarteles y encargarles tareas policíacas, con resultados terribles.

En Tamaulipas esos jóvenes policías pronto fueron cooptados por el Cártel del Golfo; uno de ellos era Lazcano. Y con el tiempo se convirtieron en el brazo armado de la organización delictiva, los temidos Zetas.

En la ficha del Cisen se establece que Lazcano ingresó a la PGR el 15 de junio de 1997 como “agente C”, fue asignado a la delegación de Tamaulipas y dado de baja el 30 de octubre de 1997.

El documento informa que el narcotraficante perteneció al GAFE, del cual no desertó sino que se dio de baja el 15 de abril de 1998. El lema del cuerpo militar era: “Ni la muerte nos detiene y si la muerte nos sorprende, bienvenida sea”, el cual parece haber aplicado El Lazca en su carrera delictiva.

El 18 de febrero de 1998 personal de la Sedena detuvo en Reynosa, Tamaulipas, al Lazca con Julián Ramírez Carranza, Roberto Pérez Sierra y Martiniano de Jesús Jaramillo Silva. Se les aseguró un vehículo Chrysler Dodge tipo Van, modelo 1983, con placas de circulación ZYJ2795 de Estados Unidos, así como una camioneta GMC Chevrolet Silverado pick up, modelo 1994, color café y sin placas de circulación. Llevaban 325 kilos de mariguana y un teléfono celular, señala el documento confidencial del Cisen.

Esto ocurrió sólo ocho meses después de que el hidalguense había llegado como policía judicial a Tamaulipas, lo que revela que la cooptación del Cártel del Golfo a los gafes convertidos en judiciales fue muy rápida. Junto con Lazcano también se pasó a las filas del crimen organizado otro gafe que se desempeñaba como judicial: Arturo Guzmán Decena, el primer líder de Los Zetas.

En ningún renglón de la ficha se explica por qué, pese a la detención y el decomiso de droga, Lazcano fue puesto en libertad. Sólo se indica que después del suceso fue dado de baja de la PGR y del Ejército.

Según el archivo del Cisen, el primer gran escándalo en el que se implicó Lazcano fue el asesinato del comandante Jaime Rajid Gutiérrez Arreola, de la PJF, el 21 de marzo de 1999, a la altura del kilómetro 8+900 de la carretera Reynosa-Camargo.

El boletín número 244/99 de la PGR informa textualmente que por este homicidio se giró orden de aprehensión:

“Por la comisión de diversos delitos como son: Delincuencia Organizada, Homicidio, Contra la Administración de Justicia, Abuso de Autoridad y Encubrimiento, entre otros, en contra de: Lic. Carmen Oralio Castro Aparicio, ex-delegado de la PGR en el estado de Tamaulipas; Lic. Aurelio Soto Huerta, ex-subdelegado; Andrés y José Isabel López Rivas, Gabriel Ángel Gutiérrez Portillo y Ramiro García Eugenio, todos ellos ex-agentes de la Policía Judicial Federal; Juan Antonio Contreras Domínguez (a) El Tony y Manuel de Jesús Siordia Franco (a) El Manolo (civiles extraños a la delegación estatal); Eduardo Rendón López, Ministerio Público de la Federación; y Jorge Calderón Frías, médico legista del gobierno del estado de Tamaulipas; así como del narcotraficante Oziel Cárdenas Guillén.”

Ahí se afirma que la muerte de Gutiérrez Arreola “no fue resultado de un enfrentamiento a balazos con narcotraficantes, como se quiso hacer creer en la investigación original que se practicó por la delegación estatal de la PGR en Tamaulipas, sino que ésta se debió a una discusión por cuestiones monetarias derivadas de actividades ilícitas, en la cual estuvieron presentes: Carmen Oralio Castro Aparicio, Aurelio Soto Huerta, Juan Antonio Contreras Domínguez (a) El Tony, Manuel de Jesús Siordia Franco (a) El Manolo, Andrés y José Isabel López Rivas, Gabriel Ángel Gutiérrez Portillo y Ramiro García Eugenio, así como, a dicho de los inculpados, el narcotraficante conocido como Oziel Cárdenas Guillén”.

Pero en la ficha del Cisen se agrega que, según testimonio de la colombiana Andrea Posada Williamson, novia de Cárdenas Guillén detenida en noviembre de 2000, para entonces Lazcano ya era el encargado de la seguridad del capo del Cártel del Golfo.

### **Domicilios sospechosos**

En la ficha del Cisen, que data de 2007, se hace referencia a varios domicilios relacionados con Lazcano, los cuales, se puede suponer, eran pistas para localizarlo. Pese a esto el capo no fue aprehendido.

El gobierno federal investigaba las siguientes direcciones en Pachuca: Privada Valle de Seco, casa 4, fraccionamiento Arboledas de San Javier; Retorno 4, Camelias 122, fraccionamiento Paseo de Camelias; Valle Imperial 150, fraccionamiento San Javier; y avenida Álamo y calle de Sabino 107, en la colonia Tezontle, donde Lazcano patrocinó la construcción del centro de catequesis Juan Pablo II de la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.

También se relacionaba con él un domicilio en Vicente Rivapalacio 805, colonia Guadalupe Victoria, de Coatzacoalcos, Veracruz.

La ficha detallaba: “Información reciente señala que conduce una camioneta Sonora color azul con placas XBP1224, registrada a nombre de Jorge Reynaldo Alvarado Aguilar, con domicilio en calle La Playa, colonia Villa del Mar en Matamoros, Tamaulipas”, así como otro vehículo con matrícula RZV4109 que tenía registros de viajes a Estados Unidos y relacionaba a Los Zetas con ciudadanos de Jordania: “Las personas que manejan estos dos vehículos tienen conocidos en el mismo domicilio en San Antonio, Texas; uno de estos asociados es de nacionalidad jordana”.

Y se añade un domicilio más “en Plaza San Marcos Poniente 204, de la colonia Valle de San Ángel, Sector Francés, en Garza García, Nuevo León, el cual es utilizado por dos o tres presuntos kaibiles y una persona no identificada, al parecer Heriberto Lazcano Lazcano”.

Pese a toda esa información el gobierno nunca dio con él. Ahora, cuando oficialmente está muerto, lo sigue buscando.

J. Jesús Esquivel. “Cautela en Washington”. *Proceso* número 1876, 14 octubre 2012. pp 14-15.

### **“Cautela en Washington”**

WASHINGTON. -Si bien aplaudió a las autoridades mexicanas por la presunta eliminación del líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, la DEA se deslinda: “Nosotros no participamos absolutamente en nada, no fuimos nosotros quienes ubicaron al criminal abatido”, dice a *Proceso* un agente de la agencia antidrogas que trabaja en la zona de la frontera norte de México y quien por razones de seguridad pide el anonimato.

El domingo 7, la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) informó que sus hombres abatieron a tiros al Lazca y a uno de sus acompañantes cuando asistían a un partido de beisbol llanero en la localidad de Progreso, en el estado de Coahuila, en un incidente que, según las autoridades mexicanas, fue fortuito.

El lunes 8 los medios informativos de México destacaron que, de acuerdo con la Marina, uno de los dos hombres abatidos el día anterior en el poblado coahuilense presuntamente era el líder de Los Zetas. Horas después la institución ratificó que, tras comparar las huellas dactilares del cadáver con las que el Ejército tenía en su base de datos, podía asegurarse que El Lazca sí cayó en el enfrentamiento del domingo 7.

Pero las dudas afloraron no obstante lo declarado por la Semar, sobre todo porque algunas características del supuesto cadáver del capo no coinciden con los datos de la ficha elaborada por el gobierno de México ni con la de la DEA.

“Lo increíble es que se hayan robado el cadáver. Este hecho vergonzoso provoca dudas sobre su identidad, aunque efectivamente se haya dado muerte a Lazcano Lazcano”, apunta el agente de la DEA consultado por el corresponsal.

La ficha del gobierno mexicano estipula que El Lazca tenía 1.60 metros de estatura, pero la DEA anota que medía 1.76 metros. Lo cierto es que el cadáver robado medía 1.80 metros, de acuerdo con la información de la propia Semar.

“No vimos el cadáver ni pudimos comparar las huellas dactilares de éste con las que teníamos del Lazca en nuestros archivos. No tenemos otra alternativa más que creerle al gobierno de México”, subraya el agente entrevistado.

Tras el robo del cadáver del presunto jefe de Los Zetas, Proceso consultó varias fuentes del gobierno de Estados Unidos. Una de ellas, que trabaja en una agencia federal en Laredo, Texas, sostiene que después de que los marinos hicieron el anuncio oficial de la muerte del Lazca, los sistemas de inteligencia de Washington en México “parecían dar por confirmada” la baja del jefe zeta.

“Si tuviéramos que marcar las posibilidades de su muerte en una escala, diría que estamos en 90% de probabilidad –comenta–. Además, hay un hecho muy extraño de suma importancia: la plaza de Nuevo Laredo está muy calmada y callada. Nuestras fuentes de inteligencia nos dicen que se debe a que el Cártel de Los Zetas se está reagrupando por la baja de un alto mando.”

Y aun cuando la organización está reconfigurando sus mandos por la presunta baja de uno de sus líderes, el gobierno de Estados Unidos se muestra preocupado, pues, según la fuente, los sicarios de ese grupo “pueden reaccionar con más violencia cuando designen al sucesor del Lazca”.

Comenta que si bien la agencia en la que labora considera que Miguel Ángel Treviño, El Z-40, asumirá todo el control del cártel, “el gobierno mexicano tiene que estar muy bien preparado y listo para confrontar la reacción”, sobre todo en el norte de Nuevo Laredo, ciudad identificada como la sede de las operaciones de Los Zetas.

Al darse a conocer el anuncio oficial de la muerte del Lazca en el “operativo fortuito” de la Marina, el gobierno de Barack Obama se abstuvo de comentar la noticia. Ni la DEA ni el Departamento de Estado mencionaron el tema.

No fue sino hasta cuatro días después cuando el vocero de la DEA, Rusty Payne, distribuyó un breve comunicado, escrito con un lenguaje cauteloso: “El presidente mexicano Felipe Calderón y su secretario

de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, han confirmado la muerte del líder del Cártel de Los Zetas, Heriberto Lazcano”.

Y aun cuando la agencia felicitó a las autoridades mexicanas “por su reciente serie de éxitos en abatir los liderazgos de las organizaciones criminales transnacionales que operan en México”, en ningún momento dejó entrever que el gobierno estadounidense avalaba la confirmación de la identidad del cadáver.

La DEA no aludió al operativo en el que elementos de la Semar supuestamente mataron al Lazca. Se limitó a señalar que “con la muerte de Lazcano el gobierno de México ha capturado o asesinado a 25 de las 37 figuras del crimen más buscadas”.

Bajo la condición de que no se dé a conocer su identidad, un funcionario del gobierno mexicano comenta a Proceso que la cautela de la DEA, y en general del gobierno de Obama, se justifica ante los recientes ridículos en que han incurrido las autoridades de México al anunciar golpes a las estructuras de poder de los cárteles que han resultado acciones equivocadas.

“Era casi imposible que la DEA reaccionara confirmando la muerte del Lazca –dice–. La DEA aprendió su lección cuando el 21 de junio (de este año) la Marina informó sobre la detención del joven Jesús Alfredo Guzmán Salazar, presunto hijo del Chapo (Joaquín Guzmán Loera, jefe del Cártel de Sinaloa), e inmediatamente se apresuró a aplaudir al gobierno mexicano por el golpe. “De manera muy vergonzosa, 24 horas después de aplaudir la detención, la DEA desmintió la noticia y aclaró que el joven arrestado no era el hijo del Chapo.”

Consultadas por este semanario, las autoridades de los dos países involucradas en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado no ocultan su perplejidad por el robo del cuerpo del presunto líder zeta.

“Es inaudito lo que pasó con el cadáver. No se entiende por qué la Marina –la institución más respetada, la que más golpes ha dado al narcotráfico– haya descuidado el cadáver”, comenta el funcionario mexicano.

Y añade: “Tomando en cuenta que cuando mataron a Arturo Beltrán Leyva (el 16 de diciembre de 2009) en un operativo en Cuernavaca, lo primero que hicieron fue resguardar el cadáver e incluso tomarse fotos, muy criticables por cierto, con el cuerpo abatido. La única explicación al error del domingo (7 de octubre) es que (los marinos) no sabían a quién habían matado”.

En las agencias estadounidenses, según las fuentes consultadas, no dudan que la supuesta baja del Lazca pudiera debilitar al grupo criminal, aun cuando El Z-40 –quien “estaba en disputa abierta con Lazcano Lazcano”– lo remplace, por lo que, dicen, el gobierno de México debe aprovechar para fortalecer su estrategia contra el cártel.

“Creo que este es el momento oportuno para darle un golpe muy duro y efectivo a Los Zetas en las plazas donde aparentemente ejercen su dominio. Por lo que ocurre en Nuevo Laredo, se podría deducir que (sus integrantes) están confundidos y que esto puede causar una escisión en sus estructuras de mando que no le convendría a nadie. “El gobierno mexicano tiene que analizar muy bien la situación para sacar ventaja de ello”, agrega el funcionario estadounidense que trabaja en Laredo.

Las fuentes consultadas hacen hincapié en otro de los aspectos que el gobierno de México debe tomar en cuenta: que con la presunta muerte del Lazca y el supuesto debilitamiento de Los Zetas, el único beneficiado de manera natural es el Cártel de Sinaloa, liderado por El Chapo Guzmán.

Rodrigo Vera. “Lo esperan en El Tezontle”. *Proceso* número 1876, 14 octubre 2012. pp 20-24.  
<https://www.proceso.com.mx/322545/lo-esperan-en-el-tezontle>

### “Lo esperan en El Tezontle”

Quién sabe por dónde ande el cuerpo de Heriberto Lazcano, pero los habitantes de la colonia El Tezontle, en Pachuca, están seguros de que tarde o temprano descansará en el mausoleo que se mandó construir ahí. También lo presienten las autoridades federales que ni muerto pudieron capturarlo, a juzgar por el operativo terrestre y aéreo que montaron alrededor del cementerio.

PACHUCA, Hgo. - Don Andrés Torres, el viejo encargado del panteón de la colonia El Tezontle, señala el mausoleo destinado a guardar los restos del narcotraficante Heriberto Lazcano y luego comenta ensimismado:

“No me han dado aviso para cuándo van a sepultar aquí al señor Heriberto. Es más, ni siquiera sé si planean traer aquí sus restos. No sé nada.

—¿Ya le hubieran avisado?

—Pues sí, y sobre todo porque a don Heriberto todos aquí le están muy agradecidos. Él ayudó muchísimo a su gente. Les daba apoyo a los necesitados y mandaba construir las obras que hicieran falta en la colonia El Tezontle, donde vivió de chamaco.

Don Andrés se acomoda el sombrero texano de alas enroscadas y, sin quitar la vista del mausoleo, prosigue su relato:

“Siempre se ha dicho que don Heriberto quería que lo sepultaran aquí. Deseaba que sus restos descansaran en el lugar que lo vio crecer, junto a los suyos. Unos dicen que ya lo mataron y que su cadáver anda desaparecido, otros dicen que todavía vive. Solo Dios sabe... Pero a este panteón no han traído su cadáver.”

Entre las pequeñas y desteñidas tumbas cubiertas de abrojos destaca el enorme mausoleo de El Lazca: es una construcción rectangular de unos cuatro metros de frente por 12 de fondo, forrada con azulejos de tonos beige; sus puertas y ventanas —con marcos de madera fina barnizada— tienen vitrales con motivos religiosos. Una gran cruz metálica se erigió afuera del mausoleo, bordeado por jardineras y por un área de pasto bien cuidado.

Destella el verdor de los bambúes y de las plantas de ornato. Adentro se puede observar un altar con un Cristo flanqueado por floreros de plata.

Desde el pasado lunes 8, tan pronto se dijo que El Lazca fue acibillado y su cadáver robado de una funeraria de Coahuila, el panteón de El Tezontle se convirtió en el centro de una fuerte vigilancia militar, pues las autoridades suponen que en cualquier momento los restos del capo serán traídos al

mausoleo que se mandó construir. Por tierra, varios vehículos repletos de soldados hacen rondines constantes en torno al panteón, recorren las calles y vigilan los rincones de El Tezontle. Y según reportes de la policía estatal, se incorporarán carros todo terreno Hummer para reforzar al operativo.

Por aire, helicópteros Black Hawk pertenecientes a la Secretaría de Marina están rondando una y otra vez todo el caserío de El Tezontle, una colonia de 10 mil habitantes enclavada en los paupérrimos suburbios del sur de Pachuca. Este aparatoso despliegue militar tiene un objetivo muy preciso; recuperar el cadáver perdido de El Lazca, que días antes un comando armado robó de la Funeraria García, de Sabinas, Coahuila.

Por su parte, los pobladores de El Tezontle están consternados porque saben que, de ser cierta la muerte de su gran benefactor, su situación cambiará radicalmente. El Lazca aquí creció, aquí comenzó su carrera militar y, ya convertido en poderoso narcotraficante, nunca olvidó su querencia.

Un militar que fue compañero de Heriberto Lazcano cuando éste recién ingresó al Campo Militar número 18, situado justamente a la entrada de El Tezontle, recuerda aquellos años:

“El Lazca y su familia venían de Apan, Hidalgo. Llegaron aquí como llegan muchas familias a la capital del estado, en busca de una mejor vida. Y como aquí hay un campo militar, para El Lazca lo más fácil fue ingresar al Ejército, sabiendo que tendría comida, techo y trabajo asegurado. Yo lo conocí en ese tiempo, a principios de los noventa, porque coincidimos en el campo militar.”

—¿Cómo era él entonces?

—Era un jovencito delgado y alto, mediría entre 1.75 y 1.80 de estatura. Muy callado y disciplinado. Tendría entonces unos 17 años. Era muy respetuoso con sus superiores y nunca se prestaba a las bromas ni a los chascarrillos.

—¿Y de qué platicaba con él?

—Bueno, realmente era sólo un compañero más, no éramos lo que se dice amigos, de modo que platicábamos sobre la disciplina y el adiestramiento militar, sobre lo pesado del encierro en el cuartel, un poco sobre nuestras familias... Fue entonces cuando me dijo que vivía aquí mismo, en El Tezontle.

“Y como estábamos en un batallón de infantería, pues nos ponían a correr y a saltar obstáculos en el campo que está dentro del cuartel. También nos ponían a hacer ‘patitos’, que es brincar en cuclillas con las manos agarradas a los tobillos; o a hacer ‘aguilitas’: saltar igual pero con los brazos extendidos como águila y gritando ‘¡Atila! ¡Atila! ¡Atila!’ . Nos enseñaban a marchar, a hacer guardias y a manejar armas, sobre todo el fusil G-3.

“Era un entrenamiento básico. El Lazca era un soldado raso cualquiera. Yo francamente no le prestaba mucha atención. Quién se imaginaba que con el tiempo se convertiría en un hombre tan importante. En el 94 me mandaron a Chiapas cuando se dio el levantamiento zapatista. A partir de entonces lo dejé de ver.”—¿Pero tuvo noticias de él?

—Sí, claro. Por algunos compañeros supe que El Lazca empezó a tomar adiestramientos especiales, cursos de supervivencia y manejo de armamento pesado. Supe que se fue a Guatemala a tomar el curso de kaibil. No me extrañó porque siempre fue muy tenaz. Sí me sorprendí cuando después me dijeron que

había desertado del Ejército. “Pero la sorpresa mayor fue darme cuenta, años más tarde, de que aquel chamaco reservado se había convertido en líder de Los Zetas y en un hombre sanguinario. Su adiestramiento militar sin duda le sirvió muchísimo ya como narcotraficante.”

### **La casa grande y la capilla**

Transformado en El Verdugo –así le apodaron porque le gustaba matar a garrotazos a sus víctimas o colgarlas de las extremidades rotas hasta que murieran–, el poderoso capo fue, sin embargo, un hombre muy religioso y desprendido con la gente de El Tezontle, al grado de que les mandó construir una enorme y suntuosa capilla en la que siguen dándose todo tipo de servicios religiosos.

Un habitante de muchos años de la colonia, quien pide omitir su nombre, relata:

“Siendo muy joven El Lazca solía asistir a las misas en la parroquia de Nopancalco, la colonia que colinda con El Tezontle, puesto que aquí sólo había una pequeña capillita. Le molestaba mucho que su colonia se viera relegada de esa manera. Por eso cuando empezó a tener dinero se encargó de solventar los gastos de la fiesta del barrio, dedicada a la Virgen de la Candelaria y que se celebra toda la primera semana de febrero.

“Año con año, El Lazca mandaba traer los juegos mecánicos de la feria y ponía un letrero que decía: ‘Todo gratis’. Sí, señor, durante toda la semana nadie pagaba por subirse a la rueda de la fortuna, a los caballitos o a lo que fuera. Traía bandas de música y fuegos pirotécnicos para que la gente se divirtiera sanamente.

“Nunca le gustó que hubiera cantinas porque el alcohol sólo echa a perder a la juventud, mucho menos venta de droga. Por eso usted no verá ninguna cantina por aquí. Nada de alboroto de borrachos en la madrugada, ni pleitos ni asesinatos. Aquí le gente es muy pacífica y se acuesta temprano.”

Refiere que El Lazca después se mandó construir su casa en la zona más alta, encaramada sobre una colina desde la que se dominan todo El Tezontle y el Campo Militar número 18.

Pintada de blanco, la llamada “casa grande” es una amplia construcción de tres pisos, con techos de dos aguas y balcones aquí y allá. Una bandera de México ondea en uno de sus costados. Se dice que ocasionalmente el narcotraficante llegaba ahí a descansar de sus correrías, a relajarse por un corto tiempo, sabiéndose protegido por los agradecidos lugareños como si fuera un gran señor en su feudo.

Bajo la colina de la “casa grande” se extienden un campo de fútbol bien empastado, dos canchas de basquetbol y un ruedo para los aficionados a los caballos y a la bravura de los toros. Explica el entrevistado:

“Es el centro deportivo que mandó construir El Lazca con la intención de que los jóvenes practiquen algún deporte y se alejen de las drogas y el alcohol. Anteriormente ahí había un polvoriento banco de tezontle adonde llegaban los camiones materialistas para recoger esa piedra rojiza que se utiliza en las construcciones de Pachuca. De ahí que a la colonia se le haya bautizado como El Tezontle.”

–¿Cómo le hacía El Lazca para realizar obra pública?

–Tal vez moviendo sus influencias en el gobierno municipal. El dinero lo puede todo. Hay la versión que El Lazca también mandó pavimentar las calles de la colonia, algunas hasta con asfalto hidráulico. Resulta extraño que las colonias colindantes sigan con muchas calles de tierra.

El 2 de febrero de 2009, justo el día de la Candelaria, El Lazca logró realizar un viejo sueño; inaugurar la amplia y suntuosa capilla que había mandado construir, mucho más grande que las parroquias de la zona a las que acudía de joven. Ese día hubo un gran festejo inaugural con bandas de música, misas, tamaliza, cohetes y demás fuegos artificiales que corrieron por cuenta del “piadoso” capo. El edificio tiene una cruz metálica, similar a la del mausoleo, que se yergue muy alta dominando el vasto arrabal. Sus jardines, patios, muros de colores encendidos, amplias puertas y ventanales de cristal hacen de la capilla un remanso de lujo para la nutrida feligresía local.

Al espacioso y moderno interior lo iluminan vitrales de tonos azulados. Y en el altar –bajo un vitral que tiene la figura de una paloma–está la escultura de la Virgen de San Juan de los Lagos con su vestido ampón.

Atrás de la capilla El Lazca mandó construir un centro de evangelización y catequesis para dar formación religiosa a niños y jóvenes, con el consentimiento de monseñor Domingo Díaz, arzobispo de Tulancingo y principal autoridad eclesiástica del lugar.

Ahí el líder de Los Zetas mandó colocar una placa metálica que dice: “Centro de Evangelización y Catequesis Juan Pablo II. Donado por Heriberto Lazcano Lazcano. ‘Señor, escucha mi oración, atiende mis plegarias, respóndeme, tú que eres fiel y justo’, salmo 143”.

En octubre de 2010, el Congreso de Hidalgo pidió que se investigaran los recursos con que se construyó la capilla. Algunos legisladores señalaron que la película El Infierno –en cuya trama un cura es cómplice de un capo local– se quedó corta ante la realidad hidalguense.

De inmediato, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa AP/PGR/PACH/I-V/752/2010 para indagar si los recursos del narcotráfico se destinaron a la construcción. El presunto delito fue lavado de dinero contra quienes resultasen responsables, así fuera el arzobispo Díaz o algunos de sus párrocos (Proceso 1775). Finalmente, las autoridades judiciales y eclesiásticas pasaron por alto este ilícito. La capilla ni siquiera se cerró y ahí siguen realizándose misas y otras ceremonias religiosas. En su portón de acceso hay actualmente un cartel donde se enlistan las “actividades del mes de octubre”: desde rosarios vivientes hasta festejos a San Francisco de Asís.

Comenta el entrevistado al respecto: “El gobierno siempre se ha hecho de la vista gorda. Sabe muy bien que la capilla y mucha obra pública la realizó El Lazca. Éste seguido mandaba arreglar con flores la fachada de la capilla, poniendo un letrero que decía: ‘Cortesía de la familia Lazcano’.

Además, ahí continúa la placa metálica donde se dice que él realizó la construcción. Más claro ni el agua”.

–De estar muerto, ¿la comunidad intentará meter el cadáver del narco a su mausoleo?

–Sí, tiene la obligación de hacerlo en un gesto de gratitud por todos los favores que recibió de El Lazca, a quien aquí se le ve como un héroe y un ejemplo a seguir. Lo más fácil sería incinerar su cadáver, esperar a que termine la vigilancia militar y luego meter sus cenizas al mausoleo.

Así como hay rondines militares y sobrevuelos de helicópteros que buscan el cadáver, los pobladores se organizan para realizar sus propios patrullajes a bordo de camionetas. Es común ver a sus conductores recorriendo muy despacio las calles, observando con recelo a cualquier fuereño y pasando información por teléfono celular.

“La misma comunidad está vigilando. Además, en El Tezontle existe una red de halcones al servicio de Los Zetas. El cártel está al tanto de cada movimiento de los militares”, dice el entrevistado. En el pequeño panteón de bardas blancas, don Andrés Torres continúa a la espera. Levanta la vista y entrecierra los ojos para observar a un helicóptero Black Hawk que, como zopilote al acecho, pasa ronroneando sobre su cabeza para luego perderse. “En este mausoleo ya descansan los restos de la madre de don Heriberto Lazcano. A veces vienen sus familiares a traerle flores a la señora... Sería bueno que el hijo le hiciera compañía”, dice el viejo panteonero.

Hugo Martínez Téllez. “La estructura zeta intacta”. *Proceso* número 1876, 14 octubre 2012. pp. 24-27. <https://www.proceso.com.mx/322546/la-estructura-zeta-intacta>

### **“La estructura zeta intacta”**

El gobierno de Felipe Calderón festeja la presunta muerte de El Lazca como si se tratara de un golpe letal a Los Zetas. Pero aun en caso de ser cierto que el líder de ese cártel cayó abatido por balas de la Marina, otro mando ocupa ya su lugar, y detrás de éste habrá decenas más que esperan su turno en un riguroso escalafón... El secreto de la estabilidad zeta es una estructura sólida, una temeraria eficacia asesina y una diversificación de actividades criminales tan avasallante que le ha permitido expandirse en el país y más allá de sus fronteras... Una estructura, en suma, que no se derrumbará sólo por la ejecución de uno de sus cabecillas.

Sus relaciones comerciales van de Sudamérica a Europa. Sus actividades criminales –secuestros, ejecuciones y extorsiones, además del trasiego de drogas– ya cruzaron las fronteras: en Centroamérica ejercen un gran control y Estados Unidos no escapa a su influencia. Y partes importantes de la administración pública de algunas entidades federativas no funcionan sin su visto bueno.

Nada de esto sería posible sin una estructura sólida y bien articulada, una mezcla de disciplina militar y efectividad empresarial aceiteada con millones de dólares. Eso es lo que lograron Los Zetas ante la inacción crónica y la alta corruptibilidad de las autoridades mexicanas.

Con la más alta preparación en el manejo de armamento y explosivos, telecomunicaciones, estrategias de contrainsurgencia y operaciones de inteligencia que adquirieron en las Fuerzas Armadas, Los Zetas son considerados en el mundo como el grupo criminal más sólido, pragmático y eficaz, además de tener la reputación de ser el más sanguinario.

Desde que decidió independizarse de su antiguo empleador –el Cártel del Golfo– y abordar directamente el negocio de los estupefacientes, esa máquina letal que son Los Zetas (formada en su origen por exintegrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales adiestrados por kaibiles) no ha dejado de crecer, afianzarse y extender sus redes.

Dicha estructura, además, tiene un gran poder corruptor; tanto que hay estados de la República totalmente controlados por ellos e incluso, según un informe del FBI fechado en 2008, habría tocado a funcionarios del más alto nivel en el sexenio de Vicente Fox (Proceso 1635).

En 2007 un desertor de Los Zetas concedió una entrevista al reportero Ricardo Ravelo, en la que reveló cómo funciona el grupo delictivo (Proceso 1619).

En el norte, dijo esa fuente que pidió el anonimato, Los Zetas tienen influencia desde Tamaulipas hasta Piedras Negras, Coahuila. Todas las plazas en esas entidades tienen un jefe y protección local.

Los Zetas, agregó, tienen su propio círculo de seguridad: La Guardia. Este grupo paralelo vigila las entradas y salidas de los pueblos desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Piedras Negras, Coahuila.

Además de La Guardia, Los Zetas disponen de una estructura encargada de las finanzas. En cada plaza hay cinco o seis personas, con sus respectivos auxiliares, que llevan la contabilidad. Muchos son intocables: los altos mandos del grupo armado acuerdan con los jefes policiacos locales que se les deje operar sin molestia.

Entre las funciones del área administrativa están: recaudar el dinero de las narcotienditas y manejar los ingresos para el pago de nóminas; éstos se obtienen de las extorsiones y de la venta de cocaína, entre otros ilícitos.

Los Zetas, dijo la misma fuente, han incursionado en otras actividades altamente redituables, como el tráfico de personas. Aseguró que para ello establecieron acuerdos con las organizaciones de polleros, a quienes les exigen derecho de piso por cruzar a los indocumentados por los territorios que dominan.

Una fuente alterna de ingresos es el cobro a narcotraficantes de otros cárteles por cruzar droga en los territorios que Los Zetas controlan.

Una característica más del grupo criminal es que su organización interna no es estática. En su libro *El verdugo de hombres* los analistas estadounidenses George W. Grayson y Samuel Logan sostienen que los continuos cambios en la estructura de asignación de operaciones impiden a las autoridades “identificar a los criminales que están a cargo de una plaza, ciudad o estado, lo que complica los planes para rastrear, emboscar y capturar a jefes de medio pelo”.

“Los Zetas son el único cártel del narcotráfico mexicano que tiene un importante componente femenino: Las Panteras, cuya estructura se concentra en Nuevo León, aunque tienen representación en otras áreas del país. Son mujeres habilidosas que se encargan de negociar los acuerdos con los policías, políticos y oficiales militares u otros que pueden apoyar a Los Zetas en sus objetivos. Si no resulta el acuerdo, una pantera puede matar a su interlocutor”, escriben Grayson y Logan.

Para ingresar a Los Zetas los aspirantes son sometidos a rigurosos entrenamientos en centros que han instalado incluso en Estados Unidos.

“Presuntamente Los Zetas dirigen cursos de adiestramiento que usualmente duran seis meses. (...) en campos ubicados en el suroeste de Matamoros; en el norte del aeropuerto de Nuevo Laredo, cerca de Abasolo, entre Matamoros y Ciudad Victoria; y en el rancho Las Amarillas, en las orillas del pueblo de China, cerca de la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas”, destacan Grayson y Logan.

## En el país

Sus peculiares estrategias y su capacidad organizativa les ha permitido a Los Zetas ampliar las zonas de dominio. Surgido el grupo en Tamaulipas al amparo del narcotraficante Osiel Cárdenas, su poder e influencia se sienten ahora en gran parte del territorio nacional, en el norte y en el sur, disputándole plazas a sus rivales del Cártel de Sinaloa y estableciendo corredores para controlar el flujo de drogas de América del Sur y de migrantes centroamericanos.

Sus huellas ya están en muchas entidades, donde han corrompido las instituciones y prácticamente funcionan como gobiernos paralelos.

En febrero último la captura en Saltillo de cuatro integrantes de Los Zetas permitió descubrir que efectivos militares, agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Federal (PF), así como policías estatales y municipales de Nuevo León y Coahuila solapan las actividades criminales del grupo o de plano le hacen el trabajo.

La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/041/2012 consigna que soldados de la Sexta Zona Militar asesinaban a ciudadanos que denunciaban a criminales y luego desaparecían sus cuerpos, además de ocultarle a la PGR la existencia de cargamentos de droga.

Se supo también que agentes de la PF estaban encargados de identificar y neutralizar a los enemigos de Los Zetas, para lo cual incluso instalaban retenes donde los criminales les indicaban y custodiaban sus cargas de droga.

Los efectivos de la PGR y de la Agencia Federal de Investigación tenían otra tarea: consignar con cargos débiles a los zetas, liberar a los que estaban detenidos e informarles sobre las denuncias en su contra, incluidas las supuestamente anónimas.

La misma averiguación reveló que Los Zetas tienen en su nómina a los policías estatales o municipales de Nuevo León, además de contar con un enlace de protección en el gobierno estatal.

Por lo que toca a Coahuila, la averiguación evidenció el alto grado de corrupción en la Fiscalía General del Estado, cuyos efectivos se encargaban de ejecutar y desaparecer personas por órdenes zetas (Proceso 1843).

San Luis Potosí también está bajo su control. El asesinato, en febrero de 2011, de un agente estadounidense del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas destapó el escándalo en esa entidad.

Una célula de Los Zetas, encabezada por Julián Zapata Espinoza, El Piolín, confundió a los agentes estadounidenses Jaime Zapata y Víctor Ávila con narcotraficantes sinaloenses y los atacó. El primero murió.

En aquella ocasión fuentes anónimas dijeron a este semanario que Julián Zapata se encargaba de la nómina de funcionarios y policías estatales que colaboran con Los Zetas, por lo que era bien conocido entre ellos.

Meses antes el presidente municipal de Cerritos, San Luis Potosí, Erasmo Galván Prieto, había admitido que varios de sus policías “seguramente están en las nóminas de ellos (los narcos)”. Añadió: “Hemos cambiado a varios policías; algunos por extorsión... pero no es mucho lo que podemos hacer. Llegan

nuevos elementos y de inmediato les dirán que le entran o le entran. Es el cuento de nunca acabar. Yo creo que no hay municipio que se escape” (Proceso 1791).

Otros estados del país han visto en diferentes ocasiones el despliegue de fuerza de Los Zetas: Los habitantes de Hidalgo, Zacatecas, Tabasco y Veracruz, por ejemplo, saben que ahí los integrantes de La Compañía dictan la ley para establecer su jerarquía y marcar el territorio al que ningún otro cártel puede entrar.

### **En el extranjero**

A comienzos de 2008, con base en información proporcionada por la DEA y luego de investigaciones del Cuerpo de Carabineros, las autoridades italianas descubrieron una red criminal que vincula a Los Zetas con organizaciones locales, sobre todo con la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa.

La red trasatlántica se encargaba de enviar droga de México a Europa a través de Estados Unidos.

Nicola Gratteri, jefe de las operaciones antinarcóticos del gobierno de Italia, reveló a Grayson y Logan que la relación Zetas- ‘Ndrangheta “se estableció en razón del bajo costo de la cocaína que ofrecen a los consumidores de Italia. Los narcotraficantes mexicanos venden el kilo a 25 mil dólares y los italianos la venden a sus clientes europeos a 45 mil dólares el kilo”, casi al doble (Proceso 1848).

Tampoco Estados Unidos se ha podido escapar de la contaminación zeta.

Una vez más de acuerdo con Grayson y Logan en Estados Unidos Los Zetas tienen una amplia red de colaboradores. Aluden al proceso judicial de James Bostic, un narcotraficante confeso que compró cocaína a Los Zetas de 2005 al 2 de febrero de 2010. Bostic aseguró haber pagado 589 mil dólares a un distribuidor de drogas de Los Zetas en un hotel en White Marsh, Maryland.

Pero eso no es todo. Desde mediados de 2007, investigadores federales admitieron que los narcos de esa organización tenían actividad en Tennessee y Oklahoma, donde también realizaban secuestros y extorsionaban a los ciudadanos. En Atlanta incluso negociaron con el grupo de Los Tolles para operar en esa ciudad y tener a su disposición las rutas del trasiego de narcóticos que llega a Chicago.

Al año siguiente llegaron a Memphis y dominaban los corredores de droga que cruzan Texas, en particular las ciudades de Dallas y Houston. En octubre de 2008 el FBI emitió un boletín de inteligencia en el cual asentó que el alcance de Los Zetas se había extendido al suroeste y medio-este de Estados Unidos.

Asimismo, por medio de informantes y de un integrante de la pandilla Pistoleros Latinos, agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza confirmaron que Los Zetas contrataron a pandilleros locales para que protegieran los cargamentos de droga en territorio estadounidense y perpetraran asesinatos y secuestros (Proceso 1848).

### **El sur**

Una vez que Los Zetas se escindieron del Cártel del Golfo debieron buscar nuevas zonas de control para suplir su falta de contactos en Sudamérica, de donde viene la droga que comercian.

Entonces se aposentaron en Guatemala y cambiaron el balance de poder en la región metiendo en aprietos al gobierno local y poniendo a Honduras y El Salvador en máxima alerta. Infiltraron a la policía y al ejército y se aliaron con los narcos locales; ahora lavan ahí sus ganancias en la agroindustria y las obras públicas.

Además –de acuerdo con el periodista estadounidense Steven Dudley en su reporte *Organized Crime in the Americas*, elaborado en 2011 para la ONG InSight– introdujeron una nueva manera de operar: “Más que controlar las cadenas de distribución o manejar el día a día de las operaciones, están enfocados a controlar territorios (...) creando un conjunto de matones dispuestos a llevar la pelea a otros niveles”.

Narra Dudley: “El 12 de mayo de 2011 unas 10 camionetas con vidrios polarizados se detuvieron en una gasolinera en Cobán, capital del estado de Alta Verapaz (...) (Los tripulantes) llenaron sus camionetas con cerca de 150 galones de gasolina, luego manejaron unos 100 kilómetros al norte para comenzar una semana de crímenes que sacudieron a este país de 14 millones de habitantes.

“El ataque empezó como debió haber terminado: con una mutilación. Las tres primeras víctimas eran familiares de Raúl Otto Salguero, terrateniente de la zona. Los cuerpos de dos de ellos fueron hallados a un lado de la carretera, cortados en pedazos y con una nota: ‘Otto Salguero, voy por tu cabeza. Att Z 200’.

“El 15 de mayo los hombres interceptaron a Harold León, miembro de una destacada familia criminal guatemalteca, mientras conducía por una calle, asesinándolo a él y a dos de sus guardaespaldas.

“En la madrugada del 16 de mayo los hombres entraron a la finca Los Cocos, al noroeste de la ciudad turística de Flores, donde encontraron a 27 trabajadores. Pasaron las horas siguientes torturándolos y asesinándolos. Las autoridades hallaron 26 cuerpos decapitados. Los fiscales dijeron que al final de la masacre los sospechosos tomaron la pierna de una de las víctimas y dejaron un mensaje para Salguero en la pared: ‘¿Qué onda Otto Salguero? Te voy a encontrar y te voy a dejar así’.

“Los hombres retornaron a Alta Verapaz, donde el 25 de mayo secuestraron a Allan Stwolinsky Vidaurre, un fiscal local de Cobán, quien en ese momento llevaba a su hijo a un complejo deportivo. El cuerpo de Stwolinsky fue hallado al día siguiente en las escaleras de su oficina, cortado en pedazos. (...) Los Zetas notificaron al mundo: Guatemala sería suyo.”

---

Afianzados en el noreste mexicano y con bases importantes en Centroamérica y el sur de Estados Unidos, dejando su huella de sangre en un corredor que va de Guatemala a Tamaulipas, consolidando sus negocios millonarios hasta el otro lado del Atlántico y corrompiendo funcionarios y servidores públicos, Los Zetas confirman todos los días su poder letal.

Ante tamaña estructura y eficacia criminal, la eliminación física de sus líderes temporales no le hace mella a la organización.

Arturo Rodríguez García. “A cada capo “anulado” más violencia”. *Proceso* número 1876, 14 octubre 2012. pp. 28-30. <https://www.proceso.com.mx/322720/el-saldo-de-calderon-por-cada-capo-anulado-mas-violencia>

### **“A cada capo “anulado” más violencia”**

Una detallada revisión de las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública —es decir, de las cifras oficiales— basta para demostrar la falsedad de la propaganda del gobierno federal: la muerte o la detención de capos como Heriberto Lazcano y la larga lista de “los más buscados” no desembocó en la pacificación de sus zonas de operación, sino que incrementó la violencia, particularmente los delitos de alto impacto. Como estrategia de seguridad, es incluso contraproducente.

Con la presunta muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, líder de Los Zetas, el presidente Felipe Calderón presumió que 25 de los 37 criminales más buscados en el país han sido abatidos o detenidos durante su gobierno. Según él, un éxito de su “estrategia de seguridad”.

El martes 9, durante un acto en Lerma, Guanajuato, Calderón felicitó a la Armada de México por abatir a Lazcano y afirmó, como lo hizo en su mensaje por el VI informe de gobierno, que “ahora las organizaciones criminales registran un proceso de debilitamiento, contrario al que se registraba al inicio de esta administración, prueba de ello son las constantes capturas de líderes altos y medios, de todas las organizaciones criminales”.

Pero las propias cifras oficiales lo desmienten. Un seguimiento de las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) muestra que la incidencia delictiva en el país aumentó desde que Calderón asumió el poder y declaró su “guerra” al narco, que luego rebautizaría como “estrategia de seguridad”.

Durante el primer año de gobierno de Calderón, es decir, entre el 1 de diciembre de 2006 y el mismo día de 2007, se registraron en el país 1 millón 581 mil 215 delitos, esto es 113 mil 517 más que de 2005 a 2006.

Durante 2007 se denunciaron 1 millón 587 mil 30 delitos del fuero común; en 2008 fueron 1 millón 627 mil 371; en 2009, 1 millón 665 mil 792; en 2010, 1 millón 704 mil 99; y en 2011, 1 millón 604 mil.

Hasta octubre de 2012, la estadística oficial registraba 1 millón 115 mil 992 delitos del fuero común. La tendencia parece revertirse únicamente en los últimos dos años.

Pero en una revisión pormenorizada de los llamados delitos de alto impacto, como secuestro y homicidio, la realidad es otra:

En 2004 se reportaron 26 mil 530 homicidios y 323 secuestros; en 2005, los homicidios disminuyeron a 25 mil 780 y los secuestros subieron a 325. Para 2006 hubo un incremento de homicidios, a 27 mil 552, en tanto que los secuestros se duplicaron, al llegar a 733.

El aumento grave de homicidios empezó a registrarse a partir del arranque del gobierno: en 2007 hubo 25 mil 133 homicidios; en 2008, 27 mil 759; en 2009, 31 mil 546; en 2010, 35 mil 794; en 2011, 37 mil 409, y hasta agosto de 2012 sumaban 24 mil 308.

Los secuestros también aumentaron: en 2007 fueron 438; en 2008, 907; en 2009 se registraron mil 162; en 2010, mil 236; en 2011, mil 344, y hasta agosto de 2012 iban ya 809.

## La “guerra” al consumo

La estadística del SNSP también desmiente a Calderón en cuanto a los delitos federales, pues demuestra que se concentró en perseguir a consumidores de drogas y no a los narcotraficantes.

En 2007 el Ministerio Público federal conoció 71 mil 511 casos de posesión de droga y 44 mil 170 de consumo, mientras que sólo se integraron 5 mil 660 expedientes por comercialización de drogas. Sumando los delitos de operación del narco (comercio, suministro, producción, tráfico y transporte), ese año apenas se abrieron 8 mil 144 expedientes.

Los expedientes por posesión y consumo en 2008 fueron 74 mil 10, mientras que por operaciones del narco se integraron 6 mil 432.

En 2009 fueron 67 mil 565 casos de posesión y consumo frente a 5 mil 966 de operaciones; en 2010, 53 mil 757 frente a 4 mil 964; en 2011, 41 mil 591 frente a 4 mil 16. Y hasta agosto de 2012 (la estadística ya no refleja denuncias por consumo) van 17 mil 269 denuncias por posesión de droga, frente a 2 mil 850 casos de operaciones del narco.

Mientras iba en aumento la violencia, reflejada en los índices de homicidio, secuestro y lesiones que atiende el fuero común, las pesquisas contra las operaciones de los cárteles eran escasas y disminuyeron año con año, de 7 mil 680 expedientes abiertos en 2006, a unos 3 mil con los que concluirá 2012.

## Los más buscados

En marzo de 2009, el gobierno de Felipe Calderón difundió, en el portal de la Procuraduría General de la República (PGR), la lista de los 37 criminales más buscados del país. Con la supuesta muerte de Heriberto Lazcano, suman 25 los detenidos o muertos de esa lista.

Sin embargo, la revisión de la estadística muestra que dichas muertes y capturas, lejos de resolver la problemática de inseguridad y violencia, la exacerban.

Por ejemplo, el 21 de enero de 2008 fue detenido en Culiacán, Sinaloa, Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo. Su captura, muy publicitada por el gobierno federal, provocó que sus hermanos (Marcos Arturo, Héctor y Mario) se separaran del Cártel de Sinaloa, que dirige Joaquín Guzmán, El Chapo.

El año anterior a la captura de El Mochomo, Sinaloa registró 741 asesinatos con armas de fuego y 226 heridos de bala, así como 15 secuestros en total y se contabilizaron 10 robos bancarios.

En el año siguiente a la detención de Alfredo Beltrán, la cifra de homicidios por arma de fuego subió a 960 y el de heridos de bala descendió a 187. También los secuestros bajaron a 12, pero el robo a bancos se disparó a más de 1000%, con 117.

El Cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán tenían una fuerte presencia en Durango. Ahí, en 2007 se registraron 250 homicidios dolosos, de los cuales 173 se cometieron con armas de fuego y hubo 257 heridos de bala. Al año siguiente fueron 430 asesinatos, 317 con armas de fuego. Y mientras en 2007 se denunciaron tres secuestros, en 2008 fueron cinco.

Un fenómeno parecido se desató con la detención, el 22 de octubre de 2008, de Jesús Zambada, miembro del Cártel de Sinaloa. En noviembre y diciembre siguientes se registraron en Durango 318 asesinatos con armas de fuego, cuando en los mismos meses del año anterior se informó de sólo 124.

El 16 de diciembre de 2009 Marcos Arturo Beltrán Leyva fue abatido en Cuernavaca por efectivos de la Armada de México. Su muerte impactó en varios estados. En el caso de Morelos, la violencia aumentó: durante 2009 se registraron 317 homicidios dolosos, de los cuales 178 se perpetraron con armas de fuego; en el año siguiente la situación empeoró.

2010 fue un año fatídico para los Beltrán Leyva y los grupos que se desprendieron de ellos, pues sus antiguos lugartenientes fueron detenidos. El primero en caer fue José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, capturado el 21 de abril. El 30 de agosto fue aprehendido Édgar Valdez Villarreal, La Barbie; y el 12 de septiembre, Sergio Villarreal, El Grande.

Los mencionados capos se disputaban el control de Morelos y Guerrero tras el fallecimiento de Arturo Beltrán.

La captura de los capos no varió la incidencia de los delitos de alto impacto en Morelos: durante 2010 hubo 559 homicidios dolosos y 28 secuestros; en 2011, tras las detenciones, se registraron 556 homicidios dolosos y 26 secuestros. En Guerrero fue peor: en 2010 hubo 509 homicidios dolosos y 43 secuestros, mientras que en 2011 fueron 545 asesinatos y 62 secuestros.

### **La “pacificación”, un mito**

La detención de Eduardo Arellano Félix en Tijuana, Baja California, el 25 de octubre de 2008, también fue publicitada como un logro del gobierno de Felipe Calderón. Pero se incrementaron de igual forma los delitos de alto impacto.

De octubre de 2007 al mismo mes de 2008, en Baja California se contaron 594 homicidios con armas de fuego y 97 secuestros, mientras que de 2008 a 2009 la cifra oficial es de 846 homicidios con armas de fuego y 99 secuestros.

El 12 de enero de 2010, Teodoro García Simental, El Teo, fue detenido en la ciudad bajacaliforniana de La Paz. El cabecilla intentaba asumir el control del Cártel de Tijuana, donde era lugarteniente de los hermanos Arellano Félix.

Su detención debía facilitar la pacificación de Tijuana y de toda la península, pero cuando el consultor en seguridad Santiago Roel elaboró un Semáforo del Delito con base en el cálculo de incidencia delictiva del SNSP, tomando en cuenta la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes durante 2011, el estado con mayor incidencia delictiva era precisamente Baja California; el segundo, Morelos.

Entre 2009 y 2011 han sido detenidos o abatidos integrantes de Los Zetas con operaciones federales en Tamaulipas, Nuevo León y otras entidades.

El gobierno de Calderón ha publicitado especialmente las detenciones, en 2009, de Sergio Peña Mendoza, El Cóncord (15 de marzo); Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón (20 de marzo); Gregorio Saucedo Gamboa, Caramuela (30 de abril), y Raymundo Almanza, Gori 1 (20 de abril).

En 2010, año posterior a esas capturas, la frontera tamaulipeca vivió la peor etapa de violencia de su historia, con crímenes de resonancia internacional como la masacre de San Fernando. En Nuevo León se produjeron 828 asesinatos; en Tamaulipas, 721, y en Veracruz, 583. Ese año cayó abatido, en Matamoros, Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, importante líder del Cártel del Golfo.

Ya en 2011, los asesinatos registrados en Nuevo León fueron 2003; en Tamaulipas, 855, y en Veracruz, 514. Ese año cayeron en manos de las fuerzas federales Jesús Enrique Rejón, El Mamito, y Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky.

La tendencia se repitió en el occidente del país. El 29 de julio de 2010 fue muerto Ignacio Coronel en Zapopan, Jalisco. Casi un año después, en mayo de 2011, cayó su sucesor en la plaza, Martín Beltrán Coronel.

En 2009 se habían contado 570 asesinatos en ese estado, 288 por armas de fuego; en 2010 la cifra oficial fue de 888 asesinatos, 522 por arma de fuego; y en 2011 se reportaron mil 222 homicidios, 798 cometidos con armas de fuego.

Los narcos michoacanos detenidos o abatidos también fueron exhibidos en la publicidad gubernamental. Uno fue Nazario Mendoza, El Chayo, que fue reportado muerto en un enfrentamiento el 9 de diciembre de 2010, y otro fue José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, detenido en junio de 2011.

En 2009 se cometieron en Michoacán 728 asesinatos, 286 a balazos. En 2010 se contaron 661, de los cuales 284 se realizaron con armas de fuego. Al siguiente año, tras la detención de los mencionados capos de La Familia Michoacana, se produjeron 773 homicidios dolosos, en 327 de los cuales se usaron armas de fuego.

El pasado 12 de septiembre fue detenido José Eduardo Costilla, El Coss, jefe del Cártel del Golfo, y el reciente 7 de octubre supuestamente murió Heriberto Lazcano, jefe de Los Zetas. Sin embargo, la estadística oficial sólo registra hasta agosto, por lo que todavía no es posible revisar cómo ha variado la incidencia delictiva en sus zonas de operación.

Anabel Hernández. “Una familia de zetas”. *Proceso* número 1878, 28 octubre 2012. pp. 12-16.  
<https://www.proceso.com.mx/347497/los-trevino-una-familia-de-zetas>

### **“Una familia de zetas”**

Una vez que los gobiernos de México y de Estados Unidos declararon muerto a Heriberto Lazcano, el liderazgo de Los Zetas pasó a Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40, La Mona o El Muerto. Pertenece a una extensa familia de Nuevo Laredo, Tamaulipas, integrada por 13 hermanos, de los cuales por lo menos seis han estado involucrados en el narcotráfico en los últimos 15 años. En documentos de inteligencia de ambos países y expedientes de cortes estadounidenses, Proceso encontró datos reveladores sobre la vida, las actividades delictivas y la tragedia que envuelven al clan Treviño. (Este reportaje se publicó en la edición 1878 del 28 de octubre del 2012 en la revista Proceso).

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El Z-40 nació el 28 de junio de 1973 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, bastión de Los Zetas desde hace más de una década. Sus padres son Rodolfo Treviño, quien ya tenía 49 años cuando Miguel Ángel nació, y María Arcelia Morales, entonces de 34.

La pareja Treviño Morales procreó una extensa familia: Juan Francisco alias Kiko Ozuna (1955), Arcelia, Chelo (1957), Irma (1959), Alicia (1961), Rodolfo (1963), María Guadalupe (1964), José (1966), Ana Isabel (1968), Jesús (1970), Miguel Ángel (1973), Óscar Omar, Alejandro o El 42 (1976), Cristina (1978) y Adolfo (1980).

De acuerdo con información de agencias gubernamentales de inteligencia, tanto mexicanas como estadounidenses, hasta 2007 María Arcelia Morales estaba viva; ahora tendría 74 años. Residía en Nuevo Laredo, contaba con pasaporte para visitar de forma legal a algunos de sus hijos y nietos que viven en Estados Unidos y tenía a su nombre una camioneta Lincoln Navigator.

La historia de los Treviño en el crimen se inició hace 19 años, con Juan Francisco, alias Kiko Ozuna, el primogénito de la pareja Treviño Morales.

El 29 de diciembre de 1993, en una revisión que el servicio de aduanas de Estados Unidos realizó al azar, el vehículo de Juan Francisco fue detenido y él negó en dos ocasiones que llevara más de 10 mil dólares en efectivo. Al buscar en el auto se encontraron 47 mil 984 dólares, que le fueron confiscados.

Ese año la DEA y la Patrulla Fronteriza habían emprendido una investigación sobre tráfico de toneladas de marihuana de Nuevo Laredo a Texas, pero sólo tenían algunas piezas del rompecabezas. De acuerdo con el expediente criminal 3:95-CR-189-R, radicado en la Corte de Distrito Norte de Texas y del cual se tiene copia, en octubre de 1994 el gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a Juan Francisco Treviño, a otro Treviño de nombre Armando –se desconoce si es su familiar–, a Abraham Padilla (Benny), Abel López, Fernando Quiroz (Vanna), Hipólito Ortiz (Polo), Óscar de León (Pelón) y Edel Isaac de asociación delictuosa por poseer más de mil kilogramos de marihuana con intención de distribuirla. En ese momento, Miguel Ángel Treviño Morales tenía sólo 21 años.

El 18 de octubre de 1994 Juan Francisco Treviño, Armando Treviño y Pedro Sánchez comparecieron ante un funcionario judicial y, con base en la ley vigente, pidieron un juicio rápido que debió llevarse a cabo en los 70 días posteriores a que voluntariamente se presentaron ante la justicia.

El 26 de mayo de 1995 Juan Francisco presentó una moción para que se desecharan los cargos en su contra por no habersele enjuiciado de manera expedita. El 15 de junio de 1995 un tribunal de primera instancia celebró una audiencia y desestimó los cargos que se le fincaron en octubre de 1994.

Kiko Ozuna pensó que saldría inmediatamente de prisión. No contaba con que días antes, el 7 de junio, la fiscalía había iniciado una nueva acusación contra él por otra conspiración para distribuir más de una tonelada de marihuana en territorio estadounidense. Mientras esperaba el juicio expedito, la DEA obtuvo pruebas suficientes para incriminarlo. Como en la mayoría de los casos, la agencia lo consiguió a través de cómplices que se acogieron al programa de informantes y testigos protegidos. Esas declaraciones hundieron por completo a Juan Francisco.

Everardo Ramírez, presentado por la fiscalía como testigo del gobierno, declaró en la Corte que un sujeto de apellidos Tovar Ozuna le presentó a Juan Francisco Treviño, quien le ofreció empleo. El

trabajo consistía en transportar marihuana de Nuevo Laredo a Dallas. El primer deber de Ramírez era almacenar la hierba en su casa durante varios días y luego llevarla a la casa de Pablo de Luna.

“Al siguiente mes, a petición de Tovar Ozuna, Ramírez estuvo de acuerdo en almacenar y entregar marihuana que iba a ser transportada a Dallas. El trabajo de Tovar para Juan Treviño era cruzar la marihuana por el río (Bravo) a Ramírez. A su vez, Ramírez la llevaba a casa de Pablo de Luna, donde era almacenada y luego transportada a través de una empresa de la frontera”, señala el expediente judicial.

Ramírez declaró que había participado en el tráfico de marihuana de Nuevo Laredo a Dallas cerca de tres veces al mes durante año y medio. Añadió que la mayor carga de droga que almacenó fue de 600 libras (272 kilogramos) y que en territorio estadounidense transportaban la droga en camionetas Suburban que utilizaban los caminos privados de un rancho de gran extensión para eludir los controles policiales. Frank Staggs, el dueño del rancho, declaró que el cuidador de su propiedad era Armando Treviño.

Everardo Ramírez también declaró que iba a encontrarse en un hotel de Dallas con José Treviño Morales, hermano de Juan Francisco, quien se encargaría de pagarle por sus servicios. El gobierno de Estados Unidos se tardó años en detectar y frenar las actividades delictivas de José, quien 17 años después resultó ser la cabeza de la red de lavado de dinero de Los Zetas en ese país a través del negocio de los caballos de carreras cuarto de milla.

Otro delator clave fue Joe Chávez, quien trabajaba para Kiko Ozuna. En diciembre de 1993 se acercó al agente especial de la DEA Armando Ramírez para ofrecerse como informante. “Él tenía la sensación de que esta cosa (la red delictiva) iba a derrumbarse”, se señala en el expediente judicial. El 24 de enero de 1994 Joe dio el pitazo al agente especial de la DEA sobre un cargamento de marihuana que se iba a entregar en Dallas el 26 de enero. El agente Ramírez, encubierto, ayudó a Joe Chávez a cargar más de 463 kilos de marihuana en una Suburban anexa a una casa móvil, en Laredo.

Cuando el cargamento llegó a Dallas ya los esperaban unos agentes, que arrestaron a Riky Treviño y Abel López. “Chávez declaró que la marihuana confiscada estaba destinada o pertenecía a Juan Francisco Treviño Morales”, se afirma en los documentos de la Corte. Eso fue suficiente para que el mayor de los hermanos Treviño perdiera toda ilusión de salir de la cárcel.

El 1 de diciembre de 1995 Kiko Ozuna fue condenado a 22 años de prisión, que se cumplen en 2017, cuando él tenga 62 años. Fue recluso en un centro penitenciario cercano a Laredo y, de acuerdo con la sentencia, al salir tendrá una libertad supervisada durante cinco años “en condiciones normales y con cuatro condiciones adicionales”.

Juan Francisco Treviño Morales sigue en prisión. Su hermano menor, Miguel Ángel, siguió sus pasos y lo superó, hasta convertirse en el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del continente: Los Zetas, a la que el año pasado el gobierno de Barack Obama calificó de “amenaza global” comparable con la Camorra de Italia, los Yakuza en Japón y el Círculo de los Hermanos en Rusia.

### **El “Z-40”**

Los primeros rastros de la carrera criminal de Miguel Ángel Treviño Morales datan del año 2000. La información de inteligencia obtenida señala que en esa época era el encargado de la venta de droga al

menudeo en la colonia Hidalgo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, “además de llevar a cabo acciones de secuestro, desapariciones y ejecuciones de las personas que no pagaban su rescate”, se señala en los reportes.

Primero trabajaba con Arturo Saucedo Gamboa, El Karis; Omar Lorméndez Pitalúa, El Comandante Pita; Iván Vázquez Caballero, El Talibán, y Mateo Díaz López, El Comandante Mateo. Pitalúa fue detenido en 2005, Díaz López en 2006 y Vázquez Caballero en septiembre de 2012, mientras que Saucedo Gamboa se encuentra prófugo.

Su ascenso en el mundo del crimen fue rápido. Este semanario tuvo acceso a un documento elaborado por el FBI en 2005 con el título Los Zetas, una nueva amenaza para Estados Unidos. Ahí aparece ya el nombre de Miguel Ángel Treviño Morales como uno de los “operadores clave” del Cártel del Golfo en Nuevo Laredo. Se especifica que trabajaba con Los Zetas, entonces brazo armado de dicho cártel.

Después de Arturo Guzmán Decena, asesinado en 2002, y de Heriberto Lazcano, presuntamente abatido por la Armada de México el 7 de octubre pasado, Miguel Ángel se convirtió en el primer capo de Los Zetas que no provino del Ejército sino directamente del mundo criminal, lo cual no significa que carezca de entrenamiento o ignore las tácticas militares.

De acuerdo con el estudio realizado por el FBI, los integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales que abandonaron el Ejército para enrolarse en el crimen organizado adiestraron al resto de la organización criminal, además de aliarse con 30 exmilitares de los Kaibiles, la fuerza especial antiguerrillera de Guatemala, conocida internacionalmente por sus prácticas inhumanas y sanguinarias.

Según el documento, Los Zetas establecieron campos de entrenamiento en un rancho ubicado “entre Villa Hermosa y Río Bravo, Tamaulipas”, y el Z 40 debutó en el mundo del crimen en Nuevo Laredo, donde el grupo criminal aplicó por primera vez el sistema de vigilancia con cámaras de video y halcones.

De acuerdo con el citado reporte del FBI, cuando menos desde 2005 el gobierno estadounidense tenía información de que Los Zetas operaban en Coahuila, específicamente en Piedras Negras. Entonces el gobernador del estado era Enrique Martínez y Martínez, y el alcalde de Piedras Negras era Claudio Mario Bres Garza, quien ya había gobernado en el periodo 1997-1999.

Bres Garza fue elegido de nuevo en 2003 y ocupó el cargo hasta mayo de 2005, cuando pidió licencia al Congreso del estado. Fue sustituido por Mario Antonio Rincón Arellano. En septiembre de 2005 hubo elecciones para gobernador, que ganó el priista Humberto Moreira.

El FBI refiere que en 2005 el líder de la célula de Los Zetas en Piedras Negras era un narcotraficante llamado Fernando Villarreal, identificado como Z-40, sobrenombre que hoy utiliza Miguel Ángel Treviño Morales.

“De acuerdo con el Centro de Inteligencia de McAllen, Los Zetas operan en el área con la bendición de Rafael Macedo de la Concha, procurador general de México”, se afirma en el documento.

La primera averiguación previa en contra del Z-40 está fechada en 2001, le sigue la PGR/SIEDO/UEIDCS/085/2003, y se abrieron otras cinco en 2005. En una de éstas, la

176/DGDCSPI/05, Miguel Treviño es señalado por una mujer como el que obligó a su esposo a trasladar un tráiler cargado de cocaína.

En la parte de la información aportada por agencias de inteligencia mexicanas, se establece que el 28 de abril de 2005, durante una reunión entre funcionarios del FBI y del gobierno mexicano, surgió por primera vez el nombre de Miguel Ángel Treviño, Z-40, como un miembro importante de Los Zetas.

Actualmente el gobierno de EU tiene varias acusaciones criminales abiertas en su contra, una de ellas en la Corte del Distrito Sur de Texas (5:08-cr-00244), en la que se le imputan 47 cargos que acumularían más de 200 años en prisión. Y la más reciente la abrió en mayo de 2012 el fiscal del Distrito Oeste de Texas por conspirar para lavar ingresos provenientes del narcotráfico para Los Zetas mediante la compra, entrenamiento y cría de caballos de carreras cuarto de milla en Estados Unidos.

A sus 39 años, el Z 40 es el líder de la organización criminal considerada la más sanguinaria en México.

### **“Big Daddy Cartel”**

No sólo Juan Francisco y Miguel Ángel han ligado su vida a la delincuencia organizada. De acuerdo con la información obtenida de agencias de inteligencia y de expedientes criminales abiertos en Estados Unidos, sus hermanos José, Óscar Omar (Alejandro), Jesús y Adolfo están o han estado involucrados con el narcotráfico.

Entre la información obtenida por Proceso se encuentra un amplio álbum familiar donde aparecen los hermanos Treviño Morales en bodas, bautizos y reuniones. Se muestran como una familia unida.

José nació el 23 de octubre de 1966 y vive desde hace años en Estados Unidos de forma legal, ya que tiene el número de seguro social A# 091 596 819. Era un próspero criador y corredor de caballos cuarto de milla hasta que el 12 de junio pasado fue detenido con su esposa Zulema en su rancho de Lexington, Oklahoma. En la demanda criminal 12-cr-00210, abierta en la Corte de Distrito Oeste de Texas, fue acusado de lavar dinero para Los Zetas a través de las empresas Tremor Enterprises, Tremor Enterprises LLC, Zule Farms y 66 Land LLC, dedicadas al negocio de los equinos.

Este caso, destapado en junio por el gobierno de Estados Unidos, fue un festín para la prensa internacional, ya que los caballos adquiridos con dinero de Los Zetas ganaron importantes carreras en ese país, el Z 40 era socio de las compañías y era copropietario de los animales de raza fina.

José manejaba con ironía el negocio. Les daba a sus ejemplares nombres relacionados con el narcotráfico: Corona Cartel, Coronita Cartel, Morning Cartel, Number One Cartel, A Snowy Cartel y Big Daddy Cartel, este último el más valioso de todos, según asentó la fiscalía en el expediente del caso. Si durante años el boyante negocio no llamó la atención de las autoridades de Estados Unidos, debieron hacerlo estos nombres.

Tras el revuelo, el gobierno estadounidense embargó 463 caballos y en septiembre pasado el Internal Revenue Service (IRS, equivalente a la Secretaría de Hacienda en México) subastó 99 caballos de la cuadra de Los Zetas, por los que según la información oficial obtuvo 32 mil 175 dólares. Cinco animales fueron excluidos del primer evento a petición de José Treviño Morales, que les tenía un “apego sentimental”, según el documento de la Corte; no obstante, ese lote de caballos es también el de mayor valor económico.

El 5 de octubre pasado la fiscalía informó a la Corte que entre el 1 y el 3 de noviembre subastarían 384 cuarto de milla, incluyendo los cinco preferidos por José.

En el expediente criminal sobre lavado de dinero se afirma que Miguel Ángel Treviño entregaba el dinero sucio a su hermano José y a su cuñada Zulema para que ellos se encargaran de la compra, entrenamiento, alimentación de los animales, así como de inscribirlos en las carreras.

La fiscalía afirma que el Z 40 es el responsable directo del tráfico de cocaína de Sudamérica hacia Estados Unidos. Puesto que entonces aún vivía Lazcano, a Miguel Ángel Treviño se le considera uno de los dos líderes de Los Zetas.

### **“El 42”, Jesús y Adolfo**

En ese expediente surge el nombre del otro miembro del clan de los Treviño involucrado con el narcotráfico: Óscar Omar, alias Alejandro o El 42, de quien un rumor indicaba que fue abatido por la Armada de México en Zacatecas el 23 de octubre pasado, pero esto no se ha podido confirmar.

Óscar Omar Treviño nació el 6 de junio de 1976 y, según el expediente criminal en el que aparece como coacusado, es uno de los mandos de Los Zetas y se le atribuyen las operaciones para introducir droga y dinero ilícito a Estados Unidos. También se le involucra en el manejo de los caballos y de transferir fondos para ese negocio.

No es el primer expediente criminal del hermano del Z 40 en el país del norte. En 2008 se abrió en su contra el expediente 08-cr-00244 en la Corte del Distrito Sur de Texas. Se le acusa de formar parte del Cártel del Golfo y de Los Zetas desde el año 2001 al menos.

La fiscalía afirma que El 42 trafica mariguana y cocaína de Nuevo Laredo a Estados Unidos y ha rentado viviendas en Laredo, Texas, para que sicarios las utilicen como casas de seguridad.

En cuanto a Jesús Treviño Morales, los informes asientan que nació el 4 de octubre de 1970 y que para ocultar sus actividades ilícitas se hacía pasar como ingeniero o contratista de obras.

En 2004 fue acibillado con más de 50 disparos de AK-47 en Nuevo Laredo. Su cuerpo fue encontrado en una construcción en Paseo Colón y la calle Tamazunchale, según reportó entonces la prensa local.

En la información de inteligencia obtenida se afirma que Jesús había heredado el control de una célula de Los Zetas “pero no se ajustó a las nuevas normas que rigen en el cártel” y fue asesinado por los propios integrantes de la organización criminal que hoy encabeza su hermano Miguel Ángel.

El más joven de los hermanos Treviño Morales, Adolfo, fue asesinado el 18 de enero de 2006, cuando tenía 26 años. Su cadáver fue abandonado al lado de un columpio en el parque ubicado en Privada Gutiérrez y Arteaga, colonia Maclovio Herrera, de Nuevo Laredo.

El Z 40 tiene un hermano llamado Rodolfo, 10 años mayor que él, quien se dedica al transporte de carga. No hay registros de expedientes criminales en su contra ni se sabe que el gobierno de México tenga alguna indagatoria en su contra. En las fotografías familiares aparece junto a Miguel Ángel y José.

Redacción. “Los Zetas se reacomodan y Los Templarios los amenazan”. *Proceso* número 1878, 28 octubre 2012. pp. 16-21. <https://www.proceso.com.mx/323656/323656-los-zetas-se-reacomodan-y-los-templarios-amenazan>

### **“Los Zetas se reacomodan y Los Templarios los amenazan”**

La ausencia del Lazca desató en las últimas semanas una serie de reacomodos al interior de Los Zetas y el desplazamiento de Los Caballeros Templarios hacia el noreste del país, para disputarle las plazas a esa organización que hoy lidera Miguel Ángel Treviño Morales. Y mientras el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira sostiene que el asesinato de su hijo José Eduardo es una venganza del Z-40, éste comienza a confrontarse con sus propios aliados.

SALTILLO, COAH.- “El procurador de Coahuila me dijo que el asesinato de mi hijo fue una venganza por matar al sobrino del Z 40”, dijo enfático el exgobernador Humberto Moreira el jueves 25 en una entrevista radiofónica.

Y se soltó: la sola captura de los asesinos materiales no resuelve el crimen. Ahora el poder del Estado mexicano está comprometido hasta que se capture a Miguel Ángel Treviño Morales, quien es el virtual líder de Los Zetas desde que elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) abatieron el domingo 7 a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, en un campo de beisbol en Progreso.

“Esto no lo puedo aguantar. Yo no me había doblado, pero que maten a mi hijo, eso no se puede aguantar. A mi hijo lo mataron en venganza por el asesinato del sobrino del Z 40. Eso está claro”, reiteró Moreira.

El crimen de José Eduardo Moreira desencadenó una serie de acontecimientos en la entidad, sobre todo porque ocurrió en medio del proceso de reconfiguración de la organización criminal que ahora encabeza Treviño Morales. A las autoridades les preocupa que, ante la caída del Lazca, los grupos que operan en el noreste se lancen contra Treviño Morales.

Según la Semar, cuyos elementos siguen los pasos del Z-40, el capo podría ser blanco del “fuego amigo” por parte de algunos zetas que se molestaron cuando uno de los hermanos de Miguel Ángel, José Treviño Morales, fue detenido Estados Unidos en junio pasado acusado de lavado de dinero a través de las empresas Tremor Enterprises, Tremor Enterprises LLC, Zule Farms y 66 Land LLC. A los sicarios les irritó saber que usaban los fondos de la organización criminal para beneficio personal.

Desde principios de mes se inició la guerra contra El Z-40. En Monterrey, Nuevo León, aparecieron varias narcomantas firmadas por Los Caballeros Templarios, un grupo que hasta entonces no operaba en la capital regiomontana, según admitió el vocero del Consejo de Seguridad estatal, Jorge Domene. “Sabemos que todos estos acontecimientos son consecuencia de la caída del señor Lazcano”, precisó el funcionario.

Esa misma organización colocó otras mantas en Guerrero, Guanajuato y Michoacán con un mensaje explícito al Z-40:

“A todos los aliados e integrantes de Los Zetas, en especial a Miguel Ángel Treviño, el Z-40, que se te olvidó toda la sangre de inocentes que han derramado, realizando ataques en lugares públicos, entre

otras cosas, todo por su ambición, avaricia y hambre de poder, el cual quiere conseguir pasando por encima del pueblo” (sic).

La muerte del Lazca provocó dudas y versiones contradictorias entre las autoridades federales y estatales, una en particular según la cual El Lazca fue “puesto” por miembros de su propio grupo.

Ese día, una llamada anónima alertó a los marinos sobre la presencia del Lazca en un campo de beisbol en Progreso. Quien la hizo dio detalles sobre el vehículo en el que iba el capo acompañado de varios pistoleros armados: una camioneta Ford Ranger blanca de doble cabina.

En conferencia de prensa, el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, confirmó después que la Semar recibió datos precisos sobre la camioneta: “Al llegar a un parque de beisbol que se encuentra en las inmediaciones (los marinos) observaron sujetos en actitud sospechosa que circulaban en un vehículo cuyas características son similares a las del que previamente había sido reportado”.

Dijo que en el operativo de los marinos murió el conductor de la camioneta. Un segundo hombre –El Lazca– descendió de la unidad e intentó huir, pero fue alcanzado por las balas de los marinos, quienes estaban a 300 metros de distancia.

La presencia del capo era un secreto a voces en el poblado de Sabinas, donde, según los lugareños, tenía comprada a la policía.

En la entrevista radiofónica, Humberto Moreira insistió que Heriberto Lazcano residía en Progreso, pues se había convertido en un “empresario” minero. “Ese es el nuevo negocio del narco en Coahuila”, subrayó el exgobernador.

E insistió: “Se debe investigar a los nuevos mineros de la región carbonífera de Coahuila. Hay empresarios que le compran el carbón a los narcotraficantes”.

Y lanzó la acusación: Los “narcoempresarios” que hacen negocios con la delincuencia organizada también son corresponsables de la muerte de José Eduardo.

Un funcionario estatal, quien pidió omitir su nombre, asegura que las autoridades federales sabían desde principios de año que Lazcano se movía como pez en el agua en el circuito Monclova, Sabinas, Piedras Negras. Incluso, según él, la madrugada del 22 de abril, cuando la Banda Jerez amenizaba una fiesta en el Centro de Eventos de la Sección 38 del SNTE, realizaron un operativo en Monclova para capturarlo.

Alrededor de la 1:30, cuando el convivio estaba en su apogeo, 300 efectivos del Ejército y de la Semar irrumpieron en el local, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Detuvieron a 100 personas y a 17 integrantes de la banda. Los militares aseguraron varios vehículos y armas de fuego, pero El Lazca escapó, indica la fuente.

La Banda Jerez emitió un comunicado que anunciaba el concierto del 21 de abril, al que incluso acudieron muchas familias con niños a disfrutar de su música, cuando “sorpresivamente arribaron al lugar efectivos del Ejército, los cuales se llevaron a 17 integrantes de la banda junto con meseros del evento y los trasladaron a las instalaciones de la PGR”.

Tras rendir su declaración, decía el comunicado, “nos dejaron libres tras cerciorarse de que no había delito que perseguir”. La Banda Jerez insistió en que no tenía ninguna relación con el capo, aunque sus

integrantes admitieron que el 2 de febrero último, durante los festejos de la Patrona de Pachuca, Hidalgo, tocaron en la iglesia que El Lazca mandó construir. Ahí, comentaron, interpretaron un corrido dirigido al capo cuya letra dice: “Utilizando estrategia al enemigo encarar y al gobierno darle guerra... Nunca lo verán correr”.

### **La lucha por el noreste**

La cabeza de Miguel Ángel Treviño Morales es cada vez más codiciada en el noreste. Además de Los Caballeros Templarios, en la región lo buscan los sicarios del Chapo Guzmán, sobre todo en las tres principales plazas tamaulipecas antaño controladas por Los Zetas: Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Mante.

A su vez, la Semar continúa diezmando a la organización en el norte de Coahuila. El domingo 14 capturó a Miguel Ángel Rodríguez Díaz, alias El Metro Alfa, jefe regional para Piedras Negras, Ciudad Acuña y Sabinas, donde operaba Alejandro Treviño Morales, alias El Z-42 u Omar, por cuya captura las autoridades mexicanas ofrecen 30 millones de pesos.

Las baterías de la Marina se centran ahora en el Z-40, quien ha perdido eficacia al estar sobrepuesto con los acontecimientos de las últimas semanas. En el interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) algunos mandos prevén una división en el interior de la organización, toda vez que, dicen, El Z-40 carece de la experiencia militar del Lazca, lo que le permitió a él y a sus allegados posicionar a Los Zetas como el segundo cártel del país.

El Z-40 empezó a encumbrarse a partir de 2004, cuando fue jefe de sicarios en Nuevo Laredo, luego ascendió a jefe de plaza y en 2007 fue trasladado como responsable del grupo en Veracruz. La muerte y detención de los fundadores del grupo le permitió escalar hasta llegar al segundo puesto en la organización.

Él fue uno de los artífices del posicionamiento del Cártel del Golfo-Zetas en Centroamérica, cuando estuvo al mando de los sicarios que eliminaron a varios capos regionales, entre ellos a Juan José León, alias Juancho, en marzo de 2008 en Guatemala.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil de ese país, Juancho fue emboscado por un grupo de pistoleros mexicanos cuando se dirigía al balneario La Laguna, Río Hondo, en el departamento de Zacapa. En el enfrentamiento cayeron Juancho y su grupo, así como el mexicano Arturo Damián Casanova.

Tras la refriega, los uniformados detuvieron a tres tamaulipecos: Roberto Rodríguez Cárdenas, de 28 años; Luis Ernesto Lugo, de 21 años, y Roberto de León Gómez, quienes confesaron pertenecer a Los Zetas y estar al servicio del Cártel del Golfo.

Uno de los sicarios que participó en la emboscada fue Daniel de Jesús Elizondo Ramírez, alias El Loco, quien posteriormente escaló en la organización hasta llegar a ser el jefe de la estratégica plaza de Cadereyta, Nuevo León, hasta que fue detenido por tropas de la Sedena el 18 de mayo último. Según las autoridades, fue él quien arrojó los 49 cadáveres descuartizados en una carretera de Cadereyta la madrugada del 13 de mayo pasado.

Elizondo Ramírez declaró a los militares que El Z-40 encabezó el grupo de sicarios que ejecutó a Juancho en Guatemala en marzo de 2008.

## Las pugnas internas

Las desavenencias en el interior de Los Zetas comenzaron precisamente después de los sucesos de Guatemala, en los que murió Arturo Damián Casanova. Iván Vázquez Caballero, alias El Talibán, acusó al Z-40 de esa muerte y de haber entregado a las autoridades a varios jefes regionales, como El Hummer, Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, y El Tatanka para quedarse al frente de la organización.

Los ataques contra El Z-40 se avivaron en las últimas semanas, cuando aparecieron en Nuevo Laredo varias narcomantas en las que se acusaba al Z-40 de entregar a las autoridades al Talibán y a Mauricio Ramírez Tamez, alias El Diamante, este último detenido el miércoles 10.

Días después, un grupo de zetas decidió abandonar la organización para crear el nuevo cártel de Los Legionarios, lo que representa el primer revés para Miguel Ángel Treviño Morales: “Los Legionarios somos un grupo de zetas renegados que fuimos traicionados por Z-40”, según la proclama del nuevo grupo.

Sus integrantes relatan que estuvieron bajo las órdenes de El Talibán, El Mamito, uno de los fundadores de Los Zetas, y otro comandante al que apodan El Pegui, quienes, aseguran, fueron traicionados por Treviño Morales y entregados a la Policía Federal.

“Los Legionarios tenemos claramente la orden de exterminar sólo a la gente de Los Zetas y familias... OJO X OJO”, decía la proclama de Los Legionarios, quienes aseguran que tienen bases en San Luis Potosí, Zacatecas, Monterrey y Nuevo Laredo. “Nuestro negocio es el narcotráfico, sólo y exclusivamente, respetamos a las fuerzas federales y la lucha que hacen para terminar con el narco”, concluye el texto.

Según ellos, ya eliminaron a ocho “lacras” e insisten en que terminarán con la gente del Z-40, así como a los policías federales que lo protegen.

De acuerdo con un oficial de la IV Región Militar consultado por Proceso, las pugnas intestinas se intensificaron tras la captura de José Treviño Morales y su esposa en Oklahoma, quienes usaban los fondos de la organización para beneficio personal.

El periodista británico Ioan Grillo, autor del libro *El narco*, sostiene que es predecible una agudización de la narcoguerra por la división de Los Zetas.

“La ruptura podría generar violencia extrema pues ellos controlan 17 estados, tienen muchas células, mucha gente y gran armamento. Cuando se fracturan los cárteles hay más violencia. Así pasó cuando se dividió el cártel del Chapo Guzmán y cuando Los Zetas se escindieron del Cártel del Golfo”, comenta a Proceso.

Patricia Dávila. ““El Lazca”: sin Cadáver, no hay certeza”. *Proceso* número 1878, 28 octubre 2012. pp. 21-23. <https://www.proceso.com.mx/323657/323657-el-lazca-sin-cadaver-no-hay-certeza>

**““El Lazca”: sin Cadáver, no hay certeza”**

Las acciones que ha emprendido la PGR para obtener el ADN de los padres de Heriberto Lazcano, El Lazca, y confirmar de una vez por todas la muerte del líder de Los Zetas no llevarán a ningún lado, coinciden especialistas. Sin cadáver no hay prueba genética que valga, insisten. Y deslizan una hipótesis: Es posible que el capo esté vivo, tal vez como testigo protegido en Estados Unidos, y que su presunto fallecimiento no sea más que el montaje de un gobierno al que le urge cerrar ese capítulo.

La reserva con que la PGR trata de hacer el análisis comparativo entre el ADN de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, líder de Los Zetas, y el de su padre, ha enrarecido más el caso de la presunta muerte del capo. Expertos forenses y criminalistas afirman que mientras el cuerpo del narcotraficante esté desaparecido no puede haber ningún cotejo de muestras genéticas que valga.

Además esbozan la idea de que las muestras que los forenses de Coahuila extrajeron al que suponen cadáver del líder de Los Zetas pudieron haber sido sembradas, incluso por instrucciones del capo.

A su vez la PGR señala que los análisis genéticos del padre de El Lazca los realizan peritos de la institución; sin embargo, trabajadores de los servicios periciales de la procuraduría consultados por este semanario aseguran que ellos no llevan a cabo el estudio del ADN del progenitor de Lazcano y que tampoco tienen en su poder las muestras tomadas en Coahuila; sólo tienen el resultado de la necropsia, fotografías del cadáver y las huellas dactilares.

“Mientras no aparezca el cuerpo, nadie en el mundo puede comprobar científicamente que las huellas dactilares presentadas sean evidencia de que el muerto era Lazcano. Tampoco podrán probar que fueron extraídas realmente del cadáver exhibido. No hay forma de cotejar, aun cuando hayan exhumado los restos del padre del narcotraficante. Si el gobierno señala lo contrario, miente”, afirman expertos forenses que pidieron el anonimato.

El miércoles 17 en conferencia de prensa José Cuitláhuac Salinas, titular de la ya rebautizada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), informó que fue imposible localizar a los hermanos del narcotraficante para extraerles muestras de ADN, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó la exhumación de los restos de los padres de Lazcano Lazcano, sepultados en el panteón de El Tezontle, Hidalgo.

### “No es él”

El gobierno de Coahuila dijo que envió a la PGR el expediente del deceso de Lazcano, con huellas de tres de sus dedos y fotografías del cadáver. Para el gobierno federal esto fue prueba suficiente para determinar que el fallecido era el líder zeta.

Sin embargo, las fotografías del cuerpo presentado por las autoridades fueron contrastadas con el informe de heridas que aparece en el dictamen de la necropsia. Los resultados sembraron dudas entre los expertos en criminalística. Los peritos también realizaron un análisis facial empleando las imágenes del rostro del cadáver comparadas con fotos del narco en vida. Concluyeron que el sujeto muerto que las autoridades exhibieron como El Lazca en realidad no es él (Proceso 1876).

“Lazcano pudo haber hecho un convenio para entrar en el programa de testigos protegidos de Estados Unidos. ¿De qué sirven las evidencias si existe la duda de que fueron plantadas o suplantadas? El propio Lazcano pudo haber dado todos los elementos: sus huellas, su sangre, su ADN. Por eso la única prueba

fidedigna que se tendría es el cadáver y éste no aparece”, explica un perito en criminalística y ciencias forenses quien pide la reserva de su nombre.

–El subprocurador Salinas habla de que fueron dos las huellas de los dedos recibidas –se le señala.

–Las que sean. Insisto, el mismo Lazcano las pudo haber otorgado. ¿A quién le consta que a ese cadáver se le hayan hecho las pruebas y se le hayan tomado los fluidos corporales que dicen tener?

–¿Y si el cadáver nunca aparece?

–Científicamente nunca podremos fincar que el muerto que nos presentaron fuera realmente el señor Lazcano y que los datos que tuvo Coahuila y ahora la PGR provienen de ese cadáver. Es imposible tener pruebas de un cadáver que fue hurtado. Ningún científico del mundo podría realizar un cotejo porque no existe el cadáver que permita confirmar los datos. La ciencia es clara: tiene que haber un cruce. Todos los experimentos que se realicen se podrán comprobar por otros científicos y si dan el mismo resultado, los datos se consideran positivos.

“Y en este caso sólo existe el testimonio de los forenses de Coahuila. Tendría que existir un segundo equipo que evalúe. En este caso serían los expertos de la PGR. Ellos deberán tener en su poder las evidencias pero aun así no cuentan con elementos para comparar porque no tienen el cadáver”, puntualiza el perito.

“Si los forenses de la PGR tuvieran las evidencias podrían realizar todos los procesos de identificación pertinentes. Pero sin el cuerpo es imposible. Si usted me lleva una muestra de ADN tenemos que verificar de dónde la obtuvo, no nada más es llenar y llevar un botecito. Debe acompañarlo una cadena de custodia.”

Precisa que debe incluirse el parte informativo sobre la recolección de indicios biológicos –sangre, fluidos, pelo–; huellas digitales completas, no de un dedo ni de dos sino de los 10; huellas de las palmas y los dorsos de las manos y todas las fotografías tomadas al cadáver.

“De entrada, fue un excesivo mal manejo de la evidencia, de los indicios. Si sale positivo el cotejo de las muestras de ADN, ¿cómo van a fundamentar científicamente ese cotejo? Es imposible porque no se tiene el cadáver”, reitera.

–¿Qué es lo que más probablemente sucedió?

–Si no tenemos los indicios completos caemos en la especulación, incluso, de creer que Heriberto Lazcano podría ser ahora un testigo protegido.

### **Exhumación**

A las siete de la mañana del pasado lunes 22 un equipo forense de la PGR fue al panteón ejidal San Francisco en la colonia El Tezontle, en Pachuca, Hidalgo.

Según la procuraduría los restos del padre del capo –del que sólo dieron los apellidos: Lazcano Bautista– se exhumaron de una tumba que ni siquiera tenía lápida, y no del ostentoso mausoleo que El Lazca mandó construir para él mismo en ese panteón, donde ya está enterrada su madre.

Tras siete horas de trabajo los especialistas en medicina forense obtuvieron muestras de cabello, dentadura y restos óseos del padre de El Lazca con el fin de extraer la huella genética.

–¿A dónde conduce que la PGR haya exhumado el cadáver del padre de Lazcano?

–Las autoridades van a decir que el ADN así obtenido coincide con las muestras que tiene. Dan carpetazo al caso y se acabó. Por eso quieren cerrar el círculo. Pero sin cuerpo es imposible. Tenemos evidencias sin peso científico. Al rato sale un certificado de defunción... sabemos que el gobierno mexicano hace esto y más.

El gobierno quiere convencer de que el sujeto abatido por la Marina el domingo 7 es El Lazca y con ello poner fin a la polémica que empezó con el robo del cuerpo y la confusión generada por la diferencia de estaturas entre el cadáver y los datos del capo que tenían registrados las autoridades.

Según los especialistas consultados por Proceso, la insistencia de que se agote el protocolo de identificación sólo obedece a la urgencia que el gobierno mexicano tiene por declarar jurídicamente muerto a Lazcano.

### **Manejo mañoso**

Un abogado penalista –consultado por este semanario y quien pidió no revelar su nombre– que durante años se ha desempeñado como Ministerio Público y perito forense, asegura que las autoridades de Coahuila y del gobierno federal han manejado mañosamente la muerte y la identificación de Lazcano:

“Las huellas dactilares se toman de todos los dedos de las manos, incluso de la palma completa. ¿Sabes por qué no lo hicieron así? Porque seguramente eran las únicas (huellas) que las autoridades tenían de Lazcano. Los forenses de Coahuila no tenían razón para tomar sólo dos o tres huellas, máxime cuando se trata de un cadáver sin identificar. Si no tiene dedos sería una justificación, pero el cadáver que nos mostraron en la foto sí los tenía. Eso demuestra que existe una situación amañada.”

Explica que cuando el Ministerio Público (MP) llega al lugar llama a criminalística y fotografía para que en el sitio fijen fotográficamente la posición del cuerpo y determinen si ésta fue la anterior inmediata a la muerte o si hay indicios de lucha o forcejeo. Pero el cadáver que vimos seguro estuvo manipulado. Así no quedó. Así lo dejaron. Porque si le hubiesen disparado con el arma de grueso calibre como dijeron, tendría destruida la cabeza. A menos que el que vimos no sea el cuerpo de Lazcano.

Añade que en cuestión forense y legal se manejan los términos dubitados, que son los elementos cuestionables, e indubitados, los que no son debatidos. Las autoridades deberían tener el cadáver para, sobre éste, determinar si efectivamente esos son los elementos indubitados, de los que no exista duda sobre su origen. El problema es que los elementos de cotejo no pueden compararse porque no tienen el cuerpo. Esto, asegura, no es jurídica ni científicamente válido.

“Éste es un delito del fuero federal y el MP de Coahuila era incompetente para conocer del asunto. Si tenía el tipo de armas que dicen que se le encontraron, había altas probabilidades –así lo dijo la Secretaría de Marina– de que fuera él. ¿Por qué no lo resguardaron? No le quitaron piel, una uña y la congelaron. No hay ningún elemento fehaciente de cotejo.”

–¿Coahuila debió turnar esas pruebas al Servicio Médico Forense de la PGR?

–Sí, pero desde el inicio, porque los que dan muerte al señor son los marinos, y en el evento encuentran granadas, lanzacohetes y armas largas. Este tipo de delito es del orden federal. Ellos lo saben bien porque toman un curso específico sobre la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Por lo tanto estaban conscientes de que era un delito del orden federal y su obligación primaria era remitir los cuerpos a la PGR y decirle al MP: “Mira, este sujeto no sé quién sea pero traía este arsenal”. Automáticamente se los recibe.

“¡Pero no! ¡Lo dejaron al estado y éste lo recibió aunque sabía que no era de su competencia! Lo que pasa es que ya venían con la intención de manipular el cadáver, porque no es lógico que digan: ‘No sé quién es pero ahí te lo dejo’. Y segundo, porque por el tipo de armamento que traía no era cualquier matón y nunca tomaron precauciones para prevenir una eventualidad. Hay responsabilidad de ambas instancias, la federal por dejarlo y la estatal por aceptar el cuerpo.”

–¿Si usted tuviera que demostrar jurídicamente que las muestras que tiene la PGR no son realmente de El Lazca, lo podría demostrar?

–Sí, porque la Constitución, en el artículo 19, cuarto párrafo, dice que para ejercitar acción penal de un asunto se requieren dos cosas: el cuerpo del delito y acreditar la probable responsabilidad. En este caso tenemos a un sujeto privado de la vida así como armas de fuego. Este es el cuerpo del delito. El problema, es que ya no existe. Se lo robaron. Desapareció.

–¿Aunque se haya exhumado al progenitor de Lazcano?

–Sólo quieren cuadrar su versión de que Lazcano está muerto. Con la exhumación pretenden convencer a la opinión pública al decirle a la gente: “Extrajimos los cadáveres, obtuvimos las muestras de ADN, las cotejamos con las evidencias obtenidas en Coahuila y sí corresponden con las que extrajimos del padre”.

El abogado es contundente: “Esto no sirve porque no existe el cuerpo que nos permita comprobar que es él. Sólo tenemos evidencias que no sabemos si en realidad se obtuvieron del cadáver que nos mostraron. Quieren partir de la buena fe. Pero no hay forma de que jurídica y científicamente sea creíble. Sin cadáver es imposible”.

Arturo Rodríguez García. “Los pocitos negocio de políticos, empresarios... y zetas”. *Proceso* número 1880, 11 noviembre 2012. pp. 12-15. <https://www.proceso.com.mx/324840/324840-los-pocitos-negocio-de-politicos-empresarios-y-zetas>

### **“Los pocitos negocio de políticos, empresarios... y zetas”**

Mientras los legisladores discutían la reforma laboral, los dueños de los pocitos –las minas carboníferas– guardaron silencio para evitar llamar la atención, toda vez que en la iniciativa había una cláusula donde se proponía su prohibición, habida cuenta de que muchos operan de manera ilegal. Pero alguien metió la mano, mutiló un párrafo y el asunto quedó resuelto. Todo parece indicar que las carboneras de la muerte seguirán funcionando sin contratiempos. Lo peor es que, según los expedientes a los que este semanario tuvo acceso, los propietarios de esas minas son políticos, empresarios... y gente vinculada con Los Zetas.

### **A Wilhen Ernesto López García lo mataron Los Zetas.**

No lo acribillaron ni lo descuartizaron; tampoco lo dejaron colgado en un puente. En su caso usaron un tambo para bajarlo de la bocamina hasta un socavón para que sacara carbón. El pozo se derrumbó. Toneladas de piedra lo sepultaron. Falleció el 3 de agosto de 2011 en el pueblo mineral de Agujita, en Sabinas, Coahuila.

Las autoridades estatales y federales, estas últimas del ámbito laboral, supieron lo ocurrido, pero ocultaron el caso. El pocito –mina rudimentaria– siguió operando. Un año después, el 20 de julio de 2012, murió ahí mismo el minero Abel Quiroz Villesca.

En el oficio 2609/2012 dirigido a la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), cuya copia tiene Proceso, el delegado regional de la Procuraduría de Justicia, Norberto Ontiveros Leza, consigna el deceso de Quiroz. Alude también a otro accidente ocurrido el 22 de julio en un pocito en Cloete, e identifica sólo al propietario: El Reynol.

Este último dato desnudó la realidad: políticos y empresarios que participan en la minería del carbón, con protección de gobierno en todos de niveles, con un alto costo en vidas y recurriendo a la explotación infantil, fungen como proveedores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ellos evaden las inspecciones de la STPS, evitan registrar a sus trabajadores en el IMSS y suelen utilizar innumerables razones sociales para ocultar sus millonarios ingresos. Son tan poderosos que lograron mutilar la reforma laboral que prohibía sus letales socavones... Y es en este ambiente de opulencia e impunidad donde Los Zetas encontraron sus oportunidades.

Luego del asesinato de su hijo José Eduardo, el 3 de octubre pasado, el exgobernador Humberto Moreira declaró que había empresarios relacionados con Los Zetas en la zona carbonífera. Dijo que Heriberto Lazcano, El Lazca, tenía tajos de carbón en Progreso, municipio donde supuestamente fue acribillado el capo el 7 de octubre último.

El 30 de agosto la policía estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos ubicados en terrenos del gobierno de Coahuila. El gobernador Rubén Moreira afirmó días después que la delincuencia tenía varias minas de ese tipo.

Los pocitos destruidos eran de José Reynol Bermea Castilla, presunto operador de Los Zetas en Sabinas. Fue detenido en septiembre por efectivos de la Marina Armada de México (Semar). Él dirigía la empresa Minera La Marina.

En una búsqueda registral, Proceso detectó que los pocitos destruidos estaban amparados por la concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza.

Dos meses antes de la muerte de Wilhen Ernesto, el 3 de mayo de 2011, hubo una explosión en el Pozo 3 de Binsa. El saldo: 14 muertos y un adolescente de 14 años de edad mutilado (Proceso 1801).

Binsa es propiedad de Melchor González Vélez, El Chorín, quien no tenía concesión minera, pues operaba con el título 218000, que era de su padre, Alfonso González Garza, y un socio: Jesús María

Montemayor Seguy, El Chuma, hermano de Edmundo y de Rogelio, este último fue gobernador de Coahuila y director de Pemex.

Los Montemayor Seguy y los González son socios y acaparan decenas de miles de hectáreas en la región, donde tienen influencia política. Jesús María, hijo del Chuma, es alcalde de Sabinas (Proceso 1805).

Los pocitos estaban a la vista en Sabinas y operaban aun violando el reglamento municipal de Urbanismo que, en su artículo 74, los prohibía.

### **Zetas mineros**

El 30 de octubre pasado, el diario Reforma informó que la PGR investiga a las empresas Perforaciones Técnicas Industriales y La Misión.

Los poceros tienen dos agrupaciones: la Unión Mexicana de Productores de Carbón (UMPC) y la Unión Nacional de Productores de Carbón (UNPC). Ambas se dedican a gestionar la venta de carbón a la CFE a través de Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), una paraestatal del gobierno de Coahuila. Los directorios de las uniones no son públicos, pero fueron proporcionados a Proceso por agremiados que pidieron el anonimato.

Las mineras JBN y La Misión, por ejemplo, están afiliadas a la UMPC. La primera no registró a ninguno de sus trabajadores en el IMSS y establece su domicilio en Soyaló, Chiapas, a 2 mil kilómetros de la región carbonífera; la segunda tiene como representante a Basilio Niño Ramos.

Una tercera, La Bonita, representada por Luis Basilio Niño López, comparte el correo electrónico con La Misión. Niño Ramos representa además a Minera Hechos, S.A. de C.V.

José Reynol Bermea, representante de la carbonífera La Marina ante la UNPC, no posee ningún título para operarla. Su hermano Joel dirige Minera Las Cuatas, según el registro patronal A3517602010.

El lunes 5, Reforma destacó en un reportaje que las operaciones de El Reynol en Cloete se ubicaban en el perímetro del título 161534 de la asociación de Minera Coapa y José Luis Guadiana Tijerina, hermano de Armando. Ambos empresarios han estado ligados al PRI desde hace mucho tiempo y desde el año pasado a Andrés Manuel López Obrador y al PAN.

Es la segunda ocasión que López Obrador acepta respaldo de empresarios presuntamente vinculados al narco: en 2006 el tabasqueño se relacionó con el marmolero Francisco León, quien después desapareció.

### **Guadiana Tijerina**

“El profesor Moreira es una gente supertrabajadora, entusiasta, luchador; entiende sobre todo a la mayoría de la gente de nuestro partido”, dijo Armando Guadiana Tijerina al periodista Antonio Dávila el 2 de marzo de 2011, cuando Moreira asumió la dirigencia nacional del PRI.

Priista desde 1969, Guadiana encomiaba a Moreira, incluso apoyó a su hermano Rubén Moreira, quien a la postre llegó a la gubernatura. Sin embargo, rompió con el partido y en junio de 2011 fundó Claridad y Participación y se convirtió en el principal crítico de los hermanos Moreira.

José Luis y Santana Armando Guadiana son prósperos empresarios. En la época de las privatizaciones estuvieron a punto de quedarse con Altos Hornos de México, pero les ganó Alonso Ancira (Proceso 1179). Sus negocios son variados: gas domiciliario, transporte de carga, ranchos ganaderos y agrícolas, barcos, eventos taurinos, minas...

Con todo, han tenido sobresaltos. En agosto de 1994, Santana Armando fue acusado de un delito similar al que se le imputa al exgobernador Moreira: según la PGR, contrató a nombre de su empresa Coapa un crédito por 20 millones de dólares con Bancomext. No sólo presentó documentos falsos, sino que utilizó el dinero obtenido para otros fines. Estuvo preso unos días y luego fue exonerado.

Convertido en el más destacado opositor de los Moreira, en 2012 Armando Guadiana apoyó la campaña de Andrés Manuel López Obrador y la conformación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El 29 de octubre, Guadiana reunió en Torreón a los líderes del PAN y las izquierdas, entre ellos Jorge Zermeño y Guillermo Anaya, para integrar una alianza con miras a las elecciones de 2013.

Pero la relación más estrecha de los Guadiana Tijerina es con los Gutiérrez, descendientes del general revolucionario Eulalio Gutiérrez. Guadiana fue socio, junto con el carbonero y exalcalde priista Urbano Santos, en la extinta Transportes Aéreos de Coahuila, cuyo accionista mayoritario era Alejandro Gutiérrez, actual asesor de Manlio Fabio Beltrones.

En su nota, Reforma establece que otras empresas de José Luis Guadiana estarían relacionadas con el narco: Génesis compra carbón a Materiales Industrializados que le vende a JBN.

Su hermano Armando negó el vínculo el lunes 5. Dijo que lo acusaban por ser crítico, incluso advirtió que él no respondía ni por su madre. Y retó a Moreira a hacerse un antidoping. El viernes 9, José Luis publicó un desplegado conciliador en el cual rechaza nexos con el narco y “reconoce” los esfuerzos de Rubén como gobernador.

Información obtenida por Proceso revela que mineras de los Guadiana venden unos 400 millones de pesos anuales a la CFE.

Entre 2008 y 2011, los empresarios vendieron más de 2 mil millones de pesos: Minera Zapalinamé, 981 millones; Minera Río Álamo, 937 millones; Mantos Carboníferos, 190 millones; Carbón Mexicano, 167 millones; Comercializadora de Productos Minerales, 127 millones; Minera 2G, 51 millones; Minera Génesis, 12 millones; Minera Dalma, 11 millones, y Combustibles Fósiles, 40 millones.

Proceso constató que hasta 2010 no todas las carboneras tenían trabajadores dados de alta, pero sí vendieron carbón. Ese año registraron sólo a 346 empleados, cuyo salario promedio era de 156 pesos diarios. Esto es: gastaron alrededor de 20 millones de pesos en nómina, un año que tuvieron ingresos por más de 400 millones.

Las empresas tienen diferentes nombres y representantes. En el caso de Zapalinamé, la dirige José Luis Guadiana; Río Álamo es representada ante la UMPC por Osbaldo Garza, yerno de José Luis, cuyo correo es el mismo que el de Carbón Mexicano. Zapalinamé tiene el mismo domicilio fiscal de Minera Génesis, mientras que Mantos Carboníferos tiene el mismo representante que Consorcio Titanes.

La lista de representantes ante las uniones es trascendente: son ellos los que firman los contratos con la Prodemi y la Proderm.

## Los “poceros”

El 30 de julio de 2010 Ramón Sánchez Arellano, hijo de Gloria Arellano, murió en el pocito Boker. Cinco días antes Fidencio, hermano de Ramón, y otros seis mineros fallecieron en un pocito de Federico Quintanilla, exalcalde priista de Progreso que es dueño de las mineras El Progreso, Rodensa y Carbón y Derivados.

Y así como los accidentes mineros afectan a las mismas familias, otras se reparten la explotación: El Chorín, de Binsa, tiene Minería Internacional; su hermana Graciela dirige Fósiles Minerales.

Carbonífera Las Dos Glorias es de Gloria Yutani, hermana de David, fundador de la UMPC y exalcalde de Sabinas por Convergencia.

Hay datos sospechosos: Corporativo 3 Potrancas es representada por Hidalgo Neavez Cura; Alpha Prime Mining, por Melchor Múzquiz.

Desde que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari liberó la explotación de carbón en 1992, los poceros pudieron asumir la proveeduría a la CFE para las carboeléctricas José López Portillo y Carbón II.

En 2002, la CFE tuvo que licitar por condiciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). El gobernador de Coahuila Enrique Martínez fundó la Prodemi para que fuera intermediaria. Desde su creación fue denunciada por coyotaje, favoritismos y ausencia de seguridad social (Proceso 1179).

Al frente de la Prodemi, el mandatario puso a Rodolfo Rábago, exdelegado de la PGR en Coahuila. Súbitamente aparecieron neocarboneros surgidos de la PGR, entre ellos Eliseo Jesús Aguilar, exagente del Ministerio Público.

Para 2007, políticos del PAN entraron al negocio, como el exdiputado federal Jesús Ramírez Rangel. Fue él quien negoció el precio del mineral ante la CFE. Cobró más de 45 millones de pesos.

El jueves 8 Reforma informó que las minas investigadas venden carbón a la CFE a través de la Promotora para el Desarrollo Regional de la Minería en Sonora (Proderm), paraestatal supuestamente creada a instancias del diputado Guillermo Anaya, compadre de Felipe Calderón, amigo del gobernador Guillermo Padrés y muy cercano a Guadiana Tijerina.

La Proderm rechazó vínculos con el narco pero admitió la participación de las empresas que cumplían con sus obligaciones ante la STPS, el Servicio de Administración Tributaria y el IMSS, lo cual es poco común.

La UMPC, por ejemplo, tiene 56 empresas registradas. De ellas, 22 no tienen trabajadores dados de alta en el IMSS, pero venden carbón; otras 11 no tienen contrato con Prodemi.

La ilegalidad con la que operan las carboneras fue denunciada a Felipe Calderón cuando estuvo al frente de la Secretaría de Energía, pero no hizo nada al respecto (La Jornada, 24 de febrero de 2005).

## Mutilaciones mineras

La orden fue cumplida a cabalidad: los pocitos carboneros dejaron de producir en septiembre. El objetivo era evitar el riesgo de un accidente mientras se discutía la iniciativa de reforma laboral.

El accidente de Binsa, en mayo de 2011, en el cual un menor perdió un brazo, puso al descubierto una práctica frecuente: que los poceros usan en las minas a niños de entre 10 y 14 años por su tamaño y por su complexión delgada.

En 2009, un accidente en la mina Lulú reveló condiciones equiparables a la esclavitud: los trabajadores dormían ahí sobre cartones, no tenían baños ni comedor, tampoco servicios de enfermería, menos aun transporte ni teléfono para pedir ayuda en casos de emergencia. La mina era de Salvador Kamar, dueño de medios de comunicación y contratista de obra. Siguió produciendo hasta febrero de 2011, cuando dos trabajadores murieron.

Todo fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe especial sobre el carbón en 2011 y por la Organización Internacional del Trabajo.

Los vacíos legales y las disposiciones estatales son tan permisivas que el Manual de asignación de contratos de carbón, emitido en enero de 2011, permite subarrendamientos, usufructo de concesiones ajenas, subcontratos y, según el artículo 6, fracción XIII, obliga a tener un ingeniero responsable de seguridad sólo si hay más de nueve trabajadores.

El gobernador Rubén Moreira ha rechazado la prohibición de los pocitos. Son varias las ocasiones en las que ha declarado que los cierres deben ser graduales para amortiguar el impacto económico. Lo cierto es que la generación de empleos es irrisoria: 34 mineras apenas tienen mil 500 trabajadores.

En la legislatura anterior, el senador Ricardo García Cervantes pidió que los pocitos fueran prohibidos. Hoy, luego de 70 mineros muertos durante el sexenio calderonista, la “iniciativa preferente” de reforma laboral se propuso prohibirlos.

En la Cámara de Diputados, el párrafo en el que abordaba el asunto fue mutilado, según una fe de erratas que intentó incluir el presidente de la Comisión del Trabajo, Carlos Aceves del Olmo.

La agencia Apro publicó el 2 de octubre que el párrafo era del artículo 343-A de la iniciativa. Días después, Carmen Aristegui abordó el asunto. El líder del PRI en San Lázaro, Jesús Murillo Karam, respondió que el corte fue propuesto por el legislador Tomás Torres, del PVEM.

En el Senado, Dolores Padierna pidió incluir la prohibición, pero no encontró respaldo ni en su bancada. El diputado priista Manlio Fabio Beltrones habló de una nueva iniciativa para regular los pocitos.

Aprobada ya la reforma, sin prohibición, la protección de los poceros sigue garantizada.

Jorge Carrasco Araizaga. “Los Zetas hacen de Córdoba su feudo y refugio”. *Proceso* número 1881, 18 noviembre 2012. pp. 12-17. <https://www.proceso.com.mx/325526/los-zetas-hacen-de-cordoba-su-feudo-y-refugio>

### **“Los Zetas hacen de Córdoba su feudo y refugio”**

La captura de tres presuntos integrantes de Los Zetas en octubre pasado permitió a las autoridades detectar la existencia de una presunta red de complicidades de ese grupo criminal para operar a sus anchas en Córdoba, Veracruz. El amplio entramado –al decir de los tres capturados por la Marina–

incluye a empresarios, políticos y sobre todo a funcionarios de la Procuraduría del estado de Veracruz, que ahora está obligada a investigarse a sí misma. Mientras tanto, el mandatario Javier Duarte rendía el jueves 15 un triunfalista informe de gobierno...

**MÉXICO, D.F. (Proceso).** - Córdoba se convirtió en el refugio de Los Zetas en Veracruz, con la protección de funcionarios de seguridad y procuración de justicia y el apoyo de empresarios para el lavado de dinero. La reciente captura de tres operadores de esa organización delictiva por parte de la Marina descubrió una presunta red de favores que implica sobre todo a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado en la ciudad donde nació el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

La PGJ tiene ahora que investigarse a sí misma, por lo menos en lo que hace a los delitos del fuero común atribuidos a los tres detenidos por la Marina el pasado 10 de octubre, acusados de portación de armas largas y posesión de cocaína y mariguana para su venta al menudeo.

La detención se hizo pública el pasado 14 de octubre, cuando la Secretaría de Marina informó que sus efectivos habían aprehendido en el puerto de Veracruz a Christopher Fuentes Letelier, *El Chuletón*; Gerardo Trejo Cruz, *El Trejo*, e Ignacio Valdez Ramírez, *El Chilango*, quienes se identificaron como zetas.

Desde su captura los tres presuntos zetas apuntaron hacia las oficinas de la Procuraduría veracruzana en Córdoba. Sus declaraciones las conocen tanto el gobierno de Duarte como la Marina pues la PGJ tiene un “fiscal investigador especializado adscrito a la Fuerza de Tarea de la Secretaría de Marina-Armada de México”, la que prácticamente está a cargo de la seguridad en el estado mediante el Operativo Veracruz Seguro.

### “El Chuletón”

El *modus operandi* de Los Zetas en Córdoba está detallado en la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz por el “fiscal investigador especializado” Pedro Alberto Huesca Barradas. La averiguación se dio a conocer en el estado de forma extraoficial, sin papel membretado de la PGJ.

*El Chuletón*, de 26 años y originario de Córdoba, se dedica a la venta de cocaína. Integrante de Los Zetas desde 2008, había viajado al puerto para encontrarse con *El Trejo* y *El Chilango* y entregarles la droga que transportaba, un paquete de más 76 bolsitas de mariguana además de 500 bolsitas de cocaína, para distribuirla en el puerto de Veracruz.

Los tres dijeron estar bajo el mando del *Comandante Javid* o *El Pájaro*, a quien identificaron como “segundo comandante” del cártel en la zona de Córdoba-Fortín de las Flores y Orizaba. Lo señalaron como el encargado del narcomenudeo, la extorsión a los líderes cañeros de la zona durante el corte de caña, el cobro de derecho de piso, secuestros y el control de “todo el personal de sicarios que llamamos estacas”, así como dueño de bares en Córdoba, de cuyo distrito electoral Duarte fue electo, en 2009, diputado federal a la LXI Legislatura en la que ejerció sólo unos meses.

En su declaración ministerial, referida sólo por algunos medios locales, *El Chuletón* es prolijo en nombres de sus jefes, de los empresarios que supuestamente han puesto sus negocios para lavar dinero y de los funcionarios de la PGJ que, dijo, protegen a Los Zetas.

“Tenemos personas de la Procuraduría trabajando para nuestra organización. De los que me acuerdo y conocí son el licenciado Abraham Becerril Hernández”, quien fue subprocurador de Justicia en Córdoba y precandidato del PRI a esa alcaldía. De él dijo que “recibía una nómina de cien mil pesos mensuales. Nos presta sus bodegas donde guardamos los tráilers robados y a las personas que levantábamos o secuestrábamos”.

Mencionó también a María Isabel Hernández Cruz, agente del Ministerio Público en Córdoba. “El licenciado Abraham Becerril Hernández nos mandaba con ella para que nos devolviera los tráilers de la empresa de Los Zetas que detenían y ponían a disposición. Le pagamos por su apoyo la cantidad de 50 mil pesos mensuales”.

El secretario del Ministerio Público, Uriel Moreno, “es el que hacía los trámites para devolvernos las unidades. Le pagamos... 10 mil pesos mensuales”. Aseguró que la mercancía que les era devuelta la almacenaban en una bodega propiedad de Becerril Hernández.

“También trabaja para Los Zetas el licenciado Marco Antonio Lezama Moo, quien fue subprocurador en Córdoba en el año 2008 a 2010”. El siguiente cargo que ocupó Lezama Moo fue como encargado de despacho en la PGJ tras la renuncia de Reynaldo Escobar. Actualmente es subprocurador en Xalapa.

Según el testimonio, Gustavo Cano Sánchez, *El Moneneque*, quien fue jefe de Los Zetas en Córdoba, le pagaba a Lezama Moo 80 mil pesos mensuales. “Nos entregaba los vehículos que nos aseguraban sin hacer ningún trámite, así como los tráilers y dejar (sic) en libertad inmediata a miembros de Los Zetas”.

Como muy cercano a Lezama Moo señaló a Lauro Ramos Olmos, quien era agente del Ministerio Público en Córdoba. “Le pagamos la cantidad de 20 mil pesos mensuales. Se encargaba de entregarnos los oficios para liberar los vehículos asegurados y dejar en libertad a miembros de Los Zetas que fueran detenidos.

“También nos decía si aseguraban algún vehículo de nosotros o a algún compañero. Además, los ayudaba cuando tenían que declarar en su oficina o ante cualquier autoridad que los detuviera para que no delatara a Los Zetas y se pudieran defender mejor. Ahora está como Ministerio Público en Xalapa, a donde lo mandó Lezama Moo”, según la declaración.

*El Chuletón* también implicó a Jorge Yunis Manzanares, subprocurador regional de Justicia en Coahuila: “También es parte de nuestra organización. Es una de las personas a las que el jefe le tiene más confianza”.

## **“Renuncia funcionario de Coahuila acusado de proteger a “Los Zetas””**

### **REDACCIÓN**

**Proceso**

**19 febrero 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/298795/renuncia-funcionario-de-coahuila-vinculado-con-los-zetas>

MÉXICO, D.F. (apro). - Jesús Torres Charles, asesor jurídico del gobernador de Coahuila, solicitó licencia esta semana para separarse de su cargo por los presuntos nexos con el crimen organizado de uno de sus hermanos.

El gobernador Rubén Moreira Valdez confirmó este domingo que Torres Charles pidió licencia al puesto que ocupaba desde finales de diciembre de 2011 y dio a conocer que ya designó a Raúl Alvarado Castro como su reemplazo.

Agregó que la solicitud fue hecha “por motivos personales”, sin brindar mayores detalles sobre el asunto.

Desde el viernes no se sabe nada de Torres Charles, luego de que se difundiera que fue acusado de encabezar una red de protección para “Los Zetas”.

Junto con Torres Charles también se ha involucrado a su hermano Humberto, actualmente prófugo, quien presuntamente también daba protección a bandas criminales a cambio de grandes cantidades de dinero, de acuerdo con el periódico *Vanguardia*.

Uno de los operadores de “Los Zetas” en Coahuila, Pedro Toga Lara, *El Guacho*, declaró ante el Ministerio Público que el hermano de Jesús Torres Charles recibía 300 mil pesos mensuales de la organización criminal.

Torres Charles fue procurador y fiscal general durante el sexenio de Humberto Moreira.

### **“Cae presunto jefe de “Los Zetas” en la Comarca Lagunera”**

**LUIS LOZANO**

**Proceso**

**9 marzo 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/300586/cae-presunto-jefe-de-los-zetas-en-la-comarca-lagunera>

DURANGO, Dgo. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó esta noche la detención de siete presuntos delincuentes en el municipio de Gómez Palacio.

Sin embargo, fuentes al interior de la dependencia informaron que entre los capturados estaría Valentín Ramírez Cuenca, *El Comandante Balón*, quien fungía como jefe de la organización delictiva en Durango y Coahuila.

En un comunicado, sin detallar nombres, la PGR indicó que la detención de siete presuntos delincuentes se produjo la tarde del miércoles 7, en el bulevar Ejército Mexicano.

Los sicarios tenían consigo, además de droga, cuatro armas largas; iban en dos vehículos de modelo reciente cuando fueron asegurados.

Por su detención se abrió la averiguación previa PGR/DGO/DGO/111/2012, por la responsabilidad que les resulte en la comisión de delitos contra la salud, delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En los vehículos en que viajaban los presuntos narcotraficantes, el Ejército encontró 40 dosis de marihuana que pesaron un kilogramo; 50 dosis de cocaína, con un peso total de 24 gramos, y 17 gramos de la droga conocida como ‘crystal’.

Todos fueron consignados ante el Ministerio Público de la Federación; se espera que en breve sean presentados por la PGR.

### **“Denuncia el pintor Francisco Toledo amenazas de Los Zetas”**

**PEDRO MATÍAS**

**Proceso**

**23 abril 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/305198/denuncia-el-pintor-francisco-toledo-amenazas-de-los-zetas>

**OAXACA, Oax.(apro).- El reconocido pintor Francisco Toledo presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por amenazas de muerte de Los Zetas, a través de un correo electrónico.**

El caso se suma a las recientes intimidaciones lanzadas contra los coordinadores de la Pastoral Social de Movilidad Humana, Alejandro Solalinde; de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz, Francisco Wilfrido Mayrén Peláez, y del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixta (Codigo-DH), Alba Cruz Ramos, así como a la esposa del expreso político Marcelino Coache.

Incluso, el artista plástico adelantó que enviará una carta al presidente Felipe Calderón “buscando no protección, pero sí hacer del conocimiento de lo que está pasando alrededor nuestro”.

Una vez que presentó la denuncia ante la PGR, Toledo reconoció que lo primero que hizo la dependencia fue brindarle seguridad, sin embargo, “eso no soluciona el problema”.

Considera que “está bien (lo de la seguridad), pero yo creo que lo más importante es ver de dónde viene esta amenaza porque trae firma, un correo electrónico y trae una inicial de Los Zetas”.

El caso ya está en manos de la PGR “y son ellos los que estudiarán de dónde viene y la manera de redactar esta carta, y si corresponde a la forma de redactar otras cartas con amenazas”.

No obstante, descartó que las amenazas tengan que ver con la coyuntura electoral, ya que “yo no voto, no tengo un candidato, un candidato favorito, y quién de los partidos podría decir ‘castiguen a ése, échenle miedo por ser partidario de fulano o zutano’, o que reniego de este sistema político. No tengo ni credencial de elector, soy un ciudadano ausente de esas luchas”.

Desde el correo richard\_murray001@msn.com fue enviada la amenaza de muerte, fechada el sábado 14 a las 5:03 horas con el mensaje “Su vida está en peligro” y datos adjuntos de “matazetas.jpg”:

En el texto se advierte: “Tu amigo te quiere muerto por todos los medios, Los Zetas han pagado por su amigo para asesinarlo en cualquier momento a partir de ahora, su amigo ha gastado mucho dinero en esto y el contrato se firmó finalmente ayer y he sido asignado para guiar a nuestros miembros a matar”.

Más aún: “Tenemos su nombre, fotos, dirección y otra información necesaria que necesitamos para remontar en cualquier momento, estamos viendo que hace cada minuto del día”.

En el correo también se hacen la recomendación para que tome en serio la amenaza y no se ponga en contacto con la policía, porque “vamos a saber, cualquier intento de este tipo no le ayudará, pero sólo nos empujan a matar sin ningún tipo de opción y también se incluyen los miembros de la familia”.

Finalmente, los presuntos sicarios proponen a Toledo ponerse en contacto a través de la dirección attorney\_ali@msn.com, ya que de esa forma “usted puede tener sólo una oportunidad de vivir de nuevo sólo si usted puede seguir mis instrucciones y ponerse en contacto conmigo, no más tarde que 24 horas”.

Antes, el Premio Nacional de las Ciencias y las Artes también expresó su preocupación por lo que pasa con el coordinador del albergue Hermanos en el Camino, Alejandro Solalinde Guerra.

En una misiva, Toledo manifiesta al religioso:

“Padre, pensamos mucho en usted en estos difíciles momentos, esperamos que todo salga bien. Su amigo Francisco Toledo”.

### **“Arraigan a alcalde detenido con líder de Los Zetas en Veracruz”**

**REGINA MARTÍNEZ**

**Proceso**

**24 abril 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/305287/arraigan-a-alcalde-detenido-con-lider-de-los-zetas-en-veracruz>

XALAPA, Ver. (apro).- Un juez federal de la Ciudad de México concedió a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) una orden de arraigo en contra del alcalde de Chinameca, Martín Padua Zúñiga, quien hace una semana fue detenido en un operativo del Ejército contra presuntos integrantes del cártel de Los Zetas.

Luego de que el presidente municipal rindió su declaración ministerial ante la SIEDO, la Procuraduría General de la República (PGR) decidió solicitar su arraigo a un juzgado federal para continuar las investigaciones.

La PGR indaga la participación de Martín Padua en los hechos registrados el martes 17 en Minatitlán, cuando el municípe fue detenido por militares junto con José Carmen Fragosos Martínez, El Comandante Reyes o El Conchas, a quien se ubica como jefe de Los Zetas en la región sur de la entidad.

La semana pasada el alcalde fue trasladado a las oficinas centrales de la SIEDO en la Ciudad de México, donde rindió su declaración ministerial en calidad de presentado y, antes de que se venciera el plazo constitucional, se la PGR procedió a solicitar la orden de arraigo.

El día de la detención de Padua Zúñiga, quien en 2010 contendió como candidato externo del PAN en las elecciones locales, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) reportó que en el operativo también fueron detenidos Gregorio Román Barradas, El Rochi; Sergio López Ramírez, La Cobra; Marcos González León, y Eligio Aurelio Ramírez Amores.

La dependencia detalló que en el operativo fueron asegurados siete armas de fuego, cuatro largas y tres cortas; tres granadas y 23 cargadores, así como 473 cartuchos,

Además, seis equipos de comunicación, 90 mil pesos en efectivo y cinco vehículos, algunos de ellos con reporte de robo.

La Sedena también destacó que en un operativo efectuado el día anterior a la detención del alcalde, se logró la captura de José Manuel Rodríguez Barrientos, El Tío Pepe, quien fungía como operador financiero de Los Zetas en Coatzacoalcos y otros municipios de la región sur de Veracruz.

En esa acción, abundó la Sedena, además fueron detenidos Mario García Cisneros y Rogelio Aispuro Mendoza, quienes junto con El Tío Pepe fueron trasladados a las instalaciones de la Siedo, donde ya rindieron su declaración ministerial.

Por otra parte, a una semana de los hechos, la Diputación Permanente convocó a sesión ordinaria este miércoles 25, en que se presume se abordará el caso del alcalde de Chinameca.

## **“Niegan fianza en EU a hermano del líder de Los Zetas”**

### **LA REDACCIÓN**

**Proceso**

**3 julio 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/313142/niegan-fianza-en-eu-a-hermano-del-lider-de-los-zetas>

MÉXICO, D.F. (apro).- José Treviño Morales, hermano del presunto líder del cártel de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, el Z-40, permanecerá en una cárcel de Texas, debido a que un juez federal de Austin le negó hoy la libertad bajo fianza.

El juez Mark Lane, de la Corte del Distrito Oeste de Texas, negó la petición de Treviño Morales, al término de una audiencia celebrada este martes, aunque no precisó las razones, informó el abogado Douglas Gardner.

El 12 de junio pasado, Treviño Morales fue detenido junto con su esposa Zulema en su rancho de Lexington, Oklahoma, llamado “Zulema Farms”.

El gobierno de Estados Unidos acusa al hermano del Z-40 y a 13 personas más de conspirar para “lavar” dinero de Los Zetas producto del tráfico de drogas, a través de la compra-venta y competencias de caballos de carreras.

De acuerdo con la denuncia, Treviño se hacía pasar como “legítimo propietario” de caballos de carreras cuarto de milla, para lo cual creó dos empresas: Tremos Enterprises y Zule Farms para lavar el dinero de Los Zetas.

El pasado jueves, el juez Lane aceptó dejar en libertad bajo fianza de 25 mil dólares a Zulema Treviño.

De los 14 acusados en la confabulación de lavado de dinero, nueve han sido detenidos y los otros cinco permanecen prófugos, entre ellos el presunto líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Oscar Omar Treviño Morales.

De los nueve detenidos, tres han sido dejados en libertad bajo fianza, incluyendo a Zulema Treviño.

### **“Capturan en Texas a banda que suministraba armas a Los Zetas”**

**Redacción**

**Proceso**

**9 julio 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/313714/capturan-en-texas-a-banda-que-suministraba-armas-a-los-zetas>

MÉXICO, D.F. (apro).- La Oficina del Procurador General de Estados Unidos informó hoy que agentes federales destacamentos en San Antonio detuvieron a 20 presuntos integrantes de una banda dedicada a vender armas de alto poder al cártel de Los Zetas.

De acuerdo con la agencia Notimex, la banda está encabezada por el mexicano Jimmy H. Torres, de 27 años de edad, quien se encarga de reclutar a jóvenes estadounidenses para que compraran armas al menudeo en las armerías de la zona.

Según la Oficina del Procurador General, entre diciembre de 2011 y enero de este año, la banda adquirió, por lo menos 33 rifles automáticos para Los Zetas, la mayoría de ellos AK-47.

De acuerdo con las autoridades, las armas adquiridas en distintas armerías de San Antonio, eran entregadas a Torres, señalado como el líder de la banda que proveía los rifles automáticos a Los Zetas a través de la frontera de Eagle Pass, en el sur de Texas.

Las autoridades estadounidenses presentaron 33 cargos en contra de los detnidos, entre ellos, por mentir en el llenado de las formas federales para adquirir un arma.

Torres pagaba a cada comprador unos 300 dólares por cada arma adquirida.

Según la información, entre los 20 detenidos señalados en la acusación se encuentran Eduardo Rodríguez, Joann García, Eddie Ramos, Virginia Ricarte Jones, Pablo Hernández Ramos, Mary Helen Ramos, José, Joey, Ricarte, David Ricarte y Genoveva Fiscal Cuéllar.

También están acusados Ramón Ernesto Armijo, Mathew Arteaga, Destiny Delafuente, Robert Alcaraz, Lisa Campos, Alexis Marie García, Christopher Garcia, Krystle Marie García y Tommy Guerrero.

### **“Se divide el cártel de “Los Zetas””**

**JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y JUAN ALBERTO CEDILLO**

**Proceso**

**19 julio, 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/314485/se-divide-el-cartel-de-los-zetas>

Fuentes federales de seguridad confirman lo que algunas narcomantas colgadas en estados del norte del país sugerían desde principios del mes pasado: Los Zetas, el extraordinariamente violento grupo de sicarios que devino cártel del narcotráfico, enfrenta una ruptura en la cúpula. Sus dos principales líderes, el Z-40 y El Lazca, aparentemente están enfrentados en una complicada trama de traiciones que, según los expertos, augura un nuevo y más grave baño de sangre en el país.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La mañana del 1 de junio un grupo de jóvenes colgó una gran manta en el jardín Independencia en el Centro Histórico de Zacatecas. Casi al mismo tiempo cuatro adolescentes subieron las escaleras de un puente peatonal que cruza la transitada avenida Félix U. Gómez, del centro de Monterrey, para colocar el mismo narcomensaje que tenía en el centro una gran fotografía de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.

Alrededor de la imagen del Lazca había siete más pequeñas de otros capos zetas que han sido abatidos o capturados, entre ellos Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito; Jaime González Durán, El Hummer; Arturo Guzmán Decena, Z-1, y Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky.

Por esos días también fue subido al portal de videos Youtube un corrido con la siguiente advertencia: “Pongan atención cárteles de México y de otros países, ésta es la historia de una persona que ha traicionado a compañeros aliándose con federales para así entregárselos y su plan es ser líder de Los Zetas”.

Con esa advertencia comienza el video que llamaron “la verdadera historia del Z-40”, en alusión a Miguel Ángel Treviño Morales, quien junto con El Lazca tiene el control de Los Zetas, el grupo que hasta 2009 operó como brazo armado del Cártel del Golfo al servicio de Osiel Cárdenas Guillén, ahora preso en Estados Unidos.

Luego apareció otro video: “Nuevo corrido de Los Zetas”, en el que se narran las supuestas traiciones que ha cometido el “Nuevo Judas”, como identifican a Treviño Morales, contra algunos integrantes de esa organización.

El 7 de junio el mismo mensaje con la foto del Lazca al centro apareció frente a la presidencia municipal de Ciudad Mante, Tamaulipas. Pero esa vez fue colocado en la puerta de un camión de carga en cuyo interior había 14 cadáveres mutilados.

Esos mensajes y hechos como el descuartizamiento de 49 cuerpos que fueron abandonados la madrugada del 13 de mayo en Cadereyta, dejan ver una nueva división en uno de los grupos más poderosos y diversificados en la República, lo que podría ser el preludio de un nuevo baño de sangre.

### **“Z-40” vs. “El Lazca”**

Fuentes de seguridad del gobierno federal confirman a Proceso que hay una división entre Los Zetas y consideran que la pugna es por el liderazgo. Mencionan incluso que Treviño Morales puede traicionar y hasta entregar a El Lazca, el único de los militares de élite que sigue en la organización. Los demás desertores del Ejército que crearon Los Zetas al inicio del sexenio de Vicente Fox han sido asesinados o encarcelados.

“El Z-40 ha traicionado y ha estado poniendo a gente del Lazca”, aseguran las fuentes oficiales, quienes agregan que Lazcano se ha estado desplazando entre Europa y Centroamérica. Hace poco fue ubicado en Costa Rica, a donde llegó desde Alemania.

Lazcano ha perdido mucha gente de su confianza y eso lo ha obligado a replegarse, aunque la reciente detención de José Treviño Morales, hermano del Z-40, lo puede favorecer, dicen.

José Treviño fue detenido el 12 de junio en Estados Unidos, acusado de lavar dinero para su hermano. La investigación en ese país tiene que ver sólo con la célula de Los Zetas a cargo de Treviño Morales y no implica a toda la organización delictiva.

El Z-40, quien ha sido ubicado entre Piedras Negras, Coahuila, y Aguascalientes, podría tornar todavía más violento a ese cártel si logra quedarse con el control, pues se ha distinguido como un operador impulsivo, advierten las fuentes.

Las noticias sobre la división zeta no son nuevas. Desde abril del año pasado la firma texana de inteligencia Stratfor dio cuenta de versiones en ese sentido:

“Stratfor ha escuchado rumores de una división entre el líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, y el número tres de la organización, Miguel Ángel Treviño Morales, Z-40. Sin embargo no nos ha sido posible confirmar esto o determinar si el desgaste de líderes secundarios fue afectado o causado por tal división.”

Las versiones no quedaron ahí. En junio del año pasado se informó que Lazcano había muerto en un enfrentamiento con el Ejército en Matamoros. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lo desmintió.

### **Narcomensaje**

Las narcomantas que aparecieron en Zacatecas, Monterrey y Ciudad Mante en junio pasado empiezan con una advertencia: “Esto va para todos los compañeros que quedan cerca del jefe Lazcano y Z-40”.

Los autores del texto usaron el nombre de Guzmán Decena, Z-1, el militar que fundó Los Zetas y que murió en Matamoros en noviembre de 2002 en un enfrentamiento con sus excompañeros del Ejército.

El recurso fue para preguntar a Heriberto Lazcano si la captura de algunos jefes zetas son casualidades o han sido traiciones. Las bajas han sido ante el Ejército o la Marina. Pero la mayoría han caído en manos de la Policía Federal (PF).

En las narcomantas se dice que la detención de Germán Torres Jiménez, El Tatanka, era “entendible para quitar la calentura del gobierno de Estados Unidos”. Esto porque en diciembre de 2008 aquél fue responsable del secuestro y asesinato del exagente del FBI Félix Batista, en Saltillo. Enseguida preguntan quién lo entregó: ¿Lazcano o El Z-40?

Después de haber sido capturado en Poza Rica, Veracruz, El Tatanka confesó a la PF que había abandonado la plaza de Saltillo porque supo que miembros de su grupo pretendían eliminarlo.

Otro de los nombres incluidos en las mantas es el de Efraín Teodoro Torres, La Chispa o Z-14, quien murió en el ataque del 3 de marzo de 2007 en Villarín, Veracruz, donde tenía lugar una carrera de caballos.

Su nombre salió de nuevo a la luz pública por la detención del hermano del Z-40 pues entre los acusados de lavar dinero para Miguel Ángel Treviño, la justicia estadounidense incluyó a Francisco Colorado Cessa, presente en los hechos donde murió el Z-14. Las narcomantas señalan que después de que mataron a Torres dejaron a su “familia en la calle”.

Además está el nombre de Reyes Enrique, El Rex o Z-12, detenido en junio de 2007 en Hidalgo por militares. “Su ilusión era casarse confió en ti la ubicación de su boda y lo traicionaste poniéndolo el día de su boda”, dice el narcomensaje que también cuestionan que al Lucky lo haya capturado la Marina cuando andaba solo, a pesar de que “era muy cuidadoso en su seguridad”. Fue “¿casualidad o traición?”.

Los narcomensajes también señalan que Miguel Ángel Treviño andaba junto con Daniel Pérez, El Cachetes, cuando éste fue detenido en Guatemala en abril de 2008. “Era el segundo de abordó tuyo como él no la libró y 40 sí. Casualidad o traición?”.

Dicen también que el jefe zeta en Reynosa, Jaime Durán, El Hummer, le “estorbaba a 40 para que resaltara más que él”.

Refieren además la detención de otro exmilitar fundador del grupo, El Mamito, y de Alberto José González Xalate, El Paisa, detenido por la PF en abril de 2012 en Saltillo cuando circulaba en un auto con su esposa y tres menores.

“Era buen amigo tuyo y cuidaba tus finanzas e intereses personales fue casualidad que los azules lo encontraran también andando en carro solo y con su familia!”

El mensaje termina con la siguiente frase: “Saca conclusiones... a la mayoría los detuvo los azules y es tan fácil como dar un número telefónico y te ganchan.

“Los únicos que andaban comunicados contigo o 40 son todos los mencionados... casualidad o traición? Con quien estamos más seguros con Lazcano o con 40.”

## También en video

Los narcovideos son más explícitos: dicen que el “Judas” de Los Zetas es Miguel Ángel Treviño. Lo implican en una serie de intrigas y asesinatos de los mismos compañeros del grupo y le advierten a Lazcano que el Z-40 “no conoce de lealtad”.

“Hay un dicho que es muy cierto, ni en tu sombra hay que confiar. Ese que tú traes a un lado no conoce la lealtad... Y tú por confiar en tu sombra, sabrá dónde acabarás”, dice “El nuevo corrido de Los Zetas”.

“Ahí te dejo de recuerdo lo de la Sierra de Victoria, San Luis y San Fernando, acuérdate y haz memoria, te cayó todo el gobierno y por poco no la logras”, añade.

Versiones que circulan en medios policiacos de Nuevo León aseguran que Los Zetas ya están divididos en dos bandos, uno de los cuales está negociando con los grupos descontentos del Cártel del Golfo para formar un grupo y abandonar al Z-40. Y destacan que Heriberto Lazcano tiene mucho tiempo al margen de las principales acciones.

Uno de los hechos que evidencian la división del grupo ocurrió la madrugada del 13 de mayo, cuando Jesús Elizondo Ramírez, El Loco, líder zeta en Cadereyta, desobedeció las órdenes del Z-40.

Capturado por los militares, el 18 de mayo en el municipio de Guadalupe, confesó que “recibió órdenes de Heriberto Lazcano y Miguel Ángel Treviño y del jefe de la organización criminal en dicha entidad, el cual es conocido como El Morro, para que se coordinara con un individuo apodado El Camarón y abandonaran en la plaza principal de Cadereyta los cuerpos que le iba a entregar dicha persona, junto con una manta que los incriminaba como responsables de la matanza”, informa un comunicado de la Sedena.

Elizondo Ramírez contó que un representante del Camarón, José Ricardo Barajas López, El Bocinas, fugado del Penal de Apodaca, lo citó en el poblado de Los Herrera, donde se encontró con 30 sicarios que le entregaron los 49 cuerpos, “los cuales fueron transportados en varias camionetas, incluyendo un camión de carga”.

“Debido a las consecuencias previsibles que desencadenaría un evento de esta naturaleza en su contra”, El Loco contravino las órdenes de sus jefes y decidió “dejar los cuerpos en donde posteriormente fueron localizados por las autoridades y no en la plaza central del municipio, como se le indicó”.

Según esa versión, la madrugada del 13 de mayo El Bocinas se encargó de grabar la acción con su teléfono celular y posteriormente el video fue subido a Youtube, pero duró pocas horas en la red.

En su confesiones a los militares, Elizondo Ramírez confirmó que el Z-40 estaba en Guatemala cuando fue detenido El Cachetes.

El comunicado de la Sedena precisa que Elizondo “señaló además que en el mes de marzo de 2008 formó parte de un grupo de sicarios encabezado por Treviño Morales, quienes incursionaron en el departamento de Zacapa, en Guatemala, para ampliar el control de la organización en dicho país, registrándose varios enfrentamientos con los grupos locales en donde falleció el narcotraficante guatemalteco Juan José León Radón, alias Juancho León”.

Dos días después de que aparecieran los 49 cuerpos, el grupo que se está dividiendo colocó decenas de narcomantas en Ciudad Valles, luego en Zacatecas y finalmente en Monterrey, en las que niegan ser autores de la matanza de Cadereyta.

“El grupo Zeta se deslinda de los 49 descuartizados en Nuevo León y les pedimos (a las autoridades) que chequen bien, hagan bien su trabajo como debe ser. No porque van y les tiran un camión con cuerpos con un mensaje que fueron los Zetas van a dejar de hacer su trabajo”, señalaba el narcomensaje.

Otro de los hechos que muestran las divisiones zetas también sucedió en Monterrey, cuando policías estatales detuvieron a Juan Francisco Treviño Chávez, El Quico, sobrino de Treviño Morales.

Treviño Chávez fue detenido junto con su primo Jesús Chávez García la tarde del 12 de junio en un centro comercial de Monterrey por miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

Treviño Chávez, de 31 años, estaba a cargo de la plaza de Nuevo Laredo y llegó a Monterrey para reorganizar al grupo que aún está con ellos. Fuentes policiacas informaron que su captura se debió a una denuncia anónima que alertó a los miembros de la AEI, una corporación que nunca detiene a narcotraficantes de ese calibre. Tras capturarlo mantuvieron en secreto el hecho durante dos días, hasta que una filtración a los medios sacó a la luz el caso.

Treviño Chávez fue el segundo familiar de Treviño Morales detenido ese día: el gobierno estadounidense había capturado ya al hermano menor del Z-40.

### **“Cae ‘El Mustang’, presunto operador financiero de Los Zetas”**

#### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**26 julio 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/315163/cae-el-mustang-presunto-operador-financiero-de-los-zetas>

MÉXICO, D.F. (apro).- Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Jesús Rosas Ibarra, *El Mustang*, presunto operador financiero de Los Zetas, luego de un operativo realizado en calles de la colonia Francisco I. Madero, en la delegación Miguel Hidalgo de esta capital.

La dependencia detalló que derivado de la captura, el lunes 23 en Puebla, de William de Jesús Torres Solórzano, *El W y/o El Come Gusanos*, detuvo a cinco personas más, entre ellas a *El Mustang*, en tres acciones distintas realizadas en el Distrito Federal y Veracruz.

Según la Marina-Armada de México, en dicho operativo aseguró un millón 610 mil 890 dólares, cuatro vehículos, dos armas cortas, cinco granadas y equipos de comunicación.

En una primera operación realizada la noche del martes 24, en calles de la colonia Tabacalera, en la delegación Cuauhtémoc, fueron asegurados Rafael Antonio Medina Rea, *El Rata*, y Ricardo Fuyivara Romero, quienes llevaban consigo una maleta con 880 mil dólares americanos, un arma corta y una granada de fragmentación.

Asimismo, en otra acción fue detenido *El Mustang*, quien se encontraba armado con una pistola calibre 10 mm a bordo de una camioneta estacionada frente a un parque de la mencionada colonia Francisco I. Madero.

Al revisar el vehículo fue localizada en el asiento trasero una caja, la cual contenía 730 mil 890 dólares americanos, además de una granada de fragmentación, diversas tarjetas bancarias y equipos de comunicación. En el lugar también se le aseguró a Jesús Rosas Ibarra otro vehículo compacto de lujo.

Cabe destacar que *El Mustang* era operador financiero de Los Zetas desde el 2008, y que *El Rata* y Ricardo Fuyivara Romero eran sus colaboradores, quienes se dedicaban a trasladar en vehículos el numerario obtenido por presuntas actividades ilícitas.

Asimismo, en otra operación efectuada la tarde del miércoles 25 en la ciudad de Xalapa, Veracruz, fueron asegurados Feliciano Ruiz Atilano, *El Guacho*, y Rafael Vázquez Solís, *El Máster*, quienes estaban en posesión de dos vehículos y cuatro granadas de fragmentación.

Los presuntos narcotraficantes, el numerario y vehículos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, bajo las averiguaciones AP/PGR/SIEDO/UEIARV/064,065 y 066 2012.

### **“Los Zetas, detrás de fuga masiva de reos en Piedras Negras: SSP de Coahuila”**

**Redacción**

**Proceso**

**18 septiembre 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/320237/los-zetas-detras-de-fuga-masiva-de-reos-en-piedras-negras-ssp-de-coahuila>

MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) inició una averiguación previa por la fuga de 129 internos del penal de Piedras Negras, Coahuila, la mayoría de los cuales pertenecían al cártel de Los Zetas.

Además, la Secretaría de Gobernación ratificó su apoyo a las autoridades estatales para buscar y recapturar a los fugados, dos de los cuales ya fueron aprehendidos –nunca salieron del penal– y tres más fueron descubiertos en el taller de carpintería, según confirmó el vocero de Seguridad estatal.

En un comunicado, la Segob dijo que “las fuerzas federales apoyan desde el momento en que se informó de la fuga, tanto en las tareas de seguridad del penal, como en la búsqueda y localización de las personas fugadas”.

José Luis Morán, secretario de Seguridad Pública de Coahuila, comentó que existen indicios de que Los Zetas organizaron la fuga.

En declaraciones a *Radio Fórmula*, el funcionario comentó que cuando se enteraron del suceso desplazaron a una célula del grupo de reacción Gatex de la ciudad de Saltillo hasta Piedras Negras – en un trayecto de cuatro horas–, los cuales fueron interceptados por un grupo armado en la región centro en la comunidad de Castaños que los atacó con granadas y armas de alto calibre.

Este incidente, dijo, tenía la evidente intención de evitar que el grupo especial llegara a su objetivo, el penal de Piedras Negras. El saldo de ese enfrentamiento, dijo, fue de cuatro sicarios abatidos.

“Los individuos abatidos no forman parte de los fugados, pero sí evidentemente son una célula del grupo delictivo de Los Zetas, que son los que presumimos organizaron esta fuga en el Cereso de Piedras Negras, y lo hacían (el ataque a los policías) con la finalidad de impedir que llegaran porque todavía a su arribo a Piedras Negras fueron recibidos con ponchallantas”, dijo Morán.

Por su lado, el titular de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE), Homero Ramos, reveló que la mayoría de los 129 reos fugados pertenecen al grupo criminal de Los Zetas y que 86 de ellos fueron sentenciados por delitos federales, por lo que están vinculados al narcotráfico.

En entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el funcionario aseveró que es “imposible que (los presos) se hayan salido por el túnel en una sola vez, como argumentan las autoridades del Cereso. Probablemente ya tenían días haciéndolo (fugándose) hasta que esto reventó y no pudieron ocultarlo”.

Agregó que “no es suficiente el túnel para dejar que se escapen tantas personas, pensamos que tenía más de un año de estarse utilizando, pero no puede ser que se haya pasado por alto por parte de la estructura que debe garantizar el orden del penal”.

El procurador detalló que por esos hechos ya rindieron su declaración el director del penal, así como los jefes de turno y de celadores. Dijo que faltan otros seis y también los cinco internos que se habían ocultado.

Las autoridades del Cereso, incluido el director, están sujetos a un arraigo de 30 días para integrar las pruebas y realizar las diligencias necesarias.

Ramos explicó que el penal de Piedras Negras no es de alta seguridad y que había 734 internos, menos los 129 que escaparon.

El vocero de Seguridad de Coahuila, Sergio Sisbeles, también dio su versión de los hechos. Precisó que son 129 y no 132 los reos fugados del penal de Piedras Negras, debido a que localizaron a tres internas que estaban escondidas en el área de indiciados.

Las tres reclusas habían sido consideradas dentro de la lista de los 132 reos que se fugaron ayer del penal de Piedras Negras, de ellos 86 reos federales y 46 del fuero común.

Dijo que las internas estaban escondidas en un área de indiciados dentro del mismo Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras.

“Tras las revisiones se detectó a estas tres personas que en un principio fueron reportadas como desaparecidas porque no se localizaban”, dijo, al explicar que las mujeres fueron incluidas en la lista de los 132 reos fugados.

Las reclusas son: Wendy Carolina Martínez Cárdenas, Lizete Gómez Cruz y Jessica Sarahí Ramírez Pérez.

El presidente Felipe Calderón lamentó la fuga de reos del penal de Piedras Negras, registrada ayer en Coahuila.

Vía Twitter, el mandatario instó a revertir la vulnerabilidad de los centros penitenciarios de los estados para evitar más fugas de reos.

“Deplorable la fuga del penal estatal de Piedras Negras. Debe corregirse la vulnerabilidad de instituciones de justicia estatales”, indicó Felipe Calderón.

### **“Los Zetas, tras la ZMG”**

**ALBERTO OSORIO MÉNDEZ**

**Proceso**

**22 septiembre 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/320504/los-zetas-tras-la-zmg>

No obstante el triunfalismo de las autoridades federales por la captura de los cabecillas del Cártel de Jalisco Nueva Generación y de La Resistencia, lo cierto es que ambas organizaciones tienen su estructura financiera intacta y que la violencia tiende a crecer, asegura un catedrático de la UdeG. Apoyado en un estudio reciente de la organización Stratfor Global Intelligence, advierte que Los Zetas aprovechan la coyuntura para arrebatar la plaza a sus rivales.

Las detenciones de los hermanos Álvarez Ayala, cabecillas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la de Ramiro Pozos González, alias El Molca, líder de La Resistencia, el miércoles 12 por elementos de la Policía Federal en Metepec, Estado de México, detonaron la violencia, asegura el catedrático Dante Haro Reyes.

Adscrito al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, Haro Reyes sostiene que la captura de los mandos de las dos organizaciones rivales no sólo debilita sus estructuras, sino que despeja el camino a Los Zetas, cuyos integrantes intentan apoderarse de la plaza. Y alude a los 17 cuerpos abandonados el domingo 16 a un costado de la carretera Tizapán-Sahuayo, a la altura del kilómetro 38, en los límites de Jalisco y Michoacán.

El académico dice que el 30 de agosto último el Centro Internacional de Análisis de Seguridad Stratfor Global Intelligence, con sede en Texas, difundió un reporte en el cual destaca que Guadalajara es “una ciudad de orden estratégico” y que Los Zetas están listos para expandir sus actividades a otras regiones de México, a pesar de la distancia de su lugar de origen, que corresponde a la parte de la costa Este de la República Mexicana.

“Los Zetas han llevado a cabo actos de violencia en Guadalajara, como una exhibición pública –el 9 de mayo– de 18 cadáveres cerca de Guadalajara, en la población de Ixtlahuacán de los Membrillos. Si bien estos hechos no demuestran que (los sicarios de esas organización) estén haciendo progresos en la lucha territorial, sugieren lo que se podría avecinar si Los Zetas logran controlar Guadalajara”, expone el documento.

Destaca también que la detención de Érick Valencia Salazar, alias El 85, uno de los líderes del CJNG, el 12 de marzo último, detonó la ola de ejecuciones en la entidad.

Según Haro Reyes, Jalisco representa una plaza importante para el asentamiento de narcolaboratorios por su ubicación geopolítica y porque es, dice, uno de los principales sitios donde se elabora droga sintética. Advierte también que es factible que la disputa entre las bandas criminales desencadene la violencia en ciudades intermedias de la entidad.

Hoy, insiste, Jalisco aparece en el centro del tablero del narco por su condición geopolítica y en unos meses más comenzarán a proliferar los narcolaboratorios por toda la entidad. Eso, comenta el investigador de la UdeG, habla de la importancia de la infraestructura en comunicaciones de la zona.

Según él, Los Zetas son una banda mucho más violenta que el CJNG y La Resistencia.

### **Las vendettas**

Con respecto a los 17 cadáveres localizados el domingo 16, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco (PGJ) identificó al día siguiente a seis de ellos, incluidos dos presuntos militares: Omar Juárez Lucas, nacido en 1975, quien fue soldado de infantería, y Gerardo Nava Sánchez, quien tenía antecedentes penales en Chiapas, según la procuraduría de esa entidad.

Los otros ejecutados, también con antecedentes penales, son: Benito Rodríguez Pérez, Pablo Rosas Campos, Porfirio Hernández Rodríguez y Joel Cruz Sevilla. En su comunicado del lunes 17, la PGJ destacó que “los testigos refirieron que sujetos a bordo de camionetas arrojaron los 17 cadáveres y luego huyeron hacia Michoacán”.

Según la dependencia, el grado de descomposición en los cuerpos sugiere que las víctimas tenían cuando menos 24 horas de haber sido ejecutados; todos presentaban huellas de los hematomas por los golpes recibidos.

Los cuerpos estaban encadenados entre sí y amarrados de pies y manos, tenían impactos de arma de fuego y el tiro de gracia en la cabeza. Por el tipo de vestimenta, apunta la procuraduría, pudieron ser oriundos de Michoacán; además, al menos 12 de ellos tenían tatuajes alusivos a la Santa Muerte y otros símbolos. No obstante, el procurador Tomás Coronado Olmos declinó adelantar juicios sobre el caso.

El multihomicidio del domingo 16 es el tercero que ocurre en territorio de Jalisco en menos de un año y, a decir de las autoridades, ha causado 61 muertes. El primero fue el del 24 de noviembre de 2011, cuando varios sujetos abandonaron 26 cuerpos en los Arcos del Milenio, en esta ciudad. Las autoridades locales atribuyeron la matanza al Cártel del Milenio y a sus aliados, Los Zetas.

El segundo fue el 9 de mayo último en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, donde los lugareños descubrieron 18 cuerpos dentro de dos vehículos y avisaron a las autoridades. La PGJ interpretó esa acción como represalia por el asesinato de 14 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, días antes.

Luego de los hechos registrados el domingo 16, la PGR levantó un acta circunstanciada para coadyuvar con la investigación sobre ese múltiple asesinato, en tanto que el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que los cuerpos localizados son parte de la guerra entre bandas.

Por su parte, la PGJ pidió el apoyo a sus pares de Michoacán, Distrito Federal, Colima, Chiapas y Oaxaca para identificar a 10 de los fallecidos a quienes solamente se les pudo ubicar por los tatuajes.

Para Haro Reyes, los narcobloqueos y multihomicidios, producto de la guerra entre bandas por el control de la plaza, y los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad únicamente evidencian el fracaso de la lucha de las autoridades federales contra el narco:

“Lo que vemos es una estrategia fallida. El asunto es que desde hace tres años Jalisco se ubica entre los primeros seis lugares en delitos de alto impacto, hechos de violencia o ejecuciones. Lo que vive Jalisco es una verdadera guerra por el control de la plaza”.

Para acabar con las secuelas de ese enfrentamiento, dice, deben atacarse las causas de ese fenómeno y diseñarse estrategias de prevención del delito. La detención de los hermanos Álvarez Ayala y de Ramiro Pozos, El Molca, sólo provocan la atomización de los cárteles a los cuales pertenecen, pero no su exterminio, puesto que sus estructuras financieras y su modus operandi siguen intactas.

Al Molca, quien tenía nueve órdenes de aprehensión y era uno de los narcotraficantes más buscados en Jalisco, la PGJ lo señala como autor intelectual del asesinato de Carlos Alberto Rayas, jefe de homicidios de la PGJ, el 24 de abril de 2009.

El martes 18, durante una gira por Lagos de Moreno, el gobernador González Márquez declaró a los medios locales que el multihomicidio del domingo 16 es “un ajuste de cuentas entre bandas de delincuentes”. Según él, los 17 occisos “muy probablemente fueron ejecutados en Michoacán y aventados del lado de Jalisco. Hay delincuentes que mataron a otros delincuentes”.

Y añadió: “Estamos para proteger a la población, esperando que los delincuentes entiendan que el camino fuera de la ley a lo que lleva es a la cárcel o la muerte, y ninguna de éstas es querida para estas personas”.

Sin embargo, no respondió a los clamores de la población de Tizapán, que lleva meses exigiendo a la presencia de policías estatales para reforzar la vigilancia, en particular el acceso a la carretera que comunica con Michoacán, donde se han registrado varios delitos relacionados con la delincuencia organizada.

González Márquez destacó que la ciudadanía debe estar tranquila. Quienes deben preocuparse, enfatizó, son los delincuentes, porque sólo tienen dos caminos: perder la vida o ser detenidos por la policía.

Hace uno año, en vísperas de los Juegos Panamericanos 2011, el mandatario no se cansaba de presumir dentro y fuera de la entidad que Jalisco estaba bien blindado contra la delincuencia. Ahora, frente a la violencia de los cárteles que ponen en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones estatales, González Márquez aparece poco en los medios de comunicación, pero sigue manteniendo su discurso triunfalista.

**“Caen policías que entregaron a Moreira; protegían a Los Zetas”**

**REDACCIÓN**

**Proceso**

**22 octubre 2012**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/323277/caen-policias-que-entregaron-a-moreira-protégian-a-los-zetas>

MÉXICO, D.F. (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal presentó a dos presuntos responsables del secuestro de José Eduardo Moreira, hijo del exgobernador de Coahuila, el priista Humberto Moreira.

Los implicados fueron identificados como Víctor Landeros Sifuentes, *La Iguana*, y Jorge Tenorio, *El Taca*, ambos elementos de la Policía Municipal de Ciudad Acuña, en Coahuila, y quienes se encontraban escondidos en Saltillo.

Un tercer presentado este lunes en el Centro de Mando de la Policía Federal (PF) en la Ciudad de México, identificado como Clemente Bárcenas Cepeda, brindó refugio a Víctor Landeros y Jorge Tenorio en una casa de seguridad, hasta el momento de la captura del grupo.

El comisionado de la SSP, Luis Cárdenas Palomino, dijo en rueda de prensa que, de acuerdo con las investigaciones, *La Iguana* y *El Taca* son los responsables de participar en el plagio y homicidio del joven Moreira.

Según el funcionario federal, Víctor Landeros era supervisor de la Policía Municipal de Ciudad Acuña, mientras que Jorge Tenorio se desempeñaba como un elemento más de esa corporación, y ambos presuntamente brindaban protección al grupo criminal de Los Zetas.

*El Taca*, de 41 años, “fungía como policía municipal de Ciudad Acuña, el cual brindaba protección a los integrantes de Los Zetas, y fue la persona que acompañó a Landeros Sifuentes el día de los hechos, manifestando que fueron los responsables de entregar a Eduardo Moreira al grupo delictivo”.

De acuerdo con Cárdenas Palomino, Víctor Landeros manifestó que el día de los hechos mantuvo comunicación con Rodolfo Castillo Montes, subdirector operativo de la Policía Municipal y su jefe directo, para pactar un encuentro en una tienda de conveniencia.

Al llegar al punto acordado, los policías entregaron a Moreira a dos sujetos identificados como Carlos Arnulfo Flores Flores, *El Flaco*, jefe de plaza de Los Zetas, y a su segundo, Rubén Cifuentes Cadena, *El Chagui*, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido para asesinarlo y abandonar su cuerpo, el cual fue encontrado horas más tarde.

El funcionario federal resaltó que una de las líneas de investigación que desahogan la SSP y la Procuraduría General de la República (PGR) apunta a que la ejecución de Moreira Rodríguez pudo deberse a una posible venganza de Los Zetas por los operativos desplegados por las autoridades contra el crimen organizado.

**2013**

S/A. “Zacatecas, tierra de nadie... y de cadáveres”. *Proceso* número 1888, 6 enero 2013. pp. 16-19.

<https://www.proceso.com.mx/329635/zacatecas-tierra-de-nadie-y-de-cadaveres>

### **“Zacatecas, tierra de nadie... y de cadáveres”**

Mermadas, sin el control de las principales ciudades y con nulo espíritu de colaboración, las fuerzas federales en Zacatecas muestran su vulnerabilidad y, peor, son acusadas de actuar contra los civiles. Pese al cambio de año y de gobierno, el Cártel del Golfo y Los Zetas se dan el lujo de confrontarse como si estuvieran solos e incluso levantan a soldados o intimidan a los marinos...

ZACATECAS, Zac. (Proceso). - En la víspera del Año Nuevo, la ciudad de Fresnillo, aquejada por una ola de violencia, sufrió varios bloqueos de calles con vehículos arrebatados a los civiles o tomados “en préstamo” de la central de autobuses y la dirección municipal de Protección Civil.

Ningún grupo de la delincuencia organizada se atribuyó estos actos. Fueron efectivos de la Marina, con base temporal en Fresnillo, quienes imitaron los “narcobloqueos” que la delincuencia organizada ha realizado en distintas ciudades de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Jalisco, Coahuila y Zacatecas.

También ellos agredieron a los civiles para “protegerse”. Obligaron a los propietarios y conductores de 24 vehículos a apearse y con los automotores cerraron la circulación al poniente de Fresnillo durante más de 12 horas, de las 20:30 horas del 31 de diciembre hasta las 9:30 del 1 de enero, afectando varios puntos y cruceros el bulevar Paseo del Mineral (es decir, la carretera federal 45 México-Ciudad Juárez, que atraviesa toda la ciudad), la avenida Prolongación Manuel M. Ponce y las calles Loma Larga, Camelias y Toma de Zacatecas, entre otras.

Los marinos volvieron a montar estas barricadas a las 20:00 horas del martes 1 y las levantaron al amanecer. Y al mediodía del miércoles 2 volvieron a bloquear las calles, aunque más discretamente.

Esa fue su reacción ante los informes de personal del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública del estado sobre una supuesta movilización de decenas de pistoleros de Los Zetas para rescatar a 18 sospechosos detenidos en una casa de seguridad el mediodía del 31 de diciembre, en la colonia Francisco Villa. Los mantenían arraigados en el gimnasio Solidaridad, donde el pelotón de marinos tiene su cuartel temporal.

El ataque masivo de Los Zetas no llegó, pero confirmó la nula confianza y la ausencia de colaboración entre las fuerzas federales desplegadas en la ciudad. A kilómetro y medio del gimnasio Solidaridad, sobre la carretera Fresnillo-Enrique Estrada, está la comandancia de la Policía Federal Preventiva división Caminos, y a cuatro kilómetros, la base militar con 600 soldados del 97 batallón de infantería, cuyas instalaciones inauguró el pasado 8 de septiembre el entonces secretario de la Defensa, Guillermo Galván.

–¿Por qué los marinos no pidieron apoyo a la base militar? –pregunta Proceso a un oficial del Ejército.

–Bueno, cada quien trabaja por su lado –responde, a condición de que no se publique su nombre–. Ellos a veces piden apoyo al Ejército en Fresnillo para montar un cordón de seguridad al efectuar un operativo concreto y acudimos a resguardar los alrededores, pero no intervenimos con ellos porque todas sus operaciones son encubiertas. No nos informan nada, ni nosotros a ellos.

–Los bloqueos que realizaron los marinos son insólitos. ¿Cómo interpretan ustedes esa acción?

–Bueno, los delincuentes, los narcotraficantes, montan bloqueos, pero nosotros los militares montamos barricadas y eso no es algo nuevo.

Las acciones de la Marina en estos operativos de protección se realizaron tras una infranqueable barrera de silencio.

### **Desconfianza**

Desde el primer mes de gobierno de Enrique Peña Nieto, Zacatecas padece una nueva ola de violencia. Tan sólo en Fresnillo, los últimos ocho días de 2012 fueron de batalla para los pistoleros del Cártel del Golfo y de Los Zetas.

Ya desde el 1 de diciembre, mientras Peña tomaba posesión como presidente en la Ciudad de México, en Zacatecas un grupo de sicarios del Cártel del Golfo ejecutó a plena luz del día y con armas largas a cinco presuntos zetas; los maniataron y fusilaron en solares urbanos del ejido La Escondida, muy cerca de la delegación local de la Procuraduría General de la República.

Se desató así una sucesión de ejecuciones y enfrentamientos entre grupos criminales y de éstos contra la Marina, el Ejército y la Policía Federal, y en todo el estado se han encontrado cadáveres de hombres y de mujeres con señales de que fueron ejecutados, por lo que las autoridades y algunos medios de comunicación asumen, sin pruebas, que estaban involucrados en el narco.

Según cálculos extraoficiales, entre el 1 de diciembre y el 2 de enero alrededor de 80 personas han muerto violentamente en la entidad, incluyendo a dos soldados. Todo esto sin contar los levantones y desapariciones forzadas de al menos otros 20 civiles y cuatro militares.

Familiares de las víctimas reportan la desaparición de sus familiares por teléfono a los medios de comunicación o al sistema de emergencias 066, pero lo hacen en forma anónima y no formalizan su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por desconfianza. La Marina, el Ejército y la Policía Federal han sido acusados públicamente de la desaparición de algunos detenidos.

Dos reporteros de Fresnillo comentan que de la información que han recabado se desprende que la violencia se recrudeció cuando llegaron a Zacatecas pistoleros de los Caballeros Templarios, supuestamente para apoyar al Cártel del Golfo en su pugna contra Los Zetas.

Uno de ellos relata que el 15 de diciembre, al pasar por Estación San José –una población ubicada cinco kilómetros al oriente de Fresnillo–, una patrulla de la Policía Federal Preventiva división Caminos fue atacada por pistoleros, que en tres camionetas “corretearon a los policías federales hasta su base, en la salida a Zacatecas, y todavía afuera de sus instalaciones les siguieron disparando”.

El 31 de diciembre los marinos localizaron a los agresores de los federales en una casa de seguridad del mismo poblado. Detuvieron ahí a 12 menores y seis adultos. Esos son los 18 presuntos zetas a quienes los popeyes tenían encerrados en su cuartel temporal. La zozobra de los efectivos de la Marina es comprensible: de más de 300 que llegaron a Fresnillo, sólo quedan unos 25; el resto fue trasladado a otras localidades.

Otro periodista local conoce una versión sobre el levantón contra los cuatro soldados que la comandancia del Ejército reconoce como desaparecidos: “Aquí se sabe que esos soldados acudieron dos

veces, cuando se encontraban francos (en su día de descanso), a la zona de tolerancia a embriagarse y tener servicio de las prostitutas sin pagarles. La tercera ocasión que volvieron al lugar ya los estaban esperando Los Zetas y los levantaron. Siguen desaparecidos.

“No hay control ni de los militares ni de la Policía Federal, y los únicos que están haciendo la chamba son los de la Marina, por eso hicieron los bloqueos, aunque la verdad sí expusieron a los civiles, porque saben que no tienen apoyo.”

### **Atrapados en la guerra**

En la mañana del 9 de diciembre aparecieron en puentes viales y peatonales de la capital zacatecana y del municipio conurbado de Guadalupe, igual que en otras 12 poblaciones, grandes carteles en que el Cártel del Golfo pedía apoyo a la población “en la guerra contra los Z”.

En las superficies plastificadas, los narcos aseguraban: “Existen cientos de hombres zacatecanos que están luchando para que el estado vuelva a ser un pueblo mágico”. Y seguían:

“Al pueblo zacatecano gracias por el apoyo que nos han brindado a lo largo de esta lucha contra nuestros enemigos los Z. Queremos que el apoyo siga pues la lucha no ha terminado. Repetimos, la guerra está lejos de acabarse pero estamos dispuestos a luchar el tiempo que sea necesario”. Al final, el obligado o irónico: “Feliz Navidad”.

Y la Navidad fue todo, menos feliz. Entre el 24 y el 27 de diciembre murieron al menos 24 personas en hechos que las autoridades vincularon con la disputa entre los cárteles.

Entre los muertos figuran una hermana y dos sobrinos de Arturo Zubia Fernández, presidente municipal de Camargo, Chihuahua. Fueron secuestrados en Fresnillo por un comando armado y murieron al accidentarse el vehículo en que eran transportados por sus captores a una casa de seguridad.

Dos hombres armados interceptaron el vehículo de la familia, que se dirigía a Camargo, lo abordaron y lo condujeron hacia el norte, por la autopista a Río Grande, se supone que a una casa de seguridad. Aproximadamente a 24 kilómetros de Fresnillo, el exceso de velocidad provocó que el auto se estrellara contra la tolva de un tráiler.

Con el impacto murieron Yolanda Zubia Fernández, hermana del alcalde de Camargo, y sus hijos Brenda y Luis Alfredo, de 34 y 14 años respectivamente. Quedó gravemente lesionado el padre de la familia, José Pedro Ordaz Porras, de 60. También perecieron los dos presuntos plagiarios, de entre 23 y 25 años.

Y la mañana del 26 de diciembre la procuraduría estatal informó que se localizaron siete cadáveres – cinco mujeres y dos hombres– junto a cuatro camionetas baleadas, en un camino vecinal del Campo Menonita 3, en el municipio de Miguel Auza.

El jueves 27 de diciembre en un pozo ubicado al poniente de la comunidad de Saucedo de la Borda, al poniente de la ciudad de Guadalupe, la policía ministerial localizó los cadáveres de tres jóvenes, ejecutados, flotando sobre el agua.

Y el martes 2 de enero, 12 presuntos delincuentes murieron tras enfrentarse contra militares, con armas de grueso calibre en el municipio de Sombretete. En este ataque también perecieron dos soldados.

Habitantes de las ciudades, pueblos y rancherías de los municipios de Fresnillo, Loreto, Jerez, Guadalupe, Saín Alto, Río Grande, Ojocaliente, Pánfilo Natera, Valparaíso, Sombrerete, Miguel Auza, Pinos, Nieves, Calera, Villa de Cos, Valparaíso y Zacatecas experimentan cotidianamente el horror en forma de tableteo de fusiles AK-47 y AR-15, disparos de pistolas y detonaciones de granadas de fragmentación.

S/A. “La Laguna, campo de batalla del “Chapo””. *Proceso* número 1890, 20 enero 2013. pp. 34-36.  
<https://www.proceso.com.mx/331106/la-laguna-campo-de-batalla-de-el-chapo>

### “La Laguna, campo de batalla del “Chapo””

Esta urbe cerró 2012 como la más violenta de México con alrededor de mil 300 homicidios relacionados con el crimen organizado, incluso por arriba de Ciudad Juárez.

**TORREÓN, Coah. (Proceso).** - Esta urbe cerró 2012 como la más violenta de México con alrededor de mil 300 homicidios relacionados con el crimen organizado, incluso por arriba de Ciudad Juárez.

El pasado diciembre Enrique Peña Nieto ordenó reforzar el Programa Laguna Segura, que ha intentado frenar una violencia que viene de años. El programa –que despliega más de mil policías federales y soldados– ha fracasado y ahora Torreón es un reto para la promesa presidencial de reducir a la mitad los asesinatos del narco en su primer año de gobierno.

Este mes la violencia se ha incrementado con una serie de ataques a bares y centros nocturnos: al menos cinco consecutivos con saldo de más de 15 muertos y una docena de heridos.

A esto se sumó la noche del miércoles 9 un atentado con fusiles y granadas contra un retén policiaco-militar en el periférico Raúl López Sánchez de esta ciudad. No se reportaron bajas.

La ola criminal se agudiza “por la disputa de la plaza”: El Cártel de Sinaloa intensificó la cacería de *El Pinky*, jefe de Los Zetas en Torreón, para arrebatársela la ciudad y controlar toda La Laguna, asegura a *Proceso* un oficial de la Secretaría de Seguridad de Coahuila que habla a condición del anonimato.

Menciona que en meses recientes los sinaloenses comenzaron a tomar el control de esta plaza y están desplazando a Los Zetas hacia Matamoros, Francisco I. Madero, Viesca, San Pedro de las Colonias y otros municipios de La Laguna.

Los golpes del Ejército a Los Zetas también ayudan al avance del Cártel de Sinaloa. Los militares han detenido a varios capos: Jorge Alejandro Cortés Aguilera, *El Comandante Cástulo*; Santiago Maciel Rodríguez Velázquez, *El Maciel* y Renato Patiño Martínez, *El Comandante Borrado*, jefe zeta en Matamoros.

La fuente dice lo anterior y agrega que los ataques a bares son una “consecuencia de la rivalidad por Torreón”, ya que los grupos de inteligencia del Cártel de Sinaloa ubican a sus enemigos en esos negocios y mandan sicarios a ejecutarlos.

Los Zetas responden con la misma moneda. En el ataque al Bar Tornados, la madrugada del domingo 6, llegaron seis hombres armados que dispararon con sus fusiles de asalto. En la banqueta quedaron tres

cadáveres; tres personas más murieron cuando eran trasladadas en ambulancias y una más falleció horas después en un hospital.

Luego de acribillar a los parroquianos, uno de los sicarios utilizó una camisa llena de sangre de una de las víctimas para pintar en la pared la letra zeta y el signo de porcentaje.

### **Fiebre de bares y gasolineras**

Los atentados contra bares de la ciudad no son nuevos en La Laguna. Cuando Los Zetas tomaron la plaza de Torreón en 2007 se apoderaron de varios de estos negocios, alrededor de 15, extorsionaban al menos a medio centenar e incluso abrieron unos nuevos.

Comenzaron los primeros meses de 2010 con tres ataques que dejaron unos 30 muertos. Fueron perpetrados con armas entregadas por autoridades carcelarias a los sicarios del Cártel de Sinaloa, quienes después de asesinar volvían a sus celdas del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Durango, en la vecina ciudad de Gómez Palacio, según una investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).

El 1 de febrero de 2010 ocurrió uno de los primeros atentados en el Bar Ferrie, donde murieron 10 hombres, la mayoría civiles inocentes.

El siguiente fue el 15 de mayo de ese año en la inauguración del Bar Juanas. El saldo: ocho muertos y 19 heridos.

Uno más ocurrió en Quinta Italia Inn, donde fueron acribillados 17 jóvenes el 19 de julio de 2010. Esta matanza sólo fue superada por la del 8 de julio de 2011 en el Bar Sabino Gordo de Monterrey, donde fallecieron 21 personas.

La PGR informó que en estos tres ataques se utilizaron rifles de asalto pertenecientes a custodios del Cereso de Gómez Palacio. La directora, Margarita Rojas Rodríguez y otros tres funcionarios de esa cárcel fueron acusados de permitir a un grupo de reos del Cártel de Sinaloa salir por la noche y usar el armamento de los custodios así como vehículos oficiales para realizar “actos de venganza” contra sus rivales zetas.

Además de atentados contra bares recientemente ha habido en esta ciudad ataques contra media docena de gasolineras, presuntamente por pistoleros al servicio de Joaquín *El Chapo* Guzmán.

En las narcomantas que dejaron acusaban al empresario de Matamoros, Manuel Muñoz, *El Mono*, de que en sus negocios lava dinero y distribuye gasolina robada por Los Zetas.

*El Mono* Muñoz tiene al menos 10 gasolineras en Torreón y otras tantas en Gómez Palacio y Lerdo, Durango. Cinco de ellas fueron atacadas y ahora siguen cerradas, pues aunque las ponían en funcionamiento de un día para otro, las volvían a incendiar.

Este empresario de La Laguna, afirma la fuente, es considerado el principal enlace entre Los Zetas y personajes como Humberto Torres Charles, hermano del exprocurador coahuilense Jesús Torres Charles, prófugo presuntamente por proteger a ese grupo criminal a cambio de 300 mil pesos mensuales.

El Cártel de Sinaloa también atenta contra la Policía Municipal –cuya sede ha sufrido en los últimos meses 12 ataques– así como contra la Policía Federal (PF) pues acusa a varios comandantes regionales de proteger al *Pinky*. En una serie de narcomantas mencionan a tres comandantes a quienes identifican como “Efraín, Castorena y *El GI*”.

“Se lo ke skonden en las instalaciones les voy a partir en su madre solito no kiero lastimarles a sus niñeras federales sigan reventando cosas de gentes y nada que ver y van a ganarse unos putasos”, decía una de las últimas mantas que fueron colgadas en Torreón.

Presuntamente esos comandantes suben al *Pinky* en una de sus patrullas, disfrazado de policía federal a fin de “buscar a los contras para ejecutarlos”

### **Incursiones zetas**

La ofensiva de los sinaloenses también responde a las incursiones de comandos zetas en Sinaloa, donde han perpetrado tres matanzas desde mediados del año pasado.

Comandos de unos 100 hombres que entraron por la zona serrana procedentes de Chihuahua en vehículos clonados como militares realizaron asesinatos múltiples en localidades como Choix, Estación Bamoa y Las Tatemas, con saldo de alrededor de 20 muertos. La última incursión fue el 24 de diciembre de 2012 cuando llegaron a la comunidad de Concordia al menos 30 hombres armados con fusiles de asalto AK-47. De nuevo vestían uniformes tipo militar. Asesinaron a nueve personas. “Fueron Los Zetas”, denunciaron las familias afectadas de la pequeña comunidad del norte del municipio de Mazatlán.

Esa región vive una crisis social con cientos de personas que huyen de la violencia. Según la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Sinaloa son unas 590 las familias desplazadas de municipios como Mocorito, Badiraguato y Concordia.

La narcoguerra también se recrudeció en el noreste en el arranque de 2013. En Monterrey eran más de 40 los ejecutados en los primeros nueve días del año. En Tamaulipas la delincuencia organizada inició moviendo sus “bases sociales” contra los militares. En Nuevo Laredo más de 300 mujeres, jóvenes y niños cerraron varias horas el puente internacional número 1 para exigir la salida del Ejército de la ciudad. En Reynosa el Cártel del Golfo moviliza a decenas de familias de barrios populares para exigir que se coloquen en diversas avenidas “porterías de tubos” de menos de dos metros de altura, que impidan el paso de vehículos militares.

### **Ofensiva de EPN**

Enrique Peña Nieto mantiene las mismas medidas de fuerza que estableció Felipe Calderón y ordenó reforzar el programa Laguna Segura: Se mandaron más efectivos federales, patrullas blindadas y dos helicópteros Black Hawk, informó Gerardo Villarreal, secretario de Seguridad de Coahuila.

“Ahora tenemos tres helicópteros vigilando La Laguna. Dos Halcones Negros enviados por el gobierno federal y uno del gobierno estatal”, precisó.

El secretario de Seguridad, el procurador de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria y la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, llegaron los primeros días de enero a La Laguna para coordinar durante una semana diversos operativos contra la delincuencia organizada.

“Estamos cerrando bares y centros de rehabilitación para poner orden”, dijo Gerardo Villarreal.

Informó que a finales de 2012 había 32 centros de rehabilitación para farmacodependientes. Después de que anunciaron que se iban a revisar, la mayoría cerró y sólo quedaron operando siete; de esos han cerrado dos y luego se descubrió que sólo dos operan legalmente. También cerraron 12 bares y continuará el operativo contra “otros negocios irregulares” como hoteles de paso, deshuesaderos y quintas para organizar fiestas que son considerados “puntos de riesgo”.

Homero Ramos Gloria señaló que algunos bares y centros de rehabilitación pertenecen a los cárteles: “Son usados como fuente de financiamiento de la delincuencia organizada”, dijo.

Los funcionarios estatales destacaron que es importante “ir cerrando las áreas de la delincuencia organizada donde están operando”.

Y pese a la ofensiva de las autoridades federales y estatales, la batalla por La Laguna no se detiene. En la primera quincena de este mes hubo tres incendios en gasolineras de Gómez Palacio y en el último incidente los delincuentes abandonaron tres cadáveres descuartizados de empleados de la Vicefiscalía de Durango que habían sido levantados días antes en el municipio de Lerdo.

Además la tarde del lunes 14 un comando entró a las instalaciones de la central camionera de Gómez Palacio y levantó a tres funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un día después sus cadáveres –con huellas de tortura– fueron abandonados en calles de Torreón.

José Gil Olmos. ““¡Esto ya no es vida!””. *Proceso* número 1892, 3 febrero 2013. pp. 27-30.

<https://www.proceso.com.mx/332538/esto-ya-no-es-vida>

**““¡Esto ya no es vida!””**

Aun cuando el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se afana en declarar que su administración no tolerará que el crimen organizado amedrente, intimide a la autoridad o pretenda controlar algún municipio local, lo cierto es que La Familia Michoacana, Los Templarios, Los Zetas y otros cárteles tienen presencia en 52 de ellos, lo que se refleja en la violencia exacerbada y el incremento de las ejecuciones. El caso más oprobioso es el de la calle Pemex –“la calle de la pesadilla”–, en la colonia Obrera Jajalpa de Ecatepec, donde sólo en enero pasado murieron 21 personas.

ECATEPEC, MÉX. - Apenas tiene 100 metros de longitud, pero en los últimos seis meses la calle Pemex, en la colonia Obrera Jajalpa, cobró notoriedad pues ahí han sido ejecutados o tirados los cuerpos de 21 personas, dicen los habitantes del lugar.

“¡Esto ya no es vida!”, prorrumpie una vecina. Tiene la mirada fija en uno de los vendedores de droga de la zona, donde también pululan halcones que vigilan las 24 horas del día desde una de las esquinas de esta calle adoquinada que hoy, recalca, es la más violenta de este municipio y de la entidad.

La pesadilla –así le llaman los mexiquenses– empezó cuando Enrique Peña Nieto era el gobernador. De hecho la dejó como herencia a su sucesor Eruviel Ávila, cuya administración sabe que en ese entorno las bandas del crimen organizado, entre ellas La Familia Michoacana, controlan la mitad de los 125 municipios mexiquenses, sobre todo en la zona limítrofe con la Ciudad de México.

De acuerdo con informes internos del gobierno mexiquense, en los últimos cinco años las pugnas entre La Familia y Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos –estos últimos ligados a Los Zetas– han cobrado 2 mil 221 vidas.

En enero pasado, el mes más violento, hubo 105 muertes relacionadas con el crimen en el valle de Toluca y en este municipio. En la calle Pemex de Ecatepec la violencia afecta a los habitantes, residencias, comercios; las huellas se observan incluso en el maltrecho adoquín de las calles, impregnadas de manchas oscuras; son costras de la sangre de las víctimas de los delincuentes que se disputan la plaza. Nadie se atreve a limpiarlas por temor a las represalias.

El sábado es día de mercado en la colonia y todo mundo sale a realizar sus compras, incluso los adictos al crack o a la cocaína, quienes acuden a un sitio conocido como El Punto, ubicado en la esquina de Pemex y Kennedy. Ahí consiguen la droga a cualquier hora del día.

El dealer, un enjuto joven de pelo largo, mira con desconfianza a los transeúntes que no son del lugar. No es de la colonia, pero ya conoce a casi todos los que pasan por ahí. Observa cada movimiento mientras platica en la calle con el conductor de un bicitaxi.

No hay forma de evadirlo para tomar una foto de las casas de cemento, la mayoría de uno o dos pisos. Sobresale una con orificios de bala en su fachada anaranjada; sus habitantes no se atreven a resanarla para no exponerse a las escrutadoras miradas de los halcones.

### **Violencia expansiva**

El último mes la violencia creció en el Estado de México, donde hubo 105 ejecutados –39 de ellos en Toluca, la capital–, superada sólo por Chihuahua, con 142, según los reportes periodísticos.

De los municipios mexiquenses el más afectado es el de Ecatepec, donde en la colonia Obrera Jajalpa, ubicada a cinco minutos de la cabecera municipal y a menos de media hora de la Ciudad de México, la violencia se ha incrementado en la calle Pemex desde finales del año pasado.

En octubre del año pasado, a plena luz del día, un grupo de pistoleros levantó a cinco adultos y a un joven de 14 años. Sus cuerpos fueron arrojados horas después en esa calle. El 8 de diciembre irrumpió un comando y empezó a disparar contra las casas. El 2 de enero hubo tres ejecuciones; siete días después otras dos, y el día 22 cayó otro par. Los 13 cadáveres estuvieron varias horas a la intemperie.

“Nadie nos hace caso. Ya llevamos tiempo con esto, ya lo denunciarnos y no pasa nada. En la madrugada pasaron dos camionetas con soldados y otras de policías. Pero, ¡miren!, ni siquiera los asustaron”, dice un vecino al reportero y al fotógrafo.

“Pero, ¡cómo se van a asustar!, si hasta los policías vienen a comprarles (droga). ¡Es el colmo!”, exclama otro.

Los habitantes relatan que la calma se rompió desde el 21 de julio de 2012. Un joven vendedor de drogas conocido como Alan fue ejecutado en la calle Pemex. Desde entonces ha habido 21 muertos.

“El colmo fue cuando tiraron los seis cuerpos desnudos. Estábamos ahí mirando cuando de pronto llegó un joven en una motoneta. Yo creo que tenía como 14 años. Nos preguntó dónde había una papelería y le dijimos que ahí, en la misma calle. Compró una cartulina y frente a nosotros comenzó a escribir algo en ella. Al terminar la puso encima de los cuerpos. Era un mensaje que decía: ‘Esto les va a pasar a quienes sigan vendiendo. El duende verde’.

“Nadie hizo nada. Y cuando lo denunciemos, las autoridades nos dijeron que ya no protestáramos, que eso ya era normal”, comenta uno de los entrevistados.

### **La frontera urbana**

El Estado de México comparte con el Distrito Federal cientos de kilómetros como frontera. La línea limítrofe se pierde en calles, unidades habitacionales, ríos y solares llenos de basura. En esa franja viven aproximadamente 6 millones de personas. Ahí, dicen los residentes, la violencia está incontenible.

Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Los Reyes La Paz, Chimalhuacán, Huixquilucan, Atizapán y Naucalpan forman parte de las franjas urbanas que se disputan siete cárteles de la droga, según informes internos del gobierno mexiquense consultados por el reportero.

De acuerdo con el mapa del crimen organizado en territorio mexiquense, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y Guerreros Unidos son las principales bandas que se disputan la plaza, aunque también están Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, lo que queda de la organización de los Beltrán Leyva y Los Zetas.

De los 56 municipios mexiquenses donde opera el crimen organizado, La Familia Michoacana tiene presencia en 54, entre ellos Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco, Amecameca, Chalco, Coacalco, Ixtapaluca, Huixquilucan, Naucalpan, Cuautitlán, Zumpango, Zinacantepec, Atlacomulco y Valle de Bravo.

También disputa los municipios del sur de la entidad, como Luvianos, Tejupilco, Anatepec, Tlatlaya y Tonalico, que colindan con Michoacán y Jalisco y forman la llamada “tierra caliente”. En esa zona también están Los Templarios y Los Zetas.

El 10 de mayo de 2010, cuando aún era gobernador, Peña Nieto declaró que el Estado de México y el Distrito Federal se habían convertido en “guarida” de los jefes del narcotráfico. Según él, la zona metropolitana era “el gran mercado consumidor” que los grupos se disputaban.

De 2008 a la fecha, las autoridades mexiquenses registraron 2 mil 221 ejecuciones en todo el estado. El 2012 fue el año más violento, con 523, la mayoría de ellos en el oriente, pero sobre todo en Ecatepec.

Los documentos consultados por el reportero indican que la pugna data de marzo de 2011, cuando en municipios de Michoacán aparecieron mantas en las que se anunciaba la escisión de la Familia Michoacana y la aparición de Los Caballeros Templarios, cuyos sicarios se enfrentan por las plazas de Michoacán, Guerrero y el Estado de México.

En ese ínterin surgió el grupo Guerreros Unidos. Mario Covarrubias Salgado, alias M, quien trabajó para los Beltrán en el estado de Guerrero antes de aliarse con La Familia Michoacana en Chilpancingo, se desplazó al Estado de México. Al final cambió de bando y se unió a Los Templarios para arrebatárle Guerrero y Estado de México a sus antiguos aliados.

Investigadores de la Procuraduría General de Justicia estatal tienen identificados a los jefes de La Familia en cada municipio; saben incluso que son comandados por José María Chávez Magaña, El Pony, cuya base de operación abarca los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Una ficha policial consultada por el reportero señala, por ejemplo, que El Pony es originario del municipio de Tepaltepec, donde cuidaba ranchos y ganado. Mide metro y medio y tiene entre 40 y 45 años. “Es muy cuidadoso, pues ni sus propios miembros pueden hablar directamente con él; todo lo realiza por medio de su secretario, al que le dicen Carlos o La Sombra”, según el documento.

También consigna que en 2007 se escapó del penal de Zitácuaro, donde había sido recluido luego de que las autoridades estadounidenses lo extraditaron. Hoy, El Pony es la pieza clave de La Familia Michoacana en el Estado de México.

En agosto de 2012 se reforzaron los patrullajes militares en territorio mexiquense. No obstante, la aparición de 12 cuerpos desmembrados en la ciudad de Toluca a finales de enero obligó al gobierno federal y al estatal a incrementar la presencia de soldados en la periferia del Estado de México y el Distrito Federal.

### **Tierra sin ley**

El paisaje mexiquense conurbado con el Distrito Federal es árido y terregoso en la zona oriente. No hay grandes construcciones ni zonas verdes. Muchas calles están sin pavimentar y en municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl el servicio de basura lo dan carretas tiradas por mulas que también suelen ser utilizadas para el transporte de droga de una colonia a otra.

En las esquinas de algunas calles se vende crack, cocaína y marihuana a cualquier hora del día. Los narcomenudistas también ofrecen sus servicios domiciliarios por teléfono o internet, lo que, dicen los vecinos, disminuye los riesgos. La mayoría de los vendedores y clientes son adolescentes.

Desde 2002 las autoridades registraron la presencia del Cártel de Neza, encabezado por Delia Patricia Buendía Gutiérrez, Ma Baker, cuyo control se hacía sentir en ese municipio mexiquense, e incluso en la delegación Iztapalapa, en el oriente del Distrito Federal.

Del otro lado de Nezahualcóyotl y Ecatepec, hacia el norte, el panorama es distinto. En Huixquilucan, donde comenzaron a proliferar residencias y departamentos de lujo a partir de 2006, también hay rastros del narcotráfico. En noviembre pasado, tropas del Ejército detuvieron a Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, presunto lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en ese municipio.

En septiembre de 2008, en las barrancas de El Olivo, municipio de Ocoyoacac, cercano a Huixquilucan, fueron hallados los cuerpos de 24 albañiles. En 2010 los militares detuvieron en Bosques de la Herradura a José Gerardo Álvarez, El Indio, y a 15 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva.

Édgar Valdés Villarreal, La Barbie, tenía una casa en Huixquilucan, donde se registraron 25 ejecuciones durante 2011. Al año siguiente se localizaron 12 cadáveres en la localidad de San Juan Yautepec, del mismo municipio.

En septiembre de 2011, en su quinto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto manipuló las cifras al asegurar que la tasa de homicidios dolosos en la entidad se había reducido de 16.5 a 7.6 por cada 100 mil habitantes. La revista británica *The Economist* lo desmintió de inmediato con cifras del Sistema Nacional de Seguridad, según las cuales de 2006 a 2007 las muertes se incrementaron 62%.

Y en enero pasado, cuando la violencia cobró 105 vidas, el gobernador Eruviel Ávila saltó a la palestra para decir que su gobierno no permitirá que el crimen organizado amedrente, intimide a la autoridad o pretenda controlar alguno de los 125 municipios mexiquenses.

Sin embargo, en un recorrido de varios días por los municipios aledaños a la Ciudad de México, el reportero constató que los cárteles controlan calles, parques, avenidas y comercios; a estos últimos les cobran incluso derecho de piso.

En la esquina de Lázaro Cárdenas y Alfonso Sierra, en Nezahualcóyotl, por ejemplo, la cocaína y el crack se venden frente a las patrullas municipales; los narcomenudistas incluso se desplazan hacia el Distrito Federal con naturalidad, sin que nadie los detenga.

Según los informes de inteligencia policiaca consultados por Proceso, una de las principales rutas de paso de cocaína proveniente de Sudamérica es el Bordo de Xochiaca, y de ahí, tras recorrer el circuito mexiquense, sale hacia Querétaro y se distribuye por todo el bajío. Por ese corredor salen también los autos robados que se venden completos o en piezas en el mercado local y en Centroamérica.

### **Frivolidad municipal**

El profesor Manuel Ambriz Roldán, integrante del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), descarta que el aumento de la violencia en suelo mexiquense sea un mensaje para Peña Nieto, como lo fue para Felipe Calderón en Michoacán en 2006, cuando le declaró la guerra al crimen organizado.

“La situación es diferente. Para Peña Nieto el problema del crimen organizado es una herencia que le dejó Calderón, a quien (los cárteles de la droga) sí le mandaron un mensaje de que no se iban a dejar”, precisa el investigador especializado en presencia de bandas delincuenciales en la Ciudad de México y el Estado de México.

Refiere que, en efecto, el poder de esos grupos ha crecido en el Estado de México, por lo que, dice, la presencia de las Fuerzas Armadas no va a disminuir la espiral de violencia y muerte en la zona.

Así, mientras que el crimen organizado se posiciona en más de la mitad de los municipios de la entidad, en Ecatepec los colonos se quejan porque su presidente municipal, el priista Pablo Bedolla, está más preocupado por traer nuevos animales para la granja ecológica empotrada en el cerro de Ehécatl que en abatir la inseguridad en las 500 comunidades donde hoy sólo cuenta con 38 patrullas.

En el colmo de la incoherencia, señalan, Bedolla organizó un desfile en noviembre para traer al canguro Joey a la granja ecológica local. El gusto le duró poco, pues el animal murió por falta de atención. Al alcalde se le ocurrió traer otro animal exótico. Mandó pintar las calles por donde pasaría el nuevo

espécimen rumbo al zoológico, donde cohabitará con un par de hienas, cerdos de Vietnam, y avestruces y gallinas de Guinea.

El 5 de enero la recepción fue espectacular. Ese día arribó una jirafa de tres años y 3.20 metros de altura. Ahora, la prioridad del ayuntamiento de Ecatepec es darle nombre a la mascota, más que la pavimentación de cientos de calles, atención al alumbrado público en por lo menos 30% del territorio y la depuración del cuerpo policiaco, algunos de cuyos elementos son señalados por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Redacción. “Zetas vs. “golfos”: tres años de hostilidades”. *Proceso* número 1894, 17 febrero 2013. pp. 8-9. <https://www.proceso.com.mx/333843/zetas-vs-golfos-tres-anos-de-hostilidades>

### **“Zetas vs. “golfos”: tres años de hostilidades”**

MATAMOROS, TAMPS.- Según las estadísticas de las procuradurías estatales, en febrero de 2010 comenzó la narcoguerra que hasta ahora ha dejado alrededor de 10 mil muertos en el noreste del país y en el norte de Veracruz, entre ellos cientos de inocentes, además de los desaparecidos y desplazados.

Hoy amplias regiones del noreste mexicano están desoladas. Los negocios cerrados se cuentan por decenas, la vida nocturna apenas reúne a algunos parroquianos en Monterrey y muchos poblados sobreviven en medio de la precariedad y la violencia.

El antecedente de esta escalada violenta se puede fechar el 25 de enero de 2010 con la ejecución de Víctor Peña Mendoza, Concord 3, sicario zeta en Reynosa, a manos de Samuel Flores Borrego, El Metro 3, operador del Cártel del Golfo (CDG) que mantenía el control en la ciudad. El Metro 3 fue ejecutado poco después. Su cuerpo apareció en un vehículo abandonado en la carretera Reynosa-Monterrey. A su lado estaba el de Eloy Lerma García, un agente de la Policía Ministerial estatal.

Los días posteriores al asesinato del Metro 3 sus seguidores levantaron un extraño monumento en el bulevar Hidalgo, uno de los más importantes de la ciudad, con la figura de un gallo de más de un metro de altura y una ofrenda floral con la leyenda: “Siempre a sus órdenes”.

En febrero de 2010 comenzaron los grandes enfrentamientos entre sicarios del CDG y Los Zetas. Las calles de las ciudades fronterizas de Tamaulipas se llenaron de camionetas blindadas con sicarios armados.

La Ribereña, una vía de dos carriles y amplio acotamiento que conecta a Reynosa con Nuevo Laredo, con una extensión de 240 kilómetros, fue escenario de las más cruentas batallas a partir de marzo de ese año. Por esa carretera circularon cientos de camionetas Hummer, GMC, Lobo, Durango, Suburban con las siglas de los dos cárteles en pugna colocadas en los parabrisas.

Camargo, Ciudad Mier, Miguel Alemán y Guerrero fueron testigos de los enfrentamientos, en los cuales llegaron a participar hasta 70 vehículos por bando con al menos cinco pistoleros cada uno. Los choques duraron meses, algunas veces las balaceras y granadazos se prolongaron 24 horas.

La narcoguerra provocó escenarios inéditos: Tres cuartas partes de los habitantes de Ciudad Mier huyeron de ese “pueblo mágico”; algunos se refugiaron en albergues de Miguel Alemán y otros se

fueron a Estados Unidos. La Secretaría de la Defensa estableció incluso un cuartel para un batallón de 600 hombres en ese municipio. Las tropas continúan vigilando La Ribereña por tierra y aire.

### **Las bajas**

Y aunque los enfrentamientos cesaron a finales de 2010, aun hoy se observan decenas de fachadas de casas y negocios, algunos de ellos abandonados, con las huellas de los disparos. También quedan los restos de las camionetas incendiadas y capillas con la figura de la Santa Muerte, incluida la que se encuentra en la entrada a Miguel Alemán, viniendo de Reynosa.

Los enfrentamientos se extendieron a ciudades y poblados de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Nuevo León, sobre todo a Monterrey, la ciudad pionera en alta tecnología, la más grande e importante del norte del país, con prestigiadas universidades, miles de industrias y sede de los principales corporativos nacionales.

Según la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en los tres últimos años hubo más de 4 mil 400 asesinatos violentos, 80% de ellos relacionados con la delincuencia organizada. En Tamaulipas y Coahuila hubo en promedio mil por año.

La violencia también enlutó a las principales ciudades de Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, incluidas sus capitales.

Muchos capos del CDG fueron detenidos o ejecutados, presumiblemente por traiciones de sus propios sicarios, entre ellos los seguidores del Coss, conocidos como Los Erres o Rojos, y los de los Cárdenas Guillén, Los Metros.

El otrora poderoso CDG vio caer a manos de efectivos de la Marina a sus máximos líderes: Eduardo Costilla, El Coss, y Mario Cárdenas Guillén, ambos en la zona metropolitana de Tampico, en septiembre de 2012.

Los Zetas se dividieron. Una facción la encabeza Iván Velázquez Caballero, El Talibán; otra es liderada por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40. La organización perdió a su principal líder, Heriberto Lazcano Lazcano, El Z-14, en un enfrentamiento con la Marina el 7 de octubre de 2012 en Progreso, Coahuila. En ese grupo corre la versión de que Lazcano fue “puesto” por sus propios compañeros.

Poco después cayó Salvador Martínez Escobedo, La Ardilla, jefe regional del cártel en el noreste y tercero en el mando zeta. Él fue el principal operador de la matanza de los 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010.

En los tres años de narcoguerra Los Zetas perdieron a varios de sus líderes, entre ellos Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito; Jaime González Durán, El Hummer; y Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky.

También dejaron de controlar Monterrey tras la detención de Carlos Oliva Castillo, La Rana, quien operaba desde Saltillo. A esta captura le siguieron las de tres capos posicionados en la zona metropolitana de la capital nuevoleonense: Roberto Carlos López Castro, El Toruño, aprehendido en Jalisco a finales de septiembre de 2011; José Loera Rodríguez, El Voltaje, capturado en Monterrey por

la Policía Federal, y Francisco Medina Mejía, El Quemado, muerto en un enfrentamiento con el Ejército en Nuevo Laredo.

Muchas células quedaron acéfalas y se dedicaron al secuestro y la extorsión mientras otras optaron por sumarse al CDG. La división de Los Zetas continúa en Monterrey. Prueba de ello es la matanza de los integrantes del grupo Kombo Kolombia.

Según el testimonio de un presunto halcón que fue detenido tras el crimen, los autores fueron Los Zetas, a pesar de que ellos financiaban al representante del grupo. La razón: Los músicos amenizaban fiestas privadas de comandantes zetas que se pasaron al CDG.

Pese a que ambos bandos están divididos y debilitados, aún tienen fuerza e intentan expandir sus dominios. Los Zetas, por ejemplo, tienen presencia en las principales ciudades del noreste del país y de otras regiones. Sus rivales del CDG controlan Matamoros, Reynosa, Tampico, así como Monterrey y varios municipios de Nuevo León, y mantienen una alianza con el Cártel de Sinaloa, que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán.

Jorge Carrasco Araizaga, “La silenciosa guerra de Peña Nieto en Michoacán”. *Proceso* número 1899, 24 marzo 2013. pp. 18-22. <https://www.proceso.com.mx/337081/la-silenciosa-guerra-de-pena-nieto-en-michoacan>

### **“La silenciosa guerra de Peña Nieto en Michoacán”**

El gobierno de Enrique Peña Nieto libra una guerra de bajo perfil en Michoacán. El Ejército se halla atrapado entre las guardias civiles y los cárteles de narcotraficantes. Desde el repliegue de la Policía Federal en esa entidad, los soldados intentan frenar la violencia e imponer la ley pero se topan con grupos de la delincuencia organizada como Los Zetas, Los Caballeros Templarios o El Cártel Jalisco Nueva Generación, que protagonizan feroces combates por el control de la plaza y asesinan sin miramientos a quien les estorba.

La estrategia de silencio del gobierno de Enrique Peña Nieto dejó en la penumbra la muerte de Dionisio Loya Plancarte, uno de los jefes de Los Caballeros Templarios y líder histórico de la delincuencia organizada en Michoacán.

Conocido como El Tío, Loya Plancarte murió a manos del Ejército en una supuesta represalia del gobierno de Peña Nieto por la desaparición de tres elementos del Estado Mayor Presidencial en la entidad.

Enviados desde la Ciudad de México, los militares desaparecieron entre los municipios vecinos Apatzingán y Buena Vista Tomatlán, bastiones de lo que fue La Familia Michoacana y su escisión, Los Caballeros Templarios.

Informaciones obtenidas por Proceso indican que a partir de ese hecho, el Ejército realizó operativos nocturnos en las comunidades de ambos municipios. Hasta ese momento, los militares sólo transitaban por las carreteras principales; ahora ya entraron a las comunidades.

Durante una de esas incursiones, en las primeras horas del sábado 16 se enfrentaron a un grupo de civiles armados en las inmediaciones de la comunidad de El Alcalde, en el municipio de Apatzingán. Según corporaciones policiales del estado citadas por periodistas locales, en el enfrentamiento murieron cinco elementos castrenses.

El hecho ocurrió hacia las dos de la mañana cuando un convoy militar integrado por tres vehículos se enfrentó a hombres que viajaban en camionetas tipo todoterreno y se negaron a deponer las armas. Algunas versiones mencionaron que después del combate se registró una fuerte movilización militar, incluso por aire.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional guardó silencio, aunque se trata de la baja más importante de Los Caballeros Templarios desde la muerte de Nazario Moreno González, El Chayo, en un enfrentamiento con la Policía Federal en diciembre de 2010, según dio a conocer esa corporación.

Con la desaparición del Tío, al frente de Los Caballeros Templarios sólo quedarían Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Enrique Plancarte Solís, El Kikín, a quien se le adjudican las relaciones con los proveedores internacionales –en especial de China– de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas.

El Ejército también guardó silencio ante el agravio que sufrió unos días antes, entre la noche del lunes 11 y el martes 12 de marzo, cuando una partida de soldados pertenecientes a la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán fue retenida por civiles en La Ruana, tenencia Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Buena Vista Tomatlán. En este lugar surgió una “policía comunitaria” en febrero pasado y ha sido escenario de enfrentamientos, bloqueos y quema de vehículos.

El hecho de violencia más reciente ocurrió la tarde del viernes 22, al sur del municipio en una comunidad conocida como Santa Ana Amatlán, colindante con El Terrero y Catalinas.

Elementos del Ejército se enfrentaron a un grupo de civiles en el mismo lugar donde el miércoles 13, hombres armados incendiaron una gasolinera y una empacadora de limón.

Los autores de la retención grabaron un video sobre los militares desarmados y cercados por la población. El video circuló profusamente en la prensa y las redes sociales.

En Buena Vista existen numerosas brechas que conducen a los lugares de origen del Chayo, El Tío y El Chango Méndez, quien fue otro de los líderes de La Familia Michoacana y que permanece detenido desde junio de 2011, cuando lideraba la otra escisión de ese grupo, La Familia.

La retención de los militares, que según las versiones locales eran entre 20 y 40 –de dos a cuatro pelotones– fue para exigir la liberación de 51 personas acusadas de formar una “policía comunitaria” en esa población, y también de tener vínculos con la delincuencia organizada.

Detrás de los grupos civiles armados de Buenavista y Tepalcatepec, se presumió la presencia de grupos de la delincuencia organizada como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Caballeros Templarios. El Ejército entró en esos dos municipios y detuvo a integrantes de ambas organizaciones.

Los grupos civiles armados tuvieron su máxima expresión el pasado mes de febrero en la zona de tierra caliente, luego del surgimiento de guardias civiles en Cherán, Paracho y otras zonas de población

autóctona del centro-norte del estado. Dijeron que estaban ahí para enfrentarse con la delincuencia organizada.

Otras “guardias civiles” han surgido en comunidades del municipio de Los Reyes, al norte del estado. También se han reportado otras en los alrededores del puerto de Lázaro Cárdenas, estratégico para la movilización de sustancias y drogas ilegales por el Pacífico, tanto las que provienen de México como las procedentes de Asia.

Los alrededores del puerto han sido zona de fuerte confrontación con presencia del cártel de Los Zetas, que en la década pasada, como brazo armado del cártel del Golfo, dio entrenamiento paramilitar a la organización conocida como La Empresa que después se denominó La Familia Michoacana. Ahora, Los Caballeros Templarios se reorganizaron en esa zona como parte de su confrontación con el CJNG y Los Zetas.

El mes en curso ha sido difícil para el Ejército en Michoacán, luego de que el gobierno de Peña Nieto replegó a la Policía Federal, que durante el sexenio de Felipe Calderón tuvo una importante presencia en el estado. La corporación tuvo numerosas bajas a manos de La Familia Michoacana hasta la anunciada ejecución del Chayo.

El jueves 7, el Ejército detuvo a 34 personas que dijeron formar parte de la policía comunitaria. No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) los consideró como integrantes de una organización delictiva y consignó a 31 de ellos por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas –fusiles AK47, AR-15 y pistolas calibre 5.7– y delitos contra la salud. Los otros tres eran menores de edad y fueron remitidos a centros de justicia para adolescentes.

Se les trasladó a penales federales de Veracruz, Estado de México y Tamaulipas. Entre ellos se identificó a una persona con el nombre Édgar Antonio Rojo Lara, supuesto lugarteniente del CJNG en Michoacán.

Los detenidos insistieron en que eran guardias comunitarios pertenecientes a Buena Vista Tomatlán organizados contra las extorsiones y cobro de rentas de Los Caballeros Templarios, y que las armas se las quitaron a miembros de esa organización.

Poco después, el lunes 11, el Ejército detuvo a otras 17 personas, entre ellos dos menores de edad, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en la misma comunidad de la Ruana, punto intermedio entre los municipios de Buena Vista y Apatzingán. Durante los ochenta y noventa este lugar fue conocido como un importante productor de marihuana.

Luego de la segunda captura ocurrió la retención de los militares. En el video que difundieron los autores del secuestro se escucharon críticas en contra de Los Caballeros Templarios y La Tuta. El gobierno estatal intervino y los militares fueron liberados al día siguiente. Para el procurador del estado, Plácido Torres Pineda, el asunto “no pasó a mayores”. La Sedena guardó silencio.

## **Ofrecimiento**

El Ejército se ha movilizó también en Uruapan, la segunda ciudad más importante después de Morelia, capital del estado. La fuerte presencia de la delincuencia organizada en aquella se expresa en el cobro de cuotas a los regidores del ayuntamiento.

De acuerdo con versiones locales, además del despliegue del Ejército en el estado, el gobierno de Peña Nieto podría valerse de la PGR. Consideran que el titular de esta dependencia, Jesús Murillo Karam, podría ir en contra de exfuncionarios, exalcaldes y agentes policiales de la Procuraduría estatal y de Seguridad Pública. Sería un segundo “michoacanazo”, luego del fiasco que protagonizó el gobierno de Felipe Calderón en 2009 cuando detuvo a una treintena de funcionarios y exfuncionarios acusados de delincuencia organizada. Al final tuvo que dejarlos en libertad.

Al tiempo que proliferaban los grupos de autodefensa, continuaron los asesinatos de presidentes municipales. El 3 de febrero último fue asesinado Wilfrido Flores Villa, alcalde de Nahuatzen, municipio vecino de Paracho.

“El homicidio ocurrió luego de que el alcalde cambió al director de seguridad pública municipal, con lo que afectó a la delincuencia organizada de la zona, además de que le quitó las aportaciones sobre obra pública que cobraba en el municipio”, dijeron fuentes de seguridad del estado.

Poco después, el día 13, presuntos sicarios asesinaron al secretario del ayuntamiento de Tanhuato, el panista José Pedro Córdoba Aguirre, cuando conducía sobre la carretera Tanhuato-Yurécuaro, en la frontera con el estado de Jalisco. Sólo tenía un mes en el cargo, al que llegó en sustitución de Eric Rafael Ramírez Basurto, quien renunció. El 31 octubre pasado el alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García, también del PAN, fue herido en un atentado a balazos.

La violencia ya alcanzó al gobierno del priista Fausto Vallejo. La última semana de diciembre pasado fue secuestrado y asesinado el director de Prevención del Delito de la Procuraduría General de Justicia del estado, Gilberto Alonso Sagiente García. Su cuerpo apareció a un costado de la carretera Pátzcuaro-Uruapan.

Ante la violencia imparable en Michoacán, Peña Nieto optó por el despliegue del Ejército luego de que los militares estuvieron replegados en el estado a consecuencia de la represión desatada por el instituto armado luego de que al inicio del sexenio pasado la delincuencia organizada asesinara a varios de sus elementos en Carácuaro, en mayo de 2007, en los primeros meses de la declaración de guerra de Calderón al narcotráfico.

En cuanto Peña Nieto asumió la Presidencia, Los Caballeros Templarios se dirigieron a él a través de mantas en las que negaron ser narcotraficantes o integrantes de la delincuencia organizada.

“Si usted cumple con lo prometido en su recorrido por el país, nosotros entregaremos nuestras armas, dejando nuestra seguridad en sus manos. Pedimos a la ciudadanía internacional y a los medios de comunicación estén vigilantes de nuestras propuestas y peticiones. Si no fuera así, regresaremos a defender nuestra tierra, nuestra gente”, escribieron.

En seguida, le ofrecieron “su ayuda” para combatir a Los Zetas y al CJNG: “Si usted necesita nuestra ayuda señor presidente para combatir a los cárteles que están dañando no sólo la imagen de nuestra patria, sino asesinando a mucha gente inocente como el caso de Miguel Ángel Treviño, alias Z40, y Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho del cártel Jalisco Nueva Generación”.

S/A. “Noreste: los cárteles no creen en el cambio de gobierno”. *Proceso* número 1899, 24 marzo 2013. pp. 22-25. <https://www.proceso.com.mx/337539/noreste-los-carteles-no-creen-en-el-cambio-de-gobierno-2>

### **“Noreste: los cárteles no creen en el cambio de gobierno”**

El narco demostró que no cree en los cambios de gobierno. Lejos de agazaparse en espera de una nueva estrategia para combatirlos, las bandas criminales siguen disputándose entre sí territorios y, dentro de cada organización, sus respectivos liderazgos. Desde el martes 19 Monclova, Coahuila, y Reynosa, Tamaulipas, fueron escenarios de fuertes combates entre cárteles que, sin autoridad capaz de someterlos, consideran a toda la región un botín destinado al más sanguinario de ellos.

SALTILLO, COAH. (Proceso).- En las últimas semanas Ciudad Victoria, Gómez Palacio y Monclova se convirtieron en las urbes más violentas de Coahuila, con lo que esta entidad se suma a Tamaulipas y Durango como las más violentas de la región.

Recientes divisiones en los cárteles que controlan esos territorios –el del Golfo, el de Sinaloa y Los Zetas– están llevando la violencia a niveles similares a los de Torreón, Reynosa y Monterrey.

Desde las 6:30 horas del martes 19, en Monclova se registraron enfrentamientos entre grupos delictivos con granadas y armas de grueso calibre. Posteriormente intervinieron en la refriega la Policía Federal y efectivos del Ejército. Habitantes de la ciudad comentaron a Proceso que las escaramuzas se desataron simultáneamente en varios puntos de la zona metropolitana, que incluye los municipios de Monclova, Castaños y Frontera.

Minutos antes de las 7:00 horas, decenas de jóvenes comenzaron a despojar a los conductores de sus camiones, tráileres y autos para bloquear las principales vialidades y así obstaculizar el arribo de las fuerzas federales.

“Utilizaron camiones urbanos para bloquear la entrada a Monclova, a la altura de Castaños”, dice una entrevistada. Sucedió lo mismo en lugares como el bulevar Harold Pape, que atraviesa los tres municipios y donde los federales persiguieron e intercambiaron fuego con bandas criminales.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó sólo uno de los choques entre sicarios: “A las 07:45 horas se recibió un reporte de que en la calle Sócrates de la colonia Tecnológico se registró un enfrentamiento entre civiles armados, al acudir la Policía Federal al lugar fueron recibidos a balazos, en este lugar un policía federal muere por impactos de arma de fuego”, dice el comunicado.

Informó además que en la calle Sócrates la policía aseguró una vivienda, donde halló un fusil automático AK-47 y un R-15, ocho, cargadores abastecidos y una granada calibre 40, además de un auto Jetta sin placas (a su vez con dos cargadores llenos) y una camioneta Pacífica.

Cientos de ciudadanos quedaron atrapados en los tiroteos cuando iban al trabajo. Las escuelas suspendieron actividades; los alumnos y maestros que ya se encontraban en su centro educativo se tiraron al piso para evadir las balas.

El alcalde de Monclova, Melchor Sánchez, informó que los 250 policías municipales fueron desplegados para proteger los planteles y evitar que los alumnos salieran de ellos. Después que concluyeron los

enfrentamientos, cerca de las 10:00 horas, el funcionario confirmó que “tenía reportes de varios muertos”.

Para uno de los testigos, “las balaceras se escucharon más fuerte en Frontera”. En ese municipio otros entrevistados dijeron que “alrededor de 20” cuerpos quedaron tendidos en las calles y luego “fueron recogidos por soldados”.

Los disparos y explosiones duraron alrededor de dos horas. Aunque el parte oficial sólo reportó un policía federal fallecido y un civil herido; cálculos conservadores de los habitantes hablan de alrededor de 40 muertos.

Monclova y su zona metropolitana está bajo el férreo control de Los Zetas y forma parte de su corredor fronterizo de Ciudad Acuña a Piedras Negras. Incluso fue en un tiempo el refugio de Heriberto Lazcano, El Z-14.

El control de esta banda es tal, que cuando llega un cliente a uno de los muchos giros negros de su propiedad, un host recibe a los clientes con la información básica: “Está usted llegando a un negocio de la Compañía”. Y le ofrece sus “productos” e indica los lugares especiales para consumirlos.

Hasta ahora se desconoce si fueron miembros del Cártel del Golfo o el de Sinaloa, o de ambos, quienes llegaron a “calentarles la plaza” a Los Zetas.

### **Fuego en Reynosa**

En la tarde del martes 19 aún no se terminaban de levantar evidencias en Monclova cuando se reportaron narcobloqueos y balaceras en Reynosa, Tamaulipas.

Según la procuraduría estatal, “a las 17:30 horas, en la ciudad de Reynosa se reportaron enfrentamientos entre grupos de civiles armados, provocando bloqueos de calles y saldo de una persona herida, una joven ajena a los hechos”. La víctima, de 16 años, recibió un balazo en una pierna y fue internada en un hospital del Seguro Social.

“Los hechos se registraron en diversas calles de la colonia Balcones de Alcalá y para impedir la intervención de las fuerzas de seguridad, los grupos de civiles armados provocaron los bloqueos”, concluyó la dependencia tamaulipeca.

Los delincuentes cerraron de esa forma todos los accesos a la colonia Balcones. Cuando llegaron los militares tuvieron que detenerse y escuchar las ráfagas y explosiones provenientes de una calle donde un grupo de sicarios arrasó una vivienda y a sus moradores. Fue el segundo enfrentamiento de ese tipo que se reporta en el mes.

La noche del domingo 10, al filo de las 23:00 horas, cientos de sujetos armados que se desplazaban en caravanas de hasta 30 camionetas cruzaron disparos y granadazos hasta la madrugada y en diversos puntos de la ciudad, incluyendo las zonas aledañas a los puentes internacionales hacia Estados Unidos.

Horas antes, hombres del Cártel del Golfo liderados por Miguel El Gringo Villarreal, robaron alrededor de 18 camionetas de seis agencias automotrices y las utilizaron en sus combates. Sin embargo, la procuraduría tamaulipeca difundió que el saldo final fue “una víctima colateral”. Además, un menor sufrió lesiones cuando iba en el auto con su padre.

La versión oficial fue desmentida por una fuente policiaca que confirmó al diario The Monitor, de McAllen, Texas, que las balaceras dejaron al menos “tres decenas de muertos”. Agregó que la nueva ola de violencia es el resultado de una pugna por el poder en el Cártel del Golfo.

“La división interna más reciente ha sumido a la ciudad de Reynosa en balaceras, como la ocurrida la noche del 10 de marzo, que duró tres horas, entre las facciones del Cártel del Golfo leales al jefe Mario Pelón Ramírez y los grupos de Miguel El Gringo Villarreal”, explicó la fuente.

Según la misma, los balazos comenzaron cuando Pelón Ramírez dio la orden a sus sicarios de borrar a El Gringo Villarreal y les prometió que todo lo que le arrebatara sería su botín de guerra.

Ramírez ha intentado tomar el control del Cártel del Golfo aliándose con sus rivales de Sinaloa desde que Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, y Mario Cárdenas Guillén fueron detenidos por marinos en septiembre de 2012.

En tanto, Miguel Villarreal, nacido en Texas y exjefe de la plaza en Miguel Alemán, le disputa el poder al Pelón apoyándose en algunos cabecillas de las familias más antiguas del cártel.

Un aliado de Villarreal, El Puma García Román, fue baleado en uno de los combates nocturnos del 10 de marzo, en los que se utilizaron granadas, ametralladoras Barrett calibre 50 y camionetas blindadas.

### **La “guerra”, sin cambios**

Además de los ajustes de cuentas internos, en Tamaulipas continúa la guerra entre el Cártel del Golfo y Los Zetas. En Nuevo Laredo, la confrontación está cobrando víctimas cuya relación con los delincuentes no se ha esclarecido. Por ejemplo, el jefe de la Policía Municipal, Roberto Balmori Garza, y el titular del Consejo Electoral Distrital número 2, Ramiro Garay Medina, fueron secuestrados hace más de dos semanas y no se sabe nada de ellos.

Un nuevo escenario para los tiroteos de estas bandas es Ciudad Victoria, capital del estado. En aproximadamente un mes se han cometido más de 70 ejecuciones y las víctimas son presentadas en narcomensajes ya sea como zetas o golfos, pero en muchos casos se trata de inocentes asesinados para sembrar el terror.

También la plaza de Ciudad Victoria está bajo control de Los Zetas. El miércoles 20, como a las 13:00 horas, aparecieron en la ciudad varias narcomantas dirigidas al gobernador Egidio Torre Cantú y a la población en general. En ellas se amenazaba con ejecutar al coordinador de la Policía Estatal Acreditada, Arturo Cabrera Herrera, y a su familia, a menos que renunciara. Los mensajes precisaban que ese funcionario vino de Michoacán y que al llegar a Tamaulipas se puso al servicio de un cártel.

Además, en La Laguna apareció un nuevo grupo que centró sus ataques contra El Mayo Zambada. En narcomantas enlistaron a los jefes policiacos y agentes de la procuraduría estatal que presuntamente trabajan para el Cártel de Sinaloa.

Para Ioan Grillo, autor del libro El Narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana, la fragmentación de los cárteles implica mayor violencia, por el surgimiento de nuevos capos, de menor nivel pero más sanguinarios que sus antecesores. Esto pone en crisis a la actual estrategia para

combatirlos. “La violencia e inseguridad que se registra es una muestra de los profundos problemas que tiene México. No se resuelven con un cambio de gobierno”, comenta en entrevista.

Afirma que muchas personas en México creyeron que la violencia comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y que se iba a terminar con su régimen, pero que en realidad el expresidente sólo enfrentó un proceso que se agudizó a partir de 2004, cuando Los Zetas impusieron en Nuevo Laredo una nueva manera de operar.

La estrategia que utilizó Felipe Calderón, en coordinación con el gobierno de Estados Unidos, fue mandar las fuerzas federales a esas regiones. Además, señala Grillo, los grupos de inteligencia nacionales y estadounidenses se concentraron en ubicar y eliminar las cabezas de los cárteles, así como presentarlas con gran parafernalia ante los medios de comunicación, para mostrar que se estaba acabando con la inseguridad.

Sin embargo, esos discursos mostraron su debilidad cuando aparecieron nuevos capos y grupos más violentos. Y con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder no se modificó nada, agrega el periodista y escritor. La estrategia del priista no está completamente clara y sólo habla de “contención” del crimen organizado, poniendo énfasis en un futuro plan de prevención.

Y aunque esto sin duda es bueno, dice Grillo, actualmente se mantiene la “acción ofensiva”: se despliegan más tropas, se colocan más policías en carreteras... Lo mismo que hacía Felipe Calderón.

También prevalece la misma impunidad que existió en el sexenio pasado: “En 2008 mataron policías y no pasó nada. Lo mismo hicieron en los años siguientes y no se resolvieron los casos”, observa. En la nueva administración de Peña Nieto siguen agrediendo a medios y matando periodistas y tampoco se resuelve nada, concluye Grillo.

S/A. “¿Niño sicario?”. *Proceso* número 1900, 31 marzo 2013. pp. 26-28.

<https://www.proceso.com.mx/337864/nino-sicario-2>

### “¿Niño sicario?”

Detenido y torturado por policías federales, Jorge Armando fue secuestrado y torturado nuevamente por una organización delictiva –se supone que Los Zetas– y después asesinado. Tenía 13 años. En los noticiarios televisivos se le llamó “el niño sicario” porque así lo caracterizó el procurador estatal, y para los medios fue fácil propagar el mote. Hasta la fecha, ni el procurador de Zacatecas ni la PGR han rectificado. Esto supondría admitir que en realidad el muchacho fue víctima de los policías y de la delincuencia que dicen combatir.

ZACATECAS, ZAC. (Proceso). - Policías federales lo detuvieron la tarde del 4 de febrero y después lo torturaron, con otras 14 personas, supuestamente por pertenecer a un grupo delictivo. Dos días después un juez lo dejó en libertad porque sólo tenía 13 años.

Aunque estaba en riesgo, ninguna autoridad le brindó protección porque un funcionario soltó –y mediáticamente se aceptó– que era un “niño sicario”. Eso ya no se podrá comprobar o desmentir, porque el menor fue torturado nuevamente y asesinado.

La madrugada del 28 de febrero la policía ministerial del estado localizó su cadáver, con otros cinco, a un costado de la carretera de Morelos a Vetagrande, ocho kilómetros al norte de la capital de Zacatecas. Fueron ejecutados con armas de grueso calibre.

La muerte del menor conmocionó a la sociedad zacatecana. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), la Organización para el Desarrollo Social y la Educación para Todos (Odisea A.C.) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exigen identificar y fincar responsabilidades a los funcionarios que no respetaron el debido proceso del adolescente que, aseguran, fue victimizado por la delincuencia organizada y por las autoridades.

La Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF) nada informan sobre los hechos en los que intervino directamente su personal; la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se deslinda del asunto y el Tribunal Superior de Justicia del Estado guarda silencio sobre el caso.

Las 14 personas detenidas con el menor a principios de febrero ya fueron trasladadas por la PF a las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México, donde están arraigadas.

### **Ser niño en Zacatecas**

Jorge Armando Moreno Leos desertó de la primaria a los 10 años, cuando su familia se desintegró. Vivió unos meses con su padre, pero luego regresó con su madre y sus dos hermanas menores.

Durante tres años se ganó la vida en la calle: lavando carros, tirando la basura de los vecinos y vendiendo paletas de hielo. Pero en la calle también aprendió a consumir drogas.

Soñaba con comprarle una lavadora a su mamá, pero el dinero no le alcanzaba, por lo que decidió seguir el ejemplo de muchos y enrolarse con Los Zetas hace dos meses y medio.

Su madre, María Isabel Leos, le rogó que se saliera de ese mundo y mejor siguiera estudiando, ya que en junio de 2012 había terminado la primaria abierta en el Instituto Zacatecano de Educación para los Adultos (IZEA) con una calificación promedio de 10 y por eso el gobernador Miguel Alonso Reyes le extendió un llamativo y tricolor diploma en noviembre siguiente, sólo cuatro meses antes de que Jorge Armando fuera asesinado.

La señora Leos habla de él con lágrimas constantes: “Mi vida se fue con Jorge porque era un niño muy bueno. Como todos los niños era rebelde, le gustaba salir con sus amigos. Dejó la escuela porque yo trabajo y él se dedicó a ayudarme”.

Lo describe: “Era bien acomedido. Usted le comenta a toda la gente y ni le cree cuando le dice que era el mentado ‘niño sicario’. Él veía a una persona afuera de su casa y le decía: ‘¿le ayudo a barrer?’, ‘¿le ayudo a tirar la basura?’ ‘¿le lavo el carro?’.

“Él vendía paletas en la calle cuando esta gente (Los Zetas) lo agarró. El niño decía que me iba a comprar una lavadora, que ellos le iban a dar dinero. Yo le decía: ‘no te creas, m’ijo.’, Porque él nunca traía dinero, le prometían muchas cosas que no eran ciertas.”

Ella mantiene a sus niñas con su trabajo de vendedora ambulante. Se enteró de que su hijo fue detenido por la PF porque vio su fotografía en el noticiario vespertino de TV Azteca Zacatecas. Por el mismo medio se enteró de su ejecución 24 días después.

Ahora ruega al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Miguel Alonso Reyes protección para ella y sus hijas. No le interesa nada más, porque desde la muerte de Jorge Armando ha recibido mensajes y llamadas con amenazas de muerte a su teléfono celular, que se atribuyen supuestos miembros de la organización “de las tres letras”.

En tanto, vive aterrorizada con sus niñas, sin poder conseguir un empleo formal. Aún debe los gastos del funeral de su hijo, porque en una capilla del Issstezac le fiaron el ataúd, la velación y el sepelio.

### **El “sicario” que nunca mató**

El 4 de febrero por la tarde, en una filtración a los medios de comunicación y no mediante un comunicado oficial, el gobierno local informó que en un operativo “de inteligencia” la PF detuvo y consignó ante el Ministerio Público federal en la ciudad de Zacatecas a 15 presuntos delincuentes: siete en una casa de seguridad del fraccionamiento Lomas del Lago y ocho en el hotel Condesa, estos últimos de origen guatemalteco.

La noticia y las fotografías de todos los detenidos se publicaron al día siguiente en la prensa y en medios electrónicos. A media tarde, María Isabel Leos se enteró por la tele de que su hijo estaba detenido.

Como pudo, consiguió que un familiar pasara a dejarla a las instalaciones de la PGR, ubicadas en la salida poniente de la ciudad de Zacatecas, pero ya había oscurecido, narra la señora, “y no me dejaron ver a mi niño. Me estuve ahí como tres horas, y me dijeron que hasta el siguiente día tenía que ir al tribunal”.

No fue sino hasta el día 6 cuando, por medio del oficio 35 del Poder Judicial de Zacatecas, la juez especializada en materia de justicia para adolescentes Frida Jazmín Rubio Rentería le ordenó al director del Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil que dejara en libertad a Jorge Armando, al acreditarse que tenía 13 años.

El menor fue entregado a su madre, pero sólo permaneció unas horas con ella y volvió a la calle. En ese breve lapso le contó a la señora Leos el trato al que lo sometieron los policías federales 24 horas antes de presentarlo ante el MP.

“El niño venía muy golpeado de su cuerpo –dice indignada–. Yo le pregunté qué tenía, porque hasta su mano izquierda la traía demasiado hinchada. Me dijo que los federales lo envolvían en una cobija, lo tiraban al suelo y lo pateaban, le daban muchas patadas en su cuerpo, y que otro le pisaba la mano y otro lo pateaba.

“Me dijo que los tuvieron detenidos los federales en el hotel Howard Johnson (principal centro de operaciones de la corporación). Y que otro agarraba una pistola y la tronaba cerca de su oído para que hablara.”

Cuando Jorge Armando volvió a salirse, su madre empezó a oír que estaba en libertad “el niño sicario”. “No se de dónde salió ese calificativo. Yo de repente empecé a oír eso en las noticias. Incluso aquí a la casa vino una licenciada de la PGR y me dijo: ‘Usted no haga caso de lo que dicen, no es cierto, usted bien sabe por lo que está el niño. En las noticias van a empezar a especular y a decir puras cosas que no son ciertas’”.

Incluso, dice la señora Leos, “hasta se manejó que yo estoy muerta con todo y el niño. En la mayoría de los medios y para toda la gente yo estoy muerta con el niño, a los dos nos mataron”.

Ella atribuye al procurador de Zacatecas, Arturo Nahle García, el haber llamado “niño sicario” a Jorge Armando y atribuirle la ejecución de una decena de personas. “Yo no sé por qué si Nahle sale haciendo declaraciones nunca ha aclarado que Jorge no estaba consignado por eso y que no me mataron con él”.

Al preguntarle si su hijo confesó el asesinato de 10 personas, ella lo niega. “En el tribunal, desde que yo llegué a preguntar por él, decían: ‘Es que el chavo viene pesado porque es el que manda a todos aquí en Zacatecas’. ¿Cómo un niño de 13 años, que a lo mucho tenía dos meses y medio con ellos (los delincuentes), y eso se me hace mucho tiempo, cómo iba a ser el jefe de todos ellos?”.

Y en efecto, en la notificación del Poder Judicial del estado que ella recibió personalmente en su casa el 19 de febrero, con la causa penal marcada con el número 14/2013, se especifica que el niño Jorge Armando Moreno Leos, se le imputan diversos delitos, excepto el de homicidio:

“... Por el delito de delincuencia organizada, violación a la ley federal de armas y explosivos, en las modalidades de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional, y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, cometido en perjuicio de la sociedad.”

La madre había recibido la comunicación judicial para que el 20 de febrero se presentara con el menor ante el tribunal para ser vinculado a proceso, y determinar ahí su situación jurídica respecto a los delitos que se le imputaban. Pero Jorge ya no estaba en su casa, y no acudió a la audiencia. María Isabel se presentó sola ante la juez.

### **“Si te llegan a matar...”**

Después de varios días de ausencia, el 24 de febrero Jorge Armando fue a su casa. Ese día estuvo buscando a su mamá por teléfono porque lo habían amenazado de muerte. “Vino a la casa y me dijo: ‘Vámonos de aquí’. Empezamos a platicar. Me dijo que estaba amenazado y que nos fuéramos, no me quiso decir más”, recuerda la señora.

Sin embargo, todavía “se puso a jugar con las niñas, sus hermanas, y puso sus caricaturas en la televisión. Le empecé a preguntar más cosas y me dijo: ‘No, ya no, mamá’. Y empezó a sonar su teléfono. Eran los delincuentes que le decían que se reportara inmediatamente”.

Jorge Armando apagó el teléfono. Se quedó a dormir. Permaneció en casa el 25 de febrero y hasta el 26 prendió de nuevo su celular, “que estaba suene y suene”. Alrededor de las 15 horas lo contestó. “Le preguntaban dónde había dejado un arma, con puras palabras fuertes le hablaban. Él les decía que no la tenía, que no sabía dónde estaba”, narra la señora Leos.

Entonces sus jefes de la organización delictiva le ordenaron que tomara un taxi y los encontrara en el centro histórico de la ciudad, pero el menor los ignoró y se tendió en la cama, aunque era de día. “Se acostó y me dijo que me quedara a un lado de él. Me dijo ‘abrázame fuerte, échame tus piernitas’. Lo abracé y me dijo: ‘Ya no me quiero ir, mamá, porque me van a matar’. Le dije: ‘No te vayas, hijo. Mejor vámonos de aquí, no sé cómo, ahorita consigo y nos vamos. ‘No me quiero ir, mamá, pero si no me voy te van a buscar a ti y a mis hermanas, y las van a matar’.” El mismo 26 de febrero, en la noche, Jorge

Armando salió. Su mamá quiso detenerlo y le propuso ir ella en su lugar. “Yo estaba dispuesta a hacer lo que a él le mandaban, con tal de que lo dejaran libre, porque él era un niño, estaba chiquito. Y él me dijo: ‘No, esto es muy peligroso; si a ti te llegan a matar, ¿qué van a hacer las niñas y qué voy a hacer yo?’”.

Además, nada le garantizaba que se acabara el problema. “O me matan ellos por desertor, o me va a matar la contra, porque ando con ellos”. Entonces se despidió de sus hermanitas y se fue a enfrentar a la muerte. Ahora toda la gente lo ve como el niño más malo del mundo, dice María Isabel, porque lo recuerdan como “el niño sicario”.

Alvaro Delgado. “Los Monreal: Historia de una venganza frustrada”. *Proceso* número 1905, 5 mayo 2013. pp. 21-23. <https://www.proceso.com.mx/341061/los-monreal-historia-de-una-venganza-frustrada>

### **“Los Monreal: Historia de una venganza frustrada”**

Los detenidos por planear el asesinato de Ricardo, David y Saúl Monreal Ávila niegan haberse identificado como miembros de Los Zetas ante los policías federales que los capturaron. De acuerdo con las actas ministeriales del caso, de las que Proceso tiene copia, tres de ellos se dijeron trabajadores del empresario Arturo Guardado, y dos especificaron que él les encargó los crímenes para vengarse de los Monreal porque “desaparecieron” a su hermano Juan Carlos Guardado. En un oficio de la Policía Federal Ministerial fechado el 3 de abril se documenta el inicio del operativo que frustró el atentado contra los hermanos Monreal Ávila.

El 9 de diciembre de 2012, en Zacatecas, el empresario Arturo Guardado Méndez contrató a dos pistoleros para asesinar a Ricardo, David y Saúl Monreal Ávila. La razón: vengarse de ellos por presuntamente haber “desaparecido” a su hermano Juan Carlos.

Para cumplir con este jale, ese mismo día, en la ciudad de Fresnillo, Guardado Méndez proveyó de armas y dinero a José Luis Vázquez Delgado, alias El Chato, y a Juan Carlos Esqueda Hernández, quienes habían sido sus trabajadores en la empresa El Fresno, de su propiedad.

Aunque el empresario niega haber tramado liquidar a los Monreal, y aun asegura que éstos y su familia tienen “muy buena relación”, el testimonio de los matones lo condena: “Quería matarlos por venganza, ya que habían desaparecido a su hermano Juan Carlos Guardado Méndez”.

Después de que se frustró la conspiración contra los Monreal, la madrugada del 4 de abril, el diputado Ricardo Monreal y su hermano David pidieron no especular sobre el móvil y la Procuraduría General de la República (PGR) adujo que fue una venganza, pero nadie aceptó que Guardado Méndez acusa al clan del secuestro de su hermano, en febrero de 2011.

De hecho, conforme a las declaraciones ministeriales de los dos pistoleros –de las que Proceso tiene copia–, Guardado Méndez había ordenado matar primero a Saúl Monreal Ávila, cuyo periodo como alcalde de Fresnillo lo concluyó justamente Juan Carlos Guardado Méndez.

Al no poder liquidarlo, porque Saúl solía estar siempre acompañado por colaboradores en su búsqueda de ser otra vez candidato a alcalde de Fresnillo, el empresario inculcado dispuso materializar la venganza en la Ciudad de México contra otros dos hermanos: Ricardo, diputado, y David, senador.

La conspiración duró casi cuatro meses hasta que, el 3 de abril, fue descubierta por una interceptación telefónica del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), supuestamente fortuita, y fueron capturados cuatro implicados, encabezados por Guardado Méndez, de inminente consignación por delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y homicidio en grado de tentativa.

Aunque la PGR afirmó que al menos dos de los implicados forman parte del cártel de Los Zetas, ellos lo niegan y se asumen como conocidos y trabajadores de Guardado Méndez: Vázquez Delgado, de 48 años, declaró haber sido chofer en la empresa, y Esqueda Hernández, de 38, cargador.

Junto con Guardado Méndez se detuvo, en un hotel de la Central de Abastos, a Jesús Guerrero Ruiz, también trabajador, quien negó conocer siquiera del plan. Con ellos estaban los dos hijos menores del empresario, que fueron puestos en libertad.

Según la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEITA/043/2013, la conspiración se descubrió el 3 de abril, cuando agentes del Cisen escucharon un plan para asesinar al diputado Monreal, al que en documentos los policías y los implicados le atribuyen erróneamente ser senador.

En el oficio PGR/PFM/DGIPAM/IT/9719/ 2013, de la Policía Federal Ministerial, fechado el 3 de abril, se documenta el inicio del operativo que frustró el atentado contra los hermanos Monreal Ávila.

Según el documento, aproximadamente a las 18 horas de ese día la corporación recibió una llamada del director general jurídico del Cisen, Víctor Emilio Carzo Cabañas, quien informó que en el hotel Prim “se encuentran hospedadas personas armadas quienes planean ejecutar al senador (sic) del PT Ricardo Monreal Ávila, el día jueves 4 de abril, motivo por el cual se hace de su superior conocimiento, ya que podría tratarse de conductas constitutivas de delitos”.

### **Primero Saúl**

En otro oficio se informa que se inició la investigación por “un posible atentado que se planea en contra del senador Ricardo Monreal Ávila” y desde entonces se identifica a los agresores: “Un grupo de presuntos sicarios pertenecientes a la organización criminal de Los Zetas, originarios del estado de Zacatecas”.

En ese informe, el PGR/PFM/DGIPAM/PD/9721/ 2013, elaborado por los agentes Israel Sánchez Uribe, Jonathan Pozos Naranjo y Juan Antonio Flores Hernández, se detalla la captura de Vázquez Delgado y Esqueda Hernández, quienes intentaron huir:

“(…) Al preguntarles el motivo de su reacción, nos mencionaron que corrieron porque se pusieron nerviosos, ya que portaban armas de fuego y que las armas que portaban las iban a utilizar para ejecutar a un senador del PT de nombre Ricardo Monreal Ávila, que la persona que los había contratado para la ejecución de dicho senador se llama Arturo Guardado Méndez, quien se encontraba hospedado en el hotel Plaza Abastos, ubicado en la zona de la Central de Abastos de esta ciudad.”

Añade el informe: “Asimismo manifestaron pertenecer al grupo criminal denominado Los Zetas, que su área de operación con este grupo es el estado de Zacatecas y que llegaron al DF únicamente con la finalidad de ejecutar al senador Monreal el jueves 4/abril/1203, porque así lo plantearon junto con Arturo Guardado Méndez”.

La declaración de Vázquez Delgado, alias El Chato o Luis, quien afirma conocer a Guardado Méndez “desde que éramos niños”, es prolija en los detalles de la conspiración.

Declaró, a las 13 horas del 4 de abril, que todo comenzó el sábado 9 de diciembre de 2012, cuando recibió una llamada a su celular de Guardado Méndez para preguntarle si le interesaba un trabajo y quedaron de verse al día siguiente en Fresnillo.

“Nos saludamos y luego me dijo que si le entraba a un bisne, por lo que dije que dependía de qué bisne se tratara y me contestó que se trataba de matar a uno de los Monreal, es decir al senador Ricardo Monreal o a su hermano David en el DF. Entonces les dije que para ese jale se necesitaba dinero y armas, contestándome que él tenía el dinero y las armas para ese trabajo y que quería matarlos por venganza, ya que habían desaparecido a su hermano Juan Carlos. Me convenció y como yo no tenía trabajo en ese entonces le dije que estaba bien, pero que necesitaba para mis gastos de comida.”

Guardado Méndez le entregó a Vázquez Delgado 3 mil 500 pesos y una pistola Colt “del caballito” calibre .45 con dos cargadores de seis cartuchos cada uno: “Me dijo que le echara ganas, que me encargaba el trabajo para que todo saliera bien, porque le iba a ayudar a Juan Carlos Esqueda Hernández, contratado para la misma operación”.

Poco después éste se reunió con ellos y los tres se pusieron de acuerdo para asesinar, primero, a Saúl Monreal Ávila, quien como alcalde de Fresnillo tuvo como secretario del ayuntamiento y alcalde sustituto a Juan Carlos Guardado, desaparecido desde 2011.

El lunes 11 ambos comenzaron la vigilancia para “primero saber sus movimientos y entonces determinar el lugar más adecuado para matar a Saúl Monreal”, sólo que éste siempre se encontraba acompañado por miembros de su equipo.

“Así estuvimos hasta el 30 de marzo, pero nunca encontramos la oportunidad de matar a Saúl Monreal Ávila, pues en enero de este año empezó su precampaña para contender por la presidencia municipal de Fresnillo, Zacatecas, y entonces traía más gente a su lado y fue imposible cumplir la encomienda de Arturo Guardado Méndez que, como no pudimos hacer nada contra Saúl Monreal, entonces Arturo Guardado nos dijo que teníamos que trasladarnos a la Ciudad de México para adecuar los movimientos de Ricardo y David Monreal Ávila.”

El 1 de abril, los dos pistoleros llegaron a la Ciudad de México y se hospedaron en el hotel Prim, ubicado a unas cuadras de las oficinas de Ricardo Monreal, que comenzaron a vigilar. Fueron también “hasta los interiores del Senado, donde permanecemos para tratar de localizar a Ricardo o a David Monreal, pero no los pudimos localizar”.

**No soy zeta**

Antes de trasladarse a la Ciudad de México, Vázquez Delgado y Esqueda Hernández le devolvieron las armas de fuego a Guardado Méndez, quien se las volvió a entregar en la Central de Abastos, donde también les facilitó una camioneta de su propiedad.

Al ser detenidos, la camioneta Ford Ranger, con placas de circulación MMG9600 del Estado de México, estaba en el estacionamiento del hotel donde ambos se hospedaban. La tarjeta de circulación está a nombre de Arturo Guardado Méndez, otra prueba en su contra.

La declaración ministerial de Esqueda Hernández ratifica que la autoría intelectual del complot para asesinar a los hermanos Saúl, David y Ricardo Monreal Ávila es del empresario Guardado Méndez, quien a él le entregó una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros.

Esqueda Hernández, quien dice conocer al empresario desde hace 15 años, porque trabaja para él como cargador de sacos de chile seco, ratificó que el plan era asesinar a los tres hermanos Monreal, primero en Zacatecas:

“Quería el doctor Arturo Guardado Méndez que a cualquiera de los tres los matáramos, ya sea Ricardo Monreal, Saúl Monreal o David Monreal, pero no logramos los objetivos porque no es nuestro trabajo ese.”

En la Ciudad de México, dijo, “no logramos el objetivo con nadie ni apuntamos a nadie” y si bien “anduvimos planeando el trabajo de matar a Monreal, en realidad no quedamos en nada, aquí en México nunca lo vimos, yo no lo conozco bien”.

Otro implicado por la PGR en el plan para atacar contra los Monreal es Jesús Guerrero Ruiz, quien fue detenido en la misma habitación del hotel donde se hospedaban Guardado Méndez y sus dos hijos menores de edad, en la Ciudad de México.

Empleado de Guardado Méndez, Guerrero Ruiz negó también conocer el plan y, como Vázquez Delgado y Esqueda Hernández, rechazó formar parte de la organización criminal de Los Zetas.

Al inicio de su declaración ministerial, Esqueda Hernández aclara: “No estoy de acuerdo parcialmente con la puesta a disposición, porque no pertenezco a ningún cártel y la pistola sí la traía yo, pero en la maleta y esa arma me la dio el doctor Arturo Guardado en México”.

El defensor de oficio le preguntó si le dijo a los policías federales que pertenece a la organización criminal de Los Zetas y él respondió que no. Lo mismo pasó con Vázquez Delgado:

“–Que diga el declarante si le comentó a los policías federales que pertenece a la organización criminal de Los Zetas.

“–No, yo no les dije eso.”

Guardado: “Soy inocente”

En su declaración ministerial, rendida a las 15 horas del 4 de abril, luego de la confesión de los otros tres implicados, Arturo Guardado Méndez rechazó ser el autor intelectual del plan para asesinar a los hermanos Monreal Ávila.

“Es totalmente falso lo que se me está imputando, soy una persona con profesión, soy médico general y comerciante. Desde mi niñez me he dedicado al trabajo, soy empresario, no soy de ningún grupo delictivo y cuando me detuvieron estaba dormido; mi trabajador de nombre Jesús Guerrero estaba dormido en otra cama y estaba con mis hijos menores de edad dormidos.”

Guardado Méndez explicó que, antes de ser detenido, lo llamaron a su habitación para que bajara “porque se estaba incendiando la camioneta, abrimos la puerta y fue cuando nos agarraron y no sabemos más porque fue rapidísimo. Nosotros no cargamos ninguna arma de fuego, mis hijos vinieron conmigo a trabajar toda la semana, porque están de vacaciones”.

Según el empresario, conoce a los hermanos Ricardo, David, Cándido y José Monreal y a casi toda la familia, con la que tiene “una muy buena relación”.

“Pienso que todo esto se inició el 2 de febrero de 2011, eso es lo que creo, porque ese día me desaparecieron a mi hermano Juan Carlos Guardado Méndez y a un muy buen trabajador, Francisco Javier Vázquez Delgado.”

El empresario adujo que no tiene razón para atentar contra los Monreal:

“Desde esos inicios nosotros llevamos una buena relación con la familia Monreal, de años, y lo que nosotros hacemos es pedirle ayuda al doctor Ricardo Monreal Ávila y a David Monreal Ávila, con quien yo trabajé varias veces y mi familia los recibió excelente y siempre ayudándonos a la búsqueda de mi hermano.”

Pero la versión de Guardado Méndez choca con las declaraciones rendidas por los dos pistoleros contratados por él para matar a los Monreal Ávila, quienes aseguran que quería vengarse por haber sido ellos los responsables de la desaparición de su hermano...

S/A. “Juicio en Austin: cuando los zetas hablan, salpican...”. *Proceso* número 1906, 12 mayo 2013. pp. 25-27. <https://www.proceso.com.mx/341683/juicio-en-austin-cuando-los-zetas-hablan-salpican>

### **“Juicio en Austin: cuando los zetas hablan, salpican...”**

Tras semanas de diligencias y testimonios recabados entre antiguos sicarios de Los Zetas, una corte de Austin, Texas, concluyó que José Treviño Morales –hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, líder de la organización delictiva– y otros coacusados, entre ellos el empresario veracruzano Francisco Colorado, resultaron culpables del delito de lavado de dinero y de arreglar carreras de caballos. El nombre de un político mexicano salió a la luz en este juicio, el del priista Fidel Herrera Beltrán, en quien, según los enjuiciados, “invertieron” 12 millones de dólares para que alcanzara la gubernatura de Veracruz y dejara operar a Los Zetas en esa entidad.

AUSTIN, TEXAS. - Los caballos cuarto de milla de los “establos zetas” triunfaron en los principales derbis de Estados Unidos: Mr. Piloto se coronó en el All America Futurity, el más relevante de todos, mientras Tempting Dash lo hizo en el Texas Classic Futurity. En total, ambos ganaron de manera “legal” alrededor de 2.5 millones de dólares.

No obstante, sus propietarios repartieron alrededor de 10 mil dólares para obtener ventajas para esos y otros de sus potros de nombres singulares: Sicario, Cártel Número Uno y Coronita Cártel. Los detalles de esos arreglos salieron a relucir en el juicio que se les sigue a José Treviño Morales –hermano de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, alias Z40 y Z42, respectivamente– y al empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa por presunto lavado de dinero.

En este proceso, que conduce el juez Sam Sparks en la Corte del Distrito Oeste de este estado, también están acusados los entrenadores de caballos Fernando Solís García y Eusebio Huitrón, así como el hermano de este último, el constructor Jesús Huitrón.

También salieron a la luz pormenores acerca de los actos criminales cometidos por Los Zetas, contados por importantes capos y exmiembros de la organización que ahora colaboran con las autoridades antidrogas de Estados Unidos, entre ellos José Carlos Hinojosa, excontador del Cártel del Golfo (CDG); Mario Alfonso Cuéllar, alias Poncho Cuéllar, antiguo encargado de la plaza de Piedras Negras, y su subalterno Héctor Moreno.

El “testigo estrella” fue Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias El Mamito, Z7, Caballero o El Señor de los Anteojos, quien rindió su testimonio vestido con sudadera y pants grises, así como sandalias tipo crocs color naranja. Hasta el momento de su detención, él era el tercero en mando en la jerarquía de la organización después de la ruptura con el CDG.

Según Rejón Aguilar, de 37 años, se unió a Los Zetas en 1999, cuando el Cártel del Golfo reclutó a exmilitares y a expolicías federales para trabajar como escoltas de los líderes de esa organización que nació en Matamoros, Tamaulipas.

Rejón llegó a Reynosa con un grupo de 14 militares del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), quienes fueron incluidos en la Policía Judicial Federal como parte de los acuerdos de la “Operación Intercepción” instrumentada por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Junto con otros soldados –entre ellos Arturo Guzmán Decena, alias Z1, y Heriberto Lazcano, alias Z14–, Rejón llegó a Tamaulipas bajo el mando del general brigadier Ricardo Martínez Perea, quien fue detenido en 2001 acusado de brindar protección a los capos Gilberto García Mena, El June, y a Osiel Cárdenas Guillén.

“En los Gafes fui entrenado como francotirador, como paramédico, en guerrilla y contraguerrilla y para sobrevivir en todo tipo de terreno”, recordó el testigo. Dijo que en 1999 renunció al Ejército y comenzó a trabajar con el CDG, donde “hacía de todo”; luego pasó a ser parte de la escolta de Osiel.

Los Zetas se constituyeron en el ejército del Cártel del Golfo cuando sus rivales de la Federación de Sinaloa intentaron tomar la estratégica plaza de Nuevo Laredo y enviaron a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, al frente de unos 500 pistoleros. La narcoguerra comenzó en 2003 y se recrudeció al año siguiente.

“Participé en más de 10 batallas contra el Cártel de Sinaloa”, contó el testigo al fiscal Douglas Gardner; admitió también estar implicado en el secuestro, tortura y asesinato de unas 30 personas.

Como recompensa por evitar que el Cártel de Sinaloa tomara “la plaza”, relató, Osiel permitió a Los Zetas quedarse con Nuevo Laredo. Inmediatamente después se convirtieron en la punta de lanza para

disputar importantes ciudades del noreste como Monterrey, Saltillo, Torreón y Piedras Negras, a la que consideraban su zona estratégica.

A su vez, el testigo José Carlos Hinojosa, excontador del CDG, contó al jurado que para consolidarse en Veracruz la organización invirtió 12 millones de dólares en la campaña del priista Fidel Herrera Beltrán a la gubernatura. En 2007, tras controlar esa plaza, el cártel y su brazo armado comenzaron a organizar carreras de caballos en el Rancho Villarín, donde solían cruzar millonarias apuestas en dólares.

Una de esas competencias –en las cuales participaba el empresario Francisco Colorado, quien ya era socio de Los Zetas– terminó en balacera, cuando arribó al lugar un grupo de pistoleros que intentó ejecutar a Heriberto Lazcano; no lo lograron. Quien cayó fue Efraín Teodoro Torres, Comandante Z14.

A Colorado le cambió el semblante durante el juicio cuando Rejón dijo a los fiscales: “Lazcano invirtió parte de sus ganancias en la empresa Petroservicios de Colorado”. Según el declarante, la relación entre el empresario y Los Zetas comenzó a finales de 2006. Colorado tenía una compañía para comprar caballos en su rancho ubicado en la carretera Tuxpan-Poza Rica, el cual contaba con amplios establos para cuarto de milla.

Rejón expuso al fiscal Gardner que en febrero de 2010 su grupo –Los Zetas– rompió con el CDG por “inconformidades” y comenzaron las grandes batallas que se prolongaron durante dos años. A partir de la fractura, dijo, él se encargó de supervisar todas las plazas de Los Zetas a nivel nacional, por lo que ascendió al tercer nivel en la jerarquía de la organización.

Su organización criminal logró vender en México y Estados Unidos alrededor de 40 toneladas de cocaína por año, lo que le redituaba ingresos por 350 millones de dólares. “Parte de ese dinero se usaba para los gastos de la guerra”, especificó Rejón.

El testigo Poncho Cuéllar, responsable del trasiego de la droga por Piedras Negras, señaló que en 2011 Los Zetas cruzaban entre 500 y 800 kilos de cocaína por mes a través de esa frontera, lo que les generaba ingresos cercanos a los 16 millones de dólares.

Ese dinero, expuso, se enviaba a México en bolsas de plástico escondidas en los tanques de gasolina de los vehículos que conducían los sicarios. En una ocasión, dijo, agentes de Estados Unidos les decomisaron 800 mil dólares. Según él, parte de esos fondos era para pagar la red de protección en Coahuila, la cual incluía oficiales del Ejército, policías federales, delegados de la PGR y allegados al gobernador Humberto Moreira, entre ellos Humberto Torres Charles, hermano del procurador estatal Jesús Torres Charles (Proceso 1843).

Héctor Moreno, de 35 años, declaró que en 2011 los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales lo acusaron a él y a Poncho Cuéllar de estar pasando información a la Drug Enforcement Administration (DEA), por lo que ambos tuvieron que huir. Se llevaron cerca de 5 millones de dólares, lo que provocó la ira de los hermanos Treviño; incluso les advirtieron que si no regresaban el dinero matarían a sus familiares y amigos. Y cumplieron su amenaza (Proceso 1886).

Decenas de sicarios zetas llegaron a varios poblados de los municipios de Allende y Nava, en Coahuila, buscando a los familiares, amigos y conocidos de Moreno y Cuéllar. Usaron maquinaria pesada para

derrumbar alrededor de 80 casas y se llevaron al menos a 50 familias. Aprovecharon el despliegue para violar, extorsionar, asesinar y robar propiedades a empresarios y ganaderos locales.

“Empezaron a matar a las familias de Allende y Piedras Negras y Múzquiz y Sabinas... Debido a esto, murieron 200 o 300 personas en Allende, Coahuila”, declaró Moreno ante el fiscal Gardner.

Rejón informó que durante los dos años que estuvo como mando de Los Zetas logró acumular 50 millones de dólares y los distribuyó en negocios, “mercancía” (droga) y caballos de carreras. En uno de sus ranchos ubicado en Miguel Alemán juntó alrededor de 250 caballos. “Le compré algunos a Pancho Colorado”, expuso.

Mencionó también que contagió su pasión por los caballos a Miguel Ángel Treviño Morales, quien comenzó a comprar cuarto de milla en Estados Unidos a través de un contacto: Ramiro Villarreal, El Gordo, quien le consiguió el potro ganador Tempting Dash. Villarreal se convirtió en el “agente” de los capos zetas para comprar los ejemplares en las subastas de Estados Unidos.

Las pruebas de la fiscalía evidenciaron que Villarreal compraba los potros cuarto de milla con dinero de Petroservicios, para que la operación pareciera legal; posteriormente los líderes zetas le entregaban los dólares en efectivo al empresario Colorado.

Así, los caballos pasaban a ser manejados por la empresa Tremor, de José Treviño Morales, quien administraba un rancho en Oklahoma, donde estaban resguardados más de 300 equinos, junto con los hermanos de éste, Miguel Ángel y Omar, así como los suyos, declaró Rejón. También expuso que José Treviño gastó durante tres años un promedio de un millón de dólares por mes para comprar potros cuartos de milla.

Como pruebas de las operaciones ilegales, los fiscales presentaron al jurado decenas de grabaciones telefónicas entre El Gordo y los capos zetas, además de conversaciones entre José Treviño y los directivos de las empresas con las que hacía negocios.

Los criminales ignoraban que El Gordo fue detenido en 2010 por agentes de la DEA; también desconocían que la agencia le dio la opción de convertirse en su informante. A su vez, el FBI visitó las compañías de la industria relacionada con caballos para obtener información sobre sus tratos con José Treviño y grabaron las conversaciones.

En junio de 2012 The New York Times reportó que la DEA pretendía que El Gordo convenciera a Miguel Ángel Treviño para que viajara a Estados Unidos a fin de capturarlo. Lo único que logró fue informarles que Miguel Ángel Treviño estaría en una carrera clandestina en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las autoridades estadounidenses alertaron a sus homólogos mexicanos, quienes sólo se dedicaron a tomarle fotografías al capo. Argumentaron que no lo detuvieron porque se podría desatar una balacera que afectaría “al público”.

Rejón contó a los fiscales que meses después Miguel Ángel Treviño ordenó asesinar a Villarreal porque, dijo, “le conocía todos sus negocios”, Simuló un accidente automovilístico en Nuevo Laredo en el que El Gordo murió calcinado.

En una de las pruebas del FBI, Miguel Ángel Treviño se jactó de haber pagado alrededor de 10 mil dólares para contener a los caballos que compitieron contra su cuarto de milla Mr. Piloto, según reportó el rotativo neoyorquino.

El testigo Rejón especificó que la organización pagaba sobornos para que la tierra de las pistas de carreras estuviera más compacta y los potros tuvieran más agarre; además, sus jinetes usaban “chicharras” eléctricas para espolearlos y forzaban a los jockeys para que chocaran con los caballos de sus rivales y “restarles aliento”.

Al final del interrogatorio, el fiscal Gardner preguntó a Rejón si Miguel Ángel Treviño lo había entregado a las autoridades mexicanas después de la muerte del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos Jaime Zapata en febrero de 2011. “Sí, creo que él me puso”, respondió el testigo.

Las audiencias terminaron el jueves 9. Con los testimonios y las pruebas recabadas, el jurado encontró culpables del delito de lavado de dinero a José Treviño, Francisco Colorado, Fernando Solís García y Eusebio Huitrón, mientras que Jesús Huitrón fue absuelto.

La sentencia será dictada en próxima fecha. Las penas por ese delito en las leyes estadounidenses van de los dos a los 20 años de prisión.

Rafael Croda. ““El Chapo” y los Zetas pierden proveedores”. *Proceso* número 1911, 16 junio 2013. P 44. <https://www.proceso.com.mx/344920/el-chapo-y-los-zetas-pierden-proveedores>

### **““El Chapo” y los Zetas pierden proveedores”**

BOGOTÁ.- Durante los últimos meses la estrategia antidrogas en este país ha golpeado de manera muy significativa a la red de proveedores de cocaína del cártel mexicano de Los Zetas, que perdió a tres abastecedores clave: Ericson Vargas Cardona, alias Sebastián; Daniel El Loco Barrera, y Henry de Jesús López Londoño, Mi Sangre, indica un informe de la Policía Nacional de Colombia (PNC).

De acuerdo con el reporte, al que accedió Proceso, Mi Sangre, capturado en Argentina el 30 de octubre pasado, “se constituyó en el principal proveedor de estupefacientes del cártel de Los Zetas a través del Golfo de Urabá”, localizado en la región caribeña-colombiana, en la frontera con Panamá.

En el momento de ser capturado, en el exclusivo restaurante Fettuccine Mario de la población bonaerense de Pilar, el narcotraficante colombiano y cabecilla de la banda criminal Los Urabeños “preparaba una reunión con integrantes del cártel de Los Zetas”, con quienes según la PNC mantenía una estrecha relación de negocios que lo llevó a viajar a México en diversas ocasiones con un pasaporte falso que lo ostentaba como ciudadano de ese país.

Los golpes de la policía colombiana también han diezmando, aunque en menor medida, a la red de abastecimiento de drogas de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del Cártel de Sinaloa y archienemigo de Los Zetas, con quienes libra una feroz guerra que ha dejado centenares de bajas en ambos bandos en varias regiones de México.

En enero pasado, un “enlace” del Chapo en Colombia, Pedro Luis Zamora Caicedo, fue capturado en Bogotá. Su extradición a Estados Unidos fue autorizada hace unos días por la Corte Suprema de Justicia en una resolución que establece que el delincuente “admitió trabajar para Joaquín Guzmán Loera, líder del cártel mexicano de Sinaloa, y repartía cargamentos de cocaína a dicho cártel”. Sólo falta la firma del presidente colombiano Juan Manuel Santos para que el operador del Chapo sea extraditado y sometido a juicio en una corte federal en Nueva York.

Antes de la captura de Mi Sangre, Los Zetas habían perdido a otro de sus proveedores colombianos de cocaína: Sebastián, jefe de la Oficina de Envigado, heredera de la estructura criminal del desaparecido Cártel de Medellín. El capo, detenido el 8 de agosto pasado en su natal departamento de Antioquia, “fue determinante en el despliegue internacional para el tráfico de estupefacientes a organizaciones criminales internacionales como Los Zetas en México”, indica el reporte.

El 18 de septiembre anterior, unas semanas después de la captura de Sebastián, fue detenido en Venezuela El Loco Barrera, considerado el último gran capo colombiano de la droga y quien durante años fue el principal enlace en este país de los cárteles mexicanos.

De acuerdo con la PNC, Barrera –cuya extradición a Estados Unidos ya fue autorizada por el presidente Santos–, fue socio del Chapo, pero tuvieron disputas por el liderazgo regional del narcotráfico y acabó aliado a Los Zetas, a quienes suministraba cargamentos de cocaína.

En noviembre de 2011 había caído, también en Venezuela, otro socio importante de Los Zetas, Maximiliano Bonilla, Valenciano, antiguo jefe de la Oficina de Envigado.

El principal golpe que ha sufrido una organización criminal asociada al Chapo Guzmán en Colombia se produjo el año pasado, cuando la PNC cerró el cerco al clan Cifuentes Villa, una familia de narcotraficantes de Medellín.

En agosto de 2012, Dolly Cifuentes Villa fue extraditada a Estados Unidos, y tres meses después su hermano Jorge Milton fue capturado en Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos los consideraba parte de la estructura del Cártel de Sinaloa en Colombia.

## **Reacomodos**

De acuerdo con el informe de la PNC, la salida de capos representativos del escenario criminal en Colombia que se ha registrado en los últimos meses “generó un impacto en la articulación del tráfico internacional de drogas y un periodo de reacomodamiento de las alianzas que modificó las tipologías de tráfico y de negociación”.

“La pérdida de contactos directos –agrega el documento– obligó a los narcotraficantes mexicanos a ubicar países satélite, como Ecuador, Bolivia y Venezuela, para enlazar rutas y coordinar negocios de tráfico.”

El director general de la PNC, general José Roberto León Riaño, dice a Proceso que Colombia siempre ha pugnado por un trabajo articulado a nivel regional e internacional en contra del narcotráfico porque es la única manera de evitar “el desplazamiento y el efecto globo del delito”.

Los cultivos de coca destruidos en Colombia en la última década fueron repuestos en gran parte en Bolivia y Perú, mientras que los laboratorios de procesamiento de esa droga en el país fueron desplazados a zonas limítrofes con Venezuela y Ecuador.

León Riaño sostiene que sin una lucha regional antidrogas “más articulada y en red” es imposible evitar el efecto globo. “Los narcotraficantes siempre buscan alternativas –plantea–. Lo que nos preocupa ahorita, por ejemplo, es el tráfico hacia el sur del continente para llevar la droga a países africanos y llegar por esa vía a Europa. Inclusive están bajando la cocaína al sur del continente y la vuelven a subir por el Caribe para llevarla a Estados Unidos. Ellos viven explorando nuevas posibilidades para eludir los controles”.

Al explicar la estrategia colombiana contra el narcotráfico, León Riaño menciona al servicio de inteligencia como “el principal factor de desequilibrio en la lucha contra el narcotráfico. Ha sido fundamental en el desmantelamiento de los cárteles de la droga y en la captura de los cabecillas del narcotráfico”.

–¿Y no le parece, general, que después de tantas muertes y del alto costo que ha tenido la guerra contra el narcotráfico, incluso a la luz de los éxitos de Colombia, ha llegado la hora de pensar en estrategias alternativas, como la despenalización?

–Nosotros estamos de acuerdo con lo que ha dicho nuestro presidente (Santos), que hay que buscar alternativas para que la lucha contra el narcotráfico tenga mayor contundencia y efectividad. Nos parece que el reciente estudio de la OEA (presentado el pasado 17 de mayo en esta capital y el cual pide a los gobiernos flexibilidad para evaluar opciones, como la despenalización de la marihuana) es un buen insumo para discutir el tema a nivel de cada país y a nivel internacional.

Anabel Hernández. “Cae Treviño y lo releva... Treviño”. *Proceso* número 1916, 21 julio 2013. pp. 6-7. <https://www.proceso.com.mx/347918/cae-trevino-y-lo-releva-trevino>

### “Cae Treviño y lo releva... Treviño”

El lunes 15, en una operación tan increíble como contradictoria el gobierno mexicano capturó a Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, líder del grupo delictivo Los Zetas. Menos de un año antes había sustituido en esa posición a Heriberto Lazcano, El Lazca, presuntamente muerto en un confuso operativo. En su edición 1878, del 18 de octubre de 2012 (Una familia de zetas), *Proceso* exponía ya que Miguel Ángel pertenece a una dinastía –fueron 13 hermanos oriundos de Nuevo Laredo, Tamaulipas– que forma parte de la estructura del cártel en cuyo origen estuvieron desertores de grupos de élite del Ejército. Su hermano José enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos y otro hermano, Óscar Omar, El Z-42, es visto de manera natural como el próximo jefe de la organización que abarca con sus actividades una parte cada vez más amplia de la geografía nacional.

Anabel Hernández. “Hermanos de sangre”. *Proceso* número 1916, 21 julio 2013. pp. 8-12. <https://www.proceso.com.mx/347919/hermanos-de-sangre-2>

### “Hermanos de sangre”

La aprehensión de Miguel Ángel Treviño Morales, cabeza de Los Zetas, le sirvió al gobierno mexicano para festejar por adelantado un supuesto fin de la violencia criminal extrema. Pero en realidad –como ocurrió con la presunta muerte del anterior líder del grupo criminal, Heriberto Lazcano– nada indica que la situación vaya a cambiar. La mafia nacida al amparo del Cártel del Golfo está bien estructurada y en estos momentos es posible que Omar Treviño, El Z-42, hermano del capo detenido, ya tenga en las manos las riendas de ese grupo delictivo, cuya influencia saltó de Tamaulipas para abarcar buena parte del Continente Americano.

–Escucha, carnal... ¿supiste lo de la casa que allanaron en el kilómetro 14, por ahí donde Poncho y el otro fueron, carnal, donde fueron cocinados? Está volviéndose un desmadre lo de esos tipos, man –dice vía telefónica Gabriel Cardona Ramírez.

Este operador local de Los Zetas, conocido como El Pelón, habla el 10 de abril de 2006 desde una casa de seguridad en el número 9006 de Orange Blossom Loop, en el suburbio de Highland Park, Laredo.

Pocos días antes, el 31 de marzo de 2006, El Pelón, El Z-40 y Jesús González planearon en territorio estadounidense el secuestro y asesinato de Jorge Alfonso Avilés Villarreal (El Poncho al que se refería), de 19 años, y de su primo Inés Villarreal, de 14, por creer que trabajaban para sus rivales del Cártel de Sinaloa.

Familiares de ambos jóvenes –quienes eran residentes de Estados Unidos– hicieron la denuncia correspondiente pocas horas después de saber que un comando se los había llevado a punta de pistola del bar Eclipse en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que el Buró Federal de Investigación (FBI) comenzó su búsqueda.

–El FBI se está involucrando y todo... pero eso no es problema, man. No es problema, fue hecho al otro lado. Pero ellos sólo nos miran qué estamos haciendo –sigue Cardona en su conversación telefónica, como quien cuenta una proeza, cuando el gobierno estadounidense ya tiene intervenida su línea y graba la plática.

–Ellos no saben en qué lugar estamos ahora, amigo, porque ya no nos están siguiendo, carnal. Porque en la camioneta, cuando nos estaban persiguiendo, ¡pum!, cruzamos en la camioneta al otro lado, carnal. Fue como ¡pum!, la camioneta cruzó otra vez y ellos detuvieron a Aurora... y cuando ya estábamos al otro lado ¡pum!, nos venimos en coches que nunca habían estado en Estados Unidos. No deberían actuar como idiotas. Pero, ¡yeah!, están buscando al Poncho y al otro tipo. Pronto van a salir en la lista de extraviados de Laredo.

Del otro lado de la línea, un joven escucha entusiasmado y suelta una sonora carcajada.

–¿Dónde los cocinaste, cabrón? –pregunta el interlocutor.

–¡Ahí mismo, en la casa! –responde Cardona con otra carcajada– Murieron por los golpes, amigo. ¡Sólo se murieron, sólo se murieron, mierda!

–\*\*\*\* madre, ¿no pudieron soportarlo, cabrón? –dice el joven con sorna.

–No, cabrón. No, man, ¡deberías haber estado ahí, carajo! Es sólo que, ¡\*\*\*\*\* madre!, un poco, si hubieras esperado un poco más para ir con Mike habrías visto al Poncho, amigo. ¡Estaba llorando y

llorando como un marica! “No man, yo soy tu amigo” –imita la voz de su víctima–. ¡Cuál amigo, hijo de puta, cierra la boca! Y ¡pum!, agarré una p\*\*\* botella y ¡slash!, le corté todo su vientre y ¡pum!, estaba sangrando; agarré una pequeña taza y ¡pum!, la pequeña taza ¡pum!, ¡pum!, la llené de sangre y ¡pum!, se lo dediqué a la Santísima Muerte –narra excitado–. Luego fui con el otro maricón y ¡slash!, lo corté y lo mismo –describe.

Cardona fue capturado. Firmó su confesión en agosto de 2008. Durante su juicio se reprodujo la citada grabación, copia de cuya transcripción tiene Proceso y de la cual se tomaron textualmente los párrafos anteriores. El criminal fue condenado a cadena perpetua.

A raíz de ese caso el gobierno estadounidense inició en 2008, en la Corte de Distrito Sur de Texas, el primer proceso criminal –el L-08-0244– contra Miguel Ángel Treviño Morales, su hermano Óscar Omar y sus secuaces, acusados de narcotráfico y homicidio.

El lunes 15 Miguel Ángel fue capturado por la Marina, según la versión oficial, en un paraje de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

### **El sucesor**

Un amplio informe elaborado en 2012 por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la Procuraduría General de la República (PGR), al que este semanario tuvo acceso, señala que luego de sufrir duros embates durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón, Los Zetas adquirieron la capacidad de adaptarse, sobrevivir y expandirse.

De acuerdo con ese documento, en la estructura de mando de Los Zetas hay dos figuras relevantes: la primera es Omar Treviño Morales, El Z-42, hermano de Miguel Ángel. La segunda es un hombre que no aparece en las notas periodísticas ni en los boletines de prensa: José Ángel Sobrevilla Gutiérrez, “colaborador y administrador del Z-40”, originario de Nuevo León.

Luego de la declaratoria oficial de la muerte de Heriberto Lazcano, El Lazca, en octubre de 2012, este semanario publicó una amplia biografía de los Treviño Morales (Proceso 1878, Una familia de zetas). Omar, quien usa los alias de Alejandro o Z-42, cumplió 37 años en junio pasado; pero su edad no lo hace inexperto en el mundo criminal. De acuerdo con el organigrama del Cenapi estaba a la par en rango que su hermano Miguel Ángel antes de la presunta muerte de Lazcano, lo cual le da ascendencia en Los Zetas y la posición de sucesor obvio.

Según los dos expedientes criminales abiertos en su contra en Estados Unidos en 2008 y 2012, El Z-42 es uno de los mandos de Los Zetas y le atribuyen las operaciones para introducir droga y dinero ilícito a Estados Unidos.

Además el gobierno estadounidense acusa a Omar de haber rentado en Laredo la casa desde la cual Cardona Ramírez planeó el secuestro y asesinato del Poncho e Inés.

### **Adaptación**

“Esta organización mantiene una estructura consolidada, con capacidades de adaptación y escalamiento a nivel internacional, ya que a pesar de los embates en contra de su estructura original y las acciones por parte de la Federación (Cártel de Sinaloa y aliados), Los Zetas no han demostrado disminuciones en su

capacidad operativa, derivada del grado de alineación que los ha consolidado”, indica el informe del Cenapi.

“Entre las actividades coercitivas realizadas por Los Zetas destacan los ilícitos de extorsión, homicidio, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, así como cobro por derecho de piso, adquisición de drogas ilícitas de sus adversarios y compra de clorhidrato de cocaína en Colombia. Asimismo, derivado de su modus operandi, Los Zetas recurren a la violencia extrema para el desarrollo del mismo.”

El informe distingue cuatro etapas en el desarrollo de la organización criminal.

La primera va de 1999 a 2003, cuando fungía sólo como grupo de sicarios del Cártel del Golfo. La segunda, de 2003 a 2009, cuando ascendieron en la estructura criminal y empezaron a participar como socios en la compra de drogas ilícitas y colaborando con aquella organización para retener o ampliar mercados.

La tercera se inició en 2009, con la extradición de Osiel Cárdenas Guillén, jefe del Cártel del Golfo, a Estados Unidos. Y a principios de 2010 Los Zetas se escinden de la organización entonces llamada Cártel del Golfo-Zetas, se independizan y se alían con el Nuevo Cártel de Juárez y con la mafia de los hermanos Beltrán Leyva.

El Cenapi señala que en la búsqueda de engrosar sus filas para mantener el control territorial, Los Zetas han aplicado diversas formas de reclutamiento que les permiten tener una gran cantidad de miembros.

“Se ha logrado establecer que reclutan a jóvenes en edad de cursar la educación media y superior, entre 15 y 30 años, para encubrir y proteger el desarrollo de actividades delictivas, especialmente en lo que se refiere al transporte de cargamentos de droga, así como para informar sobre acciones que realizan las Fuerzas Armadas en su contra –halcones–. Los nuevos elementos en reclutamiento obtienen de manera inmediata un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército; además, se les provee de un aparato de comunicación tipo Nextel y el pago en efectivo de más de 100 dólares durante su instrucción”, se señala.

El documento revela un dato inédito. El reclutamiento de adolescentes y jóvenes ha quedado evidenciado “al valorar las características físicas de las víctimas de los enfrentamientos entre grupos delictivos antagónicos, así como con elementos del Ejército, cuyas edades oscilan entre 16 y 25 años, jóvenes cooptados desempleados que pueden reclutarse en cualquier colonia marginada de ciudades como Matamoros o Nuevo Laredo”.

Pero también en la búsqueda de gente “preparada” y con “conocimientos de campo”, Los Zetas optaron por la liberación de reos. El sexenio pasado abundaron las fugas masivas de varias cárceles.

### **Todo México**

Los Zetas tienen presencia en 28 estados y el Distrito Federal. Sólo la península de Baja California y Tlaxcala están libres de su presencia, según datos del informe referido.

Controlan Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Y concentran sus operaciones en las entidades localizadas en la costa del Golfo de México y en el sureste. “Esta región representa para Los Zetas la existencia de una

diversidad de rutas de tráfico, óptimas para seguir ampliando su presencia y/o consolidar sus actividades en otros países, sumado a la tercera fuente de ingresos ilegal a la que más organizaciones delictivas recurren, que es la trata y tráfico de personas”, se señala en el documento del Cenapi.

Se afirma que Los Zetas tienen alianzas “de conveniencia” con el Nuevo Cártel de Juárez en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora. Y con la organización de los Beltrán Leyva en Sinaloa, Sonora y Nayarit. Gracias a éstos, Los Zetas pudieron acceder al mercado internacional del tráfico de drogas, en especial de cocaína.

Aprovecharon los contactos de los Beltrán Leyva en Colombia. Ellos “proveían cargamentos que Los Zetas se encargaban de transportar a Estados Unidos a través de rutas establecidas en estados de la República Mexicana, por lo regular colindantes con el Golfo de México”.

El documento señala que esas rutas estratégicas fueron organizadas y diseñadas por Nabor Vargas García, El Débora, quien hasta 1999 pertenecía al Cuerpo de Guardias Presidenciales. “Gracias al Débora las carreteras que van desde Cancún hasta Matamoros fueron controladas por Los Zetas”, indica.

El Débora fue detenido en Campeche en 2007, pero eso no provocó que Los Zetas perdieran el control de la zona.

El informe señala que Los Zetas buscaron en especial el control de las costas del Golfo de México por un evidente interés estratégico, el de consolidar rutas para el traslado de mercancías ilegales hacia Estados Unidos, tratándose de “cubanos queriendo llegar a Miami o toneladas de cocaína colombiana con destino a Nueva York”.

### **La expansión**

“Para Los Zetas el 2011 representó la ostentación de una mayor presencia, particularmente en los estados fronterizos de Estados Unidos con México (Texas, Arizona y Nuevo México) y los países centroamericanos, en especial en Guatemala”, sostiene el documento del Cenapi.

Asegura que en los últimos años Los Zetas expandieron sus operaciones a Centroamérica, principalmente a Guatemala, “aunque también se cuenta con indicios respecto a su presencia en algunos países de Sudamérica”.

La detención de zetas o de integrantes de organizaciones criminales asociadas con ellos en otros países son otra muestra de su expansión. En julio de 2010 el viceministro de Defensa Social de Bolivia, Felipe Cáceres, afirmó que hay una conexión entre clanes familiares de narcotraficantes bolivianos y Los Zetas. Bolivia es el tercer país productor de hoja de coca y de cocaína, después de Colombia y Perú. En paralelo a la presencia zeta, “la violencia en Bolivia va en ascenso”, señala el Cenapi.

La actividad de Los Zetas en Colombia quedó expuesta con la detención de Jerson Enrique Camacho Cedeño, El Flaco, en 2010. “Camacho Cedeño mantenía negocios con Los Zetas y es considerado uno de los principales narcotraficantes de Los Comba, organización liderada por los hermanos Luis Enrique Calle Serna y Javier Antonio Calle Serna”, se indica en el documento.

Tras la captura, en 2011, de cuatro integrantes de Los Paisa –organización criminal de Barranquilla– se supo que en coordinación con Los Zetas controlaban las rutas de tráfico de drogas entre Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.

“También hay indicios de que Los Zetas tienen vínculos con la denominada Oficina de Envigado, donde se ubica a Maximiliano Bonilla Orozco (a) Valenciano, como el encargado de recibir cargamentos de cocaína –en especial del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y Bacrim–, para después distribuirla en México a través de Los Zetas”, señala el informe cuya copia tiene Proceso.

En noviembre de 2010 se difundió en El Salvador una lista de personas investigadas por sus posibles nexos con delincuentes mexicanos; entre ellos había dos oficiales de élite de la Fuerza Aérea Salvadoreña: Carlos Enrique Nieto Martínez y José Arturo Rodríguez Martínez, “que habrían sido contactados por Los Zetas para adiestrar a mexicanos y a pandilleros salvadoreños en tácticas militares”.

El ministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payes, señaló en marzo de 2011 que se tenía información sobre la “presencia de algunos líderes pandilleros salvadoreños en Guatemala recibiendo capacitación en el tráfico ilícito de drogas de parte de Los Zetas”.

“En la XXVIII Conferencia Internacional para el Control de las Drogas, realizada en Cancún, Quintana Roo, a principios de abril de 2011, un integrante de la delegación estadounidense declaró que los cárteles de Sinaloa y de Los Zetas (sic) son los dos grupos del narcotráfico que predominan en Centroamérica, una región que se mantiene como una importante ruta del trasiego de cocaína hacia Estados Unidos”, señala el documento del Cenapi.

Anabel Hernández. “Probable entrega “pactada””. *Proceso* número 1916, 21 julio 2013. pp. 10-11.  
<https://www.proceso.com.mx/347920/probable-entrega-pactada>

### **“Probable entrega “pactada””**

La detención de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, es la primera prueba de fuego del gobierno de Enrique Peña Nieto: Revelará si su intención es generar una “corrupción organizada” o limpiar a profundidad el Estado mexicano, señala Edgardo Buscaglia, doctor en derecho, especialista en temas de delincuencia organizada y presidente del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, A.C.

En entrevista con Proceso, Buscaglia reconoce que la captura es importante, pero no definitiva. La suspicacia acompaña sus palabras: “Un capo nunca se traslada con un autito, un contador y una persona manejando, esa gente se mueve con una infraestructura de protección mucho más sofisticada. Si la descripción que ha hecho el vocero del gobierno federal es compatible con la realidad, a mí me da la sensación de que se trata de una entrega pactada.

“Puede ser pactada en la medida que se ajuste a beneficios procesales y la autoridad obtiene información valiosa de esa persona. Mi preocupación es que el Estado mexicano no ha llegado a un pacto entre las fuerzas políticas como para que la información que se obtenga del Z-40 se traduzca en acusaciones penales contra políticos y empresarios de importancia.”

Para el especialista, El Z-40 es un eslabón más de una larga cadena de grupos criminales en México, no el líder principal: “Los Zetas son un grupo criminal que causa mucha violencia, mediáticamente muy cubierta, atroz, pero no es el grupo criminal más sofisticado y más institucionalizado de México, el cual es Sinaloa, que es el más poderoso en México y ha infiltrado la mayoría de las instituciones”.

Todo depende, dice, de lo que hagan con Treviño Morales: “Detenerlo es el primero de muchos pasos. Si la detención va a quedar en la usual extradición y en la ausencia de investigaciones patrimoniales en México, va a quedar como un pie de página. Si se traduce en investigaciones patrimoniales que lleven a políticos, a empresarios y a cientos de personas vinculadas a través de los años a Los Zetas, al Cártel del Golfo en el pasado, entonces esta captura puede generar un efecto multiplicador”.

–Durante los dos gobiernos anteriores hubo una lucha focalizada del Estado contra el Cártel del Golfo y Los Zetas. Detuvieron a muchos lugartenientes, pero eso no ha significado un debilitamiento de esas organizaciones; por el contrario, se han expandido. ¿A qué se debe esto? –se le plantea a Buscaglia.

–Los Zetas han aplicado una estrategia exitosa de diversificación de sus delitos económicos más allá de drogas, y también se diversificaron geográficamente, invadiendo territorios antes ocupados por franquicias de los cárteles del Golfo, de Sinaloa y de Tijuana.

“En la medida en que corrompen a los políticos, amenazan a las policías. Su infraestructura física, patrimonial, que les permite producir, distribuir y almacenar, nunca se tocó y siguió extendiéndose por más detenciones que hayan sufrido. Más aún, comenzaron a tejer alianzas con la Mara Salvatrucha, con grupos brasileños y argentinos, y se expandieron como una alianza multinacional, a través de esas alianzas tácticas.

“(…) Pueden detener a cientos de Treviños, pero si algunos gobiernos siguen subsidiando sus actividades, van a continuar en expansión, aunque detengan a Treviño tras Treviño.”

Buscaglia señala que Los Zetas sobreviven como cualquier transnacional: “Son una empresa. Como Microsoft ha sobrevivido a Bill Gates, lo mismo va a suceder –salvando las diferencias éticas– con Los Zetas”.

–Si esta detención no va acompañada de la voluntad de dismantelar la organización, ¿qué es?

–Me preocupa que la información que va a proporcionar El Z-40 sea utilizada por un presidente que, como ya demostró, sabe utilizar el sistema judicial como un arma discrecional de castigo político a sus adversarios. Temo que la información del Z-40 sea utilizada al estilo de Putin en Rusia, como un mecanismo de imposición de disciplina política a sus adversarios.

“De alguna manera, lo que el presidente Peña Nieto está demostrando que pretende hacer, sin instituciones que lo ayuden, es establecer un mecanismo de corrupción organizada a través de un mecanismo de disciplina política: ahí están los casos de Elba Esther Gordillo y Andrés Granier. Él está mandando mensajes de disciplina política. Quiere alinear al sistema político más allá de su partido para que él pueda gobernar, pero sin llegar hasta una limpieza profunda de la corrupción en México. Sólo quiere administrarla, organizarla. Esto puede cambiar si toma acciones institucionales, pero yo no veo que lo haga, no veo ninguna acción concreta contra la corrupción.”

–A principios de 2013 Peña Nieto dijo que en un año se evaluaría su estrategia contra el crimen organizado, pero los mexicanos no sabemos cuál es aquella ni qué nivel tiene la captura del Z-40 en esa estrategia que sólo él conoce –comenta a la reportera.

–Los reflejos de los presidentes mexicanos son autoritarios, porque de allí vienen. Peña Nieto no tiene instintos democráticos. México sigue siendo un país sujeto a una transición desde el autoritarismo que está lejos de concluir. Es un reflejo autoritario del poder: “Sólo yo conozco la estrategia, no tengo por qué someterla a juicio de la sociedad y no tengo que ponerla a juicio del Poder Legislativo. Yo la sé y yo les voy a dar los resultados que yo quiera”.

–¿Los mexicanos podemos creer que esta detención puede tener la sana intención de combatir la corrupción, si no terminan gobernadores en la cárcel? La mayor parte de los territorios de Los Zetas son gobernados por el PRI.

–Hay que prevenir que no se llegue a la pax mafiosa. Mientras no haya gobernadores, políticos y policías en la cárcel, va a ser un show más. La información valiosa de contactos políticos del Z-40 corre el riesgo de convertirse en un mecanismo de extorsión y no de justicia. Por otra parte, es una oportunidad histórica que ojalá no se pierda como muchas otras que México ha dejado pasar desde la alternancia de 2000.

Jorge Carrasco Araizaga. “Quieren tenerlo en Estados Unidos”. *Proceso* número 1916, 21 julio 2013. pp. 12-14. <https://www.proceso.com.mx/347921/quieren-tenerlo-en-estados-unidos>

### **“Quieren tenerlo en Estados Unidos”**

El interés del gobierno de Estados Unidos por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, data de 2001, cuando comenzó a seguirle la pista por sus actividades criminales como integrante del Cártel del Golfo. El Departamento de Justicia ya acopió varias causas penales en su contra por conspiración para introducir marihuana y cocaína a ese país. También lo acusa, junto con su hermano Óscar Omar, El Z-42 –su sucesor natural al frente de Los Zetas–, de tráfico de armas y lavado de dinero.

Estados Unidos busca quedarse con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien cuenta con cuatro órdenes de aprehensión en cortes federales de Texas y Washington. Si el gobierno de Enrique Peña Nieto lo extradita, al jefe de Los Zetas, de 40 años, le esperan varias décadas de cárcel, a juzgar por las numerosas acusaciones en su contra.

Según el Departamento de Justicia Treviño operó durante más de 10 años en territorio estadounidense como si estuviera en México: traficó droga, lavó dinero, mandó asesinar, reclutó jóvenes sicarios, secuestró, compró armas y estableció casas de seguridad para promover actividades ilegales, sobre todo en ciudades texanas.

México le atribuye los mismos delitos, aunque a mayor escala, como la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el gobierno estadounidense aún no pide su extradición, pero por el número de acusaciones no estaría lejos de solicitarla.

El Departamento de Justicia lo tenía en su lista de los más buscados y ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. Lo presenta como “un miembro de alto nivel de Los Zetas”, responsable de coleccionar “tarifas” de todas las plazas controladas por el Cártel del Golfo (CDG). “De 2006 a 2007 fue jefe de plaza en Nuevo Laredo para el CDG y luego fue enviado a Veracruz”.

Su hermano y eventual sucesor en el mando de Los Zetas, Óscar Omar Treviño Morales, El Z-42, está incluido en las mismas causas que se siguen en su contra en Estados Unidos: una en la Corte Federal del Sur de Texas, con sede en Laredo; dos en la de Columbia, en la capital de Estados Unidos, y otra más en la del Oeste de Texas, en Austin.

Las acusaciones dan cuenta de la evolución de Los Zetas, de brazo armado del CDG a una “poderosa organización del narcotráfico a nivel internacional”, en una década.

De los dos hermanos, Miguel Ángel tiene el mayor número de acusaciones. Tan sólo en Laredo le fincan 42 cargos. Es, además, la causa con el mayor número de implicados: 34, tanto mexicanos como estadounidenses que operaban como una célula de Los Zetas que se movilizaba entre México y Estados Unidos.

No son los únicos miembros del clan familiar perseguidos y detenidos por la justicia estadounidense. El primero fue el hermano mayor, Juan Francisco, de 58 años, quien a mediados de los noventa fue condenado a 15 años de cárcel por tráfico de marihuana (Proceso 1878). El año pasado fue detenido José, de 47 años, con cargos por lavado de dinero.

La justicia estadounidense les sigue la pista al Z-40 y al Z-42 desde 2001, cuando formaban parte del CDG y de la organización delictiva La Compañía, pero siempre como mandos de Los Zetas, el cártel fundado por desertores de Fuerzas Especiales del Ejército.

La acusación penal en Laredo –folio CR-00244– refiere la participación de Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño en esos tres grupos delictivos que a mediados de la década pasada concertaron para traficar cocaína y marihuana a Estados Unidos.

“Miguel Ángel Treviño Morales, 40, Mike o Cuarenta es el líder en el CDG de La Compañía y es supervisor de las células de La Compañía y su brazo armado, Los Zetas”, dice la acusación abierta en marzo de 2008, cuando el grupo de desertores militares aún era el brazo armado del Cártel del Golfo.

### **Versatilidad**

Entre los 34 acusados por Estados Unidos, además de los Treviño Morales, aparece Iván Velázquez Caballero, El Z-50 o El Talibán, quien después acusaría al Z-40 de traición y lo responsabilizaría de la entrega del jefe de Los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.

Según el Departamento de Justicia, los jefes de La Compañía rentaron casas y departamentos en Laredo, Texas, utilizados como bodegas para empaquetar droga y casas de seguridad “para secuestrar, torturar y asesinar a rivales de su organización”. Los acusados, añade, contrataron a sicarios en ambos lados de la frontera para moverlos entre un país y otro. “Después de cada trabajo les daban bonos, drogas y otros bienes de valor”.

A Miguel Ángel Treviño lo responsabiliza de reclutar a muchachos de Laredo, Texas, para secuestrar o asesinar personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Lo mismo hizo con jóvenes de Nuevo Laredo, asegura. Incluso, la acusación refiere que, en 2006, a los hombres reclutados en Texas les entregó en Nuevo Laredo una lista de “chapos” –integrantes del Cártel de Sinaloa– a quienes debían matar.

Además de traficar la droga en automóviles y camiones, los responsabiliza de tráfico de armas de fuego que transportaban entre México y Estados Unidos. La agencia antidrogas estadounidense (DEA) detectó sus compras de armamento en 2003 y 2005.

Junto con las armas llevaban dinero en efectivo a México. Las ganancias salían de Dallas, Texas, a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Aunque también menciona intentos fallidos, como el de febrero de 2008 para transportar 870 mil 535 dólares por la misma vía, así como la introducción de 166 kilos de cocaína a Dallas, el 11 de agosto de 2007.

En noviembre de ese año, el Departamento de Justicia acusó a Óscar Omar Treviño Morales, El Z-42, de operar entre México y Colombia para introducir cocaína y mariguana a Estados Unidos. La acusación se radicó con el número CR-00270-CKK1 en la Corte Federal del distrito de Columbia, en la capital estadounidense, e incluye a Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito o Z-7, y otras cuatro personas.

Otra acusación mucho más amplia es la CR-00057 –radicada en la misma Corte de Washington– relacionada con las actividades de La Compañía. Incluye a los dos hermanos Treviño y a otras 24 personas, aunque tres de ellas son mantenidas en el anonimato por la justicia estadounidense.

Algunos de los implicados ya fallecieron, como Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, y El Lazca. Otros están detenidos, como Jorge Eduardo Costilla, El Cos; Jaime González Durán, El Hummer; Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón; Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, y El Mamito.

Entre los acusados se encuentra Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o X-20, señalado como el nuevo jefe del CDG y confrontado ahora con Los Zetas, pero cuya supuesta muerte se comentó en las redes sociales en junio pasado.

La causa en Columbia dice que entre 2000 y 2010 los acusados operaron en México, Colombia, Guatemala y Panamá para traficar cocaína y mariguana a Estados Unidos. En particular, señala que Miguel Ángel y Óscar Omar conspiraron para producir y distribuir cocaína y mariguana a ese país (Proceso 1736).

En esta causa penal se identifica a integrantes del CDG y de Los Zetas agrupados bajo La Compañía, a la que el Departamento de Justicia ubica como un “triumvirato” manejado por Tony Tormenta, El Cos y El Lazca. Asegura que esa organización delictiva “controló cientos de kilómetros del territorio mexicano a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, incluida la frontera con Texas”, con una división territorial en “plazas” y encargados de éstas a los que llamaron “jefes de plaza”.

Sostiene que los integrantes de la organización delictiva dirigieron y transportaron los cargamentos de cocaína y mariguana de La Compañía mediante botes, aviones y automóviles desde Colombia y Venezuela a Guatemala y luego a varias ciudades y plazas en México. De ahí la llevaban a ciudades de Texas para distribuir las a otras de Estados Unidos.

De Miguel Ángel Treviño Morales dice que en ese momento era un miembro de alto nivel de Los Zetas y reconocido como el segundo al mando del grupo, formado como brazo armado del CDG por Osiel Cárdenas, detenido en 2003 y desde enero de 2007 preso en Estados Unidos.

### **Intervenciones**

La causa ante la Corte de Columbia dice que El Z-40 estuvo directamente involucrado en las actividades del CDG y de Los Zetas en México, incluyendo la coordinación de embarques de cocaína y mariguana a Estados Unidos y el envío de grandes cantidades de dinero en efectivo a México desde Estados Unidos. Además supervisó las actividades de La Compañía en áreas de México cerca de Estados Unidos, así como en zonas de y alrededor de Veracruz y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Sobre El Z-42 asegura que tuvo un papel de liderazgo en las actividades de La Compañía en Coahuila, además de haber participado de manera activa en el manejo de las operaciones del grupo en México, entre éstas la coordinación de cargamentos de la droga a Estados Unidos y la recepción de dinero en México. Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue precisamente en un camino rural entre Coahuila y Nuevo León donde, la madrugada del lunes 15, El Z-40 fue detenido por la Marina.

En la información que la DEA le entregó a la Corte federal de Columbia se detallan llamadas telefónicas intervenidas a Miguel Ángel Treviño en las que se describen modos de actuación y diversas operaciones del grupo delictivo. En una de ellas, del 21 de octubre de 2006, El Z-40 le dijo al Hummer que La Compañía pagaba bonos de acuerdo con la “plaza” y al nivel de sus integrantes, y que en el caso de los jefes de plaza el pago era de 10 mil dólares. En otra conversación entre ambos, en julio del año siguiente, le pidió al Hummer que le dijera a una persona –no identificada en la acusación– que La Compañía era la única que podía hacer carga de droga en Camargo, Tamaulipas.

En otra conversación, del 26 de marzo de 2007, Miguel Ángel Treviño dijo que el costo de los embarques de mariguana era de 20 dólares por kilo. En mayo siguiente El Z-40 y El Hummer hablaron sobre un cargamento de cocaína de entre 300 y 400 kilos que sería recogido en el lado mexicano del Río Bravo y transportado a la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, utilizando un vehículo tipo Avalanche, de Chevrolet.

En ese mismo mes El Z-40 discutió con uno de sus colaboradores sobre el aseguramiento de 2 millones 700 mil dólares por parte de agentes de seguridad de Texas. El dinero iba en un vehículo tipo Avalanche, con placas de Tamaulipas. En junio de ese año se refirió a otro embarque de 400 kilos de cocaína transportado de Camargo, Tamaulipas, a Río Grande, Texas.

Días después, el 25 de junio habló de su intención de transportar cocaína a la ciudad texana de McAllen y de los preparativos logísticos en y alrededor de los puertos de Altamira y Tampico, en Tamaulipas, para recibir “cientos de kilos de cocaína” de Colombia. La logística incluía la obtención de espacios para almacenar la droga.

El Departamento de Justicia dice que en octubre de 2007 El Z-40, El Cos y El Lazca, entre otros, recibieron en esos mismos puertos 11 toneladas con 700 kilos de cocaína que intentaron embarcar a Estados Unidos.

La acusación más reciente contra los Treviño Morales es la CR-00210-SS, abierta el 30 de mayo del año pasado en la Corte federal de Texas, con sede en Austin, por lavado de dinero. En esa causa penal además de Miguel Ángel y Óscar Omar están su hermano José y su cuñada Zulema. También figura el excontratista de Pemex Francisco Colorado Cessa. En total son 35 los acusados de lavar dinero para Los Zetas mediante la compra de caballos pura sangre en Estados Unidos (Proceso 1859).

En esa causa el Departamento de Justicia ubica ya a Los Zetas como una poderosa organización del narcotráfico que opera fuera de México con el envío de cientos de kilos de cocaína y otros estupefacientes a Estados Unidos cada año. La señala incluso como el cártel de la droga más grande de México, con presencia geográfica en 11 estados del país y asiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, justo en el cruce fronterizo con Laredo, Texas.

“El tráfico de drogas a gran escala de esta organización le genera ingresos multimillonarios en dólares”, asegura.

Los principales encausados son El Z-40, El Z-42 y El Lazca, quien fue declarado oficialmente muerto por el gobierno de Felipe Calderón en octubre de 2012, como consecuencia de un enfrentamiento casual con infantes de marina en Progreso, Coahuila.

De acuerdo con el gobierno estadounidense, El Z-40 y El Z-42 utilizaron a otro de sus hermanos residente en ese país, José Treviño Morales, así como a otros de sus contactos, para ayudarles a lavar dinero mediante la compra en Estados Unidos de caballos cuarto de milla: “La propiedad de los caballos y la fuente de los fondos para la compra de los caballos fueron puestos a distintos nombres para ocultar la conexión del 40 y el 42 con esos activos”, indica la acusación.

Jorge Carrasco Araizaga, Juan Alberto Cedillo. “Y ahora... la batalla por Nuevo Laredo”. *Proceso* número 1916, 21 julio 2013. pp. 16-18. <https://www.proceso.com.mx/347922/y-ahora-la-batalla-por-nuevo-laredo>

### **“Y ahora... la batalla por Nuevo Laredo”**

Contra lo que afirma el gobierno de Peña Nieto, el vacío que deja la detención de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, sólo augura más violencia. Y aun cuando algunos sicarios de Los Zetas se apresuran a declarar al Z-42 –hermano del detenido– como nuevo jefe, no dejan de advertir la necesidad de mantener la unidad en la organización, sobre todo ahora que los cárteles rivales preparan la toma de la estratégica plaza de Nuevo Laredo.

En el cambiante mapa del narcotráfico en México la próxima batalla estratégica será por Nuevo Laredo, el bastión de Los Zetas dominado por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, hasta su detención el lunes 15. Sus antiguos aliados del Cártel del Golfo (CDG), en asociación con Joaquín El Chapo Guzmán, se preparan para el asalto de esa plaza.

Defender Nuevo Laredo será la principal prueba para Óscar Omar Treviño Morales, El Z-42, llamado a suceder a su hermano mayor en el liderazgo de la organización más violenta de la delincuencia organizada en el país y con presencia transnacional, al grado que Estados Unidos la incluyó en su lista de “terroristas”.

La historia de Los Zetas no se acaba con la detención del jefe que apenas el año pasado se impuso sobre las demás bandas a base del terror y la división. Su consolidación fue paulatina, después de separarse del CDG.

Pocos se metían con Miguel Ángel Treviño. Ni siquiera se atrevió Genaro García Luna cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Uno de los fundadores de la organización, Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Z-7 o El Mamito, declaró el pasado 29 de abril ante la Corte federal de Estados Unidos en Austin, Texas, que al Z-40 lo dejaron crecer durante los gobiernos del PAN.

De acuerdo con El Mamito, el gobierno de Felipe Calderón recibió información de un testigo protegido de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) sobre los movimientos de Miguel Ángel Treviño, a quien le lavaba dinero en Estados Unidos.

Ramiro Villarreal Guajardo, El Gordo, comenzó a trabajar para el Z-40 en 2009. Empezó comprando caballos cuarto de milla para su patrón, luego se hizo cargo de la administración de otros negocios en Estados Unidos. En septiembre de 2010 fue detenido por la DEA y decidió convertirse en informante cuando las autoridades estadounidenses le ofrecieron quitarle cargos y reducir su condena.

Durante casi un año cooperó con esa agencia y el Buró Federal de Investigación, cuyos agentes grabaron todas sus conversaciones con los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales. En una ocasión alertó a la DEA que el Z-40 estaría en una carrera clandestina de caballos en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La DEA informó a las autoridades de México sobre la ubicación del narcotraficante. Los oficiales mexicanos enviados a capturarlo sólo le tomaron fotografías. Su detención habría desatado una balacera, arguyeron. Además, el capo se movía con una escolta de más de 20 pistoleros.

El Gordo, de 38 años, puso su vida en juego al delatar a su jefe. En marzo de 2011 su cuerpo apareció calcinado en el interior de un automóvil en Nuevo Laredo.

“Miguel Ángel Treviño ordenó la muerte del Gordo, pero hizo que pareciera un accidente”, declaró El Mamito ante la Corte de Austin, en el juicio que se le sigue al Z-40 y a sus hermanos Óscar Omar y José, así como a otros sicarios de la organización y a empresas implicadas en operaciones de lavado de dinero de Los Zetas a través de la compra de caballos cuarto de milla.

Rejón Aguilar, quien era el tercero en el mando en la organización y uno de los militares de Fuerzas Especiales del Ejército que formaron Los Zetas, precisó que la orden para asesinar a Ramiro Villarreal no fue dada porque se supiera que era informante de la DEA, sino porque “conocía todos los negocios del Z-40”.

El Mamito contó durante varias horas cómo se fundó la organización, primero como brazo armado del CDG y del papel del Z-40 en la consolidación de Los Zetas como cártel independiente, y, luego, la división interna que sufrió.

En 2004, refirió, el Cártel de Sinaloa intentó adueñarse de Nuevo Laredo. Según dijo, El Chapo envió a Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, a la zona con alrededor de 500 sicarios. Se desató la guerra. “Participé en unas 10 batallas contra los de Sinaloa”, narró El Mamito.

## **Delaciones y reacomodos**

Es posible que la detención del Z-40 sea aprovechada por el Cártel de Sinaloa para incursionar en la llamada frontera chica, en los límites con Texas, donde se realiza el mayor intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos.

Luego de desplazar al Cártel de Juárez de la frontera con El Paso, Texas, El Chapo puede ir por el control de Nuevo Laredo, crucial para el trasiego de drogas y armas. Entre Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas, circulan de 10 a 12 mil tráileres cada día.

Es probable que el CDG y sus aliados del Cártel de Sinaloa –quienes buscan el control de la plaza desde 2010– se enfrenten a la resistencia zeta, apoyada por los hermanos Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez, y los Beltrán Leyva; ambos grupos, exsocios del Chapo.

En 2012 se registraron 288 homicidios dolosos en esa ciudad, lo que equivale a 72.85 asesinatos por cada 100 mil habitantes, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Esas cifras colocan a Nuevo Laredo como la octava ciudad más violenta del mundo.

Además de ese reto, El Z-42 deberá enfrentar las pugnas intestinas en su organización, desatadas a partir de octubre de 2012, cuando murió Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca.

A principios de ese año se manifestó la división zeta en mantas colocadas en diversas entidades; incluso el gobierno federal confirmó esa escisión (Proceso 1863). A desaparecer El Lazca, un grupo de sicarios creó Los Legionarios para enfrentar al Z-40, a quien acusaron de traición por la muerte de Lazcano y la detención de otros jefes de Los Zetas.

De acuerdo con un exoficial de fuerzas especiales de la IV Región Militar, con sede en Monterrey, varios jefes de plaza se oponen a que la familia Treviño Morales continúe al frente de Los Zetas.

El exmilitar, quien habló bajo la condición de omitir su nombre, asegura que los inconformes acusan a los Treviño de manejar el dinero de la organización para sus negocios personales, como quedó demostrado en el juicio en Texas contra José Treviño Morales, quien gastaba alrededor de 2 millones de dólares al mes en caballos de carreras para sus hermanos.

Cuando El Z-40 estuvo varios meses al frente del grupo no pudo consolidar su liderazgo, dice el declarante; incluso perdió varios municipios estratégicos de la zona metropolitana de Monterrey que ahora están en manos del CDG.

Y advierte: la imposición de Omar Treviño profundizará la división del grupo y generará más violencia en las plazas que controlan en el noreste (Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León) y el Golfo de México, así como Veracruz y Tabasco, e incluso la península de Yucatán.

Ante el posible recrudecimiento de la violencia, esas entidades se mantienen en alerta máxima. Los gobernadores reforzaron sus escoltas personales. Entre tanto tropas de la Marina y el Ejército, además de policías federales, aumentaron la vigilancia en las principales carreteras fronterizas que unen el noreste del país con Texas.

La fragmentación del grupo delictivo también podría ser aprovechada por otras pandillas o grupos que, con el nombre de Los Zetas, comenzarán a extorsionar o secuestrar. Todo depende de quién quede al

frente de la organización y de su habilidad para mantener la unidad, según los rígidos códigos y disciplina militar que le dieron origen.

Rejón Aguilar, Arturo Guzmán Decena, Heriberto Lazcano y 11 militares del antiguo Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE) fueron reclutados a finales de los noventa por el expolicía Aurelio Cano Flores para trabajar primero como escoltas del narcotraficante Gilberto García Mena, El June, y su lugarteniente Zeferino Peña Cuéllar, Don Zefe, todos ellos del CDG.

### **El juicio de Austin**

Durante las diligencias realizadas en la Corte federal de Austin salió a relucir que Los Zetas crecieron cuando Osiel Cárdenas Guillén llamó a los gafes para defender Nuevo Laredo de los primeros embates del Cártel de Sinaloa en esa plaza.

En esa época Miguel Ángel Treviño Morales se sumó a la organización paramilitar que modificó la manera de operar de los cárteles. Se le asignó un número –el 40– seguido por una clave militar, la letra Z, la que usaban los gafes cuando llegaron a Reynosa, Tamaulipas.

Durante un tiempo el Z-40 se quedó al mando de Nuevo Laredo. Escaló en la organización cuando fue enviado por los líderes del CDG a encabezar un grupo de sicarios a Veracruz. Años después, ya bajo el liderazgo del Lazca, se fue a Centroamérica; en Guatemala fue señalado como el responsable de la masacre de marzo de 2008 en Zacapa, en la cual murió el capo Juan León, Juancho.

Después de su ruptura con el CDG, en marzo de 2010, Los Zetas conformaron un triunvirato: “Nos veíamos todos los días en ranchos de Miguel Alemán, en Nuevo Laredo, y en Veracruz”. En él participaba Lazcano, dijo El Mamito ante la justicia de Estados Unidos el pasado 29 de abril.

En esa época Los Zetas obtenían 350 millones de dólares de ingresos al año. Entre sus actividades delictivas incluyeron el robo de gasolina a gran escala en los ductos de Pemex, así como los secuestros, la piratería, el cobro de piso, la extorsión y el control de giros negros, entre otras.

“Buena parte de esos ingresos se gastaba en la guerra contra el CDG”, especificó Rejón Aguilar.

El Mamito se encargaba de supervisar todas las plazas controladas por Los Zetas. Su caída comenzó a mediados de febrero de 2011, cuando un grupo de sicarios asesinó a Jaime Zapata, agente especial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en una carretera de San Luis Potosí.

El sicario fue capturado por la Policía Federal en un departamento de Atizapán, Estado de México, el 4 de julio de ese año. Dos meses después fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente tiene un proceso judicial en Washington.

### **Feria de traiciones**

A principios de 2012 un grupo de sicarios empezó a cuestionar al Z-40, por ese entonces el segundo al mando de la organización. Lo acusaban de haber entregado a la Policía Federal a varios líderes regionales. En sus declaraciones a la fiscalía en Austin, El Mamito aseguró incluso que Treviño Morales lo había “puesto” a él.

Los disidentes, encabezados por Iván Velázquez Caballero, El Z-50, le advirtieron a Lazcano que Morales Treviño también lo traicionaría. Ese grupo asegura también que El Z-40 fue quien filtró a la Semar que Lazcano acudiría a un juego de beisbol en un pequeño estadio de Progreso, Coahuila, donde cayó muerto tras enfrentarse con los marinos, según informó la dependencia el 9 de octubre de 2012.

La desaparición del Lazca dejó en manos de la familia Treviño la dirección de Los Zetas. Óscar Omar Treviño, jefe regional en Piedras Negras, pasó a ocupar el papel de Jesús Enrique Rejón: supervisar todas las plazas. Ahora se prepara a disputar el liderazgo de Los Zetas.

La guerra contra el CDG por los territorios de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León y la demostración de poder durante el dominio de Miguel Ángel Treviño es uno de los capítulos más sanguinarios en la historia reciente del país.

En Tamaulipas se le atribuye al Z-40 la matanza de 72 migrantes en San Fernando, en agosto de 2010, porque, según la versión oficial, se negaron a trabajar para Los Zetas. En la entidad también se encontraron fosas clandestinas con más de 100 cadáveres de presuntos indocumentados centroamericanos.

En Nuevo León, por ejemplo, se registró la matanza multitudinaria en el penal de Apodaca. Los testimonios son escalofriantes: a los presos del módulo Delta los atacaron con garrotes, les encajaron estacas en la boca y los desmembraron. Otras 49 personas fueron desmembradas, y sus órganos arrojados en una carretera de Cadereyta.

A partir de 2011 hubo más matanzas en la entidad. En agosto de ese año ocurrió el incendio intencional del casino Royale –el Ejército atribuyó el siniestro a Carlos Oliva Castillo, La Rana, quien dependía del Lazca y del Z-40–, donde murieron 53 personas.

Además el 19 de febrero de 2012 se evadieron del penal de Apodaca 37 zetas. Entre ellos iba José Isidro Cruz Villarreal, El Pichilo, según informó el diario El Norte. A él se le adjudica la matanza de los 17 integrantes del grupo musical Kombo Kolombia en enero de este año.

En mayo de 2012 fueron arrojados los torsos de 43 hombres y seis mujeres en el poblado de San Juan, también en el municipio de Cadereyta. Y es posible que haya más venganzas... (Con información de Luciano Campos.)

Marcela Turati. “Lo que declare “El Z-40”, clave para ubicar desaparecidos”. *Proceso* número 1916, 21 julio 2013. pp. 19-21. <https://www.proceso.com.mx/347923/lo-que-declare-el-z-40-clave-para-ubicar-desaparecidos>

**“Lo que declare “El Z-40”, clave para ubicar desaparecidos”**

Organizaciones de familiares de desaparecidos y defensores de derechos humanos celebran que Miguel Ángel Treviño haya sido aprehendido con vida, pues suponen que el dirigente de Los Zetas conoce el paradero de muchos de los secuestrados por ese grupo criminal al cruzar el llamado “Triángulo de la Muerte”, el territorio entre Nuevo Laredo, Reynosa y Monterrey. Son muchas las personas que buscan a sus hijos, hermanos o cónyuges y tienen la esperanza de que las autoridades le saquen la verdad al Z-40. Sólo así podrán ponerle fin a sus pesadillas.

Alfonso Moreno Díaz extiende sobre la mesa de su oficina un mapa que muestra los caminos rurales, semidesérticos, que se abren paso como vórices por extensas tierras deshabitadas –y salpicadas de pueblos casi fantasmas– entre Nuevo León y Tamaulipas. Un círculo señala el tramo de estas carreteras que cruzan territorio zeta donde fue capturado su hijo, el ingeniero Alejandro Alfonso Moreno Baca, y en el que han desaparecido más de 220 personas.

“Este es el ‘Triángulo de la Muerte’: las carreteras que unen Nuevo Laredo, Reynosa y Monterrey, donde las organizaciones civiles han contado más de 200 desaparecidos de 2010 a 2012. Son muchos más si sumamos a los de todo el noreste (Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila)”, dice este hombre, quien junto con su esposa Lucía se ha dedicado a buscar a su hijo desde el 27 de enero de 2011.

Una de las brechas se hizo famosa porque Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, la recorría aparentemente con un solo escolta. Al momento de su aprehensión intentaba llegar a Anáhuac, Nuevo León. Sabía que hasta la caseta de Sabinas Hidalgo el camino estaba libre de obstáculos.

En medio de ese triángulo la tierra está sembrada de huesos y regada con sangre. Sus huizaches ocultan ranchos que tienen a narcotraficantes como nuevos propietarios, ayudados por notarios y pistoleros. Esconde campos de entrenamiento para sicarios y galerones donde ocultan a seres humanos que utilizan como si fueran mercancía.

Por aquí son capturados cada tanto asesinos seriales, se encuentran complejos equipos de comunicación y algunas veces instalaciones para la disolución de cadáveres (las “cocinas”, como las nombran los judiciales).

Durante años, de día y de noche un ejército de sombras a las órdenes del Z-40 se ha dedicado a capturar personas para reclutarlas en sus ejércitos, quedarse con sus vehículos, reducirlas a la esclavitud, castigar a sus objetivos o imponer el terror.

Por eso cuando se difundió la noticia de la captura del líder de Los Zetas, el señor Moreno se comunicó con funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Gobernación: “Pedimos que digan dónde quedaron los desaparecidos, los lugares donde los tienen trabajando, dónde dejaron a la gente”, dice.

La súplica de la familia Moreno-Baca es la misma que hacen cientos de familias.

### **Caseta fatal**

Al día siguiente de la caída del capo, la religiosa Consuelo Morales, quien dirige la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), que acompaña a familiares con desaparecidos en Nuevo León, pidió que se interrogue al capo sobre el paradero de los capturados en sus dominios. Un clamor que también hizo suyo la organización Fuerzas Unidas por Nuestros

Desaparecidos en Coahuila (Fundec) y de México (Fundem), surgida en 2009, cuando los asesinatos y las desapariciones forzadas en el noreste se convirtieron en epidemia.

En las tasas de desapariciones por habitante que maneja la PGR, los municipios tamaulipecos destacan como verdaderos hoyos negros. Entre los 30 lugares más peligrosos están Mier, Guerrero, Camargo, Matamoros, Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Ciudad Madero y Valle Hermoso. También la ramificación zeta de Torreón, Coahuila.

Según datos de los demógrafos de Geo-México, hasta 2010 Mier, Guerrero y Miguel Alemán, en Tamaulipas, y los nuevoleonese General Treviño, Doctor Coss y General Bravo, cercanos a Tamaulipas, forman parte de los municipios con mayores tasas de asesinatos.

La disputa entre Los Zetas y el Cártel del Golfo, así como la incursión de las fuerzas federales provocaron éxodos masivos. En Ciudad Mier, por ejemplo, se cometieron 2 mil 13 homicidios por cada 100 mil habitantes y su población se redujo de 6 mil 539 a 4 mil 768, todo hasta 2010.

Cuando se supo que El Z-40 fue capturado vivo palpitaron los corazones de muchos familiares de desaparecidos en “zonas zeta”, muchos de ellos fuereños que recorrían las carreteras del llamado “Triángulo de la Muerte” y nunca llegaron a su destino.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares, como las ya mencionadas CADHAC y Fundec, pero también el Centro Gerardi, la Fundación para la Justicia, el Movimiento por la Paz y el Centro Victoria Diez, así como la red de albergues de migrantes tienen registradas en sus bitácoras cientos de denuncias por desaparición en los territorios que Treviño controlaba.

En algunos casos, como en el de las carreteras, los patrones son similares. Más de una decena de personas fueron secuestradas al cruzar la caseta de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, donde desapareció el ingeniero Moreno Baca. El 21 de enero de 2011 desaparecieron ahí dos deportistas de Monterrey que iban a comprar tenis para un maratón: Miriam Guadalupe Alemán y Perfecto Guzmán Campos.

El 22 de febrero siguiente fueron dos jóvenes de Monterrey que iban de compras a Nuevo Laredo. Dos días después se esfumaron en la zona los tapatíos Juan Jiménez Díaz, Mauricio Jiménez Cervantes, Juan Manuel Covarrubias Cerna, Luis Esteban Díaz Escobar y José Robledo Botello.

El 1 de marzo fue Ismael Valenzuela, un estudiante de ingeniería de sistemas. En agosto las víctimas fueron cuatro jóvenes de Guanajuato con residencia en Estados Unidos: Javier y Saúl Téllez Durán, Mauricio Mendoza Lara y Gabriel Durán López.

El 23 de septiembre desapareció el joven chofer José Adolfo Fermín Hernández con todo y su camión. La lista se siguió engrosando en 2011, 2012 y hasta este momento. “En esa zona se perdió mucha gente, tienen que interrogar a los jefes que están en el penal”, pide un tío de José Adolfo.

A pesar de que CADHAC y Fundec documentaron desapariciones desde 2010 en esas zonas, las autoridades no reaccionaron a la emergencia. Todavía hoy funcionarios federales se niegan a entregar información, solicitada por la Ley de Transparencia, sobre lo ocurrido en esos caminos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señala que no tiene registros. Sólo hay datos sueltos.

A partir de una solicitud de información realizada por este semanario, el Ejército informó que de 2011 a 2013 encontró 103 fosas comunes en el noreste mexicano, territorio zeta, la mayoría en Tamaulipas, 10 en Nuevo León y cinco en Coahuila. Tan sólo las de Tamaulipas contenían 269 cadáveres, aunque en varios casos el número de cuerpos no se pudo precisar.

El reporte también menciona el descubrimiento de entierros clandestinos en San Luis Potosí, Durango, Zacatecas y Veracruz, también disputados por el cártel mencionado.

### **La boca del infierno**

La violencia que domina en el noreste hizo que pronto se encontraran las familias que buscan a sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos en carreteras tamaulipecas. Han pasado por el mismo peregrinaje: peinaron montes, recorrieron carreteras y brechas, esquivaron halcones del narco, visitaron morgues y acudieron a las procuradurías, la Marina, el Ejército, las policías, diversos informantes, videntes y organizaciones de derechos humanos.

“En CADHAC conocimos (a otros familiares de víctimas), nos dimos cuenta que fue en la misma carretera”, dice Lucía Baca. Luego muestra un cartel con los datos de su hijo Alejandro Alfonso, quien desapareció cuando conducía un Mazda 3 rojo, con placas 187VCT del Distrito Federal.

En un video que la pareja consiguió se ve el automóvil en la autopista 85D pasando la caseta de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, con rumbo a Nuevo Laredo, Tamaulipas, a las 20:54 horas del 27 de enero de 2011. Por sus investigaciones saben que pagó en efectivo, el nombre de la cajera y las coordenadas que marcaba su teléfono celular.

La última ubicación fue en Vallecillo, donde cruzó la carretera intermunicipal 26 a Palo Alto. Por lo que hoy se sabe, esa era la ruta habitual del líder de Los Zetas y boca del infierno.

La pareja Moreno Baca cuenta lo que vio de ese submundo después de buscar a Alejandro en hospitales, agencias ministeriales, edificios públicos y bases de fuerzas de seguridad:

“Un comandante de la Policía Federal de Caminos en Nuevo Laredo dijo: ‘Señora, no se preocupe, a su hijo se lo van a devolver en tres meses y el carro por ahí va a estar circulando’”, recuerda la madre. “Nos dimos cuenta de lo peligrosa que era esa carretera porque ahí quedan vehículos accidentados. En la presidencia de Sabinas Hidalgo, municipio a donde llevan a los heridos, un guardia, asustado, nos atendió y nos dijo: ‘Nomás les abro porque veo que son familia; si trajeran policías municipales, no’. Íbamos avanzando, viendo, y nos aterraba lo que escuchábamos. La gente nos decía: ‘No se metan más porque no saldrán con vida’.”

Meses después en esa zona acribillaron a unos policías federales que el gobierno envió para comenzar los operativos. Posteriormente otros dos fueron degollados.

Por notas periodísticas se han enterado de que en esa región se descubrieron campos de entrenamiento para sicarios, ranchos con arsenales y casas de seguridad con cientos de personas esclavizadas. Los Moreno Baca, como muchas familias, tienen esperanza de que Alejandro Alfonso esté vivo, trabajando con otros ingenieros secuestrados en esas zonas.

Según información obtenida mediante la Ley de Transparencia, desde 2009 hasta febrero de 2013 han sido liberados 2 mil 352 secuestrados en 531 operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional contra el crimen organizado. De éstos, 146 se realizaron en Tamaulipas, donde se rescató a mil 111 personas.

También se encuentran en la lista municipios de Nuevo León, Coahuila, Veracruz, Tabasco y San Luis Potosí, a donde llegan los brazos del cártel fundado por exmilitares de élite.

Un funcionario que hace investigaciones en Tamaulipas y que por obvias razones pide no publicar su nombre, señala que Los Zetas cuadrículan su territorio “por franjas”. En cada una colocan a un líder y él crea sus propias estructuras de control, cuenta con sus escoltas, contador, halcones, sicarios y alguien dedicado a desaparecer gente.

Aunque los padres de familia han pedido que se interrogue a los “jefes de plaza” capturados, quienes generalmente mencionan que no recuerdan a sus víctimas, tienen esperanza de que Treviño tenga más información.

No sólo son las víctimas del Triángulo de la Muerte. También los desaparecidos en otras carreteras, como Natanael Arturo y Josué Arcel Román García, hermanos defebños que viajaron a McAllen a comprar ropa de bebé y antes de desaparecer alcanzaron a enviar por celular un mensaje: “Nos acaban de secuestrar en San Fernando, no hagas nada, si llega a pasar algo sólo avisale a mis papas. me metieron en la cajuela. no me vayas a llamar ni nada”.

O los poblanos Hugo y Moisés Juárez Martínez, y Jesús Asunción Montiel, quienes el 6 de noviembre del año pasado desaparecieron entre Soto La Marina y Aldama, Tamaulipas, cuando regresaban a casa con camionetas recién compradas que revenderían. “A las 3:19 de la tarde mi esposo me dijo que habían tardado en la garita, que ya habían pasado tres retenes, que estaban pasando la terracería por Soto La Marina. Estuvimos esperando todo el día que llegaran pero los teléfonos sonaban como fuera de servicio y ya no supimos de ellos”, dice Rubí Ascensión, quien tiene parentesco con los tres, como hermana, esposa y cuñada.

Lo mismo le ocurrió al joven Andrés Asención González y su amigo Braulio Hernández, quienes desaparecieron en La Ribereña o la Carretera de la Muerte, que bordea Texas, el 27 de marzo de 2011.

“A las 9 de la noche mi hijo me llamó a la casa, que ya había llegado a Nuevo Laredo, pero tenía 15 minutos que lo había agarrado un retén. Escuché que Braulio le dijo que acelerara, le pregunté qué pasó, me dijo ‘nada’ y colgó. A la fecha hemos andado de arriba abajo, los hemos buscado, no sabemos nada de ninguno”, dice su madre, María Ignacia González Vela.

Nadie, por el momento, ha sido señalado como responsable de las desapariciones en el territorio dominado por Treviño. Sólo en Coahuila se contabilizan más de mil 600, en Nuevo León más de mil 200 y no se sabe cuántas en Tamaulipas.

“Lo que las familias pedimos es que le pregunten a esta persona para que diga dónde dejaron a la gente que se llevaron. Que no nada más le pregunten por las drogas y el resto de la delincuencia, también por nuestros hijos, dónde los tienen trabajando”, dice el señor Moreno.

J. Jesús Esquivel. “El “Z-40”: en duda, la “paternidad” de la captura”. *Proceso* número 1916, 21 julio 2013. pp. 22-25. <https://www.proceso.com.mx/348160/el-z-40-en-duda-la-paternidad-de-la-captura>

### **“El “Z-40”: en duda, la “paternidad” de la captura”**

La aprehensión de Miguel Ángel Treviño Morales fue obra de un grupo de élite de la Marina mexicana, asegura a Proceso un funcionario de la Secretaría de Gobernación, lo que contrasta con las versiones periodísticas según las cuales Estados Unidos proporcionó información a las autoridades mexicanas para detener al capo. Un agente de Estados Unidos enrolado en la lucha contra el narcotráfico corrobora aquella versión: afirma que desde que Enrique Peña Nieto llegó a Los Pinos, su gobierno tiene congeladas a las agencias estadounidenses que operan en México.

WASHINGTON (Proceso).- La aprehensión de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, exhibió la exclusión de los operativos antinarcóticos a la que el gobierno de México tiene sometidas a las agencias federales de Estados Unidos, así como las traiciones e intereses entre los cárteles del narcotráfico, sostienen agentes y funcionarios de los dos países.

“Ni siquiera nos avisaron. La captura de Treviño Morales nos tomó por sorpresa y, debo admitirlo, fue una operación de inteligencia 100% de México”, dice a Proceso un agente estadounidense que opera en territorio mexicano. “Nos tienen marginados”, machaca e insiste en mantener su nombre en reserva.

La madrugada del lunes 15, a las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) aprehendieron al Z-40, líder del grupo criminal Los Zetas, junto con otros dos hombres. No hubo disparos. Apenas conocida la noticia, provocó una serie de especulaciones sobre el involucramiento de Washington.

“No hubo participación de ninguna agencia de inteligencia de Estados Unidos. La captura de este criminal fue resultado de una investigación de la Marina, punto”, sostiene Eduardo Sánchez Hernández, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, lo que corrobora la versión del agente estadounidense.

Aun cuando la captura del Z-40 ocurrió alrededor de las tres de la madrugada del lunes 15, la noticia la dio a conocer Alfredo Corchado, corresponsal en México del periódico texano *The Dallas Morning News*, esa misma tarde.

La primicia de Corchado, autor del libro *Medianoche en México* y uno de los periodistas amenazados por Los Zetas, desató las especulaciones en los medios mexicanos y estadounidenses respecto de la presunta participación de Washington en la captura del Z-40.

“Están castigados los agentes y los jefes de la DEA, la CIA y el FBI. La cooperación en México con estas dependencias de Estados Unidos está prácticamente congelada. Estaban espionando todo y Gobernación les cerró la puerta y los excluyó de las labores conjuntas contra el narcotráfico”, subraya un funcionario mexicano implicado en asuntos de inteligencia consultado por Proceso.

Y añade, tras solicitar al corresponsal omitir su nombre y el de la dependencia en la cual trabaja: “En otras palabras, los estadounidenses en México ya no tienen, por ahora, el acceso que tuvieron durante el gobierno de (Felipe) Calderón”.

## **Bloqueos confirmados**

Desde el 1 de diciembre del año pasado, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, la Secretaría de Gobernación se dio cuenta del nivel de espionaje e infiltración de las agencias de inteligencia de Estados Unidos en los asuntos nacionales, al cobijo de la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces congeló las operaciones de la DEA, la CIA, el FBI y otras dependencias de Washington en territorio mexicano (Proceso 1889 y 1915).

Pero no fue sino hasta la caída del Z-40 cuando, a través de los medios de su país, el gobierno de Barack Obama lo admitió: Dependencias como la DEA ya no tenían el acceso y la libertad de operación que con la Iniciativa Mérida les concedió la administración de Calderón.

“El nuevo gobierno (de Peña Nieto) se ha burlado al nivel más profundo de la participación de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos en México e impuso nuevos límites a sus niveles de acceso, lo que provocó dudas entre funcionarios y analistas respecto de si el gobierno mexicano estaría profundamente comprometido a confrontar a las bandas del tráfico de drogas”, publicó The New York Times el martes 16.

Ese mismo día The Washington Post destacó en su portal en internet un despacho de Nick Miroff, su corresponsal en la Ciudad de México, en torno a la captura del Z-40:

“Buscado en los Estados Unidos y en México, Treviño es el primer jefe de un cártel capturado o eliminado desde que en diciembre Peña Nieto asumió la Presidencia en medio de dudas de que su gobierno –tomando en cuenta la mala reputación de que su partido, el PRI, hace arreglos con el bajo mundo– pudiera cazar a los capos del crimen organizado con la misma agresividad que Calderón.”

Miroff enfatizó: “(Esas dudas) crecieron después de que funcionarios del gobierno de Peña Nieto pusieran limitaciones a las capacidades de operación de agencias de Estados Unidos, como la CIA y la DEA en México, lo cual desató advertencias de agentes estadounidenses de que habría consecuencias en la cooperación para el combate a las drogas”.

En su artículo, el corresponsal del Post no mencionó la supuesta participación estadounidense en el operativo.

Para el funcionario mexicano consultado por Proceso, quien colabora con las agencias estadounidenses, Washington no admitía el aislamiento de sus agentes en México por una razón: Hacerlo implicaría “aceptar que Gobernación les cerró las puertas porque los agarró espiando cosas que no les correspondían”.

El miércoles 17 los diarios Reforma y El Universal informaron de la captura del Z-40. El primero destacó que el operativo se realizó en sólo siete minutos; el segundo, en su columna Bajo Reserva, comentó: “En Washington comienzan a mover el dato de que el Pentágono dio a las autoridades mexicanas algunas pistas de la ubicación del criminal (Treviño Morales) recabadas por drones, desde el espacio aéreo estadounidense”.

El día anterior, The New York Times y el sitio electrónico de The Washington Post publicaron sus propias versiones.

Firmada por su corresponsal en México, Randal C. Archibold, y por la reportera Ginger Thompson, la nota de primera plana del Times decía: “Detrás de escena, autoridades estadounidenses jugaron un papel clave en su aprehensión, y después de su arresto confirmaron su identidad por medio de pruebas biométricas y de ADN, de acuerdo con funcionarios de ambos lados de la frontera, quienes no están autorizados a hablar públicamente del caso”.

Archibold y Thompson resaltaron el asunto de las limitaciones que el gobierno de Peña Nieto impuso a las agencias de inteligencia estadounidenses; también señalaban que las autoridades mexicanas reconocen la necesidad de la ayuda estadounidense y que, por lo tanto, “hace meses” intercambiaron información sobre Treviño Morales.

“Los estadounidenses pasaron información sobre el nacimiento de un hijo de Treviño hace poco más de un mes”, escribieron los reporteros del Times citando a un agente de Estados Unidos; también indicaron que El Z-40 había sido capturado cuando realizaba un viaje para ver, precisamente, a su hijo. Según Archibold y Thompson, el gobierno de Peña Nieto “no había admitido la intervención de Estados Unidos en la operación”.

### **El cerco**

En contraste al despliegue que dio The New York Times a su nota del martes 16, The Washington Post publicó en su edición impresa del miércoles 17 en la página A11 el texto de su corresponsal Miroff, titulado Captura del capo de las drogas robustece las credenciales de Peña Nieto en la lucha contra el crimen. Según Miroff, hasta ese momento funcionarios de los dos países aún no se atrevían a hablar acerca de si hubo o no participación de Estados Unidos en el arresto. “La pregunta ahora es saber si Treviño será extraditado a Estados Unidos”, matizó el corresponsal del Post.

Sánchez Hernández sostiene que la captura del Z-40 demostró la efectividad de una combinación de estrategias operacionales y de información de inteligencia realizadas exclusivamente por la Semar.

“Desde hace meses entre los estados de Coahuila y Tamaulipas se habían ubicado las zonas de desplazamiento de Treviño y se había tomado nota de los ejercicios de violencia que venía llevando a cabo, incluso contra su propia gente”, cuenta Sánchez Hernández a este semanario.

“Andaba a salto de mata por caminos de terracería”, enfatiza, pues sabía de las acciones emprendidas por la Semar para atraparlo. La madrugada del lunes 15, relata, grupos terrestres de la Marina acorralaron la camioneta en la que se desplazaba el capo cerca de Nuevo Laredo; a bordo de un helicóptero Black Hawk un grupo de élite realizó movimientos tácticos de asalto –similares los que hacen en altamar para interceptar embarcaciones de alta velocidad– y descendió para capturar a Treviño.

–¿Es cierto que fueron autoridades o agentes de Estados Unidos quienes corroboraron la identidad de Treviño Morales con pruebas biométricas y de ADN? –se le pregunta vía telefónica al subsecretario.

–No es cierto. Fueron autoridades del gobierno de México quienes certificaron la identidad del detenido; también hicieron los exámenes biométricos y las pruebas de ADN, pero en el lugar donde se realizaron no estaba presente ningún funcionario o agente extranjero.

–Y sobre los supuestos tips que proporcionaron las autoridades estadounidenses, según los cuales Treviño venía de ver a su hijo recién nacido, ¿qué hay de cierto?

–Déjeme ver, espéreme tantito...

El corresponsal escucha cómo su interlocutor marca el número de un radioteléfono.

–¿Capitán?, habla Sánchez Hernández. ¿Cómo le va? –dice el subsecretario–. Me dicen que un periódico de Estados Unidos publica que a Treviño se le arrestó porque del otro lado nos pasaron el tip de que andaba por ahí porque venía de ver a un hijo recién nacido. ¿Qué sabemos de eso?

–...–¡Ah!, muchas gracias, capitán –exclama Sánchez Hernández y concluye la conversación.

Reanuda la plática con el corresponsal:

–Me dicen que no hay nada del supuesto hijo recién nacido de Treviño Morales.

### **Conjeturas**

De acuerdo con la versión del funcionario mexicano, quien tiene contacto con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, el operativo de la Semar tiene otros matices.

“Ésta es la primera demostración de que sí funciona el adiestramiento impartido por el Comando Norte de Estados Unidos a grupos de élite de la Marina en tácticas antinarcóticos y antiterroristas”, dice; los marinos que participaron en la operación del lunes 15 son egresados de los cursos impartidos por los grupos especializados del Pentágono.

Y añade: “De eso se trataba, ¿no? De que bajo el entrenamiento de Estados Unidos las fuerzas especiales de la Marina y el Ejército mexicano operaran con efectividad contra el narcotráfico sin que se tuviera que necesitar la mano extranjera”.

–¿Esto quiere decir que El Z-40 es la primera operación de inteligencia militar puramente mexicana exitosa?

–Así es. Pero hay algo más: El Z-40 fue localizado también gracias a la información recopilada o proveniente del mismo narcotráfico.

“La caída del Z-40 favorece al Cártel de Sinaloa. Hay información recopilada sobre los movimientos que realizaba Treviño en Coahuila, Durango y Tamaulipas que salió directamente de gente cercana al Chapo (Joaquín Guzmán Loera).

“La intención del gobierno es parar la violencia y la violencia más terrible la representan Los Zetas; también hay narcotraficantes que quieren eso porque les conviene... uno de ellos es El Chapo.”

El entrevistado destaca otro acontecimiento reciente, relacionado con la lucha antinarco: “La muerte de Alfredo Álvarez Zepeda –el miércoles 10, en Tierra Blanca de Culiacán, Sinaloa –, un operador del Chapo, tiene mucho que ver con lo que pasó con El Z-40”.

“Le voy a dar otro dato”, subraya el funcionario mexicano: “Al Z-40 tal vez nunca lo extraditen a Estados Unidos porque sabe mucho; sus declaraciones pueden salpicar a varios políticos importantes.

“Se lo pongo así: Tiene que hablar de su supuesta relación con los exgobernadores priistas Tomás Yarrington y Humberto Moreira, de Tamaulipas y Coahuila. También del asesinato del candidato Rodolfo Torre Cantú.

“Con lo que diga (Treviño Morales) se puede explicar también la protección que recibió su familia en el sexenio de Fidel Herrera (en Veracruz), que vive en ese estado sin que nadie la moleste. Creo que a nadie le conviene que esto se lo saquen en Estados Unidos.”

El martes 16, entrevistado por la estación local de Univisión en Los Ángeles, Obama dejó entrever que su gobierno duda o dudaba del compromiso de Peña Nieto para acabar con el narcotráfico y dismantelar los cárteles de la droga.

Cuando el entrevistador le pidió su opinión acerca de la aprehensión del Z-40, el presidente de Estados Unidos declaró: “Eso demuestra que el nuevo gobierno del presidente Peña Nieto es serio respecto a la continuidad de los esfuerzos para romper estas operaciones transnacionales de droga. Creo que había algunas dudas sobre ello al inicio de su campaña e inmediatamente después de su elección.

“Me reuní con él (el 27 de noviembre de 2012 en la Casa Blanca) y me indicó que reconoce la necesidad de afrontar de una manera seria a esos cárteles transnacionales de la droga. Creo que esto (la detención del Z-40) es evidencia de ello.”

Finalmente, el viernes 19 el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró tajante en una entrevista radiofónica con el periodista Joaquín López Dóriga, quien le preguntó sobre la versión del New York Times.

“Lo dije ayer y lo quiero reiterar contigo. Hay información que está fluyendo en esta coordinación que hemos establecido con Estados Unidos, permanente y cotidianamente, pero no puedo más que decirte que esto (la captura de Treviño) fue un logro en lo particular de la Marina y por supuesto del trabajo de inteligencia del Estado mexicano. Tengo que decirlo con esta claridad. No puedo más que aclarar lo que fue un trabajo eminentemente del Estado mexicano.

“Toda esta determinación de por dónde andaba, por dónde pasaba, qué se esperaba en su traslado fue del Estado mexicano, fue de la Secretaría de Marina, por supuesto con la participación de todas las áreas federales”, remató.

Marcela Turati. ““Tengo años siguiendo sus pasos...””. *Proceso* número 1916, 21 julio 2013. pp. 24-25. <https://www.proceso.com.mx/347926/tengo-anos-siguiendo-sus-pasos>

““Tengo años siguiendo sus pasos...””

El periodista Alfredo Corchado estaba en el Distrito Federal. Attendía una cita con representantes de una editorial. De pronto sintió en su pantalón la vibración de su celular, y aun cuando lo apagaba, el

zumbido persistía. La insistencia al otro lado de la línea le preocupó. Pensó que era una mala noticia. Se disculpó y salió del restaurante. Vio la pantalla y quedó mudo.

“40 captured”. El mensaje era contundente.

Se despidió de los editores. Abordó un taxi, hizo un par de llamadas y cuando confirmó la veracidad del mensaje llamó a The Dallas Morning News, el diario para el que trabaja como corresponsal en México desde hace casi dos décadas, y comenzó a dictar: “Miguel Ángel Treviño Morales, o El 40, líder del brutal cártel paramilitar Los Zetas fue capturado, confirmaron autoridades de ambos lados de la frontera”.

A las 17:21 horas del lunes 15 el portal del diario dio la primicia sobre el capo capturado a las tres de la madrugada de ese día por efectivos de la Marina de México, quienes lo interceptaron en una brecha de Tamaulipas. Cuando llegó a su oficina llamó a la Secretaría de Gobernación para solicitar una confirmación; sus interlocutores parecían desconocer la noticia. Pidió a una de sus fuentes una prueba. Recibió la foto de Treviño con golpes y vivo, y comenzó a difundirla.

Tres horas después el gobierno de México confirmó la información que ya estaba en todos los noticiarios y portales electrónicos del país.

A través de redes sociales muchos periodistas y corresponsales estadounidenses reprodujeron la exclusiva, dando crédito al corresponsal mexicano-estadunidense que ganó la nota; principalmente aquellos que conocían el trasfondo de la relación entre el periodista y el asesino, que desde 2007 han estado pisándose la sombra. Se convirtieron en pesadilla el uno del otro desde que a Corchado lo alertaron: el narcotraficante buscaba matarlo, así que por instinto de sobrevivencia el reportero se allegó de informantes que le permitieran adelantarse a sus movimientos.

El encabezado del diario español El País sintetizó la ironía: “Un periodista amenazado por Los Zetas dio la primicia sobre la captura del Z-40”.

La obsesión entre ambos personajes quedó plasmada en el libro *Midnight in Mexico* (The Penguin Press, New York, 2013), por el que justamente la semana pasada Corchado había viajado al Distrito Federal para cerrar el trato con Random House, que lanzará la versión en español de su libro y festejar con varios colegas el lanzamiento.

La historia comienza en 2007, cuando a Corchado se le notificó la amenaza del Z-40, y se convierte en un viaje en espiral donde el reportero nacido en Durango, hijo de jornaleros migrantes y criado en California y Texas, describe su trayectoria como reportero buscando la esperanza en el México que lo expulsó con su familia. Al sumergirse en sus profundidades se topa con la corrupción y la criminalidad e intenta denunciarlas como si se tratara de un asunto personal.

En ese viaje a través de un país que desciende hacia la oscuridad (como anuncia el subtítulo) observa la diáspora de paisanos –de la que forma parte–, ve el desmantelamiento causado por el Tratado de Libre Comercio, se contagia de la alegría de la llamada transición democrática, observa el regreso del PRI y se da cuenta de la irrupción en la escena del poder de los cárteles de la droga.

Entonces comienzan las amenazas. La primera, por ser el primer periodista en escribir sobre un grupo desconocido llamado La Línea. Con el tiempo se sabría que estaba integrado por policías juarenses al

servicio del Cártel de Juárez. Las siguientes, por husmear en territorio zeta, reportar sobre sus campos de entrenamiento, sus propiedades en Texas, su crecimiento y transformación, hasta llegar al encumbramiento de un sanguinario mexicano-estadunidense: El Z-40.

—¿Por qué tú diste la exclusiva? Causa suspicacia que un diario gringo haya dado la noticia de lo ocurrido en México. ¿Qué te diferenció de los demás? —se le pregunta a Corchado un día después de la captura, cuando algunos analistas habían considerado que la publicación era prueba de la intervención estadounidense.

—Me llegó a mí (la información) porque he seguido varios años con fuentes en ambos lados de la frontera, que han visto a este personaje y el potencial que tiene para destruir comunidades o regiones. Y yo, igual que ellos, lo he seguido. Creo que ha habido mucha confianza entre reportero y fuente y llega un momento en que te llega ese tipo de información y entiendes la importancia.

La entrevista es interrumpida en varias ocasiones. Otros periodistas quieren entrevistarlo.

### **El periodista y sus fuentes**

“Empecé a escribir sobre Los Zetas en 2004 por lo que estaba pasando en la frontera. Había desapariciones de gringos de Laredo a Nuevo Laredo, vimos su penetración en el norte de Texas y vimos cómo una persona migrante se transforma en un criminal en Dallas (...)

“Eso me impactó como periodista y como migrante, la transformación en particular de esta persona (Miguel Ángel). Tengo años siguiendo sus pasos, tanto que a veces siento que hay una sombra en ambos lados, y cuando llegó la noticia no me detuve”, relata.

En las llamadas que recibe siempre le preguntan si sus fuentes fueron estadounidenses. Cuando cuelga comenta asombrado: “¿Por qué tienen esa obsesión con la DEA?” Le pregunto lo mismo y dice que sus informantes no son de esa agencia. Confirmó la noticia con gente de ambos lados de la frontera y supo que el gobierno estadounidense participó en la captura “con inteligencia e información sólida, aunque quizás limitada”.

“Después de 10, 12 años de llevar esta relación yo creo que todavía hay personas que se comunican de ambos lados, gente que comparte información, que comparte inteligencia entre ambos países”, dice.

En *Midnight in Mexico* el periodista expone sus dilemas éticos, los problemas que sus arriesgadas investigaciones le acarrearán con sus familiares y su novia, y sus fuentes de información: lo mismo políticos que ciudadanos comunes, embajadores, policías, desertores de cárteles, traficantes de droga, narcoabogados o lavadores de dinero.

Llama la atención uno a quien identifica como el U.S. Investigator, el equivalente a su “garganta profunda”, ubicado en el libro perfila como alguien que tiene como informantes a autoridades mexicanas y traidores de varios cárteles, que usa hasta más de cinco celulares, uno para cada uno de sus contactos clave con las diferentes organizaciones y cuyas llamadas no duran más de 40 segundos.

En cierto momento “su fuente” se nota decepcionada porque en el verano de 2012 funcionarios calderonistas atraparon a Treviño Morales pero lo dejaron ir; pagó una mordida millonaria. “Se hacen pendejos”, le dijo desilusionado.

La obsesión por el sanguinario Z-40 es compartida por fuente y periodista, y en ese juego de espejos no se sabe quién metió en el juego a quién, si hubo una amenaza real contra el reportero o fue una respuesta a ser “mensajero” de una fuente, si uno usa a otro o ambos se necesitan para mantenerse vivos.

–¿Te dio la noticia el investigador que mencionas en el libro? –se le pregunta a Corchado.

–Fuentes de ambos lados de la frontera –responde.

Verónica Espinosa. “Zacatecas: tensa calma entre zetas y golfos”. *Proceso* número 1917, 28 julio 2013. pp. 18-22. <https://www.proceso.com.mx/348552/zacatecas-tensa-calma-entre-zetas-y-golfos>

### **“Zacatecas: tensa calma entre zetas y golfos”**

Nadie en Zacatecas cree que dure la relativa calma tras la captura del Z-40. Informes de inteligencia militar prevén que, tan pronto se confirme al nuevo jefe de Los Zetas para esta plaza (posiblemente Ismael Nava Cortez, El Ostión, al que la Policía Federal dio por muerto en 2009), desatará una ofensiva contra el Cártel del Golfo para sacarlo del estado. Lo alarmante es que se ha documentado una grave infiltración de las corporaciones policiacas locales, que alimenta los ajustes de cuentas.

ZACATECAS, ZAC.- De dos pisos, derruida su fachada y sin puertas, la casa del empresario Arturo Guardado Méndez, en el número 106 de la avenida Huicot, en Fresnillo, es vigilada para que nadie se acerque a curiosear.

Procesado por su presunta participación en un plan para atentar contra el diputado federal y exgobernador Ricardo Monreal y de su hermano, el senador David Monreal, Guardado tenía al frente, como vecino, a Iván Velázquez Caballero, El Talibán, Z-50 o El 50, quien hasta su captura, en septiembre de 2012, fue uno de los cabecillas de Los Zetas.

Mucha gente en Fresnillo sabía que El 50 vivía ahí hasta que la Marina lo atrapó en San Luis Potosí a raíz de una de las traiciones que cuartearon a la organización criminal, de acuerdo con testimonios contenidos en expedientes sobre Los Zetas –particularmente relacionados con los hermanos Treviño Morales– que están en poder de la justicia estadounidense (Proceso 1916).

Según dichos documentos, Velázquez Caballero fue entregado por Miguel Ángel Treviño luego de que supuestamente aquél se “acercara” al Cártel del Golfo para disputarle al Z-40 el control de San Luis Potosí.

Desde Fresnillo, donde a decir de la Marina llegó a comandar a unas 400 personas, El 50 operó la plaza de Monterrey, aunque antes se había encargado de Nuevo Laredo por una orden de Heriberto Lazcano, de quien fue mandadero al entrar en la organización.

Inconforme con el liderazgo del Z-40, El Talibán lo desafió. Esta división permitió que el Cártel del Golfo desatara una ofensiva por el control de Zacatecas, pero no ha podido arrebatárselo a Los Zetas. Recientemente estos últimos se dejaron ver en algunos de los pueblos más peleados. Se presentaron como el “Cártel del Noreste” y advirtieron: “ya regresamos”. La aparición tendría el propósito de “no calentar las plazas con el otro nombre” y reactivar su presencia en aquellos sitios donde, de acuerdo con informes internos del Ejército, el Cártel del Golfo logró dominar “sólo por un tiempo”.

Por ahora, tras la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, transcurren días de inusitada calma en el estado, luego de meses sangrientos. Se esperan reacomodos por el nuevo liderazgo de Los Zetas y una nueva ofensiva contra el Cártel del Golfo.

De acuerdo con una fuente de inteligencia militar consultada por Proceso, se posicionará en Zacatecas Ismael Nava Cortez, El Ostión, uno de los hombres más cercanos a Omar Treviño Morales, a quien se da como el sucesor natural de su hermano, El Z-40.

A Nava, quien también se hace llamar El Kaibil, se le dio por muerto en abril de 2009, en un enfrentamiento con policías federales ocurrido en Fresnillo. Al informar de su muerte, la Policía Federal aclaró que El Ostión era originario de Oaxaca, no de Guatemala, como se creía al principio, y que posiblemente se trataba de un desertor del Ejército, ya que se hacía cargo del adiestramiento de sicarios y del diseño de estrategias del grupo armado en Zacatecas y Aguascalientes.

Sin embargo, testimonios recabados por este semanario en Zacatecas confirmaron que Nava aparentó su muerte y un mes después se hizo cargo de la operación para sacar a 53 reos del penal de Cieneguillas, todos vinculados a Los Zetas, a fin de que operaran en la región (Proceso 1764).

La cercanía de Nava con Miguel Ángel Treviño –del cual fue guardaespaldas, lo mismo que lugarteniente de Heriberto Lazcano, según la Policía Federal (PF)– sería decisiva para que figure en el primer nivel de la nueva estructura de mando de Los Zetas.

Según la PF, El Ostión tuvo entre sus funciones el acopio, resguardo y mantenimiento de armamento y explosivos. Además era el jefe de Los Zetas en Oaxaca y desde ahí organizó ataques a la comandancia de policía en Acapulco en 2007. Después se dijo que fue abatido en Fresnillo.

Tal como ocurrió con Heriberto Lazcano, no se registró evidencia concluyente de que El Ostión hubiera muerto. No se emitió desmentido alguno cuando este semanario dio a conocer las versiones de que no falleció y que lo sitúan al frente de operativos estratégicos de Los Zetas, como la mencionada liberación de reos del penal de Cieneguillas.

### **Mayor operatividad**

Aunque el gobernador priista Miguel Alonso Reyes solicitó reforzar la presencia militar en el estado, esto no ha frenado la disputa de Los Zetas y el Cártel del Golfo por el territorio zacatecano. Secuestros, extorsiones, ejecuciones y balaceras marcaron los meses posteriores a la captura del Z-50.

Ambas organizaciones criminales infiltraron las policías municipales y estatal, por lo cual informes internos del Ejército prevén que continuarán los ajustes de cuentas. Los mismos documentos establecen que ambos cárteles recurren ahora a personas más capacitadas para vigilar y controlar las “narcotienditas”, así como para monitorear las rutas de la droga, en sustitución de los halcones.

Personeros de los grupos criminales intentan reclutar al personal que ingresa a las nuevas bases de la Secretaría de la Defensa Nacional (una de ellas en Fresnillo) apenas cumplen los primeros meses de adiestramiento reglamentario. En algunos casos lo consiguen.

La autoridad militar tiene documentados casos de sospechosos detenidos en flagrancia por el Ejército o la Marina y entregados formalmente a las autoridades competentes de Zacatecas, pero que después aparecen ejecutados y con narcomensajes.

Un informe castrense consigna que la madrugada del 14 de abril último varios hombres armados llegaron a la salida poniente de Fresnillo, entronque con la carretera a Valparaíso y Jerez. Llevaban cautivos a tres hombres, a quienes ejecutaron de dos tiros a cada uno.

Al poco tiempo de que se fueran, se presentaron en el lugar policías municipales, quienes reportaron la ejecución de las tres víctimas, pero en vez de asegurar la escena del crimen huyeron. Momentos después, otro grupo armado se llevó los cadáveres en varias camionetas.

Cuando llegaron al cruce carretero policías ministeriales y estatales reportaron a sus superiores que ya no había cuerpos. “Esto ya ha pasado muchas veces y en varios municipios”, admite un militar a Proceso; dice que al menos desde febrero la Marina y el Ejército han detectado este tipo de incidentes.

La capital zacatecana es una de las más vapuleadas por ambos bandos. La madrugada del pasado 18 de abril, en un bar de la avenida Hidalgo, a unos pasos de la Plaza de Armas (donde se ubica el Palacio de Gobierno), una riña derivó en el ataque de un grupo armado, en el que oficialmente murió una persona y otra quedó herida. Sin embargo, personal del Ejército halló en el lugar más de 600 casquillos percutidos: 99 de armas calibre 223 y cerca de 550 de calibre 762, así como cargadores desabastecidos de AK-47, entre otras evidencias.

### **El Cártel del Noreste**

El 28 de abril, en Fresnillo dos mujeres y dos hombres aparecieron ejecutados de día en el bulevar José Varela Rico, muy cerca de la ferretería Ferrehome, del empresario Arturo Guardado Méndez, actualmente procesado por el presunto complot contra los Monreal Ávila.

A un costado de los cadáveres, los sicarios dejaron un supuesto mensaje del Cártel del Golfo contra Los Zetas: “Hay tienen sus halcones y centrales mugrosos y a todos los miembros Zetas que les sirva de ejemplo lo que les pasó a estos”.

En el reporte de la Sedena este hecho no termina ahí: “Extraoficialmente –dice el documento– se tuvo información de parte del personal de la Marina Armada de México que las dos mujeres recientemente habían sido detenidas con armas, drogas y vehículos y puestas hacía dos días a disposición ante la autoridad correspondiente, sin especificar a quién”.

Sus nombres eran María Guadalupe Alvarado Martínez, de 17 años, y Guillermina Rojas Nieto, de 38.

En cifras del Ejército, de enero a julio hubo por lo menos 25 enfrentamientos de militares y policías contra grupos armados, con un saldo de “84 delincuentes, cinco autoridades civiles, un militar y un civil muertos”.

En el mismo periodo cuentan 167 homicidios relacionados con la delincuencia organizada, 44 de los cuales se cometieron en Fresnillo y 31 en la capital del estado. También registran 21 secuestros (siete en la capital) y 53 levantones, nueve de ellos en Fresnillo.

A lo anterior suman el hallazgo frecuente de osamentas y restos humanos en predios, tiros de mina y campos en Valparaíso, Sombrerete, Villanueva, Fresnillo, Río Grande, Calera y la capital.

Por lo pronto, se sabe que las Fuerzas Federales de Apoyo en el territorio zacatecano están en alerta, no sólo por la previsible reacción de los narcos por la captura del Z-40, sino porque sus informes revelan un reposicionamiento de Los Zetas en territorios antes dominados por el Cártel de Sinaloa o que les habían sido arrebatados por el Cártel del Golfo, como la región del Cañón de Juchipila, desde la Sierra de Morones hasta Tepechitlán, en los límites con Jalisco.

Esta versión coincide con la presencia de un supuesto Cártel del Noreste, que según las fuentes militares sería otro nombre con el que Los Zetas tratan de recuperar las pocas plazas que el Cártel del Golfo les arrebató desde la capital hacia el sur del estado, porque el norte no cambió de manos.

Los primeros mensajes atribuidos a este cártel se vieron en La Laguna, en abril pasado. Uno de ellos lo dejaron junto al cuerpo de una mujer que escoltaba al director de Seguridad Pública de Saltillo, el teniente Adelaido Flores, al que se acusó de “querer darle la plaza a los chapos”.

Mensajes similares se incluyen en los reportes del Ejército sobre Zacatecas, como el encontrado el 12 de mayo en Trancoso, a la altura de la carretera federal 45, en un bote de basura y junto al cuerpo desmembrado de un hombre después identificado como Mario Alberto Rivera, de 22 años. Decía:

“...Ahí está su pinche comandante al que mandaron a calentar las plazas, éste es el mentado Piris el que mató al Federal de Caminos en Fresnillo. Aquí anda el cártel del Noreste, nosotros no robamos ni secuestramos ni nos metemos con ningún tipo de gobierno, ya estamos en Zacatecas de nuevo y venimos a terminar con este tipo de ratas, ahí están sus pinches golfitas que se murieron debiéndoles 5 quincenas. Atentamente CDN.”

El 6 de junio, sobre los cuerpos de tres hombres abandonados en la avenida Hidalgo del centro de Fresnillo –uno de ellos decapitado– aparecieron advertencias para el Cártel del Noreste:

“Bienvenido al Estado de Zacatecas cártel Noreste, por lo visto viene a borrar con cabeza de cordero, a poco con cambiar unas cuantas letrazzz va a borrar su pasado de mugrozzzz, ustedes son y seguirán siendo la escoria de la sociedad, el estado ya abrió los ojos y ya están viendo quién es quién, no hablen de secuestros, extorsiones, violaciones, son los maestros en la materia, dejaron al estado sumido en la miseria y la psicosis, qué podemos robar si ustedes desde los limosneros para arriba no dejaron nada sin cepillar jajajajaja. Aquí estamos listos para la batalla por un Zacatecas libre del Norestezzzzz...Atte. CDG limpiando lo podrido del estado.”

Una segunda manta presentaba un mensaje dirigido a los policías preventivos de Fresnillo; se les hizo saber que “también hay balas” para ellos: “Sabemos al 100% que ustedes están a la orden del Cachetón, el Diablo y el 28... la guerra es con la última letra”.

El 12 de junio se notificó la localización de dos cuerpos tirados en la carretera Fresnillo-Jerez. Los policías encontraron manchas de sangre, 49 casquillos percutidos de un rifle 762 y un cartón que decía: “Los Zetas y el Cártel del Noreste; a todas las putas golfas esto les va a pasar”.

El informe militar consignó: “Al lugar de los hechos arribaron las autoridades sin encontrar los cuerpos”.

Rafael Croda. “La caída del “Z-40” fortalece al “Chapo” en Colombia”. *Proceso* número 1917, 28 julio 2013. pp. 20-21. <https://www.proceso.com.mx/348786/la-caida-del-z-40-fortalece-al-chapo-en-colombia-2>

### “La caída del “Z-40” fortalece al “Chapo” en Colombia”

BOGOTÁ (Proceso). - La captura de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, provocará una rearticulación del narcotráfico internacional y propiciará la reconfiguración de alianzas entre los cárteles mexicanos de la droga y sus abastecedores colombianos de cocaína, informan a Proceso fuentes de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (PNC).

Puntualizan que la caída del máximo líder de Los Zetas podría fortalecer la red de proveedores colombianos del jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien absorbería parte de las rutas de abastecimiento controladas por Treviño Morales.

“El Chapo es el capo mexicano que más negocios tiene con narcotraficantes colombianos y desde hace meses viene reforzando sus conexiones con Los Urabeños –tradicionales socios de Los Zetas–. Por ello, no descartamos que aproveche esta oportunidad para terminar de sellar una alianza a mayor escala”, explica un oficial de la PNC.

Para el director de la PNC, general José Roberto León Riaño, la posibilidad de que El Chapo Guzmán amplíe sus alianzas con narcotraficantes colombianos tras la captura de Treviño Morales “nos genera una alerta y es algo de lo que tenemos que estar muy pendientes”.

De acuerdo con el militar, la detención del Z-40, ocurrida en el norte de México el lunes 15 de julio, es “un golpe importante por el peso de Los Zetas en el narcotráfico internacional, pero ahora es necesario ver quién o quiénes serán los relevos y enfocar todos los esfuerzos en su captura y en el desmantelamiento de esa estructura criminal”.

Y es que la violencia generada en la disputa por el liderazgo de Los Zetas, advirtió, puede llegar más allá de las fronteras de México, “porque hay un proceso de reacomodamiento de cabecillas, y esta organización criminal tiene una influencia regional que abarca varios países adonde podría extenderse la reyerta”.

### Los socios

Reportes de inteligencia de la PNC ubican a Los Urabeños, la mayor organización delictiva de Colombia y la única con presencia en todo el territorio nacional, como los principales socios colombianos de Los Zetas.

El Z-40 había afianzado una estrecha relación de negocios con Dairo Antonio Úsuga David, Otoniel, jefe de Los Urabeños, quien enfrenta el asedio permanente de unidades de élite de la policía que han estado a punto de atraparlo en varios operativos. Según los informes, el acoso lo ha hecho perder parte del control de esa banda criminal.

Otoniel no sólo era el principal socio del Z-40 en este país, sino también su principal proveedor de cocaína, confió otra fuente consultada.

El brazo derecho del capo colombiano era su primo Alexander Montoya Úsuga, El Flaco, capturado en julio de 2012 en la ciudad hondureña de La Ceiba, ubicada en el Caribe, desde donde coordinaba el envío de los cargamentos de cocaína para Los Zetas. Según la PNC, este lugarteniente era el principal enlace entre Otoniel y el Z-40.

En el momento de ser capturado en un lujoso hotel de La Ceiba, El Flaco preparaba un viaje a México para esconderse allí bajo la protección de Los Zetas, dijeron las fuentes.

Por su parte, Otoniel asumió el papel de jefe de Los Urabeños tras la muerte de su hermano Juan de Dios Úsuga David, Giovany, quien lideró la organización hasta ser abatido por comandos Jungla de la policía en una finca del noroccidente colombiano el 1 de enero de 2012.

Los dos hermanos, herederos de la estructura criminal del extraditado narcotraficante Daniel Rendón Herrera, Don Mario, fueron guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) y después se pasaron a las filas de los grupos paramilitares de extrema derecha, germen de las bandas criminales colombianas que hoy controlan el negocio del narcotráfico.

Reportes de la PNC asientan que otro importante socio colombiano del Z-40 es Víctor Ramón Navarro Serrano, Megateo, jefe del último reducto guerrillero del EPL y quien durante los últimos años asumió el control del tráfico de drogas en la nororiental región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.

Megateo se encarga de sacar los cargamentos de droga del Catatumbo, donde se cultiva y se procesa la hoja de coca, y los envía a Los Zetas a través de Venezuela. Así lo afirma un oficial de la policía colombiana, cercano a las investigaciones contra ese capo responsable de la muerte de más de 100 uniformados en esa rica región selvática.

Uno de nuestros informantes consideró que, tras la aprehensión de Treviño Morales en México, Megateo no tendría ningún problema con los sucesores del líder de Los Zetas o de su archirrival, el Cártel de Sinaloa, pues el peculiar guerrillero y capo del narcotráfico se ha caracterizado por su pragmatismo y por hacer negocios con todo tipo de organizaciones criminales, aunque éstas sean rivales entre sí. “No sería extraño que Megateo se convierta en abastecedor del Chapo Guzmán, quien tiene contactos en esa región (el Catatumbo)”, sostuvo.

### **Ocupar vacíos**

El análisis de inteligencia realizado por la PNC tras la captura del Z-40 plantea interrogantes sobre la manera en que los diferentes grupos delictivos llenarán los vacíos dejados por la salida del líder de Los Zetas del escenario regional del narcotráfico.

“La captura de este tipo de capos, con un rol protagónico en organizaciones delictivas de gran alcance, genera un proceso de transformación en las estructuras criminales bajo su mando. Es normal que venga una pérdida de cohesión –en el Cártel de Los Zetas–, una fragmentación y un ciclo de violencia producto de la lucha por el control”, expuso una de las fuentes consultadas.

Según la PNC, diferentes facciones de Los Zetas intentarán asumir el control de las rutas colombianas que tenía El Z-40 en sociedad con bandas criminales de este país sudamericano, aunque para ello necesitarán de un intermediario, ya sea mexicano o colombiano.

A pesar de que Los Urabeños tienen una estrecha relación de negocios con Los Zetas, la batida de la policía colombiana en su contra y la pérdida de liderazgo de Otoniel ocasionaron que algunas facciones de esa organización criminal ganaran en autonomía. Incluso algunas de ellas ya tienen negocios con el Cártel de Sinaloa, al que abastecen de cocaína en algunas regiones del suroccidente del país.

El Chapo Guzmán tiene presencia en Colombia a través de personeros que actúan como sus “gerentes internacionales”, lo cual le da una ventaja sobre Los Zetas, sus enemigos a muerte. Esta prerrogativa se une a la pérdida de cohesión de Los Urabeños, quienes cuentan con más de 2 mil 300 hombres en todo el territorio y tienen presencia en los 120 mayores municipios del país, estimó la PNC.

Los socios tradicionales del Chapo Guzmán en Colombia han sido Los Rastrojos, la segunda banda criminal más poderosa de esta nación y rival acérrimo de Los Urabeños. La guerra entre ambos grupos ya dejó más de 2 mil muertos en todo el territorio, y en algunas zonas dio paso a pactos de coexistencia aprovechados por el Cártel de Sinaloa.

En medio de esta disputa, de acuerdo con registros de la PNC, El Chapo Guzmán decidió establecer alianzas con Los Urabeños sin distanciarse de Los Rastrojos.

Otro factor que facilitaría al Chapo Guzmán asumir parte de las rutas y asociaciones colombianas que deja al garete El Z-40 es el “proceso de transformación criminal” que vive Colombia por los duros golpes a las bandas, los cuales han dado paso a “autonomías delictivas derivadas de los vacíos dejados por los capos abatidos o capturados”.

En abril pasado, la PNC capturó al segundo hombre de Los Urabeños, Francisco José Morela Peñate, El Negro Sarley, quien a decir del general León Riaño era el principal articulador del narcotráfico de esa banda criminal. En 2012, las fuerzas del orden abatieron a Giovany y capturaron al Flaco y a Henry de Jesús López, Mi Sangre, quien cayó en Argentina mientras preparaba una reunión con enviados del Z-40.

A su vez, Los Rastrojos perdieron el año pasado a sus principales cabecillas: Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo, y a los hermanos Luis Enrique, Javier Antonio y Juan Carlos Calle Serna, Los Comba. Fueron capturados o se entregaron a la justicia.

“Esta batida ha provocado independencia y autosuficiencia de redes locales de las dos principales bandas criminales de Colombia, lo que podría aprovechar El Chapo Guzmán para avanzar en la hegemonía que ejerce en varias rutas de la cocaína. Esto nos obliga a estar alertas”, insistió una fuente de la PNC.

J. Jesús Esquivel. “Washington, marginado del “Z-40””. *Proceso* número 1918, 4 agosto 2013. pp. 20-22. <https://www.proceso.com.mx/349143/washington-marginado-del-z-40>

### **“Washington, marginado del “Z-40””**

WASHINGTON. - El gobierno de Estados Unidos no ha solicitado al de México la extradición de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, líder de Los Zetas, y ningún agente o funcionario

estadunidense ha tenido acceso al narcotraficante, según pudo saber Proceso a través de un funcionario de la PGR.

En entrevista telefónica desde la Ciudad de México, el funcionario de la PGR, quien habló del caso bajo la condición del anonimato para “evitar problemas con el gobierno estadounidense”, sostiene que el gobierno de Barack Obama tiene necesidad y urgencia de interrogar al Z-40 por todo lo que este criminal pueda saber sobre las operaciones del narcotráfico, de las redes de tráfico de personas, lavado de dinero y otras actividades criminales que se realizan en México, pero repercuten en Estados Unidos.

“Lo más importante, y lo que siempre hacen los agentes de la DEA cuando tienen acceso a un capo mexicano del nivel del Z-40, es interrogarlo sobre la relación que tienen los grupos del narcotráfico con las policías mexicanas, desde las municipales hasta la federal, pero sobre todo con la clase política del país. De este tipo de información que obtiene la DEA, aunque no la verifique, elabora investigaciones y encausamientos judiciales”, destaca el funcionario de la PGR.

El Z-40, capturado por elementos de la Secretaría de Marina la madrugada del pasado 15 de julio, a las afueras de Nuevo Laredo, Tamaulipas, enfrenta varias acusaciones en Estados Unidos por delitos como secuestro, tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, entre otros.

Consultada por este semanario, la Secretaría de Gobernación insistió oficialmente en que en el operativo de inteligencia de la Marina que llevó a la aprehensión del Z-40 no participaron agencias federales estadounidenses, como la DEA, el FBI o el Pentágono (Proceso 1916).

Desde el 1 de diciembre de 2012, al arrancar el sexenio de Enrique Peña Nieto, su gobierno cambió la estrategia y enfoque de cooperación con las agencias federales de aquel país que tienen presencia en México. El cambio se aplicó de manera especial en la relación con la DEA.

En el marco de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Felipe Calderón permitió que las agencias estadounidenses, de manera indirecta, dirigieran prácticamente todas las operaciones contra el narcotráfico. Desde las Oficinas Binacionales de Inteligencia, una en la Ciudad de México y la otra en Escobedo, Nuevo León, la DEA, la CIA, el FBI, el Pentágono y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos manejaban a su antojo todos los sistemas de inteligencia dirigidos a la lucha contra el narco en territorio mexicano.

De acuerdo con el funcionario entrevistado, “la procuradora Marisela Morales le dio licencia a la DEA para hacer lo que quisiera dentro de la PGR. Sus agentes tenían incluso acceso a las líneas de investigación que se realizaban y a las averiguaciones previas, pero con la llegada del nuevo gobierno se puso un alto a esos atropellos”.

Y explica que a fin de reestructurar los sistemas de inteligencia de México y la relación con las agencias de Estados Unidos, el gobierno de Peña Nieto congeló la cooperación con la DEA, y mantuvo parcialmente la colaboración con la CIA y el FBI.

“Pocos tomaron nota de esto, pero le recuerdo que el día de la captura de Treviño Morales, por primera vez en muchos años, en México no estuvo presente ningún agente de la DEA ni de otra dependencia de Estados Unidos. Tampoco estuvieron al momento de hacer la prueba de verificación de la identidad al detenido”, sostiene la fuente de la PGR.

## No lo extraditarán “por ahora”

El gobierno de Peña Nieto desconfía de los agentes de la DEA y de sus métodos de investigación, pero aún más de los mecanismos y formas que utilizan para elaborar los informes confidenciales que envía de México a Washington, con base en los cuales se formulan cargos o señalamientos contra narcotraficantes y políticos.

“El gobierno de Estados Unidos ha pedido acceso a Treviño Morales. Se les ha negado porque la PGR y el comisionado nacional de Seguridad (Manuel Mondragón y Kalb) no quieren que en este momento los agentes de la DEA intervengan en el caso”, reitera el funcionario entrevistado.

Treviño Morales ingresó el 20 de julio al Centro Federal de Reclusión número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y es ahí donde el gobierno de Estados Unidos ha solicitado tener acceso a él.

Al relevar Jesús Murillo Karam a Marisela Morales en la PGR, el gobierno de Peña Nieto descubrió la intervención de los agentes de la DEA en muchas de las investigaciones más delicadas y sensibles: “Una de las primeras decisiones que se tomó al respecto fue cerrarles inmediatamente todo el acceso que la exprocuradora Morales les había concedido”, comenta el funcionario de la PGR.

—¿Por qué le tenía tanta confianza la exprocuradora a la DEA? —se le plantea al entrevistado, con varios sexenios en la PGR.

—Porque a través del informante Jennifer (Roberto López Nájera), que le puso la DEA en charola de plata, se puso en marcha la Operación Limpieza y ello le ayudo para saldar cuentas con varios enemigos suyos y de la gente que la protegía a ella en la Secretaría de la Defensa, o de sus colaboradores más cercanos dentro de la PGR.

—¿Quiénes?

—Noé Ramírez Mandujano, Javier Herrera Valles y el general Tomás Ángeles Dauahare, por ejemplo.

Conforme al recuento de hechos que hace el entrevistado, en la PGR dirigida por Morales “se elaboró una línea de investigación, no una averiguación previa”, sobre una presunta relación entre Ramírez Mandujano y Treviño Morales.

“En la PGR creemos que la DEA quiere el acceso a Treviño Morales, entre otras cosas, para darle seguimiento a esta línea de investigación de la cual ellos fueron la fuente básica para que Morales autorizara su elaboración”, insiste el funcionario.

—¿Por qué se detuvo la línea de investigación sobre la presunta relación del Z-40 con Ramírez Mandujano? —pregunta el reportero.

—Porque las declaraciones de Jennifer sobre la relación de Ramírez Mandujano con el Cártel de Sinaloa se las garantizó la DEA a la procuradora Morales... y ya ven lo que pasó.

El entrevistado afirma que “por ahora, y en el corto y mediano plazo”, no hay planes para entregar a Treviño a la justicia estadounidense. Dice que la prioridad del gobierno mexicano es interrogar al máximo al Z-40 sobre todo tipo de actividades criminales en las que están inmiscuidos Los Zetas.

Reitera la necesidad de averiguar el paradero de miles de personas desaparecidas, la ubicación de rutas y plazas del trasiego de drogas, las alianzas y confrontaciones con otros grupos criminales, “y obviamente darle seguimiento a lo que pueda decir Treviño Morales sobre la presunta relación de Los Zetas con políticos, policías y funcionarios de todos los niveles del gobierno, e incluso en el extranjero”.

También descarta que sea una decisión invariable la negativa del gobierno mexicano a darle acceso al Z-40 a la autoridad estadounidense: “Esto puede cambiar, dependiendo de la actitud que tome Washington sobre las nuevas restricciones que se impondrán a sus agencias de inteligencia y a la DEA en México (...) Primero tendrán que ser menos injerencistas en los asuntos nacionales y, en segundo lugar, modificar sus métodos de trabajo e investigación en el territorio mexicano”.

Proceso pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos aclarar si solicitó o no al gobierno mexicano la extradición de Treviño Morales. Al cierre de esta edición, la respuesta no había llegado.

S/A. “El Cártel del Golfo se desgarrá...”. *Proceso* número 1921, 25 agosto 2013. pp. 30, 31, 33.  
<https://www.proceso.com.mx/350941/el-cartel-del-golfo-se-desgarra>

### “El Cártel del Golfo se desgarrá...”

Las sucesivas capturas de dirigentes del Cártel del Golfo en los últimos años han alimentado las pugnas internas y el acelerado debilitamiento de la otrora poderosa organización delincriminal. De acuerdo con especialistas, su zona de influencia es estratégica para el trasiego de drogas a Estados Unidos, por lo que otras bandas se la disputan con todo su poder de fuego: Los Zetas, que pelean por ella a tiros, y el grupo del Chapo Guzmán, que entró en la región gracias a una alianza con los golfos.

REYNOSA, TAMPS. - Luego de la captura de Eduardo Costilla, El Coss, y de Mario Cárdenas Guillén, el Cártel del Golfo (CDG) ya no operaba como una organización centralizada sino como una “federación de feudos” debido a las pugnas internas que aquejan a este grupo criminal, lo hacen perder influencia cada día y lo debilitan frente a sus rivales.

Incluso ahora sus embestidas contra Los Zetas dependen de la alianza del CDG con el grupo de Joaquín El Chapo Guzmán –el Cártel de Sinaloa–, el cual gana poder e influencia tras la detención de Mario Ramírez Treviño, Comandante X-20, Mario Pelón o El Pelón.

Fuentes militares y un exintegrante del CDG señalan lo anterior y agregan que El Pelón no fue capaz de imponerse como líder absoluto de la organización. Lo que sí pudo hacer, dicen, fue ampliar la zona de influencia del cártel a Monterrey y a dos municipios de la frontera tamaulipeca: Miguel Alemán y Río Bravo.

“El Cártel del Golfo ha sido el grupo que más influencia ha perdido en los últimos años debido principalmente a sus divisiones”, asegura un exmiembro de ese grupo, quien aceptó hablar con Proceso a condición de mantener el anonimato.

Precisa que las pugnas entre sus dirigentes han dañado más al CDG que los ataques de Los Zetas o las capturas que han realizado los militares.

La peleas entre sus líderes han hecho que ese cártel pierda poder y ahora sólo controla realmente tres ciudades de Tamaulipas y una de Nuevo León: Matamoros (cuna del grupo y controlada por la familia Cárdenas), Tampico (dominada por una facción que tenía serias diferencias con El Pelón), Reynosa y Monterrey, donde le arrebataron zonas estratégicas de la ciudad a Los Zetas.

### **Historia antigua**

Las pugnas internas comenzaron en 2003, inmediatamente después de la captura de Osiel Cárdenas Guillén, confesó el año pasado Rafael Cárdenas Vela, El Junior, en una comparecencia ante la Corte del Sur de Texas, en Brownsville, durante el juicio contra Juan Roberto Rincón Rincón, El X-5 o El Primo, exjefe de la plaza de Río Bravo del CDG.

El Junior contó que en 2010 El Coss quedó al mando de la organización luego de la muerte de Ezequiel Cárdenas, Tony Tormenta. Cárdenas Vela incluso acusó a Eduardo Costilla de haber filtrado a la Armada la ubicación del capo –refugiado en una casa en Matamoros– ejecutado por los marinos.

Cárdenas Vela –sobrino de Tony Tormenta y de Osiel Cárdenas Guillén– también dijo que en marzo de 2011 él mismo se hizo cargo de la plaza de Matamoros con respaldo del Coss, pero éste tenía a sus capos “favoritos”, entre ellos José Luis Zúñiga Hernández, El Güicho, y Juan Roberto Rincón, El X-5.

Cuando El Junior tomó el control de Matamoros corrió de la plaza al Güicho, lo que ahondó la división en el cartel. Zúñiga huyó a Estados Unidos en octubre de 2011 junto con Rincón Rincón. Al cruzar la frontera fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas cerca del puente internacional de Los Indios.

Después Cárdenas Vela y El Pelón –entonces libre– investigaron el asesinato de Samuel Flores Borrego, El Metro-3 (cabeza de Los Metros –uno de los subgrupos del cártel– y quien aspiraba a dirigir el CDG), ocurrido el 2 de septiembre de 2011 y también atribuido al Coss. “Fue su culpa que lo mataran”, dijo El Junior ante los fiscales.

Las pugnas del cártel también obligaron al Junior a huir de Matamoros y refugiarse en la vecina Brownsville, Texas; las Fuerzas Armadas descubrían y atacaban constantemente sus refugios y él estaba seguro de que El Coss filtraba sus ubicaciones.

El 19 de octubre de 2011 El Junior fue detenidos por una nimiedad: una infracción de tránsito en la texana Isla del Padre. Se declaró culpable de poseer y distribuir narcóticos y negoció que le retiraran los cargos de lavado de dinero e inmigración ilegal.

Las divisiones siguieron y el pasado 10 de marzo tuvo lugar en Reynosa una más de las batallas entre los dos grupos del CDG que se disputan el control de esa plaza, estratégica para el trasiego de enervantes a Estados Unidos.

Las facciones leales al Pelón se enfrentaron durante unas tres horas con sicarios de Miguel El Gringo Villarreal, otro capo en ascenso y oriundo de Texas; el tiroteo terminó con un saldo de unas tres decenas de muertos. Esa noche la ciudad fue un caos debido a numerosos bloqueos viales y a los enfrentamientos protagonizados por sicarios que se desplazaban en convoyes de hasta 20 camionetas.

“Los enfrentamientos iniciaron cuando Mario Pelón dio la orden a sus estacas de borrar todos los vestigios del Gringo Villarreal y les prometió que todo lo que incautaran sería botín de guerra”, contó una fuente de la policía mexicana al diario The Monitor, de McAllen, Texas.

En la actualidad el CDG está fraccionado en tres grupos: El que comandaba Mario Pelón en Reynosa; el de Matamoros, dirigido por Homero Cárdenas, y el poderoso bando de Tampico, que encabeza el Comandante 14, quien pretende la dirección absoluta del cártel y presuntamente es apoyado por los matamorenses.

Trascendió que la captura del Pelón derivó de información filtrada al Ejército por las fracciones de Matamoros y Tampico.

### **La mano del “Chapo”**

Por su parte oficiales de la IV Región Militar consideran que la ofensiva del CDG contra Los Zetas en Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas es posible sólo gracias a su alianza con el Cártel de Sinaloa.

Este año los sicarios del CDG y del Chapo Guzmán arreciaron sus ataques contra Los Zetas en Fresnillo, Guadalupe y Sombrerete, Zacatecas. El escenario se repite en algunas zonas de Coahuila, donde buscan arrebatarse plazas estratégicas como Torreón o Saltillo.

Pero las batallas más frecuentes y sanguinarias ocurren en Tamaulipas, principalmente en la zona central del estado.

En semanas recientes han ocurrido enfrentamientos y asesinatos masivos en municipios como Victoria, El Mante, Jiménez, Abasolo e Hidalgo. Incluso en la región de Jiménez-Abasolo alrededor de 600 ejidatarios tuvieron que abandonar sus tierras y viviendas por las continuas balaceras y ataques directos a la población.

En El Mante la ofensiva contra Los Zetas –que aún controlan esa plaza– la encabeza el grupo del Chapo.

El exintegrante del CDG entrevistado por este semanario asegura que sin el apoyo del Cártel de Sinaloa, aquella organización no tendría capacidad de fuego contra su exbrazo armado y que si siguen sus divisiones y su debilitamiento, terminará por convertirse en un apéndice del grupo del Chapo Guzmán.

Emilio Godoy. “Amenazados, miles de mexicanos buscan asilo en Estados Unidos”. *Proceso* número 1927, 6 octubre 2013. <https://www.proceso.com.mx/354600/amenazados-miles-de-mexicanos-buscan-asilo-en-estados-unidos>

### **“Amenazados, miles de mexicanos buscan asilo en Estados Unidos”**

Para los defensores de los migrantes mexicanos que buscan asilo político en Estados Unidos debido a la violencia en México, el país vive una “catástrofe humanitaria”. Los desplazamientos, dicen, no han dejado de crecer desde 2008 y se cuentan por miles. Pero, lejos de atender a los solicitantes, las autoridades estadounidenses les ponen innumerables obstáculos. Uno de los casos críticos es el del

exsoldado Víctor Hugo Tapia Madrigal y el del empresario zacatecano Antonio Medina, ambos amedrentados y agredidos físicamente por Los Zetas.

Víctor Hugo Tapia Madrigal padeció secuestro, amenazas y persecución por parte de Los Zetas. Eso lo llevó a buscar refugio en 2008 en Estados Unidos, donde lucha en los tribunales de ese país para lograr el estatus de asilado político.

El de Tapia Madrigal, quien llevaba tres años en el Ejército, es uno de los cientos de casos de connacionales que cruzaron la frontera para escapar de la violencia desatada por la llamada guerra contra el narcotráfico durante la Presidencia de Felipe Calderón. Ese fenómeno, que se agudizó desde 2008, hoy inunda los tribunales de Estados Unidos y preocupa a las organizaciones de derechos humanos de ambos países.

El 15 de mayo último un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito, integrado por los jueces William A. Fletcher, Raymond C. Fisher y Raymond J. Dearie, determinó que la Oficina de Apelaciones Migratorias (BIA, por sus siglas en inglés) revisara el caso de Tapia, según el legajo 10-73700 consultado por Proceso.

Tapia ingresó al Ejército en 2005, cuando tenía 18 años. Después de un entrenamiento básico fue asignado a una base militar en Jalisco, donde participó en operaciones contra el narcotráfico durante dos años y medio. A mediados de 2007 tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a un jefe regional de Los Zetas y a nueve sicarios de esa organización.

Y aunque Tapia no participó en el operativo, apareció en televisión cuando vigiló el traslado del grupo del poblado donde fue capturado a Guadalajara.

Poco después pidió un permiso para descanso y salió de la base militar. Ya en la calle, dos enmascarados lo secuestraron en la parada del camión. Le cubrieron la cabeza y lo introdujeron en una camioneta, donde comenzaron a golpearlo con sus puños, botas y objetos contundentes. Le dijeron que lo iban a matar por su participación en el traslado de los zetas capturados.

Veinticuatro horas después fue liberado. Sus captores le pidieron informar a su comandante, Fortino Castillo León, que dejara ir a los sicarios; de lo contrario, serían ejecutados. El militar no le creyó.

Luego de un día de recuperación, Tapia fue comisionado durante tres meses a la localización y destrucción de sembradíos de mariguana. Al regresar a su base supo que los soldados que detuvieron a los zetas habían sido decapitados.

Abandonó las Fuerzas Armadas y se refugió durante unos meses en la casa de su familia. Pero cuando se enteró de la ejecución del comandante Castillo, huyó a otro pueblo. Meses después, ya en 2008, unos desconocidos le dispararon cuando caminaba por la calle. Entonces optó por irse a Estados Unidos.

En 2009 las autoridades de ese país iniciaron un procedimiento de deportación contra Tapia, quien pidió asilo político y tramitó un recurso para postergarla y ampararse bajo la Convención contra la Tortura, vigente desde 1987.

Para el abogado Carlos Spector –representante legal de solicitantes de asilo en el país vecino y quien ganó el primer caso en 1991–, situaciones como la de Tapia son parte de una “catástrofe humanitaria”.

“Sigue viniendo gente de México y el gobierno estadounidense hace todo lo posible por desanimarla. En el puente fronterizo incluso la regaña; luego viene su detención prolongada. El mensaje para la comunidad mexicana es: Si pides asilo, te van a dar bote”, comenta el abogado a Proceso vía telefónica.

Fundador en 2012 de la organización Mexicanos en Exilio, Spector representa a 250 personas, de las cuales sólo les cobra honorarios a unas cuantas. Con frecuencia, dice, activistas y defensores de derechos humanos de Michoacán, Coahuila y Veracruz le llaman para preguntarle sobre los procedimientos legales para buscar asilo.

En enero del año pasado, él logró que Saúl Reyes Salazar y su familia obtuvieran ese estatus, luego de que seis de los miembros de ésta fueron asesinados impunemente entre 2008 y 2011.

La activista Cipriana Jurado, de Ciudad Juárez, también obtuvo el asilo en 2011. Desde 2008 estuvo amenazada de muerte por protestar contra el despliegue militar en esa ciudad fronteriza.

### **Otro récord nefasto**

Las estadísticas ilustran la magnitud del problema. Si en 2004 México ocupaba el escalón 21 en la lista en materia de refugiados, en 2007 ya era el número siete, detrás de Irak, Rusia, China, Serbia, Pakistán y Somalia.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el año fiscal 2007 ese país recibió 3 mil 133 solicitudes mexicanas; sólo aceptó 49. Sin embargo, en 2008 empezó la espiral que aún no cierra su curva: se registraron 3 mil 650 aplicaciones, de las cuales sólo 73 fueron aceptadas. En 2009 se mantuvo ese ritmo: 3 mil 855 solicitudes y 65 aceptaciones; en 2010 fueron 5 mil 98 peticiones, 49 de ellas aceptadas.

Para 2011 la estadística siguió escalando: 7 mil 616, de las que 107 resultaron positivas; en 2012 se recibieron 9 mil 206 peticiones; 126 fueron concedidas. Entre octubre de 2012 y junio pasado la cifra saltó a 14 mil 610 solicitudes; según los expertos, las aceptaciones no superan 5%.

Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, sostiene que este fenómeno no tiene precedentes. Antes, dice, cuando en Estados Unidos se hablaba de exiliados, por lo general se pensaba en africanos, asiáticos o sudamericanos.

“El sistema estaba hecho para lidiar con otros, menos con mexicanos –expone–. Solían ser refugiados económicos, gente buscando trabajo. Y tiene que ver no sólo con la existencia de guerra, cárteles y grupos criminales, sino también con la omisión del gobierno mexicano y sus aparatos de seguridad en su deber de proteger a los ciudadanos. La gente sale porque el Estado no puede protegerlos.”

Ariadna Estévez, integrante del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (CISAN-UNAM), asegura que la mayoría de los jueces objeta las peticiones por no apearse a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, no aplicables a víctimas de la delincuencia organizada.

La especialista distingue la ola de solicitantes de los noventa, quienes lo hacían por cuestiones políticas, y la de la última década, vinculada a la militarización de la política antidrogas, la impunidad y la corrupción. “En comparación con Colombia y China –dice a Proceso–, México tiene un trato menos

favorable. Los solicitantes de asilo están atrapados en la relación bilateral. Estados Unidos responde a sus intereses de política exterior. México es un caso más”.

Estévez, quien efectuó un trabajo de campo sobre el fenómeno en El Paso, explica que los asilados son pobres o de clase media baja, con algunas propiedades o un capital modesto. Las razones de su huida, precisa, son la negativa a pagar extorsiones, exigencia de justicia, denuncia de corrupción o la colusión del Estado con los criminales.

### **Persecución sistemática**

El empresario zacatecano Antonio Medina González, proveniente de una familia acomodada del municipio de Huanusco, donde dos tíos suyos y un primo fueron presidentes, es otra víctima de Los Zetas.

Antonio, quien quedó al frente de un rancho tras la muerte de sus padres en 1997, y con su hermano Francisco, son criadores de ganado y siembran agave. El 17 de diciembre de 2008, Antonio fue secuestrado cerca de su rancho de Huanusco por presuntos sicarios de Los Zetas, quienes lo trasladaron por carretera a la ciudad de Zacatecas. En el camino le preguntaron por su hermano Francisco, ciudadano estadounidense radicado en Novato, California, según su testimonio contenido en el expediente 10-73112 del Noveno Circuito de Apelaciones.

Durante el viaje, según Antonio, oyó cuando el conductor del vehículo conversó con policías en dos retenes. Al llegar a Zacatecas, sus captores le vendaron los ojos y le colocaron una bolsa de plástico sobre la cara. Permaneció secuestrado hasta el 28 de diciembre.

Durante ese periodo, contó, fue golpeado y sus custodios jugaron a la “ruleta rusa” con él; también lo molestaron sexualmente. Según el reporte médico, Antonio sufrió golpes, quemaduras de primer grado y la fractura de una costilla del lado izquierdo.

Francisco Medina contactó a su prima Martina, quien trabajaba para el gobierno de Zacatecas, a fin de localizar a su hermano. Martina le respondió que era muy peligroso ayudarlo, por lo cual le recomendó a un abogado de la Ciudad de México de apellido López, quien suele trabajar como mediador en ese tipo de casos.

Francisco Medina le pagó a López 5 mil dólares y entregó otros 15 mil a los secuestradores para la liberación de Antonio. Al final, el litigante le dijo que habían sido Los Zetas.

Al mes siguiente, en enero de 2009, los secuestradores llamaron de nuevo al celular del empresario zacatecano para pedir más dinero, así como las escrituras de sus propiedades y vehículos.

Antonio Medina se fue de inmediato a Estados Unidos. Semanas después, en mayo de ese año, fue colocado en proceso de deportación por carecer de visa para entrar en el país. El empresario se quejó de la conducta de los policías durante su traslado de Huanusco a Zacatecas, e interpuso un recurso el 12 de octubre de 2010.

Sin embargo, el 13 de agosto último, la BIA emitió su veredicto. En 25 páginas sostuvo que por lo general los finqueros ricos y educados –como Antonio Medina– no eran considerados como grupo coherente bajo la Ley de Inmigración y Naturalización (INA, por sus siglas en inglés).

Por casi 30 años, la BIA ha reconocido que la tenencia de la tierra puede formar la base de un grupo social particular dentro del significado de la INA, escribió el juez Stephen Reinhardt, quien integró el panel junto a los magistrados Mary H. Murguía y Jack Zouhary.

### **Presión sobre Estados Unidos**

Carlos Spector insiste en que problemas como el descrito, motivados por hechos de violencia y amenazas en el país de origen, constituyen un fenómeno social y político que requiere de una respuesta política.

El pasado 16 de septiembre el abogado participó en una audiencia legislativa en El Paso para denunciar las fallas en el esquema de asilo, en la cual estuvieron los congresistas Beto Rourke, Raúl Grijalva y Filemón Vela.

Tanto él como Fernando García demandan una reunión con el director de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para revisar el problema.

El propósito, según ellos, es desarrollar planes alternativos para los solicitantes de asilo, así como pedir la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para investigar los casos y entrevistar a los candidatos. Ello servirá para determinar el alcance de las políticas de detención de ICE y permitir a organizaciones civiles locales entrevistar a los detenidos y asesorarlos.

Los defensores de los solicitantes de asilo preparan un reporte con casos paradigmáticos para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En el caso del exsoldado Víctor Hugo Tapia Madrigal, su argumento es que sus agresores – pertenecientes a Los Zetas, un grupo que el gobierno mexicano no puede controlar– indagaron su paradero e incluso le dispararon, además de enviarle una carta intimidatoria a su madre sólo porque perteneció al grupo particular de tropas de la Sedena que capturaron a 10 sicarios de esa organización criminal.

“Un candidato (como Tapia) que alega persecución pasada tiene el peso de demostrar que su tratamiento equivale al nivel de persecución, (que) ésta se debió a una o más consideraciones y (que) la persecución fue cometida por el gobierno o fuerzas que éste es incapaz de controlar o no está dispuesto a hacerlo”, escribió el juez Fisher en su resolución del pasado 15 de mayo (legajo 10-73700).

Y añadió: Si la BIA concluye que el gobierno mexicano no puede controlar a Los Zetas y que Tapia tiene un miedo bien fundado de maltratos severos, entonces es elegible para asilo, porque existiría necesariamente un nexo causal entre ese maltrato y su pertenencia a un grupo social particular.

A su vez, Ariadna Estévez, adscrita al CISAN-UNAM, sostiene que la inercia de la violencia en México da pie para pensar que el flujo de asilados en Estados Unidos se mantendrá; “de ninguna manera va a disminuir”.

S/A. “Contraofensiva zeta en el noreste”. *Proceso* número 1930, 27 octubre 2013. pp. 19-20.

<https://www.proceso.com.mx/356425/contraofensiva-zeta-en-el-noreste>

### “Contraofensiva zeta en el noreste”

Después de perder diversas células urbanas que se pasaron al Cártel del Golfo, la nueva dirigencia de Los Zetas se apresura a llenar los huecos para organizar su contraofensiva en todo el noreste del país. Recurre a sicarios muy jóvenes, que envía de San Luis y Tamaulipas a Nuevo León y a Coahuila como refuerzos. No obstante, los gobernadores Rodrigo Medina y Rubén Moreira anuncian que ya consiguieron disminuir la criminalidad.

REYNOSA, TAMPS. - Los Zetas están distribuyendo a decenas de sicarios por todas las plazas del noreste del país, ya sea para reforzar su control o para recuperarlo. Este es el caso de algunos municipios de la zona metropolitana de Monterrey que les arrebató el Cártel del Golfo.

“En días pasados arribaron a Nuevo León, provenientes de San Luis Potosí, alrededor de 40 camionetas con hombres armados. Se desplazaron por brechas y caminos vecinales para que no las detectaran”, informa a Proceso un agente federal que solicitó el anonimato.

Las autoridades estatales fueron informadas de que los pistoleros pretenden recuperar Santa Catarina y parte de Monterrey, además de Cadereyta, este último municipio de la región rural del sur de Nuevo León, según la fuente consultada.

Otros grupos se trasladaron de Tamaulipas a Coahuila, pero parte del contingente fue capturado por cuerpos especiales de la policía estatal coahuilense, que los detectaron “gracias a trabajos de inteligencia”, confirma el portavoz de Seguridad estatal, Jesús Carranza.

El funcionario precisa que, a finales de septiembre, efectivos del Grupo de Reacción Operativa del Municipio de Saltillo (GROMS) detuvieron a 23 personas, incluidos nueve menores, sospechosas de pertenecer a Los Zetas. Les decomisaron 17 armas largas, 100 mil pesos y 48 mil dólares en efectivo; mil 500 cartuchos hábiles, cargadores y equipo táctico diverso. Los presuntos sicarios almacenaban todo esto en una casa de seguridad.

“Confesaron pertenecer a Los Zetas y haber llegado a Saltillo con el objetivo de dar apoyo a la organización criminal, desarrollando diversas tareas”, decía el comunicado que la procuraduría estatal emitió tras la captura.

La nueva dirigencia de Los Zetas, encabezada por Omar Treviño Morales, El Z-42, y Ramiro Rojas, El Rama, jefe de plaza en Tamaulipas, así como por el capo que controla Zacatecas, apuntaló a la organización para contrarrestar la pérdida de varias de sus células, que se sumaron al Cártel del Golfo.

La fractura fue evidente desde el pasado 11 de septiembre, cuando aparecieron en puentes peatonales de Nuevo Laredo varias narcomantas firmadas por “Z renegados” que manifestaron su descontento con los cabecillas que sustituyeron a Miguel Ángel Treviño Morales, capturado por la Marina a mediados de julio.

Este es el segundo cisma importante que sufre el sanguinario cártel. El primero lo encabezó Iván Velázquez Caballero, El Talibán o El Z-50, quien acusó a Treviño Morales de manejar el dinero de la organización para beneficio de su familia, a través de su hermano José Treviño, quien permanece detenido en Estados Unidos por lavado de dinero.

Los “Z renegados” iniciaron su ofensiva contra sus antiguos compañeros filtrando a blogs y redes sociales alrededor de 150 fotografías de jóvenes sicarios que fueron enviados de Nuevo Laredo a Monterrey, ciudades de Coahuila y de Zacatecas.

En las fotos se ve a jóvenes, incluso adolescentes, portando fusiles de asalto cuerno de chivo, AR-15, chalecos antibalas, radios y todo tipo de pistolas. Algunos de ellos visten aún las camisas de las secundarias de Nuevo Laredo en las que estudiaban.

La mayoría fueron enviados a reforzar su organización en la zona metropolitana de Monterrey, donde perdieron poder e influencia desde la captura de su estructura de mando después del incendio del Casino Royale, el 25 de agosto de 2011.

Otro factor para que el cártel, también llamado “la última letra” o “la compañía”, perdiera poder y capacidad de fuego en la capital de Nuevo León fue la deserción de algunas pandillas o clicas que controlaban.

Grupos de las colonias Independencia, Tanques de Guadalupe y Risca, entre otras del sur de Monterrey, acordaron dejar a Los Zetas e irse por la libre. Los pandilleros rompieron con Los Zetas por los “tablazos disciplinarios” a los que eran sometidos. Incluso algunas pandillas del sur de la zona metropolitana conformaron el grupo “Mata Zetas”, que se unió al Cártel del Golfo.

### **El “triunfo” de los gobernadores**

Al llegar los mencionados refuerzos zetas se reactivó la violencia en toda el área conurbada de Monterrey, si bien tendió a focalizarse en las colonias controladas por cualquiera de los cárteles.

En la última semana de septiembre volvieron a registrarse ataques a bares, ejecuciones múltiples y descuartizamientos. Sin embargo, en todo el noreste primero levantan a sus rivales para ejecutarlos lejos y posteriormente desaparecerlos. Se supone que los narcos actúan así para no “calentar” demasiado las plazas.

Una consecuencia inmediata fue la reducción de las cifras oficiales de homicidios dolosos, que el gobernador nuevoleonés, Rodrigo Medina, presumió como una muestra de la eficacia de su administración en su labor para erradicar la violencia y la inseguridad. En cambio, Medina oculta que se incrementaron los secuestros y levantones.

En el caso de los homicidios dolosos, que según la procuraduría estatal fueron alrededor de mil 500 el año pasado, en 2013 comenzaron a disminuir desde julio y a la fecha suman “sólo” 590. En contraste, los secuestros se dispararon y el número de denuncias formales implica que están desapareciendo cerca de 48 personas por mes en la zona metropolitana.

En el estudio Percepción y realidad del secuestro en Nuevo León, realizado por la Universidad Autónoma del estado (UANL), se indica que si se consideran los levantones y plagios que no se denuncian, la cifra de personas desaparecidas se dispara hasta cerca de 90 por mes.

Según el documento, más de 25% de los secuestros en la entidad están relacionados con las disputas del crimen organizado, y en la mayoría de estos casos las víctimas son asesinadas.

La redistribución de refuerzos zetas está provocando que vuelvan a ser campos de batalla los municipios de la Frontera Chica de Tamaulipas, donde el Cártel del Golfo ha mantenido un férreo control. Y continúan los choques armados en el sur del estado, al igual que en municipios zacatecanos, como Fresnillo, y los poblados aledaños.

En ciudades de Coahuila, como Saltillo, en la zona de Acuña y Piedras Negras, lo mismo que en la zona metropolitana de Monterrey, se padecen menos balaceras y ataques de alto impacto, pero continúan los levantones y secuestros.

Como su homólogo nuevoleonés, el gobernador coahuilense Rubén Moreira alienta en la población la falsa versión de que están venciendo a la inseguridad. Pocos les creen, ya que en las últimas semanas repuntaron los asesinatos de empresarios y los atentados contra negocios que se niegan a pagar “derecho de piso” a los delincuentes.

Por ahora los levantones y secuestros se difunden sobre todo en las redes sociales; pocos se publican en los medios electrónicos e impresos.

Anabel Hernández. “Quiénes y cómo gobiernan en Michoacán”. *Proceso* número 1931, 3 noviembre 2013. pp. 6-15.

### **“Quiénes y cómo gobiernan en Michoacán”**

Un informe de la PGR desmenuza las historias y organigramas de las mafias de Michoacán, entidad azotada por una creciente y demencial violencia. El reporte, elaborado con informes del Cisen y del Cenapi, menciona una peculiar junta ocurrida en 2007: en ella La Familia reunió a 14 alcaldes electos y les pasó la factura por el dinero que había inyectado a sus campañas. Muchos de esos personajes ahora tienen cargos en el gobierno estatal o están enquistados en los congresos local y federal. La conclusión es que quienes realmente controlan la política (y la economía) en aquella entidad tienen nombres: La Familia, Los Caballeros Templarios, La Resistencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación...

Una reunión tuvo lugar en noviembre de 2007 en la Tierra Caliente de Michoacán: la organización criminal La Familia convocó a 14 alcaldes electos para el periodo 2008-2011 –muchos de ellos ahora ocupan cargos en el gobierno del priista Fausto Vallejo o son diputados locales o federales– y les cobró el apoyo económico brindado durante las campañas electorales.

Esto lo revela un informe inédito de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre las mafias que operan en Michoacán, elaborado el año pasado a partir de investigaciones del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, reportes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y declaraciones ministeriales, documentos a los cuales tuvo acceso este semanario.

Según el informe de la PGR, 11 de los alcaldes electos eran priistas: Armando Medina Torres, del municipio de Múgica; Román Nava Ortiz, de Carácuaro; Francisco Villa Guerrero, de Nocupétaro; Reynaldo Cortés Sandoval, de Tzitzio; Francisco Gómez Olivos, de Acuitzio; Salvador Bastida García, de Tacámbaro; Everardo Cruz García, de Turicato; Rodimiro Barrera Estrada, de Churumuco; Miroslava

Meza Virrueta, del municipio de Gabriel Zamora; Fernando Salomón Rosales Reyes, de La Huacana, y Marcelo Ibarra Villa, de Madero.

También asistieron tres presidentes municipales electos no priistas: por Ario, Jorge Moreno Martínez, de la alianza PAN-PVEM; por Nuevo Urecho, el panista Francisco Estrada García, y por Tumbiscatío, Adán Tafolla Ortiz, de la alianza PAN-PRI-PVEM.

Proceso revisó el historial de los 14 alcaldes. De ellos sólo Medina Torres fue detenido en mayo de 2009 en el michoacanazo (el operativo federal que aprehendió a 11 ediles y a funcionarios del gobierno perredista, acusados de colaborar con el crimen organizado). En abril de 2011 fue liberado y desde 2012 forma parte del equipo del mandatario estatal Fausto Vallejo: es director de Relación con Organizaciones de la Secretaría de Gobierno.

De los 14 alcaldes mencionados en el documento uno murió: Ibarra Villa, ejecutado en 2008. Nava Ortiz, Villa Guerrero y Cortés Sandoval actualmente no tienen actividad política pública.

En 2012 Gómez Olivos rindió protesta como dirigente de la filial michoacana del Grupo Político del Estado de México y hace alarde (según la prensa local) de su amistad con Vallejo.

Bastida García ha tenido una carrera política ascendente: en abril de 2012 fue enlace municipal en Tacámbaro de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y en septiembre de ese año lo nombraron subdirector estatal del Trabajo.

De Cruz García se sabe que fue candidato a diputado local en 2011, pero perdió. Barrera Estrada corrió con mejor suerte, actualmente es diputado federal (su hermano Gildardo es alcalde de Churumuco).

En septiembre de 2011 la expresidenta municipal de Gabriel Zamora, Miroslava Meza, denunció haber sufrido varios intentos de extorsión de un grupo delictivo: “Me hablaban para exigirme dinero, pero les di pura madre y después de varias llamadas ya no me molestaron”, dijo a medios locales. En julio de 2012 fue electa diputada federal suplente.

Rosales Reyes y Moreno Martínez son ahora diputados locales plurinominales.

Durante el michoacanazo de mayo de 2009 se corrió el rumor de que Estrada García era uno de los detenidos, lo cual él mismo desmintió horas después. En enero de 2010 dimitió a la alcaldía por “motivos de salud”.

### **Génesis criminal**

Las organizaciones criminales en Michoacán se desarrollaron en cinco etapas a partir de la segunda mitad de los noventa, según el informe de la PGR.

En la primera etapa Carlos Rosales Mendoza, El Tísico, cohesionó a pequeños grupos delictivos para operaciones regionales. En la segunda se alió con Cornelio Valencia, del Cártel de los Valencia o Cártel del Milenio, entonces dominante en el estado, con operaciones en Estados Unidos vía Nuevo Laredo, por lo cual tenía nexos con el Cártel del Golfo.

En 2002 se inició la tercera etapa. El Tísico se separó de Los Valencia y Cornelio fue detenido. Eso llevó a Rosales a aliarse con Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo. Con El Tísico estaban

Dionisio Loya Plancarte, El Tío; Nicandro Barrera Medrano; José de Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez, y Nazario Moreno, El Chayo, cuya esposa, María Elena Loya, es sobrina de Loya Plancarte.

“La incorporación de Nazario Moreno González introdujo el elemento fundamentalista en la organización”, señala el documento.

La alianza con el Cártel del Golfo tenía como fin “expulsar de territorio michoacano a la organización de Los Valencia, la cual tenía entre sus principales actividades el cultivo de mariguana y amapola”.

En el documento se señala que El Chayo y El Chango Méndez operaban un grupo de seguridad al servicio del Cártel del Golfo, conocido como Los Doce Apóstoles —encabezado por Barrera Medrano—, antecedente de La Empresa, de donde surgió La Familia.

Detalla: en 2002 surgió La Empresa, formada por El Tísico, El Chango Méndez, El Tío, Barrera Medrano y El Chayo, además de Arnoldo Rueda Medina, La Minsa. “Sus integrantes se encontraban relacionados con delitos contra la salud y cometían en paralelo ilícitos coyunturales, como homicidios, extorsión, privaciones ilegales de la libertad en las modalidades de secuestro y levantón”, señala.

Cárdenas Guillén fue detenido en 2003. En el documento de la PGR se asegura que El Tísico era el candidato más viable para sustituirlo.

La cuarta etapa se inició con la detención del Tísico en octubre de 2004, cuando planeaba un asalto al penal de Almoloya para rescatar a Cárdenas.

“En 2006 se presentaron diferencias entre La Empresa y la organización Golfo-Zetas, posiblemente por desacuerdos en la repartición de plazas que Los Zetas tenían en su poder, por lo que la alianza de conveniencia se vio severamente afectada”, agrega el reporte.

La Empresa se independizó y dio pie a la nueva organización: La Familia. El documento afirma que su estructura “nace de un proyecto de concentración de negocios delictivos (robo de autotransportes, secuestro, trasiego de drogas y armas, etcétera) a escala local y regional en el estado de Michoacán”.

La primera “incursión de alto impacto” de esta organización ocurrió en septiembre de 2006 en Uruapan, cuando sicarios tiraron cinco cabezas en la pista de baile del club nocturno Sol y Sombra con un mensaje: “La Familia no mata por dinero, no asesina mujeres, no mata inocentes sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente esto es justicia divina”.

En esa etapa se unió a la organización Servando Gómez Martínez, La Tuta, un profesor radicado en Apatzingán.

La quinta etapa ocurrió tras la ausencia del Chayo, quien supuestamente murió en un enfrentamiento con la Policía Federal en diciembre de 2009. “Aunque existen indicios de que ocurrió un poco antes, por diferencias entre Moreno González y Jesús Méndez Vargas”, indica el reporte de la PGR.

Los Caballeros Templarios se dieron a conocer el 10 de marzo de 2011 con mantas y volantes distribuidos en distintos municipios de Michoacán y Guerrero. En ellos comunicaban que a partir de esa fecha continuarían con las actividades “altruistas” que habían sido el estandarte de La Familia.

“Dicho grupo delictivo imita el fundamentalismo religioso evangélico que había empleado Moreno González para controlar a sus integrantes y proyectarse socialmente; asimismo, se rige a través del documento denominado Código de Los Caballeros Templarios de Michoacán”, indica el documento de la Procuraduría.

Pese a que el grupo delictivo ha manifestado brindar una supuesta protección a los michoacanos, “ha continuado con la línea operativa de sus antecesores: (...) ejecuciones, extorsiones y secuestros, así como el fomento a la incorporación de menores al mercado de las drogas”, afirma el documento.

Desde 2011 Los Caballeros Templarios mantienen una disputa con los remanentes de La Familia por dirigir a las bases, controlar los suministros para la producción de drogas sintéticas y el tráfico de droga hacia Estados Unidos.

“Tienen fuerte presencia en Michoacán y en menor medida en los estados de Guanajuato y Guerrero, ello a través de diversas actividades delincuenciales: extorsiones a empresarios y comerciantes; ejecuciones, detenciones y activación de movimientos sociales de apoyo para encarar a las fuerzas federales”. Se señala que también tienen presencia en el Estado de México, Jalisco, Baja California y Colima.

El enfrentamiento con Los Caballeros Templarios hizo que La Familia pactara primero una alianza con Los Zetas y recientemente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), vertiente del Cártel de Sinaloa.

Según el documento, los grupos que hoy se disputan Michoacán son La Familia, Los Caballeros Templarios, La Resistencia y el CJNG.

El recrudecimiento de la violencia en la entidad deriva de que el CJNG comenzó a atacar a Los Caballeros Templarios en Tancítaro, Zinapécuaro y Lázaro Cárdenas, en un intento por desplazarlos.

Se afirma que “la fractura y detención del líder de La Familia también incidió en el desarrollo de las actividades de La Resistencia, la cual (...) estaba integrada por cuadros de El Golfo, La Familia y Milenio”. Se añade que ahora La Resistencia pactó una alianza con Los Zetas.

De acuerdo con la PGR, antes de la aprehensión del Chango Méndez (el 21 de junio de 2011), La Familia parecía llevar la delantera a Los Caballeros Templarios. “Ahora se percibe más sólida la organización” de éstos, se indica.

En el documento elaborado en 2012 se asegura que “mientras esta confrontación se mantenga, los índices de violencia y extorsión aumentarán, debido a que ambos bandos requerirán recursos para financiarse”.

### **Cooptación del Estado**

Según los documentos consultados, La Familia “se ha caracterizado por establecer redes de protección institucional, principalmente elementos de la Policía Estatal a través de sobornos, presiones, amenazas e incluso agresiones físicas a elementos policiales para obligarlos a participar con ellos, con la finalidad de afianzarse en el control territorial y de todas las actividades delictivas en la zona, como mecanismo para socavar las estructuras institucionales y mantener su penetración en la sociedad”.

Se afirma que para penetrar las estructuras institucionales La Familia aplicó dos acciones. La primera “se orientaba inicialmente a cooptar a los secretarios o jefes de la Policía Municipal, como medio para disponer de una red que permitiera el libre tránsito y comisión impune de actividades delincuenciales o, en casos extremos, incluso a establecer mecanismos de seguridad paralelos a la institucional y cobros por ese servicio”.

La segunda “consistió en aspirar a controlar el poder municipal por varios mecanismos, principalmente la intimidación de las autoridades locales, y utilizaron desde extorsión hasta agresiones directas que provocaron la muerte de algunos regidores u otros integrantes de los cabildos”.

Se asegura que un antecedente de “los esquemas de cooptación” fue justamente la reunión de Tierra Caliente convocada por La Familia, en la que participaron los 14 alcaldes mencionados y a quienes se les pasó la factura por el dinero recibido en sus campañas electorales.

“Actualmente este grupo se ha convertido en una estructura delictiva que actúa como un Estado paralelo en gran parte del territorio michoacano y realiza, entre otras actividades: extorsión a empresas financieras, diversos ataques a corporaciones policiales y directamente hacia la figura de la autoridad, control de grupos delictivos menores (...) y desarrollo de proyectos comunitarios.”

Además de cooptar a la autoridad de Michoacán, La Familia y Los Caballeros Templarios necesitan tropa nueva. Ambas mafias tienen “una invitación abierta y permanente a cualquier ciudadano que desee pertenecer al grupo”. La mayor parte de los candidatos son jóvenes adictos, alcohólicos o sin hogar. Se les engaña inculcando primero “valores éticos y sociales a través del espíritu de sacrificio y el mesianismo”, y después se les obliga a delinquir.

“En febrero de 2010 se tuvo conocimiento de que La Familia había creado sus propias clínicas de rehabilitación de adictos en más de seis poblaciones localizadas en la costa de Michoacán y sus albergues llamados Gratitude, donde atraían a los drogadictos mediante programas religiosos. Una vez que dejaban las drogas se les encomendaba trabajar como narcotraficantes o de lo contrario serían asesinados”, afirma el documento.

“Los pacientes eran llevados a retiros donde recibían lecciones de moral; sin embargo, en la medida en que avanzaban en el tratamiento, esas prácticas se transformaban en sesiones de lavado de cerebro para futuros delincuentes”, se añade.

El reporte revela que Rafael Cedeño Hernández, El Cede, detenido en Morelia el 18 de abril de 2009 – era director del Centro de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Gratitude y se le acusó de ser brazo derecho del Chayo–, presuntamente en 2008 “reclutó a más de 9 mil jóvenes, aunque no se sabe con exactitud cuántos de ellos procedieron de las clínicas de rehabilitación”.

La diferencia entre La Familia y Los Caballeros Templarios y otras organizaciones criminales es que aquellas inculcan a sus miembros supuestos preceptos evangelistas y de autoayuda. Nazario Moreno fungía como “líder espiritual, predicaba el derecho divino para eliminar a sus enemigos, llevaba una biblia de sus propios pensamientos o razonamientos”.

Recientemente se ha detectado que La Familia y Los Caballeros Templarios han comenzado a acudir a escuelas para cooptar estudiantes.

La Familia y Los Caballeros Templarios “han asentado su presencia en los municipios de Acuitzio, Aguililla, Angamacutiro, Álvaro Obregón, Apatzingán, Aquila, Ario de Rosales, Arteaga, Briseñas, Buenavista Tomatlán, Carácuaro, Charo, Churumuco, Coahuayana, Cuitzeo, Gabriel Zamora, Huandacareo, Huetamo, La Huacana, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Maravatío, Madero, Morelia, Múgica, Nocupétaro, Nuevo Urecho, Parácuaro, Pátzcuaro, San Lucas, Tacámbaro, Taretán, Tzitzio, Tumbiscatío, Uruapan, Zamora, Zitácuaro”.

También en Puruándiro, Villa Morelos, José Sixto Verduzco, Panindícuaro, Penjamillo, Turicato, Nueva Italia, Tancítaro, Paracho, Nahuatzen, Cherán, Charapan y Tanhuato.

El CJNG tiene presencia en Tepalcatepec, Marcos Castellanos, Jiquilpan y Ecuandureo.

Es decir, el crimen organizado tiene presencia en al menos 54 de los 113 municipios de Michoacán.

Pero el mismo documento señala que, según las declaraciones de Alberto López Barrón, El Gordo –detenido el 22 de julio de 2009 en Arteaga–, La Familia y Los Caballeros Templarios “tienen presencia en todas las plazas o municipios del estado”.

Se afirma que estas dos organizaciones participan también “en algunas otras conductas ilícitas, como extorsiones, cobro de derecho de piso, privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, trata de personas, homicidios y levantones”, así como en la “venta de recursos naturales (minerales) explotados ilegalmente en la región sur del territorio michoacano”.

“Recientemente se tuvo conocimiento de que han incursionado en la trata de personas, particularmente en Zitácuaro (...) en donde a los estudiantes, en su intento de integrarlos a sus filas delincuenciales, los obligan a participar en diversas actividades ilícitas y a prostituirse.”

### **Quién es quién**

El reporte de la PGR menciona a los presuntos líderes de la delincuencia organizada en Michoacán.

Tras la detención de Méndez Vargas quedaron al frente de La Familia sus hermanos Godofredo y Luis Antonio, en alianza con el CJNG.

“Difícilmente la organización de La Familia mantendrá la cohesión, en virtud de que los hermanos Méndez Vargas aún no maduraban su liderazgo”, se afirma.

Sus operadores en Morelia son Juan Manuel Rangel Chávez, El Chuky, y dos grupos conocidos como Los Champis y Brown Side Family. En Maravatío es Prócoro Martínez Martínez. En Tancítaro, Alonso Gerardo Guerrero Quezada; Leocadio Guerrero Quezada; Miguel Ángel Quezada, El Chino; y Ezequiel Esquivel, El Seco, del grupo Los Guerrero. En Puruándiro es El Pacas, líder de una célula que opera en Angamacutiro, Villa Morelos, José Sixto Verduzco, Panindícuaro y Penjamillo.

En Zitácuaro opera Enrique Montaudón Ortega, director de la Policía Municipal entre 2010 y 2011 y coordinador regional de la Policía Federal Preventiva en Jalisco en 2006. Fuentes michoacanas lo ubican como quien maneja a trasmano a la policía zitacuarenses. El reporte oficial lo acusa de proporcionar “información a los integrantes de La Familia sobre operaciones en su contra”.

Respecto a Los Caballeros Templarios llama la atención que en todas las referencias a Nazario Moreno González el documento de la PGR siempre habla de “presunta muerte”. Esto significa que el gobierno federal no da por confirmado su deceso, como en su momento sí lo afirmó el gobierno de Calderón.

Según información publicada en los medios el 27 de noviembre de 2012, luego de un operativo en Apatzingán la Secretaría de la Defensa habría descubierto evidencias de que El Chayo está vivo.

Respecto a los actuales y visibles dirigentes de Los Caballeros Templarios se señala a Enrique Plancarte Solís, El Kike; La Tuta, y Nicandro Barrera Medrano, El Nica. Un hermano del Nica, el perredista Salvador Barrera Medrano, es alcalde de Turicato, municipio no exento de violencia: el pasado 26 de octubre ahí hubo un enfrentamiento entre militares y un comando con saldo de dos civiles muertos y un soldado herido.

Como coordinadores operativos de Los Caballeros Templarios se menciona a José Luis Valencia Arzate, El Chuki; Saúl Soliz Soliz, exdirector de Seguridad Pública de Turicato y en 2009 candidato a diputado federal por el PVEM en Apatzingán (fue detenido en septiembre de 2011), y El Tío.

Se menciona a Samer José Servín Juárez como “responsable del suministro de armas” a Los Caballeros Templarios. A su hermano, Marco Antonio Servín Juárez, se le ubica como “operador financiero”.

Como jefes de plaza de la organización criminal se enlista a Juan Carlos Arreguín, “enlace con el Golfo”; Gregorio Abeja Linares, encargado de Huetamo (detenido en agosto de 2013); Julio Omar Tafolla Sánchez, Osito o Gori, jefe en Lázaro Cárdenas. A Pablo Magaña Serrato, La Morsa o El Señor Jack, se le señala como encargado de la plaza de Zitácuaro y se menciona a Alfredo Contreras Espinoza y a Gabriel Mejía Flores como sus operadores.

Ignacio Andrade Rentería, El Cenizo, es jefe de plaza en Uruapan y Nueva Italia. Silvestre Fernández Valencia, El Chivo, jefe de plaza en Tancítaro “y lugares aledaños”. Neri Salgado Harrison, El Yupo, jefe en Apatzingán (detenido en agosto de 2011); Alfredo Contreras Espinoza, El Mauri, jefe en Zitácuaro; Rafael Luis Carbajal, Baby, operador “administrativo” y Félix Pérez Avilés, “relaciones públicas”.

En Paracho se identifica a Rafael Godínez López como responsable de cobrar extorsiones y secuestros: “Tiene a su cargo el traslado de drogas y madera en los municipios de Nahuatzen, Cherán y Charapan”, se afirma. En Uruapan se señala a Gabriel o Gumildo Madrigal Fuentes como operador financiero, y en Tanhuato, Javier Guerrero Martínez es identificado como líder de una célula.

El Cártel de Sinaloa, aliado al CJNG, tiene presencia en Tepalcatepec por conducto de Juan José Farías, El Abuelo, y Uriel Farías Álvarez, El Paisa, alcalde en el periodo 2008-2011, “quienes de manera directa están vinculados con el grupo de Los Valencia-Milenio”, se afirma en el documento.

Marcela Turati. “A la luz, los secretos de las matanzas de Tamaulipas”. *Proceso* número 1931, 3 noviembre 2013. pp. 16-19.

**“A la luz, los secretos de las matanzas de Tamaulipas”**

Con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, la organización National Security Archive logró desclasificar documentos diplomáticos que revelan la colusión de funcionarios federales, estatales y municipales –entre ellos los exgobernadores Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández– con las organizaciones criminales que operan en Tamaulipas. Proceso ofrece una síntesis de la manera en que Los Zetas cometieron sus tropelías contra cientos de indocumentados centroamericanos entre 2010 y 2012.

MÉXICO, D.F. (Proceso). - Salieron en autobuses de pasajeros rumbo a la frontera soñando en su nueva vida, pero regresaron a bordo de un tráiler con caja refrigerante que los depositó en una morgue. La mayoría de los 196 cadáveres hallados en abril de 2011 en las fosas en San Fernando, Tamaulipas, era de migrantes pobres asesinados a golpes; su vida no valió siquiera una bala. Al gobierno de Tamaulipas le preocupaba que la mala publicidad espantara el turismo y las inversiones.

Alguien ordenó sacar del estado los cuerpos para tapan el escándalo.

La información está contenida en la serie de cables desclasificados que funcionarios estadounidenses enviaron de México a Washington entre 2010 y 2012. En esos reportes queda claro que el gobierno mexicano estaba al tanto de los crímenes que cometían Los Zetas en San Fernando desde antes de la masacre de los 72 migrantes de agosto de 2010 y del hallazgo, al año siguiente, de las fosas comunes.

Los informes, obtenidos por la organización National Security Archive (NSA) con base en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA, por sus siglas en inglés), revelan la colusión de funcionarios municipales, estatales y federales mexicanos con los criminales (la sospecha incluye a los exgobernadores Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores); la presencia de kaibiles en la zona y la petición de ayuda a Washington por parte de la cancillería mexicana para salvar la popularidad de Felipe Calderón, desplomada por aplicar una estrategia de combate contra las drogas (cofinanciada por Estados Unidos) que los mexicanos, y los propios funcionarios estadounidenses, consideraban como generadora de violencia.

Los reportes diplomáticos –confeccionados por distintas dependencias a partir de informantes, funcionarios mexicanos, análisis y notas de prensa– muestran que los cárteles controlaban parte de Tamaulipas, el sufrimiento de la población, el sometimiento de la prensa y la pantomima de un gobierno que simulaba llevar las riendas.

El investigador Michael Evans, del NSA, publicó los primeros documentos en el blog de la organización para mostrar el intento del Estado mexicano por minimizar su responsabilidad ante los crímenes. Nuevos cables proporcionados a Proceso completan la película de horror que vivió Tamaulipas apenas el sexenio pasado.

El reporte clasificado con los números 20100416 (clave que indica el año, el mes y el día de ese escrito del 16 de abril de 2010) señala que marzo, con sus 900 homicidios a escala nacional, fue uno de los más sangrientos y que los funcionarios mexicanos no anticiparon la escalada de violencia cuando el Cártel de Los Zetas se lanzó a controlar las lucrativas plazas del noreste.

Durante febrero y marzo el consulado de Matamoros, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas, informó que la ruptura del Cártel del Golfo (CDG) con sus anteriores aliados provocó que la población fuera

castigada sólo por vivir en lugares controlados por rivales. A cada golpe le seguía una venganza. (20100325)

El pánico se apoderó de Ciudad Victoria –capital del estado–, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, y los rumores obligaban a cerrar escuelas. Matamoros –preveía el consulado– podría “ser escena de confrontación en un futuro” por ser cuartel del CDG y valor estratégico para una futura ofensiva”.

Desde el 28 de mayo de 2010 uno de esos documentos menciona un enfrentamiento, como muchos, entre fuerzas federales y sicarios. Su contenido fue casi totalmente censurado, salvo un dato: de cuatro personas asesinadas y cuatro arrestadas el día 19 “se pudo determinar que algunos de ellos eran miembros de Los Zetas y los sujetos de Guatemala eran miembros de las fuerzas especiales de Guatemala (kaibiles)”, militares conocidos por la extrema crueldad de sus métodos de sometimiento de la población, entre éstos las decapitaciones.

En agosto siguiente, un memorándum secreto de la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado mencionaba: “La ofensiva de Calderón ha ejercido presión sobre los cárteles, pero también ha tenido consecuencias no previstas: por ejemplo, la remoción de los líderes de las organizaciones del narcotráfico ha llevado a personas con menos experiencia y disciplina a ocupar esos vacíos, contribuyendo a un pico en los asesinatos relacionados con las drogas” (20100800).

### **Revelaciones de la masacre**

El 22 de agosto de ese mismo año, 75 migrantes de Guatemala, Honduras, Brasil, Ecuador y un “hindú” que viajaban hacia la frontera en un tráiler de tres paneles fueron detenidos por un número indeterminado de criminales y transportados bajo vigilancia a San Fernando.

El secuestro se habría realizado al norte de un retén fijo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre la carretera, a través de pequeños caminos rurales, según el cable enviado desde el consulado de Matamoros, cuatro días después de la masacre (20100826).

Entre los cuerpos de 58 hombres y 14 mujeres yacían dos migrantes que por el impacto perdieron la conciencia, pero despertaron: eran un salvadoreño y un ecuatoriano de 18 años. Este último relató los hechos anteriores.

Los sobrevivientes huyeron en distintas direcciones. El ecuatoriano escuchó que al salvadoreño lo persiguieron unas camionetas, luego disparos, e imaginó que había sido asesinado. Mientras tanto, buscó auxilio en una casa o intentó acercarse a los policías locales (el cable destaca que la narración difiere en este punto), mas no lo ayudaron.

Caminó durante la noche. En la madrugada del 23 de agosto llegó a un retén de la Marina, donde dio aviso de lo sucedido. Al intentar ubicar por tierra el lugar de la masacre los marinos llegaron a un rancho en el que fueron atacados. Tres marinos y un miembro del cártel fallecieron. Un menor fue aprehendido, y después el sobreviviente lo identificó como uno de los secuestradores.

El día 24 a las seis de la tarde la Marina encontró los cuerpos en un rancho abandonado: los 72 parecían haber sido amontonados contra la pared de la bodega. “Reportes no confirmados indican que una o más de las mujeres víctimas estaban embarazadas. Las víctimas fueron encontradas sin ninguna

identificación. Los tres camiones y el equipaje de los migrantes no fueron recuperados”, se lee en el texto.

En el comentario final, el diplomático que realizó el reporte señala: “Si el relato del sobreviviente es preciso, esto representa un nuevo nivel de violencia de Los Zetas”. Esto porque no parece haber una utilidad de estas muertes para ellos, ya que no pidieron rescate por sus secuestrados como acostumbraban.

“Una teoría planteada por –el nombre de la fuente está borrado– es que como las ganancias de la introducción ilegal de migrantes a Estados Unidos son destinadas al Cártel del Golfo, los asesinatos fueron la manera que Los Zetas encontraron para herir financieramente los intereses de CDG.”

La siguiente comunicación, del día 27, es un resumen de hechos de los últimos cuatro días.

El reporte menciona por primera vez la existencia de fosas comunes con migrantes. “Las autoridades mexicanas aún están buscando una posible fosa clandestina que contendría más de 200 migrantes. Se cree que los cuerpos están en San Fernando cerca de la garita aduanal de “Las Yescas”, entre San Fernando y Matamoros”. (20100827)

Este aviso se dio ocho meses antes de que comenzaran a ser desenterrados casi 200 cadáveres, cuando los asesinatos sistemáticos no pudieron ser ocultados.

En septiembre, Matamoros y sus alrededores parecen vivir una guerra. El alcalde de Hidalgo ha sido asesinado; el Ejército y Los Zetas se enfrentan en Ciudad Mier; tres granadas de fragmentación hieren a 29 civiles en Reynosa. Los ataques ocurren a tres cuerdas de un servicio funerario para los 72 migrantes y cerca de la morgue donde se depositaron algunos de sus cuerpos.

Más tarde se registra un ataque contra el hospital de la Marina donde se recuperaba el ecuatoriano que era el informante.

El día 2 de ese mes aparece el segundo sobreviviente de la masacre, quien, según informó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) a los estadounidenses, se había desplazado solo a Matamoros y “supuestamente fue trasladado al DF para declarar” (20100903).

En tanto, México intentaba limpiar su mala imagen internacional.

### **Crisis de los autobuses**

El 14 de febrero de 2011 fue el día más violento desde la masacre de agosto del año anterior: 26 personas son asesinadas.

Una granada en un centro comercial de Matamoros hiere a nueve civiles –según el reporte 20110215– en “un intento de Los Zetas para calentar la plaza al grupo dominante”.

Comienzan los hallazgos de autos calcinados en las carreteras, los asesinatos de pasajeros de autobuses alcanzados por fuegos cruzados y las detenciones masivas como la ocurrida entre Victoria y Matamoros, donde 23 pasajeros fueron obligados a bajar y se les despojó de sus pertenencias.

Dos meses después, en abril, comienzan a descubrirse las llamadas narcofosas. Primero eran 48 cuerpos, dos de ellos vestidos con uniformes de policía, en la comunidad de La Joya, cerca de San Fernando. Algunos en avanzado estado de descomposición, otros fallecidos en un lapso de menos de 10 días.

La primera información que recibe el consulado de funcionarios mexicanos es que los cuerpos probablemente son de narcotraficantes, secuestrados o víctimas de la violencia carretera. El reporte termina con un comentario: “De acuerdo con fuentes oficiales al menos 224 personas han sido secuestradas de las carreteras de Tamaulipas en semanas recientes, incluido un grupo obligado a bajar de un camión interurbano el 23 de marzo” (20110406).

Esa misma semana ya eran 81 los cadáveres encontrados en 17 sitios. El documento 20110408 revela una historia hasta entonces oculta:

El 19 de marzo miembros del crimen organizado secuestraron a 24 personas de un autobús público originario de San Luis Potosí que viajaba a Reynosa. El 24 de marzo secuestraron a 12 personas de un camión originario de Michoacán. También el 24, plagiaron a los 48 pasajeros de un camión de Guanajuato que iba a Reynosa. Los tres cerca de San Fernando.

A partir del 1 de abril, con información de los detenidos y de sus exrehenes, el Ejército localizó fosas comunes en La Joya, al norte de San Fernando. Primero eran 11 cadáveres, luego 145.

Desde el inicio se adjudica la responsabilidad a Los Zetas. “Esto es consistente con la cobertura de la prensa local, pues los pueblos controlados por Los Zetas no han tenido cobertura de los hallazgos”, indica el reporte.

En relación con esos homicidios, 17 de los 25 miembros de la policía de San Fernando eran detenidos acusados de “proteger” a los perpetradores.

La búsqueda de fosas es interrumpida el 13 de abril –lo hace notar el diplomático–, y los funcionarios expresaron su intención de continuarla después.

Desde el 6 de abril, cuando se anunció el hallazgo, el Semefo de Matamoros fue abarrotado por personas que buscaban información sobre familiares desaparecidos.

“Los hallazgos de San Fernando han atraído a muchos familiares que no habían querido reportar anteriormente las desapariciones a causa del miedo o por amenazas del crimen organizado”, indica el reporte que menciona enseguida esa como la excusa de los funcionarios estatales para su inacción, “la falta de denuncias normales antes del descubrimiento de las fosas impidió a la procuraduría estatal investigar los problemas que eran sospechados en el área de San Fernando”.

Resalta otro dato: “Ninguna de las compañías de autobuses ha presentado una queja formal sobre los ataques de los miembros del crimen organizado sobre los autobuses o sobre pasajeros a pesar del hecho de que los secuestros habían sido generalizados (...) Las autoridades sólo habían recibido dos reportes no oficiales de dos de los secuestros masivos de pasajeros del 24 de marzo. Aunque en privado las autoridades reconocieron que los secuestros son comunes”.

Para entonces la prensa mencionaba que nueve autobuses habían sido secuestrados en ese punto; a las terminales sólo llegaban las maletas.

El 13 de abril, la PGR envió a la capital del país 105 cuerpos y argumentó que allá habría más equipo y que las familias provenientes de Guanajuato y Michoacán tendrían más facilidades. El resto se quedó en Matamoros; los más descompuestos serían enviados a Victoria.

Off the record, oficiales mexicanos dijeron a funcionarios del consulado que “los cuerpos están siendo separados (en grupos) para que la cifra total sea menos obvia y, así, menos alarmante”.

El diplomático que escribe el reporte señala: “El traslado de 105 cadáveres de la sobresaturada, insuficiente morgue de Matamoros al DF, es entendible desde un punto de vista práctico, pero también ayuda a restar visibilidad a la tragedia”.

Revela también que las autoridades estatales sabían lo que ocurría: “Aparentemente las autoridades de Tamaulipas están tratando de minimizar los descubrimientos de San Fernando y la responsabilidad estatal, a pesar de que en un reciente viaje a Ciudad Victoria se reveló que los funcionarios estaban plenamente conscientes del peligro de viajar por carretera a través de esta zona”.

Para finales de mes los cuerpos eran 196 y “se prevé un aumento debido a que la Sedena y la Semar continúan la búsqueda”; 74 personas fueron arrestadas en conexión con los crímenes. Después sería detenido Martín El Kilo Estrada, el jefe local de Los Zetas.

Los funcionarios estatales, en tanto, maniobran para ocultar los hechos. “A pesar de las afirmaciones del gobierno del incremento de la seguridad, durante el periodo de las vacaciones de Semana Santa (abril 16-24) ocurrieron varios eventos violentos, incluyendo ataques a tres camiones que transitaban por la carretera Victoria-Monterrey a la altura de Ciudad Hidalgo, en los que hubo un herido de balaceras en cada uno”.

Los funcionarios estatales, en tanto, seguían maniobrando para minimizar la violencia continua en las carreteras. “A pesar de las afirmaciones del gobierno del incremento de la seguridad, durante el periodo de las vacaciones de Semana Santa (abril 16 -24) ocurrieron varios eventos violentos, incluyendo ataques a tres camiones que transitaban por la carretera Victoria-Monterrey a la altura de ciudad Hidalgo, en los que hubo un herido de balaceras en cada uno”, reporta.

En abril otro cable indica que los gobiernos federal y el estatal se adjudican unos a otros la responsabilidad. En privado, según indica, los funcionarios han dicho que la seguridad en general, y la violencia en las carreteras en particular, es su preocupación más grande, pero evitan en público el tema de la violencia. Una muestra del sinsentido es el anuncio del gobernador Egidio Torre Cantú de que el estado es un buen lugar para invertir y su exageración sobre las seguras condiciones de las playas ‘fuertemente patrulladas’.

“Funcionarios también repetidamente han afirmado que pueden garantizar la seguridad de cualquier negocio de los inversionistas sin explicar cómo planean hacerlo” (20110429).

Para mayo, la Sedena había desarmado a 700 policías. En junio se informó del despido de siete altos oficiales del Instituto Nacional de Migración “en medio de alegatos de que estuvieron involucrados en el secuestro de migrantes”, ya que “inmigrantes de Centroamérica (específicamente de El Salvador y Guatemala) los acusaron de sacarlos de los autobuses y entregarlos a las bandas de narcotraficantes en el

estado de Tamaulipas” (20110613). Esos meses tanto la Policía Federal como la Sedena se dedican a liberar secuestrados de casas de seguridad.

En 2012, las investigaciones conducen a actores más importantes. El cable menciona que la PGR ha estado investigando a tres ex gobernadores de Tamaulipas desde 2009, en relación con el arresto de Miguel Ángel Soto Parra, miembro fundador de los Zetas.

“Aunque el gobierno mexicano no reveló los cargos contra estos tres exmandatarios estatales, se afirma que la investigación ha estado en curso desde principios de 2009, y se derivó del arresto de Miguel Ángel Soto Parra, miembro fundador de los Zetas”.

“Hasta hace poco, el exgobernador Manuel Cavazos Lerma (1993-1999) fungía como Secretario de Acción Electoral del PRI y, actualmente, busca un asiento en el Senado. Tomás Yarrington (1999-2004) pretende una curul en la Cámara de Diputados y Eugenio Hernández (2005-2010) también busca llegar a la Cámara de Senadores; sin embargo, los entendidos especulan que el candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, sólo dará su aprobación a Cavazos. Dirigentes del PRI dicen que la investigación sólo refleja una ‘guerra sucia’ en su contra, y que el gobierno mexicano está utilizando a la PGR con fines políticos. Peña Nieto visitó Tamaulipas el 2 de febrero, para lanzar su campaña en el estado”. (20120203).

S/A. “Adolescentes, nueva “mercancía” de los Zetas”. *Proceso* número 1936, 8 diciembre 2013. pp. 29-30. <https://www.proceso.com.mx/360122/adolescentes-nueva-mercancia-de-los-zetas-2>

### **“Adolescentes, nueva “mercancía” de los Zetas”**

La tragedia del asesinato –a manos de un militar– de una adolescente plagiada por el crimen organizado enlutó a una familia de Ciudad Victoria, pero además llamó la atención en torno a un problema creciente en últimas fechas en la capital y ciudades fronterizas de Tamaulipas: el secuestro y “venta” de mujeres muy jóvenes, adolescentes e incluso niñas. Esta nueva actividad delictiva de Los Zetas ha impactado incluso en el sistema educativo del vecino estado de Texas, incrementando su matrícula por la alta inscripción de hijas de familias tamaulipecas.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. (Proceso). - Betzi Gabriela Rodríguez tenía 15 años y la ilusión de pertenecer a la Policía Federal. Su sueño se volvió pesadilla al ser secuestrada por el crimen organizado y terminó cuando un militar la asesinó de siete tiros.

Betzi Gabriela estudiaba tercero de secundaria; estaba becada gracias a sus buenas calificaciones, su promedio era de 9.2 y encabezaba la escolta de su escuela, cuya marcialidad fue reconocida por oficiales de la Octava Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas.

El pasado 10 de marzo comenzó su tragedia. Ese día y frente a la mirada de asustados vecinos fue secuestrada por un grupo de presuntos zetas cuando caminaba por una calle de la colonia Horacio Terán, en esta capital.

Los testigos les contaron del secuestro a los familiares de Betzi, quienes hicieron la denuncia correspondiente en la Agencia Primera del Ministerio Público estatal.

La búsqueda de Betzi –emprendida al mismo tiempo por las autoridades y por amigos y familiares de la muchacha– concluyó 10 días después del plagio. La adolescente había permanecido todo ese tiempo en dos casas de seguridad junto con otras menores también secuestradas por el grupo del crimen organizado que controla Ciudad Victoria: Los Zetas.

La tragedia de la joven siguió cuando sus secuestradores decidieron llevarla a otra casa de seguridad, fuera de la capital tamaulipeca. Fue subida a un auto escoltada por cuatro sicarios. El vehículo iba rumbo a la carretera que va a Monterrey cuando se encontró frente a un retén militar en las afueras de la ciudad.

Los tripulantes ignoraron el alto que les marcaron los soldados y huyeron por la carretera. Fueron perseguidos por dos patrullas militares y dos más de la Policía Municipal, la cual está integrada por efectivos de la Octava Zona Militar.

La persecución se prolongó 12 kilómetros hasta que una de las patrullas embistió al auto de Los Zetas y éste terminó volcado a la orilla de la carretera frente a una procesadora de jugo de naranja, decenas de cuyos trabajadores salieron de la planta y observaron lo ocurrido después de la volcadura.

Uno de los delincuentes abandonó el vehículo y comenzó a correr. Pudo huir entre la maleza pese a que los militares le dispararon y un tiro lo alcanzó en una pierna. Entonces el teniente César Eleuterio Chávez Soto, quien encabezaba esa movilización, se acercó al auto de los delincuentes y acribilló a los tripulantes que seguían en su interior. Betzi Gabriela estaba tirada afuera pero con una pierna atrapada por el Tsuru. El oficial le disparó siete veces, una de ellas en la cabeza.

Luego los militares manipularon la escena e incluso contaminaron con pólvora la mano de la adolescente. Después argumentaron ante las autoridades civiles que ellos sólo se habían defendido, que la polvareda levantada por la volcadura les había impedido ver si los delincuentes estaban armados.

Los 19 soldados que participaron en los hechos fueron llevados a Reynosa para rendir su declaración en la sede de la Octava Zona Militar. Sin embargo, la versión contada por el teniente Chávez fue desmentida por algunos de sus compañeros y éste quedó en calidad de detenido.

Gracias a que en Tamaulipas ningún medio publica nada relacionado con el crimen organizado, los mandos del Ejército en complicidad con las autoridades civiles pudieron mantener estos asesinatos en secreto. Todo fue disfrazado como un accidente vehicular.

Un día después la familia de Betzi fue llamada al Ministerio Público para informarles del deceso de su hija. Les mostraron un teléfono celular para que reconocieran si pertenecía a la adolescente. La agente del Ministerio Público intentó encubrir lo ocurrido, pero ante la presión y las preguntas de la familia terminó por confesar que la habían asesinado los militares.

### **Quejas y ofertas**

La familia interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) y a partir de entonces comenzó otro calvario: el acoso militar para que se desistiera de esa denuncia.

Oficiales de alto rango se apostaron frente a las casas de algunos de los familiares de Betzi. También hostigaron a las familias de los tres delincuentes ejecutados para hacerlas firmar un documento donde se desistían de presentar denuncias ante la Codhet, lo cual ya habían hecho algunas de ellas.

La queja interpuesta en la Codhet por los familiares de Betzi fue filtrada a los militares por funcionarios de dicho organismo, el cual se niega sistemáticamente a informar sobre el número de personas desaparecidas en Tamaulipas.

Los militares también acudieron a la procesadora de jugos para intimidar a los testigos y obligarlos a callar, cuentan a Proceso algunos de ellos.

Días después la Secretaría de la Defensa Nacional envió desde la Ciudad de México a un equipo para entrevistarse con la familia de Betzi Gabriela. Lo encabezaban el general Héctor Aragón Zapata y la capitana María del Carmen Bautista. Aragón convocó a los parientes de la adolescente al cuartel del 77 Batallón, con sede en Ciudad Victoria. Ahí les ofreció apoyo y les aseguró que el daño sería reparado. La oferta de “reparación del daño” llegó vía fax a la oficina del abogado de la familia de Betzi: los militares ofrecían 45 mil pesos en compensación por la muerte de la adolescente.

### **Jovencitas en riesgo**

Las investigaciones realizadas por el Ejército a raíz del crimen descubrieron que Betzi no era la única muchacha plagiada en esos días. Hasta donde se sabe estuvo en dos casas de seguridad en Ciudad Victoria, en cada una de las cuales había por lo menos una decena de niñas y adolescentes secuestradas.

Una fuente oficial que pide el anonimato revela a este semanario que a lo largo del último año Los Zetas se han dedicado a plagiar mujeres jóvenes, adolescentes e incluso niñas, a quienes “venden” sexualmente repetidas veces, sobre todo entre los transportistas de carga que circulan por las carreteras tamaulipecas.

Esa práctica se ha vuelto común en las dos principales plazas que controlan Los Zetas en Tamaulipas: Ciudad Victoria y Nuevo Laredo. En la ciudad fronteriza el problema ha alcanzado niveles tan alarmantes que los padres de familia están sacando a sus hijas de las escuelas.

Por ejemplo, Guadalupe y Mario tienen dos hijas adolescentes. Originarios de Monterrey, han vivido en Nuevo Laredo desde hace más de una década. En el anterior ciclo escolar sus hijas avanzaron un grado en la secundaria, pero Guadalupe y Mario decidieron sacarlas de la escuela y por ahora no seguirán estudiando. Se quedarán en casa y sólo saldrán a la calle en compañía de sus padres. Ese fenómeno se repite en varias secundarias y preparatorias de clase media de Nuevo Laredo.

Las familias ahora saben que es en las escuelas donde el crimen organizado selecciona a sus víctimas con ayuda de otros estudiantes o de los halcones que vigilan las zonas aledañas a los planteles. Diversas páginas de redes sociales –como la de Esperanza por Tamaulipas, dedicada a buscar a personas desaparecidas– reportan en promedio el plagio o levantón de cinco mujeres jóvenes cada día en la entidad, crímenes realizados ante la indiferencia de las autoridades encabezadas por el gobernador Egidio Torre Cantú, las cuales se niegan incluso a informar sobre los desaparecidos y mantienen ocultos los constantes secuestros.

Los padres con recursos o parientes en Texas envían a sus hijas a estudiar allá.

La crisis de inseguridad y violencia en las ciudades fronterizas ha hecho que en los últimos tres años aumentara 8% el número de estudiantes de origen mexicano en los distritos de nivel medio de Texas, cuando la tasa de crecimiento poblacional de Estados Unidos se ha mantenido en 0.9% anual en la última década.

Rocio G. Moore, portavoz de la Unión Independiente de Distritos Escolares de Laredo, Texas, comenta a Proceso que han tenido que construir nuevos planteles ante el aumento de las matrículas escolares

### **Silencio de la Sedena**

La ejecución sumaria de Betzi Gabriela Rodríguez no fue un caso aislado. En Nuevo Laredo ocurrió un hecho similar que sólo trascendió en las redes sociales. El pasado 26 de noviembre testigos publicaron en el portal Nuevo Laredo en Vivo: “En la balacera de ayer en la tarde rumbo a la carretera a Anáhuac cerca de Villas de San Miguel, (solados de) Sedena dieron muerte a los tripulantes de una Dodge Durango blanca que, al ir huyendo de los efectivos, ésta choca y se voltea, ahí mismo les dieron muerte”.

Las víctimas eran tres halcones del grupo del crimen organizado que controla la plaza, quienes hicieron caso omiso a la orden de los militares de detener la marcha de la camioneta en la cual circulaban; se inició una persecución e intercambio de disparos. En este caso no hay ningún militar detenido. En el proceso que se sigue por la muerte de los tres plagiarios de Betzi las autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas rechazaron acusar a los militares. Sobre el teniente Chávez Soto lo único que se sabe es que fue trasladado al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, para rendir declaración ante las autoridades militares. Según los abogados de la familia de la víctima, está por alcanzar la libertad en los próximos días.

Proceso solicitó por escrito a la Dirección de Comunicación de la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre la situación actual del oficial Chávez Soto. Se les requirió conocer si la persona aludida está detenida y si hay cargos en su contra. La dependencia que dirige el general brigadier diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario simplemente se negó a responder.

**“Los Zetas” minimizan captura de su líder: estamos bien dirigidos, no pasó nada”**

**REDACCIÓN**

**Proceso**

**26 julio, 2013**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/348443/los-zetas-minimizan-captura-de-su-lider-estamos-bien-dirigidos-no-paso-nada>

CIUDAD VICTORIA, Tamps., (proceso.com.mx).- El grupo delictivo “Los Zetas” tapizó de mantas distintos puntos de la entidad para asegurar que la captura de su líder, Miguel Ángel Treviño Morales, no implica el fin de sus actividades: “Esto está estructurado y bien dirigido, aquí no pasó nada”.

“Esto no se acaba hasta que se acaba, esto está estructurado y bien dirigido, aquí no pasó nada, no reacomodos ni nada”, cita el mensaje colocado en las mantas y firmado con la letra “Z”.

Los mensajes fueron colocados la madrugada de este viernes en puentes y avenidas de Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Ciudad Victoria, Mante, Ciudad Valles, Llera y comunidades rurales.

Los textos están escritos con mala ortografía y dirigidos a los “amigos y enemigos” para refirmarles que Miguel Ángel Treviño Morales, capturado el pasado 15 de julio, “Z-40 está vivo”.

“Hay grupo para rato, somos un grupo sólido y bien dirigido y unido que ni el CDG ni los Chapos, ni michoacanos nos asustan” (sic).

En los últimos días trascendió que “Los Zetas” se encontraban en proceso para elegir a sus nuevos dirigentes y corrió la versión que estaría integrado por un “triumvirato” en el que participaría un importante capo de Zacatecas, uno de Tamaulipas y Óscar Omar Treviño Morales, alias “Z-42”.

Algunos jefes de plaza cuestionaron la permanencia del liderato de la familia Treviño Morales, pues sospechan que no son claros en el manejo de las finanzas con el resto de los líderes.

La molestia de los líderes regionales comenzó cuando se conoció las grandes cantidades de dinero que invertía en Estados Unidos José Treviño Morales, hermano de “Z-40” y “Z-42”.

“Los Zetas” operaron con la estructura de un triumvirato desde que se separaron del cártel del Golfo, encabezado por tres capos. Heriberto Lazcano, “Z14”, Miguel Ángel Treviño Morales, y Jesús Enrique Rejón Aguilar, alias “Z-7”.

## **“Entrega México a EU a “El Talibán”, excapo de Los Zetas”**

### **REDACCIÓN**

**Proceso**

**22 noviembre 2013**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/358604/entrega-mexico-a-eu-a-el-taliban-excapo-de-los-zetas>

MEXICO, D.F. (apro). - El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto extraditó a Estados Unidos a Iván Velázquez Caballero, El Talibán, quien hasta su captura en septiembre del año pasado era jefe de una facción del cártel de Los Zetas.

Un portavoz de la embajada estadounidense en México, quien pidió el anonimato, confirmó a la AFP que El Talibán “fue extraditado el jueves” 21.

El vocero se limitó a señalar que la entrega del capo del narcotráfico se realizó en la ciudad estadounidense de Laredo, Texas, limítrofe con Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Velázquez Caballero, también conocido como El Z-50, fue detenido el 26 de septiembre de 2012 en una operación de la Marina Armada de México en la ciudad de San Luis Potosí, desde donde encabezaba operaciones de Los Zetas en una amplia zona que comprende cuatro regiones del centro y norte del país.

El gobierno que encabezó Felipe Calderón, cuya presidencia estuvo marcada por su frontal combate militar a los cárteles, había incluido a El Talibán en una lista de los 37 narcotraficantes más buscados y ofreció por su captura una recompensa de unos 2.3 millones de dólares.

## 2014

S/A. “Tamaulipas, propiedad criminal”. *Proceso* número 1943, 26 enero 2014. pp 16-19.

<https://www.proceso.com.mx/363216/tamaulipas-propiedad-criminal>

### “Tamaulipas, propiedad criminal”

En Tamaulipas el imperio de los cárteles cumplió una década. Controlan desde la tortilla y el pollo que uno se come hasta el tianguis, la universidad pública y el estadio que frecuenta. Ese territorio está más lejos de las leyes mexicanas que de las estadounidenses: la Unión Americana ha investigado a tres exgobernadores por proteger a Los Zetas o al Cártel del Golfo. Por esas razones ya surgió el primer grupo de autodefensa tamaulipeco.

TAMPICO, TAMPS. - Más de una década de complicidad entre el crimen organizado y gobernadores, funcionarios municipales y jefes policiacos permitió a los cárteles controlar la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), hoteles, casinos y empresas de espectáculos. A últimas fechas y gracias a que incursionaron en el robo de ganado, ahora operan carnicerías, dirigen la distribución del pollo y dominan las tortillerías, entre otros muchos negocios.

Los delincuentes también controlan el sistema de transporte de varias ciudades tamaulipecas gracias a su amasiato con líderes sindicales; la venta ilegal de gasolina, mercados rodantes y la distribución de cerveza en los estadios de fútbol, así como su venta en bares y depósitos de su propiedad. Además cobran piso a una infinidad de comercios y empresas, denunciaron ciudadanos, empresarios y funcionarios que hablaron con Proceso a condición de que no se revelaran sus nombres, pues sus vidas correrían riesgo.

Las dos mafias predominantes en Tamaulipas –Los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG)– se metieron como el agua en cualquier empresa donde reinaran la corrupción y la ilegalidad. Del tráfico de drogas y

el narcomenudeo saltaron a ser propietarios de todo tipo de giros negros. Incursionaron en la piratería e hicieron del secuestro una industria.

En diversas ciudades del noreste compiten con Pemex en la distribución de combustibles. No sólo cuentan con decenas de “gasolineras” clandestinas –disfrazadas de vulcanizadoras– en barrios y carreteras federales; ahora también obligan a los propietarios de establecimientos a comprarles la gasolina robada de los ductos de la paraestatal. “En las ciudades fronterizas ese negocio les proporciona ganancias por alrededor de 10 millones de pesos diarios”, denunció uno de los empresarios que hablaron con Proceso.

En Tampico, el CDG controla la distribución de la cerveza Tecate y todas las marcas de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, ahora propiedad de la holandesa Heineken, por lo que impiden la distribución de las marcas del Grupo Modelo, propiedad de la firma belga Anheuser-Busch InBev.

“A través de su empresa Viento Rodeo han organizado decenas de macroeventos, desde espectáculos de motocicletas y monster trucks a un sinnúmero de conciertos. De igual manera se les ha relacionado con el control del estadio Tamaulipas (para la venta de cerveza), donde juega el equipo Tampico-Madero y donde generalmente hacen los conciertos”, comenta a este semanario otro de los entrevistados.

En la página de Facebook de Viento Rodeo, empresa ubicada en Ciudad Madero, únicamente se promueve la cerveza Tecate.

En la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, el CDG controla la distribución de pollo y varias tortillerías. Además, rutas de transporte y taxis están bajo su poder. Tienen flotillas de camiones y tráileres robados. Extorsionan y hurtan a las empresas navieras e hicieron de Tampico la ciudad que ocupa el tercer lugar nacional en secuestros.

“Se han adueñado de hoteles que han quitado de forma violenta a sus dueños”, denunció otro de los empresarios entrevistados.

En Ciudad Victoria Los Zetas le siguen los pasos a sus rivales y recientemente crearon una empresa que organiza bailes. La promueven por todos los medios de la capital del estado.

El pasado diciembre la empresa de espectáculos propiedad de Los Zetas organizó una posada-baile donde se presentó el Grupo Indio. El acto fue anunciado masivamente en la capital de Tamaulipas por radio, cartelones, pintas en bardas, etcétera.

Días después el grupo criminal realizó un operativo en diversas colonias de Ciudad Victoria para repartir Roscas de Reyes dentro de una bolsa blanca marcada con una Z negra. Las roscas fueron entregadas por hombres embozados que se desplazaban en camionetas, en las colonias La Moderna y Ampliación Lindavista, entre otras. El reparto fue vigilado por hombres armados, discretamente y a la distancia.

En alianza con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Los Zetas controlan parte del transporte público. Sus taxis utilizan los logos de esa central. Uno de los líderes de esa organización sindical es el responsable de cobrar las cuotas a las rutas de camiones extorsionados.

En Monterrey, de hecho, uno de los familiares de Agustín Serna Servín, líder de la CROC, es señalado como distribuidor de droga en la populosa colonia Moderna.

“En Ciudad Victoria tienen una empresa llamada Correcaminos, la cual usa taxis sin placas”, especificó uno de los empresarios entrevistados. “Sobre las carnicerías, el año pasado mataron a muchos dueños porque se negaban a comprar el ganado robado. Y también hubo asesinatos de dueños de ferreterías”.

Los negocios de ambas mafias se extienden a todas las ciudades del estado. En Matamoros el CDG opera su propio mercado rodante, donde vende mercancía robada. También extrae la gasolina del ducto que va a Brownsville. Mientras que Los Zetas en Nuevo Laredo operan al menos un casino, El Amazonas, y controlan todo el contrabando que pasa por esa ciudad fronteriza rumbo a la Ciudad de México.

“La Universidad Autónoma de Tamaulipas es otra institución local que ha tenido problemas con los narcos. Se adueñaron de las instalaciones hace dos años y ahí llegaron a albergar a los maras que vinieron a apoyar a Los Zetas. Era centro de operaciones y los halcones siguen ahí, lo mismo que vendedores de droga. Hace poco se adueñaron de negocios dentro de la universidad y cobraban cuota por dejar trabajar a los maestros, además de que había muchos aviadores del crimen organizado que fueron colocados con apoyo del gobierno”, dijo una de las personas entrevistadas a condición del anonimato.

En la UAT Los Zetas venden droga y obligan al personal docente y a alumnos a comprar boletos cuyos “premios” nadie gana.

“Gracias a los funcionarios públicos que mantienen en su nómina tienen un control férreo en la mayor parte de los municipios. Las dependencias del gobierno estatal bajo su control, parcial o absoluto, son Tránsito, Seguridad Pública, Ministeriales, Protección Civil, Comapa, Alcoholes y los penales”, aseguró uno de los funcionarios entrevistados.

Mantienen “narconegocios” dentro de las cárceles. El mayor centro de entrenamiento y base de operaciones del CDG en el sur del estado es el penal de Altamira. “Ahí sí hay de todo y eso que el Ejército cuida las entradas”, agregó la fuente.

### **Tres gobernadores**

El CDG comenzó a controlar el estado al amparo del gobernador Manuel Cavazos Lerma. Se consolidó durante las administraciones de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Los tres gobernadores están siendo investigados por autoridades estadounidenses por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

La indagatoria más avanzada es contra Yarrington, quien ya enfrenta acusaciones penales por lavado de dinero y por relacionarse con un cártel del narcotráfico. Demandas en su contra se presentaron en mayo de 2012 en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi. El exmandatario ya perdió los primeros juicios civiles, en los que le quitaron cuentas bancarias, aviones y varias propiedades por más de siete millones de dólares.

Una de las primeras demandas la enfrentó en la corte de Brownsville, Texas. Fue de carácter civil y sólo era para quitarle un lujoso departamento en la Isla del Padre y otras propiedades. En este juicio salió a relucir que el exmandatario adquirió, a través del empresario constructor Fernando Cano Martínez, las propiedades en la Isla del Padre y San Antonio. Cano también fue señalado por lavado de dinero.

El gobierno estadounidense acusó a Yarrington de comprar propiedades a través de prestanombres con recursos que fueron pagados al exgobernador por proteger al CDG, primero cuando fue alcalde de Matamoros y luego como mandatario de Tamaulipas.

El pasado 16 de agosto, el Departamento del Tesoro subastó un apartamento en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que fue confiscado al empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza. Él confesó ser prestanombres de Yarrington.

También le decomisaron (y luego se subastó) una residencia de dos niveles, cinco recámaras y seis y medio baños ubicada en el número 9001 de Ware Road, un exclusivo sector de la ciudad fronteriza de McAllen.

La propiedad fue asegurada en julio del año pasado y mide 12 mil 770 metros cuadrados, con mil 491 metros de construcción. Tiene un valor superior a los 600 mil dólares, según el Departamento del Tesoro.

El inmueble fue construido en 2001 y se puso a nombre de la profesora Cindy Chapa, secretaria de Yarrington durante su gestión como alcalde de Matamoros.

Además de la residencia en McAllen y el departamento de lujo en la Isla del Padre, el gobierno de Estados Unidos decomisó a Yarrington un avión privado, una cuenta de banco en Las Bermudas y otra residencia en Kyle, Texas, también a nombre de Cindy Chapa.

Ahora es buscado por las autoridades estadounidenses para encarcelarlo. Algunas pruebas de su relación con los cárteles ya fueron presentadas en el caso 5:12-MJ-00120, que se desahoga en la Corte del Distrito Oeste de Texas y que fue entablado contra Antonio Peña Argüelles.

Este personaje fue presentado en ese el juicio como “enlace” del CDG y Los Zetas con altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas, entre los que destaca Yarrington.

### **Autodefensas en Tamaulipas**

Los ciudadanos entrevistados aseguran que la corrupción de los funcionarios ha permitido a los cárteles actuar con impunidad en Tamaulipas. Su poder llega al extremo de imponer la censura en los medios. Ninguno habla de la continua inseguridad y violencia en el estado. Las muertes de inocentes y los desaparecidos en los últimos años se cuentan por miles, aseguran.

Todo lo anterior ha llevado a formar el primer grupo de autodefensa, que ya opera en la región rural del municipio de Hidalgo. Este grupo, llamado Columna Armada Pedro J. Méndez, ya ejecutó y colgó a varios presuntos miembros de Los Zetas, aunque algunos los relacionan con el CDG.

Recientemente estableció un toque de queda mediante volantes que fueron repartidos en el municipio. “El gobierno del estado ha fallado. Sólo el Ejército y la Marina han enfrentado a los secuestradores llamados Zetas. No nos engañemos, nadie está a salvo de un secuestro o asesinato... Combatir el secuestro con las armas en la mano y a sangre y fuego es una obligación”, rezaba el papel que se repartió.

Los entrevistados aseguran que Tamaulipas seguirá los pasos de Michoacán si la administración de Enrique Peña Nieto sigue permitiendo que las bandas del crimen organizado continúen gobernando al estado.

### **Acto en el DF**

“En un acto desesperado” para contener el derramamiento de sangre que se vive en Tamaulipas, un par de tamaulipecos desplazados por la violencia, acompañados de otros paisanos, se manifestaron el pasado jueves 23 en la Ciudad de México para exigir al gobierno estatal que cese la corrupción, contenga al crimen organizado y atienda a las víctimas.

Con mantas en las que se leía “Salvemos Tamaulipas: no más corrupción, impunidad, secuestros, decapitados, fosas clandestinas, extorsiones, delincuencia organizada y desapariciones”, los tamaulipecos marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta las oficinas de la representación del gobierno de dicha entidad.

“Nuestra lucha por el rescate de Tamaulipas implica que se frene la corrupción y la impunidad, para que prevalezcan la legalidad, la justicia, y entonces poder recobrar la paz social”, señalaron los organizadores en el comunicado que entregaron al gobierno de Tamaulipas.

La convocatoria surgió del periodista Mario Segura, quien vive fuera de Tamaulipas tras haber sufrido un secuestro, y del psicólogo Néstor Troncoso González, quien dice haber sido encarcelado injustamente y torturado, y por esa razón huyó con su familia al centro del país. La organización internacional Artículo 19 –dedicada a la protección de periodistas– envió a un representante para monitorear la seguridad de Mario Segura, cuyo caso fue aceptado en los Mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

Los organizadores destacaron que la violencia no sólo es cometida por grupos criminales como Los Zetas y el Cártel del Golfo (“llamado ‘el cártel de casa’ y sus socios ‘empresarios del crimen’”), sino también por las mentiras del gobierno que niega lo que ocurre en el estado.

Juan Alberto Cedillo. “Coahuila: en busca de desaparecidos, “macro operativo” falaz”. *Proceso* número 1946, 16 febrero 2014. pp. 20-25. <https://www.proceso.com.mx/365071>

### **“Coahuila: en busca de desaparecidos, “macro operativo” falaz”**

En el estado de Coahuila, donde se calcula que hay cerca de 900 desaparecidos a manos del crimen organizado, se inició este año un operativo para buscar en narcofosas a alrededor de 300 personas que en 2011 fueron masacradas por disputas entre Los Zetas. Los resultados han sido magros. Pero, además, familiares de los plagiados cuyos restos se buscan rompieron su relación con el gobierno porque, afirman, éste no ha cumplido con varios acuerdos, y anunciaron que recurrirán a instancias internacionales que puedan emprender una búsqueda profesional...

**SALTILLO, Coah. (Proceso).** - Durante varias semanas de 2011, la barbarie asoló los pequeños municipios de Nava y Allende, Coahuila. En esos días los semidesérticos poblados del norte del estado sufrieron la peor masacre en la historia del México contemporáneo, superando las ocurridas en San

Fernando, Tamaulipas. Tres años después, el Estado mexicano comenzó un gran operativo para buscar los restos de más de 300 personas que fueron plagiadas y asesinadas. Para ello utilizan alta tecnología, pero también métodos rudimentarios, como la tortura, con el fin de que algunos delincuentes confiesen dónde enterraron a sus víctimas.

El 18 de marzo del 2011 arribaron a la comunidad de Allende decenas de camionetas con sicarios que tomaron la plaza principal tras cerrar los accesos por carretera. En esa fecha, los pistoleros incendiaron 10 viviendas y se llevaron a alrededor de 50 personas, entre ellas ancianos, mujeres y niños.

Los ataques a la población de cerca de 22 mil habitantes prosiguieron las siguientes semanas. En otra ocasión los sicarios llegaron cuando los lugareños realizaban una fiesta en la plaza central. Durante varios días destruyeron más casas, para lo cual utilizaron trascabos y maquinaria pesada. En total derribaron y quemaron 80 inmuebles, desde humildes viviendas hasta residencias lujosas.

Las incursiones de los pistoleros se prolongaron hasta el mes de mayo. Siguieron “levantando” a familias enteras, y los pobladores atestiguan que se llevaron a cerca de 300 personas.

Por los ganaderos y comerciantes secuestrados exigieron rescate. Cuando no hubo pago por ellos, los mataron y a sus familias les quitaron sus ranchos, vehículos y todo tipo de propiedades. Los hombres ricos que quedaban abandonaron sus residencias y se fueron a refugiar a Estados Unidos.

Las hordas de sicarios asolaron enseguida los poblados de Nava, Zaragoza, Nueva Unión y se extendieron hasta Ciudad Acuña y Piedras Negras, donde continuaron “levantando” personas y familias enteras durante tres meses.

Los motivos que tenían salieron a relucir durante el juicio que se siguió en Austin, Texas, contra José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel, El Z-40, y Omar, El Z-42. En ese proceso judicial la fiscalía presentó a tres ex miembros de Los Zetas para que atestiguaran en contra de sus antiguos compañeros: Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito, tercero en la jerarquía de la organización; Mario Alfonso Cuéllar (Poncho Cuéllar), contador y responsable de traficar droga por la ciudad de Piedras Negras, y Héctor Moreno, lugarteniente de Cuéllar.

Poncho Cuéllar contó allí que en 2011 Los Zetas cruzaban entre 500 y 800 kilos de cocaína al mes por esa frontera, que les generaban ingresos de aproximadamente 16 millones de dólares.

Las ganancias por dicho tráfico eran cercanas a 5 millones de dólares mensuales y estaban manejadas por Cuéllar. Aseguró que el dinero se enviaba a México en bolsas de plástico escondidas en los tanques de gasolina de los vehículos. En una ocasión agentes de Estados Unidos les decomisaron 800 mil dólares.

Héctor Moreno especificó a los fiscales que Miguel Treviño y su hermano Omar acusaron a Cuéllar y a él de estar pasando información a la DEA. Ambos huyeron con alrededor de 5 millones de dólares, lo que provocó la ira del Z-40 y del Z-42. Los capos les advirtieron que, si no regresaban el dinero, matarían a todos sus familiares, amigos y cómplices.

La amenaza se cumplió cuando los líderes de Los Zetas ordenaron una limpia entre sus miembros, así como el asesinato de todos los familiares y amigos de los fugados. La purga se convirtió en una de las peores matanzas de la historia reciente y comenzó en los municipios de Allende y Nava. (Apocalipsis en

Coahuila, Proceso 1886.) “Empezaron a matar a las familias de Allende y Piedras Negras y Múzquiz y Sabinas (...) Debido a esto, mataron a 200 o 300 personas en Allende, Coahuila”, enfatizó Moreno durante su testimonio ante el jurado que integraba el juicio en Austin.

Los desgarradores gritos de auxilio llegaron hasta el Palacio de Canteras de la capital del estado, donde despachaba Humberto Moreira, pero sus oídos no los escucharon.

Un año después, su hermano, el actual gobernador Rubén Moreira, le reclamó que no hubiera hecho nada para ayudar a los habitantes de esa región, denominada Cinco Manantiales.

“... En Allende y Nava (sucedió hechos) inéditos, que muy pocas personas reportaron, que involucraron a buena parte de la población y pasaron como una sombra en la historia reciente de nuestro estado sin que nadie haya puesto el suficiente énfasis sobre lo ocurrido. Tuvimos la destrucción de más de 40 casas; muchísima gente desapareció, y temo que murió”, aseguró Rubén Moreira.

El mandatario ordenó a la procuraduría estatal que se realizara una investigación. “En mi conciencia no va a estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron ayuda y nadie lo hizo”, enfatizó refiriéndose a su hermano Humberto Moreira y a Jorge Torres López, ya que las atrocidades comenzaron cuando el primero aún era gobernador y se agudizaron en la administración del segundo.

### **El “macro-operativo**

Posteriormente, a mediados de julio de 2013, la Armada capturó al líder zeta Miguel Ángel Treviño Morales gracias a información proporcionada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la frontera entre Coahuila y Nuevo León. Las autoridades federales recogieron sus declaraciones y la Procuraduría de Justicia de Coahuila recolectó información vertida en averiguaciones por personas detenidas que presuntamente estuvieron involucradas en las desapariciones.

El 26 de enero del presente año, el gobierno estatal anunció un macro-operativo en el cual participaron alrededor de 250 efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Federal y cuerpos de seguridad de Coahuila en la búsqueda de más de 300 desaparecidos en la región de Cinco Manantiales.

En las labores fueron utilizados georradars de alta tecnología, que pueden encontrar cuerpos y armas enterradas hasta ocho metros de profundidad; helicópteros, y perros entrenados. “Se localizaron huesos, ropa con disparos de armas de fuego, cientos de casquillos percutidos, entre otros objetos, en un gran rancho que estuvo tomado por un grupo del crimen organizado en el municipio de Zaragoza”, contó a Proceso Jesús Carranza, vocero de Seguridad de Coahuila.

Después de rastrear 11 municipios, se hallaron barriles con evidencias de que en ellos “cocinaron” cuerpos para desaparecerlos, así como otros lugares con restos donde incineraron a varias personas.

Las evidencias recolectadas serán analizadas por expertos forenses de la Procuraduría de Justicia del estado y de la Policía Científica; entonces se podrá precisar el número de personas asesinadas en esos lugares, señaló Carranza.

No obstante, días después la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas informó sobre algunos resultados del operativo, que duró del 26 de enero al 5 de febrero.

El reporte indicó que “se detuvo a seis civiles del sexo masculino sobre la carretera Guerrero-Hidalgo y a cuatro elementos activos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nava, todos ellos consignados por el delito de facilitación delictiva” (halcones).

Agregó que se recabaron nueve declaraciones testimoniales y se hicieron 32 entrevistas a exfuncionarios municipales. Fueron asegurados dos vehículos que eran empleados por la delincuencia organizada y dos armas de fuego calibre 9 milímetros.

Aunque el comunicado oficial aseguró que “durante el desarrollo del operativo los elementos participantes actuaron en completo respeto a los derechos humanos”, hubo testimonios de tortura de presos para conseguir resultados.

Una de las declaraciones en ese sentido provino del reo Ramón Burciaga Magallanes, quien fue requerido el viernes 31 de enero por las autoridades de la procuraduría y la Fiscalía Especializada para los Casos de Personas Desaparecidas, con el fin de que asistiera a una “diligencia” a Piedras Negras.

En un reporte sobre las torturas en el penal elaborado por miembros de la diócesis de Saltillo se detallan las agresiones y amenazas a las que fue sometido. El interno les narró que fue trasladado durante varias horas en diferentes vehículos. Dijo que lo hicieron “subir a una Silverado de cuatro puertas, troca blanca particular de los Gates (cuerpo de la policía estatal) en la que había tres elementos vestidos con ropa de camuflaje, todos con chalecos de los Gates”.

Añadió que los uniformados cubrieron su rostro con la camisa que vestía, que se detuvieron en una gasolinera y que lo subieron a otro vehículo. Posteriormente, uno de los involucrados expresó: “... es el lugar indicado”. Entonces ordenaron al reo bajarse del automóvil y correr, pero él se negó. En consecuencia, fue golpeado y lo amenazaron con asesinar a sus familiares.

Posteriormente, de acuerdo con las denuncias, autoridades del Cereso encabezadas por su director, Miguel Ángel Rosales Saucedo, amenazaron con “matar a los presos que continuaran denunciando torturas”. También amenazaron a Jaqueline Campbell, colaboradora del obispo Raúl Vera y una de las integrantes de la diócesis que participaron en la elaboración del reporte de la Iglesia católica.

## **La ruptura**

Según cifras oficiales, en el estado hay cerca de mil 600 personas desaparecidas y se calcula que al menos 60% de los casos tiene que ver con el crimen organizado.

Las familias de alrededor de 320 desaparecidos, asociadas en la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fuundec), cuestionaron los resultados del operativo y rompieron su relación con el gobierno debido a que no se respetaron acuerdos para la búsqueda, como el compromiso de no utilizar maquinaria pesada al excavar en las fosas clandestinas.

“La Plenaria de Fuundec ha tomado la decisión de suspender la interlocución con el gobierno del estado de Coahuila y con la federación, retirándose de las mesas temáticas y de las de seguimiento de casos, hasta en tanto el gobernador de Coahuila y el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, no nos den explicaciones satisfactorias sobre las graves anomalías detectadas en el operativo”, señaló un comunicado de la organización.

Exigieron también que cesen las acciones de búsqueda planeadas hasta que la situación sea aclarada y se pida ayuda a organismos internacionales para preparar, desarrollar y sistematizar la búsqueda con estándares profesionales.

Los representantes de las familias y el gobernador Moreira se reunieron el domingo 9. En el encuentro las autoridades presentaron los resultados de las acciones de búsqueda de desaparecidos en 11 municipios del norte de Coahuila.

Jorge Verástegui, representante de Fuundec, comenta a Proceso que las autoridades no les informaron nada en concreto y que incluso el gobernador Moreira contradujo los resultados expuestos por el subprocurador para la Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, Juan José Yáñez Arreola.

“El gobernador Rubén Moreira nos dijo que no habían encontrado nada”, puntualiza Verástegui.

Ahora las familias preparan una serie de movilizaciones y se reunirán con un alto representante de Amnistía Internacional para exigir resultados sobre las búsquedas.

El subprocurador especial Juan José Yáñez Arreola informó que próximamente se reanudarán los operativos de búsqueda en otras regiones. El funcionario no precisó la fecha y el lugar, aunque son varias las zonas que en el estado pueden albergar narcofosas.

Redacción. “Tamaulipas: la lluvia desentierra los muertos”. *Proceso* número 1946, 16 febrero 2014. pp. 22-23. <https://www.proceso.com.mx/365217/tamaulipas-la-lluvia-desentierra-los-muertos-2>

### **“Tamaulipas: la lluvia desentierra los muertos”**

GÓMEZ FARÍAS, TAMPS. - Desde el miércoles 12, peritos forenses de la PGR trabajan en una narcofosa descubierta el 31 de enero en la falda de la Sierra Madre Oriental, específicamente en una elevación conocida como Sierra de Cucharas. Hasta el momento han localizado 30 cuerpos.

La región forma parte del ejido Alfredo V. Bonfil, del municipio de Gómez Farías. Ahí también fueron encontrados alrededor de 10 barriles con restos humanos. Un portavoz del gobierno estatal, que pide no mencionar su nombre, precisa que “Los Zetas, al mando del comandante local Enrique Santillán, ahí ejecutaban, quemaban y sepultaban a sus víctimas”.

Esos depósitos de cadáveres quedaron al descubierto tras las torrenciales lluvias de finales del año pasado. Por las denuncias de los pobladores de la región, se cree que existen en ella más fosas clandestinas, tal vez con más de 80 cuerpos.

Se trata de una zona boscosa de difícil acceso en un potrero del ejido Bonfil, donde los sicarios mantenían ocultas a sus víctimas. La narcofosa fue descubierta por soldados del 75 Batallón de Infantería comisionados en Ciudad Mante, quienes peinaron la zona tras recibir una denuncia anónima.

Después regresaron con la agente del Ministerio Público del Fuero Común Lorena Cabrera y peritos. Los militares también informaron a las autoridades federales y desde el martes 11 fue a la región la agente del MP federal Dora García Loera, quien inspeccionó el lugar con peritos de la PGR. El grupo contó con protección del Ejército.

La fuente agrega que los militares también participan en la búsqueda de restos humanos en fosas clandestinas localizadas en el municipio de Xicoténcatl, donde presuntamente fueron enterradas 25 personas.

El año pasado la gente de la región de Mante, Gómez Farías y Xicoténcatl denunció la desaparición de más de 200 personas y alertó que Los Zetas están asesinando a dueños de ranchos, comercios y viviendas para quedarse con las propiedades.

Algunos pobladores señalan que hace semanas se ubicó en Xicoténcatl una fosa clandestina con más de 60 cadáveres, pero el gobierno estatal únicamente reportó seis.

Denuncian que Los Zetas se dan el lujo de poner retenes en varias carreteras, entre ellas las que conducen a Ciudad Mante, a fin de secuestrar a conductores. Ante el peligro, las autoridades del vecino estado de San Luis Potosí exhortaron a sus ciudadanos a no transitar por ahí.

La noche del jueves 13, en el ejido Graciano Sánchez, de San Carlos, en el norte del municipio de Padilla, se halló otra narcofosa con seis cuerpos. Después, soldados que vigilan esa demarcación fueron atacados por un comando de la delincuencia organizada y respondieron al fuego.

La refriega dejó un saldo de un presunto delincuente muerto, varios detenidos y tres vehículos incautados.

Roberto Saviano. “La crueldad se aprende... la crueldad tiene reglas”. *Proceso* número 1946, 16 febrero 2014. pp. 26-28. <https://www.proceso.com.mx/365004/la-crueldad-se-aprende-la-crueldad-tiene-reglas>

### **“La crueldad se aprende... la crueldad tiene reglas”**

El periodista y escritor Roberto Saviano vuelve a la palestra con otro libro demoledor de casi 500 páginas: *CeroCeroCero. Cómo la cocaína gobierna el mundo*. Y así como en 2006 irritó a los mafiosos napolitanos con cinco historias criminales con *Gomorra* –que fue llevado al cine–, esta vez atisba el mundo de los cárteles mexicanos y colombianos, y describe cómo el “petróleo blanco” coloca a México en el centro del mundo. *Proceso* adelanta en exclusiva un fragmento del libro, que comenzará a circular en los próximos días bajo el sello de Anagrama.

Osiel (Cárdenas Guillén, el capo del Cártel del Golfo) es famoso porque no comete errores y no perdona a quien se equivoca. Pero hasta él acabaría cometiendo un error, y con las personas equivocadas. Corre el mes de noviembre de 1999 y un agente de la DEA, Joe DuBois, y uno del FBI, Daniel Fuentes, viajan a bordo de un Ford Bronco con matrícula diplomática; en el asiento posterior un informador del Cártel del Golfo duerme con la frente aplastada contra la ventanilla. El informador lleva a los dos agentes a dar una vuelta por las casas y los locales de los capos del Cártel del Golfo en Matamoros. Inspeccionan la zona en vano. No se despierta ni siquiera cuando el Ford Bronco frena en seco y del exterior llegan voces demasiado conocidas. “¡Ese hombre es nuestro, gringos!”. El coche de los agentes se ve rodeado por algunos vehículos de los que emergen una docena de miembros del cártel apuntándoles con sus AK-47 (...) El tiempo se congela, los actores en escena se desafían sin enseñar demasiado los músculos: un movimiento equivocado y lo que parece una negociación puede convertirse en una carnicería. Entonces el agente del FBI prueba suerte: “Si no nos dejas ir, el gobierno de Estados Unidos te perseguirá hasta la

tumba”. Osiel cede, les grita a los gringos que ése es su territorio y que no pueden controlarlo y que no vuelvan a dejarse ver por aquella zona; luego ordena retroceder a los suyos. El agente del FBI y el de la DEA dan un suspiro de alivio.

Es el principio del fin. Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 2 millones de dólares por la cabeza de Osiel, que se vuelve paranoico. Ve enemigos por todas partes, hasta sus colaboradores más fiables podrían ser madrinan, informadores. Tiene que aumentar la potencia de fuego y decide comprarse un ejército. No quiere cometer imprudencias y elige a soldados corruptos y desertores del cuerpo de élite del Ejército mexicano, el GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales. Ironías del destino: el GAFE tenía la misión de dar caza a delincuentes como él. Los hombres del GAFE son tipos duros: se han forjado siguiendo el modelo de las fuerzas armadas estadounidenses y han sido adiestrados por especialistas en tácticas subversivas de Israel y Francia. Uno de esos Rambos mexicanos es el teniente Arturo Guzmán Decena. Con Osiel tiene algunos rasgos en común: es cínico, ambicioso y despiadado. Arturo, junto con otros 30 desertores, se apunta en la nómina de Osiel (...) Nace así el ejército privado de Osiel, bautizado como Los Zetas porque “Z” era el código utilizado por los soldados del GAFE para comunicarse entre sí por radio. El teniente Arturo Guzmán Decena se convierte en Z-1.

(...) El nivel de profesionalidad de los miembros de Los Zetas es altísimo y utilizan un moderno sistema de escuchas. Sus habilidades tecnológicas los hacen inexpugnables, puesto que utilizan señales de radio encriptadas y Skype en lugar de teléfonos normales.

En su seno rige una organización jerárquica muy estricta. Cada plaza tiene su propio jefe de plaza y su propio contable, el cual gestiona las finanzas de la célula criminal, que además de la droga explota varios nichos de la economía criminal: robos, extorsiones, secuestros (...) Según fuentes mexicanas y estadounidenses, dentro de Los Zetas existe una precisa división de papeles, cada uno de ellos con su nombre (...)

Es una organización piramidal y eficiente, que no tiene nada que envidiar a los exitosos modelos de las mafias italianas.

Quizás Ángel Miguel no conociera la historia de Osiel, pero desde luego no podía ignorar que las relaciones entre Los Zetas y los kaibiles habían sido muy estrechas. Los guatemaltecos habían adiestrado a los soldados del GAFE que después se convirtieron en Los Zetas. Luego, una vez independizados, Los Zetas empezaron a reclutar kaibiles, o sea, a quienes antaño habían sido sus maestros. Las competencias de los guatemaltecos son preciosísimas, pero hay una cosa que Los Zetas aprenden solos: guiñarle el ojo a la cámara. Basta con teclear en Youtube “Los Zetas Execution Video” y aparecerá una lista de videos colgados directamente por miembros del grupo. La crueldad funciona si se propaga como un contagio, de boca en boca, de persona a persona. Decapitaciones, ahogamientos y despellejamientos son su departamento de marketing; los videos de sus bestialidades, su gabinete de prensa (...) Además poseen una característica que les distingue de los otros cárteles: no tienen un territorio, una ubicación física, raíces geográficas. Es un ejército posmoderno que necesita producir ante todo una imagen que cree avanzadillas. El terror debe conquistar el país. Los muyahidines entendieron antes que ellos que las decapitaciones podían ser la marca de fábrica de las atrocidades, y Los Zetas no han tardado mucho en incorporar la misma técnica.

La red es su caja de resonancia preferida, pero Los Zetas no desdeñan los viejos métodos, como las pancartas que cuelgan en los pueblos y ciudades mexicanos: “Grupo Operativo Los Zetas te quiera a ti militar o exmilitar. Te ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia. Ya no sufras maltratos y no sufras hambre”. Las llamadas “narcomantas” prometen beneficios y dinero a los soldados que decidan alistarse en las filas de Los Zetas, transmiten mensajes directos a la población, se utilizan para intimidar a los enemigos y al gobierno. “Ni siquiera con el apoyo del gobierno de Estados Unidos lograrán detenernos, porque aquí mandan Los Zetas. El gobierno de Calderón tiene que acabar pactando con nosotros, porque si no lo hace nos veremos obligados a derrocarlo y a tomar el poder por la fuerza”.

---

No hay límite a la brutalidad de Los Zetas: cadáveres balanceándose colgados de los puentes de las ciudades ante los ojos de los niños en pleno día; cuerpos decapitados y descuartizados hallados junto a los contenedores de basura o abandonados en las calles, a menudo con los pantalones bajados como una última humillación; “narcofosas” descubiertas en el campo con decenas de cadáveres amontonados unos sobre otros... Las ciudades se han convertido en escenarios de guerra y en todo México el código de conducta de la gente es sólo uno: la violencia.

Sí, la violencia. Siempre se vuelve a ella. Una palabra con sabor a instinto, a primitivo, y que Los Zetas –como los kaibiles– han sabido encauzar, en cambio, por la senda de la educación. Rosalío Reta ha sido alumno suyo. Nacido en Texas con el sueño de convertirse en Superman, Rosalío terminó a los 13 años en un campo de adiestramiento militar de Los Zetas situado en una hacienda en el estado de Tamaulipas. Al principio es como un juego.

–Tu superarma será el láser.

–Pero Superman no usa láser...

–No importa. Con el láser apuntas, disparas y delante se desaparecen todos.

Es así como le dan su primera pistola, y al cabo de seis meses de entrenamiento Rosalío está listo para la prueba de fidelidad: en una casa franca del cártel lo espera un hombre atado a una silla. Él no sabe nada de ese hombre, ha sido condenado por un motivo desconocido. Rosalío no hace preguntas, le entregan una pistola, una del calibre 38, idéntica a aquella con la que ha estado disparando durante seis meses a siluetas de cartón. No tiene que hacer más que apretar el gatillo. La descarga de adrenalina es una corriente eléctrica. Como Superman, Rosalío se siente invencible. Puede volar, puede parar las balas, puede ver a través de las paredes. Puede matar. “Creía que era Superman”, confesará tras ser detenido ante los jueces del Tribunal de Laredo, en Texas (...)

Cuando al cabo de cuatro años y 20 homicidios detienen a Rosalío, ante los agentes que lo interrogan no muestra nunca ni miedo ni arrepentimiento. Sólo una sombra atraviesa el rostro del muchacho, que ahora tiene 17 años, y es cuando habla de una misión que llevó a cabo en San Nicolás de los Garza. Erró el blanco y provocó una matanza, causando la muerte de cuatro personas e hiriendo a otras 25, ninguna de ellas vinculada al crimen organizado. “Fallé”, dice Rosalío, “y ahora ellos me lo harán pagar.” “Ellos” son sus antiguos instructores, Los Zetas.

---

En 2002, Arturo Guzmán Decena, El Z-1, es asesinado en un restaurante de Matamoros. En su tumba se coloca una corona de flores con la inscripción: “siempre estarás en nuestro corazón. De tu familia: Los Zetas”. A su muerte le sucede Heriberto Lazcano Lazcano, llamado El Lazca: nacido el día de Navidad de 1974, también él procede de los cuerpos especiales del Ejército y las autoridades federales de México y Estados Unidos lo buscan por homicidio múltiple y tráfico de droga (...)

Bajo el liderazgo del Lazca, con el tiempo Los Zetas pasan de ser un mero brazo armado a tener papeles más decisivos en el Cártel del Golfo. Ahora Los Zetas se sienten fuertes: quieren ser independientes. En febrero de 2010, después de choques armados y asesinatos, el proceso concluye. Los Zetas, ahora ya un cártel aparte, toman partido contra sus anteriores “jefes”, el Cártel del Golfo, y se alían con los hermanos Beltrán Leyva y con los cárteles de Tijuana y Juárez. Independencia, poder y terror: éstos parecen ser los ingredientes fundamentales de Los Zetas, a quienes no obstante sería un error atribuir falta de ingenio y consistencia creativa. Precisamente el FBI considera a este cártel uno de los más avanzados tecnológicamente, capaz de blanquear cerca de 1 millón de dólares al mes durante dos años a través de cuentas del Bank of America.

El Lazca es un capo joven, pero ya se le considera un mito. Una leyenda. Perseguido y temido, ha triunfado en una empresa sobrehumana, casi divina: ha muerto y ha resucitado. En octubre de 2012 llega una denuncia anónima a la Marina militar mexicana. El Lazca está asistiendo en ese momento a un partido de beisbol en un estadio de Progreso, en el estado de Coahuila. Un regalo inesperado. En el cerco de las fuerzas del orden El Lazca pierde la vida. Es un triunfo. Después del Chapo, El Lazca es el narcotraficante más buscado. Un golpe increíble.

Unos días después un comando de Los Zetas roba el cuerpo de su jefe del depósito. Las pruebas de la ciencia con el cadáver todavía no se habían completado (...)

Son las dos de la tarde del 8 de junio de 2005 y un antiguo tipógrafo de 56 años, Alejandro Domínguez Coello, asume el cargo de jefe de la Policía Municipal de Nuevo Laredo. “No estoy atado a nadie”, declara, “mi único compromiso es con los ciudadanos.” Seis horas después, cuando está subiendo a su camioneta, un comando de zetas le descerraja 30 tiros con balas de gran calibre. El cadáver no se identifica de inmediato debido a que el rostro de Domínguez Coello ha quedado completamente desfigurado por los disparos.

El 29 de julio de 2009, a las cinco de la mañana, dos automóviles se detienen ante la vivienda del subcomandante de la Policía Intermunicipal de Veracruz-Boca del Río, Jesús Antonio Romero Vázquez: una decena de hombres pertenecientes a Los Zetas, armados con fusiles de asalto con lanzagranadas de 40 mm, irrumpen en la casa. Emplean menos de cinco minutos en matar a Romero Vázquez, a su mujer (también oficial de policía) y a su hijo de siete años. Luego le pegan fuego a la casa, matando a las otras tres hijas. La mayor tenía 15 años.

(...) Cuando matan a sus enemigos Los Zetas son sádicos, las venganzas son ejemplares: queman los cuerpos, los meten en barriles llenos de gasóleo, los desmiembran. En enero de 2008, en San Luis Potosí, durante una redada que lleva a la detención de Héctor Izar Castro, llamado El Teto, considerado el líder de la célula local de Los Zetas, se encuentran armas de todo tipo, 65 paquetes de cocaína, algunas estampas de Jesús Malverde, considerado el santo patrón de los narcos, y tres tablas de tortura con la letra “Z” en relieve, utilizadas para golpear a las víctimas y dejar impresa en su piel la marca de

los agresores. Es más: para aterrorizar todavía más a sus rivales, a menudo les cortan los genitales a sus víctimas y se los meten en la boca o cuelgan en puentes los cadáveres sin cabeza (...) El desmembramiento de cadáveres se convierte en la sintaxis de Los Zetas. También hacen desaparecer los cuerpos en el interior de tumbas ya ocupadas, o bien se deshacen de los cadáveres enterrándolos en cementerios clandestinos construidos en sus bastiones o abandonándolos en fosas comunes. A menudo entierran a sus víctimas todavía vivas. O bien las disuelven en ácido.

Los Zetas son asesinos sanguinarios, y sin embargo tienen un rasgo en común con cualquier muchacho que viva a miles de kilómetros de distancia de ellos: una pasión llamada televisión, peligrosa educadora. Películas violentas y realities son sus referentes culturales, y estos últimos encontraron una espeluznante aplicación durante la segunda masacre de San Fernando, una aldea situada a 140 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, cuando Los Zetas detuvieron un buen número de autobuses que viajaban por la autopista 101, hicieron bajar a los pasajeros y los obligaron a luchar entre sí como gladiadores, armados de bastones y cuchillos, a los supervivientes se les garantizaba un sitio en Los Zetas. Los que sucumbieron fueron enterrados en fosas comunes. Como las descubiertas en San Fernando en la primavera de 2011, con 193 cuerpos que presentaban fuertes golpes en la cabeza.

Esta sádica carnicería se produjo unos meses después de la que se daría en llamar la primera masacre de San Fernando. Otros muertos inocentes, otras “narcofosas”. Es el 24 de agosto de 2010. Setenta y dos inmigrantes clandestinos, procedentes de Sudamérica y Centroamérica, intentan cruzar la frontera estadounidense en Tamaulipas. La historia ha llegado hasta nosotros gracias a un joven ilegal originario de Ecuador. Cuenta que a la altura de San Fernando él y sus compañeros son alcanzados por un grupo de mexicanos que se presentan como Los Zetas. Apiñan a los ilegales en una granja y empiezan a matarlos. Uno a uno. No han pagado el “peaje” por atravesar la frontera en su zona o, mucho más probablemente, no se han plegado a las exigencias de Los Zetas: que trabajen para ellos. Pero Los Zetas no aceptan negativas. Empiezan a disparar a los ilegales en la cabeza, sin piedad. El ecuatoriano resulta herido en el cuello y se hace el muerto, pero luego logra escapar y llega milagrosamente a un puesto de control del Ejército mexicano, siguiendo las indicaciones del inmigrante, los soldados llegan a la granja, donde inician un tiroteo con Los Zetas, al término del cual encuentran 72 cadáveres, 58 hombres y 14 mujeres. Amontonados unos sobre otros.

(...) La crueldad se aprende. La crueldad funciona. La crueldad tiene reglas. La crueldad marcha como un ejército de ocupación. Los Zetas y Ángel Miguel son las dos caras de la misma moneda. Ahora también lo sé.

José Gil Olmos. “Cuatro cárteles, en guerra por el botín mexiquense”. *Proceso* número 1950, 16 marzo 2014. pp. 6-9. <https://www.proceso.com.mx/367342/cuatro-carteles-en-guerra-por-el-botin-mexiquense>

**“Cuatro cárteles, en guerra por el botín mexiquense”**

Lo dijo una víctima de la ciega violencia que asuela al Estado de México: acudir a un bar en ciertos municipios de esa entidad equivale a jugar ruleta rusa. En el diagnóstico coincide el Cisen, que en un reporte –confirmado por otras instancias federales– describe cómo varias organizaciones delictivas están desgarrando la entidad que no pudieron pacificar ni Enrique Peña Nieto ni su sucesor en la gubernatura, Eruviel Ávila. No por otra razón fue cancelado el concierto de rock Hell and Heaven 2014.

Al entrar a ciertas colonias de municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Tultitlán, Chimalhuacán, Los Reyes la Paz y Toluca se corre el riesgo de quedar en medio de una batalla entre Los Caballeros Templarios, Los Zetas, La Familia Michoacana, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y los remanentes de la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

“Ir a un bar por la noche en Nezahualcóyotl (y en cualquiera de esos municipios) equivale a jugar a la ruleta rusa”, dice la gente. Descripciones como ésta se incluyen en un documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) de la Secretaría de Gobernación.

La pesadilla de la ruleta mexiquense empezó en el gobierno de Enrique Peña Nieto y continúa en el de Eruviel Ávila. Es una de las épocas más violentas en la historia de la entidad: en ocho años se cometieron casi 3 mil asesinatos y por lo menos cuatro cárteles se disputan abiertamente 33 de los 125 municipios; ahí secuestran, extorsionan, asesinan, roban, cobran “impuestos” a todos los comercios y tienen sometida a la autoridad, desde los alcaldes hasta las policías municipales.

El Estado de México es la entidad más poblada del país, con más de 15 millones de habitantes, de los cuales más de dos tercios se concentran en la Zona Metropolitana del Valle de México. En esta franja fronteriza con el Distrito Federal también se agudiza la lucha de los cárteles del crimen organizado.

Esa explosiva situación fue la causa principal de que se cancelara el Hell and Heaven Fest 2014, un par de conciertos de rock metalero anunciados para el sábado 15 y el domingo 16 en las instalaciones de la Feria de Texcoco. Los organizadores montaron todo un dispositivo de transporte y diversiones alternas, además de invitar a “más de 80 bandas” (musicales), entre ellas Kiss y Guns N’ Roses.

De acuerdo con funcionarios federales, se detectó que ese festival, con una asistencia prevista de 80 mil personas, podría ser aprovechado por grupos criminales para cometer un atentado, por lo cual el gobernador negó el permiso para realizarlo y de pasada le propinó un raspón mediático a la presidenta municipal de Texcoco, Delfina Gómez, de Movimiento Ciudadano.

Juan Carlos Guerrero, vocero de los organizadores, informó que no pudieron conseguir otra sede en 10 días, así que tuvieron que cancelar el espectáculo, con una pérdida de 150 millones de pesos.

Según documentos de los gobiernos mexiquense y federal, desde 2008 La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Guerreros Unidos, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leyva y Los Zetas arreciaron la lucha por controlar el territorio de la entidad (Proceso 1892).

En agosto de 2013, el secretario de Seguridad Ciudadana, Salvador Neme, reconoció que ahí operaban La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, Los Zetas y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero afirmó que eran “pequeños grupos” y que no causaban graves problemas.

El mismo mes Neme fue sustituido por Alonso Ríos. Un conteo del periódico Reforma realizado del 29 de agosto de 2013 al 28 de febrero de 2014 permitió documentar 273 ejecuciones en la entidad, un

promedio de 45.5 por mes. El año pasado la pugna entre grupos criminales cobró la vida de 2 mil 221 personas. Pero el primer bimestre de 2014 ha sido el más sangriento desde 2008, con 130 ejecuciones.

También se incrementaron otros delitos, como secuestros, extorsiones y feminicidios, así como asaltos a transeúntes, autos y camiones de carga y robos en motocicleta.

Desde el año pasado, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Guerrero, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México eran las entidades más violentas del país, pues en el primer trimestre de 2013 los cinco sumaron 38% de los 6 mil 204 homicidios registrados a nivel nacional.

Paralelamente, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal ubicó a los municipios mexiquenses de Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Chalco entre los más violentos del país durante 2013, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con un reporte del Cisen fechado el pasado 17 de febrero, los dos cárteles michoacanos, el CJNG y Los Zetas siguen su “feroz disputa” por el control del tráfico de las drogas y otras actividades ilícitas en la zona. También se advierte que la confrontación “ha arrojado hasta la fecha decenas de muertos, heridos y desaparecidos”.

Según esa información “interna”, de los siete grupos criminales que hace un par de años desgarraban la entidad, sólo quedan cuatro, y de estos La Familia Michoacana aparenta ser el más fuerte, sobre todo en la zona metropolitana.

Es evidente que la violencia no cede en 2014: desde los primeros meses se han encontrado cadáveres quemados o colgados de puentes peatonales, personas asesinadas en restaurantes y bares, así como negocios de toda clase acribillados o cerrados por no pagar cuotas a la delincuencia.

### **Territorio en jirones**

La Familia Michoacana es el grupo criminal con más presencia en el Estado de México, pese al debilitamiento que ha registrado en los últimos meses, indica el citado reporte del Cisen.

El año pasado, un documento confidencial del gobierno mexiquense señalaba que esa organización, surgida en 2006, operaba en 54 municipios, pero el informe del organismo federal de inteligencia señala que ahora se limitan a 18: Amatepec, Coacalco, Chalco, Coyotepec, Cuautitlán, Huehuetoca, Ixtapaluca, Luvianos, Metepec, Nextlalpan, Tejupilco, Teoloyucan, Tepotzotlán, Tlatlaya, Tonatico, Toluca, Valle de Chalco y Zumpango.

En el documento se explica que ese repliegue de La Familia Michoacana se debe al embate de otra organización: “En la mayoría de estos municipios mantiene una sangrienta disputa principalmente con Los Caballeros Templarios, quienes de manera paulatina les han ido arrebatando el control de la mayoría de las plazas”.

Otro factor del debilitamiento de La Familia Michoacana en los últimos meses fue, a decir del Cisen, el abatimiento o la detención de varios de sus líderes, entre quienes se cuenta a Jesús Salazar, El Tuzo, considerado el cabecilla de este cártel en la entidad, que fue muerto por militares y policías federales el

pasado 10 de enero. Otro encargado de los “negocios” del cártel en todo el estado, Juan Carlos Muñoz Vargas, El Pariente, fue detenido el 12 de agosto de 2012, y el jefe de la plaza en Toluca, Martín Zacarías Pedro, El Jarocho, cayó en manos de la policía en febrero de 2013.

Pablo Jaimes Castrejón, La Marrana, abatido por el Ejército el 4 de agosto del año pasado en la rancharía Ojo de Agua, municipio de Luvianos, también fue jefe del cártel en el estado.

La segunda fuerza criminal en la entidad son Los Caballeros Templarios, quienes predominan sobre todo en la zona sur, colindante con Michoacán y con el Valle de Toluca: la capital mexiquense, Metepec, Lerma, Zinacantepec, Tejupilco, Luvianos, Ixtapan de la Sal, Sultepec, Amatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Tlataya y Tonicato.

Según el informe, los templarios chocaron con La Familia Michoacana sobre todo en el sur y el oriente de la entidad, y han ganado terreno a pesar de su debilitamiento actual –dicen los agentes– por las acciones del gobierno federal en Michoacán. Pero sin duda, añade, “siguen teniendo el control de las plazas mencionadas” en el Estado de México.

El Cisen identifica a Pablo Magaña Serrato, La Morsa, como el jefe de Los Caballeros Templarios en el Estado de México y lo describe como “uno de los (cabecillas) más sanguinarios, ya que ha ordenado y participado directamente en la ejecución de cientos de rivales de otros grupos delictivos, así como de agentes de diversas corporaciones policiacas y de elementos de las Fuerzas Armadas”.

Indica que antes de ser el encargado regional de Zitácuaro y del Estado de México, La Morsa fue el jefe de plaza de Uruapan y encabezó el atentado del 14 de junio de 2010, en Zitácuaro, donde murieron 12 agentes de la Policía Federal.

Magaña Serrato fue protagonista de otra pifia del gobierno de Felipe Calderón: en 2011 la Procuraduría General de la República anunció su captura, pero la autoridad tuvo que reconocer que el delincuente se fugó de una casa de seguridad en Zitácuaro.

El tercer grupo que disputa el territorio mexiquense es Los Zetas. El reporte del Cisen precisa que tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009 y la captura al año siguiente de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, y Carlos Montemayor, El Charro, quienes controlaban la mayoría de los municipios del Valle de México y otros, esa banda reforzó su operación, principalmente en los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Tultitlán y la zona norte, colindante con el estado de Hidalgo. En esta última “tiene el control absoluto del trasiego de la droga y otras actividades ilícitas”.

Informa que, como puede apreciarse por los municipios donde actúan, Los Zetas mantienen una cruenta batalla con La Familia Michoacana, con células remanentes de la organización de los Beltrán Leyva y recientemente con el CJNG.

Sobre el cártel jalisciense, el informe indica que desde hace meses empezó a incursionar principalmente en los municipios del Valle de México ante el resquebrajamiento del conformado por los hermanos Beltrán Leyva; pero observa que su avance se detuvo por dos factores: el rompimiento de su alianza con el Cártel de Sinaloa para frenar a Los Zetas y la reciente escisión que originó la creación del grupo La

Corona, integrado por exoperadores del capo Nacho Coronel que actúan ya en Jalisco, Michoacán y Colima.

Finalmente, el reporte del Cisen señala que en el Valle de México siguen activos exintegrantes de los Beltrán Leyva y del Cártel del Centro, organizaciones muy disminuidas.

### **A merced de los sicarios**

A las 2 de la madrugada del domingo 16 de febrero, Verónica Lucero Méndez Díaz celebraba su cumpleaños 23 con su esposo, Mario Francisco Sánchez, en el bar Davis Coffe Karaoke de la colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, cuando irrumpió un grupo armado.

Tras un estallido, el establecimiento se llenó de humo y los maleantes comenzaron a disparar a los clientes. Verónica y Mario Francisco fallecieron y cuatro personas quedaron heridas. Apenas el viernes 14 otro bar de esa colonia sufrió un atentado.

Los familiares de la pareja asesinada pidieron justicia y apoyo al gobierno de Eruviel Ávila porque se quedaron huérfanos su hija de seis años y su bebé de un año y medio. El padre de Verónica, Víctor Aurelio Méndez, recriminó la violencia: “Aquí en Neza ir a un antro es jugar a la ruleta rusa”.

Este municipio está en primer lugar de ejecuciones, con 68 en los tres primeros meses del año. Le siguen Ecatepec (66), Naucalpan (38), Toluca (35), Tlalnepantla (32) y Cuautitlán Izcalli (24), en cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal.

La ruleta rusa siguió girando. El 19 de febrero, en el municipio de Texcoco, un tiroteo de policías contra ladrones dejó un muerto; el 26 se hallaron dos personas ejecutadas en un hotel de Cuautitlán Izcalli; el 28 apareció un hombre colgado de un puente peatonal en Ecatepec; ese día fue el más sangriento del año, con 13 asesinatos en cuatro municipios.

El 2 de marzo el gobernador reconoció que la entidad padece por la inseguridad y afirmó que no bajaría la guardia en su esfuerzo de reducir los índices de violencia.

Al día siguiente la ruleta apuntó al exsecretario del municipio de Otumba, Antonio García Sánchez, y a su hijo Jair Antonio, quien estuvo preso por querer robar la nómina del programa Oportunidades de Nopaltepec; y la noche del 9 de marzo, a siete personas en bares de Chicoloapan y La Paz. Todos ellos murieron.

“Esto les va a pasar chapulines. Sigues: Moreno, Vato y tu Chispa. Atee... Empresa: Fam Michoacana” (sic), decía uno de los mensajes en tinta negra que los sicarios dejaron afuera del bar Las Chelitas, de Chicoloapan.

En medio del desastre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció que la federación dotará a la entidad con 11 mil cámaras de video para los 46 municipios donde se reportan más delitos. También ofreció diseñar una estrategia de control en transporte público.

Pero los encargados de permisos mercantiles de Chalco, Valle de Chalco y Nezahualcóyotl reconocieron públicamente que 30% de los negocios en sus municipios están bajo el control del crimen organizado, que les exige cuotas de entre 2 mil y 20 mil pesos semanales. Los conductores de la Ruta 36 del transporte público que va del municipio de Los Reyes La Paz a Chalco tienen que entregar cuotas de 15

mil a 20 mil pesos mensuales al Movimiento Templario, que a cambio les da una calcomanía amarilla con las letras “MT” para demostrar que ya pagaron la “protección”.

José Gil Olmos. “Michoacán, manjar de varios cárteles”. *Proceso* número 1955, 20 abril 2014. pp. 56-58. <https://www.proceso.com.mx/370145/michoacan-manjar-de-varios-carteles>

### “Michoacán, manjar de varios cárteles”

No se trata sólo de Los Caballeros Templarios, contra quienes dirige todos sus esfuerzos el gobierno federal: hay otras organizaciones criminales que desean el control de Michoacán, entidad privilegiada geográficamente para el trasiego de enervantes y la fabricación de drogas sintéticas. Los Zetas, el Cártel del Golfo, el de Jalisco Nueva Generación y Héctor Beltrán Leyva, entre otros grandes grupos delictivos, buscan el control de las rutas michoacanas.

**MÉXICO, D.F. (Proceso).** - Mientras el gobierno federal está centrado en combatir a Los Caballeros Templarios y desarmar a las autodefensas en Michoacán, otros grupos y personajes del crimen organizado avanzan sigilosamente en esa entidad.

Dos documentos confidenciales del gobierno federal, de los cuales *Proceso* tiene copia y que circulan en ese estado, advierten acerca de la debilidad de la estrategia gubernamental lanzada a principios de año para acabar con Los Caballeros Templarios. Asimismo, alertan sobre agrupaciones que aparecen o resurgen y que pelean el control de Michoacán extorsionando, secuestrando y manteniendo el negocio del narcotráfico.

Los documentos revelan que las autodefensas han sido infiltradas por personajes del crimen organizado –como algunos extemplarios– que se ha puesto la camiseta de este movimiento ciudadano para continuar el tráfico de droga, esencialmente sintética, por Tierra Caliente y la Costa.

Según uno de estos documentos, entre esos personajes se encuentra Miguel Gallegos Godoy, *El Migueladas*, líder de un grupo denominado Los Gallegos y quien se alió con Nemesio Oseguera Cervantes, cabeza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), aliado a su vez con el Cártel de Sinaloa.

Se habla también de Luis Antonio Torres, *Simón* o *El Americano*, jefe de las autodefensas de Buenavista Tomatlán y quien lidera un grupo armado de aproximadamente mil 200 personas que se hace llamar Autodefensa Operativa H-3 (Hermandad 3).

Pero también estarían disputando el control del narcotráfico en Michoacán otras mafias, como el Cártel del Golfo (CDG), aliado con Servando Gómez, *La Tuta*; Los Zetas; el cártel de los Beltrán Leyva, quien habría hecho un pacto con Enrique Plancarte Solís, y los restos de La Familia Michoacana.

De acuerdo con los documentos confidenciales elaborados por los centros de inteligencia policial y castrense, esta reconfiguración de grupos del crimen organizado en Michoacán se da a la sombra de la estrategia gubernamental contra los líderes de Los Caballeros Templarios y de las negociaciones con los grupos de autodefensa.

Uno de los textos señala que pese a las acciones del comisionado para la seguridad, Alfredo Castillo Cervantes, en la actualidad Michoacán “sigue viviendo en incertidumbre ante las acciones y movimientos de recomposición de grupos o células establecidos en el estado”.

Insiste en que la estrategia contra el crimen organizado está dando resultados positivos, inhabilitando y debilitando económicamente al cártel de Los Caballeros Templarios al abatir a sus cabecillas, pero admite que la zozobra en Michoacán sigue.

“Por un lado se habla del combate frontal y por el otro los medios hablan de un remedio casero para minimizar esta lucha que no va a tener o lograr un buen fin, pues ya existen señalamientos serios de vínculos entre nuevos grupos criminales surgidos por la fractura que ha recibido Los Caballeros Templarios y el resurgimiento de grupos como La Familia Michoacana”, sostiene uno de los reportes confidenciales.

### **“El Migueladas”, en la pelea**

Desde hace más de una década todos los cárteles quieren a Michoacán por su ubicación estratégica, que permite la entrada y salida al Pacífico por los puertos de Lázaro Cárdenas (y su cercanía con Manzanillo, Colima), así como el paso al Bajío y norte del país por la red de carreteras federales. Hasta antes del cambio de estrategia del gobierno federal de enfrentar a Los Caballeros Templarios, esa entidad era una de las plazas más peleadas por éstos, La Familia Michoacana y el CJNG, aunque también han metido sus manos Sinaloa, Los Zetas, el Cártel del Golfo y los Beltrán Leyva.

Su atractivo no es sólo por la producción de marihuana y amapola o las facilidades de transporte hacia el norte, sino que en los municipios de Tierra Caliente y Costa se concentra el mayor número de laboratorios de droga química o “cocinas” del país, debido a que por los puertos de Manzanillo y Colima ingresan ilegalmente los precursores químicos desde Oriente, sobre todo de China.

Hoy, señala uno de los expedientes, las cabezas de grupos delictivos han hecho nuevas alianzas para mantenerse en el poder y tienen células operativas en el estado, las cuales siguen extorsionando, secuestrando y traficando drogas.

Uno de los grupos del que más se ocupan los reportes es el de Los Gallegos, encabezado por El Migueladas o El Micheladas, a quien ubican como operador financiero de Los Caballeros Templarios, debajo de La Tuta o El Profe, considerado el jefe más importante de ese grupo.

El Migueladas, del que poco se había hablado y que según algunos reportes (Proceso 1954) sería la cabeza más importante de Los Caballeros Templarios e integrante de las autodefensas –donde ha tenido dificultades con el líder de éstas, José Manuel Mireles–, forma parte de los nuevos líderes locales del crimen organizado que luchan por la preponderancia en Michoacán.

El martes 15 Alfredo Castillo reveló que la captura de Gallegos Godoy es uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal.

“Sí tengo (entendido) que esta persona es un objetivo para detener (...) es uno de los objetivos a detener por parte del gobierno federal. Nunca fue interlocutor, es uno de los objetivos de detención por parte del gobierno federal”, dijo en entrevista con Noticias MVS.

En uno de los reportes que consultó este semanario, El Migueladas es identificado como el jefe del grupo Los Gallegos y el principal productor de droga sintética de Michoacán que “trafica a través de supuestos autodefensas que operan en la región de Tierra Caliente”.

Según uno de los informes, Gallegos usa las rutas entre los límites de Jalisco y Michoacán, en los municipios de Tepalcatapac, Felipe Carrillo Puerto mejor conocido como La Ruana y Buenavista Tomatlán. “Se habla de que sus operadores para tal objetivo son en la actualidad los denominados H-3, que encabeza Luis Antonio Torres, conocido como Simón o El Americano, (quien) líder de las autodefensas de Buenavista Tomatlán y quien encabeza un grupo armado de aproximadamente mil 200 personas que también denominan autodefensa operativa”, indica uno de los documentos.

El pasado 11 de marzo Hipólito Mora, líder de las autodefensas en La Ruana, denunció que El Americano tenía nexos con los templarios y obedecía a La Tuta y a Enrique El Kike Plancarte.

Ese día El Americano entró a ese municipio donde se formaron las primeras autodefensas ciudadanas y desde entonces lo tiene en su poder, enfrentándose a los seguidores de Mora, quien está en la cárcel acusado de participar en los homicidios de Rafael Sánchez Moreno, El Pollo, y José Luis Torres Castañeda, Niño Torres, ocurridos el 8 de marzo.

Según uno de los reportes confidenciales del que se tiene copia, Sánchez Moreno y Torres Castañeda – encontrados calcinados el 9 de marzo en Buenavista– eran gente del Migueladas y se integraron a las autodefensas como “arrepentidos”.

Señala el informe: “De acuerdo con la información recabada, Rafael Sánchez Moreno era considerado como exintegrante primero de La Familia Michoacana y luego de Los Caballeros Templarios, pero recientemente se sumó a las filas de las autodefensas. Sin embargo, ambos formaron parte del Grupo Delictivo de Miguel Ángel Gallegos Godoy El Migueladas o Micheladas y luego se integraron a las autodefensas, debido a lo cual les decían arrepentidos.

“Respecto del hecho, los reportes surgieron alrededor de las 9:30 de la mañana de ayer, cuando el agente del Ministerio Público se dirigió a la zona para dar fe de lo ocurrido y ordenar el levantamiento de los dos cuerpos sin vida y su traslado al Servicio Médico Forense de Apatzingán. Asimismo, el representante social observó que ambas personas yacían en una camioneta calcinada marca Nissan, Frontier, presuntamente propiedad de Rafael Sánchez.

“Pero al decir del caso es importante mencionar que tanto El Pollo como El Migueladas eran socios del Rancho Los Tigrillos, municipio de Tzitzio, en el cual antes de su muerte les acababan de agarrar un laboratorio muy grande, para lo que según se informa que a Miguel Gallegos Godoy lo culpó y refutó Rafael Sánchez Moreno El Pollo por tal decomiso, y tal caso molestó mucho al Migueladas.”

Por la muerte de estos dos personajes, Mora está preso en el penal de Mil Cumbres desde el pasado 11 de marzo. Desde entonces La Ruana vive en tensión, pues los seguidores de este último siguen inconformes, mientras que las huestes del Americano están armadas con rifles de asalto y controlan todos los caminos del municipio.

## **Las alianzas**

Según la información recabada por las fuentes policiacas y castrenses, en la actualidad El Migueladas tiene un convenio de colaboración con Juan José Farías Álvarez, El Abuelo, quien a su vez pactó con el CJNG la compra de droga sintética producida por Gallegos Godoy.

Señala el documento que la ruta de tráfico de drogas va desde el municipio de Churumuco, pegado a la costa del Pacífico, hasta Jalisco, y los responsables de custodiar dichos cargamentos son las autodefensas del H-3.

En el reporte se ofrecen más datos del Migueladas: indica que está considerado el número tres de Los Caballeros Templarios –detrás de Nazario Moreno, ya fallecido, y de La Tuta–, donde es operador financiero.

Informa que principalmente es traficante de drogas sintéticas y mariguana y que los municipios donde concentra su poder son La Huacana, Zicuirán, Ario de Rosales, Nueva Italia, Tacámbaro, Churumuco, Turicato, Nocupétaro y Nuevo Urecho, donde posee negocios de construcción, hoteles, moteles, bares y huertas de limón.

Agrega: “Gallegos Godoy es propietario del hotel Cascada ubicado en Zicuirán, en donde continuamente se llevan a cabo ‘reuniones’; así como en su rancho ubicado cerca de la Presa del Infiernillo.

“Este sujeto ha utilizado su gran influencia política y su poder económico para operar su esquema delictivo de tráfico de drogas; su influencia no sólo es local, podemos decir que también federal. También está vinculado para operar con sus ‘amistades’ de las áreas policiales y de justicia, puesto que él fue elemento activo de la PGR.”

Entre sus allegados en la política revela que su liga más fuerte era con el secretario de Gobierno, Jesús Reyna García, hoy preso, acusado de tener vínculos con los templarios.

Al respecto indica que a Reyna “se le mencionó como el ‘organizador’ para la reunión cónclave celebrada, según la información, el 26 y el 29 de marzo de 2011 con Los Caballeros Templarios, por conducto de Miguel Ángel Gallegos Godoy; en ese encuentro se acordó con líderes de la cúpula de ese ‘grupo delictivo’ el apoyo de su estructura así como el financiamiento para parte de la campaña del candidato del PRI, Fausto Vallejo Figueroa”.

### **Los otros**

Pero en la lucha por el territorio michoacano también están otros interesados, como La Tuta, quien, pese a ser perseguido por las autodefensas y las fuerzas federales, sigue libre y realizando alianzas con otros grupos para sobrevivir.

Señala uno de los documentos: “Fuentes confiables nos refieren que en el mes de enero una célula del Cártel del Golfo empezó a tener presencia en el estado de Michoacán, esto tras la alianza hecha entre Nicandro Barrera Medrano, del CDG, con Servando Gómez Martínez La Tuta, líder de Los Caballeros Templarios.

“Esta alianza, según fuentes de información, pretende retomar los sectores perdidos en el estado a favor de los templarios y empezar a minimizar la presencia de grupos contrarios, como los H-3.” Otro grupo en la puja criminal por Michoacán es el de Héctor Beltrán Leyva, único sobreviviente de ese clan familiar,

quien habría hecho una alianza con El Kike Placarte en una reunión que tuvieron en Puebla y donde se habrían establecido acuerdos: hacerle frente al Migueladas y tomar el control de Morelia.

Al final uno de los reportes reconoce que el diseño de la política para combatir el crimen organizado expone los conflictos en la normatividad y la dificultad para articular la política de seguridad pública. Pero sobre todo muestra que el objetivo de la política no es combatir al crimen organizado, sino la violencia que éste provoca, y que la estrategia utilizada se funda principalmente en el ejercicio de la fuerza pública sin tomar en cuenta una estrategia de política pública.

Juan Alberto Cedillo. “Historia de una matanza delirante”. *Proceso* número 1956, 27 abril 2014. pp. 10-12. <https://www.proceso.com.mx/370694/historia-de-una-matanza-delirante>

### “Historia de una matanza delirante”

Fue necesario que unos socios de Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, capos de Los Zetas, declararan como testigos de la fiscalía en el juicio que se sigue en Austin, Texas, contra su hermano José Treviño. En sus testimonios salió a la luz que pueblos del norte de Coahuila fueron tomados por Los Zetas para exterminar a todas las familias de apellidos Villanueva y Garza, así como a sus trabajadores, con una saña delirante. Ninguna autoridad mexicana se atrevió a informar de ello en su momento, pero en febrero último comenzaron a encontrarse los restos de decenas de personas que se consideraban desaparecidas.

ALLENDE, COAH.- Por largo tiempo el miedo acalló a esta población del norte de Coahuila. Ni siquiera el gobierno estatal se atrevía a indagar lo que significó el dominio de Los Zetas en la región. Sólo ahora, tres años después, confirma que más de 400 personas fueron masacradas en la zona por la organización delictiva durante la “guerra” que el gobierno de Felipe Calderón declaró al narcotráfico.

Las disputas internas del cártel hicieron de Allende escenario de venganzas, y del Centro de Readaptación Social (Cereso) de la vecina Piedras Negras un horno crematorio donde incineraron aproximadamente a un centenar de personas.

Los gruesos barrotes, las pesadas puertas y los guardias de la prisión no impidieron que 129 zetas se fugaran por la puerta principal en septiembre de 2012. Tampoco obstaculizaron al grupo criminal meses antes, cuando introdujeron cadáveres al presidio para desaparecerlos, según los testimonios recientemente obtenidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC).

Al revés de lo que ocurrió en San Fernando, Tamaulipas, donde las víctimas fueron migrantes y jóvenes mexicanos sin recursos que viajaban en autobuses a la frontera con Estados Unidos, la tragedia de Allende y Nava, en marzo de 2011, fue provocada por una venganza de Miguel Ángel Treviño, líder de Los Zetas, contra familias que prácticamente eran dueñas de esos pueblos que forman parte de la región del norte de Coahuila conocida como Cinco Manantiales.

Quienes desataron la ira de Miguel Ángel y Omar Alejandro Treviño Morales, Z-40 y Z-42 respectivamente, fueron sus socios Héctor Moreno Villanueva, El Negro, de aproximadamente 35 años, y José Luis Garza Gaytán, La Guichina, de unos 30.

Moreno Villanueva y Garza Gaytán pertenecen a familias adineradas y estudiaron en prestigiosas escuelas privadas de Nuevo León: Garza Gaytán se graduó en la Universidad Regiomontana y Moreno dejó trancos sus estudios de agronomía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Cuando regresaron a sus tierras operaron primero como narcotraficantes autónomos y posteriormente fueron reclutados por Los Zetas.

La familia de Moreno Villanueva poseía en Nava y Allende una importante línea de autotransporte, la concesión para distribuir los productos de la Cervecería Modelo en toda la región, varios ranchos con ganado y numerosas residencias. Cuando ya se había integrado a Los Zetas, Moreno mandó construir en Nava un gran rancho para albergar alrededor de 300 gallos de pelea y adquirió decenas de caballos Cuarto de Milla.

En Allende, un pueblo de alrededor de 22 mil habitantes, recuerdan a Héctor conduciendo una cuatrimoto, que pronto cambió por una camioneta blindada de doble cabina que solía conducir ebrio, acompañado de bellas mujeres y protegido por varios escoltas.

La familia Garza Gaytán también era dueña de negocios, ranchos y comercios. José Luis Garza salió muy joven de Allende para estudiar en Monterrey. Al terminar su carrera regresó a la región de Cinco Manantiales.

Los Zetas llegaron al norte de Coahuila en 2007, como avanzada del Cártel del Golfo; establecieron su sede en Piedras Negras y nombraron jefe de plaza a Lucio Hernández Lechuga, El Lucky. Como segundo al mando quedó un capo local que desde tiempo atrás operaba por su cuenta: Mario Alfonso Cuéllar, conocido como Poncho.

### **Revelaciones en Austin**

Las operaciones de narcotráfico en la zona fueron contadas por sus propios protagonistas en el juicio que se le siguió en Austin, Texas, a José Treviño Morales, hermano mayor de Miguel Ángel y Omar Alejandro, y quien lavaba el dinero de Los Zetas en Estados Unidos. En ese proceso Moreno, Cuéllar y Enrique Rejón Aguilar –El Mamito, tercero en el mando de la organización– declararon como testigos de la fiscalía en abril de 2013.

“Tras arribar a la región norte de Coahuila, Los Zetas impusieron el modelo de Alejandro Magno cuando conquistó el imperio persa”, dijo Poncho Cuéllar al jurado. Explicó que, después de someter a los persas, Alejandro no impuso a sus allegados en el poder, sino que dejó a los gobernantes locales porque ellos sabían cómo manejar las cosas, tenían los contactos y conocían muy bien su zona geográfica. Los Zetas hicieron lo mismo: ordenaron a los capos de la región que trabajaran para ellos; a quienes se resistieron, los mataron.

El Lucky también impuso un sistema de “subcontratación”. Entregaba droga a los cabecillas distribuidores pero exigía que respaldaran sus operaciones con inmuebles y negocios. Si fallaban o las autoridades de Estados Unidos les decomisaban los narcóticos, Los Zetas se quedaban con sus propiedades.

Con ese mecanismo se construyó un imperio del crimen que pronto convirtió a Piedras Negras, Coahuila, en la segunda plaza más importante para el tráfico de drogas, después de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

En noviembre de 2008 Los Zetas decidieron mandar a Lucio Hernández como nuevo jefe de plaza de Veracruz, donde fue detenido por la Marina en diciembre de 2011 porque –afirmó El Mamito en el Juicio de Austin– el Z-40 filtró su ubicación. En su lugar fue nombrado Omar Alejandro Treviño Morales, el Z-42.

En marzo de 2010 Los Zetas se independizaron del Cártel del Golfo y se inició la narcoguerra. El acoso de éstos y el reforzamiento de la frontera de Laredo por las autoridades estadounidenses provocaron que aquéllos trasladaran sus principales operaciones a Piedras Negras.

Para consolidarse en la plaza compraron a todas las autoridades municipales, estatales y federales: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al ejército y a altos funcionarios del gobierno”, precisó Poncho Cuéllar.

A su vez, Héctor Moreno relató que en ese periodo traficaban entre 500 y 800 kilogramos de cocaína al mes. La droga se dividía en pequeños paquetes que se contrabandeaban por el río Bravo, llegaban a casas de seguridad de Eagle Pass y se trasladaban por carretera a San Antonio, Austin y Dallas para su distribución al menudeo.

Este trasiego le dejaba a Los Zetas alrededor de 16 millones de dólares mensuales. Las ganancias, entre 4 y 5 millones de dólares, se enviaban a Nuevo Laredo para los hermanos Treviño. Los dólares se transportaban en los tanques de gasolina de los autos, envueltos en bolsas de plástico selladas.

Moreno también ayudó a Miguel Ángel Treviño a lavar ese dinero comprando caballos Cuarto de Milla: “Él dijo que era un buen negocio y que iban a conseguir dinero limpio”, así que le compró los animales en Estados Unidos. También pasó de contrabando a las personas que los cuidaban en un rancho de Oklahoma que administraba su hermano José. Anotaba en un libro de contabilidad todas las adquisiciones y las operaciones de lavado de dinero.

Por alguna razón que aún no ha contado, Héctor Moreno y José Vázquez, uno de sus allegados, comenzaron a filtrarle a agentes del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) información sobre el tráfico de narcóticos: mandó mensaje a teléfonos móviles que fueron entregados a la DEA. A su vez, la agencia estadounidense los hizo llegar a altos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) para que investigara, pero de esa dependencia pasaron a manos del Z-40, con la advertencia de que alguno de sus hombres lo traicionaba.

Para entonces, la información filtrada ya había provocado que las autoridades estadounidenses descubrieran casas de seguridad y decomisaran droga, dinero y armas que venían a México para Los Zetas.

Miguel Ángel Treviño primero consideró que el delator era Poncho Cuéllar y comenzó a cazarlo; éste huyó a Estados Unidos y fue capturado el 9 de abril de 2012 en Dallas, Texas.

Las sospechas del Z-40 también se dirigieron hacia Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán. Y aunque logró confirmar que Moreno era el traidor, éste, Garza Gaytán y José Vázquez también escaparon a

Estados Unidos. Moreno presuntamente se quedó con las ganancias del último mes y con el libro de contabilidad.

Los hermanos Treviño le advirtieron que regresara el dinero, de lo contrario irían a Nava y Allende por toda su familia y sus amigos. Moreno no les devolvió nada y se entregó a las autoridades estadounidenses para acogerse al programa de testigos protegidos.

### **La masacre**

La venganza de los Treviño comenzó antes de que los presuntos traidores se sintieran seguros en territorio estadounidense.

Allende y Nava están en las inmediaciones de la semidesértica carretera 57, a 40 minutos de la frontera con Estados Unidos. La tarde del 18 de marzo de 2011 irrumpieron en el primer poblado alrededor de 40 camionetas con hombres encapuchados y fuertemente armados provenientes de Tamaulipas.

Primero cerraron los accesos por carretera y luego entraron a 10 lujosas residencias para llevarse a unas 80 personas, entre ellas mujeres y niños.

Los sicarios fueron a la alcaldía por los registros de catastro de las propiedades a nombre de Víctor Garza, Estela Villanueva, Sergio Garza, Héctor Moreno, José Luis Garza y otros. Durante casi un mes levantaron a cualquier persona que llevara alguno de esos apellidos. Algunas familias lograron cruzar la frontera para refugiarse en Eagle Pass, Texas.

Los hombres armados también llamaron a los empleados de las residencias de Héctor Moreno y Luis Garza, incluidos los albañiles que construyeron el rancho de Nava y otros inmuebles, para que confesaran si éstos contaban con cajas de seguridad, túneles o recintos secretos. A todos se los llevaron y jamás regresaron.

Buscaron los 5 millones de dólares en más de 40 residencias y siete ranchos, algunos de los cuales incendiaron parcialmente o atacaron con armas largas y explosivos.

Tras los atentados, los pistoleros dejaron que las viviendas fueran saqueadas por los pobladores, quienes se llevaron lo que pudieron: muebles, puertas, ventanas e incluso las llaves y tuberías de los baños. Luego los sicarios regresaron con maquinaria pesada para derribar paredes y techos. Buscaban el dinero y el libro con la información sobre los negocios ilícitos de los hermanos Treviño.

“Ellos empezaron a matar familias en Allende y Piedras Negras, y Múzquiz y Sabinas –narró Héctor Moreno a los fiscales en el juicio de Austin–. Querían matarme. Debido a esto mataron a 200 o 300 personas en Allende”. Y aunque admitió que huyó de México con el libro de contabilidad, negó haber robado las ganancias del último mes de operaciones de narcotráfico: “No traje ningún dinero porque el 40 y el 42 se apoderaron de todo”.

Ya entrado en la revancha, Miguel Ángel Treviño ordenó a sus sicarios de Tamaulipas que realizaran una “limpia” de su propia organización en Piedras Negras y en Cinco Manantiales. La brigada de exterminio se llevó a hombres de Poncho Cuéllar y a decenas de colaboradores de Los Zetas en los municipios de Zaragoza, Morelos, Guerrero y Villa Unión.

Para desaparecerlos utilizaron narcofosas y al menos tres cocinas. Una se instaló en un rancho que le incautaron a Luis Garza Gaytán, en las inmediaciones del kilómetro nueve de la carretera Allende-Villa Unión, a donde llevaron a las familias y a los trabajadores plagiados. Instalaron otra cocina en el apartado municipio de Guerrero y la tercera estaba en el Cereso de Piedras Negras.

Efectivos del Ejército llegaron a Allende un mes después de que los sicarios abandonaron la región de Cinco Manantiales. Ninguna autoridad informó públicamente de la masacre, que se silenció casi dos años. Únicamente se comentaba en secreto y existían escasas referencias en redes sociales. El único registro eran fotos de las residencias destruidas, que aún permanecen así, como un monumento a la barbarie, y el reportaje Apocalipsis en Coahuila, publicado por este semanario en diciembre de 2012.

Un año después de tomar posesión, el gobernador Rubén Moreira ordenó que se investigara el genocidio: “En mi conciencia no va estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron que alguien les ayudara y nadie lo hizo. Por eso di instrucciones al procurador de que se abriera una investigación”.

Se montó así un operativo conjunto con más de 250 policías estatales y federales, así como militares y marinos, para peinar el norte del estado. Entre el 26 de enero y el 5 de febrero pasados esos efectivos, equipados con aparatos de alta tecnología y perros entrenados, buscaron junto con peritos forenses rastros de los desaparecidos.

Encontraron algunas narcofosas y localizaron los barriles y contenedores con miembros humanos diluidos. Recolectaron huesos y restos de decenas de personas que aún son analizados por peritos de la PGR. Además, se recabaron nueve declaraciones y se realizaron 32 entrevistas con exfuncionarios municipales.

Los testimonios recabados por la PGJEC se mantienen ocultos porque evidencian la complicidad y complacencia con la masacre por parte de altos funcionarios de la administración de Humberto Moreira.

Entre esas declaraciones destacan las confesiones hechas por uno de los cocineros del Cereso de Piedras Negras, ahora en manos de la PGJEC, quien reveló que ahí incineraron y diluyeron a “entre 80 y 150 hombres”, algunos muertos pero otros vivos. Su justificación: “Hice daño a mucha gente, pero a ningún niño o mujer”.

Federico Mastrogiovanni. “La desaparición forzada, estrategia de terror”. *Proceso* número 1959, 18 mayo 2014. pp. 13-15. <https://www.proceso.com.mx/372515/la-desaparicion-forzada-estrategia-de-terror>

### **“La desaparición forzada, estrategia de terror”**

Avecindado en México desde hace varios años, el periodista italiano Federico Mastrogiovanni ha recorrido el país para tomarle el pulso social. Ha dialogado con comunidades indígenas, activistas

sociales, intelectuales y religiosos comprometidos, como el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, para plasmar sus experiencias en artículos y libros. Es el caso de *Ni vivos ni muertos*. La desaparición forzada en México como estrategia de terror, puesto en circulación por editorial Grijalbo. “La tierra de Francisco I. Madero al día de hoy es un feudo de los Zetas y de sus referentes políticos e institucionales”; “ahí la desaparición forzada de personas es una de las tantas formas de control del territorio a través del terror”, escribe el autor en el capítulo IX, que Proceso reproduce con autorización del sello editor.

Llego a Saltillo, capital del estado de Coahuila, en un carro desde Monterrey. El trayecto es breve, menos de una hora por la autopista que atraviesa el desierto, pero me han aconsejado viajar de día, y rápido, porque en este tramo de la carretera México Laredo se han dado muchos asaltos y secuestros.

La niebla envuelve la ciudad en una atmósfera al mismo tiempo irreal y un poco siniestra. El silencio es lo más sorprendente. Todo parece estar rodeado de algodón. Saltillo es un espejismo con su belleza austera y la niebla que se adueña de las calles. Saltillo, además, es un territorio Zeta. A pesar de su belleza, de la armonía de sus líneas, de la imponente presencia de un desierto fascinante, es una extensión dominada por uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del país. Es una ciudad que ya se ha acostumbrado al horror.

En pleno territorio Zeta estoy convencido de que voy a entender algo más sobre la estrategia que utiliza la desaparición forzada como instrumento de terror. Aquí las desapariciones forzadas aumentaron tanto en el sexenio de Felipe Calderón que se fundó la asociación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, con el apoyo del obispado, para dar ayuda a las tantas familias afectadas.

El obispo Raúl Vera me recibe en su casa; entre las fotos de las comunidades de Chiapas y las instantáneas que lo retratan con Juan Pablo II y Benedicto XVI, está colgada la imagen de una Virgen de Guadalupe, a cuyos pies hay esta leyenda: “Hasta la madre dice: ¡Ya basta!”

Cabello cano, mirada directa, sonrisa al mismo tiempo irónica y cariñosa, se acomoda en una silla para la entrevista. Con calma y precisión me ayuda a ubicar el fenómeno de las desapariciones en un contexto más amplio. Para don Raúl, la estrategia presidencial de Felipe Calderón no ha sido un “error”.

—A Calderón no se le fue la situación de las manos, es una estrategia que deliberadamente hicieron sin procuración de justicia, porque la procuración de justicia sí desbarata las mafias, la procuración de justicia sí podía haber llegado a descubrir esta estrategia contrainsurgente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha hecho una crítica muy severa a la política de Calderón.

Lo que entiendo, hablando con el obispo de Saltillo, es que sembrar el terror en la población es parte de una estrategia que favorece los intereses de empresas transnacionales. Y la estrategia pasa a través de una paramilitarización del país, el aumento de la represión por parte del Estado y el incremento de actividades de los grupos criminales contra la población civil.

Pero su razonamiento es más amplio, abarca décadas y gobiernos del pasado, considera un escenario continental, no se limita a la actualidad mexicana. Es un hombre que ha vivido en carne propia la dificultad de mirar al poder a los ojos.

—Cuando vemos tantos militares metidos en la violencia y tanto despliegue militar, y el narco creciendo, y el narco fortaleciéndose, y los asesinatos, y los asaltos, y los secuestros que no paran, nosotros creemos que también es un proceso; desde hace un rato, estamos viendo que es también un proceso contrainsurgente. La estrategia contrainsurgente, la paramilitarización fueron instrumentos del ejército, pero en ese tiempo, todavía estaban en el método de la guerra de baja intensidad, sin duda, que ahorita algunas variantes tiene. Ahora, tampoco podemos desligar esto de la desigualdad social que hay y que es espantosa en México; la pobreza ha sido incrementada deliberadamente, la riqueza se va acumulando en pocas manos y se crean millones de pobres. Al mismo tiempo se fortalece al ejército y las policías, porque saben que la reacción popular va a llegar en algún momento. Lo criminal del actual proceso económico es dejar a la gente sin posibilidad mínima de crecer, de desarrollarse. Las personas no solamente están marginadas, las personas son desechables. Por supuesto que la dignidad humana va a reaccionar.

En Coahuila son miles los casos de desaparición forzada de ciudadanos mexicanos, pero el estado es también lugar de tránsito de migrantes centroamericanos que pasan por aquí en su camino a Estados Unidos. En el trayecto son muchas las desapariciones de migrantes, y registrarlas es aún más complicado que monitorear las desapariciones de mexicanos, pues no hay un padrón ni mucho menos de todos los que transitan por México y faltan. Lo único que se sabe con plena certeza es que en Coahuila termina no sólo el viaje, sino también la vida de un gran número de migrantes.

Por eso los migrantes centroamericanos son uno de los temas más importantes para la labor pastoral del obispo Raúl Vera. Su experiencia en el campo lo ha transformado en una de las referencias más visibles, a nivel nacional, para todo movimiento que pida un trato más justo para los migrantes. El obispo, en la larga entrevista que parece no cansarlo, va directo al punto:

—Es negocio —afirma, categórico—, el asunto de los migrantes es un negocio, y muy jugoso. Hablando de desaparecidos, la mayoría son personas en edad de trabajo, y la mayoría varones. Sí hay mujeres, claro que sí, se llevan también a mujeres, pero la gran mayoría son varones. Y luego son trabajadores, y hasta parece ser que también necesitan ciertas especialidades. Ahorita —recuerda— acaban de capturar a un grupo de empleados de Nextel, pues yo no sé si los necesitan para sus propias redes de comunicación, o sea, como que están armando sus cuarteles, como que necesitan personal para sus cuarteles, necesitan personal para empacar la droga, necesitan personal para sembrar también, para cultivar, y personal también para transportar.

El obispo habla con pasión, tiene en las manos una taza de café de la que durante media hora no logrará tomar ni un trago. En cada momento el contenido de la taza está a punto de salirse por el ardor con el que mueve los brazos:

—A los migrantes los hemos visto asolados por los guardias privados del ferrocarril, luego, asolados por las maras salvatruchas, y ahora, asolados por el crimen organizado y sus secuestros, y todo eso lo han hecho en total impunidad. La lectura que hacemos nosotros es la descarada ayuda que a través de muerte le ofrece México a Estados Unidos para que no lleguen los migrantes a la frontera; ahora, incluso están los Zetas ayudando, porque ahora cobran. Ah, les dicen, ¿quieren pasar?, pues pagan peaje. ¿Por qué saco todo esto a colación? Porque el uso de la violencia también tiene finalidades políticas.

### **Paredes transparentes**

Después de conversar con el obispo, y para obtener una visión más completa del panorama, voy a conocer la Casa del Migrante de Saltillo, apoyada por el mismo obispado. Me recibe su director, Alberto Xicoténcatl. Amigablemente me enseña el lugar donde muchos migrantes encuentran protección y un poco de calor humano en una tierra en la que se sienten constantemente amenazados. Se está jugando un partido de fútbol en el patio y es casi hora de cenar. Mientras charlamos, tratamos de identificar la razón de tantas desapariciones.

–Una hipótesis muy cercana a la realidad –aventura Alberto– es el tema del reclutamiento forzado de los migrantes por parte de los grupos del crimen organizado; para tener más recursos económicos, con mano de obra barata de profesionistas o técnicos, lo más sencillo es la esclavitud. ¿Y cómo esclavizo a una persona? Privándola de su libertad; así que muchos migrantes, para ser esclavizados, se vuelven víctimas de desaparición forzada.

Para Xicoténcatl no hay motivos políticos, como en los regímenes autoritarios o militares. Se trata de explotar un recurso humano para trabajos relativos al crimen organizado. Y junto con el deseo de sacar una ganancia económica, al mismo tiempo se difunde el terror en la comunidad, el terror en la población. De esa forma los grupos criminales van controlando la vida social de las ciudades, de los pueblos; las familias y la gente tienen miedo de salir a la calle y de esa forma aumenta el control del territorio. Los Zetas, que dominan Coahuila mediante el terror, le proporcionan a la población conceptos muy simples: “Aquí el que manda soy yo, yo sé quién transita, yo digo a qué hora se transita y quién puede seguir estando presente y quién ya no”. Es una forma de control social a través del terror.

En el frío de la tarde, Xicoténcatl deja a un lado por un momento su tranquilidad externa y expresa con sus gestos, con su voz, el ardor que lo mueve:

–Es escalofriante –asegura– lo que está sucediendo con esta nueva esclavitud. Y las instituciones son parte del juego. La población ya asume la colusión entre autoridades y delincuencia organizada. Y los migrantes desaparecidos, a pesar de que están en espacios abiertos, saben que no hay escapatoria, que es como una cárcel... En este aire que parecería libre, al final de cuentas lo que hay son paredes transparentes, que a ellos les cuesta mucho trabajo cruzar, porque saben que una patrulla que pase por la carretera, que una persona que a lo mejor está despachando la gasolina, o la gente que está en la tienda son todos como una red, una red coludida que trabaja de forma voluntaria o forzada para estas bandas y que saben que en esta supuesta libertad se sienten observados y saben que van a ser acusados por cualquier persona, entonces, es una libertad que no existe. Seguramente alrededor de nosotros, alrededor de las pequeñas o grandes ciudades, hay gente que está trabajando en este tipo de situaciones, pero completamente temerosa a decir la verdad.

Al principio los comentarios que recolectaba sobre la colusión entre las policías y las instituciones me hacían pensar en la participación de los niveles más bajos en el crimen. Como días antes declaraba en una entrevista Juan de León Estrada, ex responsable de comunicación social del estado de Coahuila y actualmente subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobierno del Estado:

Tú eres un elemento de la policía, viene alguien y te dice: “a ver, tienes dos opciones: ¿quieres trabajar con nosotros o te matamos?”, es plata o plomo. Y las corporaciones de las policías municipales son las más débiles ante esta infiltración. ¿Por qué? Porque el policía municipal todo el mundo sabemos quién es, todos sabemos dónde vive, es vecino de nosotros, sus hijos están en la escuela con los hijos de

muchos de nosotros. Entonces, es un elemento muy fácil de ubicar. Por esto son las policías municipales las que más fácilmente son infiltradas por los grupos del crimen organizado, con dinero o con la amenaza de morir. Es muy difícil para un elemento de la policía municipal rehusarse.

A pesar de la opinión de Juan de León Estrada, resulta sin embargo que en Coahuila, en los últimos años, se han dado varios casos de colaboración entre los altos niveles de la administración pública y los Zetas. Uno de los casos más controvertidos y dolorosos ha sido el de la ex subdelegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Saltillo, Claudia González López, que el 15 de febrero de 2012 recibió auto de formal prisión por un juez federal con sede en Toluca, en el Estado de México, acusada de brindar protección a los Zetas. (\*) Al respecto, Alberto Xicoténcatl es muy duro:

–Nosotros estamos muy conscientes de que aquí no únicamente personas de los niveles, digamos, bajos a nivel jerárquico, son las únicas que están coludidas. No –de repente sonrío–, aquí fluyen ganancias multimillonarias, que van desde los últimos eslabones de la cadena de mando hasta los más altos. Por ejemplo, en enero de 2012 se descubrió que el hermano del fiscal del estado estaba protegiendo a los Zetas. Y que la entonces subdelegada de la PGR también.

Ambos trabajaban en un equipo que dialogaba con las familias de las víctimas, manejando información sobre todos los casos de desaparición forzada.

–En el mismo equipo que trabajaba la Sedena –continúa Xicoténcatl– también trabajaban los policías municipales. Definitivamente, eran eslabones de la misma cadena, que estaban muy en contacto con la comunidad, desde los policías, pero también sus jefes, es decir, gente de alto nivel también estaba completamente coludida. En todos estos años íbamos constantemente a la procuraduría a levantar las denuncias, y ¡la delegada Claudia González López era nuestro interlocutor principal! Por ella pasaron todos los casos de secuestros y de desaparición de migrantes de parte del crimen organizado que sucedieron aquí en Coahuila. Ningún caso avanzaba, todos se detenían, todos continuaban en reserva, o si no simplemente nos comentaban: “Pues siguen las investigaciones”; de repente, todo se destapa, asumimos y descubrimos que la persona de la cual la autoridad nos dijo: “Ella es la persona con la cual van a ver todo”, también estaba coludida, y sin embargo las autoridades de mayor nivel nos la pusieron de interlocutora. Después dijeron: “Es que sí sabíamos, pero por eso empezamos las investigaciones”. Nosotros decimos: “Si tú sabías, ¿por qué nos la pones de interlocutora?, ¿por qué, si hay sospechas fundadas, es ella nuestra interlocutora?”. Entonces, definitivamente es que sí hay una cadena de complicidades, de silencios, que deja sin palabras. Si la persona de más alto nivel, que en este caso era la maestra Marisela Morales, que era la procuradora general de la República, tenía conocimiento de que su delegada en Coahuila estaba coludida, aunque la maestra Marisela no esté coludida, su silencio es cómplice. Entonces de forma directa ella es responsable de lo que pasó en Coahuila. Y eso es ser cómplice. Y eso es ser responsable de lo que está pasando. O sea, la autoridad más alta es responsable de lo que está sucediendo, porque su silencio la hace ya parte del delito, aunque no esté directamente relacionada con el crimen organizado, su silencio o su omisión a fin de evitar un escándalo político la hace ser parte de la misma cadena.

Impresionado, le pregunto cuál fue la reacción de las autoridades, cuál fue la respuesta.

–No hay respuesta –me dice Alberto–, sólo hay silencios; nosotros hemos dicho: “Si ustedes sabían, ¿por qué estaba sentada en la mesa de diálogo en el tema de desaparecidos?, ¿por qué estaba sentada en

la mesa de diálogo en el tema de secuestros de migrantes? Y no hay respuesta, lo que hay es silencio. La autoridad no sabe qué decir, porque no tiene una respuesta congruente y, obviamente, no hay una respuesta legal. Entonces prefieren permanecer callados.

A un año de la detención de Claudia González fue nombrado un nuevo subdelegado, el abogado Jesús Vega Romero, funcionario de la PGR que estuvo encarcelado durante tres años en el Cefereso de Matamoros presuntamente por proteger a la delincuencia organizada y promover delitos contra la salud cuando ocupó el mismo cargo en el estado de Quintana Roo. (\*\*)

Vega Romero estuvo recluido durante tres años, junto con el delegado de la PGR de Quintana Roo, Nicolás Hernández Mendoza, quien fue aprehendido dentro del mismo proceso penal –número 301/2009–. Hernández Mendoza fue sentenciado a 25 años de prisión y Jesús Vega Romero fue liberado a finales de 2012, porque no se pudieron encontrar pruebas que confirmaran su complicidad en la protección a grupos de la delincuencia organizada.

En Coahuila, como en otras entidades federativas, se dan a menudo casos de colaboración y protección de funcionarios públicos a grupos del crimen organizado. (\*\*\*)

La tierra de Francisco I. Madero al día de hoy es un feudo de los Zetas y de sus referentes políticos e institucionales. La desaparición forzada de personas es una de las tantas formas de control del territorio a través del terror y el silencio que cubre la ciudad de Saltillo no de tranquilidad, sino, mucho me temo, de una especie de aniquilación.

En su plática conmigo, el obispo Raúl Vera, poco antes de irse al Distrito Federal para marchar junto con las madres de los desaparecidos, declara su desconfianza hacia el futuro de México:

–Lo que se está asomando, como lo dibujó una vez el caricaturista de La Jornada, El Fisgón, es que no va a haber una policía política, sino una política policiaca. Es eso lo que va a haber. En el sexenio pasado el papel de Calderón fue terrible, terrible, lo que ha dejado detrás de él es una cosa espantosa, por eso yo dije que es el peor que hemos tenido, el más cruel, el más sanguinario, el más inmisericorde, y le deja abierta la puerta a los que vienen.

Salgo de Saltillo como llegué: en silencio y rápidamente.

S/A. “Y en Tamaulipas, el descontrol”. *Proceso* número 1960, 25 mayo 2014. pp. 12-13.

<https://www.proceso.com.mx/373043/y-en-tamaulipas-el-descontrol>

### **“Y en Tamaulipas, el descontrol”**

Paradojas tamaulipecas: la nueva estrategia de seguridad presentada la semana antepasada en Reynosa por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sólo trajo unas horas de tranquilidad... seguidas por días de violencia. Los cárteles posicionados en el estado que gobierna Egidio Torre Cantú – el del Golfo y Los Zetas–, aunque divididos, tienen en jaque a las autoridades y a la ciudadanía, y sus sicarios continúan sembrando el terror tanto en la zona fronteriza como en la parte del sur de Tamaulipas.

CIUDAD VICTORIA, TAMPS. - El miércoles 14 por la noche, horas después de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gabinete de seguridad dieran a conocer la “nueva” estrategia de seguridad para el estado que gobierna Egidio Torre Cantú, se desató una balacera entre pistoleros de dos bandas rivales en un barrio de Reynosa, la misma ciudad donde las autoridades hicieron el anuncio oficial.

A las 13:30 horas, Osorio Chong detalló las medidas que se instrumentarán en esta entidad fronteriza para combatir la creciente violencia e inseguridad que, en los últimos dos meses, obligó a la ciudadanía a salir a las calles de Tampico y de esta capital en tres ocasiones para exigir protección.

El nuevo plan, de acuerdo con el funcionario federal, divide el territorio tamaulipeco en cuatro zonas que serán supervisadas por un fiscal de la Secretaría de la Marina o de la Defensa Nacional y se basa en tres ejes, encaminados a desarticular a las organizaciones criminales; sellar las rutas del tráfico de narcóticos, armas y personas, y garantizar instituciones de seguridad locales “eficientes y confiables”.

Además, dijo, la Procuraduría General de Justicia estatal será depurada con el apoyo de fuerzas federales. “Que quede claro –advirtió–, será un proceso transparente en el cual no se tolerará a aquel servidor público que tenga vínculos con el crimen organizado o haya cometido actos de corrupción o de omisión.”

En el acto protocolario, además de los miembros del gabinete de seguridad de la administración peñanietista, acompañaron al anfitrión Egidio Torre Cantú los mandatarios de Nuevo León, Rodrigo Medina Cruz; Coahuila, Rubén Moreira; San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández, así como otros servidores públicos.

Ese día se montó un desproporcionado operativo de seguridad con cientos de marinos, militares, agentes federales y policías estatales, quienes resguardaron el parque donde se realizó el acto; hubo vigilancia con tanquetas, patrullas blindadas y helicópteros, y con francotiradores apostados en las azoteas de los edificios adyacentes.

Apenas terminó el encuentro, todo regresó a la “normalidad”. Pero ésta sólo duró algunas horas, pues por la noche se desató una balacera en una colonia reynosense ubicada en la salida a Monterrey.

Al parecer, el plan anunciado por Osorio Chong no asustó a las organizaciones criminales del sur del estado. Los enfrentamientos continuaron los siguientes días en Tampico, donde bares, restaurantes y dos negocios de venta de autos fueron incendiados; los delincuentes también dejaron un vehículo con siete cadáveres y un narcomensaje de una facción del Cártel del Golfo en el cual aseguraba que tenía controlada la plaza.

En Miguel Alemán y Camargo, municipios de la “frontera chica”, el lunes 19 se registraron nutridas balaceras que duraron varias horas, hasta que helicópteros de la Marina sobrevolaron la zona y dispararon contra los vehículos de los sicarios.

En el centro del estado y en la capital continuaron los secuestros y asesinatos cometidos por Los Zetas. El evento más sangriento ocurrió el mismo lunes 19 en un apartado ejido del municipio de Hidalgo, donde un comando de presuntos zetas ejecutó a nueve personas, entre ellas mujeres y niños.

### **Las bandas se atomizan**

La división del Cártel del Golfo (CDG) detonó el incendio en varias ciudades, como Tampico, Reynosa y Matamoros; mientras que en Ciudad Victoria y Nuevo Laredo la captura de dos capos de Los Zetas – Fernando Martínez Magaña, El Z-16, y Juan Fernando Álvarez Cortez, El Ferrari– provocó una nueva división esa organización.

El Z-16, jefe del grupo Los Estacas, como se conoce a los sicarios que se desplazan en camionetas vigilando casas de seguridad, barrios o zonas completas de Nuevo Laredo, cayó el jueves 15. Las autoridades señalaron que su captura se debió a una denuncia anónima. Días después fue remitido al penal de máxima seguridad de Occidente, en Puente Grande, Jalisco.

El Ferrari, a su vez, fue aprehendido el lunes 19 en Sabinas. Las autoridades sostienen que es posible que ambos capos hubieran sido denunciados por sus propios compañeros, pues según algunos exmiembros de esa organización consultados por el reportero, en Nuevo Laredo y Ciudad Victoria Los Zetas están liados en una pugna interna por el control de las plazas.

“En Ciudad Victoria –comenta uno de los entrevistados– hay dos facciones principales: la que aún se pliega al Z-42 (Omar Treviño Morales) y otra que se niega a obedecer las órdenes que provienen de Nuevo Laredo.

“La facción que rechaza al grupo que sigue las órdenes de Nuevo Laredo ya no quería al Ferrari y tenía tiempo intentando derrocarlo de la jefatura en Ciudad Victoria”. Hoy, insiste, la violencia envuelve por igual a Nuevo Laredo y a Ciudad Victoria por la guerra intestina en la organización.

La situación es similar en el CDG, donde tres grupos se disputan la hegemonía. Esas divisiones han provocado que en ambos cárteles se pierda la estructura centralizada y que ahora funcionen como federación de grupos. Además, con la detención de algunos capos o su eliminación, las células se han multiplicado y resulta más difícil controlarlas.

Según la Vocería de Seguridad de Coahuila, los grupos que quedaron descabezados se centran en el secuestro, la extorsión y el narcomenudeo, porque carecen de los medios y contactos para el tráfico a gran escala.

En la zona metropolitana de Monterrey, las fracciones zetas se dedican ahora a la extorsión y los secuestros. Especialistas de la Universidad Autónoma de Nuevo León calculan que se cometen alrededor de 80 plagios al mes en la entidad. A su vez, la procuraduría estatal habla de cinco asesinatos por día.

El portal Valor por Tamaulipas (VxT) realizó “una ligera actualización de la división narcopolítica del estado” porque, señala, ahora son cuatro las fracciones del CDG y Los Zetas las que operan ahí: “Como tal, Mante toma control de la subdivisión de Los Zetas del Altiplano, mientras que la subdivisión del triángulo de las Bermudas del CDG –González, Aldama, Soto la Marina– y Abasolo (está) bajo una influencia independiente al área metropolitana”.

Entre tanto, la zona metropolitana de Victoria está bajo la estructura de una biplaza, toda vez que dos grupos rivales operan de manera paralela en una sola organización criminal, precisa el reporte de VxT, “además de cambios de jefes operativos criminales abatidos por autoridades o sus rivales criminales dentro de la misma organización en la ciudad de Reynosa y La Ribereña” (Frontera Chica).

Añade: “En la zona sur del estado, dependiendo de cómo evolucione, ese grupo (CDG) se incorporará a actividades de recuperación de terreno en el norte de Veracruz y en San Luis Potosí, principalmente, y de apoyo al CDG en Morelos, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León para reforzar su presencia”.

Debido a las luchas internas y divisiones que se iniciaron en abril pasado, ha habido decenas de muertos, aun cuando el gobierno de Torre Cantú esconde las estadísticas. A esta política se debe también que poca gente sepa que la región de Mante, Xicoténcatl, Llera y Gómez Farías se convirtió en un macrocementerio donde lo mismo se encuentran los restos de ciudadanos secuestrados que de sicarios, según los peritos forenses.

Frente a estos hechos, todo indica que la nueva estrategia de seguridad anunciada por Osorio Chong no inquieta a los grupos criminales que operan desde hace años en Tamaulipas y, al parecer, aun cuentan con la protección de funcionarios de los tres niveles de gobierno.

J. Jesús Esquivel. “Tamaulipas: “limpia” de narcos tolerada por el gobierno”. *Proceso* número 1962, 8 junio 2014. pp. 6, 7, 9, 10. <https://www.proceso.com.mx/374084/tamaulipas-limpia-de-narcos-tolerada-por-el-gobierno>

### **“Tamaulipas: “limpia” de narcos tolerada por el gobierno”**

Según las agencias de inteligencia de Estados Unidos, la violencia en Tamaulipas –que se recrudeció tras el anuncio de la estrategia federal para el estado– no se debe a la lucha territorial entre narcos, sino a que el Cártel del Golfo, con el apoyo del Cártel de Sinaloa, está “limpiando” la entidad de Los Zetas, a quienes culpan de aterrorizar a la población con extorsiones y secuestros. Conscientes de esto –se dice en reportes de dichas agencias–, la Marina y el Ejército han permitido enfrentamientos entre esos grupos delictivos. Y el paso de la droga hacia el país del norte está garantizado.

WASHINGTON. - La causa principal de la violencia que predomina en Tamaulipas ya no es la pugna entre el Cártel del Golfo y Los Zetas por esa plaza fronteriza, sino que refleja el reacomodo de los cárteles a las nuevas condiciones que se le plantean en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El diagnóstico está contenido en reportes de inteligencia estadounidenses, uno de los cuales destaca: “En Nuevo Laredo, Reynosa y Tampico, la eliminación de elementos de Los Zetas a cargo del Cártel del Golfo y de otras organizaciones que están fuera de la entidad, está generando esa fuerte ola de violencia en todo el estado”.

Funcionarios de Estados Unidos accedieron a hablar y mostraron a Proceso dichos informes sobre Tamaulipas, a condición de no publicar su identidad ni las dependencias federales en que trabajan. Uno de ellos afirma:

“Los reportes de inteligencia que hemos recolectado de lo que pasa en Tamaulipas, especialmente en Nuevo Laredo, revelan que más que una lucha por la plaza (para contrabandear drogas a Estados Unidos), la que libra el Cártel del Golfo contra Los Zetas es para acabar con el terror al que estos últimos han sometido a la población.”

En vista de lo sensible que está el intercambio de información de inteligencia entre las agencias de seguridad de Estados Unidos y de México en la administración priista, los funcionarios estadounidenses eligen con cuidado sus palabras.

“Después de esta tormenta vendrá la calma –comenta uno de los tres entrevistados–. Es la limpia, como dicen en México, de todos los criminales desalmados y extorsionadores que dicen tener filiación con Los Zetas. La intención es contener la violencia contra la población civil, eso es lo que pretende hacer el Cártel del Golfo y quienes lo apoyan en esto”, añade.

–¿Quiénes apoyan al Cártel del Golfo en los enfrentamientos contra Los Zetas? –se le plantea.

–El Cártel de Sinaloa principalmente, y hasta algunos elementos de grupos que llegaron desde Chihuahua para apoyarlo.

El control de la plaza de Tamaulipas y sus corredores para el tráfico de droga hacia Estados Unidos preocupa al gobierno de Barack Obama. Los entrevistados reconocen que, una vez controlado el estado, aumentará el flujo de drogas procedentes de México y Sudamérica, y la mercancía pasará sobre todo por Texas. De hecho, admiten que ya se reportan un mayor movimiento de metanfetaminas y heroína que entraron por Tamaulipas a Houston, Dallas y San Antonio.

“No es una violencia generalizada como la que se destacaba hace dos o tres años en Tamaulipas. Los ataques parecen orquestarse muy bien contra blancos previamente elegidos, porque incluso el Ejército y la Marina de México han permitido los enfrentamientos entre criminales; optan por no intervenir”, se lee en otro de los documentos elaborados por distintas agencias estadounidenses desde México.

Al consultarles si lo que sucede en Tamaulipas se puede interpretar como un acuerdo entre el gobierno y grupos del crimen organizado para acabar con la extrema violencia en el país, los funcionarios intercambian miradas como para ver quién se atreve a responder. Tras una breve pausa uno dice:

“La intención que tienen es acabar con toda la criminalidad que aterroriza a la sociedad civil y que no está ligada al narcotráfico. Las consecuencias de esto serán otras, y son las que nos preocupan, pero es algo que ya veníamos prediciendo porque así pasó en Colombia hace algunos años.”

### **La “buena noticia”**

El pasado 14 de mayo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gabinete de seguridad dieron a conocer la nueva estrategia contra la violencia en Tamaulipas (Proceso 1960).

El plan del gobierno de Peña Nieto frente a la oleada de asesinatos –que se acrecentó horas después de que Osorio Chong hiciera el mencionado anuncio en Reynosa– consiste en dividir el territorio tamaulipeco en cuatro zonas para que las supervise un fiscal de la Marina o de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La estrategia tiene tres vertientes: desarticular a las organizaciones criminales, cancelar las rutas del tráfico de drogas, armas y personas, y garantizar la seguridad civil con el funcionamiento pleno de las instituciones gubernamentales.

Para los funcionarios estadounidenses, el objetivo del gobierno mexicano es viable pero está condicionado a la eliminación de uno de los dos cárteles que controlan esa plaza: el del Golfo o Los Zetas.

“Es muy difícil que puedan eliminar al narcotráfico de Tamaulipas. Sería lo ideal, pero es muy complicado. Con base en los informes que nos llegan desde allá, creemos que la intención es que el tráfico de las drogas continúe como antes (del sexenio de Felipe Calderón), sin representar una amenaza para la estabilidad de la población”, explica uno de los estadounidenses.

El concepto de “Estado fallido” que utilizó el gobierno estadounidense durante el sexenio de Calderón para describir entidades como Tamaulipas, donde el crimen organizado impuso su ley, quedó proscrito en la nueva relación de Washington con la administración de Enrique Peña Nieto.

De forma discreta, los integrantes de agencias de inteligencia indican que en México no se desarrolla ahora una lucha por el poder ni por el control de plazas, sino una cruzada para eliminar los “malos elementos”, que diversificaron el negocio hacia el secuestro y la extorsión, entre otros delitos. Uno de ellos puntualiza:

“A toda la gente de Tamaulipas y a la población de México les convendría la eliminación de Los Zetas, aunque esto no tendría un efecto real en una disminución del tráfico de drogas a Estados Unidos. Más bien sería la consolidación de un solo grupo como líder del negocio en un lugar o estado específico, como Tamaulipas.”

—¿Le preocupa al gobierno de Obama que sus reportes de inteligencia indiquen, como en el caso de Tamaulipas, que los militares dejen enfrentarse a los narcotraficantes entre ellos?

—Es una negligencia intencionada que tiene efectos positivos, suponemos, para los objetivos de seguridad que se ha marcado el gobierno de México. La verdad, en la historia del narcotráfico mexicano Los Zetas han sido un factor de terror y de muerte. Le aseguro que su eliminación es tan buena noticia para los mexicanos como para los estadounidenses.

### **Los estados que siguen**

La información de inteligencia recopilada por las agencias federales de Estados Unidos en Tamaulipas establece un escenario caótico para Los Zetas. “En los últimos 12 meses”, aunque dividido, el Cártel del Golfo se ha revitalizado en número de integrantes como en arsenal y equipo táctico, por el apoyo que —según los reportes estadounidenses— está recibiendo de la organización de Ismael El Mayo Zambada desde Sinaloa.

En la pirámide del liderazgo de Los Zetas, que posee el gobierno de Estados Unidos y elaborada con base en sus datos de inteligencia (informantes e intercambio de información con el gobierno mexicano), el líder de esta agrupación criminal es Omar Treviño Morales, El Zeta 42.

Al presunto líder de Los Zetas y hermano de Miguel Treviño Morales —El Z 40, quien fue capturado en julio de 2013 por la Marina—, las agencias de inteligencia lo perciben “diezmado y acorralado”, que permanece oculto en Nuevo Laredo ante la cacería que desató el Cártel del Golfo.

Esta organización, dicen los reportes, está buscando al Z 42 minuciosamente en las casas de seguridad de Los Zetas en Nuevo Laredo, y por eso se percibe que la narcoviolencia sigue extendida por toda la entidad.

Contraria a la información de la prensa mexicana, la cual ha publicado que el Cártel del Golfo está muy dividido, los mencionados documentos sostiene que esa organización criminal se está consolidando con el respaldo interesado que le llega de Sinaloa.

Uno de los funcionarios entrevistados observa: “Recordará que hace algunos años, cuando irrumpieron Los Zetas como grupo criminal desalmado, sanguinario e independiente, se les llegó a calificar, dentro del mismo crimen organizado, como ‘la chusma’. Por la información que tenemos, creemos que cárteles ‘tradicionales’, como los de Sinaloa, del Golfo y de Juárez, llegaron a un acuerdo entre ellos: quien estorbe a esos intereses tendrá que ser eliminado por el bien de todos ellos”.

El escenario que conforman los reportes de inteligencia, que los entrevistados facilitaron al reportero para una revisión ocular, no descarta la posibilidad de que la eventual eliminación de Los Zetas le deje lugar a otros criminales:

“El tráfico de indocumentados centroamericanos, las extorsiones a personas y negocios, así como la piratería, son negocios muy redituables para Los Zetas y los muchos criminales comunes que trabajan para ellos sin pertenecer en ciento por ciento a la organización. Si se extermina a Los Zetas, el riesgo será la formación de escisiones pequeñas que quieran darle continuidad a esos actos ilícitos, aunque saben que tendrían que enfrentarse a los cárteles y a las autoridades federales.”

La cacería de zetas por el Cártel del Golfo y el de Sinaloa asienta como primer objetivo limpiar a Tamaulipas, pero la información en poder de las agencias estadounidenses tiene un pronóstico de narcoviolencia para otras entidades.

“La limpia es generalizada y Los Zetas tienen presencia en otros estados, como Veracruz, Estado de México, Nayarit, Coahuila, Querétaro y Jalisco, en los cuales, una vez terminada la misión de Tamaulipas, podrían registrarse enfrentamientos muy violentos. Creemos que grupos como el Cártel de Sinaloa han tomado la decisión de acabar también con los delincuentes que han aprovechado el narcotráfico para diversificar los objetivos de este negocio con la ejecución de otros crímenes. De manera paulatina, esto también obligaría a replantear la cooperación antidrogas con México, porque posiblemente aumentará el tráfico de drogas a Estados Unidos”, concluye uno de los reportes.

Juan Alberto Cedillo. “Expediente abierto: los últimos días de ‘El Lazca’”. *Proceso* número, 1965, 29 junio 2014. pp. 23-25. <https://www.proceso.com.mx/375979/expediente-abierto-los-ultimos-dias-de-el-lazca>

### **“Expediente abierto: los últimos días de ‘El Lazca’”**

En abril de 2012, seis meses antes de su ejecución en Progreso, Coahuila, Heriberto Lazcano, El Lazca, estuvo a punto de ser capturado por elementos del Ejército. Por esas fechas había comenzado a interesarse por las minas de carbón y la organización criminal que encabezaba –Los Zetas– no tenía fisuras notorias. Todo iba bien con Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, su socio. Pero éste terminó

por delatarlo y llamó a los marinos para darles la ubicación de “un comandante de Los Zetas” y éstos lo ejecutaron el 7 de octubre de ese año. A partir de documentos y declaraciones oficiales de sicarios detenidos, Proceso reconstruye los últimos días de El Lazca.

PROGRESO, COAH. - El 7 de octubre de 2012 las escasas gradas del polvoriento campo de beisbol local estaban llenas. Alrededor de 80 personas animaban a los equipos de los ejidos de Aura y San Alberto que esa tarde se enfrentaban. Distribuidos a lo largo de un estrecho camino, los pobladores seguían el partido.

La zona deportiva se ubica a un costado de la Carretera 57, justo antes de traspasar un arco de concreto que anuncia la llegada al pequeño poblado, desértico como la mayoría de los que se encuentran en el norte del estado.

Al filo de las 15:00 horas, cuando apenas se habían realizado las primeras jugadas, una camioneta Ford blanca de doble cabina se estacionó a la orilla de la carretera. El conductor y su acompañante observaron el encuentro desde el interior del vehículo.

Quince minutos después varias camionetas de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) invadieron la localidad. Algunas llegaron por brechas, quizá para evadir a los halcones que trabajan para Los Zetas; otras lo hicieron por la estrecha carretera, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona.

Los marinos se dirigieron a la camioneta blanca. Los dos hombres que se encontraban en ella abrieron fuego y mataron a un efectivo de la Semar. Sus compañeros respondieron y cundió el caos en el campo de beisbol. Aficionados y peloteros se dispersaron en todas direcciones. Los marinos intentaban reunirlos detrás del área del home para protegerlos, al tiempo que los dos hombres abandonaron la Ford blanca e intentaron huir.

Uno de ellos empuñaba un fusil de asalto AR-15 adaptado con un dispositivo lanzagranadas. Apenas avanzó 300 metros cuando fue alcanzado por los disparos de los marinos que se impactaron en su espalda y sus glúteos; cayó al lado de uno de los pedestales del arco que da la bienvenida a Progreso. El otro fue abatido ahí mismo.

La zona está lejos del municipio, pues para llegar a él se debe abandonar la Carretera 57 –que comienza en la Ciudad de México y termina en Piedras Negras– y recorrer un tramo de 22 kilómetros.

En la Ford blanca el Ministerio Público (MP) encontró un lanzacohetes con dos proyectiles hábiles, dos granadas de fragmentación, armas y municiones de diversos calibres.

A las 18:05 horas de ese 7 de octubre de 2012, empleados de la agencia del MP de Sabinas recibieron una llamada de elementos de la Semar en la que pedían la presencia de aquéllos, así como asistencia de personal de Servicios Periciales y de la Policía Investigadora en las inmediaciones del campo de beisbol, “toda vez que dos civiles habían fallecido”.

Tras revisar sus pertenencias, las autoridades encontraron una credencial que identificaba a uno de ellos como Mario Alberto Rodríguez Rodríguez, de 44 años, con domicilio en la calle Abedul 137, colonia La Joya, en Sabinas. Algunos pobladores comentaron que solía visitar a una mujer del ejido Aura.

En ese lugar Los Zetas tenían un campo de entrenamiento; incluso llevaron ahí a los 131 reos que escaparon del Cereso de Piedras Negras a finales de septiembre, semanas antes del operativo de los marinos en el campo de beisbol.

Como en la región no hay ninguna morgue, las autoridades solicitaron los servicios de la Funeraria García, de Sabinas, la más grande de la región, para trasladar los cuerpos. Los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado fotografiaron los cadáveres, les tomaron las huellas dactilares y enviaron las muestras a Saltillo para que las compararan con las bases de datos de la procuraduría y las de Plataforma México.

Los cuerpos permanecieron en la funeraria. Pasada la una de la madrugada del 8 de octubre de 2012 arribaron al negocio varios hombres armados y el rostro cubierto. Tras amagar a los empleados, sustrajeron los dos cadáveres y se los llevaron en una carroza, que condujo el propietario de la funeraria, presionado por los encapuchados.

La procuraduría estatal aceleró las investigaciones para identificar al hombre que murió junto a Mario Alberto Rodríguez. De acuerdo con la base de datos de Plataforma México, las huellas pertenecían a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, un antiguo cabo de infantería del Ejército que en ese tiempo era el líder de Los Zetas.

Desde que el grupo criminal llegó al norte del estado, la Carretera 57 comenzó a ser vigilada por decenas de halcones, quienes alertaban a sus jefes sobre los despliegues militares en el entorno. La vigilancia se incrementó desde que la Marina instaló una improvisada base naval entre Progreso y Sabinas, cerca del entronque que conduce a Múzquiz.

### **La historia de “El Lazca”**

De acuerdo con el expediente que se encuentra en el Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Heriberto Lazcano –quien nació en Apan, Hidalgo, el 25 de diciembre de 1974– se dio de alta en la milicia el 5 de junio de 1991 en el Campo Militar Número 18-A “General Pedro María Anaya”, de Pachuca.

“Me permito hacer de su superior conocimiento de usted, que teniendo verdaderos deseos de abrasar la carrera de las armas por considerar que tengo bocación para ello solisito con todo respeto sea aceptada mi alta en el Ejército Mexicano” (sic), dice la solicitud escrita por él mismo.

Siete años después, el 20 de marzo de 1998, Lazcano acudió al Archivo Histórico de la Sedena a solicitar su baja; por problemas familiares, dijo. Lo cierto es que meses antes se había ido a Reynosa, Tamaulipas, con un grupo de cabos de infantería de la Sedena, al frente de los cuales estaba Arturo Guzmán Decena. Cada integrante se identificaba con la letra zeta y un número.

La clave militar tenía la finalidad de distinguir a los grupos según iban llegando a la región. A cada uno se le asignaba una letra del abecedario y un número progresivo; todos estaban bajo las órdenes del general Ricardo Martínez Perea y del capitán Pedro Maya.

Lazcano y los otros cabos no arribaron como militares, sino como miembros de la Policía Judicial Federal (PJF), pues habían sido trasladados a la Procuraduría General de la República como parte de los

acuerdos del gobierno federal con el de Estados Unidos para que ayudaran a combatir al narcotráfico desde esa dependencia.

El expediente de Guzmán Decena, también en el Archivo Histórico de la Sedena, destaca que desertó del Ejército en 1997 luego de ser reclutado como escolta de Gilberto García Mena, El June, y Zeferino Peña Cuéllar, los capos del Cártel del Golfo (CDG) que controlaban Ciudad Alemán y la Frontera Chica.

Tras abandonar el Ejército, Guzmán Decena reclutó a 10 personas, entre ellas a Lazcano. En ese tiempo Juan García Ábrego era el líder del CDG; su lugarteniente era El June, quien se apoyaba en Osiel Cárdenas Guillén; éste, posteriormente, fue designado jefe de plaza de la organización en Matamoros.

El June y Peña Cuéllar introducían por Camargo, Miguel Alemán y Guardado de Abajo alrededor de 50 toneladas de mariguana a Estados Unidos cada mes. No usaban armas, pues sabían que las sanciones por el delito de narcotráfico en esa época eran menores que las impuestas por la portación de armamento para uso exclusivo del Ejército. Para protegerse, ambos reclutaron a Guzmán Decena, Lazcano y a los cabos de infantería.

Tras la caída de García Ábrego (1996) y El June (2001), Osiel Cárdenas asumió la jefatura del CDG y el grupo de 15 escoltas autodenominado zetas quedó a su disposición. Osiel pidió a Guzmán Decena que lo reforzara. Muy pronto, el grupo se duplicó con cabos del Ejército que llegaron a Tamaulipas y a otras regiones del norte del país.

Los exmilitares mostraron su efectividad en los primeros años del nuevo siglo, cuando eliminaron a los sicarios del Cártel de Sinaloa que intentaron arrebatar al CDG la estratégica ciudad de Nuevo Laredo.

### **“Un comandante de Los Zetas”**

Los Zetas impusieron una nueva estrategia. Sus integrantes, desertores del Ejército, se especializaron en el uso de armamento pesado y se convirtieron en un grupo paramilitar.

Además, impusieron nuevas formas de ejecutar a sus enemigos: la decapitación, el descuartizamiento, la incineración... Su propósito era infundir terror a los rivales, un método copiado a los antiguos kaibiles del ejército guatemalteco.

Como recompensa por haber derrotado al Cártel de Sinaloa, Osiel Cárdenas cedió a Los Zetas la plaza de Nuevo Laredo. Desde esa ciudad fronteriza los sicarios de la organización se convirtieron en la avanzada para abrir nuevas plazas en el noreste, pero también comenzaron a operar independientemente, ya que ellos nombraron a los capos de las nuevas ciudades conquistadas en Coahuila, Nuevo León y Veracruz.

Tras la muerte de Guzmán Decena en noviembre de 2002, Lazcano se integró a la dirección de Los Zetas. La posterior caída de Osiel lo hizo ascender y formar parte de la tríada del CDG, junto a Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, y Jorge Eduardo Costilla, El Coss.

Desde el inicio de 2010 Los Zetas ya controlaban las principales ciudades de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Incluso sacrificaron a uno de los suyos –Víctor Peña Valencia, Concord 3–, quien fue ejecutado por el capo de Reynosa Samuel Flores Borrego, Metro 3, a finales de febrero de ese año.

Con ese asesinato comenzó la sangrienta narcoguerra entre el CDG y Los Zetas, pues éstos decidieron independizarse y formar una nueva tríada de jefes. Lazcano quedó como su estratega; Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, como responsable de las finanzas, y Enrique Rejón Aguilar como supervisor de todas las plazas que controlaba la organización.

En el juicio que se le sigue a Héctor Treviño Morales en un Gran Jurado en Austin, Texas, Rejón Aguilar, El Mamito –uno de los fundadores de Los Zetas detenido por agentes federales en julio de 2011 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México– declaró que cuando fungió como supervisor del grupo se veía casi todos los días con Treviño y Lazcano.

Ellos se movían por todo el país. Unas veces amanecían en su rancho de Miguel Alemán; otras en Casas de Seguridad de Nuevo León, Coahuila, unas más en un rancho ubicado en la carretera Tuxpan-Veracruz, del empresario Francisco Pancho Colorado, enlace de Los Zetas con el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Después de la captura del Mamito, presuntamente porque El Z-40 filtró su ubicación a la Policía Federal, Lazcano se refugió en el norte de Coahuila y Treviño Morales en Nuevo Laredo. En ese tiempo, su principal plaza para el contrabando de drogas era la ciudad fronteriza de Piedras Negras. Así que Lazcano escogió Monclova como su centro de operaciones, aunque solía alternar su estancia en Sabinas y Progreso.

Incluso tenía su búnker en Monclova, en la zona residencial California, a la salida hacia Sabinas. El lugar era estratégico, ya que podía escapar a Monterrey hacia la frontera, y por brechas hacia la sierra. La colonia era vigilada por decenas de halcones a bordo de sus cuatrimotos.

A diferencia de otros capos, quienes cuentan con decenas de pistoleros y circulan en caravanas de hasta 10 vehículos en zonas rurales, Lazcano se movía con discreción, acompañado por uno o dos escoltas. En abril de 2012, seis meses antes de su ejecución, estuvo a punto de ser capturado por tropas del Ejército en un Centro Recreativo de la Sección 38 del SNTE durante una fiesta que animaba la Banda Jerez.

Por esas fechas se había interesado en el lucrativo negocio del carbón, tras comprar varias minas en Coahuila. Su compañero en la dirección, El Z-40, se desplazaba con frecuencia de Tamaulipas a Coahuila. Lo hacía por las brechas y caminos secundarios para coordinar operaciones y amarrar los negocios del grupo.

Así funcionaron Los Zetas hasta principios de octubre de 2012, cuando gente del Z-40, mediante una llamada anónima, proporcionó a la Semar la ubicación de Lazcano, si bien sólo habló de “un comandante de Los Zetas”.

Verónica Espinosa. “La sangrienta batalla por Fresnillo”. *Proceso* número 1973, 24 agosto 2014. pp. 32-33. <https://www.proceso.com.mx/380756/la-sangrienta-batalla-por-fresnillo-2>

### **“La sangrienta batalla por Fresnillo”**

Para el alcalde de Fresnillo, Benjamín Medrano Quezada, el municipio se convirtió desde hace años en una plaza que se disputan el Cártel del Golfo y Los Zetas, de ahí que la violencia no ceda. Medrano

expone las cifras de la violencia –ejecuciones, levantones, extorsiones, balaceras– apoyado en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, y lanza el grito: “La Marina ha ayudado muchísimo, por eso deseáramos que tuviera una base permanente (en Fresnillo) ... Sabemos que para eso se requieren como 100 millones de pesos, pero sí la necesitamos”.

ZACATECAS, ZAC. (Proceso). - “Las cosas no han cambiado mucho en Fresnillo. Los índices de violencia siguen siendo ámbar y a veces rojos”.

Benjamín Medrano Quezada, alcalde de ese municipio –puerta de entrada al norte del país y el más importante del estado por su economía–, comenta a la reportera que, si fuera un político tradicional, diría que la localidad recuperó ya la tranquilidad y la paz.

“Pero sería mentir”, admite Medrano Quezada, un antiguo colaborador de Ricardo Monreal Ávila que en 2012 –cuando el Partido del Trabajo no apoyó su candidatura a la alcaldía– se fue al PRI y ganó los comicios.

Desde hace varios años Los Zetas desplazaron a sus rivales del Cártel del Golfo (CDG) e impusieron su dominio en la región (Proceso 1788), pese a las incursiones del Ejército. Desde entonces ha habido cientos de muertos, innumerables encontronazos, levantones, ejecuciones y secuestros, lo mismo en la capital de la entidad que en Guadalupe, Jerez, Pinos y Sombrerete.

Everardo Cabral Bañuelos, presidente de la Unión Ganadera Regional en Jerez, desapareció el 7 de junio último. Ese día, Cabral, de 53 años, salió de su domicilio en el centro de la ciudad. Desde entonces nadie lo ha visto. Uno de sus hijos dio parte a las autoridades ministeriales y comentó que iba en su camioneta, una Ford Escape.

El vehículo fue localizado al día siguiente en las inmediaciones del rancho El Sacrificio, entre las comunidades de Santa Rita y Ciénega de este mismo municipio. No tenía llantas y estaba completamente calcinado.

El sector ganadero se muestra consternado porque, dice, varios de sus miembros han sido extorsionados por los grupos del crimen organizado.

El 20 de junio hubo dos secuestros más en Valparaíso, mientras en Chalchihuites tres ingenieros de la empresa First Majestic en la mina El Toro fueron sacados violentamente de sus domicilios.

Según las autoridades estatales y municipales, la violencia en Zacatecas no desaparece, sólo cambia de formas, según lo demuestran las desapariciones recientes.

A principios de este mes los ajustes de cuentas se exacerbaron. Comenzaron a aparecer bolsas con restos humanos con narcomensajes, una de ellas en un puente peatonal en la capital del estado.

En Fresnillo, Juan Ángel Hernández, El Chilango, un comerciante de artículos pirata, fue ejecutado en pleno centro de la ciudad un viernes a mediodía, frente a decenas de personas. Al día siguiente, por la noche, varios hombres llegaron al local del Chilango y, tras ordenar a la empleada que saliera, quemaron la mercancía.

En septiembre de 2013, durante su tercer informe, el gobernador Miguel Alonso Reyes presumió la inversión cercana a 3 mil millones de pesos en el rubro de seguridad pública durante su gestión; también

mencionó la construcción de las bases militares en Fresnillo y Jalpa, así como la formación de cinco Unidades Regionales de Seguridad.

Pero la instalación del 97 Batallón de Infantería en la base de Fresnillo resultó insuficiente para apaciguar a los sicarios de Los Zetas y del CDG que se disputan la plaza. Ante esta situación, Medrano Quezada propuso al gobernador solicitar de manera abierta al gobierno federal que los marinos que realizan operaciones en esta zona desde mediados de 2011 –y que se retiraron el año pasado–, instalen una base de operaciones permanente.

Alonso Reyes se quejó y regresaron los marinos, quienes se alojan de manera provisional en el gimnasio municipal de Fresnillo.

Medrano Quezada comenta vía telefónica que, según las estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) –las cuales consultó Proceso–, Fresnillo sigue presentando la mayor incidencia en ejecuciones, secuestros y levantones:

“Tenemos la percepción de que las cosas han mejorado, pero sabemos que esta es una plaza en disputa desde hace tiempo. Tenemos en Fresnillo una mayor presencia del Cártel del Golfo que de Los Zetas. La Marina ha ayudado muchísimo, por eso deseáramos que tuviera una base permanente.”

Cuando los marinos se ausentaron, repuntaron los índices delictivos y reaparecieron las mantas con mensajes de los grupos criminales que se disputan la hegemonía en el estado.

Relata también que hace ocho meses, cuando asumió la presidencia municipal, encontró “una policía desarticulada y al servicio de un grupo delincuencia; reportes ciudadanos que servían para el halconeo en lugar de ser atendidos con presencia de la policía”.

Hoy, dice, tiene encima los plazos para la certificación de los uniformados, como sucede en todos los municipios, que vencen en octubre. El problema es crítico pues más de 50% de los policías de Fresnillo han reprobado los exámenes de control y confianza. “Estamos programando a grupos de 30 en 30. De los últimos, sólo tres los acreditaron”.

### **Otras formas de morir**

A principios de año, el subprocurador de Justicia en Fresnillo, Juan Manuel Loera López, comentó que entre 2012 y 2013 las muertes violentas en los enfrentamientos de las bandas criminales disminuyeron de 80 a 60 (25%) debido a “la nueva modalidad en los combates”.

Según explicó a los medios, los grupos pasaron de las balaceras frontales a los levantones, por lo que las bajas comentaron a ser selectivas. Los cuerpos aparecían días después en sitios públicos.

Lo que sí aumentó fueron los desaparecidos. En enero pasado Loera López habló de 90 personas, en su mayoría oriundos de Fresnillo y de Miguel Auza; muchos de ellos fueron ejecutados.

Según los reportes de la Sedena, entre enero y mayo de este 2014 disminuyeron los enfrentamientos en la entidad, así como el número de bajas, entre ellas las de 18 presuntos delincuentes y una autoridad civil, así como seis enfrentamientos entre grupos delincuenciales con militares y con policías ministeriales en Fresnillo, Jerez, Juan Aldama y Chalchihuites.

Sin embargo, de acuerdo con el documento de la Sedena consultado por Proceso, en ese periodo los homicidios del fuero común y los atribuidos a la delincuencia organizada sumaron 82: 26 en enero, 10 en febrero, 16 en marzo, 11 en abril y 22 en mayo.

En Fresnillo hubo 20; 10 en Guadalupe (municipio conurbado con la capital); seis en la ciudad de Zacatecas y otros tantos en Pinos y Nochistlán, más otros cinco en Valparaíso. La mayoría fueron atribuidos a la delincuencia organizada.

El Ejército registró también en los primeros cinco meses del año 23 secuestros, 51 levantones y dos desapariciones en 18 de los 58 municipios del estado. De éstos, 28 se registraron en Fresnillo, 17 en Guadalupe y 14 en la capital zacatecana.

Según estos datos, el número de levantones es más del doble de los secuestros: hombres armados sacan por la fuerza a las víctimas de sus domicilios, negocios o lugares de trabajo. La mayoría son ejecutados.

El 8 de enero último, por ejemplo, efectivos del 97 batallón de infantería se toparon en Fresnillo con hombres armados que iban en una camioneta Honda CRV. Se enteraron que en una vivienda de la calle Esperanza tenían cautivas a varias personas, y las liberaron, entre ellas a un hombre de 56 años y a un menor de 13, quien estuvo ahí tres meses. Además, descubrieron los cadáveres de dos mujeres y cinco hombres.

A finales de ese mismo mes, las autoridades de Sombrerete localizaron el cuerpo de Joel García, de 49 años. Estaba dentro de su camioneta y tenía un disparo en la sien derecha. En el vehículo sus ejecutores rayaron la pintura con un clavo para escribir un mensaje:

“Yo no andaba con nadie. Me iba porque me decían a dónde tenía que ir; no contesten los números con el área 477, 458. Adiós, perdón. Yo sé que no me creen que me tenían amenazado y que tenía que dar una cuota cada mes, pero ya no les di, por eso tenía que hacer esto si no mataban a todos, un hombre de Charco Blanco.”

### **Operativos exitosos**

El 21 de enero la Policía Estatal Preventiva liberó a un menor de 15 años en una casa de la colonia La Marianita, en la capital del estado. Los uniformados detuvieron a seis personas, entre ellas dos mujeres que dijeron ser distribuidores de droga en la ciudad y trabajar para el CDG.

El 14 de febrero el cadáver calcinado de un hombre fue tirado en el camino a una comunidad del municipio de Jalpa. Al día siguiente, una mujer que se presentó al Servicio Médico Forense (Semefo) identificó el cuerpo: era de su esposo. “Vendía armas a los integrantes de la delincuencia organizada”, dijo.

A principios de marzo, un hombre fue asesinado a tiros por Álex y El Cocoliso en la discoteca Galáctica 2000 en Nochistlán tras una discusión. El cuerpo de la víctima –no identificada en el reporte de la Sedena– fue trasladado al hospital comunitario de Tlachichila.

Cuando los peritos de la Procuraduría de Justicia acudieron al nosocomio para llevarlo al Semefo, los empleados les dijeron que un grupo de encapuchados llegó en dos camionetas de doble cabina y se llevó el cuerpo.

El 23 de abril, un hombre pidió ayuda a la Policía Municipal de Pánfilo Natera porque tres presuntos delincuentes lo seguían en un Jetta gris y otra camioneta. Como pudo, siguió conduciendo hacia San Luis Potosí, pero fue alcanzado por sus perseguidores, quienes comenzaron a dispararle. En la refriega sus vehículos se volcaron, aunque los pistoleros lograron huir.

Cuando los preventivos llegaron al lugar encontraron en la cajuela del Jetta el cadáver de una mujer que había sido secuestrada horas antes a un costado de la carretera federal 49, en el tramo San Luis Potosí-Zacatecas.

La lista continúa: el martes 19 El Parchado, un presunto zeta, apareció asesinado en una comunidad de Teúl de González Ortega. Al lado del cadáver había un mensaje firmado por el CDG.

Para el alcalde Benjamín Medrano, los sicarios de Los Zetas y del CDG convirtieron a Fresnillo en “una plaza en disputa” por sus condiciones geográficas y económicas. E insiste en que los marinos se queden en la zona de manera permanente.

El jueves 21, el helicóptero del titular de la Marina, Vidal Francisco Soberón, aterrizó en los campos aledaños al gimnasio de Fresnillo, donde sus tropas se encuentran destacadas de manera temporal. De ahí se trasladó a la capital del estado para, junto con los titulares de Hacienda y de la Sedena, Luis Videgaray y Salvador Cienfuegos, respectivamente, inaugurar un asta bandera monumental con motivo del centenario de la Toma de Zacatecas.

Y aunque Medrano no estuvo en ese acto, confía en que el gobernador Reyes le haya solicitado apoyo al almirante para que la base de marinos se quede definitivamente.

“Los comandantes que han estado al frente de la base nos han dicho que, si les garantizamos instalaciones adecuadas, sería más fácil gestionar su permanencia. Sabemos que para eso se requieren como 100 millones de pesos. Pero sí la necesitamos”, remata Medrano.

Juan Alberto Cedillo. “Coahuila tuvo su Ayotzinapa”. *Proceso* número 1989, 14 diciembre 2014. pp. 34-37. <https://www.proceso.com.mx/391049/coahuila-tuvo-su-ayotzinapa-2>

### **“Coahuila tuvo su Ayotzinapa”**

En 2011 un comando zeta atacó un municipio coahuilense: buscaba a dos supuestos traidores. Como no los halló, decidió secuestrar a unas 50 personas. Algunas fueron asesinadas, pero el destino de la mayoría aún se desconoce. El Ejército permitió el paso del convoy, la PGR supuestamente filtró información a Los Zetas y los policías municipales fueron los “guías” de los pistoleros –un caso que recuerda al de Ayotzinapa, en Guerrero. Así se explica que el hecho se haya mantenido oculto más de dos años y que a la fecha sólo se hayan emitido cuatro órdenes de aprehensión.

ALLENDE, COAH. (Proceso). - Más de tres años después del ataque perpetrado el 18 de marzo de 2011 en Allende y el norte de Coahuila, la Procuraduría de Justicia estatal liberó cuatro órdenes de aprehensión, dos de ellas contra policías municipales –de los 40 que protegieron a los criminales.

Mientras, el gobierno federal mantiene silencio sobre esos asesinatos, que se ordenaron desde un lujoso rancho ubicado en las inmediaciones del kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero, el cual fue

el centro de operaciones del excabo de infantería Heriberto Lazcano Lazcano El Lazca y Omar Alejandro Treviño Morales El Z-42, otrora líderes de Los Zetas.

Al presentar en conferencia de prensa los avances en la averiguación sobre el ataque que perpetraron Los Zetas en la región conocida como Cinco Manantiales, el procurador estatal, Homero Ramos Gloria, recordó que, en enero de este año, se realizó un operativo de búsqueda en el cual participaron más de 250 militares, policías estatales, federales y forenses.

Se revisaron los municipios de Guerrero, Allende, Zaragoza, Morelos, Nava, Piedras Negras, Acuña, Jiménez, Hidalgo, Monclova y Sacramento, en donde localizaron al menos tres “narcococinas”, de donde fueron recolectados restos humanos.

Aseguró que las evidencias reunidas sólo en ese despliegue apuntan al secuestro de 28 personas. Se tiene la certeza de que 11 fueron asesinadas, dijo, y de las otras 17 se desconoce su paradero.

En general, además, “la Procuraduría de Justicia de Coahuila ha localizado en el norte de Coahuila 3 mil 450 indicios óseos, de los cuales 2 mil 977 de ellos no es posible (sic) determinar su origen ni obtener el ADN por su grado de calcinación”, informó. Los 473 restantes son analizados para obtener su ADN, “y los resultados sin duda contribuirán en el esclarecimiento de los hechos”, agregó Ramos Gloria.

Horas más tarde, el procurador compareció ante el Congreso estatal y ahí cambió su versión sobre el número de víctimas. A los diputados les comentó que pueden ser más de 50 fallecidos tan sólo en Allende.

Cualquiera de esas cifras contrasta con las que manejan el actual alcalde allendense y las organizaciones de familiares de víctimas: “En total son aproximadamente 300 desaparecidos, pero no se descarta que sean un poquito más”, comenta el presidente municipal Reynaldo Tapia.

La Asociación de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, en tanto, ha abierto 88 expedientes de menores y jóvenes que quedaron huérfanos debido a la violencia en aquella zona.

El secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna Canales, asienta que la Procuraduría local tiene alrededor de 55 denuncias por personas desaparecidas en Allende. Algunas de ellas implican el secuestro de familias completas: “Partimos de que hay un derecho a la verdad y eso implica que investigamos a fondo”.

Durante su rueda de prensa, Ramos Gloria confirmó los hechos que ha documentado Proceso desde diciembre de 2012:

“La tarde noche del 18 de marzo de 2011 arribó a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados”, dijo. Las investigaciones han revelado que los sicarios provenían de Tamaulipas, llegaron en más de 40 camionetas y fueron apoyados y protegidos por los 40 policías municipales de Allende.

“Su objetivo era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo.

“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad –con el objetivo de causarles un daño o perjuicio– a diversos familiares cercanos de esta persona y, junto con ellos, a sus trabajadores, así como a civiles que tenían –o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían– alguna relación con quien buscaban.”

En realidad, el comando buscada a dos varones: se trataba de los capos de Allende, Héctor Moreno y José Luis Garza Gaytán, quienes provenían de familias adineradas y presuntamente lavaban las ganancias del narco mediante carreras de caballos cuarto de milla para Miguel Ángel Treviño El Z-40.

El procurador dijo que el grupo armado “vandalizó y dañó las viviendas que eran habitadas por familiares de Moreno y Gaytán. Derivado del censo llevado a cabo en Allende se sabe que fueron 48 las viviendas destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas”.

Semanas antes, los gatilleros ya habían destruido 27 casas y departamentos en Piedras Negras, propiedad del “contador” Alfonso Cuéllar, quien huyó a Estados Unidos y fue imitado por Héctor Moreno y José Luis Garza.

Según las indagatorias, Moreno se llevó entre 5 y 8 millones de dólares de ganancias del tráfico de drogas. En Estados Unidos, él y Gaytán se entregaron a las autoridades y ahora son “testigos protegidos”. Cuéllar también fue detenido en Dallas. Los tres operadores de Los Zetas tienen orden de aprehensión vigente en Coahuila.

Ramos Gloria destacó que, hasta ahora, se han liberado únicamente cuatro órdenes de aprehensión: dos contra exelementos de la Policía Municipal (María Guadalupe Ávalos Orozco y Jesús Alejandro Bernal Guerrero) y dos contra supuestos miembros de Los Zetas (Fernando Ríos Bustos y Germán Zaragoza Sánchez).

“De estos avances se dará vista a las autoridades federales para que en el ámbito de su competencia ejerzan la facultad de atracción y procedan a la investigación” concluyó el procurador.

### **El castillo de la impureza**

El ataque en Allende se organizó desde un lujoso rancho propiedad de Heriberto Lazcano. Desde ahí también se trazaron nuevas rutas del narcotráfico y se diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo y las huestes del Chapo Guzmán, exjefe del Cártel de Sinaloa.

Lazcano habitó ese rancho a partir de 2010. También lo usó Omar Treviño Morales. La vivienda de estilo californiano está decorada con fina madera y lujosos detalles. El interior destaca por su elegancia y diseño sobrio.

El predio cuenta con caballerizas, corrales, amplias residencias, bodegas, juegos infantiles, casa de muñecas y un pequeño lago artificial, donde habitaron cocodrilos y ahora luce seco.

El espacio contrasta con otros “narcorranchos” incautados en Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, los cuales se distinguen por una decoración abigarrada.

Fuentes de la Cuarta Región Militar confirman que el mandamás de Los Zetas operó en este sitio a partir de los primeros meses de 2010. Lazcano lo escogió por su ubicación: está cerca de carreteras solitarias que en pocos minutos llevan a la frontera con Texas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila,

Tamaulipas y Nuevo León. Además, está rodeado de decenas de brechas para escapar a regiones serranas.

La élite de Los Zetas abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila a finales de febrero de 2010, cuando se separaron del Cártel del Golfo y comenzó una narcoguerra entre ambas organizaciones.

El auge de Los Zetas ocurrió bajo la administración del gobernador Humberto Moreira. Desde 2007 ese grupo comenzó a controlar las principales ciudades del estado: Saltillo, la capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona metropolitana de Torreón.

El zeta Mario Alfonso Cuéllar, segundo al mando en Piedras Negras, contó a las autoridades estadounidenses que Los Zetas cambiaron a la frontera de Coahuila el contrabando de droga que anteriormente realizaban por Tamaulipas. Especificó que metían a Estados Unidos entre 800 y mil kilos de cocaína al mes por Piedras Negras, ciudad fronteriza que continúan controlando y donde recientemente se reunieron los capos de cuatro organizaciones delictivas para acordar una alianza.

Desde 2008 Omar Treviño fue designado jefe de la región norte de Coahuila y era quien operaba el trasiego de drogas a través de Piedras Negras.

Poncho Cuéllar contó que tenían compradas a todas las autoridades: “A la policía se le paga una cuota para que trabaje para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos funcionarios del gobierno”, confesó.

En Coahuila, Lazcano incursionó en el negocio de las minas de carbón, que vendía a través de empresarios de la industria acerera. Incluso consiguió contratos con el gobierno de Moreira, los cuales salieron a relucir en el juicio que se le sigue en San Antonio al extesorero estatal Javier Villarreal.

Lazcano debió abandonar su lujoso rancho en 2011 y refugiarse en Monclova, cuando efectivos de la Séptima Zona Militar lo intentaron capturar. La Secretaría de la Defensa jamás informó sobre el fallido operativo y en el sitio únicamente quedaron las huellas de la batalla.

En Monclova, el 23 de abril de 2012, Lazcano volvió a escapar de los militares, pero finalmente fue abatido por marinos la tarde del 7 de octubre de 2012 en Progreso, gracias a una delación de miembros de su cártel.

## **A ocultar los hechos**

La masacre y secuestro colectivo que perpetraron Los Zetas en Allende contó con la complacencia y complicidad de varias autoridades: Las municipales, que proporcionaron a los sicarios la ubicación de residencias de integrantes de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán; efectivos del Ejército que vigilaban la región –apostados en la garita del kilómetro 53 de la carretera 57– y que dejaron pasar a decenas de camionetas provenientes de Tamaulipas con hombres armados, y las autoridades estatales y federales, que mantuvieron ocultos los crímenes por cerca de dos años.

Además, y de acuerdo con fuentes allegadas al caso, los asesinatos fueron inducidos por altos mandos de la Procuraduría General de la República (PGR), que supuestamente filtraron a Treviño Morales información proporcionada a esa dependencia por la DEA, la cual precisaba que los capos de Allende estaban traicionando al líder zeta.

Los sicarios encabezados por el lugarteniente tamaulipeco Comandante Flacaman levantaron a familiares de Moreno y Villanueva y a decenas de personas. Los llevaron a un rancho propiedad de la familia Garza Gaytán, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión, donde fueron ejecutados e incinerados. A diferencia de lo que supuestamente ocurrió en Cocula, Guerrero, con 43 normalistas, los sicarios estuvieron trabajando varios días para desaparecer los cadáveres, los cuales se metieron en barriles y fueron incinerados con diésel y aceites. En el rancho aún se pueden ver decenas de envases de combustibles comprados a distribuidores de Pemex.

Esos delitos fueron denunciados por los familiares de las víctimas y quedaron registrados en la denuncia penal CEIYCS/012/2011 de la Procuraduría de Justicia de Coahuila. Sin embargo, el entonces procurador Jesús Torres Charles se lavó las manos y, argumentando que eran “delitos de orden federal”, se limitó a mandar la denuncia a Patricia Bugarín Gutiérrez, titular de la ahora llamada Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Para conocer el contenido de ese documento, el diputado local del PAN Edmundo Gómez Garza solicitó una copia al procurador federal, Jesús Murillo Karam. La PGR respondió que entre sus archivos no existe ese papel.

“Se ha informado que en esta institución se recibió el expediente relativo a los sucesos trágicos ocurridos en el municipio de Allende (...). Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se solicitó la búsqueda de la información en la Unidad Especializada adscrita a esta Subsecretaría, misma que indicaron que no encontraron registro alguno de lo antes descrito”, respondió la PGR a la petición del diputado.

Gómez Garza también envió una misiva a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos preguntando por qué no investigaron los hechos. La respuesta del organismo que presidía Raúl Plascencia Villanueva fue: es un asunto de carácter local.

El exómbudsman incluso se negó a hablar sobre los crímenes cuando acudió a Saltillo para participar en un acto sobre desaparecidos. Fue hasta septiembre de 2014 que el entonces titular de la CNDH aseguró que ya estaban “investigando el caso de Allende”, es decir, más de tres años después de la tragedia.

## ““Los Zetas” organizan festejo del Día del Niño en Tamaulipas”

### REDACCIÓN

#### Proceso

24 abril 2014

Consultada 4 diciembre 2019

<https://www.proceso.com.mx/370459/los-zetas-organizan-festejo-del-dia-del-nino-en-tamaulipas>

CIUDAD VICTORIA, Tamps., (proceso.com.mx).- Como cada año, el grupo criminal “Los Zetas” convoca a festejar el Día del Niño en esta ciudad.

Mediante posters y volantes, el cártel convoca a los niños a festejar su día. En el mensaje se lee: “Invitamos a todos los niños de Victoria a la gran fiesta infantil del día 30 de abril en punto de las cinco de la tarde en la Disco Victoria Music Hall en honor a todos nuestros hijos”.

Agrega: “En la celebración el Día del Niño habrá muchos regalos y sorprendentes rifas en grande, presentación de payasos y Show de Muñequitas (las populares animadoras de la Televisión de Monterrey)”.

La fiesta infantil también incluirá juegos mecánicos que se instalarán en el estacionamiento del centro de espectáculos, ubicado en el importante cruce de Eje Vial con Avenida las Torres, de Ciudad Victoria.

“La entrada es totalmente gratis”, concluye el anuncio firmado por la Asociación de Jóvenes Victorenses, un membrete que “Los Zetas” han usado en otras ocasiones para organizar bailes y su tradicional fiesta infantil.

El centro de espectáculos Victoria Music Hall pertenece a una familia vinculada con el empresario Seyed Mohammad Farough Fatemi Corcuera, quien es investigado por la Seido, al ser considerado prestanombres del exgobernador Eugenio Hernández. El mandatario también es investigado por las autoridades federales por proteger a grupos del crimen organizado durante su administración.

El Cartel del Golfo (CDG) y “Los Zetas” organizan cada año una fiesta del Día del Niño desde la época de Oziel Cárdenas Guillen.

Después de que se separaron “Los Zetas” y el CDG, en marzo de 2010, Heriberto Lazcano, alias “Z14”, continuó la tradición y cada año organizaba una fiesta en Ciudad Victoria adonde llegaba al menos un tráiler cargado de juguetes.

Al final de esas fiestas se desplegaba una manta con una leyenda “Felicitando a los niños en su día de parte de Heriberto Lazcano”.

## **“Yasiel Puig, el beisbolista cubano que huyó con ayuda de Los Zetas”**

**Beatriz Pereyra**

**Proceso**

**4 mayo 2014**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/371404/yasiel-puig-el-beisbolista-cubano-que-huyo-con-ayuda-de-los-zetas>

El pelotero Yasiel Puig es toda una revelación en los Dodgers, pero eso no es lo más interesante de su vida: un boxeador declaró en tribunales que el pelotero huyó de su Cuba natal gracias a una banda vinculada a Los Zetas, que estuvo “secuestrado” en Isla Mujeres y que lo liberó un comando enviado por los cubanos de Miami. Todo indica además que funcionarios del Instituto Nacional de Migración aceptaron sobornos para entregarle documentos falsos.

MEXICO, D.F. (Proceso). - Una declaración jurada que el boxeador Yunior Despaigne hizo ante una Corte de Miami puso al descubierto que el pelotero estrella de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano Yasiel Puig, fue amenazado de muerte por un grupo de tratantes de personas relacionado con el cártel de Los Zetas. Los delincuentes lo mantuvieron retenido en Isla Mujeres, Cancún, después de que lo ayudaron a escapar de su país en abril de 2012.

El testimonio de Despaigne, de la misma nacionalidad que Puig, forma parte de una demanda que el 18 de julio de 2013 interpuso el cubano Miguel Ángel Corbacho Daudinot contra Yasiel Puig y su madre, Maritza Valdés González. Corbacho les reclama el pago de 12 millones de dólares porque ambos presuntamente rindieron declaraciones falsas ante el gobierno de Cuba, razón por la cual el mismo Corbacho fue condenado a siete años de prisión en aquel país.

Parte de la información contenida en el expediente 1:13-cv-22589-KMW fue utilizada por los reporteros Jesse Katz, de Los Angeles Magazine, y Scott Eden, de ESPN The Magazine, quienes el domingo 13 y el jueves 17, respectivamente, publicaron en internet la odisea que vivió Yasiel Puig antes de que, el 28 de junio de 2012, la directiva de los Dodgers anunciara que contrataba al pelotero por siete temporadas a cambio de 42 millones de dólares. Ese es el contrato más jugoso obtenido por un cubano en las Grandes Ligas.

En el reportaje *Escape de Cuba: El viaje nunca antes contado de Yasiel Puig a los Dodgers*, Los Angeles Magazine mencionó la existencia de cinco delincuentes que ayudaron a huir en una lancha al jugador. Se trata de cubanos-estadunidenses que presuntamente se dedican al tráfico de personas y trabajan con el cártel de Los Zetas.

En entrevista, Despaigne cuenta que, junto con Puig, la novia de éste y un santero estuvieron en cautiverio durante casi un mes en un motel de Isla Mujeres, esperando que un grupo de cubanos que reside en Miami –y que financió la salida de Cuba– pagara a los contrabandistas los 250 mil dólares que cobraron por ayudarlos a huir de aquel país.

El pago no llegaba porque el líder de los cubanos residentes en Miami, el exconvicto Raúl Pacheco, no tenía o no quería pagar. Ante esta situación, los contrabandistas aumentaron su tarifa entre 15 y 20 mil dólares por cada día que se demorara su pago. La tarifa aumentó hasta los 400 mil dólares.

“Si no recibían el dinero, estaban diciendo que en cualquier momento le darían un machetazo (a Puig), que le cortarían un brazo, un dedo, lo que fuera, y ya no volvería a jugar al beisbol para nadie”, publicó Los Angeles Magazine.

En la crónica de ESPN The Magazine, titulada *Nadie camina fuera de la isla*, se dio a conocer que Raúl Pacheco “echó mano de otras personas”, quienes mandaron un “comando” con la misión de rescatar a Puig y a sus compañeros de Isla Mujeres. El comando logró su cometido y una noche se llevaron a los cautivos hacia Cancún, en lancha, sin pagar a los contrabandistas. Después, los cuatro cubanos fueron trasladados en avión a la Ciudad de México.

ESPN The Magazine relató que un hombre, a quien identificó con el alias de El Rubio, fue el responsable de orquestar el rescate de Puig, así como de pagar su traslado a la Ciudad de México y su estancia en un hotel del aeropuerto capitalino mientras gestionaba para el pelotero el permiso de

residencia permanente en Estados Unidos, requisito indispensable para que pudiera firmar un contrato con un equipo de Grandes Ligas.

En el reportaje se detalla que el abogado puertorriqueño Jaime Torres fue a Isla Mujeres a negociar la liberación de Puig, con quien pudo entrevistarse. En la plática que tuvieron acordaron que Torres se convirtiera en agente del pelotero. Un segundo encuentro tuvo lugar ya en la Ciudad de México. A esa reunión también asistieron Gilberto Suárez y Marcos González, dos de los cubanos avecindados en Miami que financiaron la salida del bateador. Tanto El Rubio como Torres se encargaron de contactar a los buscadores de talento de los Dodgers: Mike Brito, Logan White y Paul Fryer, con quienes negociaron la contratación de Puig.

A continuación, se reproduce un extracto del reportaje:

“También se necesitaba dinero para otro gasto importante. Antes de que cualquier empresa estadounidense contrate a un cubano, una suboficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), debe dar su bendición. El proceso es bastante sencillo: el cubano debe ser un residente permanente de otro país y presentar la documentación a su posible empleador. Si el empleador aprueba el papeleo, el cubano es ‘desbloqueado’ por la OFAC, que a su vez aprueba la decisión del empleador.

“Para llegar a ser un residente permanente de México, de acuerdo con la ley mexicana, los solicitantes deben ser capaces de demostrar que han sido residentes temporales durante cuatro años (o dos años si está casado legalmente con un mexicano), que tienen conexiones familiares o aplicar por razones humanitarias. En cualquier caso, se trata de un proceso largo. De acuerdo con una fuente cercana al grupo de El Rubio, Puig llegó a México cerca del Memorial Day (28 de mayo de 2012). Menos de 15 días después, Puig se convirtió en un residente (de México), con todos sus documentos en orden para que las Grandes Ligas los revisaran. El soborno cuesta alrededor de 20 mil dólares.”

### **En Migración, extraña celeridad**

Proceso solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) un informe acerca de los trámites que realizó Yasiel Puig en 2012 para obtener la residencia permanente en México, cuando Salvador Beltrán del Río era el titular de esa dependencia.

La reportera pidió que el INM explicara cómo, en cuestión de días, el pelotero consiguió los documentos que presentó a los Dodgers para que lo contrataran. La vocera Aurora Vega dijo que el organismo no puede proporcionar información sobre el caso puesto que se trata de “datos personales”.

En diciembre de 2012, el diario Reforma publicó que el entonces director jurídico general del INM, José Antonio Musí, reconoció que la corrupción entre servidores públicos de esa dependencia –algunos vinculados con redes internacionales de delincuencia organizada– era uno de los principales problemas que enfrentaba y que, aquel año, 500 empleados fueron despedidos por no acreditar los exámenes de control y confianza.

“La gente que está involucrada en esto (lo hace) porque es la segunda actividad ilícita más lucrativa a nivel mundial después del narcotráfico; entonces, se están tocando intereses de bandas muy poderosas”,

afirmó Musi, quien añadió que la crisis por la que atraviesa el INM es consecuencia de las grandes cargas de trabajo y los bajos salarios.

El reportaje de ESPN The Magazine también consignó que El Rubio y Jaime Torres se reunieron en la Ciudad de México para que Puig se entrevistara con los tres cazatalentos de los Dodgers, quienes vieron el desempeño de Puig en varias prácticas de bateo que realizó “en el estadio de beisbol de la Ciudad de México”.

El presidente ejecutivo del club Diablos Rojos del México, Roberto Mansur, confirma a Proceso que Yasiel Puig realizó prácticas en el Foro Sol y que en todas ellas estuvieron los scouts (visores) del equipo ligamayorista.

“Así fue. Jaime Torres, que era su agente, me habló por teléfono para pedirme que si lo podían probar (a Yasiel) en el Foro Sol. Yo no vi ningún problema, es un favor que me pidieron. Fue por mayo o junio de 2012. Lo probaron dos días. Se traían un relajo porque Yasiel estaba en Cancún y estaban con que si venía o no venía a México. Fue un lío ese asunto. Esos días los Diablos jugaron en casa y practicó en los entrenamientos del equipo. (Yasiel) no traía ni uniforme. Ellos no traían ni pelotas ni bats ni nada, les prestamos todo. Ahí lo probaron los Dodgers y recuerdo que fue por esas fechas porque es cuando Diablos hace el showcase, y los scouts de Dodgers de ahí se fueron a Oaxaca a ver a unos de nuestros peloteros. Vino Mike Brito y el jefe de los scouts, Logan White, y otro. Eran tres”, rememora Mansur.

De acuerdo con la publicación de ESPN, El Rubio se aseguró de que Yasiel Puig llegara a Estados Unidos sin ningún problema. Como no tenía pasaporte cubano ni podía tratar de obtener una visa como residente mexicano “porque su residencia la obtuvo mediante el soborno” y en unos cuantos días, a final de cuentas decidieron trasladarlo por tierra desde la Ciudad de México hasta el puente internacional que se extiende entre Reynosa (México) e Hidalgo (Texas), donde con su identificación de ciudadano cubano Yasiel Puig solicitó asilo en la estación de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. “De esta manera, aparentemente, no se rompió ninguna ley estadounidense ni hubo ningún acto de contrabando”, refirió la publicación.

Los problemas de Yasiel Puig no terminaron con la firma de su contrato. De acuerdo con la declaración jurada del boxeador Yunion Despaigne, de la cual este semanario tiene copia, los contrabandistas que lo sacaron de Cuba —a quienes identificó como Tomasito (Tomás Vélez Valdivia), El Menor (Ricardo Vélez Valdivia), Leo (Yandrys León), El Chino (Jorge Guerra) y El Húngaro— trataron de cobrar el dinero que, alegan, aún les debe el pelotero cubano.

En el punto 49 de su declaración de 10 páginas, Despaigne relata que fue amenazado en Miami, donde reside: “Los contrabandistas de México que nos sacaron de Cuba estaban tratando de cobrar. Uno de los contrabandistas, Leo, envió a un hombre para que yo le hiciera llegar un mensaje a Puig. El hombre me empujó contra mi coche y me puso una pistola en el hígado y me dijo que debía decirle a Puig que si no les pagaba lo iban a matar”.

El pugilista cumplió con el encargo. “Puig le informó de esta situación a Gilberto Suárez, a quien oí decirle a Puig, por teléfono, que no se preocupara, que él ya había ‘neutralizado’ a Leo. Casi un mes más tarde Gilberto Suárez me preguntó si quería una prueba de que se hizo cargo de los problemas. Me dijo que buscara en internet el nombre Yandrys León para que viera lo que le sucedió. Cuando busqué en

internet había varios artículos de prensa que decían que Leo había sido ejecutado en Cancún”, se lee en el documento.

En esa misma declaración, Despiagne- narra que cuando llegó a Miami, procedente de México, estuvo viviendo con Alberto Fariñas, otro de los miembros del grupo que dio fondos a Yasiel Puig para sacarlo de Cuba y llevarlo a Estados Unidos. Después, cuando Fariñas fue arrestado por cometer un delito, Despiagne se mudó a la casa de Marcos González, donde vivió varios meses.

Durante ese tiempo escuchó las conversaciones que mantenían sobre Puig y pudo enterarse de que Marcos González gastó aproximadamente 500 mil dólares para llevar a Puig a los Estados Unidos, y que Puig le pagó 600 mil dólares en una sola transacción bancaria. También supo que Puig le entregó a Raúl Pacheco 300 mil dólares, y a Fariñas le dio entre 400 mil y 500 mil dólares. Y a todos ellos Puig aún les debe dinero, según el dicho del boxeador. De acuerdo con la declaración, Yasiel Puig le dio “un porcentaje” del contrato que firmó con los Dodgers a Gilberto Suárez.

### **“Confirman el abatimiento de “El Mellado”, fundador de “Los Zetas””**

**Redacción**

**Proceso**

**12 mayo 2014**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/372029/confirman-el-abatimiento-de-el-mellado-fundador-de-los-zetas>

MÉXICO, D.F., (apro). - El comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, confirmó este lunes que fuerzas federales dieron muerte a Galindo Mellado Cruz, El Mellado o Z-9, segundo al mando de la organización delictiva de Los Zetas, el pasado viernes 9 durante la serie de enfrentamientos registrados en Reynosa, Tamaulipas, que dejaron un saldo de cinco sicarios y un militar asesinados.

En rueda de prensa, el funcionario detalló que ese día efectivos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal montaron un operativo para detener al presunto narcotraficante en la colonia Las Fuentes de esta ciudad fronteriza y que al llegar al domicilio donde se encontraba su objetivo fueron atacados con granadas de fragmentación y disparos con arma de alto calibre lo que originó un primer enfrentamiento.

Posteriormente, refirió, arribaron sicarios armados con AK-47 y calibre .50 a bordo de varias camionetas en apoyo a los zetas.

De acuerdo con Alejandro Rubido al cesar el tiroteo los zetas huyeron, pero en el interior del inmueble dejaron el cadáver de una persona que, luego de los análisis de rigor, resultó ser Galindo Mellado Cruz, quien contaba con 13 averiguaciones previas por los presuntos delitos de homicidio, extorsión y tráfico de drogas y con una alerta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para impedir operaciones financieras en ese país.

Un día después de esos hechos, las fuerzas federales capturaron a Ricardo Flores López, segundo a bordo de Mellado Cruz y jefe de plaza del municipio de Miguel Alemán.

Mellado Cruz se había fugado de dos penales en Tamaulipas, donde fue encarcelado por los delitos de violación, robo a mano armado, lesiones, homicidio y delitos contra la salud.

## **“Detienen al Z-16, jefe de plaza de Los Zetas en Nuevo Laredo”**

### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**15 mayo 2014**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/372335/detienen-al-z-16-jefe-de-plaza-de-los-zetas-en-nuevo-laredo>

MONTERREY, N.L. (apro). - El jefe de plaza de Los Zetas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Fernando Martínez Magaña, Z-16, fue capturado en esta capital, en un operativo sin disparos.

Así lo informó el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Monte Alejandro Rubido García, quien detalló que el capo de 42 años de edad, arrestado el miércoles 14, es responsable de transportar droga, armas e inmigrantes ilegales por mar y tierra hacia Estados Unidos.

Su área de operación eran los municipios fronterizos de Tamaulipas al poniente, en la región que es conocida como Frontera Chica, dijo.

En conferencia de prensa, Rubido García mencionó que el Z-16 era uno de los 12 blancos principales dentro de la estrategia de seguridad que arrancó el pasado martes 13 en Reynosa.

El funcionario federal señaló que como parte de las acciones para debilitar al grupo delictivo también fue arrestado Ernesto Villegas, operador financiero de Martínez Magaña. Este último era buscado en Nuevo Laredo, pero alcanzó a evadirse y consiguió llegar a esta capital, donde finalmente fue capturado.

De acuerdo con el titular del CNS, el zeta sucedió a Raúl Lucio Hernández Lechuga, El Lucky o Z-16, luego de que éste fue detenido en Veracruz, el 12 de diciembre del 2011. Martínez ocupó el alias de su antecesor para provocar confusión sobre sus identidades, apuntó.

Durante su captura, se le aseguraron un vehículo, armamento de uso exclusivo del Ejército y equipo de comunicación.

Esta la segunda ocasión que el gobierno federal detiene a Fernando Martínez Magaña. La primera vez fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar) en 2011, tras un operativo realizado entre el 13 y 16 de junio de ese año en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Durante el operativo realizado por la Semar en ese año, se informó que además del Z-16 fueron capturados Josué Fernández López y Serafín Badillo Govea, acusados de los delitos de trata de personas, trasiego de armas y drogas, los mismos por los que hoy se dio a conocer la aprehensión del Z-16.

Un año después de la supuesta captura de Martínez Magaña, la Oficina de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó del desmantelamiento de una red de traficantes de indocumentados ligada al cártel de Los Zetas que operaba en la frontera entre Texas y México y que era encabezada precisamente por aquel.

La ICE señaló que el 18 de septiembre de 2012 sus agentes arrestaron a 30 personas sospechosas de trabajar para la banda, entre ellos los presuntos cabecillas Carlos Rocha Leos, La Chona, y Abril Gaitán, La Gorda.

El grupo de “coyotes” poseía casas de seguridad en varias comunidades del sur de Texas, incluyendo San Antonio y Austin, donde albergaban a los inmigrantes hasta que sus familiares pagaban por haber sido trasladados a Estados Unidos.

Pero los antecedentes criminales del Z-16 se remontan a 2003, cuando fuerzas federales arrestaron a 12 miembros de la banda de traficantes de indocumentados que comandaba Karla Patricia Chávez Joya, responsable de la muerte de 19 inmigrantes –14 de ellos mexicanos– en Victoria, Texas, el 13 de mayo del mismo año.

Entre la docena de detenidos en aquella ocasión se encontraba Nora Alicia Cruz Charles, principal responsable del grupo de indocumentados que perdieron la vida y vinculada directamente con Chávez Joya, porque era la encargada de recibir los pagos que hacían los familiares de los inmigrantes a través de la empresa Western Union, además de coordinar a los grupos para internarse a Estados Unidos a través del estado de Texas.

Cruz Charles estaba casada con Fernando Martínez Magaña, que ya desde entonces formaba parte de la banda de traficantes de personas de nacionalidad guatemalteca y hondureña denominada “Los Magaña”, en Nuevo Laredo.

## **“Los Zetas”, sumergidos en una guerra interna por el control de Ciudad Victoria y Nuevo Laredo”**

**Redacción**

**Proceso**

**20 mayo 2014**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/372703/los-zetas-sumergidos-en-una-guerra-interna-por-el-control-de-ciudad-victoria-y-nuevo-laredo>

CIUDAD VICTORIA, Tamps., (proceso.com.mx).- La captura de dos importantes capos del grupo criminal “Los Zetas” de Tamaulipas evidenció que la organización se dividió nuevamente y que actualmente está sumergida en una lucha por el poder en dos de sus principales plazas: Ciudad Victoria y Nuevo Laredo.

En días pasados fueron detenidos en la zona metropolitana de Monterrey el jefe regional de “Los Zetas” en Tamaulipas, Juan Fernando Álvarez Cortez “El Ferrari”, y Fernando Martínez Magaña “El Z16”, jefe

en Nuevo Laredo de los “Estacas”, como se conoce a los sicarios que se desplazan en camionetas que vigilan una casa de seguridad, un barrio o una zona.

### **“Demuelen 26 casas vandalizadas por “Los Zetas””**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**17 julio 2014**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/377426/demuelen-26-casas-vandalizadas-por-los-zetas>

ALLENDE, Coah., (proceso.com.mx).- Veintiséis casas de Piedras Negras vandalizadas por el grupo criminal “Los Zetas” están siendo demolidas y posteriormente serán reducidas a escombros unas 50 lujosas residencias del poblado vecino de Allende.

Hasta ahora ya fueron demolidas unas cinco residencias, las más grandes, de un padrón de 26 casas y departamentos, informó Alejandro Osorno, portavoz de la alcaldía de Piedras Negras.

El gobierno de Coahuila y las autoridades municipales acordaron tirar las viviendas debido a que fueron parcialmente destruidas por la organización criminal durante el primer trimestre de 2011.

En un principio el gobierno buscó a los dueños para acordar la demolición de los inmuebles, pero algunos no reconocieron su propiedad y otros argumentaron que las vendieron pero no habían registrado la transacción, explicó Osorno.

A partir de la segunda quincena de junio comenzaron los trabajos para sellar y derrumbar 26 residencias, casas y departamentos.

Las primeras residencias demolidas se ubican en las exclusivas colonias Las Fuentes y Roma. La casa habitación de Las Fuentes tenía un área superior a 4 mil metros cuadrados.

El portavoz de la alcaldía comentó que las viviendas que no presentan daños estructurales serán selladas con una barda perimetral.

Detalló que los predios se podrán utilizar como estacionamiento de particulares, ya que se ha buscado por todos los medios posibles a los propietarios para que cubran el gasto de los trabajos de demolición, así como de limpieza, aunado al adeudo del Impuesto Predial.

En el caso de Allende, el alcalde Luis Reynaldo Garza confirmó que serán más de 50 las lujosas residencias que serán derrumbadas y se prevé que los trabajos inicien a partir de la última semana del mes de julio.

Allende es un pequeño poblado de unos 22 mil habitantes ubicado 57 kilómetros al sur de la frontera con los Estados Unidos.

Mencionó que la destrucción de las casas fue ordenada por Protección Civil del estado, debido que representan un peligro.

Reynaldo Garza explicó que en total son 50 casas en la zona urbana y cuatro más ubicadas en ranchos que serán destruidas.

El alcalde comentó que esas viviendas representan un monumento al horror que vivió Allende en el primer trimestre del 2011.

### **La peor masacre**

En el pequeño poblado sucedió lo que ahora se considera la peor masacre del México contemporáneo, con alrededor de 400 víctimas.

Comenzó el 18 de marzo de ese año. La tarde de ese día arribaron a Allende unas 40 camionetas con sicarios que cerraron los accesos por carretera, mientras que el resto se dirigió a 10 residencias de las familias Moreno Villanueva y Garza Gaytán para llevarse a alrededor de ochenta personas, entre mujeres, ancianos y niños.

Héctor Moreno Villanueva y José Luis Garza Gaytán eran dos capos de “Los Zetas” que traicionaron al grupo y se quedaron con alrededor de cinco millones de dólares provenientes del tráfico de droga que realizaban por la frontera de Piedras Negras.

Héctor Moreno y José Luis Garza eran miembros de las familias ricas del pueblo que salieron de Allende para estudiar en prestigiadas escuelas privadas de la ciudad de Monterrey, pero a su regreso se dedicaron al narcotráfico.

Operaron con “Los Zetas” desde el año 2007, traficando 800 kilogramos de cocaína por mes a Estados Unidos a través de una de las empresas de transporte de carga propiedad de la familia Moreno Villanueva.

El trasiego de droga generaba una ganancia promedio de cinco millones de dólares mensuales que eran mandados a la ciudad de Nuevo Laredo al líder Zeta Miguel Ángel Treviño Morales, alias “Z40”.

Héctor Moreno también lavaba parte de ese dinero comprando caballos de carreras Cuarto de Milla para el Z-40 y anotaba las transacciones en un libro de contabilidad.

En febrero del 2011 Héctor Moreno y José Luis Garza traicionaron al líder, al informar a la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos del trasiego de droga y huyeron con un poco menos de 5 millones de dólares.

Miguel Ángel Treviño les advirtió que regresaran el dinero, y el libro de contabilidad, o de lo contrario matarían a todos sus familiares y amigos. Los capos ignoraron las amenazas y se entregaron a las autoridades de los Estados Unidos, donde residen bajo la categoría de testigos protegidos.

El “Z40” cumplió sus amenazas y durante más de un mes “Los Zetas” enviaron a sus sicarios a plagar a todas las habitantes de Allende que tuvieran los apellidos Garza Gaytán y Moreno Villanueva.

Además, los sicarios se llevaron a sus empleados domésticos y en una ocasión convocaron a todos los albañiles que construyeron las lujosas viviendas de esas familias, a quienes también desaparecieron.

Posteriormente, los sicarios regresaron y con trascabos y maquinaria pesada tiraron paredes, parte de los techos y derribaron puertas de 50 casas, para buscar el dinero robado y el libro de contabilidad.

Tras balacear y quemar parcialmente las viviendas, dejaron que los pobladores las saquearan; se llevaron todo lo que pudieron: muebles, puertas, ventanas e incluso las llaves y tuberías de los baños.

Héctor Moreno contó parte de lo anterior cuando fungió como testigo de la fiscalía en el juicio que se le siguió en Austin, Texas, a Héctor Treviño Morales, hermano mayor de “Z40”, por lavado de dinero.

Para desaparecer a los integrantes de las familias Moreno Villanueva, a los trabajadores y a un número no revelado de “Los Zetas” que trabajan para los capos, se utilizaron al menos tres “narco cocinas”.

Una se instaló en un rancho incautado a Luis Garza Gaytán, ubicado en las inmediaciones del kilómetro siete de la carretera Allende-Villa Unión. Ahí fueron llevadas las familias y trabajadores plagiados.

### **“Incluyen a magistrado vinculado a Los Zetas en comisión contra trata en Veracruz”**

**NOÉ ZAVALATA**

**Proceso**

**8 agosto 2014**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/379115/incluyen-a-magistrado-vinculado-a-los-zetas-en-comision-contra-trata-en-veracruz>

XALAPA, Ver. (apro).- El magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quien fue investigado por la Fiscalía de Veracruz por presuntos nexos con Los Zetas cuando fungió como subprocurador en Córdoba, fue incorporado a la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Sancionar la Trata de Personas en la entidad.

Al instalar el organismo, el gobernador Javier Duarte dijo que para que haya resultados tangibles será vital hacer una revisión de los llamados “giros negros”.

“Hay que revisar las licencias; mientras existan un mayor número de estos giros, aumenta el índice delictivo de este tema en particular. Sabemos que jóvenes que son sustraídos del seno familiar van a dar a este tipo de establecimientos, por eso tenemos que regularlos y ser más enérgicos”, apuntó.

El mandatario estatal sostuvo que así como la entidad ha logrado asestar los mayores golpes en materia de secuestro, la nueva Comisión deberá trabajar para erradicar la trata de personas de la mano de la Alerta Ámbar y la Fiscalía para la Búsqueda de Personas No Localizadas.

Acompañaron a Duarte a la instalación de la Comisión la presidenta del Congreso local y exreina del Carnaval de Veracruz, Anilu Ingram; el procurador general de Justicia, Luis Ángel Bravo; el secretario de Gobierno, Erick Lagos; la diputada federal Leticia López Landeros; la presidenta de la organización “Unidos contra la Trata de Personas”, Rosy Orozco, y la subsecretaria en materia de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón García.

En la ceremonia ninguno de los oradores hizo alusión a los antecedentes del nuevo integrante de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Atender y Sancionar la Trata de Personas, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Lezama Moo.

El nombre del funcionario del Poder Judicial local aparece en diversas ocasiones en la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz por el “fiscal investigador especializado” Pedro Alberto Huesca Barradas, actualmente desaparecido.

En dicha investigación se asienta la declaración ministerial de los supuestos zetas Christopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, quienes señalaron a 10 funcionarios de la PGJ como colaboradores a sueldo de la organización delictiva, entre ellos Lezama Moo y el subprocurador Jorge Yunis Manzanares.

En el expediente, cuyo contenido fue abordado por el semanario *Proceso* en su edición 1881, Fuentes Letelier, Trejo Cruz y Valdez Ramírez aseguran que Marco Antonio Lezama cobraba 80 mil pesos mensuales a Los Zetas, a cambio de “entregar” vehículos y tráileres, y “liberar” a integrantes de ese grupo criminal “sin ningún trámite” de por medio.

Como subprocurador de Justicia en la región Xalapa, Lezama Moo también se hizo famoso después de que el 19 de junio de 2013, en un evento del Poder Judicial, señaló que la mayoría de las personas “desaparecidas” y “levantadas” en Veracruz se iban con “la amante” o con “el amiguito”.

Esa declaración causó gran molestia entre los usuarios de las redes sociales y en el Colectivo por la Paz en Veracruz, entidad donde se tienen contabilizadas más de 600 desapariciones en lo que va del sexenio.

“Hay gente que denuncia, pero no dice que la señorita se fue con el novio; o que el esposo se fue con la otra novia; que la esposa se fue con el amiguito que tenía. Aunque, claro, también hay gente que se va por el mal camino. Se va a la delincuencia organizada, hay de todo, y a ese desaparecido también se le busca y se le da el mismo trato”, sostuvo el magistrado en aquella ocasión.

Entrevistada por separado, la presidenta de “Unidos contra la Trata de Personas”, Rosy Orozco, comentó que tratantes de blancas han señalado que los municipios de Acayucan, Veracruz, Xalapa, Misantla, Naolinco y Córdoba son tierra fértil para que se cometa ese delito.

El “enamoramamiento” de jóvenes foráneos que visitan el estado y que fingen tener deudas, así como las agencias falsas de edecanes, son los modus operandi que utilizan los tratantes de blancas en estados como Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Por su parte, la subsecretaria Lía Limón pidió continuar con la estricta “vigilancia” y “monitoreo” de los anuncios clasificados de índole sexual en los periódicos. Eso, apuntó, será vital para combatir los delitos de trata de personas y atender a las víctimas.

La funcionaria federal aseguró que el gobierno de Enrique Peña tiene como una de sus prioridades “coordinar” con cada una de las entidades federativas la atención, sanción y erradicación de la trata de personas.

## 2015

Jorge Carrasco Araizaga. “Pancho Colorado se dice víctima de la extorsión de los Zetas y de las maniobras de Yunes”. *Proceso* número 1992, 4 enero 2015. pp. 13-15.

<https://www.proceso.com.mx/392264/pancho-colorado-se-dice-victima-de-la-extorsion-de-los-zetas-y-de-las-maniobras-de-yunes-2>

### **“Pancho Colorado se dice víctima de la extorsión de los Zetas y de las maniobras de Yunes”**

Desde la prisión texana de Bastrop, el veracruzano Pancho Colorado ofrece detalles sobre los juicios que enfrenta en Estados Unidos, uno por supuesto lavado de dinero para Los Zetas y otro como presunto autor intelectual de un intento de soborno al juez que llevó su caso. En su versión, es víctima de una extorsión de Los Zetas y de maniobras sucias del excandidato del PAN a gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.

MÉXICO, D.F. (Proceso). - Apenas iniciado 2015, el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa va contra sus acusadores en México, pero también en Estados Unidos, donde fue condenado a 20 años de prisión bajo el cargo de participar en un esquema de lavado de dinero para Los Zetas.

Colorado busca acreditar que durante más de cuatro años fue extorsionado por ese grupo delictivo y el gobierno estadounidense organizó una treta policial para acusar a su hijo y a su socio de conspiración para sobornar al juez instructor de su caso.

La acusación se basó en que el empresario compró caballos cuarto de milla, entregados a Los Zetas en un rancho en Oklahoma. Por lo pronto, de acuerdo con su defensa, el gobierno ha reconocido que el dinero de la compra fue legal y no producto del narcotráfico.

“Tenían un caso muy débil en mi contra, construido con acusaciones fabricadas en México por Miguel Ángel Yunes Linares. Para mantenerme en prisión me acusaron de haber planeado un soborno en el que involucraron y encarcelaron a mi hijo y al contador de mi representada, ADT Petroservicios”, dice Francisco Colorado en entrevista con Proceso desde la cárcel de Bastrop, Texas.

Oriundo del norte de Veracruz, Colorado tiene 54 años e hizo fortuna como contratista de Pemex desde hace tres décadas. Dice estar dispuesto a someterse a juicio en Estados Unidos para demostrar que el Departamento de Justicia de ese país manipuló al juez que lo condenó, en septiembre de 2013, a 240 meses de cárcel por lavado de dinero.

De hecho son dos los casos judiciales: el primero es la apelación contra la sentencia por lavado de dinero, que se instruye en el distrito judicial de Nueva Orleans, correspondiente a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para el sureste de Estados Unidos.

El segundo, el supuesto intento de soborno al juez federal Sam Sparks, de Austin, Texas, del mismo circuito judicial. En este caso, decidió retirar su acuerdo de culpabilidad. A pesar de la sentencia y de la condena mediática en México y Estados Unidos, ha decidido desacreditar las acusaciones penales ante la propia justicia estadounidense.

Señala como responsables de su condena a Yunes Linares y al fiscal estadounidense Douglas W. Gardner, a quien acusa de dejarse llevar por el excandidato del PAN al gobierno de Veracruz, ocultar pruebas, testigos y actuar con prejuicio racista al urdir un plan para imputarlo como corrupto, “porque así son los mexicanos”.

El próximo martes 6 se realizará en Nueva Orleans la audiencia en la cual podría resolverse la apelación contra su larga condena. Su argumento central es que el fiscal estadounidense no pudo comprobar que el dinero para la compra de los caballos de carreras fuera producto del narcotráfico. Provino de ADT Petroservicios, insiste.

En su apelación, Colorado admite que entre 2008 y 2012 pagó 10 millones de dólares en subastas de caballos ligeros en Estados Unidos y éstos en parte eran para Los Zetas, pero asegura haberlo hecho debido a una extorsión.

La apelación puede confirmar la condena, ante lo cual iniciaría un juicio de amparo, admite, pero “que me ratifiquen la sentencia es algo que veo con pocas probabilidades”. Más bien piensa que le pueden dar tiempo servido, es decir, que su condena sea por el tiempo ya cumplido en prisión.

Puede ser también que el Departamento de Justicia estadounidense se desista del caso con el argumento que él resume así: “No hay materia de juicio en mi contra porque nunca he sido parte de una estructura de delincuencia organizada”.

Un tercer escenario es que la autoridad determine un nuevo juicio, con lo cual afirma “no tener problema; al contrario... Para mí sería fabuloso porque tendría la oportunidad de demostrar mi inocencia, lo cual no es mi obligación porque ellos tienen que demostrar mi culpabilidad.

“También demostraría muchas incongruencias y actos criminales que llevó a cabo el fiscal, como ocultar información, no presentar algunos testigos o anunciar al testigo protegido conocido como El Pitufito, a pesar de que en México ya habían echado abajo las investigaciones en las que él aparecía como acusador. Además, no tiene ninguna fotografía o grabación mía que me implique con ese grupo delictivo.”

Asegura que el caso en su contra “no tiene sustento”. Si le dan tiempo servido, “el gobierno de Estados Unidos se lavaría las manos, pero quedaría en entredicho mi nombre y el de mi empresa”.

### **“Se equivocó Yunes”**

Aun cuando Colorado obtuviera su libertad al no demostrarse que participó en una red de lavado de dinero, enfrenta la acusación de intento de soborno del juez Sparks. Inicialmente se declaró culpable para liberar de ese cargo a su hijo, Francisco Colorado Cebado, y al contador de ADT Petroservicios, Ramón Segura. No obstante, ellos estuvieron presos un año. Ahora decidió retirar su declaración de culpabilidad.

Ese movimiento molestó al gobierno estadounidense porque se debe instruir un juicio, dice, “pero no vamos a llegar a juicio porque el gobierno sabe que todo es inventado, y tengo las pruebas y los testigos”.

Está previsto desahogar ese caso en mayo o junio. La justicia estadounidense anunció que pedirá al gobierno mexicano información para sustentar los cargos contra Colorado.

Contador público, maestro en finanzas y diplomado en alta administración por el Tecnológico de Monterrey, el entrevistado dice que el fiscal Gardner construyó esa acusación para presionarlo y forzarlo

a negociar, a fin de que él se desistiera de la apelación y los juicios iniciados para recuperar dos aviones y 25 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos aseguró en su territorio. Las aeronaves King Air 200, modelo 2006, y Hawker 800, de 2008, estaban en Houston y su precio de mercado es superior a 4 millones de dólares.

Según Colorado, al señalarlo como autor intelectual del soborno Gardner le dijo: “Si te desistes, tu hijo y tu amigo salen”.

En junio de 2012, cuando Estados Unidos anunció que se había detenido en Oklahoma a José Treviño Morales, del clan familiar que entonces controlaba Los Zetas, el nombre de Francisco Colorado Cessa ya estaba incluido en la causa penal contra varios miembros de la organización delictiva.

El Departamento de Justicia acusó a Treviño y a su hermano Miguel Ángel, El Z-40, de haber creado la Tremor Enterprises para lavar dinero del cártel por medio de las carreras de caballos. En ese esquema incluyó a Colorado Cessa como proveedor de ejemplares cuarto de milla. Un año después de la operación policial en Oklahoma, donde fueron detenidos otros familiares del clan, en julio de 2013 fue aprehendido en México El Z-40, número dos de la organización delictiva.

Las autoridades estadounidenses ya habían rastreado el nombre de Francisco Colorado Cessa cuando, en marzo de 2012, la Policía Federal se enfrentó a un grupo de zetas sobre la carretera Juana Moza, en el límite de Tamaulipas y Veracruz. En la persecución, el grupo se metió al rancho Flor de María, propiedad de Colorado.

En ese enfrentamiento murió Enrique Delgado Fraire, a quien el gobierno federal presentó como Mando Quique, supuesto jefe de Los Zetas en el sur de Tamaulipas y acusado de organizar la fuga de 53 miembros de ese cártel en un penal de Zacatecas en 2009.

Colorado da su versión: “Hubo una persecución que venía desde (el municipio de) Álamo (al norte de Veracruz). Las fuerzas federales perseguían a una serie de individuos de la delincuencia organizada. Mi rancho está a la orilla de la autopista. Ellos pusieron un retén o salieron al encuentro. Muy cerca hay una brecha. Al verse acorralados se meten por ahí, tumban el portón de fierro y ahí mismo hay un enfrentamiento y hay muerte.

“Yo me encontraba en la ciudad de Houston, Texas, porque ahí viven mi esposa y mi hijo menor, José Antonio, quienes salieron del país por la inseguridad en la zona. Era el cumpleaños de mi hijo y me había trasladado para estar con él. Ese hecho fue reconocido por las autoridades en México, porque nunca he tenido ese tipo de problemas en mi país.”

—¿Ni en el caso de la balacera en el rancho Villarín, en 2007, durante una carrera ilegal de cuartos de milla?

—Yo en Villarín ni estuve, hombre. Es una mentira más. Ahí fue donde Miguel Ángel Yunes empezó a querer involucrarme con la delincuencia organizada. Ni siquiera fui citado a declarar porque las averiguaciones previas demostraron que yo no había estado en ese lugar. Una vez más se equivocó Yunes.

—¿Por qué dice que Yunes está detrás de las acusaciones en su contra?

–Porque durante años se ha dedicado a denostar mi figura, mi nombre y a mi representada (la empresa ADT Petroservicios). Todo porque no lo he querido apoyar en ninguna de las candidaturas que ha buscado para ser gobernador de Veracruz.

Asegura que Yunes se ha dedicado a filtrar información supuestamente de inteligencia policial:

“Él mismo declaró en una entrevista que mandaba documentos a Estados Unidos. Lo hizo aprovechando las relaciones que hizo cuando era subsecretario de Seguridad Pública. Pero nunca ha podido demostrar, ni lo hará porque jamás he tenido ningún nexo con la delincuencia organizada. En México presentó una denuncia anónima cuando el enfrentamiento en Flor de María.”

### **“Quieren mis cuentas, mis aviones”**

Cuando fue implicado por el Departamento de Justicia en el esquema de lavado de Los Zetas y se informó que el FBI iba tras él, explica, decidió presentarse voluntariamente, el 12 de junio de 2012, en la oficina de los marshalls en Houston: “Les dije: Soy Pancho Colorado y dicen que me andan buscando. Vengo a ver qué está pasando, porque yo no soy ningún delincuente”.

Tras la sorpresa de los oficiales, refiere, fue detenido y presentado ante la justicia estadounidense, ante la cual admitió haber comprado caballos para Los Zetas: “Compré 10 millones de dólares de caballos durante más de cuatro años. Lo hice con dinero lícito de mis cuentas, cuentas que ellos no rastrearon, sino que yo les dije que tengo en Estados Unidos porque es dinero lícito, producto de 35 años de trabajo, como pago de Pemex a mis empresas”.

Dice que desde hace años compraba caballos en Estados Unidos porque toda la vida los ha tenido: “Los compraba para mí, pero Carlos Nayén (quien tiempo atrás entrenaba a sus animales) un día me dijo: ‘Oye, estos caballos los quieren Los Zetas; si no, que te atengas a las consecuencias’.”

En octubre de 2011, afirma, decidió sacar a su familia de México, ya que una madrugada su casa fue baleada por querer zafarse de esa exigencia. “Tenemos el acta donde hicimos la denuncia”, dice, y recuerda que el empresario Alejandro Barradas, también aficionado a las carreras de caballos, fue secuestrado por el grupo delictivo para obligarlo a comprarles ejemplares finos, “y como no lo pudo hacer, lo mataron”.

Sobre las operaciones financieras, explica, nunca les dio dinero directamente a Los Zetas: “Lo que querían era que pagara una serie de caballos que yo no había encargado, que no estaban a mi nombre y tenía que pagarlos en las subastas públicas, para lo cual tenía un tiempo predeterminado. Yo nunca entregué caballos, los pagaba y ellos los recogían en las subastas. Nunca tuve ninguna interrelación personal con nadie de ellos”.

Añade: “Se supone que los caballos eran para mí. Pero cayeron en manos del grupo delictivo 121 caballos. Yo me quedé con unos 30, además del criadero que tengo, porque me dedico a los caballos y al ganado desde hace 25 años”.

El dinero salía de su cuenta de cheques en Miami. “Pagaba los caballos que yo había escogido y la cantidad que me decían que tenía que pagar, por la cual habían pujado otros compradores. De ahí, los dueños de los caballos los entregaban a la persona que les indicaba Carlos Nayén”.

Nayén, quien después de trabajar para Colorado se fue a Estados Unidos, era quien mandaba a hacer las cosas. “No sé si estaba obligado y por qué lo desaparecieron del sistema carcelario estadounidense. No se presentó a las audiencias. Se volvió testigo protegido. ¿Por qué no lo presentan, si él nunca ha declarado nada contra mí? Él ha declarado la verdad, que yo no tuve nada que ver, que fui obligado a hacer las cosas”.

Asegura no haber denunciado la extorsión por temor. Como empresario en el norte de Veracruz, sobre todo en Poza Rica y Tuxpan, cerca de la frontera con Tamaulipas, uno de los principales dominios de Los Zetas, Colorado señala que la presencia de los grupos delictivos se empezó a sentir en la zona en 2005:

“Hizo estragos. La población, empezando por los empresarios, comenzó a sufrir robos y secuestros, sin que nadie les hiciera frente a los delincuentes. Mucha gente emigró a San Antonio, Texas, principalmente. Amigos de mi infancia fueron asesinados. Yo tuve que contratar seguridad para mi familia.”

El panorama no ha cambiado. Su hermano Sergio, asegura, fue secuestrado hace 10 meses en Tampico, cuando iba a finiquitar una obra. “Pagamos el rescate y el asunto sigue pendiente –narra–; nos dicen que no digamos nada, que la policía así lo dice, pero yo no veo resultados. Sin embargo todo el mundo sabe que mi hermano está secuestrado, y no por ajuste de cuentas, como se ha publicado con el patrocinio de Yunes”.

–¿La transferencia de recursos a Los Zetas lo tiene encarcelado?

–No, lo que me tiene encarcelado es la duda de las autoridades estadounidenses. Yo lo que quiero es el mismo trato que los demás. (El empresario) Alfonso del Rayo fue obligado a comprar caballos. Le hablaron y le dijeron que explicara la situación y él dijo lo que había pasado. Le dijeron: está bien, tienes que declarar pero tú no tienes ningún problema. No fue de su interés porque no tiene cuentas en Estados Unidos. En mi caso, tienen el interés de quedarse con el dinero que tengo en mis cuentas: 25 millones de dólares, más los dos aviones.

Las autoridades de ese país estiman en 60 millones de dólares la operación de lavado de dinero por parte de todos los implicados en la compra de los caballos.

“Desde que llegué me entregué. Hubo un trato muy duro hacia mí. El fiscal pensó que tenía un gran caso, pero le han rascado y no ha salido nada. Me acusan de conspiración, en la que ha salido el nombre de Fidel Herrera, la fijación de Yunes.

“Si a eso le añadimos una dosis de racismo de parte del fiscal, la cosa está de la chingada. Gardner ha declarado que no le extrañaba el supuesto intento de soborno, porque ‘así son los mexicanos; quieren corromper a los jueces, es un asunto cultural’”, como les ha dicho el fiscal a los defensores de Colorado.

Finalmente aclara: “Yo no quiero que me perdonen nada porque no he hecho nada. Quiero que se investigue y, si soy un criminal y un monstruo, no que me encarcelen, que me fusilen. Yo respondo por mis palabras y mis actos, que han sido buenos y malos, pero nunca criminales”.

Juan Alberto Cedillo. “Tamaulipas, bajo control del narco”. *Proceso* número 1999, 22 febrero 2015. pp. 16-17. <https://www.proceso.com.mx/396538/tamaulipas-bajo-control-del-narco>

### **“Tamaulipas, bajo control del narco”**

Investigadores y organizaciones ciudadanas del estado de Tamaulipas se quejan de las autoridades federales y estatales por la falta de una política de seguridad efectiva para frenar la violencia delincriminal en las ciudades fronterizas. Los grupos criminales han pasado de la economía ilegal a la economía informal y, pese a la presencia masiva de corporaciones policiacas, del Ejército y la Marina, sicarios y halcones ejercen un sigiloso o sanguinariamente ruidoso control sobre las actividades clave del estado.

MATAMOROS, TAMPS. - El domingo 15 de febrero, en la reunión número 30 del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT), el gobernador Egidio Torre Cantú expuso ante los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Policía Federal los resultados de las acciones emprendidas desde el domingo 1 en los municipios fronterizos de Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo y Reynosa.

De acuerdo con el GCT, “se contabilizaron 23 reportes de enfrentamientos entre grupos delictivos en pugna (Ciclones y Metros) y en 18 de esos casos intervinieron las fuerzas estatales y federales que integran el Grupo de Coordinación; (además), fueron abatidos 31 delincuentes”. Durante ese periodo, los grupos delictivos realizaron 30 bloqueos en las localidades fronterizas de Valle Hermoso, Matamoros y Reynosa.

No obstante, un oficial de la Octava Zona Militar confirma a Proceso que hubo alrededor de 70 bajas, aunque los testigos aseguran que muchos de los cuerpos no aparecieron porque sus compañeros se los llevaron para evitar que los identificaran.

Al día siguiente, por enésima ocasión, las autoridades federales anunciaron su decisión de “fortalecer las acciones” para combatir la endémica violencia que sufre la entidad y de inmediato enviaron más efectivos militares. Por la mañana se desplegaron por todas las calles de esta ciudad caravanas de vehículos artillados de la Marina, del Ejército y la Policía Federal para resguardar la reunión del GCT.

En una céntrica calle, cerca del hotel donde se alojan los federales, ocho efectivos se colocaron sus chalecos y cascos antibalas y abordaron una camioneta de doble cabina con la caja blindada y con una metralleta calibre 50 montada sobre la cabina y empezaron a supervisar la zona.

En un estacionamiento aledaño, dos hombres fingían revisar el motor de una camioneta Van mientras un halcón informaba por radio sobre el despliegue de las fuerzas federales. Desde horas antes, en los hoteles matamorenses de cuatro y cinco estrellas, otros halcones presionaron a los empleados para que les proporcionaran los registros de las personas que se hospedaron en ellos.

En otras ciudades, como la capital tamaulipeca, los registros de los visitantes llegan al grupo criminal que controla la plaza a través del mando de la Secretaría de Seguridad llamado C4 (Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo), según un oficial consultado por el corresponsal. Antes, dice, ese trabajo lo realizaban agentes de tránsito al servicio del Cártel del Golfo o Los Zetas, con retenes a las entradas de las ciudades.

En las carreteras de esta ciudad fronteriza, como en las de Reynosa y la Frontera Chica, adolescentes armados suelen frecuentar las tiendas de conveniencia de las cadenas Oxxo y Súper 7 que se ubican en las estaciones de gasolina; van provistos de aparatos de radio frecuencia y celulares para comunicar los movimientos a sus jefes. Les reportan la entrada de camionetas sospechosas y escogen a los propietarios de vehículos lujosos para secuestrarlos o despojarlos de su unidad.

Ahora, las carreteras tamaulipecas son consideradas las más peligrosas del país. En la mayoría de ellas el tránsito de vehículos se suspende a partir de las cinco de la tarde. En la carretera federal 101 que conecta a Matamoros, San Fernando y Ciudad Victoria las líneas de autobuses tienen suspendidas sus corridas nocturnas, e incluso el transporte de carga evitar circular por las noches.

Frente a esa situación, los paisanos que vienen de Estados Unidos a visitar a sus familiares optaron por organizar caravanas con decenas de vehículos y solicitar a la Policía Federal y del Ejército que las escolten cuando transiten por tierras tamaulipecas.

Aquí, en Matamoros, la actividad termina al caer la tarde. Los negocios cierran a partir de las 17:00 horas y la población se refugia en sus domicilios. La vida nocturna hace mucho que desapareció en la ciudad, en cuyo centro se observan decenas de negocios y casas abandonadas.

### **Monopolios criminales**

Integrantes del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, así como oficiales del Ejército reiteran que las medidas del gobierno federal que se vienen aplicando desde la administración de Felipe Calderón han demostrado su ineficacia, por lo que piden ir más a fondo, como en Coahuila y Nuevo León, donde se desmantelaron cientos de negocios ilegales como un primer paso para minar la penetración del crimen organizado en la sociedad.

En su dossier titulado Seguridad, justicia y paz, el Consejo Ciudadano sostiene que los jefes de los grupos criminales de Tamaulipas “quisieran tenerlo todo y tener a la gran mayoría de los integrantes de la población trabajando para ellos, en calidad de siervos o esclavos”.

El documento enumera la variedad de los negocios controlados por los cárteles que operan en el estado; son decenas de antros ubicados en las ciudades fronterizas, líneas de transporte público, yonques (deshuesaderos de autos), hoteles y tortillerías, entre otros. Además, controlan la venta de cerveza y whisky, ya que son dueños de cantinas y bares. En Matamoros también dirigen la venta de chatarra, metales y cartón.

También saquean a gran escala los oleoductos de Pemex por donde se importan las gasolinas de la vecina ciudad de Brownsville; incluso tienen un popular mercado rodante en el cual ofrecen todo tipo de mercancía de contrabando y robada al transporte de carga. Cientos de policías federales y militares que durante el día combaten al crimen organizado acuden por las noches a esos negocios a consumir las mercancías que expenden.

Según investigadores del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, los grupos criminales están monopolizando los negocios de la economía informal para sumarlos a sus lucrativos negocios de la economía ilegal: tráfico de armas, trata de personas y trasiego de drogas. Las cifras

conservadoras de los investigadores señalan que, al apropiarse de una parte de la economía informal, el crimen organizado sumó a sus filas al menos a 10% de la población.

Carlos Flores Pérez, integrante del CIESAS, cuestiona que se pretenda combatir a las nuevas mafias incrustadas en la sociedad con despliegues de fuerzas militares. Ese esquema se aplica desde el pasado sexenio de Felipe Calderón y hasta ahora no ha mostrado resultados. El investigador lamenta que el presidente Enrique Peña Nieto no cambie la estrategia por otra más eficaz para frenar la delincuencia organizada.

En su libro *Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas*, que presentó a principios de noviembre de 2014, Flores Pérez señala que los operativos policiacos y militares en las regiones conflictivas del país sólo han sido paliativos que funcionan por tiempo limitado.

Ello se debe, sobre todo, según el autor, a que el Estado no ha profundizado acciones para combatir a los cómplices de cuello blanco de los criminales, tanto dentro del gobierno como entre los empresarios.

Capos como Osiel Cárdenas Guillén, Miguel Ángel Treviño Morales, Jorge Eduardo Costilla, El Coss, y el mismo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, por ejemplo, mostraron que carecían de la estructura financiera para realizar grandes operaciones de lavado de dinero. Ahora, dice Flores, esta actividad la realizan los capos con cómplices que no han sido tocados.

Según el investigador del CIESAS, en el lucrativo negocio del saqueo de combustibles a Pemex participan trabajadores de la paraestatal, puesto que tienen los conocimientos y la capacitación técnica para robar a gran escala la gasolina y el diésel que luego se vende a empresas de Estados Unidos.

Y añade: las nuevas mafias que se han creado a partir de las pugnas en las cúpulas de los cárteles se han enquistado en la sociedad al diversificar sus negocios. Por lo tanto, los despliegues militares han resultado ineficaces para combatir a esos grupos.

Los integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal demandan a las autoridades “poner fin al saqueo de Pemex mediante una real investigación de los colaboradores de los grupos criminales dentro de la empresa”.

### **Negligencia**

Para el oficial de la Octava Zona Militar consultado por Proceso Jalisco, el gobierno de Tamaulipas se ha negado a profundizar acciones contra el Cártel del Golfo y Los Zetas, debido a la complicidad de altos funcionarios con esos grupos.

Durante 2009, cuenta, fueron degollados nueve soldados en distintos bares y cantinas de la zona metropolitana de Monterrey que pertenecían al crimen organizado. Sus ejecutores los abandonaron en otros lugares para evitar que los relacionaran con los delincuentes. La comandancia de la Séptima Zona Militar mantuvo en secreto esos crímenes “para no desmoralizar a la tropa”.

Sin embargo, los mandos militares forzaron al gobierno de Rodrigo Medina a cerrar más de 30 antros, bares, locales de table dances y prostíbulos ilegales sobre la “alegre” calle Villagrán, en el primer cuadro de Monterrey. El propio Cártel del Golfo contribuyó a cerrar antros: en junio de 2011 ocho sicarios

arribaron al bar Sabino Gordo y mataron a 21 personas, entre clientes, empleados y los guardias que cuidaban la entrada.

Semanas después, el Ejército realizó un amplio operativo en la calle Reforma del centro de la ciudad. El 19 de julio de 2011, por ejemplo, alrededor de 600 efectivos de la Sedena y la Marina, así como elementos de la Policía Federal y estatal, cerraron ocho cuadras para destruir 600 puestos fijos y semifijos donde Los Zetas distribuían artículos pirata y de contrabando.

En Coahuila, el gobierno de Rubén Moreira realizó varios operativos para clausurar y asegurar decenas de negocios relacionados con el crimen organizado. En Torreón y municipios de La Laguna se cerraron al menos 20 hoteles, 30 negocios de yonques, 19 centros de rehabilitación ilegales, así como decenas de bares y casinos. En Saltillo y otras ciudades del estado se instrumentaron medidas similares.

Pero en Tamaulipas las cosas son diferentes. Pese a la violencia creciente, las autoridades estatal y federal se niegan a emprender acciones radicales para frenar a los grupos criminales y garantizar la seguridad a la población. Aquí, según los académicos consultados y los integrantes del Consejo Ciudadano, el gobierno federal permite que las bandas continúen operando desde las prisiones estatales, pues se niegan a trasladarlas a penales federales de alta seguridad.

J. Jesús Esquivel. ““El Kelín”, relevo de unos zetas venidos a menos”. *Proceso* número 2001, 8 marzo 2015. pp. 12-17. <https://www.proceso.com.mx/397804/397804-el-kelin-relevo-de-unos-zetas-venidos-a-menos>

### ““El Kelín”, relevo de unos zetas venidos a menos”

Tras la reciente captura del Z-42, el control de Los Zetas muy probablemente quede en manos de El Kelín, cuyo mayor mérito sería haber firmado la paz con su acérrimo rival: el Cártel del Golfo. Si bien los reacomodos de la banda criminal tienen nerviosas a las autoridades de los estados del noreste mexicano –temen un repunte de la violencia–, agencias estadounidenses afirman que la agrupación dirigida antes por Heriberto Lazcano ya no representa un peligro real. Está debilitada y dividida, afirman. Y toda la ventaja, como se ha vuelto costumbre, será para el Cártel de Sinaloa.

**WASHINGTON (Proceso).** - Tras la captura de Óscar Omar Treviño Morales, *El Z-42*, agencias de inteligencia de Estados Unidos consideran que Rogelio González Pizaña, *El Kelín* o *Z-2*, es el relevo natural en el liderazgo del cártel de Los Zetas, agrupación a la cual ven disminuida y sin posibilidades de volver a ser lo que era.

Sin embargo, las autoridades de Nuevo León y Coahuila temen que esta detención agudice las luchas internas del grupo criminal y la violencia repunte en dichas entidades.

Treviño Morales, de 38 años, fue arrestado el miércoles 4 cuando llegaba a su casa en el municipio de San Pedro Garza García, el de mayor ingreso per cápita de América Latina. Había adquirido su

residencia en ese lugar –presuntamente por más de un millón de dólares– hace un año, y desde hacía seis meses la resguardaban *halcones*, denunciaron vecinos.

“Los informes de inteligencia que tenemos sobre Los Zetas indican que sería *El Kelín* quien reemplace al Z-42 como líder de la agrupación”, comenta a Proceso un efectivo de una de las agencias de seguridad del gobierno estadounidense, quien tomó la llamada telefónica del corresponsal a condición del anonimato.

Y agrega: “Pero desde la caída de Heriberto Lazcano Lazcano, *El Lazca*, y la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, *El Z-40*, Los Zetas dejaron de ser un cártel con poder y control territorial. Omar Treviño Morales intentó recuperar lo perdido y no lo logró; por eso creemos que difícilmente podrá volver a ser la organización tan temida que fue antes”.

De acuerdo con un correo electrónico enviado al corresponsal por otro agente de inteligencia de Estados Unidos –quien también pidió omitir su nombre–, Los Zetas llevan mucho tiempo operando como una agrupación “satélite”, sin el dominio que poseían antaño.

Según los informes de inteligencia de las agencias estadounidenses, Los Zetas son ahora un “grupo criminal pequeño” que se dedica más a la extorsión, el secuestro y la eliminación por encargo de miembros de otras agrupaciones que trafican drogas al menudeo. “Dejaron de ser una amenaza para los intereses del tráfico de drogas de grupos como el Cártel de Sinaloa, por ejemplo”, enfatiza el mensaje electrónico enviado al corresponsal.

No obstante, agentes estadounidenses de inteligencia consultados por Proceso luego de la captura del Z-42 apuntan que Los Zetas, aunque ya no podrían ser considerados un cártel, siguen controlando algunos territorios de la frontera noreste de México gracias a que mantienen sus tácticas de amedrentar a la población.

“Siguen aterrorizando con la ejecución muy violenta de personas, decapitándolos, desmembrando cuerpos, quemándolos, ahorcándolos y colgándolos en lugares públicos. Esta táctica criminal da miedo y les implica ganancias para sacar beneficio de las extorsiones y de los secuestros que siguen utilizando como moneda de cambio”, subraya el mensaje electrónico enviado por el agente estadounidense. Los análisis de inteligencia de las dependencias estadounidenses indican que Los Zetas mantienen control territorial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en algunos puntos de Veracruz y Nuevo León.

### **Alerta**

Ahora las autoridades de Nuevo León y Coahuila están en alerta máxima por la posibilidad de que la captura del Z-42 –así como la del Comandante Varo, capo regional zeta en Ciudad Victoria, Tamaulipas– profundice las luchas internas del grupo criminal.

“El Grupo de Coordinación siempre está atento a cualquier reacción que pudiera haber de parte de la delincuencia; (...) estamos alertas, estamos atentos, no tenemos hasta este momento información que nos lleve a determinar si efectivamente están planeando hacer alguna consecuencia (sic) en relación a esta detención”, aseguró el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, tras la captura del líder de Los Zetas.

Treviño Morales tenía cerca de un año de viajar frecuentemente a la zona metropolitana de Monterrey y alrededor de seis meses de radicar en San Pedro, con la finalidad de “retomar” Nuevo León, comenta a Proceso un oficial de las Fuerzas Especiales de la Séptima Zona Militar, quien solicita el anonimato.

El Z-42 se movía continuamente entre Nuevo Laredo, Piedras Negras y Monterrey. Su último refugio conocido en Coahuila es un rancho a pocos kilómetros de Piedras Negras. Desde ahí se operó la masacre de 2011 en Piedras Negras, Nava, Allende, Zaragoza, Morelos y otros municipios de la región de Cinco Manantiales, donde desaparecieron más de 300 personas, crímenes que Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, olvidó mencionar al hacer el recuento de delitos de Treviño Morales.

Lo que sí especificó Rubido es que desde la detención de Omar Treviño Morales, su hermano Miguel Ángel no pudo imponer su liderazgo debido a su “carácter extremadamente violento”. Los mandos regionales no lo aceptaron, precisó. Los Zetas operan como una federación de grupos que se disputan la dirección.

### **“Vieja escuela”**

Hay cuatro facciones en pugna: la de Zacatecas; la de la región centro de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, encabezada hasta su aprehensión por Enrique Puga Cortez; el grupo del Kelín, con influencia en Miguel Alemán y la Frontera Chica –y el cual presuntamente se alió con una rama del CDG–, y por último la facción de Nuevo Laredo, que encabezaba El Z-42, con influencia en Veracruz y otros estados del sur, señala la fuente de la Séptima Zona Militar.

La lucha de facciones, añade, ha provocado que los capos locales se denuncien entre ellos. Incluso la detención de varios líderes de Tamaulipas en meses recientes se debió a filtraciones de las cúpulas rivales.

Esas divisiones contribuyeron al debilitamiento del otrora poderoso grupo Los Zetas. Como consecuencia, muchas células ahora actúan “por la libre”. En ese contexto, El Kelín, al salir de prisión en agosto de 2014, intentó retomar la dirección. En noviembre del mismo año emitió una proclama para exigir que Los Zetas regresen a la “vieja escuela”.

El “comunicado” que circuló en redes sociales decía: “El Cártel del Golfo y Los Zetas ya no estamos peleando entre nosotros mismos, porque estamos más unidos que nunca queremos paz para Tamaulipas”. Lo firmaban presuntamente El Comandante R-1, de la facción de Los Rojos del CDG y El Comandante Kelín, de Zetas Unidos.

Los miembros de la “vieja escuela” pretenden que la organización vuelva a su actividad original, el narcotráfico; que no ataquen a la población y se respeten antiguos códigos, como el de no tocar a las familias de sus enemigos. La fuente militar destaca que después de cuatro años de una guerra inútil, Los Zetas están cansados. El Kelín se perfila como el más probable sucesor del Z-42 por haber firmado la paz con una división del CDG. Sin embargo, otros delincuentes aspiran a controlar a Los Zetas: Sergio Ricardo Basurto Peña, El Grande; Maxiley Barahona Nadales, El Contador, y Román Ricardo Palomo Rincones, El Coyote.

### **Violento y pragmático**

Respecto al Kelín, el agente estadounidense consultado telefónicamente por el corresponsal explica que se trata de un personaje que conoce bien el modus operandi de Los Zetas. “Estaba preso en México pero quedó en libertad en agosto del año pasado. Es uno de los pocos fundadores originales que quedan de esta agrupación”.

González Pizaña tiene un perfil muy similar al del Z-42, aunque según las agencias de seguridad estadounidenses es más pragmático, sin dejar de ser un criminal extremadamente violento.

El Kelín se inició en el negocio del tráfico de drogas bajo el auspicio y respaldo de Osiel Cárdenas Guillén, en el Cártel del Golfo, del cual fue jefe de plaza. Su cercanía con él lo ayudó a colocarse como uno de los líderes y, por ende, eventualmente se asoció con El Lazca y El Z-40 para crear Los Zetas.

Al lado de criminales de la talla de Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, capturado en marzo de 2009, y de Mauricio Guízar Cárdenas, El Amarillo, arrestado en julio de 2012, El Kelín, detenido en octubre de 2004, fue artífice de muchos de los grandes envíos de droga a Estados Unidos y estuvo implicado en varios enfrentamientos con grupos rivales, sobre todo con el Cártel de Sinaloa, por lo cual se ganó la confianza de Cárdenas Guillén y El Lazca.

“Es un criminal muy peligroso y con amplio conocimiento sobre tráfico de drogas. Aunque quiera, El Kelín difícilmente podrá restablecer el poder y control que ejercían Los Zetas hasta hace un par de años. La organización está muy debilitada y parece imposible que su principal enemigo, el Cártel de Sinaloa, permita que recupere las plazas que tenía hasta antes de la caída del Lazca, El Z-40 y ahora El Z-42”, añade el agente estadounidense.

### **La plaza de Monterrey**

Las divisiones y las capturas después del atentado al Casino Royale (agosto de 2011), llevaron a Los Zetas a perder su plaza más rentable: Monterrey.

Consultada por este semanario, la fuente militar cuenta que hace dos meses comenzaron a llegar a la capital nuevoleonense decenas de zetas de Tamaulipas para recuperar el terreno perdido ante el CDG. “Su llegada coincidió con la nominación de (la priista) Ivonne Álvarez a la gubernatura de Nuevo León”, apunta.

Como consecuencia, volvió a haber ataques a bares, entre otros al RE, de San Nicolás, en diciembre pasado, que dejó tres muertos, además de ejecuciones múltiples en Escobedo y personas decapitadas abandonadas en la Arena Monterrey durante el concierto de El Komander, después de meses de no haber padecido situaciones como éstas.

Lo que no se ha reducido, pero que las autoridades ocultan, es el índice de secuestros y la desaparición de criminales rivales, los cuales son cremados, diluidos en ácido o enterrados en fosas fuera de los reflectores.

Además del repunte de la violencia, a las autoridades estatales y a los mandos del PRI les preocupa que la detención del Z-42 saque a la luz las relaciones establecidas entre Los Zetas y autoridades municipales y estatales.

Detalles de los acuerdos de Los Zetas con policías y funcionarios de Guadalupe, San Nicolás, Monterrey, Apodaca, Santa Catarina y otros municipios metropolitanos fueron revelados al Departamento de Estado por los cónsules Luis G. Moreno y Bruce Williamson y ahora se pueden consultar en el portal WikiLeaks.

### **Temor en Coahuila**

En Coahuila también hay preocupación por la detención del Z-42, ya que sus principales fachadas para lavar dinero –forjadas con empresarios locales y exfuncionarios estatales y municipales– están en Piedras Negras y la región de Cinco Manantiales.

“Ahora hay mucha preocupación entre exfuncionarios estatales y municipales de Piedras Negras por la detención del Z-42. Aquí se hicieron muchos negocios con él”, dice a Proceso una fuente relacionada con la Iglesia católica local.

Subraya que la preocupación se debe a que Treviño Morales tiene “orden de extradición vigente” y podría ser entregado a la justicia de Estados Unidos. “Allá no podrá ocultar sus negocios con la delincuencia organizada”.

Luciano Campos Garza. “La tríada de la brutalidad”. *Proceso* número 2001, 8 marzo 2015. pp. 14-15. <https://www.proceso.com.mx/398027/los-zetas-la-triada-de-la-brutalidad>

### **“La tríada de la brutalidad”**

MONTERREY, N.L. (Proceso). - Óscar Omar Treviño Morales, conocido como El Z-42, integró junto con su hermano Miguel Ángel, El Z-40, y Heriberto Lazcano, El Lazca, una tríada que asoló el norte del país con matanzas y violencia brutal, lo que obligó a la sociedad a enfrentar un nuevo grado de horror.

El Z-42 fue detenido el miércoles 4 por la mañana, cuando llegaba a su residencia marcada con el número 514 de la calle Vía Collatina, en la exclusiva colonia Fuentes del Valle –ubicada en el municipio de San Pedro, conurbado a Monterrey.

Ese mismo día, Monte Alejandro Rubido García, vocero de seguridad del gobierno federal, presentó al capo en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México. Ahí dijo que las autoridades le seguían la huella desde febrero, cuando fue detectado en casas de seguridad de la zona debido a las visitas que recibía de Carlos Arturo Jiménez, contador del cártel.

Cinco cómplices fueron apresados en otro operativo paralelo efectuado en la misma localidad. Optimista, Rubido García declaró que El Z-42 aún no tiene sucesor y que la organización tamaulipeca podría desaparecer, si bien es probable que se desate un “pico breve” de violencia al interior del grupo.

### **Masacres, mutilaciones, atentados**

Desde que rompieron con el Cártel del Golfo y se independizaron en 2010, Los Zetas desataron la peor crueldad que se hubiera visto en el narcotráfico mexicano.

Los jefes históricos de ese cártel fueron El Lazca y El Z-40. Lazcano supuestamente fue abatido el 7 de diciembre de 2012 y Miguel Ángel Treviño fue capturado el 15 de julio de 2013 en Anáhuac (norte de Nuevo León). Su hermano José Treviño fue detenido y sentenciado en Texas a 20 años de cárcel por lavado de dinero.

Después de eso, Óscar Omar Treviño asumió la dirigencia de la banda. Pero su imperio fue tan violento que, de acuerdo con el gobierno federal, no pudo conciliar sus intereses con los liderazgos locales, lo que generó una prolongada pugna que debilitó la agrupación y generó numerosas confrontaciones públicas, principalmente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Así pues, en el mundillo criminal Omar era bien conocido, pero no ocurría lo mismo entre la opinión pública, que lo ve como una figura emergente de la delincuencia.

El comisionado nacional de seguridad pública explicó que El Z-42 fue relevante desde el comienzo de Los Zetas. Inicialmente fue su operador financiero, y con el ascenso de su hermano Miguel Ángel, devino el segundo al mando.

Se le atribuyen delitos relacionados con el tráfico de personas, estupefacientes, homicidios, secuestros, extorsiones y robo de hidrocarburos. En total se le abrieron 11 causas penales.

Desde hace años las autoridades federales mexicanas lo incluyeron en su lista de 122 objetivos prioritarios y ofrecieron 30 millones de pesos por información que condujera a su captura. Estados Unidos daba por él 5 millones de dólares y ya extendió una solicitud de extradición.

En febrero se le ubicó en San Pedro –un municipio dominado por el Cártel de los Beltrán Leyva– protegido por un reducido grupo de seguridad para pasar inadvertido.

Rubido García –acompañado del director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio– explicó durante la presentación de los seis detenidos que El Z-42 se movía entre Piedras Negras, Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León, tres ciudades que hacen frontera con Texas. Su residencia permanente, no obstante, era la de San Pedro.

A Óscar Omar Treviño se le relaciona con algunos de los peores ataques ocurridos en México desde hace 10 años.

El vocero de seguridad dijo que el grupo de El Z-42 atacó las representaciones diplomáticas de Estados Unidos en Nuevo León y Tamaulipas, en 2008. También aseveró que el capo fue el responsable del incendio del Casino Royale, ocurrido el 25 de agosto de 2011 en Monterrey, que dejó 52 personas calcinadas o asfixiadas.

Sin embargo, en aquella ocasión fue arrestado un pistolero identificado como Carlos Oliva Castillo, La Rana, al que se le atribuyó la autoría intelectual del atentado. Y cuando El Lazca fue abatido, Jorge Domene, portavoz de Seguridad de Nuevo León, afirmó que con su muerte el caso quedaba cerrado.

Paralelamente, el gobierno federal sostiene que El Z-42 está ligado al homicidio del general Ricardo César Niño Villarreal, comisionado de Seguridad Pública Federal en el norte de Tamaulipas. Ese crimen se perpetró el 29 de septiembre de 2014 en Vallecillo, Nuevo León.

Además, se le relaciona con la matanza de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010. Y un ataque más en el que se sospecha su participación: el 19 de febrero de 2012 fueron asesinados 44 reos en el Penal Estatal de Apodaca. En ese entonces todavía mandaba El Lazca.

### **Barbarie como sistema**

La brutalidad de Los Zetas era sistemática y la ejercían todos los jefes del cártel. Entre las masacres organizadas por otros capos en el norte del país se encuentra la que ordenó José Isidro Cruz Villarreal, El Pichilo, quien mandó matar a 17 integrantes del grupo Kombo Kolombia, levantados en el municipio de Hidalgo, Nuevo León, la madrugada del 25 de enero de 2013.

El Pichilo era el jefe zeta en El Carmen, Abasolo, Hidalgo y Mina, sitios ubicados al norte de la capital neoleonesa.

El 13 de mayo de 2012, en tanto, fueron localizados los torsos de 49 personas en el poblado de San Juan, Cadereyta, a 40 kilómetros de Monterrey. Una manta dejada en el lugar atribuía el ataque a El Z-40 y a El Lazca.

Respecto del asesinato de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del exgobernador Humberto Moreira (PRI), cometido el 3 de octubre de 2013, la Secretaría de la Defensa Nacional acusó a Miguel Ángel Treviño de ordenar el homicidio porque horas antes, durante un enfrentamiento en Piedras Negras, policías estatales abatieron a Alejandro Treviño Chávez, sobrino de El Z-40.

En otro caso de venganza, el 13 de junio de 2012 el comandante Gustavo Gerardo Garza Saucedo, conocido como Comandante Jerry, coordinador de Robos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), detuvo en el estacionamiento del centro comercial Plaza Real a Juan Francisco Treviño Chávez, El Quico, otro sobrino de los Treviño Morales, al que le aseguraron dos fusiles.

Debido a esto, el mando policiaco fue ejecutado la madrugada del 19 de febrero de 2013 cuando llegaba a su casa, en Apodaca. Fue ultimado por un francotirador que le destrozó la espalda con un tiro de fusil calibre .50.

Un mes después, el 23 de marzo, efectivos de la AEI abatieron al asesino del Comandante Jerry, identificado como Víctor o Humberto Galindo, El Guacho, de 30 años.

Y en un hecho mediático, el 6 de enero de 2009, un comando arrojó una granada al estacionamiento de Televisa Monterrey, sin que hubiera lesionados.

Juan Alberto Cedillo. “Éxodo estudiantil por narcoviolenencia en la frontera norte”. *Proceso* número 2005, 5 abril 215. pp. 35-37. <https://www.proceso.com.mx/400264/exodo-estudiantil-por-narcoviolenencia-en-la-frontera-norte>

### “Éxodo estudiantil por narcoviolenencia en la frontera norte”

Tras la ola de asesinatos y secuestros de numerosos universitarios perpetrados por el crimen organizado en el noreste del país –Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas–, miles de estudiantes están emigrando a planteles de Estados Unidos o de otros estados de México. Mientras varias universidades de la región cierran campus temporal o definitivamente, integrantes del Cártel del Golfo y de Los Zetas ofrecen a las autoridades universitarias “blindaje” a cambio de cuotas que van de los 100 mil a los 350 mil pesos mensuales.

**LAREDO, Texas (Proceso).** - Alumnos y directivos universitarios asesinados o desaparecidos por el crimen organizado, autoridades escolares extorsionadas, miles de estudiantes que huyen al extranjero, desplome de las matrículas y campus de universidades cerrados, son parte de los “efectos colaterales” de la “narcoguerra” que azota al noreste de México – Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila– y que va a cumplir una década.

Tal es el panorama que describen a Proceso investigadores, académicos mexicanos y estadounidenses, directivos empresariales y hasta autoridades dedicadas a la procuración de justicia.

Así, por ejemplo, Guadalupe Correa Contreras, investigadora de la Universidad de Texas en Brownsville (UTB), explica en entrevista: “La violencia vinculada al crimen organizado se ha extendido hasta alcanzar las instituciones de educación superior. En el noreste del país consideremos el caso de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que murieron en una balacera, y sobre todo en el estado de Tamaulipas esta situación es evidente”.

Desde hace dos años el crimen organizado que opera en Tamaulipas está “ofreciendo” a universidades privadas y colegios un “servicio de blindaje” para que no sufran atentados. Las extorsiones provocaron que la Universidad del Valle de México (UVM) en Reynosa suspendiera actividades temporalmente, mientras que la correspondiente a Nuevo Laredo cerró definitivamente.

Además, directivos de la Cámara de Comercio y de escuelas privadas denuncian el cierre de dos colegios privados y amenazas a 18 más. Advierten de que Los Zetas y el Cártel del Golfo llaman a las escuelas “ofreciendo” protegerlas a cambio de cuotas que van de los 100 mil a los 350 mil pesos mensuales.

En cuanto al campus Nuevo Laredo de la UVM, sufrió la visita de *halcones*, y en las inmediaciones del mismo circulaban camionetas con hombres armados, lo que obligó a los directivos a suspender clases definitivamente desde febrero pasado.

“La Universidad del Valle de México dio a conocer que tomó la difícil decisión de cerrar de manera definitiva su campus en Nuevo Laredo... debido a que recibió amenazas del crimen organizado”, precisó la institución al anunciar esa medida.

“Dada la seriedad de las amenazas, que incluían atentar directamente contra la vida de quienes forman parte de nuestra comunidad, tomamos la decisión, primero, de desalojar las instalaciones y cerrar el campus”, destacó el comunicado. Agregó que las autoridades locales ofrecieron apoyarlos, pero en septiembre, cuando el campus Reynosa sufrió amenazas, los militares vigilaron unos días, y, al retirarse,

la institución “sufrió un asalto, por lo que consideramos que las situaciones de riesgo seguirán repitiéndose”.

La procuraduría estatal identifica a José Ismael Mendoza Falcón, *El Polimenso*, expolicía en los municipios de Miguel Alemán y Mier, como “el responsable de las amenazas que recibió el rector de la Universidad Valle de México campus Reynosa”.

La violencia también alcanzó a las facultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Los Zetas y el Cártel de Golfo cobran cuotas a maestros, y a los alumnos los obligan a comprar boletos de rifas cuyos premios nadie gana.

“En Tamaulipas hemos observado en los últimos años un ataque directo a planteles universitarios o a sus autoridades administrativas, incluso las del más alto nivel. Destacan los asesinatos del director de Recursos Humanos en 2012 y del coordinador del Programa de Valores de la UAT en 2011”, comenta Guadalupe Correa.

Por otra parte, se produjo “la desaparición de José Guadalupe Rivera Martínez, rector del campus Reynosa Rhode de la UAT, en diciembre último. Es un hecho sin precedentes, que cimbró a las instituciones de educación superior en el estado”, agrega la investigadora de la UTB.

Correa subraya que los ataques directos a instituciones educativas desplazaron a estudiantes hacia Estados Unidos u otras partes del país, y estadísticas aplicadas en las universidades de Texas y de Nuevo León confirman un aumento en el éxodo de universitarios tamaulipecos.

Actualmente la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) atiende a alrededor de 40 mil estudiantes en 26 unidades académicas, facultades, escuelas y clases virtuales.

Registros de federaciones estudiantiles tamaulipecas establecen que unos 15 mil alumnos emigraron a otros estados y al extranjero.

Alla Paroiatnikova, directora ejecutiva de la UTB, indica al reportero que cuentan “con aproximadamente 400 estudiantes internacionales, 71% de los cuales provienen de México.

“La inscripción de los estudiantes mexicanos ha venido al alza en los últimos dos años. Tenemos muchas familias que mandan a sus hijos a estudiar aquí en Brownsville”, precisa.

La matrícula de los alumnos procedentes de Tamaulipas muestra que han salido de las ciudades más afectadas por la violencia: Matamoros, Tampico, Ciudad Victoria, Valle Hermoso y San Fernando, entre otros lugares, expone Paroiatnikova.

No obstante, el mayor flujo de migración lo registra el campus Nuevo Laredo de la Universidad de Texas A&M. En su campus internacional están inscritos alrededor de 7 mil alumnos, y más de 40% son de origen mexicano. Incluso algunos reciben un subsidio del gobierno de Texas para que no paguen matrícula como extranjeros sino como residentes texanos, ya que la cuota semestral ronda los 5 mil 500 dólares.

La migración de estudiantes obligó al actual gobierno de Tamaulipas a ofrecer apoyos a los alumnos que estudian fuera del estado, con becas que van de 6 mil a 15 mil pesos semestrales si mantienen calificaciones arriba de 9.0.

## **Estudiantes asesinados**

El 11 de abril de 2013, Cecilia, Marlyn, Cintia y Carlos, alumnos del séptimo semestre, terminaron temprano sus actividades en la Facultad de Contaduría y Administración del campus Monclova de la Universidad de Coahuila. Esa tarde decidieron irse a tomar unas cervezas. Abordaron un automóvil Stratus y enfilaron al kilómetro 18 de la carretera 57, rumbo a Sabinas.

Los cuatro jóvenes llegaron a un bar de la zona conocida como “California”. Se dieron cuenta de que estaban en el lugar equivocado cuando arribó una caravana de camionetas con hombres armados. Inmediatamente salieron del bar, subieron al auto y pretendieron alejarse lo más rápidamente posible.

Sicarios zetas observaron la precipitada huida. Los persiguieron por la carretera rumbo a Monclova... Asustados, los jóvenes aceleraron, y cuando escucharon las primeras detonaciones, una de las estudiantes avisó por celular a sus familiares que los perseguían y les estaban disparando. Al día siguiente cuatro familias acudieron a denunciar la desaparición de los alumnos ante la Procuraduría General de Justicia del estado.

Días después las autoridades informaron que el Stratus se encontró incendiado y con disparos de arma de fuego. Cinco halcones de Los Zetas que fueron detenidos confesaron que luego del ataque recibieron por sus radios la orden de remolcar el vehículo hasta la comunidad de Estancias, donde le prendieron fuego.

En Tamaulipas, fuentes de la procuraduría que solicitaron el anonimato señalan a Proceso que suman decenas los estudiantes “levantados” y desaparecidos por los cárteles locales. Calculan que alrededor de 44 alumnos han sido víctimas inocentes de la violencia que azota el noreste.

En Nuevo León, los estudiantes que han sido víctimas de violencia suman alrededor de 20. La racha comenzó el 19 de marzo de 2010, cuando Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos estudiantes de posgrado con beca de excelencia del ITESM, se encontraban preparando su próximo examen en la biblioteca del campus Monterrey.

Afuera de la institución, sobre la avenida Eugenio Garza Sada, pistoleros a bordo de una camioneta blindada se enfrentaban a miembros del Ejército.

En el interior de la biblioteca no se escucharon las primeras detonaciones. Así que cuando Jorge y Javier hicieron una pausa en sus estudios para salir a cenar, al caminar se dieron cuenta de que soldados estaban en el interior del campus disparando sus armas largas.

Los jóvenes fueron acribillados por el fuego cruzado. Los disparos que los alcanzaron también provinieron de fusiles de los elementos castrenses. Al término de la refriega, los militares y los efectivos de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León intentaron hacer aparecer a los estudiantes como sicarios. Los arrastraron hacia afuera de la institución provocándoles diversos golpes, les quitaron sus credenciales y les colocaron dos fusiles.

Horas después la procuraduría se llevaba los videos de las cámaras de seguridad del campus e informaba que dos “delinquentes” fueron abatidos por el Ejército.

“Es claro que no son los primeros estudiantes o personas en desaparecer o ser muertas por la violencia y el crimen que vive nuestro país. Se estima que 22 mil personas desaparecieron en el sexenio pasado. Muchas de ellas, acusadas correcta o incorrectamente de estar asociadas con el crimen organizado”, comenta el exrector del ITESM Rafael Rangel, al cumplirse cinco años del crimen. “Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo fueron ejecutados en una de las entradas al Tecnológico de Monterrey. También, al igual que los estudiantes de Ayotzinapa, fueron desaparecidos y removidos de sus identidades después de ser ejecutados. Fueron acusados de ser parte del crimen organizado”, concluye.

Después del crimen, el Tecnológico sufrió una caída de alrededor de 10% en su matrícula. Además, tuvo que recortar cerca de 13% de su personal administrativo y modificar los contratos con sus catedráticos. Liquidaron a todos los que cobraban por nómina y los recontrataron por honorarios.

La violencia e inseguridad que priva en Coahuila y Nuevo León también obligó a las autoridades universitarias a recortar los horarios nocturnos.

### **Obstáculo para el desarrollo**

De acuerdo con Guadalupe Correa, la violencia contra las universidades representa una gran limitación para el desarrollo económico, pues acelera la pérdida de capital humano. “Tamaulipas es uno de los estados más importantes del país para las inversiones futuras en energía, y se encuentra perdiendo un recurso fundamental: su población educada y el capital humano, que es vital para el crecimiento del sector y del estado en general”, explica.

A su vez, Carlos Flores, integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), asienta que los ataques contra dichas instituciones educativas son “una muestra de la erosión extrema de las condiciones elementales para el desarrollo de una sociedad, ya no digamos para su viabilidad y expectativas, que naturalmente se ven seriamente amenazadas cuando aquélla no ofrece mínimos de certidumbre para sus jóvenes”.

También advierte de que se está desperdiciado el bono demográfico de México, ya que su juventud es víctima de violencia, se le discrimina y margina de opciones reales de desarrollo y, además, el Estado es incapaz de brindarle garantías mínimas para su vida.

Enfatiza que el cierre de universidades tiene graves consecuencias para la sociedad, pero que las autoridades de Tamaulipas intentan minimizarlo.

“No hay libertad ni progreso posible cuando la educación y el pensamiento son silenciados por el temor a ser víctimas de una violencia injustificable. Y si el Estado es incapaz de garantizar que esto no ocurra, entonces sirve para muy poco y su legitimidad se habrá de debilitar de manera inexorable”, apunta.

S/A. “La población de Tamaulipas, entre dos, tres, muchos fuegos...”. *Proceso* número 2008, 26 abril 2015. pp. 6-9. <https://www.proceso.com.mx/402329/la-poblacion-de-tamaulipas-entre-dos-tres-muchos-fuegos>

**“La población de Tamaulipas, entre dos, tres, muchos fuegos...”**

Algo pasa en Tamaulipas, donde no funcionan las estrategias que en otras partes han llevado por lo menos a la baja de las cifras oficiales de muertes por la narcoviolencia. A la infernal ofensiva que lanzaron las bandas criminales el viernes 17 en Reynosa, se sumó el miércoles 22 otra en Tampico. La explicación para una –la reacción de los narcos por la captura de un capo– no aplica para la otra. Y mientras el gobierno federal aprende con prueba y error, la población está atrapada entre muchos fuegos. La violencia es muy necia: no cede.

REYNOSA, Tamps. - En menos de una semana la ciudad fronteriza de Reynosa y el puerto de Tampico padecieron sendas jornadas de violencia que paralizaron las actividades laborales, escolares, el comercio internacional, las campañas políticas, lo que causó pérdidas millonarias.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, atribuye esa violencia a la captura de capos y afirma que se reducirá gracias a esas detenciones. No obstante, investigadores expertos en narcotráfico, empresarios y ciudadanos le recuerdan al funcionario que Tamaulipas es el estado donde se han capturado y matado más capos de todos los niveles, pero “la necia violencia no cede”.

Los entrevistados destacan que la violencia en la entidad revela cuán arraigado está aquí el crimen organizado, con la complicidad de funcionarios de los tres niveles de gobierno, y que para erradicarlo se requieren estrategias muy diferentes a las que se han aplicado en otras regiones del país.

En uno de los estallidos de violencia más importantes del año, a las 10:30 horas del viernes 17 se escucharon las primeras ráfagas de fusil automático en varias zonas de Reynosa. Aproximadamente a la misma hora del miércoles 22, en la zona metropolitana de Tampico se desató otra balacera con armas de grueso calibre que comenzó en la carretera a Mante.

Pobladores de estas ciudades, entrevistados por este semanario, describen lo que hacen cuando se encuentran atrapados entre disparos, granadazos y narcobloqueos con vehículos incendiados.

Al escuchar los primeros tiros de armas largas se echa a andar el sistema de alerta para Situaciones de Riesgo (SDR) y mediante las redes sociales se advierte a los civiles que eviten transitar por la zona de la confrontación.

En la medida que las alertas SDR se extienden hacia otros rumbos de la ciudad, la población comprende que debe resguardarse porque hay enfrentamientos y persecuciones en un área muy extensa.

En las escuelas, los maestros piden a los alumnos que se tiendan en el piso tan pronto oyen el seco estampido de los fusiles de asalto. En las primarias se intenta que parezca un juego para no asustar más a los niños. Si hay padres y transeúntes afuera, los directivos les dan refugio en los planteles, cierran la puerta y suspenden todas las actividades.

También se suspende el tránsito. Conforme se extienden las alertas, la gente intenta abandonar la calle, entra en las tiendas, en las oficinas y, si están cerca, se esconden en su casa. Todas las empresas cierran, el comercio baja las cortinas y el transporte público deja de dar servicio.

Saben lo que les espera si permanecen afuera: en pocos minutos aparecerán decenas de jóvenes fuertemente armados para robar automóviles particulares, autobuses y tráileres para atravesarlos en las avenidas importantes e incendiarlos.

Cuando las alarmas suenan, por lo común ya circulan camionetas que siembran el pavimento de estrellas de clavos que llaman “ponchallantas”, a fin de dificultar el despliegue de vehículos de soldados y marinos.

Pese a la huida general, en las zonas de conflicto quedan paralizados hombres, mujeres, niños y ancianos por decenas. En pleno fuego cruzado se les ve pegados desesperadamente al piso, escondiéndose tras cualquier pared o haciéndose poco visibles entre los autos, cuya lámina atraviesan fácilmente las balas de los cuernos de chivo y los fusiles de asalto de las fuerzas armadas.

Parecen escenas de película: espesas nubes de humo, caravanas de al menos 15 camionetas con hombres armados circulando a toda velocidad, vehículos militares que llegan por distintos rumbos, helicópteros que sobrevuelan y estridentes sirenas de patrullas.

A veces los sicarios abandonan sus vehículos para escapar de las fuerzas armadas e irrumpen en cualquier vivienda. Una mujer relata que en mayo del año pasado, cuando en su casa de una exclusiva zona residencial de Tampico se realizaba una fiesta con cerca de 20 niños, se escucharon explosiones y balazos muy cerca. Los adultos reunieron a los niños en un baño y todas las mujeres se quedaron en una recámara, tendidas en el piso por si había tiroteo desde afuera. Minutos después entraron policías federales y soldados a registrar el inmueble.

Así, la ciudad se detiene durante varias horas. Se siente el miedo aun después de que cesan los disparos y las autoridades dicen que la situación “está controlada”.

### **La vida se detiene**

La cantidad de balas y granadas utilizadas casi siempre deja víctimas que no entran en las estadísticas ni en los comunicados oficiales. La mayoría son delincuentes, cuyos cuerpos recogen sus compañeros, pero el fuego también alcanza a ciudadanos inocentes.

En los enfrentamientos del viernes 17 en Reynosa murieron al menos tres hombres. Uno de ellos, Édgar Cruz, era un obrero de 18 años. Le pegó una bala cuando esperaba el camión. Y a bordo de una camioneta fallecieron dos, que no han sido identificados ni registrados en el parte oficial.

Fuentes de la presidencia municipal, que solicitaron no publicar sus nombres, señalan que las balaceras que comenzaron a las 10:30 se debieron a la incursión de Los Ciclones, una banda de Matamoros, en territorio de Los Metros, que controlan Reynosa. El objetivo era entregar al líder de éstos, José Tiburcio Hernández Fuentes, El Gafe, a las fuerzas federales. Su captura provocó que a partir de las 14:00 horas se desataran nuevos enfrentamientos y narcobloqueos.

En Tampico, la violencia se derivó de los enfrentamientos entre las fracciones del Cártel del Golfo que se disputan la plaza: Los Fresitas y Dragones de Sheyla. No se detuvo a ningún capo, sólo a sicarios y halcones que realizaban los bloqueos. El rumor sobre la presunta captura de José Silvestre Haro Maya, El Chive o el R1, fue difundido por un funcionario estatal.

Cabe recordar que el 18 de octubre de 2014 también se informó la supuesta aprehensión de Haro Maya, “cuando pretendía escapar de las fuerzas federales”.

Igual que Reynosa, Tampico se paralizó. Se desalojó al personal de una empresa y todas las escuelas suspendieron las clases. La delegación de la Cruz Roja fue atacada por un grupo de hombres armados cuando unos heridos llegaban a sus instalaciones.

Por el intenso tiroteo, los estudiantes del Campus Tampico-Madero del Tec de Monterrey fueron retenidos en las aulas, pues a pocos metros de la entrada ardía un vehículo y se reportaban disparos de armas de gruesos calibre.

Las autoridades informaron que decenas de camiones, autos y tráileres, también en llamas, obstruían el paso en 25 lugares, entre ellos importantes cruceros de la zona metropolitana.

Empresarios de Tampico y Reynosa dicen en entrevista que las cámaras de comercio aún están evaluando las pérdidas que provocó la ola de violencia, tanto por la destrucción de bienes como por el cese de actividades productivas, pero adelantan que fueron millonarias.

Recuerdan que Tampico es la tercera ciudad del país con mayor número de secuestros, mientras que en Reynosa cerraron cientos de negocios por las extorsiones de bandas protegidas por funcionarios de todos los niveles. Estiman que los ingresos que obtienen los criminales de la industria maquiladora, tan sólo por ese delito, son de alrededor de 100 millones de pesos por año.

Y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en su dossier Seguridad, Justicia y Paz Tamaulipas, calcula que en general “los grupos criminales obtuvieron 784 millones de pesos en el año 2013 por concepto de cobro de derecho de piso y otras formas de extorsión”.

### **Peligrosa fragmentación**

La violencia extrema en Tijuana, Ciudad Juárez y Monterrey comenzó a reducirse durante el sexenio de Felipe Calderón, observa el periodista británico Ioan Grillo, autor del libro *El narco*. Y se pregunta: si en el de Enrique Peña Nieto también disminuyeron en varios estados los traumáticos enfrentamientos en las calles, ¿por qué la violencia no se reduce en Tamaulipas? “Parece el estado más necio, donde la violencia no cede”, comenta.

Enfatiza que un factor es que los cárteles no están concentrados en una sola ciudad, como ocurre en otras entidades: “Aquí tenemos urbes, como Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico y Ciudad Victoria, donde se registran continuos enfrentamientos y las fuerzas federales no se pueden enfocar en un solo punto. En Michoacán, por ejemplo, la violencia se concentra en algunas regiones, como Tierra Caliente”.

En su opinión, la estrategia anunciada por Osorio Chong para Tamaulipas no cambia en esencia la que aplicaba el gobierno de Felipe Calderón: concentra un gran número de fuerzas federales y da prioridad a la captura de los capos de mayor jerarquía.

Por eso, recuerda, Tamaulipas es donde se ha capturado a más capos en los últimos años. Desde el gobierno de Calderón hasta la fecha cayeron aquí cerca de un centenar de ellos, más otros 700 clasificados como lugartenientes. Entre los primeros, detenidos o muertos, se cuentan Osiel Cárdenas, su hermano Tony Tormenta, Heriberto Lazcano, Jorge Eduardo Costilla (El Coss), Miguel Ángel Treviño (El Z-40) y su hermano Omar, El Z-42.

Y la violencia no se reduce pese a lo que diga el secretario de Gobernación.

El gobierno federal ha difundido que los cárteles del estado ya están muy fragmentados. Grillo destaca que el Cártel del Golfo y Los Zetas ya no tienen “capos supremos”, de la talla de El Chapo, Amado Carrillo, Heriberto Lazcano, El Coss o El Z-40.

Tales divisiones y escisiones implican que ahora hay muchos cabecillas menores que se disputan las plazas y la dirección de las bandas criminales. Por ejemplo, las plazas controladas por el Cártel del Golfo, como Matamoros, Reynosa y Tampico, se las pelean al menos dos facciones: Metros contra Ciclones, Fresitas contra Dragones. Lo mismo ocurre en las plazas de Los Zetas.

El periodista subraya que el crimen organizado usa la violencia extrema para someter a la población y a los gobiernos locales. “De esa manera protegen sus intereses”, ya que ni el gobierno federal se ha atrevido a tocar la gran infraestructura de negocios que tienen en Tamaulipas.

Para Grillo, la guerra irregular que padece Tamaulipas desde 2004 es similar a las que desgarran el Medio Oriente y África, “donde los niños han crecido con la violencia. La ven como normal en la medida en que van creciendo. Los jóvenes escucharon desde que eran niños las historias de los grandes capos y ahora quieren tener su propia historia, lo que perpetúa la violencia”.

José Gil Olmos. “Las guerras de “El Mencho”. *Proceso* número 2010, 10 mayo 2015. pp. 10-12.  
<https://www.proceso.com.mx/403746/403746-las-guerras-de-el-mencho>

### **“Las guerras de “El Mencho”**

En sólo una década, Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, se convirtió en el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, hoy por hoy la organización criminal más poderosa de México. Durante ese periodo, el capo oriundo de una comunidad del municipio de Aguililla, Michoacán, supo tejer alianzas circunstanciales con organizaciones rivales, meter el hombro a sus paisanos, suplir a los capos caídos y luego, tras una derrota, replegarse a Jalisco. Hoy, tiene en jaque a varias entidades y la furia de su organización parece no tener límite.

Considerado el grupo criminal más fuerte de México, por encima incluso de las agrupaciones históricas del Pacífico y el Golfo de México, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene raíces en Michoacán. Sus líderes, Nemesio Oseguera Cervantes y Rubén Oseguera González –El Mencho y El Menchito, respectivamente–, así como sus parientes Abigael y José González Valencia, Los Cuinis, son oriundos de Tierra Caliente.

Durante años, todos ellos mantuvieron un bajo perfil, lo que les ayudó a fortalecerse. Y cuando las autoridades federales arremetieron contra Los Caballeros Templarios, tomaron su lugar y ampliaron su negocio hasta Sudamérica y Asia, de acuerdo con los testimonios recogidos por Proceso en Michoacán.

En 2005, por ejemplo, El Mencho se alió con el cártel de Sinaloa para disputarle el terreno a Los Zetas. Esa guerra se extiende hasta ahora, esta vez con el CJNG, cuyos sicarios empiezan a imponer su ley en Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Veracruz, principalmente, consideran los entrevistados, quienes piden el anonimato.

La jornada de violencia criminal del viernes 1 en más de una treintena de municipios jaliscienses, según ellos, fue para demostrar el poderío del CJNG al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, a quien presuntamente apoyó la organización del Mencho durante su campaña electoral de 2012.

Versiones periodísticas indican que Sandoval Díaz tuvo vínculos con el CJNG y el cártel de Sinaloa ese año, a través de José Luis Tony Duarte, con quien tuvo nexos desde que fue presidente municipal de Guadalajara. En esa etapa incluso Rocío Duarte Contreras, hija de Tony, fue directora de estacionamientos en la capital tapatía.

Además, según la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/084/2003, un hermano de Tony, Juan Jorge Duarte Reyes, fue detenido al ser descubierto con un cargamento de metanfetaminas (Proceso 1832). Otro funcionario con presuntos vínculos con esa agrupación es el fiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera.

El disgusto contra Sandoval Díaz –refieren las fuentes consultadas– se debe a que retiró el apoyo al CJNG y por la detención del Menchito, el 30 de enero de 2014 en Guadalajara, y la del Cuini, el 2 de marzo último en Puerto Vallarta. Dicen, también, que la Operación Jalisco tiene como objetivo capturar al Mencho, lo que el cártel considera una traición.

Las molestias contra Sandoval Díaz se evidenciaron desde que tomó posesión como gobernador, el 1 de marzo de 2013. Apenas llevaba ocho días en el cargo cuando el CJNG ejecutó a su secretario de Turismo, Jesús Gallegos Álvarez, presuntamente por apoyar a otro grupo criminal (Proceso Jalisco 446).

Aunque El Mencho y su grupo han manifestado su fuerza en Jalisco y Colima, en Michoacán también participaron en la formación de las autodefensas de Tepalcatepec a través de los hermanos Farías: Uriel y Juan José, El Abuelo. De acuerdo con los entrevistados, ambos se reunieron con el entonces comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo Cervantes, como quedó registrado en la grabación del programa Atando Cabos, conducido por Denise Maerker en enero de 2014.

### **Quién es Oseguera Cervantes**

Nemesio Oseguera Cervantes –algunas veces se hace llamar Rubén Oseguera Cervantes y algunos lo apodan El Gallero– nació en la comunidad de El Naranjo Chila, municipio de Aguililla, en el corazón de Tierra Caliente, mientras que sus cuñados Abigael y José González Valencia, Los Cuinis, son oriundos del poblado Ahuaje, ubicado en el mismo municipio.

Para las autoridades locales, El Mencho es uno de los capos más influyentes de Michoacán, Jalisco, Colima y Veracruz, donde comenzó a exterminar a Los Zetas por encargo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Las mismas fuentes afirman que, cuando El Mencho y los suyos usaron a las autodefensas para combatir a Los Caballeros Templarios, se quedaron con el control absoluto de Tierra Caliente. Y si bien al principio utilizaron a Los Viagras para apropiarse de los municipios de Buenavista, Pinzandaro, Apatzingán y Parácuaro, que estuvieron bajo el poder de José Jesús Méndez Vargas, El Chango Méndez –fundador de La Familia Michoacana, capturado en 2011–, terminaron por hacerlos a un lado.

Hoy, El Mencho es considerado uno de los principales traficantes de metanfetaminas y drogas sintéticas en los municipios michoacanos de Tepalcatepec, Coalcomán, Coahuayana y Aquila, donde surgieron las autodefensas en febrero de 2013.

En su tierra lo consideran el sucesor de Ignacio Coronel Villarreal, abatido por la Marina en Zapopan, Jalisco, el 29 de julio de 2010.

El Mencho formó parte del cártel del Milenio, grupo criminal que formó en Michoacán Armado Valencia Cornelio y en el que participaron Abigael y José González Valencia, Los Cuinis, reconocidos jefes del crimen organizado.

En su lucha por la predominancia en Tierra Caliente, Oseguera Cervantes combatió a La Familia Michoacana, particularmente al Chango, y tuvo disputas con Nazario Moreno, El Chayo, creador de Los Caballeros Templarios.

Documentos de la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional consultados para este reportaje indican que al morir Coronel Villarreal, El Mencho se encargó de reestructurar el Cártel de Sinaloa. De ahí surgió el CJNG, que se dedicó a combatir a Los Zetas en Jalisco y Veracruz, bastión del grupo criminal liderado entonces por Heriberto Lazcano, El Lazca.

Según los calentanos, El Mencho, cercano a los 50 años, es bajo de estatura, de buen trato pero sumamente peligroso. Y aunque opera básicamente en la zona metropolitana de Guadalajara, dicen, nunca ha dejado de tener presencia en los municipios de Tierra Caliente limítrofes con Colima y Jalisco, principalmente Tepalcatepec, Coalcomán y Buenavista Tomatlán.

A principios de año, sus paisanos vieron al Mencho cerca de Apatzingán, territorio que Los Caballeros Templarios dominaron durante una década y que hoy está en manos del CJNG. Algunos lugareños aseguran que previo al viernes 1 el capo había sido capturado, pero como los policías son su gente, “lo soltaron”.

### **La vieja disputa con Los Zetas**

A mediados del año 2000, El Mencho y los integrantes del Cártel del Milenio comenzaron a enfrentar a Los Zetas, quienes pretendían apoderarse de Tierra Caliente, zona estratégica para el trasiego de marihuana, heroína y drogas sintéticas hacia Estados Unidos a través de Guadalajara con rumbo a Tijuana.

Por esas fechas, la organización michoacana –también conocida como Cártel de los Valencia– estaba comandada por Armando Valencia Cornelio; sus lugartenientes eran Nacho Coronel; Manuel, La Puerca o El Animal; Rogelio Guízar, El Doctor; Álvaro Álvarez Ramírez; Salvador Revueltas, Chava Lentas; Óscar Nava Valencia, El Lobo; El Abuelo Farías y El Mencho, entre otros.

Los problemas internos empezaron cuando Carlos Rosales Mendoza, apoyado por El Chango Méndez, El Chayo y Servando Gómez Martínez, La Tuta, dividieron a la organización. Los Zetas aprovecharon la detención de Armando Valencia, en agosto del 2003, para posicionarse. Obligaron al Mencho y su gente a replegarse en Jalisco y Colima.

Uno de los lugareños comenta a Proceso: “Hubo cierta tolerancia de Los Zetas hasta la detención de Armando Valencia. Pero luego expulsaron de Michoacán a los allegados de su rival. Quienes se quedaron, fueron ejecutados, como Álvaro Álvarez Ramírez, quien cayó en Morelia a plena luz del día en el transitado bulevar García de León.

“Incluso enviaron una señal a sus enemigos para que no volvieran a Michoacán, al quemar la mansión del Mencho en Arboledas, en la salida a Mil Cumbres.”

Por un tiempo el liderazgo del cártel michoacano recayó en Óscar Nava Valencia, El Lobo, hasta que fue capturado el 31 de octubre de 2009. “Siempre se dijo que El Mencho lo había traicionado”, señala una de las fuentes entrevistadas. Y así fueron cayendo los demás integrantes, hasta que El Mencho formó el CJNG, apoyado por Los Cuinis, sus cuñados, y se lanzó contra Los Zetas.

Mientras El Mencho estuvo fuera de su tierra, sus antiguos compañeros del Cártel del Milenio, liberados de Los Zetas, formaron La Familia Michoacana y luego Los Caballeros Templarios. Él optó por consolidar su grupo en Jalisco y Colima, principalmente, y luego comenzó a avanzar hacia los límites de Tierra Caliente.

Un exfuncionario michoacano comenta al reportero que las gentes de Oseguera Cervantes “siempre quisieron vengar la afrenta y, a raíz de la detención del Tísico, fundaron La Familia Michoacana. Posteriormente, a raíz del conflicto entre El Chayo y El Chango, surgieron Los Templarios.

Y añade: “Intentaron incursionar de distintas formas a Michoacán, para regresar a Aguililla, su entrañable tierra, algunas veces incluso con el apoyo de la Policía Estatal de Jalisco, presuntamente al servicio de un servidor del Mencho: Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco –quien fue titular de Seguridad de esa entidad durante la gestión de Emilio González Márquez y hoy es fiscal general en la administración de Aristóteles Sandoval Díaz–, pero siempre fracasaron.

“Apoyaron a las autodefensas –que fueron el instrumento ideal para combatir a Los Templarios–, y obtuvieron el apoyo de la sociedad, cansada de criminales que extorsionaban y acosaban a la población; también el del gobierno, específicamente la Policía Federal, que buscaba vengarse de los daños causados por Los Templarios.

“El fin justifica los medios... Y los enemigos de los enemigos se aliaron. Derrotaron a Los Templarios y el CJNG, que había recuperado gran parte del territorio michoacano arrebatado, ahora lo tenía todo.”

A pesar de las nuevas pugnas de los exautodefensas, encabezados por El Abuelo Farías, con Los Viagras y el grupo H3 de José Antonio Torres, El Americano, al final la alianza ordenada por El Mencho se impuso.

Remata el entrevistado: “Los Viagras fueron expulsados y ahora todo el valle de Tierra Caliente hasta el puerto de Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo son controlados por el CJNG, lo que les deja el paso libre para seguir negociando con sus aliados, incluyendo los empresarios chinos, con quienes la organización hace tratos de truco: mineral por precursores químicos.”

J. Jesús Esquivel. ““El Mayo”, el capo más poderoso””. *Proceso* número 2014, 7 junio 2015. pp. 24-26. <https://www.proceso.com.mx/406620/el-mayo-el-capo-mas-poderoso-segun-la-dea>

### ““El Mayo”, el capo más poderoso””

Jack Riley, jefe interino de la DEA, es contundente: en el mundo no hay cártel más sólido que el de Sinaloa ni capo más poderoso que El Mayo Zambada. En entrevista con Proceso, el funcionario antidrogas habla del auge del Cártel de Jalisco Nueva Generación y del declive de Los Zetas. Y aclara: la mafia sinaloense –dueña del mercado de la heroína en Estados Unidos– se debate en una pugna sorda por el poder entre sus líderes históricos y las nuevas generaciones, entre quienes están los hijos de El Chapo Guzmán.

**WASHINGTON (Proceso).**- Para Jack Riley, jefe de Operaciones de la administración antidrogas estadounidense (DEA), el Cártel de Sinaloa es la organización criminal mejor establecida del mundo, y su líder, Ismael *El Mayo* Zambada García, el capo que goza de mayor poder en todo el mundo.

“*El Mayo* es el narcotraficante más poderoso. Creo que la organización que formó es la más sólida, porque ha perdurado en la historia del narcotráfico internacional”, dice.

Pese a la notoriedad tenida en semanas recientes y a que lo consideran “el cártel más rico del mundo”, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), explica Riley en entrevista, no alcanza el poder ni el dominio del de Sinaloa.

Riley –titular interino de la DEA tras la jubilación, el pasado mayo, de Michele Leonhart– tiene razones para sustentar su afirmación: “Estamos altamente concentrados en combatir el mercado que tienen aquí *El Mayo* y el Cártel de Sinaloa. Incluso pienso que hemos subestimado su influencia y poderío en el control del mercado de drogas estadounidense”.

Como encargado de las operaciones de la DEA en el extranjero y dentro de Estados Unidos, este agente expone la nueva realidad de la amenaza del narcotráfico mexicano: “Estamos inundados de heroína mexicana, y de acuerdo con nuestras valoraciones, el Cártel de Sinaloa es casi el dueño absoluto del mercado de esta droga, además de que a menor escala sigue traficando marihuana, cocaína y metanfetaminas”.

Con el aumento de la producción local (despenalizada) de marihuana, la reducción en el consumo de cocaína y la dificultad y más leyes para contener y regular la venta de medicamentos controlados y productos químicos para la producción de metanfetaminas, la heroína es ahora la droga ilícita más consumida en Estados Unidos.

De acuerdo con estadísticas que posee la DEA, el Cártel de Sinaloa es casi el único exportador de la heroína que se consume en todo Estados Unidos. Otras organizaciones mexicanas, como los cárteles del Golfo y de Juárez, así como Los Caballeros Templarios, siguen metiendo drogas, pero a sectores cada vez más reducidos del mercado estadounidense.

“Al Cártel de Sinaloa lo pueden acotar en México, pero en Estados Unidos mantiene sus contactos y sus negocios, y sus rutas están bien cimentadas”, enfatiza.

El gobierno de Barack Obama está enfrascado en contener la plaga del creciente consumo de heroína, y aunque es el Cártel de Sinaloa el principal proveedor de esa droga, la lucha no es frontal contra esta organización, porque está fuera de sus fronteras.

Riley insiste: “La gente del Cártel de Sinaloa” no está en Estados Unidos. Opera desde México y su frontera norte, y en la Unión Americana mueve mucha droga por medio de una gigantesca red de intermediarios, transportistas, distribuidores, vendedores al menudeo y lavadores de dinero.

“Desde aquí seguimos una línea de investigación y operaciones para dismantelarlos en México, pero es más difícil la lucha aquí (Estados Unidos) porque físicamente no están, y porque utilizan a personas que nada tienen que ver con la estructura de poder ni de operaciones del propio cártel.”

### **La producción en Guerrero**

“Estoy preocupado por lo que ocurre en el estado de Guerrero. El Cártel de Sinaloa ya está ahí y con ello sube la siembra de amapola para la producción de heroína. El Mayo aprovecha a este estado, porque parece ser una tierra sin leyes”, afirma Riley.

Para la DEA, el incremento de los sembradíos de amapola en todo México –su mando ahora a Guerrero, en mayor escala– es un indicador muy claro de cuáles son los objetivos que tiene para Estados Unidos el Cártel de Sinaloa: la venta de heroína, dice.

“Se están concentrado en el tráfico de heroína. Es la droga que más dinero les genera, sin duda. Por eso están más interesados en aumentar su propia producción de amapola, para no depender tanto de la heroína producida en Colombia”, subraya.

Aunque desde los setenta la siembra de amapola en Guerrero era común, dice Riley, en ese estado nunca se había tenido una presencia tan significativa como la que tiene ahora el Cártel de Sinaloa.

Y admite que su preocupación por lo que puede significar para Estados Unidos el aumento de la producción de amapola guerrerense se deriva también de otros factores:

“No tenemos suficiente información de inteligencia sobre esa área, y la violencia interna del estado, la política y la que se da entre grupos criminales locales nos dificulta el trabajo. En Guerrero ocurre lo que pasaba hace 10 años en algunas regiones de Sinaloa: eran puntos desconocidos para nosotros.”

### **Los herederos**

Pero el cártel dirigido por El Mayo –líder absoluto tras la captura de su socio, Joaquín El Chapo Guzmán, en febrero del año pasado– no está libre de desestabilizaciones e injerencias, de acuerdo con la información de inteligencia recolectada en México por la DEA.

Y son precisamente los hijos del Chapo quienes de alguna manera están retando el mando único de El Mayo.

Riley cataloga esta situación como “una transición de liderazgo”, tomando en cuenta la transformación generacional de sus mandos y de los herederos de los capos; es una pugna entre los hijos de los líderes tradicionales y los subalternos con mayor experiencia en el negocio.

“Los hijos del Chapo están tratando de determinar qué hacer para establecer alianzas con grupos que no le satisfacen ni le gustan al Mayo”, indica el jefe de Operaciones de la DEA, quien aclara: “Pero en el cártel están tratando de darle solución a estas diferencias; no veo ninguna lucha de poder entre El Mayo y los hijos de El Chapo. Van a resolver sus diferencias y no se van a agarrar a tiros”.

Desde la aprehensión del Chapo Guzmán, el Cártel de Sinaloa está casi fuera de los reflectores de la prensa y de la ciudadanía mexicana, no así agrupaciones como el CJNG, que desde la captura de algunos de sus líderes, Abigael González Valencia, El Cuini, se enfrascó en una lucha frontal y abierta contra las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.

Desde el punto de vista del jefe interino de la DEA, el hecho de que el CJNG tenga su nicho de tráfico de drogas en el mercado europeo (Proceso 2006) y no en el estadounidense es una de las razones por las cuales considera que este grupo criminal permanecerá vigente.

“No tendrá problemas y podrá coexistir con el Cártel de Sinaloa. El CJNG está altamente involucrado en el saqueo de petróleo (de los oleoductos de Pemex) y, por ende, del mercado negro de este recurso no renovable”, acusa Riley.

Aunque el CJNG también diversificó sus actividades criminales en México para obtener más ganancias, añade, recientemente cesó su participación en delitos como el secuestro, la extorsión y el contrabando.

“Han ganado mucho poder. Estoy sorprendido de que se hayan vuelto tan notorios. Pareciera que no aprendieron de lo que le costó al Cártel de Sinaloa el gran escrutinio al que fue sometido. Sus acciones como reacción al arresto de febrero –el de El Cuini– están telegrafando lo que pretenden y eso les está costando”, sostiene.

Para Riley, el CJNG permanece enfocado en el mercado europeo y en llevar a esos consumidores drogas como la cocaína, que sigue obteniendo por medio de sus socios sudamericanos, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y narcotraficantes colombianos, peruanos y bolivianos.

## **Declive zeta**

El aumento de poder del Cártel de Sinaloa ensombrece a otras organizaciones que antes competían con él por el control del mercado estadounidense. Uno de esos grupos venidos a menos es el de Los Zetas.

De este grupo criminal y sanguinario, que adquirió relevancia el sexenio pasado, Riley sostiene: “La estructura de poder que tenían en un principio estaba formada por exmilitares. Usualmente, cuando se elimina a un líder se cuenta con un general para reemplazarlo. Pero Los Zetas ya no tienen una línea de liderazgo de esa naturaleza. Las alianzas que habían formado con otros grupos criminales han cambiado y algunas han desaparecido”.

En el actual sexenio, la guerra militarizada contra el narco –iniciada por Felipe Calderón– fue públicamente eliminada. Pero al paso de los meses y en forma callada, el presidente Enrique Peña Nieto la revivió ante la creciente narcoviolencia, si bien al principio pensó que ésta acabaría con el regreso de los militares a los cuarteles.

Para Riley, cualquier presidente nuevo tiene un margen de aprendizaje; luego la realidad lo obliga a cambiar tácticas e ideología, e incluso a recular en lo prometido durante su campaña proselitista.

“Tenemos una gran cooperación con las autoridades mexicanas”, asegura Riley al hablar de la relación bilateral antinarcoóticos que tiene Estados Unidos con el gobierno de Peña Nieto. “Las operaciones conjuntas arrojan buenos resultados. A la administración mexicana le ha tomado un poco de tiempo entender la situación, como ocurre siempre cuando se tiene un gobierno nuevo. Llegan con ideas que cambian conforme pasa el tiempo y ante la realidad”, matiza.

–¿Es cierto que cuando Peña Nieto llegó a la Presidencia le cerró las puertas a la DEA? –pregunta Proceso.

–Sí, se las cerraron –responde Riley, a quien se le dibuja una sonrisa socarrona antes de agregar: “Pero creo que ya las volvieron a abrir”.

Rafael Croda. “El CJNG, poder emergente en Centro y Sudamérica”. *Proceso* número 2014, 7 junio 2015. pp. 26-30. <https://www.proceso.com.mx/407174/el-cartel-de-jalisco-poder-emergente-en-centro-y-sudamerica>

### **“El CJNG, poder emergente en Centro y Sudamérica”**

Como otras poderosas organizaciones mexicanas del narcotráfico, el Cártel de Jalisco Nueva Generación está operando en otros países. El mercado, las rutas y las conexiones ya existían, pero los golpes asestados por las policías nacionales y el descabezamiento de sus estructuras operativas en México han provocado que bandas como el Cártel de Sinaloa, el del Golfo y Los Zetas abandonen algunos corredores y dejen sueltas algunas alianzas con criminales centroamericanos y sudamericanos. Entonces llega el CJNG para reactivarlos en su provecho, según lo revelan los jefes antidrogas de varias naciones.

CARTAGENA, COLOMBIA. - La reconfiguración del narcotráfico en México por la caída de grandes capos de la droga ha tenido repercusiones en Centro y Sudamérica: los cuerpos policíacos de varios países de estas regiones han identificado en los últimos meses una creciente actividad del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presencia del CJNG se extiende desde Guatemala hasta Perú y coincide con una serie de golpes que ha recibido este año en Colombia, Panamá, Perú y Ecuador el Cártel de Sinaloa, la organización criminal mexicana que más cocaína trafica de Sudamérica a Estados Unidos, según dijeron a Proceso jefes de las policías antidrogas de la región que participaron en la XXXII Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC, por sus siglas en inglés) en el balneario colombiano de Cartagena.

“El Cártel de Sinaloa sigue siendo muy fuerte en Centro y Sudamérica, pero el CJNG es el poder emergente”, dice el director antidrogas de la Policía Nacional de Colombia, general Ricardo Restrepo.

En las mesas de trabajo, los delegados de 106 países hablaron de las nuevas tendencias del narcotráfico internacional, incluida la reconfiguración de los cárteles mexicanos de la droga tras el debilitamiento de los del Golfo, Los Zetas, Los Caballeros Templarios y la organización de los Beltrán Leyva por la captura o muerte de sus líderes.

De acuerdo con Restrepo –secretario general de esta edición de la IDEC–, los participantes mostraron “mucho interés” por los episodios de violencia que ocurren en México a raíz del enfrentamiento del CJNG con las fuerzas federales, así como por las pugnas entre las organizaciones criminales para ocupar los espacios que dejaron los capos abatidos y los capturados.

Esto se debe, explica, a “las repercusiones que puede haber en la región”.

Un caso que ilustra la expansión del CJNG es Guatemala, donde este grupo delictivo encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, ha tejido una red de alianzas con las estructuras criminales que manejaba Sebastiana Cottón Vásquez, Doña Tana, aprehendida el año anterior en México.

El fiscal especial antidrogas guatemalteco, Óscar Dávila Mejicanos, indica que El Mencho reconfiguró la organización de Doña Tana en el noroccidente de Guatemala “y por esa zona el CJNG está trasegando cocaína procedente de Colombia”.

El funcionario señala que el CJNG ha establecido “vínculos fuertes” al sur de la frontera. “Está ampliando su área de acción en toda la ruta centroamericana, desde que la droga sale de Perú, Ecuador o Colombia, y hemos detectado que esto es reciente, desde hace unos seis meses”, afirma.

Dávila Mejicanos explica que, a pesar del ascenso del CJNG, la organización criminal dominante en Guatemala todavía es el Cártel de Sinaloa, que mueve grandes cantidades de cocaína por la región oriental del país. Los cargamentos, dice, llegan generalmente por vía aérea a pistas clandestinas en Honduras, de ahí son transportados a territorio guatemalteco y después a México.

“Muchos de los narcotraficantes guatemaltecos están conectados directamente con el Cártel de Sinaloa”, comenta.

Dice que Los Zetas llegaron a tener mucho poder en Guatemala, pero desde que en 2013 fue capturado en México su principal operador en el país centroamericano, Gerardo Jaramillo, El Yanqui, su estructura se desintegró y fueron desplazados por el Cártel de Sinaloa.

El fiscal especial guatemalteco sostiene que la organización que encabezó Joaquín Guzmán, El Chapo, y que ahora dirigen Ismael Zambada, El Mayo, y Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, también provee de armamento de alto poder a sus socios guatemaltecos y hondureños.

“Con esas armas, los socios del Cártel de Sinaloa le están peleando el terreno a otras bandas rivales, tanto en Guatemala como en Honduras”, afirma el funcionario, quien considera que “los enfrentamientos tan fuertes que están ocurriendo en México con el CJNG nos obligan a tener más cuidado con las actividades de este grupo en Guatemala”.

### **Volando al sur**

Fuentes de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia (PNC) consultadas por Proceso señalan que la organización de El Mencho y los hermanos Abigaél y José González Valencia, Los Cuinis, comienza a estar presente en este país sudamericano.

“Tenemos información que así nos lo indica, pero todavía no disponemos de evidencia o una detención que nos permita corroborar judicialmente su presencia”, indica una de las fuentes.

Según un reporte de la institución, el Cártel de Sinaloa es la organización delictiva mexicana con mayores “alianzas criminales” en Colombia para el tráfico internacional de estupefacientes, mientras que los cárteles de Juárez, del Golfo y Los Zetas registran un notable descenso en sus contactos con las bandas criminales colombianas.

El informe señala que el grupo del Mayo Zambada y El Chapo Isidro tiene negocios con el Clan Úsuga, la banda más poderosa de Colombia. Ésta, dirigida por Dairo Antonio Úsuga, Otoniel, es objeto de un operativo en el que participan mil policías antidrogas. En los últimos cuatro meses fueron capturados unos 300 de sus integrantes pero su líder ha logrado evadirse.

El Cártel de Sinaloa también se abastece de cocaína con la organización criminal Los Rastrojos, la segunda más fuerte de Colombia, y con la banda de un delincuente conocido como El Árabe, agrega el informe policiaco.

Los operativos de la PNC contra las mafias criminales y la estrategia colombiana de incrementar las labores de intercepción de cargamentos de cocaína han golpeado las operaciones del Cártel de Sinaloa en ese y otros países de la región.

El mes pasado fue aprehendido en Bogotá el mexicano Juan Carlos Espinoza de los Monteros, alias Lacoste, cuya extradición solicita Estados Unidos bajo cargos de organizar el contrabando de cargamentos de cocaína a ese país para el Cártel de Sinaloa.

Lacoste, de 36 años y oriundo de Culiacán, Sinaloa, aceptó en un principio colaborar con autoridades de Departamento de Justicia estadounidense que lo visitarían en la prisión colombiana donde está recluido para cerrar un trato judicial. Pero antes de que éste se concretara lo visitó un connotado abogado penalista de Bogotá y, tras dialogar con él, Espinoza de los Monteros rechazó el ofrecimiento.

Un investigador colombiano del caso indica que el abogado fue enviado por Heriberto Zazueta Godoy, Capi Beto, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ubica como allegado del Mayo Zambada y encargado de lavar activos del Cártel de Sinaloa. Por esa razón Zazueta Godoy enfrenta cargos en una corte federal del norte de Illinois, en Estados Unidos, y sus propiedades y cuentas en ese país quedaron bloqueadas.

Operadores del Cártel de Sinaloa han sido detenidos en el último año en Ecuador, Panamá y Perú.

El director de la Policía Nacional de Panamá, Omar Pinzón, afirma que en su país “hay una participación muy grande de cárteles mexicanos en el tráfico de las drogas”. Ese país es un lugar de tránsito de cocaína hacia Norteamérica y Europa, así como un “centro de negocios” donde los grupos delictivos realizan transacciones financieras relacionadas con la compra-venta de estupefacientes.

“Aquí han estado Los Zetas, pero su presencia ya ha bajado mucho y está muy fuerte el Cártel de Sinaloa. Al CJNG lo estamos empezando a ver”, dice Pinzón.

En Ecuador, tan sólo este año han sido detenidos 11 mexicanos en diferentes operativos antidrogas. El 30 de mayo cayeron dos en manos de la policía ecuatoriana, que los identifica como enviados del Cártel de Sinaloa.

### **Temor al contagio**

El director antinarcoóticos de la Policía Nacional de Ecuador, general Edmundo Moncayo, señala que la fuerte lucha que se libra en Colombia contra las bandas criminales involucradas en la producción y procesamiento de cocaína obliga a los cárteles mexicanos “a mandar a su propia gente para asegurar los embarques, y eso lo estamos también notando en nuestro país”, que es una ruta de salida de la droga producida en territorio colombiano y en Perú.

“Un sinnúmero de ciudadanos mexicanos está haciendo actividades ilícitas en Ecuador. Están haciendo el negocio, el transporte y la supervisión. Las organizaciones en México están mandando a gente de su entera confianza, que son mexicanos”, indica.

De acuerdo con Moncayo, aunque el Cártel de Sinaloa es el que más operaciones ilícitas realiza en Ecuador, tiene “indicios” de que enviados del CJNG llegaron a su país.

El pasado lunes 1, una unidad antinarcoóticos decomisó en el puerto ecuatoriano de Guayaquil un cargamento de 700 kilos de cocaína, camuflada en harina de pescado. La droga tenía como destino el puerto mexicano de Manzanillo, Colima, zona de influencia del CJNG.

Moncayo señala que es necesaria una mayor coordinación con las autoridades mexicanas para profundizar las investigaciones sobre los vínculos del Cártel de Sinaloa y el CJNG con organizaciones delictivas ecuatorianas. “Pero la coordinación con México no está como quisiéramos, nos está faltando ese feeling”, indica el general.

El martes 2, en la XXXII IDEC, Moncayo y su colega colombiano Ricardo Restrepo anunciaron que, en una operación conjunta, sus corporaciones decomisaron en alta mar 740 kilos de cocaína que había salido en lanchas rápidas de Esmeraldas, Ecuador, y tenía como destino las costas del Pacífico mexicano.

Restrepo dijo que la operación se preparó en aguas territoriales colombianas y en ella se capturó a cuatro ecuatorianos, pero el cargamento pertenecía al Cártel de Sinaloa.

En la cita mundial de jefes antinarcoóticos, los delegados de Venezuela, Panamá, República Dominicana y Perú mencionaron durante las mesas de trabajo que en los dos últimos años en sus países se han interceptado avionetas con droga tripuladas por pilotos mexicanos.

El director antidrogas de la Policía Nacional de Perú, general Julio Mercado, dice que avionetas de matrícula mexicana tienen gran actividad en las zonas cocaleras de ese país, desde donde llevan la pasta base de ese estupefaciente a zonas selváticas de Brasil y Bolivia para transformarla en clorhidrato de cocaína y llevarla después a Centro y Norteamérica.

“Hay una especie de puente aéreo y muchas pistas de aterrizaje clandestinas en las zonas cocaleras. Lo hemos descubierto con operativos conjuntos que hemos hecho con Brasil y Bolivia. Y hemos encontrado la presencia del Cártel de Sinaloa mayormente”, dice el general Mercado.

Explica que hasta hace pocos años Perú era un centro de operaciones importante del Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, pero a esa organización “ya no la hemos detectado”.

En cambio, agrega, “se ha hablado de que tenemos presencia de algunos agentes del CJNG, pero tenemos que confirmarlo con la inteligencia respectiva. Estos cárteles se mueven alrededor del mundo y

sobre todo en países donde hay producción de droga. Entonces no sería extraño que capturáramos a algún elemento de ellos”.

Mercado, quien fue agregado policial en la Embajada de Perú en México entre 2012 y principios de 2014, afirma que el CJNG “está supliendo a muchos cárteles mexicanos que han perdido a sus principales cabecillas, y debemos permanecer muy alerta para que toda esa violencia que están generando allá no nos llegue a nosotros acá”.

Rafael Croda. ““En México sólo quedan dos cárteles”...”. *Proceso* número 2014, 7 junio 2015. pp. 28-29. <https://www.proceso.com.mx/406671/en-mexico-solo-quedan-dos-carteles>

### ““En México sólo quedan dos cárteles”...”

ARTAGENA, COLOMBIA. - El director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón, considera que en México sólo quedan dos cárteles de la droga –el de Sinaloa y el CJNG–; el resto de grupos son cientos de células independientes que surgieron de las organizaciones criminales más atacadas y libran una cruenta guerra por el control de las ciudades donde operan.

“Es un fenómeno que creo que se está generalizando”, dice el funcionario a Proceso.

De acuerdo con este diagnóstico, la detención o muerte de los jefes de los cárteles del Golfo, de Juárez, de Tijuana, Los Caballeros Templarios y los Beltrán Leyva ha dispersado las estructuras criminales, que al quedar descabezadas luchan entre ellas para controlar los negocios ilegales.

“Son células que están tratando de buscar el poder para la sobrevivencia, y eso se nos está reflejando ahorita en homicidios entre ellos. Realmente, homicidios de alto impacto no los estamos teniendo en México, sino que son pugnas internas por el poder”, asegura el director de la AIC.

Dice que por ahora únicamente quedan tres grandes capos de las drogas en México: Ismael Zambada, El Mayo; Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, y Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho. Ubica a los dos primeros como líderes del Cártel de Sinaloa y al tercero como el jefe del CJNG.

A esta organización criminal la observa como “un foco rojo” luego de que el 1 de mayo derribara un helicóptero de la Fuerza Aérea en Villa Purificación, Jalisco, con un saldo de siete militares muertos.

–¿Considera que el CJNG está al nivel del Cártel de Sinaloa o que puede ser más poderoso?

–No lo puedo dimensionar de tal forma. Yo creo que es un cártel fuerte, con presencia muy marcada en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán, por ejemplo, y con un nivel de violencia también fuerte.

–¿En México sólo quedan dos cárteles de narcotráfico?

–Es lo que tengo identificado como los cárteles que están operando y funcionando. Los demás, como pasó con Los Caballeros Templarios con la detención de La Tuta (Servando Gómez Martínez fue aprehendido en febrero pasado), se desarticulan y empiezan a trabajar como células independientes en los municipios.

La PGR atraerá el caso Ecuandureo

Zerón, quien encabezó la delegación mexicana en la XXXII Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se llevó a cabo del martes 2 al jueves 4 en este puerto colombiano, está de acuerdo en que la lucha contra el narcotráfico debe realizarse en un marco de respeto a los derechos humanos.

–Hay sectores que se preguntan si era necesario matar a 42 personas en el enfrentamiento del 22 de mayo en Ecuandureo, Michoacán; si todos eran delincuentes, si no hace falta ahí un mayor respeto por los derechos humanos...

–Lo que le puedo comentar es que hoy la instrucción que tenemos de la procuradora general de la República (Arely Gómez) en relación con los derechos humanos es principal; es cuidar los derechos humanos de cualquier detenido, es integrar el debido proceso, y es algo que cada uno de los integrantes de la PGR, principalmente de los miembros de la policía, están cuidando: el salvaguardar los derechos de cada una de todas las personas que se están deteniendo.

–Pero fueron 43 muertos en Ecuandureo, uno de ellos policía.

–Es una investigación que sigue abierta. Estamos trabajando, determinando qué es lo que sucedió ahí, y desde el primer momento tanto la Policía Federal como la procuraduría estatal dieron acceso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hoy en este gobierno la situación es abierta, y si hay algún culpable, pues que se castigue y ver que se actuó conforme a derecho y respetando el debido proceso.

–¿La PGR ya está investigando qué pasó allá?

–Inicialmente (el caso) lo tiene la procuraduría del estado. Yo creo que después de que terminen los peritajes de todos los cuerpos y las diversas materias que se están realizando, nosotros vamos a hacer la atracción (de la investigación) hacia la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por el nivel. Primero, que hay un policía federal involucrado (muerto en el enfrentamiento) y por el calibre de las armas que se encontraron.

–¿O sea que está previsto atraer la investigación a la PGR?

–Sí, la vamos a atraer a la SEIDO. Y vamos a vigilar el debido proceso y salvaguardar los derechos humanos. Tenemos tres detenidos, los cuales fueron puestos a disposición de un juez, declararon y salvaguardaron sus derechos humanos.

–En el caso de la Operación Jalisco, el 1 de mayo, también hay denuncias de un exceso de fuerza...

–Realmente yo no tengo documentado ese dato. Los detenidos que hubo fueron realmente muy pocos, a todos se les respetó el debido proceso. Todos fueron certificados. Yo no registro que hubiera habido violación a los derechos humanos (en Villa Purificación).

### **Las bandas “dispersas”**

En Colombia existe una preocupación por la creciente presencia de enviados de los cárteles mexicanos de la droga, que llegan a hacer transacciones, asegurar los cargamentos y hacer acopio de drogas para transportarlas hacia el norte.

¿Hay una coordinación de México y Colombia para abordar este problema? –se le plantea al director de la AIC.

–Tenemos una coordinación. Pero lo que le puedo comentar es que en México los cárteles se han venido a menos. De 122 blancos que teníamos al inicio de la administración, ya estamos llegando casi a 100 de los más buscados.

–¿Le preocupa esta presencia cada vez mayor que tienen los cárteles mexicanos en Colombia?

–Yo no alcanzo a observar eso, porque al final lo que yo estoy viendo es una pugna interna en México por ver quién tiene el control.

–En esta conferencia antidrogas se ha hablado de la transformación que experimenta el narcotráfico en México. ¿Coincide con quienes han dicho que el Cártel de Sinaloa es muy fuerte?

–Lo tengo claro, y yo creo que en cuanto a Sinaloa estamos trabajando. Todavía nos falta capturar al Chapo Isidro, a Dámaso López Núñez, conocido como El Licenciado...

–Y al Mayo Zambada...

–Sí, aunque al Mayo no lo veo operando mucho. El Chapo Isidro yo creo que es de la gente que está operando. Obviamente, con la imagen que representa El Mayo. Y del lado del CJNG, después de la presencia que tenemos en el estado (de Jalisco), estamos muy perseverantes en lograr la detención del Mencho.

Zerón explica que el fuerte del Cártel de Sinaloa es el tráfico de cocaína, mientras que el CJNG está más enfocado en las metanfetaminas.

Sin embargo, las autoridades antidrogas de Sudamérica han detectado la presencia de enviados del CJNG en varios de sus países para traficar cocaína, lo que indicaría una creciente participación del grupo criminal en ese negocio.

–¿Y qué resta del Cártel del Golfo?

–Pues los sicarios, que eran los que estaban ejecutando a sus enemigos y hoy se están convirtiendo en líderes, aunque con una problemática: no tienen la capacidad financiera ni los contactos para conseguir la droga. Entonces, se están dedicando a otros ilícitos, como el secuestro exprés, las extorsiones, y con eso están sobreviviendo.

–¿Y los cárteles de Tijuana y de Juárez?

–Ahí quien tomó el control fue el de Sinaloa.

–¿Los Zetas también están muy disminuidos?

–Totalmente, totalmente, y yo creo que hasta están en un punto de desintegración.

Juan Alberto Cedillo. “Los Zetas trasegaban droga a EU, con apoyo oficial”. *Proceso* número 2043, 27 diciembre 2015. pp. 30-34. <https://www.proceso.com.mx/424667/los-zetas-trasegaban-droga-a-eu-con-apoyo-oficial>

### “Los Zetas trasegaban droga a EU, con apoyo oficial”

Testigo protegido en un juicio que se sigue en Estados Unidos a varios integrantes de Los Zetas, Héctor Moreno Villanueva, “El Negro”, era uno de los responsables de la introducción de toneladas de cocaína a ese país. Según los testimonios judiciales de este personaje, consultados por Proceso en las Cortes de Texas, el trasiego de droga se realizaba gracias a los sobornos pagados por la organización delictiva a funcionarios de la administración de Humberto Moreira en Coahuila, así como del gobierno federal y del Ejército.

SALTILLO, COAH. (Proceso).- Héctor Moreno Villanueva, “El Negro” –presunto responsable del trasiego de droga para Los Zetas–, confesó a las autoridades estadounidenses las tropelías que ese grupo criminal cometió en la frontera de Coahuila, su principal punto de operaciones, entre 2007 y 2011.

En abril de 2014, según el expediente obtenido por **Proceso** en las Cortes de Texas, “El Negro” expuso que la organización delictiva introdujo más de 5 toneladas de cocaína por año a los Estados Unidos durante ese periodo, gracias a los sobornos a funcionarios de la administración de Humberto Moreira, del gobierno federal y del Ejército.

Las operaciones les redituaron a Los Zetas ganancias por alrededor de 730 millones de dólares en ese periodo, de acuerdo con “El Negro”, quien declaró en calidad de testigo protegido en el juicio contra el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa y los entrenadores de caballos Cuarto de Milla propiedad de los líderes zetas en la ciudad de Austin.

En la transcripción del testimonio que rindió bajo juramento ante el fiscal Douglas W. Garden, El Negro expuso:

–Soy Héctor Moreno y tengo 35 años... Trabajé con Alfonso “Poncho” Cuéllar desde 2007 hasta 2011.

–Y cuando usted dice “trabajé”, ¿qué actividad realizaba? –le increpó el fiscal.

–Tráfico de drogas en la ciudad de Piedras Negras, desde 2007 –respondió el testigo protegido.

Garden le pidió explicara al jurado cuánta droga movían él y Cuéllar hacia Estados Unidos.

–Gran cantidad de droga. Cuatro o cinco toneladas de cocaína al año, quizás más –respondió.

En una sesión previa, Cuéllar declaró que la organización –Los Zetas– pagaba sobornos a funcionarios de todos los niveles para proteger esas actividades.

“A la policía se le paga una cuota para que trabajen para Los Zetas, lo mismo al Ejército y altos funcionarios del gobierno”, precisó Cuéllar.

En el interrogatorio al Negro, el fiscal Garden insistió: “Usted dice que participaba cruzando la droga en la frontera. ¿Podría especificar qué hacía?”.

El Negro expuso que realizaba las llamadas telefónicas a los conductores de los camiones (que trasladaban la droga para entregarla) y a los clientes. Él, insistió, se comunicaba con los clientes de Cuéllar, así como con los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42, respectivamente.

“Al 40 y 42 los veía regularmente tres o cuatro veces por mes; en otras hasta dos veces por semana. Había periodos en que Z-40 y Z-42 desaparecían hasta por cuatro meses.”

La droga se cruzaba en tráileres y se escondía en casas de seguridad de la ciudad de Eagle Pass. Desde ahí se trasladaba por la carretera 35 a Dallas a un cliente del Negro llamado José Vázquez para que la revendiera a las pandillas locales, y éstas a su vez la distribuían por todo el territorio estadounidense, relató el testigo protegido.

Añadió que él y sus socios del cártel recibían unos 4 millones de dólares cada 10 días por 800 kilos de droga que introducían mensualmente al vecino país. El dinero, sostuvo, llegaba a México escondido en los tanques de combustible de vehículos en billetes de todas las denominaciones, aun cuando la instrucción era pagar al contador de Z-40 y Z-42 sólo con billetes de 20, 50 y 100 dólares.

–Señor Moreno, ¿cómo vino a Estados Unidos? –preguntó Garden. –En marzo de 2011, ante la gran cantidad de problemas en Coahuila, solicité asilo al gobierno de Estados Unidos. –Cuando usted dice que había problemas, ¿a qué se refiere? ¿Podría especificar?

–A un montón de muertes. Ellos (los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño) comenzaron a matar familias en Allende, en Piedras Negras, en Múzquiz, en Sabinas. Ellos también me querían matar.

El Negro contó al jurado que entre noviembre de 2010 y enero de 2011 agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA) y del Immigration and Customs Enforcement (ICE) decomisaron droga que le provocaron a Los Zetas pérdidas de entre 5 y 8 millones de dólares.

–Z-40 y Z-42 creían que teníamos algo que ver con estas pérdidas –expuso Moreno.

–Usted había contactado al gobierno federal y acordaron traerlo a usted a Estados Unidos. ¿Puede explicar al jurado su parte en ese acuerdo? –insistió el fiscal Garden.

–Para dar toda la información que tengo sobre Los Zetas, sobre Z-40 y Z-42, así como sus operaciones tanto en Estados Unidos y en México.

### **La masacre de Allende**

En un momento del juicio, Mike DeGeurin, abogado de los acusados, incluido el empresario Francisco Colorado Cessa, interrumpió la sesión para solicitarle al juez Sam Sparks hablar en privado con los fiscales y con él.

En la transcripción de la plática privada, DeGeurin señala que el interrogatorio del fiscal inducía al acusado a describir la masacre ocurrida en la región de Allende, Coahuila, en marzo de 2011. El abogado señaló que ese no era tema del juicio. El juez aceptó la moción y ordenó al fiscal Garden no tocar el asunto.

Al reanudar la sesión, el fiscal cuestionó a Moreno:

–En su acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, ¿se le permitió traer algo de dinero con usted?

–Yo no traje nada de dinero porque 40 y 42 destruyeron casas para apoderarse de todo y debido a esto ellos mataron a 300 personas en Allende, Coahuila.

Eso fue todo lo que pudo decir Moreno sobre lo ocurrido en Piedras Negras y la región de Cinco Manantiales a partir de los primeros meses de 2011.

A más de cuatro años y medio de aquella ola de violencia, la Procuraduría General de la República (PGR) y las autoridades de Coahuila mantienen en secreto el lujoso rancho desde el cual operaba Z-42, ubicado en la región de Cinco Manantiales, en el kilómetro 13 de la carretera Villa Unión-Guerrero.

Desde esa propiedad –que perteneció a Heriberto Lazcano, El Lazca, líder de Los Zetas, y a partir de 2010 quedó en manos de Z-42– presuntamente se ordenaron las masacres de Piedras Negras y del norte del Coahuila a principios de 2011. Desde ahí los integrantes de esa organización trazaron las nuevas rutas del narcotráfico y diseñaron las estrategias de la guerra contra el Cártel del Golfo (CDG) y las huestes de Joaquín El Chapo Guzmán.

Fuentes de la Cuarta Región Militar confirmaron a Proceso que El Lazca operó en este sitio a partir de los primeros meses de 2010. El capo lo escogió por su estratégica ubicación, pues en las inmediaciones hay carreteras solitarias que conducen a la frontera con Texas, así como brechas para escapar a las regiones serranas. Las conexiones incluyen ciudades de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León.

En 2007, cuando Los Zetas aún eran el brazo armado del CDG, fueron la avanzada que conquistó las principales ciudades de Coahuila: Saltillo, la capital; la estratégica Piedras Negras; Ciudad Acuña; Monclova, y la zona metropolitana de Torreón, entre otras.

### **Orígenes de la “narcoguerra”**

Para febrero de 2010, cuando Los Zetas se separaron del CDG –lo que dio origen a la “narcoguerra” entre ambas organizaciones–, la élite del grupo, encabezada por El Lazca, Z-40, y Enrique Rejón Aguilar, Mamito, abandonó Tamaulipas y se refugió en Coahuila. Ahí, Los Zetas se posicionaron durante la administración de Humberto Moreira.

Hicieron de la ciudad fronteriza de Piedras Negras su principal punto para cruzar su contrabando de drogas hacia Estados Unidos. Cuando tomaron esa región, reclutaron a tres capos que operaban el trasiego de narcóticos por su cuenta desde hacía tiempo: Alfonso Mario Cuéllar; Héctor Moreno Villanueva, El Negro, y José Luis Garza Gaytán, La Güichina. Los tres provenientes de familias adineradas de la región de Cinco Manantiales.

Sin embargo, un año después, el imperio zeta comenzó a derrumbarse cuando El Negro presuntamente traicionó a sus jefes Z-40 y Z-42, al filtrar a agentes del ICE algunas operaciones de transporte de drogas.

En venganza, los capos comenzaron la cacería de los tres capos y de sus familias a principios de 2011.

Sicarios de Z-40 arribaron primero a Piedras Negras, donde asesinaron a familias y gente de Cuéllar y destruyeron 27 lujosas residencias y departamentos del capo, quien logró escapar a Estados Unidos.

Semanas después, la tarde del 18 de marzo de 2011, una caravana de 40 camionetas llenas de hombres armados arribó a Allende y Nava y los sicarios comenzaron a levantar a los familiares del Negro y La Güichina. Los dos capos cruzaron la frontera con sus familiares más cercanos y se entregaron a las autoridades estadounidenses.

Los Zetas venían de Tamaulipas y fueron protegidos por los 40 efectivos de la Policía Municipal de Allende, que presuntamente estaban en la nómina de la organización.

Ese día, según los lugareños, se llevaron a unas 80 personas. Posteriormente regresaron y siguieron levantando gente, incluso a los albañiles que trabajaban en las residencias del Negro y de La Güichina. También destruyeron más de medio centenar de residencias y saquearon siete ranchos de los familiares de los dos capos.

Para desaparecer a los detenidos, entre ellos los sicarios que trabajaban para El Negro y La Güichina, se utilizaron al menos tres narcococinas: la del municipio de Guerrero, la del Cereso de Piedras Negras y la de un rancho ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Allende Villa Unión, propiedad de La Güichina.

La incineración de las decenas de cuerpos en ese rancho, en la que se utilizaron aceites, madera y diésel, duró varios días.

En enero de 2014, cuando las autoridades realizaron un operativo para buscar a los desaparecidos, encontraron en esa propiedad un gran contenedor, así como trozos de madera y cubetas de lubricantes y aceites vacías. Ese material aún permanece en el rancho, pues las autoridades únicamente se llevaron el tonel con capacidad para 200 litros de combustible donde fueron introducidos los cadáveres.

Los vecinos de la zona refieren que la masacre fue ordenada desde el rancho donde se escondía Z-42, ubicado a 35 kilómetros de Allende y Nava. En esa época la gente comentaba que ahí se refugiaban los líderes zetas. Sin embargo, corporaciones policiacas estatales y municipales, oficiales del Ejército, así como funcionarios de la procuraduría estatal, nunca hicieron nada pues estaban cooptados por los hermanos Treviño Morales.

### **“Detienen en el DF a jefe de Los Zetas”**

#### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**11 enero 2015**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/392836/detienen-en-el-df-a-jefe-de-los-zetas>

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Elementos de Fuerzas Federales capturaron hoy en la Ciudad de México a Juan Omar Borbolla Figueroa, presunto líder de Los Zetas que operaba en Ciudad Obregón y Hermosillo, Sonora.

En un comunicado la Secretaría de Gobernación informó que Borbolla Figueroa fue detenido junto con otras cuatro personas que fungían como su escolta personal, en un operativo coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y que contó con el apoyo de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República.

Las investigaciones indican que derivado de la violencia que ejercía contra integrantes de grupos antagónicos, Borbolla Figueroa fue designado como representante de Los Zetas en Sonora, por lo que se presume que es uno de los responsables del alto índice de violencia en Ciudad Obregón y Hermosillo.

El ahora detenido se ocultaba en el Distrito Federal, debido a que grupos antagónicos pretendían privarlo de la vida ante la pugna por el control de las actividades ilícitas en Sonora. Desde la Ciudad de México dirigía las actividades de secuestro, extorsión, venta de drogas y ajustes de cuentas.

Asimismo, realizaba negociaciones con otras organizaciones y promovía la apertura de nuevas rutas para el trasiego de droga; reclutaba sicarios para reforzar su estructura operativa en Sonora y pretendía trasladarse hasta ahí para iniciar agresiones contra grupos enemigos en Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales.

Borbolla Figueroa fue detenido en posesión de tres armas largas, cuatro cortas y dos vehículos.

Junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud (UEIDCS) de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, la cual en los próximos días informará sobre la situación jurídica de los detenidos.

### **“Detienen al máximo líder de “Los Zetas””**

#### **Redacción**

#### **Proceso**

**4 marzo 2015**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/397535/detienen-al-maximo-lider-de-los-zetas>

MONTERREY, N.L., (proceso.com.mx).- Omar Treviño Morales “El Z 42”, líder máximo del cártel de Los Zetas, fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México la madrugada de este miércoles en el municipio de San Pedro.

Omar sustituyó como jefe de la organización criminal a su hermano Miguel Treviño Morales “El Z-40”, quien fue capturado el 15 de julio de 2013 en el municipio de Anáhuac, después de que tomara el control total del emporio de la droga, tras la muerte de Heriberto Lazcano “El Lazca”, abatido el 7 de diciembre de 2012.

De acuerdo con los reportes, “El Z 42”, quien es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue capturado a las 04:00 horas en una residencia ubicada en el 514 de la colonia Fuentes del Valle, gracias a un operativo en el que participaron varias decenas de elementos. No hubo disparos en la detención.

A las 08:00 horas, los marinos se retiraron de la casa donde ocurrió la acción.

Omar era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades mexicanas, que ofrecían 30 millones de pesos de recompensa a quien proporcionara información que condujera a su arresto.

En Estados Unidos también se ofrecía recompensa por su captura, por tráfico de drogas.

Reportes de prensa señalan que en Estados Unidos Jesús Fernández de Luna, suegro de Omar Treviño, es ubicado como operador financiero de “Los Zetas”.

Las autoridades estadounidenses señalaron que “El Z 42” formó junto con su esposa una empresa para limpiar ingresos sucios procedentes de las actividades criminales.

### **“Los Zetas, detrás de “ordeña” a Pemex en Tabasco, denuncia gobernador”**

**ARMANDO GUZMÁN**

**Proceso**

**23 abril 2015**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/402152/los-zetas-detras-de-ordena-a-pemex-en-tabasco-denuncia-gobernador>

VILLAHERMOSA, Tab. (apro). - El gobernador Arturo Núñez reveló que el cártel de Los Zetas se encuentra detrás de la “ordeña” de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y convocó a la población no ser copartícipe del robo de hidrocarburo.

En esta ilícita actividad “están involucrados los cárteles, especialmente el de Los Zetas”, manifestó e indicó que ha pedido al Ejército Mexicano más acciones de inteligencia para frenar la proliferación del delito.

El mandatario hizo un llamado a los tabasqueños para evitar participar en estos actos, principalmente por los riesgos que representa para sus vidas al acercarse a materiales flamables, como ocurrió el 26 de marzo con la volcadura e incendio de una pipa en poblado Palo Mulato del municipio de Huimanguillo, sobre la carretera federal Cárdenas-Coatzacoalcos, con saldo de 21 muertos por quemaduras.

“Donde vean que existe un derrame de hidrocarburos, por ningún motivo se acerquen con el propósito de recolectar el producto, pues ya vimos la vulnerabilidad que se presenta en esos momentos en que puede ocurrir una explosión”, alertó el gobernador.

Dijo que su gobierno mantiene cercana colaboración con las instancias federales para la persecución del robo de hidrocarburos, pero reconoció que muchos actos de estos se llevan a cabo por pillaje cuando se registran accidentes, donde la mejor manera de prevenir es evitando que los vecinos se involucren.

Y es que a partir de la tragedia de Palo Mulato, se han registrado dos actos vandálicos de “ordeña” de ductos cerca de ese lugar, donde la población ha acudido en masa a recolectar la gasolina derramada, arriesgando sus vidas.

El martes pasado ocurrió uno en el ejido San Fernando, Huimanguillo, y 24 horas después otro en el poblado La Arrocería, del municipio de Cárdenas.

En ambos casos la población se volcó a llenar cubetas, bidones y tanques de gasolina hasta que fue dispersada por elementos del Ejército y personal de seguridad de Petróleos Mexicanos.

## **“Caen dos exmilitares salvadoreños que trabajaban para “Los Zetas””**

### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**4 agosto, 2015**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/412197/caen-dos-exmilitares-salvadorenos-que-trabajaban-para-los-zetas>

México, D.F., (apro).- Elementos del Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT) detuvieron a 41 presuntos integrantes de dos grupos criminales, entre ellos dos entre ellos dos exmilitares salvadoreños.

Los centroamericanos Luis Antonio Funes y José Miguel Ángel Gálvez aceptaron que trabajaban como sicarios para un grupo delincencial que opera en Reynosa, y recibían un pago mensual de 15 mil pesos cada uno.

En un comunicado, el GCT precisó que las detenciones de los dos exmilitares y otras 39 personas derivaron de los operativos realizados a partir del 21 de julio en las regiones centro, frontera y costa de la entidad.

La dependencia estatal precisó que en la región centro del estado personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal (PF) y Fuerza Tamaulipas detuvo en tres acciones distintas a ocho personas, cuatro de las cuales formaban parte de una banda de secuestradores y extorsionadores que operaba en los municipios de San Carlos, Padilla y Victoria.

En tanto, en la región frontera la PF capturó a Gloria Leticia López Morales y a los dos exmilitares salvadoreños. La detención de los tres sujetos se registró en la carretera Playa General Lauro Villartijua, en el tramo de la caseta de peaje Palo Blanco.

La mujer declaró que su función era reclutar a delincuentes extranjeros, mientras que los exmilitares indicaron que trabajaban como sicarios y recibían un pago mensual de 15 mil pesos cada uno.

En Reynosa, 13 personas a quienes se les aseguraron armas de fuego y equipos de comunicación fueron aprehendidas en el fraccionamiento San Valentín, mientras que en la colonia Lomas Real de la Jarachina Norte cayeron cuatro sujetos encargados de colocar cámaras de video vigilancia para un grupo delincencial.

Por último, en la región costa se logró la detención de 13 infractores, entre ellos cinco secuestradores.

Además de esas 41 detenciones realizadas del 21 de julio a la fecha, el Grupo de Coordinación Tamaulipas deshabilitó cinco narco-campamentos, tres de ellos en el municipio de Nuevo Laredo y dos más en Aldama.

Agregó que de enero a agosto del presente año, personal de las fuerzas de seguridad federal y estatal han localizado nueve narco-campamentos, de los cuales tres operaban en Nuevo Laredo, cuatro en Aldama, uno en Nueva ciudad Guerrero y uno más en Ciudad Victoria.

## **“Mancera elude hablar de la supuesta participación de “Los Zetas” en multihomicidio de la Narvarte”**

### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**3 septiembre, 2015**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/414502/mancera-elude-hablar-de-la-supuesta-participacion-de-los-zetas-en-multihomicidio-de-la-narvarte>

MÉXICO, D.F., (apro).- El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, evadió hablar sobre la presunta presencia de la organización criminal de Los Zetas en la capital del país como se desprende de la declaración ministerial del expolicía implicado en el multihomicidio de la colonia Narvarte.

Ayer Abraham Torres Tranquilino –expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública local y segundo detenido por el caso–, ratificó su declaración en el sentido de que Daniel Pacheco Gutiérrez, primer capturado y ya consignado, así como “Omar”, aún prófugo, pertenecen a ese grupo criminal y ejecutaron a las cinco víctimas porque fueron por droga que una de ellas, Milena Virginia Martín, presuntamente tenía en el departamento.

“Tenemos que ser muy cuidadosos con la información en relación a este caso. Yo diría en términos generales, no me voy a referir al caso en particular, pero en términos generales, recuerden lo que hemos dicho cuando hay temas específicos o seguimientos específicos o tareas puntuales que tengan que realizarse en el combate a la delincuencia organizada pues, obviamente, también ha sido punto de operación la Ciudad de México”.

En repetidas ocasiones, el exprocurador capitalino ha negado que los cárteles de la droga tengan asiento en el DF.

Este jueves, en entrevista luego de un acto oficial, añadió:

“Aquí ha habido capturas, ha habido diferentes operativos. Aquí hay tareas de inteligencia permanente, se menciona al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)”.

La instrucción, dijo, es para que el procurador (Rodolfo Ríos Garza) lo atienda. “Sucede con cada caso que tenemos, las detenciones que hemos tenido aquí, que han tenido contacto con uno o con otro líder, con uno o con otro cártel, pues son en la Ciudad de México. Aquí han sido los seguimientos y aquí han sido los operativos, eso lo hemos ya reiterado en otras ocasiones”.

La prensa le preguntó si con la declaración de Abraham Torres Tranquilino, quien reveló una supuesta intervención de “Los Zetas” en el crimen, la Procuraduría General de la República (PGR) podría atraer el caso.

“Esas son consideraciones jurídicas que habrá que analizar. Es algo que le corresponde al procurador analizar”, aseguró.

En su declaración, el segundo detenido aseguró que en su huida, él y “Omar” fueron detenidos en el auto Mustang rojo por policías de Tránsito en la avenida Río Churubusco, presuntamente porque no traían el cinturón de seguridad. Sin embargo, agregó que los agentes los dejaron ir, aún cuando “Omar” estaba visiblemente nervioso y tenía sangre en sus zapatos.

Miguel Ángel Mancera dijo desconocer esa información, “pero le voy a pedir al procurador en todo caso que pudiera corroborarlo”, aunque luego él mismo se limitó: “Habrá que recordar que hay una suspensión por un juez de distrito para los temas de información de ese asunto”.

El mandatario capitalino se refirió a la solicitud de amparo que las hermanas del fotoperiodista Rubén Espinosa promovieron ante la Juez Novena de Distrito de Amparo en Materia Penal, para que la PGJDF y sus funcionarios involucrados en la investigación resguarden la averiguación previa.

Lo único que repitió Mancera Espinosa sobre el multihomicidio de la colonia Narvarte, es lo que dijo desde el principio: “todas las líneas de investigación deben seguir abiertas hasta en tanto se pueda esclarecer perfectamente este asunto”.

A propósito del mencionado amparo y la supuesta participación de “Los Zetas” en el crimen, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte –a quien la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa señalaron como el responsable de lo que les pudiera pasar, tras las amenazas, represión y hostigamiento que sufrieron en Xalapa–, dijo ayer en breve entrevista en Radio Fórmula:

“Es curioso que los que antes pedían transparencia e hicieron un espectáculo internacional del caso de la Narvarte, ahora que las cosas empiezan a esclarecerse son los mismos que piden que nada salga a la luz pública”.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez, pidió tener cautela:

“Hay que ser muy cautelosos (con) la forma en que declara el detenido, en el hecho de decir que es un testimonio de oídas. Él dice que dijo otro que había una situación”. Estas declaraciones, dijo, son parte de lo que el detenido y su defensa tendrá que comprobar.

## **“Alistan extradición de Omar Treviño, jefe de Los Zetas”**

**Redacción**

**Proceso**

**17 octubre 2015**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/418447>

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tras la extradición a Estados Unidos de 13 narcotraficantes, entre ellos Edgar Valdez Villarreal, La Barbie, ese país solicitó a México la extradición formal de Omar Treviño Morales El Z-42, el último líder importante de Los Zetas.

Según el diario Reforma, que cita fuentes judiciales, la PGR presentó la solicitud formal de extradición ante el Juzgado Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal.

El pedido, de acuerdo con el periódico, se basa en una orden de captura girada el 15 de mayo de 2009 por la Corte Federal del Distrito de Columbia, por exportación y distribución de cocaína y mariguana.

El gobierno estadounidense acusa a Treviño de coordinar el tráfico de grandes cantidades de cocaína y mariguana en la frontera de Coahuila. También se le involucra en el manejo de los caballos y de transferir fondos para ese negocio.

En 2008 se abrió en su contra el expediente 08-cr-00244 en la Corte del Distrito Sur de Texas. Se le acusa de formar parte del Cártel del Golfo y de Los Zetas desde el año 2001 al menos.

Según las autoridades El Z 42 trafica mariguana y cocaína de Nuevo Laredo a Estados Unidos y ha rentado viviendas en Laredo, Texas, para que sicarios las utilicen como casas de seguridad.

Treviño fue detenido el pasado 4 de marzo por el Ejército en su residencia en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

### **“Defensores de migrantes denuncian amenazas de Los Zetas”**

**MATHIEU TOURLIERE**

**Proceso**

**24 noviembre 2015**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/421590/defensores-de-migrantes-denuncian-amenazas-de-los-zetas>

MÉXICO, DF (apro).- Integrantes del albergue “La 72”, localizado en Tenosique, Tabasco, denunciaron que presuntos integrantes de Los Zetas los amenazaron de muerte, justo en momentos en que se encontraban reunidos con agentes de la Procuraduría General de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para entregarles evidencias sobre una red de secuestradores de migrantes.

De acuerdo con fray Tomás González Castillo, fundador del refugio, el sábado 14, poco antes del mediodía, sonó el teléfono de fray Aurelio Tadeo Montero Vázquez. Al contestar, “un señor que se presentó como integrante de Los Zetas le dijo que su integridad física estaba en peligro”, puntualizó.

Tras escuchar la amenaza, agregó, fray Aurelio se puso nervioso y pasó su celular al comandante de la Policía Federal que se encontraba a su lado, quien tomó las otras llamadas que se hicieron debido a que se cortaban a cada momento por la mala calidad de la señal.

Sostuvo que el sujeto que telefoneó se presentó como “comandante Álvarez” e intentó extorsionar a fray Aurelio con 50 mil pesos. “De inmediato activamos el protocolo de seguridad y ya no contestamos ningún número de teléfono desconocido y tampoco salimos de noche. En fin, bajemos el perfil totalmente”, sostuvo.

Durante la reunión, en la que también participó gente de la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los integrantes de “La 72” hablaron con las autoridades sobre la existencia de una red de secuestradores que opera en la zona de Cárdenas, Tenosique, y en Coatzacoalcos, Veracruz.

Un día antes de ese encuentro, tres migrantes hondureños arribaron al albergue y dijeron a los defensores de derechos humanos que personas uniformadas detuvieron el vehículo en el que viajaban, cerca del municipio de Cárdenas, y los secuestraron.

“(Los migrantes) no supieron identificar el uniforme porque era de noche, sólo dijeron que era azul, posiblemente fue la Policía Federal o la municipal”, precisó fray Tomás, quien sostuvo que los hondureños fueron dejados en libertad después de que sus familiares pagaron mil 500 dólares.

Además, González apuntó que sólo en un mes y medio recibieron 16 denuncias de violaciones sexuales y muchísimas de asaltos.

Según los testimonios recabados en el albergue, hay bandas que asaltan a los migrantes mientras caminan a orillas de la carretera que conecta la frontera de Guatemala con Tenosique.

Y es que como los transportistas de la región cobran precios exorbitantes a los indocumentados, muchos de ellos no tienen otra opción que la de caminar, de noche o de madrugada, para evitar a los agentes de migración.

A “aproximadamente seis kilómetros” de Tenosique, grupos criminales asaltan a los migrantes y a veces violan a las mujeres, deploró González, y se alarmó ante el incremento del número de secuestros en la zona.

“Este mes y medio que repuntó la violencia documentemos unos 15 casos de secuestros y al menos dos secuestros masivos (de más de 25 personas) en la frontera con Veracruz”, subrayó.

Asimismo, expresó que las agresiones contra los migrantes se recrudecieron en Tabasco debido al abandono en el que las autoridades han dejado la zona. “Han permitido al crimen organizado apoderarse de ella nuevamente”, lamentó, e insistió que hasta la fecha no ha habido detenciones.

Dijo que hace muy poco tiempo entregaron a las autoridades tres recibos de transferencias internacionales del dinero que pagaron a los criminales los familiares de los migrantes. Los tres recibos, según fray Tomás, indican un mismo beneficiario que retiró el dinero en la misma ventanilla de Tenosique.

“Pero hasta ahora no hubo ninguna detención, aunque entregamos los recibos con el nombre de quien cobra y cómo lo cobra”, se indignó.

Y resaltó: “En las juntas las autoridades se acostumbran a decir que están en esto, que harán todo lo posible para desencadenar un operativo o que están cerca de localizar la casa de seguridad, para que no les presionemos tanto”.

Dijo que no le extrañan las amenazas, pues desde que fundó el albergue, en 2011, observó una correlación entre el incremento de las intimidaciones que reciben sus integrantes y la labor que desempeñan en la atención y denuncia de violaciones a los derechos de los migrantes.

No pocas veces los miembros de “La 72” han señalado el involucramiento de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en las redes de tráfico o de extorsión de migrantes.

En abril de 2013, ante las amenazas constantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de “La 72” y sus integrantes.

Sin embargo, apenas dos noches después de las amenazas contra fray Aurelio, los agentes de la policía estatal que supuestamente custodian al albergue abandonaron el lugar, denunció el encargado.

## “Policías de Orizaba entregaban a detenidos a Los Zetas”

**NOÉ ZAVALA**

**Proceso**

**29 diciembre 2015**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/424826/policias-de-orizaba-entregaban-a-detenidos-a-los-zetas>

XALAPA, Ver. (apro).- A un año y un mes de la desaparición de Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri, la detención de un octavo policía municipal de Orizaba, Veracruz, puso al descubierto una red de oficiales quienes hacían “entregas selectivas” de sus detenidos a células de la organización delincriminal de Los Zetas.

Apenas el 24 de diciembre pasado, fue detenido Yilmar Pérez Herrera, el octavo oficial involucrado en la desaparición de Zito Ángel Zanatta y a quien ya se le dictó el auto de formal prisión (ayer) junto con los policías Rubén Morales Vázquez, Martín Parra Yacotú, Martín Rosas Téllez, Germán Victoria Weisser, Héctor Hugo Villa Vázquez, Ausencio Jacobo Osorio Rincón y Carlos Alberto Gómez Rosas.

Desde octubre del 2015, el Mando Único de la SSP asumió el control de la seguridad en Orizaba y los mandos policíacos locales fueron relevados de la corporación, incluso por la desaparición del hermano del legislador local poblano hay otros cuatro policías municipales prófugos de la justicia. Los datos generales de estos últimos se omiten, por la propia secrecía de la investigación.

La averiguación previa 728/2014, a la que Proceso tuvo acceso, narra que Zito Ángel Zanatta fue detenido e ingresado a los separos de la policía municipal la madrugada del 18 de octubre del 2014, tras escandalizar en las afueras del bar Platinum Nigth Club.

Así lo demuestran las cámaras de video consultadas por elementos de la Policía Ministerial adscritos al caso; sin embargo, para la detención del hermano del priista se utilizaron –según el parte informativo 067064 y 067065- las patrullas de la Policía Municipal rotuladas con los números 73 y 08 y la detención se hizo, según los oficiales en el bar Queens. En dicho centro de recreación, los meseros y vigilantes dijeron nunca haber visto a Ángel Zito.

De estas inconsistencias, los policías municipales aseguran que lo liberaron a las 4:25 horas, pero un video aporta su salida faltando 15 minutos para las 5:00 horas.

En la causa penal 1/2015, los ocho policías hoy en prisión están siendo procesados por “desaparición forzada de personas, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad”.

“Hay varios policías en el bote (sic) por eso, se les da cumplimiento a una orden de aprehensión por desaparición forzada, el modus de operar era detener y entregar a sus detenidos a Los Zetas, pusieron (sic) al hermano del diputado Zito Zanatta, entre otros... este último, Yilmar Pérez cayó ayer. Tarde o temprano los alcanza el brazo de la justicia”, explica un directivo de la Fiscalía General del Estado que permitió el acceso al expediente.

De acuerdo con testigos, afuera de la propia comandancia policial, Zito Ángel Zanatta fue “levantado” por un comando a bordo de una camioneta negra.

Pese a que los familiares de Zanatta solicitaron información a la Policía Municipal de Orizaba sobre el estatus jurídico y paradero del detenido, los oficiales entregaron información falsa, revela la indagatoria ministerial.

“No obstante que sus familiares solicitaron información, ésta les fue proporcionada falsamente, ya que inclusive existen contradicciones en las declaraciones de los policías, con lo registrado en las videograbaciones y la bitácora de la corporación, así como las declaraciones de los testigos, con lo que dicen los indiciados”, expresa la averiguación previa consultada.

Ángel Zito fue dejado en libertad sin cobrarle ninguna multa y sin acreditársele la comisión de un delito, salió de la comandancia policial por su propio pie y desde ahí se desconoce su paradero.

Orizaba, ubicado en la región montañosa central de Veracruz, ha sido escenario de diversas desapariciones y hechos de violencia.

En agosto pasado, en la madrugada del jueves 13, fueron acribillados dos jefes regionales de Los Zetas, José Márquez Balderas, “El Chichi”, y Felipe Santana Hernández, “El Felino”, en el interior del bar “La Taberna”, cuando un grupo armado irrumpió y les disparó a quemarropa. En la refriega murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, quien hasta junio último fue corresponsal de Televisa en esa ciudad, así como Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero y José Eduardo Castillo Romero, uno de ellos, mesero del lugar.

Esta quintuple ejecución sacó a la luz cómo las células delincuenciales suelen tener contactos directos con la Policía Municipal de Orizaba, pues el periódico “El Buen Tono”, a través de un comunicado, exhibió como sus exreporteros, Enrique Rivas y Guillermo Ramos –ya despedidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada- fueron “reclamados” en las instalaciones de la comandancia policiaca por miembros de la delincuencia organizada.

“Tras la balacera en el bar La Taberna, los periodistas pidieron su traslado a Córdoba, pero policías les informaron que afuera de las instalaciones (de la policía) están Los Zetas y están pidiendo que los entreguen”.

Una semana previa al ataque de “La Taberna”, la madrugada del viernes 7 de agosto, cibernautas dieron cuenta de la aparición de una narcomanta en la autopista Córdoba-Orizaba, en la que se anticipaba que irían por jefes de plaza de Los Zetas, por taxistas, policías y reporteros al servicio de esa organización criminal. La firmaban los Cáteles Unidos, que aglutina a Los Ántrax, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Estamos aquí para hacer una limpia –decía la manta-. Usen a más gente para que sepamos quiénes son y vayamos por ellos también. Todo Córdoba –municipio conurbado a Orizaba- y la región sabe que ustedes mueven su droga armas y dinero en taxis”.

En esta región de Córdoba y Orizaba, se encuentra la agrupación civil “Solecito” que aglutina a madres y familiares de personas desaparecidas y quienes han sido víctimas de un “levantón” o se fueron sin dejar rastro alguno; en varios de estos casos, los integrantes de “Solecito” han responsabilizado a policías municipales o estatales de estar involucrados en la desaparición forzada de su familiar.

**2016**

José Gil Olmos. “Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas”. *Proceso* número 2057, 3 abril 2016. pp. 23-25. <https://www.proceso.com.mx/436192/narco-zetas-paramilitares-la-nueva-realidad-en-chiapas>

### **“Narco, zetas y paramilitares, la nueva realidad en Chiapas”**

En los últimos años –desde que el PVEM y el PRI llegaron a la gubernatura– la violencia vinculada al crimen organizado se desató en Chiapas. Los Zetas protagonizan la lucha por plazas estratégicas, multiplican la distribución de droga y amplían su repertorio delictivo; todo, impunemente. Y no es la única señal de descomposición durante el gobierno de Manuel Velasco: grupos paramilitares de infame memoria como Paz y Justicia, Los Chinchulines y MIRA han resurgido al amparo del poder político.

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (Proceso).- En el norte, Los Altos y la frontera de Chiapas con Guatemala se desató una pelea entre grupos del crimen organizado de la que muy pocos quieren hablar. Se trata de zonas a las cuales ni siquiera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se mete, pues las bandas criminales se han fortalecido al fundirse con paramilitares e integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La vida en algunas de las comunidades indígenas de estas zonas cambió radicalmente. Entre los jóvenes indígenas aumentó la adicción a la cocaína y el crack que circula en sus pueblos, comunidades o colonias, como la famosa Hormiga –a las afueras de San Cristóbal de las Casas–, conocida porque ahí se venden drogas, armas y autos robados.

Un hecho reciente exhibió la virulencia en la batalla por el control del territorio. El 17 de julio de 2015 fue reportada la desaparición del activista Toni Reynaldo Gutiérrez López en el municipio de Tila a manos de policías municipales y civiles armados. Una semana después, fue encontrado muerto con huellas de tortura, la cara desollada y sin ojos.

Magaly del Carmen Cruz Pérez, esposa de Gutiérrez, y habitantes de Tila han denunciado la presencia de Los Zetas y de paramilitares en esta parte del estado. También lo han hecho los sacerdotes Blas Alvarado, de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y Marcelo Pérez, de Simojovel, quienes acusan al gobernador Manuel Velasco –quien llegó al poder en diciembre de 2012 como abanderado del PVEM y del PRI– de intentar ocultar la presencia de la delincuencia organizada en Chiapas para no ensombrecer sus pretensiones de lanzarse como candidato a la Presidencia de la República en 2018.

### **El desvanecimiento**

Desde 1994, la atención pública sobre Chiapas se concentró en el EZLN, luego de la declaración de guerra que lanzó al Estado mexicano. Pero ya desde entonces era evidente la presencia de poderosos grupos del narcotráfico en la entidad.

En mayo de 1993, Joaquín Loera Guzmán fue capturado por primera vez en la frontera de Guatemala y Chiapas. Hubo versiones de que el jefe del Cártel de Sinaloa se paseaba por San Cristóbal de las Casas (Proceso 867). En 2010 se reportó nuevamente su presencia en el municipio de Villa Flores y, más

recientemente, después de su segunda fuga, fue visto por Comitán tras haberse escapado de un operativo de la Marina en Tamazula, Durango, donde se había refugiado (Proceso 2033).

Luis Alonso Abarca González, del Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (DH-DO), sostiene en entrevista que el asesinato de Toni Reynaldo es una señal clara de la presencia de grupos del narcotráfico, como Los Zetas, que están peleando el control de la zona al Cártel de Sinaloa y sus aliados del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El activista social observa que, a partir de las elecciones municipales del año pasado –en las cuales el PVEM, partido del gobernador Manuel Velasco, se llevó 57 de las 122 alcaldías en disputa–, hubo un repunte de la presencia de grupos paramilitares, como Paz y Justicia, Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), Los Diablos, Los Gómez y Los Petules, entre otros, que se han vinculado con el narcotráfico y la trata.

“Se trata de la disputa por plazas estratégicas en la lógica de la delincuencia organizada. Pretenden controlar Comitán y Frontera Comalapa por su cercanía con Guatemala y por el corredor que va desde Comitán hasta Palenque, para el movimiento y trasiego de drogas y armas.

“En Tila, por su cercanía con Tabasco, está una nueva ruta migrante. En Nueva Esperanza se menciona que hay gente que se dedica al tráfico de migrantes y que tiene protección del ayuntamiento.

“Ése es el contexto de violencia. Y ahora hablamos de la reactivación de un grupo paramilitar, pero con componentes distintos a 1994, porque entonces surgió para contener al EZLN y evitar que la gente simpatizara o se sumara a él. Ahora se le agrega el factor de delincuencia organizada y un reordenamiento territorial con intereses de minería y petróleo.”

De acuerdo con el mapeo que hacen algunas organizaciones, los brotes de violencia han ocurrido en Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Tila, Palenque, Ocosingo, Marqués de Comillas, La Trinitaria, Frontera Comalapa, El Bosque, Oxchuc y San Cristóbal de las Casas –otrora áreas de influencia del EZLN.

Pero ahora los zapatistas se han replegado o sólo mantienen posiciones de alerta, señala Luis Alonso Abarca González, del DH-DO.

–¿Qué ha pasado con el EZLN? –se le pregunta.

–En Tila el EZLN se ha mantenido al margen, pensamos que ya no tiene un papel significativo en la región. Hay bases de apoyo, pero se han reducido drásticamente en los últimos años. Ahí han avanzado grupos paramilitares y de la delincuencia organizada. Vemos que el EZLN está en una situación de impasse o de repliegue indefinido. Ya no tiene la fuerza que tuvo hasta 1998 o 1999.

Incluso en la región de Las Cañadas, observa, donde el EZLN nació en 1983, el zapatismo ha mantenido un silencio total y no se ha pronunciado respecto del narcotráfico.

“Hay total hermetismo y, de repente, lo único que se sabe es que hay ciertos roces en las comunidades. Recuerdo una anécdota que me decía un compañero: el impacto del avance del narco lo puedes ver por el tipo de grupo musical que llega a Las Cañadas, incluso en comunidades zapatistas. Antes era impensable que fueran grupos como banda Maguey, Calibre 50 o El Komander.”

El Ejército, recuerda, declaró que destruyó mil hectáreas de amapola en Las Cañadas, pero él considera que esa afirmación sólo intentó vincular al zapatismo con el crimen organizado.

–El crimen organizado ha tenido presencia desde hace tiempo en Chiapas, ¿pero está resurgiendo? –se le inquiera.

–Sí, pero el componente nuevo es que hay un fin estratégico: el control del territorio. Hay interés en apropiarse de los recursos mineros, por el agua, por los recursos de la selva y por la frontera.

–¿Los Zetas?

–En el caso de Tila hay pintas del Z-40 y el Z-42. En San Cristóbal hay pintas de MS-13, de los Mara Salvatrucha 13. Estos grafitis coinciden con el cambio de las rutas de los migrantes, porque el ferrocarril de Tapachula y Ciudad Hidalgo fue cerrado y la gente se está internando hacia el centro. San Cristóbal está en el camino y el corredor sigue hacia San Juan Chamula, Bochil, Pueblo Nuevo y Tabasco. La otra ruta es de San Cristóbal a Ocosingo, Yajalón y Tila, hacia Tabasco.

Asevera que en Pueblo Nuevo Solistahuacán hay grupos criminales que son parte del gobierno, y que bandas como el Cártel de Jalisco Nueva Generación también buscan entrar.

Frontera Comalapa, indica, es una plaza estratégica porque hace frontera con Guatemala. Está controlada por Los Zetas.

“Desde 2009 el gobierno de (el entonces mandatario perredista) Juan Sabines reconoció en un informe que Chiapas estaba controlado por Los Zetas, y por eso no había violencia. Pero creemos que hoy con el PVEM hay un cambio y una disputa de nuevos grupos. Esto reactivó la violencia aparentemente paramilitar. Creemos que hay más cosas detrás, que hay delincuencia organizada como en otras partes del país, y que no se trata de casos aislados.”

### **Paramilitares y narcos**

En Chiapas, los grandes grupos del crimen organizado se fusionaron o aliaron con bandas locales –cuyo origen se remonta al paramilitarismo que el gobierno de Ernesto Zedillo impulsó en 1996 contra el EZLN.

El párroco de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Blas Alvarado Jiménez, coordinador regional de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (Limeddh) y fundador del albergue de migrantes conocido como La 72, en Tenosique, Tabasco, advierte en entrevista que Manuel Velasco quiere ocultar a los paramilitares por convenir a sus aspiraciones presidenciales.

“Los grupos que podríamos llamar oriundos seguramente se han relacionado con algún cartel fuerte que los financie. Tienen cuernos de chivo, armas que perforan blindajes... Y no se dedican sólo al narcotráfico, sino que cobran cuotas para que la gente pueda seguir trabajando. Ya han quitado cafetales, quemado casas y desplazado familias completas a otras comunidades.”

–¿Hay presencia de zetas? –se le pregunta.

–Sí, vienen del norte de Chiapas, de Reforma, Pichucalco, de la zona de Teapa. Esa gente trabaja y maneja la zona de los migrantes allá en Tenosique y está incursionando en el norte de Chiapas. Los

Zetas no sólo manejan armas y secuestros, también las drogas y el tráfico de personas. En realidad Los Zetas están en todos lados acá, por el sureste.

El 1 de enero de este año, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH-BC) denunció que el PVEM está vinculado con el grupo paramilitar Paz y Justicia en Tila y Sabanilla (norte de Chiapas), municipios que ganó en las elecciones de junio de 2015.

“Paz y Justicia nunca fue desmantelado como tal. Desde la década de los noventa hasta la del 2000 realizaron acciones ofensivas, y la estructura nunca fue desarmada”, acusó entonces Jorge Luis Hernández, coordinador del Área de Incidencia del CDH-BC.

Luis Alonso Abarca González, del DH-DO, indica que los vecinos de Tila aseveran que los traficantes de personas tienen protección del ayuntamiento.

En ese municipio, ejidatarios adherentes al EZLN han denunciado al exalcalde Linder Gregorio Gutiérrez Gómez; a su esposa, la diputada local por el PVEM Sandra Luz Cruz Espinoza, y al actual munícipe, Leopoldo Édgar Gómez Gutiérrez, de formar parte de Paz y Justicia.

En esta región, acusan, siguen operando los rescoldos de otra agrupación paramilitar conocida como Los Chinchulines, mientras que, en la selva, el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), fundado por los hermanos María Gloria y Norberto Santiz, ahora está vinculado con el tráfico de migrantes.

### **Las adicciones**

Los cárteles también han multiplicado la distribución de droga entre los jóvenes indígenas.

“En Tila ya es una constante, los jóvenes no sólo consumen mariguana, también cocaína. Además vemos un cambio en la aspiración de los muchachos. Ahora quieren trabajar en el crimen organizado, y esto se ve incluso en San Cristóbal de las Casas”, señala Luis Alonso Abarca.

Marcelo Pérez, presbítero de Simojovel, ha sido amenazado por Juan y Ramiro Gómez –exalcaldes priistas conocidos como Los Gómez–, vinculados con el tráfico de armas y estupefacientes. En entrevista, reconoce el problema de adicción a los enervantes en las comunidades indígenas.

“Simojovel y Pueblo Nuevo ya se volvieron mercados. En Simojovel está el grupo de Los Diablos, que ha atemorizado a la población, ha causado desplazamientos y hace poco mató a dos personas”, Además, abunda, cobra derecho de piso a los comerciantes.

Denuncia que, de hecho, él ya fue amenazado e incluso supo que esa banda ofrece “mucho dinero” para que lo maten.

El párroco de Pueblo Nuevo, Blas Alvarado, confirma el consumo de coca y crack en los pueblos indígenas, no sólo del norte sino en el centro de Chiapas: “Las drogas duras ya están entrando. Antes la cocaína era la máxima, ahorita ya venden piedra y toda esa porquería. Hay muchachitos de 12 años, de secundaria, entrándole al crack.

–¿Eso en Tila? –se le inquiera.

–No solamente ahí, también en Los Altos, en toda la zona de San Juan Chamula...

–¿Por qué todo esto se está manteniendo en silencio?

–Porque hay intereses grandes metidos ahí, y estas gentes que manejan las drogas duras son gentes que financian las cuestiones políticas. Han creado un ambiente de terror, y nadie se mete, de tal manera que ellos van a terminar agarrando el control de todo, ellos van a poner y quitar autoridades, ellos van a controlar todo.

Humberto Padgett. “Tamaulipas: gobernadores y narco, hermanos”. *Proceso* número 2065, 29 mayo 2016. pp. 16-20. <https://www.proceso.com.mx/442099/tamaulipas-gobernadores-narco-hermanados>

### “Tamaulipas: gobernadores y narco, hermanos”

La historia reciente de Tamaulipas hermana a los hombres del poder –desde el mítico Juan N. Guerra hasta varios gobernadores– con los cárteles de la droga oriundos de esa entidad: el de Matamoros, primero, y luego el del Golfo y Los Zetas. El periodista Humberto Padgett hurga esa historia y nos ofrece el libro Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano (Urano), de reciente aparición. Con permiso del autor ofrecemos aquí fragmentos del primer capítulo.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Habla y habla un hombre de dos nacionalidades y tres lealtades: primero a la Policía Ministerial de Tamaulipas, luego al Cártel del Golfo y, después, a la DEA. Se llama César Eduardo García Martínez. Sus amigos le dicen *Pollo Chicken*, porque es un ser de ambos lados de la frontera que, como agente, ganó reputación con su participación en el asesinato de Guillermo González Calderoni, un emblemático comandante de la Policía Judicial Federal que había vendido su alma a Amado Carrillo Fuentes, *el Señor de los Cielos*, capo del Cártel de Juárez, y a Juan García Ábrego, jefe del Cártel del Golfo, al que el mismo *Pollo* pertenece.

En su calidad de sicario, *el Pollo* adquiere notoriedad por funcionar como una especie de secretario particular, un negociador personalísimo, de Osiel Cárdenas Guillén, jefe de la organización presente en la primera línea de responsabilidad de la violencia que define hoy a México.

Como informante de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos y testigo de la Procuraduría General de la República (PGR), sus palabras retumban como la percusión de una metralleta calibre 50 disparada contra la clase política tamaulipeca:

“Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1998 se hicieron entregas a Jesús Vega Sánchez [operador político y enlace del gobierno priista con el narcotráfico] para la campaña de Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba [gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2005] y las cantidades oscilaban entre 400 [mil] y 800 000 dólares cada vez que se le entregó y los lugares donde se le hizo las citadas entregas fueron diversos.

(...) “A principios de octubre de 1998, Osiel Cárdenas Guillén me entregó 500 000 dólares para que a su vez se los entregara a Juan José Muñoz Salinas, *el Bimbo* [otro policía judicial con el doble pasaporte de agente de la ley y narcotraficante]. [El] dinero era también para la campaña de Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, por lo que hablé por teléfono con *el Bimbo* y le dije que ya tenía el dinero que había mandado Osiel para Yárrington, manifestándome que me pusiera de acuerdo con Juan Carlos González

Sánchez [*la Torta*, también policía ministerial y primo de Jorge Eduardo Sánchez Costilla, *el Coss*, otro agente judicial y futuro líder del Cártel del Golfo] para que se entregara el dinero a Jesús Vega Sánchez.

“Me trasladé junto con Juan Carlos González Sánchez a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, a la casa de Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba, la cual se ubica en la calle de Nápoles número 7, cerca de la calle Tamaulipas, en el Fraccionamiento Río, primer sector. Afuera de la casa, nos abrieron la cochera e ingresamos y en una palapa que se encuentra en el patio estaba Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba [que había sido alcalde de la ciudad entre 1993 y 1995], Baltazar Hinojosa Ochoa [que sería alcalde de la ciudad entre 2005 y 2007] [...]. Yo fui el que entregó el maletín a Jesús Vega Sánchez, el cual traía 500 000 dólares en billetes de cien y veinte dólares, y le dije que ese dinero era enviado por Osiel Cárdenas Guillén...”

Antes, junio de 1998, Vega viaja a Reynosa para reunirse con un policía bien curtido en los negocios que interesan, un hombre llamado Juan José Muñiz, el Bimbo o Comandante Bimbo, en el restaurante La Mansión del Prado, en la calle de París.

Vega informa al Bimbo que Yárrington lo ha enviado a recolectar fondos para la campaña electoral.

–No importa de dónde vengan los fondos y los compromisos que se tengan que pactar. Nos urge dinero. Di a los comandantes que están en la frontera que junten dinero para la campaña y, a cambio, el candidato se compromete a dejarlos en los mismos puestos cuando sea gobernador –pide Vega, según el testimonio contenido en la averiguación previa.

–Yo solicito el dinero a los comandantes que piden, nomás tomen en cuenta que el dinero es del crimen organizado y ellos, como comandantes, van a tener que cumplir con los compromisos que van a adquirir –advierte el Bimbo, así, en plural.

–Por eso no te preocupes. Tomás está dispuesto a cumplir con los compromisos que se están adquiriendo. Por algo me envió a mí –presume Vega.

Estas escenas y otras más de lo que debiera ser un *thriller* ficticio que gira alrededor de distintas maneras de traicionar a los electores es, en realidad, un documental que se convierte en una trama de terror gore. Todo queda contenido en la averiguación previa PGR/UEIDCCS/012/2009 abierta por la Procuraduría General de la República (PGR). La versión utilizada en este reportaje aparece vertida en el recurso de amparo indirecto número 1298/2012-5 promovido sin éxito ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales por Tomás Jesús Yárrington Ruvalcaba contra su –tampoco exitosa– orden de aprehensión en México. (...)

### **La lista dorada**

Los documentos estadounidenses y mexicanos sostienen que Yárrington y varios de sus colaboradores más cercanos, incluidos su predecesor Manuel Cavazos Lerma, su sucesor Eugenio Hernández y uno de sus hombres de mayor confianza y aspirante a gobernar el estado a partir de 2016, Baltazar Hinojosa Ochoa, mantienen tal cercanía con el narcotráfico que se confunden en un mismo grupo de poder.

Los papeles conforman un auténtico diccionario de personajes del narcotráfico y de la política tamaulipeca, pero unos y otros con alcance más allá de México. Y los muestra como parte de un mismo sistema de gobierno, uno real, de facto, independientemente de que algunos habiten las listas de los

criminales más buscados y otros vayan del corte de listones de las obras públicas a las páginas de las revistas de sociedad.

Baltazar Hinojosa Ochoa. Candidato a gobernador por el PRI en 2016. Según la averiguación previa de la PGR, el alcalde de Matamoros entre 2005 y 2007 recibe dinero del Cártel del Golfo a cambio de ceder a la organización criminal los nombramientos en la Policía Municipal de esa frontera.

Tomás Yárrington Ruvalcaba. Gobernador entre 1999 y 2004. Fugitivo de la justicia de Estados Unidos.

(...) ¿Cuáles fueron los compromisos que aceptaron los políticos? ¿Qué dieron los funcionarios a cambio de las maletas con millones de dólares?

Parte de la respuesta está en la boca de Francisco Alberto Vázquez Guzmán, Rufino, otro testigo protegido que fue operador del cártel:

“[El] procurador Francisco Cayuela, obedeciendo las órdenes de Osiel Cárdenas Guillén, nombraba a los comandantes de plaza que le sugería [...]. Otra de las formas de apoyo que daban el procurador Francisco Cayuela y el gobernador Tomás Yárrington Ruvalcaba a la organización era dejar pasar la droga por todo el estado, no molestar a los vendedores de droga, avisar de los operativos que se iban a practicar, a fin de que Osiel Cárdenas Guillén no estuviera en ese momento, tanto Yárrington como Francisco Cayuela, a través de los servidores públicos responsables en ese tiempo de la seguridad pública, omitían cumplir sus funciones y permitían el trasiego de la droga como es marihuana y cocaína, sin que nadie los molestara, ya que eran apoyados por todas las autoridades. No cabe perder de vista que la droga [cocaína y marihuana] era transportada desde Guatemala a Matamoros y Valle Hermoso Tamaulipas y su destino final era Estados Unidos de Norteamérica.”

Las reuniones se extienden y las imposiciones de responsables de la seguridad pública también. No hay ciudad en que no haya un sujeto designado por el narcotráfico como responsable de la seguridad pública de quienes ahí viven. Los pactos continúan tras la detención de Osiel, en 2003, y el fin del mandato de Yárrington, en 2005.

Los narcos son el Coss y Heriberto Lazcano, líder de Los Zetas, militares desertores de élite quienes han de instaurar un nuevo método delictivo basado en la violencia generalizada contra la población.

Habla José Salvador Puga Quintanilla, ex zeta, renombrado para el asunto judicial como Pitufo:

“Una segunda reunión se llevó a finales del mes de abril de 2004, en una quinta propiedad de Alí Rodolfo Lara Nájera, uno de los secretarios de Tomás Yárrington, ubicada en el kilómetro siete de la carretera Victoria a Matamoros [...]. Tengo conocimiento que es propiedad de Alí porque me lo dijo Ricardo Gamundi Rosas. En esta reunión estuvieron presentes Eugenio Hernández Flores, Ricardo Gamundi Rosas, Rodolfo Torre Cantú, Fernando Alejandro Cano Martínez [revisa una lista de operadores del Cártel del Golfo y de Los Zetas], Heriberto Lazcano Lazcano alias Z-14 [y] el de la voz.

“Nos encontrábamos ubicados detrás de Heriberto Lazcano Lazcano, a una distancia aproximada de un metro, cuando le dijo a Eugenio Hernández Flores que quienes harían los pagos y movimientos que le fueran requeridos dentro de su gabinete de Gobierno una vez que fuera gobernador, serían Los Zetas, a través de Alberto González Xalate, el Paisa; Rogelio Díaz Cuellar, el Rojo, así como el de la voz, debido a que éramos los que estábamos en la plaza de Ciudad Victoria.

“En esta reunión me tocó transportar de Valle Hermoso a Ciudad Victoria la cantidad de 25 millones de dólares, en 10 maletas, en una camioneta Avalanche negra y, ya en la palapa del rancho, bajé las 10 maletas y poniéndolas a la vista de Eugenio Hernández Flores, le manifesté que contenían 25 millones de dólares que le entregaba Heriberto Lazcano Lazcano. Eugenio Hernández Flores agradeció a Lazcano la entrega y ordenó a Ricardo Gamundi Rosas, Eduardo Rodríguez Berlanga, la Conga, y Fernando Cano Martínez que subieran las maletas con el dinero a una camioneta Suburban de color blanco.”

## **Enemigos**

(...) Yárrington también es vinculado con el asesinato del excandidato a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú, hermano del actual gobernador Egidio, ocurrido en junio de 2010.

La Corte de Texas, tras la acusación interpuesta por la DEA, revela que Peña Argüelles recibe el 29 de noviembre de 2011 un mensaje del presunto líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z-40: “Su hermano [Alfonso] ha estado diciendo que usted y Tomás Yárrington, junto con [Jorge Eduardo] Costilla [en ese momento líder del Cártel del Golfo] asesinaron al candidato a gobernador Rodolfo Torre Cantú porque afectaba al negocio de la construcción y estaba patrocinado/protegido”.

Ese mismo día, Alfonso Peña, hermano de Antonio, es encontrado muerto en Nuevo Laredo. Junto al cuerpo había una manta en la que se acusaba a Antonio de supuestamente haber robado 5 millones de dólares de Los Zetas.

Rodolfo Torre Cantú es candidato en 2010 de la alianza conformada por el PRI, el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) a la gubernatura de ese estado. Seis días previos a la elección, el 28 de junio, un comando armado intercepta a Cantú y lo asesina junto a cuatro de sus acompañantes.

En 2012, la PGR informa que Eduardo Costilla Sánchez, el Coss, líder del Cártel del Golfo, ordena a su grupo de sicarios asesinar a Cantú tras negarse a realizar operaciones de lavado de dinero y otros negocios del crimen organizado.

En diciembre de ese mismo 2012, el testigo protegido identificado como Pitufu declara a la PGR que Rodolfo Torre Cantú es llevado por Eugenio Hernández y Tomás Yárrington a reuniones con Heriberto Lazcano, el Lazca.

(...)También Hinojosa, también de Tamaulipas y también relacionado en la averiguación previa PGR/SIED0/UEIDCS/012 /2009 es el candidato que el PRI ha propuesto para suceder a Manuel Cavazos, Tomás Yárrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre en la silla de gobierno.

Baltazar Hinojosa funge como alcalde de Matamoros entre 2005 y 2007, años en que el estado es propiedad del PRI y del Cártel del Golfo, y ese municipio es cuna del cártel, sede del gobierno de facto que durante décadas ejerce Juan N. Guerra.

A partir de 2015, como presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, Baltazar Hinojosa funciona como la mano derecha del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, en el Congreso. Videgaray es, como Peña Nieto, otro beneficiario de Grupo Higa: la empresa le vende, en la menos grave de las posibilidades, una casa en el Club de Golf Malinalco, Estado de México, con intereses por debajo de los existentes en el mercado financiero legal.

Juan Alberto Cedillo. “Los Zetas, reyes de Coahuila”. *Proceso* número 2073, 24 julio 2016. pp. 36, 37, 38, 40. <https://www.proceso.com.mx/448388/los-zetas-reyes-coahuila>

### “Los Zetas, reyes de Coahuila”

Mientras las plazas que controlaban Los Zetas en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz o Zacatecas padecían encarnizados embates del Cártel del Golfo, La Familia Michoacana o el Cártel de Sinaloa, en el norte de Coahuila los líderes de esa mafia han disfrutado en paz y tranquilidad por lo menos durante la última década, pues compraron a las autoridades. Los dichos de un testigo –en el juicio a un sicario en Texas, que concluyó la semana pasada– revelan detalles de esa impunidad lograda a base de sobornos que incluso habrían llegado hasta el palacio de gobierno.

SAN ANTONIO TEXAS (Proceso). - “Era la madrugada del sábado y acababa de llegar a mi casa y me preparaba a dormir”, contó Adolfo Efrén Tavira Alvarado el pasado jueves 14, sentado en el banquillo de los testigos de la Sala Tres de la Corte Federal de Estados Unidos, División San Antonio.

“De repente sonó el portón de la casa. Cuando me asomé vi que entraron tres personas armadas. ‘Vienen por mí’, le dije a mi esposa”. En su domicilio dormían sus dos hijos menores. El mayor había salido con sus amigos.

“Le dije a mi esposa que escondiera a nuestros hijos, cuando gritaron mi nombre y entró Gustavo (Ramón Martínez), mi amigo”.

Éste dijo: “¿Compadre vámonos, apúrate!” Enseguida entró Marciano Millán Vázquez, Chano, ordenando: “¡Vámonos ya, rápido!” El tercer hombre se apostó a la entrada. Se cubría la mitad del rostro con una máscara de calavera.

Gustavo tomó a los hijos de Tavira, que ya lo conocían, y los escondió en un clóset junto con su esposa, para que Chano no se los llevara.

Gustavo me preguntó: “¿Qué hiciste?” “No he hecho nada”, respondió. Lo sacaron de su casa y lo tiraron en el piso de una camioneta. Lo trasladaron a un lugar al cual tardaron unos 15 minutos en llegar. Durante el trayecto sólo se escuchaban radios informando que ya lo llevaban. Arribaron a un gran terreno bardeado en el extremo oeste de Piedras Negras.

Ahí Chano lo bajó y lo esposó. Lo llevó a otra camioneta. Era una noche oscura, pero Tavira logró ver que en el sitio había muchos vehículos y decenas de sicarios armados. En un lugar del terreno alcanzó a ver a más de 30 personas de rodillas, con las manos amarradas a la espalda.

En la camioneta lo esperaban los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42.

“Fue la primera vez que los vi”, dijo Tavira en el juicio.

“Éste es Tavira, el que trabaja con Poncho”, le dijo David Alejandro Loreto Mejorado, El Comandante Enano, a Z-40. Éste le preguntó: “¿Dónde está Poncho?”

“Le dije que hacía tiempo que no lo veía”, contó el testigo.

En ese momento llegó otro zeta, Daniel Menera –con un teléfono en la mano–, y le dijo a Z-40: “Comandante, ¿me permite? Tavira trabaja para nosotros, ya no trabaja para Cuéllar” y le entregó el celular. Z-100 llamaba.

Tras tomar la llamada, Z-40 dijo: “Ok, está bien. ¿Por qué no me habían dicho? En este momento lo dejo ir, pero cualquier cosa que haga, tú me respondes”, le comentó a Menera.

Menera lo subió a un auto y salieron del terreno. En el trayecto pasaron junto a las personas hincadas entre las cuales alcanzó a ver a un amigo suyo de la secundaria, Víctor Cruz, con su esposa y su hijo. Eran amigos de Alfonso Poncho Cuéllar.

“Ya que estaba en el carro” ... Tavira interrumpió su testimonio y rompió a llorar. Se hizo un gran silencio en la sala. Después de una pausa agregó: “Se comenzaron a oír disparos”.

Horas antes, al filo de las 17:30 del viernes 18 de marzo de 2011, habían llegado a Allende 42 camionetas con unos 200 hombres armados, escoltadas por cuatro patrullas de la Policía Municipal. Esa tarde los sicarios se llevaron a más de 150 personas rumbo a un rancho sobre la carretera a Villa Unión.

La escena se repitió varios días en municipios de Cinco Manantiales, de la Región Carbonífera y Ciudad Acuña...

J. Jesús Esquivel. “Cárteles mexicanos, amos del mercado estadounidense de heroína y anfetaminas”. *Proceso* número 2093, 11 diciembre 2016. pp. 30-34. <https://www.proceso.com.mx/466261/carteles-mexicanos-amos-del-mercado-estadunidense-heroina-anfetaminas>

### **“Cárteles mexicanos, amos del mercado estadounidense de heroína y anfetaminas”**

Un informe de la DEA recientemente desclasificado que analiza las actividades del narcotráfico en el territorio de Estados Unidos durante 2015 es contundente: ninguna organización criminal es capaz de hacerle sombra a los cárteles mexicanos en cuanto a distribución y venta de estupefacientes en ese país. Incluso las mafias colombiana y dominicana, tradicionales proveedoras de ese mercado, se han hecho a un lado para evitar roces con las organizaciones de México.

WASHINGTON (Proceso). - La DEA lo tiene claro: los cárteles mexicanos son dueños absolutos tanto del tráfico de drogas hacia Estados Unidos como del mercado de estupefacientes en ese país, y en el futuro inmediato no hay organizaciones criminales que signifiquen una amenaza para ellos.

“Ningún otro grupo puede desafiarlos en un futuro cercano”, sentencia la Administración Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, en un informe de inteligencia recientemente desclasificado y titulado *Evaluación anual 2015 sobre la amenaza de las drogas*.

“Las organizaciones trasnacionales criminales de México se mantienen como la gran amenaza de las drogas para Estados Unidos”, precisa el informe de inteligencia, entregado la semana pasada por la DEA a la Casa Blanca y a los comités y subcomités de las cámaras del Congreso federal.

El reporte, de 136 páginas, ilustra con mapas y estadísticas cómo los cárteles de México –en particular los de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), este último en colaboración con el de Los Cuinis– son en este momento los que dominan la producción, el tráfico y la distribución de drogas en Estados Unidos, el más grande mercado de consumo de estupefacientes en el mundo.

Enfocado en la amenaza que representan las drogas para la seguridad nacional y para la sociedad estadounidense, el informe desclasificado por la DEA destaca que ahora los cárteles de Sinaloa y de Jalisco han crecido tanto que ya son “proveedores” de heroína y metanfetaminas de las tradicionales organizaciones de trasiego de enervantes de Colombia y la República Dominicana.

“Las polifacéticas organizaciones mexicanas trafican heroína, metanfetaminas, cocaína y marihuana en todo Estados Unidos, utilizando redes bien establecidas de transporte y distribución”, se lee en el documento desclasificado.

En el apartado sobre los cárteles mexicanos se enfatiza que éstos controlan toda la frontera sur de Estados Unidos y siguen expandiendo sus tentáculos de distribución, particularmente para la heroína, tal vez la droga de mayor consumo en la actualidad en aquel país.

Aparte de dar más poder a los cárteles mexicanos, el incontenible mercado de consumo de enervantes de Estados Unidos está dejando fuera del negocio a las organizaciones colombianas y dominicanas, que hasta el año 2000 eran las principales vendedoras y distribuidoras de heroína al mayoreo en la zona del noroeste estadounidense.

De las organizaciones colombianas de tráfico de heroína y cocaína, el gobierno estadounidense apunta que éstas, conscientes del poder de los cárteles mexicanos, desde hace unos tres años prefieren llevar su producto por la zona del Caribe, antes que meterse en las rutas de la frontera norte de México.

La estrategia de los cárteles mexicanos para evadir a la justicia de Estados Unidos consiste en utilizar a las pandillas estadounidenses y a organizaciones criminales de origen dominicano.

“Las organizaciones colombianas y mexicanas usan las redes criminales dominicanas (en Estados Unidos) para el transporte y distribución al menudeo de heroína y cocaína”, acota el informe.

Según la DEA, el apetito por la heroína mexicana –droga de moda y la más barata en el mercado estadounidense– ha enriquecido a cárteles como el de Sinaloa y el CJNG.

La creciente demanda de heroína mexicana –en variedades conocidas como “cafecita” y “blanca”; la segunda, de mayor pureza y valor–, según el informe de inteligencia, es responsable de las 120 muertes diarias por sobredosis que ocurren en Estados Unidos. Este dato viene de las estadísticas recogidas en 2014 por el Centro Nacional para el Control y Prevención de Enfermedades.

Las metanfetaminas –drogas que siguen a la heroína en cuanto a popularidad y consumo en Estados Unidos– son otro enervante cuyo mercado dominan y controlan los cárteles mexicanos. “No obstante que hay producción a niveles pequeños de metanfetamina en Estados Unidos, la disponibilidad de metanfetaminas de mayor potencia y pureza se debe a que su elaboración y distribución proviene principalmente de México”, precisa el reporte desclasificado por la DEA.

### **División geográfica**

En el capítulo dedicado al narcotráfico mexicano, el documento de inteligencia muestra un mapa de México dividido en regiones, donde se ve la presunta hegemonía de los distintos cárteles del país en la producción, transporte y trasiego de drogas.

Respaldada con la información de inteligencia recolectada por las distintas agencias de espionaje del gobierno federal estadounidense –la CIA y el Pentágono, entre otras– en 2014, la DEA reparte el control del territorio mexicano entre el Cártel de Sinaloa, el CJNG, Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios, el Cártel de Juárez, el del Golfo y el de los Beltrán Leyva.

En ese mapa ya no figuran el Cártel de Tijuana ni el de los Arellano Félix. A la zona que tradicionalmente se consideraba bajo control y dominio de los hermanos Arellano Félix, la DEA la clasifica como “territorio sin la presencia dominante de algún cartel”.

En el caso del mapa correspondiente a Estados Unidos, el reporte de inteligencia sólo le otorga control a una organización: el Cártel de Sinaloa.

No obstante, respecto al presunto dominio y control del territorio estadounidense a manos del cartel comandado por las fracciones de Ismael El Mayo Zambada García, de los hijos del fallecido Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, y de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el reporte de la DEA hace un apunte: “El Cártel de Jalisco Nueva Generación se está transformando rápidamente en una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas en México, y en algunos casos en rival de las operaciones de tráfico del Cártel de Sinaloa en Asia, Europa y Oceanía”.

La asociación delictiva del CJNG con Los Cuinis es –siempre según el informe desclasificado de la DEA– la razón por la cual el primero crece en poder y en operaciones de producción, transporte y tráfico en México y Estados Unidos.

### **Modus operandi**

Los narcotraficantes mexicanos, conscientes de la gran diferencia en términos de la aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, mantienen un “perfil muy bajo” para sus operaciones en la Unión Americana. “Evitan confrontaciones con organizaciones criminales rivales y con las agencias de la aplicación de la ley”, asegura la DEA. Otra diferencia marcada en el reporte es que en México, los cárteles mantienen una amplia red de corrupción a todos los niveles del gobierno, de las agencias policiales y de las fuerzas armadas.

“Las operaciones de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, típicamente adoptan la forma de un sistema de cadena proveedora que funciona conforme a la demanda. El sistema depende de operadores perfectamente bien ubicados, quienes sólo conocen su función (nunca la de los proveedores mexicanos) y desconocen los detalles de todos los aspectos de la operación”, indica la DEA.

Este modo de accionar de los cárteles de México en Estados Unidos, el gobierno estadounidense lo reconoce como un método efectivo de los criminales para evitar problemas. Por ejemplo, si un transportista o distribuidor de drogas es detenido por las autoridades, el delincuente no tiene información que pueda facilitar una investigación sobre el origen de la droga. Además, el detenido es rápidamente remplazado por otra persona.

“Elementos que forman parte del organigrama de las organizaciones criminales transnacionales de México son usualmente enviados a ciudades grandes de Estados Unidos que son, a su vez, lugares satélite o centros de almacenamiento de drogas al mayoreo, para luego distribuirlos y enviarlos a otros destinos en el país”, dice el reporte.

De entre las ciudades satélite o centros de almacenamiento de drogas al mayoreo más importantes en Estados Unidos, la DEA resalta las ubicadas más cerca de México: Dallas y Houston, Texas; Los Ángeles, California; y Phoenix, Arizona.

A modo de ejemplo de cómo se mueven las drogas de estas ciudades a través de las redes carreteras, como las que controla el Cártel de Sinaloa, el informe de inteligencia coloca los envíos de enervantes que salen en tráileres de Los Ángeles a estados como Arizona, Kansas, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Dakota del Norte y del Sur, Utah y Washington.

Para esto “el Cártel de Sinaloa emplea choferes estadounidenses mayores de edad (viejos) que manejan tráileres cargados de drogas, porque consideran que llaman menos la atención de las autoridades que los choferes jóvenes en vehículos privados”, explica la DEA en su análisis.

No obstante, la sofisticación que las autoridades de Estados Unidos le reconocen a los cárteles de México para el transporte de heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, en el reporte de inteligencia se matiza que estos grupos criminales mantienen vigentes los métodos tradicionales cuando se trata de la marihuana.

“La marihuana es traficada ocasionalmente por medio de túneles, que desde el territorio mexicano conectan con una red de casas de seguridad en la frontera sur de Estados Unidos; también transportan marihuana en camiones con carga comercial, en botes pequeños de navegación, conocidos como ‘pangas’, para el caso de la costa oeste en Baja California y el centro de California. Y finalmente transportan la droga en aeronaves superligeras que cruzan la frontera sur”, detalla el expediente.

Otro método muy común de los cárteles mexicanos, en términos de su presencia en Estados Unidos, es ubicar sus centros de operación en zonas rurales, donde hay menos vigilancia policial.

“Esta tendencia ha sido detectada en lugares como Dallas, San Francisco, en el este del estado de Washington, en el oeste de Colorado y en partes de Carolina del Norte”, asienta el documento desclasificado.

Por la realidad de sus operaciones y el tamaño de infraestructura y recursos con los que cuentan cárteles como el de Sinaloa, la DEA insiste en que las organizaciones del narcotráfico mexicano no tienen competencia en el mercado estadounidense, y señala que así será en el futuro inmediato.

“No existen en este momento organizaciones con infraestructura y poder que reten a las organizaciones criminales transnacionales de México sobre el control del mercado de las drogas de Estados Unidos. Los cárteles mexicanos son los servidores primarios y proveedores de narcóticos al mayoreo, que se han distanciado de las agencias de la aplicación de la ley –gracias a sus tácticas operativas– y en parte a que dependen de las pandillas estadounidenses (más de 1.4 millones de criminales, en cárceles y en las calles, como detalla el informe) para la distribución y venta de las drogas al menudeo”, concluye la DEA.

## **Socios**

En el reporte citado destaca que, aunque se excluyó al cártel de los Arellano Félix de la presencia y dominio en territorio mexicano, la DEA lo mantiene como activo en las operaciones dentro de Estados Unidos, en alianza con las pandillas locales.

Las autoridades estadounidenses asocian a la organización de los Arellano Félix con las pandillas Almighty Latin King and Queen Nation, Border Brothers, California Mexican Mafia, Florencia 13, Logan Heights Gang y Sureños.

Al Cártel del Golfo con Bloods, Crips, Emi, Hermanos Pistoleros Latinos, MS-13, Partido Revolucionario Mexicano, Raza Unida y Texas Syndicate.

Al de Juárez con Almighty Latin King and Queen Nation, Barrio Azteca y Hermanos Pistoleros Latinos.

A La Familia Michoacana con Almighty Latin King and Queen Nation, Crips, Eme, Los Cholos, Murder Inc., MS-13, Sureños y Tango Blast.

A Los Zetas con Aryan Brotherhood of Texas, Almighty Latin King and Queen Nation, Bandidos Motorcycle Club, Bloods, Crips, Eme, Emi, Hermanos Pistoleros Latinos, MS-13, Sureños, Norteños y Texas Syndicate.

Y finalmente al Cártel de Sinaloa lo liga a las pandillas Almighty Latin King and Queen Nation, Border Brothers, Bloods, Eme, Crips, MS-13, Sureños, Tango Blast y United Blood Nation.

### **“Los Zetas, presuntos responsables de masacre en penal de Piedras Negras”**

**Redacción**

**Proceso**

**25 enero 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/427568>

MÉXICO, DF (apro).- Tras la desaparición de cinco hombres sordomudos en Piedras Negras, Coahuila, en febrero de 2012 –época en que la entidad era gobernada Humberto Moreira–, la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas inició una investigación que fue a dar al Centro de Readaptación Social (Cereso) en esa localidad.

El penal, según información difundida por el Diario de Coahuila, estuvo bajo control del cártel de Los Zetas de 2010 a 2012, tiempo en que se dedicó a fabricar uniformes, fundas y chalecos antibalas para los miembros de la banda, además de que alteraba vehículos para ocultar drogas, armas y dinero en su interior. El Cereso también sirvió como escondite para los integrantes del grupo criminal cuando las fuerzas federales realizaban operativos.

En ese centro penitenciario Los Zetas habrían ejecutado a 150 personas que fueron secuestradas en el norte de Coahuila.

Las víctimas fueron llevadas a ese penal y ahí dentro las mataron y quemaron; posteriormente los restos fueron tirados a un río, explicó Juan José Yáñez, quien lleva la investigación, misma en la que se indica que la mayoría de los muertos eran integrantes de la delincuencia organizada.

No obstante, el procurador Homero Ramos Gloria ha advertido que entre los ejecutados podría haber personas con reporte de desaparición.

Según el subprocurador Juan José Yáñez, Los Zetas tenían el control absoluto de la institución oficial. “Entraban y salían todos los días”, puntualizó.

“Uno de ellos comenta que él salía al Oxxo, compraba un café, leía el periódico, se iba a su casa a desayunar o a la casa de un amigo. Hacía una vida afuera y luego regresaba en la tarde”, agregó.

La investigación de la cárcel de Piedras Negras inició a finales de 2014, y a través de un testimonio se supo que habían llevado a dos personas desaparecidas cerca o dentro del centro penitenciario y nunca más se les volvió a ver.

Durante la investigación realizada por Yáñez, los internos les decían que a esas personas no las encontrarían, ya que habían sido quemadas. A partir de ahí empezaron a documentarse otros crímenes, incluidos los de los cinco vendedores sordos: José Martín Morales, José Antonio Ángeles, José Luis Vallejo, Jorge Espinoza y Manuel Adrián González.

Uno de los métodos que utilizan las organizaciones criminales para deshacerse de los cuerpos son las llamadas “cocinas”, con toneles, diesel y fuego.

En los estados de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se han encontrado alrededor de 500 fosas comunes en los últimos años, pero a partir de 2011 los grupos criminales empezaron a usar ranchos alejados como centros de incineración ilegal.

Entre los lugares que se investigan está la presa Don Martín, ubicada en el cauce que une el Río Salado y el Río Sabinas, en el municipio de Juárez, Coahuila, debido a que por su gran tamaño podría albergar restos, cuestión por la que el sitio es investigado por la Marina y drones tanto acuáticos como aéreos.

## **“Periodistas de Veracruz presentan denuncia por presuntas amenazas de Los Zetas”**

**Noé Zavaleta**

**Proceso**

**9 febrero 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/429474/reporteros-de-veracruz-presentan-denuncia-formal-por-presuntas-amenazas-de-los-zetas>

XALAPA, Ver. (apro).- Reporteros de la región Córdoba-Orizaba manifestaron su preocupación por las amenazas recibidas de presuntos integrantes de Los Zetas, quienes han llamado a sus teléfonos móviles o la redacción de los periódicos donde trabajan.

Dos de los periodistas, los cuales pidieron el anonimato, señalaron a Apro que al parecer se trata de supuestos delincuentes que fueron capturados junto con José Márquez Balderas, El Chichi, o Josele Márquez Balderas, El Chichis, los cuales obtuvieron su libertad tres días después.

Destacaron que las amenazas van dirigidas a quienes cubren la fuente policiaca o a quienes trabajan en El Buen Tono, que el pasado viernes 5 tituló en su portada de la nota roja: “Juez libera al Chichi, otra vez la corrupción”.

Los periodistas manifestaron su preocupación por las amenazas y hostigamiento del crimen organizado, y resaltaron la necesidad de que se le otorgue medidas cautelares a toda la redacción de El Buen Tono, además de reforzar la seguridad de los periódicos en la región.

“Ayer nos reunimos con Rene Álvarez, de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, creemos que las amenazas son serias y que la autoridad no las está tomando con la debida seriedad”, expresaron.

En tanto, seis comunicadores acudieron a la Fiscalía Regional con sede en Córdoba y presentaron denuncia formal por las amenazas que han recibido de la delincuencia organizada.

La Fiscalía General del estado (FGE) tomó cartas en el asunto y dispuso de protocolos y medidas cautelares para los reporteros.

Según los periodistas de la región, el reciente secuestro y asesinato de la reportera Anabel Flores, así como el de Juan Santos Cabrera –excorresponsal de Televisa en esa región, quien supuestamente fungía como vocero de Los Zetas–, en agosto pasado, no son para echar en saco roto porque las intimidaciones continúan.

“Venimos llegando precisamente de la Fiscalía Regional. Ya tomó cartas en el asunto la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos), que es un poco lo que estábamos pidiendo, que tomaran en serio las amenazas recibidas y sobre todo que se tomen medidas cautelares de protección más efectivas”, apuntaron los periodistas entrevistados.

Vía telefónica, comentaron que toda la semana le dieron seguimiento a la detención de Los Zetas en Cotaxtla, pues era un hecho que causó morbo nacional por tratarse de un presunto delincuente abatido el año anterior.

“Le dimos seguimiento y obvio que ahorita están emputados. (Nosotros) Ya sabemos los riesgos, el punto es que desde anoche que se reportaron las amenazas, según iban a poner vigilancia, pero ha sido mínima, no la suficiente”, se quejaron.

### **“Obtenían Los Zetas \$15 millones al mes por cobro de cuotas del penal de Topo Chico”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**14 febrero 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/430029/430029>

MONTERREY, NL (proceso.com.mx). - La Sección Segunda de la Séptima Zona Militar advirtió a Rodrigo Medina de la Cruz que gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, Los Zetas obtenían en la prisión de Topo Chico unos 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de

droga y otros negocios, fondos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba al estado de Nuevo León en ese periodo.

La advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina de la Cruz. Pero no fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro *Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI*, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.

Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.

El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.

En el Cereso de Gómez Palacio, Durango, integrantes del crimen organizado presos salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a realizar una serie de matanzas que ocurrieron en bares de Torreón, Coahuila.

El caso más dramático y escandaloso ocurrió en el Cereso 2 de Piedras Negras, donde Los Zetas asesinaron entre el 2009 y 2011 a más de 150 hombres y mujeres cuyos cuerpos incineraron. Incluso en esa cárcel se escondía el capo zeta Omar Treviño Morales, El Z-42, cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo. En septiembre del 2012, 132 reos decidieron salir por la puerta grande de esa cárcel.

En Nuevo León, el 31 de diciembre del 2011, Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico. Ese día que montaron un operativo para sacar de la prisión a Gabriela Muñoz Tamez La Pelirroja y colgarla en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey, debido a que era la novia de un capo del Cártel del Golfo. La imagen de la mujer ahorcada con el torso desnudo le dio la vuelta al mundo.

A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.

El penal del Topo Chico albergó hasta antes de la masacre de la madrugada del pasado jueves a más de 3 mil 900 reclusos y su capacidad máxima es para unos 2 mil 500.

La Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) ha documentado que prisiones como Topo Chico tenían un autogobierno encabezado por Los Zetas.

Este sistema es posible gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, pero también debido al gran déficit de custodios que alcanza un 84 por ciento. Es decir, actualmente a cada guardia le toca vigilar por lo menos a 100 prisioneros.

Consuelo Morales, directora de Cadhac, mencionó que el autogobierno de Los Zetas en el penal del Topo Chico controla la venta de drogas, la comida, los espacios para dormir, el agua y todo tipo de artículos.

“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los mil 500 pesos semanales y hasta 50 mil mensuales”, aseguró Morales.

Afirmó que los familiares de los internos pagan esas extorsiones semanal o mensualmente con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos. Enfatizó que Cadhac tiene evidencias que cerca del 60 por ciento de los internos pagan esas extorsiones.

### **Corrupción provoca masacre**

Si el gobierno de Medina no intervino en Topo Chico, el gobierno federal tampoco hizo nada para sacar a los peligrosos presos del crimen organizado, quienes han sido los que controlan esa y otras cárceles.

Tras la derrota del PRI en Nuevo León, el nuevo gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón solicitó a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, el traslado de los reos del fuero federal a cárceles federales.

Renato Sales y El Bronco acordaron el traslado paulatino de reos, pero el convenio sólo se quedó en papel y se reactivó hasta que ocurrió la matanza de los 49 internos del Topo Chico.

Uno de los presos que iba a ser trasladado era Jorge Iván Hernández Cantú El Credo, el capo zeta que controlaba el Topo Chico, pero fuentes policíacas le advirtieron y se amparó para que no fuera removido de esa prisión.

Mientras que Juan Pedro Saldívar, El Z-27, llegó al Topo Chico gracias a un amparo que lo sacó del Cereso de máxima seguridad de Matamoros, el cual le otorgó un corrupto juez quien argumentó que el reo no tenía que estar en ese tipo de penales.

A pesar de que ambos eran miembros de Los Zetas, los capos se disputaban el control del Topo Chico. Los dos se movían en el interior rodeados con 20 reos que hacían la función de escoltas y que cuidaban día y noche, en sus lujosas celdas donde disfrutaban los placeres que ofrecen los hoteles cinco estrellas.

Cotidianamente llegaban a sus celdas mujeres que aparecían en algunos programas nocturnos de la televisión local, pero si las esposas, hermanas o hijos de los internos les atraían, mandaban por ellas. Debido a esa situación, las mujeres jóvenes que acudían al Topo Chico lo hacían sin maquillaje, con ropa sucia y lo más desaliñadas posible.

La noche del miércoles 10 de febrero, al filo de las 11 horas, el grupo de El Z-27 comenzó a buscar a sus rivales para asesinarlos mientras que El Credo disfrutaba de la visita conyugal.

El numeroso grupo de seguidores de El Z-27 se movía libremente por toda la cárcel y sacaron de los ambulatorios C2 y C3 a los internos para llevarlos al patio, donde los mataron a golpes.

Mientras que el grupo rival comenzó su defensa. Aún se desconocen detalles, pero algunos familiares de internos contaron que a los pocos minutos la riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros puntos del penal.

Al menos cinco reos fueron golpeados y arrojados sobre colchones, a los que les prendieron fuego. La riña se prologó por cerca de 40 minutos y a las 11:52 horas se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública un motín en el interior del Topo Chico.

Cuando arribó el general Antúnez, secretario de Seguridad, para tomar el control de la situación, se encontró con las escenas de decenas de muertos en diversos puntos, muchos en el patio además de unos 50 heridos.

Alrededor de 40 de ellos fueron trasladados a los locutorios de los abogados donde fueron atendidos por paramédicos; cerca de 10 con lesiones graves salieron en ambulancias a hospitales.

En un intento de evadir su responsabilidad, El Bronco aseguró que heredaba de Rodrigo Medina la bomba de tiempo que le explotó al cumplir 120 días de su administración.

### **“Las mujeres de Los Zetas: “veinteañeras, bellas y frágiles como un papel””**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**6 marzo 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/432562/las-mujeres-los-zetas-veinteaneras-bellas-fragiles-papel>

SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx). - En la época en que la organización criminal de Los Zetas era protegida por funcionarios de la administración de Humberto Moreira y mandos del Ejército, más de 20 mujeres desaparecieron en el norte de Coahuila.

Actualmente la Procuraduría de esa entidad investiga si esas víctimas fueron incineradas en el interior del Cereso de Piedras Negras o en un rancho del municipio de Morelos.

Todas ellas eran jovencitas que rondaban en esos momentos entre los 17 y los 25 años y desaparecieron del municipio de Allende en octubre del 2012, después de que fueron convocadas a una fiesta que organizaba una de ellas.

Algunas fueron etiquetadas como “Las mujeres del *Comandante Chaparro*”, el sanguinario jefe de sicarios de la plaza de Piedras Negras. No obstante, la mayoría de ellas no estaban relacionadas con el crimen organizado y su pecado fue estar en cierto momento en un lugar equivocado.

Desde finales del 2007 Los Zetas transformaron la ciudad fronteriza de Piedras Negras en su principal bastión para el trasiego de drogas. Fueron enviados desde Tamaulipas como la vanguardia del Cártel del Golfo para tomar las principales localidades del noreste.

Como buenos militares, arribaron emulando las políticas del conquistador Alejandro Magno para tomar plazas: respetaron a los antiguos mandos locales, como la banda de Los Texas, que controlaban el tráfico de drogas y sólo los pusieron a trabajar para ellos bajo la amenaza de sometimiento o muerte.

Para intimidarlos pusieron de moda otra estrategia de terror tomada de los militares guatemaltecos conocidos como kaibiles, pues en esa época aparecieron en la frontera sur de Estados Unidos las primeras personas descuartizadas, incineradas o colgadas.

### **Capos zetas**

“Mi nombre es Mario Alfonso Cuéllar. Tengo 46 años. Tengo 11 años de estudios, con nivel de maestría y vengo de México”. *Poncho* Cuéllar declaró lo anterior como testigo protegido en el juicio que se llevó a cabo en abril del 2013 en Austin contra el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessa y José Treviño Morales.

Cuéllar dijo al jurado que comenzó a traficar drogas desde los 18 años por la frontera de Piedras Negras para venderla en Dallas. Fue arrestado por el FBI y pasó unos años en prisión. Tras salir, en 2005, se refugió en Coahuila donde comenzó de nuevo a traficar droga.

“Los Zetas irrumpieron en Piedras Negras y comenzaron a reclutar gente para que trabajara para ellos y los que no se alineaban eran asesinados”, recordó Cuéllar. Añadió que primero tuvo contacto con Omar Treviño Morales, quien se presentó como *Comandante 42*.

Los Zetas convirtieron a *Poncho* Cuéllar jefe de plaza y responsable de cruzar por esa frontera entre 150 y 200 kilos de cocaína por mes.

El capo dijo al jurado que pagaban sobornos a funcionarios del gobierno estatal, a mandos de la Policía Federal y del Ejército para que protegieran sus actividades.

El jefe de sicarios bajo el mando de *El Z-42* era David Alejandro Loreto Mejorado, *Comandante Enano*. Durante su reinado en la plaza de Piedras Negras se caracterizó por contar con un variado harem de bellas mujeres a las que invitaba a sus frecuentes fiestas.

Designó a una de ellas como encargada de reclutar jovencitas. Una investigación del periodista Quitzé Fernández publicada en el semanario destaca que fueron “decenas de jovencitas de entre 17 y 22 años de edad las desaparecidas”.

Entre ellas estaba Mónica Larissa Peña Ramos, quien vivía en el centro de Piedras Negras con una amiga y quien “poseía una belleza salvaje: de piel canela, cabello negro y ojos brillosos”.

A Larissa Peña y sus amigas las apodaban El Grupo de Mónica y todas eran “veinteañeras, bellas y frágiles como un papel”.

Al grupo de Mónica se habían sumado mujeres provenientes de Múzquiz y otros municipios de la región Carbonífera así como de Villa Unión, poblado de Cinco Manantiales.

El *Comandante Enano* ordenó asesinarlas cuando descubrió que algunas tenían mensajes en sus celulares y fotos de miembros del Ejército. A principios de octubre del año 2012 las convocó a una de sus tradicionales fiestas que se celebraría en el municipio de Allende. Desde esa época sus familiares nunca más volvieron a saber de ellas.

La Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas No Localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Coahuila tiene indicios de que fueron asesinadas en un rancho del municipio de Morelos, poblado vecino de Allende.

No obstante, también investiga si se encuentran entre las más de 150 víctimas que fueron introducidas al Cereso de Piedras Negras, donde pudieron ser incineradas en los improvisados hornos donde desaparecían los cuerpos.

El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC tiene registradas 58 mujeres desaparecidas en Coahuila entre los años 2004 y 2014. Pero el grupo de Mónica no se encuentra en esas estadísticas.

### **“Sobre Las mujeres de Los Zetas: “veinteañeras, bellas y frágiles como un papel””**

**Redacción**

**Proceso**

**10 marzo 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/433057/433057>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la página web de Proceso se publicó el pasado 6 de marzo un reportaje titulado *Las mujeres de Los Zetas: “veinteañeras, bellas y frágiles como un papel”*. Sobre parte de su contenido, el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira mandó a esta redacción la carta que a continuación se reproduce:

**Señor director:**

En dicho artículo se afirma lo siguiente:

SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx).- En la época en que la organización criminal de Los Zetas era protegida por funcionarios de la administración de Humberto Moreira y mandos del Ejército, más de 20 mujeres desaparecieron en el norte de Coahuila.

Ante tal comentario debo hacerle constar:

Humberto Moreira ejerció su mandato como Gobernador del Estado de Coahuila hasta enero del año 2011.

Humberto Moreira nunca protegió a esta organización criminal ni me consta lo hicieran los miembros de mi administración.

Resulta inadmisibile la utilización de mi nombre unida a un tema de este calibre, sin justificación ni argumento alguno.

Sobre este asunto remito a mis abogados para que estudien posibles acciones legales.

Humberto Moreira

### **Respuesta del reportero**

Señor director:

Confesiones de capos Zetas presos en Estados Unidos que rindieron testimonios ante un jurado en la ciudad de Austin en abril del 2013 precisan que la organización Zeta llegó a Coahuila desde principios del año 2007, cuando Humberto Moreira era gobernador.

Tengo en mi poder, y las pongo a su disposición, transcripciones de los testimonios de los líderes Zetas Mario Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno Villanueva y Enrique Rejón Aguilar, en los que explican que desde esa época convirtieron a Coahuila en su principal centro de operaciones para el tráfico de droga.

Sólo por detallar un ejemplo, “Poncho” Cuellar, fue jefe de la plaza de Piedras Negras desde 2007 hasta principios del año 2011 y ahora es testigo del Fiscal Douglas W. Gardner. Este capo confesó que pagaron sobornos a policías estatales, a efectivos del ejército, a funcionarios de la Procuraduría y de la Policía Federal y que gracias a ello traficaban 800 kilos de cocaína por mes a Estados Unidos. Además, que podían cometer todo tipo de crímenes y salir impunes.

Pero si a Moreira se le olvidan las cifras, le recuerdo que las estadísticas oficiales de la Procuraduría de Justicia del estado del que fue gobernador registran que entre 2009 al 2011 desaparecieron 668 personas tan sólo en el norte de Coahuila y que la mayoría de ellas aparecieron asesinadas.

El también expresidente del PRI se quiere deslindar diciendo que la “masacre de Allende” y el asesinato de decenas de jovencitas en el norte de Coahuila ocurrieron meses después de que dejó la administración, pero los testimonios rendidos por los capos señalan que todos esos crímenes se cocinaron cuando aún era gobernador.

Ahora que si lo que requiere Moreira son datos de asesinatos masivos ocurridos mientras ocupó el Palacio de Gobierno le ofrezco uno: durante su mandato fueron incineradas más de 150 personas en el Cereso de Piedras Negras.

Atentamente

Juan Alberto Cedillo

## **“Entrega Guatemala a México a El Chombo, presunto líder de Los Zetas”**

### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**22 abril 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/438163/entrega-guatemala-a-mexico-a-chombo-presunto-lider-los-zetas>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Guatemala entregó en extradición a México a David Solórzano Ortiz o David Soberani Ortiz o Marvin Campos Peña o Luis Antonio Ortiz Arreola, *El Chombo*, presunto líder de Los Zetas en el sureste de México y Centroamérica.

Está acusado de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud en diversas modalidades, acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; homicidio calificado y lesiones calificadas.

*El Chombo* es reclamado por el Juzgado Sexto de Distrito con sede de Chiapas; Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, y Juzgado Segundo de Distrito, de Tabasco.

También fue procesado penalmente en Guatemala por la comisión del delito de asociación ilícita. Por este delito se le otorgó libertad anticipada, sin embargo, es identificado como principal responsable operativo de una organización delictiva que opera en Chiapas y Tabasco, así como en Guatemala.

*El Chombo* fue entregado a las autoridades mexicanas en un operativo realizado el pasado 21 de abril por personal de la Dirección General de Procedimientos Internacionales y de la Agregaduría Legal para Centroamérica y El Caribe, con apoyo de elementos de la Policía Federal Ministerial que pusieron a disposición al reclamado ante las autoridades que lo requieren.

La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, confirmó la información de la extradición y los delitos de los que se acusa al sujeto pero no proporcionó su nombre ni alias.

Indicó que el inculcado será puesto a disposición de las autoridades judiciales que lo reclaman: Juzgado Sexto de Distrito, en Chiapas; Juzgado Segundo de Distrito, en Tabasco, y Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez.

## **“Dan 20 años de prisión al “comandante Mateo”, exjefe de Los Zetas en Tabasco”**

### **ARMANDO GUZMÁN**

#### **Proceso**

**23 junio 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/445099/dan-20-anos-prision-al-comandante-mateo-lider-los-zetas-en-tabasco>

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Mateo Díaz López, El *comandante Mateo*, exjefe de plaza de los Zetas en Tabasco, fue condenado a 20 años de prisión.

Un juez del estado de Jalisco sentenció al criminal por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaboración de fomento del narcotráfico.

Además, le impuso una multa de 350 días de salario, equivalentes a 16 mil 033 pesos.

El juzgador acreditó que, desde el 2001, Mateo Díaz formaba parte del grupo delictivo Los Zetas para operar en Tabasco y parte de Veracruz, donde sembró el terror con una ola de ejecuciones y secuestros.

El *comandante Mateo* fue arrestado el 15 de julio de 2006 en un bar del municipio de Cunduacán, Tabasco, cuando escandalizaba en estado de ebriedad junto con su guardaespaldas de origen nicaragüense, Darwin Alejandro Benavides.

Horas después de su fortuita captura, un comando de Los Zetas atacó con bazucas y armas de alto la cárcel municipal de Cunduacán para tratar de liberar a su jefe.

La policía municipal y estatal hizo frente a los pistoleros, sin embargo, asesinaron a un comandante de la policía Judicial y a un inspector de Tránsito, quien murió calcinado cuando dispararon a su patrulla con un mortero.

Mateo Díaz, originario de Tabasco y desertor del ejército, fue trasladado a la cárcel de Puente Grande, en Jalisco, donde se encuentra bajo proceso y ahora fue condenado a 20 años de prisión.

El “comandante” Mateo Díaz López, fue miembro de la “primera generación” de Los Zeta.

Según informes de la PGR, el comandante Mateo formó parte del grupo que conformó Arturo Guzmán Decena, Zeta 1, para la seguridad de Osiel Cárdenas Guillén, pero que después fue obteniendo más responsabilidades dentro de la organización.

### **“Inicia juicio contra “El Chano”, lugarteniente de Los Zetas”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**6 julio 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/446371/nicia-juicio-contrachano-lugarteniente-los-zetas>

MC ALLEN, Tex. (apro).- La Corte Federal de San Antonio inició hoy un juicio contra el narcotraficante mexicano Marciano Millán Vázquez, El Chano, por crímenes cometidos por los Zetas en el municipio de Allende, Coahuila, entre otros delitos.

El juicio se programó para iniciar a las 8:30 horas de este miércoles. El fiscal Russel D. Leachman presentó 10 delitos contra el capo Zeta Millán Vázquez y otro acusado de nombre Gustavo Rodríguez Costilla, El Tito. Entre los cargos por los que se les acusa están: conspiración para traficar drogas, posesión de armas, usar menores para la venta de narcóticos y siete delitos más.

Una de las imputaciones que presentó el Fiscal Leachman contra Marciano Mancilla es que “disparó, desmembró y quemó cuerpos por sí mismo”.

La carpeta de investigación del fiscal señala que el capo Zeta asesinó personalmente al menos a cinco personas, pero no aparecen los nombres de las víctimas, sino sólo sus iniciales.

El Chano operó durante 2010 y 2011 como lugarteniente de los Zetas en la ciudad de Piedras Negras.

Por órdenes de los líderes Miguel Ángel y Omar Treviño Morales inició una limpia en la organización y fue el responsable de eliminar a altos mandos de esa organización en Allende y el Norte de Coahuila.

Entre los primeros asesinados estaban “contadores” que se habían designado a diversas plazas. Entre ellos estaban: Víctor Triana, enviado a Monterrey, y Luis Zamarripa para Monclova. Triana y Zamarripa y al menos ocho más fueron llamados a Allende por Miguel Ángel Treviño Morales, para luego ser asesinados.

Para argumentar su inocencia sobre esos crímenes, los abogados defensores de Millán Vázquez presentaron documentos oficiales del Gobierno de Coahuila donde se afirma que el capo Zeta no “tiene antecedentes penales”.

El juicio será presidido por el juez Xavier Rodríguez, y se prevé que acudan a declarar testigos protegidos quienes conocieron los crímenes ocurridos a finales del 2010 y durante los primeros meses del 2011 en Piedras Negras, Allende y la región de Cinco Manantiales de Coahuila.

### **“Son “fantasías” las acusaciones de operador de los Zetas: Moreira”**

#### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**7 julio 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/446505/fantasias-las-acusaciones-operador-los-zetas-moreira>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, calificó como “fantasías” las declaraciones del empresario y exoperador financiero de los Zetas Rodrigo Tapia Uribe a quien dijo negó conocer.

Según el también exdirigente nacional del PRI, de Tapia Uribe —quien declarara en una Corte de San Antonio, Texas, Estados Unidos que el priista recibió al menos cuatro millones de dólares cuando era gobernador de Coahuila—sólo sabe que narró su vida de exsicario en un talk show.

A través de una carta afirmó: “No conozco a Rodrigo Uribe. Lo único que ahora sé de él es que participó en un talk show ‘Caso cerrado’, como panelista, declarando sobre su vida de exsicario”.

Subrayó que en la fecha que supuestamente sucedieron los hechos, en 2012, ya no era gobernador de Coahuila, “por lo tanto desconozco absolutamente las fantasías que se relatan”.

El priista cuyo caso por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y participación con Los Zetas fue archivado en España, aseguró que, con la ley en la mano, constatará “todas las falsedades publicadas en este caso”.

Y ante otra posible acusación en el mismo sentido, afirmó que durante su gestión ningún funcionario público le propuso algo impropio.

“Basta ya de querer vincularme con quienes mataron a mi hijo”, concluyó en su carta Moreira.

Uribe Tapia, empresario de Piedras Negras quien se desempeñó como operador financiero de los Zetas, confesó ayer en la Corte Federal del Distrito de San Antonio, Texas, que entregó cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira para comprar protección a la organización criminal.

“El dinero se entregó a través de Vicente Chaires (exsecretario de Operación y Administración) y Jesús Torres Charles (exfiscal General), y varios pagos se hicieron en Saltillo. Fue algún tipo de acuerdo con el gobernador Humberto Moreira”, dijo durante el inicio del juicio.

Sobre el mismo caso, el exfiscal General Jesús Torres Charles, a quien Uribe Tapia identifica como uno de los colaboradores de Moreira que recibieron el dinero para protección, emitió un escueto comunicado en el que niega haber tenido cualquier tipo de trato con el exoperador financiero de los Zetas.

“El suscrito Jesús Torres Charles no conoce ni ha tenido jamás trato alguno con ese sujeto que dice llamarse Rodrigo Humberto Uribe Tapia y mucho menos he recibido de él ni de ninguna otra persona cantidad alguna de dinero a nombre de o para Humberto Moreira Valdés”, señala en su misiva en la que alude a la nota publicada por el San Antonio Express News, que cita las acusaciones de Uribe Tapia.

“Niego terminantemente dicha información por ser absolutamente falsas las manifestaciones vertidas por dicho individuo”, señaló el exfiscal quien dijo ser “totalmente ajeno” a los hechos que se relatan en la nota publicada, en la cual “además se refieren declaraciones vagas, imprecisas y carentes de toda veracidad”.

## **“Penal de Piedras Negras funcionaba como “matadero” de los Zetas, confirma testigo”**

### **REDACCIÓN**

**Proceso**

**8 julio, 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/446726/penal-piedras-negras-funcionaba-matadero-los-zetas-confirma-testigo-2>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rodrigo Humberto Uribe Tapia, empresario y presunto operador de los Zetas quien es testigo de la Corte Federal del Distrito de San Antonio, Texas, en el juicio que se sigue al

presunto líder zeta Marcino Millán Vázquez, confesó que el penal de Piedras Negras Coahuila era un centro de operaciones de ese cártel.

De acuerdo con el diario *San Antonio Express* Uribe Tapia señaló que la prisión era el “matadero” del grupo criminal, como lo publicó **Apro** en febrero pasado.

El cártel, declaró el testigo, asesinaba y desaparecía personas, empacaba drogas y modificaba vehículos para actividades propias del narcotráfico.

Y aseguró que él vio cómo fueron mutilados y desintegrados los cuerpos de dos mujeres y un hombre.

“Ellos toman estos cuerpos y los llevaban al Cereso para poder destruirlos o desintegrar ellos (...) Tenían contenedores de ácido, o no sé qué proceso para desaparecerlos”, añadió Uribe Tapia.

En febrero pasado **Apro** publicó que entre 2009 y 2011 Los Zetas usaron el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Piedras Negras como un “campo de exterminio” en el que improvisó hornos para desaparecer a más de 150 personas entre hombres y mujeres, según una investigación de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila.

Declaraciones de reos en poder de la Procuraduría estatal, testimonios de familiares de las víctimas y la confesión del “jefe de cocineros” revelaron que la cárcel de Piedras Negras se transformó en un gran horno crematorio desde finales de 2009 y durante todo el año 2011, período en que gobernaba Humberto Moreira.

De hecho el mismo Uribe Tapia declaró a inicios de esta semana que el cártel de los Zetas pagó cuatro millones de dólares a funcionarios del equipo de Moreira a cambio de protección.

Saúl Fernández, de 21 años, es otro testigo en el juicio contra Marciano Millán, está en espera de sentencia por un cargo de conspiración de distribución de marihuana. Al rendir su testimonio declaró que en septiembre de 2012, un mando de los Zetas presumía la “megafuga” de la prisión de Piedras Negras.

“Me dijo que tomaron dos autobuses, y se los llevaron por la puerta principal”, relató.

Dicha fuga se llevó a cabo porque los Zetas se quedaron sin gente, debido a que muchos se pasaron al bando del Cártel del Golfo, luego de que un comandante desertó.

### **“Los Zetas mataron y quemaron a más de 300 personas en Coahuila: testigo”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**13 julio 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/447092/los-zetas-mataron-quemaron-a-300-personas-en-coahuila-testigo>

McAllen, Tex. (apro). - Testimonios presentados en la Corte Federal de San Antonio confirmaron que fueron asesinadas más de 300 personas en Allende, Coahuila, lo que contradice la “verdad jurídica” de

la Procuraduría de Justicia de ese estado, la cual concluyó que sólo ocurrieron 28 secuestros y que de ellos “se tienen la certeza que 11 fueron asesinados”.

“Los líderes Zetas me dijeron que ascendieron a más de 300 personas secuestradas y muertas de un disparo, luego quemadas con diesel o disueltas en ácido para desaparecer los cuerpos”, confesó José Luis Rodríguez, El Pollo, de 36 años de edad.

El Pollo operó en la ciudad fronteriza de Eagle Pass traficando drogas para los Zetas y ahora enfrenta prisión de por vida por el delito de secuestro y narcotráfico.

El testimonio de El Pollo se produjo en el juicio contra Mariano Millán Vázquez, El Chano un narcotraficante mexicano quien en marzo del 2011 coordinó los asesinatos masivos en Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña y la región de Cinco Manantiales. Después de esa masacre lo ascendieron a Jefe de Plaza en la ciudad fronteriza de Piedras Negras.

José Luis Rodríguez testificó que en marzo del 2011 estaba entregando un millón de dólares de ganancias por el tráfico de drogas a los líderes Zetas cuando le informaron que los capos Poncho Cuellar y su brazo derecho Héctor Moreno habían desertado y estaban delatando actividades del cartel a autoridades estadounidenses.

Contó que le solicitaron ayuda para ubicar domicilios de Cuellar y para eliminar a todos los que estaban asociados con ese capo, quien se desempeñaba como Jefe de Plaza de Piedras Negras.

“Las víctimas fueron gente de Allende, Morelos, Acuña, Piedras Negras, y áreas circunvecinas, testificó. En Piedras Negras una ocasión ellos me dijeron que tenían a 40 personas de rodillas y pum pum pum. ... los mataron”, según publicó el diario San Antonio Express News.

Los fiscales texanos están utilizando un apartado de la ley que les permite procesar a personas por crímenes ocurridos en suelo extranjero si éstos están relacionados con delitos cometidos en territorio de Estados Unidos.

PGJE: sólo 28 secuestros

“La verdad jurídica a la que hemos llegado hasta ahora, está basada en los testimonios, pruebas periciales y confesiones que hemos recabado a lo largo de esta investigación y apuntan lamentablemente al secuestro de 28 personas: De 11 tenemos la certeza que fueron privadas de la vida y en el caso de 17 más, su paradero aún se desconoce, informó el Procurador Homero Ramos Gloria en una conferencia de prensa celebrada el 9 de diciembre del año 2014.

Los únicos acusados formalmente en México por esos crímenes son dos expolicías municipales y dos personas más. Mientras que las autoridades de Texas han metido a la cárcel a más de una decena de delincuentes por esa masacre.

Ramos Gloria detalló que “la tarde noche del día 18 de marzo del año 2011 arribaron a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados y quienes de acuerdo a las investigaciones se sabe que venían de otros estados”.

Los testimonios de los pobladores de Allende son más precisos que los del procurador: alrededor de 200 sicarios que no se cubrían el rostro llegaron al filo de las 5:30 horas provenientes de Piedras Negras en 42 camionetas que eran escoltadas por cuatro patrullas de la policía municipal.

El procurador explicó que el objetivo de los pistoleros “era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo”.

El hombre que buscaban era Héctor Moreno Villanueva, responsable del trasiego de droga, lavado de dinero y administrador financiero de los capos Zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z40 y Z42 respectivamente.

“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad a diversos familiares cercanos de ésta persona y junto con ellos a sus trabajadores, así como a civiles que tenían -o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían- alguna relación con quien buscaban”, añadió el procurador.

Lo que no mencionó Ramos Gloria fue que ese día los sicarios se llevaron a más de 150 personas y las trasladaron a un rancho ubicado a la altura del kilómetro 7 de la carretera Allende-Villa Unión perteneciente a José Luis Garza Gaytán, socio de Moreno.

El procurador sí informó que posteriormente a esos hechos “las personas fueron privadas de la vida y sus cuerpos calcinados con el objetivo de eliminar las evidencias”.

### **Otro testimonio**

Héctor Moreno y parte de su familia ya había huido a Estados Unidos y de esa manera eludieron la venganza de los hermanos Treviño Morales. Ahora es testigo protegido del gobierno.

En un juicio celebrado en la Corte Federal de Austin donde rindió testimonio aseguró: “Soy Héctor Moreno y tengo 35 años de edad... Trabajé con Alfonso Poncho Cuellar desde el año 2007 hasta el 2011”, precisó en su confesión el capo de Allende.

“Y cuando usted dice trabajé, ¿qué actividad realizaba?”, le cuestionó un fiscal. “Tráfico de drogas en la ciudad de Piedras Negras, desde 2007”, respondió.

Moreno precisó que como operador hacía las llamadas por teléfono a los conductores de los camiones, a los clientes y empaquetaba la droga. “Al 40 y 42 los veía regularmente entre tres o cuatro veces por mes y en otras ocasiones hasta dos veces por semana. Había periodos en que Z40 y Z42 desaparecían hasta por cuatro meses”.

La droga se cruzaba en tráileres de empresas transportistas y se escondía en casas de seguridad en la ciudad vecina de Eagle Pass. De ahí se mandaba por la carretera 35 a Dallas a un socio de Moreno llamado José Vázquez, quien la revendía a las diversas pandillas estadounidenses que la distribuían por toda la Unión Americana.

Añadió que recibían unos cuatro millones de dólares cada 10 días por 800 kilos de cocaína que se enviaban cada mes. Ese dinero llegaba a México escondido en tanques de combustible de vehículos en

billetes de todas las denominaciones, pero las reglas para pagar al contador de Z40 y Z42 era entregarles sólo billetes de 20, 50 y 100 dólares.

—¿Señor Moreno cómo vino a los Estados Unidos? —preguntó el Fiscal.

—En marzo del 2011 estaban sucediendo una gran cantidad de problemas en Coahuila y solicité asilo al gobierno de Estados Unidos—respondió el testigo

—¿Cuándo usted dice que había problemas a qué se refiere, podría especificar?

—Un montón de muertes. Ellos comenzaron a matar familias en Allende, en Piedras Negras, en Muzquis en Sabinas. Ellos también me querían matar. Yo no traje nada de dinero porque 40 y 42 destruyeron casas para apoderarse de todo y debido a esto ellos mataron a 300 personas en Allende, Coahuila—remató.

### **“Desmantelan célula de Los Zetas dedicada al secuestro en Veracruz”**

**Redacción**

**Proceso**

**19 julio 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/447926/desmantelan-celula-los-zetas-dedicada-al-secuestro-en-veracruz>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer hoy el desmantelamiento de una célula de Los Zetas que se dedicaba al secuestro en Poza Rica, Veracruz.

En conferencia de prensa, el comisario general y jefe de la División de Investigación de la Policía Federal (PF), Omar Hamid García Harfuch, detalló que la banda, dirigida por Erik Daniel, está relacionada con al menos 17 plagios cometidos en aquella entidad, dos de los cuales se registraron los días 15 de octubre de 2015 y 28 de mayo de 2016.

Los secuestradores, dijo el mando policial, exigían cantidades millonarias a cambio de la liberación de las víctimas.

Además, informó que la detención del grupo se produjo como resultado de las investigaciones desarrolladas a partir de diversos eventos de secuestro registrados en la región, entre los que destacan los ocurridos en octubre de 2015 y mayo del presente año.

Los presuntos delincuentes —nueve en total— fueron detenidos en un operativo realizado en la colonia México, en el que se rescató a dos personas secuestradas ayer.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).

### **“Los Zetas tuvieron contratos del gobierno de Coahuila: San Antonio Express”**

**REDACCIÓN**

**Proceso**

**25 julio, 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/448469/vinculan-a-humberto-moreira-los-zetas-en-juicio-a-lider-criminal-en-eu>

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Al resumir el juicio que se sigue en Estados Unidos contra Marciano Millán, quien fuera líder criminal de Los Zetas en Piedras Negras, Coahuila, el periódico *San Antonio Express News* dio a conocer que por primera vez un testigo federal conectó públicamente a esa organización criminal con el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, cuyo nombre está en una investigación vigente por presunto lavado de dinero en Estados Unidos.

Asimismo, destacó que Los Zetas “estuvieron involucrados en minería de carbón y tuvieron contratos gubernamentales para pintar y renovar escuelas y construir carreteras”.

En su edición de ayer, el diario establece que propiedades de exfuncionarios de Coahuila en Texas y cuentas bancarias estarían ligadas a sobornos dirigidos al exgobernador Humberto Moreira a cambio de libertad para asesinar, traficar drogas, e incluso usar vehículos oficiales como helicópteros para escapar de la Marina.

“Una vez que lavaban el dinero a través de operaciones financieras que aparentaban ser legítimas, los líderes Zetas evadían el pago de impuestos”, señala el periódico estadounidense.

“Los Zetas evadieron arrestos sobornando a la Policía Municipal. Evadieron impuestos sobornando oficiales de Hacienda. Obtuvieron contratos del gobierno para sus empresas constructoras y el permiso de usar el penal de Piedras Negras como otra casa de seguridad, incluso usaron helicópteros estatales para escapar de las persecuciones de los Marinos, todo esto sobornando a altos funcionarios en Coahuila”, precisa con base en el testimonio de Rodrigo Humberto Uribe Tapia, presunto operador financiero del grupo criminal que declaró en el juicio.

El pasado martes 19, Marciano Millán Vázquez fue declarado culpable de los 10 cargos que se le imputaban en Estados Unidos, entre ellos diferentes homicidios y tráfico de drogas. Si bien los delitos fueron cometidos en Coahuila, se pueden castigar en Estados Unidos si están relacionados con el tráfico de droga hacia aquel país.

En su edición 2073 que circula esta semana, la revista Proceso publica parte del testimonio que dio Efrén Tavira Alvarado en el juicio que se le sigue en Estados Unidos a Marciano Millán Vázquez, quien descuartizó con un hacha a una niña frente a sus padres y asesino y “cocinó” al menos a una docena de víctimas, mientras en San Antonio acudía los domingos a misa.

Chano operó la masacre de Piedras Negras y luego fue ascendido a jefe de plaza en esa ciudad fronteriza. Fue detenido en 2015 en San Antonio, para juzgarlo por los crímenes cometidos en Coahuila.

Tavira fue uno de los principales testigos contra Chano, pues trabajaron juntos en el tráfico de drogas y armas durante varios años.

Aquí, parte de su testimonio: “Era la madrugada del sábado y acababa de llegar a mi casa y me preparaba a dormir.

“De repente sonó el portón de la casa. Cuando me asomé vi que entraron tres personas armadas. ‘Vienen por mí’, le dije a mi esposa”. En su domicilio dormían sus dos hijos menores. El mayor había salido con sus amigos.

“Le dije a mi esposa que escondiera a nuestros hijos, cuando gritaron mi nombre y entró Gustavo (Ramón Martínez), mi amigo”.

Éste dijo: “¡Compadre vámonos, apúrate!” Enseguida entró Marciano Millán Vázquez, Chano, ordenando: “¡Vámonos ya, rápido!” El tercer hombre se apostó a la entrada. Se cubría la mitad del rostro con una máscara de calavera.

Gustavo tomó a los hijos de Tavira, que ya lo conocían, y los escondió en un clóset junto con su esposa, para que Chano no se los llevara.

Gustavo me preguntó: “¿Qué hiciste?” “No he hecho nada”, respondió. Lo sacaron de su casa y lo tiraron en el piso de una camioneta. Lo trasladaron a un lugar al cual tardaron unos 15 minutos en llegar. Durante el trayecto sólo se escuchaban radios informando que ya lo llevaban. Arribaron a un gran terreno bardeado en el extremo oeste de Piedras Negras.

Ahí Chano lo bajó y lo esposó. Lo llevó a otra camioneta. Era una noche oscura, pero Tavira logró ver que en el sitio había muchos vehículos y decenas de sicarios armados. En un lugar del terreno alcanzó a ver a más de 30 personas de rodillas, con las manos amarradas a la espalda.

En la camioneta lo esperaban los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42. “Fue la primera vez que los vi”, dijo Tavira en el juicio.

“Éste es Tavira, el que trabaja con Poncho”, le dijo David Alejandro Loreto Mejorado, el *Comandante Enano*, a Z-40. Éste le preguntó: “¿Dónde está Poncho?”

“Le dije que hacía tiempo que no lo veía”, contó el testigo.

En ese momento llegó otro zeta, Daniel Menera –con un teléfono en la mano–, y le dijo a Z-40: “Comandante, ¿me permite? Tavira trabaja para nosotros, ya no trabaja para Cuéllar” y le entregó el celular. Z-100 llamaba.

Tras tomar la llamada, Z-40 dijo: “Ok, está bien. ¿Por qué no me habían dicho? En este momento lo dejo ir, pero cualquier cosa que haga, tú me respondes”, le comentó a Menera.

Menera lo subió a un auto y salieron del terreno. En el trayecto pasaron junto a las personas hincadas entre las cuales alcanzó a ver a un amigo suyo de la secundaria, Víctor Cruz, con su esposa y su hijo. Eran amigos de Alfonso Poncho Cuéllar.

“Ya que estaba en el carro” ... Tavira interrumpió su testimonio y rompió a llorar. Se hizo un gran silencio en la sala. Después de una pausa agregó: “Se comenzaron a oír disparos”.

Horas antes, al filo de las 17:30 del viernes 18 de marzo de 2011, habían llegado a Allende 42 camionetas con unos 200 hombres armados, escoltadas por cuatro patrullas de la Policía Municipal. Esa tarde los sicarios se llevaron a más de 150 personas rumbo a un rancho sobre la carretera a Villa Unión.

La escena se repitió varios días en municipios de Cinco Manantiales, de la Región Carbonífera y Ciudad Acuña...

De acuerdo con el testigo, Los Zetas controlaban a la Policía Municipal de Piedras Negras. También compraron mandos de la Policía Federal y a algunos miembros del Ejército. Tenían arreglos con la PGR. Con la Marina no pudieron.

“Supe de una contribución que le entregaron al gobernador, en el año 2012. Era para Rubén Moreira, no sé cuánto dinero era. Estuve presente en una entrega, pero me salí antes de que se realizara. Fue en el rancho de Beto Casas. Le entregaron una Suburban llena de maletas de dinero, pero no supe la cantidad.

Otro de los testigos, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, hijo de un exalcalde de Piedras Negras y quien tiene dos hermanos desaparecidos, confesó que fue operador financiero de Los Zetas y que entregó cuatro millones de dólares a funcionarios de la administración de Humberto Moreira para comprar protección a la organización criminal.

“El dinero se entregó a través de Vicente Chaires (exsecretario particular del gobernador) y Jesús Torres Charles (exfiscal general), y varios pagos se hicieron en Saltillo. Fue algún tipo de acuerdo con el gobernador Humberto Moreira”, afirmó Uribe Tapia, quien fungió como testigo de la fiscalía.

### **“Gobierno de Morelos trata a víctimas del crimen igual que Los Zetas, acusa Sicilia”**

**JAIME LUIS BRITO**

**Proceso**

**22 agosto 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/451929/gobierno-morelos-trata-a-victimas-del-crimen-los-zetas-acusa-sicilia>

CUERNAVACA, Mor. (apro). - Las fosas clandestinas de Tetelcingo son la evidencia de que el gobierno de Graco Ramírez en Morelos trata a los cuerpos “como basura”, aseguró Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y vocero del Frente Amplio Morelense (FAM).

El poeta denunció que la forma en la que fueron encontrados los cuerpos en la diligencia de mayo y junio pasados fue “similar a como lo hacen los grupos de la delincuencia organizada, particularmente Los Zetas”.

En conferencia de prensa realizada en el plantón –que cumple su séptimo día frente al Palacio de Gobierno en demanda de la salida y enjuiciamiento del gobernador y la designación de un gobierno de reconciliación–, el poeta sostuvo:

“Los crímenes en las fosas de Tetelcingo no son errores, son delitos que deben ser juzgados y castigados. Porque de pronto encontramos que el Estado tiene sus propias fosas y cuando observamos las imágenes nos damos cuenta que son muy similares a las que utiliza la delincuencia organizada”.

Tres meses después de iniciada la exhumación de los cadáveres de fosas en el oriente de Morelos y previo a la presentación del informe sobre la diligencia este martes en la Ciudad de México, Javier

Sicilia aseguró que el gobierno morelense intenta escapar a su responsabilidad en los crímenes de su administración, además de los cometidos durante otras administraciones.

“Los crímenes son deudas de Estado. Los crímenes de Graco Luis Ramírez Garrido Abreu en su administración se suman a los crímenes de las administraciones pasadas, corruptas e igual de degeneradas que las de él.

“Es decir, tiene una deuda triplicada, porque quien asume la representación del Estado carga con esos crímenes y tiene que resolverlos y no ha resuelto más que el 1% o 2%. No somos cajas, somos seres humanos y el Estado tiene una responsabilidad con todos esos seres humanos”, sostuvo.

De acuerdo con el activista, “con una ley inoperante y la creación de un Mando Único para, supuestamente, acabar con el crimen, Graco en realidad no ha hecho justicia a las víctimas. Y lejos de hacer disminuir el crimen, lo ha aumentado agregándole graves violaciones a los derechos humanos”.

El vocero del FAM no quitó el dedo del renglón respecto a las fosas de Tetelcingo:

“Graco quiere negar que ahí hay crímenes, cuando desde el principio hubo una negligencia criminal, porque enterrar seres humanos como lo hacen los delincuentes y decir que eso es una práctica común, es ser un delincuente”.

Anunció que este martes 23 de agosto se dará el informe sobre los cuerpos que se encontraron en esa localidad y reiteró que las demandas del FAM siguen en pie:

“La destitución de Graco Ramírez, su juicio político y el de todos aquellos que han sido sus cómplices, así como la conformación de un gobierno de reconciliación”.

Sicilia Zardaín invitó a la sociedad a sumarse a la caravana que partirá rumbo a la Ciudad de México este 24 de agosto.

## **“Abaten a capo de Los Zetas al sur de Nuevo León”**

### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**10 octubre 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/458142/abaten-a-capo-los-zetas-al-sur-nuevo-leon>

MONTERREY, NL (apro). - Javier Morales Valencia, *El Chagui*, presunto líder criminal del cártel de Los Zetas, fue abatido junto con un acompañante por elementos de la Secretaría de la Marina-Armada de México (Semar) la noche del domingo en el municipio de Allende, 60 kilómetros al sur de la capital, reportan medios locales, que citan fuentes allegadas a las investigaciones.

*El Chagui*, quien fue policía municipal en Piedras Negras Coahuila, desempeñaba actividades criminales en Nuevo León y Tamaulipas.

A su lado quedó el cadáver acribillado de Jorge Luis López Contreras, originario de Monterrey.

Los cuerpos estaban a un costado del coche Vimeo color vino en el que se transportaban en el momento del intercambio de fuego con los marinos. En el interior fueron halladas dos armas largas.

El capo, integrante de la agrupación denominada Los Zetas vieja escuela, ocupaba el liderazgo dentro de la organización criminal desde agosto del año pasado.

Morales mantenía una confrontación directa con integrantes del Cártel del Noreste, a los que había combatido en ciudades de los dos estados.

## **“Revelan registro de la contabilidad de Los Zetas en Europa”**

**Alejandro Gutiérrez**

**Proceso**

**21 octubre 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/459585/revelan-registro-la-contabilidad-los-zetas-en-europa>

MADRID (apro).— Como enlace de los Zetas en Europa, el mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, *El Mono Muñoz*, envió de España a México 63 millones de euros (luego convertidos en 75.6 millones de dólares) por la venta de 2 mil 100 kilos de cocaína realizada en solo seis días, en febrero de 2012.

Las operaciones de este mexicano, detenido en España en marzo pasado y pedido en extradición por Estados Unidos, están detalladas en varias hojas Excel encontradas en dos computadoras que le fueron incautadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEP) de la Policía Nacional, durante un registro y que hoy publica el diario El País.

En dichos documentos se registran 59 entregas de dinero en bolsas de viaje y maletas con los 63 millones de euros por la venta de esa cocaína y demás operaciones de entrada de la droga registrada en los años 2012 y 2013 y el precio por cada kilo (entre 32 mil y 34 mil euros).

Las entregas del dinero se efectuaron en hoteles de la Ciudad de México como el Regente, Marquis Reforma, Camino Real Polanco y establecimientos de la cadena Fiesta Americana, en el estacionamiento del supermercado Soriana, junto al centro comercial Antara Fashion Hall, en Polanco, o en concesionarios de coches, señala la publicación española.

Cita que los receptores de esas entregas encontradas en los archivos del *Mono Muñoz*, están registrados como Bebe, Pedro, Rich, Juan Rafa y Tony. Según la investigación española, Bebe corresponde a Juan Cuitláhuac Martínez Hernández y Tony es Ricardo Fuyivara.

El informe policial español revela que los documentos incautados al *Mono Muñoz* fueron redactados por Ricardo Fuyivara Romero y tras su detención en julio de 2012 en México, los Zetas trasladaron su computadora a España, una portátil Sony, y lo puso en manos de Muñoz Luévano, que continuó con la tarea contable de la organización.

La publicación firmada por José María Irujo, responsable del área de investigación de El País, señala que Fuyivara viajó a España en junio de 2012 junto a su pareja Marisol González López.

La policía sospecha que se alojaron en la casa de La Moraleja (Madrid) de Muñoz Luévano, porque no existen registros de ellos en hoteles de la capital española.

Cita que uno de los movimientos que aparecen en el apartado denominado Director dólares anota la “pérdida” por “accidente” de 900 mil dólares como consecuencia de la detención de Fuyivara en México.

La Secretaría de Marina (Semar) dio a conocer el 26 de julio de 2012 (comunicado 145/2012) la captura de una serie de personas, más de 1 millón 600 mil dólares, armas, granadas, vehículos y equipos de comunicación.

Dos de los detenidos eran Rafael Antonio Medina Rea, *El Rata*, y Ricardo Fuyivara Romero en posesión de una maleta con 880 mil dólares y armas. Derivado de esta detención, también en la Ciudad de México se detuvo al superior de estos dos, de nombre Jesús Rosas Ibarra, *El Mustang*.

La publicación también cita otros colaboradores de Muñoz Luévano como son los mencionados como *Gallito* y *Hermano*, apodos que la policía española cree se trata de José Antonio Guzmán Inzunza y Said Rbib Erraouy, alias *Hermano* por su amistad con Muñoz.

Los dos colaboradores visitaron en Madrid a Muñoz Luévano, momento en que fueron seguidos por policías, quienes los fotografiaron en varias reuniones.

Las hojas Excel acreditan que *Gallito* obtuvo 19 entregas del dinero por el cual obtuvo 1 millón 120 mil 288 euros, que corresponden al 16% de comisión. Said distribuyó entre 635 y 637 kilos de cocaína en Europa, por los que obtuvo 2 millones 529 mil 345 euros, que corresponden a 10 al 16% de comisión.

Tanto Guzmán Inzunza como Said están identificados como distribuidores clave en Europa y se identifica a Holanda como un país clave para la distribución de la droga por Europa.

Los documentos publicados hoy también señalan los gastos de un grupo de personas identificadas como los “ingenieros”, que sufragaban los gastos del envío de dinero en efectivo desde Europa a México, que son anotados como Andrés, Arévalo, Rege, Edgar y LC Pulido, que según la policía es Omar Ascensión Pulido Flores.

Muñoz Luévano es considerado por fuentes de la investigación y por la justicia estadounidense que lo pidió en extradición, como una pieza muy importante en la organización delictiva de los Zetas y está vinculado con políticos mexicanos de algo nivel.

El semanario *Proceso* publicó hace dos semanas que España autorizó que fiscales estadounidenses viajaran a Madrid para recoger una declaración de Muñoz Luévano en la causa judicial que se le sigue en Estados Unidos, por la cual podría enfrentar al menos cuatro cadenas perpetuas.

Su detención se produjo en el marco de la misma causa abierta en la que fue detenido el exdirigente nacional del PRI y exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, quien fue detenido y luego liberado, tras lo cual regresó a México.

## **“Vinculan a políticos mexicanos con “El Mono” Muñoz, enlace de Los Zetas en Europa”**

**LUCIANO CAMPOS GARZA**

**Proceso**

**24 octubre 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/459850/vinculan-a-politicos-mexicanos-mono-munoz-enlace-los-zetas-en-europa>

MONTERREY, NL (apro). - Juan Manuel Muñoz Lúevano, *El Mono*, contacto de Los Zetas en Europa, tuvo cercanía con políticos y funcionarios de México, según información difundida por el diario El País.

El reporte, que cita un informe policial, menciona que las intervenciones telefónicas que forman parte de la investigación que llevó a la captura de *El Mono* en Madrid, el pasado 18 de marzo, hacen referencia a procuradores y exprocuradores estatales.

“En relación con la administración de justicia se pone de manifiesto la relación de éste (Muñoz) con procuradores y exprocuradores como Homero Ramos (procurador de Coahuila), Adrián de la Garza (procurador de Nuevo León) o Torres Charles (exprocurador de Coahuila)”, destaca el medio español.

De la Garza Santos fue procurador de justicia en el sexenio del exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso por uso indebido de funciones.

Actualmente De la Garza –cuya relación con el detenido no se menciona en la nota– funge como alcalde en esta capital.

Se menciona que *El Mono* también habría chantajeado al actual mandatario de Coahuila, Rubén Moreira, amenazándolo con revelar información delicada.

“La influencia de esta persona en la vida política del estado de Coahuila se extiende hasta el punto de intentar amedrentar al actual gobernador, Rubén Moreira, con informaciones reservadas que tiene en su poder”, precisa la nota firmada por el reportero José María Irujo.

De igual manera, presenta una conversación que el 27 de mayo de 2014 sostuvieron Muñoz Luévano y Alejandro Froto García, subsecretario de Hacienda del gobierno de Humberto Moreira, quien también fue presidente nacional del PRI.

El diálogo –recogido por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y la Fiscalía de España– refiere que el entonces funcionario habría pedido a *El Mono* un préstamo de 10 mil pesos (sic) para reparar un barco.

Según el informe de la justicia española, reproducido por El País, “a lo largo del periodo de intervención telefónica se ha puesto de manifiesto la proximidad de Juan Manuel Muñoz a la política y a la administración de la justicia mexicana. En relación con la política mexicana se encuentra muy relacionado con determinadas personas que desempeñan cargos en la administración municipal y regional, como es el caso de alcaldes o congresistas del estado de Coahuila, así como candidatos a ocupar cargos”.

Muñoz Luévano coordinaba desde Madrid la entrada de cocaína enviada por Los Zetas a Europa, puntualiza El País.

**“Los Zetas, Maduro, Putin, Castro y el EI, “depredadores” de la libertad de prensa: RSF”  
REDACCIÓN**

**Proceso****2 noviembre 2016****Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/461071/los-zetas-maduro-putin-castro-ei-depredadores-la-libertad-prensa-rsf>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cártel de Los Zetas y el grupo terrorista Estado Islámico (EI) son los mayores “depredadores” de la libertad de prensa, junto con los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro; Rusia, Vladimir Putin; Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Cuba, Raúl Castro, entre otros.

Así lo afirmó este miércoles la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en el marco del Día Internacional para acabar con la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas.

En su lista de 35 “depredadores”, RSF también incluyó a los presidentes de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang; China, Xi Jinping, y Egipto, Abdel Fatah Al-Sisi.

“Sus técnicas son variadas. Algunos torturan y asesinan a través de sus brazos armados, otros practican los arrestos masivos y los encarcelamientos arbitrarios y otros métodos más sibilinos (oscuros y tortuosos), al abrigo de leyes antiterroristas, por ejemplo”, destacó el organismo con sede en París.

Entre otros políticos que aparecen en la relación RSF destacan el presidente de Siria, Bashar Al-Assad, y el de Arabia Saudí, Salman bin Abdelaziz, así como el líder norcoreano Kim Jong-un; el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-O-Cha, y el guía supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei.

También menciona a varios jefes de Estado de países del Asia central y del Este de Europa que fueron antiguas Repúblicas de la Unión Soviética, además del EI, los servicios secretos de Pakistán, el movimiento político chiita Houthi, en Yemen, y el grupo islamista Al-Shabbaab, en Somalia.

“Estos depredadores son los que más pisotean la libertad de prensa y los que cometen las peores atrocidades contra los periodistas”, denunció Christophe Deloire, secretario general de RSF, quien propuso nombrar un representante especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que siga de cerca estos casos para proteger a los periodistas y acabar con la impunidad.

El Día Internacional para poner fin a la Impunidad en los Crímenes contra Periodistas se celebra el 2 noviembre, desde que la ONU estableció esa fecha en 2013 para conmemorar el asesinato de dos periodistas franceses en Malí.

Se calcula que durante la última década, más de 800 informadores han sido asesinados simplemente por informar y sólo el 10% de estos crímenes ha concluido en condena.

**“Exgobernador Jorge Torres López supo sobre masacre de Los Zetas en Coahuila... y no hizo nada”**

**JUAN ALBERTO CEDILLO****Proceso****20 noviembre 2016****Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/463220/exgobernador-jorge-torres-lopez-supos-masacre-los-zetas-en-coahuila-nada>

SALTILLO, Coah. (proceso.com.mx). - La noche del 18 de marzo de 2011 se festejaba una boda en el Casino Nacional de Piedras Negras, ubicado en la colonia Nísperos. La novia era Ana Chavarría Cruz, hija de un reconocido empresario dueño de la distribuidora de vehículos Chevrolet y de agencias de autos en Saltillo. El novio, Isidro de los Santos Villarreal. Se casaron en la parroquia de Nuestra señora de San Juan de los Lagos.

En el evento se encontraba la crema y nata de la sociedad, incluyendo la clase política de Coahuila.

Al festejo en el Casino Nacional acudió el gobernador Jorge Torres López, sustituto de Humberto Moreira, quien abandonó el cargo los primeros días de enero del 2011 para convertirse en presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y coordinar la campaña electoral de Enrique Peña Nieto.

Torres López era acompañado en la fiesta por el alcalde priista de Piedras Negras, Óscar López Elizondo.

Horas antes, al filo de las 19:00 horas, comenzó un aparatoso operativo de sicarios del grupo delincuenciales Los Zetas para “levantar” a personas y familias en diversas colonias de Piedras Negras.

Decenas de hombres armados que se cubrían el rostro se desplazaban en caravanas de al menos tres vehículos. Irrumpían en las viviendas y con violencia sacaban a sus moradores para subirlos a sus camionetas. La escena se repitió hasta pasada la medianoche en al menos dos decenas de casas.

Una de las viviendas asaltadas fue la del narcotraficante Adolfo Efrén Tavira, un exgerente de Televisa que se sumó a la organización de Los Zetas.

Tavira contó -durante un juicio que se celebró en San Antonio en julio del 2016- cuando arribó un grupo de sicarios a su vivienda para llevarlo donde lo esperaban los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z40 y Z42.

“Era la madrugada del sábado y estaba en mi casa, acababa de llegar y me preparaba a dormir. En mi casa estaba mi esposa y dos hijos menores, mi tercer hijo había salido con sus amigos”.

“De repente sonó el portón de la casa... tres personas entraron armadas. Vienen por mí, le dije a mi esposa. Gritaron mi nombre y entró Gustavo (Ramón Martínez)”.

Gustavo le dijo: “Tavira ¿qué hiciste?”.

“No he hecho nada”, respondió.

En ese momento entró el despiadado pistolero Marciano Millán Vázquez alias *Chano* y ordenó: “¡ya vámonos!”. Un tercer hombre que se cubría el rostro con una máscara de calavera vigilaba desde la puerta.

Gustavo tomó a los hijos de Tavira y los escondió en un clóset junto con su esposa para que no se los llevara *Chano*.

Lo sacaron de su casa y lo tiraron al piso de una camioneta. “Me tenían con un pie sobre mi espalda”.

Lo llevaron a un terreno de la zona conocida como Pico del Águila, a donde tardaron unos 15 minutos en llegar.

Arribaron a un gran terreno bardeado. En ese sitio lo bajaron y *Chano* le puso unas esposas. Lo condujeron a una camioneta que estaba en el centro del gran terreno.

Era una noche oscura pero el detenido logró ver que en el sitio había muchas camionetas y decenas de hombres armados. En un lugar del terreno tenían a 40 personas de rodillas y amarradas.

En la camioneta a la que lo condujeron estaban los capos *Z40* y *Z42*.

“Fue la primera vez que los vi”, contó Tavira.

“Este es Tavira el que trabaja con Poncho”, le dijo a *Z40* David Alejandro Loreto Mejorado, *Comandante Enano*.

Miguel Ángel Treviño le preguntó: “¿Dónde está Poncho?”.

Le respondió que hacía tiempo que no lo veía. En ese momento llegó Daniel Menera con un teléfono móvil y le dice a *Z40*: “Comandante ¿me permite? Tavira trabaja para nosotros y ya no trabajaba para Poncho Cuéllar” y le entrega el celular.

Raúl Lucio Hernández Lechuga, *Z-100* o *El Lucky* le estaba llamando. Después que tomó la llamada dice: “Ok está bien. Por qué no me habían dicho antes. Tú respondes por él, le dijo *Z40* a Daniel Menera. “En este momento lo dejo ir pero cualquier cosa que haga tú me respondes por él”.

Menera sólo alcanzó a decir “sí”.

En el trayecto de regreso a la camioneta, Tavira pasó junto a las personas detenidas. Alcanzó a ver a su amigo de la secundaria Víctor Cruz, su esposa Brenda y un hijo, todos amigos de Poncho Cuéllar. Entre ellos se encontraba el menor de 14 años Gerardo Heath Sánchez, nieto del destacado empresario Reginaldo Sánchez Garza. Lo habían plagiado cuando se encontraba en la casa de un amigo.

La esposa de Cruz, llorando, le alcanzó a preguntar: “¿mis otros hijos?”.

“Ya que estaba en el carro” ... Tavira interrumpe su testimonio y comenzó a llorar. Se hace un largo silencio en la sala del juicio.

Después de la pausa agrega: “Se comenzaron a oír disparos, pues empezaron a matar a toda la gente que estaba ahí. *Z40* y *Z42* los estaban matando, junto con otros sicarios que estaban ahí”.

Desde que los sicarios del *Comandante Enano* levantaron a las primeras víctimas, sus familiares y amigos se comenzaron a movilizar para denunciar la privación ilegal de la libertad ante las autoridades.

Al filo de las 22:00 horas un grupo conoció que el alcalde de Piedras Negras se encontraba con el gobernador Jorge Torres López y decidió dirigirse al Casino Nacional para denunciar los hechos.

Hasta ese lugar llegó el empresario Reginaldo Sánchez Garza y familias de las víctimas desaparecidas para contar al alcalde y al gobernador el despliegue de Los Zetas para secuestrar a decenas de personas, entre ellas algunos menores.

“Tras recibir el reporte, el alcalde y el gobernador abandonaron la ciudad en medio de un fuerte despliegue de seguridad, sin auxiliar a las víctimas”, contó uno de los testigos de esa reunión quien habló con Proceso bajo la condición del anonimato.

La impunidad con la que actuaron Los Zetas la tarde del 18 de marzo de 2011 en Allende, Piedras Negras, Monclova, Cinco Manantiales y en la Región Carbonífera fue posible ya que habían sobornado a mandos del Ejército, delegados de la PGR, Policía Federal y a jefes de la corporación estatal y municipal.

A los funcionarios de la Fiscalía del estado y del gobierno los líderes *zetas* les mandaron cerca de cuatro millones de dólares.

“El dinero se entregó a través de Vicente Chaires (en ese momento secretario particular del gobernador) y Jesús Torres Charles (fiscal general), y varios pagos se hicieron en Saltillo. Fue algún tipo de acuerdo con el gobernador Humberto Moreira”, afirmó Rodrigo Uribe Tapia, hijo de un exalcalde de Piedras Negras, quien se presentó como operador financiero de Los Zetas en el juicio de San Antonio.

Humberto Moreira se ha querido deslindar de la masacre en el norte de Coahuila, argumentando que cuando eso sucedió él ya estaba fuera del gobierno.

No obstante, testimonios y documentos presentados en las cortes de Texas precisan que los secuestros y desapariciones de decenas de personas que fueron incineradas en el Cereso de Piedras Negras comenzaron antes de que terminara el año 2010, cuando Humberto Moreira aún era gobernador.

Lo ocurrido a partir del 18 de marzo del año siguiente fue la culminación de los crímenes masivos.

### **“Exjuez ligado a Los Zetas busca ser fiscal de Veracruz”**

**Noé Zavaleta**

**15 diciembre 2016**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/466538/exjuez-ligado-a-los-zetas-busca-fiscal-veracruz>

XALAPA, Ver. (apro). - El exsubprocurador Jorge Yunis Manzanares, ligado a Los Zetas según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10 –en poder de Apro– apareció hoy en una lista de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como aspirante a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En esa misma investigación ministerial aparece como “alfil” de Los Zetas para auxiliarlos en sus trámites, liberar a sus reos y otras facilidades jurídicas el exsubprocurador Marco Antonio Lezama Moo, quien en junio de 2014 fue ungido magistrado del Tribunal Superior de Justicia por el gobierno del entonces priista Javier Duarte.

En el caso de Yunis Manzanares, a quien la FGE impuso el “término de funciones” el año anterior, pero sin responsabilidad penal alguna, el Congreso local, integrado en su mayoría por PAN, PRD, Morena y PRI, validó que cumple con los requisitos para ser aspirante al cargo de fiscal general.

Los otros nueve aspirantes son Guillermo Beck Chiquini, quien trabajó en el gobierno de Veracruz cuando Miguel Ángel Yunes Linares era secretario de Gobierno en la década de los noventa; Jorge Winckler Ortiz, abogado panista con apenas dos años de haber obtenido su cédula profesional, y Agustín Hernández Virues, quien actualmente es juez de control.

A ellos se suman Ricardo López Henaine, catedrático de la Facultad de Derecho; Ignacio Paz Serrano, exdirector de la Policía Judicial, y Rafael Ramos Maldonado, abogado del partido Movimiento Ciudadano (MC).

En el listado sólo figuran dos mujeres: Tania Vázquez Muñoz, actual consejera electoral y exfuncionaria del Tribunal Electoral, y Dulce Silvia de la Miyar, de profesión litigante.

De entre los diez aspirantes, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares propondrá una terna al Legislativo y, aunque será el pleno el que haga la votación al respecto, diputados señalaron que en próximos días el propio mandatario estatal habrá de dictar “línea” para elegir al titular de la FGE.

En la edición 1881 de Proceso (noviembre de 2012), se informó que la captura de tres presuntos integrantes de Los Zetas permitió a las autoridades federales (Marina y Ejército) detectar la existencia de una red de complicidades entre sicarios y transportadores de droga de ese cártel con subprocuradores de Justicia, policías ministeriales, empresarios y políticos asentados en la región de Córdoba, en la zona montañosa de Veracruz.

En la publicación se aludía a Jorge Yunis Manzanares y Marco Antonio Lezama, de acuerdo con la investigación rubricada por el fiscal especializado Pedro Huesca Barradas, funcionario de la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJE), quien al día de hoy se encuentra desaparecido, luego de que en la cabecera municipal de Cardel fuera “levantado” por un comando.

Otra decena de policías ministeriales y de agentes del MP también salieron incriminados en esa carpeta de investigación, y a la mayoría de ellos se les dio “baja definitiva” o “término de funciones” en la FGE.

En noviembre de 2012, el entonces procurador Amadeo Flores Espinoza –hoy líder estatal del PRI– admitió que se iniciaron alrededor de diez juicios administrativos en contra de servidores públicos de esa dependencia para investigar sus posibles lazos con el crimen organizado; sin embargo, ni él ni sus sucesores en el cargo deslindaron responsabilidades.

El exprocurador argumentó que, en el marco del operativo Veracruz Seguro, la PGR atrajo el caso de corrupción en la Procuraduría local, luego de la detención y consignación de Christopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, quienes se identificaron como zetas y admitieron que trabajaban en coordinación con servidores públicos de Veracruz, entre ellos Lezama Moo y Yunis Manzanares.

En aquella ocasión Flores Espinoza se quejó de que era “muy lamentable” que en ocasiones la prensa dé más valor a lo que “los delincuentes hablan y dicen” que al actuar de las autoridades.

**2017**

Patricia Dávila. ““El Diablo” Veytia y sus amigos”. *Proceso* número 2109, 2 abril 2017. pp. 19-21.  
<https://www.proceso.com.mx/480725/diablo-veytia-sus-amigos>

### ““El Diablo” Veytia y sus amigos”

No tranquiliza a nadie la aprehensión del temible fiscal de Nayarit, Édgar Veytia Cambero, por el gobierno de Estados Unidos: su entorno de impunidad sigue activo en México. Fuentes que conocen su trayectoria delictiva dicen a Proceso que el exfuncionario, apodado El Diablo, comenzó a operar para los mayores cárteles del narcotráfico desde que fue secretario de Seguridad de Tepic y creció en voracidad cuando su jefe de siempre, Roberto Sandoval, llegó a la gubernatura y lo nombró fiscal. No es todo: las mismas fuentes sostienen que Veytia le regaló al actual mandatario propiedades de las que despojó a campesinos, así como caballos de un millón de dólares.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Varias instancias del Estado mexicano, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desdeñaron las denuncias interpuestas entre 2013 y 2016 por ciudadanos de Nayarit contra el entonces fiscal Édgar Veytia Cambero, El Diablo.

Se trata de acusaciones graves por despojo, desaparición de personas, secuestro, extorsión, levantones y asesinatos, así como de operar para las organizaciones delictivas de los Beltrán Leyva, Los Zetas – entonces brazo armado del Cártel del Golfo– y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No obstante, fue el gobierno estadounidense el que giró la orden de detención cumplida el pasado 27 de marzo, cuando Veytia Cambero intentaba cruzar el puente internacional Cross Border Xpress, de San Diego, California. Se le acusa de “conspiración internacional” para importar, fabricar y distribuir ilegalmente heroína, metanfetaminas, marihuana y cocaína en Estados Unidos, cuya ciudadanía ostenta Veytia.

Para los nayaritas esos cargos no son nuevos, sólo que del año pasado a la fecha traicionó a la organización Beltrán Leyva, lo que precipitó su propia caída, sobre todo porque se le señaló como el que le avisó a Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito, que los hijos del Chapo Guzmán estaban en el bar restaurante La Leche, de Puerto Vallarta, para que los secuestrara.

Apenas en febrero pasado se le acusó de traicionar y entregar a las fuerzas federales a Francisco Patrón Sánchez, El H2, y a Daniel Isaac Silva Gárate, El H9, operadores de los Beltrán Leyva, dejando la plaza completamente libre al CJNG.

Paralelamente, Veytia Cambero seguía despojando, amenazando, levantando, secuestrando y encarcelando en el penal estatal de Tepic a quienes se le oponían. Es el caso de Paul y Brenda Magallanes, quienes llevan presos cuatro años, lo mismo que su empleado Cirilo e incluso Efraín, el hijo de éste, quien visitaba a su padre cuando lo detuvieron. El Diablo los encarceló porque no pudo despojar al padre de Paul y Brenda, Agustín Magallanes, de todas sus propiedades (Proceso 1937).

Hace dos semanas Julián Venegas –hijo de Julián Venegas Guzmán, un compadre del Chapo Guzmán a quien el exfiscal desapareció (Proceso 2077)– estuvo a punto de ser levantado por un enviado de Veytia, pero logró escapar. Su madre denunció el hecho a este semanario.

### **El hombre de Los Zetas y los Beltrán**

Cuando Roberto Sandoval asumió la presidencia municipal de Tepic, en 2008, incorporó a Veytia Cambero como director de Tránsito y Vialidad. El 26 de agosto de 2009 lo nombró secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad.

Hasta entonces sólo se sabía que Veytia había laborado en la central camionera local. Actualmente, se le atribuye la propiedad de dos líneas locales de autotransporte de pasajeros que cubren la ruta a la ciudad fronteriza de Tijuana.

En ese tiempo el Cártel de Sinaloa predominaba en Nayarit mediante una de sus células dirigida desde Tepic por los hermanos Alfredo, Arturo y Héctor Beltrán Leyva. Pero en enero de 2008 fue detenido el primero, conocido también como El Mochomo. Los hermanos culparon al Chapo y formaron su propia banda, iniciando la disputa por la zona.

Para entonces, la relación entre Veytia y los Beltrán Leyva se había consolidado. Fuentes que solicitaron el anonimato para evitar represalias señalan que El Diablo ayudó a Los Beltrán Leyva a “limpiar” la zona a cambio de 5 millones de dólares. Para este trabajo los Beltrán Leyva también se aliaron con Los Zetas.

El 26 de mayo de 2011, en el municipio de Ruiz, colindante con Tepic, se enfrentaron sicarios del Cártel de Sinaloa y de Los Zetas, con un saldo de 29 muertos.

Cuatro meses después, el 19 de septiembre de 2011, Roberto Sandoval tomó posesión como gobernador y designó a Veytia Cambero como subprocurador de Justicia. Mientras él estuvo en el cargo, Sandoval nunca nombró procurador, lo cual le dio a Veytia margen de maniobra para consolidar su relación con gente de los Beltrán Leyva de Tepic y con integrantes de Los Zetas en los municipios de La Riviera Nayarit, como Bahía de Banderas, Compostela y San Pedro Lagunillas, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala y Santa María del Oro.

En ese tiempo Veytia creó la Policía Nayarita, cuyos efectivos siempre portan capucha y se trasladan en vehículos oficiales con cristales polarizados y sin placas. Esa corporación la puso al servicio de los dos grupos delincuenciales. Los habitantes de Compostela denunciaron que un día a la semana entraba a esa población una camioneta de los cárteles a levantar personas, siempre escoltada por una patrulla estatal.

En febrero de 2013, a petición del gobernador Sandoval, Veytia Cambero se convirtió en titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por siete años.

Su despacho en la fiscalía cuenta con una cocina y dos habitaciones. En una de éstas hay una cómoda sala con sillones para siete personas. De los muros cuelgan pistolas con las iniciales EV y en una columna colocó un altar a la abundancia: una vasija contiene dos lingotes de oro marcados con las mismas iniciales; la desbordan billetes de dólares y euros. Muy pocas personas eran invitadas a este lugar.

Su cargo de fiscal le permitió consolidar su actividad delictiva, aunque las quejas en su contra se multiplicaron.

El hijo de uno de los hermanos Padilla –tres reconocidos oftalmólogos que radican en Tepic– fue secuestrado en 2013. La primera reacción de la familia fue acudir al gobernador, quien los envió con el fiscal. Pero Veytia les reclamó por haber ido primero con Sandoval: “Yo soy quien tiene la última palabra. La tarifa mínima era de 300 mil pesos, pero ya que intervino Sandoval, se las dejó en 100 mil pesos por los gastos ya generados”.

Regresaron al muchacho a las dos horas de entregar el dinero, platica a Proceso don Agustín Magallanes, quien hace cinco años huyó del estado a causa de la persecución del Diablo.

Otro caso es el de Jaime Corona y su hijo Ernesto. El padre, empresario del municipio de Bucerías, aportó fuertes sumas de dinero para la campaña de Sandoval hacia la gubernatura. En 2015 Ernesto fue levantado por elementos de la Policía Nayarita. Don Jaime le reclamó a Sandoval: “Yo invertí en tu campaña, ¿con esto me vas a pagar?”. El hijo fue liberado de inmediato.

Para entonces a Los Zetas ya no les bastaba controlar la Riviera Nayarit; querían extender su dominio a la capital del estado. Allí fueron interceptados: el 8 de septiembre de 2013, en Tepic, la FGE dio a conocer la captura de 26 presuntos zetas, entre ellos seis menores de edad.

Una vez que fueron replegados a Compostela y Bahía de Banderas, el fiscal puso la Policía Nayarita al servicio de Los Zetas, igual que hizo con Los Beltrán Leyva en Tepic, narran a Proceso Agustín Magallanes y Adrián Villanueva, quienes abandonaron Compostela hace cinco años por las amenazas de muerte de Veytia Cambero. Villanueva fue despojado de propiedades y su familia ha vivido bajo la misma amenaza.

### **Los narcos se adueñan del estado**

Desde 2013 Proceso tiene copia de las denuncias presentadas por diversos ciudadanos ante la PGR, las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, así como la CNDH y el gobernador Roberto Sandoval. Unas fueron publicadas el 15 de diciembre de 2013 en el reportaje El fiscal sicario y otras en El fiscal oscuro, del 21 de agosto de 2016. En ambos textos los denunciantes señalan a Veytia Cambero como protector y operador de Los Zetas, aliado de los Beltrán Leyva y más recientemente como protector del CJNG.

Otro cártel que operaba en el estado con el objetivo de eliminar a la organización del Chapo era el de Alberto Carrillo Fuentes, Betty La Fea, quien ante el repliegue de su hermano Vicente, El Viceroy, asumió el liderazgo del Nuevo Cártel de Juárez (NCJ) y se alió a Los Zetas y los Beltrán Leyva contra Guzmán Loera.

Cuando el Cártel de Sinaloa fue derrotado, Los Zetas, que aún eran brazo armado del Cártel del Golfo, se quedaron con los municipios del norte de Nayarit. Betty La Fea fue detenido el 1 de septiembre de 2013 por la Policía Federal, lo que acabó con la aspiración del NCJ de quedarse con el territorio.

Fuentes que solicitaron el anonimato aseguran que Veytia Cambero empleaba su línea de camiones para ingresar “clavo”, es decir, mercancías como marihuana y heroína procesada en los laboratorios que el fiscal tiene en la sierra de Nayarit.

Cuando empezó la guerra entre los cárteles en el país, el funcionario empezó a negociar con el de Sinaloa, después mandó a ejecutar al lugarteniente Alberto Rosales, conocido como El Albert o El 06, quien traía entre 20 y 30 escoltas.

Una de las personas consultadas afirma que el exfiscal traicionó a los lugartenientes del Cártel de Sinaloa en Nayarit, como El Bigotes, a quien ejecutaron en La Resolana en marzo de 2012, así como a Los Pelones y a Rogelio Magallanes. Una vez que el funcionario les limpió la zona, la organización Beltrán Leyva se desplegó libremente en la plaza, sólo que Veytia negoció con Los Zetas el sur del estado.

El 16 de octubre de 2013, en una balacera en la que fue herido el cantante Remmy Valenzuela, en Santa María del Oro, el fiscal de Roberto Sandoval les brindó seguridad a los capos Héctor Beltrán Leyva, al H2 y al Chapo Isidro. Al irrumpir por sorpresa efectivos de la Marina, salieron a enfrentarlos integrantes de la Policía Nayarita para dar tiempo a que los cabecillas huyeran. Los estatales fueron detenidos en el Penal Tres, pero pagaron y salieron.

De hecho, según las fuentes mencionadas, la casa donde la noche del 9 de febrero la Marina abatió al H2 era propiedad de Isidro Aguilar Luke, alias El Chilo o 02, quien fue acribillado en un operativo en El Naranjo, Sinaloa. Con frecuencia los vecinos veían salir a Veytia Cambero de esa casa en Tepic.

En el estado, dicen las fuentes, todos saben a qué se dedica Veytia Cambero. Agregan que el gobernador se hace el sorprendido, pero él mismo es propietario de un rancho que El Diablo le quitó al “mafioso” Miguel Ángel Ibarra Valle, El Migue, antes de matarlo, por Puerta de la Laguna, en Tepic. Incluso, detallan, Roberto Sandoval construyó caballerizas ahí.

Para el lado de Bahía de Banderas, el todopoderoso funcionario mandó levantar a los campesinos para hacerlos firmar cesiones de derechos de sus tierras. El 22 de marzo de 2016 Veytia Cambero abrió su notaría en La Mezcalera y se adjudicó esas propiedades.

A decir de las fuentes, hasta el secretario de Gobernación conocía la situación, ya que después de la balacera de 2013 donde quedó herido Remmy Valenzuela, el secretario de Marina se molestó y se quería llevar al fiscal nayarita a la Ciudad de México, pero el gobernador intervino ante Osorio Chong, quien le leyó la cartilla a Sandoval para que Veytia “le bajara”.

Para tener al mandatario de su lado –siempre en la versión de las fuentes mencionadas–, el fiscal le regaló a Sandoval 300 hectáreas en La Resolana, tierra que le quitó a ejidatarios con amenazas. También le regaló caballos de 1 millón de dólares que trajo de España. Comentan que el gobernador no tenía nada, era un simple tablajero, pero ahora posee esos ranchos en El Tizape, Villa Hidalgo.

A su vez, El Diablo tenía laboratorios por el lado de Amatlán de Cañas e Ixtlán del Río.

–¿El fiscal entregó a los hijos del Chapo el 14 de agosto de 2016, cuando fueron secuestrados? –se le pregunta a uno de los declarantes.

–¡Claro! La caravana que los acompañaba pasó por Nayarit, andaban en Bahía de Banderas y les puso cola con la Policía Nayarita hasta el restaurante bar La Leche, de Puerto Vallarta –ya en Jalisco–, adonde llegó gente de Alfredo Beltrán Guzmán, El Mochomito, y se los llevó.

Un mes antes, el 11 de junio, se realizó un ataque armado en el poblado La Tuna, municipio de Badiraguato, donde vive Consuelo Loera, madre del Chapo Guzmán. El Mochomito fue señalado como responsable de ese tiroteo, que dejó tres muertos y varios heridos.

De acuerdo con versiones de funcionarios federales, para entonces Beltrán Guzmán estaba confrontado con un hermano del Chapo, Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, con quien se disputaba los dominios que habían sido del Chapo Guzmán.

Estas mismas fuentes federales explican que Ernesto Guzmán Hidalgo era abuelo del Mochomito y medio hermano de Joaquín Guzmán Loera. Guzmán Hidalgo era padre de Patricia Guzmán Núñez, esposa de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo. Ellos son los padres de Alfredo Beltrán Guzmán, cercano a las cúpulas de los cárteles de los Beltrán Leyva y de Sinaloa.

El 9 de diciembre de 2016 El Mochomito fue arrestado por autoridades federales en Zapopan, Jalisco. Lo acusaron de ser uno de los responsables de varios hechos de violencia en la zona del Triángulo Dorado y de la emboscada que un grupo de sicarios le tendió el 30 de septiembre de ese año a un convoy del Ejército en Culiacán, Sinaloa, con un saldo de cinco soldados muertos y 10 heridos.

Después de la recaptura del Chapo Guzmán el 8 de enero del año pasado, la organización de los Beltrán Leyva intentó extender su dominio en diversas zonas del país.

El H2 y el H9 se movían libremente en Tepic. Las fuentes informan que el segundo era cliente del Play City ubicado en la plaza Foro Tepic, sobre la avenida Colosio. Cuando le pegaba al Bingo pedía su pago en efectivo. Entraba por la cocina y lo vigilaban hombres armados, pero de todas formas reforzaban su seguridad policías estatales que se mezclaban entre los clientes.

En ese entorno de impunidad el poder de Veytia Cambero era tal que presuntamente financió la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, a la gubernatura de Nuevo León; señalamiento que rechaza el ahora mandatario de esa entidad.

Ahora está preso, pero en la FGE su poder prevalece porque el gobernador Roberto Sandoval nombró como suplente a Carlos Alberto Rodríguez, hombre de confianza del exfiscal desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tepic.

De acuerdo con el Tribunal de Distrito del Este de Nueva York, entre enero de 2013 y febrero de 2017 Veytia Cambero, conocido también como Epp y Lic Veytia, habría introducido a Estados Unidos al menos un kilo de heroína, cinco kilos de cocaína, 500 gramos de metanfetamina y una tonelada de marihuana. Por lo pronto, el gobierno de ese país reclama 250 mil dólares por esas transacciones ilegales; sin embargo, reconoce que hay cargos contra el exfiscal anteriores a 2012 y por los cuales no será procesado.

Juan Alberto Cedillo. “La guerra entre Zetas y el CDG como telón de fondo”. *Proceso* número 2111, 16 abril 2017. pp. 8-10. <https://www.proceso.com.mx/482720/la-guerra-zetas-cdg-telon-fondo-en-tamaulipas>

**“La guerra entre Zetas y el CDG como telón de fondo”**

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (Proceso).- Llamadas de última hora les salvaron la vida a Enrique Martínez y Martínez y a Baltazar Hinojosa Ochoa. La mañana del 28 de junio de 2010 recibieron advertencias en sus celulares para que no acompañaran al aeropuerto al candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, quien se dirigiría a Valle Hermoso para celebrar el mitin de cierre de su campaña.

Ambos personajes eran colaboradores del candidato, pero también amigos muy cercanos del exgobernador tamaulipeco Tomás Yarrington Ruvalcaba. Esa mañana Martínez (quien dos años después sería titular de la Sagarpa y ahora representa a México en Cuba) e Hinojosa (frustrado aspirante al gobierno en 2016) no abordaron las camionetas que los llevarían al aeropuerto.

Cuatro meses antes Los Zetas se habían separado de su matriz, el Cártel del Golfo (CDG). Para mediados de 2010 ambas bandas estaban en medio de una disputa por las principales plazas del estado y los primeros ganaban todas las batallas militares. Gracias a los documentos de la Corte Sur de Texas – que se hicieron públicos en días recientes– ahora se sabe que también estaban ganando la contienda política.

Los líderes zetas acababan de enviar 4.5 millones de dólares a Rodolfo Torre Cantú mediante el empresario Antonio Peña Argüelles –el enlace de ambos cárteles con los políticos– para financiar su campaña.

Con lo que no contaban Los Zetas era con que Jorge Eduardo Costilla, El Coss, líder del CDG, y los políticos que lo protegían –entre ellos Tomás Yarrington– echarían abajo sus esperanzas de tener un gobernador “aliado”.

A las 10:40 horas de ese 28 de junio, seis días antes de los comicios estatales, Rodolfo Torre Cantú fue asesinado.

### **Narcogobernadores**

El acercamiento del CDG con los gobernadores tamaulipecos comenzó a estrecharse durante la administración de Manuel Cavazos Lerma. Antes, cuando el narcotráfico no tenía los alcances de ahora, los políticos importaban menos para los narcos. En esos tiempos se centraban en sobornar a jefes policiacos o a mandos del Ejército.

Pero en el sexenio de Cavazos Lerma el CDG “compró” a uno de sus familiares, que se desempeñó como comandante de la Policía Estatal en Reynosa y Miguel Alemán: Gilberto Lerma Plata, primo del gobernador.

Lerma tenía bajo su mando al joven policía Samuel Flores Borrego, quien años después se convertiría en el Metro 3. También al policía Aurelio Yankee Cano Flores, que posteriormente sería jefe de plaza del CDG en Los Guerra, localidad del municipio Miguel Alemán.

Gracias a la información que recibían desde la capital sobre los operativos de los policías judiciales federales y de los militares, así como a la protección que les brindaba el primo del gobernador, el cártel transformó a Los Guerra en su principal punto de cruce de mariguana hacia el norte.

La DEA conoció los detalles de ese trasiego; la agencia antinarcoóticos estableció en Houston un *wireless room*, desde donde una empresa subcontratada monitoreó y grabó todas las conversaciones de los miembros de la organización en la Frontera Chica, pues éstos usaban celulares Nextel, los cuales buscaban las antenas de Estados Unidos en la frontera como repetidoras.

Así la DEA supo que Flores Borrego coordinaba el incipiente contrabando de armas AK-47 y R-15 para el CDG.

Dichas grabaciones fueron presentadas en la cortes de Estados Unidos cuando se juzgó allá a Lerma Plata y a Cano Flores.

Cavazos Lerma fue sustituido en el gobierno por Tomás Yarrington. Cuando éste ganó la elección, su relación con el CDG ya era muy estrecha. Gracias a esa amistad el cártel pudo elegir a los comandantes de la Policía Ministerial en las plazas que controlaba. También recibió de la oficina del gobernador, a cambio de sobornos, información relevante sobre operativos militares.

Los dólares que mandaron al siguiente gobernador, Eugenio Hernández Flores, les permitieron seguir su expansión y disfrutar de la protección estatal. La DEA y otras dependencias supieron que durante su administración Hernández recibió millones de dólares, primero del CDG, y al final de su mandato, de Los Zetas.

En las indagatorias contra ese gobernador participaron, además de la DEA, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Seguridad Nacional y el Buró Federal de Investigaciones (FBI). El centro de operaciones se ubicó en Houston, donde se revisaron cuentas bancarias, llamadas y correo electrónicos de Eugenio Hernández. Así se supo de los sobornos del crimen organizado y, además, que el mandatario violaba las leyes para adjudicarse jugosos contratos de obra pública mediante una constructora que tenía en sociedad con el gobernador que lo sustituyó: Egidio Torre Cantú.

Los resultados de las investigaciones se hicieron públicos y para octubre de 2014 Hernández ya era considerado prófugo.

“Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal trasnacional, a cambio de que éste tuviera la capacidad para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador”, destacó la acusación de los fiscales de Texas.

El dinero de los sobornos fue lavado en bancos texanos por el empresario Guillermo Flores Cordero, originario de Torreón, quien mantenía cuentas en Texas por alrededor de 30 millones de dólares. Además, el gobierno estadounidense le confiscó a Hernández varias residencias.

Ese exgobernador también lavó y “escondió” parte de su dinero ilegal en México mediante su cuñado Óscar Gómez Guerra, quien fue investigado por las autoridades fiscales por “enriquecimiento ilícito”. Durante un breve lapso el fisco mexicano congeló sus cuentas, pero un juez le otorgó un amparo para mover su dinero y sacarlo del país. Manejó cuentas por montos superiores a los 4 mil millones de pesos, pese a ser un funcionario de tercer nivel en las administraciones estatales de Yarrington y Hernández.

Actualmente Hernández y Gómez están en la lista de criminales buscados por la justicia estadounidense. El FBI ofrece una recompensa por ellos.

No obstante, Hernández aparece regularmente en actos políticos en Tamaulipas. Se dejó ver como “invitado especial” en el último informe de Egidio Torre, y en la elección pasada acudió a votar como cualquier ciudadano. En cada acto donde aparece, ofrece improvisadas conferencias de prensa, resguardado por los escoltas que le proporcionó Torre Cantú.

### **El intermediario**

A Eugenio Hernández lo reemplazaría Rodolfo Torre Cantú, pero su asesinato hizo que su hermano Egidio llegara a la gubernatura de Tamaulipas.

Egidio Torre siguió los pasos de sus antecesores. Además se deslindó de las investigaciones sobre el asesinato de su hermano, cediendo la batuta a la Procuraduría General de la República (PGR). También proporcionó ocho escoltas a Yarrington.

Un año después del asesinato, los líderes zetas descubrieron que Antonio Peña Argüelles no había entregado los sobornos que le habían enviado a Rodolfo Torre Cantú, según las confesiones que están en poder de los fiscales de Texas.

Así que Miguel Ángel Treviño, *El Z-40*, ordenó secuestrar al hermano mayor del empresario, Alfonso, cuyo cuerpo apareció el 29 de noviembre de 2011 en el monumento a Cristóbal Colón, en Nuevo Laredo, sitio preferido por Los Zetas para tirar cadáveres.

El cuerpo de Alfonso Peña fue cubierto con un narcomensaje en el cual acusaban a su hermano de haber robado 4.5 millones de dólares y de “no cumplir con sus obligaciones”.

La mañana de ese día Antonio Peña Argüelles recibió un mensaje en su BlackBerry de parte del *Z-40*. El texto fue reproducido en la confesión que rindió ante la DEA.

En el mensaje le advierte que regrese el dinero o no tendrá lugar donde esconderse: “Además, su hermano anda diciendo aquí que usted y Tomás Yarrington, junto con Costilla, mataron al candidato a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, porque estaba afectando al negocio de la construcción y estaba protegido...”

“No sea pendejo y ponga atención a quién le anda robando de y sobre el candidato, fue por los negocios que usted tiene con Costilla, Tomás (Yarrington) y Osiel Cárdenas. Su hermano también me dijo de los prestanombres que tiene con las propiedades suyas y de Osiel y sabemos que están en Laredo, Texas y San Antonio.”

Tras la amenaza, Peña Argüelles viajó a San Antonio y se entregó a la DEA.

### **Presuntas órdenes de detención**

Un día después de que se anunció la detención en Italia de Tomás Yarrington, el actual gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier Cabeza de Vaca, declaró que esa captura ayudaría a resolver el homicidio de Rodolfo Torre.

“Queremos que se profundicen líneas de investigación, como el doloroso caso del cobarde asesinato de Rodolfo Torre Cantú, y que se pueda concluir con todas esas averiguaciones”, afirmó.

Destacó que en su administración se denunció que Yarrington y Hernández tenían a efectivos de la Policía Ministerial fungiendo como sus escoltas, los cuales fueron asignados por el anterior gobierno de Tamaulipas, pero que ya fueron retirados.

Agregó que buscarán recobrar los bienes ilegales del exgobernador. No obstante, hasta ahora la procuraduría estatal no tiene programada acción legal alguna contra Fernando Cano Martínez, principal lavador de Yarrington, con cientos de propiedades en el estado.

“La violencia desmedida que sufre Tamaulipas fue por la complicidad de Tomás Yarrington con el crimen organizado”, concluyó.

Ese mismo día comenzaron a circular en las redes sociales mensajes con rumores sobre “la llegada de personal de la SEIDO y PGR para rastrear todo lo relacionado a tres exgobernadores: Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington” y, además, para conocer la carpeta de investigación y todos los hechos asociados al asesinato del excandidato del PRI.

Otro rumor señaló que ya se habían girado órdenes de aprehensión y abierto averiguaciones contra jefes de grupo de la Policía Ministerial y mandos de la procuraduría y de la Unidad General de Investigaciones, por estar implicados en el asesinato de Torre Cantú.

Los textos incluían nombres de algunos comandantes y funcionarios en la procuraduría estatal que han permanecido desde la época de Yarrington, Eugenio Hernández y Egidio Torre Cantú y que el nuevo gobernador panista dejó en sus puestos.

Noé Zavaleta. “A la vista, los negocios de ordeña en Veracruz”. *Proceso* número 2115, 14 mayo 2017. pp. 14-15. <https://www.proceso.com.mx/486959/a-la-vista-los-negocios-ordena-gasolina-en-veracruz>

### **“A la vista, los negocios de ordeña en Veracruz”**

XALAPA, Ver. (Proceso).- Las autoridades estatales y municipales se muestran sigilosas en lo concerniente a las bandas de huachicoleros que operan en la entidad, aun cuando los expendios clandestinos de venta del combustible extraído de los ductos de Pemex proliferan en las orillas de las carreteras federales que atraviesan la entidad.

Es común observar vehículos con garrafones llenos de gasolina en Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Acayucan, Minatitlán, en el sur de Veracruz; lo mismo sucede en Tierra Blanca, Tres Valles y Cosamaloapan, en la Cuenca del Papaloapan, y en la región de Los Tuxtlas.

En ese negocio participan lo mismo senectos que amas de casa, adolescentes y menores, quienes no se inmutan cuando circulan por la zona patrullas de la Fuerza Civil y de la Policía Federal.

“Aquí sólo se montan los expendios –dice al reportero Ramiro “N”, uno de los huachicoleros que opera cerca de Venustiano Carranza, donde en diciembre pasado fueron abatidos 20 presuntos vendedores de combustible–. No se pregunta de dónde viene la gasolina; sólo hay que darle ‘su mordida’ a los policías locales o federales para que nos dejen trabajar... El combustible es más barato. La gente viene y compra. Así de simple.”

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Jaime Téllez Marie, se queja de la pasividad de Pemex para atacar a las bandas que extraen el combustible de sus ductos. Aun así, en el primer cuatrimestre del año se recuperaron 800 mil litros, declaró el jueves 11 en Coatzacoalcos.

Según el funcionario, el robo de hidrocarburos ocurre principalmente en tres zonas de Veracruz: las inmediaciones de Córdoba-Orizaba (Omealca, Cuitláhuac, Tezonapa y Cuichapa), que colindan con el llamado Triángulo Rojo de Puebla; la zona de Tierra Blanca y la Cuenca del Papaloapan, y el sur del estado.

### **Los ductos de la violencia**

Fuentes locales comentan que detrás de los huachicoleros –algunos de los cuales pertenecen a los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Los Zetas– hay una industria de secuestros, levantones, robo de vehículos, ejecuciones, despojo de tierras y desplazamiento de campesinos, sobre todo en la ruta de ductos de Pemex que llevan de Minatitlán a la Ciudad de México.

“En esa ruta proliferan los ranchos donde se almacena la gasolina robada. Lo mismo en Hueyapán de Ocampo que en Chinameca, Sotepan y Coatzacoalcos. En ese entorno hay muchos desaparecidos y ejecutados”, comenta una de las fuentes, que pide el anonimato.

Añade: La violencia se exagera cuando las bandas criminales se “depuran”, y todo sucede con la complicidad policiaca.

Si bien la “ordeña” de ductos es una de las principales fuentes de financiamiento de la delincuencia organizada y afecta a la entidad desde hace varios años, el gobierno de Javier Duarte –preso en Guatemala acusado de delincuencia organizada, peculado y desvío de recursos, entre otros delitos– nunca la combatió.

El 4 de enero último el sucesor de Duarte, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, dijo tener informes de que el 80% del robo de hidrocarburos ocurre en centros de almacenaje y el 20 restante en los ductos de Pemex en Veracruz.

“Esperamos que Pemex ponga más atención en el tema. Cada domingo, en las evaluaciones del grupo Coordinación Veracruz vemos que el robo de combustible está presente”.

El 2 de octubre de 2016, diez días antes de que Duarte pidiera licencia al cargo, hubo una explosión en la colonia Playa Linda, la misma donde se ubica la estación de Policía del Puerto de Veracruz. El siniestro afectó 14 viviendas y dañó varios contenedores de tráileres, y tres vehículos quedaron reducidos a cenizas.

Personal de la Secretaría de Protección Civil detectó que en la zona del principal corredor portuario-turístico-industrial del Golfo de México había depósitos donde se almacenaban 14 mil litros de combustible, por lo que desalojó a un centenar de vecinos.

Días después hubo más explosiones en el puerto de Veracruz, en la región de Las Bajadas y Tejería, cerca de la zona industrial. Las autoridades las minimizaron.

Los problemas resurgieron el 27 de marzo último, cuando socorristas de la Cruz Roja de Nogales atendieron a dos hombres con quemaduras de gravedad provocadas por la explosión en un ducto de

Pemex cuando era ordeñado por unos desconocidos en la región de La Balastrea, entre Omealca y Nogales.

### **Los aseguramientos**

En el sur de la entidad y en los municipios limítrofes con Oaxaca son frecuentes los aseguramientos por parte del Ejército de bodegas clandestinas con combustible robado.

El 16 de enero, por ejemplo, el grupo de Coordinación Veracruz desmanteló el rancho El Faisán, en Cotaxtla, y aseguró medio centenar de vehículos –58 de los cuales eran camiones de carga; cuatro de ellos llevaban tanques cargados con 20 mil litros de combustible cada uno– una pick-up, dos fusiles AK-47, un AR-15, un M-4, una pistola 9 mm, 10 cargadores y 316 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Al día siguiente, en rueda de prensa, el titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler, declaró que se iniciaría el procedimiento de extinción de dominio en perjuicio del propietario del inmueble, aunque no proporcionó su nombre. Sin embargo, en la dependencia los empleados comentaron que no hubo ningún detenido.

Gloria Leticia Díaz. “Coahuila: Entre el infierno y la esperanza”. *Proceso* número 2122, 2 julio 2017. pp. 22-27. <https://www.proceso.com.mx/493247/coahuila-infierno-la-esperanza>

### **“Coahuila: Entre el infierno y la esperanza”**

Coahuila, una de las entidades del país más castigadas por la violencia, concentra un dramático número de casos de desapariciones forzadas, en muchas de las cuales toman parte las fuerzas públicas. Pero al tamaño de la tragedia no le ha seguido una labor de la misma dimensión para hacer frente a este gravísimo problema, razón por la cual los familiares de las víctimas –a riesgo de quedarse sin empleo, ver rota su estructura familiar y perder todos sus bienes– decidieron asumir las investigaciones que las autoridades eluden. Este es el primero de una serie de reportajes, que incluirá otros estados, en el que *Proceso* ofrece un panorama de este infierno que no acaba.

EJIDO SANTA ELENA, Coah. (Proceso). - Con extrema meticulosidad, Silvia Ortiz examina las piedras, la arena y el carbón que los agentes de la policía ministerial de Coahuila han colocado sobre una mesa después de cernirlos con una malla. Con guantes estériles inspecciona pequeños trozos negros de menos de un centímetro de longitud y los separa del resto de residuos.

“Este es un pedacito de hueso. Lo distingues por su porosidad, dureza y brillo. Hay que separarlo para que lo analicen. Aunque sea un pedacito chiquito, es alguien que fue amado, y lo necesitan en una casa”, explica Silvia, presidenta del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción (Vida), mientras estudia el material que había sido descartado por peritos forenses durante una excavación previa, en una zona poblada por abetos a unos cien metros.

Óscar Sánchez, esposo de Silvia, comenta: “Desde hace dos años decidimos salir a buscar en el monte y el desierto a nuestros seres queridos. Ya nos hicimos expertos en identificar sitios donde podría haber restos, pero nuestro trabajo no termina ahí: supervisamos a los peritos. Un huesito que se quede entre la tierra tal vez sea lo único que quede de una persona”.

Detrás de la zona resguardada por cintas amarillas, peritos vestidos con monos blancos escarban más o menos a 50 centímetros de la superficie, ennegrecida por el fuego, y rescatan pedazos de material negro. Durante aproximadamente tres horas extienden sobre pliegos de papel kraft incontables trozos de huesos humanos quemados con diésel. Entre ellos se distinguen partes de cráneo, dientes y falanges, según explican los analistas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE).

Este ejido es uno de los cuatro puntos de La Laguna donde Vida ha hallado fosas clandestinas desde marzo del año pasado. Los otros son Patrocinio, Estación Claudio y San Antonio de Gurza. El grupo ha encontrado miles de fragmentos óseos. Sólo en Patrocinio extrajeron 85 mil pedacitos de huesos humanos calcinados. ¿Osamentas completas? Sólo 10.

Los sepulcros ilegales corresponden al modus operandi de Los Zetas, que sentaron sus reales en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira (2005-2011) y se mantuvieron los dos primeros años de la administración de su hermano Rubén, quien dejará el cargo en noviembre próximo.

El subprocurador de Personas Desaparecidas de la PGJE, José Ángel Herrera, informa que en Coahuila permanecen abiertos mil 815 expedientes por desaparición, la mayoría sobre hechos ocurridos entre 2006 y 2012.

Así, quien gobierne Coahuila a partir de diciembre próximo deberá esclarecer esos casos e identificar los miles de restos encontrados en la entidad, entre los que destacan 458 cuerpos depositados en fosas comunes como parte del Plan Estatal de Exhumaciones acordado por el gobierno de Rubén Moreira y los cuatro colectivos de familiares de desaparecidos de la entidad: Vida, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (de Piedras Negras) y Alas de Esperanza (Allende).

Madre de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida en 2004, Silvia Ortiz dice: “Sé que a mi hija no la voy a encontrar entre los restos calcinados, porque esa técnica la empezaron a usar los delincuentes después de que se llevaron a mi niña, pero yo sé lo que sienten mis compañeras: una gran desesperación de ver a funcionarios que se dedican a hacer oficios de colaboración o que te piden que les llesves a los testigos y hasta que consigas los teléfonos de los responsables de llevarse a tu hijo o hija”.

Silvia, quien fue maestra de secundaria, inició la búsqueda en enero de 2015 acompañada de otros familiares de desaparecidos y de su esposo. Al principio iban por su cuenta y riesgo a verificar las versiones anónimas de la ubicación de sitios “de exterminio”, como les han llamado, pero a partir de mayo de 2015 empezaron a ser resguardados por elementos del Ejército Mexicano, la Policía Federal y agentes ministeriales.

“Las autoridades de la procuraduría entendieron que debían acompañarnos, aunque todavía les falta agarrar la pala y la varilla para buscar restos”, dice.

### **Voluntad inquebrantable**

Sábado 3 de junio. Los integrantes de Vida enfilan rumbo a La Gilita, Matamoros, zona desértica a 30 minutos de la carretera, para buscar vehículos abandonados relacionados con casos de desaparición.

Escondiéndose de los rayos del sol –mientras Silvia, policías federales y militares buscan el número de identificación de una camioneta enterrada– cuatro integrantes del grupo bromean entre ellas.

Han acudido a la mayoría de las búsquedas y encontrado restos en alrededor de 10 sitios. De origen humilde, las mujeres cuentan que han perdido sus pocos bienes por allegarse recursos para dedicarse a la búsqueda de sus hijos o hermanos. Procuran conseguirse trabajos que les permitan tener libres los sábados para poder participar en los rastreos, labor que las aleja de sus parejas, familias y amigos.

“Cuando encontramos restos, a todas nos da para abajo, nos sentimos tristes porque no queremos que sea nuestro hijo, y a la vez satisfechas porque pensamos que esa personita ya va a regresar a casa”, comenta Sonia Castañeda, madre de Guillermo Contreras, desaparecido por policías municipales en julio de 2014, en Torreón.

“No nos sentimos solas porque otra persona no te va a entender. Sentimos feo que nos digan: ‘Ya deja de buscar, ha de estar muerto, déjasele a Dios’”, añade Rosa María Flores García, madre de Sergio Vázquez, desaparecido en febrero de 2010 también por policías municipales de Torreón.

Acompañadas de Rocío Hernández –hermana de Felipe Hernández, levantado en una rancharía de Torreón en 2011 presuntamente por miembros de la delincuencia organizada– las tres mujeres narran las vicisitudes que han atravesado en el intento por que sus casos sean investigados. Aún no tienen respuesta, pese a que en los casos de Sonia y Rosa los responsables están plenamente identificados.

La presión de los colectivos, eso sí, ha empujado al gobierno de Rubén Moreira a promulgar reformas a la constitución local y al Código Penal contra la desaparición forzada y la perpetrada por particulares, así como la Ley de Presunción de Ausencia por Desaparición, además de apuntalar la identificación de restos, crear instituciones para la búsqueda o colaborar con organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Cruz Roja Internacional y contratar servicios de un laboratorio privado para la identificación forense.

En lo anterior coinciden María Elena Salazar y Ángeles Mendieta, madres de Hugo Marcelino González e Iván Baruch Núñez, respectivamente, desaparecidos en 2009 y 2011. Ellas son integrantes de Fundec, que agrupa a 120 familias que exigen conocer el destino de 490 personas.

Entrevistadas ante el inconcluso Memorial de los Desaparecidos (en la Alameda Zaragoza, de Torreón, y promovido por el entonces alcalde priista Javier Riquelme –cuya elección como gobernador está en litigio), reprochan que el estado no haya realizado búsquedas en vida, y que ahora los esfuerzos se centren en el rescate de restos.

“¿Para qué tantos huesos si no hay recursos e infraestructura para identificarlos?”, cuestiona Mendieta.

### **Terror policiaco**

En Piedras Negras, Hortensia Rivas y Yolanda Vargas, fundadoras de Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, han documentado 115 casos ocurridos desde 2009, 95 encuadrados en el delito de desaparición forzada.

Madre de Víctor Manuel Guajardo (sacado de su casa por efectivos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, GATE, en julio de 2013) Hortensia Rivas asevera que policías de esta corporación han confesado ante la organización civil que “los había mandado el gobernador y que su orden directa era ‘matar a todas las personas de la delincuencia’; pero aquí se fueron muchas personas inocentes. No investigaban. Venían, te agarraban y te desaparecían”.

Hortensia y su grupo empezaron a destacarse en manifestaciones, pero conformaron un colectivo dedicado a rescatar personas desaparecidas, muchas de ellas detenidas ilegalmente por efectivos de Fuerza Coahuila, mediante la interposición de amparos y movilizaciones hacia las oficinas estatales.

El caso de Víctor Manuel fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pues sigue impune no obstante que hay dos presuntos responsables detenidos, procesados por otros cargos.

Creado en 2011 durante el gobierno de Rubén Moreira, el GATE es sinónimo de terror en Coahuila, aun cuando en 2016 se le cambió el nombre por el de Fuerza Coahuila y se le regularizó dentro de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Entre la población, a sus elementos se les sigue llamando “gates”.

Yolanda es madre de Brenda Melina Zúñiga, policía municipal desaparecida en 2010 después de haber sido acosada por su jefe inmediato, quien le pidió su renuncia. Días después de la desaparición, el automóvil de Brenda fue visto en las calles de Piedras Negras manejado por personal de la policía municipal, sin que hasta ahora haya resultados de las indagatorias.

“Para nosotras no hay más responsables que el gobierno, porque no ha hecho nada por resolver los casos, como la denuncia que recibimos de manera anónima de un exreco al que hicieron cavar tumbas en el penal de Piedras Negras, y quien nos dijo que ahí llevaban a personas a las que extorsionaban y después mataban”, apunta Hortensia Rivas y recuerda que en diciembre de 2014 la PJE sostuvo que en 2011 el penal fue utilizado para incinerar 150 personas luego de ser asesinadas.

### **Mujeres en el frente**

Olga Lidia Saucedo es la presidenta de la asociación civil Alas de Esperanza, de Allende. En ese municipio, de acuerdo con versiones periodísticas, 300 personas fueron secuestradas y ejecutadas por órdenes de Los Zetas.

Madre de Atzy Adamary Reyna –desaparecida en Piedras Negras junto con su esposo, Alfredo Ruiz, y nueve miembros de su familia en diciembre de 2011– Saucedo representa a un centenar de familias de la región conocida como Cinco Manantiales (Allende, Nava, Morelos, Zaragoza y Villa Unión).

Entrevistada en el panteón municipal de Acuña mientras se llevan a cabo dos exhumaciones, Olga Lidia (nombrada Mujer con Valor 2016 por el gobierno de Moreira) cuenta que en marzo del año pasado personal de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas le informó que su hija, junto con 10 personas, fue sacada de la casa de su consuegra. “Los llevaron a un baldío, ahí los mataron, los llevaron al Cereso (de Piedras Negras), los quemaron y por último los tiraron en un río”.

Esa es la versión oficial y ella la cree.

Cercana a las autoridades, Saucedo dice que su asociación ha logrado localizar personas vivas y muertas, como un niño encontrado en 2016 en el Estado de México y que tenía un año cuando acabaron con su familia en 2011. Refiere que hay altas posibilidades de que la persona que fue exhumada el pasado 17 de abril en Acuña sea el hijo de una de sus afiliadas, desaparecido en octubre de 2014 en Zaragoza.

“Encontrar de una forma u otra a los desaparecidos nos da fuerzas para olvidar lo negativo y buscar a más”, puntualiza la presidenta de Alas de Esperanza.

En el reciente Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Coahuila es identificado como una de las cinco entidades que acumulan más de la mitad de los 30 mil reportes de personas desaparecidas (las otras son Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas). En Coahuila supuestamente se han localizado 51 entierros ilegales con 59 cadáveres, de acuerdo con los informes enviados por el gobierno de Moreira al organismo, pero estas cifras contrastan con las 73 fosas y los 364 restos humanos reportados por medios de comunicación, según un recuento de la CNDH.

En ese mismo documento, dicho organismo alertó acerca de inconsistencias entre lo que le reportaron por separado dependencias de la misma PGJE sobre desapariciones forzadas. Mientras la Dirección General de Control de Procesos respondió que no había encontrado “datos o registros de procesos penales que se hayan iniciado con motivo del delito de desaparición forzada”, la Subprocuraduría de Desaparición de Personas notificaba de dos consignaciones por ese delito, una ejecutada en Monclova por hechos ocurridos en 2009, y otra Piedras Negras por sucesos de 2013. También refería que en 2014 se ejerció acción penal contra seis probables responsables de cuatro casos.

### **La postura oficial**

En materia de desaparición forzada no hay acuerdos en la PGJE. En entrevista, el subprocurador José Ángel Herrera afirma que la dependencia tenía registros de ocho expedientes contra agentes de seguridad pública municipal de Sabinas, Monclova, Saltillo, Piedras Negras y Nava, por delitos cometidos antes de 2012, y que en la actualidad no había denuncias contra agentes estatales.

Sobre el ataque de Allende, Herrera desmiente las versiones de la desaparición masiva: “Jamás hubo una situación de 300 personas desaparecidas; lo que hubo fue un desplazamiento dentro de la entidad y al menos 20 personas pidieron asilo político. Incluso en los registros oficiales, en 2011 el total de personas desaparecidas en Allende es de 45”.

Con una plantilla de 32 agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría, Herrera afirma que hay avances en la materia, entre ellos la inversión de 30 millones de pesos para la construcción y equipamiento de un laboratorio forense.

Gloria Leticia Díaz. “Los Zetas nos levantaron... y la libramos”. *Proceso* número 2122, 2 julio 2017. p. 27. <https://www.proceso.com.mx/493732/los-zetas-nos-levantaron-la-libramos>

### **“Los Zetas nos levantaron... y la libramos”**

TORREÓN, Coah. (Proceso). - Hace casi siete años R. y W. estuvieron en el infierno. Olieron y vieron la muerte de cerca —el primero durante 14 días; la segunda, cuatro— tras haber sido secuestrados por Los Zetas. Son de las pocas personas que han sobrevivido a ese grupo criminal.

A condición de mantener el anonimato, cuentan a este semanario sus experiencias, las que, dicen, los han marcado para el resto de sus vidas.

El 26 de diciembre de 2010 gritos de “¡Policía Federal!”, seguidos de disparos en la cerradura de la puerta de un departamento, en el centro de esta ciudad, interrumpieron la reunión de fin de año en la que estaban R. y W.

Hombres vestidos de civil, con pasamontañas y armas largas, entraron y preguntaron por personas que eran desconocidas para los jóvenes; a éstos y a otra chica los golpearon, los ataron con cinta canela, los sacaron del edificio y los metieron en camionetas que esperaban en la calle, también con gente fuertemente armada.

“En la calle estaba una patrulla de la Policía Municipal. Eran cuatro policías, también encapuchados, vigilando las tres o cuatro camionetas de los que nos sacaron en la noche. Nos cubrieron los ojos con cinta canela y nos trajeron paseando hasta las seis de la mañana, hasta que nos llevaron a una bodega, donde llegaron otras camionetas con más gente”, recuerda R.

W. –quien dice que a ella y a una persona moribunda les apagaban cigarros en la nuca mientras circulaban por la ciudad y la carretera– narra que les dijeron que estaban en manos de Los Zetas y que rezaran, porque no sobrevivirían.

“Éramos como unas 15 personas hincadas sobre grava; fue un momento muy tétrico porque todos empezaron a rezar. A mí, del miedo, se me olvidó el Padre Nuestro”, dice.

Después de ser interrogados por alguien a quien llamaban “el comandante” sobre si pertenecían a algún grupo rival, si vendían o consumían drogas, sobre sus actividades y las de sus familias, fueron nuevamente subidos a los vehículos y llevados a un paraje del desierto. W. lo advirtió porque cuando la sacaron del departamento estaba descalza y sintió la arena en sus pies.

Los jóvenes recuerdan que eran vigilados diariamente por seis personas, tres en cada turno de 12 horas; hombres al parecer de rancherías cercanas, de entre 30 a 45 años, incluso un menor de 17 años quien les confesó que “ya tenía varias calaveras” y que estaba ahí porque “el comandante tenía a su hermanita de 10 años, y para verla tenía que hacer lo que le ordenaran”.

“En los primeros días mataron a una persona delante de nosotros. Le dieron tres balazos y después la echaron en un tambo de 200 litros con agujeros a los lados y en la parte de abajo; le pusieron diésel y le prendieron fuego; duró varias horas la quema. Cuando terminó, hicieron un hoyo en la tierra y vaciaron el tambo y lo pusieron boca abajo. Nos decían: ‘El que sigue eres tú’, que nos iban a cortar la cabeza y nos mencionaban mucho que nadie nos iba a encontrar. Cuando yo salí quedábamos cinco de 20”, cuenta con dificultad R.

Durante el tiempo que estuvieron en poder de Los Zetas, R. y W. conocieron a una mujer de nombre Marichuy, originaria de Chiapas, que llevaba dos meses secuestrada. Fue entregada a Los Zetas por custodios del Cereso de Torreón luego de que fue a visitar a su esposo interno.

Una noche en que los movieron del paraje para llevarlos a otro cercano donde había más camionetas, escucharon varias veces la voz del “comandante” y después balazos. Una de las víctimas fue Marichuy.

“Nos regresaron al lugar donde estábamos y ahí escuchamos cómo despedazaban a Marichuy a machetazos; luego la echaron en un tambo con diésel y removían todo con una tabla que tenía la letra

zeta: lo sé porque los del turno de la mañana me quitaban la cinta de los ojos y me contaron lo que hacían con esa tabla, que también usaban para golpear en la espalda y en las nalgas.

“Cuando terminaron con Marichuy uno de los guardias nos dijo: ‘Ni me hablen porque estoy enjaquecado, esa vieja me costó mucho trabajo’. Antes de morir, Marichuy me pidió que avisara a su familia, pero no supe su nombre completo, sólo que era de Chiapas y tenía cinco hijos, el más chiquito de dos meses. Guardo de ella un pedazo de tela con su sangre”, confía W.

Durante el tiempo que los jóvenes estuvieron en poder de los sicarios, escucharon conversaciones por radio y por celular que revelaban la colusión con autoridades municipales, estatales y federales, las cuales informaban de movimientos de las Fuerzas Armadas.

“A nosotros nos decían ‘cabritos’, a los federales les decían ‘feos’ o ‘mocos’, los municipales eran ‘cacos’ o ‘azules’, los estatales no tenían apodo. Todos alertaban de los movimientos de los ‘aguacates’, los militares”, recuerda R.

Los sicarios se cuidaban del Ejército, agrega W. “El chavalillo de 17 años me dijo que cuando escuchara que los militares estaban cerca, estuviera alerta y que a una señal suya corriera al monte, no a la carretera, porque cuando les caían los soldados mataban a todos, víctimas y victimarios, que hacía unos días eso había pasado en un lugar que llamaban ‘las marraneras’... no dejaron a nadie vivo”.

Después de 14 y cuatro días, respectivamente, y sin explicación, R. y W. fueron liberados.

Una semana después de regresar con su familia, Los Zetas llamaron a R. para extorsionarlo y W. se rehusó a encender el celular que “el comandante” le dio para pasar por ella e ir al cine.

Gloria Leticia Díaz. “Los Moreira, denunciados ante la Corte Penal Internacional”. *Proceso* número 2123, 9 julio 2017. <https://www.proceso.com.mx/494156/los-moreira-denunciados-ante-la-corte-penal-internacional>

### **“Los Moreira, denunciados ante la Corte Penal Internacional”**

Con base en declaraciones de narcotraficantes ante tribunales de Estados Unidos, decenas de organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Corte Penal Internacional a los hermanos Moreira, gobernadores de Coahuila, por su presunta complicidad en los atroces crímenes cometidos durante sus gobiernos contra la población civil. Académicos de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas consideran que, si se comprueba la implicación de los Moreira, pueden atribuirse al Estado mexicano delitos como las masacres de Allende y Piedras Negras.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no sólo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.

La implicación de los Moreira fue denunciada el jueves 6 ante la Corte Penal Internacional (CPI), en una comunicación bajo el auspicio del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Familias Unidas

en Busca de Personas Desaparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo al menos de otras 80 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).

Además, otras organizaciones civiles y ciudadanos han solicitado de manera particular la intervención del tribunal ante la impunidad con que se cometen esas graves violaciones a los derechos humanos en México.

La comunicación a la CPI, titulada “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, indica que los juicios contra zetas en Estados Unidos “dan cada vez más detalles sobre la colusión y la corrupción que llevó a que altos mandos del gobierno de Coahuila implementaran una política de omisión en apoyo a Los Zetas, comunicando paralelamente sobre su supuesta lucha en contra de estos grupos”.

El documento, entregado en la sede de la CPI en La Haya por el obispo Raúl Vera; el subdirector del Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, así como por las abogadas Ariana García Bosque de Familias Unidas y Jimena Reyes de la FIDH, detalla los testimonios en uno de sus 11 anexos: “Control... sobre todo el estado de Coahuila. Reporte sobre los testimonios analizados de miembros de Los Zetas en San Antonio y Austin”, al que este semanario tuvo acceso.

Sistematizado por las investigadoras Anna Smulders y Stephanie Corte, el informe fue supervisado por el director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, Ariel Dulitzky, expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU (GTDFI).

El documento analiza los testimonios de 14 reos relacionados con Los Zetas, de los cuales seis colaboran en el caso contra Marciano Millán Vásquez, procesado en San Antonio por conspiración para distribuir e importar droga en Estados Unidos y por su participación en el asesinato de prisioneros del penal de Piedras Negras. El resto son testigos en un juzgado de Austin en el proceso contra José Treviño Morales, Fernando Solís García y Francisco Colorado Cessa.

En la presentación del informe, las investigadoras de la Clínica advirtieron que los juicios están primordialmente enfocados en cargos por lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidios, por lo que “los abusos a los derechos humanos y la complicidad del gobierno del estado fueron tangenciales para los fiscales” de Austin. Los testigos en el juzgado de San Antonio “ofrecieron más detalles respecto a abusos de derechos humanos, pero en segundo término”.

Pese a ello, esas declaraciones fueron suficientes para que las investigadoras de la Clínica de Derechos Humanos consideraran que “el cártel de Los Zetas cometió numerosas violaciones a derechos humanos y que las instituciones públicas y oficiales estuvieron involucradas en varias competencias, dependiendo de la situación, lugar y tiempo”.

### **Corresponsabilidad criminal**

Tras señalar la incuestionable responsabilidad de Los Zetas en las masacres de Allende y Piedra Negras en la primavera de 2011, el informe indica que también lo son en docenas de casos en que el patrón de los homicidios fue el descuartizamiento y la ‘cocina’.

“Los Zetas secuestraban, desaparecían, amenazaban y reclutaban forzosamente a mucha gente en Coahuila y en los estados vecinos. Su razonamiento era mantener el control, mostrar fuerza o represalias, castigar a quien perdiera drogas, y para crecer en números y territorio”, agregan.

Sin embargo, “el Estado también tiene un grado de culpa en las violaciones a derechos humanos cometidas. (...) La Clínica estima que la información presentada complementa la evidencia existente y ayudará con más esfuerzos para demostrar el grado y tipo de violencia practicada por Los Zetas y el Estado”.

Para las investigadoras, las declaraciones en las cortes de Texas también revelan “profundas conexiones sistemáticas y a veces el control que Los Zetas tenían sobre el aparato de justicia y los oficiales en línea ascendente del gobierno del estado”.

Las implicaciones evidenciadas van desde la operación directa contra miembros de cárteles rivales, la asignación de contratos a las empresas de Los Zetas, así como las omisiones de funcionarios del estado y de las fuerzas de seguridad, que permitieron la perpetración de abusos contra habitantes de Coahuila y otros estados.

El documento entregado a la CPI resalta las declaraciones sobre presuntas entregas de millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles, a su hermano Humberto Moreira, alcaldes, policías municipales, estatales y federales, militares, agentes del Ministerio Público de los fueros local y federal.

Por supuesto, se mencionó el control total de la cárcel de Piedras Negras, donde los integrantes del cártel entraban y salían, sin olvidar que en 2012 liberaron a 130 prisioneros a los que reclutaron. Otras declaraciones se refieren a la colaboración de Rubén Moreira con la organización criminal, pero ni el testigo ni los fiscales dieron detalles.

“Si no hubiera sido por las acciones y omisiones de los oficiales mencionados (en los testimonios), Los Zetas no podrían haber sido capaces de cometer muchos de los abusos reportados aquí –se dice en la comunicación a la CPI–. Ambos, Los Zetas y el Estado, tienen responsabilidad por lo que ocurrió en Coahuila. El Estado, en su totalidad, en el mejor de los casos ignoró la corrupción generalizada y los graves abusos a los derechos humanos, y en el peor, participó directamente para respaldar los objetivos de Los Zetas.”

Entre las atrocidades que Los Zetas cometieron con esa complicidad, los testigos narraron las masacres de Allende y Piedras Negras.

Resaltaron que a partir del caso Allende se conocieron las ejecuciones y desapariciones de cerca de 300 personas entre marzo y abril de 2011 en la región de los Cinco Manantiales, que comprende los municipios de Allende, Guerrero, Nava, Piedras Negras, Sabinas y Zaragoza, así como Ciudad Acuña, en la frontera con Del Río, Texas.

La extrema violencia derivó de una venganza de los hermanos Omar y Miguel Treviño Morales contra desertores de su cártel que huyeron a Estados Unidos para convertirse en informantes, entre ellos Héctor Moreno y José Luis Gaytán Garza. Les siguieron José Luis Vázquez y Mario Alfonso Cuéllar, cuyos testimonios fueron analizados por la Clínica.

En su declaración, Moreno recordó que después de que él y Poncho Cuéllar huyeron a Estados Unidos, en marzo de 2011, se enteraron de que “(Los Zetas) empezaron a matar familias en Allende, Piedras Negras, Múzquiz y Sabinas. Ellos querían matarme a mí también. Toda esa gente inocente; las familias intentaron interponer denuncias y les dijeron que no habría ninguna y que tenían 24 horas para dejar la ciudad”.

La masacre de Piedras Negras también ocurrió en ese periodo y, según los testimonios mencionados, pretendía “intimidar y mostrar el poder a otros miembros del cártel que habían considerado huir”. Uno de los sobrevivientes es Adolfo Efrén Tavira Alvarado, quien traficó droga con Cuéllar y en marzo de 2011 fue sacado de su casa por sicarios que lo llevaron esposado ante los hermanos Treviño Morales.

Los hombres de los Treviño también secuestraron a un amigo de Cuéllar, Víctor Cruz, a su familia y a más de 30 civiles, a los que obligaron a arrodillarse. Todos fueron ejecutados a balazos. Daniel Menera, el “comandante” de la ciudad, abogó por Tavira.

A principios de 2013 los mandos zetas responsabilizaron a Jorge de León Navarro por la pérdida de un cargamento de mariguana. Lo secuestraron y retuvieron 13 días, en los que fue obligado a ver 16 ejecuciones ordenadas por Millán Vásquez, conocido como Chano. Entre las víctimas había tres mujeres, una niña y seis jovencitos vendedores de periódicos.

De León describe la ejecución de una familia: “Él (Chano) tomó un hacha y cortó una rodilla y una pierna de ella (una niña). Ella lloraba. Ella gritaba. Él reía. Le decía a su padre que viera para que recordara. Ellos (los sicarios) lo agarraban para que él viera”. El mismo procedimiento utilizaron para ejecutar a la mujer y al hombre: después quemaron a los tres en un tambo.

El testigo Gustavo Rodríguez Costilla sostuvo en el juicio que presencié entre siete y 10 ejecuciones, cada una de grupos de aproximadamente una decena de personas. Dice que a un hombre apodado El Chaparro lo eliminaron Los Zetas con toda su familia por haber “hablado con el de Sinaloa, un cártel contrario”.

Otros móviles de asesinatos: las víctimas se negaban a cooperar con el cártel, los cabecillas sospecharon que huirían a Estados Unidos y revelarían información, alguien los vio salir de oficinas de procuración de justicia o algunas mujeres estuvieron con policías.

Los testigos también presenciaron ejecuciones de militares, policías que se negaron a cooperar, agentes de Estados Unidos en San Luis Potosí u hombres vestidos de marinos. Hablaron de “secuestros y desapariciones de cientos de personas de las que no se tiene conocimiento si están vivas o muertas”. El informe rescata asimismo casos de secuestros de empresarios que fueron llevados de Eagle Pass a Piedras Negras.

### **Impunidad y corrupción**

El 20 de junio, semanas antes de que la comunicación se entregara a la CPI, Ariel Dulitzky, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, dijo en entrevista con Proceso:

“Cuando se comienza a dar más información sobre ciertos estados donde desde el gobernador hacia abajo eran funcionales a las actividades de Los Zetas u otros cárteles, si eso se demuestra, va a significar

que todo lo que hicieron Los Zetas en esos estados podría ser atribuido al Estado, porque hubo, mínimo, aquiescencia o tolerancia por la situación de corrupción.”

Dulitzky fue invitado por la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para hablar de su experiencia al frente del GTDFI durante los últimos siete años.

El académico destacó que en México se empieza a demostrar “que las desapariciones, incluso del crimen organizado, cuentan con cierto nivel de participación o aquiescencia de agentes estatales; hay que repensar cuáles son desapariciones por particulares y si muchas de ellas no califican como desapariciones forzadas”.

El mismo argumento presentaron miembros de la sociedad civil ante el GTDFI para que este mecanismo de la ONU interviniera para presentar el caso de México ante la CPI, recordó Dulitzky, que se excusó de la discusión del caso en el GTDFI por su involucramiento con las organizaciones en México en la presentación de la comunicación sobre Coahuila.

“El GTDFI tiene la posibilidad de discutir y decidir si solicita al Consejo de Seguridad de la ONU que la situación de México será remitida a la CPI. El grupo tendría que estimar dos situaciones: que hay desapariciones forzadas que ocurren en el contexto de crímenes internacionales en México y que una de las respuestas adecuadas es que la situación sea considerada por la CPI”, apunta.

Para Dulitzky, “las autoridades federales y estatales no han podido romper el patrón de impunidad que existe en materia de desaparición forzada, que se puede dar por falta de capacidad, falta de voluntad o una conjunción de ambas... Lamentablemente hay una situación de impunidad que requiere de respuesta y apoyo de la comunidad internacional”.

Isaí Lara Bermúdez. “2012-2017: 104,602 ejecutados”. *Proceso* número 2131, 3 septiembre 2017. pp. 18-22. <https://www.proceso.com.mx/501532/a-pena-le-falto-un-spot-104-mil-ejecutados>

### **“2012-2017: 104,602 ejecutados”**

El Quinto Informe de Gobierno llegó teñido de sangre como ningún otro. Si la tendencia sigue, el gobierno de Enrique Peña Nieto terminará como uno de los más violentos de la historia contemporánea de México. A decir de especialistas consultados por el semanario Zeta –con cuya autorización se reproduce el presente reportaje–, la extradición del Chapo Guzmán, la atomización del Cártel de Sinaloa y la expansión del de Jalisco Nueva Generación son los factores que harán de 2017 el año con el mayor número de ejecuciones.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Uno de cada cuatro homicidios en México durante los últimos 27 años se ha cometido durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto. Los números sangrientos superan incluso a los de su antecesor, Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra el narcotráfico y despertó a miles de sicarios a las órdenes de los grupos criminales.

Se trata de 104 mil 602 homicidios dolosos desde que el priista tomó protesta como presidente de la República, en diciembre de 2012, hasta el 31 de julio del presente año.

Ésta es la cifra más actual y más cercana sobre el narcotráfico y la violencia, las desapariciones forzadas, las narcofosas o la desintegración de cuerpos, de los pueblos alejados de todo, que no cuentan con registros de sus muertos.

Los asesinatos durante la era peñanietista representan 25% del total de los homicidios registrados de 1990 a 2016, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La violencia reflejada en la privación de la vida estalló con Felipe Calderón. Sumando el número de asesinatos durante ese gobierno panista (2006-2012) a los de la administración actual, representan 49% de las 427 mil 698 víctimas de homicidio en los últimos 27 años, según las cifras obtenidas por el mismo Inegi. Uno de cada dos asesinatos ocurrió bajo los mandatos de Calderón y Peña.

### **Este año van 16 mil 152 muertos**

Si la tendencia en ejecuciones continúa como en los primeros siete meses, este año romperá récord en sangre derramada. Del 1 de enero al 31 de julio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), alimentado por las fiscalías y las procuradurías de justicia de los estados de la República, tiene registradas 16 mil 152 muertes violentas.

El número, escalofriante por sí mismo, cobra mayor relevancia cuando se compara con el primer año en que Calderón abrió fuego contra los cárteles de las drogas. Es decir, los más de 16 mil homicidios en los primeros siete meses de 2017 son prácticamente el doble de los que el gobierno documentó en 2007 (8 mil 867).

Cada mes, en 2017, se han registrado entre 2 mil 100 y 2 mil 461 muertes violentas (homicidios dolosos). Algo así como 2 mil 300 ejecuciones en promedio mensual, 78 cada día, tres muertes por hora. Si ese promedio se sostiene, este año terminaría con una cifra récord: 27 mil 690 víctimas.

Las cifras de ejecutados en el gobierno de Enrique Peña Nieto se distribuyen así:

- Diciembre de 2012, cuando tomó protesta, no cedió la violencia:

mil 999 asesinatos

- En 2013 fueron 23 mil 63 asesinados

- 2014                20 mil 10

- 2015                20 mil 525

- 2016                22 mil 935

- En lo que va de 2017 16 mil 152

Un total de 104 mil 602 ejecuciones

### **Al alza**

En lo que va del año, en Sinaloa, Chihuahua, Guanajuato y sobre todo Baja California se ha recrudecido la violencia. Esas entidades representan puntos estratégicos para el tráfico, producción y distribución de droga en el país.

En comparación con 2017, dichas entidades federativas han desplazado a otras sumamente conocidas por el nivel de presencia de grupos criminales y violencia. Por ejemplo, Guerrero superó al Estado de México, que tiene más de 17 millones de habitantes.

Sólo por debajo de Guerrero y Estado de México se encuentra Baja California, donde prácticamente 80% de los homicidios ocurren en Tijuana. Lo más grave es que en el top3, el Estado de México es seis veces más grande poblacionalmente que Guerrero y Baja California, condensando un número mayor de asesinatos por cada 100 mil habitantes.

De enero a julio de 2017, según el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión publicado por el SESNSP, algunos estados han ganado terreno en la escala de muerte.

Si se divide el número de homicidios cometidos en lo que va del año entre la población de cada estado (según el Consejo Nacional de Población), éstas serían las entidades más violentas. El Estado de México, que generalmente encabeza, pierde espacios frente a otras entidades.

### **Reacomodo de cárteles**

Para el doctor David Shirk, investigador de la Universidad de San Diego, la ola de violencia que registra México tiene que ver con una diversidad de factores como la pobreza y la falta de oportunidades sociales. Sin embargo, aclara, no es lo definitivo, pues los cuadrantes de pobreza más severa en el país no coinciden con los lugares de mayor violencia. Por ello asegura que se trata, por un lado, del reacomodo criminal que ha dejado la captura del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y la atomización del mismo grupo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Al mismo tiempo, el crecimiento exponencial del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es otro motivo de las muertes que se han incrementado y diversificado a lo largo del país. “Tiene que ver con el reajuste del mundo criminal en el acaecer del reino del Cártel de Sinaloa”, describe.

En entrevista con Zeta, el también maestro en relaciones internacionales admite que “el crecimiento del CJNG efectivamente se consolidó durante los primeros años de Peña Nieto, al lograr la eliminación más grande en cuanto a sus rivales como Los Zetas y Los (Caballeros) Templarios; es en esa época cuando hay un avance muy importante de Sinaloa”.

A decir de Shirk, “la primera captura que realizó el gobierno de Peña a El Chapo no mermó su capacidad de operación, pues pudo escapar. Estaba en una situación de poder a pesar de estar encarcelado. Eso quiere decir que la época de mayor poder del Cártel de Sinaloa fue en 2012 y 2013. Al quitar del juego al Chapo es cuando empieza la inestabilidad, el incremento de la violencia. Fue a finales de 2015, particularmente después de moverlo a Chihuahua. La violencia siguió creciendo después de su extradición a Estados Unidos”.

Shirk es director del programa Justice in Mexico de la Universidad de San Diego y cree que la violencia cesará cuando un cártel logre apoderarse de los territorios en disputa o se logren alianzas para el cese al fuego, pues de eliminar la pobreza o el desempleo, la educación no se podrá llevar a cabo a lo largo de

dos años, pero en ese periodo sí se puede modificar radicalmente la dinámica entre los grupos de delincuencia organizada.

“Las olas de violencia han crecido y disminuido mucho más rápido que los cambios de política o administración pública, lo que quiere decir que a pesar de que a los políticos y policías les gusta adjudicarse los méritos por los cambios de disminución de violencia, como en 2012 y 2014, hay otros factores en los propios grupos criminales”, detalla.

Uno de los problemas más grandes es la impunidad, ya que “la autoridad no tiene tiempo ni capacidad para investigar y castigar los homicidios. Esto es muy problemático, pues si yo mato a alguien y nadie me castiga, lo haré otra vez”. Por eso, dice, el medio para disminuir la violencia por parte del Estado es fortalecer las investigaciones y castigar a los homicidas.

### **Atacan síntomas, no causas**

Para Santiago Roel, director de Semáforo Delictivo (quizás el proyecto ciudadano más ambicioso del país en cuanto a la revisión de cifras sobre inseguridad), “el gobierno ha estado atacando los síntomas sin atacar las causas, que es el mercado negro de las drogas”.

El fundador de Semáforo Delictivo señala que las muertes violentas no responden tanto “al mercado de exportación de las drogas” como al narcomenudeo, pues “el mercado de exportación a veces es violento, pero tiende a resolverse porque es más inteligente y corruptor; la violencia es un costo”.

En contraparte, explica, la venta de drogas al menudeo “tiene que proteger toda una plaza, toda una ciudad o todo un estado, todo un territorio. Generalmente son jóvenes en riesgo reclutados. El ladronzuelo de la colonia en un inicio no es una organización muy sofisticada, entonces tiene que defender sus territorios con mucha violencia: tienen menos fondos, tienen armas y van colapsando a la autoridad. Esta es la primera causa de violencia en México.

“Es una competencia de mafias por el territorio. Cuando tienes una sola mafia que controla un mercado de droga, la región suele estar tranquila. Cuando tienes competencia se provoca mucha violencia. El problema es que el propio gobierno mexicano ha estado creando esta violencia al atomizar los cárteles; crea más competencia y guerra entre ellos”, remata.

Además no se puede definir a los grupos criminales sin la complicidad de los gobiernos en turno: “Hay una recomposición en el gobierno y obviamente hay una recomposición en los grupos delictivos, sus alianzas, sus contactos dentro del gobierno. La turbulencia electoral crea turbulencia en el crimen organizado también”.

Para resolverlo, Roel sugiere “arrebatarle el negocio, arrebatarle el mercado a las mafias. Les quitas el poder económico, bélico y social con el cual reclutan a jóvenes, familias, autoridades, policías. La regulación no implica promover drogas. Promover drogas es lo que ha estado sucediendo en la actualidad, las mafias promueven drogas peligrosas con toda libertad en todo el país”.

Y añade: “Todos los intentos institucionales que se puedan o quieran hacer para reducir la violencia o la corrupción no van a funcionar si primero no le quitas el dinero a estas mafias”.

Roel sabe que ni un partido político ha subido a su agenda el tema, y menos ahora que el proceso electoral de 2018 está en puerta: “Primero la presión de la DEA, la CIA y otras agencias de Estados Unidos en México, a quienes no les interesa que México regule, porque si lo hace, ahí se les acaba la piñata; les encanta golpear ante su fracaso en su política de drogas”.

La otra razón es que “hay políticos involucrados en el narco. Ningún narcopolítico va a estar de acuerdo en la regulación de las drogas, se estarían dando un balazo en el pie”. Por último, “la falta de entendimiento por parte de la sociedad, que sigue confundiendo regulación con promoción de drogas y es justo lo contrario. Actualmente es así, consigues droga donde sea”.

### **Cifras maquilladas**

Jimena David, investigadora del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, basó una de sus más recientes investigaciones en la forma en que se maquillan las cifras de homicidios dolosos al reclasificarlos como homicidios culposos.

“Idealmente estas dos categorías no deberían tener ninguna relación porque uno se refiere a hechos accidentales (culposos) y otro a hechos intencionales (dolosos), por lo que se tendrían que mover de manera completamente distinta”, asegura en entrevista con Zeta.

Sin embargo, cuando Jimena y dos de sus compañeros investigadores del Programa de Seguridad y Justicia de México Evalúa estudiaron el comportamiento de las incidencias de estos dos delitos “encontramos relaciones muy significativas y raras que no deberían existir. No podemos saber con seguridad si están manipulando la cifra, pero los datos se comportan de una manera atípica, así que probablemente haya un problema”, comenta.

La investigadora señala que estas reclasificaciones se pueden realizar en las correcciones que cada procuraduría envía al SESNSP: “A veces se pueden restar o sumar homicidios posteriormente, cuando, por ejemplo, se dieron 20 homicidios dolosos y se le restan dos, uno por causas naturales y otro accidental. Hay varios momentos en que puede ocurrir esto, ya sea por decisión o por errores”.

Respecto a la confiabilidad de estas bases de datos, Jimena David advierte: “Tanto las estrategias estatales como la nacional, se construyen con información defectuosa”.

Según ha comprobado la investigadora, “algunos ministerios públicos están capturando datos a mano en papeles o no tienen servicio de electricidad, esto frena las capacidades de las autoridades para recabar correctamente los datos y hacer el mejor uso de ellos”.

### **Con los datos actualizados hasta el 20 de agosto, así fue el reacomodo en el transcurso de 2017:**

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Guerrero         | Mil 411 (subió una posición)     |
| 2. Estado de México | Mil 362(bajó una posición)       |
| 3. Baja California  | Mil 203(subió cuatro posiciones) |
| 4. Chihuahua        | Mil 116(subió una posición)      |
| 5. Veracruz         | Mil 93(bajó dos posiciones)      |

6. Sinaloa	Mil 24(subió dos posiciones)
7. Jalisco	841(bajó una posición)
8. Guanajuato	831(subió una posición)
9. Michoacán	794(bajó cinco posiciones)
10. Ciudad de México	684(en la misma posición)
11. Oaxaca	590 (en la misma posición)

**Al cierre de 2016, los estados con mayor número de muertes violentas fueron:**

#### **Muertes Violentas**

1. Estado de México	2 mil 256
2. Guerrero	2 mil 213
3. Veracruz	mil 522
4. Michoacán	mil 477
5. Jalisco	mil 470
6. Baja California	mil 258
7. Sinaloa	mil 161
8. Guanajuato	mil 110
9. Ciudad de México	mil 35
10. Oaxaca	mil 13

#### **Tasa de homicidios en estados**

		<b>Población</b>
63.92	Colima	747,801
46.49	Guerrero	3,034,942
37.04	BCS	809,833
33.74	Sinaloa	3,034,942
33.56	Baja California	3,584,605
29.51	Chihuahua	3,782,018
21.37	Zacatecas	1,600,412
20.91	Morelos	1,965,487
17.05	Michoacán	4,658,159

14.53	Oaxaca	4,061,497
14.16	Tamaulipas	3,622,605
14.06	Guanajuato	5,908,845
13.39	Veracruz	8,163,963
12.98	Sonora	3,011,810
10.37	Jalisco	8,110,943
10.15	Quintana Roo	1,664,667
10.14	San Luis Potosí	2,801,839
9.12	Puebla	6,313,789
8.88	Tabasco	2,431,339
7.84	Edomex	17,363,387
7.76	CDMX	8,811,266
7.59	Nuevo León	5,229,492
7.00	Durango	1,799,320
6.94	Nayarit	1,268,460
5.82	Chiapas	5,382,083
5.64	Coahuila	3,029,740
5.33	Querétaro	2,063,148
5.03	Tlaxcala	1,313,067
4.81	Campeche	935,047
4.51	Hidalgo	2,947,206
3.18	Aguascalientes	1,321,453
1.47	Yucatán	2,172,839

Noé Zavaleta. “Y con Yunes la violencia empeora”. *Proceso* número 2132, 10 septiembre 2017. pp. 31-33. <https://www.proceso.com.mx/502810/yunes-la-violencia-empeora-en-veracruz>

### **“Y con Yunes la violencia empeora”**

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha incumplido su bravata de que contendría los índices delictivos de la entidad en un semestre. Cuerpos destrozados, cabezas con narcomensajes,

cadáveres que ya no caben en las planchas de la morgue, periodistas amenazados y asesinados, son las impunes manifestaciones de la guerra que sostienen los cárteles por el control del estado.

XALAPA, Ver. (Proceso).- Durante el gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, quien llegó al poder postulado por la alianza PAN-PRD, se han cometido en Veracruz mil 696 homicidios –75%, ejecuciones del crimen organizado–, 121 secuestros, 188 violaciones, 13 mil 855 robos, incluidos mil 869 hurtos de vehículos con violencia, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que cubren de diciembre de 2016 a julio de 2017.

Un comparativo que hizo Proceso con el primer año de gobierno de los priistas Javier Duarte y Fidel Herrera, revela que el gobierno de Yunes Linares tiene mayores índices delictivos en homicidios, secuestros y robo de autos, con una disminución significativa en violaciones sexuales.

En los primeros ocho meses de gestión de Duarte se registraron mil 128 homicidios, 33 secuestros, 783 violaciones y 16 mil 557 robos, entre ellos mil 98 hurtos con violencia de autos.

Con Herrera se reportaron 886 homicidios, seis secuestros, 790 violaciones y 9 mil 771 robos, incluidos 152 robos de autos con violencia, según el registro del SESNSP.

En su campaña para la gubernatura Yunes Linares declaró a este semanario que si ganaba, colocaría a un militar en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para neutralizar la espiral de violencia y dar un “manotazo” a la corrupción de las delegaciones policiacas. Se dio de plazo un semestre para apaciguar la entidad.

Ya como gobernador, Yunes colocó en la SSP a Jaime Téllez Marie, un abogado penalista y exdirector de Tránsito Municipal de Boca del Río, el municipio que gobierna el hijo del mandatario, Miguel Ángel Yunes Márquez. Éste se perfila para ser el candidato del PAN a la gubernatura en 2018 y, pese a su voluntad política, no ha podido avanzar en la prevención del delito.

Para “reforzar” la función de Téllez Marie, el mandatario estatal ha solicitado cuatro veces el envío de la Gendarmería Nacional y la asignación de más policías federales, marinos y militares para inhibir la operación del crimen organizado, así como la presencia de policías militares en la región montañosa Córdoba-Orizaba.

La Secretaría de Gobernación le ha cumplido todas esas peticiones pero la violencia no cesa. El pasado 30 de agosto Yunes Linares de plano solicitó “mayor presupuesto” en el rubro de seguridad, sobre todo, dijo, para el fortalecimiento de las policías municipales.

El pasado 20 de junio Yunes le declaró la guerra a las bandas criminales que operan en Veracruz, como Los Zetas, Los Ántrax, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Vieja Escuela de Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el del Golfo y las células delictivas independientes.

Sin embargo, desde entonces sólo se ha conseguido la aprehensión de Hernán Martínez Zavaleta, El Comandante H, líder zeta en el sur de Veracruz y a quien la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) capturó en el municipio de Cárdenas, Tabasco.

También fue abatido por marinos, en el municipio poblano de Chipilo, Ricardo Pacheco Tello, El Quino, a quien el gobierno de Yunes señaló como líder del CJNG en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

y como sospechoso de ordenar la ejecución del coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné Velasco, y uno de sus subordinados. Este crimen se perpetró en el restaurante La Bamba, en la cabecera de Cardel, el pasado 24 de junio.

Apenas cayó preso el Comandante H, el fiscal regional de Veracruz, Jorge Morales Carrasco, discretamente renunció al cargo. Policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) –que pidieron el anonimato– aseguran que Morales tenía amistad con el líder criminal.

Hasta el momento no se sabe de avances en la detención, consignación o aprehensión de los “300 objetivos delincuenciales” que prometió asegurar el grupo de Coordinación Veracruz y que, a decir de Yunes Linares, son los “generadores de violencia”.

Sobre esos presuntos integrantes de varias organizaciones criminales que se confrontan por el control de las actividades delictivas en la entidad, el mandatario estatal afirmó: “No nos amedrentamos frente a una banda de delincuentes. No vamos a mentirle a los veracruzanos: ha sido una tarea difícil y compleja, nos estamos enfrentando a delincuentes de alta peligrosidad. No damos paso atrás en la lucha contra la delincuencia”.

Sin embargo, el gobierno de Veracruz ya ofreció un millón de pesos de recompensa por uno de sus principales objetivos, Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas o El Bukanans, líder de los ladrones de combustible en Puebla y entrenador de sicarios y estacas de Los Zetas en Veracruz.

El sospechoso continúa libre y operando en ambas entidades. El Bukanas, excomandante de la Policía Municipal de Maltrata, en la región montañosa veracruzana, ha escapado ya de tres operativos federales.

En septiembre de 2014, fuerzas militares irrumpieron en el rancho San Pedro, en la congregación Sierra de Agua, Cumbres de Acultzingo, lo que puso al descubierto una red criminal y de corrupción.

Dirigidos por De los Santos, policías municipales de Maltrata y Acultzingo, junto con sicarios de Los Zetas, entrenaban en ese rancho a futuros estacas de esa organización: jóvenes de entre 17 y 25 años a quienes les enseñaban a usar armas, además de “tablear” y torturar a sus víctimas en fosas de aguas negras o en celdas de castigo.

El resto de los objetivos no han sido dados a conocer. La FGE se ha limitado a anunciar detenciones de probables responsables de robo, fraude, estupro, abigeato, violación y privación ilegal de la libertad. Ninguno es jefe de plaza de Los Zetas, el CJNG o el Cártel de Sinaloa.

### **Sin respuesta ante el crimen**

En el arranque del sexenio del priista Javier Duarte comenzó en todo el estado una batalla campal entre Los Zetas y Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa, mientras el Cártel del Golfo mantenía el dominio de la Huasteca.

Posteriormente Los Zetas se replegaron y, según averiguaciones previas de la FGE a las que este semanario tuvo acceso, comenzó a permitirse la entrada de células del CJNG.

Ahora, cuando el gobierno de Yunes cumple solamente 250 días, el mapeo delincencial ya muestra el control casi absoluto del estado por el CJNG y, sobre todo en el sur de la entidad, la resistencia de los

autodenominados Zetas Vieja Escuela, así como la persistencia de células dedicadas al robo de combustible.

El 21 de julio pasado, en el municipio sureño de Agua Dulce, junto al cuerpo de un ejecutado se localizó una cartulina roja con letras negras, en la cual se advertía que Los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo darían la “batalla” contra los “traidores” y “volteados” que ayuden o se integren al CJNG: “Así se escondan en Villa (sic), Tuxtla, Xalapa, Poza Rica o Tijuana, donde sea los vamos a encontrar, bola de traidores”.

Desde ese día se volvieron a localizar hombres ejecutados y desmembrados; otra vez se vieron asesinatos a plena luz del día en municipios como Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba y Orizaba.

La madrugada del 3 de septiembre, una treintena de extremidades humanas fueron abandonadas sobre los cofres de dos automóviles con reporte de robo en la colonia Díaz Serdán. Una cartulina naranja advertía a la Fuerza Civil y a la SSP que los asesinados eran robacarros y daba a entender que el crimen organizado realizaba labores que las corporaciones policiacas rehuían: “Debes agarrar a estos robacarros y no andar violando y torturando a gente trabajadora e inocente”.

El 22 de agosto pasado fue asesinado el reportero de El Diario de Acayucan, Cándido Ríos, junto con el excomandante policiaco Víctor Acrelio Alegría y uno de sus escoltas. El director del rotativo, Cecilio Pérez, no tiene muchas esperanzas al respecto: “Se avizora otro asesinato más en la impunidad”.

Las pesquisas sobre estos asesinatos son tan deficientes, que peritos de la FGE “olvidaron” cartuchos percutidos en el lugar de los hechos y restos de masa encefálica colgando de una malla ciclónica.

También sacudió a la opinión pública el asesinato de Patricia Herrera Martínez, estudiante de gestión empresarial de la Universidad Veracruzana, de 24 años. Sus familiares comentaron a medios de comunicación que unos sujetos que se dijeron miembros del CJNG exigieron un millón de pesos por liberar a la joven, pero la asesinaron días después. Junto a sus restos, abandonados en la carretera Cosoleacaque-Jaltipán, los sicarios dejaron otro mensaje con amenazas para Los Zetas y los policías que colaboran con ellos.

El Grupo de Coordinación Veracruz tuvo que sesionar los domingos en varias regiones del estado, a fin de evaluar la situación y encontrar la forma de contener la criminalidad, ante la cual parece maniatada la administración de Yunes Linares.

Sin embargo, los funcionarios prefieren negar la realidad. En un video que circula en redes sociales se observa que Téllez Marie les exige a periodistas en Poza Rica que también hablen de “las cosas buenas que hacemos” y de los “resultados”.

Proceso hizo una solicitud formal de entrevista con el secretario de Seguridad Pública, pero su coordinador general de Comunicación Social, Elías Assad, sólo respondió: “Lo estoy checando”, “anda movido”, “no me contesta”.

Asimismo, Yunes Linares se queja de que en los medios no se “reconocen” sus logros: “Hemos cambiado, Veracruz ha cambiado para beneficio de todos. Yo sé que hay algunos (medios) a los que les

cuesta reconocerlo, les cuesta mucho trabajo... porque no tenemos convenios y no vamos a tener, esa es la realidad”.

Irene Savio. “Al servicio del narco: pruebas documentales y testimonios hundieron a Yarrington”. *Proceso* número 2141, 12 noviembre 2017. pp. 14-17. <https://www.proceso.com.mx/510754/al-servicio-del-narco-pruebas-documentales-testimonios-hunden-a-yarrington>

### **“Al servicio del narco: pruebas documentales y testimonios hundieron a Yarrington”**

Para jueces florentinos, los gobiernos de México y de Estados Unidos han aportado pruebas de que el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington –arrestado en Italia en abril pasado– primero facilitó y luego participó en las actividades de los cárteles del Golfo, de Los Zetas y de los hermanos Beltrán Leyva de 1999 a 2009 a cambio de millones de dólares, echando por tierra argumentos de la defensa del político tamaulipeco que pretendía ser presidente.

ROMA (Proceso).- En agosto de 2004, en un rancho llamado El Tinieblo, propiedad de Tomás Yarrington, se reunieron el entonces gobernador de Tamaulipas y quien sería su sucesor, Eugenio Hernández Flores, con los narcotraficantes Heriberto Lazcano Lazcano, jefe de Los Zetas, y Eduardo Costilla Sánchez, líder del Cártel de Golfo.

Eran las postrimerías del periodo gubernamental de Yarrington y en esa reunión se decidió que el Cártel de Golfo designaría a los jefes de policía y otros funcionarios encargados de la seguridad del estado en el nuevo gobierno de Hernández, mientras que Los Zetas nombrarían al director de las cárceles de Tamaulipas.

Yarrington le dijo a Hernández que debía ayudar a los narcotraficantes y que él había trabajado “siempre muy bien” con el Cártel del Golfo.

El episodio fue relatado por el declarante Pitufu (nombre en código del testigo protegido). Aparece en actas judiciales incluidas en el expediente del proceso de extradición de Yarrington en Italia, a una de cuyas partes tuvo acceso este semanario.

El del Pitufu es uno de los testimonios que, según la acusación, reconstruyen de primera mano el presunto pasado criminal de Yarrington. De hecho, la sentencia 18/17 de la Sección Primera de la Corte de Apelaciones de Florencia acredita dichos testimonios como detallados y coincidentes en la descripción de hechos que imputan al exgobernador de Tamaulipas.

### **Testimonios**

De acuerdo con los jueces florentinos, existe convergencia en las declaraciones judiciales de los testigos Ángeles, El Pollo, Pedro, Pitufu, Yeraldín y Rufino. Se trata de testigos aportados por Estados Unidos y México, cuyos gobiernos piden la extradición del político priista desde que éste fue arrestado en abril pasado en Italia.

Los jueces consideran que la documentación aportada por ambos países resulta en “un elevado grado de concreción probatoria”. Señalan que los delitos presuntamente cometidos por Yarrington son “agravados” por el hecho de que poseía un papel público primario.

Así también lo pone de manifiesto la solicitud mexicana de extradición, en la que –subrayan los jueces– han sido expuestos los criterios de evaluación de las pruebas y los análisis, en particular en lo referente a la credibilidad de los testigos Yeraldín, El Pitufo y Rufino. Incluso, afirman, Ángeles ha demostrado tener un conocimiento específico y directo de los hechos y de las personas a las que en varios momentos de su testimonio describió físicamente.

Con ello, los jueces desecharon uno de los argumentos de la defensa de Yarrington, según el cual esos testimonios son parciales, contradictorios y poco fiables.

Por ejemplo, los jueces señalan que el testigo Óscar realizó una descripción precisa sobre la manera en que Yarrington recibió dinero para favorecer al Cártel del Golfo.

Consideran que la documentación transmitida por las autoridades mexicanas es plenamente idónea para explicar las razones por las que probablemente Yarrington cometió los delitos por los que se solicita su extradición.

Además, la información enviada a Italia por los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Texas/Brownsville incluye las declaraciones judiciales de un agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de otro del Servicio de Impuestos Internos. El primero se encargó de las averiguaciones relacionadas con las actividades de reciclaje de dinero y tráfico de estupefacientes en Estados Unidos, mientras el segundo analizó las violaciones de los estatutos federales estadounidenses en materia financiera.

De ello emerge la radiografía delictiva de un hombre que quiso ser presidente de México, pero que, según el expediente, acabó vinculándose con algunos de los narcotraficantes más cruentos de México – del Cártel del Golfo, Los Zetas y, por último, los Beltrán Leyva–, primero para arraigarse en el poder y luego para enriquecerse. A cambio de ello, no interfirió en los negocios de los capos, cooperó con ellos y los avaló a expensas de la población.

Según la reconstrucción que se colige de los documentos judiciales, todo comenzó en 1998, cuando el político tamaulipeco supuestamente encargó a Jesús Vega Sánchez, entonces secretario de Organización Política del PRI, reunirse con miembros del crimen organizado con el fin de obtener fondos para su campaña electoral como candidato a la gubernatura de Tamaulipas.

De acuerdo con el testigo Óscar, Vega Sánchez contactó entonces a Juan José Muñoz Salinas, El Bimbo, un exmandado de la Policía Ministerial y supuesto emisario y escolta del narcotraficante Osiel Cárdenas.

Muñoz Salinas explicó a Vega Sánchez que el dinero provenía del crimen organizado. Por ello, una vez que Yarrington se hubiera convertido en gobernador, debía cumplir con distintos compromisos asumidos con el cártel.

Entonces Vega Sánchez respondió: “No te preocupes, Yarrington está dispuesto a cumplir con los compromisos asumidos”, según se lee en la documentación remitida por México a Italia en abril pasado y la cual sugiere la existencia de una red de policías-emisarios que mantenía el vínculo entre el político priista y los narcotraficantes.

En la tercera semana de junio de 1998, en el transcurso de un evento político en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, Muñoz Salinas habría pedido entregarle al propio Yarrington 1 millón de dólares en

efectivo. El dinero se encontraba en una valija negra que recibió Vega Sánchez, quien la puso en un vehículo rojo, al cual Yarrington se habría subido al final del acto.

Posteriormente, durante los cuatro meses siguientes (de julio a octubre de 1998), Vega Sánchez supuestamente entregó a Yarrington otras valijas con cantidades de dinero similares, según el testimonio de Óscar.

Ya como gobernador de Tamaulipas –cargo que asumió en febrero de 1999–, Yarrington habría permitido, con la complicidad de otros funcionarios públicos, incluso procuradores de justicia, el paso de droga del Cártel del Golfo por las ciudades tamaulipecas de Matamoros y Valle Hermoso con destino final a Estados Unidos.

El testigo protegido Rufino señaló otra forma de colaboración: avisarle al Cártel del Golfo de las denuncias que se hicieran en su contra, de tal suerte que la organización criminal se encargaba de secuestrar o eliminar a quienes lo denunciaban. De la misma manera, si un miembro del cártel era arrestado, se procedía a su excarcelación.

El testigo Ángeles relató varios episodios en los cuales Yarrington habría recibido valijas de dinero por encargo directo de narcotraficantes, entre éstos, Heriberto Lazcano Lazcano y Miguel Treviño Morales, ambos miembros de Los Zetas. Por ejemplo, Ángeles contó que en una reunión realizada en agosto de 2005 le fueron entregados 2 millones de dólares para Yarrington, que él dos días después le entregó personalmente.

### **Entramado financiero**

El expediente relativo al proceso de extradición de Yarrington incluye el contenido del acta de acusación desclasificada B12435-S1 de la Corte del Distrito Sur de Texas/Brownsville. En este documento se señala que en diciembre de 2004 Yarrington habría robado 60 millones de pesos producto de la venta de una propiedad pública perteneciente a la ciudad de Nuevo Laredo.

Ese mismo documento indica que uno de los principales colaboradores de Yarrington, el empresario Fernando Alejandro Cano Martínez –propietario de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V.– presuntamente lo ayudó a emplear el dinero ganado ilegalmente para adquirir propiedades (inmuebles, vehículos e incluso un avión) en Texas.

El encausamiento judicial de la Corte de Texas indica que Yarrington utilizaba una parte de ese dinero para mantener a su amante Sindy Chapa y a los hijos nacidos de la unión de ambos.

El documento hace referencia al presunto entramado financiero creado por Yarrington en Estados Unidos: una mezcla de testaferros, empresas pantalla e incluso un complejo esquema de transferencias de dinero. En este último caso, cada transferencia no excedía los 10 mil dólares para evitar ser detectada. También utilizaba proveedores de cambio de divisas especializados en clientes comerciales.

Por ejemplo, entre enero y septiembre de 2008 fueron retirados 337 mil 500 dólares en 42 transacciones distintas; entre septiembre de 2006 y septiembre de 2010, 274 mil 500 dólares fueron retirados en 35 operaciones, y entre enero de 2005 y noviembre de 2009, 114 mil 500 dólares fueron depositados en 14 diferentes transacciones, según consta en una comunicación estadounidense enviada a Italia el 17 de enero de 2017, antes del arresto de Yarrington.

En particular, entre los bancos usados para las operaciones fraudulentas figuran una decena de entidades mexicanas y estadounidenses, la mayoría con sede en Texas, pero en distintas localidades.

De igual modo, también destacan algunas empresas, presuntamente usadas para adquirir fondos de manera ilícita, fundadas en Texas el 6 de diciembre de 2005. Son los casos de la SA-Cantera Development Partners LLC y Cantera-Parkway Development Partners of SA LP, según verificó este semanario en Open Corporates, página especializada en bases de datos corporativos.

En 2012, ya en la cuerda floja, Yarrington habría planeado huir de Estados Unidos, abandonando a su amante y sus propiedades. Una comunicación de la División Criminal del Departamento de Justicia, con fecha del 10 abril pasado, sugiere que el exgobernador huyó a México en marzo de ese año cuando supo que era investigado por las autoridades estadounidenses. Pero antes ya había realizado viajes a Europa. De acuerdo con esta comunicación, hay constancia de viajes de Yarrington a Madrid en septiembre de 2009, en abril y julio de 2011 y en febrero de 2012; y a París en agosto de 2010.

Según esta comunicación, había cierta lógica en que Yarrington pensara huir a Europa, pues poseía en ese continente una amplia red de contactos que desarrolló gracias a sus actividades ilícitas y en virtud de la posición que había tenido como gobernador. Además, ha usado pasaportes falsos y seudónimos. No sólo eso, la comunicación del Departamento de Justicia estadounidense advierte al Ministerio de Justicia de Italia que si deja libre a Yarrington, éste huiría del país para evitar la extradición.

En las conclusiones de su sentencia, los jueces florentinos señalan que, de las investigaciones realizadas por Estados Unidos y México, emerge que de 1999 a 2009 Yarrington primero facilitó y luego participó en actividades de tráfico de estupefacientes del Cártel del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva.

“Existe una base razonable” para hacer esta afirmación, aunque “la verificación plena de la existencia de los delitos imputados a Yarrington” se hará en el marco del juicio que se celebrará en el país al que será extraditado, concluyen.

## **“En narcomantas, Los Zetas se atribuyen ataque al Blue Parrot”**

**Sergio Caballero**

**Proceso**

**7 enero 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/470454/en-narcomantas-los-zetas-se-atribuyen-ataque-al-blue-parrot>

CANCUN Q. Roo (apro).- En medio de versiones contradictorias del gobierno estatal sobre el origen de la balacera en el club de playa “Blue Parrot” de Playa del Carmen, esta mañana fueron halladas al menos cuatro narcomantas en la que Los Zetas se atribuyen el ataque en el que resultaron cinco personas muertas, entre ellas tres extranjeros, y otras 15 heridas.

“Esto es una muestra de que ya estamos aquí. Fue por no alinearte Philliph BPM. Es el inicio vamos a cortar las cabezas de Golfos, Pelones y Chapulines. El Fayo Z Vieja Escuela”, se lee en las mantas.

Una fue instalada en la calle 11 Sur entre 85 y 90 de la colonia Bellavista, otra más a un costado del hotel Paradisus La Esmeralda, en la Quinta Avenida; la tercera frente al Sindicato de Taxistas y la cuarta en avenida 28 de julio con bulevar Playa del Carmen.

De acuerdo con fuentes de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Solidaridad (Playa del Carmen), las cuatro mantas tienen el mismo texto, el mismo tamaño y la misma letra, e incluso el mismo tipo de cordones, con las que fueron amarradas.

El lunes pasado el titular de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Pech Cen, afirmó que el ataque fue orquestado por un sicario solitario, mientras que el gobernador Carlos Joaquín, señaló que fue “un conflicto personal entre dos personas”.

### **“Detienen en Tamaulipas a dos militares que llevaban armas para Los Zetas”**

#### **REDACCIÓN**

#### **Proceso**

**29 enero 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/472296/detienen-en-tamaulipas-a-dos-militares-llevaban-armas-los-zetas>

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Dos tenientes de la Sedena fueron detenidos en un retén cuando transportaban un cargamento de armas con destino a Ciudad Victoria, Tamaulipas.

De acuerdo con información del blog *Nuevo Laredo en Vivo*, los detenidos fueron identificados como José Manuel Núñez Santiago y Ambrosio Salgado Brito.

Según las declaraciones de los tenientes, les pagarían 100 mil pesos por las armas que iban a entregar a un contacto fuera de su destacamento.

De acuerdo con la información del blog, las primeras investigaciones indican que las armas iban a ser entregadas a Pancho Carreón, líder de una célula de Los Zetas Vieja Escuela que opera en el municipio de Xicoténcatl.

Los militares viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Chevy con placas del estado de Nuevo León y fueron interceptados en el puesto de inspección de la Sedena localizado en Oyama, municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Los militares iban del destacamento de Monterrey, Nuevo León con destino a Ciudad Victoria, donde entregarían el arsenal a una persona que los contactaría vía telefónica.

Los detenidos, vehículos y armas fueron entregados a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, dándose vista a la Fiscalía Militar y a la Policía Federal.

En total, los militares traían 14 armas largas (3 tipo AR-15 y 11 tipo AK-47); dos armas cortas calibre 9 mm; cuatro cargadores para 7.62 x 51; 61 cargadores AK-47; cuatro cargadores 9mm; 106 cargadores AR-15; 710 cartuchos 5.56mm, y 59 cartuchos 9mm.

Hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido información oficial respecto al caso.

### **“Cae banda de Los Zetas en la zona centro de Veracruz”**

**Noé Zavaleta**

**Proceso**

**31 mayo 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/488958/cae-banda-los-zetas-en-la-zona-centro-veracruz>

XALAPA, Ver. (apro).- Elementos de las policías federal y estatal aprehendieron este miércoles a una célula delincuencia de Los Zetas en el municipio de Río Blanco, en la región montañosa de la entidad.

De acuerdo con el Grupo de Coordinación Veracruz, junto con Christian Michel N, “El Coyote”, mando de la organización criminal en la región, fueron capturados otros cuatro hombres y dos mujeres.

En el operativo se les aseguró un arma larga, tres cortas y una granada de fragmentación, así como tres vehículos: un Toyota Yaris y dos Chevrolet (Cruze y Aveo, este último con reporte de robo).

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para fincarles las responsabilidades correspondientes.

En el corredor industrial Córdoba-Orizaba, Los Zetas han sido replegados por las fuerzas del orden a zonas montañosas de más difícil acceso, sin embargo eso ha sido aprovechado por bandas de huachicoleros y células del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para hacerse del control de las actividades ilícitas.

### **“Caen tres presuntos integrantes de Los Zetas en Oaxaca”**

**Patricia Dávila**

**Proceso**

**6 junio 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/489948/caen-tres-presuntos-integrantes-los-zetas-en-oaxaca>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la detención de tres presuntos integrantes de Los Zetas, entre ellos David Rodríguez Domínguez, El Cáncer, líder de una célula en el estado de Oaxaca, con enlace en Costa Rica y Guatemala.

De acuerdo con investigaciones de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dentro de las principales actividades de El Cáncer, también conocido como El Chacal, estaba el tráfico de drogas, armas y robo de hidrocarburo.

En la Ciudad de México, Rodríguez Domínguez contaba con enlaces para el intercambio de armas y droga, y a escala internacional se le vincula con operadores delictivos en Guatemala y Costa Rica para el ingreso de armamento y estupefacientes proveniente de ambos países.

Dentro del mismo operativo de la PGR, en el municipio oaxaqueño de San Dionisio Ocotepec, fue detenido Efrén Rodríguez Domínguez, El Pirul, operador de Los Zetas en los estados de Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca.

Y junto con los hermanos Rodríguez Domínguez fue aprehendido Martín Cruz Perales, probable integrante de la célula criminal, señalado como hombre de confianza de aquéllos.

Al momento de su detención les fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos útiles y cargadores para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como diversas dosis de la droga conocida como cristal, una báscula digital, equipos de comunicación y un vehículo.

### **“Vicepresidenta de Guatemala al servicio de Los Zetas”**

**LOUISA REYNOLDS**

**Proceso**

**25 junio 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/492211/vicepresidenta-guatemala-al-servicio-los-zetas>

El caso de la exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, presa en su país bajo cargos de corrupción, dio un vuelco este mes, cuando Estados Unidos solicitó su extradición... y ella aceptó ser extraditada. Esto hace pensar a los expertos que se trata de una maniobra que le permitiría dilatar su proceso varias décadas. En su petición, por otra parte, Washington revela que la exfuncionaria presuntamente estableció una lucrativa relación con Los Zetas, a quienes habría dejado operar impunemente en su país.

CIUDAD DE GUATEMALA (Proceso).- El proceso penal contra Roxana Baldetti, exvicepresidenta de Guatemala, dio un giro el miércoles 7, tras conocerse una solicitud de extradición del gobierno estadounidense y los presuntos vínculos de la exfuncionaria y del exministro guatemalteco de Gobernación Mauricio López Bonilla con Los Zetas.

El expediente enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para sustentar la solicitud de extradición, destapa los supuestos vínculos de Baldetti con Los Zetas, cártel que le habría entregado a la exfuncionaria más de 250 mil dólares a cambio de que se le permitiera operar impunemente en territorio guatemalteco.

En un comunicado, mediante el cual se da a conocer la solicitud de extradición, el Ministerio Público (MP) informó que el estadounidense Distrito de Columbia acusa a Baldetti de “asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas”. Se programó, pues, una audiencia para el jueves 15, a fin de informarle a la exvicepresidenta los motivos por los cuales Estados Unidos la requiere.

Baldetti fue vicepresidenta en el gobierno de Otto Pérez Molina, quien fue desaforado por cargos de corrupción. Luego de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ente investigador financiado por las Naciones Unidas, revelara que Pérez Molina y Baldetti orquestaron una red de contrabando aduanero conocida como La Línea, que defraudó al Estado de Guatemala por 3.8 millones de dólares, ambos se vieron obligados a renunciar, en medio de una fuerte ola de protestas.

Actualmente ambos guardan prisión preventiva. Pérez Molina enfrenta tres procesos penales por corrupción y Baldetti, cuatro.

En la petición de extradición, Estados Unidos asegura que “Baldetti prometió que como vicepresidenta, ella restringiría las actividades de los cuerpos policiales para permitir que los traficantes de droga, quienes contribuyeron a su campaña electoral en 2011, utilizaran las rutas terrestres, aéreas y marítimas para transportar drogas a través de Guatemala”.

El documento cita a varios informantes que aseveran que Baldetti se reunió en la Ciudad de Guatemala con integrantes de Los Zetas, incluyendo uno identificado en el expediente como “Testigo 1”, quien decidió colaborar con las autoridades estadounidenses.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, durante esas reuniones, sostenidas durante la campaña electoral de 2011, Baldetti negoció un acuerdo con Los Zetas como parte del cual recibiría 250 mil dólares, un pago que se hizo efectivo entre noviembre de 2011 y enero de 2012, una vez electa.

Para confirmar que había recibido el pago, Baldetti supuestamente envió a un individuo que fungía como enlace con Los Zetas un video que muestra la recepción del dinero, video que fue adjuntado al expediente y se encuentra en manos del MP y de la Corte Suprema de Justicia.

“El Testigo 1 dirigió entregas de dinero y regalos a los agentes de Baldetti porque creyó que Baldetti permitiría a Los Zetas el tráfico de cocaína a través de Guatemala”, reza el expediente.

Además de ese pago, Baldetti supuestamente solicitó y recibió seguridad armada de Los Zetas para sus mítines de campaña en el departamento nortero de Huehuetenango, entre noviembre de 2010 y enero de 2012.

### **Eliminación de un rival**

Testigo 1 también afirma que en 2012 solicitó la ayuda de Baldetti para “eliminar a un traficante de drogas asociado a un cártel mexicano rival” y que en respuesta la exvicepresidenta le informó que ese narco tenía una orden de captura vigente, con los cuales Los Zetas infirieron que Baldetti “resolvería el problema”.

Posteriormente el narcotraficante rival, cuya identidad no se revela, fue arrestado.

En 2012 las autoridades guatemaltecas arrestaron a tres narcotraficantes de alto perfil. El primero fue Horst Walther Overdick Mejía, detenido en abril de 2012 y extraditado a Estados Unidos en diciembre. Se le acusa de transportar 200 kilos de cocaína a ese país.

El segundo fue el mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa, detenido en la Ciudad de Guatemala en septiembre de 2012. A éste se le acusa de encabezar una estructura dedicada a procesar y producir metanfetaminas y trasegar precursores. Se le acusa de transportar drogas entre México y Guatemala desde 2009 y la justicia estadounidense lo requiere por delitos de narcotráfico.

En octubre de 2016 Yáñez Ochoa fue condenado a 28 años de prisión.

El tercero fue Luis Fernando Castillo Velásquez, detenido en diciembre de 2012, señalado como integrante de un cártel liderado por Carlos Rubio Parra, alias El Canche. Fue detenido en la Ciudad de

México el 18 de julio de 2016, acusado de trasladar unos 300 kilos de cocaína desde Guatemala entre febrero de 2006 y octubre de 2008, que posteriormente serían transportados a Estados Unidos.

Según las autoridades mexicanas, Rubio era el intermediario entre los cárteles mexicanos y colombianos y su base de operaciones era la Ciudad de México. La justicia estadounidense le ha solicitado a México que autorice su extradición para enfrentar cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

Antes de que la Corte de Columbia formulara los cargos contra Baldetti y López Bonilla el 22 de febrero de este año, los presuntos vínculos de la exvicepresidenta con la narcotraficante Marllory Chacón Rossell, La Reina del Sur, documentados por el diario El Periódico, ya habían generado sospechas sobre su involucramiento con cárteles de la droga.

Chacón, señalada por el Departamento del Tesoro estadounidense como la líder de una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero que operaba en Guatemala, Honduras y Panamá y que abastecía a los cárteles mexicanos, fue condenada en Miami, el 5 de mayo de 2015, a 12 años de cárcel por posesión de más de cinco kilos de cocaína con intención de distribuirla en territorio estadounidense. La Corte le redujo sustancialmente la pena por colaborar con el gobierno en la captura de otros narcotraficantes.

Investigaciones publicadas por El Periódico acusaron al Partido Patriota, el cual llevó al poder a Pérez Molina y a Baldetti, de recibir 2 millones de dólares de la estructura criminal encabezada por Chacón durante la campaña electoral de 2011.

### **Acepta la extradición**

El jueves 15 Baldetti compareció en una videoconferencia desde la cárcel de Santa Teresa, a una audiencia en la cual el Tribunal Quinto de Sentencia le informó sobre la solicitud de extradición planteada por la justicia estadounidense.

La exvicepresidenta, luego de conocer la acusación, dijo que aceptaría la extradición voluntaria, lo cual agiliza el trámite.

Sin embargo, penalistas guatemaltecos afirman que bajo los términos del acuerdo de extradición suscrito entre Guatemala y Estados Unidos, Baldetti solo puede ser extraditada una vez que haya enfrentado los cuatro procesos que tiene pendientes en Guatemala, lo cual podría tardar más de 40 años.

“No existe forma legal de que ella (Baldetti) se vaya sin terminar sus procesos acá. Mientras esos procesos no se resuelvan mediante una sentencia condenatoria o absolutoria firme, no podría enfrentar a la justicia estadounidense”, asegura el penalista David Pineda.

“(Baldetti) ha de estar bien asesorada porque ponerse a pelear una solicitud de extradición cuando los jueces siempre las otorgan no tendría ningún valor estratégico. Aunque no estuviera bien fundamentada, ningún juez la va a negar, tratándose de alguien tan señalada como ella, y más si se trata de Estados Unidos”, agregó Pineda.

Según Pineda, para que Baldetti pudiera ser extraditada de inmediato, el MP tendría que desistir en los procesos legales que se llevan en su contra, lo cual sentaría “un mal precedente para la justicia guatemalteca”.

A criterio de Carmen Aída Ibarra, directora del movimiento Pro Justicia, una organización civil, es improbable que el MP abandone los procesos contra Baldetti mientras Thelma Aldana siga al mando de la institución y la CICIG permanezca en el país. Sin embargo, este panorama político podría cambiar cuando Aldana sea relevada en su cargo a mediados de 2018.

“El año entrante van a nombrar a un nuevo fiscal general y habrá una nueva correlación de fuerzas. Los altos funcionarios, como Otto Pérez Molina, involucrados en casos de corrupción, le están apostando a que el presidente (Jimmy Morales) elija a un fiscal favorable a su causa y a que se acabe el mandato de la CICIG o llegue un comisionado diferente”, dijo Ibarra.

En cuanto a la permanencia de la CICIG en el país, cabe recordar que la victoria electoral de Donald Trump en Estados Unidos, el principal donante que apoya la comisión, supone un cambio en la política exterior estadounidense hacia Centroamérica, lo cual podría traducirse en un menor apoyo hacia las labores de la comisión.

### **“Capo de Los Zetas detenido tejió redes con políticos de PRI, PAN, empresarios y la propia Fiscalía de Veracruz”**

**NOÉ ZAVALA**

**Proceso**

**12 julio 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/494721/capo-los-zetas-detenido-tejio-redes-politicos-pri-pan-empresarios-la-propia-fiscalia-veracruz>

XALAPA, Ver. (apro).- Durante una década, Hernán Martínez Zavaleta y/o Jorge Martínez López, *El Comandante H*, jefe de plaza de una célula de Los Zetas en el sur de esta entidad y en el norte de Tabasco, cultivó amistades poderosas en el PRI, en el PAN, entre la clase empresarial y la propia la Fiscalía General del Estado (FGE).

Su captura, ocurrida la tarde-noche del viernes 30 de junio en el municipio tabasqueño de Cárdenas vino a poner a la luz pública su relación con un círculo de poder en el sur de Veracruz.

Dueño del lujoso restaurante “The Port House”, de gimnasios y bares, *El Comandante H* siempre aparecía fotografiado cerca del empresario priista José Antonio Chagra Nacif y de la secretaria de Mujeres del Comité Municipal del PVEM, Genoveva “Beba” Chagra.

Pero en Acción Nacional también trabó amistad con el empresario y excandidato del PAN-PRD a la alcaldía de Coatzacoalcos, Jesús Moreno.

Apenas ayer, en redes sociales, filtraron que el Comité Directivo Municipal de Cosoleacaque también “convidaba” como invitado especial a Martínez Zavaleta a las reuniones con el entonces senador

Fernando Yunes –hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares–, en mítines proselitistas en el sur de la entidad.

En un escueto comunicado, Yunes Márquez aceptó que en esa reunión se encontraba *El Comandante H*, pero se deslindó de haber convocado al hoy indiciado y de haber organizado dicha reunión, recargando la responsabilidad en los panistas del sur de la entidad.

En el caso del PRI, parientes de los Chagra amenazaron vía telefónica a la periodista de *La Jornada Veracruz*, Sayda Chynas, por revelar la amistad de dicha familia con Martínez Zavaleta.

En el caso del líder estatal del PAN, José de Jesús Mancha, justificó el que los panistas Jesús Moreno y Fernando Yunes se fotografiaran con delincuentes porque “cuando andan en campaña, se toman fotos con quien sea, por quedar bien”.

En el caso de Jesús Moreno y *El Comandante H*, éstos asistieron juntos el pasado 16 de enero al estadio “Rafael Hernández Ochoa” de Coatzacoalcos a un partido de fútbol profesional. La fotografía fue subida a la red social Instagram por la priista Genoveva Chagra, quien también aparece en la imagen.

En la Fiscalía Regional de Veracruz, dependencia encargada de procurar justicia, *El Comandante H* también tenía bien aceitadas sus relaciones de amistad.

Policías ministeriales de esa zona revelaron a **Apro** la amistad entre Martínez Zavaleta y el fiscal regional Jorge Morales Carrasco, quien tuvo que renunciar a la corporación apenas un par de días después de la detención del capo de Los Zetas.

Aunque Hernán Martínez llevaba una década operando en la zona y fortaleciendo sus relaciones con políticos y empresarios del sur de Veracruz, fueron las investigaciones ministeriales federales y las locales llevadas desde Xalapa las que lo relacionaron como el autor intelectual de la salvaje muerte de seis personas el 17 de junio pasado en el puerto de Coatzacoalcos, cuatro menores entre ellos.

Las ejecuciones, revelaron policías ministeriales, fue en venganza porque una de las seis personas asesinadas participó un mes atrás en la ejecución de uno de sus principales colaboradores, Bernardo Mota.

## “Estados Unidos quiere a exministro de Guatemala ligado a Los Zetas”

LOUISA REYNOLDS

Proceso

16 julio 2017

Consultada 4 diciembre 2019

<https://www.proceso.com.mx/494997/estados-unidos-quiere-a-exministro-guatemala-ligado-a-los-zetas>

A los procesos judiciales que enfrenta en su país, el exministro de Gobernación de Guatemala Mauricio López Bonilla –militar que combatió a la guerrilla y fue condecorado por ello– suma una petición de extradición a Estados Unidos, a la cual se allanaría con la intención de convertirse en testigo y hablar de la protección del más alto nivel que tuvieron a principios de este siglo los narcotraficantes mexicanos, especialmente Los Zetas, en la nación centroamericana.

CIUDAD DE Guatemala (Proceso).- El exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, exmilitar condecorado como héroe de guerra durante el conflicto armado que azotó Guatemala 36 años y antiguo aliado de Washington, enfrenta tres procesos judiciales por corrupción, a los cuales ahora se suma una petición de extradición a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

El pasado 8 de enero, la corte del Distrito de Columbia acusó, por separado, a la exvicepresidenta Roxana Baldetti y a López Bonilla del delito de asociación delictuosa para distribuir cocaína con el conocimiento de que sería transportada a Estados Unidos.

El 7 de junio, el Ministerio Público (MP) recibió la solicitud de extradición contra Baldetti, y el 23 de junio, la de López Bonilla, ambas emitidas por el Departamento de Justicia estadounidense.

El Ministerio de Gobernación, que López Bonilla tenía a su cargo, es una de las carteras con mayor presupuesto (superior al que se le asigna al ejército) y controla a la Policía Nacional Civil (PNC) y el sistema penitenciario.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, de 2010 a 2015 López Bonilla recibió dinero de diversos cárteles de la droga, entre ellos Los Zetas, a cambio de permitir que operaran libremente en el país.

La solicitud de extradición se basa en las declaraciones de tres personas identificadas como “testigos” 1, 2 y 3, quienes afirman que López Bonilla era conocido como El Pato, El M, El Arquitecto o El Hombre.

El Testigo 1 declaró que en 2013 le pagó a López Bonilla 1 millón de dólares para que permitiera el traslado de varios miles de kilogramos de cocaína hacia Guatemala, sin intromisión de las fuerzas de seguridad. Estos cargamentos pasaron a manos de cárteles mexicanos que los trasegaron a Estados Unidos. El mismo testigo agregó que le pagó al exministro 300 mil dólares adicionales a cambio de no ser capturado por la policía. El pago fue entregado a López Bonilla por conducto del Testigo 2.

Los testigos 2 y 3 dijeron, además, que le entregaron a López Bonilla otros 200 mil dólares a cambio de información sobre las operaciones policíacas en curso dirigidas contra Los Zetas.

Según estos testimonios, López Bonilla encargaba a oficiales de la policía la tarea de escoltar cargamentos de cocaína y recibía coimas a cambio de asignar personal afín a los intereses del crimen organizado.

“Estos actos redujeron las actividades de las fuerzas de seguridad y protegieron a traficantes de drogas mientras transportaban drogas dentro y a través de Guatemala”, afirma el Departamento de Justicia estadounidense en la petición de extradición.

Héctor Silva Ávalos, investigador residente del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University e investigador de Insight Crime, explica a Proceso que la importancia de las acusaciones que el gobierno estadounidense formula contra Baldetti y López Bonilla radica en que, de ser probadas en una corte, evidenciarían que “las organizaciones del tráfico de droga locales crecieron, en gran medida, gracias a la protección política que tuvieron, una protección que venía desde el más alto nivel”.

Esa protección política, subraya Édgar Gutiérrez, exdirector del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos y ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Alfonso Portillo,

no se circunscribía a Los Zetas: “El núcleo del Partido Patriota administraba relaciones con diferentes cárteles partiendo de dos realidades: tenía el control de las fuerzas de seguridad guatemaltecas y de gran parte de su territorio. Con esas premisas era capaz de establecer reglas del juego a diferentes grupos de narcotraficantes”.-

El próximo jueves 20, López Bonilla deberá comparecer ante el Tribunal Tercero de Sentencia Penal para que se le informe sobre la solicitud de extradición. Es probable que la acepte voluntariamente, como lo hizo Baldetti el pasado 15 de junio, con el afán de lograr una pena reducida en una corte de Estados Unidos a cambio de convertirse en colaborador de la justicia de ese país y proporcionar detalles sobre las organizaciones criminales con las que tenía nexos.

Pero según los términos del tratado de extradición entre Guatemala y Estados Unidos, antes de que pueda ser extraditado, López Bonilla deberá enfrentar tres procesos penales por corrupción en Guatemala.

En el primero, conocido como el Caso Patrullas, se le acusa de peculado por uso y cohecho pasivo, por haberse embolsado 518 mil del millón 600 mil dólares que el ministro de Gobernación asignó al mantenimiento de las patrullas de la PNC.

En el segundo, el Caso Blindado, se le acusa, junto con otros dos altos funcionarios, de haber evadido la Ley de Contrataciones al arrendar 47 vehículos blindados para el transporte de funcionarios, investigadores y testigos en casos de alto impacto sin una licitación pública.

El tercero, el Caso Cooptación del Estado, involucra también a Baldetti. Según el MP existía una red de altos funcionarios, liderada por la exvicepresidenta, que recibió comisiones ilegales por entregar contratos a empresas que financiaron la campaña del Partido Patriota en 2011.

A López Bonilla se le acusa de recibir sobornos por la contratación de la empresa de seguridad privada Escorpión para resguardar las sedes del Registro Nacional de las Personas. Parte de estas coimas fueron supuestamente utilizadas para comprarle lujosos regalos a Otto Pérez Molina, presidente de 2012 a 2015.

### **“Don Damián”**

La estrecha relación entre López Bonilla y Pérez Molina –quien fue desaforado por el Congreso y guarda prisión preventiva, acusado de orquestar una red de contrabando aduanero conocida como La Línea, junto con Baldetti– se remonta a los años de la contrainsurgencia, cuando adoptó el alias de Don Damián y fue conocido por su astucia y actos temerarios, entre ellos un operativo en 1981 en el que dirigió a miembros de las fuerzas especiales del ejército disfrazados de insurgentes, para atacar un campamento guerrillero. El operativo, en el cual murieron 28 rebeldes, fue un fuerte golpe contra una de las principales facciones de la insurgencia.

Un año después fue parte del gabinete del dictador Efraín Ríos Montt, quien fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013, pero cuya sentencia fue revertida por un tecnicismo legal.

López Bonilla prefería, sin embargo, destacar el papel que desempeñó como enlace con los grupos de la sociedad civil y el sector privado cuando un gobierno civil retomó el poder a mediados de los ochenta e

inició negociaciones de paz con la guerrilla. Mientras Pérez Molina, quien fungía como jefe del Estado Mayor Presidencial, era la cara pública de las fuerzas armadas, López Bonilla era el emisario que negociaba en secreto.

El exministro se retiró del ejército en 1997, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, y mantuvo su relación con Pérez Molina y otros militares, quienes pusieron sus conocimientos de inteligencia al servicio de grupos de crimen organizado dedicados al narcotráfico, al tráfico de personas y al trasiego de armas.

Estas redes, integradas por militares y criminales, se conocen como “cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”; la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que actualmente opera en el país con financiamiento de la ONU y que condujo la investigación del caso La Línea, fue creada a fin de desmantelarlas.

Tras retirarse, López Bonilla obtuvo un posgrado en ciencias políticas y licencias para certificar operaciones en aeropuertos y puertos marítimos, que le permitieron operar máquinas de rayos X en el aeropuerto La Aurora. También se desempeñó como consultor privado en temas de seguridad y análisis de riesgos, y no regresó a la vida pública hasta que Pérez Molina lo nombró ministro de Gobernación, tras las elecciones de 2011.

Silva Ávalos hace notar que no sorprende que López Bonilla haya mutado de un aliado del gobierno estadounidense a un extraditable. “No es algo que le suceda a Estados Unidos por ingenuidad. Ellos saben perfectamente con quién se alían. Lo que sucede es que esa alianza entre Estados Unidos y esos militares y policías les da una licencia de impunidad, como se la dio a Noriega en Panamá. No importa que sean corruptos y narcotraficantes, siempre y cuando sirvan a sus intereses”, afirma el investigador.

“Si el fin de Estados Unidos era sacar a Los Zetas de Guatemala, y López Bonilla era un aliado, eso era suficiente; y si luego López Bonilla hacía sus propias cosas, eso ya no era problema de ellos”, agrega Silva.

### **El fin de Los Zetas**

La presencia de Los Zetas en Guatemala comenzó a hacerse notar en mayo de 2011, cuando hombres fuertemente armados asesinaron a varios familiares del terrateniente Otto Salguero, en el departamento de Cobán. Junto a los cuerpos mutilados fue hallada una nota que decía “Otto Salguero, voy por tu cabeza, Att Z200”. Días después fue abatido a tiros el narcotraficante guatemalteco Harold León, junto con dos de sus guardaespaldas.

Y al día siguiente, hombres armados torturaron y decapitaron a 27 jornaleros en la finca Los Cocos, propiedad de Salguero, en el departamento norteño de Petén. Con la pierna de una de las víctimas escribieron con sangre el siguiente mensaje en una pared: “¿Qué onda, Otto Salguero? Te voy a encontrar y te voy a dejar así”. El mismo mes, Allan Stowlinsky Vidaurre, un investigador de la fiscalía local de Cobán fue secuestrado y desmembrado.

“Los Zetas llegaron a Guatemala tratando de abrir plazas ellos mismos con el fin de que enviados mexicanos del cártel tuvieran presencia en el país. Eso ocasionó reacomodos, mucho derramamiento de

sangre y la criminalización de muchos pueblos y zonas de Guatemala donde Los Zetas hicieron presencia, pero al final eso se fue debilitando”, afirma Silva Ávalos.

El auge de Los Zetas en Guatemala ocurrió bajo el gobierno de Álvaro Colom, antecesor de Pérez Molina, y su caída comenzó con la captura del mexicano Daniel Pérez Rojas, El Cachetes, principal responsable de finanzas y logística del grupo criminal en Guatemala, en abril de 2008.

Cuando Pérez Molina llegó al poder, Los Zetas trataron de recuperar el espacio perdido mediante la alianza que forjaron con su gobierno desde la campaña electoral de 2011. Sin embargo, la estructura ya se encontraba considerablemente debilitada y su salida del país ya se preveía desde antes de la caída de Pérez Molina.

Silva Ávalos y Édgar Gutiérrez coinciden en que grupos locales del narcotráfico, como Los Oajacas en la costa sur y el Cártel de la Charola, integrado por jefes y agentes policiales, se benefician con la salida de Los Zetas y señalan que el negocio del narcotráfico se reparte ahora entre escisiones de los cárteles guatemaltecos que han controlado el trasiego de cocaína en el país desde los ochenta.

“En Centroamérica el modelo que ha funcionado desde siempre es el de los operadores locales, que fueron subcontratados desde los ochenta por los colombianos y, a partir de la entrada del nuevo siglo, por los mexicanos”, afirma Silva. Estos grupos, cuya identidad precisa aún se desconoce, siguen vinculándose con los grandes cárteles mexicanos, como los de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Esta atomización de los grupos guatemaltecos que controlan el trasiego de droga podría resultar, en el corto y en el mediano plazos, en un repunte de la violencia asociada al narcotráfico, advierte el investigador. En cuanto a la protección que el Estado le ha brindado durante décadas al crimen organizado, es posible que ésta se vuelva más sutil, pero no desaparecerá.

“Si una lección les va a dejar el tema de Otto Pérez Molina a los (funcionarios) que estén aliados con el crimen organizado en Guatemala es que tienen que ser más cuidadosos”, afirma Silva Ávalos.

### **“Exgobernador Manuel Andrade “abrió las puertas de Tabasco a Los Zetas”: secretario de Gobierno”**

**ARMANDO GUZMÁN**

**Proceso**

**6 septiembre 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/502054/exgobernador-manuel-andrade-abrio-las-puertas-tabasco-a-los-zetas-secretario-gobierno>

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, acusó al exgobernador priista Manuel Andrade Díaz de abrir las puertas de Tabasco al grupo delictivo Los Zetas.

Además, denunció que Andrade dio escoltas a un delincuente que asesinaron y durante sus cinco años de gobierno no “veía” a Los Zetas.

El funcionario acudió a un programa radiofónico local para rechazar las “insinuaciones gravísimas” de Andrade Díaz, ahora diputado local del PRI, de que el gobierno de Arturo Núñez habría ordenado “silenciar” al empresario Jerry Barceló, asesinado el pasado viernes.

“Él le abrió las puertas a Los Zetas, él le dio escoltas de la Procuraduría del Estado a uno de los delincuentes que luego mataron, ¿cuál fue la solución?, quitar al de la Judicial”, acusó.

Rosario Torres ocupó la Procuraduría local las últimas dos semanas de 2006, último año de gobierno de Andrade Díaz, por petición del gobernador electo, Andrés Granier Melo, quien lo ratificó en el cargo en enero de 2007 hasta que renunció en julio de 2008.

“En ese tiempo, según me comentaban después, había más de 100 Zetas en Tabasco, pero no los veía el súper gobernador Andrade, el que todo lo sabe, no los veía”, señaló.

Sobre el homicidio del empresario Jerry Barceló Cazola, Rosario Torres deslindó al gobierno de los dichos de Andrade Díaz.

“Esa fue una insinuación gravísima la que hizo el diputado Andrade, muy grave. Yo lo invito a que la materialice presentando una denuncia, donde él crea que la debe presentar, para que la sustente”, emplazó.

Luego tachó al exgobernador como una persona con falta de valor, un mitómano profesional y frívolo.

“El león cree que todos son de su condición, pero mitómano profesional sí es, un hombre frívolo sí es, pero el gobierno no es asesino, el gobierno no hace ese tipo de cosas y menos para callar a gente que no piensa como ellos”, replicó.

Andrade Díaz había dicho que en “pláticas” se había comentado que a Jerry Barceló lo había mandado a “silenciar” el gobierno del estado, o que era obra de la delincuencia organizada.

Y exigió la renuncia de Gustavo Rosario y del secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal.

El delegado del CEN del PRI, Jorge Salomón Azar, aclaró que el señalamiento del exgobernador fue a título personal, pues la postura del partido sobre el caso Jerry Barceló fue dado a conocer por el dirigente estatal priista Gustavo de la Torre.

En el PRI, “hay absoluta libertad de expresión y tendrán que hacerse responsable de lo que dicen y de las consecuencias”, puntualizó.

Rosario Torres rechazó que sea un funcionario ineficaz y que sólo el gobernador Arturo Núñez y la gente lo pueden quitar del cargo.

“De ineficaz nadie me puede acusar, como nadie me puede acusar de corrupto. Tengo la conciencia más limpia que mis detractores”, sostuvo y reveló que Andrade Díaz tiene prestanombres para ocultar su riqueza y que, inclusive, dos de ellos, “se le pelaron con todo y lía”.

“Yo no tengo cosas ni casas en la calle Llanura a nombre de una novia en el DF, tampoco tengo varios prestanombres”, sentenció.

**““El Fabuloso”, la cabeza de los campos de exterminio de Los Zetas en NL”**

**JUAN ALBERTO CEDILLO**

**Proceso**

**14 septiembre 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/503208/fabuloso-la-cabeza-los-campos-exterminio-los-zetas-en-nl>

MONTERREY, N.L. (apro).- La organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL) informó que peritos forenses de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) concluyeron los trabajos que realizaban en un predio del municipio de García, donde se localizaron miles de fragmentos de huesos humanos.

Según la dependencia federal, más de 50 personas fueron incineradas en ese “campo de exterminio”, entre ellas dos policías que se convirtieron en “héroes” tras repeler el ataque contra el general retirado Hermelindo Lara Cruz, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del municipio de Escobedo, con la participación de aproximadamente 20 sicarios.

En entrevista con **Apro**, Lara Cruz relata el hecho ocurrido el 28 de mayo de 2010:

Pasadas las 18:30 de ese día, el general salió del cuartel para reunirse con su esposa. A toda velocidad, menos de 20 minutos después la camioneta regresó a las instalaciones con más de mil impactos de bala.

La unidad era perseguida por al menos cinco camionetas con hombres armados, encabezados por el líder zeta Hernando Rodríguez Hernández, “El Fabuloso”, un joven de 25 años que antes había asesinado al general Diplomado del Estado Mayor Juan Arturo Esparza, secretario de Seguridad del municipio de García.

“Salimos por avenida las Torres y luego avanzamos por Raúl Salinas, cuando una Pick Up doble cabina salió de una calle perpendicular y nos impactó por atrás.

“Esperaban que nos bajáramos. Yo iba en el asiento trasero manipulando mi celular y con el impacto se me cayó”.

El general iba acompañado por tres de sus escoltas, uno de los cuales alcanzó a ver que del vehículo de los atacantes bajaron dos hombres con armas largas. En ese momento Lara Cruz ordenó al conductor que arrancara y retornara al cuartel.

Inmediatamente fueron seguidos por cinco camionetas que les dispararon con armas de grueso calibre. Las balas impactaron en el blindaje nivel cinco de la camioneta, y la mayoría en el cristal del lado donde viajaba el general.

Lara Cruz tenía pocos meses en su nuevo cargo. Desde que llegó, Los Zetas empezaron a amenazarlo. Le llamaban a su teléfono móvil para decirle que no era más que “un generalito”.

“El Fabuloso” le advirtió que él era el verdadero comandante que mandaba en Escobedo, y le ordenó que los dejara trabajar y no se metiera con ellos. Para esas fechas ya había desaparecido un alto mando de la policía que “se atrevió” a decomisar un cargamento de droga que iba destinada a los narcomenudistas del municipio.

Mientras era perseguido por las camionetas, Lara Cruz llamó a la Séptima Zona Militar informando que estaba bajo fuego. También marcó a sus hombres para que se preparan y repelieran el ataque.

A esa hora cambiaban de turno en la SSP, por lo que había una buena cantidad de efectivos, pero la mayoría estaban “comprados” por Los Zetas y no salieron a defender a su jefe. Los pocos que no se habían dejado corromper se refugiaron en los baños mientras los sicarios disparaban ráfagas contra el cuartel.

Solo un guardia, Luis Enrique Castillo Millán, y el policía Jesús García Martínez, subieron al techo para responder al ataque de unos 20 pistoleros que continuaban disparando sus rifles de asalto contra la camioneta del general, ahora estacionada frente a la sede policiaca.

Los disparos de los uniformados hirieron a algunos sicarios, pero el resto continuó vaciando balas a la camioneta y a las instalaciones de la SSP por cerca de cinco minutos antes de huir.

El blindaje del vehículo del general resistió más de mil 200 impactos de balas de grueso calibre. Y ahora la empresa responsable la exhibe como ejemplo de su “buen trabajo”.

Antes de esa ocasión Lara Cruz ya había estado bajo fuego, cuando los primeros días de 1994 encabezó el batallón que entró a Ocosingo, Chiapas, para combatir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

También luchó contra el narcotráfico en la Sierra de Guerrero... pero el ataque de Los Zetas es el peor que ha vivido.

“Este es el atentado más fuerte que he sufrido a lo largo de mi carrera”, subraya.

De acuerdo con las familias de Jesús García y Luis Enrique Castillo, el general cometió el grave error de presumir ante todos sus compañeros que los tiros que aquellos hicieron habían herido a los sicarios.

“En el pase de lista los puso al frente de todos los policías y dijo: ‘debemos reconocer a estos elementos por ser los únicos que repelieron el ataque’”, aseguró la esposa de García.

Tres días después, esos dos policías fueron “levantados” en sus domicilios por un comando. Durante varios años no se volvió a saber de ellos.

“El Fabuloso” era un “comandante zeta” responsable de varios municipios del norponiente de la zona metropolitana de esta capital. Además de Escobedo, tenía bajo su mando el municipio rural de García, donde ya había matado a otro general.

En noviembre de 2009 asumió el poder un nuevo alcalde en García: Jaime Rodríguez Calderón, quien nombró como titular en la SSP al experimentado exmilitar Juan Arturo Esparza, exgeneral brigadier Diplomado del Estado Mayor Presidencial.

Esparza, cuya encomienda fue limpiar la policía municipal penetrada por Los Zetas, llegó a la corporación policiaca con una gran experiencia en temas de seguridad, dado que en algunas regiones fungió como comandante en jefe para combatir el narcotráfico.

Su experiencia incluía la jefatura de seguridad y logística con los presidentes priistas Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y el panista Vicente Fox.

Cuando el expresidente estadounidense Bill Clinton estuvo en México, fue el responsable de su seguridad. Y en ese mismo puesto sirvió al Papa Juan Pablo II y a los reyes de España, entre otras personalidades que visitaron México.

El 4 de noviembre, a pocos días de haber asumido el cargo, el alcalde de García fue amenazado en su domicilio por hombres que se desplazaban en varios vehículos.

Entonces “El Fabuloso” llamó Rodríguez Calderón para advertirle que iban a secuestrar a su hija. El alcalde pidió a su secretario de Seguridad que fuera en su auxilio.

El general Esparza respondió al llamado con cuatro de sus escoltas, pero antes de llegar al domicilio fue emboscado por aproximadamente 30 pistoleros que se transportaban en 10 vehículos. En el ataque murió el general brigadier y sus cuatro escoltas, uno de los cuales era su sobrino.

Pero “El Fabuloso” no se conformó con la cabeza del exgeneral. También quería la de Rodríguez Calderón, quien se negaba a someterse a Los Zetas.

El mediodía del 25 de febrero de 2011, Jaime Rodríguez se desplazaba en una camioneta blindada sobre la avenida Abraham Lincoln, rumbo a esta capital, seguido por otro vehículo donde viajaban sus escoltas. Al entrar a la zona metropolitana, una camioneta modelo Audi comenzó a perseguirlo.

“Abróchese bien el cinturón porque nos viene persiguiendo una camioneta con hombres armados”, alertó el chofer al alcalde.

A la camioneta Audi se sumaron dos camionetas más con pistoleros, quienes comenzaron a disparar contra el vehículo del alcalde. El blindaje nivel cinco de la camioneta de Rodríguez Calderón lo protegía de los disparos, por lo que ordenó al chofer que esperara y protegiera a sus escoltas con el vehículo.

Gracias a esa protección, los jóvenes exmilitares lograron matar a tres sicarios y provocaron que tres más se bajaran de los vehículos para huir por una alcantarilla, mientras otra de las camionetas se daba a la fuga.

“Tengo miedo. Tengo familia, tengo hijos, tengo una responsabilidad de ser alcalde y obviamente debo enfrentar este asunto. No podemos dejar que nuestra ciudad sea otra vez secuestrada por los delincuentes y tengo que enfrentar esta situación”, declaró el alcalde tras ese ataque.

Y a partir de ese momento se ganó el mote de “El Bronco”.

Hernando Rodríguez Hernández sufrió su primera derrota en sus intentos por someter a los funcionarios de las plazas que controlaba. Sus jefes le ordenaron juntar pistoleros de todas las células de la zona metropolitana de Monterrey para preparar un segundo atentado.

La tarde del 29 de marzo de aquel año, “El Fabuloso” juntó 15 camionetas que trasladaron a 40 pistoleros para liquidar a “El Bronco”, pero el alcalde también había reforzado su seguridad y su vehículo iba protegido por dos camionetas con ocho escoltas a bordo.

Al filo de las 19:00 horas, los tres vehículos se desplazaban de nuevo por la avenida Abraham Lincoln rumbo a García, después de acudir a un evento.

“Cuando salgo de la colonia, ya venían varias camionetas detrás. Yo pensaba que eran empresarios porque venían en camionetas de lujo y avanzamos rumbo a García y nos encontramos de frente con ocho o nueve camionetas y nos rafaguean, nos agarran por sorpresa”, relató “El Bronco”, actual gobernador.

El ataque duró alrededor de 10 minutos, pero en esta ocasión los sicarios mataron a uno de sus escoltas e hirieron a cuatro. Los agresores también fueron alcanzados por las balas, pero sus compañeros se los llevaron.

De nuevo, el blindaje de la camioneta salvó la vida del alcalde.

Después de ese segundo atentado, Jaime Rodríguez despidió a 97% de la policía municipal, y el Ejército mexicano comenzó a patrullar el municipio.

Además de atentar contra “El Bronco”, “El Fabuloso” también hizo intentos por someter a la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, para que retirara al general Lara Cruz.

### **Panteón privado**

Hernando Rodríguez Hernández creció en las zonas marginadas que rodean el Cerro del Topo Chico.

Más tarde, la rica e industrial ciudad de Monterrey pagó caro su pecado de desatender a los jóvenes pandilleros, que han sido víctimas del mayor racismo, marginación y desprecio de la sociedad neolonesa.

Los reporteros de las cadenas locales continuamente utilizan el término “de aspecto pandillero” cuando quieren justificar la detención de un supuesto maleante.

Las zonas marginadas de esta ciudad, que alberga al 30% de la población, están atestadas de pandillas. La SSP estatal tiene un padrón de más de 2 mil pandillas que integran a cerca de 30 mil jóvenes marginados.

Cuando Los Zetas tomaron la plaza de Monterrey en 2007, al menos 20 de las bandas más grandes y violentas, entre ellas “Los Dragones”, quedaron al servicio del crimen organizado.

Los adolescentes y jóvenes pandilleros lograron que Los Zetas alcanzaran el nivel de un Ejército. De las pandillas salieron cientos de halcones, narcomenudistas, estacas y sicarios.

“El Fabuloso”, que también salió de una pandilla, controlaba varias más en una colonia marginada denominada CROC.

Los Zetas copiaron el método de los Maras Salvatrucha para reclutar miembros de las pequeñas bandas. El sistema era muy simple: provocar que las pandillas se pelearan entre ellas para que los miembros de las más débiles se refugiaran con los más fuertes, que estaban al servicio de la organización criminal.

El reinado de “El Fabuloso” terminó el 30 de junio de 2011, cuando tuvo la mala suerte de toparse con elementos del Ejército que patrullaban el municipio de García. Alrededor de las 20 horas de ese día, los militares detectaron un vehículo sospechoso y se inició un enfrentamiento con personas armadas que viajaban en una camioneta Toyota.

“Tres personas que iban en el vehículo que comenzó la agresión quedaron muertas, entre ellas Hernando Rodríguez. Dentro de la camioneta modelo Toyota se encontraron dos armas AK 47, dos R-15, una pistola 9MM y municiones”, precisó entonces un comunicado oficial.

Seis años después la PGJ ubicó al menos cinco extensos y apartados terrenos que fueron utilizados como “campo de exterminio”, donde Los Zetas incineraron a sus víctimas.

Uno de los terrenos es el rancho Las Abejas que se ubica en el municipio de Salinas Victoria, a unos 30 kilómetros al norponiente de la zona metropolitana, donde los peritos forenses recogieron más de 31 mil huesos calcinados y algunas piezas de molares.

El mayor de los cinco terrenos, donde aún trabajan los especialistas de la PGJ, está en el municipio rural de García. En ese terreno, “El Fabuloso” desapareció al menos medio centenar de sus víctimas.

En ese campo, localizado en las faldas del Cerro del Fraile, fueron hallados los restos de los dos policías que defendieron al general Lara Cruz. Además, se han identificado huesos y molares de unas 56 personas.

Después de que Jesús García Martínez y Luis Enrique Castillo Millán fueron identificados, las autoridades de Escobedo preparan una ceremonia que se celebrará en los próximos días para develar una placa en la SSP, donde se reconoce su valentía y “que no renunciaron a su deber”.

### **“Fiscalía identifica a 37 víctimas de Los Zetas masacradas en penal de Piedras Negras”**

**JUAN ALBERTO CEDILLO**

**Proceso**

**28 septiembre 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/505416/fiscalia-identifica-a-37-victimas-los-zetas-masacradas-en-penal-piedras-negras>

SALTILLO, Coah. (apro).- La Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila logró identificar a 37 víctimas que fueron asesinadas e incineradas por Los Zetas en el interior del centro penitenciario de Piedras Negras, y resta por identificar al menos a otras 113 personas, informó hoy José Ángel Herrera, titular de la dependencia.

“Como resultado de dos etapas de investigación, se ha logrado confirmar la identidad de treinta y siete personas que fueron víctimas del delito de desaparición de persona”, precisó Herrera en conferencia de prensa.

Además, se logró acreditar la responsabilidad de 17 personas en estos delitos, y se obtuvieron 21 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado 17, quedando cuatro pendientes, añadió.

Herrera destacó que entre los resultados del proceso de investigación está que desde el lunes 4 se realizó la consignación de 13 responsables, de los cuales ocho son custodios y cinco integrantes de Los Zetas.

También mencionó que para los efectos de ejercitar la acción penal contra los responsables, falta obtener 16 órdenes de aprehensión por el delito de desaparición de persona.

“Entre las 37 víctimas identificadas está una familia integrada por siete miembros, entre ellas una mujer y un menor de edad”, dijo Herrera.

Desde finales de 2009 y hasta septiembre de 2012, Los Zetas asesinaron e incineraron al menos a 150 personas en los talleres del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras.

Los restos de las víctimas fueron metidos en bolsas y arrojados en el cauce del río San Rodrigo.

Para localizar los restos, las autoridades desviaron el cauce del río con el objetivo de intentar encontrar las bolsas.

No obstante, “debido a las inundaciones que provocó el huracán *Alex*, las bolsas con los restos humanos fueron arrastradas por la corriente y terminaron en el río Bravo”, aseguró José Ángel Herrera.

### **“El Cereso de Piedras Negras, “búnker” de Los Zetas”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**15 octubre 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/507483/cereso-piedras-negras-bunker-los-zetas>

SALTILLO, Coah. (apro).- Siempre que salía de su celda en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras, su búnker, Ramón Burciaga Magallanes, ‘El Maga’, tenía un vehículo a su disposición e iba a su restaurante favorito para desayunar y leer los periódicos.

Como “líder del autogobierno” que mantuvieron Los Zetas durante aproximadamente cuatro años en esa prisión ubicada sobre el kilómetro 10.5 de la desértica carretera Ribereña que conduce a Ciudad Acuña, ‘El Maga’ entraba y salía de la prisión por la puerta grande, sin pena ni gloria, como quien tiene las manos limpias.

Viajaba alrededor de ocho kilómetros para desayunar un aromático café y hojear los diarios. Al terminar deambulaba por la ciudad y en la noche regresaba a descansar a su pulcra y cómoda celda de ese centro penitenciario donde, con su aval, se cometieron decenas de asesinatos a manos de Los Zetas.

En diversas ocasiones, Omar Treviño Morales, Z42 –líder regional de los Zetas–, “visitó” a ‘El Maga’ para esconderse en el Cereso mientras elementos de la Secretaría de Marina realizaba operativos con el fin de capturarlo.

“Al interior del Cereso, Los Zetas llevaron a cabo acciones como fabricación de chalecos, fornituras, reparación y/o desmantelamiento de vehículos”, cuenta a Apro José Ángel Herrera, fiscal especial para la búsqueda de personas desaparecidas en Coahuila.

En los talleres de la prisión, los internos modificaban tanques de la gasolina de automóviles, camionetas y hasta tracto camiones. Esos vehículos fueron utilizados para regresar las millonarias ganancias de Los

Zetas por el tráfico de cocaína que distribuían mensualmente por todo Estados Unidos desde Dallas, Texas.

Los vehículos alterados retornaban con abultadas bolsas de plástico selladas herméticamente, donde venían millones de dólares. Desde Dallas, Los Zetas recibían cada semana 4.5 millones en billetes de 100, 50 y 20 dólares.

Internos interrogados por el fiscal confesaron que desde 2009 al Cereso de Piedras Negras ingresaron camionetas con decenas de cadáveres, pero en ocasiones las víctimas aún llegaban vivas. En total fueron “unas 150 personas privadas de su libertad, quienes posteriormente fueron ejecutadas e incineradas en el área de talleres y carpintería”, describe Herrera.

Hasta septiembre pasado, la Fiscalía de Desaparecidos de Coahuila identificó a 37 de las 150 personas que fueron asesinadas e incineradas dentro de esa prisión.

Damaris, en el lugar equivocado

“Entre las 37 víctimas identificadas está una familia integrada por siete miembros, entre ellas una mujer y un menor de edad”, dice Herrera.

La mujer, originaria de Allende, había cumplido 22 años cuando fue “levantada”.

Atsi Damaris Reyna Saucedo, quien soñaba con ser maestra, estudió en Cinco Manantiales la primaria, secundaria y preparatoria. Para continuar con sus estudios abandonó su pueblo y fue a vivir a la vecina ciudad fronteriza de Piedras Negras, donde un tiempo trabajó en la maquila japonesa Fujikura, especializada en la fabricación de partes para el sistema eléctrico de autos.

La espiral trágica que derrumbó su ilusión de convertirse en maestra empezó cuando conoció a un joven que pronto se convirtió en su esposo y con quien procreó dos hijos.

Su suegro, Juan Antonio Villa de Hoyos, era propietario del conocido Bar Moctezuma y de otras dos cantinas en la zona de prostíbulos. El hombre tenía una deuda con Los Zetas, quienes cobraban derecho de piso a todos los “antros” y los obligaban a vender su whisky y su droga.

La noche del 18 de diciembre de 2011, los hombres de David Alejandro Loreto Mejorado, “Comandante Enano”, fueron por toda la familia Villa de Hoyos.

Loreto Mejorado era el jefe de sicarios en Piedras Negras y pistolero favorito de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z40 y Z42 respectivamente.

Esa noche iniciaban en la frontera mexicana las posadas navideñas. El suegro de Atsi Damaris, su esposa y tres de sus hijos, incluido un menor de edad, se reunieron en un rancho del Ejido Piedras Negras, una de sus propiedades.

El comando que “levantó” a la familia Villa iba encabezado por los pistoleros Santiago Peralta García, “El Moco”, y Manuel Elguezabal Hernández, “El Vaquero”. Los sicarios se dieron cuenta que faltaba el esposo de Damaris y obligaron a la familia a que lo llamara por teléfono y le pidiera reunirse con ellos, diciéndole que su madre “había enfermado”.

“Cuando recibió la llamada, Atsi Damaris escuchó que la mamá de su esposo estaba enferma y decidió acompañarlo”, relata a Apro Olga Lidia Saucedo, madre de la joven.

Como ya era muy noche, el esposo se negó a que ella lo acompañara, pero Damaris insistió en ir con él. Esa misma noche toda la familia fue asesinada y los cadáveres trasladados al interior del Cereso de Piedras Negras, para que tres “cocineros” los cremaran en la zona de carpintería.

Mientras tanto, los halcones de ‘Comandante Enano’ vigilaban para que sus enemigos del Cártel del Golfo no penetraran la ciudad de Piedras Negras. Cualquier grupo mayor a cuatro hombres jóvenes era considerado su rival.

En una ocasión Los Zetas levantaron por error a cinco sordomudos que recién habían llegado a la ciudad para pedir limosna a cambio de calendarios, plumas y artículos religiosos. Eran cerca de las 18:30 cuando un grupo de hombres armados llegó por ellos a la avenida Román Cepeda y bulevar República, en la colonia 24 de Agosto.

Los halcones habían reportado que podría tratarse de “miembros de la contra”. Tras capturarlos, los llevaron al Cereso para que los torturaran y los hicieran “hablar”. Ninguno de ellos volvió a salir. Tampoco lo hicieron algunos miembros de la Policía Federal y decenas de rivales, así como víctimas inocentes que eran confundidas. Además, al menos 11 mujeres que habían llegado a la prisión para amenizar las fiestas fueron incineradas.

Algunos huesos y molares de las víctimas resistieron al fuego, debido a que los “hornos” donde se cocinaron los cientos de cadáveres eran improvisados barriles.

“Los pequeños restos fueron metidos en bolsas de plástico negras para luego ser vertidas en el Río San Rodrigo a la altura del Ejido el Moral, ubicado sobre la carretera Piedras Negras-Ciudad Acuña”, dice el fiscal para desaparecidos.

Para localizar los restos, durante un tiempo las autoridades desviaron el cauce del río. No obstante, “debido a las inundaciones que provocó un huracán, las bolsas con los restos humanos fueron arrastrados por la corriente y terminaron en el Río Bravo”, añade el funcionario.

Los crímenes ocurridos dentro del Cereso empezaron a ser investigados en enero de 2014 por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, tras las denuncias de familiares de las víctimas.

Para julio de 2017, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en Piedras Negras, dictó una sentencia de 75 años de prisión contra Santiago Peralta García y de 50 años para Manuel Elguezabal Hernández

La sentencia en contra de Ramón Burciaga Magallanes sigue pendiente.

David Alejandro Loreto Mejorado falleció en un enfrentamiento contra efectivos del Ejército Mexicano el 3 de mayo de 2013 en Fresnillo, Zacatecas, donde fue enviado como jefe de plaza.

Humberto Moreira, cómplice

La Fiscalía cuenta con la confesión de uno de los “cocineros” que testificó los crímenes en el Cereso de Piedras Negras y que se perpetraron hasta septiembre de 2012, fecha en que ocurrió una fuga masiva. Las autoridades identificaron a ocho custodios que permitieron la incineración de los cadáveres.

“Los Zetas contaron con la aquiescencia del personal de guardia y custodia del Centro de Readaptación Social de Piedras Negras para ejecutar el delito de desaparición de persona, y los responsables se encuentran plenamente identificados”, precisa Herrera.

El “matrimonio” de las autoridades con Los Zetas ya había sido denunciado desde 2010 a la administración del exgobernador Humberto Moreira. Por complicidad o incapacidad no realizó ninguna acción para evitar que decenas de personas continuaran siendo asesinadas en esa cárcel estatal.

Incluso los “diagnósticos” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el sistema penitenciario mexicano especificaron que en el Cereso de Piedras Negras existía un “control de los internos en seguridad, actividades productivas, educativas y deportivas”.

Esos “diagnósticos”, que se publicaban cada año, describieron el autogobierno de Los Zetas en el penal. La advertencia se repitió desde 2011 hasta 2013.

Durante tres años la CNDH describió en su reporte los siguientes hechos en el Cereso de Piedras:

“1. Deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro (existe control por parte de los internos en seguridad, actividades productivas, educativas y deportivas; servicio de alimentación, limpieza y mantenimiento; de acceso de las visitas y teléfonos).

“2. Existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas.

“3. Existencia de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población.

“4- Prostitución.

“5. Presencia de cobros por parte de los custodios para pase de lista.

“6. Presencia de cobros por parte de los internos para protección, asignación de estancia y plancha para dormir, pase de lista, mantenimiento de los dormitorios, alimentos, servicio médico, medicamentos, uso del teléfono, visitas, acceso a actividades laborales, educativas y/o deportivas, no realizar labores de limpieza y no cumplir una sanción administrativa.

“7. Deficiencia en la capacitación del personal de seguridad y custodia”.

Además de la denuncia de la CNDH, otras organizaciones locales de derechos humanos advirtieron al gobernador Humberto Moreira sobre esos crímenes, pero su administración se convirtió en cómplice por omisión al negarse a intervenir para modificar el autogobierno que mantenían Los Zetas en la prisión fronteriza.

**“Informe revela control de Los Zetas en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Moreira”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**6 noviembre 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/510064/informe-revela-control-los-zetas-en-coahuila-los-gobiernos-los-hermanos-moreira>

SALTILLO, Coah. (apro).- Mientras Rubén Moreira ofrecía su último informe de gobierno en el que presumía que “los grandes capos que asolaban Coahuila ya no están” y que la paz y tranquilidad regresaron al estado, la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, presentó un estudio en el que revela que Los Zetas pagaron millonarios sobornos a los gobiernos de los hermanos Moreira.

El estudio, titulado “Control sobre todo el estado de Coahuila: Un análisis de testimonios en juicios en contra de miembros Zetas en San Antonio, Austin y Del Río”, fue presentado previamente a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes estadounidense.

El informe recoge los testimonios rendidos por los capos Zetas Enrique Rejón Aguilar, Efrén Tavira, Alfonso Cuéllar, Héctor Moreno y Humberto Uribe Tapia, entre otros, quienes confiesan los sobornos que pagaron a los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira.

“En el 2011, Rubén Moreira, el hermano de Humberto Moreira, se convirtió en el nuevo gobernador de Coahuila. Según Tavira, Rubén Moreira también colaboró con Los Zetas”, precisa.

Y sigue: “Tavira describió una ocasión en la cual Los Zetas entregaron un pago a Rubén Moreira en el rancho de otro narcotraficante, Beto Casas, a través de una camioneta Suburban llena de maletas repletas de dinero”.

Uribe Tapia también contó los sobornos de Los Zetas enviados a Humberto Moreira:

“Se hizo a través del Sr. Vicente Chaires y Jesús Torres Charles. Y lo que hicieron ahí en Saltillo, sobornaron al Procurador General del Ministerio Público y eso fue por protección y el acuerdo al que habían llegado con el Sr. Humberto Moreira, quien era el gobernador de Coahuila en ese entonces”.

El capo de Piedras Negras Alfonso Poncho Cuéllar testificó que los líderes Zetas dieron dinero desde el 2009 a todas las autoridades de Coahuila, estatales, federales y municipales.

“Pagaban sus cuotas para poder mover sus drogas libremente y que no tuvieran ningún problema para que las drogas pudieran pasar por Coahuila y llegar a Piedras Negras, y poder pasarlas al otro lado y trabajar sin tener algún problema y sin que les fueran aseguradas”, precisó Cuéllar en un juicio celebrado en Austin.

**“Autoridades en Coahuila permitieron negocios de Los Zetas en Pemex, CFE y arreglos con SHCP”**

**GLORIA LETICIA DÍAZ**

**Proceso**

**7 noviembre 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/510101/autoridades-en-coahuila-permitieron-negocios-los-zetas-en-pemex-cfe-arreglos-shcp>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la complicidad de autoridades municipales, estatales y federales que operaron en Coahuila durante los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira, los Zetas cometieron crímenes atroces e hicieron negocios en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como arreglos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior se desprende del informe “Control sobre todo el estado de Coahuila”, presentado por investigadores de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, en el que se alerta que el gobierno de Estados Unidos posee una amplia veta de información sobre violaciones a derechos humanos cometidos por el cártel.

En la presentación del informe, Ariel Dulitzky director de la Clínica y expresidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, destacó que una revisión de tres juicios que se siguen en cortes de Estados Unidos a miembros de los Zetas, revela información sobre ejecuciones y desapariciones de personas, que podrían ser compartidas para ser investigadas por el gobierno mexicano.

Acompañado por las investigadoras Sarah Gohary y Moravia de la O, los integrantes de la Clínica de Derechos Humanos informaron que durante un año y medio revisaron 24 testimonios dentro de los juicios de Austin, seguido contra el empresario Francisco Colorado Cessa y otras cuatro personas; el de San Antonio, contra Marciano Millán Vázquez, un comandante de los Zetas; y el Del Río, contra José Eliud Lugo López y Emilio Villalobos Alcalá.

Los investigadores de la Clínica advirtieron que los juicios están primordialmente enfocados en cargos por lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidios, por lo que “los abusos a los derechos humanos y la complicidad del gobierno del estado fueron tangenciales para los fiscales” de Austin; los testigos en el juzgado de San Antonio “ofrecieron más detalles respecto a abusos de derechos humanos, pero en segundo término”, y en el tercer juicio, es posible tener idea de la forma en que operaban las desapariciones y la complicidad con las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Pese a que las violaciones a derechos humanos no fueron tema de investigación para los fiscales estadounidenses, esas declaraciones fueron suficientes para que los investigadores de la Clínica de Derechos Humanos consideraran que “el cártel de Los Zetas cometió numerosas violaciones a derechos humanos y que las instituciones públicas y oficiales estuvieron involucradas en varias competencias, dependiendo de la situación, lugar y tiempo”.

Los testimonios que exintegrantes de Los Zetas rindieron ante tribunales de Texas, Estados Unidos, no sólo revelaron su presunta complicidad con los hermanos Humberto y Rubén Moreira y con altos funcionarios de sus gabinetes, sino también que la corrupción imperante en Coahuila permitió que se cometieran entre 2005 y 2012 atrocidades contra la población civil que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.

El documento resalta las declaraciones sobre presuntas entregas de millones de pesos al exgobernador Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles, a su hermano Rubén Moreira, alcaldes,

policías municipales, estatales y federales, militares, agentes del Ministerio Público de los fueros local y federal.

Los testimonios también confirman versiones sobre las presuntas implicaciones de otros dos gobernadores, Fidel Herrera y Javier Duarte; el primero es señalado de haber recibido sumas millonarias para financiar su campaña a gobernador y el segundo, por haber facilitado una propiedad para ejecutar a una contadora.

Un primer borrador de la investigación, fue publicada en Proceso en su edición 2123, en el contexto de la entrega de ese documento a la Corte Penal Internacional (CPI) como parte de una comunicación a esa instancia internacional titulado “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, presentado por el Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, Familias Unidas en Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con el respaldo de al menos otras 80 organizaciones de la Red Nacional de organismos civiles de Derechos Humanos todos los derechos para Todas y Todos (Red TDT).

El documento revela “de manera genérica”, complicidades de los Zetas con autoridades municipales, estatales y federales, para cometer crímenes atroces como para hacer negocios en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como arreglos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque sin que los testigos de nombres específicos.

“Próximamente estaremos en posibilidad de dar una lista de las empresas que los testigos mencionan como aquellas dedicadas a lavar el dinero”, anunció Dulitzky, quien a su vez se comprometió a explorar cuáles serían los mecanismos para que familias de desaparecidos y autoridades mexicanas obtengan información sobre sitios donde podrían estar restos de víctimas.

“En uno de los juicios se desprende que los fiscales de Estados Unidos informaron sobre domicilios claves, pero las respuestas que tuvieron fue que no existían los domicilios y que el área era muy peligrosa para enviar a agentes de la PGR; por eso es importante investigar con precisión cuáles serían los mecanismos efectivos no sólo para que el gobierno de Estados Unidos proporcione información, sino para que una vez que la dé el gobierno mexicano, la tome en cuenta y realice las investigaciones”, apuntó el director de la Clínica de Derechos Humanos.

Y es que los testimonios contenidos en los procesos judiciales son relevantes no sólo porque señalan de manera la incuestionable responsabilidad de Los Zetas en las masacres de Allende y Piedras Negras en la primavera de 2011, sino que marcan que en docenas de casos el patrón de los homicidios fue el descuartizamiento y la ‘cocina’.

“Los Zetas secuestraban, desaparecían, amenazaban y reclutaban forzosamente a mucha gente en Coahuila y en los estados vecinos. Su razonamiento era mantener el control, mostrar fuerza o represalias, castigar a quien perdiera drogas, y para crecer en números y territorio”, se lee.

Sin embargo, “el Estado también tiene un grado de culpa en las violaciones a derechos humanos cometidas. (...) La Clínica estima que la información presentada complementa la evidencia existente y ayudará con más esfuerzos para demostrar el grado y tipo de violencia practicada por Los Zetas y el Estado”.

Para las investigadoras, las declaraciones en las cortes de Texas también revelan “profundas conexiones sistemáticas y a veces el control que Los Zetas tenían sobre el aparato de justicia y los oficiales en línea ascendente del gobierno del estado”.

Las implicaciones evidenciadas van desde la operación directa contra miembros de cárteles rivales, la asignación de contratos a las empresas de Los Zetas, así como las omisiones de funcionarios del estado y de las fuerzas de seguridad, que permitieron la perpetración de abusos contra habitantes de Coahuila y otros estados.

El informe de la Clínica resalta que los testigos en los juicios en Texas, confirmaron que el control del cártel penetró entre los jefes de las policías municipales, entre procuradores estatales y federales, centros penitenciarios, así como sectores de la Policía Federal y el Ejército, así como que a la única entidad a la que temían era a la Marina.

Al señalar que el proyecto inicial de la Clínica en colaboración con el Centro Fray Juan de Larios, era “buscar entre los testimonios información que permitiera esclarecer algunas de las desapariciones ocurridas en Coahuila”, Ariel Dulitzky apuntó que al menos de esa revisión es posible advertir que “tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila. En el mejor de los casos, el Estado hizo caso omiso a la corrupción generalizada y a los graves abusos a los derechos humanos cometidos por Los Zetas en esa entidad, y en el peor de los casos, participó directamente en cometer estos abusos”.

Dulitzky resaltó que también se pudo identificar que “contrario a la narrativa del Estado mexicano de que todas las víctimas de desaparición o de homicidios estaban involucrados con el crimen organizado, lo que se ve es que muchas de las víctimas no tenían ninguna relación con los Zetas, y que muchos de los crímenes se cometieron con el afán de aterrorizar a la población y tener el control del territorio”.

Michael Chamberlin, subdirector del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios, destacó que desde que se presentó el primer borrador en julio pasado ante la CPI, “se le ha ido alimentando de información a la fiscalía, con la idea de que se abra un expediente sobre México; lo mismo ha sucedido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en tanto que con el Estado mexicano nos hemos topado con pared, no ha habido respuesta”.

El reporte de la Clínica de Derechos Humanos, también fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que preside la perredista Angélica de la Peña.

## **“Revelan conexión de la DEA con ataque de Los Zetas en un Holiday Inn de Monterrey”**

**JUAN ALBERTO CEDILLO**

**Proceso**

**22 diciembre 2017**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/516052/revelan-conexion-de-la-dea-con-ataque-de-los-zetas-en-un-holiday-inn-de-monterrey>

MONTERREY, N.L. (apro).- El secuestro de cinco personas en un hotel de esta capital, en abril 2010, y la matanza de Allende, Coahuila, en marzo de 2011, “fueron perpetradas por los Zetas y provocadas por filtraciones de inteligencia que había sido provista (por la DEA) a la UIS (Unidad de Investigaciones Sensibles)”.

La información se desprende de un reportaje difundido en el portal *ProPublica* por la periodista Ginger Thomson, ganadora del Premio Pulitzer.

El 21 de abril de 2010, alrededor de las 2 de la madrugada, una caravana de 15 camionetas con hombres armados arribó al Hotel Holliday Inn ubicado sobre la calle Fray Servando Teresa de Mier, en esta ciudad.

Unos 50 pistoleros encapuchados y vestidos con uniformes similares a los de la Policía Federal tomaron el centro de hospedaje. En pocos minutos registraron los cuartos del quinto piso. En algunos derribaron las puertas para sacar a cuatro huéspedes, tres hombres y una mujer. También se llevaron a un recepcionista.

El convoy se movió una cuadra para registrar otro hotel: el Mission, que también se ubica sobre la calle Padre Mier. De ahí se llevaron a un empleado que posteriormente fue liberado.

Las investigaciones de las autoridades estatales sobre el secuestro no rindieron resultados. Las víctimas desaparecieron.

El hecho quedó en el olvido, hasta que la periodista Ginger Thomson publicó un reportaje en el portal *ProPublica*, con el título: “La conexión de la DEA al ataque del Holiday Inn, que no había sido revelada hasta ahora”.

La desaparición de los cuatro hombres y la mujer derivó de una filtración de los altos mandos de una Unidad Especial de la Policía Federal a Los Zetas, quienes encabezaron el operativo aquella madrugada de 2010.

Thomson describe que los pistoleros zetas en realidad buscaban a cinco policías federales encubiertos que intentaban capturar al jefe de Plaza en esta ciudad.

“Varios miembros de la Unidad de Investigaciones Sensibles (UIS), un equipo de policías federales mexicanos especialmente seleccionados y entrenados por la DEA, se habían hospedado en el hotel. El equipo había estado trabajando de forma encubierta, intentando rastrear los movimientos de un jefe de Los Zetas llamado Héctor Raúl Luna Luna, conocido como ‘El Tori’”.

Uno de los mandos de la UIS filtró al capo Arturo Beltrán Leyva las acciones de la DEA y la UIS, y también les advirtió a Los Zetas, sus socios en esa época.

Cuando ‘El Tori’ supo del operativo en su contra mandó a sus pistoleros al Holiday Inn para acabar con los policías federales. Pero un día antes los agentes habían abandonado el lugar por un “error técnico”.

No fue la única filtración de la UIS que provocó la muerte de inocentes. En junio pasado *ProPublica* y *National Geographic* difundieron una investigación detallada sobre la masacre de Allende, ocurrida en marzo de 2011.

Tanto la matanza en ese municipio de Coahuila, como el secuestro de las cuatro personas en Monterrey, “fueron perpetradas por los Zetas y provocadas por filtraciones de inteligencia que había sido provista (por la DEA) a la UIS”.

La DEA concluyó que uno de los responsables de esas filtraciones fue Iván Reyes Arzate, jefe de supervisores de la UIS, acusado en una corte federal de Chicago “por haber compartido información sensible con narcotraficantes”.

### **Las víctimas**

La madrugada del 21 de abril de 2010, Los Zetas se llevaron a la gente equivocada: un ejecutivo de marketing de una empresa de productos ópticos, un ingeniero químico de una fábrica de cosméticos, un vendedor de zapatos que iba a ser padre por primera vez y una profesora de una universidad de Reynosa, madre de dos hijos.

“Cuando descubrieron su error, Los Zetas intentaron sacar una pequeña ganancia”. Uno de los secuestradores llamó por teléfono al jefe de Luis Miguel González, el ejecutivo de marketing.

La empresa pagó dos rescates, pero la víctima nunca apareció.

“González sólo tenía 35 años cuando fue secuestrado del Holiday Inn. Estaba disfrutando un capítulo feliz de su vida en aquel momento, habiendo terminado un mal matrimonio y comenzado uno bueno. Estaba esperando su primer hijo y le iba bien en la empresa óptica”.

Otro familiar de una de las víctimas del ataque al hotel preguntó:

“¿Por qué no dijo nada la DEA? Con todo su poder y autoridad, ¿por qué no intentaron ayudar? Supongo que las vidas mexicanas no importan”.

El jefe de plaza de Los Zetas, Héctor Lula Luna, no solo recibió información sensible de la Policía Federal, también tenía en su nómina a altos mandos de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León y al menos a 30% de la corporación policiaca estatal.

El Ejército Mexicano los detuvo en junio de 2010. Al filo de las 7 de la mañana de aquel 10 de abril, el Ejército juntó a toda la policía estatal que cuidaba la zona de ‘El Tori’, con el pretexto de una revisión de su armamento.

Después de la captura del narco, la ciudad se paralizó con 40 narcobloqueos en diversas calles y avenidas de la ciudad. El objetivo: detener tres camionetas que trasladaban al detenido a la zona militar.

Para su reportaje, Ginger Thomson habló con agentes de la DEA, bajo la condición del anonimato, sobre las filtraciones de la Policía Federal a los narcotraficantes.

“Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, habría habido todo tipo de indignación, dijo un exagente en referencia al incidente en el Holiday Inn. “Pero en México, siento decirlo, a nadie le importa una mierda”.

**2018**

Noé Zavaleta. “El “superhéroe” Yunes, incapaz ante el crimen en Veracruz”. *Proceso* número 2151, 21 enero 2018. pp. 26-28. <https://www.proceso.com.mx/519945/el-superheroe-yunes-incapaz-ante-el-crimen-en-veracruz>

### **“El “superhéroe” Yunes, incapaz ante el crimen en Veracruz”**

Con cifras delictivas que se cuentan por miles, en particular las relativas a secuestros y asesinatos, Veracruz está hundido en un mar de violencia que solamente los habitantes del estado –sobre todo quienes la padecen en carne propia– reconocen a cabalidad, no así el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, cuyos funcionarios y defensores a ultranza culpan a los medios de comunicación de “magnificar” el problema. Así que para ellos significan muy poco o nada los 2 mil 414 asesinatos cometidos en tan sólo un año de administración yunista, ni los casi 200 casos de secuestro registrados en el mismo periodo. El alcalde de Xalapa lanza incluso un SOS desesperado a la Federación...

XALAPA, Ver. (Proceso).- “Estamos alarmados” y “muy preocupados” por el clima de inseguridad en Xalapa y en la región, admite el alcalde de la capital veracruzana, Hipólito Rodríguez Herrero, cinco días después de las 10 ejecuciones perpetradas aquí –nueve de las personas asesinadas fueron desmembradas y abandonadas en el interior de una camioneta a la entrada a El Tejar, un fraccionamiento residencial–, masacre que las autoridades locales atribuyen a la organización delincriminal conocida como Z-35.

El primer presidente municipal de Morena en gobernar la capital de un estado en el país considera que el gobierno federal debe destinar “más recursos” para seguridad, pero también mantener al Ejército Mexicano y la Gendarmería Nacional no sólo en Xalapa, sino en sus municipios circunvecinos (Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, Actopan), en tanto que cada nuevo ayuntamiento crea y consolida una “policía de proximidad” o “barrial”.

“Necesitamos, con apoyo del gobierno estatal y federal, un proyecto de seguridad regional. Ya se establecieron algunos retenes (con fuerzas federales y estatales), pero Xalapa, tengo entendido, tiene 22 puntos de acceso por donde circulan cosas prohibidas, (como) armas... Si la Federación no dota de recursos y de elementos, tenemos un municipio vulnerable”, expone en entrevista realizada el jueves 18.

Un par de días después de la masacre en El Tejar, en el Servicio Médico Forense (Semefo) familiares de las congregaciones de El Castillo y el Tronconal de Xalapa realizaron la identificación de sus hijos y hermanos; la mitad de ellos eran jóvenes de entre 16 y 19 años. El gobernador, el panista-perredista Miguel Ángel Yunes Linares, aseguró que todos los ejecutados eran integrantes de la banda delincriminal de Los Tigrillos o Los Tiliches, quienes se dedicaban –dijo– al secuestro, la extorsión y el homicidio.

“Quiero dejar en claro que la policía no está para cuidar a delincuentes. Si los delincuentes se meten en actividades delincuenciales, es natural que corran riesgos”. En reiteradas ocasiones, Yunes ha insistido en que únicamente le preocupa la seguridad de “la gente de bien”.

### **Ausencia de gobierno**

Para Lucía Díaz Henao, activista de la organización Solecito y madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, DJ Patas, secuestrado por un comando armado el 28 de julio de 2013 y quien a la fecha no ha sido

localizado, refiere a Proceso que ahora, al igual que en la administración del priista Javier Duarte, hay una “ausencia de gobernador”, toda vez que Yunes Linares figura más bien como el “encargado de campaña de su hijo”, Miguel Yunes Márquez, para auxiliarlo a que gane la gubernatura en el próximo proceso electoral.

“Yunes hoy está reprobado en todos los flancos importantes: el respeto a la vida humana, la libertad, apertura a la democracia. Se incrementaron los secuestros y los homicidios, y no se ve que los culpables sean vinculados a proceso; la delincuencia trabaja a marchas forzadas, mientras el gobernador montó un circo con Duarte y con López Obrador para creerse un súper héroe”, expone Díaz Henao.

Datos oficiales de la actual Fiscalía General del Estado (FGE) indican que con Duarte se abrieron 3 mil 600 carpetas de investigación por desaparición –un gran número de ellas catalogadas como forzadas–; en contraste, en el narcocementerio de Colinas de Santa Fe del Puerto de Veracruz –considerado ya el más grande de Latinoamérica–, han sido hallados hasta hoy casi 300 cráneos y 17 mil restos óseos.

Aun cuando, desde el 3 de diciembre de 2016, el gobierno de Yunes Linares y el titular de la FGE, Jorge Winckler, afirmaron que sería una prioridad lograr la identificación de los cientos de cuerpos hallados en fosas clandestinas, en 13 meses apenas han podido ser identificados y entregados a sus familiares los restos de 30 personas.

Díaz Henao explica que estos magros resultados se deben a la “incompetencia” e “ineptitud” que prevalece en la FGE, mezclada –insiste– con una total impunidad.

“La justificación de Yunes para las víctimas de la violencia es que andaban en malos pasos, criminaliza en cuestión de media hora después de que suceden hechos violentos. Pero nosotros como madres, hermanos, hijos de desaparecidos, vemos que no se está haciendo justicia, en la Fiscalía vemos una discriminación total hacia las víctimas de la violencia con un fiscal (Jorge Winckler) insensible, duro, déspota, torpe y que no tiene empatía alguna con las víctimas y con nuestro dolor”, ataja.

Díaz Henao, quien representa al Colectivo Solecito, que aglutina más de cien expedientes de desapariciones en la entidad, señala que varias de las madres de desaparecidos se sienten “engañadas” y “traicionadas” por el gobierno de Yunes, quien prometió en campaña una real procuración de justicia.

No obstante, puntualiza, “buscando a nuestros hijos tuvimos que bloquear el miedo. Pensamos que después de Duarte no podíamos estar peor, pero el esquema es igual. Yunes se deslinda de todo: ‘andan en malos pasos’, ‘delinquían’, justifica. En Veracruz la realidad supera a la ficción. Vivimos en el terror”.

### **Duras estadísticas**

En 2017, primer año de gestión gubernamental de Yunes, Veracruz se mantuvo a la cabeza como el estado con mayor número de secuestros: 189 reportados por la Unidad del Combate al Secuestro estatal, 93 por la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, así como 61 que consignó la prensa pero que omitieron las autoridades, con un incremento de 462% en comparación con los primeros 11 meses del gobierno de Javier Duarte (2011), expone la organización Alto al Secuestro, la cual destaca que tan sólo durante diciembre último se cometieron 29 secuestros en la entidad, “casi uno por día”.

Acayucan, al sur de Veracruz, posee el récord de ser la ciudad donde más se han incrementado los homicidios a nivel nacional en los últimos 10 años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Proceso 2148).

Esta misma plataforma indica que en el primer año de gobierno de Yunes se han cometido 2 mil 414 asesinatos –de los cuales, según el mandatario, el 70% fueron ejecuciones del crimen organizado– y 178 secuestros, además 20 mil 787 robos de vehículos y a casa-habitación, sin contar las víctimas que han optado por no denunciar debido a las amenazas recibidas o por desconfianza en las autoridades.

El SESNSP no incluye a los presuntos delincuentes “abatidos” por fuerzas policiacas estatales o federales, porque –pretextan las autoridades– no se trata de homicidios.

Esta vorágine delincencial se explica por la batalla territorial que mantienen en las regiones de la Huasteca, Totonacapan, Olmeca, altas montañas e incluso en zonas urbanas células de Los Zetas, del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Los Ántrax, del Cártel de Sinaloa, del Grupo Sombra (FEGS), del Cártel del Golfo y mafias independientes de huachicoleros.

En el sexenio de Duarte, con más de 7 mil homicidios –aunque según políticos yunistas fueron muchos más, pues el gobierno priista “maquillaba cifras” y “le echaban tierrita (sic) a los muertitos”– predominaron los grupos delincuenciales de Gente Nueva, Mata Zetas, Zetas y CJNG.

Aun cuando el estado de violencia y muerte es desolador de norte a sur de Veracruz, y pese a la zozobra y al repudio ciudadanos, en el Congreso local predomina una defensa a ultranza del gobierno de Yunes Linares, a tal punto que, el pasado lunes 15, el exdiputado de Morena Sebastián Arellano –hoy cooptado por la bancada del PAN– se atrevió a declarar lo siguiente en rueda de prensa: “La ciudadanía no se queja de la inseguridad; los que se quejan son los medios de comunicación, magnifican este tipo de hechos. Ya lo dijo el gobernador: es pugna entre cárteles rivales. Yo veo tranquilo el estado, vivo en Coatzacoalcos”.

El corresponsal buscó a políticos del PRI pero declinaron hablar sobre la inseguridad. Uno de ellos, que pidió el anonimato, se limitó a soltar: “No es conveniente declarar sobre seguridad y subirse al ring contra el gobernador”.

En lo que va del gobierno de Yunes Linares también han sido asesinados los ediles de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinosa Tolentino, y de Hidalgotitlán, Santana Cruz Bahena. Por resistirse a un asalto en las inmediaciones de una gasolinera, también fue asesinado el excandidato del PRI a la alcaldía de Tenampa César García, y hace unas semanas fue acribillado el excalde de Colipa Víctor Molina Dorantes.

### **Un hervidero de células delictivas**

En Coatzacoalcos, tierra de asentamiento de Los Zetas, la violencia se recrudeció a raíz de la detención en Cárdenas, Tabasco, del líder regional Hernán Martínez Zavaleta, El Comandante H, el abatimiento de Bernardo Cruz Mota, El Niño Sicario, y de Elías Aguirre Sánchez, El Metro. Sus subordinados mantienen una lucha interna por el control de la plaza, con la consecuente ejecución de varios integrantes.

A través de comunicados oficiales se sabe que fue abatido en Chipilo, Puebla, Ricardo Pacheco Tello, El Quino, jefe de plaza del CJNG en el Golfo de México. Sin embargo, varios de sus sicarios continúan delinquiendo en Veracruz y se han expandido a la región del Sotavento, Cuenca del Papaloapan, zona sur, y en puntos limítrofes de Oaxaca y zonas urbanas del estado de Puebla, según un informe de inteligencia de la PGR.

En los límites de Puebla y Veracruz, fuerzas federales y el gobierno de Yunes continúan con la búsqueda de Roberto de los Santos de Jesús, El Bukanas, quien fuera policía municipal de Maltrata en el sexenio de Duarte y luego convertido en jefe de sicarios de Los Zetas, lugarteniente del narcorrancho San Pedro en Acultzingo, en Veracruz, y hoy líder huachicolero en ambas entidades.

Otro dolor de cabeza del actual gobierno son los integrantes del Grupo Sombra –célula delincriminal adscrita al Cártel del Golfo–, que en la Huasteca veracruzana portan chalecos tácticos con la insignia “FEGS” (Fuerzas Especiales Grupo Sombra), que lo mismo cometen secuestros y ejecuciones y reparten juguetes o cenas navideñas a pobladores de bajos recursos en los municipios de Pánuco, Poza Rica y Tuxpan.

Según el gobernador Yunes Linares, a principios de año se logró la detención de 13 miembros de esa banda. “Sin embargo –dijo–, no podemos cantar victoria y decir que ya está por completo desmantelada”, dijo en entrevista colectiva en Xalapa.

### **Xalapa: SOS**

En Xalapa, el edil Hipólito Rodríguez señala que la capital del estado necesita tres policías por cada mil habitantes, es decir, “mil quinientos policías”; sin embargo, advierte que la creación de una nueva “policía de proximidad” para trabajar en la reducción de delitos requiere de “un gasto fuerte”.

“Estamos hablando de trabajar con 350 policías nuevos en el primer año, que ganando en promedio 15 mil pesos mensuales nos vendrían costando, al erario municipal, 10 millones de pesos... Queremos evitar el daño al tejido social, pero también con la coordinación institucional de fuerzas federales”, insiste.

Para este reportaje, Proceso buscó entrevistar al fiscal Jorge Winckler a través de su jefe de prensa, Conrado Hernández, pero el funcionario mandó el siguiente mensaje: “De momento no daré entrevistas”.

Winckler ha tenido severos roces con la prensa. Desde su cuenta de twitter ha acusado de “vendidos, mentirosos” y “de escribir infamias” a los críticos del actual gobierno; incluso ha bloqueado de dicha red social a una veintena de reporteros veracruzanos.

También se buscó al secretario de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez, y al gobernador Yunes para que expusieran sus estrategias ante el embate de las células criminales, pero el vocero de ambos, Elías Assad, jamás contestó los mensajes ni las llamadas telefónicas del corresponsal.

**“El “Z-43”, presunto líder de Los Zetas, fue capturado en la colonia Roma”**  
**REDACCIÓN**

**Proceso****9 febrero 2018****Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/521941/el-z-43-presunto-lider-de-los-zetas-fue-capturado-en-la-colonia-roma>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El “Z-43”, presunto líder de Los Zetas y uno de los 122 objetivos prioritarios del gobierno federal, fue capturado en la colonia Roma, de la delegación Cuauhtémoc de esta ciudad, donde el gobierno de Miguel Ángel Mancera niega la existencia de cárteles de las drogas y crimen organizado.

Desde 2014, Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, por información que llevara a la captura de “El Z4-3”. De hecho, el capo cuenta con doble nacionalidad: mexicana y estadounidense.

Su captura se suma a una larga lista de capos. La más reciente antes de la del Z-43 fue la de Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos” y presunto líder del Cártel de Tláhuac, en julio del año pasado. Se le relacionaba con la extorsión, secuestros y homicidios en las demarcaciones Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco e Iztapalapa.

Meses antes, el 7 de mayo, elementos de la Sedena y la PGR detuvieron en un operativo en Xochimilco a Benigno Gastélum Sandoval “El Beni” y otras cinco personas que operaban para Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, ligado al Cártel de Sinaloa.

El 2 de mayo, en un departamento ubicado en el edificio Hares en Avenida Ejército Nacional y Bahía de San Hipólito, en la colonia Nueva Anzures, delegación Miguel Hidalgo, fue detenido Dámaso López Nuñez “El Licenciado”, presunto sucesor de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El 21 de febrero la PGR detuvo a Héctor Arenas Saucedo “El Gordo”, del Cártel de Juárez en la colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc. Se encontraba en la lista de los más buscados por la DEA y realizaba la distribución de cocaína hacia Estados Unidos.

Edén Parra López “El Alacrán” fue detenido el 18 de febrero por elementos de la Semar en un domicilio de la calle Nicolás San Juan en la colonia Del Valle, delegación Benito Juárez. La PGR lo ubicaba como jefe de sicarios del Cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco.

El 10 de diciembre de 2016, fue capturado en la colonia Daniel Garza, delegación Miguel Hidalgo, Rubén López Alcalá “El Dina”, ligado con “La Familia” y señalado por el gobierno federal como responsable de la desaparición de dos empleados del SAT en Tlatlaya, Estado de México.

El 14 de marzo cayó en el hipódromo de la Ciudad de México Cleofas Alberto Martínez Gutiérrez, “El Güero”, señalado como el segundo al mando del Cártel del Golfo y responsable de narcobloqueos en Reynosa, Tamaulipas.

El 3 de julio de 2015, en la colonia Roma, fue detenido Martín Villegas Navarrete, uno de los presuntos jefes del Cártel de los Beltrán Leyva que supuestamente se encargaba del trasiego de estupefacientes en el corredor Ciudad de México-Morelos-Guerrero.

El 17 de abril del 2014 fue capturado en la delegación Cuauhtémoc el segundo al mando en la estructura de los Beltrán Leyva, Arnoldo Villa Sánchez, encargado de la distribución de droga en el Pedregal y las colonias Del Valle y Condesa.

En 2013, el 24 de octubre, detuvieron a Manuel Aguirre Galindo, “El Caballo”, uno de los fundadores del Cártel de Tijuana de los hermanos Arrellano Félix. Nunca se reveló el lugar exacto de su detención, pero el gobierno lo señalaba como enlace entre los narcotraficantes colombianos que exportaban la cocaína a México.

En agosto de 2011, fue detenido en la delegación Tlalpan Óscar Osvaldo García, “El Compayito”, líder del grupo delictivo “La Mano con Ojos” quien operó para los hermanos Beltrán Leyva. El gobierno ofrecía por él una recompensa de cinco millones de pesos.

El 14 de junio de 2010, la Policía Federal capturó a Eznél Cortés Jiménez “El Teniente”, lugarteniente de Edgar Valdés “La Barbie”, señalado en su momento como máximo distribuidor de droga en el sur de la Ciudad de México. operaba en la colonia Torres de Padierna, delegación Tlalpan.

El 22 de octubre de 2008, en la colonia Lindavista, en la delegación Gustavo A. Madero, fue detenido Reynaldo Zambada García, “El Rey Zambada” junto con otras 15 personas. La PGR lo señalaba como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, además de ser hermano de Ismael “El Mayo” Zambada.

El 28 de septiembre de 2007, en un Vips de San Jerónimo de la delegación Magdalena Contreras, se realizó la detención de Sandra Ávila Beltrán “La Reina del Pacífico”, quien se encargaba de las relaciones públicas de “El Chapo” Guzmán.

### **La detención del Z-43**

Con la del Z-43 suman más de una docena de detenciones de importantes capos del crimen organizado capturados en esta ciudad, donde el gobierno insiste en negar su operación.

Eso sí, en un comunicado del Gabinete de Seguridad, el gobierno federal señaló que, durante la captura del capo en una de las colonias de mayor plusvalía de la ciudad, “no fue necesario hacer uso de la fuerza” y en todo momento se respetaron sus derechos.

Añadió que la aprehensión de José María fue resultado de trabajos de investigación encabezadas por la Secretaría de Marina Armada de México.

El sujeto, por cuya captura el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, es señalado como presunto responsable del trasiego de droga de Sudamérica hacia ese país y uno de los principales generadores de violencia en los estados del sureste mexicano.

En 1998, abundó el gobierno en un comunicado, el Z-43 realizó actividades vinculadas al tráfico de drogas en Michoacán, en 2001 se extendió al estado de Tamaulipas y en 2003 estableció su centro de operaciones en el municipio de Palenque, Chiapas, donde reclutó a grupos delictivos locales.

En 2005 incursionó en el estado de Veracruz, y a partir de 2007 se le ubicó como responsable de las operaciones de trasiego de droga proveniente de Colombia, ingresada a México vía terrestre por Guatemala. Además, estableció conexiones con otros proveedores en Centro y Sudamérica.

Derivado del control en el sureste del país, en 2013 el imputado expandió sus operaciones al centro de la República, principalmente el estado de Puebla, puntualizó.

En junio de 2015 el gobierno de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano la extradición de José María, quien además cuenta con diversas órdenes de aprehensión en su contra por delitos contra la salud, tráfico de armas, delincuencia organizada, homicidio y secuestro, tanto en México como ese país.

Según el comunicado, con información de inteligencia recabada en varios puntos del país, los elementos federales obtuvieron información para su ubicación y captura en la Ciudad de México, luego de lo cual fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República.

### **“Los tres golpes a Los Zetas en Veracruz”**

**NOÉ ZAVALA**

**Proceso**

**2 marzo 2018**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/524665/los-tres-golpes-los-zetas-en-veracruz>

XALAPA, Ver. (apro).- La detención de José Giraldo García, “El Cubano”, capo de Los Zetas detenido en Cancún, Quintana Roo, representa un golpe a los mandos delincuenciales que operan en el sur de Veracruz y en el norte de Tabasco.

Entre los jefes Zetas se ubicaba a Hernán Martínez Zavaleta, “El Comandante H” –detenido en Cárdenas, Tabasco, en el ocaso de 2017–, más el abatimiento de Elías Aguirre Sánchez, “El Metro”, jefe de “estacas” (espías) en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Ahora, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la PGR enfocan sus baterías en la detención de un jefe de sicarios de Los Zetas de nacionalidad sudamericana (presuntamente chileno), según un documento elaborado por el Agrupamiento Coatzacoalcos de la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, que apunta a “17 objetivos específicos”.

Entre estos últimos, además de “El Cubano”, estarían sicarios –uno de ellos extranjero, “halcones” (espías), secuestradores, huachicoleros, extorsionadores y una mujer encargada de la distribución de estupefacientes en las zonas marginales del sur de la entidad federativa.

“El Cubano”, detenido ayer por la PGR en Cancún, era el máximo jefe del cártel de Los Zetas para toda la zona del sureste mexicano, donde tenía a su control diversas actividades delictivas, según un reporte del gobierno de Veracruz al que Apro tuvo acceso.

El historial de García Carmenate indica que es buscado por diversos delitos, pero sobre todo delincuencia organizada, así como robo de gasolina, tráfico de personas y narcomenudeo, y sería uno de los principales generadores de violencia en el sur de Veracruz.

Dentro de la estructura criminal, de acuerdo con una ficha integrada por la SSP, “El Cubano” tenía más o igual peso de mando que Hernán Martínez Zavaleta, “El Comandante H”, dentro de la organización delictiva Los Zetas.

El gobierno de Veracruz tiene identificadas a 17 personas clave que operan en el diezmado cártel, de las cuales la más importante es un jefe de plaza de origen extranjero, cuya captura está catalogada como prioritaria, de acuerdo con el documento *Estructura delictiva en Coahuila de Zaragoza*, realizado por el Agrupamiento Coahuila de la SSP.

### **Lucha intestina**

Hoy Coahuila de Zaragoza es una tierra de asentamiento de Los Zetas, donde la violencia recrudeció a raíz de la detención en Tuxtepec, Oaxaca, de “El Comandante H”, así como el abatimiento de Bernardo Cruz Mota “El Niño Sicario” y de Elías Aguirre Sánchez “El Metro”, razón por la cual sus subordinados libran una lucha interna por el control de la plaza, lo que también ha dejado decenas de ejecutados sólo en ese puerto.

A inicio de este año, el 6 de enero, el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció la entrada de la Policía Militar –brazo castrense enfocado a la batalla contra la delincuencia organizada– a los municipios de Coahuila de Zaragoza y Minatitlán.

En Toluca, el sábado 13 de enero se vivió una noche de terror, luego de que en una camioneta sicarios de la Z-35 (Zetas vieja escuela) dejaron desmembrados nueve cuerpos en la cajuela y en las dos filas de asientos del vehículo.

También dejaron tres narcomensajes de amenazas al secretario de Seguridad Pública (SSP), Jaime Téllez, y a su director de operaciones, Gerardo Guzmán, a quien responsabilizaban “de no respetar los acuerdos”.

La amenaza en los tres mensajes era la misma: “Más unidos que nunca, la raza (*sic*) se respeta”. Por la mañana, del día 13, un hombre que había sido privado de su libertad en la colonia Laureles fue ejecutado de 14 balazos frente a la sede del Poder Judicial del Estado.

En Veracruz, el dolor de cabeza del gobierno de Yunes Linares en sus primeros trece meses de gestión ha sido la inseguridad, rubro que en campaña el propio mandatario prometió apaciguar en seis meses.

De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se han cometido 2 mil 414 homicidios dolosos –según Yunes, 70% de ellos se trata de sicarios del crimen organizado y trabajadores de la delincuencia– y 178 secuestros.

### **“Pancho” Colorado, pieza clave en la aventura empresarial de “El Lazca”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**12 marzo 2018**

**Consultada 12 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/525760/pancho-colorado-pieza-clave-en-la-aventura-empresarial-de-el-lazca>

NUEVO LAREDO, Tams. (apro).- En abril de 2013, en un juicio celebrado en la ciudad de Austin, Texas, el capo zeta Enrique Rejón Aguilar declaró que Heriberto Lazcano Lazcano entregó la mitad de su fortuna a Francisco “Pancho” Colorado Cessa, el empresario veracruzano que cumplía una sentencia de 20 años de prisión en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, por lavado de dinero, y murió la mañana de este domingo de un infarto fulminante.

Según el declarante, la idea de Lazcano era que “Pancho” invirtiera ese dinero en ADT Petroservicios, porque tenía la ilusión de convertirse en un empresario con negocios legales.

En 2013, Rejón Aguilar, “Mamito”, testificó a favor de la Fiscalía en el juicio donde se acusó de lavado de dinero a “Pancho” Colorado y a José Treviño Morales, hermano mayor de los capos zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z40” y “Z42”, respectivamente.

Según ese testimonio, a partir de 2009 –después de cinco años de exitosa expansión– Los Zetas se convirtieron en el cártel más poderoso de México.

Desde ese año ya actuaban al margen del Cártel del Golfo (CDG). Sus líderes –Heriberto Lazcano, Miguel Ángel Treviño “Z40” y Enrique Rejón Aguilar– se reunían casi a diario y estrecharon su amistad, pese a tener personalidades contrastantes.

Meses antes, los líderes zetas conocieron en el municipio de Miguel Alemán al empresario veracruzano Francisco Colorado. Se los presentó Efraín Torres, el jefe de la plaza de Veracruz, compadre de “Pancho”.

De acuerdo con “Mamito”, Torres y “Pancho” organizaban cotidianas carreras de potros cuarto de milla, con apuestas cuyo límite era de un millón de dólares.

Tales competencias fueron suspendidas porque en una de ellas, que se realizaba en la comunidad de Villarín, Veracruz, pistoleros del CDG intentaron ejecutar a Efraín Torres, también conocido como “Z14”. Las carreras se trasladaron a los Futurity de Morelos, municipio del norte de Coahuila.

Los líderes zetas también se relacionaron con Alejandro Barradas Lagunes, otro importante hombre de negocios de Veracruz y propietario de la agencia aduanal Grupo Aduanero Integral. Sus empresas – particularmente una casa de cambio que poseía en la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León– eran utilizadas por la organización criminal para lavar dinero.

Gracias a “Pancho” Colorado, concesionario de Petróleos Mexicanos (Pemex), Heriberto Lazcano, los hermanos Treviño Morales y Enrique Rejón Aguilar se transformaron en empresarios de la industria de las carreras de caballos.

Ante los fiscales, “Mamito” confesó que decidieron invertir su fortuna en la compra de equinos cuartos de milla tanto en México como en Estados Unidos, y Colorado Cessa era el intermediario para ese negocio. Cada mes los barones zetas le entregaban en efectivo un millón de dólares para comprar los animales, y el empresario los pagaba a través de su negocio: ADT Petroservicios.

Otros potreros cuarto de milla fueron adquiridos por Grupo Aduanero, sin embargo, esa relación pronto terminó, ya que Barradas Lagunes intentó traicionar a aquellos para quedarse con su dinero, por lo que fue asesinado por órdenes de Miguel Ángel Treviño Morales.

Mientras, Heriberto Lazcano fue seducido por el mundo empresarial donde se movía “Pancho”. “Decidió entregar la mitad de su fortuna a Colorado Cessa para que la invirtiera en su empresa ADT Petroservicios”, señaló Enrique Rejón ante el jurado.

De esa manera se convirtió en accionista de Petroservicios y comenzó a incrementar su fortuna gracias a los jugosos contratos que Pemex le ofrecía al empresario veracruzano.

Los caballos cuarto de milla que compraron los narcotraficantes en Estados Unidos los administraba José Treviño Morales, hermano mayor de “Z40” y “Z42”, junto con su esposa Zulema, a través de una empresa que habían creado con ese propósito: Tremor Enterprises, que operaba un extenso rancho en la ciudad de Oklahoma, donde llegaron a manejar unos 300 caballos y yeguas que fueron adquiridos en un periodo de dos años.

En los albores de 2010, los tres líderes zetas se fueron a radicar al norte de Coahuila, y para operar sin restricciones invirtieron varios millones de dólares para comprar a autoridades militares, así como de la Policía Federal y funcionarios estatales, principalmente de la Fiscalía que encabezaba Jesús Torres Charles.

Los hermanos Treviño Morales compraron casa en Allende, Coahuila, y Heriberto Lazcano se fue a Monclova, desde donde comenzó a acaparar minas y tajos, así como “pocitos” de carbón.

Su intención era convertirse en empresario minero y vender carbón a la planta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en el municipio de Nava, a través de un Fideicomiso que había creado el gobierno de Coahuila para que las minas informales, conocidas como “pocitos”, pudieran vender legalmente a la empresa productiva del Estado.

Debido a sus sueños de ser empresario, prácticamente abandonó la dirección de Los Zetas y se la cedió a Miguel Ángel Treviño y a Mamito.

La aventura empresarial de Heriberto Lazcano se frustró cuando “Z40” filtró a la Marina que el capo zeta acudiría a observar un partido de béisbol en un polvoriento campo deportivo ubicado a las afueras del poblado de Progreso, Coahuila.

### **“Juzgan hoy en Texas a “Kiko” Treviño, último líder de los Zetas”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**16 julio 2018**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/543102/juzgan-hoy-en-texas-a-kiko-trevino-ultimo-lider-de-los-zetas>

NUEVO LAREDO, Tamps. (apro).- Juan Francisco Treviño Chávez Jr., Kiko, el último capo de los Zetas quien lo renombró Cartel del Noreste (CDN), será juzgado en Texas este lunes por siete cargos,

“incluyendo cinco que van de 10 años de prisión a cadena perpetua”, informó el diario texano San Antonio Express News.

Kiko Treviño, de 38 años de edad, es sobrino del exjefe de los Zetas Miguel Ángel Treviño Morales, Z40, y fue capturado en Houston por la DEA en septiembre del 2016.

Juan Francisco Treviño también fue arrestado en Monterrey en el año 2012 y pasó un breve tiempo en México, pero un juez lo liberó de los cargos de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Kiko Treviño fue enviado por su tío Z40 como jefe de plaza para Monterrey después de que todos los mandos de los Zetas fueron capturados tras el atentado al Casino Royale.

Posterior a la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, en julio del 2013, su hermano Omar Treviño, Z42, tomó el control del grupo, pero un año después abandonó a los Zetas para disfrutar su inmensa fortuna en Monterrey y “heredó” la dirección a su sobrino.

“Se prevé que algunos de los miembros originales de los Zetas testifiquen sobre cómo Kiko Treviño ayudó a los Zetas a controlar grandes franjas de los estados norteros de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que limitan con Texas, desde su base de Nuevo Laredo”, precisó la nota del San Antonio Express News.

El cártel utilizó la carretera interestatal 35 como un corredor hacia los puntos norte con destino a Dallas, a veces dejando cargamentos de drogas en San Antonio u otras ciudades a lo largo del camino, añadió la nota.

El agente retirado del FBI Arturo Fontes, quien investigó a la familia Treviño, contó al diario que Kiko Treviño desarrolló una adicción a la cocaína y otras drogas que alimentaron su volatilidad, al punto que incluso su tío Miguel Ángel Treviño hizo que lo encerraran en una casa como castigo.

“Tiene muy mal genio, tiene una personalidad psicopática, es narcisista y depende de las drogas. Él fluctúa de ser normal a ser muy violento. Teníamos información sobre él dirigiendo el cártel por un corto tiempo, y estando involucrado en varios asesinatos en ambos lados de la frontera de personas que eran inocentes”, refirió el diario texano.

Una de las personas inocentes que asesinó Kiko Treviño fue una bailarina de un “Table Dance” de Nuevo Laredo quien rechazó terminar la noche en la cama del capo.

Ante la negativa, el jefe Zeta sacó su arma y la mató. Posteriormente amenazó a todos los clientes y empleados del negocio. Les ordenó que lo abandonaran y acto seguido lo incendió, con el cuerpo de la mujer en su interior.

## **“Detienen al “Stich”, jefe de plaza de Los Zetas, en Orizaba”**

**Noé Zavaleta**

**Proceso**

**12 octubre 2018**

**Consultada 12 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/555178/detienen-al-stich-jefe-de-plaza-de-los-zetas-en-orizaba>

XALAPA, Ver.- (apro).-Emanuel Martínez, “El Stich”, jefe de plaza del cártel de Los Zetas, en la zona centro de Veracruz fue detenido en las céntricas calles de la ciudad de Orizaba en compañía de siete de sus lugartenientes durante la mañana de este viernes.

Cinco hombres y tres mujeres fueron detenidos, luego de un fuerte operativo coordinado con la Secretaría de Marina Armada de México, Seguridad Pública de Veracruz, Ejército Mexicano, Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General de Veracruz y Policía Municipal de Orizaba.

Emanuel Martínez, es señalado como jefe de plaza de Los Zetas en Orizaba y operaba en Ixhuatlancillo, Río Blanco, Ixtaczoquitlán, Rafael Delgado, entre otros municipios de “las altas montañas”, cometiendo diversos delitos principalmente extorsión y secuestro.

Extraoficialmente se sabe que “El Stich” también cometía actividades ilícitas en el estado de Puebla.

La célula completa de “El Stich” fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Veracruz.

En esta región central de Veracruz opera la organización delincriminal de Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Sangre Nueva Zeta, esta última especialista en el robo de hidrocarburos.

**“Asesinan al “Z-12”, uno de los fundadores del Cártel de Los Zetas”.**

**Redacción**

**Proceso**

**19 noviembre 2018**

**Consultada 12 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/560290/asesinan-al-z-12-uno-de-los-fundadores-del-cartel-de-los-zetas>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Luis Reyes Enríquez, alias “El Rex” o el “Z-12” y considerado uno de los fundadores del Cártel de Los Zetas, fue asesinado el domingo en el penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Autoridades confirmaron este lunes el “Z-12” fue apuñalado con armas punzocortantes el mismo fin de semana que fue trasladado a ese penal.

Reyes Enríquez estaba preso desde 2015 en el penal federal de Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca.

Tras cumplir su condena y antes de ser liberado, se ejecutó una orden de aprehensión pendiente en Tamaulipas, por lo que fue trasladado a Nuevo Laredo, según el diario *El Mañana*, de Reynosa.

El “Z-12” es considerado uno de los fundadores del cártel de Los Zetas, cuando esa agrupación se separó del Cártel del Golfo.

En su juventud formó parte del Ejército Mexicano, de donde solicitó su baja para integrarse a las filas de Los Zetas cuando era brazo armado del Cártel del Golfo.

En esa organización llegó a escalar hasta convertirse en uno de los hombres más cercanos al exlíder del cártel, Osiel Cárdenas Guillén, actualmente preso en Estados Unidos.

El “Z-12” era el encargado de dirigir las operaciones del Cártel del Golfo en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo, México, Distrito Federal, Querétaro y Durango.

**2019**

**“Superdelegado de Coahuila reclama al SAT por nombrar a exfiscal acusado de proteger a Los Zetas”**

**JUAN ALBERTO CEDILLO**

**Proceso**

**21 febrero 2019**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/572684/superdelegado-de-coahuila-reclama-al-sat-por-nombrar-a-exfiscal-acusado-de-proteger-a-los-zetas>

SALTILLO, Coahuila (apro).– Es alarmante que un “personaje corrupto” como Jesús Torres Charles, exfiscal general de Coahuila acusado de recibir 300 mil pesos mensuales para proteger a Los Zetas, sea nombrado administrador de Investigación Aduanera del gobierno federal, denunció este jueves Reyes Flores Hurtado, delegado federal en Coahuila.

En una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Fajart, el “súper delegado” hace un recuento de los antecedentes de Torres Charles, y destaca las acusaciones de soborno que se documentaron durante un juicio celebrado en San Antonio, Texas, en julio del 2016.

“Estimada directora Margarita Ríos-Farjat, con indignación nos enteramos por diversos medios de comunicación, nacionales y locales, que el exfiscal de Coahuila, señalado e investigado por dar protección al cártel de Los Zetas durante el sexenio de (el gobernador) Humberto Moreira Valdés, Jesús Torres Charles, es el nuevo Administrador Central de Investigación Aduanera”, escribe del delegado federal.

“La delegación del gobierno federal en Coahuila condena enérgicamente esta situación, ya que este personaje cuenta con un negro historial en nuestro estado en materia de seguridad y además fue acusado, junto con su hermano, de recibir 300 mil pesos mensuales para dar protección a Los Zetas”, agrega la carta.

La misiva enfatiza que Torres Charles era el fiscal general cuando el cártel de Los Zetas desapareció a alrededor de 300 personas en Allende y Nava, Coahuila, algunas de las cuales fueron ingresadas al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde las torturaron y asesinaron.

“Lo cual tiene relevancia si consideramos que los penales en ese entonces eran responsabilidad del fiscal, cargo que recaía en el señalado Torres Charles”, señala el texto de Reyes Flores.

Agrega que el juicio celebrado en San Antonio, Texas, contra el capo de Los Zetas, Marciano Millán, el entonces fiscal fue señalado por testigos de permitir que los delincuentes operaran desde los penales.

Meses después de que ocurrió la Masacre de Allende, Torres Charles se justificó señalando que la Fiscalía que encabezó no actuó debido a que se trataba de “asuntos del crimen organizado y, por lo tanto, no era de su competencia”.

Reyes Flores cuenta que, cuando Coahuila vivía una de sus peores crisis de seguridad por el control del narcotráfico, Rubén Moreira Valdez “rescató” a Torres Charles nombrándolo, en diciembre del 2011, asesor jurídico del Ejecutivo.

Jesús Torres Charles tuvo que renunciar a su cargo cuando su hermano fue detenido en febrero del 2012 por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Además, agrega la carta, durante su etapa como fiscal general no hizo nada para investigar la deuda ilegal contratada por Humberto Moreira, en la que incluso se firmaron contratos respaldados con documentos falsos.

“En el tema citado, Torres Charles representa a uno de los principales protectores de la red de corrupción que saqueó a Coahuila”, añade la carta enviada al presidente.

“Es verdaderamente alarmante que nombren a un personaje tan polémico y tan adentrado en temas de corrupción. Como debe saber, Torres Charles era incondicional de Humberto y Rubén Moreira en la etapa más oscura de la que se tenga registro en nuestra entidad”.

A la directora del SAT, Reyes Flores Hurtado le señala que colocar en aduanas a una persona acusada de dar protección a cárteles de la droga en Coahuila, representa un contrasentido y traición al compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cero tolerancia a la corrupción.

“A nombre de todos los coahuilenses que sufrimos por la ambición desmedida de personajes como Torres Charles y sus patrones, le pedimos destituir inmediatamente a este sujeto, que mancha y desprestigia a esta nueva admiración”, concluye la carta.

### **Titular de la Sedena también es señalado**

Otro personaje señalado por encubrir a Los Zetas en Coahuila es el general Luis Crescencio Sandoval, actual titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El general fue jefe de la Guarnición de Piedras Negras cuando Los Zetas usaron la prisión de esa ciudad fronteriza para asesinar a 150 personas y en su período también se cometió la masacre de Allende, la cual fue ocultada durante casi dos años por las autoridades.

### **““El Mono Muñoz”, lavador de los Zetas, “cazado” por una joven”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**10 marzo 2019**

**Consultado 4 de diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/574746/el-mono-munoz-lavador-de-los-zetas-cazado-por-una-joven>

SALTILLO, Coah., (proceso.com.mx). – “Esa misma noche me vestí para matar... Me puse unos pantalones negros de piel con un top negro que dejaba ver mi abdomen plano, no por el ejercicio, la vida que llevaba me estaba matando. Iría a la discoteca de moda y me ligaría al dueño, del que se rumoraba era un narcotraficante, si lo lograba, mis problemas acabarían pues por un lado, tendría barra libre de

drogas y por otro nadie se atrevería meterse con la novia de un narco”, narra Cristy en su libro autobiográfico donde describe su paso por “un mundo de profunda fatalidad al que sobrevivió”.

El libro se publicó en Coahuila con el título “Cristy no sabía amarme” y es una edición particular de la autora, actualmente Licenciada en Psicología de quien reservamos su nombre por cuestiones de seguridad.

Cristy cuenta que se tardó una hora en arreglarse para cazar a su presa. “Cuando estuve lista me dirigí al antro”, el Bar Joy, ubicado en la capital de Coahuila.

“Al llegar me fui directo a la barra, pedí un vodka tonic y me metí al baño a echarme unas líneas. Cuando salí observé el lugar y lo ubiqué a él, o sea, al capo. Estaba sentado en el segundo piso con sus amigos, así que terminé mi trago y me subí en una bocina que estaba junto a su mesa”.

Cristy, en esa época una joven preparatoriana en una escuela privada, añade que se puso a bailar para tratar de seducir al famoso narcotraficante.

Su sensual baile rindió el fruto esperado ya que uno de los “escoltas” del capo la llamó para decirle que “el señor” la invitaba a su mesa.

“Sin pensarlo me dirigí a donde estaba y me senté a su lado. Lo primero que se me ocurrió decirle fue, ‘¡Qué bárbaro pareces mi papá!’. Todos los que estaban ahí me lanzaron miradas agresivas y fulminantes, literalmente uno de sus trabajadores me pisó para que me callara”, escribe en el libro.

No obstante, al capo le pareció gracioso que le dijera “esas verdades en su cara y mostrando la frescura con la que lo hice”, así que el narco se rió y el ambiente de tensión se despresurizó.

“Esa noche la pasé muy bien con él y con sus cuates y mis problemas para conseguir drogas terminaron”.

## **LOS INICIOS DEL CAPO**

La presa que Cristy cazó esa noche, por una breve temporada, se llama Juan Manuel Muñoz Luévano alias el “Mono Muñoz”, actualmente preso en los Estados Unidos en donde espera la fecha para que inicie su juicio en la Corte Federal de San Antonio, por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros.

Los antecedentes del “Mono Muñoz” como narcomenudista se remontan a finales de los años sesenta cuando estudió para ingeniero agrónomo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Su amigos de su generación confesaron que cuando “era chavo vendía mota” en el campus Buenavista.

Al terminar su carrera universitaria desapareció de Coahuila y se asentó en Sinaloa donde incursionó en el floreciente negocio del tráfico de narcóticos.

Para los albores del Siglo 21, la DEA lo ubicó traficando grandes cantidades de cocaína a través de la frontera de Tamaulipas.

En esa época, la Agencia Antinarcóticos lo consideró “un Barón de la droga” que le hacía competencia al “Chapo” Guzmán por las grandes cantidades que traficaba.

Para cruzarla por los recónditos sitios del Río Bravo pagaba piso a Osiel Cárdenas, en ese tiempo el líder máximo del CDG.

Fuentes de la Fiscalía de la Laguna que lo investigaron contaron a Proceso que en una ocasión Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”, lo capturó y lo torturó debido a que desconocía el acuerdo con Osiel, hasta que llegó Heriberto Lazcano quien ordenó que lo soltaran.

Regresó a Coahuila entre 2002 y 2003 con una fortuna y para el año siguiente empezó a crecer en los negocios con bares, restaurantes, franquicias pero sobre todo con una veintena de gasolineras.

“Era a finales del sexenio de Enrique Martínez y Martínez. Solía juntarse con funcionarios como Daniel Garza Ortiz de Montellano, que era el secretario particular del gobernador”, cuenta uno de sus conocidos quien habló con Proceso bajo el anonimato.

“También con un comandante de nombre Gaspar Ramos Sánchez alias “La Barbie”, que a pesar de no tener un cargo elevado en la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, era muy cercano al titular, Antonio Garza García y muy influyente”, agregó.

“Había varios juniors que se juntaban con Gaspar y el “Mono” en el Bar Carlos & Charlies que con el tiempo compraron los Zetas”.

La bonanza del “Mono”, originario del municipio lagunero de Matamoros, era comentada entre sus conocidos porque anteriormente no se le conoció fortuna.

Durante la administración de Humberto Moreira el “Mono Muñoz” se relacionó estrechamente con Vicente Chaires, secretario particular del gobernador Moreira.

“Pronto Chaires empezó a dejarse ver con mucho dinero y fue acusado de comprar radiodifusoras y otros negocios inmobiliarios inexplicables y por ese escándalo renunció como administrador del CEN del PRI”, describió el entrevistado.

Durante la administración de Rubén Moreira, Muñoz Luévano se asoció con Gerardo Garza Melo en una gasolinera ubicada en el centro de Saltillo.

Garza Melo fue secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial en el gabinete de Rubén Moreira hasta que el “Mono Muñoz” fue detenido en España. Tras esa captura la Secretaría fue desaparecida.

### **“MONO”, LAVADOR DE LOS ZETAS**

Documentos de la Corte de Texas del Caso 5:15-cr 00024-DAE, ubican a Manuel Muñoz Luevano, también apodado “el Ingeniero”, como Barón de las Drogas desde 1999.

Cuando los Zetas se expandieron a Coahuila, a finales del año 2004 buscaron al “Ingeniero” para que se asociara con ellos. Así se convirtió en “lavador de dinero”, distribuidor de gasolina robada en sus estaciones y en el principal enlace entre la élite Zeta y funcionarios de la Fiscalía de los gobiernos de los hermanos Moreira y de Jorge Torres López.

Gracias a los sobornos que pagaron los líderes Zetas, Heriberto Lazcano y los hermanos Treviño Morales se fueron a radicar al municipio de Allende y en el norte del estado.

Convirtieron a la ciudad fronteriza de Piedras Negras en su principal punto para cruzar unas 40 toneladas de cocaína por año y desde ahí controlaron al estado.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene documentado que para lavar el dinero de los Zetas, Manuel Muñoz Luevano tuvo como cómplice al empresario Roberto Casimiro González, dueño de la cadena de Televisión (RCG), a quien el gobernador Humberto Moreira entregó contratos millonarios.

El 20 de noviembre del 2016, al filo 11:00 horas, agentes de la SEIDO catearon la residencia ubicada en la avenida José Narro Robles 436, en el sector de Los Rodríguez, propiedad de Casimiro González Treviño.

### **LA HUIDA DEL “MONO”**

La Procuraduría General de la República también tiene entre sus archivos investigaciones sobre actividades ilícitas de Mono Muñoz desde junio del 2012, cuando detuvieron a dos personas en el Distrito Federal con dos millones de pesos en efectivo.

Uno de ellos fue Ricardo Fuyivara Romero gerente de la franquicia “Papas Grill” en Saltillo propiedad de Muñoz Luévano, quien también es su prestanombre en gasolineras.

Los negocios de Fuyivara aparecen en el padrón de proveedores para el gobierno de Coahuila.

De las declaraciones que los dos detenidos rindieron en la PGR se abrió una carpeta de investigación y durante casi todo 2012 las gasolineras del “Mono” estuvieron custodiadas por el Ejército, mientras que la Unidad de Delitos Financieros le revisaban las cuentas en todos sus negocios.

No obstante, los hechos que lo obligaron a radicar en España fueron los atentados contra sus amigos. El primero sucedió el 16 de febrero de 2006, cuando el comandante Gaspar, fue acribillado después de salir del Bar Joy. Gaspar quedó en silla de ruedas, regresó a trabajo de escritorio y luego lo desaparecieron.

Años después otro amigo cercano al Mono Muñoz sufrió un atentado en Torreón. Tras de ese asesinato el capo lavador de los Zetas decidió huir a España.

Para esa época el Cartel del Golfo y el de Sinaloa mantenían una ofensiva contra los Zetas en la Laguna y como parte de esa cruenta narcoguerra seis estaciones de gasolina de su propiedad fueron quemadas. Antes de viajar a Madrid le propuso a la jovencita Cristy que se fuera con él.

“El señor me había propuesto ir vivir con él a Europa y a estas alturas del partido era lo único que me quedaba, aceptaría la propuesta aunque en el fondo tenía miedo, sabía que yo sólo era su juguete nuevo y lo más seguro después de un tiempo se aburriría de mí y yo terminaría prostituyéndome en cualquier antro”, narra Cristy en su libro.

Cristy finalmente declinó la propuesta y cuando Juan Manuel Muñoz ya radicaba en España los fiscales federales de Estados Unidos que lo investigaban tendieron sus redes.

Conocían que en México tenía protección del gobierno de Coahuila pero en España solicitaron a la Unidad Económica y Fiscal de la Policía que le interceptara todas sus llamadas.

## **“El interminable trabajo en la narcofosa de Río Blanco, un “campo de exterminio” de Los Zetas”**

**Noé Zavaleta**

**Proceso**

**14 marzo 2019**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/575371/el-interminable-trabajo-en-la-narcofosa-de-rio-blanco-un-campo-de-extermino-de-los-zetas>

RÍO BLANCO, Ver. (apro).- Es como una jornada laboral, día a día, desde que sale el sol y previo al atardecer.

Medio centenar de personas del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba; la Agencia de Investigación Criminal (AIC); la Fiscalía General de la República (FGR); policías estatales, ministeriales y peritos de la Fiscalía estatal suben-escalan medio kilómetro del cerro de Río Blanco, en la colonia Venustiano Carranza.

Allí, continúan con la exhumación de fosas clandestinas hechas por la célula delincuencia de Los Zetas.

El corte pericial al día de hoy indica la exhumación de 12 cuerpos, dos de ellos sacados este jueves.

Del total, 11 aún tienen tejido adherido al hueso, lo cual indica una temporalidad de mortalidad de entre 7 y 10 años atrás, es decir, en el período 2009-2012, la etapa inicial del sexenio del priista Javier Duarte (2010-2016) y la época de terror de Los Zetas en esta región montañosa de Veracruz.

Con binomios caninos, trajes de bioseguridad, machetes, palas, picos, cubrebocas, guantes, repelente de insectos y protector solar, la brigada mixta que exhuma cuerpos desde la semana anterior sube el cerro, entre piedras rocosas, árboles frondosos y caminos sinuosos, para continuar los trabajos en cuatro cuadrantes de 20 x 20 metros.

“El trabajo parece interminable. Tenemos puntos marcados aquí, pero también del otro lado en Los Sótanos (otra congregación de Río Blanco), en donde tenemos la certeza que también criminales enterraron a nuestros desaparecidos”, externa Araceli Salcedo, vocera del colectivo Familias de Desaparecidos Córdoba-Orizaba, quien desde septiembre del 2012 busca a su hija, Fernanda Rubí Salcedo, “levantada” por un comando en una discoteca de Orizaba.

La forma de dar con este narcocementerio fue similar al de Colinas de Santa Fe, con el colectivo Solecito; el año pasado, un grupo criminal abordó, de forma breve, al colectivo de Córdoba-Orizaba en la alameda del Pueblo Mágico, cuando los activistas vendían dulces para recaudar fondos para sus búsquedas.

“Nos entregaron un croquis señalándonos el punto donde sólo nos decían que había fosas en esta región”, explica Salcedo.

De los 12 exhumados, hay una característica peculiar: ninguno tenía alguna identificación oficial (INE o licencia de manejo o credencial laboral) y ninguno tenía calzado. Una de las osamentas “parece ser del sexo femenino”.

Los primeros cuerpos de este “campo de exterminio” -como lo llama Salcedo- fueron exhumados entre enero y febrero de 2018 -pasaron desapercibidos para la opinión pública, apenas medios locales dieron cuenta de ellos-.

En esta semana han sido extraídos seis cuerpos más.

Ya hay trabajo programado en la montaña para lo que resta del mes. Ante la negativa del gobierno del morenista Cuitláhuac García de enviarles apoyo, el ayuntamiento de Río Blanco los socorre con una comida general y dos garrafones de agua diarios para el medio centenar de personas.

Córdoba-Orizaba, un agujero negro de los jóvenes

Este jueves, el Mundo de Córdoba -el periódico más influyente de la región- publicó en portada el hallazgo, día con día, de restos humanos, por ello, el teléfono celular de Araceli Salcedo recibió 27 llamadas este día de familiares de desaparecidos.

En el control estadístico de las llamadas, y con la lista que elaboró Salcedo, 24 desaparecidos eran hombres y mujeres de entre 17 y 23 años. Los 3 restantes son adultos desaparecidos que sobrepasan los 30 años.

El dato escalofriante y crudo es que de los 27 casos, apenas cuatro familiares tienen puesta una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por la ausencia de su familiar.

Las causales para no poner la querrela son las de siempre: intimidación de fuerzas policíacas; miedo de represalias por el crimen organizado -este corredor montañoso e industrial fue famoso por los ilícitos de capos de Los Zetas, como “El Felino”, “El Duende”, “El Chilango”, “El Picoreta”, “El Puchini”, “El Chichi”, entre otros- y por el desconocimiento y temor de salir ante la prensa y entrar en un estigma social.

### **Desilusionados del gobernador**

De nada sirvió declarar “crisis humanitaria” a Veracruz en el tema de desaparecidos en el primer día del nuevo gobierno, si en campaña se prometieron 400 millones de pesos “canalizados” a instituciones de búsqueda en Veracruz, pero en la realidad y en el presupuesto autorizado por el Congreso local apenas se autorizaron más de 120 millones de pesos, reprochan familiares de este colectivo de desaparecidos.

Es apenas una tercera parte de lo que prometió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y en contraste, la ley de egresos contempló 700 millones de pesos para compensaciones de la alta y media burocracia para el ejercicio 2019.

“No puedes declarar como gobernador crisis humanitaria a un estado y en el presupuesto y en la realidad no atender esa crisis. Ese presupuesto no sirve para atender el rezago de la búsqueda en vida, ni tampoco concluir el trabajo en fosas, estamos muy lejos de lo que se había prometido”, reprocha Salcedo.

Al bajar del cerro, con el cansancio físico reflejado en el rostro, y con el bronceado del sol brazante de montaña marcado en el rostro, la activista expone que al día de hoy hay “diversas carencias” en el equipo de servicios periciales, varias patrullas ocupadas al resguardo de buscadores con motores y baterías en franco desuso, con un rezago de cientos de restos humanos sin identificar en casi 60 fosas en todo el estado en los últimos diez años.

“Nos hacen falta antropólogos, odontólogos forenses, arqueólogos, criminólogos, gente de fotocrimen y videocrimen, entre muchas otras carencias para garantizar resultados”, dijo.

Salcedo pone el ejemplo que en la región Córdoba-Orizaba apenas se cuenta con cinco policías ministeriales para investigación -incluyendo fosas clandestinas- con lo cual es insuficiente abatir el rezago de desaparecidos, si a su vez, esta misma cuadrilla pericial también atiende otros delitos como secuestros y homicidios de alto impacto.

El Colectivo Familiares de Desaparecidos Córdoba-Orizaba recrimina que en 100 días del nuevo gobierno no se ha documentado un solo caso de “identificado” en las fosas clandestinas de Veracruz.

En el gobierno de Duarte hubo una completa cerrazón a dar esa información; en el bienio de Yunes - cuyo Congreso local entregó la medalla Ruiz Cortines a familiares de desaparecidos- se logró, al menos, la identificación de 50 cuerpos, 18 de ellos, pertenecientes a la región Córdoba-Orizaba.

Según cifras oficiales de la FGE se han abierto en los últimos ocho años cuatro mil carpetas de investigación por desaparición de personas, en contraste, hay casi mil osamentas sin identificar en planchas del forense y en fosas comunes de los panteones municipales de Veracruz.

### **“Detienen en Jalisco a líder de Los Zetas Vieja Escuela”**

**PATRICIA DÁVILA**

**Proceso**

**9 abril 2019**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/578922/detienen-en-jalisco-a-lider-de-los-zetas-vieja-escuela>

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- José Roberto Stolberg Becerra, líder de la organización delictiva Los Zetas Vieja Escuela y uno de los más buscados en Tamaulipas, fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Stolberg Becerra es señalado por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa, confirmó la fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con un comunicado emitido por la FGR, la Procuraduría General de Justicia de ese estado había ofrecido una recompensa de un millón 500 mil pesos para quien ayudara a localizar y detener al implicado.

Policías Federales Ministeriales (PFM), encabezados por el Ministerio Público Federal, especializado en investigación de delitos federales, ejecutaron una orden de cateo en el municipio jalisciense, autorizada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Jalisco.

El personal de la FGR aseguró también un paquete y dosis con polvo blanco con características de la cocaína; sustancia cristalina con características del narcótico conocido como cristal, y bolsas con marihuana.

Desde 2016, el detenido era uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas, por lo que era se convirtió en un objetivo prioritario del gobierno estatal.

En diciembre de 2018 se ofreció una recompensa de 1.5 millones de pesos a quien proporcionara información para su localización y su captura.

Además, cuenta con una orden de detención del fuero común en ese estado fronterizo, emitida en 2018, por los delitos de secuestro agravado y asociación delictuosa.

## **“Norte de Veracruz: Zetas Vieja Escuela se reagrupa y advierte que “la limpia” ya comenzó”**

**Noé Zavaleta**

**Proceso**

**30 mayo 2019**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/586257/norte-de-veracruz-zetas-vieja-escuela-se-reagrupa-y-advierte-que-la-limpia-ya-comenzo>

XALAPA, Ver. (apro).- “Nunca nos hemos ido de la plaza... solo nos hemos estado reagrupando”, lanzaron, en un video, una decena de integrantes identificados como los “Zetas Vieja Escuela”.

“Ya comenzó la limpia”, advierten los hombres, que portan armas largas e insignias de “ZETAZ”, algunos con pasamontañas, otros con boinas y máscaras.

El mensaje es para narcomenudistas, halcones y sicarios que hoy están al mando de grupos contrarios, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Grupo Sombra.

La célula criminal, asentada en Poza Rica y en municipios vecinos como Tuxpan, Papantla, Pánuco, Chicontepec, también advierte que irán con todos aquellos comerciantes, empresarios y delincuentes que les han jugado “las contras”.

Los sujetos, ataviados también con pañuelos negros y serigrafiados con óleos de la muerte, así como cortes de cabello tipo militar, se presentaron como sicarios de “Los Zetas Vieja Escuela”.

Aunque en Veracruz hay una presencia tácita de seis cárteles de la droga, en la región del Totonacapan y la Huasteca veracruzana, que comprende la región norte, hay una pugna entre células del Grupo Sombra -escisión del Cártel del Golfo-, CJNG y de Zetas Vieja Escuela. El otrora poderoso Cártel del Noreste ya no cuenta con presencia en esta región norte de Veracruz.

En la capital del estado, hay un control del emergente Cártel del Siglo -responsable de la mayoría de las ejecuciones en lo que va del año-; en la región centro domina Sangre Nueva Grupo Zeta, organización criminal cuya penetración ya alcanzó varios municipios serranos de Puebla

Al sur se repliegan las últimas células de Los Zetas, y el resto del estado se encuentra con dominio del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Aunque en Veracruz entró desde hace dos semanas la operación de la Guardia Nacional, con el arribo de mil 50 elementos, la mayoría de ellos para la zona sur, la ola de violencia no ha disminuido.

En la primera semana de enero de 2019, durante las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional, acto protocolario celebrado en San Lázaro, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, se sinceró ante los legisladores y reconoció que en la entidad operan seis cárteles de la delincuencia organizada.

“No tenemos esa capacidad, por eso recurrimos a quienes sí tienen la capacidad de combatir, disuadir e inhibir a esos grupos delictivos. Veracruz, como estado, está en el paso de la droga, operan seis cárteles, todos con un poderío que superan a la policía”.

### **“Sentencian a 18 años de cárcel al Z-42, exlíder de Los Zetas”**

**LUCIANO CAMPOS GARZA**

**Proceso**

**21 julio 2019**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/593280/sentencian-a-18-anos-de-carcel-al-z-42-exlider-de-los-zetas>

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- Un juez federal dictó sentencia condenatoria por 18 años de prisión en contra de Óscar Omar Treviño Morales, el Z-42, por operación de recursos de procedencia ilícita, informó la Fiscalía General de la República en un comunicado.

El capo del Cártel de los Zetas, quien fue detenido en marzo del 2015 en San Pedro, Nuevo León, se le encontró responsable del “manejo de recursos ilegales en la modalidad de custodiar por sí, recursos dentro de territorio nacional con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita”, precisó la fuente.

Aclaró que el jefe de los zetas identificado como Óscar T tiene en curso otros procedimientos penales en su contra.

Por el mismo delito, obtuvieron sentencia condenatoria idéntica dos cómplices identificados como Ricardo y Juan.

Junto a ellos fueron condenadas otras tres personas, a las que se les fincó responsabilidad por delito agravado de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Estos hombres sentenciados fueron identificados como Miguel, Rodolfo, y Carlos, quienes fueron condenados a 13 años y cuatro meses de prisión por el referido delito.

El Z-42 fue detenido el 4 de marzo del 2015 en un domicilio que ocupaba en la colonia Fuentes del Valle, en el municipio de San Pedro. En el mismo operativo, efectuado en territorio sampetrino, fueron detenidos otros cómplices que se ocultaban en una casa de la colonia Real San Agustín.

Óscar Omar asumió el mando de los zetas cuando su hermano Miguel Treviño Morales, el Z-40, fue detenido en el 2013, en un operativo efectuado por la marina en los límites de Tamaulipas y Nuevo León.

### **“Cae “La Vanesa”, presunto distribuidor de drogas de Los Zetas en Veracruz”**

**Noé Zavaleta**

**Proceso**

**10 septiembre 2019**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/599193/cae-la-vanesa-presunto-distribuidor-de-drogas-de-los-zetas-en-veracruz>

XALAPA, Ver. (apro).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aprehendieron en Coatzacoalcos a Iván “N”, La Vanesa, presunto narcomenudista de Los Zetas, acusado de delitos contra la salud.

Durante la captura, el pasado domingo 8, los agentes policíacos incautaron al sujeto mil 300 dosis de droga, armas y cartuchos útiles, así como un vehículo con reporte de robo en el puerto de Veracruz.

Los hechos se registraron en el bulevar Costero del fraccionamiento “Los Almendros”, cuando elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano, ubicaron un vehículo Chevrolet tipo Aveo con placas YKH-7099 y le marcaron el alto para una inspección de rutina.

A La Vanesa se le aseguraron mil dosis de marihuana y 300 de cristal, además de cinco armas –una larga AR-15 modificada, dos escopetas calibre 12 mm y una escuadra 45 mm–, 225 cartuchos calibre 12 mm y 13 más 9 mm, 11 fundas para chalecos, siete playeras con logos de una célula criminal y dos gorras.

En estricto apego a la ley, el detenido, el vehículo y el material asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, como parte del programa “Unidos para la Construcción de la Paz”, en el que participan las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México (Semar) y Seguridad Pública (SSP), junto con la Guardia Nacional y la Policía Federal.

En la última década, en la zona sur de Veracruz, que comprende Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jaltipan, Acayucan y Las Choapas, entre otras cabeceras municipales, la organización delincriminal Los Zetas mantuvo el control total sobre el trasiego de drogas, extorsión y cobro de piso a giros negros, así como el robo de combustible y venta de mercancía pirata.

Sin embargo, la estructura criminal cayó en desgracia en marzo de 2018, a partir de la detención de José Giraldo García, “El Cubano”, quien operaba en Veracruz, Tabasco y el caribe mexicano, y Hernán Martínez Zavaleta, “El Comandante H”, que controlaba a la organización delincriminal en Veracruz.

Los Zetas también se fragmentaron tras el abatimiento de Elías Aguirre Sánchez, “El Metro”, jefe de “estacas” (espías) en Coatzacoalcos, y Bernardo Cruz Mota, “El Niño Sicario”.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía General de la República (FGR) enfocan ahora sus baterías en la detención de un jefe de sicarios de Los Zetas de nacionalidad sudamericana (presuntamente chileno), según un documento elaborado por el Agrupamiento Coatzacoalcos de la Subsecretaría de Operaciones de la SSP.

Y también sobre el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que irrumpió con fuerza en el sur de Veracruz, aunque su acción criminal más conocida es el ataque a la palapa “La Potra”, en abril pasado, donde 14 personas fueron acribilladas, pero el objetivo era “levantar” a Julio César González Reyna, La Becky, propietario del bar “La Esquina del Cha-kl”, quien lo mismo vendía droga de los Zetas que del CJNG.

Por esa masacre fueron aprehendidos dos sicarios que respondían a las claves “El Lagarto” y “El Pelón”, y se encuentra prófugo de la justicia “El Comandante 80”.

Apenas hace dos semanas el CJNG perpetró una nueva masacre en Coatzacoalcos al incendiar el table dance “El Caballo Blanco”. Murieron 31 personas que se encontraban en su interior, entre bailarinas, trabajadores y clientes del lugar.

### **“El ritual de iniciación de Los Zetas”**

**Ricardo Raphael**

**Proceso**

**13 octubre 2019**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/602802/el-ritual-de-iniciacion-de-los-zetas>

Durante más de un año y medio, el escritor y periodista Ricardo Raphael visitó en el penal de Chiconautla a Galdino Mellado Cruz, miembro fundador de Los Zetas. Con base en sus conversaciones, escribió Hijo de la guerra, libro que “se debate entre la ficción y la realidad” y que “reconstruye la gran tragedia de una nación en la que la incertidumbre, el narcotráfico y la corrupción fueron el caldo de cultivo perfecto para que militares de élite se convirtieran en el mayor grupo delictivo” del país. Con autorización del autor y de la editorial Grupo Planeta se reproducen fragmentos del primer capítulo.

Bajé a desayunar temprano, fui de los primeros en entrar al restorán. Poco a poco llegó la raza nuestra, pero nadie hablaba. Los jefes notaron la circunstancia del silencio. Entonces El Cos se animó a preguntar:

–¿Ustedes qué tienen, cabrones? ¿Están mal cogidos o se les apareció el diablo?

Esperamos a ver quién hablaba primero. El M se levantó y volvió a interrogar:

–A ver, tú, Galdino –a mí ya me hablaba así porque yo era su chofer–. ¿Qué carajos sucede?

–Nada, mi señor.

–¿Nada?

–Es que no sé cómo decirlo...

–¿Hay alguna molestia? ¿Les falta dinero? ¿Vieron maltratos?

–No, no –respondí, sin querer hablar de más.

–Suéltlenlo, para que podamos platicar –insistió El M, dirigiéndose a la bola de culeros que me estaban dejando solo.

–Disculpe, mi señor... –Me atreví a abrir la boca, aunque la voz me salía chiquita–. Perdone que le haga mención, pero ayer, estando todos presentes aquí, en el hotel, vimos que usted y otras personas salieron en la televisión, acusadas de... Dijeron en las noticias que lo andan buscando, jefe... por narcotráfico.

Una carcajada del M rompió el silencio en el comedor.

–¿Antes no sospechaban nada?

–Pues algo –dije yo.

–¿Sabes cómo me llamo, Galdino?

–Ahora sí, mi señor.

–¿Cómo?

–Osiel Cárdenas Guillén.

–¿Qué piensan, señores? –interrogó al resto.

–Oiga, jefe... ¿y por qué no nos habían informado toda la verdad? –intervino Óscar Guerrero.

–Yo les dejé esa responsabilidad a Decena y a Lazcano –se defendió El M, quien continuó risa y risa mientras era evidente que, por su reacción hacia nosotros, sólo El Lazca estaba incómodo.

Osiel propuso que saliéramos al estacionamiento del hotel, y todos lo seguimos.

–Escoge una camioneta, Betancourt, la que quieras –ordenó apenas estuvimos en el exterior; Betancourt caminó hacia la Escalade que ese día traía Rejón–. Abre la puerta del conductor –volvió a instruir y Betancourt obedeció.

Del bolsillo de su chamarra el patrón sacó una navaja y con ella rasgó la piel del respaldo del asiento; sin mucho esfuerzo extrajo una placa ancha cubierta con fibra sintética que era parte del esqueleto, y dentro del hueco asomaron varios paquetes cubiertos con plástico y cinta canela. Retiró uno para mostrar que en su interior había cocaína. Según El M, cada asiento delantero contenía 30 kilos y los dos traseros unos 120 más.

–Escoge otra camioneta –pidió el patrón, ahora dirigiéndose a Guerrero Silva. Óscar señaló una Suburban gris, estacionada frente a la Escalade.

El señor repitió la operación en uno de los asientos delanteros y retiró de nuevo la placa, que nos explicaron luego, era de plomo para evitar los rayos X; sin embargo, no había droga dentro del compartimiento, sino paquetes con billetes verdes. De acuerdo con el patrón, las otras camionetas transportaban, cada una, 750 mil dólares (...)

Volvimos al restorán del hotel. Nadie ajeno a nosotros habría podido entrar o salir del lugar; ocupamos las sillas donde habíamos estado antes. El Cos, Treviño y Tony Tormenta no se habían movido. Osiel Cárdenas volvió a tomar la palabra.

–Bueno, muchachos, ahora que no hay más secretos y todos tienen la misma información, quiero preguntar si van a seguir sirviendo a la compañía.

Corrió dentro de aquel lugar un vocerío incomprensible.

–Hablen con libertad, no les pasará nada. Díselos tú, Heriberto –insistió el patrón.

Heriberto Lazcano se echó al ruedo con alguna dificultad porque sabía que con su silencio había abollado la confianza:

–Miren, compas, el que no quiera seguirle, mejor dígalo de una vez; no hay pedo, se los juro. El que así lo desee, se va. Pero hay que decirlo ahorita, no hasta la noche ni mañana.

Yo busqué la mirada del Hummer, porque me sorprendió que ese güey no hubiera dicho ni una palabra. Tocó el turno de que interviniera Arturo Guzmán Decena:

–Piénsenlo antes de responder. Ahora tienen buen sueldo, respeto, identificaciones, nadie los detiene; cada vez estrenan camioneta nueva, traen trapitos chingones y andan con buenas viejas. Cualquiera que quieran, güeyes, ustedes son la envidia; todas les dan el culo a una voz y no me digan que es por su carita. Analícenlo y, si no quieren, ¡pues ruedas de una vez!

Como si jugaran fútbol, Decena le pasó el balón a Heriberto:

–La situación es esta: si se quedan, ganarán 120 mil pesos netos al mes, que no gastarán porque les estaremos dando viáticos todo el tiempo.

–Mírense la ropa, traen buen reloj, alhajas finas, portan el arma que quieren; si entran a un restorán, el más caro del país, no tienen que preocuparse por el precio. El M no escatima recursos cuando se trata de ustedes –retomó la palabra Decena.

–Como dice Arturo, reflexionen en eso también: ¿cómo vive su familia? Recuerden los sueldos que se pagan allá afuera. Cuando éramos sólo militares, ¿cuánto ganábamos? No hay comparación con lo que el patrón nos está ofreciendo –dijo El Lazca.

Con esos argumentos El Lazca, Decena y El M se nos metieron en la cabeza. Pero había también otras razones poderosas por considerar: ¿dónde estaban los otros veinticuatro compañeros del Grupo Zeta que también fueron al Fuerte Hood? Habíamos oído rumores. Que a tal lo levantaron, que otro murió en un accidente de coche, que a fulano su familia no lo volvió a ver. Para mí que esos cabrones no quisieron trabajar para la compañía y por eso ya no estaban entre los vivos (...)

Por fin El Hummer decidió hablar:

–Pero las cosas han cambiado, patrón. A usted lo busca la policía, y aunque nos quedemos, pues de poco nos servirán las ganas con tanta gente en contra.

–De eso no tienen por qué alarmarse. Ustedes han de comprender que los medios de comunicación, los reporteros, deben de hacer su trabajo; no se enojen con ellos y tampoco les hagan caso. Estamos bien arreglados –respondió Osiel Cárdenas.

–¿Arreglados? –pregunté.

–Sí, Galdino, arreglados. Repito que los reporteros hacen su trabajo, y bueno, algunos están con nosotros, otros no. Pero ustedes como si nada, caminen derecho y nadie los molestará, se los aseguro. ¿Creen que estaría aquí tan tranquilo si tuviera miedo de que me agarren?

–¿Y el gobierno? ¿Está con nosotros el gobierno? –quiso saber Betancourt.

–Tranquilos, todo está en orden; trabajamos con el gobierno. Ustedes siguen siendo parte del gobierno, ¿o qué, los cortaron ya de la nómina del Ejército? Viene la quincena chica: cuando tengan su pago, se acuerdan de mí.

Otra vez se hizo el silencio en el restorán.

–¿Entonces? –apuró El Lazca, porque quería una respuesta rápida.

–No hay pedo, ya estamos aquí –reaccionó Óscar Guerrero.

–Pus le entramos –dijo Betancourt.

–Va –añadió El Mamito.

–Yo también –intervino Efraín Torres.

–¿Y tú, Galdino? –demandó Decena sólo por joder; no necesité mucha reflexión porque el miedo me ganó y me doblegué ante la situación:

–Yo voy –respondí en voz más alta que el resto.

Al final ninguno se rajó. Los 21 que estábamos ahí reunidos con los jefes aceptamos la nueva realidad.

–Pérense, pérense –ordenó Osiel Cárdenas–. Este es un nuevo contrato de familia, así que quiero oír a cada uno aceptarlo.

Guzmán Decena, quien estaba parado frente al M, dio un paso militar y dijo: –Yo seré el Zeta 1.

Se levantó Alejandro Lucio Morales Betancourt: –Zeta 2.

Se sumó Heriberto Lazcano: –Zeta 3.

Luego Jaime González Durán: –Zeta 4.

Y así siguieron los demás.

Mateo Díaz López: –Zeta 6.

Y Jesús Enrique Rejón: –Zeta 7.

Óscar Guerrero Silva: –Zeta 8.

Llegó mi turno: –Zeta 9.

Omar Lorméndez Pitalúa: –Zeta 10...

No hay que creerse lo que luego dijo la prensa: esa numeración de Los Zetas nunca tuvo que ver con la jerarquía de mando dentro de la organización, eran claves para identificarnos entre nosotros y fueron asignadas por casualidad (...)

–No se retiren tan rápido –nos dijo el señor Osiel–. Antes hay que apartar el trigo malo del bueno.

Todos volteamos a ver al patrón.

–Ciro Justo Hernández, salga usted de la formación –ordenó El M.

El Cos y Treviño avanzaron hacia ese compa y lo flanquearon.

–Este hijo de la chingada estuvo hablando de más –nos informaron–. Por su culpa la policía investiga a la vieja del patrón y la DEA sabe cosas que no deberían saberse (...)

–De este judas se encargarán todos ustedes –ordenó El Cos.

Ciro Justo Hernández era un cabo que siempre andaba callado, la llevaba con pocos y sólo era amigo de Óscar Guerrero; esa mañana nos enteramos de por qué.

–¿Sabían ustedes que Ciro se cambió el nombre cuando lo mandaron al Fuerte Hood? –preguntó El M.

Óscar bajó la mirada.

–¿Lo sabías tú, Óscar? El verdadero nombre de este traidor –señaló con el dedo– es Ciro Guerrero Silva. ¿Cómo ven que Ciro y Óscar son hermanos, hijos de la misma madre y del mismo padre?

Nadie se atrevió a moverse de su lugar.

–Pero Óscar está limpio, ya lo investigamos y no hay problema con él. En cambio, el tal Ciro no merece trabajar para la compañía. Entregó nuestras claves de radio y proporcionó información sobre lo que hacemos y no hacemos; por su culpa nos metimos en problemas con la DEA, pero ese pedo ya está resuelto. Ahora lo que falta es que arreglemos cuentas aquí dentro.

Ciro Justo Hernández no era el único del Grupo Zeta que tenía una identidad falsa y Óscar se lo dijo al M; quería salvar el pellejo de su hermano.

–Discúlpelo, patrón, yo me voy a encargar de que no vuelva a cagarla.

Osiel tronó:

–¡Aquí el que la caga, la limpia! Esa es la regla y todos ustedes la van a limpiar, si es que realmente quieren seguir conmigo. Eso te incluye, Óscar. Es tu decisión: ¿te quedas con tu hermano o te vienes con nosotros? (...)

Después de que El Cos y Treviño se lo llevaron, El M ordenó que todos nos dirigiéramos a una casa de seguridad a 20 minutos del hotel (...)

Cuando llegamos a la casa ya estaban El Lazca, Decena, El Hummer y Betancourt; minutos después no faltaba nadie. Nos habíamos reunido otra vez los 20 zetas, 21 contando a Ciro Justo, y los cuatro principales: Osiel, Tony, Treviño y El Cos. El hermano de Óscar estaba completamente desnudo, amarrado a una silla de metal; otros comenzaron el trabajo sin esperarnos, de su boca salía sangre porque a putazos le habían tirado varios dientes. En cuanto nos oyó, llamó a su hermano para que lo defendiera.

–Brother –respondió Óscar.

Con valentía, se acercó al M para insistir en el argumento de que varios de nosotros teníamos los nombres cambiados –No es justo que sólo Ciro pague por eso –razonó.

El patrón se apuró a despejar el error. Ciro no era un traidor por usar una identidad falsa, sino por pasar información que no debía.

–Primero que a nadie, a ti te traicionó –le dijo a Óscar–. Tú, que lo metiste al Ejército y luego lo ayudaste para que fuera gafe. Tú lo propusiste para ir al Fuerte Hood. Tú eres el primer traicionado (...)

–A los traidores hay una sola manera de tratarlos, ¿comprenden?

Óscar miraba de frente al M y de reojo a su hermano. El Lazca se aproximó a Ciro Justo y le pegó tamaño golpe en la cabeza con la palma abierta; el cráneo del güey tronó seco.

–Por tu culpa pudo haberse desmadrado la operación –añadió Heriberto–. Por tu culpa ahora el jefe está en los noticieros. Al patrón le costó muchos millones construir esta organización para que un pendejo como tú venga a echarlo todo a perder.

Cuando Óscar vio que no había remedio, trató de hacerse el fuerte:

–Entiendo, señor, entiendo lo que me explica. Si mi hermano se pasó de verga, pues yo no soy quien puede defenderlo.

–Entonces, ¿estás conmigo? –preguntó Osiel.

–Sí, señor.

Los demás asentimos junto con Óscar.

–¿Aunque sea tu hermano?

–Si usted no lo puede ayudar, yo tampoco.

El Lazca se arrodilló junto a la silla donde estaba Ciro y con un martillo le masacró los dedos desnudos de los pies hasta que se convirtieron en pequeños fragmentos de carne reventada; luego se aproximó El Hummer y puso un tremendo patadón sobre el pecho del desgraciado. Ciro salió volando con todo y silla. Betancourt se hizo cargo de levantarlo para que los demás pudiéramos continuar.

–Brother, ayúdame, por favor, ayúdame –balbuceó Ciro, tratando de encontrar el rostro de su hermano entre tanto cabrón que quería ser parte de la madriz. Óscar se mantuvo junto al patrón sin involucrarse, pero sin oponerse al castigo–. Piedad, amigos, piedad. ¡Óscar, brother, ayúdame!

Los gritos enardecieron el ánimo del grupo; varios comenzaron a disfrutar la tortura. El Hummer sacó un cuchillo de sierra y cruzando el labio superior le arrancó un pedazo de la mejilla: alcancé a ver el hueso pelón por encima de las muelas (...)

–Asegúrense de que sufra un chingo –mandó El M.

Veinte cabrones participamos en desollarlo. Betancourt y yo nos encargamos de mantenerlo con vida mientras los demás se llevaban, cada uno, su trofeo.

Esa fue la primera muerte culera en la que participé: una madre de esas te hace sentir poderoso (...)

Cada vez que Ciro confesaba algo, el rigor venía peor: El Hummer lo castró y Decena le amarró un petardo para volarle la verga. No es fácil describir las emociones que genera involucrarte en una fiesta de esas; sientes miedo, pero no es un miedo desagradable porque está cargado de adrenalina. Quieres ver más, más sangre, más golpes, quieres oír más gritos y darle tú también, darle un chilazo al güey. No es excitación sexual, porque no soy puto, pero sí te excitas y no quieres que se detenga.

Al final Osiel decidió terminar con el show: le entregó a Óscar la Colt nueve milímetros que siempre cargaba y ordenó que le diera el tiro de gracia (...)

Cuando todo acabó, el patrón volvió a reunirnos a su alrededor, recuperó el arma que venía de usar Óscar y lo abrazó con fuerza diciéndole que lamentaba su pérdida.

–Guerrero, hoy perdiste a un hermano, pero ganaste una familia, 20 hermanos y yo que desde ahora formamos parte de ti. Con esta traición nace una hermandad, y así durará. Piénsenlo como un ritual que nos une para siempre.

La sangre que circulaba por nuestras venas nos tenía muy alertas, más que cualquier droga. Ese día surgió una legión de soldados dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir (...)

Fragmento del libro Hijo de la guerra, de Ricardo Raphael © 2019, Seix Barral. Cortesía otorgada bajo el permiso de Grupo Planeta México.

## **“El SAT condonó adeudos a operador de Los Zetas y empresas ligadas a la Estafa Maestra: MCCI”**

**Redacción**

**Proceso**

**21 octubre 2019**

**Consultada 4 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/603931/el-sat-condono-adeudos-a-operador-de-los-zetas-y-empresas-ligadas-a-la-estafa-maestra-mcci>

CIUDAD DE MÉXICO (apro). - Entre agosto y octubre de este año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) canceló 13 mil 934 adeudos fiscales por un monto superior a los 126 mil millones de pesos, y entre los beneficiarios se encuentran Juan Manuel “El Mono” Muñoz, detenido en Texas por lavado de dinero del narcotráfico; el dueño de Ficrea, Rafael Antonio Olvera Amezcua, y seis empresas involucradas en el esquema de “La Estafa Maestra”.

Lo anterior, de acuerdo con bases de datos oficiales obtenidas y procesadas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

La organización precisó que el SAT le envió una hoja informativa en la que refiere que las cancelaciones de los adeudos se dan por insolvencia del contribuyente, “la cual se determina una vez agotado un proceso de investigación en el que los agentes fiscales no logran localizar bienes susceptibles de embargo con los que se pueda cubrir el crédito fiscal”.

Según cálculos de MCCI, en conjunto, los adeudos cancelados en un lapso de tres meses representan tres veces el presupuesto asignado en 2019 para Jóvenes Construyendo Futuro, uno de los programas sociales emblema del actual gobierno federal, y superan al desembolso que se hizo por la cancelación anticipada de 692 contratos en el aeropuerto que se proyectaba hacer en Texcoco.

En el caso de Muñoz Luévano, quien se declaró culpable ante una corte federal de Texas de los delitos de lavado de dinero del narcotráfico y distribución de cocaína, el pasado 20 de agosto la administración actual le canceló un adeudo 92 millones 561 mil pesos a la empresa propiedad Estación de Servicio Mira Sierra SA de CV, ubicada en Saltillo, Coahuila y propiedad de El Mono Muñoz.

En el acta constitutiva del 11 de octubre de 2011, Muñoz Luévano –quien enfrenta un proceso penal en Estados Unidos tras haber sido extraditado de España, donde fue detenido el 18 de marzo de 2016– aparece como dueño del 34% de las acciones de Estación de Servicio Mira Sierra, pero en julio de 2014 uno de sus socios le vendió su participación, con lo que se convirtió en el dueño mayoritario.

Al Mono Muñoz se le ha vinculado con políticos coahuilenses, entre ellos al exgobernador Humberto Moreira, además de ser señalado como presunto operador financiero de Los Zetas. Al menos dos empresas dedicadas a la distribución de combustible, en las que El Mono Muñoz aparece como accionista, todavía operan en Coahuila

Empresas vinculadas a “La Estafa Maestra”

En el listado de los adeudos cancelados entre agosto y octubre del presente año aparecen, además, seis empresas involucradas en el esquema de “La Estafa Maestra”, a las que en conjunto el gobierno federal les perdonó el pago de tres mil 647 millones de pesos de impuestos.

Estas son Icalma, Evyena, Constructora Bofill, Servicios Yafed, Femexport y Adasy Company y están ligadas a La Estafa Maestra, de la siguiente forma:

En mayo de 2013, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) suscribió un convenio con la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) para que equipara a las brigadas que participarían en el programa “Cruzada contra el Hambre”.

La UAEM recibió el dinero de la Sedesol, pero no prestó el servicio, sino que subcontrató para ello a Evyena por un monto de 203 millones de pesos.

El esquema de simulación se replicó a finales de 2014, cuando la Sedesol contrató de nuevo a la UAEM, ahora para revisar y validar el padrón de beneficiarios de los programas sociales de pensión para adultos mayores, abasto social de leche y de apoyo alimentario en los estados de Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado De México y Veracruz.

Esta vez la UAEM subcontrató Grupo Industrial y Servicios Yafed por un monto de 73.1 millones de pesos.

La Universidad asignó ese subcontrato mediante una licitación simulada en la que participó como empresa comparsa la firma Femexport SA de CV.

MCCI recordó que en la la investigación de La Estafa Maestra, realizada en 2015 en conjunto con Animal Político, se constató que tanto Servicios Yafed –ganadora de la “licitación”- como Femexport

eran empresas vinculadas que compartían el mismo domicilio en una diminuta oficina en San Pedro Garza García, Nuevo León, que carecía de empleados.

Además, en esa misma oficina estaba el domicilio fiscal de Constructora Bofill, empresa investigada por supuestos contratos simulados en Nuevo León, Sinaloa y Coahuila.

Tanto Yafed, como Femexport y Bofill ya han sido declaradas por el SAT como “empresas simuladoras de operaciones”.

El pasado 20 de agosto el SAT les canceló a las tres, adeudos fiscales por mil 516 millones de pesos.

En la misma fecha el SAT le canceló una deuda por 165 millones 195 mil pesos a Adasy Company, también involucrada en el esquema de La Estafa Maestra, pero a través de un subcontrato con la Universidad Tecnológica de Tabasco, que fue pagado con recursos federales transferidos por Petróleos Mexicanos (Pemex).

Icalma Servicios y Asesorías también fue utilizada como empresa comparsa en otra licitación simulada en 2014 en la UAEM y, junto con Evyena, recibieron del SAT la cancelación de adeudos por mil 967 millones de pesos el pasado 10 de octubre.

### **El caso Ficrea**

El pasado 10 de octubre, el SAT también canceló una deuda por más de siete mil millones de pesos a Leadman Trade SA de CV, empresa que fue utilizada en el fraude de la financiera popular Ficrea, que afectó a seis mil ahorradores en ocho estados.

El accionista mayoritario tanto de Leadman Trade como de Ficrea era Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien permanece detenido en Texas, en espera de su extradición, acusado del presunto desvío del dinero de los ahorradores para adquirir vehículos e inmuebles de lujo para beneficio de él y su familia. Olvera Amezcua era dueño del 99.99% de las acciones de Leadman Trade SA de CV.

En noviembre de 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino Ficrea al detectarse indicios de posible lavado de dinero por la triangulación de fondos con Leadman Trade, la empresa beneficiada con la cancelación del SAT.

En tanto, los casi seis mil ahorradores afectados por el fraude de Ficrea no han podido cobrar sus ahorros desde 2014, que se estiman en unos seis mil millones de pesos.

Olvera Amezcua fue detenido en Texas desde finales de mayo de 2019, y aún se espera que se concrete su extradición. Las autoridades de justicia le han identificado múltiples bienes en Estados Unidos.

### **Otros beneficiarios**

Sin embargo, según reporta MCCI, el mayor adeudo cancelado corresponde a Mex-US Steel de Tamaulipas, una empresa presuntamente fantasma creada en julio de 2015 por dos jóvenes residentes en colonias populares de Matamoros, a la que el SAT le perdonó el pago de nueve mil 944 millones de pesos.

En la lista de adeudos cancelados también hay empresas vinculadas a multimillonarios fraudes y hoteles de lujo, como el Bluebay Grand Esmeralda, ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Operadora Hoteles Grand, también involucrada en un fraude, pero con tiempos compartidos para vacacionistas, fue otra de las empresas beneficiadas con la cancelación de adeudos fiscales por 308 millones 968 mil pesos.

También se perdonaron adeudos por 167 millones de pesos a Nacional de Aceros SA de CV, señalada por un supuesto fraude con casas financiadas en el anterior sexenio por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para víctimas de huracanes en Guerrero.

Un adeudo casi idéntico se canceló a Jal Asesores en Servicios Múltiples, empresa señalada en 2016 por la Auditoría Superior de la Federación por un presunto fraude o desvío de recursos públicos.

Mientras que Clínica de Especialidades Wong, usada en San Luis Potosí para un presunto fraude en servicios médicos, obtuvo una cancelación de adeudos fiscales por 38 millones 160 mil pesos.

Itrio Arquitectos, una empresa propiedad de dos sobrinos y un cuñado del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue beneficiada con la cancelación de una deuda al SAT por 191 millones 988 mil pesos.

En el anterior sexenio, encabezado por Enrique Peña Nieto, Itrio Arquitectos vivió días de bonanza, pues multiplicó más de 5 veces el monto de sus contratos.

En el sexenio de Felipe Calderón Itrio Arquitectos ejecutó obras con fondos federales por 254 millones de pesos, mientras que en la gestión de Peña Nieto los contratos sumaron mil 373 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por MCCI.

Los adeudos cancelados por el SAT a Itrio equivalen al 14% de los contratos que esa constructora recibió en el sexenio de Peña Nieto.

## **“Ejecutan a tres en Veracruz: “Los Zetas Vieja Escuela” y el CJNG se declaran la guerra”**

**Noé Zavaleta**

**Proceso**

**2 abril 2019**

<https://www.proceso.com.mx/577823/ejecutan-a-tres-en-veracruz-los-zetas-vieja-escuela-y-el-cjng-se-declaran-la-guerra>

XALAPA, Ver. (apro). -Dos hombres y una mujer, presuntos integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron acibillados y sus cuerpos dejados abandonados en una céntrica calle del municipio de José Azueta, al sur de Veracruz, muy cerca de un hospital.

Los cuerpos torturados y amordazados de las tres personas fueron dejados en la madrugada de este martes, causando alarma entre la población que se encontraba afuera del nosocomio, esperando noticias de algún familiar internado.

El municipio de José Azueta se encuentra en el sur de Veracruz, representa la franja final de la Cuenca del Papaloapan y es una salida estratégica para salir hacia el estado de Oaxaca, en su región cuenca, la cual, hoy es dominante por el CJNG.

En una cartulina dejada a un costado de los cuerpos, la organización “Zetas Vieja Escuela” se atribuye la triple ejecución y mencionando a varias personas por sus apodos, dejó el siguiente mensaje: “ya estamos aquí gracias al apoyo del nuevo gobierno que los ahullento (sic)”.

Los dos hombres y la mujer permanecen en calidad de desconocido. Presentan golpes y disparos en la cabeza.

En el mensaje el grupo “Zetas Vieja Escuela” anuncia una guerra contra sus rivales y a quienes ubican como el grupo dominante en esa región, el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En los primeros cuatro meses del gobierno local de Cuitláhuac García Jiménez más de 550 personas han sido privadas de la vida de forma violenta.

La procuración de justicia y la seguridad de Veracruz ha estado empantanada, por las diferencias políticas entre el mandatario, Cuitláhuac García y el Fiscal, Jorge Winckler.

### **“El “Mono Muñoz” se declara culpable y será informante de EU contra Moreira”**

**Juan Alberto Cedillo**

**Proceso**

**21 mayo 2019**

**Consultada 13 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/584978/el-mono-munoz-se-declara-culpable-y-sera-informante-de-eu-contra-moreira>

LAREDO, Tex. (apro).- El acuerdo al que llegó Juan Manuel Muñoz Luévano, Mono Muñoz, con los fiscales de Texas para convertirse en “testigo protegido” no son buenas noticias para Humberto Moreira y una larga lista de políticos de Coahuila pues ahora será el principal informante para el caso que se prepara contra el exgobernador y varios de sus exfuncionarios.

En una audiencia que se celebró el lunes pasado en San Antonio, Texas, ante el juez del distrito David Ezra, Muñoz Luévano se declaró culpable por el delito de conspiración para el lavado de dinero.

Además, formalizó un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para convertirse en un informante protegido “de alto valor” para el gobierno, según publicó el diario San Antonio Express News.

El nuevo testigo protegido ofreció a la Justicia de Estados Unidos una lista de varias decenas de funcionarios y exfuncionarios de Coahuila quienes recibieron sobornos del crimen organizado y que robaron fondos de las arcas públicas, dinero que lavaron en bancos de Texas con la ayuda de empresarios de medios de comunicación del estado.

La lista de acusados incluye a varios de los actuales funcionarios de gobierno estatal que preside Miguel Riquelme, quien anteriormente fue alcalde de Torreón.

“El juez que tomó la declaración de Muñoz habló de manera circular, con cuidado de no revelar ninguno de los detalles que han hecho de Muñoz un objetivo tan valioso para los fiscales estadounidenses”, precisó la nota del diario firmada por el reportero Guillermo Contreras.

La nota agrega que los fiscales de Texas “han estado investigando a Moreira durante varios años en relación con las denuncias de lavado de dinero aquí, pero hasta ahora no ha sido acusado y él niega haber cometido ningún delito.

“El acuerdo de culpabilidad de Muñoz, incluiría una base objetiva de información donde se brindarán más detalles, pero quedará sellada (clasificada) y el juez la mantuvo así, ante las objeciones de un reportero de San Antonio Express-News”, precisó la nota.

Durante la audiencia el juez citó las reglas federales que le dan a los fiscales la discreción de sellar partes del expediente judicial y decidir cuándo pueden hacerse públicas. Muchos casos, como el de Muñoz, han terminado con los acuerdos de culpabilidad que permanecen clasificados por mucho tiempo.

El Express News destacó que *Mono Muñoz* tuvo estrechos vínculos con figuras políticas de Coahuila, fiscales, exfiscales, alcaldes, empresarios de medios, legisladores congresistas y jueces de varios estados mexicanos.

“Entre las personas con las que estuvo cerca, según los informes, se encuentra Humberto Moreira, quien fue gobernador de Coahuila desde 2005 hasta 2011”.

Humberto Moreira dejó la gubernatura antes de cumplir su sexenio y se convirtió en el presidente nacional del PRI, hasta que renunció en medio de controversias relacionadas con la deuda de Coahuila, la cual aumentó de 27 millones a 2.8 mil millones bajo su mandato.

El testimonio del *Mono* en contra de Humberto Moreira se sumará al de uno de los miembros del gabinete: Héctor Javier Villarreal Hernández, tesorero de Coahuila de 2008 a 2010, quien ya denunció ante los fiscales los delitos cometidos por el exgobernador.

Gracias a que Villareall también se convirtió en testigo protegido, ha estado en libertad bajo fianza desde que se declaró culpable en septiembre de 2014 por lavado de bienes raíces en San Antonio y el sur de Texas.

Villarreal confesó que lavaron millones de dólares que fueron robados de las arcas de Coahuila.

En México, Muñoz parecía estar atrapado en una guerra entre cárteles y estaba en España para manejar los asuntos de Los Zetas en Europa, según informes de los medios.

Citando a Proceso, el diario de Texas señaló que, en 2013, durante una guerra entre los cárteles de la droga de Sinaloa y Los Zetas, varias estaciones de servicio de Muñoz fueron atacadas e incendiadas.

Los presuntos miembros del Cartel de Sinaloa colgaron pancartas acusando a Muñoz de lavar dinero y comprar gasolina robada a los Zeta, escribió Proceso.

Los cargos en San Antonio contra Muñoz provienen de una acusación en enero de 2015 por una presunta actividad de drogas que data de 1999, pero los fiscales nunca han revelado públicamente

detalles. En la corte, el fiscal Leachman le dijo al juez que, a sabiendas, Muñoz realizó transacciones financieras ilegales con dinero del narcotráfico.

La pena máxima es de 20 años de prisión, aunque la sentencia es parte del acuerdo de culpabilidad sellado, señaló el juez. La sentencia está programada para el 25 de noviembre, concluye la nota firmada por Guillermo Contreras.

### **“Topo Chico: la masacre que fundó un cártel”**

**Luciano Campos Garza**

**Proceso**

**28 septiembre 2019**

**Consultada 13 diciembre 2019**

<https://www.proceso.com.mx/601339/topo-chico-la-masacre-que-fundo-un-cartel>

MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).-El hacinamiento en el Penal del Topo Chico era insostenible. En el interior reinaban los zetas que imponían su ley. Desde el inicio del nuevo milenio, las organizaciones criminales imperaron en México, la vieja penitenciaría ubicada en la zona metropolitana de esta capital se llenó de internos, literalmente a reventar.

Con la ampliación, había capacidad para 3 mil 800 reclusos. Pero el incremento de la criminalidad hizo que llegaran a haber, adentro, hasta 6 mil 500, allá por el año del 2006.

Un directivo del penal refiere que hasta antes de que llegara la administración del gobernador Jaime Rodríguez, el centro de reinserción social de la colonia Nueva Morelos, en Monterrey, tenía copados los pasillos con tendajos y chabolas, habilitadas para que ahí durmieran los desposeídos, los parias internos. Las personas privadas de su libertad, se tendían por las noches en los pasillos de los ambulatorios.

Había un dormitorio, el E con capacidad para 150 internos. Sin embargo, uno de los capos que controlaba el lugar, ordenó su desalojo para instalarse él con 30 internos que eran sus soldados leales, que les servían como guardia personal.

La unidad era como su propio palacete.

Al fondo de la hilera de celdas, en el primer piso, estaba el spa particular del capo, del que no refiere el nombre. Ahí había un jacuzzi habilitado como sauna que era usado para su deleite.

Ahora, como muestra un recorrido efectuado en el interior, el área está deshabitada. Solo quedan algunas pinturas de la pared. Se ve un enigmático letrero que dice Screwston, y paredes descarapeladas por el abandono.

“En ese tiempo no había mal presupuesto. El mal del Topo Chico era la mala administración, el mal control”, dice la fuente.

Al fondo del penal, en la esquina norponiente, cerca del área psiquiátrica, había una especie de bodega apartada, que era la sala de esparcimiento del zeta y sus soldados. Había bar y mesa de billar. También había mesas para futbolito y sofás para estar cómodamente instalados.

Enfrente, tenía un altar de la Santa Muerte en una capilla de concreto. El interior está delicadamente delineado y aunque ya está vacía, todavía sigue en pie.

Los integrantes del Cártel del Golfo habían sido literalmente desplazados por los zetas.

De acuerdo a la fuente, en la época de peor hacinamiento, los internos del CDG estaban prácticamente fuera del penal, pero de eso no sabía nada la sociedad. No debía saberlo.

Todo el reclusorio es un enorme amurallado que adentro se subdivide.

Cuando se ingresa, hay que pasar dos portones del estacionamiento hasta llegar al recibidor, donde se toman los registros de quienes hacen las visitas. A un lado de la caseta, antes de traspasar las rejas de seguridad que conducen al interior, está el denominado Salón Polivalente.

Esta área es usada para eventos cívicos, reuniones, capacitaciones, pero no para los internos, porque no está en la ergástula. Pues era tan grave el problema ocasionado, en esos años, por la sobrepoblación, que hasta allá fueron enviados los presos del CDG. No era posible colocarlos junto con los zetas.

En un momento, dice la fuente, los zetas llegaron a tener hasta 350 operadores internos que controlaban las actividades criminales, dentro y fuera de la prisión, con equipo de tecnología de punta, como computadoras con internet y teléfonos inteligentes, que les servían para controlarlo todo.

Ahora pueden verse internos fuera de la cárcel, en el estacionamiento. Son los que hacen el aseo, y visten la playera blanca y pants gris reglamentarios. Pero barren con grilletes colocados en los tobillos, para impedir que corran. Y son permanentemente vigilados por guardias.

### **La masacre de Topo Chico**

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón asumió la gubernatura en octubre del 2015 y tuvo que enfrentar, al inicio de su mandato, una crisis penitenciaria de dimensiones mayúsculas.

Entre la noche del 11 de febrero y la madrugada del 12 del 2016, se escenificó en el interior del área ampliada del topo Chico una de las mayores masacres en la historia penitenciaria del país.

Un total de 49 reos fueron asesinados con puntas, barrotos y otros objetos contundentes. Algunas versiones dicen que la cifra de muertos fue de 52. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran momentos horrorosos en que hombres solos son derribados por una multitud y, en el suelo, despedazados a golpes.

El Gobierno de Nuevo León informó que los zetas se pelearon esa noche en el interior. La razón fue el control del cobro de extorsiones que les reportaba a los jefes cifras millonarias. Los directivos refieren que era de un millón de pesos a la semana.

De acuerdo a esta versión, fue así como Jorge Iván Hernández Cantú, El Credo tuvo que guerrear con sus internos leales, a Juan Pedro Saldívar Farías, el Z 27, que había llegado dos meses antes y quien pretendía disputarle el mando.

Por la madrugada, con los muertos tirados en los patios y en los ambulatorios, entró Fuerza Civil a imponer orden.

La administración estatal aprovechó la coyuntura para cortar el autogobierno. Fueron desmantelados todos los tendajos. Toneladas de basura fueron removidas.

Los reos peligrosos, entre ellos los dos líderes fueron enviados a otras penitenciarías.

La fuente dice que, como saldo de esta reyerta mortal, se escindió una parte de los Zetas para formar su propia organización, el Cartel del Noreste, que ahora ha crecido y se disputa una parte del negocio criminal en Nuevo León y otras entidades.

Algunas fuentes dicen que el CDN ya tenía actividades en diversas partes del norte del país, aunque el baño de sangre en el Topo Chico los consolidó como organización independiente.

La noticia impactó con tal fuerza en Nuevo León que El Bronco tuvo que moverse con rapidez para solucionar el problema. Disminuyó la población del Topo Chico reinsertando reos peligrosos en penales de máxima seguridad fuera del estado, y se esmeró por buscar el control interno.

El 7 de noviembre del 2018 cambió la historia carcelaria de la entidad. Eduardo Guerra Durán, asesor penitenciario, reconfiguró la administración de los tres centros de internamiento locales. A él se le atribuye la reingeniería para el manejo de internos, tras el esperado cierre del Topo Chico, inaugurado en 1943, y programado para cerrar sus puertas este lunes 30 de septiembre.

El experto removió todos los mandos y colocó hombres y mujeres de su confianza en áreas clave.

Cuando llegó Guerrero, había 3 mil 700 internos, aunque lentamente han ido enviando a centenares a otras cárceles del país. Al mes de septiembre había 2 mil 763, aunque seguía la purga del Topo.

Esta semana fueron desalojados casi 2 mil internos y enviados al Penal de Apodaca I, que recientemente fue remodelado.

Unos 150 permanecerán todavía el fin de semana para permanecer en la ceremonia simbólica de clausura.

En Apodaca I habrá únicamente integrantes del Cártel de los Zetas.

Los del Golfo y del Noreste habitarán el penal de Cadereyta.